

“La eficacia de los esfuerzos de la Comunidad Internacional para combatir la impunidad.”

Astrid Odete Escobedo Barrondo

Tesis depositada en cumplimiento parcial de los requisitos para el grado
de Doctor en

Doctorado en Estudios Avanzados en Derechos Humanos

Universidad Carlos III de Madrid

Director

Prof. Juan Daniel Oliva Martínez

Febrero, 2021.

Esta tesis se distribuye bajo licencia “Creative Commons **Reconocimiento – No Comercial – Sin Obra Derivada**”.



"To dream the impossible dream
To fight the unbeatable foe
To bear with unbearable sorrow
To run where the brave dare not go..."

Mitch Leigh y Joe Darion. El hombre de La Mancha

Para:

José, Sebastián, Luis Eduardo, Daniella y Jackelline, que este trabajo sea un ejemplo de superación personal y perseverancia, sepan que, aunque las cosas parezcan imposibles, podemos soñar y alcanzar nuestros metas, si nos esforzamos y trabajamos duro.

En memoria de mi abuelo Isabel Barrondo Cano, quien salió de su casa la noche del 17 de junio de 1961 y nunca regresó, convirtiéndose en una de las primeras víctimas de desaparición forzada en Guatemala.

Porque los sueños se hacen realidad gracias a la constancia, con este trabajo culminó uno de los grandes sueños de mi vida, que no sería realidad sin el respaldo de muchísimas personas, algunas de ellas no puedo omitir mencionar y reconocer su apoyo, paciencia, cariño y enseñanzas, principalmente su fe en mí,

Agradezco infinitamente a:

Mis padres: *Rogelio Antonio Escobedo Mendoza y Bertha Graciela Barrondo Prera*, por apoyarme en todo momento y creer en mí, sacrificándose incondicionalmente para que este sueño se hiciera realidad.

Mis hermanos: *Leslie Karina, Bertha Graciela y Rogelio Antonio*, por su fe en mí y en mis sueños, por no dejarme desfallecer.

Mis cuñados: *Luis Eduardo Durán Córdova y David Smyth* por su cariño y apoyo.

Mis ángeles en la tierra: *Tim (+) y Marilú McCarthy y Dra. Marta Braga*, porque sin esperar nada a cambio decidieron tenderme la mano en el momento que más lo necesité para poder iniciar el camino del post grado.

Saber que en el mundo hay infamia, desdicha no nos releva de la obligación cotidiana de intentar que sea mejor".
(Ángeles Mastretta, El mundo iluminado)

A quienes me enseñaron el camino de la lucha contra la impunidad:

Alejandro Sánchez Garrido por ser mi mentor, cómplice y amigo, por apostar por mí y enseñarme el camino de la defensa de los derechos humanos.

Pedro Díaz Romero y Carlos Castresana Fernández, por creer en mis ideales de juventud, preparación y compromiso al darme la oportunidad de trabajar en el proyecto de lucha contra la impunidad y enseñarme con su ejemplo que la justicia no es una utopía y que la impunidad se puede combatir, gracias por inspirar este trabajo.

César Augusto Rincón Sabogal, porque con su ejemplo, exigencias y compromiso con la justicia, me motivó a ser mejor ciudadana, mejor profesional y mejor persona, me enseñó que la lucha contra las injusticias no tiene horario ni bandera, por ser mi maestro, amigo e inspiración para ser mejor abogada.

Iván Velásquez Gómez, por permitirme aplicar mis conocimientos y compromiso en la lucha contra la impunidad en Guatemala.

A esas amistades que nunca pueden faltar en la vida:

Gloria Leticia Pérez Puerto y Rita María Barrios Nájera por creer en mí y porque su amistad me inspira a ser cada día mejor.

Ligia María del Valle Vega y Juan Manuel de la Cruz Estrada por contagiarme esos ímpetus de juventud y convertirse en mis cómplices y amigos.

Patricia Albornoz Guzmán, por su amistad y buena energía, por ser mi cómplice en la distancia.

A mi Director de Tesis *Juan Daniel Oliva Martínez*, por apostar por este trabajo, invertir su tiempo en él, exigirme a ser cada día mejor y apoyarme en los peores momentos.

Especialmente

A todas esas víctimas de la impunidad, principalmente a las de las violaciones a los derechos humanos, que han creído en mi trabajo y me han dejado defender sus causas, me han inspirado y me han hecho crecer como persona y como profesional.

CONTENIDOS PUBLICADOS Y PRESENTADOS

- “El concepto impunidad, su abordaje en los instrumentos de Derecho Internacional de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional.” Trabajo de Fin de Máster, Máster en Estudios Avanzado en Derechos Humanos, Universidad Carlos III de Madrid, septiembre de 2013.
 - Autora
 - Disponible en:
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/18844/TFM_MEADH_Astrid_Escobedo_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
<https://core.ac.uk/download/pdf/29405623.pdf>
<https://es.scribd.com/document/260054094/El-concepto-impunidad-su-abordaje-en-los-instrumentos-de-Derecho-Internacional-de-los-Derechos-Humanos-Derecho-Internacional-Humanitario-y-Derecho-P>
- Declaro que esta contribución está incluida parcialmente en la presente tesis en la introducción, parte I en los capítulos: I, II, III, en la parte II, sección A, capítulo I, capítulo II, sub sección A.2, capítulo III, capítulo IV, sub sección A.3, A.3.1, capítulo V, capítulo VI, capítulo VII, capítulo VIII, sub sección A.4, capítulo IX, sub sección A.5, capítulo X, sub sección B.1, capítulo XI, capítulo XII, capítulo XIV, sección C, capítulo XV, conclusiones,

Declaración: “El material de esta fuente incluido en la tesis no está señalado por medios tipográficos ni referencias”.

ÍNDICE

Introducción.....	3
PARTE I: Marco Conceptual	17
CAPÍTULO I:El concepto impunidad	18
CAPÍTULO II: La Lucha Contra la Impunidad	37
CAPÍTULO III: Normativa Internacional para la lucha contra la impunidad	60
CAPÍTULO IV: Conceptos fundamentales para entender los esfuerzos internacionales en la lucha contra la impunidad.....	74
CAPÍTULO V. Eficacia: formas para medir la lucha contra la impunidad	108
PARTE II: LOS ESFUERZOS INTERNACIONALES PARA COMBATIR LA IMPUNIDAD	141
SECCIÓN A ; Esfuerzos desde el Derecho Penal Internacional	142
SUB SECCIÓN A. 1: TRIBUNALES MILITARES INTERNACIONALES	146
CAPÍTULO I: Tribunal Militar Internacional de Núremberg.....	148
CAPÍTULO II: Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente	185
SUB SECCIÓN A.2 TRIBUNALES AD HOC.....	228
CAPÍTULO III. Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia	230
CAPÍTULO IV. Tribunal Penal Internacional para Ruanda.....	287
SUB SECCIÓN A.3 TRIBUNALES HÍBRIDOS	347
A.3.1 Tribunales Híbridos que se crean como parte del mandato de la administración territorial de la onu.....	351
CAPÍTULO V: Salas Especiales de delitos graves en Timor Oriental o Páneles Especiales de Dili.....	352
CAPÍTULO VI: Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo	380
A.3.2 Tribunales Híbridos creados por mutuo acuerdo entre Naciones Unidas y el Estado involucrado.....	403
CAPÍTULO VII: Tribunal Especial para Sierra Leona.....	404
CAPÍTULO VIII: Salas Extraordinarias de las Cortes de Camboya.....	431
SUB SECCIÓN A.4: TRIBUNALES PERMANENTES.....	463
CAPÍTULO IX: Corte Penal Internacional.....	465

SUB SECCIÓN A.5: PRINCIPIO DE JUSTICIA UNIVERSAL	528
CAPÍTULO X: Principio de Justicia Universal	531
SECCIÓN B: Esfuerzos desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos	587
SUB SECCIÓN B.1: ESFUERZOS DESDE EL SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.....	588
CAPÍTULO XI: Sistema universal de derechos humanos	592
SUB SECCIÓN B.2.ESFUERZOS DESDE LOS SISTEMAS REGIONALES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.....	629
CAPÍTULO XII: Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos	630
CAPÍTULO XIII: Sistema Interamericano Protección de los Derechos Humanos ..	657
CAPÍTULO XIV: Sistema Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos.....	695
SECCIÓN C: Esfuerzos desde el Derecho Internacional Penal.....	722
CAPÍTULO XV: Tribunal Especial para Líbano	726
CAPÍTULO XVI: Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala	758
CAPÍTULO XVII: Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras	799
CONCLUSIONES.....	825
BIBLIOGRAFÍA	865
ANEXOS	901

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

"Lo que más temo es el poder con impunidad. Le temo al abuso del poder y al poder de abusar."

Isabel Allende

El presente trabajo aborda el tema de la eficacia de la lucha contra la impunidad desde los esfuerzos internacionales, tema que comencé a trabajar en el año 2012, pensando en que hay muchas historias de dolor que no se han contado detrás de esta lucha, y que debía darle sentido teórico al trabajo que desempeñaba desde 2009 en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, era un interés intelectual. Nunca imaginé que el tema iba a estar tan ligado a mi vida, ni mucho menos que por luchar contra la impunidad el desarrollo de mi necesidad intelectual iba a resultar siendo todo un desafío.

Tampoco imaginé que en el camino iba a identificar el punto de quiebre entre la creación de mecanismo de Derecho Penal Internacional a mecanismos en que se alejaron de él y empezaron a perseguir fenómenos criminológicos de crimen organizado, terrorismo y corrupción, contenidos en Convenciones Internacionales pero tipificados en los Códigos Penales internos, abriendo la puerta a la creación de mecanismos desde el Derecho Internacional Penal.

Este trabajo representa mi deber ético y profesional con la lucha contra la impunidad, la cual se convirtió en mi vida, representa los sacrificios y riesgos a los que me he enfrentado por este compromiso y los esfuerzos que debe hacer un estudiante de un país en vías de desarrollo para poder realizar un doctorado sin beca y sin la posibilidad de tener una dedicación a tiempo completo, lo que se traduce en trabajar simultáneamente e invertir financieramente en bibliografía porque las bibliotecas de su país no cuentan con los recursos indispensables para poder desarrollar una investigación de altura.

Jamás pensé que finalizar este trabajo iba a ser tan complejo, teniendo que ser postergado por la situación de riesgo contra mi integridad que se elevó con el cierre

de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en medio del veto laboral en mi país de origen, enfrentando el desempleo, un proceso de asilo político y una pandemia mundial sin precedentes. Tampoco puedo invisibilizar mi fortuna de haber tenido la experiencia de vivir en carne propia lo que significa la lucha contra la impunidad y al mismo tiempo utilizar esa experiencia para la elaboración de la tesis doctoral, así como el apoyo de mi director de tesis y de las autoridades del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba para que pudiera llegar a su fin.

El presente trabajo aspira a ser un aporte a la comunidad científica de praxis y teoría, para el cual al desarrollar los temas y hacer la compilación bibliográfica y luego de un largo y dedicado proceso de lectura, se seleccionó autores de mayor autoridad en el tema que se aborda, principalmente en la primera parte del trabajo que es el marco conceptual, el cual resultó ser trascendental debido a qué conforme la investigación se fue desarrollando empezó a surgir la necesidad de definir y establecer los conceptos esenciales para poder llegar al análisis de la eficacia de la lucha contra la impunidad. Conceptos que en el curso de la investigación fueron mostrando importancia y relevancia, convirtiéndose en pilares esenciales de esa lucha, que debían regir la medición de eficacia y como se refleja en la parte II del trabajo, resultan ser elementos esenciales al momento del estudio de cada mecanismo de lucha contra la impunidad desde el plano internacional.

Es por eso que la parte II es más extensa que la parte I, porque se entra a analizar cada uno de los factores que se identificaron para medir la eficacia en los mecanismos seleccionados de lucha contra la impunidad. Siendo veinticuatro factores analizados encada uno de los diecisiete capítulos de la parte II.

Se decidió estudiar los esfuerzos internacionales por la trascendencia que han cobrado, por la forma en que se han ido desarrollando, principalmente porque han alcanzado un lugar destacado en el fin de la justicia de derrotar la impunidad y muchos de estos han tenido muy buena reputación. Como menciona Danilo Zolo, *“No cabe duda de que hoy es necesaria una protección internacional – y no sólo nacional – de los derechos subjetivos, a pesar de que resulte ilusorio pensar que sea posible*

construir una suerte de Estado de derecho Cosmopolita que trascienda las estructuras de los Estados nacionales¹.”

Afirmación que lleva a preguntarse ¿por qué surgió esa necesidad? ¿por qué la protección nacional no resultó suficiente? Paralelamente aparece el uso más frecuente de la palabra impunidad, la que se introduce todos los días en las noticias del mundo, y casi siempre coincide con la petición que se termine con ella, solicitud que normalmente proviene de algún sector que se siente vulnerado en sus derechos o de grupos que intentan protegerlos dando a conocer la transgresión, porque infortunadamente la lucha contra la impunidad ha estado ausente de las políticas oficiales de muchos estados.

A diario se escuchan demandas para combatir la impunidad en violaciones a derechos humanos en todas sus manifestaciones, desde los catalogados como hechos ilícitos internacionales a delitos relacionados con el crimen organizado, el terrorismo, la corrupción y el narcotráfico, entre otros.

Al reflexionar sobre la dimensión de la palabra impunidad y la importancia que ha alcanzado, decidí centrarme en su estudio en el trabajo de fin de máster del Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, haciendo una aproximación al concepto impunidad desde los instrumentos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional, sin embargo; en aquel momento no se analizó la diferencia entre instrumentos que normalmente se clasifican dentro del Derecho Penal Internacional, pero que podrían pertenecer al Derecho Internacional Penal, término muy poco utilizado, debido a la confusión que causó en la traducción del inglés principalmente, es por eso que en el presente trabajo se estudia e intenta establecer la diferencia.

Igualmente, cuando se delimitó el tema de tesis doctoral se llegó a la conclusión que se debía continuar trabajando con el tema impunidad, pero más allá del alcance del concepto, ya que este en sí es mucho más amplio, complejo y lleva intrínsecamente el problema de su combate, situación que es un reto diario a nivel mundial.

Los diferentes esfuerzos que se han realizado, principalmente después de la Segunda

¹ ZOLO, Danilo, 2007. *La justicia de los Vencedores. De Nuremberg a Bagdad*. Editorial Trotta. S.E. Madrid, Página: 84. ISBN 84-8164-949-X

Guerra Mundial, permiten preguntarse, si han sido efectivos y si la Comunidad Internacional ha aprendido algo para que los problemas que están produciendo la impunidad se enfrenten con garantía de no repetición, es por eso que se realiza este trabajo, que tiene como fin analizar la eficacia de la lucha contra la impunidad desde los esfuerzos de la Comunidad Internacional, los que se han abordado tradicionalmente desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional. Como se ha mencionado en esta investigación se aporta el abordaje de los esfuerzos desde el Derecho Internacional Penal, como un enfoque diferente al Derecho Penal Internacional.

Es decir, acciones que se originan de la obligación que tienen los Estado bajo el derecho internacional de investigar las violaciones de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos, con el fin de tomar medidas apropiadas respecto a los responsables, para asegurar su juzgamiento y así proveer a las víctimas remedios efectivos². Obligación derivada de la incapacidad, incompetencia, falta de voluntad política o la poca disposición de las jurisdicciones domésticas para hacer justicia³; *“que derivan de la autoridad soberana de los Estados, como fuente propia del derecho internacional”*⁴.

Según Faúndez Ledesma: *“Desde el punto de vista del derecho internacional, la impunidad de las violaciones de derechos humanos constituye una violación del compromiso asumido por los Estados de respetar y garantizar su ejercicio, y de proporcionar a las víctimas de las violaciones recursos efectivos que las amparen de actos que violen sus derechos fundamentales. Sancionar las violaciones de los derechos humanos no solo es un acto de justicia, sino que también es un medio de protección de los derechos humanos, que permite disuadir futuros actos de esa misma naturaleza. Además, el derecho internacional contiene numerosas disposiciones que, en una u otra forma, están orientadas precisamente a combatir la impunidad. Entre ellas hay que mencionar:*

² BEIGBEDER, Yves, 2005. *International Justice against Impunity. Progress and New Challenges*. Martinus Nijhoff, Publishers. S.E. Holanda. Página: 13, ISBN 978-9004144514

³ Ídem Página: 40

⁴ *“...- en la medida en que los Estados mismos suscriban tratados bilaterales o multilaterales, o bien reconozcan la vigencia de normas consuetudinarias o principios generales.” ZOLO, Danilo, 2007. Óp. Cit. Página: 113*

- a) *La obligación precisa de castigar graves violaciones a los derechos humanos;*
- b) *La exclusión de estos crímenes de la categoría de delitos políticos;*
- c) *Como expresión del imperio de la ley, a la cual deben estar sometidos gobernantes y gobernados, el sometimiento a juicio y la aplicación de las penas correspondientes a quienes hayan cometido estos crímenes, independientemente de la condición oficial que puedan haber ostentado al momento de cometerlos;*
- d) *La exclusión del cumplimiento de órdenes superiores como defensa o justificación de tales crímenes;*
- e) *La imprescriptibilidad de algunos de estos delitos; y*
- f) *La obligación de extraditar o, alternativamente, de juzgar a la persona acusada de crímenes de este tipo.”⁵*

Sin perder de vista, las críticas que muchos de estos esfuerzos tienen, como lo manifiesta Danilo Zolo, al asegurar que en la disciplina de Derecho Penal Internacional *“Ha sido confirmada, en primer lugar, la tesis de que sólo las guerras perdidas son de hecho consideradas crímenes internacionales, mientras que las guerras ganadas, aunque se trate de guerras de agresión que conllevan una clara violación del derecho internacional, no están sometidas a reglas y los vencedores no sufren ninguna sanción política o jurídica.”⁶*

Y que *“...La << justicia de los vencedores >> es la regla de hierro que hoy domina las relaciones internacionales y que continuará dominándolas todavía por mucho tiempo, mientras dure el actual abismal desequilibrio en la distribución del poder y de la riqueza a escala global⁷.”*

Faúndez Ledesma en el área de Derecho Internacional de los Derechos Humanos es contundente al manifestar: *“En realidad, la impunidad de las violaciones a los*

⁵ FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor, 1999. *Derecho internacional, impunidad y responsabilidad del Estado*. Revista Nueva Sociedad [en línea] No. 161, SE, [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] Disponible en http://nuso.org/media/articles/downloads/2771_1.pdf ISSN: 0251-3552 [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁶ ZOLO, Danilo. 2007. *Óp. Cit.* Página: 17.

⁷ Ídem Página: 21.

derechos humanos es, en sí misma, una violación del derecho a la igualdad ante la ley, que constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho; además, es un incentivo para cometer mayores violaciones, con la seguridad de que tampoco serán sancionadas. Tolerar la impunidad equivale a resignarse a que vuelvan a repetirse.”⁸

A partir de esto se pudo desarrollar el plan de investigación del presente trabajo.

I. JUSTIFICACIÓN

El concepto impunidad es la antítesis del concepto justicia y la lucha contra la impunidad conlleva la búsqueda de la verdad, la garantía de no repetición, las reparaciones adecuadas, en conclusión, todo lo que se debe tener cuando se asegura que se hizo justicia.

Al factorizar el Derecho a la Verdad en la ecuación de la impunidad y sus alcances se comprende que la ausencia de castigo o persecución de un crimen es una circunstancia con consecuencias que trascienden más allá de la simple evasión de la justicia del posible responsable del delito; la impunidad provoca un clima de ingobernabilidad que deriva en la falta de confianza en las instituciones públicas que se encargan de la persecución penal y promueve el incremento en la voluntad del individuo para cometer un delito, al evidenciarse la incapacidad del estado para proferir una potencial condena, deja de ser un factor determinante en la decisión de delinquir.

La impunidad no sólo afecta a la víctima y a sus familiares, sino a toda la sociedad nacional e internacional. La importancia de la coercibilidad en contra del actuar ilegítimo de la comunidad crea una relación de importancia entre el fenómeno de la impunidad y las alzas en violencia y criminalidad que se observan. Es por eso que no es difícil afirmar que el concepto impunidad ya no se relaciona únicamente con la ausencia de castigo, sino que pone en duda la existencia del estado de derecho y la eficacia de los órganos jurisdiccionales. El alcance del concepto no tienen límites y llegan a entrelazarse con otros conceptos como son: soberanía, responsabilidad internacional, eficacia, delito, violaciones, investigación, persecución, condena,

⁸ FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor, 1999. *Óp. Cit.*

reparación, compensación, garantías, certeza, comisiones de la verdad, amnistía, justicia transicional, justicia retributiva, indulto, justicia universal, reconciliación, exigibilidad, justiciabilidad, derecho a la verdad, políticas de estado, debida diligencia, obediencia debida, extraterritorialidad, tribunales especiales, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, crímenes de guerra, derecho penal internacional, el Derecho Internacional Penal. Es por ello que actualmente no se limita únicamente a las graves violaciones de derechos civiles y políticos o delitos relacionados con la guerra, desde la óptica internacional se ha ampliado a delitos relacionados con la delincuencia organizada, el terrorismo, narcotráfico y corrupción.

La aplicación del concepto se está dando en todos los ámbitos en los que los individuos están siendo víctimas de la vulneración de sus derechos, no importando su clasificación desde el punto de vista del Derechos Internacional de los Derechos Humanos. Es así como ahora se extiende este concepto para abordar la impunidad ambiental, impunidad en el derecho a la alimentación, impunidad en el derecho a la salud entre otros.

Es desde esta perspectiva, que se decidió plantear la necesidad de evaluar la eficacia de los esfuerzos de la Comunidad Internacional para combatir la impunidad desde el estudio de los mecanismos que se han creado para este fin.

Se utiliza la palabra esfuerzos, debido a que los estudios realizados hasta el momento profundizan en los sistemas regionales de derechos humanos y en las instituciones de Derecho Penal Internacional, pero las necesidades de la humanidad han desembocado en un nuevo fenómeno, los mecanismos desde el Derecho Internacional Penal, como lo son el Tribunal Especial para Líbano, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala - CICIG – y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras – MACCIH -, los cuales se hace necesario estudiar de forma general.

II. HIPÓTESIS

¿En qué medida han sido eficaces los esfuerzos de la comunidad internacional para combatir la impunidad?

1. Los esfuerzos de la comunidad internacional para combatir la impunidad se traducen en la creación de mecanismos relacionados con la búsqueda de justicia.
2. La búsqueda de justicia se da desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Penal.
3. Cada uno de los mecanismos creados para combatir la impunidad desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Penal abordan problemas específicos.
4. Cada uno de los mecanismos tiene resultados acordes a los objetivos de creación y realidad abordada.

III. OBJETIVOS

A. OBJETIVO GENERAL:

Evaluar la eficacia de los esfuerzos de la Comunidad Internacional para combatir la impunidad desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Penal.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Identificar los hechos que han motivado la decisión de la Comunidad Internacional para combatir la impunidad.
2. Determinar los mecanismos utilizados por la Comunidad Internacional para combatir la impunidad.
3. Clasificar los mecanismos utilizados para combatir la impunidad.
4. Distinguir los métodos empleados para combatir la impunidad.

5. Identificar los remedios utilizados para combatir la impunidad.
6. Establecer la eficacia de los mecanismos creados para combatir la impunidad.

IV. METODOLOGÍA

La presente es una investigación básicamente documental en la que se utilizarán los métodos: inductivo, deductivo, analítico experiencia y sintético.

Auxiliándose de las técnicas de: investigación bibliográfica, documental, estudio de casos, de trabajo intelectual y hemerográfica.

Siendo indispensables para el desarrollo de la investigación las fuentes y los recursos, entre los cuales se utilizaron: libros, artículos científicos, revistas, jurisprudencia, e instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional y El Derecho Internacional Penal, internet e información recabada desde la práctica. La mayoría de estos materiales se encontraron en inglés, por lo que la mayoría de veces se recurrió a la traducción libre de estos para su utilización en el presente trabajo.

La investigación no podría tener un desarrollo ideal, si previamente no se tiene claro que la impunidad es una violación del Estado a sus obligaciones internacionales surgidas con ocasión a las graves violaciones de derechos humanos, así como violaciones al estado derecho. La palabra impunidad ha sido definida por el Conjunto actualizado de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos, mediante la lucha contra la impunidad como: *“...Por impunidad se entiende la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”*⁹ y que por mucho tiempo ha sido uno de los obstáculos más serios para un adecuado disfrute de los derechos humanos, la paz, la democratización y la consolidación de un auténtico Estado de

⁹ NACIONES UNIDAS. Asamblea General, 2005. *Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.* E/CN.4/2005/102/Add.1, [en línea]. Disponible en: <http://www.derechos.org/nizkor/impu/impuppos.html>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

Derecho,¹⁰ que surge del reconocimiento de la existencia de derechos, que requiere también encontrar las formas para el tratamiento debido a quienes los violan. Implica dar satisfacción a las necesidades de las víctimas incluyendo el conocimiento de la verdad sobre las razones por las que se cometieron las violaciones¹¹

Al ser uno de los objetivos en el presente trabajo, identificar los instrumentos normativos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Penal creados por la Comunidad Internacional con el fin de luchar contra la impunidad, y que en mayor o menor medida aspiran en alcanzar los valores de justicia y libertad de la humanidad, se decide enfocar la investigación de la siguiente manera:

V. ESQUEMA:

El presente trabajo se divide en dos partes, la primera aborda el marco conceptual, en donde se consideró indispensable la identificación de los conceptos necesarios para cuantificar la eficacia de los mecanismos de lucha contra la impunidad, la pretensión de esta parte fue consultar autores con reconocida autoridad en los temas que dieran sentido al marco conceptual. La primera parte se divide en 5 capítulos.

¹⁰ ROTH - ARRIAZA, Naomi. 1995. *Impunity and Human Rights in International Law and Practice*. Nueva York. Oxford University Press, S.E. Página 282, ISBN 978-0195081367.

"The phenomenon of impunity, understood as the exemption from punishment for violations of civil and political rights, is multidimensional. An empirical analysis of the situation in the states examined leads to the conclusion that impunity rarely has pure normative causes; instead, impunity has a complex mixture of normative, factual and structural causes which in turn are interrelated and mutually conditional. Given international legal obligations to punish the grave human rights violations of interest to this study (torture, extralegal, execution, disappearances), national discretion with regard to impunity provisions is not unlimited."

¹¹ TAYLER, Wilder, 1996. *La Problemática de la Impunidad y su tratamiento en las Naciones Unidas – Notas para la Reflexión-*. en *Revista IIDH*, Vol. 24. San José, Costa Rica. Página. 188. SIN ISBN.

Lo que ha derivado en que los movimientos populares de todo el mundo luchen por sus derechos, por la justicia social, contra la exclusión y la discriminación. Esto en gran parte originado por la actitud de los Estados y los actores inter-estatales que han tratado con demasiada frecuencia de evitar ser considerados responsables de las violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad, con sus políticas y programas, con sus acciones y omisiones, con la falta de rendición de cuentas que permiten la impunidad de las violaciones, dando lugar a la reiteración de estas una y otra vez. Como ya lo ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al condenar la situación porque fomenta la repetición crónica de violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares. Identificar las causas de la impunidad es casi imposible, como lo mencionan Uprimny y Guzmán *"se trata de un fenómeno que se origina a partir de varios elementos que se relacionan entre sí de manera diversa frente a cada caso en particular"*. UPRIMNY, Rodrigo y Diana Esther Guzmán. 2007. *Experiencias exitosas de lucha contra la impunidad*. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. SIN ISBN.

En la segunda parte, que es la más extensa, se analizan los esfuerzos de la lucha contra la impunidad desde tres ramas del derecho, por lo que la segunda parte se divide en tres secciones, siendo estas:

- a. Sección A: los esfuerzos desde el Derecho Penal Internacional
- b. Sección B: los esfuerzos desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
- c. Sección C: los esfuerzos desde el Derecho Internacional Penal

Las secciones A y B se dividen en subsecciones, debido a que los esfuerzos desde el Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos tienen varias clasificaciones. Cada esfuerzo de lucha contra la impunidad esta desarrollado por capítulos que se encuentran dentro de las secciones y subsecciones correspondientes según sea el caso.

Dando como resultado el siguiente esquema.

Introducción

Parte I: Marco Conceptual

- Capítulo I: El Concepto Impunidad
- Capítulo II: Lucha contra la impunidad
- Capítulo III: Los instrumentos internacionales de lucha contra la impunidad
- Capítulo IV: Conceptos fundamentales para entender los esfuerzos internacionales en la lucha contra la impunidad.
- Capítulo V: Eficacia: formas de medirla

Parte II: Los esfuerzos para combatir la impunidad

SECCION A: Esfuerzos desde el Derecho Penal Internacional

Sub - Sección A.1 Tribunales Militares Internacionales

- Capítulo I: Tribunal Militar Internacional de Núremberg
- Capítulo II: Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente

Sub - Sección A.2 Tribunales Ad hoc

- Capítulo III: Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia

- Capítulo IV: Tribunal Penal Internacional para Ruanda

Sub - Sección A.3 Tribunales Híbridos

A.3.1 Tribunales como parte del mandato de la administración territorial de la ONU:

- Capítulo V: Los Paneles Especiales de Delitos Graves, establecidos por la Administración de Transición de Naciones Unidas en Timor Oriental y
- Capítulo VI: Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo.

A.3.2 Tribunales creados por mutuo acuerdo entre la ONU y el Estado miembro donde se han cometido los crímenes.

- Capítulo VII: Tribunal Especial para Sierra Leona
- Capítulo VIII: Salas Extraordinarias de la Corte de Camboya

Sub - Sección A.4 Tribunal Penal Internacional

- Capítulo IX: Corte Penal Internacional

Sub - Sección A.5

- Capítulo X: Principio de Justicia Universal

SECCIÓN B Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Sub - Sección B.1

- Capítulo XI: Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos

Sub - Sección B.2 Sistemas Regionales

- Capítulo XII: Sistema Europeo
- Capítulo XIII: Sistema Interamericano
- Capítulo XIV: Sistema Africano

SECCIÓN C El Derecho Internacional Penal

- Capítulo XV: Tribunal Especial para Líbano

- Capítulo XVI: Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
- Capítulo XVII: Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras

Conclusiones

Bibliografía

Anexos

El fin de la segunda parte es analizar la eficacia de los esfuerzos de la lucha contra la impunidad, para ello se definieron los siguientes factores que se desarrollan en cada uno de los diecisiete capítulos.

Antecedentes

1. ¿Por qué y para qué fue creado?
2. Papel de la comunidad internacional en su creación
3. ¿Cómo se abordó el tema de la soberanía?
4. Tipo de gobierno ¿democracia?
5. ¿Estado de derecho?
6. Origen basado en ciertas suposiciones o condiciones fácticas.
7. Documento creador
8. Mandato
 - a. Objetivos
 - b. Alcances del Mandato
 - c. Competencia
 - d. Fortalezas
 - e. Reglas de admisibilidad
 - f. Tiempo determinado
 - g. Distribución del poder
9. ¿Surgió como cumplimiento de obligaciones internacionales?
 - a. ¿Había responsabilidad internacional?
 - b. Obligaciones Internacionales

- c. ¿Aborda hechos ilícitos internacionales?
- 10. Cooperación de los Estados
- 11. Independencia
- 12. Selección de Actores
- 13. Normativa Relevante y Marco Procedimental
- 14. Legitimidad
- 15. Jurisdicción
 - a. ¿Quién puede formar parte de un caso?
 - b. ¿Qué problemas puede debatir?
- 16. Medios de Impugnación
- 17. Mecanismos de Cumplimiento
- 18. Recursos Disponibles
 - a. Humano
 - b. Material
 - c. Presupuesto asignado
- 19. Papel de la víctima
- 20. Percepción pública
- 21. Número de casos ingresados
- 22. Número de casos resueltos
- 23. Análisis cualitativo

Es así como nos sumergimos en el inmenso mar que representa la lucha contra la impunidad, siendo el presente trabajo, el instrumento por medio del cual se pretende medir la eficacia de los mecanismos desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Penal, con el fin de hacer un estudio más profundo de estos desde la doctrina, la aplicación del método estadístico y el análisis.

PARTE I

MARCO CONCEPTUAL

CAPÍTULO I

EL CONCEPTO IMPUNIDAD

El concepto de impunidad ha cobrado especial importancia en la Comunidad Internacional, debido a las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en el siglo XX y que han quedado sin castigo.¹²

Para Rogelio Romero Muñoz, *“la impunidad ha estado siempre presente en la historia de las civilizaciones del mundo, no constituye una situación contemporánea sino antigua e inherente a toda sociedad, por lo que, a través de los años, goza de cierta aceptación por el ciudadano que comúnmente la vive, la tolera, la permite y la práctica, que ha rebasado por mucho los límites de la tolerancia hasta convertirse en un flagelo social”*¹³.

Para Kai Ambos *“las causas de la impunidad son de tipo normativo y fáctico. Por lo general no se procesan judicialmente las violaciones de los derechos humanos porque no existe ni la voluntad ni el interés para hacerlo”*¹⁴. En la actualidad este concepto ya no se relaciona únicamente con la ausencia de castigo, sino con la existencia o no de estado de derecho y la eficacia de los órganos jurisdiccionales.

¹²Estando *“intrínsecamente ligada a la cuestión de las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes bajo el Derecho internacional. Al respecto, cabe señalar que el Conjunto actualizado de principios para la protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad (en adelante “Principios contra la Impunidad”) estipula que “[a] los efectos de estos principios, la frase ‘delitos graves conforme al derecho internacional’ comprende graves violaciones de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y de su Protocolo Adicional I de 1977 y otras violaciones del derecho internacional humanitario que constituyen delitos conforme al derecho internacional: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones de los derechos humanos internacionalmente protegidos que son delitos conforme al derecho internacional y/o respecto de los cuales el derecho internacional exige a los Estados que impongan penas por delitos, tales como la tortura, las desapariciones forzadas, la ejecución extrajudicial y la esclavitud* COMISIÓN Internacional de Juristas. 2014. *Derecho internacional y Lucha contra la impunidad. Guía para profesionales* [en línea] No. 7 Ginebra. Página: 53.

Disponible en: <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/10/Universal-Lucha-contra-la-Impunidad-PG7-Publications-Practitioners-guide-series-2014-SPA.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.],

¹³ ROMERO MUÑOZ, Rogelio. 2012, *La impunidad como factor criminógeno* [en línea]. Archivos de Criminología, Criminalística y Seguridad Privada. [en línea] Vol. VIII. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

, Disponible en: www.somecrimnl.es.tl

¹⁴ AMBOS, Kai, 1999. *Impunidad, derechos humanos y Derecho Penal Internacional*, Revista Nueva Sociedad, No. 161. Página 93. SIN ISBN.

1. ORIGEN DEL CONCEPTO IMPUNIDAD

El concepto impunidad se utiliza por diversas razones, casi siempre asociadas a la falta de castigo por la violación de los bienes jurídicos tutelados, o simplemente por la ausencia de justicia. El problema por combatir la impunidad de los graves crímenes cometidos por los Estados empezó a tomar relevancia y popularidad a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Comunidad Internacional inició el trabajo de encontrar un mecanismo que justicializara las atrocidades cometidas por las partes en conflicto.

A raíz de la experiencia de los Tribunales de Núremberg y Tokio se empiezan a concretar los esfuerzos internacionales para evitar la impunidad, sin embargo, el término no se acuña hasta años después, luego de que las Naciones Unidas deciden darle importancia a la lucha contra la impunidad.

Es hasta los años 90 con el informe de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías titulado *“La Administración de Justicia y los Derechos Humanos de los Detenidos. La Cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos)”*, elaborado por Louis Joinet¹⁵, es que se logra introducir en un instrumento internacional la definición de impunidad desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Joinet en su informe identifica cuatro etapas que marcan la toma de conciencia de la opinión pública internacional respecto a los pilares de la lucha contra la impunidad. Estas etapas¹⁶ son:

1. *“Primera etapa. A lo largo de los años 70, las Organizaciones No Gubernamentales, los defensores de los derechos humanos y los juristas, así como, en el caso de ciertos países, la oposición democrática -en la medida en*

¹⁵ El trabajo le fue solicitado en la cuadragésimo tercera sesión (agosto 1991) de la Subcomisión, en ese momento le solicitó al autor que elaborara un estudio sobre la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos.

¹⁶ JOINET, Louis. 1997, *“La administración de justicia y los derechos humanos de los detenidos Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos)”* preparado por el Sr. L. Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión Conjunto de principios para la protección y la promoción de los Derechos Humanos, para la lucha contra la impunidad. Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías 49º período de sesiones Tema 9 del programa E/CN.4/Sub. 2/1997/20/Rev.1. 2. Página. 1.

que ésta pudo expresarse- se movilizaron en favor de la amnistía para los prisioneros políticos. Esta evolución es característica de los países de América Latina entonces sometidos a regímenes dictatoriales. Entre los pioneros cabe citar los Comités por la amnistía nacidos en Brasil, el Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU) y el Secretariado por la Amnistía y la Democracia en Paraguay (SIJADEP). La amnistía, en cuanto símbolo de libertad, se revelará como tema movilizador de amplios sectores de opinión, lo que facilitará progresivamente la unificación de múltiples iniciativas de resistencia pacífica o de lucha contra los regímenes dictatoriales de la época.

- 2. Segunda etapa. Se trata de la relativa a los años 80. La amnistía, símbolo de libertad, aparece cada vez más como una especie de "prima a la impunidad" con el surgimiento, y después la proliferación, de las leyes de auto-amnistía, autoproclamadas por las dictaduras militares en declive, preocupadas por organizar su sistema de impunidad en tanto en cuanto hubiera tiempo aún. Estas desviaciones provocan vivas reacciones por parte de las víctimas, quienes reforzarán entonces su capacidad de auto organización para que "la justicia pase", tal y como lo atestigua, en América Latina, el auge tomado por el movimiento de Madres de Plaza de Mayo y, posteriormente, por la Federación de Asociaciones de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, de América Latina (FEDEFAM), cuya irradiación se extendería después a otros continentes.*
- 3. Tercera etapa. Con el término de la Guerra Fría, simbolizado por la caída del muro de Berlín, se inician, marcando este período, numerosos procesos de democratización o de vuelta a la democracia, o incluso acuerdos de paz que venían a poner término a conflictos armados internos. Ya se tratará de diálogo nacional o de negociaciones de paz, la cuestión de la impunidad será el centro del debate entre dos partes a la búsqueda de un equilibrio inasible entre la lógica del olvido, animada por el antiguo opresor, y la lógica de la justicia, a la que apela la víctima.*
- 4. Cuarta etapa. Esta etapa marca la toma de conciencia por parte de la Comunidad Internacional de la importancia que reviste la lucha contra la*

impunidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, considera, a través de una novedosa jurisprudencia, que la amnistía otorgada a los autores de violaciones graves de derechos humanos es incompatible con el derecho que toda persona tiene a que su causa sea conocida equitativamente por un tribunal imparcial e independiente. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos (junio 1993) viene a reforzar esta evolución en su documento final titulado "Declaración y Programa de Acción de Viena" (A/CONF.157/23, par 91 de la Parte II)". Esta etapa inicia cuando los fallos de los Tribunales regionales, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos empiezan a desarrollar su jurisprudencia al resultar las instancias nacionales inefectivas para combatir la impunidad e implementado paralelamente por el Sistema Universal de Derechos Humanos.

Como resultado de esa evolución surgieron los Principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad, los cuales se desarrollarán más adelante.

2. DEFINICIÓN DEL CONCEPTO IMPUNIDAD

Se ha mencionado, que el objetivo del presente trabajo es profundizar en los alcances del concepto de impunidad desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por ser un término de uso frecuente y se podría decir que hace parte del vocabulario jurídico general, por lo que se ha considerado necesario conocer su significado y lo que la palabra en sí representa.

Como primer paso partiremos de su definición según el Diccionario de la Real Academia Española el cual la precisa como: *impunidad proviene del latín impuniſtas, -ātis y significa falta de castigo*¹⁷.

Para Manuel Ossorio la impunidad se define como: *"Es definida por el Diccionario de la Academia como falta de castigo, así como impune es lo que queda sin castigo. La sola lectura de ambas acepciones ya dice claramente su importancia en relación con el Derecho Penal. Escribire establece que impunidad es "la falta de castigo; esto es, la libertad que un delincuente logra de la pena en que ha incurrido". Los motivos o*

¹⁷ Real Academia Española. *Diccionario de la Lengua Española*, [en línea] Vigésima Segunda Edición., Disponible en: <http://lema.rae.es/drae/?val=impunidad> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

circunstancias que pueden llevar a esa situación aparecen claramente señalados por Cabanellas cuando dice que la causa más común, porque es la que más hiere la sensibilidad colectiva, está representada por aquellos casos en que, siendo conocidos los autores, no se los persigue por razones de orden político, siempre abusivas y propias de Estados en los que la libertad ha sido cercenada, la prensa amordazada, los tribunales prostituidos y el poder entregado en manos de una minoría sostenida por la coacción, el miedo y la cobardía general. A estas palabras del precitado autor, cabría añadir que la posibilidad del poder público, especialmente del Ejecutivo, de mantener impunes delitos que sirven un interés político, es mucho mayor en aquellos países en que la falta de oralidad (léase publicidad) de los juicios, y en que se veda toda facultad a los particulares de mantener la acusación privada y aun la popular, confiándola tan sólo al ministerio fiscal, órgano estatal frecuentemente vinculado con el Poder Ejecutivo.”¹⁸

Impunidad en inglés se define como: *“Impunity = exemption from punishment, absence of remedy, immunity from unpleasant consequences, lack of access to effective justice”*.¹⁹

Para Hernando Valencia Villa la impunidad es *“... la falta de castigo. Se trata de la falta más grave de cualquier sistema jurisdiccional porque el delito sin sanción fomenta la venganza, exalta a los verdugos y humilla a las víctimas, atribuye responsabilidades colectivas y no individuales, e impide la reconciliación y la paz...”*²⁰

Iván García Garante la define como: *“La impunidad implica la falta de sanción por un delito, un “escaparse a la acción de la justicia”*²¹

Wilder Tayler al respecto dice: *“En su versión literal, impunidad significa ausencia de castigo. Ante la existencia de una violación de los derechos humanos, el sistema*

¹⁸ OSSORIO, Manuel. 2006. *Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales*. Buenos Aires, Argentina, Editorial Heliasta. 33a Edición. Página. 474. ISBN: 9789508850058

¹⁹ FIAN INTERNATIONAL. 2011. *Stop Impunity, Hunger on Trial*. [en línea] Disponible en: http://www.stop-impunity.org/?page_id=25 [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

²⁰ VALENCIA VILLA, Hernando. 2003. *Diccionario Espasa, Derechos Humanos*. Madrid, Editorial Espasa Calpe, S.A. S.E. Página 224. SIN ISBN.

²¹ GARCÍA GÁRATE, Iván, 2011. *Apuntes sobre impunidad y Poder Judicial*, Revista de Derechos Humanos Defensor, No. 11, Página 12. SIN ISBN.

judicial penal diseñado para llevar a juicio y castigar a los responsables se encuentra ausente o no entra en funcionamiento.”²²

Raquel Aldana – Pindell la define como: *“Impunity, therefore, arises when states fail to investigate, prosecute, and punish right to life and humane treatment violations in accordance with their duty to prosecute. Impunity also generally refers to states’ widespread failure to carry out their duty to prosecute, although impunity can also exist in individual cases or as to specific types of offenses or victims within a criminal justice system.”²³*

Kai Ambos la define de la siguiente manera: *“Impunity means, above all, the lack of effective remedies for crime victims. In the human rights context, it means the lack of remedies for victims of human rights violations. A victim centered approach shows the very personal and subjective side of impunity”.*²⁴

En la Declaración de Santiago de 1996 buscaba alcanzar una definición que abarcara el concepto de impunidad, concluyendo: *“La impunidad es, en lo inmediato, la renuncia a la sanción penal a los violadores de los derechos humanos, y sus consecuencias afectan a la sociedad en su conjunto... Es la institucionalización de la injusticia por quienes están llamados a hacer justicia”*²⁵.

Del análisis de la definición se pueden establecer los siguientes elementos:

- a) Renuncia a la sanción penal a los violadores de los bienes jurídicos protegidos por propia voluntad o impuesto por la fuerza;
- b) Institucionalización de la injusticia por quienes están obligados a hacer justicia, esto es denegación de justicia.
- c) Por último, esta definición afirma que sus consecuencias afectan a la sociedad en su conjunto.

²² TAYLER, Wilder. 1996. *Óp. Cit.* Página. 185.

• ²³ ALDANA – PINDELL, Raquel. 2004. *An Emerging Universality of Justiciable Victims’ Rights in the Criminal Process to Curtail Impunity for State – Sponsored Crimes*. En: Human Rights Quarterly. Vol. 26. No. 3. Página: 607. ISBN: 9789004212152

²⁴ AMBOS, Kai. 1997. *Impunity and International Criminal Law*. En: Human Rights Law Journal. Vol. 18 No. 1 – 4, 29. Friburgo. Página 1. ISBN: 978-0754621546

²⁵ Seminario Impunidad y sus Efectos en los Procesos Democráticos. 1996. *Declaración de Santiago*. Santiago de Chile.

Kai Ambos parte de una concepción jurídico material para definirla en sentido amplio como: *“implica la no persecución penal de conductas (acciones y omisiones), que encuadran en principio en el derecho penal nacional material y que pertenecen a la criminalidad común, pero que – por razones más bien fácticas que normativas – no resultan castigadas.”*²⁶ Además añade *“en concepto “impunidad” no describe, en sentido estricto, un asunto legal, sino un fenómeno de dimensiones legales, sociales, culturales, psicológicas y hasta económicas. En términos generales esta puede ser entendida como la ausencia de pena, la no punibilidad, o ausencia de castigo, los cuales son una clara oposición a los conceptos ampliamente conocidos de impunidad, imputabilidad e inmunidad”*²⁷.

“La impunidad es, en lo inmediato, la renuncia a la sanción penal a los violadores de los derechos humanos, y sus consecuencias afectan a la sociedad en su conjunto... Es la institucionalización de la injusticia por quienes están llamados a hacer justicia”.²⁸

La Asamblea General de las Naciones Unidas en el Conjunto de principios para la protección y la promoción de los Derechos Humanos, para la lucha contra la impunidad la define como: *“A. «Impunidad» Por impunidad se entiende la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones de los derechos humanos, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”*²⁹.

²⁶ AMBOS, Kai. 1999 *“Impunidad y Derecho Penal Internacional”*. Buenos Aires, Argentina. Editorial Ad Hoc. Segunda Edición Actualizada y revisada. Página. 35. ISBN: 9508942142

²⁷ AMBOS, Kai, 1997. *Impunidad y Derecho Penal Internacional*. Un Estudio Empírico sobre Colombia, Bolivia, Perú, Chile - Argentina. 1ª Edición colombiana, pág. 29. ISBN: 978-9589421840

²⁸ Seminario *Impunidad y sus Efectos en los Procesos Democráticos*, Óp. Cit.

Si analizamos los elementos que esta definición brinda tenemos:

- a) renuncia a la sanción penal: puede ser de cualquiera de las formas a las que nos referimos anteriormente, pero todas denotan que por propia voluntad o impuesto por la fuerza se renuncia a la sanción penal a los violadores.
- b) institucionalización de la injusticia por quienes están obligados a hacer justicia, esto es denegatoria de justicia, es violatorio de todos los pactos internacionales y de prácticamente de todas las constituciones y legislaciones de nuestros países.
- c) por último, esta definición afirma que sus consecuencias afectan a la sociedad en su conjunto. Este último concepto no requiere comentarios, baste referir lo que significa para muchos de nuestros países, en el propio desarrollo del proceso democrático, convivir diariamente con los genocidas.

²⁹ JOINET, Louis. 1997. Óp. Cit. Sección de definiciones.

Como puede verse de esta definición los elementos que refieren son:

- a) Que la inexistencia de responsabilidad penal puede ser de hecho o de derecho e inexistencia de sanción³⁰. Que de esta forma evaden a toda investigación propensa a la condena penal o a la condena civil de indemnización del daño causado a sus víctimas y a la efectiva protección del bien jurídico tutelado por el sistema de justicia. Que así escapen a toda responsabilidad no sólo penal, sino también civil, administrativa o disciplinaria.
- b) *“La responsabilidad de las autoridades al no sancionar, conforme a las leyes a los responsables de impartir justicia”*³¹;
- c) *“El reconocimiento de penas justas y apropiadas y que se apliquen de acuerdo a la gravedad de los hechos, evitando ejercer acciones penales desproporcionadas”*³².
- d) *“El derecho de reparación de las víctimas por medio de una indemnización”*³³.

Posteriormente Naciones Unidas modifica la definición acordada, sustituyendo la exclusividad a las violaciones a los derechos humanos, y consignar únicamente la palabra violaciones, quedando la definición de la siguiente manera: *“[L]a inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”*³⁴

El primer principio del Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, que fue

³⁰ LE CLERCQ, Juan Antonio, CHAÍNEZ, Azucena y RODRÍGUEZ, Gerardo. 2016. *Midiendo la impunidad en América Latina: retos conceptuales y metodológicos*. En: Íconos Revista de Ciencias Sociales. [en línea] Núm. 55. FLACSO Ecuador. Página: 72, [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] Sin ISSN. Disponible en:

<file:///C:/Users/astri/Downloads/1934-Texto%20del%20art%C3%ADculo-8111-1-10-20160429.pdf>

³¹ Ídem

³² Ídem Página: 73

³³ Ídem

³⁴ ORENTLICHER, Diane. 2005, *Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad*. Adición al Informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad. E/CN.4/2005/102/Add.1. Página 6.

una adición al Informe de Diane Orentlicher³⁵, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad establece que:

*“La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones”.*³⁶

Los Principios de Bruselas contra la Impunidad y por la Justicia Internacional³⁷, en el Principio 1, la definen como: *“Por “impunidad”, se entiende la omisión de investigar, enjuiciar y juzgar a las personas físicas y moralmente responsables de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. A efectos de los presentes principios, se entiende por «graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario», especialmente los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, el genocidio, la tortura, las ejecuciones extra-judiciales y las desapariciones forzadas (de aquí en adelante: «los crímenes graves»).*

2. El alcance de los crímenes graves se extiende más allá de los territorios donde fueron cometidos. Constituyen un reto lanzado a la conciencia pública y llevan a considerar a sus autores como enemigos de la humanidad (hostes humani generis). En tal contexto, la lucha contra la impunidad forma parte de la lucha por la justicia internacional y constituye una responsabilidad del conjunto de la comunidad internacional.

³⁵ El primer II. Derecho a la justicia A. Principios generales Principio 18 - Deberes de los Estados en materia de administración de la justicia. La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que sean procesados, juzgados y Como se puede observar la definición sufre un reacomodo, pero no cambia en su esencia. condenados a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación del perjuicio sufrido y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones.

³⁶ ORENTLICHER, Diane. 2005. *Óp. Cit.*

³⁷ Principios de Bruselas contra la Impunidad y por la Justicia Internacional. Adoptados por el «Grupo de Bruselas por la justicia internacional» con motivo del coloquio «LUCHAR CONTRA LA IMPUNIDAD: DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS» (Bruselas, 11-13 de marzo de 2002)

3. *La obligación de reprimir los crímenes graves es una regla imperativa (jus cogens) del derecho internacional*³⁸.

El Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) define impunidad como: “[...] *la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria o civil para los responsables de dichas acciones, eludiendo la investigación y la condena*”³⁹

En conclusión, en su concepción jurídica la definición de impunidad fue establecida por diferentes órganos de la Comunidad Internacional derivada de la falta de castigo de las violaciones graves a los derechos humanos o al derecho humanitario.

En el Sistema Interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos define impunidad como “173. *La Corte constata que en Guatemala existió y existe un estado de impunidad respecto de los hechos del presente caso entendiéndose como impunidad la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares*”⁴⁰.

Posteriormente la define como: “126. *El Tribunal considera, pues, que el Estado no ha investigado efectivamente los hechos que afectaron a Maritza Urrutia y, consecuentemente, no ha identificado a la persona o personas responsables penalmente de los hechos antijurídicos, por lo que se mantiene la impunidad de los responsables. Al respecto, la Corte ha entendido que la impunidad es la falta, en conjunto, de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, y que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los*

³⁸ Principios de Bruselas contra la Impunidad y por la Justicia Internacional. 2002, Óp. Cit.

³⁹ ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 2006 *Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)*, preámbulo, párrafo 3.

⁴⁰ Corte IDH. 1998. *Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala*. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37 párrafo 173.

*medios legales disponibles. La impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.*⁴¹

Esto significa, que la mayoría de las veces, el término impunidad se utiliza cuando se ha incurrido en una falta o un delito y quien lo comete en una cualquiera de las formas de coparticipación, no recibe el castigo o la pena que corresponde por su accionar. De esta forma no se sanciona ni se enmienda su conducta, traduciéndose en ausencia de justicia.

De esa cuenta, se entiende por impunidad como la evasión o el escape de la sanción que implica la comisión de una falta o un delito o de una grave violación a los derechos humanos. Lo habitual es que la impunidad se produzca cuando, por motivos políticos o de otro tipo, una persona que es responsable de haber violado la ley no recibe el castigo correspondiente por razones de Estado y, por lo tanto, sus víctimas no reciben ninguna reparación. Sus víctimas son doblemente agredidas dado que no sólo han sido violentadas en sus derechos a partir de la vejación original sino, además queda erradicada la posibilidad de que aquella encuentre una consecuencia social o jurídica.

El concepto de impunidad también se ha enriquecido con nuevos aportes que han hecho tanto los órganos de aplicación de los tratados en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, como en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, abarcando dentro del mismo no solamente la falta de investigación, procesamiento y sanción apropiada, sino a la falta de cumplimiento efectivo de la pena de prisión cuando se trata de violaciones masivas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos o al derecho humanitario.

Es dentro de esa evolución que, en la actualidad, algunos autores ya no están limitando la definición de impunidad a delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Para Rodrigo Uprimny y Diana Esther Guzmán impunidad es: *“además de la impunidad penal –que tradicionalmente se asocia a la ausencia de individualización y determinación de responsabilidad de quien ha cometido un delito, y en consecuencia a la falta de castigo dentro de un proceso penal- es posible distinguir formas de*

⁴¹ Corte IDH. 2003. *Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, párrafo 126.

impunidad civil, social, y una última, que es la que más desarrollo ha tenido en el último tiempo: la impunidad por violaciones a los derechos humanos, frente a la cual los derechos de las víctimas han adquirido gran relevancia... En el caso de las violaciones a los derechos humanos, la impunidad trasciende el ámbito nacional y tiene connotaciones diversas y sus implicaciones abarcan principalmente la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud de tratados internacionales por medio de los cuales se reconocen, garantizan y protegen los derechos humanos.⁴²”

De las definiciones que anteceden se puede inferir que está evolucionando al igual que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; que en sus inicios se limitaba al tema penal ligado a violaciones de derechos civiles y políticos, pero en la actualidad invocando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de los derechos humanos, se intenta aplicar también a violaciones relacionadas con Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Los alcances⁴³ del contenido no tienen límites y llegan a entrelazarse con conceptos ya mencionados como son investigación, persecución, condena, reparación, compensación, comisiones de la verdad, amnistía, justicia transicional, responsabilidad, justicia retributiva, indulto, justicia universal, reconciliación, exigibilidad, justiciabilidad, derecho a la verdad, debida diligencia, obediencia debida, extraterritorialidad, tribunales especiales, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, esto por cuanto como lo dijimos . no sólo se limitan a las graves violaciones de derechos civiles y políticos.

La aplicación del concepto se está ampliando a todos los ámbitos en los que los individuos están siendo víctimas de la vulneración de sus derechos, no importando su

⁴² UPRIMNY, Rodrigo y GUZMAN, Diana Esther. 2007. “*Experiencias exitosas de lucha contra la impunidad*”. [en línea] Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. Disponible en: <https://www.dejusticia.org/experiencias-exitosas-de-la-lucha-contra-la-impunidad/>, [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁴³ La impunidad provoca consecuencias desastrosas, permite a los autores de las violaciones de los derechos humanos y de los crímenes contra la humanidad, creer que se escapan de las consecuencias de sus actos, haciéndolos más fuertes; ignora la angustia de las víctimas que se ven envueltas en una ausencia de justicia, perpetuando las violaciones y los crímenes, ante la incapacidad del Estado para castigar a quienes violan la ley. La impunidad socava la institucionalidad de los estados, niega los valores humanos y corrompe en conjunto a la humanidad,- ya que es el Estado el que tiene la obligación de proteger el Estado de Derecho, como mecanismo eficaz para que cumpla con sus obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.

clasificación, o bien no existan formas de castigar dichas infracciones, reflejo de ello son los múltiples instrumentos internacionales de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional Penal que invocan justicia en los diversos temas, al mismo tiempo que incluyen la impunidad ambiental, impunidad en el derecho a la alimentación, impunidad en el derecho a la salud entre otros.

A. ELEMENTOS DEL CONCEPTO IMPUNIDAD:

De las definiciones ya analizadas se pueden desprender los elementos⁴⁴ del concepto, los cuales son:

1. *“Existencia de una conducta que debe ser castigada.*
2. *El reconocimiento del Estado de una conducta típica o ilegal en su normativa legal, sujeta a una pena y reparación”⁴⁵.*
3. Hace referencia a un acto de injusticia por falta de sanción.

B. DIMENSIONES DE LA IMPUNIDAD:

Para Wilder Tayler⁴⁶ en el caso de las violaciones a los derechos humanos al menos existen tres dimensiones del concepto de impunidad todas estrechamente relacionadas con la ausencia de justicia, estas son:

1. Existe impunidad cuando las víctimas y la sociedad no alcanzan a conocer la verdad sobre la extensión y las razones de los abusos que han sufrido.
2. Para que las violaciones de los derechos humanos no queden impunes, las víctimas de las mismas deben recibir reparación. Lo que conlleva a que las víctimas sean acreedores de una compensación económica por los daños sufridos y que tengan acceso a una rehabilitación para sobrellevar las secuelas con el fin de que se restablezca la situación previa a la comisión de los abusos.

⁴⁴ LE CLERCQ, Juan Antonio, et al. 2016. *Óp. Cit.* Página: 72

⁴⁵ Ídem.

⁴⁶ TAYLER, Wilder. 1996. *Óp. Cit.* Página. 186.

3. Finalmente, para terminar con la impunidad deben tomarse todas las medidas de prevención para que no se repitan las violaciones de los derechos humanos. Construir y respetar el andamiaje legal.

Para Bartolomei, citado por Uprimny y Guzmán, la impunidad tiene al menos dimensiones: políticas, económicas, sociales, éticas y culturales.⁴⁷ Para la Comisión Internacional de Juristas, estas son: políticas, sociales y jurídicas⁴⁸ al igual que las menciona Tayler.

Para la autora, desde la experiencia, las dimensiones de la impunidad abarcan las mencionadas por Bartolomei, pero la afectación en las sociedades víctimas de impunidad se extiende también el ámbito psicológico.

C. CLASES DE IMPUNIDAD:

Al estudiar las clases de impunidad, se debe tener claro que el castigo es entonces la posible consecuencia de la comisión del delito y su necesidad responde a la conservación del orden social por el cual los individuos han entrado a un contrato cediendo una parte de su autonomía, colocándose al Estado como principal obligado a respetar y garantizar la prevalencia del orden.

La ausencia del castigo por la comisión de un delito puede darse en dos circunstancias distintas:

1. la primera es aquella en que el delito no se hace del conocimiento de las autoridades y las mismas no tienen ningún indicador para saber de la perpetración del mismo;
2. la segunda es aquella en que, a pesar de existir conocimiento del delito por parte de las autoridades, el mismo no es investigado para lograr la determinación del culpable y el conocimiento de la verdad y de las circunstancias en que se cometió o siendo investigado no es castigado por las autoridades sea en virtud de un acto de legislación que exima de responsabilidad penal al culpable o en virtud de una ley personal (sentencia o

⁴⁷ UPRIMNY, Rodrigo y GUZMÁN, Diana Esther. 2007. *Óp. Cit.*

⁴⁸ COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS. 2008. *"Impunidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos"*. Guía para Profesionales No.3 Ginebra. Página 2.

resolución) por medio de la cual se exime de la responsabilidad al culpable sin un fundamento jurídico válido, la abierta arbitrariedad de la autoridad que no le importa hacer justicia o las amenazas a las autoridades.

Las anteriores son conocidas respectivamente como impunidad de hecho e impunidad de derecho⁴⁹ y responden a un concepto mayor de impunidad general.

I. IMPUNIDAD DE HECHO

Según Wilder Tyler: *“La impunidad “de hecho” deriva de la debilidad de las instituciones, en especial de los poderes judiciales, alimentada por actos que obstaculizan la marcha de los procesos o corroen la independencia y la imparcialidad de la justicia. Muchas veces se traduce en la negativa de las fuerzas de seguridad de proporcionar las pruebas necesarias para identificar a los autores de los abusos contra los derechos humanos, en la resistencia de los funcionarios presuntamente implicados a declarar ante los tribunales, en la falsificación de registros públicos, o en la intimidación y la amenaza a las víctimas, jueces, abogados y testigos.”*⁵⁰

Carlos Castresana se refiere a esta como: *“cuando se habla de impunidad de facto, el Derecho existe, las normas están en vigor, han sido debidamente aprobadas, y sin embargo por alguna razón no se aplican, no obtienen consecuencias prácticas concretas.”*⁵¹

Diane Orentlicher la define como: *“la de ausencia de toda intervención jurídico-estatal sobre los hechos (impunidad fáctica⁵²)”*

El Informe *“Los jueces de la impunidad”* de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala explica: *“Existe una impunidad de hecho, que se presenta ante la falta de actuación o actuación deficiente –por incapacidad o falta de voluntad-*

⁴⁹ Faúndez Ledezma habla de impunidad de jure y de facto. *Óp. Cit.*

⁵⁰ TAYLER, Wilder. 1996. *Óp. Cit.* Página. 194.

⁵¹ CASTRESANA FERNÁNDEZ, Carlos. *“Lucha contra la Impunidad”*. Citado por Javier Chichón Álvarez. El concepto de impunidad a la luz del derecho internacional: Una aproximación sistémica desde el derecho internacional penal y derecho internacional de los derechos humanos. [en línea] Disponible en: www.reei.org [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁵² ORENTLICHER, Diane. 2004, *“Estudio independiente, con inclusión de recomendaciones sobre las mejores prácticas para ayudar a los Estados a reforzar su capacidad nacional con miras a combatir todos los aspectos de la impunidad”*, elaborado por la Profesora Diane Orentlicher y presentado a la Comisión de Derechos Humanos por el Secretario General en cumplimiento de la resolución 2003/72. Doc. ONU E/CN.4/2004/88

*de los entes encargados de la investigación, persecución y juzgamiento ante la comisión de un hecho ilícito*⁵³”.

Bernaldo de Quirós citado por Manuel Ossorio señala como: *“impunidades de hecho las siguientes: crímenes que pasan, y pasarán siempre, más o menos desconocidos a los ojos de la justicia; crímenes que se conocen, pero cuyos autores escapan a la acción de la justicia por no haber sido determinada su personalidad o no haber podido ser aprehendidos; delitos cuyos autores son conocidos, pero que no se persiguen ni se penan, por excepción abusiva debida a la organización política y social propia de cada tiempo.*⁵⁴”

En pocas palabras, es la impunidad que se da por omisión o la acción deficiente de los entes encargados de hacer justicia, de su obligación de ser.

II. IMPUNIDAD DE DERECHO

Para Kai Ambos: *“La impunidad de derecho se da por falencias en la legislación, como puede ser la falta de tipificación de determinadas conductas, la provisión de amnistías o indultos o el establecimiento de penas desproporcionadamente bajas en relación con su gravedad.*⁵⁵”

En el mismo sentido Wilder Tayler la define como: *“La impunidad “legal” se traduce en forma de leyes, decretos o instituciones jurídicas que impiden que ciertas personas que se han visto implicadas en las violaciones de los derechos humanos deban comparecer ante la justicia u otras instituciones que investigan los hechos. Así se dictan normas que disponen de antemano la inmunidad de los miembros de las fuerzas de seguridad, es decir que extienden “carta blanca” a aquellos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que en el ejercicio de sus tareas violen los derechos humanos. En otras ocasiones se elaboran leyes de amnistía...*⁵⁶”

Bernaldo de Quirós citado por Manuel Ossorio al referirse a las impunidades de Derecho señala: *“la más importante en el antiguo fue el derecho de asilo (v.),*

⁵³ COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA. 2012. “Los jueces de la impunidad”. Informe Inédito. Guatemala, Página. 9.

⁵⁴ OSSORIO, Manuel. 2006. *Óp. Cit.*

⁵⁵ AMBOS, Kai, 1999. *Óp. Cit.* Página 93.

⁵⁶ TAYLER, Wilder. 1996. *Óp. Cit.* Páginas 194 y 194.

afirmación que cabría extender al Derecho actual, por lo menos con referencia a los países latinoamericanos; y con referencia al Derecho moderno, menciona las siguientes: amnistía, indulto, perdón, prescripción y excusas absolutorias en que la ley, por diversas razones y móviles, deja sin pena hechos que positivamente son delitos, puesto que ninguna causa de justificación ni de inimputabilidad los discrimina, como puede ser, entre otros, la exención de toda pena en favor de los ejecutores de los delitos de rebelión y sedición, cuando se someten a la autoridad antes de que ésta formule intimidación; la exención (en ciertas legislaciones) ... y finalmente la que resulta como consecuencia de la no acusación por el perjudicado, en aquellos delitos que sólo pueden ser perseguidos a instancia de parte.”⁵⁷

Diane Orentlicher la refiere desde dos vertientes:

- a) “la de limitación explícita de su enjuiciamiento y castigo en virtud de leyes de exoneración emanadas de parlamentos democráticos (impunidad normativa – o legal- por acción); y*
- b) la de no anulación de dichas leyes (impunidad normativa - o legal- por omisión)⁵⁸”.*

Javier Chichón Álvarez la define como: “...la denominada *impunidad normativa* sería aquella que tiene su origen directo en normas jurídicas cuyo objetivo es, siempre bajo diversas justificaciones, hacer viable, cuando no excluir o impedir directamente la persecución penal, también básica pero no exclusivamente.”⁵⁹

A manera de conclusión, de lo expuesto se observa que la impunidad se puede originar como resultado de una falta de denuncia, de una falta de investigación, de falta de persecución o de una falta de castigo. En este último caso no debe confundirse la impunidad con la justa declaración de inocencia puesto que ésta ciertamente constituye un resultado jurídico desfavorable para la perspectiva del denunciante, sin embargo, no es más que el resultado justo de la investigación y

⁵⁷ OSSORIO, Manuel. 2006. *Óp. Cit.*

⁵⁸ ORENTLICHER, Diane. 2004. *Óp. Cit.*

⁵⁹ CHICHÓN ÁLVAREZ, Javier. 2012. “El concepto de impunidad a la luz del derecho internacional: Una aproximación sistémica desde el derecho internacional penal y derecho internacional de los derechos humanos”. [en línea] Página: 4 Disponible en: www.reei.org [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

juzgamiento al que está obligado el Estado. No siempre el Estado debe condenar, pues al hacerlo en relación a un inocente, no es más que otra forma de impunidad.

Faúndez Ledesma al referirse a la impunidad de las violaciones de los derechos humanos la describe como: *“La impunidad de las violaciones es mucho más que la simple ausencia de castigo, o que la aprobación moral o política de esos crímenes. En cuanto a denegación de justicia, la impunidad es en sí misma una violación de los derechos humanos, que alienta su repetición con la garantía de que no habrá sanción.”*⁶⁰

Juan Antonio Le Clercq et al describen la impunidad como *“un fenómeno multidimensional y pluricausal que se correlaciona directamente con otros problemas sociales más estudiados en los últimos tiempos e íntimamente ligada a los niveles de corrupción de los Estados, principalmente en aquellos con conflictos armados. Provocando en la sociedad un sentimiento de doble agravio, el causado por el delito y el que resulta de la frustración e impotencia ante la falta de castigo”*⁶¹.

La verdadera impunidad es la que deviene de una completa falta del cumplimiento de la obligación Estatal de investigación con debida diligencia y/o la decisión sobre la culpabilidad del acusado en el contexto de un proceso que no esté dotado de las garantías básicas que asisten tanto al supuesto culpable como a la víctima.

Las consecuencias de la falta de castigo, en este caso de los hechos internacionalmente reprochables, van más allá del acto de no ser castigados o de evadir la justicia por parte del autor. La impunidad crea ingobernabilidad, provocando la desconfianza en las instituciones encargadas de administrar justicia, principalmente y aumenta la confianza de los individuos involucrados en estos actos en seguir cometiéndolos, ya que pese a existir un marco jurídico en que se le pueda sancionar, esto no sucede por lo que no existe un disuasivo y genera la confianza para continuar cometiendo los actos internacionalmente o penalmente reprochables, lo que afecta a las sociedades involucradas. La capacidad que se tenga para perseguir y castigar estos hechos es muy importante, ya que crea una relación directa entre el fenómeno de la impunidad y los índices de violaciones a los derechos humanos. Como dice

⁶⁰ FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor. 1999. *Óp. Cit.*

⁶¹ LE CLERCQ, Juan Antonio, et al. 2016. *Óp. Cit.*

Javier Chichón citando a Hobbes, “*en definitiva la impunidad es lo contrario al estado de derecho*”⁶².

⁶² CHICHÓN Álvarez, Javier. 2012. *Óp. Cit.* Página: 31

CAPÍTULO II

LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

La impunidad por las violaciones graves y constantes a los derechos humanos, aunque era condenada, fue por mucho tiempo admitida casi como un *“mal necesario”* por parte de varias instancias. A lo largo de varias décadas, dominó la idea que la impunidad era el precio a pagar para asegurar la transición a la democracia, donde se justificaban las acciones horribles de regímenes militares o como necesaria para la superación de conflictos armados internos. Tal es la lógica de autores como Rivera Aguilar que concluye *“Es inviable poner fin a un conflicto armado interno a través de la vía militar, por cuanto la aniquilación del enemigo no permite la reconciliación de la sociedad; por tanto es necesario el uso del instrumento iuspolítico “amnistía” durante el proceso de diálogo-negociación.”*⁶³ A pesar que el mismo autor pasa a señalar que las reformas a realizar para la amnistía en el contexto del conflicto armado colombiano deben ser complementadas con reformas para asegurar la equidad así como el acompañamiento de estos procesos a través de las comisiones de verdad, no deja lugar a la consideración sobre el hecho que donde haya amnistía necesariamente se hará un espacio para la normalización de la impunidad.

Esta situación progresivamente fue modificándose y frente al discurso político de la impunidad como *“mal necesario”* fue naciendo una argumentación jurídica contra la impunidad con base en la teoría el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Penal. Esta argumentación fue el resultado de un proceso promovido tanto por la acción y movilización de las organizaciones no gubernamentales como por la doctrina y la jurisprudencia de los órganos internacionales de protección de derechos humanos, tanto de las Naciones Unidas, Sistema Europeo y Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

La Comisión Internacional de Juristas lo explica como: *“Frente al enfoque del “pragmatismo político”, centrado en los conceptos de estabilidad y seguridad,*

⁶³ RIVERA AGUILAR, Ennio Elvidio; 2003 *¿Necesidad o Impunidad? Las leyes de amnistía en los procesos de paz, de los conflictos de carácter no internacional*. Universidad Externado de Colombia; Colombia, Página 95. ISBN: 978-92-1-354115-9

progresivamente fue emergiendo un enfoque basado en las obligaciones internacionales de los Estados. Pero también la experiencia fue enseñando que la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos se convertía en un serio obstáculo para la consolidación del Estado de derecho y la plena vigencia de los derechos y libertades fundamentales, uno de los propósitos esenciales de las Naciones Unidas. Asimismo, diversas tragedias humanas en distintas regiones del mundo llevaron a modificar el abordaje de la cuestión de la impunidad por parte de los órganos políticos de las Naciones Unidas... Antes de que las Naciones Unidas tomaran iniciativas en el ámbito de la lucha contra la impunidad, como lo ha señalado Louis Joinet, fueron las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones de víctimas, particularmente de América Latina, que llevaron este debate a los foros intergubernamentales.”⁶⁴.

Es así, como Asma Jahangir, Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias se pronunció al respecto: *“La impunidad por las violaciones graves de los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad sigue siendo un enorme problema para la comunidad internacional. Hay una tendencia cada vez mayor a dar prioridad a la paz sobre la justicia lo que es comprensible en circunstancias excepcionales o para superar períodos críticos de corta duración durante el proceso de paz, pero desvirtúa el imperio de la ley y la continuidad del propio proceso de paz. La paz y la justicia van de la mano y se apoyan mutuamente en el proceso de construcción nacional. La paz no puede equipararse simplemente a la ausencia de conflictos, sino que debe contener el elemento esencial de justicia. La comunidad internacional tiene la obligación de acabar con la impunidad por todo crimen de lesa humanidad. Esas graves violaciones de los derechos humanos tienen un efecto en la vida de cada ciudadano del mundo y no deben por tanto verse como delitos contra particulares o una sola nación”⁶⁵.*

La impunidad constituye una infracción flagrante de las obligaciones internacionales de los Estados según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La obligación de luchar contra la impunidad se deriva directamente de obligaciones

⁶⁴ COMISIÓN Internacional de Juristas. 2014. *Óp. Cit.* Página: 10.

⁶⁵ JAHANGIR, Asma. 2003. *Informe de la Relatora Especial, presentado en cumplimiento de la resolución 2002/36 de la Comisión de Derechos Humanos.* E/CN.4/2003/3 de 13 de enero de 2003, párr. 73.

convencionales, adquiridas por los Estados como consecuencia de la ratificación de tratados internacionales y en el derecho consuetudinario.

Las obligaciones estatales están contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Carta Africana de Derechos Humanos y de las Personas, específicamente bajo la obligación general de respetar los derechos humanos y el deber de adoptar medidas internas para garantizarlos, especialmente en relación con el derecho a las garantías judiciales y la protección judicial. Además existen tratados particulares que establecen, explícitamente, el deber de luchar contra la impunidad; es el caso de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, los Convenios de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, y sus Protocolos adicionales, de 8 de junio de 1977, y otros instrumentos de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario pertinentes, así como por la Declaración y Programa de Acción de Viena, y en especial los párrafos 60 y 91 de la Parte II, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura, así como en la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas.

A su vez, la Comunidad Internacional inició una serie de esfuerzos por debatir el problema de la impunidad, por lo que la Organización de Naciones Unidas reactivó el debate político, la reflexión técnica y la elaboración de normas sobre impunidad, pasando así a la acción, realizando actividades en las operaciones de verificación de la observancia de los derechos humanos sobre el terreno, a veces como resultado de acuerdos concluidos bajo los auspicios o mediación de las Naciones Unidas para poner fin a un conflicto armado⁶⁶.

En Viena, Austria en junio de 1993 durante la segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos, se dio un importante paso en cuanto a la lucha contra la impunidad, fue en dicha Conferencia donde se adoptó la Declaración y el Programa de Acción que sintetiza el estado de la reflexión, y las preocupaciones mundiales en

⁶⁶ TAYLER, Wilder. 1996. *Óp. Cit.* Página. 207.

materia de derechos humanos. Se caracterizó por los debates entre posiciones encontradas y diferentes concepciones de los derechos humanos. La Conferencia declaró que *“...ve con preocupación la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos y apoya los esfuerzos de la Comisión de Derechos Humanos y de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías por examinar todos los aspectos de la cuestión... 60. Los gobiernos deben derogar la legislación que favorezca la impunidad de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos, como la tortura, y castigar esas violaciones, consolidando así las bases para el imperio de la ley...”*

La iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas por codificar las obligaciones internacionales de los Estados en materia de lucha contra la impunidad y los derechos de las víctimas y obtener reparación se inició aproximadamente a inicios de los años 90, quince años antes al 2005 cuando se dio la conclusión y aprobación de las versiones finales de los Principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad. Estos principios son catalogados como normas del derecho internacional, que plasman las obligaciones jurídicas que tienen los Estados en relación con las víctimas de violaciones de derechos humanos y derecho humanitario y con la sociedad en su conjunto, en materia de lucha contra la impunidad.⁶⁷.

La creación de los Tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia y para Ruanda, el Tribunal Especial para Sierra Leona, así como de la Corte Penal Internacional, entre otros, han contribuido enormemente, por un lado, a deslegitimar el conveniente discurso político de algunos estados para justificar su incapacidad en el sentido de que la impunidad era necesaria para consolidar los procesos de perdón y olvido, que les permitiera vivir en paz y solidificar la democracia y por otro, a sustentar en normas de derecho internacional la obligación de impedir la impunidad de los crímenes más graves bajo las normas del derecho internacional y de someter a la justicia a sus autores. Como bien lo describiría el Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Anan: *“Estos tribunales representan logros históricos en la determinación de la responsabilidad por infracciones graves de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario cometidas por autoridades civiles y militares y reflejan la*

⁶⁷ TAYLER, Wilder. 1996. *Óp. Cit.* Página 208.

creciente tendencia de la Comunidad Internacional de pasar de la tolerancia de la impunidad y la amnistía aún imperio de la ley en el plano internacional”.

El esfuerzo más trascendental en la lucha contra la impunidad ha sido el de la Organización de las Naciones Unidas, al emitir el Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, los cuales han marcado un antes y un después en cuanto al trabajo para combatir la impunidad. En su primera versión, Joinet trata la lucha contra la impunidad como una cuestión jurídica, política y ética⁶⁸. Afirmando que: *“Desde el origen de la humanidad hasta la época contemporánea, la historia de la impunidad es la historia de un perpetuo conflicto y de una extraña paradoja: un conflicto que opone al oprimido al opresor, la sociedad civil al Estado, la conciencia humana a la barbarie; una paradoja del oprimido que, liberado de sus cadenas, asume a su vez la responsabilidad del Estado y se encuentra atrapado en el engranaje de la reconciliación nacional que va a relativizar su compromiso inicial de luchar contra la impunidad”*.⁶⁹

Los estudiosos del tema, tuvieron clara la relevancia de la lucha contra la impunidad, el primer encargado de elaborar esos principios Louis Joinet manifestó: *“La lucha contra la impunidad tiene su origen en la necesidad de que se haga justicia, pero no puede centrarse únicamente en ese objetivo: castigar a los culpables. Debe responder a tres imperativos: sancionar a los responsables, pero también satisfacer el derecho de las víctimas a saber y obtener reparación y, además, permitir que las autoridades desempeñen su mandato como poder público que garantiza el orden público”*⁷⁰.

Para Hadji Guissé *“La campaña contra la impunidad debe concentrarse en la ausencia de penas o compensaciones y en la ineficacia de las actualmente existentes o contempladas. La obligación de proteger y promover todos y cada uno de los derechos humanos incluye castigar y compensar por los daños resultantes de dichas violaciones”*⁷¹.

⁶⁸ JOINET, Louis. 1997. *Óp. Cit.* Párrafo 50.

⁶⁹ Ídem Epílogo.

⁷⁰ JOINET, Louis. 1997. *E/CN.4/Sub.2/1993/6*, párr.16.

⁷¹ GUISSÉ, Hadji. 1997. *El ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Informe final sobre la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos*

Los Principios internacionales de lucha contra la impunidad se estructuran a partir de la obligación general de prevenir, investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos, con una serie de enunciados derivados del marco jurídico vigente. Estos principios se organizan en torno a tres grandes categorías:

- a) el derecho a la verdad o derecho a saber;
- b) el derecho a la justicia; y
- c) el derecho a obtener reparaciones.

Estas categorías no desarrollan normas nuevas, ni generan obligaciones que no sean preexistentes; únicamente, sistematizan los derechos y las obligaciones existentes en función de la lucha contra la impunidad.

Son un instrumento de Derecho Internacional de los Derechos Humanos que reafirma, de manera específica y concentrada, las obligaciones existentes que tienen todos los Estados en materia de lucha contra la impunidad. Su sustento vinculante se encuentra en que todos los enunciados tienen respaldo en distintas fuentes del Derecho Internacional Público vigente (tratados, costumbre, principios generales de derecho, jurisprudencia y doctrina). que han tenido un fuerte impacto en las actividades de lucha contra la impunidad, convirtiéndose en una referencia esencial para las decisiones de los órganos de supervisión como el de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que a su vez ha inducido a los gobiernos nacionales a eliminar obstáculos aparentemente insalvables para la justicia. Las autoridades nacionales han invocado directamente los principios para justificar ciertas medidas de lucha contra la impunidad⁷².

El éxito de sus doctrinas, radica en que éstas poseen prestigio en ámbitos académicos, forenses y en la opinión pública. Lo que se debe al medio en que se han creado, siendo este el de los delitos contra la humanidad, también se debe a los órganos que la han ido desarrollando; siendo estos los tribunales internacionales y

económicos, sociales y culturales), preparado por el Sr. El Hadji Guissé, Relator Especial, de conformidad con la resolución 1996/24 de la Subcomisión. E/CN.4/Sub.2/1997/8

De 27 de junio de 1997. Párrafo. 22. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] Disponible en:

<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G97/129/21/PDF/G9712921.pdf?OpenElement>

⁷² ORENTLICHER, Diane. 2004. *Óp. Cít.*

constitucionales y la fuente de las que han sido extraídas han sido los tratados internacionales de protección de los derechos humanos⁷³.

En la elaboración de la doctrina de lucha contra la impunidad se ha declarado que las violaciones de derechos humanos son:

1. Inamnistiables,
2. Imprescriptibles e
3. Inindultables,
4. No rigiendo en ellos tampoco la prohibición de double jeopardy (non bis in idem procesal, cosa juzgada)
5. Irretroactivas en cuanto a las disposiciones desfavorables.

1. LA DOCTRINA CONTRA LA IMPUNIDAD

Evitar la impunidad se ha transformado en el más “moderno” objetivo del derecho penal. Hasta el momento su contenido y alcance no se comprende bien si no se estudia la justicia transicional, la cual ha sido su marco de desarrollo⁷⁴.

Por ejemplo, en las razones para la lucha contra la impunidad de las graves violaciones de los derechos humanos existe de entrada, un cierto formalismo, esto se debe a las resoluciones emitidas por tribunales constitucionales nacionales⁷⁵ que afirman que los Estados deben combatir la impunidad para cumplir con sus deberes internacionales. En relación con violaciones que constituyen crímenes internacionales, todos los Estados tienen la obligación de juzgar o extraditar (*aut dedere aut judicare*) a las personas responsables de estos actos. Surgen como reacción a la creación de leyes de amnistía y de limitaciones de responsabilidad que han significado un bloqueo para la búsqueda de justicia⁷⁶.

Sin embargo, ello debe remitir necesariamente a una fundamentación de por qué las situaciones de impunidad (no persecución de hechos punibles; promulgación de leyes

⁷³ SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. 2008. ¿Nullum crimen sine poena? sobre las doctrinas penales de la lucha contra la impunidad y del derecho de la víctima al castigo del autor. En: Derecho Penal y Criminología, [en línea] Vol. 29 Núm. 86-87. Universidad del Externado de Colombia, Bogotá, Página: 151. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] Disponible en: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/view/621/586>

⁷⁴ Ídem Páginas: 151 y 152.

⁷⁵ Colombia, Perú y Argentina.

⁷⁶ SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. 2008. *Óp. Cit.* Página: 153

de exoneración; o, en particular, no anulación de estas últimas) vulneran los Convenios internacionales de derechos humanos. Es así como aparecen las razones materiales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos alude a un “*derecho de las víctimas a la justicia*”, que se asocia a su derecho “*a que se investigue, se identifique y se juzgue a los individuos responsables*”; a un “*derecho a la verdad*”, que se encuentra subsumido en el “*derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención*”⁷⁷. Es por este motivo por el que se considera que las disposiciones exoneratorias darían lugar a una “*indefensión de la víctima*”.

Es una obligación basada en el derecho consuetudinario. En relación con violaciones que constituyen crímenes internacionales, todos los Estados tienen la obligación de juzgar o extraditar (*aut dedere aut judicare*) a las personas responsables de estos actos y hace parte de los principios generales del derecho internacional, en particular por su relación con la construcción y sostenimiento del Estado de derecho como una forma de gobernar y ejercer el poder. De este principio se derivan otros de gran trascendencia en la lucha contra la impunidad, tales como la prohibición del ejercicio arbitrario del poder y la independencia de la judicatura⁷⁸.

⁷⁷ Así, reiterando una doctrina asentada, la sentencia del “caso Almonacid” afirma la existencia de una obligación del Estado de lograr la verdad a través de los procesos judiciales (nº marg. 150).

⁷⁸ Estas expresiones generales han sido ratificadas de manera específica por los órganos jurisdiccionales encargados de aplicar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. De esta manera, en relación con la obligación de juzgar a los responsables de violaciones de derechos humanos y combatir la impunidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido que:

“*[L]a investigación de los hechos y la sanción de las personas responsables, (...) es una obligación que corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una violación de los derechos humanos y esa obligación debe ser cumplida seriamente y no como una mera formalidad*’. Además, este Tribunal ha indicado que el Estado ‘*tiene la obligación de combatir [la impunidad] por todos los medios legales disponibles ya que [esta] propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares*’. El Estado que dejara impune las violaciones de derechos humanos estaría incumpliendo, adicionalmente, su deber general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de las personas sujetas a su jurisdicción”. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), *Caso Bámaca Velásquez c. Guatemala, Reparaciones*, sentencia del 22 de febrero de 2002, Serie C, No. 91, párr. 74. En su decisión la Corte IDH cita numerosos precedentes que sostienen la misma regla: Corte IDH, *Caso Cantoral Benavides, Reparaciones*, sentencia del 3 de diciembre de 2001, Serie C No. 89, párr. 63 y 69; Corte IDH, *Caso Cesti Hurtado, Reparaciones*, sentencia del 31 de mayo de 2001, Serie C No. 78, párr. 62, 63; *Caso Villagrán Morales y otros, Reparaciones*, sentencia del 26 de mayo de 2001, Serie C No. 77, párr. 99 y 100; y *Caso Paniagua Morales y otros, Reparaciones*, sentencia del 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 199,

Los Principios de Bruselas contra la Impunidad y por la Justicia Internacional⁷⁹, en el Principio 2 se demuestra la importancia de la lucha contra la impunidad desde el derecho de las víctimas, estableciendo que: *“1. La lucha contra la impunidad y por la justicia internacional implica estrategias que llevan a asociar a las víctimas (directas e indirectas) a fin de defender sus derechos. Estos derechos comprenden: (a) el derecho de conocer la verdad acerca de los crímenes graves; (b) el derecho de obtener justicia, y especialmente, el derecho - de obtener el enjuiciamiento y la condena por un órgano jurisdiccional penal de los presuntos autores de los crímenes graves; - de obtener una reparación adecuada de los daños sufridos; - de tener acceso, si fuera necesario, a las instancias administrativas.*

2. Estos derechos nunca podrán ser objetos de compromisos.

3. Toda sentencia definitiva deberá ser ejecutada”.

Finalmente, cabe resaltar que la lucha contra la impunidad forma parte de los principios generales del derecho internacional, en particular por su relación con la construcción y sostenimiento del Estado de derecho como una forma de gobernar y ejercer el poder

200 y 201. *“Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones La Corte IDH también se ha referido a la necesidad de garantizar la efectividad de la investigación y la sanción, al igual que ha enfatizado la prohibición de establecer medidas tendientes a excluir la responsabilidad de las personas que han cometido violaciones. En este sentido, la Corte IDH ha sentenciado: “El Estado debe garantizar que el proceso interno tendiente a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos surta los debidos efectos. Además, deberá abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, así como a medidas que pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de la sentencia condenatoria, como lo ha hecho notar la Corte en otros casos”.*

Aunque no son exhaustivos, estos dos apartes de las decisiones de la Corte IDH resumen en buena medida las obligaciones de los Estados según el derecho internacional en relación con la lucha contra la impunidad”.

Como reflejo de estas normas del derecho internacional, los Principios internacionales de lucha contra la impunidad estructuran, a partir de la obligación general de prevenir, investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos, una serie de enunciados derivados del marco jurídico vigente. Corte IDH, *Caso Huilca Tecse Vs. Perú*, sentencia del 3 de marzo de 2005, Serie C, No. 121, párr. 108. La Corte, además, cita los siguientes casos y apartes: *Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones*, sentencia del 19 de noviembre de 2004, Serie C, No. 116, párr. 99; *Caso Tibi*, sentencia del 7 de septiembre de 2004, Serie C, No. 114, párr. 259; y *Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri*, sentencia del 8 de julio de 2004, Serie C, No. 110, párr. 232. En el mismo sentido, véase Corte IDH, *Caso Barrios Altos c. Perú*, sentencia del 14 de marzo de 2001, Serie C, No. 75, párr. 41-44.

⁷⁹ Principios de Bruselas contra la Impunidad y por la Justicia Internacional. Óp. Cit.

La justicia en esencia se debe ver como un derecho que pertenece a la propia naturaleza del ser humano. Como una obligación básica del Estado y nunca convertirse como una lucha permanente del administrado y en una prebenda o reconocimiento especial.

Junto a todo lo anterior es importante mantener la perspectiva de la complementariedad que constituye uno de los fundamentos lógicos de los sistemas internacionales de justicia. Cada uno de los sistemas e instrumentos descritos opera bajo la creencia, que la manera más sostenible de asegurar la sostenibilidad de un Estado de Derecho Internacional, es afianzar la capacidad estatal de los miembros de las organizaciones internacionales para asegurar la lucha contra la impunidad en sus propios sistemas. Por ejemplo, para el caso de la Corte Penal Internacional Broomhall⁸⁰ es claro en su análisis sobre la capacidad de la CPI de ejercitar su jurisdicción únicamente si los Estados Parte no son capaces de implementar medidas adecuadas para la aplicación de justicia, caso en el cual las autoridades del país estarán obligadas a auxiliar en cualquier forma a la Corte. Este patrón se repite a través de varios sistemas internacionales y mecanismos de ejecución de tratados internacionales por un motivo básico: El fin último del Derecho Internacional Público, es fomentar la paz en los pueblos en cualquiera de las formas que elijan determinarse, a través del fortalecimiento de los mecanismos por medio de los cuales aseguran a sus miembros las garantías fundamentales que les asisten por su condición de seres humanos.

2. ELEMENTOS DE LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD.

Wilder Tayler⁸¹ al respecto identifica cuatro elementos esenciales para la lucha contra la impunidad, los cuales se traducen en obligaciones y compromisos legales que los Estados adoptan voluntariamente, estos son:

- a. Se ha de construir y hacer respetar
 1. el andamiaje legal y

⁸⁰ BROOMHAL, Bruce. 2003. *International Justice & the International Criminal Court: Between Sovereignty and the Rule of Law*, Oxford University Press; Estados Unidos, Página 65. ISBN: 0- 19- 9256004

⁸¹ TAYLER, Wilder. 1996. *Óp. Cit.* Página 186.

2. de garantías que amparan a los individuos cuando se encuentran ante una violación de derechos humanos
- b. Los gobiernos deben:
 1. Anunciar públicamente su más completa oposición a las violaciones de los derechos humanos;
 2. Anunciar su disposición a castigar dichas violaciones.

Tayler, identifica los cuatro elementos necesarios para combatir la impunidad, los que se encuentran profundamente interrelacionados, siendo estos: la justicia, la verdad, la compensación y la prevención⁸².

Louis Joinet en su informe menciona las medidas restrictivas justificadas por la lucha contra la impunidad, las cuales deben ser utilizadas sobre ciertas reglas de derecho con el fin de mejorar la lucha contra la impunidad y que no se conviertan en una prima de esta que impida la justicia.⁸³

Estas medidas son:

- a. La prescripción⁸⁴
- b. La amnistía⁸⁵
- c. El derecho de asilo⁸⁶
- d. La extradición⁸⁷
- e. El proceso en ausencia⁸⁸

⁸² TAYLER, Wilder. 1996. *Óp. Cit.* Página 199.

⁸³ JOINET, Louis. 1997. *Óp. Cit.* Párrafo 30.

⁸⁴ "a) Prescripción

31. *La prescripción no puede aplicarse a los delitos graves recogidos en el derecho internacional, como son los delitos contra la humanidad. Con respecto a todas las violaciones, no puede correr durante el período en que no existan recursos eficaces. De la misma manera, no podrá invocarse en las acciones civiles, administrativas o disciplinarias entabladas por las víctimas.*" Ídem. Página: 9

⁸⁵ "b) Amnistía

32. *Los autores de violaciones no podrán beneficiarse de la amnistía mientras las víctimas no hayan obtenido justicia mediante un recurso efectivo. Jurídicamente carecerá de efecto con respecto a las acciones de las víctimas vinculadas al derecho a reparación.*" Ídem.

⁸⁶ "c) Derecho de asilo

33. *No podrá concederse el asilo territorial o diplomático, así como tampoco la condición de refugiado político.*" Ídem.

⁸⁷ "d) Extradición

34. *No cabrá invocar el carácter político de la infracción para evitar la extradición, ni tampoco el principio de no extradición de los nacionales.*" Ídem.

⁸⁸ "e) Procesos en rebeldía

35. *Al contrario que la mayoría de los países de derecho romano, los países de derecho anglosajón no reconocen, en su ordenamiento jurídico, los procesos en rebeldía. Esa laguna favorece*

- f. La obediencia debida⁸⁹
- g. Las leyes de arrepentimiento⁹⁰
- h. Los tribunales militares⁹¹
- i. Principio de inamovilidad de los jueces⁹²

Silva Sánchez habla de elementos permanentes de las doctrinas contra la impunidad en los que menciona:

1. Afrontan la criminalidad estatal o paraestatal. Que aporta la plataforma para que se sostenga de manera general la imprescriptibilidad, la inindultabilidad y la inamnistabilidad, por lo menos de delitos graves.
2. La presencia en todas partes de los conceptos propios de la doctrina de la lucha contra la impunidad, ha permitido que se marque una tendencia evolutiva del derecho penal de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, siendo uno de estos el derecho de la víctima.

considerablemente la impunidad, en especial cuando los países de que se trata se niegan a cooperar con la justicia (ejemplo del Tribunal Penal Internacional de La Haya). Como solución de compromiso, ¿no cabría admitir los procesos en rebeldía tras haber comprobado jurídicamente esa negativa a cooperar? De lo contrario, su no reconocimiento debería limitarse exclusivamente a la etapa del proceso.” JOINET, Louis. 1997. Óp. Cit. Página: 9

⁸⁹ “f) Obediencia debida

36. La obediencia debida no puede eximir de responsabilidad penal al autor de los hechos; podrá tomarse quizá en consideración, como mucho, en calidad de circunstancia atenuante. Además, el hecho de que las violaciones hayan sido cometidas por un subordinado no puede exonerar a sus superiores si éstos no ejercieron las facultades que tenían para impedir la violación o ponerle fin, sabiendo o estando en condiciones de saber, que la violación se estaba cometiendo o iba a cometerse.” Ídem.

⁹⁰ “g) Leyes sobre arrepentidos

37. Cuando, en el marco de un proceso de restablecimiento de la democracia o de transición hacia ella, se adopten leyes sobre arrepentidos, pueden ser causa de atenuación de la pena, pero no deben exonerar, sin embargo, de manera total a sus autores; es menester distinguir, en función o no de los riesgos a que se haya visto expuesto el autor, si las revelaciones se hicieron durante el período en que se cometieron las graves violaciones o con posterioridad.” Ídem. Página: 10

⁹¹ “h) Tribunales militares

38. Debido a la insuficiente independencia jurídica de los tribunales militares, su competencia deberá limitarse únicamente a las infracciones específicamente militares cometidas por militares, con exclusión de las violaciones de los derechos humanos que deberán incumbir a los tribunales ordinarios.” Ídem.

⁹² “i) Principio de inamovilidad de los jueces

39. La inamovilidad, que constituye una garantía fundamental de la independencia de los jueces, no puede convertirse tampoco en un incentivo a la impunidad. Los magistrados que hayan sido nombrados en virtud del estado de derecho anterior podrán ser confirmados en sus funciones. En cambio, aquellos cuyo nombramiento haya sido ilegítimo podrán ser destituidos en aplicación del principio del paralelismo de las formas, siempre y cuando cuenten con las debidas garantías.” Ídem.

3. Las doctrinas de lucha contra la impunidad se centran en la misión del derecho penal de hacer justicia a las víctimas por medio del procesamiento penal y posterior y castigo de los responsables.
4. El sistema del derecho penal debería orientarse en lo posible en el restablecimiento de la dignidad de la víctima, otorgando el reconocimiento que esta merece.
5. Con la pena se pretende brindar seguridad cognitiva a las víctimas reales y potenciales.
6. Aplicación del perdón para poner fin a la irreversibilidad de la conducta reprobable⁹³.

Lo anterior se basa desde la perspectiva de apoyo a la víctima desde el derecho penal que han demostrado los mismos sistemas internacionales de justicia como un parámetro para la aplicación del mismo. En este sentido Olásolo⁹⁴ traza una línea del concepto mismo de víctima exponiendo que en el contexto de la Corte Penal Internacional el mismo “incluiría a cualquier persona física que haya sufrido un daño material, moral o psicológico que tenga cierta vinculación causal (aunque sea indirecta) con cualquier delito sobre el que la Corte tenga jurisdicción.” Indica que esta proviene de un basamento en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del tema la cual a su vez se encuentra conectada a la tradición de organismos especializados en la lucha contra la impunidad en un plano internacional a través de la Historia.

⁹³ SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. 2008. *Óp. Cit.* Páginas: 162 a 165

⁹⁴ OLÁSULO ALONSO, Héctor. 2008. Cuestiones procesales y procedimientos sobre la posición de las víctimas en las actuaciones ante la Corte Penal Internacional En: AMBOS, K y de Hoyos, M (Compiladores); *Cuestiones esenciales en la Jurisprudencia de la Corte Penal Internacional*. Editorial Comares; Granada, Página 70. ISBN: 978-84-9836-433-0

3. PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO INTERNACIONAL EN LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

El estudio de la lucha contra la impunidad⁹⁵ se ha desarrollado inicial y principalmente desde la óptica del Derecho Internacional Público, es por eso que se fundamentó con los principios generales de esta materia, siendo estos:

1. Principio de complementariedad⁹⁶: En la mayoría de los casos la lucha contra la impunidad ha sido complementaria a las jurisdicciones penales nacionales, siendo la excepción CICIG y MACCIH. Siendo este un *“punto de inflexión entre el desdoblamiento funcional de los órganos estatales y la internacionalización de los mecanismos para prevenir, enjuiciar y sancionar el incumplimiento del derecho internacional penal y humanitario, superándose el principio de subsidiaridad imperante en el derecho internacional de los derechos humanos directamente vinculado a la responsabilidad estatal frente a la individual”*.⁹⁷
2. El principio de justicia universal: *“Se refiere a cuestiones básicas de carácter complementario:*
 - a. *La reglamentación del principio estructural encarnado en el Derecho internacional de los derechos humanos,*
 - b. *La prohibición de los crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad,*
 - c. *Y la función de distribución u ordenación de competencias y de estructuración de la cooperación realizadas desde el Derecho*

⁹⁵ JIMÉNEZ GARCÍA, Francisco. 2002. *Justicia Universal e Inmunidades estatales: Justicia o Impunidad: ¿una encrucijada dualista para el Derecho Internacional?* [en línea] Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. Navarra, España, Página: 64, [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] Disponible en: http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/22212/3/ADI_XVIII_2002_02.pdf , ISBN: 0212-0747

⁹⁶ Ídem Páginas: 64 a 71

“El principio de complementariedad obedece al principio de concurrencia de jurisdicciones, nacionales e internacionales, declarado en los Estatutos de los Tribunales internacionales penales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda. No implica subordinación de jurisdicciones competentes y no puede confundirse con los principios consensualistas y relativistas que determinan la competencia de la Corte Penal Internacional, pues entre Estados no obligados por el Estatuto de Roma esta concurrencia se mantiene entre sus jurisdicciones nacionales en los ámbitos cubiertos por el principio de justicia universal”. Ídem.

⁹⁷ Ídem.

internacional para hacer efectivo el principio estructural, así como el conjunto de obligaciones emanado de él.

Se vincula con la dimensión funcional del sistema internacional en la ordenación de ámbitos en lo que el Derecho internacional atribuye potestades o competencias y legitima la actuación de los Estados conforme a los procedimientos de cooperación previstos en el, desautorizando la invocación de “injerencia en asuntos internos”, que pudiera ser alegada, sin olvidar la incidencia que sobre la estructura jurídica del sistema internacional, provoca la consolidación de la responsabilidad internacional del individuo.

La concreción de este principio responde a dos criterios:

- a. Al bien jurídico internacional protegido, la paz y seguridad de la humanidad, en el cual la justicia universal exclusivamente para los crímenes contra la humanidad.*
- b. A la estructuración jurídico-formal que se hace del mismo con la finalidad de erradicar la comisión del crimen que se persigue, entiéndase a la normativa de la que se le ha dotado por parte de los Estados miembros de la comunidad internacional, cuyo objetivo esencial es la prevención, la sanción nacional y la cooperación internacional contra la impunidad de los autores de los crímenes y el resarcimiento de las víctimas”⁹⁸.*

El informe Joinet ⁹⁹ sobre la impunidad reparte las competencias entre las jurisdicciones nacionales, extranjeras e internacionales de la siguiente manera:

- a. “Se reconoce que la competencia territorial de los tribunales nacionales debe ser, en principio, la regla y que la competencia concurrente de un tribunal penal internacional puede ser retenida cuando los tribunales nacionales no presenten garantías suficientes de independencia e imparcialidad o estén en la imposibilidad material de funcionar. (Principio 19)*

⁹⁸ JIMÉNEZ GARCÍA, Francisco. 2002. *Óp. Cit.* Página: 72 a 74

⁹⁹ Ídem. Página: 80

- b. *Se reconoce la competencia de los tribunales extranjeros en virtud de una cláusula convencional o en virtud de una disposición de la ley interna estableciendo una regla de competencia extraterritorial para los crímenes graves según el derecho internacional. (Principio 20)*
 - c. *Se establecen como medidas destinadas a reforzar la eficacia del principio de competencia universal su incorporación en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos apropiados y la obligación de los Estados parte en tomar las medidas legislativas o cualesquiera otras de derecho interno que permitan hacer efectiva la aplicación de la cláusula convencional de competencia universal. (Principio 21)*
 - d. *Se reconoce que cualquier Estado, al margen del tratado, puede adoptar las medidas en derecho interno necesarias para establecer su competencia extraterritorial sobre los crímenes graves según el derecho internacional cometidos fuera de su territorio y que, por razón de su naturaleza, afectan no solamente al derecho penal interno, sino también al orden represivo internacional al que la noción de fronteras es extraña. (Principio 22)”¹⁰⁰*
3. Competencia Universal como Principio Consuetudinario¹⁰¹: Responde a la “universalidad de la competencia jurisdiccional de los Estados y de sus órganos para el conocimiento de ciertos hechos sobre cuya persecución y enjuiciamiento tienen interés todos los Estados, de forma que su lógica consecuencia es la concurrencia de competencias, de Estados competentes sobre las materias afectadas por ese interés cuya protección corresponde a la comunidad internacional en su conjunto”¹⁰². Lo que se traduce en el ejercicio de la soberanía, que se delega de un grado de soberanía supranacional aceptado en relación a bienes jurídicos concretos u órganos de la comunidad internacional que se reconoce como el primer titular de estos.

¹⁰⁰ JIMÉNEZ GARCÍA, Francisco. 2002. *Óp. Cit.* Página: 80

¹⁰¹ Ídem. Páginas: 84 a 90

¹⁰² Ídem.

Esta competencia se distingue de la siguiente manera:

- a. Competencia universal directa: Según esta los Estados están obligados directamente¹⁰³
- b. Competencia universal subsidiaria: La que impera en el Derecho internacional, *“se refiere a aquellas cláusulas convencionales que autorizan, bien de forma expresa, o de forma implícita mediante la no exclusión de ninguna jurisdicción penal ejercida de conformidad con la legislación nacional, el establecimiento en el ordenamiento interno de la competencia universal, existiendo dos variantes en atención a que el presunto responsable se encuentre o no en el territorio de la jurisdicción del Estado”*¹⁰⁴. El verdadero alcance de esta obligación sólo es comprensible en conexión con las obligaciones facultativas dimanantes de la regla *aut dedere aut judicare*.¹⁰⁵

La lucha contra la impunidad incluye el derecho a la justicia, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación¹⁰⁶ y la garantía de no repetición¹⁰⁷

¹⁰³ “Los artículos 49, 50, 126 y 146 de los Convenios de Ginebra de 1949 establecen una competencia universal obligatoria *self – executing*, no condicionada a ningún otro título de atribución de competencia, ni el territorial ni el personal”. JIMÉNEZ GARCÍA, Francisco. 2002. *Op. Cit.* Página: 84 a 90

¹⁰⁴ Ídem

¹⁰⁵ “Se trata de obligaciones de comportamiento condicionadas por el resultado de la erradicación de la impunidad, en la medida en que el ejercicio de la competencia universal sobre el crimen en cuestión se hace depender de dos factores: la existencia de otro Estado con mejor título de jurisdicción o de un tribunal internacional penal que reclamen su competencia y la existencia de la idoneidad de un tratado de extradición o entrega que posibilite el enjuiciamiento en el Estado del foro requirente”. Ídem.

¹⁰⁶ De conformidad con el Conjunto de principios y directrices sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho humanitario a obtener reparación, establecido por el Sr. Theo van Boven, Relator Especial de la Subcomisión (E/CN.4/Sub.2/1996/17), este derecho comprende los tres tipos de medidas siguientes:

a) medidas de restitución (cuyo objetivo debe ser lograr que la víctima recupere la situación en la que se encontraba antes);

b) medidas de indemnización (que cubran los daños y perjuicios físicos y morales, así como la pérdida de oportunidades, los daños materiales, los ataques a la reputación y los gastos de asistencia jurídica);

y

c) medidas de rehabilitación (atención médica y psicológica o psiquiátrica).

42. A nivel colectivo, las medidas de carácter simbólico, en concepto de reparación moral, como el reconocimiento público y solemne por el Estado de su responsabilidad, las declaraciones oficiales de restablecimiento de la dignidad de las víctimas, los actos conmemorativos, los bautizos de vías públicas, y las erecciones de monumentos facilitan el deber de recordar.

¹⁰⁷ a) disolución de los grupos armados paraestatales: se trata de una de las medidas más difíciles de aplicar pues, si no va acompañada de medidas de reinserción, el remedio puede ser peor que la enfermedad;

b) derogación de todas las disposiciones de excepción, legislativas o de otra índole y reconocimiento del carácter intangible o inderogable del hábeas corpus; y

Para Silva Sánchez, *“las razones para la lucha contra la impunidad de los delitos contra la humanidad muestran, de entrada, un cierto formalismo, debido a que los tribunales constitucionales afirman que los estados han de combatir la impunidad para cumplir con sus deberes internacionales, para ello se debe remitir necesariamente a una fundamentación ulterior: la de por qué las situaciones de impunidad vulneran los convenios internacionales de derechos humanos”*¹⁰⁸.

La implantación de una estructura judicial internacional y transnacional eficaz ha incrementado la capacidad de los Estados para juzgar los delitos cometidos en su propio territorio, lo que ha mejorado visiblemente los esfuerzos nacionales para combatir la impunidad, como resultado de la adhesión de los Estados a los tratados de derechos humanos y de su aceptación de los procedimientos facultativos de denuncia. De manera más general, las medidas prácticas de apoyo interestatal e internacional han potenciado considerablemente la capacidad nacional de algunos Estados para luchar contra la impunidad.

Estas expresiones generales han sido ratificadas de manera específica por los órganos jurisdiccionales encargados de aplicar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. De esta manera, en relación con la obligación de juzgar a los responsables de violaciones de derechos humanos y combatir la impunidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que:

“[L]a investigación de los hechos y la sanción de las personas responsables, (...) es una obligación que corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una violación de los derechos humanos y esa obligación debe ser cumplida seriamente y no como una mera formalidad’. Además, este Tribunal ha indicado que el Estado ‘tiene la obligación de combatir [la impunidad] por todos los medios legales disponibles ya que [esta] propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares’. El Estado que dejara impune las violaciones de derechos humanos estaría incumpliendo, adicionalmente, su deber

c) separación del cargo de los altos funcionarios implicados en las violaciones graves que se hayan cometido. Debe tratarse de medidas administrativas y no represivas, pues son de naturaleza preventiva y el funcionario ha de poder beneficiarse de garantías.

¹⁰⁸ SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. 2008. *Óp. Cit.* Página 159.

general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de las personas sujetas a su jurisdicción”¹⁰⁹

Los Sistemas Internacionales de protección de los derechos humanos han dado pasos importantes en cuanto a la lucha contra la impunidad, siendo, el Sistema Africano el más débil de todos, ya que la subsidiariedad de este no ha podido ser aplicada desde el inicio, por la creación tardía de la Corte Africana en el año 2004. Existen tratados particulares que establecen, explícitamente, el deber de luchar contra la impunidad entre estos tenemos la Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura y la Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas, Convención Americana de derechos Humanos, el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos.

Faúndez Ledesma afirma: *“Existe una relación entre el nuevo derecho internacional de los derechos humanos y la impunidad que suele ir asociada a su violación. La mejor garantía de que los derechos humanos no son un elemento decorativo en las relaciones internacionales es que cada infracción sea castigada; lo contrario es estimular la comisión de nuevas atrocidades.*

Algunos elementos, a nivel nacional, hacen posible la impunidad de numerosas violaciones de derechos humanos; por otra parte, numerosos compromisos internacionales le imponen al Estado el deber de investigar y castigar cada uno de esos hechos. Estos tratados permitirían que cristalice la norma en cuanto principio general de derecho internacional.¹¹⁰”

En la Organización de las Naciones Unidas, la lucha contra la impunidad no se restringe a los instrumentos convencionales y a los órganos que se originan de estos, sino a la creación de tribunales ad hoc y órganos híbridos para combatirla en situaciones particulares.

¹⁰⁹ Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Caso Bámaca Velásquez c. Guatemala, Reparaciones, sentencia del 22 de febrero de 2002, Serie C, No. 91, párr. 74. En su decisión la Corte IDH cita numerosos precedentes que sostienen la misma regla: Corte IDH, Caso Cantoral Benavides, Reparaciones, sentencia del 3 de diciembre de 2001, Serie C No. 89, párr. 63 y 69; Corte IDH, Caso Cesti Hurtado, Reparaciones, sentencia del 31 de mayo de 2001, Serie C No. 78, párr. 62, 63; Caso Villagrán Morales y otros, Reparaciones, sentencia del 26 de mayo de 2001, Serie C No. 77, párr. 99 y 100; y Caso Paniagua Morales y otros, Reparaciones, sentencia del 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 199, 200 y 201.

¹¹⁰ FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor. 1999. *Óp. Cit.*

La incidencia del derecho internacional en el ámbito interno se ha profundizado con la consolidación de las organizaciones internacionales y la actuación establecida por la competencia que desarrollan los órganos administrativos, cuasi jurisdiccionales o judiciales que funcionan al interior de las mismas. Los nuevos retos y desafíos de la sociedad mundial generaron que la Comunidad Internacional, a través de los Estados como integrantes de las organizaciones internacionales, ampliaran las facultades y capacidades de aquellos órganos, dando lugar a la consolidación de una compleja red de normas internacionales y decisiones que influyen de manera decisiva en el orden doméstico¹¹¹. Las decisiones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han señalado la incompatibilidad de algunas normas de impunidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se han ejecutado en cumplimiento del principio de buena fe y ante la necesidad de dar efecto útil a la Convención Americana.

En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, se aprobó por unanimidad la Declaración y el Plan de acción de Viena; en estos instrumentos consta que “...*los gobiernos deben derogar la legislación que favorezca la impunidad de los autores de violaciones graves de los derechos humanos como la tortura, y castigar esas violaciones, consolidando así las bases del imperio de la ley*¹¹².” con lo que se evidencia el interés de la Comunidad Internacional por poner fin a la impunidad.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional al señalar que ciertos crímenes no deben quedar impunes, las disposiciones convencionales pertinentes, las decisiones de los órganos de aplicación de los tratados de derechos humanos y el precepto aprobado en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, han generado una nueva norma consuetudinaria en relación a la inaplicabilidad de las disposiciones de impunidad, de conformidad con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.¹¹³

¹¹¹ SALVIOLI, Fabián. 2004. *El derecho internacional de la persona humana frente a la impunidad de hecho o de derecho: criterios a considerar en procesos de justicia transicional*. Fundación Social. S.E. Bogotá, Página 1. SIN ISBN

¹¹² Conferencia Mundial de Derechos Humanos. 1993. *Plan de Acción de Viena*. Párrafo: 60.

¹¹³ SALVIOLI, Fabián. 2004, *Óp. Cit.* Página: 22.

Como se ha visto en el presente trabajo, la impunidad en cualquiera de sus formas está íntimamente ligada con el concepto de “*Derecho a la Verdad*”¹¹⁴ que consiste en la facultad inherente a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y sus familiares de conocer las circunstancias bajo las cuales fue cometida la violación.

El experto de la Organización de las Naciones Unidas sobre la impunidad ha marcado la relación entre diferentes aspectos tales como: “... *la lucha contra la impunidad tiene su origen en la necesidad de que se haga justicia, pero no puede centrarse únicamente en ese objetivo: castigar a los culpables. Debe responder a tres imperativos: sancionar a los responsables, pero también satisfacer el derecho de las víctimas a saber y obtener reparación y, además, permitir que las autoridades desempeñen su mandato como poder público que garantiza el orden público*”¹¹⁵.

A nivel regional, el profesor Douglas Cassel afirma: “*que en cierto sentido, la lucha contra la impunidad de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, abarca al conjunto de las labores de estos órganos, y destaca entre los temas abordados en el desarrollo de estas tareas a la verdad, el deber estatal, los derechos de víctimas y familiares, la condena explícita de la impunidad, la prohibición de amnistías, el control de las defensas, la revisión de procesos, las órdenes internacionales, los otros tratados, la jurisdicción universal, la abstención de otorgar asilo político, y la Corte Penal Internacional*”¹¹⁶.

El combate a la impunidad no está limitado únicamente a una investigación y persecución judicial efectiva, sino que trasciende al ámbito de la reparación y no repetición de los hechos. Si bien es cierto, en sus inicios el concepto únicamente se relacionó con la comisión de delitos y las graves violaciones a los derechos humanos relacionadas con los derechos civiles y políticos, éste está evolucionando y siendo aplicado a las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales. El reto

¹¹⁴ Según Salvioli la impunidad de hecho y derecho en procesos de justicia transicional hace referencia a la temática del Derecho a la Verdad indicando que el mismo es una garantía irrenunciable que ha sido definida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la siguiente forma:

El derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes a través de la investigación y el juzgamiento que provienen de los artículos 8 y 25 de la Convención...

¹¹⁵ E/CN.4/Sub.2/193/6, párr. 16.

¹¹⁶ CASSEL, Douglas. 2001. *La lucha contra la impunidad en el Sistema Interamericano de derechos humanos*; INSTITUTO Interamericano de Derechos Humanos ed. En: Verdad y Justicia, Homenaje a Emilio Mignone; San José, Páginas: 356 - 410. ISBN: 978-0-8270-6979-4

de luchar contra la impunidad relacionada con los derechos económicos, sociales y culturales es lograr su exigibilidad y justiciabilidad tanto en las instancias nacionales como internacionales. Puesto que se tiene una gran deuda por las violaciones relacionadas con estos, para lograr el ideal de que sean los propios Estados quienes no permitan que la impunidad siga reinando y que pongan en marcha su engranaje interno para administrar justicia cierta, firme y duradera, como mecanismo de igualdad social. La cual es una deuda pendiente, puesto que en diversas ocasiones se ha reconocido la universalidad, indivisibilidad, interrelación e interdependencia de los derechos humanos.

Tampoco se puede perder de vista, que los esfuerzos encaminados a combatir la impunidad, pese a estar únicamente vinculados a derechos civiles y políticos, han dado frutos, en la actualidad ya se cuenta con un tribunal permanente como lo es la Corte Penal Internacional, el cual de manera subsidiaria contribuye a justiciabilizar los casos que en las instancias internas es imposible por la prevalencia de la impunidad. Como ya se ha mencionado, esta lucha aún está incompleta y en proceso de desarrollo.

Sobre la misma Nichols ¹¹⁷ advierte que la implementación de sistemas internacionales debe estar íntimamente relacionada con el fortalecimiento del sistema nacional dado que, en casos como la experiencia keniana, tras resultar electos a cargo público algunos de los perseguidos, provocaron una serie de posturas estatales e incluso reformas legales que neutralizaron de una manera efectiva los esfuerzos de esta institución.

En la advertencia de Nichols se clasificó a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ¹¹⁸, como una institución o mecanismo de Derecho Internacional Penal sui generis de lucha contra la impunidad, y que reunió los esfuerzos de la comunidad internacional por medio de la Organización de Naciones Unidas para combatir la impunidad y la voluntad del Estado de Guatemala de superar el problema aplicando la experiencia de los expertos internacionales ante los Tribunales internos, se convirtió en un instrumento eficaz complementario a la misión

¹¹⁷ NICHOLS, Lionel, 2015. *The International Criminal Court and the end of impunity in Kenya*. Springer; S. E. Suiza, Páginas: 249-252. ISBN: 978-3-319-10729-5

¹¹⁸ ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 2006. *Acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)*, el 12 de diciembre de 2006.

de la Corte Penal Internacional, que exigió de manera permanente y desde el mismo proceso de investigación, para que el Estado de Guatemala cumpliera con su obligación de hacer justicia pronta y cumplida. El otro experimento similar desde la Organización de Estados Americanos fue la Misión de Apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras¹¹⁹, fue creada con la inspiración del trabajo de CICIG, sin embargo; estos dos últimos esfuerzos difieren en un elemento esencial de la lucha contra la impunidad, los delitos que persiguen, en el caso de CICIG muchos más allá de la corrupción y en el caso de MACCIH, estrictamente relacionados con esta, no han sido declarados formalmente delitos contra la humanidad, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas trabaja en un borrador para que la corrupción sea catalogada como delito contra la humanidad¹²⁰.

¹¹⁹ ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, 2016. *Convenio entre el Gobierno de la República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para el Establecimiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras*, de 19 de enero de 2016.

¹²⁰ Diário Estadão. 2017. Brasília, Edición de 1 de septiembre de 2017. [en línea] Disponible en: <https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,orgao-da-onu-propoe-tratar-corrupcao-como-crimes-contra-a-humanidade,70001961296> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

CAPÍTULO III

NORMATIVA INTERNACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

Numerosos instrumentos internacionales tienen el objetivo de evitar la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos; estos tratados han materializado la obligación de los Estados de investigar y sancionar estos hechos, o facilitar el juzgamiento por los tribunales de otros Estados, convirtiéndose en un nuevo principio del derecho, de aplicación universal e independiente de la existencia de un tratado especial¹²¹.

Siendo el objetivo del presente trabajo determinar la eficacia de la lucha contra la impunidad, es necesario identificar los instrumentos normativos en los que esta se fundamenta desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Internacional Penal y el Derecho Penal Internacional, instrumentos creados para combatir la impunidad y los que para su mejor comprensión se clasificarán de la siguiente manera:

- a. Instrumentos que abordan directamente la palabra impunidad y que tienen como objetivo combatirla.
- b. Instrumentos que contienen como aspiración la justicia, lo que se interpreta como combate a la impunidad.
- c. Instrumentos que tienen como objetivo la justicia y un llamado al cumplimiento de la debida diligencia en las investigaciones para no dejar en el olvido las violaciones a los derechos humanos. Entendiéndose que, si se busca la justicia, se está luchando contra la impunidad, por ser la impunidad la antítesis de la justicia.

Posteriormente se analiza el Conjunto de Principios para combatir la impunidad, como el documento supremo en materia de lucha contra la impunidad, que contiene treinta y ocho principios.

¹²¹ FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor. 1999. *Óp. Cit.*

Esta clasificación¹²² responde a realidades y mecanismos de lucha para combatir la impunidad con las particularidades propias de cada institución y sistema, se profundizará únicamente en el Conjunto de principios para la lucha contra la impunidad de Naciones Unidas, por ser el instrumento creado directamente para esto.

1. CONJUNTO DE PRINCIPIOS PARA COMBATIR LA IMPUNIDAD

Como resultado de esa evolución de la lucha contra la impunidad, se publican los Principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad¹²³, finalizando su estudio el 21 de abril de 2005 durante la 60ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, profiriéndose la resolución 2005/81, que es producto de una serie de trabajos preparatorios y antecedentes que permitieron aprobar su versión definitiva.

El texto definitivo cristaliza el contenido de las obligaciones de los Estados y expone, a manera de catálogo, los enunciados básicos del derecho internacional en materia de lucha contra la impunidad. Estos son el resultado de un ejercicio de sistematización y codificación que, ante el moderno desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, consisten en condensar en un instrumento las obligaciones internacionales del Estado sobre una materia particular que se encuentra vigente de acuerdo con todas las fuentes del Derecho Internacional Público.

Además de ser la materialización de años de estudio y revisión de la totalidad de las fuentes del derecho internacional en el campo específico de la lucha contra la impunidad, la que se deriva de la obligación general de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos, que incluye las obligaciones de prevenir las

¹²² Ver Anexo 1

¹²³ Como ya se ha mencionado, estos tienen como referencia la solicitud de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la ONU, de agosto de 1991, para que Louis Joinet, realizara el estudio sobre la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos. Como resultado de la solicitud, Joinet presentó a la Subcomisión una serie de informes sobre las leyes de amnistía y sobre la cuestión de la impunidad de los autores de las violaciones de los derechos civiles y políticos, cumpliendo así con la decisión 1996/119–, lo que tuvo como producto un importante y trascendental estudio sobre la cuestión de la impunidad, en el que se adjuntó como anexo el conjunto de principios sobre la lucha contra la impunidad. (Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1). Lo que convirtió a este documento junto con las directrices de Joinet revisadas, el antecedente principal del Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, que surgió luego de unos trabajos de revisión encargados por la Comisión de Derechos Humanos y por el Secretario General de Naciones Unidas a la experta Diane Orentlicher y que fue aceptado en 2005 por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

violaciones, investigarlas, sancionar a los responsables y proporcionar recursos efectivos de reparación a las víctimas.

A partir de su emisión, los principios han sufrido un proceso de reafirmación por medio de las decisiones adoptadas por los tribunales penales internacionales y los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos. La jurisprudencia y los estatutos de los tribunales penales internacionales han aclarado el alcance de las obligaciones de los Estados en la lucha contra la impunidad, mediante una administración de justicia eficaz.

Para Frank Haldemann y Thomas Unger cada principio tiene su propio camino y plantea complejos problemas teóricos y prácticos¹²⁴. Que deben verse como una guía que permite acomodar y conciliar en tiempos de transición política¹²⁵. Orentlicher lo enfoca como una guía práctica para retos contemporáneos y que deben tener un espacio de reacomodamiento en su evolución para ser entendidos como las mejores prácticas de lucha contra la impunidad¹²⁶.

Como los describe Diane Orentlicher los principios actualizados en 2005 son un clásico instrumento de soft law¹²⁷. En donde se abordó de manera lacónica problemas tremendamente complejos que debían tratarse profundamente. Y que tuvieron de base los Principios concebidos por Joinet que dieron el marco de acción para luchar contra la impunidad. Se desarrollaron 38 principios¹²⁸, organizándose en temas como:

a. “Lucha Contra La Impunidad: Obligaciones Generales

b. Derecho a saber¹²⁹

i. Principios generales

ii. Comisiones de investigación

iii. Preservación y consulta de archivos con el objetivo de establecer las violaciones¹³⁰

¹²⁴ HADELMANN, Frank y UNGER, Thomas. 2018. *Introduction*. En: *The United Nations Principles to Combat Impunity, A commentary*. Oxford University Press. Primera Edición. Oxford. Página: 20, ISBN: 978-0198743606

¹²⁵ Ídem Página: 24

¹²⁶ Ídem

¹²⁷ ORENTLICHER, Diane. 2018. “*Prologue*”. En: HADELMANN, Frank y UNGER, Thomas. Ed. *Óp. Cit.* Página: 1

¹²⁸ ORENTLICHER, Diane. 2005. *Óp. Cit.*

¹²⁹ Ídem

¹³⁰ Ídem

c. *Derecho a la Justicia*

i. *Principios generales*

ii. *Delimitación de competencias entre las jurisdicciones nacionales, extranjeras, internacionales e internacionalizadas*¹³¹.

iii. *Medidas restrictivas incorporadas a determinadas normas del derecho que se justifican por la lucha contra la impunidad*¹³²

d. *Derecho a Obtener Reparación/Garantías de que no se repitan las Violaciones*

i. *Derecho a obtener reparación*¹³³

ii. *Garantías de no repetición de las violaciones*¹³⁴

Los Principios refieren esencialmente el proyecto de normativa cosmopolita que define la lucha contra la impunidad en términos de normas globales, obligaciones y derechos, para Joinet la lucha contra la impunidad era una pre condición necesaria para lograr una reconciliación justa y duradera¹³⁵.

Por proporcionar un marco general muy puntual para la lucha contra la impunidad que estos principios son muy importantes, ya que representan estándares mínimos para la creación de normativa e instituciones que se enfocan en la lucha contra la impunidad.

Es así como la publicación de los Principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad, marcan un antes y un después en el tema, donde se evidencian el interés de la Comunidad Internacional por combatir la impunidad en sus diversas formas.

2. INSTRUMENTOS DE DERECHO PENAL INTERNACIONAL

Se puede afirmar que: *“International criminal law provides a framework for resolving the paradox presented by the dual goals of accountability and political transition/reconciliation. It does not offer firm guidance on every aspect of the problem.*

¹³¹ ORENTLICHER, Diane. 2005. *Óp. Cit.*

¹³² Ídem

¹³³ Ídem

¹³⁴ Ídem

¹³⁵ HADELMANN, Frank y UNGER, Thomas. Ed. 2018. *Óp. Cit.* Página: 24

Rather, it helps define the boundaries of permissible impunity. To be sure," ¹³⁶ este marco se da desde los diferentes instrumentos internacionales, que dieron paso a la creación de Tribunales especiales y la creación de la Corte Penal Internacional con el objetivo específico de juzgar delitos relacionados con esta materia.

Derivado de la creación tribunales como consecuencia de la comisión de diversos delitos¹³⁷ en distintos momentos que marcaron la historia de la humanidad, surge el interés de la Comunidad Internacional de establecer tribunales penales Internacionales con jurisdicción sobre determinados delitos para asegurar la justicia y no repetición.

Por medio de la creación de los Tribunales Militares Internacionales, los Tribunales Ad-hoc, los Tribunales especiales y la Corte Penal Internacional, la Comunidad Internacional manifestó la no tolerancia hacia la impunidad, desestimando el argumento político a su favor que concebía la impunidad como un mal necesario para la transición política hacia la democracia.

Finalizada la Segunda Guerra mundial se dan pasos significativos en la materia, con el establecimiento y puesta en funcionamiento de los Tribunales Militares Internacionales de Núremberg y para el Extremo Oriente ¹³⁸, en 1945 y 1946 respectivamente, con el fin de enjuiciar los crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Estos Tribunales constituyen un precedente importante, en la lucha contra la impunidad, siendo las únicas instancias internacionales para el juzgamiento penal de responsables de crímenes contra la humanidad que existieron hasta el fin de la guerra fría, pese a que en ese período se cometieron numerosos atropellos en contra de la dignidad humana. En esta situación

¹³⁶ BURKE- WHITE, William, 2000. *Protecting the Minority: A Place for Impunity? An Illustrated Survey of Amnesty Legislation, Its Conformity with International Legal Obligations, and Its Potential as a Tool for Minority - Majority Reconciliation*. Journal on Europolitics and Minority Issues in Europe. Germany, Página 49. ISBN: 978-92-1-154197-7

¹³⁷ La naturaleza de los delitos cometidos en conjunto con los bienes jurídicos afectados y el alcance de los daños ocasionados hacen que estos tribunales cumplan un papel fundamental en la exaltación de la esencia humana y la obtención de justicia para la humanidad.

¹³⁸ Tribunales creados ad hoc y de modo unilateral, (la justicia de los vencedores) y con flagrante vulneración de los principios elementales del derecho sustantivo y procesal penal, fundamentalmente, el principio de legalidad de los delitos y de las penas, así como que la instrucción y enjuiciamiento fueron llevados a cabo por el mismo órgano judicial o la cuestionable imparcialidad de los jueces. Estos juicios fueron seguidos de diferentes tribunales de guerra formados por los aliados en sus respectivas zonas de ocupación en Alemania, y varios países de Europa juzgaron a nazis y nacionales que colaboraron con aquellos.

se presenta la contienda internacional entre Estados Unidos con la ex Unión Soviética, en la Organización de las Naciones Unidas, lo que representó un obstáculo insalvable para cualquier avance en la materia, por la acción del poder de veto de los dos referentes de ambos bloques dentro del Consejo de Seguridad¹³⁹, y la oposición manifiesta de los mismos para que se avanzara en la creación del establecimiento de una corte penal internacional de carácter permanente.

Es así como la convergencia de las diferentes vertientes de protección de los derechos humanos se ha plasmado desde los orígenes de los procesos llevados a cabo en el plano internacional, para juzgar a las personas responsables de los más graves crímenes contra la Comunidad Internacional; así, el tratamiento y aplicación por las cortes internacionales es idéntico frente a violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos en tiempo de paz o de conflicto armado (crímenes de *lesa humanidad*) y de infracciones graves al derecho humanitario (crímenes de guerra).

Ya disuelta la ex Unión Soviética, se dio lugar a la aprobación de las resoluciones del Consejo de Seguridad, por las cuales se crearon los Tribunales penales para la Ex Yugoslavia¹⁴⁰ y para Ruanda¹⁴¹. La nueva dirección tomada en el Consejo de Seguridad con esta postura fue la de considerar indispensable el juzgamiento de los responsables de los crímenes más atroces contra la dignidad de las personas, como parte integrante del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales¹⁴².

Así se estableció un marco propicio para retomar las negociaciones que finalizaron con la adopción, luego de una conferencia internacional¹⁴³, del Estatuto de Roma por el cual se establece la Corte Penal Internacional, una institución judicial de carácter permanente y con aplicación en todos los Estados que la ratifiquen.

¹³⁹ Según la Carta de las Naciones Unidas, además de Estados Unidos y la Unión Soviética los otros Estados que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y gozan del derecho de veto son Francia, el Reino Unido y China. A la disolución de la Unión Soviética, la banca permanente que ésta ocupara fue atribuida a la Federación Rusa como sucesora.

¹⁴⁰ ORGANIZACIÓN de las Naciones Unidas. *Consejo de Seguridad*: Resolución 808/93.

¹⁴¹ ORGANIZACIÓN de las Naciones Unidas. *Consejo de Seguridad*: Resolución 955/94.

¹⁴² El Consejo de Seguridad ha creado estos dos tribunales *ad hoc* en el marco de la competencia que le es otorgada por el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas: "Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión".

¹⁴³ Para un análisis del proceso de la conferencia y del contenido principal del Estatuto de Roma ver SALVIOLI, Fabián, 1999. "¿La justicia que viene? Un análisis de la Conferencia de las Naciones Unidas para el establecimiento de una Corte Penal Internacional", En: *Ágora, revista de Ciencias Sociales* 2, pp. 173 - 192 Ed. Centro de Estudios Políticos y Sociales, Universidad de Valencia, España.

En conclusión, la evolución más reciente del Derecho Internacional ha tenido una de sus expresiones más avanzadas en la profundización de los mecanismos de aplicación del Derecho Penal Internacional como fórmula jurídica de la lucha contra la impunidad. Una de las grandes preocupaciones de las Naciones Unidas ha sido la persecución y castigo de los responsables de graves y masivas violaciones de los derechos humanos y de los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario. Para lo cual ha decidido: ¹⁴⁴

1. Expandir el ámbito de la jurisdicción penal de los Estados respecto de los delitos contra la Comunidad Internacional y el derecho de gentes, ampliando los supuestos en los que se reconoce el criterio de universalidad de la jurisdicción penal de los Estados.
2. Crear Tribunales Penales Internacionales, vía utilizada por el Consejo de Seguridad para crear órganos *ad hoc* y más tarde, con un carácter permanente y universal, con la aprobación del Estatuto de Roma.
3. Buscar nuevas fórmulas jurisdiccionales para encarar la represión de los crímenes cometidos con la aparición de tribunales internacionalizados de naturaleza mixta¹⁴⁵ o híbrida¹⁴⁶.

3. INSTRUMENTOS QUE CONTIENEN EL PRINCIPIO DE JUSTICIA UNIVERSAL

El principio de justicia universal se define¹⁴⁷ como “*La jurisdicción universal es el principio según el cual a todos los estados les compete llevar ante la Justicia a los*

¹⁴⁴ GONZÁLEZ VEGA, Ignacio. 2010. *Breve diagnóstico de la jurisdicción penal universal en su respuesta a la impunidad de los crímenes internacionales*. Jueces para la democracia, N.º 67, págs. 119-131.

¹⁴⁵ Los tribunales mixtos se definen como tribunales de composición y jurisdicción mezcladas, que comprenden aspectos tanto nacionales como internacionales, y operan normalmente dentro de la jurisdicción en que se produjeron los delitos.

¹⁴⁶ Sierra Leona, Camboya, Timor Oriental, Kosovo, Bosnia - Herzegovina, Irak, Líbano, CICIG

¹⁴⁷ “*La justicia universal no es ni más ni menos que la aplicación por parte de los jueces de cualquier país, ... de lo que es el derecho internacional, como consecuencia de las obligaciones que establece en determinadas materias de hacerlo a todos los Estados y, específicamente, en materia de protección de los derechos humanos frente a los ataques más graves que se hayan podido cometer, no importa donde se hayan cometido estas y si ninguna jurisdicción penal preferente ha actuado previamente.*” APDHE Óp. Cit.

El Artículo 1 (1) de Los Principios de Princeton de Justicia Universal la definen como: “*Jurisdicción Universal es la jurisdicción penal basada solamente en la naturaleza del delito, independientemente del lugar donde se cometió el crimen, la nacionalidad del autor del delito denunciado o condenado, la*

perpetradores de ciertos crímenes, independientemente de dónde se cometiera el crimen y la nacionalidad de los responsables y sus víctimas. Es la respuesta que ofrece el Derecho Internacional ante el espectáculo de los tiranos y torturadores encubiertos por la impunidad y las amnistías que han obtenido en sus países”¹⁴⁸.

La aplicación de la justicia universal desde el enfoque de la responsabilidad penal internacional se considera que es un factor en la reducción de la impunidad para los autores de los crímenes internacionales¹⁴⁹, ya que la lucha contra la impunidad surge del cumplimiento de los deberes del Estado. Este mecanismo permite la persecución penal extra territorial de los delitos, dando la oportunidad para remediar la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, cuando en la jurisdicción interna no se han perseguido de modo eficaz¹⁵⁰. Rompe con viejos dogmas del Derecho Penal¹⁵¹, tales como el principio de territorialidad de la ley penal basado en la idea de soberanía estatal, que cede a un nuevo principio de jurisdicción penal internacional. Su objetivo es la lucha contra la impunidad. *“Tiene su fundamento en la defensa descentralizada de intereses y valores de la Comunidad Internacional en su conjunto,*

nacionalidad de la víctima, o de cualquier otro tipo de conexión al estado ejercer dicha jurisdicción.”
“Article 1 (1). Universal Jurisdiction is criminal jurisdiction based solely on the nature of the crime, without regard to where the crime was committed, the nationality of the alleged or convicted perpetrator, the nationality of the victim, or any other connection to the state exercising such jurisdiction Princeton 2001”.

La Asociación Internacional de Derecho citado por Tawfiq Ladan la define como: *“En virtud del principio de jurisdicción universal, un Estado tiene derecho, a iniciar un procedimiento con respecto a determinados delitos graves, con independencia del lugar del crimen, y con independencia de la nacionalidad del autor del hecho. La única conexión entre el delito y el Estado acusador que se requiere es la presencia física del presunto delincuente en la jurisdicción de ese Estado”* Tawfiq 2009 p.16
“Under the principle of universal jurisdiction, a state is entitled, ore ven required to bring proceedings in respect of certain serious crimes, irrespective of the location of the crime, and irrespective of the nationality of the perpetrator of the victim. The only connection between the crime and the prosecuting state that may be required is the physical presence of the alleged offender within the jurisdiction of that state.”

¹⁴⁸ BRODY, Reed. 2013. *Llanto por la jurisdicción universal* [en línea] Human Rights Watch.

Disponible en: <http://blogs.publico.es/dominiopublico/1370/llanto-por-la-jurisdiccion-universal/>
[Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

¹⁴⁹ BASSIOUNI, Mahmoud Cherif. 2001. *Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives and Contemporary Practice*. Va. J. Intl. L. 81, página 59.

¹⁵⁰ PERAZA, Luis. 2006. *La jurisdicción universal: una realidad en constante construcción*, Universidad de La Sabana, Dikaion – Lo Justo. Bogotá. Página 352.

¹⁵¹ La aceptación de la máxima *aut dedere aut judicare* como máxima internacional *civitas*, permitió el reconocimiento y aplicación de la jurisdicción universal. La obligación de someter a proceso o extraditar o, cuando correspondiere, castigar a las personas acusadas o condenadas por crímenes internacionales, especialmente crímenes *jus cogens* debido a la naturaleza horrenda y a su impacto negativo en la paz y la seguridad, fue lo que condujo al reconocimiento de la jurisdicción universal como un medio para alcanzar las metas de *aut dedere aut judicare*.

y no en los puramente estatales o particulares, por ello implica un paso más allá respecto de la mera cooperación entre Estados para la persecución de delitos”¹⁵².

A nivel normativo el principio de jurisdicción universal está contenido en varios instrumentos internacionales los cuales se clasifican dentro de instrumentos de lucha contra la impunidad.

4. INSTRUMENTOS DE DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

A. INSTRUMENTOS DEL SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Desde el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos fueron creados un importante grupo de instrumentos internacionales que consagran explícita o implícitamente normas y principios para combatir la impunidad. Algunos reconocen el derecho de las víctimas a recurrir a las instituciones y organismos del Estado, en busca de justicia en caso de violaciones a los derechos humanos.

Entre estos instrumentos¹⁵³ se encuentran, declaraciones, convenios o tratados, principios. En el caso de los tratados internacionales, algunos cuentan con organismos¹⁵⁴ de control sobre la forma en que los Estados ponen en práctica las obligaciones que asumen al ratificar los instrumentos.

¹⁵² *“Desde la Segunda Guerra Mundial más de una docena de Estados han investigado, procesado e incluso sentenciado basándose en este principio, o han detenido al presunto autor con el fin de extraditarlo al Estado que lo reclama y que lo procesará”.* PERAZA, Luis. 2006. *Óp. Cit.* Página 344.

¹⁵³ *“Estos dos Pactos Internacionales de derechos humanos constituyen la piedra angular de una larga serie de tratados internacionalmente vinculantes que abarcan múltiples cuestiones en la esfera de los derechos humanos. Los tratados definen derechos humanos y libertades fundamentales y fijan normas básicas que han servido de inspiración a más de 100 convenios, declaraciones, conjuntos de normas y principios en materia de derechos humanos de alcance internacional y regional”.* OACNUDH. *Derechos Humanos. Derechos Civiles y Políticos. El Comité de Derechos Humanos.* Folleto informativo No. 15. (REV1). S.A. Página 1.

¹⁵⁴ *“Un órgano o comité de supervisión independiente establecido por el tratado mismo, vigila la aplicación del tratado por los Estados Partes. Esos comités están integrados por expertos independientes elegidos por los Estados que son Partes en el tratado, cuya imparcialidad, independencia y experiencia en materia de derechos humanos los faculta para evaluar los progresos realizados por los Estados Partes en relación con las normas establecidas en el tratado en cuestión”.* Ídem. Página 2.

B. INSTRUMENTOS DEL SISTEMA EUROPEO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

El Sistema Europeo para la protección de los derechos humanos, en el ámbito del Consejo de Europa¹⁵⁵, es el sistema regional más antiguo¹⁵⁶. Fue creado en 1950, con la aprobación del *Convenio Europeo de Derechos Humanos*, adoptado por el Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1950 y entró en vigor en 1953, instrumento destinado a la protección de los derechos civiles y políticos. En cuanto a los derechos de carácter socioeconómico, solo fueron introducidos hasta 1961, cuando se adoptó la *Carta Social Europea*¹⁵⁷.

El problema de impunidad en Europa no es tan grave como en otros continentes como América Latina, Asia o África, pero eso no significa que el Consejo de Europa no se haya dado a la tarea de abordar el tema, al igual que las Naciones Unidas. En un primer esfuerzo europeo por combatir la impunidad surge en la Convención Europea de Derechos Humanos, en la que, si bien no se incluye la palabra impunidad, en su preámbulo si establece: *“Reaffirming their profound belief in those fundamental freedoms which are the foundation of justice and peace in the world and are best maintained on the one hand by an effective political democracy and on the other by a common understanding and observance of the human rights upon which they depend”*¹⁵⁸. Ese espíritu porque prevalezca la justicia se reafirma en el artículo 1 de

¹⁵⁵ Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa Occidental vivió un ambiente favorable a la creación de una organización internacional que agrupara a los Estados democráticos. Ese impulso culminó en la creación en 1949 del Consejo de Europa. Adicionalmente, el impacto que para la opinión pública supuso la constatación de los crímenes perpetrados por el Tercer Reich y el impulso proporcionado por la proclamación por Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, propició el interés por crear un mecanismo de garantía colectiva de tales derechos. La entonces denominada Asamblea Consultiva del Consejo acordó en su primera sesión iniciar los estudios necesarios para la creación de tal sistema. Sólo un año más tarde, el Comité de Ministros aprobó el proyecto del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. El 4 de noviembre de ese mismo año 1950 el Convenio era firmado por los representantes de doce Estados.

¹⁵⁶ Para Felipe Gómez Isa es el que mayor grado de evolución y de perfección ha alcanzado. Lo que viene motivado fundamentalmente por la relativa homogeneidad política de los Estados europeos y por su avance alcanzado en el campo de los derechos humanos. *Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo*. [en línea] Disponible en: <http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/64> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

¹⁵⁷ Los mecanismos de protección establecidos en uno y otro Convenio van a ser notablemente diferentes.

¹⁵⁸ *“Article 1 – Obligation to respect human rights The High Contracting Parties shall secure to everyone within their jurisdiction the rights and freedoms defined in Section I of this Convention”*.

la misma al consagrar la obligación de los Estados por el respeto a los derechos humanos.

También desde la Unión Europea se crearon una serie de instrumentos enfocados a luchar contra la impunidad, lo que vino a fortalecer el tema.

C. SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

El Sistema Interamericano inició su preparación en 1948, con la adopción de la Carta de la Organización de Estados Americanos¹⁵⁹. Uno meses después se adoptó la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre¹⁶⁰.

En 1959 se dispuso la conformación de un grupo de expertos a los que se les encargó la supervisión de la aplicación de los derechos consagrados en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. La coyuntura política de la época¹⁶¹ propició el establecimiento del organismo regional de derechos humanos, estableciéndose un comité de expertos que fue denominado como Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual estuvo compuesta por siete miembros, con funciones a título personal, seleccionados por el Consejo de la Organización de Estados Americanos, de listas presentadas por los Estados miembros. El problema de esa Comisión fue que no poseía un mandato claro y práctico. Las facultades otorgadas eran limitadas, vagas e imprecisas.¹⁶² Lo que provocó que la Comisión procediera a realizar actividades que no estaban contempladas en el estatuto, pero que resultaban implícitas y necesarias para el cumplimiento de sus funciones, dando esto origen en 1969 a que se adoptara la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual entró en vigencia en 1978.

¹⁵⁹ La Carta tenía como objetivo la creación de una organización internacional que tuviera el fin de lograr un orden de paz y justicia, fomentar la solidaridad, robustecer la colaboración internacional y defender la soberanía, la integridad territorial y la independencia hemisférica. La Carta no contempló un sistema de protección de derechos humanos, pero dejó las bases para esto, estableciendo en su preámbulo la idea de que el ser humano era el centro en la organización de la sociedad.

¹⁶⁰ Precedió por corto tiempo a la adopción de la Declaración Universal de las Naciones Unidas.

¹⁶¹ La revolución cubana, la situación de la República Dominicana y el aumento de los grupos guerrilleros comunistas en el continente.

¹⁶² La ambigüedad fue con el propósito claro de los Estados que no aceptaban la creación de un órgano regional al considerar que interferiría en sus asuntos internos. Los Estados deseaban que la Comisión únicamente realizara estudios generales y organizara actividades académicas como simposios o congresos, sin opinar sobre la observancia de los derechos humanos en países miembros.

Hasta la presente fecha, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos está conformado por 61 instrumentos de protección de los derechos humanos y que buscan combatir la impunidad de las violaciones a los derechos humanos en el continente.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha construido una sólida jurisprudencia sobre el rol del Estado como garante de los derechos humanos y su responsabilidad en la lucha contra la impunidad. La gran mayoría de los casos que llegan al Sistema Interamericano se refieren precisamente a la falta de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos. Eso se explica, en parte, por el carácter subsidiario que tiene el sistema y porque la condición para que se active este mecanismo internacional de protección sea precisamente la falta de justicia a nivel interno¹⁶³.

D. INSTRUMENTOS DEL SISTEMA AFRICANO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

El Sistema Africano de los Derechos Humanos y de los Pueblos es relativamente reciente. La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos o ‘Carta de Banjul’ fue adoptada el 27 de junio de 1981 y entró en vigor el 21 de octubre de 1986. En la Carta se procura integrar las tradiciones africanas, con un matiz colectivo o comunitario antes que individual. Se encuentra influenciada por la Convención Europea de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ser la última en ser creada. El Sistema Africano es el primero en reconocer los derechos económicos, sociales y culturales¹⁶⁴ sin que estén sujetos a

¹⁶³ Uno de los requisitos para que una petición individual pueda ser declarada admisible por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el agotamiento previo de los recursos internos. A este respecto, el artículo 46 (a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece como requisito “que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”. Sin embargo, este mismo instrumento prevé ciertas excepciones a la regla de agotamiento de los recursos internos. En particular, establece el artículo 46.2 que este requisito no será aplicable cuando: a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

¹⁶⁴ En cuanto a las aportaciones y características de dicho concepto africano de derechos humanos inserto en la Carta, la más importante de ellas, en opinión de la mayoría de los especialistas, consiste en su reconocimiento de los derechos humanos de tercera generación, en especial del derecho de los pueblos al desarrollo. Nos encontramos ante el único tratado internacional de derechos humanos que consagra explícitamente este nuevo tipo de derechos, lo que nos da una idea clara de cuáles son las

clausulas limitantes, este es el gran avance que presenta comparado con el Sistema Universal, europeo e Interamericano. Presenta un catálogo de deberes novedoso, que no sólo determina obligaciones verticales, entre Estado e individuos, sino también horizontales entre individuos.

Del cuerpo de instrumentos en materia de derechos humanos que conforman el Sistema Africano de Protección a los Derechos Humanos, seis de ellos contienen el concepto impunidad, aun así, el Sistema Africano es un mecanismo debilitado, con poderes muy limitados para la Comisión Africana y con un control férreo por parte de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, órgano político por excelencia y, hasta la fecha, no muy preocupado por la gravísima situación por la que atraviesan los derechos humanos en el continente. Además, como contraste con los sistemas regionales europeo y americano, la Carta Africana no previó inicialmente ningún órgano de protección de los derechos humanos de naturaleza jurisdiccional, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta laguna fue superada, en junio de 1998 cuando se aprobó el instrumento, con la creación de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la cual no pudo entrar en funcionamiento, lo que hace que la lucha contra la impunidad en el continente africano aún no sea efectiva y provoque que órganos como la Corte Penal Internacional enfoquen su trabajo en África. Constituyéndose en la única vía para buscar justicia ante las graves violaciones de los derechos humanos que agobian ha dicho continente.

5. INSTRUMENTOS DEL DERECHO INTERNACIONAL PENAL

Estos instrumentos giran en torno al reconocimiento y estandarización del derecho penal, como lo explica JESCHECK *“solamente el Derecho Penal estatal podía proteger con sus propias normas el Derecho Internacional, transformando los deberes jurídicos impuestos al Estado en deberes del individuo sancionables penalmente”*¹⁶⁵

prioridades del continente africano en materia de derechos humanos: el derecho a la paz tanto en el ámbito interno como internacional (art. 23), el derecho al medio ambiente satisfactorio y global (art. 24), y, el más importante, el derecho al desarrollo (art. 22).

¹⁶⁵ S.A. Doctrina parte especial. *Derecho Internacional Penal y Derecho Penal Internacional*. [en línea] Disponible en: http://www.derechointernacional.net/privado_lp/doctrina-parte-especial/452-derecho-internacional-penal-y-derecho-penal-internacional, [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

Esta clasificación se utiliza para diferenciar los documentos del Derecho Penal Internacional, porque sus fuentes se encuentran en una configuración bipartida de tratados y normas internas¹⁶⁶.

La mayoría de instrumentos internacionales en esta materia son tratados bilaterales, que contienen gran variedad de normas con consecuencias judiciales, siendo el resultado de los consensos realizados entre los principales sujetos de derecho internacional, contando con otras figuras que lo integran, como los mecanismos de cooperación judicial internacional que hace frente a la criminalidad transnacional.¹⁶⁷

El alcance de estos instrumentos a nivel de relaciones internacionales, se encuentra en las constituciones nacionales. Por lo que se han clasificado en las constituciones, los tratados y por excepción en la ley. Es por estas características que en este apartado se incluyen el Estatuto de creación del Tribunal Especial para Líbano, el Acuerdo de Creación para una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Convenio entre el gobierno de la República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para el establecimiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.

¹⁶⁶ MEJÍA AZUERO, Jean Carlo. 2008. *Diferencias entre el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Penal*. En: Prolegómenos. Derechos y Valores, [en línea] Vol. XI, Núm. 22, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia, julio-diciembre, Página: 183. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.], ISSN: 0121-182X. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/876/87602212.pdf>.

¹⁶⁷ Ídem

CAPÍTULO IV

CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA ENTENDER LOS ESFUERZOS INTERNACIONALES EN LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

¿Por qué la comunidad internacional hace esfuerzos por combatir la impunidad, no sólo de forma generalizada, sino de forma especializada en determinados Estados?, ¿Qué faculta a la comunidad internacional para poder realizar estos esfuerzos?

Estas preguntas se hacen necesarias para el desarrollo del presente trabajo, la respuesta probablemente es que definitivamente la comunidad internacional no podría hacer nada para combatir la impunidad, ni de manera global ni específica en Estados específicos si no aplican determinados conceptos, que se hacen necesarios analizar en el presente capítulo.

Aunque el tema central del presente trabajo es la lucha contra la impunidad, al dársele el enfoque desde los esfuerzos de la comunidad internacional en el desarrollo del mismo se hizo necesario abordar los conceptos de comunidad internacional, control internacional, soberanía, democracia, obligaciones y responsabilidad internacional, hecho ilícito internacional, debido a que son imprescindibles para su ejecución y están relacionados directamente con el trabajo realizado para la lucha contra la impunidad debido a que se han creado órganos de control por parte de los sujetos del ordenamiento internacional¹⁶⁸ para ejercer la supervisión.

Conceptos en los que no se profundizará, ni se entrará en su debate filosófico, en virtud de que la pretensión del presente trabajo es crear el marco conceptual que permita determinar cómo estos influyen en la creación, aplicación y desarrollo de los esfuerzos de la comunidad internacional para luchar contra la impunidad.

En esta línea se hace necesario definir los siguientes conceptos:

¹⁶⁸ Estos sujetos son los principales responsables de la creación, modificación y aplicación de las normas del Derecho Internacional. FERRER LLORET, Jaume. 1998. *Responsabilidad Internacional del Estado y Derechos Humanos*. Universidad de Alicante, Tecnos. Primera Edición, Página: 37 SIN ISBN.

1. COMUNIDAD INTERNACIONAL.

Se entiende por comunidad internacional “...la base social que regula el ordenamiento jurídico internacional o, en otros términos, el sistema social en el que el Derecho internacional opera como sistema legal. Para hacer referencia a dicho sistema social, la doctrina utiliza las expresiones de Sociedad internacional y de Comunidad internacional¹⁶⁹”.

Fernando Mariño la denomina como *Comunidad Internacional contemporánea* y sobre la misma establece que: “... se integra y conforma por los entes colectivos, principal, aunque no exclusivamente los Estados soberanos, que establecen entre sí, relaciones reguladas por las normas de Derecho Internacional Público o Derecho de Gentes. Es por ello una comunidad jurídica.

La *Comunidad Internacional contemporánea* tiene por lo tanto una base social predominantemente interestatal... aunque en muchas ocasiones es en efecto conducida o pretende ser “representada” sólo por algunos de sus miembros estatales más poderosos, ella misma, como una entidad dotada de una cierta unidad casi – política, ha creado y mantiene instrumentos permanentes de cooperación universal, concebidos para que, al perseguir la realización de fines comunes, su acción unitaria y la de sus miembros se conformen a los principios fundamentales y las normas generales básicas del Derecho Internacional. El principal de esos instrumentos está constituido en la actualidad por la Organización de las Naciones Unidas y su sistema de organizaciones internacionales y, junto a ellas, por muchas otras organizaciones internacionales universales y regionales. Es en esa perspectiva en la que puede afirmarse que la *Comunidad Internacional* posee una incipiente organización jurídica propia.

...puede afirmarse que la *Comunidad Internacional* “gobierna” determinados asuntos o ámbitos públicos que interesan a toda la *Sociedad Internacional* y, en ese sentido global, a la *Humanidad* misma. Tal “gobierno”, sin embargo, se ejerce sin regularidad, por procedimientos que, a pesar de lo indicado, se hallan precariamente institucionalizados y muchas veces, cuando su orientación genuina a ser utilizados

¹⁶⁹ CASANOVAS, Oriol y RODRIGO, Ángel J. 2013. *Compendio de Derecho Internacional Público*. Editorial Tecnos. Segunda Edición. Madrid, Página: 29. ISBN: 978-84-309-7983-7

*para la protección de valores y principios universales se debilita, se aplican únicamente en defensa de intereses particulares e incluso al margen del ordenamiento jurídico internacional. Esos intereses particulares, como se indicará, son en muchas ocasiones sencillamente los de los Estados más poderosos o de grupos de poder defendidos o protegidos por éstos.*¹⁷⁰

*...en la actualidad la Comunidad Internacional debe ser concebida como una realidad socio-jurídica cuyos miembros se rigen en sus relaciones entre sí y con ella misma, por un conjunto de principios jurídicos fundamentales y normas generales básicas que integran el núcleo de la que podemos denominar su naciente constitución.*¹⁷¹

Mariño¹⁷² afirma que la Comunidad Internacional contemporánea actúa como un conjunto en el seno de la sociedad internacional y cuya naturaleza no es la simple suma de las entidades que la compone, sino que posee una entidad unitaria, propia y separada.

Desde esta perspectiva está enfocado el presente trabajo, porque es justamente la Comunidad Internacional quien se preocupa por los problemas de impunidad, inicialmente en países concretos con conflictos precisos y luego a nivel mundial al crear la Corte Penal Internacional, todo esto haciendo uso de su entidad unitaria y propia.

2. CONTROL INTERNACIONAL.

El diccionario de derecho Black's lo define como: *"The supervision over countries and their subdivisión for the purpose of ensuring the conformity of their conduct with international law"*¹⁷³.

Para Manuel Becerra afirma que *"uno de los elementos esenciales del Estado de derecho internacional es la consistencia con las normas y estándares de derechos humanos"*. Este elemento y los principios de derecho internacional son la columna

¹⁷⁰ MARIÑO MENÉNDEZ, Fernando M. 2005. *Derecho Internacional Público. Parte General*. Editorial Trotta. Cuarta Edición. Madrid. Páginas: 19 y 20. ISBN: 84-8164-085-9

¹⁷¹ Ídem Página: 22

¹⁷² Ídem Página: 20

¹⁷³ GARNER, Bryan A. 1999. *Black's Law Dictionary*. West Group. Estados Unidos. Séptima Edición. Página: 821. ISBN: 978-9041115287

*vertebral del orden público internacional*¹⁷⁴(OPI). “Identifica un sistema de relaciones internacionales de cambio que presiona al orden internacional hacia una nueva transformación, lo que hace urgente un orden internacional en el que la institución del control sea una respuesta ante el incumplimiento de las normas del sistema internacional. La institución del control consiste en tener sistemas de vigilancia efectivos que ayuden a cumplir el derecho internacional convencional, con el OPI como parámetro de actuación para quienes ejerzan un tipo de control. Refiere que hay dos sistemas de control: el autocontrol y el heterocontrol. El primero se halla en los mecanismos de supervisión y aplicación que están concertados en los propios tratados, y el segundo en los mecanismos de supervisión y aplicación que se encuentran fuera del marco del tratado. En ambos sistemas pueden existir medios de carácter resolutivo o jurisdiccional, que pueden funcionar de forma tanto preventiva como represiva, y pueden ser resolutivos, judiciales y políticos”¹⁷⁵.

Para Torres Sandoval et al, este surge de la necesidad que las naciones den cumplimiento a los estándares señalados por el derecho internacional de los derechos humanos y que requiere de grandes esfuerzos que en su mayoría han nacido a partir de acontecimientos importantes tales como, la segunda guerra mundial, el fin de la guerra fría, la globalización, el desarrollo mundial tecnológico, entre otros, que a su paso propician transformaciones profundas y de largo alcance; en este caso, cambios radicales en las relaciones internacionales de los Estados, en la universalización de los derechos humanos y en el derecho internacional y nacional¹⁷⁶. Lo que impulsó la transformación del sistema internacional haciendo necesario un nuevo orden, “*en base a un sistema de controles de transparencia y de aplicación estricta de la*

¹⁷⁴ “Para el autor, el OPI es un orden mínimo que no puede ser transgredido (compuesto por varios elementos como los principios de derecho internacional y los derechos humanos), que surge de la constatación de la práctica de los sujetos del sistema de relaciones internacionales.” NUÑO Nuño, Mónica Elizabeth. Bibliografía. Becerra Ramírez, Manuel, 2015. “El control de la aplicación del derecho internacional. En el marco del Estado de derecho”. En: Der. Comp. vol.48 no.142 [en línea] México ene./abr. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

Disponible en:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332015000100015

¹⁷⁵ NUÑO NUÑO, Mónica Elizabeth. 2015. *Óp. Cit.*

¹⁷⁶ TORRES SANDOVAL, Joshua Norberto, CAMARILLO, Laura Alicia y YÁÑEZ, Lorena Esmeralda. 2017. *Eficacia de los derechos humanos en México vía control internacional*. Revista RyD República y Derecho, [en línea] Volumen II (2017). Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza – Argentina. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

ISSN: 2448-4873. Disponible en:

<http://revistaryd.derecho.uncu.edu.ar/index.php/revista/article/download/94/31>

legalidad”¹⁷⁷ con la intención de lograr la eficacia de los derechos humanos en el mundo.

Iniciando de esa manera una reorganización internacional y el establecimiento de nuevas estructuras, que concedan instrumentos e instituciones capaces de enfrentar fenómenos contemporáneos, conflictos internacionales como la migración, las guerras y el terrorismo, que afectan la seguridad nacional y que acechan a la humanidad, generando, a su vez, consecuencias internas en los Estados¹⁷⁸.

Según Aznar Gómez citado por Ferrer Lloret el Control Internacional se define como *“(...) aquel instituto jurídico cuya finalidad es garantizar la aplicación del derecho a través de un procedimiento, normalmente complejo, que trata de prevenir, comprobar y promover el acomodo efectivo de la conducta de los sujetos internacionales – esencialmente el Estado – a cánones diversos de valoración jurídica.*¹⁷⁹” Ese control se realiza con ayuda de la normativa internacional, ya que ésta ayuda a determinar con más o menos detalle si un Estado vulnera o no las obligaciones impuestas por estas normas¹⁸⁰ y que se manifiestan por medio de los métodos utilizados por los órganos de control, la publicidad que se dé es muy importante.

Fernando Mariño lo define como: *“...conjunto de procedimientos y técnicas destinados a verificar si el comportamiento de los Estados se adecúa o no a lo exigido por normas de conducta internacionales, que son por lo general normas jurídicamente obligatorias establecidas por tratados internacionales. En algunas ocasiones, como veremos, se verifica el cumplimiento de normas de conducta no estrictamente obligatorias en términos jurídicos, caso en el cual el correspondiente procedimiento persigue no tanto prevenir su incumplimiento cuanto promocionar su respuesta práctica.”*¹⁸¹

“La idea de “control” está íntimamente relacionada con los objetivos del derecho y surge primeramente de la necesidad de mantener la armonía, la paz, la erradicación

¹⁷⁷ TORRES SANDOVAL, Joshua Norberto, et al. 2017. *Óp. Cit.*

¹⁷⁸ *Ídem*

¹⁷⁹ FERRER LLORET, Jaume. 1998. *Óp. Cit.* Página: 34

¹⁸⁰ *Ídem*

¹⁸¹ MARIÑO MENÉNDEZ, Fernando M. 2005. *Óp. Cit.* Página. 455

*de la impunidad, por supuesto la protección de los derechos humanos de los individuos que se encuentren en tal o cual Estado.*¹⁸²

Para Mariño *“Por medio de determinados tratados internacionales, los Estados partes se comprometen a someterse a verificaciones puramente interestatales, en cuya aplicación no intervienen órganos internacionales propiamente dichos. Se prevé así la utilización de medios no institucionalizados con la finalidad de que los Estados partes se supervisen recíprocamente y comprueben si la conducta del otro se adecúa a la norma jurídica convencional...”*

*Ahora bien, el desarrollo de la cooperación internacional en todas sus formas y muy especialmente en su forma institucionalizada, es decir, por medio de organizaciones internacionales.*¹⁸³

La idea de control internacional se delimitó por la convergencia de tres elementos:

1. *“El elemento material (actividad de verificación). Comprende dos momentos: la determinación de los hechos y la subsiguiente valoración de la conformidad o disconformidad de éstos respecto de ciertas reglas jurídicas o de determinadas pautas de conducta desprovistas de obligatoriedad jurídica.*
2. *El elemento teleológico. La práctica internacional desborda la clasificación entre control de legalidad o de ley, encaminado a la efectiva aplicación de reglas jurídicas y control de oportunidad o de mérito, que persigue una acomodación a consideraciones de este carácter.*
3. *El elemento formal. Se concreta en la regulación de las actuaciones por disposiciones de carácter internacional, incluido el eventual auxilio de principios generales de Derecho.”*¹⁸⁴

¹⁸² SIN DATOS *El Sistema de Control Internacional del Cumplimiento de las Obligaciones Internacionales* [en línea]. Página: 39. Disponible en: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3606/6.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

¹⁸³ MARIÑO MENÉNDEZ, Fernando M. 2005. *Óp. Cit.*

¹⁸⁴ *“El ejercicio del control por los Estados constituye la excepción más que la regla, pero adquiere especial relevancia en algunos sectores de reglamentación, como por ejemplo, en el régimen jurídico de los espacios no sometidos a la soberanía territorial, en el control del cumplimiento del Derecho Internacional humanitario o en la verificación de los acuerdos bilaterales de desarme (espacios no sometidos a soberanía territorial: por ejemplo, inspección de buques en alta mar, supervisión recíproca en la Antártida o en el espacio ultraterrestre)”. S.A. S.F. Control Internacional. [en línea] Disponible*

Mariño menciona *“técnicas de control, que en sentido estricto son de naturaleza administrativa y deben diferenciarse de las técnicas jurisdiccionales. La función jurisdiccional se ejerce en sentido propio para la solución, sobre la base del Derecho Internacional, de las controversias que las partes someten a jueces independientes de todo poder estatal, cuyas sentencias son definitivas y obligatorias para las partes en proceso”*¹⁸⁵.

Mientras que *“los procedimientos de control propiamente dichos son realizados, a instancia de parte, por órganos internacionales, con la finalidad de verificar, si una conducta estatal se adecúa a una norma internacional, este procedimiento nunca finaliza con una decisión jurídicamente vinculante, que produzca un efecto de “cosa juzgada”.*”¹⁸⁶

Existen distintas modalidades de control siendo estas:

A. *“Modalidades del control internacional según la instancia de control*

Control ejercido por los órganos del estado: es una excepción que adquiere relevancia en algunos sectores de reglamentación (régimen jurídico de los espacios no sometidos a la soberanía territorial), en el control del cumplimiento de Derecho internacional humanitario o en la verificación de los acuerdos bilaterales de desarme.

- *Control ejercido por las organizaciones internacionales: normalmente, se lleva a cabo por un órgano, que puede estar compuesto por delegados de los gobiernos o donde la presencia de los Estados miembros se articula de otra forma, así como de los órganos de control integrados por personas que actúan a título individual.*
- *Control ejercido por los Tribunales internacionales: puede ser un control administrativo o jurisdiccional, dependiendo del órgano competente para el control.*

en: <https://juspedia.es/libro/internacional/3556-el-control-internacional> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

¹⁸⁵ MARIÑO MENÉNDEZ, Fernando M. 2005. *Óp. Cit.* Página: 457

¹⁸⁶ Ídem

- *En la ONU, existe la discusión sobre el posible control de los actos ultra vires¹⁸⁷ de los órganos de las Naciones Unidas, sobre todo del Consejo de Seguridad.*
- *Otros actores: bien como observador o del estatuto consultivo que disfrutan en organizaciones internacionales (movimientos de liberación nacional o ONGs), bien como un presupuesto de las operaciones que tienen encomendadas en tratados internacionales.*

B. Por la iniciativa de los procesos de control (se pueden complementar)

- *el control de oficio y*
- *a instancia de parte interesada, el cual tiene muchas variantes.*
- *La observación internacional: la observación es más una labor de prevención del incumplimiento que una labor de reacción. Hay varias modalidades:*
 - *Medidas de control de la aplicación de las normas de Derecho internacional o supervisión.*
 - *Supone una valoración (informe anual sobre legislación). Sobre todo, los estados autoritarios son muy temerosos de que se vea qué está ocurriendo, se alarman y toman medidas. Si no hay publicidad y si no hay observación de aplicación de normas internacionales, estos estados no se verían obligados a garantizar derechos fundamentales, por ejemplo, el sólo hecho de pasar información, hace que los Estados sean más proclives a cumplir las normas y a evitar el incumplimiento. La activación de quejas hace que el Estado esté alerta.*

¹⁸⁷ Por encima de las fuerzas. Expresión que significa que una persona (heredero, legatario, asociado) está obligado a pagar deudas y un pasivo más allá de lo que recoge o posee en el activo correspondiente (sucesión, régimen matrimonial, sociedad). Intra vires. [en línea] Disponible en: <http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com/d/ultra-vires/ultra-vires.htm> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

- *Medidas de seguimiento de aplicación de las normas de Derecho internacional o follow up.*
- *Inspecciones en lugar determinado*
- *Las pruebas aportadas por las partes en un procedimiento de control*¹⁸⁸.

Según Mariño, no pertenecen al ámbito de control internacional *“las técnicas y procedimientos para determinar y hacer en su caso efectiva la responsabilidad internacional de un Estado al que se le atribuye un hecho ilícito internacional”*¹⁸⁹.

En cuanto al sistema de control ejercido en los esfuerzos creados para la lucha contra la impunidad *“por parte de los Estados, este se afianza tanto en los tribunales nacionales como los internacionales”*¹⁹⁰, *“se retribuyen mutuamente en la conformación de uno y otro orden. Debido a que las actuaciones de los Estados, que se pueden fijar en sus cortes internas, perfilan y contribuyen a la práctica internacional sin que las posturas de estos tribunales, aunque vayan en sentido opuesto al Derecho Internacional, afecten al sistema internacional”*¹⁹¹.

Para Mariño: *“Un procedimiento de control internacional en sentido estricto no se desarrolla para establecer la responsabilidad por violación del Derecho Internacional y ni siquiera para “condenar” a un sujeto cuya conducta se estima contraria a una norma internacional... lo que se trata es de prevenir un incumplimiento, promocionar el cumplimiento y, en todo caso, obtener... que el controlado corrija su conducta y la adecúe al patrón normativo que se estima aplicable... En el seno de los procedimientos contenciosos, se utilizan técnicas de persuasión semejantes a las del*

¹⁸⁸ S.A. 2015. *Derecho Internacional Público*. [en línea] Disponible en: <https://www.derecho-internacional-publico.com/2015/02/control-internacional-supervision.html> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

MARIÑO MENÉNDEZ, Fernando M. 2005. *Óp. Cit.* Página: 463

¹⁸⁹ Ídem Página: 457

¹⁹⁰ *“En cuanto al sistema de control del sistema interamericano, se mencionan dos técnicas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado: la labor de identificación de normas de ius cogens y el control de convencionalidad. Sobre el segundo punto, la Corte ha ordenado que todos los Estados parte realicen control de convencionalidad de las normas de su derecho interno a partir la jurisprudencia interamericana”*. NUÑO Nuño, Mónica Elizabeth. *Óp. Cit.*

¹⁹¹ Ídem

“arreglo amistoso” o, más técnicamente, de conciliación como medio de solución pacífica de controversias.¹⁹²”

Lo importante de este concepto, es poder analizar en el desarrollo de este trabajo, si este se aplica para el cumplimiento y desarrollo de los objetivos de las instituciones creadas para combatir la impunidad desde la comunidad internacional, esto se debe a que las instituciones abordadas en el presente trabajo, no todas se enfocan en un hecho ilícito internacional.

3. SOBERANÍA:

El concepto soberanía se define según la Real Academia de la Lengua Española como: *“Poder político supremo que corresponde a un Estado independiente.”¹⁹³*

Manuel Ossorio la define como: *“Autoridad suprema del poder público.”¹⁹⁴*

Ferrajoli sobre la misma establece que: *“... es indudable que la noción de “soberanía” como suprema potestas superiorem non recognoscens se remonta al momento de la aparición de los grandes Estados nacionales europeos y al correspondiente debilitamiento, en el umbral de la Edad Moderna, de la idea de ordenamiento jurídico universal que la cultura medieval había heredado de la romana. Hablar de soberanía y de sus avatares históricos y teóricos significa, por tanto, hablar del desarrollo de esa particular formación político – jurídica que es el Estado nacional moderno, surgida en Europa hace poco más de cuatro siglos, exportada en este último a todo el planeta y hoy próxima a su ocaso.”¹⁹⁵*

En la descripción de Ferrajoli se plantean tres aporías¹⁹⁶:

1. La primera aporía que afecta al significado filosófico de la idea de “soberanía”.
“Como categoría filosófico–jurídica, la soberanía es una construcción de matiz iusnaturalista que ha servido como base para la concepción positivista del Estado y el paradigma del derecho internacional moderno, siendo un residuo

¹⁹² MARIÑO MENÉNDEZ, Fernando M. 2005. *Óp. Cit.* Página: 463

¹⁹³ RAE. *Óp. Cit.*

¹⁹⁴ OSSORIO, Manuel. 2006 *“Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”*. Editorial Heliasta. 33ª. Edición. Buenos Aires, Página: 895

¹⁹⁵ FERRAJOLI, Luigi. 2002. *Derechos y garantías. La ley del más débil*. Editorial Trotta. Tercera Edición. Madrid, Página: 125. ISBN: 84-8164-285-1

¹⁹⁶ Ídem Páginas: 125 y 126

*premoderno que se halla en el origen de la modernidad jurídica, a pesar de estar virtualmente en conflicto con ella*¹⁹⁷.

2. La “segunda aporía hace referencia a la historia, teórica y sobre todo práctica, de la idea de soberanía como potestas absoluta superiorem non recognoscens”¹⁹⁸.
3. La “tercera aporía afecta la consistencia y legitimidad conceptual de la idea de soberanía desde el punto de vista de la teoría del derecho, donde la soberanía”¹⁹⁹.

Para Cassese²⁰⁰ el concepto soberanía ha evolucionado, al afirma que el Derecho internacional tradicional se basaba en un conjunto de normas que protegían la soberanía de los Estados y establecían su igualdad formal en la ley. En 1945, al redactar la Carta de la ONU, los padres fundadores proclamaron la “*igualdad soberana de todos sus miembros sin oposición*”.

Afirma que, de los diversos principios, este es sin duda el único sobre el que existe un acuerdo sin reservas y que cuenta con el apoyo de todos los grupos de Estados, independientemente de las ideologías, las tendencias políticas y las circunstancias. Es seguro concluir que la igualdad soberana constituye el eje de todo el cuerpo de normas legales internacionales, la premisa fundamental sobre la que se basan todas las relaciones internacionales.

En esa misma línea Ian Brownlie menciona que “*la soberanía y la igualdad de los Estados representan la doctrina constitucional básica del derecho de las naciones, que consiste en una comunidad que gobierna principalmente en Estados que tienen una personalidad jurídica uniforme*”²⁰¹. El Derecho Internacional, entonces la dinámica de la soberanía del Estado se puede expresar en términos de la ley y, como los Estados son iguales y tienen personalidad jurídica, la soberanía es, en un aspecto importante, una relación con otros Estados (y organizaciones de Estados) definidos

¹⁹⁷ FERRAJOLI, Luigi. 2002. *Óp. Cit.* Página: 125

¹⁹⁸ Ídem. Página: 126

¹⁹⁹ Ídem.

²⁰⁰ CASSESE, Antonio. 2005. *International Law*. Oxford University Press. Segunda Edición. Nueva York. Página: 48. ISBN: 978-0199259397

²⁰¹ BROWNLIE, Ian. 2003. *Principles of Public International Law*. Oxford University Press. Sexta Edición. Nueva York. Página: 288. ISBN: 978-0199260713

por la ley. Es paradójico con lo expresado anteriormente sobre la realidad que la comunidad internacional se caracteriza por el dominio de Estados más sólidos y ricos que otros,

Determina como los principales corolarios de la soberanía y la igualdad:

1. *“La jurisdicción, prima facie exclusiva, sobre un territorio y la población permanente que vive allí;*
2. *El deber de no intervención en el área de jurisdicción exclusiva de otros Estados;”*²⁰²y
3. La dependencia de las obligaciones derivadas del derecho consuetudinario y los tratados sobre el consentimiento del Estado. Este tiene ciertas aplicaciones especiales: por lo tanto, la jurisdicción de los tribunales internacionales depende del consentimiento de las partes; la pertenencia a organizaciones internacionales no es obligatoria; y los poderes de los órganos de dichas organizaciones para determinar su propia competencia, tomar decisiones por mayoría de votos y hacer cumplir las decisiones, dependen del consentimiento de los Estados miembros.

Según Oriol Casanovas y Ángel Rodrigo, la soberanía es el elemento que caracteriza al Estado en el sentido del Derecho Internacional y que desde la Teoría General del Estado ha sido determinada como la competencia para determinar las propias competencias de los órganos del Estado. Pero que desde el enfoque del Derecho Internacional, se aprecia como un nexo de supeditación directa del Estado al orden internacional²⁰³.

En la actualidad, la idea de soberanía casi siempre hace referencia al Estado, dentro de un sistema internacional basado en Estados, como el Sistema de Westfalia o el Sistema de Naciones Unidas, por la naturaleza del presente trabajo, el concepto de soberanía se entenderá desde el sistema de Estados de la Organización de Naciones Unidas.

²⁰² BROWNLIE, Ian. 2003. *Óp. Cit.*

²⁰³ CASANOVAS, Oriol y RODRIGO Ángel J. 2013. *Óp. Cit.* Página: 151

Como se puede observar, el concepto soberanía se ha entendido con dos características:

- a. La definición de soberanía en términos de territorio, en donde éste se defiende y el concepto de persona como derecho fundamental. (auto – defensa)²⁰⁴
- b. La concepción de soberanía, no en términos de que el territorio del Estado es inviolable, sino en términos de responsabilidad moral y de leyes para un buen gobierno para toda la población.

En esta línea el derecho de usar la fuerza está ligado explícitamente en la obligación de proteger y preservar la justicia y presionar a los autores para que acepten su responsabilidad.

La regla de la soberanía establece como orden la justicia que es la norma.

La soberanía en diferente vía, como la responsabilidad para el bien común, quizás como obligación moral²⁰⁵.

Este concepto para el presente trabajo es muy importante, porque la existencia de las instituciones creadas por la comunidad internacional para combatir la impunidad depende del consentimiento del Estado en cuestión para que éstas puedan funcionar y ejercer jurisdicción.

4. DEMOCRACIA:

¿Qué es la democracia? ¿Por qué hablar de democracia? Un patrón que se ha detectado en el transcurso del presente trabajo es que definitivamente la ausencia o presencia de democracia en un Estado es un factor determinante para la lucha contra la impunidad y también lo ha sido para la comisión de los actos que han provocado la misma.

²⁰⁴ TURNER JOHNSON, James. 2014. *Sovereignty. Moral and Historical Perspectives*. Georgetown University Press. Washington, D.C. Primera Edición. Página: 1, ISBN: 978-1626160569

²⁰⁵ Ídem. Página: 4.

Según el diccionario de la Lengua Española Democracia significa:
“1. f. Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos.

*2. f. País cuya forma de gobierno es una **democracia**.*

3. f. Doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes.

4. f. Forma de sociedad que practica la igualdad de derechos individuales, con independencia de etnias, sexos, credos religiosos, etc. Vivir en democracia. U. t. en sent. fig.

5. f. Participación de todos los miembros de un grupo o de una asociación en la toma de decisiones. En esta comunidad de vecinos hay democracia.”

Manuel Ossorio la define como: *“Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno y también mejoramiento de la condición del pueblo. Proviene de las palabras griegas demos (pueblo) y Kratos (fuerza, autoridad) ... en aceptación moderna y generalizada, democracia es el sistema en que el pueblo en su conjunto ostenta la soberanía y en uso de ella elige su forma de gobierno y, consecuentemente, sus gobernantes...”*²⁰⁶

Derivado de las definiciones, se hace necesario enfatizar en el “pueblo”, porque la democracia existe gracias a la participación del mismo. Para Von Gerber, citado por Ferrajoli, *“El pueblo es la base natural fundamental de la personalidad del Estado. Ello significa que el Estado existe en virtud de este pueblo, que el Estado representa al pueblo mismo en su configuración política. El pueblo, sin embargo, no es la suma de los individuos vivos en un momento determinado, sino que es un todo espiritualmente unido por una historia común, que encuentra en la generación actual únicamente su manifestación presente. El pueblo así entendido es llevado, en el Estado y por medio del Estado, a la unidad jurídica.”*²⁰⁷

²⁰⁶ OSSORIO, Manuel. *Óp. Cit.* Página: 287

²⁰⁷ FERRAJOLI, Luigi. 2009. *Garantismo. Una discusión sobre Derecho y Democracia*. Editorial Trotta. Segunda Edición. Madrid. Páginas: 109 y 110.

Para Condoleezza Rice²⁰⁸, la democracia requiere balance entre varias esferas, entre el ejecutivo, el legislativo y la autoridad judicial, entre los gobiernos centralizados y regionales, entre los civiles y los líderes militares, entre los derechos individuales y grupales entre el Estado y la sociedad.

Ferrajoli critica las definiciones de democracia en el sentido que: *“La dimensión formal de la democracia en el paradigma legislativo consiste esencialmente en un método de formación de las decisiones políticas: más precisamente, en el conjunto de las reglas del juego que atribuyen al pueblo o a la mayoría de sus miembros el poder de asumir tales decisiones, directamente o a través de representantes. Esta es la concepción de la democracia tout court que vertebró la historia toda del pensamiento político, de la clásica tripartición introducida por Platón en el Político y retomada por Aristóteles a la idea roussoniana de la voluntad general, hasta las actuales teorías de la democracia representativa, de Kelsen a Bobbio, de Schumpeter a Popper y Waldron.”*²⁰⁹

Definición que censura por *“su falta de alcance empírico por la inidoneidad para dar cuenta de las actuales democracias constitucionales, en las que el poder del pueblo y de sus representantes no es en modo alguno ilimitado sino que está sometido a los límites y a los vínculos impuestos por los derechos fundamentales constitucionalmente establecidos; la necesidad de tales límites y vínculos, comenzando por los derechos de libertad, como condiciones de la misma efectividad de la democracia política, es decir, el hecho, en fin, de que tales límites son una garantía de supervivencia de la misma democracia política, que, faltando estos, podría quedar a expensas de la omnipotencia de las mayorías, según ha demostrado el nazismo y el fascismo del siglo pasado que conquistaron el poder con medios legales y formalmente democráticos y luego suprimieron la democracia”*²¹⁰.

²⁰⁸ RICE, Condoleezza. 2017. *Democracy. Stories from the Long Road to Freedom*. Editorial Twelve. Primera Edición. Nueva York. Página: 8. ISBN: 978-1455540181

²⁰⁹ FERRAJOLI, Luigi. 2015. *La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político*. Editorial Trotta. Primera Edición. Primera Reimpresión. Madrid. Páginas: 35 y 36

²¹⁰ Ídem.

Ferrajoli²¹¹ profundiza en el concepto de democracia constitucional, que para él es la única «realmente existente», que establece como límites sustantivos no sólo a los derechos políticos, también a los derechos liberales, a los sociales y a los civiles.

Según Ferrajoli la democracia constitucional, *“se refiere a su nexo con los derechos fundamentales constitucionalmente establecidos. Debido a que todos los derechos fundamentales dan forma y contenido a la “soberanía popular” y a la “voluntad popular”, la cual no puede manifestarse de manera auténtica si no puede expresarse libremente, y no puede expresarse libremente si no dispone de garantías no sólo para los derechos políticos sino también para los derechos de libertad y para los derechos sociales”*²¹².

En donde *“la soberanía popular pertenece al pueblo”* quiere decir, por tanto, que pertenece al conjunto de sus ciudadanos, es decir, a todas y cada una de las personas que componen el pueblo. Esto significa, en concreto, que la soberanía popular no es otra cosa que la suma de poderes y contrapoderes de todos —los derechos políticos, civiles, sociales y de libertad— que la constitución estipula como derechos fundamentales. Estos derechos, por consiguiente, no son solamente límites a la democracia política. Son, además, la sustancia democrática, puesto que se refieren al pueblo en un sentido más concreto y vinculante que la propia representación política, es decir, a todos y cada uno de sus miembros en carne y hueso. Por eso, estos derechos son, para cada persona, fragmentos de la soberanía de todo el pueblo. Por eso, cualquier violación de estos derechos no es sólo una lesión a las personas titulares de los mismos, sino una violación de la propia soberanía popular”.²¹³

²¹¹ RUIZ MIGUEL, Alfonso. 2013. *Ferrajoli y la democracia*. Universidad Autónoma de Madrid. Anuario de Derecho. [en línea] Madrid. Páginas: 195 y 205. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]
Disponible en:

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-F-2013-10019300214 ANUARIO DE FILOSOFÍA DEL DERECHO Ferrajoli y la democracia

²¹² FERRAJOLI, Luigi. 2012. *Democracia Constitucional y Derechos Fundamentales. La Rigidez de la Constitución y sus Garantías*. [en línea]

Disponible en:

<http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2012/08/doctrina34481.pdf>

[Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

²¹³Idem

Asegura que la democracia constitucional parte *“de su relación con las cuatro clases de derechos, lo cuales a su vez ha dividido en la categoría de derechos fundamentales”*²¹⁴, siendo estas:

- a. *“La democracia política, asegurada por la garantía de los derechos políticos;*
- b. *La democracia civil, asegurada por la garantía de los derechos civiles;*
- c. *La democracia liberal (o liberal-democracia) asegurada por la garantía de los derechos de libertad;*
- d. *La democracia social (o socialdemocracia), asegurada por la garantía de los derechos sociales”*²¹⁵.

Afirma, que partiendo de estas categorías se puede *“identificar el grado de legitimidad del ordenamiento de una democracia constitucional con el grado de eficacia de las garantías de los derechos constitucionales que se reconocen en ella. Así como también se puede identificar su ilegitimidad por sus vulneraciones, o lagunas”*²¹⁶.

Según Ferrajoli el concepto de democracia *“en su definición formal no es suficiente, porque si bien da cuenta de un conjunto de reglas del juego, “no dice nada del juego. En nombre de la democracia se pueden abolir derechos de la propia democracia, como sucedió en Europa con la instauración de los regímenes fascista y nazista.*

*Además, la omnipotencia de la mayoría, tiene el peligro de una deriva absolutista y populista, donde el gobierno de los hombres degenera en el gobierno de un hombre. De ahí la importancia del constitucionalismo, porque la constitución limita el poder y garantiza los derechos políticos y sociales. También sostiene que el constitucionalismo no es sólo una conquista o un legado jurídico del pasado. Es también, y, sobre todo, un programa para el futuro, porque los derechos fundamentales deber ser garantizados y satisfechos, por lo que junto con establecerlos necesitan leyes para que actúen, funciones e instituciones”.*²¹⁷

²¹⁴ FERRAJOLI, Luigi. 2012. *Óp. Cit.*

²¹⁵ Ídem

²¹⁶ Ídem

²¹⁷ FERRAJOLI, Luigi. 2011. *Visita internacional. Luigi Ferrajoli: democracia más allá de su definición formal.* Santiago de Chile. [en línea]

Disponible en : <http://www.derecho.uchile.cl/noticias/72847/luigi-ferrajoli-democracia-mas-alla-de-su-definicion-formal> . [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

Para alcanzar los objetivos del presente trabajo, se considera que el concepto de democracia constitucional es el más apegado para hablar de eficacia, debido a que la creación de instituciones que combaten la impunidad parte de la ausencia de respeto por los derechos fundamentales contenidos en las categorías establecidas por Ferrajoli.

5. ESTADO DE DERECHO:

Para los efectos de este trabajo se consideró que la mejor explicación, definición y enfoque sobre el concepto **Estado de derecho** se encontraba en los estudios realizados por Luigi Ferrajoli, quien explica su evolución de la siguiente manera: *“Estado de derecho” es uno de esos conceptos amplios y genéricos que tienen múltiples y varias ascendencias en la historia del pensamiento político: la idea, que se remonta a Platón y Aristóteles, del “gobierno de las leyes” contrapuesto al “gobierno de los hombres”, la doctrina medieval del fundamento jurídico de la soberanía, el pensamiento político liberal sobre los límites de la actividad del estado y sobre el estado mínimo, la doctrina iusnaturalista del respeto de las libertades fundamentales por parte del derecho positivo, el constitucionalismo inglés y norteamericano, la tesis de la separación de poderes, la teoría jurídica del estado elaborada por la ciencia alemana del derecho público del siglo pasado y después por el normativismo kelseniano. Según una distinción sugerida por Norberto Bobbio, puede querer decir dos cosas: gobierno sub lege o sometidos a las leyes, o gobierno per leges o mediante leyes generales y abstractas. Al menos en el campo del derecho penal, “estado de derecho” designa ambas cosas: el poder judicial de descubrir y castigar los delitos es en efecto sub lege por cuanto el poder legislativo de definirlos se ejercita per leges; y el poder legislativo se ejercita per leges en cuanto a su vez está sub lege, es decir, está prescrita por ley constitucional la reserva de ley general y abstracta en materia penal.”*²¹⁸

Por lo que lo define como: *“...la subordinación, mediada por reglas, de todos estos actos y situaciones a actos y situaciones supraordenados a ellos, que no admite ni*

²¹⁸ FERRAJOLI, Luigi. 2006. *Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal*. Editorial Trotta. Octava Edición. Madrid. Páginas: 855 y 856.

actos ni situaciones desregulados, absolutos o ilimitados.”²¹⁹ “*Estado de derecho*” es una fórmula genérica con la que pueden entenderse dos cosas distintas. En sentido débil o lato la fórmula designa cualquier ordenamiento regido por el principio – que ... he llamado de mera legalidad – en virtud del cual todo acto está disciplinado por normas jurídicas positivas; en sentido estricto o fuerte designa solamente los ordenamientos regidos por el principio – que he llamado en cambio de estricta legalidad – en virtud del cual las propias normas, en tanto que resultados de actos, están a su vez sometidas a normas superiores que disciplinan su contenido²²⁰... tanto en sentido débil como en sentido fuerte, también puede realizarse de otro modo, mediante la sujeción de hecho de los poderes públicos a principios normativos como las libertades fundamentales y la división de poderes... en el segundo sentido, el estricto o fuerte, refiriéndome prevalentemente a la experiencia del estado constitucional de derecho que se desarrolló en Europa en la segunda posguerra con la introducción de las constituciones rígidas.²²¹”

Al abordar el concepto manifiesta: “La expresión “estado de derecho” es por lo demás emblemática: es únicamente el “Estado” - esto es los poderes públicos que derivan del Estado – el sujeto respecto del que se justifican reglas, prohibiciones y obligaciones dirigidas a impedir sus abusos en perjuicio de los derechos de libertad, incluidos en éstos los derechos civiles concebidos, precisamente, como libertades fundamentales en vez de como poderes”. ”²²²

Según José Fabián Ruiz Valerio lo entiende como “Estado constitucional de derecho, aquel que no se limita a programar sólo las formas de producción del derecho a través de normas procedimentales sobre la elaboración de las leyes, sino también sus contenidos sustanciales, vinculándolos normativamente a principios de justicia —la igualdad, la paz, la tutela de los derechos fundamentales— positivamente inscritos en las Constituciones”²²³.

²¹⁹ FERRAJOLI, Luigi. 2016. *Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia. 1. Teoría del Derecho*. Editorial Trotta, Segunda Edición, Madrid, Página: 313

²²⁰ Ídem. Página: 461

²²¹ Ídem. Página: 462

²²² FERRAJOLI, Luigi. *Principia iuris. 2011. Teoría del derecho y de la democracia. 2. Teoría de la democracia*. Editorial Trotta. S.E. Madrid, Página: 219

²²³ RUIZ VALERIO, José Fabián. 2011. *¿Hacia un nuevo modelo de estado de derecho? El estado de derecho internacional en la visión de Luigi Ferrajoli*. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, [en línea] vol. XI, Página: 121. Disponible en:

Para Ferrajoli, *“El estado constitucional de derecho no es otra cosa que este “derecho sobre el derecho”: el conjunto de límites y vínculos jurídicos – formales y sustanciales – que deberían envolver cualquier ejercicio de poder, no sólo público sino también privado, no sólo ejecutivo sino también legislativo, y no sólo en el seno de los ordenamientos estatales sino también en las relaciones internacionales.”*²²⁴

Según Ferrajoli los principios jurídicos del estado de derecho moderno son:

- a. *“Principio de retributividad o de la sucesividad de la pena respecto del delito;*
- b. *Principio de legalidad, en sentido lato o en sentido estricto;*
- c. *Principio de necesidad o de economía del derecho penal;*
- d. *Principio de lesividad o de la ofensividad del acto;*
- e. *Principio de materialidad o de la exterioridad de la acción;*
- f. *Principio de culpabilidad o de la responsabilidad personal;*
- g. *Principio de jurisdiccionalidad, también en sentido lato o en sentido estricto;*
- h. *Principio acusatorio o de la separación entre juez y acusación;*
- i. *Principio de la carga de la prueba o de verificación,*
- j. *Principio del contradictorio, o de la defensa, o de refutación”*²²⁵.

Para Kofi Annan *“El concepto de ‘Estado de derecho’ ocupa un lugar central en el cometido de la Organización. Se refiere a un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Así mismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, equidad en la aplicación de la*

<http://www.scielo.org.mx/pdf/amdi/v11/v11a5.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

²²⁴ FERRAJOLI, Luigi. 2016. *Op. Cit.* Página: 463

²²⁵ FERRAJOLI, Luigi. 2006. *Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal.* Editorial Trotta. Octava Edición. Madrid. Página: 93 SIN ISBN.

ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal”²²⁶.

“Esta cultura de la impunidad nos recuerda constantemente las graves carencias que subsisten en relación con el estado de derecho. [...] A menudo se ha soslayado la importancia de que las sociedades apoyen el estado de derecho y las demandas de justicia y seguridad de la sociedad civil. Las comunidades son las que más se benefician si existe protección jurídica y las que más pierden si ésta falta. Es menos probable que se desarrollen instituciones estatales sólidas —en general, un objetivo a largo plazo—, si no se entienden los procesos jurídicos, el acceso a la justicia es limitado y la impunidad por la comisión de delitos y otras violaciones de la ley socavan la confianza en las instituciones del Estado,”²²⁷.

Pese a que la idea de impunidad envíe el mensaje de una relación sencilla entre un delito y la posible imposición de una sanción, la realidad es muy diferente, la impunidad es un fenómeno multidimensional y pluricausal que involucra otros problemas como²²⁸ :

1. *“violaciones graves a los derechos humanos*
2. *corrupción,*
3. *violencia,*
4. *inseguridad,*
5. *acceso desigual a la justicia”²²⁹*

Como afirma Le Clercq, *“A partir del reconocimiento de la importancia de la impunidad y su condición multidimensional y pluricausal, es posible pensar nuevos acercamientos al deterioro de las instituciones políticas y la incapacidad de los actores políticos para garantizar condiciones de seguridad, justicia y respeto a los derechos humanos en un contexto de inseguridad en tiempos de paz:*

²²⁶ COMISIÓN Internacional de Juristas. Óp. Cit. Página: 11.

²²⁷ NACIONES Unidas. 2008. *Fortalecimiento y coordinación de las actividades de las Naciones Unidas orientadas a la promoción del estado de derecho - Informe del Secretario General*, A/63/226 de 6 de agosto de 2008, párr. 31 y 38.

²²⁸ LE CLERCQ, Juan Antonio, CHAÍNEZ Azucena y RODRÍGUEZ Gerardo. 2016. *Midiendo la impunidad en América Latina: retos conceptuales y metodológicos*. En: Íconos Revista de Ciencias Sociales. Núm. 55. FLACSO Ecuador. Mayo. SIN ISBN Página: 74

²²⁹ Ídem.

- 1) *la impunidad retroalimenta y multiplica las consecuencias de inseguridad, violencia, corrupción y violación a los derechos humanos;*
- 2) *la existencia de desigualdades socioeconómicas profundas genera un caldo de cultivo para limitar el acceso a la justicia y para que actos criminales queden impunes, agudizando con ello la vulnerabilidad social de quienes se encuentran en condiciones de marginación;*
- 3) *la incapacidad sistemática de las instituciones para sancionar a quienes violan la ley facilita la operación de las organizaciones criminales y, lo que es más grave, abre la puerta a colusión entre estos y las autoridades de diferentes niveles de gobierno”²³⁰.*

Este concepto es necesario tenerlo claro en el presente trabajo porque muchas veces los esfuerzos para combatir la impunidad desde la comunidad internacional se han derivado por la ausencia de un Estado de Derecho en el territorio afectado.

6. OBLIGACIONES INTERNACIONALES

El diccionario de Lengua Española define obligación como:

“Del lat. obligatio, -ōnis.

1. f. *Aquello que alguien está obligado a hacer.*
2. f. *Imposición o exigencia moral que debe regir la voluntad libre.*
3. f. *Vínculo que sujeta a hacer o abstenerse de hacer algo, establecido por precepto de ley, por voluntario otorgamiento o por derivación recta de ciertos actos.*
4. f. *Correspondencia que alguien debe tener y manifestar al beneficio que ha recibido de otra persona...*
8. f. *Carga, miramiento, reserva o incumbencia inherentes al estado, a la dignidad o a la condición de una persona...²³¹”*

²³⁰ LE CLERCQ, Juan Antonio, CHAÍNEZ Azucena y RODRÍGUEZ Gerardo. 2016. *Óp. Cit.*

²³¹ RAE. *Óp. Cit.*

Manuel Ossorio ²³² define obligación como: *“Deber jurídico normativamente establecido de realizar u omitir determinado acto, y a cuyo incumplimiento por parte del obligado es imputada, como consecuencia, una sanción coactiva; es decir, un castigo traducible en un acto de fuerza física organizada...”*

Jurídicamente, y en términos generales puede decirse que las obligaciones admiten la siguiente división: a) de hacer, b) de no hacer, c) de dar cosas ciertas, d) de dar cosas inciertas, e) de dar sumas de dinero. La simple enunciación de esas obligaciones resulta suficiente para comprender su contenido...”

Casanovas y Rodrigo las definen como: *“La creación de normas jurídicas internacionales que regulan, además de intereses individuales de los Estados, intereses colectivos de un grupo de Estados o incluso de intereses generales de la Comunidad internacional en su conjunto ha dado origen a las nuevas modalidades de obligaciones internacionales.”*²³³

Estos autores afirman que no existe todavía una teoría general sobre las obligaciones internacionales y que la doctrina iusnaturalista apenas ha intentado algunas aproximaciones²³⁴. Exponen entre los criterios de clasificación²³⁵ los siguientes:

- a. Tipo de conducta que impone al destinatario:
 - i. De comportamiento
 - ii. De resultado
- b. De estructura bilateral: Están basadas en la reciprocidad mutua, originadas por tratados bilaterales, tratados multilaterales, normas consuetudinarias y sentencias de tribunales internacionales.
- c. Obligaciones interdependientes: *“Son debidas a todos los Estados parte en un tratado multilateral existiendo una especie de reciprocidad global que hace que su cumplimiento por un Estado sólo tenga sentido si son cumplidas también por todos, el cumplimiento de estas obligaciones por un Estado parte es*

²³² OSSORIO, Manuel. 2006. *Óp. Cit.* Página: 629

²³³ CASANOVAS, Oriol y RODRIGO Ángel J. 2013. *Óp. Cit.* Páginas: 44 y 45

²³⁴ Ídem. Página: 45

²³⁵ Ídem. Página: 46

*condición necesaria para su cumplimiento por todos los demás. Operan sobre una base de todo o nada*²³⁶.

d. Obligaciones de estructura integral ²³⁷ : Conocidas como obligaciones colectivas, son debidas a todos los Estados destinatarios de estas, *“operan de manera integral y no se pueden descomponer en las relaciones bilaterales, su cumplimiento no depende del cumplimiento de los demás, pero su incumplimiento afecta a todos los destinatarios”*²³⁸ y se identifican como:

i. Obligaciones erga omnes partes: Se trata de obligaciones *“derivadas de un tratado multilateral a las que un Estado está sometido en todas las circunstancias hacia los demás Estados parte del tratado, en razón de valores que les son comunes y de su interés en que estas obligaciones sean respetadas, de tal manera que su violación autoriza a los demás Estados a reaccionar”*²³⁹.

En resumen, *“tienen su origen en un tratado multilateral y han sido establecidas para la protección de un interés colectivo del grupo de Estados parte del tratado. Son debidas a todos los Estados parte del tratado”*.

ii. Obligaciones erga omnes: Son aquellas *“derivadas del Derecho Internacional general a la cual un Estado está obligado en todas las circunstancias hacia la comunidad internacional, en razón de sus valores y de su interés en que esta obligación sea respetada, de tal manera que su violación autoriza a todos los Estados a actuar”*²⁴⁰

Tienen *“su origen en normas de Derecho Internacional general, han sido creadas para la protección de valores e intereses generales de toda la Comunidad internacional y son debidas por todos y cada uno de los*

²³⁶ CASANOVAS, Oriol y RODRIGO Ángel J. 2013. *Óp. Cit.* Página: 46

²³⁷ Ídem. Páginas: 47 y 48

²³⁸ Ídem.

²³⁹ Ídem.

²⁴⁰ Ídem.

*Estados a toda la comunidad internacional en su conjunto*²⁴¹. Su cumplimiento no está condicionado al cumplimiento por los demás Estados.

Es decir, los Estados se comprometen ante la Comunidad Internacional, al aceptar y ratificar los tratados internacionales, asumiendo las obligaciones y los deberes, derivados del derecho internacional, respetando los mismos. Desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se empezó a hablar de²⁴²:

- a. Obligaciones de respetar: que se traduce en que los Estados deben abstenerse de interferir en el goce de los derechos humanos, o en su limitación.
- b. Obligaciones de proteger: que significa que los Estados deben impedir los abusos de los derechos humanos.
- c. Obligaciones de realizar: que indica que los Estados están obligados a implementar medidas positivas para hacer posible el disfrute de los derechos humanos.

Desde la misma materia Van Hoof ha propuesto que los derechos humanos en lugar de separarlos por generaciones se deben clasificar por niveles de obligaciones, estableciendo los siguientes niveles:

- a. *“Obligaciones de respetar = Deber del Estado de no injerir, obstaculizar o impedir el acceso al goce de los bienes que constituyen el objeto del derecho.*
- b. *Obligaciones de proteger = Impedir que tercero interfieran. Obstaculicen o impidan el acceso a los bienes.*
- c. *Obligaciones de garantizar = Suponen asegurar que el titular del derecho acceda al bien cuando no puede hacerlo por sí mismo.*

²⁴¹ CASANOVAS, Oriol y RODRIGO Ángel J. 2013. *Óp. Cit.* Páginas: 47 y 48

²⁴² Ídem.

- d. *Obligaciones de promover = El deber de desarrollar condiciones para que los titulares del derecho accedan al bien*²⁴³.

Obligaciones del Estado relacionadas con los derechos humanos

Obligaciones genéricas	Promover
	Respetar
	Proteger
	Garantizar
Deberes específicos	Prevenir
	Investigar
	Sancionar
	Reparar

Ilustración 1 Imagen tomada del libro *La reforma constitucional sobre derechos humanos. Una guía conceptual*²⁴⁴

En primer lugar, es importante resaltar que las obligaciones no se circunscriben únicamente al ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sino que a los ámbitos del derecho que se abordan en el presente trabajo y es precisamente la falta de cumplimiento de dichas obligaciones lo que ha motivado la creación de instituciones para combatir la impunidad, luego que la falta de cumplimiento de estas genera responsabilidad internacional, la que se ha derivado de la comisión de un hecho ilícito internacional.

7. RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL:

Como lo señala Crawford: *“El tema de la responsabilidad del Estado ya era considerado una esfera principal de interés en el desarrollo del derecho internacional en la primera mitad del siglo XX. El tema había sido seleccionado para la codificación en el marco de la Sociedad de las Naciones y fue uno de los principales temas de la infructuosa conferencia de La Haya en 1930. En 1948, la Asamblea General de las*

²⁴³ CASANOVAS, Oriol y RODRIGO Ángel J. 2013. *Óp. Cit.* Páginas: 47 y 48

²⁴⁴ SALAZAR UGARTE, Pedro. 2014. *La reforma constitucional sobre derechos humanos*. [en línea] [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] ISBN: 978-607-8320-05-9
Disponible en: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3815/11.pdf>.

Naciones Unidas estableció la Comisión de Derecho Internacional (CDI) y la responsabilidad del Estado fue elegido como uno de los primeros 14 temas a ser tratados por el nuevo órgano.

*El primer Relator Especial sobre el tema, F. V. García Amador (Cuba), comenzó su labor en 1956, presentando seis informes entre ese año y 1961, centrándose en la labor de la CDI sobre la responsabilidad del Estado por daños causados a la persona o bienes de los extranjeros, mientras abordaba también los aspectos generales de la responsabilidad...*²⁴⁵

La Enciclopedia Jurídica la define como: *“la institución dirigida a la restauración del ordenamiento internacional o de la mera normalidad de la vida internacional ante aquellas conductas lesivas para los diferentes miembros de la sociedad internacional atribuibles a determinados sujetos internacionales bien Estados u organizaciones internacionales, que conllevan la obligación de reparación”*²⁴⁶.

Atilio Molteni la define como: *“La responsabilidad internacional del Estado es una institución fundamental dentro del Derecho Internacional Público, pues de no admitirse una responsabilidad consiguiente a un acto ilícito internacional se suprime el deber de los Estados de comportarse de acuerdo al Derecho Internacional. Está presente en todas las controversias internacionales, de ahí la importancia de su estudio y perfeccionamiento para lograr que todos los conflictos se resuelvan por vías jurídicas y no en base a los factores de poder que cuentan los Estados”*²⁴⁷.

En el Tercer informe sobre la responsabilidad de los Estados se define “responsabilidad internacional” como *“a todas las relaciones jurídicas nuevas entre el Estado infractor y el Estado o los Estados lesionados en sus derechos que nacen de la comisión de un hecho ilícito internacional tanto las referidas al cese y la reparación*

²⁴⁵ CRAWFORD, James. 2009. *Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos*. United Nations Audiovisual Library of International Law. [en línea] Página:1 ISBN: 978-84-9982-612-7 [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] Disponible en: https://legal.un.org/avl/pdf/ha/rsiwa/rsiwa_s.pdf.

²⁴⁶ S.A. *Enciclopedia Jurídica*. [en línea] Disponible En: <http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/responsabilidad-internacional/responsabilidad-internacional.htm> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

²⁴⁷ MOLTENI, Atilio. 1964. *La responsabilidad internacional del Estado*. En: Revista Lecciones y Ensayos. [en línea] No. 26. Universidad de Buenos Aires. Página: 43, [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

ISBN: 978-9930-514-12-2 Disponible en:

http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/lecciones_y_ensayos_nro_0026.pdf

*del hecho ilícito, como las que se preocupan de la aplicación de medidas coercitivas (retorsión, represalia o sanciones propiamente dichas) para hacer efectivo el cese y la reparación del hecho ilícito*²⁴⁸.

Fernando Mariño la define como: “el conjunto de las consecuencias jurídicas derivadas de un hecho internacionalmente ilícito determinado.”²⁴⁹

Desde el Derecho Internacional Público se afirma que: *“Para hablar de responsabilidad internacional, se debe partir de que se está en una sociedad descentralizada, entiéndase que es una sociedad en la que los Estados son los que adoptan normas internacionales y vigilan su cumplimiento. Si no llenan los requisitos de del ordenamiento jurídico internacional, se deben establecer las consecuencias del incumplimiento de obligaciones en el ámbito internacional”*²⁵⁰.

El comportamiento de *“los sujetos del Derecho Internacional puede ser contradictorio, por esta situación se inició a utilizar el término hechos ilícitos, como generadores de consecuencias jurídicas negativas para el sujeto al que se atribuye, como la inoponibilidad o nulidad del hecho o la responsabilidad internacional”*²⁵¹.

El término fue codificado en 1953 a solicitud de la Comisión de Derecho Internacional, por medio de la resolución 799 de la Asamblea General de Naciones Unidas²⁵².

La responsabilidad internacional ha tenido cambios que se han reflejado en la *“estructura y el funcionamiento de la sociedad internacional y que han provocado una revolución en sus reglas”*²⁵³, viéndose contenido de la siguiente manera:

²⁴⁸ FERRER LLORET, Jaume. 1998. *Óp. Cit.* Página: 32

²⁴⁹ MARIÑO MENÉNDEZ, Fernando M. *Óp. Cit.* Página: 501

²⁵⁰ S.A. 2020. *Concepto, naturaleza y fundamento de la responsabilidad internacional*, [en línea] [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

Disponible en: <https://www.derecho-internacional-publico.com/2015/02/reparacion-dano-hecho-ilicito-internacional.html> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

²⁵¹ Ídem.

²⁵² Resolución 799 de la Asamblea General “Petición de codificación de los principios de derecho internacional que rigen la responsabilidad del Estado” [en línea] [A/RES/799\(VIII\)](#) (7 de diciembre de 1953) Disponible en: <https://research.un.org/es/docs/ga/quick/regular/8> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

²⁵³ S.A. 2020. *Óp. Cit*

- a. Se admitió la *“responsabilidad objetiva o por riesgo derivada de la realización de actividades en principio no prohibidas, pero potencialmente generadoras de daños a terceros”*²⁵⁴.
- b. *“La irrupción de nuevos sujetos, activos y pasivos, de responsabilidad internacional, como las organizaciones internacionales o, limitadamente, el individuo”*²⁵⁵.
- c. *“La aceptación de la existencia de obligaciones para con la comunidad internacional en su conjunto o erga omnes, correlativas a unos derechos subjetivos públicos o sin titular determinado, cuyo cumplimiento será exigido por cualquier Estado. Y, en relación con las normas de ius cogens, la constatación de la existencia de comportamientos ilícitos que, por atacar intereses fundamentales de la comunidad, adquieren especial gravedad”*²⁵⁶.
- d. *“El reconocimiento de regímenes de responsabilidad en función a la naturaleza distinta de la obligación internacional violada y de la disímil entidad del hecho ilícito, llegando a rebasar los límites de la reparación stricto sensu”*²⁵⁷.
- e. *“El cambio de óptica en las reivindicaciones de los países en desarrollo, plasmadas en las resoluciones de las Naciones Unidas relativas al nuevo orden económico internacional, que producen nuevas pautas sobre responsabilidad en materia de inversión extranjera”*²⁵⁸.

8. HECHO ILÍCITO INTERNACIONAL:

La Comisión de Derecho Internacional en la Resolución 56/86 de 12 de diciembre de 2001 lo definió en el artículo 2 de la siguiente manera: *“Hay hecho internacionalmente ilícito del Estado cuando un comportamiento consistente en una acción u omisión: a)*

²⁵⁴ S.A. 2020. *Óp. Cit.*

²⁵⁵ Ídem

²⁵⁶ Ídem

²⁵⁷ Ídem

²⁵⁸ S.A. S.F. *“El hecho ilícito internacional: concepto y elementos* [en línea]

Disponible en: <https://www.derecho-internacional-publico.com/2015/01/hecho-ilicito-internacional-concepto-elemento.html> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

*Es atribuible al Estado según el derecho internacional; y b) Constituye una violación de una obligación internacional del Estado*²⁵⁹”.

*“El hecho ilícito internacional es un hecho atribuible a un sujeto jurídico-internacional que, constituyendo una violación o infracción del Derecho Internacional, lesiona derechos de otro sujeto u otros sujetos de dicho ordenamiento, o incluso derechos o intereses de los que es titular la propia comunidad internacional, dando lugar a la responsabilidad del sujeto autor del hecho”*²⁶⁰.

El Diccionario del Español Jurídico de la Real Academia de la Lengua lo define como: *“Comportamiento que consiste en una acción u omisión que es atribuible a un Estado o a una organización internacional, según el derecho internacional, y que constituye una violación de una obligación internacional de ese Estado u organización internacional.*²⁶¹”

Para Mariño *“un hecho internacionalmente ilícito consiste, con carácter general, en un comportamiento atribuible, según el Derecho Internacional, a un Estado, y que constituye la violación de una obligación internacional de ese Estado.*

Puesto que un Estado goza de soberanía y por ello de la capacidad jurídica más amplia posible en el Derecho Internacional, todo Estado es susceptible de ser considerado como autor de un hecho internacionalmente ilícito que da origen a su responsabilidad internacional.

*Por otro lado, la ilicitud de un comportamiento atribuido a un Estado se establece calificando el hecho con base en lo establecido por normas internacionales que imponen al Estado obligaciones que están vigentes.”*²⁶²

*“Un acto o hecho es “del Estado” cuando se le atribuye. La atribución o imputación de un hecho internacionalmente ilícito a un Estado es una operación jurídica que debe realizarse con base en normas específicas del propio Derecho Internacional.”*²⁶³

²⁵⁹ Resolución 56/83 de la Asamblea General “Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos” [en línea] A/RES/56/83 (12 de diciembre de 2001). Disponible en: https://legal.un.org/avl/pdf/ha/rsiwa/rsiwa_s.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

²⁶⁰ Ídem

²⁶¹ REAL Academia de la Lengua. S.F. Óp. Cit.

²⁶² MARIÑO MENÉNDEZ, Fernando M. 2005. Óp. Cit. Páginas: 477 y 478

²⁶³ Ídem Página: 479

“Un hecho determinado es calificable de ilícito si no está en conformidad con lo que exige una obligación internacional cuyo cumplimiento le corresponde al Estado al que el hecho se le atribuye y que, por lo tanto, esté en vigor para ese Estado.”²⁶⁴

“A través de una larga evolución de doctrina y de la práctica internacional, se ha abierto camino progresivamente una distinción normativa de categoría diferentes de hechos ilícitos internacionales sobre la base de la relevancia dada al contenido de la obligación violada y a la gravedad de la violación.”²⁶⁵

El hecho internacionalmente ilícito y sus consecuencias se funda tradicionalmente en las siguientes premisas de reglamentación jurídica²⁶⁶:

- a. *“El origen de la responsabilidad es el hecho ilícito internacional, que consiste en el comportamiento del Estado que, por acción u omisión, vulnera una norma de Derecho Internacional.*
- b. *El vínculo que surge es una relación de Estado a Estado: no se conciben otros sujetos de la relación de responsabilidad que los estados.*
- c. *La relación, por regla general, es bilateral y directa entre el estado titular de un derecho subjetivo lesionado por el hecho ilícito y el estado al que se atribuye ese hecho: no es posible reclamar internacionalmente una acción basada en la titularidad de intereses no elevados a derechos subjetivos.*
- d. *Las consecuencias del hecho ilícito internacional se traducen en la obligación de reparar el daño causado por el Estado autor”²⁶⁷.*

El hecho ilícito internacional posee un elemento subjetivo o elemento de la atribución consistente en la facultad de adjudicar el hecho o comportamiento a un sujeto determinado. *“Ese hecho puede ser una acción o una omisión. Cuando hablamos de*

²⁶⁴ MARIÑO MENÉNDEZ, Fernando M. 2005. *Óp. Cit.* Página: 483

²⁶⁵ Ídem Página: 485

²⁶⁶ S.A. *“El hecho ilícito internacional: concepto y elementos”* [en línea]. Disponible en <https://www.derecho-internacional-publico.com/2015/01/hecho-ilicito-internacional-concepto-elemento.html> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

²⁶⁷ Ídem.

*atribuir, hablamos de imputar a un Estado una conducta reputada de ilícita según el Derecho Internacional*²⁶⁸.

Para Vedross, *“el problema consiste en determinar si el comportamiento del órgano únicamente puede ser imputado al estado cuando ha incurrido en el supuesto ilícito de modo culposos, intencionada o negligentemente, o si, por el contrario, la simple violación objetiva del Derecho Internacional por un órgano del Estado*²⁶⁹ *hace incurrir a éste en responsabilidad*”²⁷⁰.

Los Estados además de responder por los hechos de sus órganos actuando en el ejercicio de sus competencias, responderán también:

- a. *“Por la conducta de entidades públicas territoriales u otras entidades que estén facultadas por el Derecho interno del Estado para ejercer atribuciones del poder público*”²⁷¹.
- b. *“Por la conducta de órganos puestos a disposición del Estado por otro Estado o por una Organización Internacional*”²⁷².
- c. *“Por la conducta de órganos del Estado o de personas o entidades facultadas para ejercer atribuciones del poder público que actúen excediéndose en su competencia con arreglo al Derecho interno o contraviniendo las instrucciones concernientes a su actividad*”²⁷³.
- d. *“Por otra parte, se considera hecho del Estado, el comportamiento de una persona o de un grupo de personas, si actúan de hecho por instrucciones o bajo la dirección o el control de ese Estado al observar ese comportamiento*”²⁷⁴.

²⁶⁸ S.A. 2020. Óp. Cit.

²⁶⁹ *“El comportamiento de los órganos estatales es atribuible al Estado, según el artículo 4.1 del Proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional, cualquiera que sea la posición del órgano en la organización del Estado, superior o subordinada. Además, es indiferente la naturaleza de las funciones ejercidas por el órgano o el carácter internacional o interno de esas funciones.”* Idem.

²⁷⁰ Ídem.

²⁷¹ Ídem.

²⁷² Ídem

²⁷³ Ídem.

²⁷⁴ Ídem.

Como excepción a este supuesto, no se consideran hechos del estado los comportamientos de los particulares *“Si los comportamientos de los particulares no pueden ser tenidos por hechos del Estado a los efectos de la responsabilidad internacional, a fortiori no podrán serlo los hechos realizados por movimientos insurreccionales en su condición dotados de un aparato institucional propio, distinto y paralelo al Estado en cuyo territorio están establecidos. Por ello, son capaces de incurrir en responsabilidad internacional”*²⁷⁵.

El hecho ilícito internacional tiene como elemento objetivo o elemento de la violación, la infracción de una regla de derecho internacional de la que provenga una obligación de acción o de abstención a cargo del sujeto en cuestión, por medio del hecho o comportamiento, y que implique reparación, *“o una violación de una obligación grave de normas de ius cogens, que significaría reparación y sanción internacional”*²⁷⁶.

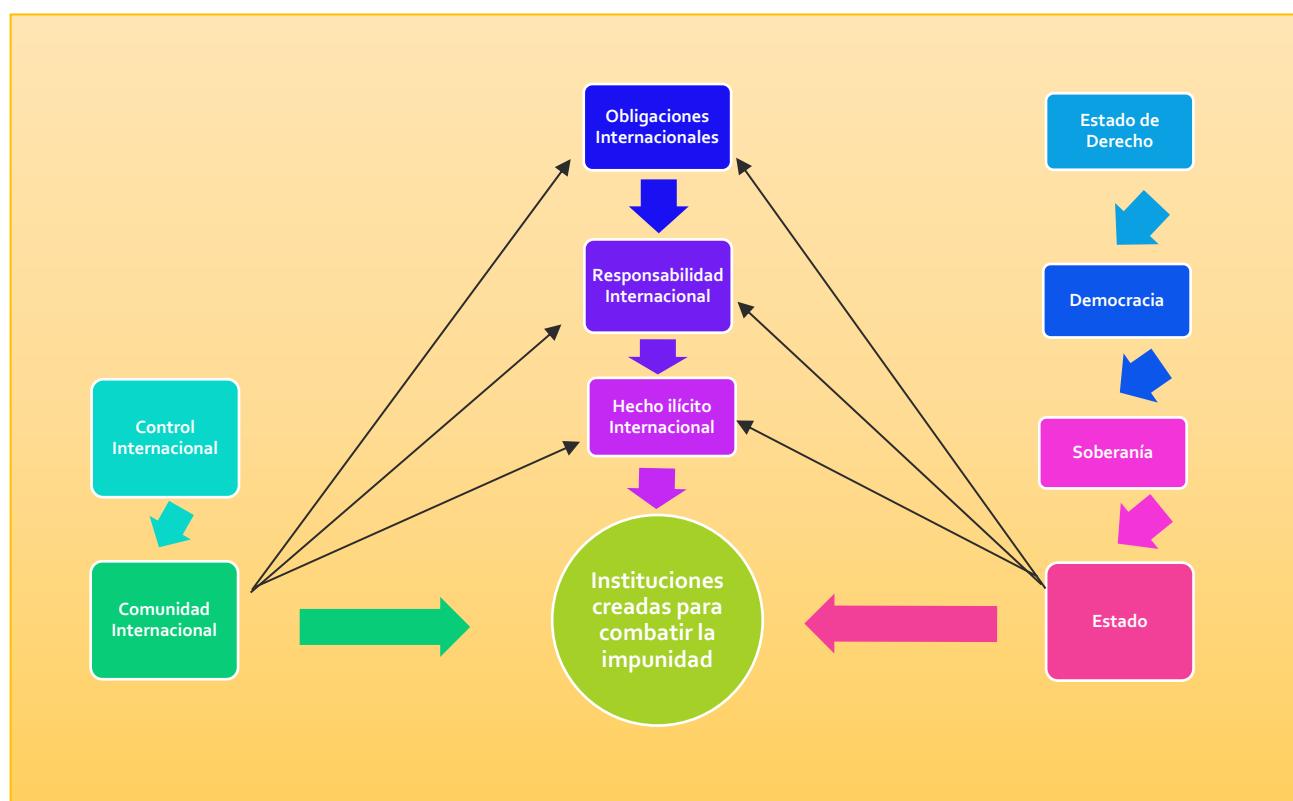
En conclusión:

Todos estos conceptos son necesarios para el presente trabajo, porque desde el criterio de la autora, son los pilares fundamentales para la creación de las instituciones de lucha contra la impunidad creadas por la comunidad internacional, sin estos no existirían.

²⁷⁵ S.A. 2020. *Óp. Cit.*

²⁷⁶ Una obligación internacional es la exigibilidad de una conducta de acción u omisión impuesta por la norma de Derecho. Entonces, habrá violación de la misma por parte de un Estado cuando un hecho de este no está en conformidad con lo que de él exige esa obligación. La esencia de la ilicitud es el contraste entre el comportamiento adoptado por el Estado y el que jurídicamente debería haber tenido. Esa obligación internacional que es violada, puede ser consecuencia de un hecho ilícito contra una obligación de origen consuetudinario como convencional. Además, dicho hecho debe contrariar la obligación que esté en vigor al tiempo de la realización de éste respecto del sujeto responsable. Y el distinto contenido de la misma es irrelevante al efecto de calificar de internacionalmente ilícito un hecho, aunque dependiendo del tipo de hecho, se le aplicará un régimen distinto de responsabilidad. En cuanto al daño, hay que decir que puede ser un factor decisión a la hora de medir el alcance de la responsabilidad y que en ciertos casos no basta el simple comportamiento para que haya violación de una obligación internacional, sino que se requiere un acontecimiento exterior de carácter perjudicial. La Comisión de Derecho Internacional estima que el daño es inherente a toda violación de una obligación internacional. La Comisión de Derecho Internacional estima además que el supuesto del ejercicio abusivo de un derecho está englobado en el elemento objetivo del hecho ilícito internacional, representado por la violación de la obligación derivada de una norma que tendría por efecto limitar el ejercicio por el estado de sus derechos o competencias prohibiendo su ejercicio abusivo.

Para entender mejor su relación se presenta la siguiente gráfica²⁷⁷:



²⁷⁷ Gráfica de autoría propia

CAPÍTULO V

EFICACIA: FORMAS PARA MEDIR LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

El presente trabajo analiza si los esfuerzos generados por la Comunidad Internacional han sido eficaces o no, pero para poder profundizar en el tema, es necesario desarrollar el concepto eficacia y el enfoque que se dará.

El diccionario de la Real Academia Española define el concepto eficacia como: “*Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera*”. Partiendo de esta definición podemos delimitar el enfoque que se le dará al presente trabajo.

La razón de hablar de eficacia es porque este ha sido calificado como el talón de Aquiles en la literatura de los Tribunales Internacionales, que en su mayoría los datos recabados sobre los reclamos judiciales de eficacia o ineficacia han sido empíricos²⁷⁸. Sin embargo; los esfuerzos por valorar la eficacia se han centrado en Tribunales Internacionales de Derecho Penal Internacional y se ha dejado por un lado el evaluar la eficacia de las diversas instituciones de Derecho Internacional de Derechos Humanos, Derecho Humanitario y de Derecho Internacional Penal, situación que resulta compleja pero que es necesaria analizar para determinar si todos los esfuerzos han producido algún resultado.

En materia de Tribunales Internacionales los principales problemas que se han identificado al abordar la cuestión de eficacia radican en²⁷⁹:

1. Empleo de definiciones toscas e intuitivas de la eficacia,
2. Equiparación a menudo de eficacia judicial con el cumplimiento del juicio, medida por la tasa de uso
3. Impacto en la conducta del Estado.

Problemas que fácilmente se podrían reflejar en los otros tipos de instituciones.

²⁷⁸ SHANY, Yuval. 2014. *Assessing the Effectiveness of International Courts*. Oxford University Press. Primera Edición. Gran Bretaña, Página. 4. ISBN: 9780199643295

²⁷⁹ Ídem

Shany considera, que hasta la fecha no se ha presentado ninguna teoría coherente que explique qué es la efectividad judicial y por qué los tres ejes mencionados anteriormente pueden ser útiles para identificarla. Cita a Guzmán, quien se refiere a las dificultades metodológicas, las que considera que se derivan de la ausencia de una definición clara del término y que se agravan aún más por los supuestos utilizados en la literatura sobre el rol de los tribunales internacionales en la vida de la comunidad internacional. Afirmando que estas suposiciones a veces transponen en sombrero el papel que los tribunales desempeñan en los sistemas jurídicos nacionales en el ámbito internacional y que se combina un entendimiento subdesarrollado de lo que debería constituir un tribunal internacional eficaz y las dificultades teóricas y prácticas asociadas con la medición real de tales criterios puede conducir a malentendidos y resultados satisfactorios sobre la eficacia de los tribunales internacionales²⁸⁰.

Yves Beigbeder es de la opinión que *“Para llevarse a cabo de manera efectiva, la justicia penal internacional requiere los siguientes elementos: conceptos legales claros, estructura funcional, consenso político, voluntad de hacerlo funcionar; y legitimidad política a los ojos de los gobiernos y los pueblos”*²⁸¹.

Hasta el momento, los métodos utilizados para medir la eficacia en las instituciones creadas dentro del ámbito del Derecho Penal Internacional son los siguientes:

1. MÉTODOS DE MEDICIÓN DE LA EFICACIA EN LAS INSTITUCIONES DE DERECHO PENAL INTERNACIONAL:

A. MEDICIÓN DE LA EFICACIA CON EL ENFOQUE DE OBJETIVOS

Shany²⁸², menciona que ha sido frecuente el uso de la medición de eficacia por medio de sus objetivos, método que critica, ya que la medición del cumplimiento de los objetivos de creación de los tribunales internacionales, se encuentra sujeta a:

1. Restricción por las expectativas de un grupo de circunscripciones; los Estados y las organizaciones internacionales que crean tribunales internacionales,

²⁸⁰ SHANY, Yuval. 2014. *Óp. Cit.* Página: 4

²⁸¹ BEIGBEDER, Yves. 2005. *International Justice against Impunity*. Progress and New Challenges. Martinus Nijhoff Publishers. S.E. Holanda. Página: 234, ISBN: 978-9004144514

²⁸² SHANY, Yuval. 2014. *Óp. Cit.* Páginas: 6, 7 y 8.

formulan sus instrumentos constitutivos y controlan sus operaciones de manera permanente, también conocidos como proveedores del mandato.

2. Deben seguir, como obligación, el mandato legal que establece explícita o implícitamente su misión y delimita sus facultades legales.
3. Deben esforzarse por acomodar, como cuestión de buena política, las expectativas normativas de sus proveedores de mandato²⁸³.

Propone distinguir entre los diferentes objetivos de los tribunales internacionales sobre la base de su fuente, nivel de jerarquía de abstracción y forma de articulación:

1. Fuente: algunos objetivos de las organizaciones públicas son establecidas por grupos externos, mientras que otros objetivos son internos en el sentido que han sido establecidos por actores que pertenecen a la misma institución creada para combatir la impunidad. Para los tribunales internacionales, como instituciones judiciales, esta distinción puede tener no solo un valor taxonómico, sino también una sin razón normativa.

²⁸³ En primer lugar, las preferencias de los proveedores de mandatos a menudo reflejan concepciones plausibles de fines generalmente compartidos socialmente deseables. Este es especialmente el caso en el que dichas preferencias se expresan de manera colectiva, es decir, reflejan un consenso entre los múltiples interesados y donde estas preferencias se articulan públicamente, por lo que tienen cierta probabilidad de conformarse a las posiciones predominantes del público en general sobre la utilidad de tribunales internacionales. En la medida en que los proveedores de mandatos gozan de legitimidad democrática, sus concepciones de fines socialmente deseables también deberían atraer cierta deferencia, ya que es probable que expresen, en general, la voluntad del pueblo.

En segundo lugar, la capacidad de los tribunales internacionales para operar y generar las influencias deseadas depende en gran medida del apoyo continuo de su trabajo por parte de las principales partes interesadas, incluidos los proveedores de sus mandatos. Más claramente, la capacidad de los tribunales internacionales para funcionar puede depender de la aceptación continua de su jurisdicción y la financiación continua de sus proveedores de mandato. Esta dependencia de facto de los tribunales internacionales sobre las principales partes interesadas ha llevado a Laurence Helfer y Anne - Marie Slaughter a hablar abultadamente, "restringiendo la independencia" de los tribunales internacionales. En términos prácticos, esta estructura de dependencia parcial implica que sería prudente que los tribunales internacionales trataran de actuar de manera que al menos no fueran en conflicto con las preferencias de sus proveedores de mandato. En el mismo sentido, los tribunales internacionales deberían tratar de no frustrar las fuertes expectativas de otras instituciones importantes (por ejemplo, los jueces nacionales o la opinión pública) que puedan influir en las posiciones de los proveedores del mandato o de otra manera afectar el impacto de los tribunales y sus decisiones.

Para ser claros, los objetivos que los proveedores de mandato establecidos para los tribunales internacionales pueden entrar en conflicto con el objetivo que otros constituyentes (incluidos los estados individuales y sus ciudadanos) establecidos para ellos; a veces, los objetivos de los proveedores de mandatos son incluso susceptibles de entrar en conflicto entre sí. Como resultado, puede ser imposible para los tribunales internacionales satisfacer todos sus objetivos todo el tiempo.

Los tribunales internacionales están obligados, como entes de derecho, a cumplir con los objetivos establecidos en sus instrumentos constitutivos, que han sido formulados por una comunidad externa de estados y organizaciones internacionales: los proveedores de mandato.

Al mismo tiempo, los objetivos internos de los tribunales internacionales normalmente no son jurídicamente vinculantes, o, alternatively, están sujetos a cambios por parte del propio tribunal. Así, en concreto, los objetivos externos de los tribunales penales internacionales, como poner fin a los crímenes y castigar a los perpetradores, pueden tener bases jurídicas más sólidas que los objetivos internos que el propio juez del tribunal ha identificado, por ejemplo, como establecer una narración histórica de la guerra y sus atrocidades²⁸⁴.

2. Jerarquía de abstracción: ciertos objetivos representan un fin último en sí mismos, mientras que otros objetivos son meramente estratégicos o de naturaleza intermedia, es decir, son conductivos para el alcance de los fines generales de la institución creada para combatir la impunidad, pero no representan un fin independiente en sí mismos.

Aunque la distinción entre niveles de abstracción no es hermética, la distinción tiene cierta utilidad analítica: nos ayuda a identificar objetivos a corto y largo plazo y a rastrear cadenas de causalidad en los resultados judiciales. También tiene un significado normativo, ya que la conveniencia de avanzar metas intermedias como un medio para alcanzar ciertos fines puede cuestionarse fácilmente sobre la base de la lógica y la experiencia, mientras que la corrección de los fines últimos es a menudo una cuestión de elección de valor ideológico, menos susceptible de refutación legal²⁸⁵.

3. Forma de articulación: algunos objetivos se identifican explícitamente en los instrumentos promulgados por la institución creada para combatir la impunidad o por las partes interesadas; otros objetivos pueden deducirse implícitamente de dichos instrumentos. Otro conjunto de metas puede haber sido adoptado

²⁸⁴ SHANY, Yuval. 2014. *Óp. Cit.* Página: 18

²⁸⁵Idem Páginas: 18 y 19

por la institución creada para combatir la impunidad en cuestión o sus partes interesadas en una forma no declarada, independiente de cualquier texto formal. Además, los objetivos no declarados a menudo reflejan las creencias de los electores en objetivos inherentes que son fundamentales para el funcionamiento de ciertas organizaciones. Por lo tanto, aunque la adhesión a objetivos explícitos puede implicar un mayor grado de legitimidad, los objetivos explícitos no son necesariamente más importantes que los implícitos²⁸⁶.

Otra de las críticas al intentar medir la efectividad de una institución creada para combatir la impunidad centrándose en el alcance para la consecución de sus objetivos, se encuentra el problema de la "ambigüedad de objetivos", o, en otras palabras, la posibilidad de que exista una comprensión competitiva de los objetivos de la institución. Tal ambigüedad puede complicar un estudio de efectividad basado en objetivos de cuatro maneras:

1. Ambigüedad de la comprensión de la misión: algunos objetivos se formulan en un lenguaje vago que da lugar a interpretaciones contradictorias de su significado. Como resultado, los objetivos reales de la institución pueden ser impugnados.
2. Ambigüedad de objetivos operativos: la naturaleza abstracta de algunos objetivos deja una considerable falta de claridad y discreción interpretativa sobre cómo traducir dichos objetivos en políticas organizacionales más específicas y objetivos operativos o intermedios. Como resultado, no está claro qué políticas operativas debe adoptar la Corte para poner fin a la impunidad.
3. Ambigüedad de objetivos prioritarios: las organizaciones públicas complejas a menudo se esfuerzan por alcanzar una pluralidad de objetivos, sin haber designado una jerarquía clara entre ellos. Este estado de cosas crea una gran expectativa sobre a qué objetivos se debe dar preferencia en caso de conflicto o competencia por los recursos de la institución. Incluso cuando se concede preferencia a un objetivo determinado, cómo traducir dicha preferencia en

²⁸⁶ SHANY, Yuval. 2014. *Óp. Cit.* Página: 19

recursos específicos: las decisiones de asignación pueden permanecer poco claras²⁸⁷.

4. Ambigüedad evaluativa del objetivo: algunos objetivos son intrínsecamente menos susceptibles de medición objetiva e invitan a un margen interpretativo en cuanto a la selección de criterios y métodos de medición relevantes²⁸⁸.

La ambigüedad del objetivo puede correlacionarse positivamente con la complejidad de los problemas de política que enfrenta la institución en cuestión.

El estudio de la eficacia de una institución creada para combatir la impunidad sobre la base de la consecución de los objetivos, debe discutirse en la etapa preliminar en la que se introduce el modelo de eficacia. La cuestión de qué debe lograr una institución y por qué debe lograr lo que se propone, no siempre se superpone por completo. En particular, podría surgir una brecha cuando las partes interesadas relevantes que estuvieron involucradas en el proceso de creación y que desarrollen una expectativa idiosincrásica que difiera de las de la institución misma²⁸⁹.

En este método los objetivos se clasifican en:

- a. Generales: También llamados objetivos oficiales que son los propósitos generales declarados formalmente por la institución ²⁹⁰ (que a menudo tienden a ser vagos y abiertos) la jerarquía de abstracción de ciertas metas representa un fin último en estas instituciones,

²⁸⁷ SHANY, Yuval. 2014. *Óp. Cit.* Página: 20 y 21

²⁸⁸ Ídem Página: 21

²⁸⁹ Ídem Página: 25

La elección de los objetivos como el foco primordial en el estudio de los tribunales internacionales se justifica aún más por consideraciones normativas. Dada la correlación probable entre los objetivos públicos y las concepciones plausibles de los fines socialmente deseables ampliamente apoyados, un estudio de efectividad basado en objetivos puede captar mejor las formas generalmente deseables en que los tribunales deberían funcionar que un enfoque basado en motivos. Como veremos a continuación, los objetivos encontrados en los instrumentos constitutivos de los tribunales internacionales, como la solución de controversias y la aplicación de las normas del tratado, corresponden a nociones generales acerca de qué es lo que los tribunales deberían estar haciendo. Los motivos, sin embargo, no son completamente irrelevantes bajo un enfoque basado en objetivos para el estudio de la efectividad organizacional. La identificación de los motivos específicos que llevaron a los proveedores de mandato a apoyar el establecimiento de su organización puede iluminar las circunstancias bajo las cuales se establecieron sus objetivos, y así ayudar a determinar sus contenidos. También puede explicar ciertas características estructurales y preoperatorias de la adjudicación internacional, como la falta de jurisdicción obligatoria o la sub presupuestación, lo que influye en la capacidad de los tribunales para alcanzar sus objetivos. Ídem, Página: 26

²⁹⁰ Ídem Página: 15

- b. Intermedios: Son metas meramente estratégicas por naturaleza, es decir, conducen al logro de los objetivos generales de la institución, pero no representan un fin independiente en sí mismas.

De acuerdo con el "sistema racional" del enfoque "basado en objetivos", una institución creada para combatir la impunidad internacional efectiva es una institución que alcanza los objetivos que se le atribuyen dentro de un período de tiempo predefinido, entonces la evaluación de la efectividad requiere necesariamente la determinación de esos objetivos. Aun así, antes de identificar los objetivos específicos, se debe tener claridad en los que establecen las metas, cuyas elecciones y expectativas deberían ser parte del análisis²⁹¹.

El enfoque para el estudio de la efectividad de estas instituciones radica en su simplicidad y su efectividad se puede medir en tres ejes, los cuales son:

- a. Una institución efectiva como tal,
- b. La institución que lo alcanza, y
- c. La solidez de los argumentos normativos que la respaldan.

El estudio de la eficacia institucional depende de la comprensión de los tipos de objetivos organizacionales que pueden considerarse criterios normativos relevantes para un análisis de efectividad e identificar la categoría relevante de la meta.²⁹²

En sus escritos sobre eficacia organizacional, Charles Perrow, distingue entre los "objetivos oficiales" y los "objetivos operativos" de la institución creada para combatir la impunidad que se evalúa.²⁹³ Definiendo estos como:

- a. Objetivos oficiales son los propósitos generales formalmente establecidos de la institución creada para combatir la impunidad (que a menudo tienden a ser vagos y abiertos),

²⁹¹ SHANY, Yuval. 2014. *Óp. Cit.* Página: 31

²⁹² Ídem. Página: 17

²⁹³ Ídem.

Los objetivos oficiales de un tribunal internacional pueden ser resolver disputas entre estados o luchar contra la impunidad; estos objetivos generales pueden traducirse a lo largo del tiempo en objetivos operativos más específicos, como agilizar el ritmo de los casos ante el tribunal, aumentar el número de enjuiciamientos por crímenes internacionales ante el tribunal o aumentar el número total de sentencias judiciales por año.

- b. Objetivos operativos reflejan las políticas específicas que la institución creada para combatir la impunidad realmente prioriza.

Las instituciones creadas para combatir la impunidad usualmente tienen una gran cantidad de objetivos que reflejan las expectativas de diferentes grupos de interés externos e internos, formulados en diferentes niveles de abstracción y explicitud²⁹⁴.

Gran parte de la atracción en el enfoque de objetivos utilizado para el estudio de la efectividad de las instituciones creadas para combatir la impunidad, radica en su simplicidad -una institución es efectiva si alcanza los objetivos- y si ejecuta fielmente su mandato por medio de la solidez de los argumentos normativos que la respaldan²⁹⁵.

La clave para evaluar la efectividad de las instituciones creadas para combatir la impunidad con el enfoque basado en objetivos implica evaluar los resultados judiciales, cuando se tiene esta competencia²⁹⁶. Estos son productos directos de las operaciones de una institución, relativamente fáciles de identificar; los resultados comprenden los efectos de los productos en el estado externo del mundo. Naturalmente, medir los resultados es una tarea mucho más desalentadora que medir los productos. Aun así, el enfoque basado en los objetivos para el estudio de la efectividad de las instituciones exige yuxtaponer los objetivos en lugar de los resultados.

Si uno de los objetivos de la institución es poner fin a la impunidad, según el enfoque basado en objetivos, la investigación sobre la eficacia debería investigar los indicadores de resultados, reflejando la medida en que las facilitan directa o indirectamente la realización de juicios y otras formas de responsabilidad legal. Tal investigación debe emprenderse junto con cambios en las percepciones subjetivas de los actores relevantes (incluyendo los posibles perpetradores) de la probabilidad que los crímenes pasados y futuros queden impunes (como indicativo de la reducción del "vacío de impunidad")²⁹⁷.

²⁹⁴ Por lo tanto, una decisión clave que los investigadores dedicados a las investigaciones de efectividad basadas en objetivos deben adoptar es qué conjunto de metas o categorías de objetivos seleccionar como línea de base normativa, es decir, el estándar cuyos logros subyacen a la evaluación de la efectividad.

²⁹⁵ SHANY, Yuval. 2014. *Óp. Cit.* Página: 27

²⁹⁶ Ídem Página: 52

²⁹⁷ Ídem Página: 54

Identificar los objetivos representa solo la primera etapa para evaluar la efectividad. A continuación, se debe intentar evaluar si los resultados judiciales alcanzan los objetivos establecidos para la institución. Esta evaluación muchas veces es considerada extremadamente difícil y casi imposible de medir, debido a que las cadenas de causalidad entre las operaciones judiciales y los resultados son muy difíciles de establecer.

Los ejercicios de mapeo de estas instituciones, sugieren que unas, pueden compartir algunos fines, es decir, metas específicas a un alto nivel.²⁹⁸ Tratar de explorar la eficacia general de una institución en particular a la luz de sus diversos objetivos, puede que este tipo de análisis no dé lugar a una respuesta definitiva a la cuestión de si la institución es eficaz, en general, pero puede destacar áreas de eficacia relativa y exponer las ventajas y desventajas que conlleva la posibilidad de alcanzar solo algunos objetivos durante el curso del proceso. En la medida en que tal análisis de la eficacia judicial sea oportuno, puede ayudar a comprender mejor cómo las instituciones se adaptan a la evolución de su entorno y a las expectativas cambiantes de sus proveedores de mandato (y otras partes interesadas).

La descripción de los objetivos dentro del modelo de efectividad como expectativas anima a pensar sobre el proceso judicial como un proceso interactivo, en el que las instituciones juegan un papel de mediación entre los interesados²⁹⁹.

De acuerdo con el enfoque del sistema racional (o basado en objetivos), un examen de la eficacia puede considerar las siguientes preguntas:

- a. Si los recursos o activos tangibles e intangibles disponibles realmente le permiten cumplir sus objetivos (estructura);
- b. Si los procesos organizacionales facilitan el objetivo de la institución creada para combatir la impunidad (proceso); y
- c. Si los resultados y sus efectos sociales son consistentes con el objetivo (resultado) de la institución.

²⁹⁸ SHANY, Yuval. 2014. *Óp. Cit.* Página: 37

²⁹⁹ Ídem Páginas: 63 a 65

Los diferentes indicadores relevantes para la medición de la efectividad de estas instituciones pueden clasificarse como relacionados con una o más de las tres categorías operativas mencionadas³⁰⁰.

Finalmente, un examen que se centre exclusivamente en la cuestión de si las instituciones cumplen con sus objetivos limitaría la perspectiva sobre la utilidad social de las organizaciones.

B. MEDICIÓN DE LA EFICACIA CON EL ENFOQUE DE SISTEMAS:

Otro método utilizado ha sido:

1. El enfoque de sistema abierto y
2. El enfoque de recursos del sistema.

De acuerdo con el enfoque de sistema abierto, una institución creada para combatir la impunidad efectiva es aquella que interactúa de manera equilibrada y sostenible con su entorno externo, es decir, atrae recursos y los transforma en bienes valiosos que luego satisfacen las necesidades de los actores relevantes (logrando un equilibrio adecuado entre ingreso, rendimiento y producción). En otras palabras, una institución creada para combatir la impunidad eficaz es aquella que la aplicación específica del enfoque de sistemas abiertos logra un equilibrio.

Mientras que el enfoque de recursos de sistema que proviene de un enfoque organizacional y se centra en los *“recursos internos, evalúa la capacidad de la organización para asegurar, administrar y controlar habilidades y recursos escasos y valiosos, su innovación y rapidez”*³⁰¹.

³⁰⁰ SHANY, Yuval. 2014. *Óp. Cit.* Página: 50

³⁰¹ SERRALDE S, Alejandro. *Qué es la teoría de efectividad organizacional*. [en línea] Disponible en: <https://reddinconsultants.com/espanol/wp-content/uploads/2012/12/Qu%C3%A9-es-la-Teoría-de-Efectividad-Organizacional.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

C. EL MÉTODO COMO EL PAPEL QUE JUEGAN LAS INSTITUCIONES EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Oran Young define la eficacia como el papel que juegan las instituciones sociales en la configuración o el moldeamiento del comportamiento de la sociedad internacional³⁰².

En materia de derecho internacional público, hay que tomar en cuenta:

1. Que las instituciones destinadas a combatir la impunidad han sido creadas por tratados, acuerdos internacionales, por resoluciones del Consejo de Seguridad, por regulación de la autoridad del poder de ocupación o la autoridad internacional o administrativa o por Acuerdos entre los Estados y Organizaciones Internacionales como Naciones Unidas, Institución creada para combatir la impunidad de Estados Americanos, Consejo de Europa, etc.
2. Que se han creado diversos tipos de organizaciones, entre las que se encuentran:
 - a. Instituciones Internacionales
 - b. Instituciones Híbridas
 - c. Instituciones Mixtas
3. Que las instituciones creadas, se han enfocado en trabajar en diversas categorías de violaciones de derechos humanos y de crímenes internacionales.
4. Que en la creación de cada institución existe política y dimensiones de trabajo específicas.
5. Que es muy importante las relaciones que manejen estas instituciones con los actores en el terreno de la justicia, como el Consejo de Seguridad, otros órganos internacionales, actores de justicia transicional, comunidad académica y el público en general.

³⁰² SHANY, Yuval. 2014. *Óp. Cit.* Páginas: 14 y 15

3. CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA CREACIÓN DE LAS INSTITUCIONES QUE COMBATEN LA IMPUNIDAD:

Las instituciones creadas para combatir la impunidad no han sido creadas de una manera improvisada, han existido distintos criterios, como afirman Luc Reydamas y Jan Wouters³⁰³, cada institución ha sido creada en función de:

1. Tiempo determinado
2. En persecución de determinados objetivos
3. Basado en ciertas suposiciones o condiciones fácticas y coyunturales.
4. Reflejando una particular distribución del poder.
5. Dependiendo del apoyo externo y cooperación para alcanzar su misión.

Aunado a lo anterior, para ellos hay que tomar en cuenta³⁰⁴:

1. Fortalezas
2. Mandato
3. Recursos disponibles
4. Independencia
5. Marco Procedimental
6. Selección de actores
7. Cooperación de los Estados.

Estos criterios son aplicables para las instituciones creadas para combatir la impunidad desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional Penal, los mismos deben contar con elementos esenciales como se verá a continuación.

³⁰³ REYDAMS, Luc y WOUTERS, Jan. 2012. *The Policies of Establishing International Criminal Tribunals*. REYDAMS, Luc, WOUTERS, Jan y RYNGAERT, Cedric Editores. *International Prosecutors*. Oxford University Press. Primera Edición. Reino Unido. Página: 7, ISBN: 9780199554294.

³⁰⁴ Ídem. Página: 7 - 80

4. ELEMENTOS PARA MEDIR LA EFICACIA DE LAS INSTITUCIONES CREADAS PARA COMBATIR LA IMPUNIDAD.

Luego de estudiar los criterios que han sido utilizados principalmente para medir la eficacia de Tribunales Internacionales desde el Derecho Penal Internacional, se decidió tomar los siguientes elementos para evaluar la eficacia de las instituciones desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional Penal.

A. TIEMPO:

El elemento tiempo es importante, las diferentes instituciones tienen ciclos de vida distintos y su desempeño fluctúa con el tiempo. Por lo tanto, la selección de la unidad de tiempo medida puede tener un impacto crucial en el resultado del proceso desde cualquiera de los métodos de medición, pero principalmente para la evaluación de logro de objetivos, ya que influye en los aumentos o disminuciones de la ambigüedad del objetivo; los resultados de cualquier estudio de efectividad basado en objetivos pueden depender, en gran medida, de la unidad de tiempo seleccionada para realizar la evaluación.

El criterio tiempo para evaluar la efectividad de las instituciones creadas para combatir la impunidad se puede aplicar en dos sentidos:

- a. Para examinar el desempeño en un único período de evaluación que abarca toda la vida útil de la institución creada para combatir la impunidad, el que puede ser suficiente, ya que oculta los aspectos positivos y negativos en el rendimiento y el logro de los objetivos³⁰⁵.
- b. Para examinar el desempeño de la institución en períodos determinados, con el fin de no sólo medir eficacia, sino también evolución³⁰⁶.

³⁰⁵ Que los objetivos organizacionales no son necesariamente estáticos en el tiempo. Por el contrario, los objetivos a menudo cambian a lo largo de la vida de una organización evaluada, posiblemente en respuesta al desempeño real, los cambios en el entorno externo y debido a los cambios en la identidad y las preferencias de los actores que establecen objetivos. SHANY, Yuval. 2014. *Óp. Cit.* Página: 23

³⁰⁶ El fenómeno del cambio de metas a lo largo del tiempo plantea el desafío particular de identificar la fecha precisa en que se han formulado los nuevos objetivos. A diferencia de los objetivos originales, que generalmente se establecen explícita o implícitamente en los instrumentos constitutivos de un

Sobre la visión relacionada a medir la eficacia judicial con la cantidad de sentencias emitidas en un período específico, o incluso sobre medir la eficacia de la institución internacional dedicada al combate de la impunidad basándose en este criterio puede expresarse que si bien la estadística generada es un factor relevante para la medición no puede ser el principal en la totalidad de los casos.

En la definición planteada por la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso *Guincho v. Portugal*³⁰⁷, presentada por Juana María Ibáñez Rivas³⁰⁸ se tiene que la razonabilidad del plazo se considera tomando en cuenta su momento inicial con el acto introductorio atravesando las diferentes etapas incluyendo la presentación de recursos de instancia hasta tener una sentencia firme con la cual la jurisdicción se encuentra plenamente agotada.

En la jurisprudencia de este Tribunal Internacional y que fue adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por medio de su jurisprudencia³⁰⁹, puede encontrarse la expresión de los factores de determinación del plazo razonable que incluyen:

- a. *“complejidad del asunto”*³¹⁰,
- b. *la actividad procesal del interesado*³¹¹,

tribunal, los objetivos añadidos a lo largo de los años son a menudo el producto de un proceso dialéctico que involucra a partes interesadas externas e internas de la organización. Ídem Página: 24

Por lo tanto, en el punto en que ciertos resultados judiciales pueden ser considerados irrelevantes para una evaluación de efectividad, mientras que en un punto posterior los mismos resultados formarían una parte integral del proceso de evaluación. Ídem Página: 25

³⁰⁷ ICC. S.F. *Legal Tools Data Base*. [en línea] Disponible En: <https://www.legal-tools.org/en/browse/record/29903a/> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

³⁰⁸ Convención Americana de Derechos Humanos (Comentada), Konrad Adenauer Stiftung

³⁰⁹ Cfr. *Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo, supra*, párr. 71, y *Caso Gutiérrez Hernández y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 24 de agosto de 2017. Serie C No. 339, párr. 183.

Cfr. *Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 145, y *Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil, supra*, párr. 217.

Cfr. *Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 155, y *Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 5 de febrero de 2018. Serie C No. 346, párr. 135.

³¹⁰ Caso de la Comunidad Moiwana vs. Suriname sentencia de 15 de junio de 2005, párr. 160 y 162, Caso Vargas vs. Paraguay, sentencia de 26 de septiembre de 2006. Párr. 102 – 103

³¹¹ Caso Cantos vs. Argentina sentencia de 28 de noviembre de 2002, párr. 57, Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador, sentencia de 6 de mayo de 2008, párr. 82 a 84) El análisis global del procedimiento permite evaluar la razonabilidad del plazo a través del estudio de las actuaciones del proceso en su conjunto teniendo en cuenta las particularidades de cada caso. (Caso Genie Lacayo vs.

- c. *la conducta de las autoridades judiciales*³¹² y
- d. *la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo*³¹³.

Siendo así se tiene que la complejidad del asunto atiene a aspectos como la extensión y amplitud de la investigación, la pluralidad de sujetos procesales involucrados, si el asunto comprende debates técnicos o incluso si el asunto es de gran relevancia y requiere especial cuidado.

Cuando se vincula lo anterior con los casos que son apoyados por instituciones de lucha contra la impunidad y que involucran estructurales criminales incrustadas en el Estado, el resultado es de una complejidad extrema en el asunto *sub iudice* que cambia de manera relevante la óptica del plazo razonable.

B. OBJETIVOS:

Como se ha referido anteriormente, la efectividad de las instituciones que luchan contra la impunidad es medida conforme se han logrado los objetivos determinados para la misma en su mandato, sin embargo, el contexto de la creación de los mismos también es una materia de análisis en tanto la institucionalidad de lucha contra la impunidad persiga fines que podrían entrar en conflicto con los objetivos geopolíticos de los Estados que colaboran en su creación y mantenimiento.

Siendo así y asumiendo un conocimiento del contexto de la lucha contra la impunidad en el marco internacional a través de la historia de los tratados y convenios internacionales que fomentan su evolución; debería entenderse que los objetivos individuales de los Estados colaboradores y los objetivos de la institución creada deben estar en comunión para un desarrollo efectivo de la ayuda que prestan aquellos a esta, sin embargo, si es el caso que los objetivos de estas partes entran en conflicto, es importante analizar la clasificación de la institución como ineficaz por parte de los Estados colaboradores dado que la misma podría estar motivada por la contradicción en las metas que ambas partes quieren lograr.

Nicaragua párr. 81, Caso Las Palmeras vs. Colombia, sentencia de 6 de diciembre de 2001, párrafo 62 a 64

³¹² Ídem.

³¹³ Ídem.

El enfoque de objetivos ha sido utilizado frecuentemente, y este trabajo no será la excepción, se evaluarán objetivos, pero no serán el único criterio que se utilice. Los objetivos se abordarán de la siguiente manera:

- a. Objetivos Generales
- b. Objetivos Operativos o Intermedios

C. MANDATO:

Se entiende por mandato³¹⁴ la potestad o facultades establecidas para la puesta en marcha de la institución que en este caso busca luchar contra la impunidad. Este debe evaluarse desde:

- c. Interpretación y ejecución de las obligaciones legales consignadas, (legalidad y legitimización³¹⁵)
- d. A la luz de sus objetivos fundadores³¹⁶, metas designadas y su modificación en el tiempo.
- e. La jurisdicción y competencia otorgada.
- f. Delimitación de violaciones o crímenes a perseguir.
- g. Quiénes son sus proveedores y el poder que ejercen en su creación, modificación y terminación y el proceso utilizado³¹⁷.
- h. Impacto en políticas internacionales.

D. RECURSOS:

Los costos³¹⁸ y beneficios del desempeño organizacional son independientes de los objetivos de la institución creada para combatir la impunidad. Una institución creada

³¹⁴ REYDAMS, Luc y ODERMATT, Jed. Mandates. En: REYDAMS, Luc, WOUTERS, Jan y RYNGAERT, Cedric. Ed, 2012. *Óp. Cit.* Páginas: 110 y 112

³¹⁵ SHANY, Yuval. 2014. *Óp. Cit.* Página: 35

³¹⁶ Los objetivos identificados por los proveedores del mandato a menudo sirven como sustitutos de las percepciones generalmente aceptadas de cuáles deberían ser los objetivos del programa internacional. Ídem Página: 34

³¹⁷ Esperándose que sea un proceso deliberativo y transparente.

³¹⁸ WIERDA, Marieke y TRIOLO, Anthony Resources. En: REYDAMS, Luc, WOUTERS, Jan y RYNGAERT, Cedric ed. 2012. *Óp. Cit.* Página:154

para combatir la impunidad puede ser efectiva, pero ineficiente al generar costos considerables y externalidades negativas que pueden compensar algunos o todos los beneficios asociados con el logro de los objetivos. En un nivel más profundo de abstracción, la introducción de preguntas sobre eficiencia organizativa y costo-efectividad invita a considerar si los recursos invertidos en el establecimiento y mantenimiento de la institución podrían haber sido empleados para avanzar en otros proyectos alternativos, que pueden haber generado mejores resultados.³¹⁹

Los recursos deben ir enfocados en cuanto a las necesidades que se tienen para realizar el mandato³²⁰. Estos pueden ser:

- a. Bilaterales
- b. Multilaterales
- c. Privados

La financiación puede ser por medio de donaciones o asistencia internacional. Deben contar con un mecanismo de supervisión sobre el trabajo, concretamente en su ejecución.

Las consideraciones de eficiencia y rentabilidad son importantes para comprender las dialécticas antes mencionadas entre las partes interesadas externas e internas que realizan un papel fundamental en la vida de las instituciones creadas para combatir la impunidad³²¹.

El potencial de cambios inspirados en el rendimiento de los objetivos judiciales puede conducir en algunos casos a una disminución gradual de las expectativas y, paradójicamente, si el rendimiento se mantiene constante, a una mayor eficacia. Bajo tales circunstancias, aumenta la importancia de la eficiencia y la rentabilidad como herramientas de evaluación complementarias³²². También hay que preguntarse si

³¹⁹ SHANY, Yuval. 2014. *Óp. Cit.* Página: 28

³²⁰ WIERDA, Marieke y TRIOLO, Anthony. 2012. *Óp. Cit.* Páginas: 113 - 170

³²¹ Si con el tiempo, una determinada actividad diseñada para alcanzar uno de los objetivos, genera externalidades negativas significativas o resulta ser demasiado costosa para justificar los esfuerzos por alcanzarla, se puede renunciar al objetivo en cuestión o intentarlo para des-priorizarlo. Si, por otro lado, la práctica sugiere que algunas de las actividades generan grandes e imprevistos beneficios, los que establecen metas externas pueden buscar incorporar los resultados de estos en los objetivos, o priorizar la meta cuyo logro es generar estos beneficios secundarios.

³²² SHANY, Yuval. 2014. *Óp. Cit.* Página: 29

contar con este tipo de instituciones genera beneficios netos que superan sus costos, y si son rentables, es decir, si los mismos beneficios podrían haberse obtenido por medios menos costosos.

E. ESTRUCTURA:

La estructura³²³ es un factor importante que está estrictamente ligado al cumplimiento del mandato, de acuerdo a la estructura que se diseña para el funcionamiento de la institución, se delega la ejecución de las funciones establecidas en él.

Una taxonomía útil que trata sobre efectividad organizacional, que puede ser relevante para analizar y evaluar la efectividad de las instituciones creadas para combatir la impunidad, involucra la utilización de categorías operacionales para describir tres aspectos de la institución y estas son:

- a. estructura (o insumo),
- b. proceso y
- c. resultado.

Los factores que se deben ver en esta son:

- a. Lugar de ubicación
- b. Progreso de casos
- c. Administración
- d. Presupuesto

Un enfoque más integral también se referiría a los indicadores estructurales y de proceso con el fin de medir los resultados anticipados y, posiblemente, para diagnosticar las causas de la baja eficiencia. Además, también se puede considerar la relación costo - efectividad y la eficiencia de estrategias específicas de logro de metas.

³²³ TOWNSEND, Gregory. *Structure and Management*. En: REYDAMS, Luc, WOUTERS, Jan y RYNGAERT, Cedric. 2012. *Op. Cit.* Página: 171 - 318

Los principales factores que son determinantes para la estructura y que influyen en los indicadores de eficacia son:

- a. Los poderes legales que están determinados por el alcance de la jurisdicción, el efecto vinculante de las decisiones judiciales, el alcance y la naturaleza de la ley aplicable, los poderes auxiliares (incluidos los poderes de investigación), el derecho de acceso al tribunal, el número de partes en los instrumentos constitutivos y la ejecución maquinaria³²⁴.
- b. La capacidad del personal está determinada por el número de jueces, el número de otros empleados, los procedimientos de asistencia legal y la calidad real y percibida del personal (calificaciones, experiencia y antecedentes profesionales).
- c. Los recursos están determinados por presupuestos, instalaciones y otros recursos tangibles a corto y largo plazo.
- d. La independencia estructural está determinada por las condiciones establecidas para garantizar que la institución y sus miembros estén libres de la influencia e intervenciones de otros actores y partes interesadas.
- e. El potencial de uso está determinado por las condiciones que influyen en la medida en que se utilizará la institución, principalmente los tribunales, la propensión de los Estados miembros a litigar, la relevancia de las áreas problemáticas que aborda la institución y la relevancia de las normas aplicables del mandato a los problemas y disputas.
- f. La reputación está determinada por la percepción de independencia, imparcialidad, legitimidad y efectividad de la institución.
- g. Las relaciones con otras instituciones están determinadas y se reflejan en la capacidad para aprovechar las instituciones nacionales o internacionales para promover sus objetivos e implementar sus productos³²⁵.

³²⁴ REYDAMS y Luc, WOUTERS, Jan. 2012. *Óp. Cit.* Página: 58

³²⁵ SHANY, Yuval. 2014. *Óp. Cit.* Página: 59

Finalmente, una imagen más completa de los atributos estructurales surgiría de la explotación de los entornos jurídicos, institucionales, políticos, económicos, ideológicos y culturales en los que operan las diferentes instituciones, ya que parece que el poder de estas instituciones de jure y de facto derivan en gran medida de las circunstancias de fondo.³²⁶

E.1 ELEMENTOS ESENCIALES DE LA ESTRUCTURA:

E.1.1 JURISDICCIÓN Y REGLAS DE ADMISIBILIDAD.

La jurisdicción y sus reglas de admisibilidad también son un factor importante para medir la efectividad, ya que representan posibles límites autoimpuestos al ejercicio de los poderes jurisdiccionales, es decir, definen las circunstancias bajo las cuales los tribunales pueden o deben declinar la jurisdicción sobre los casos que se les presentan³²⁷.

La jurisdicción puede servir como una variable que influye en la efectividad, los tribunales pueden optar conscientemente por aumentar su propia efectividad ajustando su jurisdicción para avanzar en el logro de sus objetivos³²⁸.

Esto se debe a que la capacidad de las instituciones para cumplir sus diversas funciones depende del nivel de negocios reales y potenciales que pueden esperar alcanzar o generar. El alcance de tal actividad judicial está delimitado, a su vez, por las disposiciones jurisdiccionales encontradas en los instrumentos constitutivos de los tribunales pertinentes, ya que dichas disposiciones dictan:

- a. Quién puede acceder a los tribunales,
- b. Qué cuestiones pueden ser litigadas,
- c. Qué reclamos legales pueden surgir en el curso de litigios y,
- d. Qué recursos se pueden buscar.

³²⁶ Por ejemplo, las diferencias entre los registros de los tribunales europeos y no europeos de consecución de los objetivos pueden ser tanto un producto del clima favorable al Estado de derecho de Europa como de cualquier indicador estructural de los tribunales pertinentes. Ídem Página: 60

³²⁷ SHANY, Yuval. 2014. *Óp. Cit.* Página: 67

³²⁸ Ídem Página: 88

Las reglas de admisibilidad, difieren de las disposiciones jurisdiccionales., debido a:

- a. En primer lugar, mientras que la jurisdicción describe el poder legal, las cuestiones de admisibilidad se refieren a si el tribunal puede o no debe ejercer el poder legal para adjudicar el que se le ha confiado.
- b. En segundo lugar, la potestad de no ejercer el poder tiende a ser de naturaleza discrecional³²⁹.
- c. En tercer lugar, las reglas de admisibilidad se aplican caso por caso, a diferencia de las reglas de jurisdicción que implican la selección de casos por categoría.
- d. En cuarto lugar, la jurisdicción es una característica estructural, mientras que la decisión sobre si un caso es o no admisible es parte del proceso judicial, no de la estructura judicial.

Sujeto al poder judicial de la competencia, la dotación de una institución con poder para declarar los casos inadmisibles abre nuevas opciones de toma de decisiones para la institución en cuestión: el poder de rechazar la jurisdicción existente. Desde una perspectiva de efectividad, tal poder puede permitir que la institución lleve a cabo su función judicial de la forma más conducente a sus agendas para alcanzar las metas³³⁰.

El compromiso en la selección de casos, ya sea de manera categórica (jurisdicción) o caso por caso, es una importante característica procesal, que puede contribuir a la eficacia judicial.

Tradicionalmente las cuatro categorías principales de jurisdicción de los órganos resolutorios internacionales son:

- a. *ratione personae*,
- b. *ratione materiae*,

³²⁹ Por lo tanto, a diferencia de las reglas de jurisdicción que normalmente resultan en un deber de ejercer el poder legal o en el deber de no ejercerlo, las reglas de admisibilidad a menudo permiten la discreción.

³³⁰ SHANY, Yuval. 2014. *Óp. Cit.* Páginas: 84 y 85

c. *ratione temporis* y

d. *ratione loci*.

Estas cuatro categorías proporcionan cualidades analíticas útiles y respuestas directas a algunas preguntas básicas, como³³¹:

a. ¿Quién puede formar parte de un caso?

b. ¿Qué problemas se pueden debatir?

c. ¿Cuándo debe haber surgido la disputa relacionada con estos asuntos? y

d. ¿Dónde deberían haber ocurrido los eventos en cuestión?

La jurisdicción y la admisibilidad sirven como características importantes, ya que controlan el conjunto de casos sujetos a adjudicación y cubiertos por la "sombra" de la adjudicación. Es esta comprensión matizada de la relación entre la selección de casos y la eficacia que subraya la importancia de facultar a los tribunales para participar en la selección de casos mediante la reinterpretación de sus disposiciones jurisdiccionales y la aplicación de normas de admisibilidad. El ejercicio de tales poderes legales de segundo orden puede permitir que las instituciones ajusten constantemente su agenda a sus objetivos, seleccionando los casos por categoría o caso por caso.

Estas instituciones no ejercen la discreción nominal al decidir su jurisdicción sobre casos específicos. No pueden escuchar casos en los que no tienen jurisdicción, y deben escuchar los casos que están bajo su jurisdicción³³².

E.1.2 CONDICIONES JURISDICCIONALES OPCIONALES:

Las condiciones jurisdiccionales agregadas a los instrumentos jurisdiccionales no contundentes, o mejor conocidas como opcionales, que expresan consentimiento a la jurisdicción pueden introducirse *ex post* o *ex ante*. Un grupo de condiciones se adhiere a la expresión *ad hoc* de consentimiento y, por lo tanto, es parte de los términos de referencia específicos; el otro grupo de condiciones jurisdiccionales se adhiere a

³³¹ SHANY, Yuval. 2014. *Óp. Cit.* Página: 68

³³² Ídem Páginas: 86 y 87

instrumentos que expresan consentimiento para la adjudicación de casos futuros que caen dentro de una categoría predefinida³³³.

Desde la perspectiva de la efectividad, estas condiciones jurisdiccionales "opcionales" son algo heterogéneas: facilitan el trabajo al proporcionar un grado de flexibilidad que probablemente alentará a los estados a comprometerse a aceptar su jurisdicción sobre algunas categorías de caso futuro; al mismo tiempo, limitan la jurisdicción futura a través de las reservas introducidas.

El poder de juzgar casos pasados, presentes y futuros es un elemento importante en la estructura de cualquier tribunal internacional, que delinea el universo de casos potenciales a los que puede aplicarse el proceso judicial y de los cuales pueden emanarse productos y resultados judiciales. También determina el camino por el cual pueden ocurrir las consecuencias de la "sombra" de esta característica estructural. Como resultado, la capacidad de los tribunales internacionales para alcanzar sus objetivos depende en gran medida del alcance de sus facultades jurisdiccionales, según lo determinen los proveedores del mandato³³⁴.

F. LEGITIMIDAD:

La legitimidad es un concepto nebuloso, que significa diferentes cosas para diferentes personas³³⁵. La legitimidad es principalmente un elemento estructural; es una característica que se puede tener para desempeñarse de manera superior. La efectividad judicial, por otro lado, está conceptualmente relacionada con los resultados, proporcionando herramientas analíticas para la evaluación de si se han alcanzado o no sus objetivos.

Los dos conceptos están entrelazados y no pueden entenderse en completo aislamiento el uno del otro. Una institución con facultades jurisdiccionales efectiva es más legítima que una poco efectiva; y una institución legítima estaría en una mejor posición para ser efectiva que una ilegítima. La interdependencia de los dos conceptos encuentra expresión en sus estructuras internas, la legitimidad judicial constituye una evaluación de la legitimidad de los resultados. Como resultado, no

³³³ SHANY, Yuval. 2014. *Óp. Cit.* Página: 72 y 73

³³⁴ Ídem Páginas: 74 y 75

³³⁵ Ídem Páginas: 137 y 138

existe una contradicción inherente entre los dos: las instituciones aspiran tanto a la legitimidad como a la efectividad, y pueden alcanzar ambos o ninguno³³⁶.

En su relación con la efectividad, se puede aludir a la teoría consecuencialista de la justicia para apoyar la proposición de que se puede ver un proceso legal efectivo promoviendo resultados justos y equitativos en casos o categorías específicas de casos como moralmente superiores a un proceso legal ineficaz o exitoso en promover los mismos resultados³³⁷. La efectividad también puede reflejar la legitimidad.

El capital de legitimidad inicial de las instituciones se deriva del fuerte simbolismo asociado a todos los tribunales, tanto nacionales como internacionales, incluidas las nociones de equidad, justicia, igualdad ante la ley, profesionalismo legal, etc³³⁸. Este capital también se deriva del "*efecto aureola*" asociado a los esfuerzos internacionales para abordar problemas graves de considerable importancia a los ojos del público, como los conflictos internacionales, la criminalidad internacional y las violaciones de los derechos humanos. El reconocimiento de la necesidad justificada de abordar estos problemas, probablemente se traduzca en una amplia aceptación de la autoridad justificada de estas instituciones, cuyo establecimiento forma parte de las soluciones a los problemas planteados³³⁹.

Una institución legítima estaría dotada de:

- a. sólidos poderes legales,
- b. una amplia base jurisdiccional,
- c. un rico menú de medios de impugnación,
- d. mecanismos de cumplimiento,
- e. personal
- f. presupuesto adelantado,

³³⁶ SHANY, Yuval. 2014. *Óp. Cit.* Páginas: 157 y 158

³³⁷ Ídem Página: 140

³³⁸ De hecho, la elección por parte de los proveedores de mandato de asignar toma de decisiones a los tribunales internacionales puede deberse a la creencia de que la mera participación de un tribunal legitimaría las decisiones asignadas.

³³⁹ SHANY, Yuval. 2014. *Óp. Cit.* Página: 146

Tiene mejores perspectivas de logro de objetivos prima facie que las instituciones que son débiles y pobres³⁴⁰.

Tal legitimidad interna es un requisito previo para conferir legitimación externa a otras normas y las instituciones que las crean y aplican y para facilitar el logro de los fines últimos. En consecuencia, la legitimidad debe ser entendida como una variable clave que repercute en la obtención de los objetivos y que los proveedores tienen un contexto y sustancia importantes para cualquier estudio de eficacia judicial.

Al igual que la efectividad judicial, la legitimidad judicial puede servir como un principio organizador para el estudio de la adjudicación internacional. De la misma manera en que la estructura judicial, el proceso y el producto contribuyen a los resultados judiciales -mediante su participación en la consecución de los objetivos- todas las categorías operacionales pueden afectar la legitimidad judicial. Además, al igual que la efectividad, la legitimidad es relativa y subjetiva: se puede tener una legitimidad parcial, y se puede tener más legitimidad ante los electores que otros.

G. INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD:

Pueden considerarse una cualidad personal, pero en este caso la independencia e imparcialidad³⁴¹ con que actúen las diferentes instituciones es necesario para el ejercicio de las funciones delegadas.

La independencia judicial y la imparcialidad se refieren a las normas y condiciones que conducen el proceso de toma de decisiones, judiciales o no y a ciertas prácticas que figuran en el propio proceso de toma de decisiones judiciales³⁴².

Como afirma Luc Coté *“El desarrollo de una apropiada estrategia para combatir la impunidad necesita más que independencia, recursos adecuados que permitan el ejercicio de la función independiente”*³⁴³.

Helfer y Slaughter también advierten de la posible existencia de una relación lineal entre independencia y efectividad, al desarrollar una nueva perspectiva sobre la

³⁴⁰ SHANY, Yuval. 2014. *Óp. Cit.* Página: 148

³⁴¹ COTÉ, Luc. 2012. *Independence and Impartiality*. En: REYDAMS, Luc, WOUTERS, Jan y RYNGAERT, Cedric. 2012. *Óp. Cit.* Página: 319 - 415

³⁴² SHANY, Yuval. 2014. *Óp. Cit.* Páginas: 102 y 103

³⁴³ COTÉ, Luc. 2012. *Óp. Cit.* Página: 415

relación entre la independencia y la efectividad³⁴⁴. Esto inicialmente se refleja en la selección y asignación de personal idóneo, evitando así funcionarios inescrupulosos que puedan emitir decisiones tendenciosas. Los mecanismos de selección adecuados también pueden garantizarla³⁴⁵.

La combinación de reglas y condiciones relacionadas con la independencia e imparcialidad permite evaluar, si la institución en cuestión tiene o no un diseño institucional que consagra la ausencia de interferencia externa y un sesgo importante. Dicha evaluación subyace a la percepción subjetiva que se tenga de estas.

Shany afirma que las fuertes conexiones entre la independencia judicial, la imparcialidad y la legitimidad operan de una manera que arroja dudas sobre la verosimilitud de la afirmación de que los tribunales no independientes pueden demostrar ser más efectivos que los independientes.

En materia judicial, la independencia e imparcialidad, simboliza, la equidad procesal y la connotación de un proceso profesional de toma de decisiones, aumentando la legitimidad que genera el proceso adjudicativo y fortaleciendo el capital de legitimidad general de la institución³⁴⁶.

H. MARCO PROCEDIMENTAL:

El marco procedimental³⁴⁷ es relevante para medir la eficacia, debido a que, en materia judicial o cuasi judicial, la forma establecida para el trabajo de casos determinará la terminación de estos y esto a su vez la eficacia de la institución para combatir la impunidad. Como afirman Kai Ambos y Stefanie Bock, no existen procedimientos uniformes, principalmente cuando se habla de derecho penal internacional. Cada procedimiento se desarrolla de acuerdo a su misión y

³⁴⁴ SHANY, Yuval. 2014. *Óp. Cit.* Páginas: 98 y 99

³⁴⁵ Ídem Página: 101

³⁴⁶ El nivel real de independencia e imparcialidad judicial ejercido por un tribunal internacional no se correlaciona siempre con la legitimidad empírica del tribunal. La aceptación de facto de la autoridad de un tribunal puede depender no solo de los valores de imparcialidad y profesionalismo, sino también de la capacidad de un tribunal para abordar los problemas de política de forma efectiva de forma tal que satisfagan, en todo o en parte, las preferencias importantes de los distritos electorales Ídem Página: 153

³⁴⁷ AMBOS, Kai y BOCK, Stefanie. 2012. *Procedural Regimes*. REYDAMS, Luc, WOUTERS, Jan y RYNGAERT, Cedric. Ed. 2012. *Óp. Cit.* Página: 540

competencia, en muchas de estas instituciones, si se les otorgan poderes discrecionales se puede promover la impunidad.

I. CONDICIONES FÁCTICAS Y COYUNTURALES:

Definitivamente las condiciones fácticas y coyunturales resultan ser elementos muy importantes cuando de medir eficacia se trata, debido a que estas fueron determinantes para la creación de la institución destinada a luchar contra la impunidad y son decisivos para su funcionamiento. Hay que tener presente que estas condiciones no son estáticas, su evolución constante también podría ser un riesgo para el funcionamiento de la institución, porque podrían complicar la aplicación y ejecución de mandato. Dentro de estas condiciones se encuentra el acceso que tiene la víctima o la población a la que va dirigida la institución a esta, el poder acercarse a denunciar, a iniciar un proceso y darle seguimiento al mismo, así como la reacción de estos ante la existencia y resultados de la institución.

Esto también se traduce en:

- a. Condiciones para juzgar o para desarrollar los casos.
- b. Condiciones para iniciar el proceso, personas calificadas, fallo y posibilidad de ejecutar y reparar.
- c. Condiciones esenciales para la creación de mecanismos para combatir la impunidad.
- d. Condiciones para mejorar la eficacia – que puedan hacer justicia.

Las instituciones creadas para combatir la impunidad pueden generar resultados inesperados que representan costos o beneficios sociales. Dichos costos y beneficios afectan la evaluación general de su eficiencia³⁴⁸. Es por eso muy importante que no se pierdan de vista estas condiciones.

J. DISTRIBUCIÓN DEL PODER – SELECCIÓN DE ACTORES -

Al definir la forma en que se distribuirá el poder dentro de la institución creada para combatir la impunidad, se está estableciendo quién o quiénes la conducirán y tomarán las decisiones jurídicas, políticas, económicas, sociales y todas aquellas que sean

³⁴⁸ SHANY, Yuval. 2014. *Óp. Cit.* Página: 56

necesarias. Esta definición muchas veces no resulta ser sencilla, ya que, si no se toma adecuadamente, influirá en la eficacia de la decisión.

Una vez definida la distribución de poder, se deben seleccionar los actores que intervendrán en el desarrollo de sus funciones, al hablar de selección de actores, es hacer referencia a los actores internos, porque los externos se pueden definir de alguna manera, pero estos son bastante impredecibles.

La selección de actores es importante, por ser quienes desarrollarán las funciones delegadas e influirán directamente en la eficacia de la institución.

K. FORTALEZAS

Las fortalezas son esenciales para la efectividad, son factores a favor para que la institución ejecute las funciones que le han sido delegadas de la mejor manera, contribuyen en positivo a su desarrollo. Las fortalezas deben ser lógicas y coherentes además de estar identificadas y de ser posible deben estar contenidas en el desarrollo del plan de funcionamiento de la institución.

L. COOPERACIÓN DE LOS ESTADOS:

En la medida en que los proveedores³⁴⁹ de mandato se componen de gobiernos nacionales elegidos democráticamente, las instituciones creadas para combatir la impunidad tienen cierta capacidad para remontar su autoridad a una decisión democráticamente ratificada que se hizo a nivel nacional, mitigando así la crítica del déficit democrático dirigida contra su ejercicio de poder.

En términos políticos, las instituciones pueden experimentar una reacción negativa si se desvían demasiado de los objetivos que prescriben sus proveedores de mandato. Tal castigo puede incluir, entre otras cosas, limitaciones de financiamiento, restricciones impuestas a los poderes legales, cambios en la composición y, en casos extremos, la terminación de las operaciones.

Pero incluso si la institución se ha desviado de sus objetivos no esperan ser castigados por sus proveedores de mandato, en la medida en que las instituciones

³⁴⁹ SHANY, Yuval. 2014. *Óp. Cit.* Página: 33

confíen en el apoyo y la cooperación continuados de sus proveedores de mandato. Además, dado que los únicos que pueden modificar el mandato son sus proveedores, de ahí los estudios de eficacia conforme a sus perspectivas pueden facilitar reformas en el mandato, estructura y proceso existentes, más que estudios de efectividad centrados en otros emisores de metas.

Cuanto más el ejercicio efectivo de la jurisdicción fundacional dependa del consentimiento de las partes en el caso, más estarán en condiciones de ejercer un control formal e informal permanente sobre el funcionamiento de la institución³⁵⁰.

M. APOYO EXTERNO Y COOPERACIÓN PARA ALCANZAR SU MISIÓN.

La mayoría de instituciones creadas para combatir la impunidad por la forma que han sido instituidas dependen del apoyo externo y la cooperación para poder desarrollar sus actividades, este apoyo se refleja en el tema político y económico, el apoyo externo en muchos casos, incluso ha significado la permanencia o cierre de estas. Este es un elemento esencial para la medición de efectividad, por ser ese apoyo indispensable para la ejecución del mandato.

5. EL MÉTODO IDEAL PARA MEDIR LA EFICACIA:

Después de estudiar y analizar los métodos empleados hasta el momento para medir la eficacia, se pudo determinar que los factores circunstanciales son muy importantes a estos factores también se les han denominado como circunstancias fácticas o coyunturales y para medir la eficacia desde este factor, las estadísticas no son el método idóneo. En este caso se necesitan de encuestas dirigidas al total de la población relacionada con la institución evaluada, encuesta que mida los factores de percepción. Por lo que para realizarla se necesita tener contacto directo con la sociedad involucrada, lo que para el presente trabajo resultó imposible de realizar.

Por medio de este método se podría determinar a quién afectó y cómo se le afectó, así como lo que en el momento actual se piensa sobre el problema que originó la institución de lucha contra la impunidad.

³⁵⁰ SHANY, Yuval. 2014. *Óp. Cit.* Página: 70

Al ser un enfoque de percepción, necesita que se involucren economistas, sociólogos, antropólogos, politólogos, abogados y psicólogos sociales. Que puedan orientar el estudio, de tal manera que se entienda la dimensión del impacto que se causó, en materia judicial, la vinculación con el sistema de justicia en donde se está aplicando, determinando con estadísticas y reacciones el impacto. Esto daría un resultado más completo e interesante ya que reflejaría diferentes situaciones, sin embargo, el presente trabajo no fue enfocado de esa manera.

6. OTROS CRITERIOS QUE SE PODRÍAN UTILIZAR:

Por otro lado, se tiene que la eficacia de la aplicación de justicia puede medirse según los efectos que causa en la población destinataria; siendo el Derecho Penal, la *ultima ratio*, esto atiende a la lógica que el éxito en los procesos también pueda tener como resultado el retorno al *status quo* y también la prevención del delito a través de desincentivar la comisión de actos ilegales. En ese sentido la medición de la eficacia debe auxiliarse en mecanismo de percepción social con el fin de comprender los efectos que ha tenido el castigo eficaz de un acto en el imaginario del pueblo.

Un ejemplo de medición de efectos en la aplicación de justicia pueden ser los resultados de la Iniciativa Regional de Seguridad para Centro América (CARSI por sus siglas en inglés), un esfuerzo auspiciado por el Gobierno de Estados Unidos a través de Centro América y que utilizó la medición de la percepción pública respecto de la problemática de la inseguridad para enfocar su actividad, encontrando respuestas sobre temas como la percepción sobre las causas, el grado de inseguridad local e incluso la percepción de riesgo ante un acto tan simple como caminar por la localidad de los barrios encuestados en la noche.³⁵¹

Todos estos factores ayudan a conocer la eficacia de la intervención de un esfuerzo como CARSI dado que su cometido final no es la implementación de esfuerzos en virtud del esfuerzo mismo sino un cambio específico en la conducta de las personas que conforman el grupo social. Sobre la metodología se observa que esta medición tuvo un involucramiento de la academia a través del Programa para la Opinión Pública

³⁵¹ BERK-SELIGSON, Susan, 2014. *Orcés, Diana y otros. Impact Evaluation: Guatemala Report. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional*. Estados Unidos. Páginas: 9 y 71. SIN ISBN.

de Latino América (LAPOP por sus siglas en inglés), de la Universidad de Vanderbilt; detallan que los mecanismos usados incluyen la entrevista en sitio con una amplia muestra de individuos para conformar una probabilidad nacional.³⁵²

Un esfuerzo en este sentido sería de gran utilidad para la determinación de la eficacia en diferentes modelos institucionales de lucha contra la impunidad, sería importante aplicar el mismo a la percepción pública de factores como las causas raíz de la impunidad, la percepción de probabilidad de captura ante la comisión de actos de corrupción e incluso la percepción del funcionamiento del sistema de justicia como tal.

Hay esfuerzos relacionados a la percepción pública de las entidades con incidencia en Guatemala a un nivel nacional y como resultado de la misma CICIG contaba con el porcentaje más alto de confianza por parte de la población colocándose en un 66% ³⁵³ , una percepción pública que supone un respaldo a su trabajo y contraponiéndose a la presidencia con un porcentaje de confianza de 11%. A pesar de ser un ejemplo de uso de la percepción pública para medir eficacia lo anterior puede ser complementado con la percepción sobre el alza o baja de factores que este esfuerzo de Naciones Unidas pretende erradicar, como la impunidad.

La medición de percepción pública es un esfuerzo titánico que requiere recursos económicos y humanos que superan el objetivo del presente trabajo, además, debe ser analizado por un grupo multidisciplinario que incluya las disciplinas de sociología, antropología, ciencia política y cualquiera otra que pueda auxiliar a la mejor comprensión del impacto que tiene la implementación de justicia en la lucha contra la impunidad en el ciudadano común.

Sin embargo, se plantea a manera de propuesta con el fin de mejorar los mecanismos con los cuales se conoce el éxito de este tipo de emprendimientos.

Otra vertiente de eficacia puede ser referida a los fines últimos de las instituciones, dado que un sistema de justicia obtiene sus mayores resultados cuando los casos a

³⁵² LATIN American Public Opinion Program. S.F. *Methods and Practices*. [en línea] Disponible en: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/methods-practices.php> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

³⁵³ VELÁSQUEZ, Doménica. 2015. *Encuesta Libre: Cicig se gana confianza y aprobación de los guatemaltecos*. [en línea] Disponible de: <https://www.prensalibre.com/guatemala/decision-libre-2015/cicig-se-gana-confianza-y-aprobacion-de-los-guatemaltecos> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

los que están referidos disminuyen en la vida real³⁵⁴. En ese sentido, cabría preguntarse si puede medirse la capacidad de incidir en el cumplimiento de la garantía de no repetición.

A continuación, se presenta una matriz³⁵⁵ que podría servir para el análisis de la efectividad:

	INSTITUCIÓN	Mandato	Duración del Mandato	Cesación de los hechos que originaron el mandato	Otros efectos

Para desarrollar el indicador de cesación de los hechos que originaron el mandato se haría necesario afinar la forma de medición e incluso analizar si procedería la elaboración de encuestas de percepción y/o un estudio masivo interdisciplinario sobre el estado de la impunidad que incluya investigación que contraste el universo de casos (en el caso de corrupción conocer el aproximado de casos existentes) con el número de casos judicializados.

7. CRITERIOS PARA MEDIR LA EFICACIA:

Luego de analizar los diferentes conceptos, formas de medir eficacia y elementos se ha decidido utilizar los siguientes criterios para medir la eficacia los cuales serán:

1. Eficacia en cuanto a la capacidad de procesar los casos que le han sido presentados. Aquí puede medirse la respuesta en tiempo, si se considera la premisa de justicia pronta y cumplida o su versión negativa, justicia retrasada/justicia denegada.
2. Eficacia en cuanto a procesar el universo de casos que caben en su mandato, ya sea de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes internacionales o crímenes específicos.

³⁵⁴ Esto quizás puede ser aplicable a ICTY y ICTR, pues su existencia es uno de los factores para que las gravísimas violaciones al derecho internacional humanitario no se repitieran.

³⁵⁵ Matriz de autoría propia

3. Eficacia en cuanto a promover la prevención general y especial, esto únicamente a aquellos que sea aplicable por su relación con el derecho penal, derecho penal internacional, derecho internacional penal.

Para la aplicación de estos criterios, se utilizará la siguiente tabla³⁵⁶:

	Institución	Mandato	Duración del Mandato	Cesación de los hechos que originaron el mandato	Inicio del primer juicio	Universo de casos	Casos procesados y/o relaciones procesales	Tiempo promedio de los casos	Casos pendientes de resolución	% Casos presentados versus casos resueltos	% Casos posibles de procesamiento versus casos resueltos
1											

³⁵⁶ Matriz de autoría propia

PARTE II

LOS ESFUERZOS INTERNACIONALES PARA COMBATIR LA IMPUNIDAD

SECCIÓN A

ESFUERZOS DESDE EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL

Se puede afirmar que: *“International criminal law provides a framework for resolving the paradox presented by the dual goals of accountability and political transition/reconciliation. It does not offer firm guidance on every aspect of the problem. Rather, it helps define the boundaries of permissible impunity. To be sure,”*³⁵⁷ este marco se da desde los diferentes instrumentos internacionales, que han dado como resultado la creación de diferentes tribunales internacionales para combatir la impunidad hasta llegar a la creación de la Corte Penal Internacional, con el objetivo específico de juzgar delitos relacionados con esta materia por ausencia de justicia al interior de cada uno de los países miembros y con jurisdicción en ellos.

A raíz de la comisión de graves y atroces delitos³⁵⁸ contra la humanidad, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, surgió el interés de la Comunidad Internacional de establecer tribunales Internacionales con jurisdicción sobre determinados delitos, para asegurar la justicia y con la aspiración de la no repetición de los hechos.

Esfuerzos que se vieron materializados en la creación de:

- a. Tribunales Militares Internacionales,
- b. Tribunales Ad-hoc,
- c. Tribunales especiales,
- d. Mecanismos Híbridos
- e. Aplicación del Principio de Justicia Universal
- f. Corte Penal Internacional,

³⁵⁷ BURKE- WHITE, William, 2000. *Protecting the Minority: A Place for Impunity? An Illustrated Survey of Amnesty Legislation, Its Conformity with International Legal Obligations, and Its Potential as a Tool for Minority - Majority Reconciliation*. Journal on Europolitics and Minority Issues in Europe. Germany, Página: 49. ISBN: 978-92-9198-157-1

³⁵⁸ La naturaleza de los delitos cometidos en conjunto con los bienes jurídicos afectados y el alcance de los daños ocasionados hacen que estos tribunales cumplan un papel fundamental en la exaltación de la esencia humana y la obtención de justicia para la humanidad.

Por medio de ellos, la Comunidad Internacional manifestó la no tolerancia de la impunidad, desestimando el argumento político a su favor que concebía la impunidad como un mal necesario para la transición política hacia la democracia.

Finalizada la segunda guerra mundial, se dan pasos significativos en la materia, con el establecimiento y puesta en funcionamiento de los Tribunales Militares Internacionales de Núremberg y para el Extremo Oriente³⁵⁹, en 1945 y 1946 respectivamente, con el fin de enjuiciar los crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Estos Tribunales constituyen un precedente importante, en la lucha contra la impunidad, siendo las únicas instancias internacionales de juzgamiento penal de responsables de crímenes contra la humanidad que existieron hasta el fin de la guerra fría, pese a que en ese período se cometieron numerosos y aberrantes atropellos en contra de la dignidad humana. Situación derivada y agravada por la contienda internacional entre Estados Unidos con la ex Unión Soviética, en la Organización de las Naciones Unidas, que representó un obstáculo insalvable a cualquier avance en la materia, por la acción del poder de veto de los dos referentes de ambos bloques antagónicos dentro del Consejo de Seguridad³⁶⁰, y la oposición manifiesta de los mismos para que se avanzara en la creación del establecimiento de una corte penal internacional de carácter permanente.

Es así, como la convergencia de las diferentes vertientes de protección de los derechos humanos se ha plasmado desde los orígenes de los procesos llevados a cabo en el plano internacional, para juzgar a las personas responsables de los más graves crímenes contra la Comunidad Internacional; así, el tratamiento y aplicación por las cortes internacionales es idéntico frente a violaciones masivas o sistemáticas

³⁵⁹ Tribunales creados ad hoc y de modo unilateral, (la justicia de los vencedores) y con flagrante vulneración de los principios elementales del derecho sustantivo y procesal penal, fundamentalmente, el principio de legalidad de los delitos y de las penas, así como que la instrucción y enjuiciamiento fueron llevados a cabo por el mismo órgano judicial o la cuestionable imparcialidad de los jueces. Estos juicios fueron seguidos de diferentes tribunales de guerra formados por los aliados en sus respectivas zonas de ocupación en Alemania, y varios países de Europa juzgaron a nazis y nacionales que colaboraron con aquellos.

³⁶⁰ Según la Carta de las Naciones Unidas, además de Estados Unidos y la Unión Soviética los otros Estados que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y gozan del derecho de veto son Francia, el Reino Unido y China. A la disolución de la Unión Soviética, la banca permanente que ésta ocupara fue atribuida a la Federación Rusa como sucesora.

de derechos humanos en tiempo de paz o de conflicto armado (crímenes de lesa humanidad) y de infracciones graves al derecho humanitario (crímenes de guerra).

Ya disuelta la ex Unión Soviética, se dio lugar a la aprobación de las resoluciones del Consejo de Seguridad, por las cuales se crearon los Tribunales penales para la Ex Yugoslavia³⁶¹ y para Ruanda³⁶². La nueva dirección tomada en el Consejo de Seguridad con esta postura, fue de considerar indispensable el juzgamiento de los responsables de los crímenes más atroces contra la dignidad de las personas, como parte integrante del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales³⁶³.

Así se estableció un marco propicio para retomar las negociaciones que finalizaron con la adopción, luego de una conferencia internacional³⁶⁴, del Estatuto de Roma por el cual se establece la Corte Penal Internacional, una institución judicial de carácter permanente y con aplicación en todos los Estados que la ratifiquen.

En conclusión, la evolución más reciente del Derecho Internacional ha tenido una de sus expresiones más avanzadas en la profundización de los mecanismos de aplicación del Derecho Penal Internacional, como fórmula jurídica de la lucha contra la impunidad. Una de las grandes preocupaciones de las Naciones Unidas ha sido la persecución y castigo de los responsables de graves y masivas violaciones de los derechos humanos y de los principios básicos del Derechos Internacional Humanitario. Para lo cual ha decidido: ³⁶⁵

- II. Expandir el ámbito de la jurisdicción penal de los Estados respecto de los delitos contra la Comunidad Internacional y el derecho de gentes, ampliando los supuestos en lo que se reconoce el criterio de universalidad de la jurisdicción penal de los Estados.

³⁶¹ ORGANIZACIÓN de las Naciones Unidas. *Consejo de Seguridad*: Resolución 808/93.

³⁶² ORGANIZACIÓN de las Naciones Unidas. *Consejo de Seguridad*: Resolución 955/94.

³⁶³ El Consejo de Seguridad ha creado estos dos tribunales *ad hoc* en el marco de la competencia que le es otorgada por el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas: "Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión".

³⁶⁴ Para un análisis del proceso de la conferencia y del contenido principal del Estatuto de Roma ver SALVIOLI, Fabián, 1999. *¿La justicia que viene? Un análisis de la Conferencia de las Naciones Unidas para el establecimiento de una Corte Penal Internacional*, en *Ágora*, revista de Ciencias Sociales 2, pp. 173 - 192 Ed. Centro de Estudios Políticos y Sociales, Universidad de Valencia, España. Sin ISBN.

³⁶⁵ GONZÁLEZ VEGA, Ignacio. 2010. *Breve diagnóstico de la jurisdicción penal universal en su respuesta a la impunidad de los crímenes internacionales*. Jueces para la democracia, N° 67, págs. 119-131.

III. Crear Tribunales Penales Internacionales, vía utilizada por el Consejo de Seguridad para crear órganos *ad hoc* y más tarde, con un carácter permanente y universal, con la aprobación del Estatuto de Roma.

IV. Buscar nuevas fórmulas jurisdiccionales para encarar la represión de los crímenes cometidos con la aparición de tribunales internacionalizados de naturaleza mixta³⁶⁶ o híbrida³⁶⁷.

El papel de la Justicia Penal Internacional debe ser el establecer el rechazo y condena las conductas en contra de la dignidad humana, no el de restablecer la paz y reconciliación entre los enemigos en conflicto.

En este orden de ideas y el orden de la investigación, esta parte del trabajo esta dedica estudiar y analizar la eficacia de la lucha contra la impunidad desde estos esfuerzos.

³⁶⁶ Los tribunales mixtos se definen como tribunales de composición y jurisdicción mezcladas, que comprenden aspectos tanto nacionales como internacionales, y operan normalmente dentro de la jurisdicción en que se produjeron los delitos.

³⁶⁷ Sierra Leona, Camboya, Timor Oriental, Kosovo, Bosnia - Herzegovina, Irak, Líbano, CICIG.

SUB - SECCIÓN A.1

TRIBUNALES MILITARES INTERNACIONALES

Los Tribunales Militares Internacionales de Núremberg y Tokio nacieron por la necesidad de castigar el Holocausto, haciendo que la comunidad internacional modificara sus políticas y postura frente a la instauración de mecanismos de enjuiciamiento y castigo, en otras palabras³⁶⁸, nacieron con el fin de justiciabilizar las violaciones a las normas internacionales existentes en su momento y que conformaban el *status quo* en ese momento para la defensa de los derechos reconocidos universalmente por la comunidad de naciones en ese momento³⁶⁹ y así combatir la impunidad.

Rompieron con la regla de que sólo los Estados de forma individual estaban habilitados a emitir reglas penales, ya que esta regla ignoraba la existencia de comunidad internacional, que a partir de la creación de estos tomó relevancia³⁷⁰.

Fueron calificados como de justicia de los vencedores, sin embargo; no se puede perder de vista que fueron el resultado de un siglo de reflexión, contando entre sus antecedentes con:

- a. Declaración de París, adoptada en la guerra de Crimea de 1856.
- b. Código Lieber de 1863.
- c. Convenio de Ginebra de 1864.
- d. Convenciones de la Haya de 1899 y 1907.
- e. Los juicios de Leipzig entre 1919 y 1922.
- f. Protocolo de 1924.

³⁶⁸ S.A. 2008. *Los Tribunales Militares Internacionales* [en línea]. Cátedra Iberoamericana. [en línea]. Universitat de les Illes Balears. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] ISBN: 978-84-936357-4-9. Disponible en: <https://fci.uib.es/Servicios/libros/veracruz/Fraschina/1.-Los-Tribunales-Militares-Internacionales.cid210831>

³⁶⁹ SANDOVAL Mesa, Jaime Alberto. 2012. El Desarrollo de la competencia internacional. Primeros aportes desde Núremberg y Tokio. En: *Revista Prolegómenos – Derechos y Valores* [en línea]. Bogotá, Página: 40. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] Sin ISSN. Disponible en: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:reTj2SQx2MYJ:https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4278169.pdf+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=gt>

³⁷⁰ GÓMEZ Robledo, Alonso. 2003. *Los Procesos de Núremberg y Tokio: Precedentes de la Corte Penal Internacional. Derecho Internacional* [en línea]. Tema Selectos. Universidad Panamericana. Sin ISSN. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] Disponible en: <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/ars-iuris/article/view/2468/2322>

- g. Acuerdos de Locarno de 1925.
- h. Pacto de Briand – Kellog de 1927³⁷¹.

Los Tribunales Militares Internacionales previeron los consensos entre diferentes sistemas jurídicos, que no estaban bajo las reglas del Derecho Internacional vigente en ese momento, dando lugar al desarrollo de la fundamentación sobre la competencia y las normas de derecho aplicables³⁷². En estos se postuló que la responsabilidad criminal quedaba reglamentada en forma directa por la normativa de derecho internacional derivadas de los Estatutos³⁷³.

En muchos sentidos, Núremberg y Tokio fueron similares deliberadamente, ya que el diseño del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente se basó en el del Tribunal Militar Internacional de Núremberg.³⁷⁴

Conocer su historia representa la oportunidad de exponer los hechos al público mediante acusación, sentencia y publicación de documentos de prueba, etc., e informar a las personas de los crímenes pasados y educar a las generaciones futuras para evitar tales tragedias.³⁷⁵ Para Christian Tomuschat representan un hito en el desarrollo del derecho internacional³⁷⁶ y efectivamente lo fueron, en consecuencia, para los fines de esta investigación lo pertinente es evaluar el procedimiento para determinar su efectividad.

³⁷¹ Que condenaba utilizar la guerra como herramienta de política nacional.

³⁷² S.A. Óp. Cit.

³⁷³ Ídem Página: 750.

³⁷⁴ KAUFMAN, Zachary D. 2010. *The Nuremberg Tribunal v. The Tokyo Tribunal: Desings, Staffs, and Operations [en línea]*. En: John Marshall Law Review, Vol. 43, No. 3, pp. 753-768, Página: 754. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] Sin ISBN. Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1917036.

³⁷⁵ WANHONG, Zhang. 2005-2006. *From Nuremberg to Tokyo: some reflections on the Tokyo Trial (on the sixtieth anniversary of the Nuremberg Trials)* [en línea]. En: Cardozo Law Review. Vol: 27. Página: 1676. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

Sin ISBN. Disponible en: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/cdozo27&div=72&id=&page=>

³⁷⁶ TOMUSCHAT, Christian. 2006. *The Legacy of Nuremberg [en línea]*. En: Journal of International Criminal Justice. Volume 4, 2006, Página: 830. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] ISBN: 9780199570218. Disponible en: <https://academic.oup.com/jicj/article/4/4/830/802420>

CAPÍTULO I

TRIBUNAL MILITAR INTERNACIONAL DE NÚREMBERG

ANTECEDENTES

El Tribunal Militar Internacional de Núremberg, nace como un tribunal militar, para combatir la impunidad de los sucesos generados tras la Segunda Guerra Mundial, impulsado por los principales integrantes de los países vencedores conformados por los Estados Unidos de América, el gobierno provisional de la República de Francia, el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas³⁷⁷. Creado mediante el Acuerdo y Estatuto de Londres de 1945, firmado el 8 de agosto de 1945³⁷⁸. El Estatuto es un instrumento de lucha contra la impunidad de crímenes cometidos en defensa de los intereses de los países del Eje Europeo, orientado para que dichas atrocidades no quedaran sin castigo.

Tuvo como preámbulo las conferencias de Moscú de octubre de 1943³⁷⁹, Teherán (1943), Yalta (1945) y Postdam (1945) firmadas por el presidente de Estados Unidos, “Franklin D. Roosevelt, el primer ministro inglés Winston Churchill y el líder soviético Josef Stalin”³⁸⁰. En donde se comprometieron a juzgar y condenar a los dirigentes

³⁷⁷ SERRANO, Mariol. 2002. El Genocidio sobre la base de Núremberg. Valoración crítica del tipo actual. En: *Nürnberger Menschenrechtszentrum* [en línea]. Disponible en: <https://www.menschenrechte.org/es/2002/05/20/el-genocidio-sobre-la-base-de-nuremberg-valoracion-cri%C2%ADtica-del-tipo-actual/> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

Artículo 1 del ESTATUTO DEL TRIBUNAL MILITAR INTERNACIONAL DE NÚREMBERG. 1945.

³⁷⁸ BASSIOUNI, Cherif. 1986. *Nuremberg Forty Years After: An Introduction Case* [en línea]. En: Western Reserve journal of Interantional Law. Vol 18. Página: 261. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] Sin ISSN. Disponible en: <https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=2209&context=jil>

³⁷⁹ El 20 de octubre de 1943, los Aliados crean la United Nations War Crimes Commission.

³⁸⁰ AMENÓS Vidal, José María y otros. 2007. *Tribunal de Núremberg* [en línea]. Disponible en: <https://www.eumed.net/libros-gratis/2007c/329/Tribunal%20de%20Nuremberg.htm> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

alemanes al finalizar la guerra³⁸¹, también se determinó dos modalidades de juzgamiento³⁸² las cuales fueron:

- a. *“En la ocasión de una tregua, los responsables de los crímenes serían enviados y juzgados al país de comisión de los crímenes, aplicándose las leyes de la nación interesada”*³⁸³.
- b. *“Los gobiernos aliados castigarían a los grandes criminales de guerra, cuyos crímenes no podrían ser juzgados en ningún lugar geográfico”*³⁸⁴.

Con la creación del tribunal se rompió con la costumbre y los principios del Derecho Internacional con el fin de combatir la impunidad, abriendo el camino para la creación de instituciones e instrumentos internacionales con este fin, como la implementación de tribunales ad hoc.

El Tribunal promovió diversos casos, procesando a los principales criminales de guerra, bajo la Orden No 10 del Consejo de Control. Estos juicios se conocieron popularmente como "Juicios de crímenes de guerra" a pesar de que los crímenes por los cuales fueron acusados no estaban exclusivamente dentro del significado técnico de "Crímenes de guerra"³⁸⁵. Como señaló el General Román Rudenko, Fiscal asignado por la Unión Soviética, que *“era el primer caso en la Historia en el que comparecían ante un tribunal los criminales que se habían apoderado de un Estado y habían convertido este Estado en el arma de sus terribles crímenes”*³⁸⁶.

Sin embargo; como afirma Laura de Jesús Sen: *“Si algún procedimiento en la historia reciente ha estado envuelto en polémica, y que aún a día de hoy, pese a haber sido celebrado hace más de sesenta años, sigue dando de qué hablar, es sin lugar a*

³⁸¹ MOLINA, Lucas. *Proceso de Núremberg, 65 años después*. En: *Revista de Historia y Actualidad Militar* [en línea]. Disponible en: <https://es.slideshare.net/martinlorcayanez/juicio-Núremberg-1945-1946> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

³⁸² LOCK, Tobias y Julia Riem. 2005. *Judging Núremberg: The Laws, the Rallies, the Trials* [en línea]. German Law Journal. Vol. 06. No. 12. Página: 1829. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] ISSN 2071-8322 Disponible en: <https://www.yumpu.com/en/document/view/4097028/judging-Núremberg-the-laws-the-rallies-the-trials>

³⁸³ Ídem.

³⁸⁴ Ídem.

³⁸⁵ ³⁸⁵BASSIOUNI, Cherif. 1986. *Óp. Cit.*

³⁸⁶ S.A., S.F., *Los juicios de Núremberg*. [en línea]. Disponible en: <http://bestpicsgrindecarl.cf/acusaciones-djcg300-los-juicios-de-nuremberg-2019-2020> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

dudas el conocido como “los juicios de Nüremberg”, ya que si bien es cierto que pudiera resultar necesario algún mecanismo que permitiera juzgar y sancionar los crímenes cometidos por el régimen nacionalsocialista del III Reich durante la segunda guerra mundial, este proceso supuso una ruptura total con los moldes jurídicos generalmente aceptados hasta aquel momento, conllevando así a la consiguiente modificación de la legislación internacional existente al respecto”³⁸⁷.

En total se realizaron 12 juicios entre octubre de 1945 y 1947, el más famoso es el primero, llamado “El de los médicos”, que se conoce con ese nombre porque incluyó a los médicos que realizaron experimentos humanos, siendo el que sentó las bases para la realización de los demás. Con estos precedentes se puede iniciar el análisis de eficacia a continuación.

1. ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ FUE CREADO?

Este Tribunal surge con el fin de enjuiciar a los militares nazis por los crímenes ejecutados en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y que estos hechos tan atroces no quedaran en la impunidad. Tal como lo establece al inicio de su considerando del Estatuto de creación, en donde se expresa: “...Y considerando que en la Declaración de Moscú de 30 de octubre de 1943 sobre las atrocidades cometidas por los alemanes en la Europa ocupada se hacía constar que aquellos funcionarios alemanes y los hombres y miembros del partido Nazi que hayan sido responsables de crímenes y atrocidades o hayan participado en los mismos con su consentimiento...”

Esto supuso un rompimiento total con los paradigmas existentes en ese momento, dando como resultado la modificación de las normas de derecho internacional³⁸⁸.

³⁸⁷ SEN, Laura de Jesús. 2015. Los juicios de Nüremberg. [en línea]. En: Abogados de Valladolid, En: *Revista semestral del Ilre*. Colegio de Abogados de Valladolid. 1er Semestre 2013. Página 27. Sin ISSN. Disponible en: <https://www.icava.org/revista-abogados-de-valladolid> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

³⁸⁸ SEN, Laura de Jesús. 2014. Los juicios de Nüremberg. [en línea]. En: Abogados de Valladolid. En *Revista semestral del Ilre*. Colegio de Abogados de Valladolid, Extraordinario de Revisión 27. Primer Semestre. Valladolid. Disponible en: <https://www.icava.org/revista-abogados-de-valladolid> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

2. PAPEL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN SU CREACIÓN

Para hablar del papel de la comunidad internacional es importante tomar en cuenta lo que menciona Christian Tomuschat: “Mientras los gobiernos sean los dueños exclusivos de todas las ocurrencias dentro de sus fronteras, el impacto del derecho internacional podría ser descartado como marginal o incluso insignificante”³⁸⁹.

Núremberg, junto con la Carta de las Naciones Unidas, rompió con el punto de vista restrictivo que ignoraba la existencia de una comunidad internacional³⁹⁰ y marcó el inicio de “la comunidad internacional”³⁹¹, como un concepto legal que es más que una construcción académica.

Para Jaime Alberto Sandoval Mesa, *“es frecuente en este tipo de jurisdicciones, los sucesos y el contexto determinan el fenómeno posterior que desemboca en crisis y violencia a gran escala, que después debe ser reprimida por la comunidad internacional.”*³⁹² Lo que provocó que las potencias aliadas conformadas por el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno provisional de la República de Francia, el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se plantearan la posibilidad de hacer justicia y procesar a los responsables de los hechos. Es por eso que en el Estatuto se denominan como “los signatarios”, obrando en defensa de los intereses de todas las Naciones por medio de sus representantes, autorizados como correspondía, resolviendo la creación del acuerdo.

Núremberg tradujo los valores centrales de los estados líderes en las provisiones de un Código Penal que complementó estas disposiciones al mismo tiempo con un mecanismo de ejecución eficaz³⁹³. Dando como resultado que una red de

³⁸⁹ TOMUSCHAT, Christian. *Óp. Cit. Páginas:* 838

³⁹⁰ GÓMEZ Robledo, Alonso. 2003. *Los procesos de Nuremberg y Tokio: Precedentes de la Corte Penal Internacional* [en línea]. Facultad de Derecho, Universidad Panamericana. Página: 119. Sin ISSN. Disponible en: <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/ars-juris/article/view/2468/2322> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

³⁹¹ Es cierto que la comunidad internacional es un concepto que carece de contornos absolutamente claros. Pero puede hacerse visible y tomar forma concreta a través de reglas y mecanismos diseñados para defender ciertos valores comunes, cuya integridad es esencial para la existencia pacífica de la humanidad en su conjunto.

³⁹² SANDOVAL Mesa, Jaime Alberto. 2012. *Óp. Cit. Páginas:* 41 y 42.

³⁹³ Dado que el ejercicio de la jurisdicción penal pertenece a las funciones clave del poder gubernamental, el núcleo se creó a partir de un desarrollo que encontró su punto culminante en los

instituciones, que pertenecen a una estructura general que tenía primacía sobre la soberanía del estado, que estaba emergiendo y expandiéndose lentamente. El Tribunal Militar Internacional de Núremberg demostró que, de hecho, era factible en las condiciones reales de la vida internacional llevar a cabo un proceso penal bajo los auspicios de una autoridad internacional. El procesamiento penal internacional se convirtió así en el sello distintivo del surgimiento de una comunidad internacional.

3. ¿CÓMO SE ABORDÓ EL TEMA DE LA SOBERANÍA?

Al hablar de la soberanía y del funcionamiento de un tribunal internacional es importante tomar en cuenta lo que menciona Christian Tomuschat y que fue citado en el numeral 2.³⁹⁴. Después de la guerra, Alemania quedó sin gobierno por lo que se creó el Consejo de Control para Alemania, como órgano de ocupación militar que gobernó después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial el territorio de las zonas del de ocupación Aliadas y Austria. El consejo estaba integrado por la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido y Francia y fue requerido para establecer planes para la Europa de la posguerra, modificar las fronteras y transferir poblaciones entre Europa del Este y Alemania.

Los mismos miembros del consejo fueron quienes crearon el Tribunal Militar Internacional, y es claro que en ese período de post guerra Alemania no podía invocar soberanía, porque simplemente esta no existía.

Tomuschat³⁹⁵ explica que a partir de Núremberg desaparece el poder soberano absoluto. Hasta esta instancia, la soberanía del Estado había sido el pilar fundamental del orden jurídico internacional. Incluso la Carta de las Naciones Unidas enuncia la igualdad soberana de los estados como el primero de los principios fundamentales que rigen las relaciones mutuas entre los estados³⁹⁶.

dos tribunales especiales establecidos por el Consejo de Seguridad y la Corte Penal Internacional en virtud del Estatuto de Roma.

³⁹⁴ TOMUSCHAT, Christian. *Óp. Cit.* Páginas: 838

³⁹⁵ Ídem Página: 837

³⁹⁶ "Artículo 2 Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios: 1. La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros.

Bajo el régimen del derecho internacional "clásico", lo que sucedió dentro de un estado fue eliminado casi por completo del impacto legal del derecho internacional. La doctrina dualista afirmaba la existencia de una línea divisoria hermética entre el derecho nacional e internacional. En consecuencia,

Núremberg eliminó el paraguas protector que la soberanía proporcionaba a los perpetradores. El Estatuto del Tribunal Militar Internacional ya no permitía a los líderes políticos protegerse detrás de sus funciones de oficiales. El artículo 6 estipula explícitamente que: *“El cargo de oficial de los acusados, ya sean Jefes de Estado o funcionarios a cargo de Departamentos del Gobierno no les exonerará de las responsabilidades ni servirá para atenuar la pena.”*

Esta propuesta se ha introducido en todos los estatutos posteriores de los tribunales internacionales.

4. TIPO DE GOBIERNO ¿DEMOCRACIA?

Lo primero que hay que entender es que, durante la Segunda Guerra Mundial y después de esta, el concepto democracia y su aplicación no cobraba tanta importancia como en la actualidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania no vivía en democracia, era un régimen totalitarista³⁹⁷ como muchos otros países en la Europa y durante la post guerra se instauró un gobierno militar, liderado por el Consejo de Control para Alemania el cual fue una entidad de ocupación militar en las zonas de ocupación aliadas en Alemania y Austria, gobernándolas después del fin de la

la forma en que un gobierno trataba a sus ciudadanos se consideraba un asunto exclusivamente interno. Los derechos humanos llegaron al escenario del derecho internacional solo en virtud de la Carta de las Naciones Unidas. Del mismo modo, el derecho penal estaba dominado por los dos principios rectores de territorialidad y nacionalidad. Los estados tenían derecho a procesar cualquier delito cometido en sus territorios, y también estaban autorizados a procesar cualquier delito cometido por sus nacionales dentro o fuera de sus territorios. Sin embargo, los terceros estados no tuvieron voz en estos asuntos. No existían instituciones internacionales para el enjuiciamiento de delitos graves. A modo de tratado, los estados podrían acordar identificar ciertos delitos que afectan negativamente a la sociedad internacional en su conjunto como delitos susceptibles de ser procesados bajo el principio de jurisdicción universal. Pero la lista de esos delitos carecía de una dimensión política específica o implicaciones, ya que no lo era. incluyen los delitos que involucran directamente a los miembros de gobiernos extranjeros, que podrían estar dentro del alcance de dichos delitos solo por accidente, si se asocian con un delito común”. TOMUSCHAT, Christian. Óp. Cit. Páginas: 838

³⁹⁷ *“Como totalitarismo se denomina el tipo de régimen político que se caracteriza por concentrar todos los poderes del Estado en un grupo o partido.*

Como tal, no es una ideología política, sino un régimen en el cual todos los poderes están en manos de un partido único y su líder supremo, y donde todos los órdenes de la vida se encuentran subordinados al Estado. De allí que algunas de sus características fundamentales como sistema sea su exagerada exaltación del Estado y el poder prácticamente ilimitado que otorga su líder.

En los totalitarismos no existe separación de poderes ni contrapeso institucional, como en los sistemas democráticos, de modo que las libertades (individuales, políticas, de expresión, de conciencia, de culto, etc.) se encuentran severamente limitadas y los derechos humanos amenazados”. SIGNIFICADOS. S.F. Significado de Totalitarismo. [en línea]. Disponible en: <https://www.significados.com/totalitarismo/> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

Segunda Guerra. Estaba conformado por Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido y Francia.

Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido y Francia fueron identificados como los cuatro poderes aliados, ejerciendo un co-dominio supremo del poder en Alemania; el Consejo fue la única autoridad legal en Alemania que llegó en reemplazo del gobierno nazi.

5. ¿ESTADO DE DERECHO?

Definitivamente el Tribunal Militar Internacional de Núremberg no nació bajo el manto del estado de derecho alemán existente en el momento, como ya se ha indicado surgió por decisión de los Aliados, quienes tenían el dominio político de la Alemania de la post guerra.

6. ¿ORIGEN BASADO EN CIERTAS SUPOSICIONES O CONDICIONES FÁCTICAS?

Su origen queda plasmado en el Estatuto de creación en el cual se expresa la intención de conducir ante la justicia a los criminales de guerra, juzgar las atrocidades cometidas por los alemanes y hombres del partido Nazi³⁹⁸. Por lo que se deriva de condiciones fácticas y coyunturales de la época. Esto fue plasmado en el estatuto de creación así: *“...la Declaración de Moscú de 30 de octubre de 1943 sobre las atrocidades cometidas por los alemanes en la Europa ocupada se hacía constar que aquellos funcionarios alemanes y los hombres y miembros del partido Nazi que hayan sido responsables de crímenes y atrocidades o hayan participado en los mismos con su consentimiento...”*

Siendo específicos que la condición fáctica fue el consentimiento en la participación de los hechos.

³⁹⁸ S.A., S.F., 1945. Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. En: *Cruz Roja* [en línea]. Disponible en: http://www.cruzroja.es/principal/documents/1750782/1852538/estatuto_del_tribunal_de_nuremberg.pdf/20090fa2-e5bf-447a-aa96-612403df2a66 [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

7. DOCUMENTO DE CREACIÓN

El 8 de agosto de 1945, se firmó la Carta de Londres, y abrió el camino para el enjuiciamiento de los principales criminales de guerra ante el Tribunal Militar Internacional Especial de Núremberg³⁹⁹, conocidos como Acuerdo y Estatuto de Londres de 1945.

En el Estatuto se creó un Tribunal Internacional que juzgaría las conductas de los criminales de guerra nazi⁴⁰⁰. Conductas tipificadas como crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad⁴⁰¹.

“El Estatuto consistía en la omisión de la conexión entre el estado de guerra y la comisión de crímenes contra la humanidad, de forma que permitía el enjuiciamiento de los crímenes cometidos antes de 1939 contra civiles alemanes, incluyendo la persecución de los judíos y la eutanasia de los discapacitados”⁴⁰².

El Estatuto facultaba al Tribunal para juzgar y condenar a funcionarios alemanes y personas del partido Nazi responsables o partícipes de los crímenes especificados en el artículo 6 del Estatuto como crímenes contra la paz, la guerra y la humanidad, quedando su mandato como se especifica a continuación.

8. MANDATO

El mandato es bastante específico, en este se estableció el enjuiciamiento a nivel internacional e interno de los responsables de los delitos cometidos durante la guerra, estableciendo la competencia, materia, temporalidad y jurisdicción del mismo.

Su funcionamiento se basaba en los principios de justicia e intermediación orientando su labor hacia la obtención de una justicia pronta y cumplida. No mencionaba expresamente la palabra impunidad, pero si se deduce del espíritu tanto de sus considerandos como en su articulado⁴⁰³. El primer considerando mostraba la finalidad

³⁹⁹ BASSIOUNI, Cherif. 1986. *Óp. Cit.*

⁴⁰⁰ Ídem

⁴⁰¹ S.A. Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. 1945 *Óp. Cit.* Art. 6

⁴⁰² S.A. Los Tribunales Militares Internacionales. *Óp. Cit.*

⁴⁰³ El segundo considerando busca fortalecer el Estado de derecho y restaurar la credibilidad en los órganos de justicia al llevar a los responsables ante las autoridades de los lugares en donde cometieron sus crímenes para responder por sus actos expresando lo acordado en la Declaración de Moscú el 30 de octubre de 1943 advirtiendo que *“aquellos funcionarios alemanes y los hombres y miembros del*

que tenía el tribunal militar de que *“los criminales de guerra sean conducidos ante la justicia”*. Ello implicaba que los responsables de los crímenes establecidos en el artículo 6 fueran enjuiciados ante el Tribunal conformado, para la investigación de los hechos que se le imputaban, la determinación de su grado de participación, el esclarecimiento de los hechos ocurridos y su respectiva reparación.

Como se ha mencionado, desde sus considerandos es claro al establecer los sujetos a quienes les era aplicable el mismo, refiriéndose a *“...funcionarios alemanes y los hombres y miembros del partido Nazi que hayan sido responsables de crímenes y atrocidades o hayan participado en los mismos”*.

Siendo un tribunal sin precedentes y que se trató de regular con la normativa de derecho internacional público en su artículo 1 se instituyeron como principios de los procesos la justicia e inmediación con el objetivo de enjuiciar y condenar a los principales criminales del eje europeo. Como se puede observar, desde que se consigna el fin de condenar, da la impresión de que los acusados no tenían posibilidad de ser absueltos.

En el artículo 2 se estableció la composición de tribunal, siendo este de cuatro miembros cada uno con un sustituto y que representaban a los países signatarios del acuerdo.

El artículo 4 es particularmente interesante desde la óptica del debido proceso actual, ya que no admitía recusaciones en contra de ninguno de los miembros del tribunal. A su vez regulaba la composición del mismo.

En su artículo 6 se establece su alcance al consignar que estaba autorizado para juzgar y condenar a las personas que habían actuado individualmente o como miembros de organizaciones en defensa de los intereses de los países del Eje Europeo.

Se aprecia en su articulado la intención que se tuvo de someter a los principales responsables sin distinción alguna ante el Tribunal. En sus artículos 7 y 8 abordando

partido Nazi que hayan sido responsables de crímenes y atrocidades o hayan participado en los mismos con su consentimiento serán devueltos a los países en los que cometieron sus abominables actos para que puedan ser juzgados y condenados con arreglo a las leyes de esos países liberados y de los gobiernos libres que se crearán en dichos países.”

casos especiales que podrían llegar a obstaculizar la persecución criminal de determinados actores. De esta forma, el Tribunal⁴⁰⁴ rechaza el principal argumento de la defensa, que fortalecía la impunidad, consistente en que los actos de gobierno no podían ser sometidos a juzgamiento, mostrando un esfuerzo por asegurar que ninguna persona escapara de un proceso judicial amparándose en el cargo que desempeñaba en su momento, prerrogativa que permitía la obstaculización del proceso, razón por la que en el artículo 7 del Estatuto se descarta como motivo suficiente para la exoneración de su responsabilidad así como circunstancia atenuante de la pena⁴⁰⁵.

Del contenido del Estatuto en sus artículos (Artículos 9, 10 y 11) se deduce el esfuerzo por combatir la impunidad de que gozaban las organizaciones criminales, estableciendo el procedimiento para que un grupo u organización fuera declarado criminal por parte del Tribunal ampliando la esfera de la administración de justicia, al facultar a las autoridades nacionales correspondientes de cada uno de los signatarios, para enjuiciar a sus miembros ante los tribunales nacionales, militares o de ocupación.

En “aras de la justicia” se incorpora la posibilidad de emprender acciones judiciales contra personas que no han sido halladas, permitiendo la celebración de la vista en su ausencia, resultando la figura del juicio in absentia como una herramienta para garantizar la persecución y enjuiciamiento de las personas responsables de delitos que figuran en el artículo 6 del Estatuto.

El artículo 16 es particularmente importante debido a que invocaba el principio de un Juicio Justo, regulando este en cuatro premisas, siendo estas:

- La necesidad de que existiera una acusación con el relato de hechos completo, traducido al idioma del acusado.

⁴⁰⁴ El Tribunal establece que las personas son sujetos de obligaciones internacionales trascendiendo las obligaciones fijadas por los Estados de forma particular, *“los delitos contra el Derecho Internacional son cometidos por hombres, no por entidades abstractas y solo mediante el castigo de los individuos que cometen tales delitos pueden aplicarse las disposiciones del derecho internacional”*.

⁴⁰⁵ Asimismo, se establece que las personas que cometieron los actos contenidos en el artículo 6 actuando en obediencia de una orden también serán enjuiciadas pero dicha situación podría ser tomada en cuenta como atenuante de la pena en los casos en que lo considere el TMIN. Se discute el papel que tienen las personas que no participan de forma material en el delito esclareciendo en el artículo 6 del ETMIN que dichas personas serán responsables de todos los actos realizados por las personas, que sea en ejecución de dicho plan. Las medidas estipuladas en el ETMIN funcionan como medidas para el fortalecimiento del sistema de justicia con el objeto que todo supuesto perpetrador sea procesado por sus acciones.

- Derecho de defensa y de ser asistido por un letrado.
- Derecho a presentar pruebas de descargo.

De los artículos 17 a 25 se consignan las facultades del Tribunal y en los artículos 26 y 27 se establece la sentencia, en este punto es particularmente relevante que en el artículo 26 se establecía la opción de culpabilidad o inocencia y en el artículo 27 la pena de muerte o la que se estimara justa y conveniente, siendo esta última bastante abierta e incierta en la pena que se podría imponer.

A. OBJETIVOS

En el artículo 1 del Estatuto, estableció el objetivo del mismo de la siguiente manera: *“aplicando los principios de justicia e inmediación, enjuiciar y condenar a los principales criminales de guerra del Eje Europeo”*. Se pretendía sentenciar a los acusados.

Según la Comisión preparatoria de la Corte Penal Internacional, *“El Tribunal de Nuremberg fue creado con la finalidad de juzgar a los principales criminales del Eje europeo cuyos crímenes no tuvieran una localización geográfica determinada”*⁴⁰⁶.

B. ALCANCES DEL MANDATO

El mandato estaba destinado a juzgar y sentenciar a los nazis responsables de los graves delitos ejecutados durante la Segunda Guerra Mundial, sin embargo; al implementar mecanismos que no estaban contemplados en el Derecho Internacional su alcance logró que se establecieran los siete principios de Derecho Internacional derivados de su aplicación, llamados Principios de Núremberg y que fueron aprobados por la *“Comisión de Derecho Internacional en 1950, derivados de la Resolución 95 (I) de la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobada el 11 de diciembre de 1946 como propuesta de los Estados Unidos derivado del fallo dictado, el 1º de octubre de 1946 del Tribunal Militar Internacional de Núremberg”*⁴⁰⁷.

⁴⁰⁶ NACIONES Unidas. 2000. *Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional. PCNICC/2000/L.1/Rev.1 [en línea]*. Disponible en: <https://www.legal-tools.org/doc/44847d/pdf/> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁴⁰⁷ CASSESE, Antonio. 2009. Afirmación de los Principios De Derecho Internacional Reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg. *United Nations Audiovisual Library of International Law* S. A.

Como lo expresa Cassese: *“En la resolución 95 (I), la Asamblea General confirmó los principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y las sentencias de dicho Tribunal (“los principios de Nuremberg”). Al “confirmar” esos principios, la Asamblea General (entonces integrada por 55 Estados Miembros) se proponía claramente expresar su aprobación y apoyo de los conceptos generales y estructuras jurídicas del derecho penal que podían derivarse del Estatuto del Tribunal y que dicho Tribunal había establecido de forma explícita o implícita. En términos legislativos, esta aprobación y ese apoyo significaban que la comunidad mundial había puesto en marcha enérgicamente el proceso encaminado a convertir esos principios en principios generales de derecho consuetudinario con carácter vinculante para los Estados miembros de toda la comunidad internacional”*⁴⁰⁸.

Los principios han orientado la creación de otros tribunales internacionales ya que consignan bases generales siendo estas:

*“PRINCIPIO I: Toda persona que cometa un acto que constituya delito de derecho internacional es responsable de él y está sujeta a sanción”*⁴⁰⁹. Que se deriva de la convicción de que los criminales de guerra sean juzgados y condenados, según el artículo 1 del Acuerdo.

*“PRINCIPIO II: El hecho de que el derecho interno no imponga pena alguna por un acto que constituya delito de derecho internacional no exime de responsabilidad en derecho internacional a quien lo haya cometido”*⁴¹⁰. Proviene de la ausencia de precedentes sobre juzgamiento internacional y de la necesidad de no dejar en la impunidad los hechos para que no se repitieran.

*“PRINCIPIO III: El hecho de que la persona que haya cometido un acto que constituya delito de derecho internacional haya actuado como Jefe de Estado o como autoridad del Estado, no la exime de responsabilidad conforme al derecho internacional”*⁴¹¹.

[en línea]. Página: 1. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] Sin ISBN. Disponible en: https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_95-I/ga_95-I_s.pdf

⁴⁰⁸ Ídem.

⁴⁰⁹ Ídem.

⁴¹⁰ Ídem.

⁴¹¹ Ídem.

Derivado de las personas juzgadas en Núremberg y con el fin de disuadir a los futuros Jefes de Estado de la comisión de hechos atroces en contra de la humanidad.

*“PRINCIPIO IV: El hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su Gobierno o de un superior jerárquico no la exime de responsabilidad conforme al derecho internacional, si efectivamente ha tenido la posibilidad moral de opción”*⁴¹². Originado por los diferentes niveles de mandos juzgados en el Tribunal de Núremberg.

*“PRINCIPIO V: Toda persona acusada de un delito de derecho internacional tiene derecho a un juicio imparcial sobre los hechos y sobre el derecho”*⁴¹³. Se trató de proporcionar a los acusados un debido proceso. Aunque en este caso se podría dudar de la imparcialidad de los miembros del tribunal.

“PRINCIPIO VI: Los delitos enunciados a continuación son punibles como delitos de derecho internacional:

a. Delitos contra la paz:

- i. Planear, preparar, iniciar o hacer una guerra de agresión o una guerra que viole tratados, acuerdos o garantías internacionales;*
- ii. Participar en un plan común o conspiración para la perpetración de cualquiera de los actos mencionados en el inciso i).*

b. Delitos de guerra: Las violaciones de las leyes o usos de la guerra, que comprenden, sin que esta enumeración tenga carácter limitativo, el asesinato, el maltrato, o la deportación para trabajar en condiciones de esclavitud o con cualquier otro propósito, de la población civil de territorios ocupados o que en ellos se encuentre, el asesinato o el maltrato de prisioneros de guerra o de personas que se hallen en el mar, la ejecución de rehenes, el saqueo de la propiedad pública o privada, la destrucción injustificable de ciudades, villas o aldeas, o la devastación no justificada por las necesidades militares.

c. Delitos contra la humanidad: El asesinato, el exterminio, la esclavización, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil, o las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, cuando

⁴¹² CASSESE, Antonio. 2009. Óp. Cít.

⁴¹³ Ídem.

tales actos sean cometidos o tales persecuciones sean llevadas a cabo al perpetrar un delito contra la paz o un crimen de guerra, o en relación con él.

*PRINCIPIO VII: La complicidad en la comisión de un delito contra la paz, de un delito de guerra o de un delito contra la humanidad, de los enunciados en el Principio VI, constituye asimismo delito de derecho internacional*⁴¹⁴.

C. COMPETENCIA

La competencia se define en dos vías, *vis a vis*, estando por un lado las personas y por el otro los actos.

La competencia se determinó para juzgar y castigar a las personas individualmente o integrantes de organizaciones que cometiesen crímenes establecidos en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional, anexo al Acuerdo de Londres que en su introducción determina los cargos⁴¹⁵ que se juzgarían, siendo estos:

a. “Conjura o conspiración

b. Crímenes contra la paz

c. Crímenes de guerra

*d. Crímenes contra la humanidad*⁴¹⁶

D. FORTALEZAS

¿Se puede hablar de fortalezas cuando se analiza el Tribunal Militar Internacional de Núremberg?, cuando ha sido tan criticado por la forma en que se desarrolló el proceso que no tenía precedentes en el Derecho Internacional Público.

Definitivamente su fortaleza fue establecer premisas bajo los principios del Derecho Internacional para que se llegaran a obtener las condenas esperadas, premisas que

⁴¹⁴ CASSESE, Antonio. 2009. *Óp. Cit.*

⁴¹⁵ SMITH, Daniel. 1999. *The Legacy of Nuremberg: Sustaining Human Rights*. Cornell Law Forum [en línea]. Vol. 25, No. 3. Sin ISSN. Disponible en: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/corlawfofe25&div=16&id=&page=> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁴¹⁶ Ídem. Asesinato, exterminio, esclavización y persecución por motivos políticos o raciales de la población civil antes o durante la guerra.

se aplicaron y que posteriormente se convirtieron en los principios del Derecho Penal Internacional, las cuales fueron:

- i. La responsabilidad penal de quien cometiese delito de que correspondiera al Derecho Internacional.
- ii. La inexistencia de legislación interna no eximía de responsabilidad al perpetrador de conformidad con el Derecho Internacional.
- iii. Los Jefes de Estado que fueran considerados perpetradores no estaban exentos de responsabilidad de acuerdo con el Derecho Internacional.
- iv. Quien actuase era responsable conforme el Derecho Internacional.
- v. La persona acusada tenía derecho a un juicio justo fundamentado en hecho y derecho.
- vi. *“Se consideraron delitos conforme al derecho internacional los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad”⁴¹⁷;*
- vii. *La complicidad en la comisión de un delito contra la paz, un crimen de guerra o un crimen contra la humanidad constituye un delito conforme al derecho internacional”⁴¹⁸.*

Otra de sus fortalezas fue que cuatro de los cinco países aliados se involucraran en la creación del Tribunal y se pensara en hacer justicia para que los hechos no se volvieran a repetir, sin la voluntad de los aliados el Tribunal nunca hubiese sido una realidad.

E. REGLAS DE ADMISIBILIDAD

En el caso del Tribunal de Núremberg las reglas de admisibilidad no estaban definidas como tal, pero se pueden determinar de acuerdo con lo establecido en el Estatuto y la Carta.

⁴¹⁷ Los crímenes de lesa humanidad se determinaban en ejecución o conexión con los crímenes contra la paz o crímenes de guerra.

⁴¹⁸ SMITH, Daniel. 1999. *Óp. Cit.*

- i. *Ratione Personae*: aplicable a los oficiales nazis de alto rango durante la Segunda Guerra Mundial⁴¹⁹.
- ii. *Ratione Materiae*: el Tribunal sólo fue competente para conocer de los crímenes ejecutados durante la Segunda Guerra Mundial y circunscritos al artículo 6 del Estatuto⁴²⁰.
- iii. *Ratione Temporis*: Crímenes cometidos entre 1939 y 1945, tiempo que duró la Segunda Guerra Mundial.
- iv. *Ratione Loci*: Sólo se aplicó para los crímenes cometidos en los países europeos⁴²¹.

F. TIEMPO DETERMINADO

No existía tiempo previsto para la duración del Tribunal, el primer juicio, que a su vez es el más famoso se realizó entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1 de octubre de 1946⁴²². Siendo esto todo un récord en cuanto al tiempo destinado para el desarrollo de juicios que juzgaran hechos tan graves. El Estatuto del Tribunal Internacional no estaba diseñado para aplicarse sólo una vez, hubo 11 juicios más.

Los doce juicios se llevaron a cabo entre noviembre de 1945 y noviembre de 1948⁴²³.

La forma expedita de trámite de los procesos se debió a que desde la creación del Estatuto los países signatarios tuvieron claro que los juicios no debían demorar, esto se encuentra en el Artículo VI de la Ordenanza No. 7 que estipuló dentro de los deberes del Tribunal limitar el juicio a una audiencia expedita, tomar medidas estrictas para evitar que algunas acciones causen un retraso irrazonable y tratar de manera sumaria cualquier contingencia.

Además, también se ve reflejado en la ausencia de regulación de medios de impugnación y en la forma en que se valoraban la pruebas.

⁴¹⁹ AMENÓS Vidal, José y otros. *Óp. Cit.*

⁴²⁰ GÓMEZ Robledo, Alonso. 2003. *Óp. Cit. Páginas: 757*

⁴²¹ Ídem

⁴²² Ídem

⁴²³ HELLER, Kevin Jon. 2012. *The Nuremberg Military Tribunals and the Origins of International Criminal Law. Oxford University Press.* Primera Edición, Primera Publicación en Pasta blanda, Oxford. Páginas: 50 a 82. ISBN: 978-0199668168

Sobre el tiempo la defensa cuestionó que el dado para prepararse, fue únicamente de 30 días⁴²⁴ y que en la Ordenanza No. 7 en su artículo IV fue incluido como el otorgar un tiempo razonable antes del juicio para que el sindicato revisara la acusación, en ese tiempo la defensa debía disponer del ofrecimiento de pruebas, contrario al tiempo que tuvo la fiscalía para preparar la acusación que fue alrededor de dos años⁴²⁵. Argumento que Benjamín Ferencz contradijo afirmando que la asistencia dada a la defensa para su preparación fue más que suficiente para garantizar un juicio justo⁴²⁶.

Los juicios se realizaron en la siguiente cronología.

1. El caso de los médicos del 9 de diciembre de 1945 a junio de 1946⁴²⁷.
2. Caso Milch del 13 de noviembre de 1946 al 2 de enero de 1947⁴²⁸.
3. El caso de la Justicia de septiembre de 1946 al 4 de enero de 1947⁴²⁹.
4. Caso Pohl finales de 1946 al 13 de enero de 1947⁴³⁰.
5. Caso Flick del 8 de febrero de 1947 a abril de 1947⁴³¹.
6. Caso Farben del 3 de mayo al 27 de agosto de 1947⁴³².
7. El caso de los Rehenes del 10 de mayo al 15 de julio de 1947.⁴³³
8. Caso Rusha del 7 de julio al 20 de octubre de 1947⁴³⁴.
9. Caso Einsatzgruppen del 14 de marzo de 3 de julio de 1947⁴³⁵.
10. Caso Krupp del 8 de diciembre de 1946 al 16 de agosto de 1947⁴³⁶.
11. Caso de los Ministros del 6 de enero al 18 de noviembre de 1948⁴³⁷.
12. Caso de los Altos Mandos del 20 de mayo al 4 de septiembre de 1947⁴³⁸.

⁴²⁴ TRIBUNAL Internacional Militar de Núremberg. Reglas de Procedimiento. Regla: 2

⁴²⁵ HELLER, Kevin Jon. 2012. *Óp. Cit. Páginas*: 173

⁴²⁶ Ídem Páginas: 172 y 173

⁴²⁷ Ídem Página: 50

⁴²⁸ Ídem Página: 54

⁴²⁹ Ídem Página: 55

⁴³⁰ Ídem Página: 56

⁴³¹ Ídem Página: 58

⁴³² Ídem Página: 65

⁴³³ Ídem Página: 66

⁴³⁴ Ídem Página: 71

⁴³⁵ Ídem

⁴³⁶ Ídem. Página 73

⁴³⁷ Ídem Página 79

⁴³⁸ Ídem Página: 82

G. DISTRIBUCIÓN DEL PODER.

En la creación del Tribunal fue claro quienes ostentaban el poder, estos fueron los gobiernos de Estados Unidos de América, Francia, Reino Unido y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, actuando en representación y defensa de los intereses de las Naciones Unidas⁴³⁹.

En el artículo 2⁴⁴⁰ del Estatuto de Creación quedó claro que el Tribunal estaría compuesto por cada uno de los signatarios, igualmente, el artículo 14⁴⁴¹ estipuló que cada uno de los signatarios nombraría un fiscal jefe para la persecución de los delitos.

Por lo que la distribución del poder por parte de los signatarios del Acuerdo fue equitativa.

9. ¿SURGIÓ COMO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES?

A. ¿HABÍA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL?

Para ese momento el término responsabilidad internacional no se encontraba acuñado en el Derecho Internacional, este se acuñó posteriormente, este se deriva de estos tribunales y la Comisión de Derecho Internacional solicita su codificación en la Resolución 799 de la Asamblea General de Naciones Unidas el 7 de diciembre de 1953⁴⁴².

En el caso de Núremberg el Fiscal Jackson empleó la *“ficción de la responsabilidad estatal o corporativa para demostrar una responsabilidad colectiva”*⁴⁴³. Convirtiendo esto en un *“indicio de crímenes cometidos por una organización, lo que resultó relevante en la jurisdicción penal internacional”*⁴⁴⁴. Se sustentó la responsabilidad

⁴³⁹ S.A. Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. 1945 *Óp. Cit.*

⁴⁴⁰ El Tribunal estará compuesto por cuatro miembros con un sustituto cada uno. Cada uno de los Signatarios nombrará a un miembro y a un sustituto. En la medida en que sea posible, los sustitutos asistirán a todas las sesiones del Tribunal. En caso de enfermedad de algún miembro del Tribunal o de quedar incapacitado para ejercer sus funciones por cualquier otro motivo, su sustituto ocupará su lugar.

⁴⁴¹ Cada uno de los Signatarios nombrará un Fiscal Jefe para que investigue las acusaciones contra destacados criminales de guerra y se ocupe de su procesamiento.

⁴⁴² Resolución 799. *Óp. Cit.*

⁴⁴³ SANDOVAL Mesa, Jaime Alberto. 2012. *Óp. Cit. Páginas: 42.*

⁴⁴⁴ Ídem.

internacional por los Tratados Internacionales que hasta el momento había aceptado Alemania,

B. OBLIGACIONES INTERNACIONALES

Sabemos que las obligaciones internacionales provienen de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, en este caso está claro que en ese momento el *“sistema internacional no contaba aún con un sistema de Derecho Internacional de mediana consolidación, sino con una serie de normas que anunciaban el nacimiento de un sistema fragmentado. Es por ello que la noción de Obligación internacional tal y cómo se ha estructurado hoy día no había visto la luz para ese entonces⁴⁴⁵”* al no haber precedente de Tratado Internacional, Alemania no había adquirido obligaciones internacionales como se conocen ahora.

Lo que prevaleció en ese momento fue el sistema post primigenio en el que, *“el Derecho Internacional era un sistema de normas que bien podían ser derivadas de una moralidad “natural” de aplicación Universal, o dadas por existentes en razón del consentimiento de las Naciones.”⁴⁴⁶* . En este caso se habló de las obligaciones contraídas por Alemania bajo el derecho internacional por medio de los tratados aceptados hasta ese momento como los Convenios de Ginebra de 1929, la Cuarta Convención de la Haya de 1907 y el Pacto Kellogg Briand entre otros.

C. ¿ABORDA HECHOS ILÍCITOS INTERNACIONALES?

El Tribunal fue tan novedoso en su creación que gracias a él se logró que se acuñaran muchos términos fundamentales para el Derecho Internacional, tal es el caso del término hecho ilícito internacional, el cual logró tener una definición respaldada por la Asamblea General de Naciones Unidas hasta el 12 de diciembre de 2001.

⁴⁴⁵UNIVERSIDAD de la Sábana. 2019. *Guía Académica Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente* [en línea]. *Model United Nations*, Universidad de la Sábana. Página: 17 [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] Disponible en: https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Programas/Documentos_Pregrado/Ciencias Politicas/Munus guias academicas/Tribunal Penal Militar para el Lejano Oriente .pdf

⁴⁴⁶ Ídem

En esa novedad fue que clasificó los hechos ilícitos internacionales a las violaciones de las obligaciones internacionales.

10. COOPERACIÓN DE LOS ESTADOS.

En cuanto a la existencia del Tribunal gracias a la cooperación de los Estados, este es un punto muy claro, pues, el Estatuto de creación del Tribunal Internacional estableció claramente quiénes eran los países que intervenían, siendo llamados los signatarios, perfectamente individualizados en el Considerando y el artículo 1 del Estatuto. Siendo estos países quienes respaldaron financieramente la puesta en marcha del Tribunal para lograr los objetivos esperados.

Sin la cooperación internacional, el Tribunal Militar Internacional de Núremberg nunca hubiese sido posible.

11. INDEPENDENCIA

Desde la perspectiva en que se desarrolló este elemento en este trabajo, la independencia es uno de los factores con los que no contaba el Tribunal Militar Internacional, ¿por qué lo afirmo? Porque el Estatuto de creación es muy claro en el interés de juzgar a los nazis, así como en quienes tenían el control funcional, económico y jurídico del Tribunal, entiéndase los signatarios enumerados en el Artículo 1 del Estatuto.

12. SELECCIÓN DE ACTORES

En este caso la selección de actores estaba plenamente determinada desde la creación del Estatuto, como se ha determinado estos fueron los miembros de los países signatarios, expresamente contenidos en el considerado y artículo del Estatuto de creación y los funcionarios alemanes y miembros del partido Nazi mencionados en el mismo considerando.

En cuanto a la selección de acusados, el proceso fue criticado, de 2500 sospechosos que se tuvo al inicio, el listado se redujo de 200 a 400, con redefinición de criterios,

centrando los caso únicamente en mandos altos y medios⁴⁴⁷, lo cual ha sido criticado, debido a que la justicia no fue imparcial.

13. NORMATIVA RELEVANTE Y MARCO PROCEDIMENTAL

Los delitos objeto del juicio fueron resultado de la aplicación de normas y principios del régimen nazi. Se suspendió el principio fundamental en el Estado de Derecho, “nullum crimen, nulla poena sine lege” por medio de la ley de 26 de junio de 1935, también se suspendió la Constitución de Weimar de 1919, especialmente lo relacionado con los derechos y libertades fundamentales⁴⁴⁸.

Básicamente se aplicaron normas de Derecho Internacional⁴⁴⁹, también se aplicaron leyes por analogía en apariencia de legalidad, como la ley alemana y la ley americana⁴⁵⁰. “*Los sujetos acusados eran individuales, se declaró el carácter delictivo de determinadas organizaciones, pero recayendo la responsabilidad en sus miembros individualmente considerados*”⁴⁵¹.

En cuanto al procedimiento, este se reguló con más detalle en la Ordenanza No 7 y en las Reglas de Procedimiento. El procedimiento se rigió por el principio de “juicio justo”⁴⁵², regulado en el Artículo IV de la Ordenanza No. 7.

El procedimiento iniciaba con la acusación⁴⁵³, que debía estar traducida al idioma de los procesados, quienes tenían derecho de nombrar abogado de su confianza para su defensa⁴⁵⁴, si no lo tenía podía acceder a un defensor de oficio⁴⁵⁵, en su mayoría fueron abogados alemanes, aunque hubo 2 americanos y 1 suizo⁴⁵⁶. El acusado se podía auto inculpar, cada acusado y su defensa recibía con 30 días de antelación

⁴⁴⁷ HELLER, Kevin Jon. 2012. *Óp. Cit. Páginas:* 44

⁴⁴⁸ SERRANO, Mariol. 2002. El Genocidio sobre la Base de Núremberg. Valoración crítica del tipo actual. En: *Nüremberg Menschenrechte* [en línea]. Disponible en: <https://www.menschenrechte.org/es/2002/05/20/el-genocidio-sobre-la-base-de-nuremberg-valoracion-critica-del-tipo-actual/> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁴⁴⁹ HELLER, Kevin Jon. 2012. *Óp. Cit. Página:* 119.

⁴⁵⁰ Ídem

⁴⁵¹ SERRANO, Mariol. 2002. *Óp. Cit.*

⁴⁵² HELLER, Kevin Jon. 2012. *Óp. Cit. Páginas:* 159

⁴⁵³ Ídem *Página:* 162

⁴⁵⁴ Ídem. *Página:* 174

⁴⁵⁵ TRIBUNAL Internacional Militar de Núremberg. *Ordenanza No. 7 Artículo:* IV

TRIBUNAL Internacional Militar de Núremberg. *Reglas de Procedimiento.* Regla: 2

⁴⁵⁶ Ídem

al juicio la copia de la acusación y de los documentos que se fundaba y tenían derecho de aportar pruebas⁴⁵⁷. En total participaron 177 defensores.⁴⁵⁸

Tanto en la Ordenanza No. 7 como en las Reglas de Procedimiento se garantiza la reproducción y proposición de testigos y documentos como prueba, la proposición debía hacerse por escrito, explicando lo que se pretendía probar, el Tribunal estaba facultado para exigir información sobre la naturaleza de la evidencia para decidir la relevancia de la misma y no estando obligado por las normas técnicas de la prueba para admitirla y darle valor probatorio, eso quedaba a consideración del Tribunal, se daba acceso a la misma para determinar su autenticidad. Los hechos de conocimiento común no necesitaban ser probados, se consideraban como probados⁴⁵⁹. Se trabajó con 1300 testigos y 30 mil documentos⁴⁶⁰.

Por ejemplo *“las grandes cantidades de fotografías, videos y documentos que los mismos alemanes habían producido y que fueron rescatados y sistematizados por los aliados, sirvieron como pruebas en el juicio”*.⁴⁶¹

En cuanto a la sentencia⁴⁶², esta debía ser fundamentada, las sanciones⁴⁶³ determinadas fueron:

- a. Pena de muerte
- b. Prisión en cadena perpetua
- c. Prisión por tiempo determinado
- d. Trabajo Forzado
- e. Multa y encarcelamiento con o sin trabajo forzado
- f. Confiscación de bienes
- g. Restitución de bienes adquiridos indebidamente

⁴⁵⁷ TRIBUNAL Internacional Militar de Núremberg. *Óp. Cit.* Reglas:2 y 3

⁴⁵⁸ HELLER, Kevin Jon. 2012. *Óp. Cit. Páginas:* 1

⁴⁵⁹ Ídem

TRIBUNAL Internacional Militar de Núremberg. *Óp. Cit.* Artículos: VII a X

TRIBUNAL Internacional Militar de Núremberg. *Óp. Cit.* Reglas: 4 y 10.

⁴⁶⁰ HELLER, Kevin Jon. 2012. *Óp. Cit. Páginas:* 2

⁴⁶¹ MUÑOZ de Cote Otero, Alfonso Tirso. 2012. El Tribunal Militar Internacional De Nüremberg. Problemática e Implicaciones de su Instauración. *Revista de la Facultad de Derecho de México* [en línea]. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Vol. 62, No. 258. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] Sin ISSN. Disponible en: <http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/60723>

⁴⁶² HELLER, Kevin Jon. 2012. *Óp. Cit. Páginas:* 313

⁴⁶³ Ídem

h. Privación de alguno o de todos los derechos civiles

Si la sanción era pena de muerte debía ser ejecutada por el Gobernador militar, la sentencia de confinación debía cumplirse en un cetro de privación de libertad adecuado. Si existía orden de restitución de propiedad o pérdida de esta, debía ser entregada al Gobernador militar⁴⁶⁴. Sin embargo; el Tribunal nunca explicó la forma en que determinó la sentencia para cada acusado⁴⁶⁵.

Como se ha descrito, para el primer juicio no existía el derecho a revisión de la sentencia, situación que fue enmendada el 17 de febrero de 1947, por medio de la ordenanza No. 11⁴⁶⁶ para los futuros juicios, determinándose la revisión de la sentencia a cargo del Gobernador Militar, quien podía mitigar, reducir o alterar la sentencia emitida y como garantía no se podía ejecutar la sentencia mientras estuviera pendiente de revisión⁴⁶⁷.

14. LEGITIMIDAD:

La legitimidad del Tribunal fue cuestionada ante la imposición de sanciones que no existían previamente y la aplicación de estas de manera retroactiva⁴⁶⁸, considerando que se vulneraba el principio de *nullum crimen, nulla poena sine lege*. La defensa calificó de incompatible la aplicación del artículo 6 del Estatuto, porque este era una regla de derecho *ex post facto*, que contradecía el principio de legalidad⁴⁶⁹.

Para Christian Tomuschat no existe tal violación y afirma que: *“En cuanto a los delitos de tal abominable naturaleza, ningún delincuente puede invocar nullum crimen que protege solo la confianza legítima. Rendir cuentas a los líderes políticos, directamente en virtud del derecho internacional, por las acciones criminales organizadas y ordenadas por ellos es una necesidad en un mundo donde los axiomas básicos del sistema internacional han cambiado: la soberanía del estado ha perdido su carácter*

⁴⁶⁴ TRIBUNAL Internacional Militar de Núremberg. *Óp. Cit.* Artículos: XV, XVI, XIX, XX, XXI, XXII.

⁴⁶⁵ HELLER, Kevin Jon. 2012. *Óp. Cit. Páginas:* 313 y 314

⁴⁶⁶ Ídem. *Página:* 176

⁴⁶⁷ TRIBUNAL Internacional Militar de Núremberg. *Óp. Cit.* Artículos: XVII y XIX

⁴⁶⁸ LOCK, Tobias y Julia Riem. 2005. *Óp. Cit.*

⁴⁶⁹ GÓMEZ Robledo, Alonso. 2003. *Óp. Cit. Páginas:* 755

*absoluto y está contrarrestada por los requisitos de la protección de los derechos Humanos*⁴⁷⁰.”

En lo referente a la aplicación de la retroactividad, Tomuschat manifiesta que deben examinarse las siguientes situaciones:

- a. Diferencias en las categorías de los crímenes dentro de la jurisdicción de los Tribunales Militares Internacionales.

En primer lugar, la trilogía de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad no constituye un bloque homogéneo. Al referirse anteriormente a las críticas dirigidas contra las sentencias de Núremberg, Tomuschat señala que los delitos contra la paz fueron la clase de delitos más controvertida. Con respecto a los crímenes de guerra, Núremberg no introdujo ninguna innovación real que pudiera ser denunciada por violar la propuesta de *nullum crimen sine lege*. Del mismo modo, los crímenes de lesa humanidad se podrían concebir como una amalgama de la sustancia fundamental de derecho penal que se encuentra en los códigos penales de todas las naciones “civilizadas”⁴⁷¹.

Para asegurarse que los crímenes contra la humanidad fueran innovados, los presuntos delincuentes no fueron acusados en virtud de un estatuto nacional, sino directamente en virtud del derecho internacional. Sin embargo, fue fácil demostrar el carácter punible de los crímenes de lesa humanidad se estableció de conformidad con los principios generales del derecho internacional establecidos en el artículo 38⁴⁷²

⁴⁷⁰ TOMUSCHAT, Chistian. *Óp. Cit.*

⁴⁷¹ Ídem

⁴⁷² "Artículo 38

1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:

- a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes;
- b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho;
- c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;
- d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59.

2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio *ex aequo et bono*, si las partes así lo convinieren” TRIBUNAL Internacional Militar de Núremberg. *Óp. Cit.*

del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Por lo que para Tomuschat el argumento de la retroactividad en gran medida perdió el punto⁴⁷³.

b. El papel apropiado del principio de Nullum Crimen

Según Tomuschat⁴⁷⁴ históricamente, también hubo buenas razones para reflexionar sobre la justificación de la regla nullum crimen⁴⁷⁵. Debido a que este busca proteger la confianza legítima. Nadie debe ser procesado por una conducta, cuyo carácter punible no conocía, y no se podía esperar que lo supiera, cuando practicaba esa conducta. Para que se aplique esa lógica, los cuerpos legislativos deben haber establecido una conducta tan punible que de antemano se consideraba perfectamente aceptable o una conducta que, aunque moralmente pudo ser reprendida, no fue estigmatizada como ilegal.

Sin embargo, los crímenes contra la humanidad tienen raíces profundas en la memoria de la humanidad. La cláusula de Martens que se refiere a “las leyes de la humanidad y los dictados de la conciencia pública”⁴⁷⁶. No puede haber la menor duda de que todos los delitos descritos bajo el título “crímenes de lesa humanidad” no solo son moralmente objetables, sino que merecen ser castigados y deben ser castigados en su carácter abominable si se quiere mantener la coexistencia pacífica en la

⁴⁷³ TOMUSCHAT, Chistian. *Óp. Cit.*

⁴⁷⁴ Ídem Páginas: 834 y 835

⁴⁷⁵ Esta regla surgió de las demandas del movimiento liberal en Europa que esperaba superar la arbitrariedad monárquica insistiendo en la necesidad de la aprobación parlamentaria de cualquier estatuto criminal. En Alemania, era una característica común en todas las constituciones de estados territoriales adoptadas después de las guerras napoleónicas, que la injerencia en la propiedad y la libertad (“Eingriffe in Freiheit und Eigentum”) era admisible solo de conformidad con la ley (parlamentaria). Por un lado, el autor alemán Franz von Liszt basándose en las enseñanzas de uno de los fundadores del derecho penal moderno, Anselm Feuerbach, llamó al principio nullum crimen la “Carta Magna del Criminal”

⁴⁷⁶ CONVENCIÓN de la Haya de 1907 para la Resolución Pacífica de Controversias Internacionales Preámbulo. *“Animados por la firme voluntad de cooperar para el mantenimiento de la paz general; Resueltos a favorecer con todos sus esfuerzos el arreglo amistoso de las controversias internacionales; Reconociendo la solidaridad que aúna a los miembros de la sociedad de naciones civilizadas; Deseosos de extender el imperio de la ley y de fortalecer el sentimiento de la justicia internacional; Convencidos que la institución permanente de un tribunal arbitral, accesible a todos, en el seno de las Potencias independientes, podrá contribuir efectivamente a alcanzar ese resultado; Considerando las ventajas que ofrece una organización general y regular del procedimiento arbitral; Estimando con el Augusto Iniciador de la Conferencia Internacional de la Paz que es necesario consagrar en un acuerdo internacional los principios de equidad y de derecho sobre los cuales reposan la seguridad de los Estados y el bienestar de los Pueblos; Deseosos, con ese objetivo, de asegurar el mejor funcionamiento práctico de las Comisiones de investigación y de los tribunales arbitrales y de facilitar el recurso al arbitraje en casos cuya naturaleza permita un procedimiento sumario; Han considerado necesario revisar ciertos puntos y completar la obra de la Primera Conferencia de la Paz para la resolución pacífica de controversias internacionales”.*

sociedad humana. Nadie puede afirmar legítimamente que creyó que tales acciones en las que participó y que deben clasificarse como “crímenes de lesa humanidad” son perfectamente legales.⁴⁷⁷

c. La reducción progresiva en el alcance del principio de Nullum Crimen

Para Tomuschat la comunidad internacional ha efectuado la reducción⁴⁷⁸ del alcance. El cual se ve reflejado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se basa en los preparativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, apartándose de este tipo de rigidez al enunciar en el artículo 7 (2):

“El presente artículo no impedirá el juicio o la condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocido por las naciones civilizadas.”

Robert S. Clark afirma que *“la máxima nullum crimen Sine Lege no es una limitación de la soberanía, pero en general es un principio de justicia. Afirmar que es injusto castigar a quienes el desafío a los tratados y garantías ha atacado a los estados vecinos sin previo aviso es obviamente falso, ya que en tales circunstancias el atacante debe saber que lo está haciendo mal, y lejos de eso cree que sería injusto castigarlo, cuando lo injusto es si se permitiera que su error quede impune. Ocupando las posiciones que hicieron en el gobierno de Alemania, los acusados o alguno de ellos invocaron que debían ser juzgados bajo el amparo de los tratados firmados por Alemania, que prohibían recurrir a la guerra para la solución de disputas internacionales, desafiando el derecho internacional deliberadamente llevaron a cabo sus sueños de invasión y agresión*⁴⁷⁹.

*Esta fue la traducción de la filosofía de Núremberg en ley positiva. Lamentablemente el gobierno alemán hizo una reserva sobre esta disposición.”*⁴⁸⁰

⁴⁷⁷ TOMUSCHAT, Christian. *Óp. Cit.* Páginas: 835

⁴⁷⁸ La Declaración Universal de los Derechos Humanos aún establece el nullum crimen como un principio que no está sujeto a ninguna restricción.

⁴⁷⁹ CLARK, Robert S. 2007. Nuremberg and the crime against peace. *Washington University Global Studies Law Review* [en línea]. Washington: Vol. 6:527. No. 3. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] Sin ISSN. Disponible en:

https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1148&context=law_globalstudies

⁴⁸⁰ Ídem

15. JURISDICCIÓN

La jurisdicción se definió en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional, anexo al Acuerdo de Londres, el artículo 1 de esta establece: *“Se creará un Tribunal Militar Internacional para el enjuiciamiento de criminales de guerra cuyos delitos carezcan de una ubicación geográfica determinada, ya sean acusados individualmente, en su calidad de miembros de grupos u organizaciones o en ambos conceptos.”*

Según Mariol Serrano *“La jurisdicción, control, función del Tribunal y formación del Ministerio Público [20] vendría definido en la Carta del Tribunal Militar Internacional [21], anexa al Acuerdo de Londres del 45. En ella encontramos: la no recusación por los fiscales, acusados o defensores, del Tribunal, sus miembros y suplentes (art. 3) y la posibilidad abierta de creación de nuevos Tribunales, con sujeción al régimen de esta carta (art. 5).”*⁴⁸¹

Como lo relata el documento elaborado por la Comisión preparatoria para una Corte Penal Internacional *“El Tribunal de Nuremberg estaba facultado, entre otras cosas, para juzgar y castigar a las personas que, actuando en interés de los países del Eje europeo, hubiesen cometido crímenes contra la paz, entre ellos, el de planear, preparar, iniciar o hacer una guerra de agresión o una guerra que viole tratados, acuerdos o garantías internacionales o participar en un plan común o conspiración para la perpetración de cualquiera de los actos indicados”*⁴⁸².

Refrendada por el Artículo II de la Ordenanza No. 7, en donde también se establece las personas sujetas a persecución penal y los crímenes a perseguir⁴⁸³, que ya estaban delimitados en el Estatuto de creación del Tribunal Militar Internacional en los considerandos como en los artículos 6, 7, 8, 9, y 10.

A. ¿QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE DE UN CASO?

El Estatuto de creación fue muy claro en sus considerandos, así como en sus artículos 1 y 6 indicando los sujetos que intervendrían, en este caso personas nombradas por

⁴⁸¹ SERRANO, Mariol. 2002. *Óp. Cit.*

⁴⁸² NACIONES Unidas. 2000. *Óp. Cit.*

⁴⁸³ HELLER, Kevin Jon. 2012. *Óp. Cit. Páginas: 107*

los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, quienes decidirían la integración del Tribunal y su fiscalía, para las actividades encaminadas a juzgar como lo dice el Estatuto a *“los alemanes en la Europa ocupada se hacía constar que aquellos funcionarios alemanes y los hombres y miembros del partido Nazi que hayan sido responsables de crímenes y atrocidades o hayan participado en los mismos con su consentimiento serán devueltos a los países en los que cometieron sus abominables actos para que puedan ser juzgados y condenados con arreglo a las leyes de esos países liberados y de los gobiernos libres que se crearán en dichos países;...”*

Los procesados podían nombrar a un defensor de su confianza, también peritos y testigos.

B. ¿QUÉ PROBLEMAS SE PODÍA DEBATIR?

Los problemas por debatir quedaron debidamente delimitados, tanto en los considerandos como en los artículos 6, 7, 8, 9, y 10 estableciendo:

- a. Las barbaridades cometidas por los alemanes en la Europa ocupada incluyendo funcionarios alemanes, hombres y miembros del partido Nazi responsables de crímenes o que hubiesen participado en los mismos.
- b. Los crímenes determinados fueron:
 - i. *“Conjura o conspiración*
 - ii. *Crímenes contra la paz*
 - iii. *Crímenes de guerra*
 - iv. *Crímenes contra la humanidad”*⁴⁸⁴
- c. Se estableció reglas de no exoneración de la responsabilidad penal, estas fueron:
 - a. El ser Jefe de Estado o funcionario de gobierno

⁴⁸⁴ HELLER, Kevin Jon. 2012. *Óp. Cit. Páginas:* 107

- b. El haber obedecido órdenes de gobierno u órdenes superiores. Lo cual si podía ser un atenuante. Según las órdenes éstas podían ser⁴⁸⁵:
 - i. Ilegales
 - ii. Militares
 - iii. Civiles
- d. En cuanto a los modos de participación⁴⁸⁶ y reglas de responsabilidad penal, éstas se extendieron más allá del comportamiento individual, instaurando la participación y responsabilidad de miembros de algún grupo u organización.

16. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN:

El Estatuto no reguló los medios de impugnación a utilizar durante el proceso, sin embargo; las defensas utilizaron los principios generales establecidos en el Derecho Internacional Público y en el Derecho Penal, invocando en el ejercicio de la defensa:

- a. La inmunidad que gozaban algunos oficiales⁴⁸⁷.
- b. Persecución Selectiva⁴⁸⁸
- c. Persecución de una mínima parte de los diez mil oficiales Nazis⁴⁸⁹.
- d. La carga de la prueba se adjudicó a la defensa⁴⁹⁰.
- e. Seguimiento de órdenes superiores⁴⁹¹.
- f. Defensa propia⁴⁹².
- g. Error de ley⁴⁹³.
- h. Necesidad Militar, principio que supone que la necesidad militar anula el derecho de guerra regulado en los Convenios de Ginebra.

⁴⁸⁵ HELLER, Kevin Jon. 2012. *Óp. Cit. Páginas:* 254 - 258

⁴⁸⁶ Ídem *Página:* 252 y 253

⁴⁸⁷ Ídem *Páginas:* 295

⁴⁸⁸ Ídem *Página:* 296

⁴⁸⁹ Ídem *Página:* 297

⁴⁹⁰ Ídem *Página:* 198

⁴⁹¹ Ídem

⁴⁹² Ídem *Página:* 305

⁴⁹³ Ídem *Página:* 306

Es importante destacar que, desde la creación del Tribunal Militar Internacional, los países signatarios querían evitar el retardo del proceso, esto se deduce del artículo 3 del Estatuto de creación cuando se niega la recusación de los miembros del tribunal.

Como se ha mencionado para el primer juicio no se contempló una revisión de sentencia, situación que fue defendida por los signatarios argumentando que una revisión o apelación hubiese tomado mucho tiempo⁴⁹⁴.

17. MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO

El Tribunal Militar Internacional de Núremberg fue creado con la determinación de ajusticiar a los alemanes Nazis, por lo que no necesitó de un mecanismo de cumplimiento, los funcionarios involucrados en los juicios estaban comprometidos con el cumplimiento de los objetivos y de las sentencias que cumplieron con su función como estaba regulada.

Ni el Estatuto de Creación, ni la Ordenanza No. 7, ni las Reglas de Procedimiento consignaron expresamente un mecanismo de cumplimiento. Delegaron en el Gobernador Militar la función de ejecución de sentencia y en la Secretaría del Tribunal el cumplimiento del procedimiento establecido.

18. RECURSOS DISPONIBLES

Los recursos se pueden ver desde la perspectiva de los funcionarios que trabajaron para el Tribunal Militar Internacional de Núremberg y desde la perspectiva de la defensa de los sindicados.

Desde la perspectiva de los funcionarios, los recursos fueron suficientes y adecuados, mientras que desde la visión de la defensa los recursos fueron limitados e insuficientes⁴⁹⁵. Estos recursos fueron:

A. HUMANO:

En cuanto a recurso humano, la defensa se quejó de no tener suficiente recurso humano y material, aunque de acuerdo a los estándares modernos fueron

⁴⁹⁴ HELLER, Kevin Jon. 2012. *Óp. Cit.* Página: 176

⁴⁹⁵ Ídem. *Páginas:* 173 y 173

privilegiados pues cada sindicato podía tener hasta tres abogados defensores⁴⁹⁶. Se contó con 177 defensores en total⁴⁹⁷.

El Tribunal estaba conformado por un miembro de cada uno de los países signatarios con su suplente.

En total hubo 94 fiscales contratados en el tiempo de duración del Tribunal a quienes se les dividieron los casos de acuerdo a su complejidad⁴⁹⁸, distribuyéndose de la siguiente forma:

1 fiscal trabajó 8 casos

8 fiscales trabajaron 3 casos

19 fiscales trabajaron 2 casos.

Se contó con 1300 testigos⁴⁹⁹.

Se creó una Secretaría Central conformada por un Secretario General, secretarios asistentes, oficiales militares y secretarios intérpretes⁵⁰⁰. El Tribunal contó con un total de 491 funcionarios⁵⁰¹.

Francia, Polonia, Checoslovaquia, Holanda, Noruega, Grecia, Yugoslavia y Bélgica nombraron delegaciones de apoyo. Francia envió 72 personas, Checoslovaquia, Holanda y Grecia enviaron 8 personas cada uno⁵⁰².

B. MATERIAL:

En cuanto a los recursos materiales, se proveyó al Tribunal de todos los materiales necesarios para su labor, incluyendo los medios de reproducción del material. Es importante resaltar la previsión de dejar registro de todas las actuaciones realizadas⁵⁰³.

⁴⁹⁶ HELLER, Kevin Jon. 2012. *Óp. Cit.* Página: 174

⁴⁹⁷ Ídem Página: 1

⁴⁹⁸ Ídem Página: 32

⁴⁹⁹ Ídem Página: 2

⁵⁰⁰ TRIBUNAL Internacional Militar de Núremberg. *Óp. Cit.* Artículos: XII, XII y XIV

⁵⁰¹ HELLER, Kevin Jon. 2012. *Óp. Cit. Páginas:* 36

⁵⁰² Ídem Página: 33

⁵⁰³ TRIBUNAL Internacional Militar de Núremberg. *Óp. Cit.* Regla: 9

A estas facilidades tuvieron acceso todas las partes. Se contó con 30,000 documentos separados⁵⁰⁴.

C. PRESUPUESTO ASIGNADO:

En este punto es bastante claro en el Estatuto de creación, en su artículo 30 quedando regulado de la siguiente manera: “...serán abonados por los Signatarios con cargo a los fondos asignados para el mantenimiento del Consejo de Control para Alemania.”

La defensa individual recibió el pago de 3,500.00 marcos, las defensas múltiples recibían 7,000.00 marcos, cantidad que según los abogados no era suficiente para el pago de asistentes, los defensores que vivían fuera de Núremberg recibían vivienda gratis durante su estancia y el pago de gasolina⁵⁰⁵.

El Tribunal inició con un presupuesto de \$2,953,797, en 1947 luego de solicitudes y enmiendas se otorgó un presupuesto de \$3,222,275.00

19. EL PAPEL DE LA VÍCTIMA:

Las víctimas no fueron parte activa del proceso, si bien la comunidad judía estaba atrás de estos procesos, durante los juicios como dice “...los fiscales americanos, como los británicos no llamaron a ningún superviviente a testificar durante ninguna fase del procedimiento. Si bien es cierto que los fiscales franceses y soviéticos llamaron a un número de supervivientes para declarar como testigos, la realidad es que las declaraciones de dichos testigos no tuvieron trascendencia debido al enfoque que le dieron los americanos al juicio y que fue el dominante a lo largo de todo el procedimiento.”⁵⁰⁶

Esto refleja un problema que perduró durante muchos años en diversas ramas del derecho, la poca inclusión y participación de la víctima en la búsqueda de justicia.

⁵⁰⁴ HELLER, Kevin Jon. 2012. *Óp. Cit.* Páginas: 2

⁵⁰⁵ Ídem. Páginas: 175

⁵⁰⁶ GIMÉNEZ Montero, Judith. 2017. *La posición de las víctimas de graves crímenes internacionales ante los tribunales militares internacionales y los tribunales penales internacionales* [en línea]. Tesis Doctoral. Barcelona: Universitat de Barcelona. Página: 39. Disponible en: https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/457527/JGM_TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

20. PERCEPCIÓN PÚBLICA:

Como ya se mencionó, para esta investigación no se cuentan con los recursos para realizar una encuesta de percepción per se, pero tampoco es el objetivo de la investigación. No se puede negar la popularidad que tiene el trabajo realizado por el Tribunal Militar Internacional de Núremberg, el cual es ampliamente conocido a nivel mundial, por la magnitud y seriedad de los hechos. Es importante destacar que han mantenido difusión y publicidad desde que se realizó, esto se debe al esfuerzo que ha realizado la comunidad judía para que los crímenes cometidos contra ellos no queden en el olvido, desde esta perspectiva, el Tribunal Militar Internacional de Núremberg fue eficaz, su legado sigue vigente y continúa siendo objeto de análisis.

Siendo relevante en este aspecto la inversión que ha hecho la comunidad judía lo largo de estos 75 años, promoviendo la memoria histórica del holocausto nazi por medio de museos, películas, documentales, libros en diferentes lugares del mundo, todo con el fin de que los hechos no queden en el olvido, acciones que se han convertido en parte de la justicia transicional.

21. NÚMERO DE CASOS INGRESADOS

Se inicio con 2500 sospechosos, pero al redefinirse los criterios de procesamiento se partió con 36 casos, que representaban unos 266 acusados, no obstante, se decidió trabajar únicamente 12 casos con 185 acusados⁵⁰⁷.

22. NÚMERO DE CASOS RESUELTOS

El Tribunal Militar Internacional de Núremberg logró su cometido al enjuiciar a 185 personas consideradas como los principales dirigentes del partido Nazi y culminó con la condena de 142 personas así:

- a. 20 a cadena perpetua,
- b. 97 a prisión entre 10 y 20 años⁵⁰⁸.
- c. 1 a prisión y confiscación de bienes,

⁵⁰⁷ HELLER, Kevin Jon. 2012. *Óp. Cit. Páginas:* 43 y 44.

⁵⁰⁸ SANDOVAL Mesa, Jaime Alberto. 2012. *Óp. Cit. Páginas:* 49

- d. 24 a pena de muerte⁵⁰⁹.

23. ANÁLISIS CUALITATIVO:

El legado del Tribunal Militar Internacional de Núremberg⁵¹⁰ para el derecho es amplio, en algunos puntos cuestionable, pero su contribución no se puede ocultar, en este aspecto podemos destacar:

- a. Aplicación de justicia retributiva⁵¹¹ aunque no de manera absoluta y dejando en duda si:
 - i. Los sospechosos seleccionados para ser enjuiciados eran más merecedores de esto que quienes no fueron procesados.
 - ii. Los condenados eran de hecho culpables.
 - iii. Los acusados absueltos eran de hecho inocentes.
 - iv. Las sentencias impuestas a los culpables reflejaban la culpabilidad.
- b. Archivo de la historia crítica del Tribunal⁵¹², al resguardarse todos los testimonios, documentos y fallo que fueron parte de los procesos.
- c. Contribución al desarrollo del Derecho Penal Internacional⁵¹³, el cual se refleja en:
 - i. Aplicación del Derecho Internacional Consuetudinario⁵¹⁴
 - ii. Después de Núremberg se desarrolló el principio de irretroactividad de la ley penal⁵¹⁵.
 - iii. Se establecieron los parámetros para el manejo de evidencia y valoración de la prueba⁵¹⁶.
 - iv. Se desarrolló el delito de agresión⁵¹⁷.

⁵⁰⁹ HELLER, Kevin Jon. 2012. *Óp. Cit.* Páginas: 313

⁵¹⁰ TAYLOR, Teleford. 2013. *The Anatomy of the Nuremberg Trials*. New York 1993: Skyhorse Publishing, Páginas: 1 a 641. ISBN: 978-1620877883

⁵¹¹ Ídem Páginas: 369 a 371

⁵¹² Ídem Páginas: 372 a 374 y 399

⁵¹³ Ídem Página: 374

⁵¹⁴ Ídem Página: 375

⁵¹⁵ Ídem Página: 377

⁵¹⁶ Ídem Página: 378

⁵¹⁷ Ídem Página: 379

- v. Los crímenes de guerra se abordaron desde la perspectiva de la legalidad de los combatientes, la toma de rehenes. Las represalias y la autoría individual⁵¹⁸.
- vi. Se inició con la concepción moderna de los crímenes contra la humanidad, agregándose el requisito del nexo, elementos contextuales, el requisito político, la autoría individual, se abordó el exterminio, la esclavitud, la deportación, la prisión, tortura y violación y la persecución⁵¹⁹.
- vii. Se incluyó el genocidio como crimen contra la humanidad⁵²⁰. Siendo la base para la concreción de la tipificación del delito de genocidio en la Convención de 1948.
- viii. Se incluyó la conspiración y la empresa criminal dentro de las formas de delinquir⁵²¹.
- ix. Se desarrollaron los modos de participación, siendo estos: ejecución de órdenes, joint criminal Enterprise, complicidad, responsabilidad del superior, órdenes de subordinación y órdenes superiores, autoría intelectual, no prevenir y castigar y participación consentida⁵²².
- x. En relación al derecho de defensa se sentaron precedentes en cuanto a la cuota de defensores, en el ejercicio de esta se determinó que se podía invocar la necesidad y la coacción únicamente si era inminente, real e inevitable, se determinó que no se podía invocar la necesidad militar bajo el Derecho Internacional Humanitario⁵²³.
- xi. Las sentencias fueron relevantes al otorgar la gravedad necesaria a los crímenes contra la humanidad, se dio más seriedad a los crímenes de guerra y se determinó que los

⁵¹⁸ TAYLOR, Teleford. 2013. *Óp. Cit.* Páginas: 380 a 382

⁵¹⁹ Ídem Páginas: 382 a 387.

⁵²⁰ Ídem Página: 388

⁵²¹ Ídem

⁵²² Ídem Páginas: 388 a 395

⁵²³ HELLER, Kevin Jon. 2012. *Óp. Cit. Páginas:* 394 y 395

crímenes cometidos en tiempos de paz constituían violaciones sistemáticas a los derechos humanos⁵²⁴.

d. La realización de los juicios sirvió como método de enseñanza al pueblo alemán para la no repetición de los hechos.

Cuando se tiene formación en derechos humanos y experiencia en litigio penal de graves delitos, no es fácil estudiar el procedimiento utilizado en el Tribunal Militar de Núremberg, sin darse cuenta que definitivamente hubo falencias para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, lo que los países signatarios en su momento consignaron en el Estatuto de creación como “juicio justo”.

Es claro que la creación de este tipo de Tribunal era necesaria, se debía justiciabilizar las graves atrocidades cometidas, de lo cual no se tenía precedente. Pero se debió aplicar estrictamente las reglas de derecho internacional y principios generales del derecho existentes para ese momento.

Por ejemplo, el principio de imparcialidad que debía prevalecer tanto para los miembros del Tribunal como para la Fiscalía estuvo totalmente ausente. Esto se reflejó en que muchos de los miembros del Tribunal y de la Fiscalía eran judíos⁵²⁵, por lo que no se podía esperar imparcialidad en su actuar.

Los países signatarios desde la creación del Estatuto del Tribunal fueron claros en su objetivo, el cual era sentenciar a los alemanes y miembros del partido Nazi, desde el inicio se habló de culpables.

Aunque no quedó expresamente detallado en el Estatuto de Creación y menos en las normas procedimentales, nunca se pretendió juzgar a todos los posibles responsables, se seleccionó únicamente a mandos altos e intermedios, actores claves, por lo que no se puede descartar que el objetivo era dar un castigo ejemplar.

El tiempo otorgado a los abogados defensores para preparar su defensa tampoco era suficiente. El obviar las reglas de valoración de la prueba para acelerar los juicios y la

⁵²⁴ HELLER, Kevin Jon. 2012. *Óp. Cit.* Páginas: 396 y 397

⁵²⁵ Ídem. *Páginas:* 35

inexistencia de recursos de impugnación también reflejan la ausencia de imparcialidad por lo que el “juicio justo” únicamente fue una ficción.

Cuando se discute sobre la eficacia de los Tribunales Internacionales, la mayoría de estudiosos y practicantes de la materia afirman que el Tribunal Militar Internacional de Núremberg ha sido históricamente el más eficaz, porque se ejecutó en un corto período y logró las sentencias esperadas, fue un ejemplo para la humanidad y sentó las bases de desarrollo del Derecho Penal Internacional. En esos términos se puede decir que fue eficaz. Pero para que lo fuera no se debió restringir el debido proceso y derecho de defensa. Se podría afirmar que este fue un caso más en la aplicación de la afirmación de que el fin justifica los medios.

A continuación, se presenta de forma gráfica y sintética el trabajo realizado por el Tribunal Penal Internacional de Núremberg.

		Mandato	Duración del Mandato	Cesación de los hechos que originaron el mandato	Inicio del primer juicio	Universo de casos	Casos procesados y/o relaciones procesales	Tiempo promedio de los casos	Casos pendientes de resolución	% Casos presentados versus casos resueltos	% Casos pasibles de procesamiento versus casos resueltos
1	Tribunal Militar Internacional de Núremberg	Procesar a los alemanes y funcionarios Nazis responsables de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial en contra de los Judíos	Tiempo indeterminado	2 de septiembre de 1945	20 de noviembre de 1945	36	12	4 meses	0	Se presentaron 12 casos y los 12 fueron resueltos	33%

CAPÍTULO II

TRIBUNAL MILITAR INTERNACIONAL PARA EL LEJANO ORIENTE

ANTECEDENTES

Una de las políticas impulsadas para la creación de mecanismos internacionales de enjuiciamiento y condena con el fin de que las atrocidades cometidas contra la humanidad no quedaran sin ser castigadas, e impulsadas por la Comunidad Internacional tras la culminación de la Segunda Guerra Mundial, fue la creación del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, el cual se instituyó por medio de una orden ejecutiva, mediante la Declaración del comandante Supremo de las fuerzas aliadas en el extremo Oriente, el general Douglas Mc Arthur, el 19 de enero de 1946, con el objetivo de juzgar a los principales criminales de guerra en el Lejano Oriente, entre los que figuraban los crímenes contra la paz⁵²⁶.

Las fuerzas aliadas habían acordado en Moscú en diciembre de 1945 la creación de la Comisión para el Lejano Oriente (Far Eastern Commission - FEC) con ella también acordaron algunos elementos sobre el Control del futuro de Japón. La dirección quedó a cargo de Estados Unidos, la Comisión estuvo conformada por once Estados, teniendo las fuerzas aliadas el poder de veto. Como señala Sandoval Mesa *“Las funciones de la FEC, se dirigían a definir una política de ocupación para el Japón y coordinar las políticas aliadas en el lejano oriente; orientar el sistema común de investigación y acusación de sospechosos por crímenes de guerra; diseño de los juicios y procedimientos, ejecución de sentencias, así como liberación de procesados, entre otras. Según la opinión de Bassiouni “La Comisión para el Lejano Oriente se convirtió en poco más que una sociedad en la que se debatía, y cuando finalmente se firmó un tratado de paz con Japón sufrió una muerte silenciosa.”*⁵²⁷

⁵²⁶ NACIONES Unidas. 2000. *Óp. Cit. Páginas:* 131

⁵²⁷ SANDOVAL Mesa, Jaime Alberto. 2012. *Óp. Cit. Página:* 50

Los orígenes, la composición y la jurisdicción de los tribunales de Núremberg y Tokio diferían en varios aspectos importantes más allá de sus diferencias geográficas y coyunturales. En el momento en que se firmó la Declaración de Potsdam de 1945, la guerra en Europa había terminado, pero la guerra con Japón continuaba⁵²⁸.

El 26 de julio de 1945, las Potencias Aliadas en guerra decidieron enjuiciar a los criminales de guerra japoneses como una de las condiciones de la rendición⁵²⁹, declaración que no fue firmada por la Unión Soviética al no haber declarado la guerra a Japón hasta semanas después que los Estados Unidos lanzara la segunda bomba atómica en Nagasaki, aunado a que Japón se rindió seis días después, el 14 de agosto de 1945⁵³⁰.

Durante la conferencia de Moscú, celebrada en diciembre de 1945, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos con la concurrencia de China acordaron una estructura básica para la ocupación de Japón. Al General Mac Arthur, como Comandante Supremo de las Potencias Aliadas, se le concedió la autoridad para *"emitir todas las órdenes para la aplicación de los Términos de Rendición, la ocupación y el control de Japón, y todas las directivas complementarias a las mismas"*⁵³¹.

En enero de 1946, el general Mac Arthur ejerciendo la autoridad otorgada emitió una proclamación especial que estableció el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente. El Estatuto del Tribunal, se anexó a la proclamación, con ésta se estableció su composición, jurisdicción y funciones.

El Estatuto previó que Mac Arthur designara jueces de los países que habían firmado el instrumento de rendición del Japón: Australia, Canadá, China, Francia, India, los Países Bajos, Filipinas, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos. Cada uno de estos países también tenía un equipo de procesamiento⁵³².

⁵²⁸ OFFICE of the Historian. S.F. *The Nuremberg Trial and the Tokyo War Crimes Trials* (1945–1948). En: *Office of the historian, Department of State, United States of America* [en línea]. Disponible en: <https://history.state.gov/milestones/1945-1952/nuremberg> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁵²⁹ COMISIÓN preparatoria para una Corte Penal Internacional. *Óp. Cit.*

⁵³⁰ OFFICE of the Historian. *Óp. Cit.*

⁵³¹ Ídem

⁵³² Ídem

Se decidió perseguir los hechos cometidos por Japón durante la Segunda Guerra Mundial y la Invasión japonesa al este y sur este de Asia y a varios Estados y colonias en el Pacífico⁵³³.

Al otorgar todo el poder al General Mac Arthur se permitió que sus intereses primaran sobre la objetividad e imparcialidad del Tribunal⁵³⁴, prevaleciendo en él un tinte político, especialmente impregnado por los Estados Unidos.

1. ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ FUE CREADO?

Surge con el objetivo de juzgar a los militares japoneses por los crímenes de guerra cometidos entre 1927 y 1945⁵³⁵, con el fin de castigar los delitos contra la paz, la humanidad y los crímenes de guerra.

2. PAPEL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN SU CREACIÓN

El papel de la comunidad internacional para la creación de este Tribunal es el mismo papel que jugó para la creación del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, ya que fueron establecidos en paralelo. Rompiéndose el punto de vista restrictivo que ignoraba la existencia de una comunidad internacional⁵³⁶ y marcando el inicio de la comunidad internacional⁵³⁷, como un concepto legal que es más que una construcción académica.

La ordenanza fue creada por los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Rusia quienes delegaron al General Douglas Mac Arthur para la creación del Tribunal⁵³⁸.

El procesamiento penal internacional se convirtió así en el sello distintivo del surgimiento de una comunidad internacional.

⁵³³ BOISTER, Neil. 2011 y 2013. *The Tokio Trial*. SHABAS, William y Nadia Bernaz. Ed. *Routledge Handbook of International Criminal Law. Primera Edición*. Londres y Nueva York: Taylor & Francis Group. Página: 17. ISBN: 9780415524506

⁵³⁴ GÓMEZ Robledo, Alonso. 2003. *Óp. Cit.* Página: 51

⁵³⁵ BOISTER, Neil y Robert Cryer. 2008. *Documents on the Tokio International Military Tribunal. Charter, Indictment and Judgments*. Primera Edición. Oxford: Oxford University Press, Página: xxxiii. ISBN: 9780199541928

⁵³⁶ GÓMEZ Robledo, Alonso. 2003. *Óp. Cit.*

⁵³⁷ Es cierto que la comunidad internacional es un concepto que carece de contornos absolutamente claros. Pero puede hacerse visible y tomar forma concreta a través de reglas y mecanismos diseñados para defender ciertos valores comunes, cuya integridad es esencial para la existencia pacífica de la humanidad en su conjunto.

⁵³⁸ GÓMEZ Robledo, Alonso. 2003. *Óp. Cit.* Página 136.

El punto crítico de su creación ha sido que se evidenció el marcado interés de Estados Unidos en su creación y persecución, quedando de manifiesto el verdadero motivo que era perseguir a los japoneses por lo sucedido en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941⁵³⁹.

En su funcionamiento 11 naciones estuvieron involucradas⁵⁴⁰, siendo estas: Estados Unidos, la URSS, Gran Bretaña, Francia, los Países Bajos, China, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, India y Filipinas.

3. ¿CÓMO SE ABORDÓ EL TEMA DE LA SOBERANÍA?

En este caso, después de la rendición de Japón el 2 de septiembre de 1945⁵⁴¹ el país fue ocupado por Estados Unidos con el apoyo de Canadá, Australia, Reino Unido y Nueva Zelanda⁵⁴². Se ha justificado que no hubo violación a la soberanía debido a la rendición realizada por Japón, la cual hizo en *“su calidad de Estado soberano, en plena posesión de la mayoría de su territorio y con gran parte de su potencial bélico intacto, por lo que se consideró que estaba en plena capacidad y voluntad soberana para admitir la jurisdicción del Tribunal Penal de Tokio, manifestándolo con la plena certeza de las consecuencias de su decisión”*⁵⁴³.

En realidad, al estar bajo control extranjero, Japón no tenía soberanía para decidir sobre el reconocimiento y funcionamiento del Tribunal, la soberanía tampoco fue un tema de discusión al momento de crear el Tribunal, fue una decisión de los Aliados, que para este caso incluso economizaron esfuerzos al delegar a Mac Arthur la creación y funcionamiento.

“Al terminar la guerra, como en la época de la Restauración de Meiji, a Japón le faltaba la soberanía completa. Fue ocupado por las fuerzas estadounidenses entre 1945 y 1952. Aunque el gobierno militar estadounidense utilizó la burocracia japonesa para implementar sus políticas, la decisión final incluyendo el contenido de la nueva

⁵³⁹ BOISTER, Neil. 2008. *Óp. Cit. Páginas:* 18

⁵⁴⁰ TOTANI, Yuma. 2008. *The Tokio War Crimes Trial. The Pursuit of Justice in the Wake of World War II*. Primera Edición. Cambridge Massachusetts and London: Harvard University Press, Harvard East Asian Monographs 299, Página: 5. ISBN: 9780674033399

⁵⁴¹ BOISTER, Neil y Robert Cryer. 2008. *Óp. Cit. Páginas:* xxxvi

⁵⁴² Ídem

⁵⁴³ S.A 2015. *Tribunal Penal Internacional para Crímenes de Extremo Oriente*. En: *La Gaceta Jurídica*. [En línea]. Disponible en: <https://www.la-razon.com/> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

*Constitución, estaba en manos de los estadounidenses. La recuperación de la soberanía era otra vez la meta nacional de Japón de la posguerra*⁵⁴⁴.

Como ya se ha argumentado, a partir de Núremberg desaparece el poder soberano absoluto⁵⁴⁵, ya que hasta dicha instancia la soberanía del Estado había sido el pilar fundamental del orden jurídico internacional.

El Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente mantuvo la misma línea de Núremberg al eliminar el paraguas protector que la soberanía proporcionaba a los perpetradores. A diferencia de Núremberg, por decisión del general Mac Arthur⁵⁴⁶ se le otorgó inmunidad del Emperador⁵⁴⁷. Se utilizó el término genérico de criminales de guerra, sin hacer la distinción que se hizo en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, que no permitía a los líderes políticos protegerse detrás de sus funciones de oficiales, al estipular que Jefes de Estado o funcionarios en cargo de departamento no estaban exonerados de la responsabilidad.

4. TIPO DE GOBIERNO ¿DEMOCRACIA?

Japón no era una democracia durante la Segunda Guerra Mundial, era un imperio, que luego de su rendición inició su transición estructural, en ese proceso emite *“una nueva constitución y reforma su sistema político, fundando un estado de derecho gobernado por medio de un sistema parlamentario*⁵⁴⁸.

Todo esto bajo la ocupación estadounidense, que finalizó seis años después con la firma del tratado de San Francisco el 8 de septiembre de 1951 que con vigencia a partir del 28 de abril de 1952⁵⁴⁹.

⁵⁴⁴ S.A., S.F, *Formación del sistema político y económico de Japón en la posguerra, 1945-1965 [en línea]*. Disponible en: http://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/IRI%20COMPLETO%20-%20Publicaciones-V05/Publicaciones/cursos1/Keichi3.htm [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁵⁴⁵ TOMUSCHAT, Christian. *Op. Cit.* Página: 837

⁵⁴⁶ GÓMEZ Robledo, Alonso. 2003. *Op. Cit.* Página: 51

⁵⁴⁷ TOTANI, Yuma. 2008. *Op. Cit.* Páginas: 43 y 44.

⁵⁴⁸ BARCELONA Center for International Affairs, S.F., *Cronología histórica de Japón. En: Perfil del país, Japón. Anuario Internacional CID OB 2013 [en línea]*. Disponible en: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ENMumj5v2x8J:https://www.cidob.org/content/download/57945/1503458/file/391-400_ANEXO_CRONO%2BJAPON.pdf+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=gt [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁵⁴⁹ TORO Ibacache, Lenissett. 2018. *La Política de Seguridad Japonesa. Historia y Teoría [en línea]*. Primera Edición. Santiago, Chile: Ariadna Ediciones. ISBN: 9791036524608. Disponible en: <https://books.openedition.org/ariadnaediciones/1377> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

5. ¿ESTADO DE DERECHO?

Al igual que el Tribunal Militar Internacional de Núremberg, el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente no nació bajo el manto del estado de derecho per se, surgió por decisión de los Aliados, que en este caso facilitaron la creación del Tribunal; al emitir una orden que fuese ejecutada por Estados Unidos por medio del General Mac Arthur. No se puede afirmar que existiera un estado de derecho para ese momento, por cuanto la creación del tribunal por si solo demuestra que las acciones ejecutadas eran manifestación de la no existencia de un estado de derecho, puesto que era un imperio dirigido por el Emperador.

6. ¿ORIGEN BASADO EN CIERTAS SUPOSICIONES O CONDICIONES FÁCTICAS?

Al igual que Núremberg, su origen se basó en condiciones fácticas, siendo estas las de castigar a los principales criminales de guerra en el Lejano Oriente⁵⁵⁰, lo cual quedó plasmado en la Proclamación Especial de Establecimiento del Tribunal y en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente⁵⁵¹. Por lo que se deriva de condiciones fácticas y coyunturales de la época, y así quedó contenido en el estatuto de creación al consignar: *"... se establece para el juicio justo y rápido y el castigo de los principales criminales de guerra en el Lejano Oriente ..."*⁵⁵²

7. DOCUMENTO DE CREACIÓN

El Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente fue creado por medio de la Proclamación Especial aprobada el 19 de enero de 1946⁵⁵³, en este documento únicamente se estableció el objeto de creación, los sujetos intervinientes, la jurisdicción y territorialidad, siendo la norma jurídica suprema que regía las actuaciones del órgano jurisdiccional. El 26 de abril de 1946 se emitió el Estatuto del Tribunal. El texto íntegro de dicho estatuto fue promulgado por el comandante

⁵⁵⁰ TRIBUNAL Militar Internacional para el Lejano Oriente. *Special Proclamation, Establishment of an International Military Tribunal for the Far East*. 19 de enero de 1946.

⁵⁵¹ S.A. *Charter of the International Military Tribunal for the Far East*. 26 de abril de 1946. Artículo: 1

⁵⁵²Idem.

⁵⁵³ COMISIÓN preparatoria para una Corte Penal Internacional. *Óp. Cit.*

BROISTER, NEIL y Robert Cryer. 2013. *The Tokyo International Military Tribunal. A Reappraisal*. Oxford University Press. Primera Edición reimpressa. Nueva York. Página: 25

supremo de las potencias aliadas el 19 de enero de 1946, fundando las bases para el establecimiento del Tribunal.⁵⁵⁴

El Estatuto fue redactado por Estados Unidos, basado en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg⁵⁵⁵. En el artículo 5 se enuncio los delitos a juzgar, siendo estos los crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Pero se incorporaron algunos aspectos no contenidos en el otro tribunal derivados de las críticas realizadas al Estatuto de Núremberg, entre estas se encontraba la necesidad de dar más relevancia al conjunto de los países aliados⁵⁵⁶.

El Tribunal se organizó de diferente manera, los jueces eran representantes de los Estados a los que Japón declaró la guerra, siendo en total once. El Comandante Supremo Mac Arthur tenía la facultad de nombrar presidente y al Fiscal General ⁵⁵⁷del Tribunal.

8. MANDATO

El mandato es claro al regular su establecimiento para un juicio justo y rápido, castigando a los principales criminales de guerra en el Lejano Oriente⁵⁵⁸.

Al igual que Núremberg su funcionamiento se basaba en los principios de justicia e inmediación, enfocando su qué hacer en la consecución de justicia pronta y cumplida.⁵⁵⁹ Como ya se ha analizado, fueron varios documentos los que fundaron la

⁵⁵⁴ UNIVERSIDAD de la Sabana. 2019. Guía Académica del Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente. En: *MUNUS, Model United Nations Universidad de La Sabana* [en línea]. Disponible en:

https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Programas/Documentos_Pregrado/Ciencias_Políticas/Munus_guías_academicas/Tribunal_Penal_Militar_para_el_Lejano_Oriente_.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁵⁵⁵ FUNDACIÓN Cátedra Iberoamericana, S.F. Los Tribunales Internacionales. En: *Universitat de les Illes Balears*. S.A. [en línea]. Disponible en: <https://fci.uib.es/Servicios/libros/veracruz/Fraschina/1.-Los-Tribunales-Militares-Internacionales..cid210831> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁵⁵⁶ FUNDACIÓN Cátedra Iberoamericana. *Op. Cit.*

⁵⁵⁷ Ídem

⁵⁵⁸ Artículo 1 del Estatuto para el Tribunal Militar Internacional del Lejano Oriente.

⁵⁵⁹ El segundo considerando busca fortalecer el Estado de derecho y restaurar la credibilidad en los órganos de justicia al llevar a los responsables ante las autoridades de los lugares en donde cometieron sus crímenes para responder por sus actos expresando lo acordado en la Declaración de Moscú el 30 de octubre de 1943 advirtiendo que “*aquellos funcionarios alemanes y los hombres y miembros del partido Nazi que hayan sido responsables de crímenes y atrocidades o hayan participado en los mismos con su consentimiento serán devueltos a los países en los que cometieron sus abominables actos para que puedan ser juzgados y condenados con arreglo a las leyes de esos países liberados y de los gobiernos libres que se crearán en dichos países.*”

este Tribunal, los principios de inspiración fueron consignados en la Proclamación Especial para el establecimiento del Tribunal Militar Internacional del Lejano Oriente, en la cual se proclama el juicio de los principales criminales de guerra del Lejano Oriente, con el fin de juzgar las guerras ilegales de agresión de la Naciones del Eje⁵⁶⁰. La proclamación contenía 3 artículos en los cuales se estipuló:

- a. *“Enjuiciar a aquellas personas acusadas individualmente o como miembros de organizaciones con delitos que incluyan los crímenes contra la paz”*⁵⁶¹.
- b. *“Que su constitución, jurisdicción y funciones serían establecidos por medio del Estatuto del Tribunal”*⁵⁶².
- c. *“Y que no habría intromisión en la jurisdicción de otro tribunal, comisión, tribunal internacional, nacional u ocupacional para el juicio de Tribunales de Guerra”*⁵⁶³.

El Estatuto en su artículo 1 establece su objetivo “un juicio justo y rápido con el fin de castigar a los principales criminales de guerra del Lejano Oriente.” Lo que implicaba que los responsables de los crímenes establecidos en el artículo 5 fueran enjuiciados ante el Tribunal conformado, para la investigación de los hechos que se le imputaban, la determinación de su grado de participación, el esclarecimiento de los hechos ocurridos y su respectiva reparación.

Tanto la Proclamación Especial como el Estatuto dejaron claro que los sujetos a perseguir eran los principales criminales de guerra en el Lejano Oriente, a diferencia que Núremberg no se habló de atrocidades, únicamente se utilizó el término crímenes de guerra.

El Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente estaba dividido en secciones, la Sección I que contenía los artículos 1 a 4 regulaba:

⁵⁶⁰ TRIBUNAL Militar Internacional para el Lejano Oriente. *Óp. Cit.*

⁵⁶¹ Ídem. Artículo 1

⁵⁶² Ídem Artículo 2

BROISTER, Neil y Robert Cryer. 2008. Página: 25

⁵⁶³ TRIBUNAL Militar Internacional para el Lejano Oriente. *Óp. Cit.* Artículo 3

- a. El artículo 1 del establecimiento del Tribunal con el fin de un juicio justo y rápido, castigando a los principales criminales de guerra y determinando el asiento del tribunal en Tokio.
- b. El artículo 2 determinó el número de miembros del tribunal, siendo estos entre 6 y 9 miembros, nombrados por el Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas y propuestos por los países signatarios, además de India y Filipinas.
- c. El artículo 3 regulaba la composición del Tribunal en cuanto a Oficiales y la Secretaría, la cual estaba conformada por un Secretario General asistido por secretarios asistentes, oficiales, intérpretes y todo el personal necesario. Bajo el mando del Secretario General quedó la organización del trabajo de la Secretaría.
- d. El artículo 4 determinó la forma de convocatoria, votación quórum y ausencia, quedando establecido la necesidad de la presencia de una mayoría de los miembros del Tribunal para constituir quórum y que todas las decisiones y sentencias se debían emitir por mayoría de votos, siendo decisivo el voto del presidente del Tribunal. Los miembros ausentes en una sesión podían incorporarse en las siguientes, siempre que no alegaran públicamente desconocimiento del proceso.

En la Sección II del Estatuto se regulaba lo relativo a la Jurisdicción y disposiciones generales, contenido del artículo 5 al 8 así:

- a. El artículo 5 *“la Jurisdicción sobre personas y delitos, estableciendo el poder de juzgar y castigar a los criminales de guerra del Lejano Oriente, como individuos o como miembros de una organización, así como delimitando los delitos a juzgar siendo estos:*
 - a. *Delitos contra la paz, a saber, de la planificación, preparación, iniciación o librar una guerra de agresión declarada o no declarada. Violación de Derecho Internacional, Tratados, Acuerdos o Garantías, participación en un plan común o conspiración para su realización.*
 - b. *Crímenes de guerra convencionales a saber de violaciones de las leyes o costumbres de guerra.*

c. *Delitos contra la Humanidad, que incluían el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes o durante la guerra o persecuciones políticas o raciales, motivos de ejecución o en conexión con cualquier delito dentro de la jurisdicción del Tribunal, ya sea en violación o no de la ley interna del país donde se perpetró*⁵⁶⁴.

*Incluía “el juzgamiento de líderes, organizadores, instigadores y cómplices, participar en la formulación o ejecución en un plan común o conspiración para cometer cualquiera de los actos o los delitos establecidos”*⁵⁶⁵.

- b. El artículo 6 establecía la Responsabilidad del Acusado, regulando que ni la posición oficial en cualquier tiempo que hubiese *“actuado de conformidad con la orden de su gobierno o el de un superior era suficiente para liberarlo de la responsabilidad de la comisión de algún delito”*⁵⁶⁶, sin embargo, esa condición si podría considerarse para la mitigación del castigo.
- c. El artículo 7 regulaba las Reglas del Procedimiento, atribuyendo al Tribunal la facultad de redactar y enmendar las reglas del procedimiento con las disposiciones fundamentales del Estatuto.
- d. El artículo 8 establecía la figura de Counsel, lo que viene siendo la Fiscalía, la cual estaba conformada por un jefe designado por el Comandante y Jefe de las Fuerzas Aliadas, responsable de la investigación y procesamiento de cargos contra los criminales de guerra, prestando asistencia al comandante general. A este le apoyaba un fiscal asociado el cual podía ser nombrado por cualquier nación con la que Japón hubiese estado en guerra, este fiscal tenía como función ayudar al Jefe de Fiscalía.

⁵⁶⁴ TRIBUNAL Militar Internacional para el Lejano Oriente. *Op. Cit.* Artículo 5

⁵⁶⁵ Ídem.

⁵⁶⁶ Ídem. Artículo 6

La Sección III se enfoca en el juicio justo para el acusado y se desarrolló en los artículos 9 y 10 los cuales establecían:

- a. El artículo 9 desarrolla el procedimiento con el fin de asegurar un juicio justo garantizando:
 - i. Acusación, que debía ser clara, concisa y adecuada a cada delito que se imputara. Cada acusado tenía un tiempo adecuado para la defensa y se le proveía copia de la acusación en el idioma que se comunicaba.
 - ii. Audiencia, en cuanto a la audiencia se estableció que el acusado tendría derecho a dar cualquier explicación relevante a los cargos realizados en su contra, durante el juicio o en cualquier momento del procedimiento preliminar.
 - iii. Se dio importancia al idioma, este debía ser en inglés y en el idioma del acusado, todos los documentos debían tener traducción y proporcionarse cuando fuera necesario o solicitado.
 - iv. Los acusados tenían derecho a nombrar un abogado defensor de su elección, el cual podía ser desaprobado por el Tribunal, existía la defensa de oficio para quien no contara con abogado.
 - v. La defensa podía presentar pruebas y examinar testigos.
 - vi. Para la producción de pruebas, la solicitud era por escrito y se debía indicar los hechos a probar y la relevancia, una vez aprobada por el tribunal, este requería de ayuda para la reproducción.
- b. El artículo 10 reguló lo relativo a solicitudes y mociones antes del juicio, las cuales debían ser por escrito y archivadas por el Secretario General.

La Sección IV fue dedicada a los poderes del Tribunal y la conducta de los acusados durante el juicio, se encontraban del artículo 11 al 15 y se desarrolló de la siguiente manera:

- c. El artículo 11 destinado a los Poderes del Tribunal, atribuyéndole las facultades de:
 - i. Convocar a testigos del juicio, exigir que asistieran y testificaran, así como interrogarlos.

- ii. Interrogar a cada acusado, permitir sus comentarios o su negativa de declarar o responder preguntas.
 - iii. Requerir la producción de documentos y otro material probatorio.
 - iv. Requerir de cada testigo el juramento, afirmación o declaración de acuerdo a lo acostumbrado en el país del testigo y administrarlos.
 - v. Designar oficiales para la realización de cualquier tarea designada por el Tribunal incluido el poder de tener pruebas tomadas en comisión.
- d. El artículo 12 estaba dirigido a la realización del juicio y la forma de actuar del Tribunal durante este, desarrollándolo de la siguiente manera:
 - i. Limitar el juicio a una audiencia expedita de los asuntos planteados por los cargos.
 - ii. Tomar medidas estrictas para evitar cualquier acción que pudiese causar un retraso irrazonable y descartar problemas y declaraciones irrelevantes de cualquier tipo.
 - iii. Proporcionar el mantenimiento del orden en el juicio y tratar sumariamente con cualquier contumacia, imponiendo el castigo apropiado, podían excluir a cualquier acusado o su abogado de alguno o todos los procedimientos posteriores, sin perjuicio de la determinación de los cargos.
 - iv. Determinar la capacidad mental y física de cualquier acusación para proceder en el juicio.
- e. El artículo 13 contempló lo referente a la evidencia determinando que:
 - i. Admisibilidad: El Tribunal no estaba obligado a valorar técnicamente la evidencia, se estableció la aplicación en mayor medida del procedimiento no técnico, admitiendo cualquier evidencia que considerase que tenía valor probatorio. Además, haciendo admisibles todas las supuestas admisiones o declaraciones de los acusados.
 - ii. Relevancia: Se debía argumentar ante el Tribunal la naturaleza de la prueba para que éste decidiera sobre la relevancia.

- iii. Pruebas específicas admisibles: se establecieron como pruebas admisibles sin limitar el alcance:
 - 1. Documentos con independencia de su clasificación de seguridad y sin prueba de haber sido emitido o firmado, debía parecer que había sido firmado o emitido por cualquier oficial, departamento, agencia o miembro de las fuerzas armadas de cualquier gobierno.
 - 2. Informes firmados por el Tribunal o la Cruz Roja Internacional, médico, servicio médico, investigador o inteligencia oficial.
 - 3. Declaración jurada, declaración o "*declaración firmada*."
 - 4. *Diario, carta u otro documento, declaraciones juradas, no juradas que al Tribunal*⁵⁶⁷ creyera que tenía relación con los cargos.
 - 5. Copia de documento o evidencia secundaria si el original no estaba disponible inmediatamente.
- iv. Aviso Judicial: No se exigirían pruebas de hechos de conocimiento común, ni de la autenticidad de los documentos oficiales del gobierno e informes de cualquier nación o de los procedimientos, registros y hallazgos de militares u otras agencias de Naciones Unidas.
- v. Grabaciones y exhibición de documentos: La transcripción, grabación y exhibición debían ser archivados por la Secretaría General y pasaban a ser parte del registro.
- f. El artículo 14 estableció concretamente el lugar del juicio, siendo este Tokio para el primer juicio, para los demás juicios el Tribunal decidiría el lugar.
- g. El artículo 15 reguló el procedimiento durante el juicio, diseñándolo de la siguiente manera:
 - i. La acusación debía ser leída en el Tribunal, a menos que los acusados renunciara a ella, esta decisión la debían tomar todos los acusados.

⁵⁶⁷ TRIBUNAL Militar Internacional para el Lejano Oriente. *Óp. Cit.* Artículo 13

- ii. El Tribunal preguntaría a los acusados si se declaraban culpables o inocentes.
- iii. El fiscal y el acusado podían hacer una declaración concisa en la apertura del juicio.
- iv. La fiscalía y la defensa podían ofrecer pruebas de la cuales el Tribunal determinaría su admisibilidad.
- v. El fiscal y la defensa podían examinar a cada testigo y acusado que testificaran.
- vi. La defensa y el fiscal se podían dirigir al Tribunal.
- vii. El Tribunal deliberaba y emitía la sentencia.

La Sección V se refería al juicio y sentencia, desarrollándolo en los artículos 16 y 17 de la siguiente manera:

- a. El artículo 16 reguló lo relativo a la pena o sanción, estableciendo la pena de muerte, pena de prisión o cualquier otro castigo que el Tribunal determinara justo para imponer.
- b. El artículo 17 determinó cómo sería la sentencia y la revisión, esta debía ser pública, dando las razones en que se basaba, se trasladaba al Comandante General para su registro, quien a su vez podía reducir o alterar la sentencia, pero nunca aumentar la sanción.

El estatuto reguló claramente las actividades del Tribunal enfocado a que los procesos se realizaran en el menor tiempo posible, lo que muchos autores califican como actividades sumarias.

A. OBJETIVOS

En el artículo 1 del estatuto de creación del tribunal denominado “Internacional Military Tribunal for the Far East Charter”⁵⁶⁸ se plasma el objetivo del tribunal de someter a

⁵⁶⁸ El estatuto instituyó la facultad del Tribunal de enjuiciar y castigar a personas que hubiesen cometido los crímenes a título personal o como parte de una organización, lo que quedó regulado en el artículo 5 clasificados como crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. “*En donde se establece como sujeto responsable a aquel que sin participar en la ejecución del delito lidere, organice o incite a su ejecución siendo responsable de todos los actos realizados por las personas que sea en ejecución de dicho plan. El artículo 6 busca despojar a los principales responsables de los delitos enunciados de la esfera de protección jurídica que gozaban los altos funcionarios de Estado al*

los criminales de guerra del lejano oriente para que éstos sean procesados y castigados de forma justa y pronta, lo que se manifiesta de la siguiente manera: *"El Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente está establecido aquí para el juicio justo y rápido y el castigo de los principales criminales de guerra en el Lejano Oriente"*. Con esto se promovía la justicia pronta que coadyuvaba en la restauración de la credibilidad en los órganos de justicia, así como lo es el elemento castigador como expresión de garantía por parte del aparato de justicia, la carta establecía la facultad del Tribunal de juzgar y castigar las graves violaciones a los derechos humanos, jugando un papel fundamental en la construcción y fortalecimiento de un Estado de Derecho.

Según la Comisión preparatoria de la Corte Penal Internacional el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente fue creado, *"con el fin de juzgar a los principales criminales de guerra en el Lejano Oriente, entre cuyos delitos figuraban los crímenes contra la paz."*⁵⁶⁹

B. ALCANCES DEL MANDATO

Como se ha analizado, el mandato estaba destinado a procesar a los principales criminales de guerra del Lejano Oriente por crímenes contra la paz. Siendo la definición de crímenes contra la paz una gran diferencia con el estatuto del Tribunal Militar de Núremberg, los crímenes contra la paz se definieron como: *"una guerra declarada o no declarada de agresión"*⁵⁷⁰. Núremberg no incluía la no declarada.

La Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional llegó a considerar que: *"La diferencia en la definición de los crímenes contra la paz contenida en los dos estatutos puede deberse a que la Alemania nazi inició y llevó a cabo diversas guerras de agresión sin declaración de guerra. La Comisión de Crímenes de Guerra de las Naciones Unidas concluyó que las diferencias en la definición que figuraba en los dos estatutos eran "puramente verbales y que no afectaban a la sustancia del derecho*

actuar en el ejercicio de su cargo, protección que les permitía actuar sin consecuencia facilitándoles el eludir la justicia". TRIBUNAL Militar Internacional para el Lejano Oriente. Óp. Cit. Artículo 5 y 6

⁵⁶⁹ COMISIÓN preparatoria para una Corte Penal Internacional. Óp. Cit. Páginas: 131

⁵⁷⁰ Ídem

*que rige la jurisdicción del Tribunal para el Lejano Oriente respecto de los crímenes contra la paz en comparación con el Estatuto de Nuremberg*⁵⁷¹.

A diferencia del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, que se limitó a juzgar los crímenes durante la Segunda Guerra Mundial, el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente además de juzgar los delitos cometidos por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, conoció los crímenes cometidos por los japoneses desde la invasión japonesa al Este y Sureste de Asia y a varios Estados y Colonias en el Pacífico⁵⁷².

No existió una definición clara de a quiénes se consideraba criminales de guerra, no se determina si se incluía a quienes participaron en guerras ilegales⁵⁷³.

Dentro de sus alcances se encuentra la inclusión de evidencia de violación de Japón a Tratados Internacionales sobre la prohibición de droga, al proveerle opio a China, pese a que se catalogó como crimen contra la paz, es un precedente a la lucha internacional contra el tráfico de drogas ilegales⁵⁷⁴.

⁵⁷¹ COMISIÓN preparatoria para una Corte Penal Internacional. *Óp. Cit. Páginas:* 131

³⁰⁷. La Comisión fundó su conclusión en el razonamiento siguiente: “El punto que plantea la citada definición de crímenes contra la paz es que, mientras que el Estatuto de Nuremberg declara que “hacer una guerra de agresión” constituye un acto criminal sin hacer referencia a la declaración o falta de declaración, ni distinguir entre guerras iniciadas con una “declaración” correcta o sin ella, el Estatuto para el Lejano Oriente trata específicamente como criminal al acto de “hacer una guerra declarada o no declarada de agresión”. Esta última definición tiene el efecto de aclarar expresamente que el hecho de que la iniciación de una guerra esté precedida por su declaración formal, como lo exigen las convenciones de La Haya, no excluye la naturaleza criminal de dicha guerra si es “agresiva”. A ese respecto es importante señalar que la diferencia entre los dos estatutos es puramente verbal, en el sentido de que el literal a) del artículo 5 del Estatuto para el Lejano Oriente contiene una especificación adicional que, empero, está implícita en la definición que figura en el Estatuto de Nuremberg. Si bien omite decir que una guerra de agresión “declarada” es criminal de la misma manera que una guerra “no declarada”, el Estatuto de Nuremberg de todos modos considera decisivo el hecho de que una guerra sea “agresiva”. De ello se desprende que cualquier otro elemento vinculado con la “agresión” – tal como la existencia o inexistencia de una declaración – debe considerarse accesorio, e irrelevante a los efectos de la naturaleza criminal de la guerra de agresión en sí misma. En otras palabras, el elemento de “agresión” es considerado esencial, pero al mismo tiempo es por sí solo suficiente. Consiguientemente, en este punto estamos ante una simple diferencia de técnica jurídica; en el Estatuto para el Lejano Oriente la irrelevancia de la “declaración” de guerra está establecida en forma expresa; en el Estatuto de Nuremberg los mismos resultados se logran por vía de omisión. A ese respecto es conveniente señalar que precisamente en la irrelevancia de la declaración de guerra radica el rasgo principal del desarrollo del derecho internacional formulado por los dos estatutos y establecido por la sentencia del Tribunal de Nuremberg³⁰⁸.” Ídem.

⁵⁷² BOISTER, Neil. 2008. *Óp. Cit. Páginas:* 17

⁵⁷³ Ídem *Página:* 19

⁵⁷⁴ Ídem *Página:* 26

C.COMPETENCIA

La competencia se define en dos vías, *vis a vis* las personas y por el otro los actos.

El Tribunal Militar Internacional de Tokio *“tenía competencia para juzgar y castigar a los criminales de guerra del Lejano Oriente que, entre otras cosas, habían cometido crímenes contra la paz, entre los que figuraban los siguientes: planear, preparar, iniciar o hacer una guerra declarada o no declarada de agresión o una guerra que viole el derecho internacional o tratados, acuerdos o garantías internacionales, o participar en un plan común o conspiración para la perpetración de cualquiera de los actos indicados”*⁵⁷⁵.

Los delitos a juzgar quedaron regulados en el artículo 5 del Estatuto, siendo estos:

- i. *“Delitos contra la paz, a saber, de la planificación, preparación, iniciación o librar una guerra de agresión declarada o no declarada. Violación de Derecho Internacional, Tratados, Acuerdos o Garantías, participación en un plan común o conspiración para su realización.*
- ii. *Crímenes de guerra convencionales a saber de violaciones de las leyes o costumbres de guerra.*
- iii. *Delitos contra la Humanidad, que incluían el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes o durante la guerra o persecuciones políticas o raciales, motivos de ejecución o en conexión con cualquier delito dentro de la jurisdicción del Tribunal, ya sea en violación o no de la ley interna del país donde se perpetró*⁵⁷⁶.

⁵⁷⁵ NACIONES Unidas. 2000. *Óp. Cit. Páginas:* 131

DÁVILA Ponce de León, Rolando. S.F. *El Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente*. [en línea]. Disponible en: <http://alumnos.unir.net/rolandodavillaponcedeleon/2015/01/19/el-tribunal-penal-militar-internacional-para-el-lejano-oriente/#:~:text=El%20tribunal%20de%20Tokio%20fue,guerra%20que%20viole%20el%20derecho> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁵⁷⁶ TRIBUNAL Militar Internacional para el Lejano Oriente. *Óp. Cit. Artículo* 5

Incluía el juzgamiento de líderes, organizadores, instigadores y cómplices, participar en la formulación o ejecución en un plan común o conspiración para cometer cualquiera de los actos o los delitos establecidos.

D. FORTALEZAS

El Tribunal Militar Internacional de Tokio ha sido más criticado que el Tribunal de Núremberg, esto debido a la forma en que fue creado y cómo se diseñó la persecución penal quedó evidenciado que justicia de los vencedores y en este caso Estados Unidos tuvo el dominio del Tribunal, quedando manifiesto su interés por perseguir a los japoneses por lo sucedido en Pearl Harbour⁵⁷⁷.

Su fortaleza fue el ser muy parecido al Tribunal Militar Internacional de Núremberg por lo que ya tenía validados los temas en su actuar bajo los principios del Derecho Internacional para que se llegaran a obtener las condenas esperadas, premisas que se aplicaron y que posteriormente se convirtieron en los principios del Derecho Penal Internacional⁵⁷⁸, como se hizo en Núremberg.

Otra de sus fortalezas fue que se incluyó la participación de más países, en total 11, a quienes se les involucró más al nombrar cada uno un juez con igualdad de poderes que les representara ante el Tribunal⁵⁷⁹.

⁵⁷⁷ BOISTER, Neil. 2008. *Óp. Cit.* Páginas: 18

⁵⁷⁸ “1. La responsabilidad penal de quien cometiese delito de conformidad con el Derecho Internacional.
2. La inexistencia de legislación interna no exime de responsabilidad al perpetrador de conformidad con el Derecho Internacional.
3. Los Jefes de Estado que sean considerados perpetradores no están exentos de responsabilidad de conformidad con el Derecho Internacional.
4. Quien actúe bajo cumplimiento de órdenes superiores o de gobierno es responsable conforme el Derecho Internacional.
5. La persona acusada tiene derecho a un juicio justo basado en hecho y derecho.
6. Se consideran delitos conforme al derecho internacional los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad; estos últimos en ejecución o conexión con un crimen contra la paz o un crimen de guerra.
7. La complicidad en la comisión de un delito contra la paz, un crimen de guerra o un crimen contra la humanidad constituye un delito conforme al derecho internacional. Internacional”.

⁵⁷⁹ BOISTER, Neil. 2008. *Óp. Cit.*

E. REGLAS DE ADMISIBILIDAD

Al igual que el Tribunal de Núremberg, en Tokio las reglas de admisibilidad no estaban definidas como tal, pero se pueden determinar de acuerdo con lo establecido en el Estatuto y las Reglas de Procedimiento.

- i. *Ratione Personae*: aplicable a los criminales de guerra japoneses.⁵⁸⁰
- ii. *Ratione Materiae*: el Tribunal sólo fue competente para conocer de los crímenes cometidos por los japoneses por guerras ilegales de agresión a las naciones del Eje, aplicando los delitos descritos al artículo 5 del Estatuto⁵⁸¹.
- iii. *Ratione Temporis*: Crímenes cometidos por Japón a partir del 1 de enero de 1928 hasta el 2 de septiembre de 1945⁵⁸², aunque no se especificó ni en la Proclamación Especial ni en el Estatuto.
- iv. *Ratione Loci*: Sólo se aplicó para los crímenes cometidos en el Lejano Oriente⁵⁸³.

F. TIEMPO DETERMINADO

Los juicios por crímenes de guerra japoneses se desarrollaron desde mayo de 1946 hasta noviembre de 1948. El Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente declaró culpables a todos los acusados y los condenó a penas que iban desde los siete años de prisión hasta la pena muerte; dos acusados murieron durante el juicio⁵⁸⁴.

La forma expedita de trámite de los procesos se estipuló en el artículo 12 del Estatuto en el cual se consignó en su literal a “a. *Limitar el juicio a una audiencia expedita de los asuntos planteados por los cargos.*” Situación que también se observó en la

⁵⁸⁰ TRIBUNAL Militar Internacional para el Lejano Oriente. *Óp. Cit.* Considerandos.

TRIBUNAL Militar Internacional para el Lejano Oriente. *Óp. Cit.* Artículos 1 y 5

⁵⁸¹ GÓMEZ Robledo, Alonso. 2003. *Óp. Cit. Páginas*: 757

⁵⁸² Ídem

⁵⁸³ TRIBUNAL Militar Internacional para el Lejano Oriente. *Óp. Cit.* Artículo 1

⁵⁸⁴ GÓMEZ Robledo, Alonso. 2003. *Óp. Cit. Páginas*: 757

antelación con que se trasladó a los procesados la acusación, que fue de 14 días⁵⁸⁵ y la excepción de formalismos y técnica para la admisibilidad de la evidencia⁵⁸⁶.

Para Koburi Keiichiro esto no fue más que un juicio sumario⁵⁸⁷. Los juicios tuvieron lugar del 3 de mayo de 1946 al 16 de abril de 1948. Después de varios meses de deliberación, los once jueces del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente emitieron su veredicto el 4 de noviembre de 1948.⁵⁸⁸

G. DISTRIBUCIÓN DEL PODER.

En la Proclamación Especial quedaron consignadas las naciones aliadas, detallando tres de las once que formaron parte del Tribunal, siendo estas Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia, estipulando que el poder se delegaba en el comandante Douglas Mac Arthur⁵⁸⁹, comandante de las fuerzas aliadas de Estados Unidos.

Mac Arthur tuvo todo el poder de decisión dentro del Tribunal, tenía la facultad de nombrar al personal de la Secretaría, de decidir a quienes se investigaba y de revisión del fallo, fue quien decidió no perseguir al Emperador Hirohito⁵⁹⁰.

Según Neil Boister, en realidad todas las facultades las tenía Mac Arthur, no los aliados, con el aparente consentimiento de los japoneses por medio del Instrumento de Rendición⁵⁹¹.

⁵⁸⁵ TRIBUNAL Militar Internacional para el Lejano Oriente. *Óp. Cit.* Regla 1

⁵⁸⁶ TRIBUNAL Militar Internacional para el Lejano Oriente. *Óp. Cit.* Artículo 13

⁵⁸⁷ KEIICHIRO, Koburu. 1995. *The Tokyo Trials: The Unheard Defense* [en línea]. Tokyo, Japan: Kodansha Ltd. Sin ISBN. Disponible en: http://www.sdh-fact.com/CL02_1/66_S4.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁵⁸⁸ WANHONG, Zhang. 2006. From Nuremberg to Tokyo: some reflections on the Tokyo Trial (on the sixtieth anniversary of the Nuremberg Trials). *Cardozo Law Review* [en línea]. Vol. 27:4 2005-2006, *Página:* 1627. Sin ISBN. Disponible en: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/cdozo27&div=72&id=&page=> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁵⁸⁹ BOISTER Neil y Robert Cryer. Et al. 2008. *Óp. Cit.* *Páginas:* 26

⁵⁹⁰ TOTANI, Yuma. 2008. *Óp. Cit.* *Páginas:* 43

⁵⁹¹ BOISTER, Neil. 2011. *Óp. Cit.* *Páginas:* 19

9. ¿SURGIÓ COMO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES?

A. ¿HABÍA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL?

Al haberse creado casi paralelamente al Tribunal Militar Internacional de Núremberg contaban con los mismos antecedentes, para su creación, la noción de responsabilidad internacional no estaba acuñada, como dice Crawford: *“Como es característico de toda obligación, el elemento estructural de la responsabilidad, al menos de acuerdo con la noción mayoritaria, debía incluirse en las obligaciones contraídas por los Estados. La cuestión acerca de la Responsabilidad Internacional del Estado también fue de interés para la sociedad Internacional pre-Naciones Unidas, siendo este tema un eje central de la fracasada conferencia de la Haya en 1930”*⁵⁹².

Según Cassese: *“La teoría clásica del derecho internacional, pensó que el ‘tratado obliga a las partes, es decir, a los Estados que han acordado ser obligados por sus disposiciones.”*⁵⁹³ Idea que según la Corte Permanente de Justicia Internacional fue aplicada en los casos: “Ciertos Intereses alemanes” y el caso polaco de Alta Silesia en 1926⁵⁹⁴.

De ese caso es que se utilizó como marco para hablar de alguna manera de responsabilidad internacional los siguientes instrumentos:

- i. Declaración de París, adoptada en la guerra de Crimea de 1856.
- j. Código Lieber de 1863.
- k. Convenio de Ginebra de 1864.
- l. Convenciones de la Haya de 1899 y 1907.
- m. Los juicios de Leipzig entre 1919 y 1922.
- n. Protocolo de 1924.

⁵⁹² CRAWFORD, James. 2002. *International Law as an Open System*. Primera edición. Cambridge: Cambridge University Press, Página: 56. Sin ISBN.

⁵⁹³ CASSESE, Antonio. 2003. *Óp. Cit. Páginas*: 126

⁵⁹⁴ CORTE Permanente de Justicia Internacional. Case concerning certain German interests in Polish Upper Silesia. *Collection of Judgments. No 7. A. W. SIJTHOFF'S A. W. SIJ-HOFF* [en línea]. Publishing Company 1926. Página: 17. Disponible en: https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_07/17_Interets_allemands_en_Haute_Silesie_polonaise_Fond_Arret.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

- o. Acuerdos de Locarno de 1925.
- p. Pacto de Briand – Kellog de 1927⁵⁹⁵.

Recordando que para ese momento el término responsabilidad internacional no se encontraba acuñado en el Derecho Internacional⁵⁹⁶.

B. OBLIGACIONES INTERNACIONALES

Como ya se ha citado, para 1946 no se había afianzado el sistema de Derecho Internacional, lo que existía era una serie de normas fragmentadas que vislumbraban su nacimiento. Como se indicó en el capítulo anterior, la noción de obligación internacional no existía como existe hoy en día

Como lo manifiesta Crawford, *“el Derecho Internacional era un sistema de normas que bien podían ser derivadas de una moralidad “natural” de aplicación Universal, o dadas por existentes en razón del consentimiento de las Naciones”*⁵⁹⁷. Confirmado por Cassese, quien afirmó que *“el Derecho Internacional se resuelve gracias a la prioridad que se le otorga al consentimiento en la formación de una obligación -en sentido jurídico-, y al rol de la cooperación en la gestión de asuntos interestatales, ello aunado a la prerrogativa que deviene del concepto de soberanía según la cual el Estado tiene la capacidad de asumir compromisos”*⁵⁹⁸.

Dentro de las obligaciones internacionales más significativas adquiridas por Japón en 1945 se encontraban⁵⁹⁹:

- a. *“Obligaciones de preservar la independencia territorial y administrativa de China, contenidas en:*
 - i. *Declaración de los Estados Unidos de 1901. Notas idénticas de 1908.*

⁵⁹⁵ Que condenaba el recurso a la guerra como instrumento de política nacional.

⁵⁹⁶ Resolución 799. *Óp. Cit.*

⁵⁹⁷ CRAWFORD, James. 1998. *Responsabilidad de los Estados [Tema 2 del programa]* [en línea]. DOCUMENTO A/CN.4/490 y Add.1 a 7* Primer informe sobre la responsabilidad de los Estados. Sin ISBN. Disponible en: https://legal.un.org/ilc/documentation/spanish/a_cn4_490.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁵⁹⁸ CASSESE, Antonio. *Óp. Cit. Páginas:* 127

⁵⁹⁹ UNIVERSIDAD de la Sabana. 2019. *Óp. Cit. Páginas:* 18 y 19

- ii. *Tratado de las nueve potencias de 1922. Pacto de la Liga de las Naciones de 1920.*
- b. *Obligaciones de respetar el territorio de las potencias interesadas en el Pacífico, contenidas en:*
 - i. *Tratado de las cuatro potencias de 1921.*
 - ii. *Notas a Países Bajos y Portugal de 1926.*
 - iii. *Pacto de la Liga de las Naciones de 1920.*
- c. *Obligaciones de mantener inviolable el territorio de las potencias neutrales, contenidas en:*
 - i. *Convenio de La Haya V de 1907*
- d. *Obligaciones de resolver disputas entre naciones por medios diplomáticos, o mediación, o arbitraje, contenidas en:*
 - i. *Tratado de las cuatro potencias de 1921.*
 - ii. *Tratado de las nueve potencias de 1922.*
 - iii. *Convenio de La Haya de 1907.*
 - iv. *Pacto de París de 1928.*
- e. *Obligaciones diseñadas para asegurar la solución pacífica de controversias internacionales, contenidas en:*
 - i. *Convenio de La Haya de 1899.*
 - ii. *Convenio de La Haya de 1907.*
 - iii. *Pacto de París de 1928.*
- f. *Obligación de dar una advertencia previa antes de comenzar las hostilidades contenida en el Convenio de La Haya III de 1907.*
- g. *Obligaciones relativas a la conducta humana en la guerra del Convenio de la Cruz Roja de Ginebra de 1929*⁶⁰⁰.

⁶⁰⁰ UNIVERSIDAD de la Sabana. 2019. *Óp. Cit. Páginas: 18 y 19*

C. ¿ABORDA HECHOS ILÍCITOS INTERNACIONALES?

Como se sabe, a partir del Tribunal Militar Internacional de Núremberg se inicia el proceso para acuñar en el Derecho Internacional el término hecho ilícito internacional, aunque el concepto no existía, se puede decir que sí hubo en el caso del Tribunal para el Lejano Oriente, ya que Japón había vulnerado sus obligaciones Internacionales.

10. COOPERACIÓN DE LOS ESTADOS.

El Tribunal se originó por el acuerdo de las naciones aliadas como consta en la Proclamación Especial, a diferencia de Núremberg que dejó cerrado el tema de cuántos países podían intervenir, en Tokio se permitió la intervención de los países afectados por las invasiones japonesas, llegando a ser 11 en total.

Al igual que el Tribunal Militar Internacional de Núremberg, sin la cooperación internacional, el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente nunca hubiese sido posible establecerlo y la presencia de representantes de ese número plural de estados, demuestra por sí la cooperación de la comunidad internacional en ese propósito de hacer justicia.

11. INDEPENDENCIA

La independencia en su trabajo no es uno de los elementos que se pueda afirmar que cumpliera el Tribunal Militar para el Lejano Oriente. Desde su Proclamación Especial quedó bien claro el control del General Mac Arthur, y con ello, lo que representaba el control de Estados Unidos en las actividades del Tribunal, como ya se ha mencionado, pues, significó la venganza de Estados Unidos a Japón por el ataque de Pearl Harbour⁶⁰¹.

Como ya se ha mencionado Broister afirmó que todas las facultades estaban concentradas en el general Mac Arthur.⁶⁰²

⁶⁰¹ BROISTER, Neil. 2011. *Óp. Cit.*

⁶⁰² Ídem *Páginas*: 19

12. SELECCIÓN DE ACTORES

La selección de actores estaba plenamente determinada en la Proclamación Especial y en el Estatuto de creación del Tribunal, en esta se especificó que participaban Estados Unidos y las Naciones Aliadas, incluyéndose a los países del Eje. El acercamiento con estos no fue el resultado de una concordancia ideológica, sino de intereses estratégicos de política internacional⁶⁰³.

El artículo 1 del Estatuto determinaba los sujetos que serían sometidos a juicio, siendo estos los principales criminales de guerra en el Lejano Oriente. Sin embargo, como explica Neil Broister, no se clarifica quienes eran los criminales de guerra y si esto incluía a quienes participaron en guerras ilegales⁶⁰⁴.

En cuanto a la selección de acusados, esto estuvo a cargo del General Mac Arthur, quien como ya se ha puntualizado decidió dar la inmunidad del emperador por razones políticas⁶⁰⁵.

La fiscalía decidió que las primeras órdenes de arresto se giraran en contra de 39 personas y en la segunda etapa se hizo contra 100⁶⁰⁶, eligiéndose como acusados a los jefes de los comandos militares que conspiraron, con el objeto de invasión contra países extranjeros⁶⁰⁷. De los imputados 28 pertenecían a la clase dirigente militar y política de Japón⁶⁰⁸, de los cuales 14 poseían el rango de generales, la mitad habían ejercido las labores propias de un ministro de guerra⁶⁰⁹.

⁶⁰³ GÓMEZ Robledo, Alonso. 2003. *Óp. Cit. Páginas:* 769

⁶⁰⁴ BROISTER, Neil. 2011. *Óp. Cit. Páginas:* 19

⁶⁰⁵ Ídem

⁶⁰⁶ TAKEDA, Kayoko. 2007. *Sociopolitical Aspects of Interpreting at the International Military Tribunal for the Far East (1946-1948) [en línea]*. Tesis doctoral. España: Universitat Rovira i Virgili, Monterey Institute of International Studies. Disponible en:

<https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8769/Thesis.pdf?sequence=1Sociopolitical> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁶⁰⁷ GÓMEZ Robledo, Alonso. 2003. *Óp. Cit. Páginas:* 767

⁶⁰⁸ JESCHECK, Hans – Heinrich. 2001. El Tribunal Penal Internacional. *Revista Penal* [en línea]. España: Universidad del Friburgo de Brisgovia, [Nº 8, España](http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/12965/Tribunal%20Penal.pdf?sequence=2), Página: 55. [Disponible en:

<http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/12965/Tribunal%20Penal.pdf?sequence=2> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁶⁰⁹ GÓMEZ Robledo, Alonso. 2003. *Óp. Cit. Páginas:* 766

13. NORMATIVA RELEVANTE Y MARCO PROCEDIMENTAL

Básicamente se aplicó la normativa de Derecho Internacional existente, los principios del derecho penal, la Declaración de Potsdam de 26 de julio de 1945, el Instrumento de Rendición japonés de 2 de septiembre de 1945, la Proclamación Especial para el establecimiento del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente de 19 de enero 1946, el Estatuto para el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente y sus enmiendas de 26 de abril de 1946 y las Reglas de Procedimiento del Tribunal Militar Internacional para el Lejano de Oriente de 25 de abril de 1946.

El procedimiento se reguló en el Estatuto y en las Reglas de Procedimiento, al igual que el Tribunal Militar Internacional de Núremberg por el principio de “juicio justo”, regulado en los artículos 1 y 9 del Estatuto.

El procedimiento iniciaba con la acusación⁶¹⁰, que debía ser clara, concisa y adecuada, estar traducida al idioma de los procesados⁶¹¹, quienes tenían derecho de nombrar abogado de su confianza para su defensa, y si no lo hacían, se les nombraba un abogado de oficio.⁶¹² El acusado se podía auto incriminar⁶¹³, cada acusado y su defensa recibía con 14 días de antelación al juicio la copia de la acusación y de la documentación, así como aportaba pruebas⁶¹⁴.

El Estatuto de Tokio dispuso de un Asesor Jurídico Principal que ejercía las funciones de fiscal, quien fue designado por el Comandante Supremo, bajo su responsabilidad tuvo la investigación y el enjuiciamiento de las personas imputadas como criminales de guerra contemplados en la jurisdicción del Tribunal de Tokio. Un asesor o un fiscal asociado que prestara asistencia al asesor jurídico principal en sus funciones, podía ser nombrado por alguna de las Naciones con las que Japón había estado en guerra.⁶¹⁵

La acusación fue presentada el 29 de abril de 1946, estaba comprendida en tres grupos de imputaciones que incluían “55 cargos contra 28 acusados, y 52 de los

⁶¹⁰ TRIBUNAL Militar Internacional para el Lejano Oriente. *Óp. Cit.* Artículo 9, literal a

⁶¹¹ Ídem Artículo 9, literal c

⁶¹² Ídem Artículo 9, literal d

⁶¹³ Ídem Artículo 6

⁶¹⁴ TRIBUNAL Internacional Militar para el Lejano Oriente. *Óp. Cit.* Regla: 1a

⁶¹⁵ NACIONES Unidas. 2000. *Óp. Cit.* Página: 133

*cargos se relacionaban con crímenes contra la paz. El grupo uno comprendía los cargos 1 a 36, relativos a crímenes contra la paz, y el grupo dos comprendía los cargos 37 a 52, relativos a los actos de asesinato como crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad*⁶¹⁶.

Se imputó a los acusados que se consideró que cumplieron con un plan, aprovechándose de su poder, puestos oficiales, prestigio e influencia personal, “*se propusieron planear y planearon, prepararon e iniciaron y llevaron a cabo guerras de agresión*”⁶¹⁷ contra los Estados Unidos, China, el Reino Unido, la Unión Soviética, Australia, el Canadá, Francia, los Países Bajos, Nueva Zelanda, la India, Filipinas y otras naciones pacíficas, violando el derecho internacional y los compromisos, obligaciones y seguridades reconocidos por los tratados.⁶¹⁸

En cuanto a los cargos hubo una división de la acusación en dos grupos, siendo estos:

- a. “*Grupo uno: Donde los cargos 1 a 36 se referían a la responsabilidad individual de los acusados por crímenes contra la paz con arreglo al artículo 5 del Estatuto de Tokio y al derecho internacional. Los cargos 1 a 5 se referían al plan común o conspiración para cometer crímenes contra la paz; los cargos 6 a 17 a la planificación y preparación de guerras de agresión; los cargos 18 a 26 a la iniciación de guerras de agresión, y los cargos 27 a 36 a la realización de guerras de agresión*”⁶¹⁹.
- b. Grupo dos: En donde “*los cargos 37 a 52 se referían a la responsabilidad individual de los acusados por conspiración para cometer asesinatos y la comisión efectiva de los ilícitos homicidios o asesinatos mediante, entre otras cosas, crímenes contra la paz*”.⁶²⁰

La acusación se apegó a la tesis del complot – conspiración, dejando a los jueces en imposibilidad de condenar al sistema imperial por la guerra que había llevado a cabo⁶²¹. El acta de acusación contemplaba los hechos desde el 1 de enero de 1928 hasta el 2 de septiembre de 1945, momento de la rendición japonesa,

⁶¹⁶ NACIONES Unidas. 2000. *Óp. Cit. Página: 134*

⁶¹⁷ Ídem

⁶¹⁸ Ídem

⁶¹⁹ Ídem. *Página: 134*

⁶²⁰ Ídem. *Página: 137*

⁶²¹ GÓMEZ Robledo, Alonso. 2003. *Óp. Cit. Páginas: 767*

fundamentándose en la firma y ratificación de este documento por parte de Japón del Pacto Briand – Kellog que declaró la guerra como violatoria del derecho.

Los acusados se clasificaron en tres grupos⁶²², siendo estos:

- c. Clase A, se incluía a los presuntos responsables de haber ejecutado crímenes contra la paz⁶²³.
- d. Clase B, se incluyó a los presuntos responsables de la comisión de crímenes de guerra ⁶²⁴ como mandos superiores, ordenando la ejecución de los hechos.
- e. Clase C, incluyó a los presuntos responsables de la comisión de crímenes contra la humanidad⁶²⁵ que como individuos ejecutaron las órdenes superiores⁶²⁶.

Según Broister⁶²⁷, la Comisión de Crímenes de Guerra de Naciones Unidas había sugerido centrarse en los roles y la preparación de la guerra agresiva, pero bajo la influencia de Estados Unidos los transformaron en roles políticos. La sugerencia de Naciones Unidas fue que bajo la clase A, se incluyeran ofensa y planeación, preparación, iniciación, nivel de agresividad y conspiración⁶²⁸.

La labor del fiscal titular, Joseph Keenan fue altamente cuestionada por su retórica marchita, juicio pobre, incompetencia en el Tribunal, poca organización, abuso del alcohol y largas ausencias⁶²⁹.

Asimismo, el Estatuto y las Reglas de Procedimiento garantizaron la reproducción y proposición de testigos ⁶³⁰ y documentos ⁶³¹ como prueba, la proposición debía hacerse por escrito, explicando lo que se pretendía probar, pero el Tribunal no estaba obligado a la valoración técnica de la prueba, podía adoptar y aplicar un procedimiento

⁶²² BROISTER, Neil. 2011. *Óp. Cit. Páginas: 21*

TOTANI, Yuma. 2008. *Óp. Cit. Páginas: 22*

⁶²³ Ídem

⁶²⁴ Ídem *Páginas: 23*

⁶²⁵ TAKEDA, Kayoko. 2007. *Óp. Cit. Páginas: 47*

⁶²⁶ Ídem

⁶²⁷ BROISTER, Neil. 2011. *Óp. Cit. Páginas: 21*

⁶²⁸ BROISTER, Neil. 2011. *Óp. Cit. Páginas: 21*

⁶²⁹ Ídem. *Páginas: 20*

⁶³⁰ TRIBUNAL Internacional Militar para el Lejano Oriente. *Óp. Cit. Artículos 9, literales e y f y 13*

TRIBUNAL Internacional Militar para el Lejano Oriente. *Óp. Cit. Reglas: 4 y 6*

⁶³¹ Ídem

no técnico y admitir cualquier evidencia que considerara con valor probatorio, de forma tal que todas las supuestas admisiones o declaraciones de los acusados eran admisibles⁶³².

En cuanto a los documentos, estos no necesitaban prueba de emisión o firma, eran admisibles los informes firmados por el Tribunal, la Cruz Roja Internacional, médicos, servicio médico, investigador o inteligencia oficial. Las declaraciones podían ser juradas o firmadas, también eran admisibles los diarios, cartas, declaraciones juradas y no juradas que al Tribunal le parecieran tener relación con los cargos, copias de documentos o evidencia secundaria si el origen no estaba disponible de inmediato.

Los hechos de conocimiento común no necesitaban ser probados, se consideraban como ya probados⁶³³. Y tal como se señaló en un punto anterior se incluyó evidencia de la violación de Japón a Tratados Internacionales sobre la prohibición de drogas, por proveerle opio a China, acusándolo de delitos contra la paz⁶³⁴.

Como afirma Broister las reglas de procedimiento no fueron técnicas con el fin de agilizar los juicios⁶³⁵, abandonándose las reglas de exclusión del Common Law para facilitar la admisión de estas.

Se admitieron 4336 exhibiciones de documentos, 779 deposiciones, se escucharon 419 testigos y se incorporaron 30,000 páginas de documentos. Las audiencias se realizaron en inglés y japonés con traducciones al ruso, chino y francés⁶³⁶. Se utilizaron 230 traductores, 175 del lado de la fiscalía y 55 del lado de la defensa⁶³⁷.

El Tribunal de Tokio no emitió sentencia contra 3 de los 28 acusados, esto se debió a que Matsuoka y Nagano, fallecieron durante el desarrollo del juicio, y Okawa fue declarado incapaz por lo que no pudo presentarse al juicio. Los imputados que se acudieron a juicio se declararon inocentes.⁶³⁸

⁶³² TRIBUNAL Internacional Militar para el Lejano Oriente. *Óp. Cit.* Artículo 3
TRIBUNAL Internacional Militar para el Lejano Oriente. *Óp. Cit.* Reglas: 5

⁶³³ Ídem.

Ídem. Regla: 5

⁶³⁴ BROISTER, Neil. 2011. *Óp. Cit.* Página: 26

⁶³⁵ BROISTER, Neil. 2011. *Óp. Cit.* Página: 26

⁶³⁶ SANDOVAL Mesa, Jaime Alberto. 2012. *Óp. Cit. Páginas:* 50

⁶³⁷ KEIICHIRO, Koburu. 1995. *Óp. Cit. Páginas:* 65

⁶³⁸ COMISIÓN preparatoria para una Corte Penal Internacional. *Óp. Cit. Páginas:* 137

En cuanto a la sentencia⁶³⁹, esta debía ser fundamentada, y las sanciones⁶⁴⁰ determinadas fueron:

- i. Pena de muerte
- j. Condena de Prisión
- k. Cualquier otro castigo que se determinara como justo

La sentencia debía ser pública, el registro se transmitía al comandante quien podía reducir o alterar la sentencia, excepto para aumentar la sanción⁶⁴¹.

El veredicto final se emitió el 12 de noviembre de 1948, teniendo como resultado 28 condenas, no hubo absoluciones⁶⁴², condenas traducidas en⁶⁴³:

- a. 7 penas de muerte
- b. 16 cadenas perpetuas
- c. 1 pena de prisión de 20 años
- d. 1 pena de prisión de 7 años

Los procesados condenados a muerte fueron ejecutados en la horca. Además de lo ya analizado, la politización de los juicios se refleja en que deliberadamente no se revelaron las atrocidades cometidas por la Unidad 731 en la que se realizaron experimentos biológicos y químicos, a diferencia de lo ocurrido en Núremberg temática respecto de la cual se sustentó el primer proceso que se desarrolló; Estados Unidos se apoderó de esa información⁶⁴⁴.

El fallo fue dividido, incluso el juez ruso absolvió y el Juez Pal de la India, afirmó que los juicios se realizaron para saciar la venganza⁶⁴⁵.

14. LEGITIMIDAD:

Las bases legales del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente como se mencionó en el apartado de Responsabilidad Internacional, fueron todos los Tratados

⁶³⁹ TRIBUNAL Militar Internacional para el Lejano Oriente. *Óp. Cit.* Artículos: 16 y 17

⁶⁴⁰ Ídem

⁶⁴¹ Ídem Artículo 17

⁶⁴² GÓMEZ Robledo, Alonso. 2003. *Óp. Cit. Páginas:* 767

⁶⁴³ KAUFMAN, Zachary D. 2010. *Óp. Cit. Páginas:* 767

⁶⁴⁴ GÓMEZ Robledo, Alonso. 2003. *Óp. Cit. Página:* 769

⁶⁴⁵ BROISTER, Neil. 2011. *Óp. Cit. Páginas:* 26

y Convenios de Derecho Internacional Público que Japón tenía ratificados para la época y en los cuales los aliados se fundamentaron para crear la Declaración de Potsdam que definía los términos de rendición de los Japoneses de fecha 26 de julio de 1945, pero ésta se dio en definitiva solo en el Instrumento de Rendición Japonés de 2 de septiembre de 1945, la Proclamación Especial para el establecimiento de un Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente de 19 de enero de 1946 y el Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente de 26 de abril de 1946, estatuto que se complementó con las Reglas de Procedimiento del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente de 25 de abril de 1946.

Su legalidad fue menos cuestionada que Núremberg debido a que se argumentó que Japón había firmado la rendición el 2 de septiembre de 1945, en el ejercicio de su soberanía, *“en plena posesión de la inmensa mayoría de su territorio y gran parte de su potencialidad bélica intacta, por lo que se estimó que tenía plena capacidad y voluntad soberana para aceptar la jurisdicción del Tribunal Penal de Tokio y así lo hizo, con el pleno convencimiento de las consecuencias de aquella decisión”*.⁶⁴⁶

La defensa argumentó que el Tribunal no tenía contemplado dentro de su jurisdicción el enjuiciamiento de los crímenes contra la paz, debido a que consideraba que la guerra de agresión no era ilegal y por ende no era un crimen, aseverando que la guerra era un acto de Estado por lo que no cabía señalar la responsabilidad individual de acuerdo al derecho internacional, aunado a que la normativa del Estatuto era retroactiva e ilegal⁶⁴⁷. Alegato que fue rechazado por el Tribunal, que resolvió de acuerdo a la opinión que se manejó en el Tribunal de Nuremberg, es que *“la guerra de agresión era un crimen con arreglo al derecho internacional desde una fecha muy anterior a la Declaración de Potsdam”*.⁶⁴⁸

En cuanto a su legitimidad, esta fue más cuestionada que Núremberg; de hecho, Charles Minear afirmó que: *“el examen de diversos hechos y eventos relevantes no era suficiente para demostrar el complot con Tokio quisieron hacer copia fiel de Núremberg, pero no se podía comparar porque el general Tojo, principal acusado no era Adolfo Hitler en Japón no existía nada que se asemejara al partido Nazi sobre le*

⁶⁴⁶ S.A Tribunal Penal Internacional para Crímenes de Extremo Oriente. *Óp. Cit.*

⁶⁴⁷ GÓMEZ Robledo, Alonso. 2003. *Óp. Cit.* Página: 769

⁶⁴⁸ NACIONES Unidas. 2000. *Óp. Cit.* Páginas: 140

*cual habría podido apoyarse un führer nipón.*⁶⁴⁹ Algunos jueces la cuestionaron, como por ejemplo el juez francés Henri Bernard en su fallo disidente afirmó que: *“El Estatuto del Tribunal no estaba fundado con ninguna regla de derecho existente al momento en que las infracciones fueron cometidas y por los demás tantos principios de justicia habían sido violados en el curso del proceso que la sentencia del Tribunal sería sin duda anulada por razones de derecho en la mayoría de los países civilizados.”*⁶⁵⁰

El complot fue puesto en entre dicho por el Juez Hernri Rolling, quien expresó en su fallo disidente: *“...la preparación militar en vista de un conflicto probable no implica necesariamente un complot con miras a llevar a cabo una agresión.”*⁶⁵¹

Koburu Keiichiro afirma que fue un tribunal desprovisto de legalidad, formación, experiencia e imparcialidad legal, siendo una injusticia penalizar a los líderes japoneses ex post facto, ya que los procesados eran estadistas y militares de altos rangos⁶⁵².

Afirmación que se respalda con lo manifestado por el juez hindú, Radjabinod Pal quien en su fallo disidente expresó: *“Todo proceso como el que debía de llevarse a cabo ante el Tribunal Militar Internacional para el Extremo Oriente no era más que el proceso del vencido por el vencedor.”*⁶⁵³ La mayoría de jueces no cuestionaron la competencia o los principios aplicados⁶⁵⁴. Afirmación que Broister apoya al manifestar que fue un tribunal para la justicia de los vencidos⁶⁵⁵.

15. JURISDICCIÓN

El Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente tenía jurisdicción para juzgar a los criminales de guerra japoneses por crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad⁶⁵⁶, las definiciones de estos crímenes eran casi literales a las contenidas en la Carta de Núremberg. No obstante, el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente tenía jurisdicción sobre los crímenes ocurridos

⁶⁴⁹ GÓMEZ Robledo, Alonso. 2003. *Óp. Cit. Páginas:* 769

⁶⁵⁰ Ídem *Página:* 771

⁶⁵¹ Ídem

⁶⁵² KEIICHIRO, Koburu. 1995. *Óp. Cit. Páginas:* 65

⁶⁵³ GÓMEZ Robledo, Alonso. 2003. *Óp. Cit. Página:* 771

⁶⁵⁴ Ídem. *Página:* 770

⁶⁵⁵ BROISTER, Neil. 2011. *Óp. Cit. Páginas:* 29

⁶⁵⁶ BOISTER Neil y Robert Cryer. Et al. 2008. *Óp. Cit. Páginas:* xxxviii

durante un período de tiempo mayor, desde 1927 hasta la rendición de Japón en 1945⁶⁵⁷.

La jurisdicción se mencionó de manera genérica en el artículo 2 de la Proclamación Especial⁶⁵⁸ en donde se delegó la facultad de delimitarla al general Mac Arthur, y éste a su vez la desarrolló en el artículo 5 del Estatuto para el Tribunal Militar para el Lejano Oriente estableciendo: *“Jurisdicción sobre personas y delitos. Juzgar y castigar a los criminales de guerra del Lejano Oriente, como individuos o como miembros de organizaciones. Delitos en los que se incluyen crímenes contra la paz. A) Delitos contra la paz... b) Crímenes de guerra... c) Delitos contra la Humanidad...”*

Como lo relata el documento elaborado por la Comisión preparatoria para una Corte Penal Internacional *“El Tribunal de Tokio tenía competencia para juzgar y castigar a los criminales de guerra del Lejano Oriente que, entre otras cosas, habían cometido crímenes contra la paz, entre los que figuraban los siguientes: planear, preparar, iniciar o hacer una guerra declarada o no declarada de agresión o una guerra que viole el derecho internacional o tratados, acuerdos o garantías internacionales, o participar en un plan común o conspiración para la perpetración de cualquiera de los actos indicados.*

269. A diferencia del Estatuto de Nuremberg, el Estatuto de Tokio definía a los crímenes contra la paz haciendo referencia a “una guerra declarada o no declarada de agresión”. La diferencia en la definición de los crímenes contra la paz contenida en los dos estatutos puede deberse a que la Alemania nazi inició y llevó a cabo diversas guerras de agresión sin declaración de guerra. La Comisión de Crímenes de Guerra de las Naciones Unidas concluyó que las diferencias en la definición que figuraba en los dos estatutos eran “puramente verbales y que no afectaban a la sustancia del derecho que rige la jurisdicción del Tribunal para el Lejano Oriente respecto de los crímenes contra la paz en comparación con el Estatuto de Nuremberg”⁶⁵⁹

⁶⁵⁷ BOISTER Neil y Robert Cryer. Et al. 2008. *Óp. Cit.* Página: 32

⁶⁵⁸ Ídem. Página: 25

⁶⁵⁹ NACIONES Unidas. *Óp. Cit.* Páginas: 131 y 132

A. ¿QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE DE UN CASO?

La Proclamación Especial en sus considerandos y artículo 1, y el Estatuto del Tribunal en sus artículos 1, 2, 3, 7, 9 establecieron claramente los sujetos que intervendrían, en este caso: el General Mac Arthur, los representantes de las 11 naciones, (jueces), el personal de la Secretaría que incluía al Fiscal y sus ayudantes, testigos, traductores, abogados defensores y evidentemente los procesados.

B. ¿QUÉ PROBLEMAS SE PODÍAN DEBATIR?

Los problemas por debatir quedaron debidamente delimitados, en el preámbulo y artículo 1 de la Proclamación Especial y en los artículos 1,5 y 6 del Estatuto de creación, siendo estos:

- a. Conocer los crímenes de guerra, cometidos por los japoneses, especialmente las guerras ilegales de agresión a las Naciones del Eje.
- b. Los crímenes determinados fueron:
 - i. Crímenes contra la paz
 - ii. Crímenes de guerra
 - iii. Crímenes contra la humanidad
- c. En cuanto a los modos de participación⁶⁶⁰ y reglas de responsabilidad penal, éstas se extendieron más allá del comportamiento individual, estableciendo la participación y responsabilidad de miembros de algún grupo u organización.

16. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN:

El Estatuto de creación del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, al igual que el de Núremberg, tampoco reguló medios de impugnación a utilizar durante el proceso, sin embargo, las defensas utilizaron los principios generales establecidos en el Derecho Internacional Público y en el Derecho Penal, invocando el ejercicio de la defensa:

⁶⁶⁰ BROISTER, Neil. 2011. *Óp. Cit. Páginas*: 19

- a. La inmunidad que gozaban algunos oficiales⁶⁶¹.
- b. Persecución Selectiva⁶⁶²

Es importante destacar que, desde la creación del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, el General Mac Arthur quiso evitar el retardo del proceso, esto se refleja en el artículo 1 y 12 literal b) del Estatuto de creación cuando se regula tomar medidas estrictas para evitar cualquier acción que pueda causar un retraso irrazonable y descartar problemas y declaraciones irrelevantes de cualquier tipo.

17. MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO

Al igual que Núremberg, el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente fue creado con objetivo claro y puntual que era juzgar a los criminales de guerra japoneses, por lo que no necesitó de un mecanismo de cumplimiento, el General Mac Arthur se encargó de que se ejecutara el castigo ejemplar en un proceso bastante sumario, seleccionando únicamente a altos funcionarios y militares japoneses.

Ni la Proclamación Especial, ni el Estatuto de Creación, ni las Reglas de Procedimiento consignaron expresamente un mecanismo de cumplimiento. La función de ejecución estaba delegada en Mac Arthur.

18. RECURSOS DISPONIBLES

Los recursos se pueden ver desde la perspectiva de los funcionarios que trabajaron para el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente y desde la perspectiva de la defensa de los sindicados.

Al parecer la Secretaría estuvo dotada de los recursos suficientes y como siempre para la defensa, los recursos fueron limitados e insuficientes, lo que se evidenció ya en el plazo de 14 días para conocer la acusación. Estos recursos fueron:

A. HUMANO:

En cuanto a recurso humano, la defensa se quejó de no tener suficiente recurso humano y material, aunque de acuerdo a los estándares modernos fueron

⁶⁶¹ BROISTER, Neil y Robert Cryer. 2008. *Óp. Cit. Páginas*: 295

⁶⁶² Ídem *Página*: 296

privilegiados pues cada imputado podía tener hasta tres abogados defensores⁶⁶³. Se contó con 177 defensores en total⁶⁶⁴.

El Tribunal fue conformado por un miembro de cada uno de los países signatarios con su respectivo suplente.

Siendo los jueces⁶⁶⁵:

- a. Edward Stuart McDougall de Canadá
- b. Major General Mei Ju-ao de China
- c. Henri Bernard de Francia
- d. Radhabinod Pal de India
- e. Bert Röling de Holanda
- f. Harvey Northcroft de Nueva Zelanda
- g. Colonel Delfin Jaranilla de Filipinas
- h. Lord Patrick de Gran Bretaña
- i. John P. Higgins de Estados Unidos, estuvo hasta julio 1946
- j. General Myron C. Cramer de Estados Unidos después de julio 1946
- k. General I. M. Zarayanov de la Unión Soviética

Se nombró un fiscal y sus ayudantes siendo estos⁶⁶⁶:

Fiscal Jefe:

- Joseph Keenan de Estados Unidos

Fiscales Adjuntos:

- Justice Alan Mansfield de Australia
- Brigadier Henry Nolan de Canadá
- Xiang Zhejun de China
- Robert L. Oneto de Francia
- P. Govinda Menon de India

⁶⁶³ BROISTER, Neil y Robert Cryer. 2008. *Op. Cit.* Páginas: 174

⁶⁶⁴ Ídem Página: 1

⁶⁶⁵ CHEN, Peter. S.F. Tokyo Trial and other Trial against Japan. 3 May 1946 - 12 Nov 1948. *World War II, Database* [en línea]. Disponible en: https://ww2db.com/battle_spec.php?battle_id=221 [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁶⁶⁶ CHEN, Peter. *Op. Cit.*

- W. G. Frederick Borgerhoff-Mulder de Holanda
- Brigadier Ronald Henry Quilliam de Nueva Zelanda
- Pedro Lopez de Filipinas
- Arthur Strettell Comyns Carr de Gran Bretaña
- Sergei Alexandrovich Golunsky de la Unión Soviética

Se creó una Secretaría Central conformada por un Secretario General, secretarios asistentes, oficiales militares y secretarios intérpretes.

B. MATERIALES:

En cuanto a los recursos materiales, se proveyó al Tribunal de todos los materiales necesarios para su labor, incluyendo los medios de reproducción del material. Es importante resaltar la previsión de dejar registro de todas las actuaciones realizadas.

A estas facilidades tuvieron acceso todas las partes. Se contó con 30000 folios de documentos⁶⁶⁷.

C. PRESUPUESTO ASIGNADO:

En este trabajo se ha imposibilitado desarrollar este punto debido a que ninguno de los recursos bibliográficos consultados contiene esa información. Así, como tampoco los instrumentos que regularon su funcionamiento lo consignaron.

19. EL PAPEL DE LA VÍCTIMA:

Las víctimas no fueron parte activa del proceso, como afirma Judith Giménez Montero⁶⁶⁸, en el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente se le dio escasa o nula importancia al rol de las víctimas de las acciones bélicas ejecutadas por Japón.

En general los estatutos y reglas procedimentales de los Tribunales Militares Internacionales no se hizo mención de las víctimas o supervivientes, de lo que se deduce que estas personas nunca fueron incluidas dentro de los procedimientos. Por lo tanto, las víctimas de los hechos juzgados por estos Tribunales, no tuvieron ningún rol dentro de los juicios, ni contaron con ningún tipo de asistencia, ayuda o protección,

⁶⁶⁷ KEIICHIRO, Koburu. 1995. *Óp. Cit. Páginas:* 65

JESCHECK, Hans – Heinrich. *Óp. Cit.*

⁶⁶⁸ GIMÉNEZ Montero, Judith. 2017. *Óp. Cit. Páginas:* 39, 40 y 41

por lo que en ese momento no existió la posibilidad de una reparación, pues tanto la noción de víctima como de reparación no se habían acuñado dentro del Derecho Internacional Público de 1945.

La razón pudo ser que el objetivo de creación de los Tribunales Militares Internacionales era enjuiciar a los posibles responsables de haber cometido hechos atroces principalmente durante la Segunda Guerra Mundial, pero no interesaba la víctima, por lo que no fue de interés el involucrar a las víctimas directas de los hechos.

Esto refleja un problema que perduró durante muchos años en diversas ramas del derecho, la poca inclusión y participación de la víctima en la búsqueda de justicia.

20. PERCEPCIÓN PÚBLICA:

Como ya se mencionó, para esta investigación no se cuentan con los recursos ni es el objetivo central para realizar una encuesta de percepción per se, No se puede negar la popularidad que tiene el trabajo realizado por el Tribunal Militar Internacional de Núremberg es ampliamente conocido a nivel mundial, en primero lugar por la magnitud y seriedad de los hechos, es importante destacar que han mantenido difusión y publicidad desde que se realizó, esto se debe al esfuerzo que ha realizado la comunidad judía para que los crímenes cometidos contra ellos no queden en el olvido; desde este punto de vista, el Tribunal Militar Internacional de Núremberg fue eficaz, su legado sigue vigente y continúa siendo objeto de análisis.

Muy diferente es el caso del Tribunal Militar para el Lejano Oriente, quizás por la percepción de que fue un juicio político de venganza y el lanzamiento de la bomba nuclear a Hiroshima. La actividad del Tribunal es más desconocida y poco exaltada.

Las víctimas y supervivientes se decepcionaron de los procedimientos fueron decepcionantes, desde la perspectiva legal y de su derecho a participar en el proceso y obtener reparación⁶⁶⁹.

⁶⁶⁹ GIMÉNEZ Montero, Judith.2017. *Óp. Cit. Páginas:* 41

21. NÚMERO DE CASOS INGRESADOS

La primera orden de aprehensión se giró contra 39 personas, la segunda fue contra 100 personas, pero se procesaron únicamente 28 personas⁶⁷⁰. Los hechos que se juzgaron fueron:

- c. Las matanzas de Nanking en China que se dieron entorno de la uerra guerra sino – japonesa, en las cuales se estima que hubo más de doscientos mil asesinados⁶⁷¹.
- d. La “marcha de la muerte de Battan”, como crimen de guerra que incluyó el desplazamiento de prisioneros de guerra de forma forzada y sin posibilidad de subsistencia. Los japoneses desplazaron alrededor de 75,000 filipinos y soldados estadounidenses prisioneros, los prisioneros no se encontraban en buenas condiciones físicas, recibieron tratos crueles y degradantes⁶⁷².
- e. La matanza de Manila de alrededor de 100,000 personas, realizada en febrero de 1945, donde los japoneses embistieron a la población civil filipina que huía de las tropas estadounidenses⁶⁷³, que dio origen al estándar Yamashita.
- f. El Escuadrón 731, que consistió en *“un programa secreto de investigación y desarrollo de armas biológicas del ejército japonés, hizo experimentos con seres humanos los cuales tuvieron como resultado la muerte, mutilación, incapacidad u otras consecuencias sobre las víctimas, se ejecutó a partir de segunda guerra chino-japonesa y luego durante la Segunda Guerra Mundial”*⁶⁷⁴. Hubo un estimado de 10000 víctimas, sin embargo; estos hechos no fueron llevados a juicio, la fiscalía decidió darles inmunidad⁶⁷⁵.

⁶⁷⁰ TAKEDA, Kayoko. 2007. *Óp. Cit.*

⁶⁷¹ S.A Tribunal Penal Internacional para Crímenes de Extremo Oriente. *Óp. Cit.*

⁶⁷² Ídem

⁶⁷³ S.A Tribunal Penal Internacional para Crímenes de Extremo Oriente. *Óp. Cit.*

⁶⁷⁴ Ídem

⁶⁷⁵ WANHONG, Zhang. 2005. *Óp. Cit. Páginas: 1676*

22. NÚMERO DE CASOS RESUELTOS

El Tribunal juzgó a 28 funcionario pertenecientes a la cúpula del gobierno japonés sin incluir al Emperador. Fallecieron 2 procesados antes de ser juzgados⁶⁷⁶. El Tribunal dictó las sentencias entre el 4 y el 12 de noviembre de 1948, las cuales fueron aprobadas por mayoría de votos, siguiendo de cerca los razonamientos legales del Tribunal de Núremberg y rechazó los alegatos de la defensa por las mismas razones que este.

Se declaró culpables a todos los acusados. Se dictaron⁶⁷⁷:

- a. 7 penas de muerte
- b. 16 cadenas perpetuas
- c. 1 pena de prisión de 20 años
- d. 1 pena de prisión de 7 años

*“El general Mc Arthur consintió en trasladar las apelaciones de dos de los condenados al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pero este declinó su competencia al no ser el Tribunal de Tokio un Tribunal de los Estados Unidos. Tal como sucedió con el enjuiciamiento de los crímenes cometidos en el curso de la guerra en Europa, junto a este Tribunal actuaron paralelamente otro tipo de Tribunales de carácter militar, de ocupación y nacionales que juzgaron casos menores”.*⁶⁷⁸

23. ANÁLISIS CUALITATIVO:

El trabajo realizado por el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente fue muy cuestionado, fue calificado como inapropiado por no respetar el principio de *nullum crimen, nulla poena, sine lege*⁶⁷⁹.

Se criticó la ausencia de imparcialidad por parte del Tribunal, la mayoría de los jueces no cuestionaron la competencia, ni los principios aplicados⁶⁸⁰ pese a que hubo varios

⁶⁷⁶ KAUFMAN, Zachary D. 2010. *Óp. Cit. Páginas: 767*

⁶⁷⁷ Ídem

⁶⁷⁸ FUNDACIÓN Cátedra Iberoamericana. *Óp. Cit.*

⁶⁷⁹ WANHONG, Zhang. 2005. *Óp. Cit. Páginas: 1675*

⁶⁸⁰ GÓMEZ Robledo, Alonso. 2003. *Óp. Cit. Páginas: 770*

votos disidentes el más controversial fue el del Juez hindú Pal, voto que no se hizo público hasta 1950.

El archivo completo del juicio no estuvo disponible en público hasta 1977 cuando uno de los jueces lo publicó, el ensayo completo los documentos no se publicaron hasta 1981⁶⁸¹.

Para Zhang Wanhong⁶⁸² las razones del fracaso del Juicio de Tokio son complejas, entre estas razones se tiene:

- a. Haber tomado decisiones políticas unilaterales.
- b. La decisión de los Estados Unidos de no enjuiciar al emperador Hirohito fue tomado como una "decisión política calculada" en un intento de ayudar a la ocupación de Japón de la posguerra⁶⁸³.
- c. Los actos realizados por el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente son un ejemplo de cómo la política puede superar al Estado de Derecho de los Tribunales dependientes.
- d. Hubo un enfrentamiento de sistemas legales que se reflejó desde conceptos legales a procedimientos y técnicas judiciales, los sistemas legales se enfrentaron a cosas a las que no estaban acostumbrados o incluso cosas que no les gustaban. Más de un juez expresó su descontento. con el concepto legal de conspiración - complot de un sistema de derecho consuetudinario. Este concepto, que no había aparecido en el derecho internacional, era introducido en el juicio de Nuremberg creativamente por alguien que trabajó en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y⁶⁸⁴ en los juicios de Tokio se utilizó como base de los crímenes de guerra.⁶⁸⁵

⁶⁸¹ WANHONG, Zhang. 2005. *Óp. Cit.*

⁶⁸² Ídem

⁶⁸³ *"La exclusión del emperador Hirohito del enjuiciamiento se decidió después de una reunión privada con el general MacArthur, el Comandante Supremo de las Potencias Aliadas. El general MacArthur creía que, dado el apoyo público japonés del emperador, el enjuiciamiento de Hirohito resultaría en "una condición de caos subterráneo ", causaría que Japón se" desintegrara ", y así haría la ocupación de Estados Unidos más difícil". S.A Tribunal Penal Internacional para Crímenes de Extremo Oriente. Óp. Cit.*

⁶⁸⁴ WANHONG, Zhang. 2005. *Óp. Cit. Páginas:* 1680

⁶⁸⁵ Ídem *Página.* 1677

- e. Diferentes valores legales y culturas que se reflejó en una forma diferente de comprensión de la justicia y diferentes formas de transmitir justicia.
- f. Los factores históricos, personales e ideológicos contribuyeron a que no hubiese armonía en la institución⁶⁸⁶.
- g. El concepto de crímenes contra la humanidad se centraba en el miedo a invitar una crítica de su historia de esclavitud⁶⁸⁷.
- h. No hubo uniformidad en cuanto a la importancia que se dio a los actos cometidos por los japoneses, el Tribunal obvió investigar los delitos cometidos por las fuerzas japonesas durante las ocupaciones a Corea y China.⁶⁸⁸
- i. Hubo inequidad del tratamiento debido a que el Tribunal sólo juzgó los crímenes en sus tres categorías, que fueron cometidos exclusivamente por los grupos de japoneses específicos.
- j. Desde el contexto histórico no se puede negar que fue la justicia de los vencedores sobre los vencidos.

A pesar de haber sido bastante similar en cuanto a su contenido al Tribunal Militar Internacional de Núremberg, el Legado del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente es más limitado. Entre este se encuentra:

- a. Se creó el estándar Yamashita, que consiste en que el superior jerárquico tiene responsabilidad de hechos cometidos por el personal a cargo por no haber

⁶⁸⁶ Se cree que el juez Pal de India hizo su disidencia opinión debido a su odio al gobierno colonial por parte del Reino Unido en India.

⁶⁸⁷ WANHONG, Zhang. 2005. *Óp. Cit. Páginas:* 1681

⁶⁸⁸ S.A Tribunal Penal Internacional para Crímenes de Extremo Oriente. *Óp. Cit.*

“En el caso de Corea, desde hacía ya más de 30 años, cuando los japoneses invadieron y ocuparon militarmente Corea, que ésta pasó a formar una provincia administrativa de Japón, viéndose privada de su independencia el Estado y de sus derechos su población. Otro tema que resulta especialmente atroz en el caso de Corea es la situación de miles de mujeres coreanas que fueron obligadas a transformarse en mujeres de campaña o prostitutas, destinadas para satisfacer a los militares japoneses. Las supervivientes de esa triste generación de mujeres coreanas, hasta hoy reclaman una reparación a Japón.

En el caso de China, donde existió especial ensañamiento con su población civil, sobre todo desde 1937 en adelante, quedó la sensación de que estas muertes tenían poca significación con relación a otras similares, que, si fueron bastante más investigadas y sobre todo juzgadas, o es que tal vez la masividad de los hechos, obligó a los vencedores a ser selectivos con relación a los mismos.

Especial gravedad reviste el caso de los experimentos para la guerra química y bacteriológica, en donde nunca se investigó o sancionó como Crímenes de Guerra en base a los testimonios de pruebas biológicas en prisioneros y ciudadanos comunes en China durante la ocupación japonesa”.

adoptado las medidas tendientes a evitar un gran número de atrocidades contra la población civil.

- b. Fue un aporte importante para demostrar que una orden superior no eximía la responsabilidad penal de quien la ejecuta.
- c. Tokio examinó más detalladamente la noción de complot.
- d. Un punto negativo del tribunal fue la protección de la familia imperial al no haber sido sujetos de investigación.
- e. Con esa infortunada orientación del tribunal dada por los Estados Unidos más con un contenido político se perdió credibilidad por falta de imparcialidad.
- f. Adicionalmente se presentó problemas en la ejecución de las sentencias y con posterioridad se presentaron cambios.

Luego de este completo estudio analítico en los aspectos que a mi juicio considere de mayor relevancia, se puede establecer que el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente contribuyó limitadamente a la lucha contra la impunidad, esto se debió a la persecución selectiva, unilateral y que dejó muchas dudas en cuanto al procedimiento utilizado, dejó cierto mensaje de que se hacía justicia en determinados sectores.

A continuación, se presenta de forma gráfica y sintética el trabajo realizado por el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente.

		Mandato	Duración del Mandato	Cesación de los hechos que originaron el mandato	Inicio del primer juicio	Universo de casos	Casos procesados y/o relaciones	Tiempo promedio de los casos	Casos pendientes de resolución	% Casos presentados versus casos resueltos	% Casos pasibles de procesamiento versus casos
1	Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente	Procesar a los criminales de guerra japoneses.	Tiempo indeterminado	2 de septiembre de 1945	3 de mayo de 1946	4	3	2 años 5 meses aproximadamente	0	75 %	25%

SUB - SECCIÓN A.2

TRIBUNALES AD HOC

El desarrollo y transformación de la lucha contra la impunidad ha requerido la creación de nuevas fórmulas jurisdiccionales para encarar la represión de los crímenes cometidos, dio como resultado la creación de tribunales penales internacionales *ad hoc*. La palabra *ad hoc* significa “*dispuesto esencialmente para un fin*”⁶⁸⁹, es precisamente por este significado que reciben su nombre, por estar destinados a resolver crímenes internacionales determinados⁶⁹⁰, siendo estos: el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos personas individuales, especialmente funcionarios de gobierno, políticos, militares y guerrilleros en el territorio de la Ex Yugoslavia y de Ruanda.

Ambos tribunales fueron establecidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 1993 y 1994⁶⁹¹ respectivamente, para perseguir crímenes cometidos en conflictos específicos, con competencias limitadas a un lapso de tiempo y lugar específico.

Hasta el momento han sido los dos únicos esfuerzos creados dentro de esta categoría, fundamentando su creación en el en el capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, que permite al Consejo a actuar en los asuntos internos de un Estado, considerando que se hacía necesaria la intervención humanitaria por la perpetración de masacres y otras víctimas graves del derecho internacional humanitario en esos países, hechos que significaban una amenaza a la paz y la seguridad internacional.

Joana Abrisketa afirma que: “*Dado que la Carta de Naciones Unidas no tiene normas expresamente la constitución de tribunales ad hoc, cabe interpretar el Consejo de Seguridad se extralimitó en el ejercicio de sus competencias. Sin embargo, lo cierto*

⁶⁸⁹ REAL Academia Española. *Óp. Cit.*.

⁶⁹⁰ SCHARF, Michael y Magaux Day. 2011, 2013. The ad hoc international criminal tribunals: Launching a new era of accountability. En: SCHABAS, William y Nadia Bernaz. *Routledge handbook of International Criminal Law*. Primera edición. Londres y Nueva York: Routledge Taylor & Francis Group, Ed. *Óp. Cit.* Página: 51. ISBN – 0 203 83689 8.

⁶⁹¹ SCHABAS, William A. 2006, 2008. *The UN International Criminal Tribunals. The former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone*. Primera Edición reimpresa. Cambridge: Cambridge University Press. Páginas: 3 y 4. ISBN-13 978-0-521-60908-1.

*es que se ha constatado una legitimación de los mismos, por cuanto los Estados han obtenido un consenso generalizado sobre su admisión*⁶⁹²”.

Aparentemente la comunidad internacional prefirió crearlos como sustitutos de otro tipo de procedimientos políticos o armados, en donde los medios de comunicación jugaron un papel preponderante por la difusión que dieron a los hechos promoviendo la traslación de la opinión pública que impulsó que se adoptaran medidas por medio de Naciones Unidas.

Lo que se vio reflejado en el preámbulo de la Resolución 827 de 1993 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el que expresaba su profunda alarma por *“los continuos informes de violaciones generalizadas y flagrantes del Derecho Internacional Humanitario que se perpetraban en territorio de la ex Yugoslavia... inclusive los informes sobre asesinatos en masa, detenciones y violaciones masivas de mujeres, organizadas y sistemáticas, y de la práctica de la depuración étnica.”*⁶⁹³

Ambos casos, son de iniciativas de ámbito restringido, localizadas en territorios y límites temporales precisos, con el objetivo de someter a juicio a los presuntos responsables de crímenes internacionales y otras graves violaciones del Derecho Humanitario, hacer justicia a las víctimas, evitar la repetición de las violaciones. Son verdaderamente internacionales, producto del desarrollo del Derecho Penal Internacional, que tenían la novedad de la no aplicabilidad del régimen general de inmunidad de jurisdicción, reconocido en el ámbito penal a los altos mandatarios de Estado.⁶⁹⁴ Se les dio el nombre de:

- a. Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia
- b. Tribunal Penal Internacional para Ruanda

Los cuales se analizan en la presente sección.

⁶⁹² ABRISKETA, Joana. 2006. Tribunales Penales Internacionales ad hoc (para ex Yugoslavia y Ruanda)” En: UNIVERSIDAD del País Vasco. *Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo* [en línea]. Disponible en: <http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/219> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁶⁹³ GONZÁLEZ Vega, Ignacio U. *Óp. Cit.*

⁶⁹⁴ Ídem

CAPÍTULO III

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA EX YUGOSLAVIA

ANTECEDENTES

El área de los Balcanes se encuentra habitada por una diversidad étnica y religiosa que han convivido en una constante tensión. Los diferentes grupos serbios, croatas y bosnios comparten una mutua desconfianza al considerar que existe la intención de colonizar los territorios y expulsar a los que se consideran intrusos, en una región que cada vez más es identificada como europea.

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Josip Tito logra establecer la Federación Socialista de la República de Yugoslavia, la que se integró con los diferentes grupos étnicos que habitaban la zona de los Balcanes y comprendían las repúblicas de Serbia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia, Montenegro y Eslovenia. La supresión de los sentimientos nacionalistas hizo parte de la política federal, con el diseño de su plan conocido como la Hermandad y la Unidad. Sin embargo, durante el gobierno de Tito, los albaneses constituían algo así como la mitad de la población de los presos políticos.

Después de la muerte de Tito y la reelección del presidente Slobodan Milosevic en 1991, la federación empieza a desintegrarse, la región de Eslovenia vota un referéndum por medio del cual declaran su independencia. Los líderes políticos, utilizaron la retórica nacionalista para erosionar una identidad yugoslava común y alimentar el temor y el recelo entre los distintos grupos étnicos.

En 1991, la ruptura del país se alzaba con Eslovenia y Croacia culpando a Serbia de dominar injustamente el gobierno, el ejército y las finanzas de Yugoslavia. Serbia a incriminó a las dos repúblicas de separatismo⁶⁹⁵.

Entre 1992 y 1995 las relaciones con la región de Bosnia se deterioran y se inicia una guerra catalogada como un conflicto armado caracterizado por múltiples crímenes de guerra y contra la humanidad. Por lo menos 100.000 personas murieron y 20 mil mujeres fueron violadas. La Comisión de Expertos constituida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para evaluar si existían razones para configurar el Tribunal Internacional al describir lo ocurrido en los Balcanes, lo catalogo como actos que violan la Convención contra el Genocidio, en estos términos:

“56. Con base en los numerosos informes que describen la política y las prácticas llevadas a cabo en la ex Yugoslavia, la 'limpieza étnica' se llevó a cabo mediante asesinatos, torturas, arrestos y detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y agresiones sexuales, confinamiento de población civil en áreas del ghetto, remoción forzada, desplazamiento y deportación de población civil, ataques militares deliberados o amenazas de ataques contra civiles y áreas civiles, y destrucción desenfrenada de bienes. Esas prácticas constituyen crímenes de lesa humanidad y pueden asimilarse a crímenes de guerra específicos. Además, tales actos también podrían entrar en el sentido de la Convención sobre Genocidio ⁶⁹⁶” .

En 1992 y luego de múltiples debates el Consejo de Seguridad⁶⁹⁷ dicto la Resolución 808 con la que se estableció El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia⁶⁹⁸, fundamentando legalmente su actuación en la Carta de las Naciones Unidas⁶⁹⁹, que

⁶⁹⁵ NACIONES Unidas. S.F. The Conflict. En: *United Nations International Residual Mechanism for Criminal Tribunals*. [en línea]. Disponible en: <https://www.icty.org/en/about/what-former-yugoslavia/conflicts> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁶⁹⁶ SECURITY Council. 1994. Letter Dated 24 May 1994 from The Secretary-General to The President of The Security Council S/1994/674 27 May 1994. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: http://www.icty.org/x/file/About/OTP/un_commission_of_experts_report1994_en.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁶⁹⁷ ORENTLICHER, Diane. 2018 *Some kind of justice. The ICTY's Impact in Bosnia and Serbia*. S.E. Nueva York: Oxford University Press. Página: 3. ISBN: 9780190882273.

⁶⁹⁸ SECURITY Council. 2010. Resolution 1966 (2010) Adopted by the Security Council at its 6463rd meeting, on 22 December 2010 S/RES/1966 (2010) 22 December 2010. En: *Naciones Unidas* [en línea]. Disponible en: [http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/827%20\(1993\)](http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/827%20(1993)) [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁶⁹⁹ KERR, Rachel. 2004. *The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. An Exercise in Law, Politics, and Diplomacy*. Primera Edición. Nueva York: Oxford University Press, Página: 9 ISBN – 13: 9780199263050

complementó con la resolución 827 por medio de la cual desarrollo el Estatuto del Tribunal.

Lo acontecido en los Balcanes fue catalogado como el peor de los conflictos ocurridos después de la Segunda Guerra Mundial.

La creación del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia se llevó a cabo en curso del conflicto armado, diferencia sustancial con los Tribunales Militares Internacionales de Núremberg y Tokio que fueron creados cuando el conflicto armado había terminado, El establecer un Tribunal Penal Internacional en medio del conflicto, conlleva todos los desafíos que presentaba administrar justicia en medio de los enfrentamientos armados.

1. ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ FUE CREADO?

El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia se creó para procesar individuos responsables de violaciones del derecho internacional humanitario⁷⁰⁰ y crímenes internacionales y por medio de esta acción crear en la región afectada, las bases para un sistema de justicia imparcial y equitativo, elemento indispensable para la democracia.

La aspiración del Consejo de Seguridad estuvo inspirada fundamentalmente en la idea de una intervención temporal y fundamentalmente derivada de la gravedad de los acontecimientos. El Consejo de Seguridad, nunca contempló el plan de establecer un Tribunal permanente que juzgara todos los crímenes de guerra ocurridos en la Ex-Yugoslavia. Sin embargo, el sistema internacional de protección de los derechos humanos nunca había desarrollado este tipo de intervención, por lo tanto, las aspiraciones del mandato del Consejo de Seguridad para definir la jurisdicción operativa del Tribunal pronto se revelaron insuficientes y de este modo, éste no sólo se vio obligado a cumplir el papel de desarrollar el primer sistema operativo de la persecución penal internacional por graves violaciones en los conflictos armados, sino también, tuvo que desarrollar las prácticas y políticas que le dieran apoyo operativo al órgano judicial.

⁷⁰⁰ SCHABAS, William A. 2006. *Óp. Cit.*

2. PAPEL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN SU CREACIÓN

Los Tribunales Internacionales para la Ex Yugoslavia y Ruanda, fueron creados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en razón a que la comunidad internacional llegó a la conclusión que las cortes locales no tenían la capacidad para procesar y juzgar la magnitud y dificultad de casos por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra que ocurrían en esos territorios.

La decisión no fue fácil, su creación fue resultado de muchas discusiones de los miembros del Consejo de Seguridad que no deseaban ser cuestionados por “intervenir” en conflictos internos⁷⁰¹. El Consejo de Seguridad⁷⁰² tuvo que ser muy cuidadoso debido a las tensiones existentes entre las presiones políticas, el oportunismo internacional y la ausencia de mecanismos para hacer cumplir las órdenes emanadas de la institución, en especial el derecho penal internacional que podía hacer que se perdiera el sentido y legitimidad del Tribunal, si sólo los estados más poderosos se apropiaban de la idea de la universalidad para aplicarla selectivamente a los estados más débiles⁷⁰³. En este caso reflejados en los países de la Ex Yugoslavia.

3. ¿CÓMO SE ABORDÓ EL TEMA DE LA SOBERANÍA?

En el caso de los Tribunales ad hoc, como lo fue el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, el tema de la soberanía se considera superado por tratarse de crímenes contra la humanidad y graves violaciones al derecho humanitario, para lo que se utiliza la noción de jurisdicción penal internacional, la cual como lo afirman Juan Manuel Portilla Gómez y Andrea Paula Hernández y Rojas, *“Esta jurisdicción ya no se determina bajo la soberanía estatal sino que se deriva de mecanismos instrumentados por los Estados para juzgar a los individuos responsables de dichas conductas”*⁷⁰⁴.

⁷⁰¹ SCHABAS, William A. 2006. *Óp. Cit. Páginas:* 14 – 17

⁷⁰² Para 1993 conformado por China, Cabo Verde, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Japón, Marruecos, Rusia, Estados Unidos y Venezuela.

⁷⁰³ HAZAN, Pierre. 2004. *Justice in a Time of War*, The True Story Behind the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. Primera edición. Estados Unidos: Pierre Hazan, página: 16 ISBN: 1-58544-377-8.

⁷⁰⁴ PORTILLA Gómez, Juan Manuel y Andrea Paula Hernández Rojas, S.F. *La Evolución y la Efectividad de los Tribunales Penales Ad Hoc*. En: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM [en

Esto no significa que en el momento de su creación el tema no haya sido discutido, todo lo contrario, existieron diferentes cuestionamientos al respecto, llegándose a la conclusión que no existía vulneración de la soberanía Estatal. La decisión de crear el Tribunal fue extraordinaria y fundamentada en que los tribunales yugoslavos de justicia no eran aptos para garantizar el castigo de los responsables de los graves crímenes cometidos.

4. TIPO DE GOBIERNO ¿DEMOCRACIA?

Los países de la Ex Yugoslavia para 1992 estaban en una transición de independencia, habían elegido sus propias autoridades, por ejemplo, Serbia tenía un presidente reelecto para un segundo período⁷⁰⁵, todos los países estaban en la transición y en conflicto armado interno causado por el afán de romper con la identidad yugoslava, por lo que no se puede decir que había una democracia plena. Con la creación del Tribunal y su objetivo de garantizar el debido proceso como parte fundamental de la administración de justicia en todos los niveles, hace que esto se extienda como principio constitutivo del sistema político.

La creación del Tribunal Internacional hizo parte del esfuerzo de contribuir a la creación y desarrollo de la democracia fundada en el *rule of law* o imperio de la ley y la independencia de la justicia.

5. ¿ESTADO DE DERECHO?

Como se ha mencionado, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia fue creado en medio del conflicto armado que ocurría en la región, por lo que definitivamente en ese momento no existía Estado de Derecho; siendo una de las razones de creación del Tribunal, aplicar justicia por ausencia de estado de derecho. El trabajo de Tribunal se enfocó en implementar el “*rule of law*”.

línea]. Páginas: 207 y 208. Disponible en: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2790/10.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁷⁰⁵ ORENTLICHER, Diane. 2018. *Op. Cit.* Páginas: 63

6. ¿ORIGEN BASADO EN CIERTAS SUPOSICIONES O CONDICIONES FÁCTICAS?

El origen del Tribunal se basó en condiciones fácticas, como se analizó en los antecedentes, los hechos estaban ocurriendo, la prensa los ponía de conocimiento del mundo provocando la reacción de diferentes organizaciones y personas que empezaron a presionar al Consejo de Seguridad, para que adoptara las medidas en el asunto, debido a que la vía diplomática no daba resultado y no se quería una intervención bélica que agravara la situación.

7. DOCUMENTO DE CREACIÓN

El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia fue creado por medio de la resolución 808, aprobada el 22 de febrero de 1993 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la cual expresó que reafirmaba la resolución 713 (1991), de 25 de septiembre de 1991, y todas las resoluciones ulteriores pertinentes e invocaba el contenido de las resoluciones 764 (1992), de 13 de julio de 1992⁷⁰⁶, 771 (1992), de 13 de agosto de 1992⁷⁰⁷, 780 (1992), de 6 de octubre de 1992⁷⁰⁸, y el informe que atendía lo estipulado en la resolución 780 (1992) (s/25274).⁷⁰⁹

Siendo trascendente la forma en que quedó plasmada la razón de creación del Tribunal, *“Expresando una vez más su profunda alarma ante los informes que siguen dando cuenta de violaciones generalizadas del derecho internacional humanitario en*

⁷⁰⁶ “En la que reafirmó que todas las partes tenían deber de cumplir las obligaciones impuestas por el derecho internacional humanitario, especialmente los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, y que quienes cometieran u ordenaran la comisión de violaciones graves de los Convenios eran responsables personalmente de dichas violaciones.” UNIVERSITAT de les Illes Balears. S.F. *Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia*. [en línea]. Disponible en: <https://www.uib.es/es/tot/1.-Tribunal-Penal-Internacional-para-la-ex.cid210836> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁷⁰⁷ “En la que, entre otras cosas, exigió que todas las partes y los demás interesados en la ex Yugoslavia y todas las fuerzas militares en Bosnia y Herzegovina pusieran término de inmediato a todas las violaciones del derecho internacional humanitario.” Ídem.

⁷⁰⁸ “En que pidió al Secretario General que, con carácter de urgencia, estableciera una información presentada de conformidad con las resoluciones 771 (1992) Y 780 (1992), junto con cualquier otra información que la Comisión de Expertos pudiera obtener, con objeto de presentar al Secretario General las conclusiones a que llegase sobre las pruebas de graves transgresiones de los Convenios de Ginebra y otras violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia.” Ídem.

⁷⁰⁹ “En la que examinó el informe provisional de la Comisión de Expertos en que se observa que la decisión de establecer un tribunal ad hoc de crímenes de guerra en relación con los acontecimientos ocurridos en el territorio de la ex Yugoslavia estaría en consonancia con la orientación de los trabajos de la comisión”. Ídem.

*la ex Yugoslavia, con inclusión de asesinatos de masa y la continuación de la práctica de la "depuración étnica"*⁷¹⁰.

Por medio de la resolución 808 de 1993 se determinó que el conflicto armado en Yugoslavia constituía una amenaza a la paz y seguridad internacional, los cuales debían llegar a su fin por medio de medidas eficaces que hicieran comparecer a los responsables ante la justicia. Objetivo que se pretendía cumplir por medio del tribunal internacional el cual contribuiría al restablecimiento y mantenimiento de la paz.

El 25 de mayo de 1993, mediante la resolución 827 del Consejo de Seguridad se estableció el Estatuto para el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, el cual tuvo diversas modificaciones y enmiendas, entre las que destaca la última del 7 de julio de 2009 por la resolución 1877.

8. MANDATO

El mandato del Tribunal quedó establecido por medio de la resolución 827 que lo creó, en la cual se facultó al Tribunal para juzgar a los individuos por los actos atroces como: genocidio, crímenes contra la humanidad, graves violaciones a la Convención de Ginebra y crímenes de guerra.

El Estatuto cuenta con 34 artículos, los cuales contemplan: Del artículo 1 al 4, las competencias, los delitos que conocerá, siendo estos: genocidio, crímenes contra la humanidad, violaciones del artículo 3 común a las Convenciones de Ginebra.

A diferencia del Estatuto de los Tribunales Militares Internacionales de Núremberg y Tokio y gracias al desarrollo del derecho internacional penal de los artículos 5 a 9, se establece claramente la competencia *ratione personae*, la responsabilidad penal individual, la competencia *ratione loci* y *ratione temporis*, y se determina las competencias concurrentes.

El artículo 10 desarrolla el principio de legalidad, por medio del *non bis in idem*.

⁷¹⁰ CONSEJO de Seguridad. 1993. Resolución 808 de 22 de febrero de 1993. En: *Naciones Unidas* [en línea]. Disponible en: [https://undocs.org/es/S/RES/808%20\(1993\)](https://undocs.org/es/S/RES/808%20(1993)) [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

De los artículos 11 al 17 se regula: la Organización del Tribunal, la composición de las Salas, la cualificación y elección de los jueces, la constitución de la Oficina y miembros de las Salas, La figura del Fiscal y el establecimiento del Registro.

A partir del artículo 18 hasta el artículo 29 se regulan las circunstancias relacionadas con el proceso, partiendo de la investigación y acusación, incluyendo aspectos como: la sentencia, sanciones, apelaciones, procedimiento de apelaciones, procedimientos de revisión, los derechos del acusado, al igual que el Tribunal para Ruanda se incluyeron la protección de las víctimas y de los testigos, la forma de la sentencia, penas, medios de impugnación, ejecución de las penas, se reguló el indulto y conmutación de pena y la cooperación y ayuda judicial mutua.

El artículo 30, estableció los privilegios e inmunidades del Tribunal, el artículo 31 instituye que la sede del tribunal fue en “La Haya”; el artículo 32 los gastos del Tribunal, el artículo 33 los idiomas de trabajo y el 34 la obligación del Tribunal de rendir un informe anual al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de Naciones Unidas.

De la enumeración de las metas y fines del mandato del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, se derivan diferentes posiciones que se distinguen conforme al fin o propósito que se elija como el principal o primordial objetivo que debería haber cumplido El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, los que se estudian a continuación.

A. OBJETIVOS

El objetivo del Tribunal quedó consignado en la resolución 808 en la que el Consejo de Seguridad determinó: *“Decide que se establezca un tribunal internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991.”*⁷¹¹

En el 2002 producto de la revisión de las metas del Tribunal, se decide que éste, tenía competencia para procesar a políticos y militares de alto nivel y que los demás casos serían transferidos a las cortes nacionales. La regla permitía transferir casos a

⁷¹¹ CONSEJO de Seguridad. 1993. *Óp. Cit.*

las cortes locales, sólo si los jueces consideraban que existía evidencia de un juicio ajustado al debido proceso y las garantías de imparcialidad y juicio justo prescritas en los estatutos del Tribunal. Esto sólo se pudo llevar a cabo después de que el Sistema de Justicia de los países de la Ex Yugoslavia empezó a dar muestras de ser confiable y garantizar un juicio justo. Entre 2005 y 2007 se autorizó la transferencia para Bosnia y Herzegovina de 13 acusados involucrados en ocho casos; uno para Croacia y otro para Serbia.

B. ALCANCES DEL MANDATO

El mandato del Tribunal dio la oportunidad de interpretar normas y por tanto tuvieron mayor alcance sus acciones, como el de poder actuar durante la vigencia del conflicto, y avanzar más allá de la investigación tradicional de las violaciones del derecho internacional humanitario y crímenes internacionales, investigando la violencia sexual hacia las mujeres⁷¹² como práctica de guerra, llegando a establecer su utilización como un proceso de “limpieza étnica”.

Al respecto Louis Arbour afirmó: *“La violencia sexual ha estado tradicionalmente oculta y no ha sido perseguida. Como resultado, estos crímenes se consideraron durante mucho tiempo como una consecuencia lamentable, pero a la vez inevitable de la confrontación armada. Las mujeres como víctimas, o títeres de los beligerantes, no tenían a quien recurrir.*

Sólo recientemente ha sido abordada esta situación de impotencia con el extraordinario trabajo de los Tribunales Penales Internacionales para la antigua Yugoslavia y para Ruanda⁷¹³”.

Una de las facultades de mayor importancia que tuvo el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, fue el de la interpretación de la ley, dadas las condiciones

⁷¹² En el conflicto armado en la Ex-Yugoslavia los ataques sexuales contra las mujeres fueron utilizados masivamente, se estima que el número de mujeres víctimas de ataques sexuales y violación oscila entre 10.000 a 60.000. La mayoría fueron cometidas en contra de mujeres musulmanas y croatas y los perpetradores fueron serbios.

⁷¹³ ARBOUR, Louise, 2007. Impunidad por crímenes de Guerra contra las mujeres, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, S.E. En: *Comisión Económica para América Latina y el Caribe* [en línea].

Disponible en: http://www.cepal.org/mujer/noticias/noticias/1/27971/arbournmujer2007-SPA_FINAL.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

incipientes en las que el derecho internacional se encontraba. Los jueces del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia tuvieron una extensa discreción para definir el sentido y alcance de los principales elementos jurídicos, tanto del derecho sustancial como procesal de las normas a aplicar⁷¹⁴.

Los jueces del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia prefirieron el uso de la ley por sí misma, los estudios legales de sus pares y posiciones de las organizaciones internacionales promotoras del derecho internacional por encima de las posiciones locales de las comunidades de la Ex-Yugoslavia⁷¹⁵.

El simple hecho de tener que procesar los hechos producidos en el conflicto armado de la Ex-Yugoslavia, a través de la limitada legislación internacional en relación con los conflictos armados, exigió una gran creatividad por parte de los jueces para determinar asuntos tales como la definición de las normas aplicables en un conflicto armado interno, la definición de las responsabilidades de mando y las definiciones de conflicto armado y ocupación beligerante⁷¹⁶.

El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia creó un importante conjunto de precedentes que cerró la brecha creada por la distinción en la naturaleza de los conflictos armados⁷¹⁷.

C. COMPETENCIA

La competencia del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia está descrita en el artículo 1 del estatuto de creación, el cual literalmente reza “*El Tribunal Internacional estará facultado para enjuiciar a las personas responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio del*

⁷¹⁴ KING, Kimi Lynn y James David Meernik. 2011. Assessing the Impact of the International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia: Balancing International and Local Interests While Doing Justice. En: SWART, Bert, Alexander Zahar y Göran Sluiter. Ed. *The Legacy of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*. Primera edición. Nueva York: Oxford University Press, Página: 60 ISBN-13: 9780199673417

⁷¹⁵ Ídem Página: 65

⁷¹⁶ Ídem Páginas: 66

⁷¹⁷ ASKIN, Kelly D., 2003. Prosecuting Wartime Rape and Other Gender-Related Crimes under International Law: Extraordinary Advances, Enduring Obstacles, *Berkeley Journal of International Law* [en línea]. Berkeley: University of California, Berkeley. Vol. 21:288 Página: 290. Sin ISSN. Disponible en: <https://lawcat.berkeley.edu/record/1118667> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

*antiguo de la ex Yugoslavia desde 1991 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto*⁷¹⁸”

Aunque en realidad los delitos⁷¹⁹ que se decidió perseguir iban más allá del derecho internacional humanitario, siendo estos: las violaciones graves a los Convenios de Ginebra de 1949, Violación de las leyes o usos de la guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad, por lo que también quedaron regulados los crímenes internacionales. Esta fue una decisión del Consejo de Seguridad que quedó plasmada en la Resolución 827 de 1993.

El tribunal tuvo total competencia para poder procesar a los responsables de los hechos.

D. FORTALEZAS

Las fortalezas del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia radicarón en la creación fundada en el principio de justicia universal que reconoce el derecho que poseen las cortes de los Estados de procesar a los responsables por delitos contra la humanidad. En su creación se aplicaron los principios y normas de derecho penal internacional desarrollados después de la experiencia adquirida en los Tribunales Internacionales de Núremberg y Tokio.

Fue plenamente establecida su jurisdicción y competencia, no dando lugar a confusión sobre los hechos a conocer con un enfoque contra personas individuales.

E. REGLAS DE ADMISIBILIDAD

Al igual que el Tribunal de Núremberg, El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia no contemplaba las reglas de admisibilidad de forma definidas como tal, pero se pueden determinar de acuerdo con lo establecido en el Estatuto y las Reglas de Procedimiento.

⁷¹⁸ TRIBUNAL Internacional para la Enjuiciamiento de las Personas Responsables de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario Cometidas en el Territorio de la Antigua Yugoslavia, *Óp. Cit.* Artículo 1

⁷¹⁹ CONSEJO de Seguridad. 1993. *Resolución 827 de 25 de mayo de 1993*. Artículos 2 a 5.

- v. *Ratione Personae*: este era aplicable a las personas individuales responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario⁷²⁰
- vi. *Ratione Materiae*: el Tribunal sólo fue competente para conocer las violaciones graves del derecho internacional humanitario⁷²¹, en el momento en que fue creado, las cortes de los países de la Ex-Yugoslavia en especial en Bosnia y Herzegovina y Croacia no estaban en posibilidades de procesar casos por crímenes contra la humanidad ni crímenes de guerra, en especial los cometidos por el grupo étnico dominante, por la ausencia de Estado de Derecho, por consiguiente de ausencia de estructura judicial que garantizara el enjuiciamiento.
- vii. *Ratione Temporis*: Crímenes cometidos desde 1991⁷²².
- viii. *Ratione Loci*: Sólo se aplicó en los crímenes cometidos en el territorio de la Ex Yugoslavia⁷²³.

F. TIEMPO DETERMINADO

En cuanto a la temporalidad, el estatuto únicamente consignó el año a partir del cual se conocerían los hechos, esto es desde 1991, empezando a funcionar en 1993. No se determinó el año de finalización, pero según el vigésimo cuarto y último Informe Anual del Tribunal en el septuagésimo presentado en el segundo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el tribunal se disolvió el 31 de diciembre de 2017⁷²⁴, esto indica que funcionó durante 24 años.

⁷²⁰ CONSEJO de Seguridad de las Naciones Unidas. 1993. *Óp. Cit.* Artículo 7

⁷²¹ Ídem

⁷²² Ídem Art. 1 y 7

⁷²³ TRIBUNAL Internacional para la Enjuiciamiento de las Personas Responsables de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario Cometidas en el Territorio de la Antigua Yugoslavia, 1993. *Óp. Cit.* Artículo 8

⁷²⁴ INTERNATIONAL Residual Mechanism for Criminal Tribunals, 2017. ICTY President Agius delivers final address to United Nations General Assembly, de fecha 19 de octubre de 2017. En: *IRMCT* [en línea]. Disponible en: <https://www.icty.org/en/press/icty-president-agius-delivers-final-address-to-united-nations-general-assembly> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

El tiempo que se ha tomado el Tribunal para producir resultados ha sido uno de los aspectos de mayor crítica. Las comunidades de los países de la Ex- Yugoslavia además de percibir el Tribunal como algo ajeno, no tenían la posibilidad de conocer resultados que se tradujeran en efectos tangibles en la realidad del conflicto.

G. DISTRIBUCIÓN DEL PODER.

El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia fue creado bajo el seno de las Naciones Unidas, por lo tanto, los jueces y el fiscal debían ser nacionales de los Estados miembros de Naciones Unidas y fueron elegidos por la Asamblea General. Esto quedó regulado en el artículo 11 del Estatuto que estableció la composición del tribunal, quedando conformado por 16 jueces independientes permanentes y un máximo de 12 jueces *ad litem*. De los jueces permanentes 7 eran miembros de las salas de Apelaciones, cada Sala de Primera Instancia a la que se asignen jueces *ad litem* se dividían en secciones de tres jueces cada una, compuestas por jueces permanentes y *ad litem*. El presidente del Tribunal era electo por los jueces permanentes.

El Fiscal nombrado por el Consejo de Seguridad, actuaba de forma independiente como un órgano separado del Tribunal Internacional, no podía buscar ni recibir instrucciones de ningún Gobierno ni de ninguna otra fuente. Se creó un área de registro, que daba servicio tanto a las Salas como al Fiscal.

Este procedimiento marcó un avance importante en cuanto a la objetividad del Tribunal en comparación a Núremberg y Tokio en donde únicamente las Naciones Aliadas y Estados Unidos tuvieron el control de las decisiones en dichos tribunales.

9. ¿SURGIÓ COMO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES?

A. ¿HABÍA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL?

La responsabilidad internacional de los Estados se desprendía de las normas del Derecho Internacional y la derivada de los Convenios de Ginebra⁷²⁵.

B. OBLIGACIONES INTERNACIONALES

Las obligaciones internacionales que rigieron fueron la de la Carta de Naciones Unidas para la creación del tribunal, y las derivadas de los Convenios de Ginebra.

C. ¿ABORDA HECHOS ILÍCITOS INTERNACIONALES?

El Tribunal abordó hechos ilícitos internacionales, puesto que existía conocimiento de los hechos ocurridos en el país medio de informes que evidenciaban los comportamientos atribuibles al Estado y que constituían una violación a las obligaciones internacionales. Aunque el concepto fue acuñado hasta el año 2001.

10. COOPERACIÓN DE LOS ESTADOS.

El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia fue producto del esfuerzo de la cooperación internacional que actuó por medio del Consejo de Seguridad, con gran complejidad jurídico – política; es el resultado de acciones de la comunidad internacional que utilizaron los mecanismos de cooperación económica y financiamiento internacional para forzar a los países de los Balcanes a colaborar con el Tribunal. La imposición de condiciones para el desembolso de la ayuda económica se volvió una de los principales instrumentos para garantizar el cumplimiento de las ordenes emanadas del Tribunal.

En orden, de hacer cumplir su mandato el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia tenía que buscar la cooperación de los Estados en el nivel internacional y

⁷²⁵ ODIO Benito, Elizabeth. 1996. El Tribunal Penal Internacional Para La Ex-Yugoslavia -Justicia para la Paz. En: INSTITUTO Interamericano de Derechos Humanos. *Revista IIDH* [en línea]. San José: Vol. 24, julio – diciembre de 1996. Páginas: 137 y 137. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] Sin ISSN. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/R06843-4.pdf>

local, lo cual marcó cada una de las etapas del Tribunal, en este sentido no sólo fue responsable de la creación de un proceso internacional para juzgar crímenes contra la humanidad sino también, tuvo que forjar el ámbito de cooperación e interacción con los organismos internacionales y los Estados parte para poder ejercer su jurisdicción.

Así fue como la cooperación internacional en materia de justicia se hizo por niveles y fue más creativa en cuanto a las formas de apoyo para lograr la colaboración eficaz, pero a su vez fomentar el fortalecimiento del *Rule of Law* en los Estados⁷²⁶.

Al localizarse en ciertos centros y niveles del sistema de justicia, no extendió sus beneficios a las otras cortes que juzgaron personas de menor rango, lo cual debilitó la capacidad del sistema judicial para recaudar pruebas y llevar a cabo el juzgamiento de múltiples responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad⁷²⁷.

11. INDEPENDENCIA

En cuanto a la independencia del Tribunal, el análisis identifica los aspectos en los que el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia poseía una gran autonomía, como es respecto de la definición de su funcionamiento e interpretación de la ley. En este ámbito es donde se puede evaluar en mejor forma su legado, debido al grado de independencia y discrecionalidad de los jueces para definir temas coyunturales de la justicia penal internacional.

En contraste, con temas como la consecución y mantenimiento de la paz en los que la autonomía del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia disminuye su potestad sustancialmente. Estas distinciones permiten definir en forma más precisa el campo de análisis respecto al trabajo del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y su contribución con la lucha contra la impunidad.

⁷²⁶ HUSSAIN, Varda, 2005. Sustaining Judicial Rescues: The Role of Outreach and Capacity-Building Efforts in War Crimes Tribunals. En: *Virginia Journal of International Law* [en línea]. 45. Página: 35 [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] SIN ISBN Disponible en: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/vajint45&div=18&id=&page=>

⁷²⁷ KUTNJAK Ivkovic, Sanja y John Hagan. 2011. Reclaiming Justice: *The International Tribunal for the Former Yugoslavia and Local Courts*. Primera Edición. Nueva York: Oxford University. Página: 168. ISBN-13: 978-0195340327

12. SELECCIÓN DE ACTORES

Desde la creación del Tribunal estaba muy claro que se dirigía a enjuiciar a los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario, aunque fue durante el desarrollo del trabajo del Tribunal que se clasificó a los responsables, decidiéndose trabajar con los crímenes más graves y trasladando los delitos más leves a las cortes nacionales.

El trabajo del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia debía cumplir su mandato en la Ex-Yugoslavia y perfeccionamiento de las relaciones con los diferentes actores que interactuaban en el conflicto, con el compromiso de desarrollar un sistema internacional penal para juzgar y castigar a los responsables de graves infracciones al derecho internacional humanitario y ello, bajo los parámetros de debido proceso y garantías penales, como fundamento de la legitimidad de su acción, a diferencia de la criticada justicia de los victoriosos. Su trabajo debía ser ejemplo de una justicia debida y respeto del *rule of law*.

Los actores involucrados fueron, los acusados, jueces, el fiscal y los miembros de su equipo de trabajo, el personal de la Secretaría, los defensores, el Consejo de Seguridad y los funcionarios de Estado cuando se requería la cooperación de estos.

13. NORMATIVA RELEVANTE Y MARCO PROCEDIMENTAL

El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, en el proceso de definir las reglas que le permitían perseguir a los individuos responsables por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, utilizó los tratados internacionales que regulan los conflictos armados: la Convención de la Haya (1907), la Convención de Ginebra de (1949) y los dos Protocolos Adicionales, hoy conocidos como el Derecho Internacional Consuetudinario que regulan en especial los conflictos armados internacionales. Así como la Convención de la Haya.

El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia adoptó para su funcionamiento la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio e incluyó la violación sexual como uno de los crímenes en contra de la humanidad, sin embargo, el Tribunal no poseía jurisdicción para aplicar el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, que faculta para juzgar como crimen de guerra los ataques contra la

población civil, por lo tanto, no podía criminalizar la violencia sexual utilizando esta legislación internacional. Sin embargo, decidió que bajo ciertas circunstancias específicas podía perseguir los delitos sexuales como parte del genocidio, pero nunca dio paso a este tipo de juicios.

El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, fue facultado por el Consejo de Seguridad para desarrollar su propia reglamentación y procedimientos, lo cual le dio autonomía para no cumplir o utilizar los precedentes producido por el Tribunal de Nuremberg. Por esta facultad especial y su debida utilización, al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia se le reconoce internacionalmente por su amplia contribución al desarrollo del derecho penal internacional.

El estatuto y las reglas confirieron a las víctimas cierto grado de autonomía y derechos procesales propios, en el que ambas partes procesales imponen a la acusación la exigencia de investigar las circunstancias incriminatorias y de descargo, en la que cada parte prepara y presenta pruebas. *“Siguiendo la tradición del proceso de los sistemas anglosajones, las Reglas permiten la aplicación del plea bargaining, pero obligan a los jueces a la búsqueda de la verdad, independientemente del acuerdo al que pudieran haber llegado las partes”*⁷²⁸.

Las Reglas de Procedimiento y Prueba del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia adoptaron en gran medida el sistema de los procesos contradictorios. La Juez Mc Donald, primera presidenta del Tribunal, trajo consigo un completo decálogo de normas elaboradas por un comité especial de la American Bar Association⁷²⁹, las cuales fueron incorporadas posteriormente a las Reglas definitivas que se redactaron⁷³⁰. Después de ser aprobadas, ya se adoptaron diversos

⁷²⁸ TOCHILOVSKY, Vladimir, 2007. Procedimientos ante la Corte penal Internacional: Algunas lecciones que aprender de la Experiencia del TPIY, En: *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 2ª época No. 19, Página: 366 [en línea]. Disponible en: http://espacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:DerechoPenalCriminologia2007-10/procedimientos_ante.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁷²⁹ BASSIOUNI, M. Cherif. 1996. *The law of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, Transnational Pub In. Primera Edición. Nueva York. Página: 863. ISBN-13: 978-1571050045

⁷³⁰ MORRIS, Virginia y Michael SCHARF, 1995. *An Insider's Guide to the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia: A Documentary History and Analysis. Vol. I.* Irvington-on Hudson, Primera Edición, Nueva York, Página: 177 ISSN-13: 978-0941320924

elementos y procedimientos de los sistemas de derecho continental, promoviendo de esta manera el desarrollo de los que se seguirían ante el Tribunal.

La Reglas de Procedimiento y Evidencia del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia están divididas en 10 partes y 127 reglas, las que entre 1994 y 2015 sufrieron 50 modificaciones y enmiendas con el fin de ir mejorando el procedimiento.

Las Reglas regularon:

- (A) La Primera Parte regula las disposiciones generales, comprendidas de la regla 1 a la 6 y que contienen la entrada en vigor, definiciones, idiomas, reuniones lejos del asiento del Tribunal, incumplimiento de las reglas, modificación del reglamento, autenticidad de los textos.
- (B) La Segunda Parte se refiere a la Primacía del Tribunal, se desarrolla de la regla 7 bis a la 13 y que regula el incumplimiento de las obligaciones, solicitud de información, petición de aplazamiento del fiscal, solicitud formal de aplazamiento, incumplimiento de una solicitud de aplazamiento, remisión de la acusación a otro tribunal, determinaciones de los tribunales de cualquier Estado y non bis in idem.
- (C) La Tercera Parte regula la Organización del Tribunal, dividida en 6 secciones, siendo estas:
 - Los Jueces regulado de la regla 14 a las 17
 - La Presidencia, de la regla 18 a la 22
 - Del Funcionamiento interno del Tribunal de la regla 23 a la 26
 - Las cámaras comprendidas de la regla 27 a la 29
 - El registro, de la regla 30 a la 36
 - Del fiscal, regla 37 y 38.
- (D) La Cuarta Parte se refiere a las investigaciones y los derechos de los investigados, dividida en dos secciones:
 - De las investigaciones que se encuentra de la regla 39 a la 43.

- Del abogado, reglas 44 y 45
- (E) La quinta parte regula el procedimiento previo al juicio, dividida en 7 secciones, así:
- De las Acusaciones, de la regla 47 a 53 bis.
 - De las solicitudes y garantías, de las reglas 54 a 61.
 - De los procedimientos preliminares, regulado de la regla 62 a la 65 ter.
 - De la producción de evidencia, estipulado de la regla 66 a la 70.
 - De las deposiciones, reglas 71 y 71 bis.
 - De las mociones, reglas 72 y 73.
 - De las conferencias, reglas 73 bis y 73 ter.
- (F) La sexta parte regula el Procedimiento ante las salas de juicio, dividida en cinco secciones, a saber:
- Disposiciones generales, de la regla 74 a la 81 bis.
 - Presentación del caso, de la regla 82 a la 88 bis.
 - Reglas de Evidencia, reglas 89 a 98.
 - Sentencia, reglas 98 bis y 99.
 - Sentencias y Sanciones, de la regla 100 a la 106.
- (G) La séptima parte contempla el Procedimiento de Apelación, de la regla 107 a 118.
- (H) La octava parte del Procedimiento de Revisión, de la regla 119 a 122.
- (I) La novena parte del Indulto y Conmutación de la Sentencia, de los artículos 123 a 125.
- (J) La décima parte del tiempo, de la regla 126 a 127.

El proceso se desarrolló bajo los principios del sistema acusatorio⁷³¹, la recolección de pruebas, la identificación y juzgamiento de responsables por actos infames, lo que

⁷³¹ En la práctica se representa por ejemplo en el caso de la oficina del fiscal cuando teme que las evidencias para los cargos pueden ser insuficientes, lo lleva a realizar una acusación lo más genérica

dio paso a la elaboración de reglas de procedimiento e investigación que rigieron las prácticas desarrolladas en el juicio, la oficina del fiscal y la acción de investigación. Pero lo más relevante, las reglas para producir las decisiones de forma y fondo que definieron los elementos jurídicos del crimen y los hechos que debían establecer sin lugar a duda la responsabilidad penal. Los juicios y decisiones elaborados por el Tribunal, representan el mayor desarrollo jurídico que hasta el momento habían tenido el Derecho Internacional Penal y el Derecho Internacional Humanitario.

El proceso de recolección de información necesaria para procesar los individuos, hizo parte sustancial del legado del Tribunal. Los archivos, los registros audiovisuales de las audiencias del Tribunal, las transcripciones y evidencias admitidas dentro de los casos, los que conformaron en su conjunto un instrumento invaluable para el desarrollo del Derecho Penal Internacional. En adición, constituye un legado regional para el fortalecimiento de la justicia en los países de la Ex-Yugoslavia, quienes tuvieron en este conjunto de precedentes y archivos, los fundamentos y estructura para llevar a cabo el juzgamiento de los miles de crímenes ocurridos en sus territorios, lo cual contribuyó a la paz y estabilidad de la región⁷³².

Por medio de la resolución 827 la que estableció el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, el rol del juez fue un aspecto fundamental de la justicia penal internacional⁷³³. Por lo que se reguló que el juez debería considerar la gravedad del crimen, bajo el principio general del derecho de proporcionalidad, castigar con mayor severidad los crímenes más graves y disminuir el castigo para los crímenes menos graves.

que le permita presentar un mayor número de testigos y evidencias posibles. En consecuencia, las defensas harán lo mismo presentando el mayor número de medios probatorios en respuesta a una acusación de amplio alcance.

⁷³² KING, Kimi Lynn y James David Meernik. 2011 *Óp. Cit.* ICTY 2009. *Manual on Developed Practices* [en línea]. Disponible en: http://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/ICTY_Manual_on_Developed_Practices.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁷³³ En el sistema acusatorio el papel del juez se limita a presidir el juicio para mantener las reglas propias del juicio y la verdad es la que emerge del debate entre las partes. En el sistema penal internacional los jueces no sólo son responsables de mantener las formas propias del juicio, pero también deciden sobre los hechos, la aplicación de la ley y determinan la sentencia. De este modo, las fallas por no alcanzar la verdad en un proceso de justicia penal internacional no sólo se pueden adjudicar a las partes sino también al juez por las insuficiencias o fallas al declarar o dispensar de culpabilidad.

En relación con el criterio de proporcionalidad del castigo conforme a la gravedad del crimen, King y Meernik⁷³⁴, mencionan que varias comunidades de la antigua Yugoslavia esperaban un trato indulgente para los miembros de su grupo étnico y mayor severidad para los que no pertenecían a su comunidad. Estas expectativas se tradujeron en una percepción extendida de falta de independencia del tribunal y por lo tanto sus fallos se consideraban injustos por no poseer la suficiente fuerza para retribuir el sentido de justicia esperado.

En la creación del Tribunal, no se le dotó con organismos que le permitieran ejecutar las órdenes de investigación, conducción en la recolección de pruebas o ejecución de las órdenes de arresto. No poseía agencias propias que le permitiera tener acceso directo a las evidencias esparcidas en el territorio de la Ex-Yugoslavia. Por el contrario, el Tribunal debía depender de las instituciones de las Naciones Unidas como Cuerpos de Protección, Fuerza de Estabilidad o las autoridades de los países de la Ex-Yugoslavia.

El Tribunal para poder cumplir su mandato, tenía que buscar la cooperación de los Estados en el nivel internacional y local, lo cual marcó cada una de las etapas del Tribunal, en este sentido no sólo fue responsable de la creación de un proceso internacional para juzgar crímenes contra la humanidad, sino también, tuvo que forjar el ámbito de cooperación e interacción con los organismos internacionales y los Estados parte.

Como parte del objetivo del sistema acusatorio, en la creación del Tribunal hubo un compromiso por la búsqueda de la verdad como fin de la administración de justicia en el sistema penal internacional, por lo que se introdujo la posibilidad de negociación con los defendidos o *plea bargaining*⁷³⁵, figura característica del sistema del common law.

⁷³⁴ KING, Kimi Lynn y James David Meernik. 2011. *Óp. Cit. Páginas:* 45

⁷³⁵ El juez Eser, afirma que esta facultad que el sistema acusatorio le brinda al fiscal del caso, debe ser la excepción en los procesos de justicia penal internacional. La gravedad de los asuntos que son materia de investigación como son los delitos contra la humanidad o crímenes de guerra difícilmente pueden justificarse sus negociados con el propósito de obtener prontitud o eficacia. En un amplio margen esta herramienta procesal afectó la percepción de las comunidades acerca de la justicia impartida por El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia.

Las víctimas de actos atroces difícilmente pueden aceptar que los victimarios reciban castigos menores o peor aún, queden exentos de castigo por colaboración con la justicia. Unido a la falta de credibilidad que este tipo de herramienta produce en las comunidades afectadas también se afirma que atenta

Esa posibilidad de negociación entre el acusado y la Oficina del Fiscal, para el sistema jurídico civil o continental y por ende para la sociedad de los países de la Ex Yugoslavia, culturalmente no se entendió, ni se aceptó que la justicia pudiera ser negociada y menos aun cuando se trataba de delitos atroces. En este contexto el Tribunal llevó a cabo numerosas negociaciones con los acusados, en principio no fue una herramienta procesal que se utilizara con frecuencia, pero durante los años de 2001 a 2003, su uso se elevó exponencialmente. La creciente perdida de apoyo entre la comunidad internacional que financiaba la operación del Tribunal y la enorme acumulación de casos sin procesar que daban lugar a una congestión casi insoluble para el organismo, fueran las razones operativas que llevaron al uso frecuente de la negociación.

El trabajo con los testigos fue un aspecto controversial, debido a que dio lugar a prepararlos para la presentación en la corte, lo que se tomó como un guion recitado ante los jueces⁷³⁶.

Como parte esencial del proceso acusatorio y del Tribunal, la búsqueda de la verdad era una obligación del acusador, por lo que se debía obtener la evidencia necesaria para acusar, esto obligaba a esclarecer lo ocurrido en su totalidad y, por lo tanto, el ente acusador tenía la obligación de investigar equitativamente las evidencias que incriminaran o exoneraran al acusado.

La evidencia que fue obtenida por la oficina del Fiscal del Tribunal, abrió paso al juzgamiento de los delitos sexuales como delitos en contra de la humanidad y así se incluye en el estatuto del Tribunal en su artículo 5. A.

Juzgar los ataques sexuales como crímenes de guerra fue el resultado de aplicar el Artículo 3º común como cláusula general prescrita para asegurar que las graves infracciones al derecho internacional humanitario fueran castigadas como crímenes de guerra, aspecto que el Tribunal consideró ineludible. Este proceder no violó el

contra la finalidad de disuadir la comisión de futuros actos similares, porque el mensaje es contrario al que se persigue proyectar con cero tolerancias frente a los crímenes de guerra o actos de lesa humanidad.

⁷³⁶ Para el juez Eser y como fue reconocido por la Corte Penal Internacional, la preparación de los testigos debe distinguir entre una preparación para la familiarización con el testimonio oral en la corte y otra la preparación extensa y detallada para presentar una evidencia específica. La CPI no acepta esta última preparación de entrenamiento de los testigos se considera como una alteración de la espontaneidad necesaria en los testimonios

principio de *nullum crimen sine lege* porque este principio se estableció para proteger a la persona de no ser castigado por un acto que crea razonablemente que no es un crimen al momento de cometerlo, pero no frente a los actos que por completo se revelan ilegales y/o prohibidos,⁷³⁷ como lo fueron los delitos sexuales.

El papel reparador del Tribunal es uno de los aspectos más débiles y difíciles de identificar. Es cierto que para las víctimas el Tribunal representó la única esperanza así su acción fuera distante y lenta, pero en lo relativo a la reparación el Tribunal comparte la misma visión del sistema penal tradicional del cual tomó la lógica y estructura, así tuviera que conjugar los dos grandes sistemas penales, pero en lo relativo a las víctimas el sistema tradicional penal no posee espacios, ni herramientas para darle a las víctimas ni voz ni respuestas. La pregunta es si un Tribunal operado en la distancia, en un idioma extranjero que no posee canales de comunicación con la sociedad afectada y además de lejano lento, ¿cuánto contribuye a la reparación? En ese contexto la reparación parece tener más un poder simbólico, ya que la población no estuvo involucrada en los procesos.

14. LEGITIMIDAD:

En cuanto a la legitimidad o legalidad, el desafío que enfrentaba el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia era inmenso, debido al estado incipiente en que se encontraban desarrollados los instrumentos internacionales, y por ello, el trabajo de interpretación de los jueces, que debía cumplir con el principio *nullum crimen sine lege*⁷³⁸ en un estricto sentido o de lo contrario, se comprometería la legitimidad de la justicia y toda su acción.

En este sentido, entre las acciones tomadas por el Tribunal fue declarar que el Artículo 3º común de los Convenios de Ginebra debía considerarse como una cláusula general de las conductas que infringían la ley y la costumbre y que rigen la conducción de los conflictos armados.

⁷³⁷ DARCY, Shane. 2011. The Reinvention of War Crimes by the International Criminal Tribunals. En: DARCY, Shane y Joseph Powderly. *Judicial Creativity at the International Criminal Tribunals*. S.E. Nueva York: Oxford University, página: 235 ISBN-13: 9780199591466

⁷³⁸ Ídem

Las reglas establecidas en el Artículo 3º común prohíbe actos que son “crímenes por naturaleza” y, por lo tanto, deben ser reglas consideradas como parte de la costumbre que reglamenta la conducción de hostilidades. De este modo, es posible declarar la responsabilidad penal de individuos por la violación de las normas que reglamentan los conflictos armados, independientemente que sean internacionales o internos.⁷³⁹ Así, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia estableció los siguientes criterios para asegurar que las conductas procesadas bajo la aplicación del Artículo 3º común, pudieran considerarse como serias violaciones del derecho internacional humanitario, deberían cumplir las siguientes condiciones:

- i. Que existiera una violación al derecho internacional humanitario.
- ii. La regla debía comprometer una costumbre o una amenaza a la ley o las reglas de aplicación de los tratados.
- iii. La violación constituyera un serio desconocimiento de los valores protegidos y representara graves consecuencias para las víctimas.
- iv. La violación representara responsabilidad criminal frente a la ley o la costumbre internacional.

La aplicación del Artículo 3º y los desarrollos interpretativos hechos por el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, han sido objeto de debates desde que fueron dictados por el tribunal y hasta la actualidad. El tema compromete aspectos fundamentales del derecho internacional y la capacidad de los órganos internacionales para juzgar nacionales de un país. Aspectos polémicos que reproducen las tensiones políticas y jurídicas del universalismo versus soberanía.

15. JURISDICCIÓN

El método para establecer el mandato tuvo una serie de complicaciones para establecer su jurisdicción, la velocidad con que se realizó el Estatuto y se adoptó no dio oportunidad de profundas discusiones técnicas, lo que generó dudas en cuanto a

⁷³⁹ GRADITZKY Tomas. 1998. La Responsabilidad penal por violaciones del derecho internacional humanitario aplicable en situaciones de conflicto armado no internacional. *En: Revista Internacional de la Cruz Roja, Comité Internacional al de la Cruz Roja* [en línea]. Disponible en: <https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdlkb.htm> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

la persecución penal de los individuos, por la posible vulneración del *nullum crimen sine lege*, razón por la cual se decidió aplicar únicamente las normas de derecho internacional humanitario⁷⁴⁰.

Tal como se establece en el artículo 8 del estatuto del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, la jurisdicción se extendía al territorio de la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia.

En su estatuto se reconoció la concurrencia de jurisdicciones y se invita a las cortes de los países de la Ex-Yugoslavia a iniciar la persecución y el arresto de los responsables por crímenes de guerra (Rule of the Road). Nunca tuvo la intención de tener un monopolio para juzgar los crímenes cometidos en los Balcanes⁷⁴¹.

A. ¿QUIÉN PODÍA FORMAR PARTE DE UN CASO?

La Resolución 808 del Consejo de Seguridad emitida en 1992, fue muy clara en establecer que el Tribunal conocería del enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991 y para el establecimiento y composición del Tribunal participarían los Estados miembros de las Naciones Unidas. En los procesos se identificaba claramente las dos partes antagónicas, acusador y acusado.

B. ¿QUÉ PROBLEMAS SE PODÍA DEBATIR?

De los artículos 2 al 5 del Estatuto se establecieron los delitos a perseguir siendo estos:

a. Violaciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949⁷⁴²

⁷⁴⁰ KERR, Rachel. 2004. *Óp. Cit. Páginas*: 60 y 61

⁷⁴¹ Ídem *Página*: 60

⁷⁴² Asesinato;

b) Exterminio;

c) Esclavitud;

d) Deportación;

e) Encarcelamiento;

f) Tortura;

g) Violación;

h) Persecución por motivos políticos, raciales o religiosos;

i) Otros actos inhumanos.

h) Toma de civiles como rehenes.

- b. Violación de las leyes o usos de la guerra⁷⁴³
- c. El genocidio⁷⁴⁴
- d. Crímenes de lesa humanidad⁷⁴⁵

16. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN:

El modelo utilizado para el desarrollo de los juicios fue el del sistema acusatorio, ni el estatuto ni el reglamento crearon medios de impugnación para el uso de la defensa durante el desarrollo del juicio. Sin embargo; y como es usual las defensas utilizaron los medios de impugnación comunes en el sistema penal.

Lo que, si se previó tanto en el Estatuto como en el Reglamento fueron los medios de impugnación luego de emitida la sentencia, siendo estos la apelación y la revisión,

⁷⁴³ “a) El empleo de armas tóxicas o de otras armas que hayan de ocasionar sufrimientos innecesarios;

b) La destrucción arbitraria de ciudades, pueblos o aldeas, o su devastación no justificada por necesidades militares;

c) Los ataques o bombardeos, por cualquier medio, de pueblos, aldeas, viviendas o edificios indefensos;

d) La apropiación o destrucción de instituciones consagradas al culto religioso, la beneficencia y la educación o a las artes y las ciencias, monumentos históricos, u obras de arte y científicas, o los daños deliberados a éstos;

e) El pillaje de bienes públicos o privados”. GIMÉNEZ Montero, Judith. Óp. Cit.

⁷⁴⁴ “El Tribunal Internacional tendrá competencia para enjuiciar a las personas que cometan los actos de genocidio definidos en el párrafo 2 de este artículo, o cualquiera de los demás actos enumerados en el párrafo 3 de este artículo.

2. Por genocidio se entenderá cualquiera de los actos que se enumeran a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:

a) Matanza de miembros del grupo;

b) Lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo;

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de vida que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial;

d) Imposición de medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo;

e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

3. Serán punibles los actos siguientes:

a) El genocidio;

b) La conspiración para cometer genocidio;

c) La instigación directa y pública a cometer genocidio;

d) La tentativa de genocidio;

e) La complicidad en el genocidio”. Ídem.

⁷⁴⁵ Asesinato;

b) Exterminio;

c) Esclavitud;

d) Deportación;

e) Encarcelamiento;

f) Tortura;

g) Violación;

h) Persecución por motivos políticos, raciales o religiosos;

i) Otros actos inhumanos.

regulados en los artículos 25 y 26 del Estatuto y en las partes séptima y octava del reglamento.

En la regla 108 se reguló el plazo para presentar la apelación, el cual era no más de 30 días después de pronunciada la sentencia; igualmente se estableció el plazo para la revisión del estado del caso, el que consistía en 15 días a partir de la fecha en que se conocía la decisión.

La revisión se presentaba cuando se hubiese descubierto un nuevo hecho que no hubiera sido conocido por la parte activa en Primera Instancia o en Apelación. Se debía presentar en el momento de conocer del hecho.

17. MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO

La ejecución de la sentencia se reguló en el artículo 27 del reglamento, el lugar en donde se cumpliría el encarcelamiento y la pena de prisión sería designado por el Tribunal entre una lista de Estados que estuviesen dispuestos a aceptar a los condenados, aplicándose las reglas de dicho Estado bajo la supervisión del Tribunal.

18. RECURSOS DISPONIBLES

A. HUMANO:

Fue integrado por la Asamblea General con jueces y miembros del equipo de la oficina del fiscal, todos pertenecientes a los países miembros de la comunidad internacional, tuvo 87 jueces, ninguno era de la antigua Yugoslavia. Ese alto número de miembros elegidos provenían de: Estados Unidos, Malta, Holanda, China Italia, Australia, Jamaica, Bahamas, Guyana, Turquía, China, Senegal, Alemania, Corea del Sur, Francia, Reino Unido, Bélgica, Argentina, Sudáfrica, Suecia, Austria, Hungría, Suiza, Congo, Pakistán, Bulgaria, Canadá, Noruega, Dinamarca⁷⁴⁶.

⁷⁴⁶ ASAMBLEA General del Consejo de Seguridad, 2017. *Report of the International Tribunal for the Former Yugoslavia*. A/72/266–S/2017/662 Página: 19. En: United Nations [en línea]. Disponible en: https://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/AnnualReports/annual_report_2017_en.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

El Tribunal en su historia tuvo 5 fiscales, oriundos de Venezuela, Sudáfrica, Canadá, Suiza y Bélgica. Contó con 7,000 miembros del personal del Tribunal y 4 registradores⁷⁴⁷.

La Oficina de Asistencia Jurídica y Defensa supervisó a los más de 50 miembros del equipo de defensa⁷⁴⁸.

Se procesaron ciento sesenta personas por violaciones graves del Derecho internacional humanitario por hechos cometidos en el territorio de la Ex Yugoslavia a partir de 1991. Ochenta y tres de ellas habían recibido sentencia condenatoria para 2017, cumplidas en catorce Estados diferentes. Diecinueve acusados fueron absueltos y los casos contra treinta y siete acusados fueron sobreseídos. Además, trece acusados se encuentran en cumplimiento de sus penas en Bosnia y Herzegovina, Croacia y Serbia, respectivamente, quedando pendientes de juzgamiento siete acusados que están suspensos de resolución en el Mecanismo Residual. Desde julio de 2011 no existen personas fugitivas⁷⁴⁹.

Se recibieron más de 5000 testimonios⁷⁵⁰.

B. MATERIAL:

Al 31 de julio de 2017, la Unidad de Registros Judiciales había procesado 548 solicitudes (22,379 páginas) y 60 transcripciones en inglés y francés (5,141 páginas)⁷⁵¹. En total se hicieron 2.5 millones de hojas transcritas.

En el mismo año la sección de conferencias y servicios de idiomas proporcionó interpretación, servicios de traducción e informes judiciales para el Tribunal, lo que resulta en 10.200 páginas de traducción y 173 días de intérpretes de conferencias durante el año⁷⁵².

⁷⁴⁷ ASAMBLEA General del Consejo de Seguridad, 2017. *Óp. Cit.*

⁷⁴⁸ Ídem Página: 16

⁷⁴⁹ GIMÉNEZ Montero, Judith. *Óp. Cit. Páginas: 74*

⁷⁵⁰ NACIONES Unidas, 2017. Tras 10.000 días de Juicio, Cierra el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. En: *Naciones Unidas* [en línea]. Disponible en: <https://news.un.org/es/story/2017/12/1424142> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁷⁵¹ Ídem

⁷⁵² ASAMBLEA General del Consejo de Seguridad. *Óp. Cit.*

C. PRESUPUESTO ASIGNADO:

El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia fue financiado en su totalidad por las Naciones Unidas. Fue fuertemente criticado por sus altos costos. Desde su creación en 1993 se estima que sus gastos fueron mayores a los \$900 millones por año y solo hasta después de 10 años de operación se produjo la primera sentencia⁷⁵³. Para 2008 se habían invertido en el Tribunal \$1.2 billones (762 millones de euros)⁷⁵⁴.

Por otra parte, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le exigía al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia resultados que le permitieran promover las conversaciones de paz en medio del conflicto, más la necesaria justificación para la creciente financiación del organismo que cada vez demandaba más recursos y extendía su periodo de funcionamiento. En este sentido por la eficacia se ejercía una presión constante sobre El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia que a su vez había determinado que el principio rector de su acción sería un juicio justo y la imparcialidad.

19. EL PAPEL DE LA VÍCTIMA:

El Estatuto no desarrolló una definición de víctima, ni los derechos de estas y en solo 4 de sus artículos⁷⁵⁵ contemplaba, la protección, el interrogatorio, la consideración debida a su protección.

La definición de víctima se contiene en la regla 2A de las Reglas de Procedimiento y prueba, donde la definen como una persona contra la que se ha cometido un delito sobre el que el Tribunal tiene jurisdicción. Las reglas de procedimiento confirman lo ya establecido por el Estatuto en cuanto a su protección, únicamente se amplía en la regla 106 en el tema de la compensación.

⁷⁵³ SILVERMAN, Jon, 2012. Ten years, \$900m, one verdict: Does the ICC cost too much. En: Noticiero News BBC [en línea], fundado el 14 de noviembre de 1922, de fecha 14 de marzo de 2012. Disponible en: <http://www.bbc.com/news/magazine-17351946> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁷⁵⁴ SKILBECK, Rupert. 2008. Funding Justice: The Price of War Crimes Trials. En: *Human Rights Brief* [en línea]. Washington: University Washington College of Law, Volumen 15, No. 3, Página: 1 Disponible en: <https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=hrbrief> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁷⁵⁵ CONSEJO de Seguridad. 1993. *Op. Cit.* Artículos: 15, 18.2, 20.1 y 22.

El Tribunal fue criticado por la relación con las víctimas que estuvo signado por la condición de enfrentamiento étnico - cultural del conflicto armado. En este contexto el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, fue percibido por una parte como resultado del colonialismo de los países más fuertes y para una gran parte de las víctimas como una justicia lejana difícil de comprender y que no respondía propiamente a las expectativas de justicia retributiva. Aspectos como la localización del Tribunal, la falta de comunicación con las comunidades y la prolongación de los procesos debilitaron la credibilidad del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia con las víctimas.

20. PERCEPCIÓN PÚBLICA:

El Tribunal creó el programa Out Reach⁷⁵⁶, para la comunicación y educación sobre su trabajo, con el fin de dar a conocer el mandato y trabajo del tribunal, esfuerzo que se vio ensombrecido por la percepción comunitaria estrechamente ligada al conflicto étnico. Estando por un lado la *Complejidad* - de los procedimientos jurídicos que no necesariamente se tradujeron en las necesidades de las víctimas⁷⁵⁷, y por otro lado los Beneficios por colaboración, que dieron la posibilidad de negociación entre el acusado y la Oficina del Fiscal, una figura que característica del *common law* y no comprendida por la sociedad de los países Balcánicos que culturalmente no la entendieron, ni aceptaron que la justicia pudiera ser negociada y menos aún si se trataba de delitos atroces.

El propósito de hacer del Tribunal un escenario imparcial que concentró los mayores esfuerzos y atención de los jueces que llevó a un interminable proceso de apelaciones que terminó por dilatar indefinidamente cada juicio. La lentitud, complejidad y ausencia de comunicación se tradujo en una percepción de ausencia de justicia. Los

⁷⁵⁶ En el año 1999 fue creado el programa de comunicación denominado Out Reach con la misión de comunicarle e informar a la comunidad de la Ex- Yugoslavia la importancia de juzgar y declarar la responsabilidad de quienes violaron la ley internacional del derecho internacional humanitario y el significado de restauración que la justicia tiene para las víctimas.

⁷⁵⁷ CHARTIER, Christina. 2004 They want to see their own conception of justice at work, and we can only offer them our interpretation of law. ICTY spokesman. BASSIOUNI, M. Cherif. *Justice in a Time of War: The True Story Behind the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (Hugh M. & Eugenia Stewart Series on Eastern Europe) TEXAS A & M University Press, Primera Edición. Texas, Página: 183.

jueces del Tribunal se encontraron absortos en un mundo jurídico sin herramientas que lo conectaran con el mundo real.

La popularidad del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia en los países bajo su jurisdicción (la Ex-Yugoslavia), no era la misma, muchos consideraron que el Tribunal fue una creación de las Naciones Unidas producto del arrepentimiento por haber permitido el genocidio y otros lo vieron como una amenaza para la delicada y frágil estabilidad de la Región⁷⁵⁸.

Como ya se ha mencionado, en relación con el criterio de proporcionalidad del castigo conforme a la gravedad del crimen, varias comunidades de la antigua Yugoslavia esperaban un trato indulgente para los miembros de su grupo étnico y mayor severidad para los que no pertenecían a su comunidad. Estas expectativas se tradujeron en una percepción extendida de falta de independencia del tribunal y por lo tanto sus fallos se consideraban injustos por no poseer la suficiente fuerza para retribuir el sentido de justicia esperado⁷⁵⁹.

Muchos factores contribuyeron a la percepción que la población de los países de la Ex-Yugoslavia tienen del Tribunal, en primer lugar, es del caso mencionar, lo que de alguna manera se convirtió en uno de los principales temores de los jueces del Tribunal, el ser percibidos como un Tribunal político y no jurídico y por ende sus decisiones viciadas de fondo en su credibilidad, al percibirse como decisiones políticas y no de justicia. Para muchos su acción no era más que una injerencia en los asuntos internos de los países, un despliegue del colonialismo de los países más poderosos, “la justicia de los victoriosos”. En segundo lugar, la ubicación del Tribunal en un territorio totalmente lejano a la jurisdicción asignada, situado en La Haya y al lugar de los acontecimientos, distante por completo de las víctimas, los escenarios de investigación, los actores y el contexto, marco en la mente de la población una percepción de distancia de una institución completamente ajena.

El complejo proceso para desarrollar las reglas que regirían la investigación, persecución y sanción de los individuos implicados en los graves hechos que produjeron los miles y millones de víctimas, además de los debates técnico jurídicos,

⁷⁵⁸ VARDA Hussain. 2005. *Óp. Cit.* Página: 547

⁷⁵⁹ KING, Kimi Lynn y James David Meernik. 2011. *Óp. Cit.* Páginas: 65

agravaron la falta de información y comprensión que la población tuvo acerca del funcionamiento del Tribunal y sus resultados. Asuntos como la negociación de penas, que a vista del Tribunal se convirtió en una herramienta para agilizar el proceso y optimizar resultados con el objetivo de capturar y procesar a los altos funcionarios con mayor responsabilidad por los hechos atroces, en la población fueron recibidos como un acto de revictimización y comprometieron profundamente la legitimidad del Tribunal⁷⁶⁰.

El otro factor que contribuyó a la falta de credibilidad del Tribunal especialmente fue el carácter étnico del conflicto. La tendencia de leer las decisiones del Tribunal a través del lente del conflicto étno-cultural se movían dentro de los extremos de la persecución o favorecimiento de un grupo determinado. Así al ser la mayoría de los condenados por el Tribunal miembros del grupo serbio, muchos lo interpretaron como una señal de su parcialidad.

Muchos serbios perciben el Tribunal como una imposición de las Naciones Unidas para perseguirlos. Una diferencia sustancial con el Tribunal de Nuremberg que debe señalarse en este punto, es la creación del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia en medio de un conflicto armado. La confrontación armada no había terminado, por lo tanto, el Tribunal no era resultado de una victoria militar. Las características del conflicto armado interno y su condición de confrontación étnica, marcan no sólo la percepción que la población tiene del Tribunal sino al mismo tiempo, la idea de perseguir la imparcialidad marcó profundamente el proceso de instauración y funcionamiento del Tribunal. Constantemente, ambos aspectos acarrearán consecuencias para su legitimidad.

La guerra en la Ex- Yugoslavia no finalizó con un triunfo militar sino por medio de negociaciones organizadas por la comunidad internacional. Los representantes de los tres grupos étnicos participaron en la negociación y firmaron la paz en Dayton, noviembre de 1995, lo cual constituye en diferentes grados que, para el Tribunal Penal

⁷⁶⁰ ARZT, Donna E. 2006. Views on the Ground: The Local Perception of International Criminal Tribunals in the Former Yugoslavia and Sierra Leone” En: *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* [en línea], Vol. 603. Página: 58 [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] DOI: 10.1177/002716205281443. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/240696032_Views_on_the_Ground_The_Local_Perception_of_International_Criminal_Tribunals_in_the_Former_Yugoslavia_and_Sierra_Leone

Internacional para la Ex Yugoslavia, a partir de ese momento cada uno de los actores pudo ser visto como víctima o agresor. Completamente diferente a la situación del tribunal de Nuremberg donde la condición de agresor estaba predefinida para los miembros del grupo militarmente derrotado, los Nazis. Los grupos gobernantes en cada uno de los países de la Ex-Yugoslavia permanecieron en posición de poder por mucho tiempo más, con una gran influencia en las sociedades, situación que incidió en la percepción de la opinión pública hacia el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia e hizo su labor mucho más difícil de completar, al tener que juzgar actores políticos y militares considerados héroes en cada uno de sus países.

21. NÚMERO DE CASOS INGRESADOS

El primer informe⁷⁶¹ del tribunal abarca de noviembre de 1993 a julio de 1994. En donde informa que sus actividades han sido sobre la instalación, la elección de los jueces, la adopción de las reglas de prueba y procedimiento, la contratación del personal para los diferentes órganos que lo componen. Además, expone que el retraso en las investigaciones se debe al no haber nombrado un fiscal. Es decir, en su primer año de funcionamiento se dedicó a actividades administrativas no judiciales.⁷⁶²

En el segundo informe se reportó que recibió 8 acusaciones, 46 solicitudes de órdenes de arresto y 3 audiencias para solicitar la competencia de los tribunales nacionales sobre procesos pendientes en investigaciones y que algunos procedimientos fueran aplazados y pasaran al tribunal internacional.⁷⁶³

En el informe anual de 1996, que corresponde al período de 31 de julio de 1995 al 31 de julio de 1996, al tribunal le fueron enviadas por parte del fiscal 11 acusaciones para confirmar, 10 solicitudes sobre mociones preliminares, 33 solicitudes de arresto a

⁷⁶¹ Ver Anexo II

⁷⁶² TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 1994. Primer Informe anual del Tribunal periodo de noviembre de 1993 a julio de 1994, Página: 07. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: https://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/AnnualReports/annual_report_1994_en.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁷⁶³ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 1995. Informe anual del Tribunal periodo julio de 1994 a de agosto de 1995, Página: 06. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: https://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/AnnualReports/annual_report_1995_en.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

acusados, 5 solicitudes de Amicus Curiae, 1 caso en desarrollo, 2 casos en fase previa juicio, 1 caso en proceso de ser dictada su sentencia; la Cámara de apelación tuvo 2 solicitudes de apelación interlocutoria.⁷⁶⁴

El cuarto informe del tribunal expone que en el período comprendido del 01 de agosto de 1996 al 31 de julio de 1997 no le fueron presentadas acusaciones para confirmar, ni órdenes de arresto. Le fueron presentadas 4 solicitudes de liberación provisional, 7 amicus Curiae, 3 solicitudes de recibir testimonio por medio de videoconferencia. Además, de tener 4 casos en curso, 2 en etapa de dictar sentencia y 2 en etapa de presentar pruebas.⁷⁶⁵

El informe anual del periodo 01 de agosto de 1997 a 27 de julio de 1998 expone que al Tribunal no le fueron presentadas acusaciones para confirmar o solicitudes de emitir órdenes de arresto, 1 solicitud de Amicus Curiae y 8 de apelaciones. En este periodo 13 casos se encontraban en etapas preparatorias, 8 de ellos en diferentes etapas preparatorias, 4 casos en curso y un caso en espera de sentencia. Además, la apelación en el caso Tadic continuaba en curso. Sin embargo, le fueron solicitados permisos por parte del Fiscal para retirar cargos en contra de 11 acusados en el caso Omarska, 5 en el caso Keraterm, 1 enmienda de acusación en el caso Kovacevic, 1 en el caso Jelusic.⁷⁶⁶

El sexto informe del tribunal que comprende de 28 de julio de 1998 a 31 de julio de 1999, le fue solicitado emitir 5 órdenes de arresto, la confirmación de 2 acusaciones, la consideración de 15 apelaciones interlocutorias, 1 apelación regla 77 en relación a desacato, 4 apelaciones sobre el fondo casos. Además, en ese periodo se encontraba

⁷⁶⁴ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 1996. Tercer Informe anual del Tribunal periodo de 31 julio de 1995 a 31 de julio de 1996, Páginas: 08,28,11. En: *United Nations*. [en línea] Disponible en: https://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/AnnualReports/annual_report_1996_en.pdf. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁷⁶⁵ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 1997. *Cuarto Informe anual del Tribunal periodo de 08 de agosto de 1996 a 31 de julio de 1997*, Páginas: 03,04,19 y 11. En: *United Nations*. [en línea] Disponible en: https://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/AnnualReports/annual_report_1997_en.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁷⁶⁶ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 1998. *Quinto Informe anual del Tribunal periodo de 01 de agosto de 1997 a 27 de julio de 1998*, Páginas: 03,04,13,14,25 y 26. En: *United Nations*. [en línea] Disponible en: https://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/AnnualReports/annual_report_1998_en.pdf. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

un caso completo en espera de sentencia, 3 casos en espera de juicio, 4 casos en apelación, 7 en etapas preparatorias.⁷⁶⁷

El informe anual del periodo del 01 de agosto de 1999 al 31 de julio del 2000 el Tribunal informo que recibió las siguientes solicitudes: 6 acusaciones para confirmar, 2 acusaciones nuevas y 4 para enmendar; 10 solicitudes para obtener libertad provisional; las Salas de apelación recibieron 14 nuevas solicitudes de apelaciones interlocutorias, 2 apelaciones basadas en la regla 77, 2 solicitudes de autorización para apelar y 3 pendientes de resolver; las Salas de Primera instancia recibieron 14 apelaciones nuevas. El tribunal en ese momento contaba con 4 juicios en curso.⁷⁶⁸

El octavo informe anual del tribunal informa que en el periodo comprendido del 01 de agosto del 2000 al 31 de julio de 2001 recibió las siguientes solicitudes: 24 apelaciones interlocutorias, 19 apelaciones sobre méritos del caso, una solicitud para recibir asistencia médica y 62 solicitudes para brindar protección a testigos.⁷⁶⁹

El informe para el período de 01 de agosto de 2001 a 31 de julio de 2002, el noveno del tribunal, señala que le fueron presentadas 2 solicitudes de compensación a favor de acusado, 2 solicitudes de libertad provisional, 2 solicitudes para unir acusaciones en contra de 2 diferentes acusados, 24 apelaciones interlocutorias, 8 apelaciones sobre méritos del caso.⁷⁷⁰

⁷⁶⁷ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 1999. Sexto Informe anual del Tribunal periodo de 28 de agosto de 1998 a 31 de julio de 1999, Páginas: 03,04,15 y 24. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: https://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/AnnualReports/annual_report_1999_en.pdf. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁷⁶⁸ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2000. Séptimo Informe anual del Tribunal periodo de 01 de agosto de 1998 a 31 de julio de 2000, Páginas: 03,10,11-13 y 19. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: https://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/AnnualReports/annual_report_2000_en.pdf. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁷⁶⁹ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2001. Octavo Informe anual del Tribunal periodo de 01 de agosto de 2000 a 31 de julio de 2001, Páginas: 03,14,20,25 y 28. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: https://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/AnnualReports/annual_report_2001_en.pdf. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁷⁷⁰ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2002. Noveno Informe anual del Tribunal periodo de 01 de agosto de 2001 a 31 de julio de 2002, Páginas: 14,15,24 y 37. En: *United Nations* [en línea]. https://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/AnnualReports/annual_report_2002_en.pdf. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

El décimo informe del Tribunal indica que en el período comprendido entre el 01 de agosto de 2002 al 31 de julio de 2003 le fueron presentadas las siguientes solicitudes: 7 acusaciones para confirmar, 8 nuevas apelaciones sobre el fondo del asunto, 42 apelaciones interlocutorias, 3 casos de desacato.⁷⁷¹

El undécimo informe por el período comprendido entre el 01 de agosto de 2003 al 31 de julio de 2004, el Tribunal informo que recibió: 6 acusaciones para confirmación, 17 apelaciones interlocutorias, 4 apelaciones de sentencias, 1 solicitud de revisión.⁷⁷²

El duodécimo informe anual del tribunal que corresponde al período del 01 de agosto de 2004 al 31 de julio de 2005 expone que recibió las siguientes solicitudes: 07 acusaciones para ser confirmadas, 04 solicitudes de casos por desacato al tribunal, 35 apelaciones interlocutorias de las cuales 04 eran confidenciales, 02 recursos de apelación.⁷⁷³

El decimotercero informe que comprende del 01 de agosto de 2005 al 31 de julio de 2006 el Tribunal informo que no conoció de ninguna solicitud de confirmación de acusación, 2 solicitudes de casos de desacato, 13 solicitudes de remisión de casos a tribunales nacionales, 32 solicitudes de apelaciones interlocutorias, 03 solicitud de reconsideración o revisión.⁷⁷⁴

El decimocuarto informe del periodo de 01 de agosto de 2006 al 31 de julio de 2007 el Tribunal informo que no recibió solicitudes de acusaciones para confirmar, 300

⁷⁷¹ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2003. Décimo Informe anual del Tribunal periodo de 01 de agosto de 2002 a 31 de julio de 2003 Páginas: 15-17, 46 y 50. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: https://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/AnnualReports/annual_report_2003_en.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁷⁷² TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2004. Undécimo Informe anual del Tribunal periodo de 01 de agosto de 2003 a 31 de julio de 2004 Páginas: 03-04, 11, 18-22. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: https://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/AnnualReports/annual_report_2004_en.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁷⁷³ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2005. Duodécimo Informe anual del Tribunal periodo de 01 de agosto de 2004 al 31 de julio de 2005, Páginas: 04, 17, 28, 34 y 50. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: https://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/AnnualReports/annual_report_2005_en.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁷⁷⁴ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2006. Decimotercero Informe anual del Tribunal periodo de 01 de agosto de 2005 al 31 de julio de 2006, Páginas: 03, 07, 12, 17-19. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: https://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/AnnualReports/annual_report_2006_en.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

solicitudes sobre asuntos previos en 20 casos, 156 decisiones de las Salas de Apelación, 02 casos de desacato, 25 apelaciones interlocutorias, 05 solicitudes de revisión y remisión, 11 apelaciones de sentencia, 23 decisiones de revisión.⁷⁷⁵

El decimoquinto informe del periodo de 01 de agosto de 2007 al 31 de julio de 2008 el Tribunal informo que recibió en las Salas de Primera Instancia 213 solicitudes sobre cuestiones preliminares, 01 caso de desacato; las Salas de Apelaciones recibieron 123 solicitudes de decisiones distribuidas, 32 apelaciones interlocutorias, 79 decisiones previas a la apelación, 06 decisiones de reconsideración.⁷⁷⁶

El informe decimosexto anual del Tribunal para el período del 01 de agosto de 2008 al 31 de julio de 2009 indica que el Tribunal recibió: 1 solicitud de revisión, 3 casos de desacato, 36 apelaciones interlocutorias.⁷⁷⁷

El informe decimoséptimo anual del Tribunal para el período del 01 de agosto de 2009 al 31 de julio de 2010 indica que el Tribunal recibió las siguientes solicitudes: 1 solicitud de devolver al tribunal, un caso remitido a un tribunal nacional, 102 solicitudes previas a la apelación, 02 solicitudes de desacato en la Sala de Apelaciones, 21 apelaciones interlocutorias. Asimismo, informo que 14 acusados se encontraban en proceso de apelación, 18 en juicio, 03 en etapa previa al juicio y 02 libres.⁷⁷⁸

⁷⁷⁵ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2007. Decimocuarto Informe anual del Tribunal periodo de 01 de agosto de 2006 al 31 de julio de 2007, Páginas: 03,07,11-16. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en:

https://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/AnnualReports/annual_report_2007_en.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁷⁷⁶ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2008. Decimoquinto Informe anual del Tribunal periodo de 01 de agosto de 2007 al 31 de julio de 2008, Páginas: 05,10- 14. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en:

https://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/AnnualReports/annual_report_2008_en.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁷⁷⁷ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2009. Decimosexto Informe anual del Tribunal periodo 01 de agosto de 2008 al 31 de julio de 2009, Páginas: 06.11-14. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en:

https://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/AnnualReports/annual_report_2009_en.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁷⁷⁸ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2010. Decimoséptimo Informe anual del Tribunal periodo 01 de agosto de 2009 al 31 de julio de 2010, Páginas: 03.11-15. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en:

https://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/AnnualReports/annual_report_2010_en.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

El decimoctavo informe anual del Tribunal para el período del 01 de agosto de 2010 al 31 de julio de 2011 expone que las solicitudes recibidas fueron las siguientes: 75 solicitudes previas a la Apelación, 4 juicios de desacato, 13 apelaciones interlocutorias, 1 apelación de revisión.⁷⁷⁹

El decimonoveno informe anual del Tribunal para el período del 01 de agosto de 2011 al 31 de julio de 2012 señala que las solicitudes recibidas fueron las siguientes: la Sala Especial recibió 20 solicitudes relacionadas con el acceso a evidencia de nueve casos, 5 apelaciones, 15 apelaciones interlocutorias, 2 apelaciones de desacato, 135 solicitudes previas a la apelación.⁷⁸⁰

El vigesimoprimer informe anual del Tribunal para el período del 01 de agosto de 2013 al 31 de julio de 2014 indica que las solicitudes realizadas al Tribunal fueron las siguientes: 9 apelaciones interlocutorias, 2 apelaciones de fondo, 126 solicitudes previas a la apelación, 02 apelaciones, 01 transferencia de caso bajo reserva.⁷⁸¹

El vigesimosegundo informe anual del Tribunal para el período del 01 de agosto de 2014 al 31 de julio de 2015 indica que las solicitudes realizadas al Tribunal fueron las siguientes: 6 apelaciones interlocutorias, 79 solicitudes previas a la apelación, ninguna solicitud de transferencias o de audiencia a la Sala Especial.⁷⁸²

⁷⁷⁹ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2011. Decimoctavo Informe anual del Tribunal periodo 01 de agosto de 2010 al 31 de julio de 2011, Páginas: 03, 08. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en:

https://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/AnnualReports/annual_report_2011_en.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁷⁸⁰ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2012. Decimoctavo Informe anual del Tribunal periodo 01 de agosto de 2011 al 31 de julio de 2012, Páginas: 03, 10-15. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en:

https://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/AnnualReports/annual_report_2012_en.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁷⁸¹ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2014. Vigésimoprimer Informe anual del Tribunal periodo 01 de agosto de 2013 al 31 de julio de 2014, Páginas: 03, 08 y 09. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en:

https://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/AnnualReports/annual_report_2014_en.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁷⁸² TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2015. Vigésimosegundo Informe anual del Tribunal periodo 01 de agosto de 2014 al 31 de julio de 2015, Páginas: 03 y 09. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en:

https://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/AnnualReports/annual_report_2015_en.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

El vigesimotercer informe anual del Tribunal para el período del 01 de agosto de 2014 al 31 de julio de 2015 señala que las solicitudes presentadas al Tribunal fueron las siguientes: 34 solicitudes previas a la apelación y 6 apelaciones.⁷⁸³

22. NÚMERO DE CASOS RESUELTOS

El primer informe del tribunal abarca de noviembre de 1993 a julio de 1994, en su primer año de funcionamiento se dedicó a actividades administrativas no judiciales.⁷⁸⁴

En el segundo informe del tribunal resolvió 1 orden de cooperación para lograr el arresto de los acusado Karadzic, Madic, Martic, confirmo 13 acusaciones y resolvió sobre 3 solicitudes de aplazamiento de la competencia de tribunales nacionales.⁷⁸⁵

En tercer informe anual del tribunal se informa que emitió 11 decisiones sobre confirmación de acusaciones⁷⁸⁶, 1 decisión de no hacer pública una acusación para salvaguardar la integridad de testigos y víctimas, 33 órdenes de arresto, 1 confirmación de juicio contra Tadic de fecha 10 de agosto de 1995, 1 sentencia de

⁷⁸³ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2016. Vigésimotercero Informe anual del Tribunal periodo 01 de agosto de 2015 al 31 de julio de 2016, Páginas: 03,09 y 11. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: https://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/AnnualReports/annual_report_2016_en.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁷⁸⁴ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 1994. *Óp. Cit.* Página:

⁷⁸⁵ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 1995. *Óp. Cit.*

⁷⁸⁶ Debido a la cantidad de acusaciones que ha emitido el Tribunal decidió separarlas en 7: 1) presuntos delitos relacionados con la destrucción de la ciudad croata de Vukovar por las fuerzas del ejército popular yugoslavo en noviembre de 1991, uno de los primeros eventos importantes en la guerra en la ex Yugoslavia (ver la acusación de Vukovar, que se centra en la supuesta masacre de hombres desarmados tras la caída de la pueblo); 2) presuntos delitos relacionados con la ocupación de ciudades o pueblos en Bosnia y Herzegovina en 1992 por las fuerzas serbias de Bosnia (Bošanski Samac, Brčko, acusaciones de Foča) y asesinatos, violaciones y actos inhumanos asociados, y / o la posterior concentración de ciudadanos bosnios en campamentos (los Tadić (Omarska, Campamentos de Keraterm y Trnopolje), Nikolić (campamento de Sušica), campamento de Omarska y Keraterm acusaciones de campo); 3) los delitos presuntamente cometidos en un campo en el que los serbios fueron detenidos en 1992 (la acusación de Čelebići); 4) delitos presuntamente cometidos durante la guerra de 1993 en la que fuerzas croatas bosnios "étnicamente limpios" de zonas de Bosnia y Herzegovina, especialmente el área del valle del río Lašva (Kordić et al., Marinić y Kupreškić y col. acusaciones), así como el pueblo de Stupni Do (Rajić acusación); 5) eventos en la antigua región serbia de Krajina en Croacia, que son involucrado en la acusación de Martić Martić, a saber, el lanzamiento de cohetes Orkan por Serbios croatas en el centro de Zagreb en mayo de 1995; 6) el liderazgo de los serbios de Bosnia, que es el foco del primer acusación contra Karadžić y Mladić, y también involucró el caso discontinuado de Djukić, centrándose en el asedio de Sarajevo; 7) eventos relacionados con la caída de Srebrenica, que se tratan en la segunda acusación de Karadžić y Mladić, así como la acusación de Erdemović.

apelación del 02 de octubre de 1995, 5 decisiones sobre la admisión de Amicus Curiae y 10 decisiones sobre mociones preliminares.⁷⁸⁷

El cuarto informe del tribunal expone que en el período comprendido del 01 de agosto de 1996 al 31 de julio de 1997 se hizo pública 1 confirmación de acusación, dictó 1 sentencia luego de que un acusado se declaró no culpable, resolvió no otorgar 4 solicitudes libertad provisional por peligro de fuga, 6 intentos de apelación provisionales, 1 apelación, 3 solicitudes de testimonio por videollamada y 1 decisión sobre la forma de producir evidencia en caso de agresión sexual.⁷⁸⁸

El quinto informe anual expone que se decidió otorgar 1 libertad provisional, 2 casos fueron cerrados, se otorgaron en 2 casos permisos de retiro de cargos al Fiscal, se decidió sobre 1 amicus Curiae, 2 apelaciones fueron rechazadas y 1 decisión de enviar a juicio al acusado Erdmovic.⁷⁸⁹

El sexto informe del tribunal que comprende de 28 de julio de 1998 a 31 de julio de 1999, emitió 5 órdenes de arresto y la confirmación de 2 acusaciones.⁷⁹⁰

El séptimo informe anual expone que el tribunal resolvió confirmar 6 acusaciones, 4 enmendadas y 2 nuevas; emitió 3 sentencias definitivas, 2 sentencias en apelación de sentencia; 6 solicitudes de permiso para apelar negando 3, autorizando 2 y 1 en proceso; 9 solicitudes de libertad provisional negando 6 y aprobando 3; contaba con 25 acusado en proceso 9 en etapa de juicio previo, 04 en juicio previo en proceso y 12 acusados en curso de apelación de decisiones.⁷⁹¹

El octavo informe anual del tribunal indica que en este periodo se emitieron 2 sentencias, 8 acusaciones fueron presentadas por el Fiscal, 62 órdenes de protección de testigos, 20 solicitudes de apelación se resolvieron negando el permiso para

⁷⁸⁷ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 1996. *Óp. Cit.* Páginas: 08 a 28. En:

⁷⁸⁸ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 1997. *Óp. Cit.* Páginas: 03,04,19 y 11.

⁷⁸⁹ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 1998. *Óp. Cit.* Páginas: 03,04,13,14,25 y 26.

⁷⁹⁰ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 1999. *Óp. Cit.* Páginas: 03,04 y 24.

⁷⁹¹ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2000. *Óp. Cit.* Páginas: 03,10,11-13 y 19.

interponer apelación, 5 apelaciones interlocutorias fueron resueltas 2 negadas, 2 otorgadas, 1 en curso. Además, tenía 18 casos en curso y 47 acusados detenidos.⁷⁹²

El noveno informe para el período de 01 de agosto de 2001 a 31 de julio de 2002, emitió 2 decisiones negando compensaciones a favor de acusado, 5 sentencias en primera instancia, 2 sentencias en sala de apelaciones, decidió descartar 22 apelaciones interlocutorias y emitió 7 decisiones sustantivas relacionadas a este tipo de apelación; resolvió otorgar 1 libertad provisional y negar 1; tomo la decisión de unir las acusaciones de 2 acusados en un solo caso para cada uno; hizo públicas 6 acusaciones. Además, se encuentran en diferentes etapas 30 casos sobre las que se han tomado diversas decisiones y 23 acusados fueron detenidos.⁷⁹³

El décimo informe del Tribunal muestra que en el período comprendido entre el 01 de agosto de 2002 al 31 de julio de 2003 resolvió: la confirmación de 7 acusaciones, emitió 4 sentencias en primera instancia, 1 apelación y mantiene 5 en curso. Además, para ese momento tenía 28 casos activos y considerado 1 caso sobre desacato.⁷⁹⁴

El undécimo informe que comprende el período entre el 01 de agosto de 2003 al 31 de julio de 2004, el Tribunal informo que resolvió: confirmar 6 acusaciones, 13 apelaciones interlocutorias y 4 en curso, 10 apelaciones sobre el fondo del asunto y 4 estaban en curso, 10 apelaciones de sentencias, 1 solicitud de revisión. En relación a las sentencias el Tribunal expuso que dicto 9 sentencias sobre el fondo del asunto y condenas derivadas de acuerdos de aceptación de culpabilidad.⁷⁹⁵

El duodécimo informe anual correspondiente al período del 01 de agosto de 2004 al 31 de julio de 2005 el tribunal resolvió: 23 apelaciones interlocutorias públicas, 4 apelaciones interlocutorias confidenciales, 7 acusaciones fueron confirmadas, 1 acusación se hizo pública, 3 sentencias sobre casos de desacato, 3 sentencias sobre el fondo de casos, 2 decisiones sobre apelaciones de remisión, 5 decisiones sobre apelaciones de sentencias de fondo. El Tribunal tiene en curso 37 casos de fondo, 05 de desacato, 11 apelaciones interlocutorias, 9 apelaciones de sentencia y de fondo,

⁷⁹² TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2001. *Óp. Cit.* Páginas: 03,14,20,25,28 y 34.

⁷⁹³ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2002. *Óp. Cit.* Páginas: 14,15,24 y 37.

⁷⁹⁴ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2003. *Óp. Cit.* Páginas: 15-17,46,50.]

⁷⁹⁵ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2003. *Óp. Cit.* Páginas: 03-04, 11,18-22.

1 aviso de apelación por desacato, 2 recursos de apelación de este período y 6 del período anterior.⁷⁹⁶

El decimotercero informe que comprende del 01 de agosto de 2005 al 31 de julio de 2006 el Tribunal comunicó que resolvió 443 decisiones sobre cuestiones preliminares en 22 casos, 2 casos de desacato, 112 decisiones previas a la Apelación, 04 sentencias sobre el fondo, 150 decisiones sobre asuntos relacionados con apelaciones, 32 decisiones sobre apelaciones interlocutorias, 4 decisiones de remisión, 4 sentencias de apelación, 1 decisión de reconsideración, 9 decisiones sobre casos remitidos a la jurisdicción nacional, 01 apelación de desacato, 04 solicitudes de revisión y reconsideración pendientes de resolver. Además, tramitaba 15 casos y 8 casos en fase previa.⁷⁹⁷

El decimocuarto informe del periodo de 01 de agosto de 2006 al 31 de julio de 2007 el Tribunal avisó que resolvió 300 decisiones sobre asuntos previos en 20 casos ante las Salas de Primera Instancia, 2 decisiones sobre casos de desacato, 3 sentencias, 5 casos de remisión; 156 decisiones relacionados con Apelaciones, 5 sentencias definitivas, 11 apelaciones de sentencia, 21 apelaciones interlocutorias, 3 decisiones de remisión, 94 decisiones previas a la apelación, 23 decisiones de revisión y remisión, 1 decisión para desestimar apelación por desacato, 3 decisiones para desestimar solicitudes de remisión. Además, el arresto de 2 fugitivos y el cierre de 106 procesos en contra de 161 acusados.⁷⁹⁸

El decimoquinto informe del periodo de 01 de agosto de 2007 al 31 de julio de 2008 el Tribunal informó que resolvió en las Salas de Primera Instancia 213 decisiones sobre cuestiones preliminares, 1 caso de desacato y emitió 5 sentencias; las Salas de Apelaciones emitieron 123 decisiones distribuidas en 6 sentencias de apelación, 32 apelaciones interlocutorias y 5 se encuentran en trámite, 79 decisiones previas a la apelación, 6 decisiones de reconsideración y 1 en curso. Y señaló que se

⁷⁹⁶ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2005. *Óp. Cit.* Páginas: 04,17,28, 34 y 50.

⁷⁹⁷ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2006. *Óp. Cit.* Páginas: 03,07,12,17-19.

⁷⁹⁸ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2007. *Óp. Cit.* Páginas: 03,07,11-16.

encontraban 8 casos en etapa previa al juicio y 13 en etapa de juicio, a la fecha había cerrado casos contra 114 acusados de 161.⁷⁹⁹

El informe decimosexto anual del Tribunal para el período del 01 de agosto de 2008 al 31 de julio de 2009 indica que el Tribunal tomo la decisión de 1 solicitud de revisión, 3 sentencias en casos de desacato, 36 apelaciones interlocutorias, 3 sentencias de las Salas de Primera Instancia, 3 sentencias de las Salas de Apelación. A la fecha del informe se encuentran 3 casos en etapa previa al juicio, 14 casos en juicio, 2 acusados en libertad, en contra de 120 acusados se ha terminado el proceso y 86 casos habían sido completados por el Tribunal.⁸⁰⁰

El informe decimoséptimo anual del Tribunal para el período del 01 de agosto de 2009 al 31 de julio de 2010 revelo que el Tribunal tomo las siguientes decisiones: emitió 3 sentencias en la Sala de Apelaciones, 1 sentencia en la Sala de Primera Instancia, 1 solicitud negada de devolver un caso remitido a un tribunal nacional al Tribunal, 102 decisiones previas a la apelación, 1 sentencia y 1 en curso sobre desacato en la Sala de Apelaciones, 4 decisiones sobre apelaciones interlocutorias y 3 en curso. Asimismo, informo que 14 acusados se encontraban en proceso de apelación, 18 en juicio, 3 en etapa previa al juicio y 02 libres. El proceso en contra de 126 acusados de 161 informo que habían finalizado y tenía 10 procesos en trámite y 3 procesos de desacato.⁸⁰¹

El decimoctavo informe anual del Tribunal para el período del 01 de agosto de 2010 al 31 de julio de 2011 expone que las decisiones tomadas por el Tribunal fueron: 75 decisiones previas a la Apelación, 02 sentencias de la Sala de Primera Instancia, 01 sentencia de revisión, 01 sentencia de revisión de apelación, 13 decisiones de apelaciones interlocutorias. Asimismo, se encuentran en trámite 14 acusados en juicio, 16 en procesos de apelación, 05 etapa previa al juicio, 04 proceso de desacato. Se encontraban pendientes de resolver 03 recursos de apelación.⁸⁰²

El decimonoveno informe anual del Tribunal para el período del 01 de agosto de 2011 al 31 de julio de 2012 señala las decisiones tomadas por el Tribunal fueron las

⁷⁹⁹ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2008. *Óp. Cit.*

⁸⁰⁰ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2009. *Óp. Cit.*

⁸⁰¹ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2010. *Óp. Cit.*

⁸⁰² TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2011. *Óp. Cit.*

siguientes: 1 sentencia emitida por la Sala de Primera Instancia, 4 sentencias de desacato, la Sala Especial emitió 20 órdenes y decisiones relacionadas con el acceso a evidencia de nueve casos, 5 decisiones de apelaciones, 15 decisiones de apelaciones interlocutorias, 2 apelaciones de desacato, 135 decisiones previas a la apelación. Asimismo, informo que de 17 acusados sus casos estaban en proceso de apelación, 1 en etapa previa a juicio, que de los 161 acusados de 126 ya estaban completos; 9 juicios en trámite y 1 en etapa previa al juicio.⁸⁰³

De conformidad con el vigésimo informe del Tribunal en el periodo comprendido del 01 de agosto de 2012 al 31 de julio de 2013 emitió las siguientes decisiones: 2 sentencias de las Salas de Primera Instancia, 1 sentencia por desacato, 1 transferencia de caso bajo reserva, 31 decisiones de órdenes de acceso a información de 12 casos, 2 decisiones de apelación interlocutoria, 2 sentencias por desacato de las Salas de Apelación, 3 sentencias de la Sala de Apelación, 92 decisiones previas a la apelación. En el informe señalo que 21 acusados estaban en proceso de apelación, 4 en juicio, que de los 161 acusados se logró finalizar el proceso en contra de 136 y 10 juicios permanecían en trámite.⁸⁰⁴

El vigesimoprimer informe anual del Tribunal para el período del 01 de agosto de 2013 al 31 de julio de 2014 indica que las decisiones tomadas por el Tribunal fueron las siguientes: 2 sentencias de apelación, 9 decisiones de apelaciones interlocutorias, 2 apelaciones de fondo, 126 decisiones previas a la apelación, 2 decisiones negando apelaciones, 1 transferencia de caso bajo reserva. El tribunal expone que en este periodo estaban en curso 09 casos, 4 en juicios de primera instancia y 5 ante las Salas de Apelación. De los 161 acusado por el tribunal se ha logrado completar el procedimiento en contra de 141, 16 de los acusados se encuentran en proceso de apelación y 04 en juicio.⁸⁰⁵

El vigesimosegundo informe anual del Tribunal para el período del 01 de agosto de 2014 al 31 de julio de 2015 enseña que las decisiones tomadas por el Tribunal fueron las siguientes: 6 apelaciones interlocutorias, 79 decisiones previas a la apelación, 2

⁸⁰³ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2012. *Óp. Cit.*

⁸⁰⁴ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2013. *Óp. Cit.*

⁸⁰⁵ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2014. *Óp. Cit.*

sentencias de la Sala de Apelación. En este periodo los 161 acusados fueron puestos a disposición del tribunal, con 10 en proceso de apelación y 4 en juicio en curso.⁸⁰⁶

El vigesimotercer informe anual del Tribunal para el período del 01 de agosto de 2014 al 31 de julio de 2015 las decisiones tomadas por el Tribunal fueron las siguientes: 2 sentencias de la Sala de Apelación, 2 sentencias de la Sala de Primera Instancia, 1 caso cerrado por la muerte del acusado y 34 decisiones previas a la apelación. Asimismo, 2 casos se encontraban en curso 1 ante la Sala de Primera Instancia y otro ante la Sala de Apelación y 1 caso de desacato. En este periodo 6 acusados se encontraban en proceso de apelación y 1 en juicio.⁸⁰⁷

De acuerdo a la información publicada en la página oficial del Tribunal Internacional de la Ex- Yugoslavia durante su vigencia, acusó a 161 personas incluidas: jefes de Estado, primer ministros, altos miembros del estado mayor de las fuerzas armadas, ministros del interior o gobierno, múltiples dirigentes políticos de alto y mediano rango, numerosos miembros de la fuerzas armadas y de policía, todos los acusados pertenecientes a los diferentes grupos étnicos localizados en Croacia, Bosnia Herzegovina, Serbia, Kosovo y Macedonia⁸⁰⁸. Los procesos seguidos hacen referencia a hechos ocurridos entre la de cada de 1991 a 2001, relacionados con cuatro tipos de delitos: Genocidio, Crímenes contra la Humanidad, Violaciones al Derecho Internacional Humanitario y Graves violaciones a la Convención de Viena. 90 acusados fueron sentenciados; 18 absueltos, 37 procesos se terminaron anticipadamente; 13 procesos transferidos a las cortes locales; 4 procesos pasaron al Mecanismo Residual⁸⁰⁹.

A continuación, se presenta un resumen de casos y apelaciones presentadas hasta 2016.

⁸⁰⁶ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2015. *Óp. Cit.*

⁸⁰⁷ TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 2016. *Óp. Cit.*

⁸⁰⁹ NATIONS United, 2017. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. *En: Facts & Figures* [en línea]. Disponible en: https://www.icty.org/sites/icty.org/files/images/content/Infographic_facts_figures_en.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

Año	Sala	Número de sentencias
1994	- Sala de primera instancia	0
	- Sala de apelación	0
1995	- Sala de primera instancia	0
	- Sala de apelación	0
1996	- Sala de primera instancia	0
	- Sala de apelación	0
1997	- Sala de primera instancia	0
	- Sala de apelación	0
1998	- Sala de primera instancia	0
	- Sala de apelación	0
1999	- Sala de primera instancia	03
	Sala de apelación	0
2000	- Sala de primera instancia	03
	- Sala de apelación	02
2001	- Sala de primera instancia	02
	- Sala de apelación	0
2002	- Sala de primera instancia	05
	- Sala de apelación	02

2003	- Sala de primera instancia - Sala de apelación	04 0
2004	- Sala de primera instancia - Sala de apelación	09 0
2005	- Sala de primera instancia - Sala de apelación	03 05
2006	- Sala de primera instancia - Sala de apelación	0 0
2007	- Sala de primera instancia Sala de apelación	03 05
2008	- Sala de primera instancia - Sala de apelación	05 06
2009	- Sala de primera instancia - Sala de apelación	03 03
2010	- Sala de primera instancia - Sala de apelación	01 03
2011	-Sala de primera instancia - Sala de apelación	02 01
2012	- Sala de primera instancia	01
2013	-Salas de primera instancia -Sala de apelación	02 03

2014	Sala de Apelación	02
2015	Sala de Apelación	02
2016	-Sala de primera instancia - Sala de Apelación	02 02

Las estadísticas de casos al cierre del Tribunal quedaron de la siguiente manera⁸¹⁰:

2 sentenciados en espera de transferencia a un Estado para cumplir su condena

Radovan Karadžić, Milivoj Petković

20 - Transferidos a un Estado para cumplir su condena

Miroslav Bralo, Radoslav Brđanin, Vlastimir Đorđević, Stanislav Galić, Goran Jelisić, Radislav Krstić, Dragoljub Kunarac, Milan Lukić, Sredoje Lukić, Sreten Lukić, Milan Martić, Radivoje Miletić, Pirocovara, Pirocovara, Prémora, Piroco, Piora, Piroco, Piroco, Piroco, Piroco, Pirovara, Pirovara, Pirovara, Pirovara, Pirovara, Pirovarava , Bruno Stojić, Mićo Stanišić, Stojan Župljanin

59 - Cumplieron su condena

Zlatko Aleksovski, Haradin Bala, Predrag Banović, Vidoje Blagojević, Tihomir Blaškić, Ljubomir Borovčanin, Lahi Brahimaj, Mario Čerkez, Ranko Češić, Valentin Ćorić, Hazim Delić, Damir Došen, Surai, Sufari. , Drago Josipović, Dragan Kolundžija, Dario Kordić, Milošica Kos, Radomir Kovač, Momčilo Krajišnik, Milorad Krnojelac, Amir Kubura, Miroslav Kvočka, Esad Landžo, Vladimir Lazarević, Vinko Martinović, Darko Mrđić, Mdrav, Micov, Draco Michoa, Zdrav, Mdrav, Médico Nikolić, Dragan Obrenović, Dragoljub Ojdanić, Vinko Pandurević, Biljana Plavšić, Dragoljub Prcać, Berislav Pušić, Mlađo Radić, Ivica Rajić, Vladimir Šantić, Duško Sikirica, Blagoje Simić, Suvai, Suvai Duško Tadić, Miroslav Tadić, Johan Tarčulovski, Stevan Todorović, Mitar Vasiljević, Zoran Vuković, Simo Zarić, Dragan Zelenović, Zoran Žigić

⁸¹⁰TRIBUNAL Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. 2019. Key Figures of the Cases. En: *United Nations International Residual Mechanism for Criminal Tribunals* [en línea]. Disponible en: <https://www.icty.org/en/cases/key-figures-cases> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

9 – Murieron después del juicio o mientras cumplían su condena

Milan Babić, Ljubiša Beara, Rasim Delić, Miroslav Deronjić, Milan Gvero, Mile Mrkšić, Drago Nikolić, Slobodan Praljak, Zdravko Tolimir

18 - absueltos

Idriz Balaj, Ljube Boškoski, Ivan Čermak, Zejnil Delalić, Ante Gotovina, Sefer Halilović, Ramush Haradinaj, Zoran Kupreškić, Mirjan Kupreškić, Vlatko Kupreškić, Fatmir Limaj, Mladen Markač, Milan Milutić, Percico, Perico, Narco, Perico, Naruto, Orcoići. Miroslav Radić

3 casos en curso

1 - En apelación ante el Mecanismo⁸¹¹

Ratko Mladić

2 - En el nuevo juicio antes del Mecanismo

Franko Simatović, Jovica Stanišić

13 personas remitidas a jurisdicciones nacionales de conformidad con la Regla 11bis

Rahim Ademi, Dušan Fuštar, Momčilo Gruban, Gojko Janković, Vladimir Kovačević, ** Duško Knežević, Paško Ljubičić, Željko Mejakić, Mirko Norac, Mitar Rašević, Radovan Stanković, Savo Todović, Milo

37 Acusados tuvieron sus acusaciones retiradas o murieron

20 Acusaciones retiradas

⁸¹¹ "El Mecanismo Residual Internacional para Tribunales Penales (Mecanismo) fue establecido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 22 de diciembre de 2010 para llevar a cabo una serie de funciones esenciales del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) y el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), después de completar sus respectivos mandatos". CONSEJO de Seguridad. S.F. *Tribunales Internacionales*. [en línea]. Disponible en: <https://www.un.org/securitycouncil/es/content/repertoire/international-tribunals> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

Mirko Babić, Nenad Banović, Zdravko Govedarica, Gruban, Marinko Katava, Dragan Kondić, Predrag Kostić, Goran Lajić, Zoran Marinić, Agim Murtezi, Nedeljko Paspalj, Milan Pavlić, Milutin Popović, Draženko Predojevića, ponvaja, iva, Savac. Pero Skopljak, Nedjeljko Timarac, Milan Zec

10 Fallecidos antes de ser transferido al TPIY

Stipo Alilović, Janko Bobetko, Goran Borovnica, Simo Drljača, Dragan Gagović, Janko Janjić, Nikica Janjić, Slobodan Miljković, Željko Ražnatović, Vlajko Stojiljković

7 personas fallecidas después de la transferencia al TPIY

Mehmed Alagić, Đorđe Đukić, Slavko Dokmanović, Goran Hadžić, Milan Kovačević, Slobodan Milošević, Momir Talić

23. ANÁLISIS CUALITATIVO:

La principal crítica que acompaña cualquier referencia que se hace acerca del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, está relacionada a los altos costos operativos de la institución que no concuerdan con los resultados, como ya se ha introducido en el apartado de recursos financieros.

Además, entre sus principales debilidades se identifican:

- a. *Localización* -Lo que se pensó como uno de las principales fortalezas para garantizar la neutralidad del Tribunal, su localización fuera del territorio de su jurisdicción, también se convirtió en uno de los principales obstáculos. No sólo la lejanía para conocer y evaluar lo acontecido, sino en adición su imposibilidad de familiarizarse con la cultura y costumbres de los lugares donde ocurrieron las atrocidades.
- b. *Problemas de comunicación* - El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia no consideró tener una estrategia de comunicación con la población más interesada en su gestión, ni tampoco en instruir a los diferentes estamentos del sistema de justicia local en las técnicas, reglas y gestión del proceso de administrar justicia que estaba llevando a cabo. Pese a la creación del programa Out Reach, debido a que su oficina no fue dotada ni con los recursos suficientes ni el personal requerido. El propósito del programa

consistía en comunicar fundamentalmente que los juicios y sentencias producidas por el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia no eran el resultado de un juicio de los vencedores. Convencer a las personas de la región que los fallos no eran el resultado de favorecer a un grupo étnico específico, ni de condenar a un grupo étnico en conjunto.

- c. *El carácter del conflicto*, fue altamente criticado en el carácter étnico del conflicto, muchos percibieron que los juicios eran prejuiciados por el tema étnico.
- d. *Problemas de retardo en concluir casos*, originado porque al tribunal le tomó varios años lograr su organización institucional lo cual contribuyó al prestigio de ineficacia⁸¹². Este se evidenció en dos sentidos:
 - i. La generalización o amplio alcance de los autos de acusación.
 - ii. Las largas listas de testigos y documentos ofrecidos por las partes.
- e. *Dificultades para difundir el mensaje de reconciliación* - Diferentes son los efectos en el campo de la reconciliación, entre ellas las dificultades de comunicación del Tribunal con las comunidades locales y la falta de recursos para atender a las víctimas. A diferencia de la paz que puede ser promovida efectivamente al remover los principales responsables de crímenes atroces, la reconciliación es un proceso más complejo que requiere el establecimiento de la verdad y la restauración a las víctimas. Aspectos que no son el objeto de un debido proceso en el que la verdad es el resultado de un debate de adversarios en los que la imparcialidad del juez se presenta como la garantía principal, la verdad demostrada en juicio, no necesariamente es la que las víctimas tienen como suya.

⁸¹² Incluso después de que El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia consiguió operar y producir resultados, la percepción de ineficacia no fue superada y casos como el de Slobodan Milosevic contribuyeron especialmente a afianzar esta idea. Sin embargo, es posible destacar que la experiencia que el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia deja en este aspecto, justamente hace relación a lo relativo en primer lugar a la comunicabilidad que debe tener los órganos internacionales y en segundo lugar, la necesidad de desarrollar oficinas de atención a las víctimas más, en tercer lugar, un aspecto operativo central, los mecanismos necesarios para hacer cumplir lo ordenado por la justicia internacional.

f. *Críticas en los procedimientos utilizados* - El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia tuvo que tomar medidas operativas que cada vez concentraron su acción en la persecución de los responsables políticos, militares, paramilitares y civiles de mayor jerarquía y por ende mayor incidencia en la comisión de los crímenes perpetrados. Decisiones de este tipo más el uso de mecanismos como la negociación con la oficina del Fiscal, no contribuyeron a generar una opinión favorable del Tribunal en especial entre las víctimas.

g. *Falta de contribución al fortalecimiento de la justicia en los países de la Ex Yugoslavia* – Se percibe de esta manera debido a:

- i. La lejanía del Tribunal y su falta de comunicación con las cortes locales, para los jueces no fue sino un Tribunal virtual, ajeno a su contexto y cotidianidad.
- ii. El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia nunca desarrolló un proceso de capacitación ni sesiones de intercambio con las cortes locales, para ellos el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia se concentró en su propio procediendo y se encerró en una locación geográficamente externa al lugar de su jurisdicción. Esto se considera particularmente un error en especial si uno de los propósitos del Tribunal era el fortalecimiento de la justicia en los países afectados⁸¹³.
- iii. El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia se rehusó a desarrollar algún tipo de relación con las cortes locales como muestra de independencia y neutralidad, lo que a largo plazo se convirtió en una incapacidad para establecer cualquier contacto con los miembros del poder judicial de los países de su jurisdicción.

Con ello la incapacidad de transmitir conocimiento, lograr apoyo para el desarrollo de los procesos y un mejor conocimiento de la cultura jurídica existente necesaria para una mejor comprensión y lectura del contexto y situaciones en juicio. La falla en el desarrollo de una cultura jurídica en las cortes locales igualmente se critica, al considerar la suma de más de un billón de dólares invertidos en la operación del Tribunal.

⁸¹³ ARZT, Donna E. 2008. *Óp. Cit. Páginas*: 61

- iv. La política aislacionista asumida por el Tribunal, desincentivo el desarrollo de una cultura jurídica en las cortes locales para la persecución de los delitos en contra de la humanidad y los crímenes de guerra. Para las cortes locales, la responsabilidad de tramitar este tipo de crímenes es del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, quien deberá de ser el encargado de limpiar los estragos de un conflicto armado de “limpieza étnica” incluidos los jurídicos, al procesar deficiente o negligentemente a los señalados por crímenes contra la humanidad en las cortes locales, siempre se podrá confiar en que el Tribunal administre debida justicia⁸¹⁴.
- h. *Posible parcialidad* - Desde la perspectiva de la comunidad Serbia se le acusa de falta de neutralidad y se le cataloga como un Tribunal político que administraba justicia desde la lógica de los vencedores. De otra parte, en la comunidad de Bosnia y Herzegovina la percepción es que los hallazgos y evidencias recolectadas por el Tribunal estaban incompletos y no representaban la gravedad y extensión de las atrocidades sufridas por la comunidad musulmana.
- i. *Intento de justificación de resultados* - El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia necesitaba responder eficientemente a los países que financiaron la institución mostrando resultados, fue una característica presente en todo el desarrollo y operación de tribunal y esta decisión operativa no necesariamente coincidió con las expectativas de las víctimas y la garantía de un proceso justo. Lo que se reflejó en las constantes modificaciones de las reglas de procedimiento para obtener sentencia y lo que dio como resultado la decisión de juntar la etapa del veredicto con la etapa de sentencia; y las sentencias globales.⁸¹⁵.
- j. *Ausencia de reconciliación* - El proceso acusatorio no es un sistema que contribuya a la reconciliación y esta fue otro de los fines básicos con los que fue creado El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. No sólo por su carácter antagónico, que en el caso de un conflicto de carácter étnico

⁸¹⁴ CHEHTMAN, Alejandro, 2013. Developing Local Capacity for War Crimes Trials: Insights from BiH, Sierra Leone, and Colombia. En: *Conicet Repositorio Institucional CONICET Digital* [en línea]. Disponible en: <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/3844> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁸¹⁵KING, Kimi Lynn y James David Meernik. 2011. *Óp. Cit.*

profundizó las diferencias y divisiones, sino en adición trasladó al Tribunal la lógica del enemigo al clasificar y denominar los testigos como pertenecientes o bien a la oficina del fiscal o a la defensa. En tanto debieron denominarse testigos del Tribunal y recibir en consecuencia ese tratamiento

- k. *Incapacidad de escuchar a las víctimas* -. Cientos de personas fueron contactadas por la oficina del fiscal y no tuvieron la oportunidad de ser escuchadas en el Tribunal, sus testimonios se presentaron por escrito de forma sumaria. Muchas de las víctimas que fueron escuchadas tuvieron que someterse a un contra interrogatorio que en ciertos casos fueron conducidos por el mismo defendido, quien conforme a lo acontecido podía haber sido el mismo victimario o más aun quien había conducido el exterminio de sus familiares o era su superior o quien daba las órdenes.
- l. *Variación de datos estadísticos en cada informe* – Debido a las múltiples modificaciones al procedimiento, la forma de realizar las estadísticas varió en cuanto a los contenidos en cada informe presentado ante la Asamblea General, esto dificulta tener números totales de su actividad, al no haber uniformidad en los puntos a evaluar.

Como legado del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, es importante el debate entre los sistemas acusatorio y civil continental, pasando por la implementación del sistema acusatorio y con las posteriores correcciones necesarias para desarrollar la justicia penal internacional, producto de la aplicación práctica en el ejercicio de administrar justicia en medio de un conflicto armado en desarrollo. Este es un aspecto fundamental del legado del Tribunal Penal. El material jurídico que se produjo constituye un legado sin precedentes para el desarrollo del sistema penal internacional tanto en sus aciertos como en sus fallas, que están allí para ser estudiados, analizados y difundidos.

En conjunto el trabajo del Tribunal es un precedente tangible de la lucha seguida por la comunidad internacional contra la impunidad, con la creación de una normatividad que dio vía a los reclamos de justicia y hace visible la existencia de serios crímenes contra la humanidad que serán perseguidos y condenados por el Derecho Internacional.

El Tribunal contribuyó al desarrollo y creación de otros tribunales internacionales e incluso para fomentar la creación de la Corte Penal Internacional, no existe discusión respecto a la importancia y centralización de su legado.

El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia conoció por primera vez el concepto de crimen de guerra en un conflicto armado interno aplicando prescripciones del derecho internacional humanitario en una corte internacional.

El Tribunal creó el espacio jurídico común en el que se logró articular el derecho del common law y el derecho continental (tarea que parecía imposible). De igual forma definió el procedimiento y reglas para aplicar los tratados internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que hasta el momento no habían tenido mecanismos para ser aplicados en la persecución de individuos responsables por graves violaciones de los derechos por ellos protegidos. El trabajo desarrollado por el Tribunal progresivamente demostró que podía apartarse del control del Consejo de Seguridad.

Así mismo, El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, extendió la persecución a actos nunca considerados en los debates del derecho internacional con anterioridad, como los relacionados con la violencia sexual contra las mujeres en los conflictos armados. Y por primera vez puso en el banquillo de los acusados a jefes de estado y altos miembros de las fuerzas armadas.

El Tribunal fue un laboratorio incomparable para comprender la multitud de facetas comprometidas en la experiencia y el anhelo por establecer un sistema de Derecho Internacional Penal.

El tribunal tuvo como efecto la reducción de la comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad, al considerar que parte de su mandato constitutivo era disuadir a los participantes del conflicto en la comisión de más crímenes. El número de sentencias de culpabilidad por año coincide con un decrecimiento en el porcentaje de violaciones de derechos humanos en los países de la región. El crecimiento de sentencias condenatorias en un año es seguido de un porcentaje significativo de disminución en las violaciones de derechos humanos⁸¹⁶. En este orden el tribunal

⁸¹⁶ KING, Kimi Lynn y James David Meernik. 2011. *Óp. Cit. Páginas*: 49

contribuyó a la consecución de la paz y a crear factores de estabilidad en especial que favorecieran a la justicia local.

El trabajo del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia demostró que todas las partes que actuaron en el conflicto cometieron crímenes contra la humanidad, este es uno de los aspectos que mejor refleja la imparcialidad y la justicia como una de las metas principales que acompañó y definió la labor desarrollada por El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. El Tribunal no intentó favorecer a ninguno de los grupos, ni tampoco crear balances artificiales entre ellos.

Existió la intención de mantener una jurisdicción compartida, la realidad del conflicto de incidir en la capacidad de las cortes locales para cumplir con su papel de procesar a los responsables por crímenes de guerra. La falta de interés político de los dirigentes de los países de la Ex-Yugoslavia, la ausencia de recursos para implementar la operación de la justicia local en estos asuntos y la falta de preparación de los profesionales de la justicia en estos temas, se unieron para hacer que la aspiración de una acción conjunta se desdibujara.

Como parte del proceso para completar la misión del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, la transferencia de casos a las jurisdicciones locales aumentó, según registros de la organización Human Rights Watch el promedio de casos procesados en Bosnia aumentó de 50 a 150, cabe anotar que estas cortes operaron con una configuración mixta entre jueces nacionales e internacionales más un equipo también mixto de funcionarios en la oficina de la fiscalía financiados por la comunidad internacional⁸¹⁷, transferencia que se dio paulatinamente durante los 24 años de funcionamiento del Tribunal.

En sentido contrario, los funcionarios judiciales locales y los diversos profesionales miembros de la sociedad civil que tuvieron contacto con El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia se vieron altamente beneficiados y consideraron que el trabajo del Tribunal fue positivo y de gran importancia para el desarrollo del sistema judicial de sus países. En adición consideraron que poseía un gran potencial

⁸¹⁷ SANJA, *Kutnjak y otros*, 2011. *Reclaiming Justice: The International Tribunal for the Former Yugoslavia and Local Courts*. Primera edición. Nueva York: Oxford University Press, página 168. Sin ISBN.

para que en forma sostenida desarrollara en largo tiempo un sistema de justicia fuerte y efectivo⁸¹⁸.

Hace parte del legado del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, la evidencia de los desafíos y en el caso específico de los crímenes ocurridos en los Balcanes, se trata de la transición hacia la justicia local que debería encargarse de juzgar a todos los mandos medios y reconstruir legitimidad en sus respectivos países.

Luego de este estudio analítico en los aspectos que a mi juicio considere de mayor relevancia, se puede establecer que el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia ha contribuido enormemente a la lucha contra la impunidad, especialmente desde el plano jurisprudencial, al haber desarrollado aspectos sin precedentes como los hechos relacionados a las violaciones sexuales hacia las mujeres, sentando el precedente fundamental para juzgar internacionalmente la violación como arma de guerra.

A continuación, se presenta de forma gráfica y sintética el trabajo realizado por el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia.

		Mandato	Duración del Mandato	Cesación de los hechos que originaron el mandato	Inicio del primer juicio	Universo de casos	Casos procesados y/o relaciones procesales	Tiempo promedio de los casos	Casos pendientes de resolución	% Casos presentados versus casos resueltos	% Casos posibles de procesamiento versus casos resueltos
1	Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia	Procesar individuos responsables de violaciones del derecho internacional humanitario ⁸¹⁹ y crímenes internacionales, por medio de esta acción crear en la región	24 años	1991 - 2001	1996	147	118	+ de 10,800 días de juicio	4 ⁸²⁰	80%	80%

⁸¹⁸ COMMISSION European, 2014. *Training war crime prosecutors*, Instrument for pre-accession assistance (IPA). En: European Commission [en línea] Disponible en: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/case-studies/2014/20140722_training_prosecutors_en.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁸¹⁹ SCHABAS, William A. 2006. *Op. Cit.*

⁸²⁰ TRIBUNAL Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. S.A., S.F. Transfer Cases. En: United Nations International Residual Mechanism of Criminal Tribunals [en línea]. Disponible en: <https://www.icty.org/en/cases/transfer-cases> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

CAPÍTULO IV

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA RUANDA

ANTECEDENTES

El conflicto ruandés tuvo raíces históricas, en el siglo XIX, cuando Ruanda era colonia alemana existieron grandes diferencias sociales entre tutsis y hutus, los tutsis ocuparon el más alto nivel, siendo miembros del gobierno, mientras los hutus el más bajo, situación que cambió en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial⁸²¹, cuando pasó a ser colonia belga, se agudizó la diferenciación entre hutus y tutsi, que se convirtió en un factor racial, porque se utilizaban facciones y contextura para hacer la diferencia, considerándose que *“los tutsis eran ‘más cercanos a los europeos’, y por tanto eran la etnia privilegiada. En 1933, el Gobierno belga empezó a emitir identificaciones que estipulaban la etnia de la persona, oficializando así la división entre un grupo y el otro”*⁸²².

La desigualdad en los beneficios otorgados entre cada una de las etnias originó las tensiones, los belgas entregaron a los tutsis los mejores empleos, quienes eran una minoría del 14% frente a los hutus, al considerarlos más parecidos a los europeos. En tanto que, los hutus que eran mayoría en Ruanda, fueron designados a tareas menos cotizadas⁸²³.

Durante la descolonización de Ruanda en los años 50, las tensiones entre hutus y tutsis aumentaron, convirtiéndose en conflictos étnicos, que tuvieron como resultado el asesinato de cientos de tutsis en 1959⁸²⁴.

⁸²¹ UNHCR – ACNUR. 2017. Genocidio de Ruanda: la historia de los hutus y los tutsis. En: *UNHCR – ACNUR* [en línea]. Disponible: <https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/genocidio-de-ruanda-la-historia-de-los-hutus-y-los-tutsis> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁸²² REDACCIÓN Internacional, 2018. Genocidio de Ruanda: la tragedia que dejó 800.000 muertos en 100 días. En: *El tiempo* [en línea]. Disponible en: <https://www.eltiempo.com/mundo/afrika/como-comenzo-el-genocidio-en-ruanda-203416> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁸²³ EFE, AFP y Reuters. 2014. Genocidio en Ruanda: ¿por qué y cómo sucedieron los hechos?. En: *France 24* [en línea]. Disponible en: <https://www.france24.com/es/20190406-genocidio-ruanda-25-anos-afrika> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁸²⁴ UNHCR – ACNUR. 2017. *Óp. Cit.*

Después de la independencia de Ruanda en 1962, luego de solicitar igualdad de derechos, los hutus se apoderaron el dominio político del país⁸²⁵, miles de tutsis pidieron refugio en países vecinos, en donde comenzaron a organizar y preparar la arremetida contra el gobierno ruandés y los hutus, el que tuvo como efecto el asesinato de muchos civiles en los años 80, dando como resultado nuevas oleadas de refugiados en Burundi, Uganda, Zaire y Tanzania⁸²⁶. En 1973, después de más de diez años, Juvénal Habyarimana miembro de la etnia hutu alcanzó la presidencia por medio de un golpe de estado⁸²⁷.

En 1972 en el territorio de Burundi se ejecutó la masacre en contra de miles de hutus, que tuvo como consecuencia la migración de un gran número de refugiados hutus hacia Ruanda, los tutsi habían emigrado hacia Uganda; país donde en 1988 fundan el Frente Patriótico de Ruanda, organización que fue liderada por los refugiados tutsi quienes pretendían reivindicar la situación de la etnia utilizando la violencia en contra de los hutus⁸²⁸, ejecutando en 1990 desde Uganda el mayor ataque contra Ruanda, tratando como traidores y cómplice a los tutsis.

Es hasta agosto de 1993, cuando Juvenal Habyarimana, líder ruandés y presidente del país desde 1973, que se llegó al acuerdo de paz con el Frente Patriótico de Ruanda, firmando los Acuerdos de Paz de Arusha en 1993, estableciendo un gobierno de transición conformado por tutsis y hutus⁸²⁹ y que no mitigó la ascendente tensión entre ambos, generando en los hutus radicales desagrado, que no estaban de acuerdo con los términos del acuerdo, en cuanto a la apertura del gobierno para los tutsis⁸³⁰.

Como resultado de los acuerdos *“se instauró un gobierno liderado por los hutus que buscaba invertir los roles heredados del periodo colonial: los tutsis pasarían a convertirse en la raza inferior, mientras que los hutus, al ser mayoría, serían la etnia*

⁸²⁵ EFE, AFP y Reuters. 2014. *Óp. Cit.*

⁸²⁶ UNHCR – ACNUR. 2017. *Óp. Cit.*

⁸²⁷ EFE, AFP y Reuters. 2014. *Óp. Cit.*

⁸²⁸ REDACCIÓN Internacional, 2018. *Óp. Cit.*

⁸²⁹ UNHCR – ACNUR. 2017. *Óp. Cit.*

⁸³⁰ REDACCIÓN Internacional, 2018. *Óp. Cit.*

superior, y buscarían establecerse como tal a través de la diferenciación y depreciación de los tutsis".⁸³¹

Ruanda vivió en 1994 la *"peor crisis alimentaria en los últimos 50 años, crisis que se extendió al ámbito económico"*⁸³² y se reflejó en la caída de más del 40 % de las exportaciones de café por las caídas del precio⁸³³.

Como afirma Natalia Castro *"En este contexto y con una población que crecía sin límites, la lucha por el suelo útil enfrento a las dos etnias: tutsis y hutus para desarrollar unos la ganadería y otros la agricultura. Si a esto le sumamos un intento de Estado fallido y el elemento de poder que los belgas concedieron a los tutsis, llegamos al 6 de abril de 1994 y al estallido del genocidio."*⁸³⁴

Entre abril y julio de 1994, fueron asesinadas en Ruanda más de 800.000 personas, masacre que no tenía precedentes en el continente africano y exterminó entre el veinte y cuarenta por ciento de su población, que para esa fecha contaba con más de 7 millones de habitantes divididas en tres grupos étnicos principales: siendo mayoría los hutus, y que representaban el ochenta y cinco por ciento de la población, seguidos por el catorce por ciento que eran tutsis, y el uno por ciento aproximadamente que era los Twa.⁸³⁵

Siendo el detonante del genocidio la muerte del presidente ruandés, Juvénal Habyarimana, junto al presidente Burundi la noche del 6 de abril de 1994⁸³⁶, en el momento que fue derribado el avión que se transportaban. Lo que provoca la toma del gobierno por parte de los hutus radicales, quienes convocaron al resto de insurrectos a empezar la masacre en contra de los tutsis, responsabilizándolos del ataque en contra del presidente.⁸³⁷

Los ataques fueron transmitidos por medio de la radio, con el fin de difundir el odio y justificar la masacre contra los tutsis, en donde hacían *"un llamado a los hutus para*

⁸³¹ REDACCIÓN Internacional, 2018. *Óp. Cit.*

⁸³² CASTRO, Natalia. 2014. Así se desarrolló el genocidio de Ruanda. En: *Cadena Ser* [en línea]. Disponible en: https://cadenaser.com/ser/2014/04/06/internacional/1396745119_850215.html [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁸³³ Ídem.

⁸³⁴ Ídem

⁸³⁵ REDACCIÓN Internacional, 2018. *Óp. Cit.*

⁸³⁶ EFE, AFP y Reuters. 2014. *Óp. Cit.*

⁸³⁷ Ídem

unirse al 'interahamwe' (los que atacan como uno solo), un grupo de hutus radicales que se unían para buscar a los tutsis, pedirles su identificación –que, como una herencia de la colonia belga, aún enunciaba el grupo étnico- y asesinarlos”⁸³⁸.

El genocidio duró 100 días, finalizando oficialmente el 18 de julio de 1994. Hubo resistencia a llamarlo genocidio por parte de la comunidad internacional, diez soldados belgas fueron asesinados por lo que Naciones Unidas y Bélgica optaron por retirar a sus tropas de Ruanda.⁸³⁹

El Frente Patriótico para Ruanda tomó el control de Kigali, la capital de Ruanda y después de la matanza se instituyó el gobierno encabezado por el presidente Pasteur Bizimungu, quien era hutu y como vicepresidente Paul Kagame, representante de los tutsis y líder del Frente Patriótico de Ruanda, y quien en el año 2000 asumió la presidencia del país, manteniéndose en el cargo hasta el momento⁸⁴⁰.

CRONOLOGÍA DEL GENOCIDIO:

- 1. El 6 de abril de 1994:** El avión en que viajaban el presidente de Burundi, Ciprian Ntayamira, y el de Ruanda, Juvenal Habyarimana fue alcanzado por dos misiles. Se inició la campaña de odio en contra de los tutsis por medio de la radio local, llamada '*La Radio de las Mil Colinas*' o '*Radio del Odio*', convirtiéndose en la herramienta oficial al difundir los llamados a eliminar a todos los miembros de la etnia tutsi, a los que calificaban de “cucarachas”⁸⁴¹. lo que provocó semanas de intensas masacres⁸⁴², se calcula que alrededor de un millón de personas fueron asesinadas, hecho conocido como el “*genocidio de Ruanda*”, se estima que fueron violadas unas 200,000 mujeres, que se ejecutaron 95,000 niños y dejaron huérfanos a otros 400,000.⁸⁴³
- 2. El 7 de abril:** Fueron asesinados por la guardia presidencial la primera ministra de Ruanda, Agathe Uwlingiyimana y diez soldados belgas que pertenecían a los cascos azules de las Naciones Unidas. Esto provocó actos de violencia y

⁸³⁸ EFE, AFP y Reuters. 2014. *Óp. Cit.*

⁸³⁹ Ídem

⁸⁴⁰ Ídem

⁸⁴¹ Ídem

⁸⁴² CASTRO, Natalia. 2014. *Óp. Cit.*

⁸⁴³ REDACCIÓN Internacional, 2018. *Óp. Cit.*

que Naciones Unidas decidiera retirar a los cascos azules⁸⁴⁴, el asesinato de la ministra Uwlingiyimana aumentó el enojo de los extremistas hutus, dando inicio a la campaña de odio que inducía a asesinar a los tutsis y a todos aquellos que los protegieran⁸⁴⁵.

Al retirarse los cascos azules del país, los radicales hutus incrementaron la aniquilación de tutsis.⁸⁴⁶

3. **El 9 de abril:** Se forma un nuevo gobierno, nombrando a Jean Kambanda como presidente e integrado con miembros de ambas etnias de tendencia moderada. Ese día, Bélgica y Francia evacuaron a todos sus ciudadanos del país⁸⁴⁷.

El mismo día se ejecutó en una iglesia católica, la masacre de Gikondo y que tuvo como resultado el asesinato de más de cien tutsis que se encontraban refugiados en ese lugar⁸⁴⁸.

4. **El 11 de abril:** La Cruz Roja Internacional comunicó el asesinato de decenas de miles de ruandeses, denunciando la indolencia de las Naciones Unidas⁸⁴⁹.
5. **El 14 de abril:** Ruanda fue abandonada por el contingente belga. Las Naciones Unidas, por intermedio de Kofi Annan, ordenó a los militares que aún se encontraban en el territorio que no intervinieran⁸⁵⁰.
6. **El 17 de abril:** Los asesinatos se expanden lejos de Kigali, la capital. Desaparecen o mueren cerca de 250,000 personas en un lapso de tres meses. Siendo el hecho más sanguinario la muerte de varios miles de tutsis en la iglesia de Kibuye⁸⁵¹.

⁸⁴⁴ UNHCR – ACNUR. 2017. *Óp. Cit.*

⁸⁴⁵ Ídem

⁸⁴⁶ CASTRO, Natalia. 2014. *Óp. Cit.*

⁸⁴⁷ Ídem

⁸⁴⁸ REDACCIÓN Internacional, 2018. *Óp. Cit.*

⁸⁴⁹ Ídem

⁸⁵⁰ CASTRO, Natalia. 2014. *Óp. Cit.*

⁸⁵¹ Ídem

7. El 18 de abril de 1994: Se ejecutó la Masacre de Kibuye en donde 12,000 tutsis perdieron la vida mientras buscaban protección en el estadio de Gatwaro⁸⁵².

8. El 21 de abril: Naciones Unidas decide retirar paulatinamente la Misión de Pacificación de Naciones Unidas, por medio del voto unánime del Consejo de Seguridad. De 2,539 soldados que contaba la Misión, se decidió dejar a 270. Ese mismo día la Cruz Roja Internacional emitió un comunicado en el que hizo pública la muerte de cientos de miles de personas⁸⁵³.

La tragedia se volvió más compleja por la postura de la comunidad internacional que no dio una respuesta a tiempo al problema y la falta de acuerdo de los partidos políticos ruandeses.⁸⁵⁴

9. Del 28 al 30 de abril: Países como Tanzania, Burundi y Zaire, hoy conocido como la República Democrática del Congo recibieron miles de refugiados ruandeses huyeron del país.⁸⁵⁵

El 80% de las masacres se habían perpetrado para **mayo de 1994**⁸⁵⁶.

10. El 4 de mayo: Boutros Ghali, como Secretario General de las Naciones Unidas, habló por primera vez de "genocidio", En tanto la Comunidad Internacional se encontraba petrificada y ningún otro líder político mientras que la Comunidad Internacional se mantuvo paralizada. Mientras que ningún otro político se aventuraba a utilizar el término⁸⁵⁷.

11. El 14 de mayo: La Cruz Roja empieza a difundir las primeras cifras más concretas de muerto y para ese día se calcularon 500,000 ruandeses asesinados⁸⁵⁸.

12. En Primeros días de junio: Los extranjeros residentes en Ruanda reciben un ultimátum por parte del gobierno, ordenándoles abandonar el país antes de

⁸⁵² CASTRO, Natalia. 2014. *Óp. Cit.*

⁸⁵³ Ídem

⁸⁵⁴ REDACCIÓN Internacional, 2018. *Óp. Cit.*

⁸⁵⁵ CASTRO, Natalia. 2014. *Óp. Cit.*

⁸⁵⁶ REDACCIÓN Internacional, 2018. *Óp. Cit.*

⁸⁵⁷ CASTRO, Natalia. 2014. *Óp. Cit.*

⁸⁵⁸ Ídem

tres días. Entretanto, se conformaba en el oeste del país el Ejército de Liberación de Ruanda (ALIR), como una milicia de los tutsis⁸⁵⁹.

13. El 22 de junio: Después de tanta barbarie se dio la reacción de la Comunidad Internacional, que se materializa por medio de la autorización del Consejo de Seguridad al gobierno francés para que actuara de forma temporal como responsable del orden y seguridad⁸⁶⁰, por medio de una misión humanitaria, nombrada como “Operación Turquesa”, que tenía como objeto salvar a cientos de vidas en el suroeste de Ruanda. Mientras que los asesinatos continuaron en otros lugares⁸⁶¹.

14. El 4 de julio: El control militar de Ruanda fue tomado por el Frente Patriótico Ruandés.⁸⁶²

15. Finales de julio: El Frente Patriótico Ruandés al conseguir el control de Kigali, formó el gobierno de unidad nacional, nombrando como presidente al hutu Pasteur Bizimungu y al representante de los tutsis, Paul Kagame, como vicepresidente⁸⁶³ y obligando a huir al gobierno hutu radical, que tuvo que exiliarse en Zaire, al lado de dos millones de hutus. Lo que da origen al campo de refugiados llamado la “Ciudad de los Muertos”, que es conocido como el campo de refugiados más grande de la historia⁸⁶⁴.

Con esto finaliza el genocidio ruandés, donde murieron entre 500,000 y 1,000,000 de personas; y que representó aproximadamente el 11% de la población en general y el 80% de los tutsis, las cifras oficiales nunca se han conocido.⁸⁶⁵

En el año 2000, se eligió por el partido ‘Frente Patriótico Ruandés’ como presidente de Ruanda a Kagame, quien desde entonces ha gobernado a la nación africana⁸⁶⁶. En 2001, se establecieron los tribunales conocidos como ‘Los Gacaca’, labor realizada por la Comisión de Unidad Nacional y Reconciliación de Ruanda, estos

⁸⁵⁹ CASTRO, Natalia. 2014. *Óp. Cit.*

⁸⁶⁰ Ídem

⁸⁶¹ UNHCR – ACNUR. 2017. *Óp. Cit.*

⁸⁶² Ídem.

⁸⁶³ CASTRO, Natalia. 2014. *Óp. Cit.*

⁸⁶⁴ Ídem

⁸⁶⁵ Ídem

⁸⁶⁶ EFE, AFP y Reuters. 2014. *Óp. Cit.*

tribunales fueron creado con el objetivo de juzgar a los presuntos responsables del genocidio, que estuvieron vigentes hasta el año 2012, teniendo como resultado el procesamiento de casi dos millones de personas. Tribunales que fueron criticados por su presunta falta de imparcialidad por parte de los organismos internacionales⁸⁶⁷.

Derivado de estas masacres que provocaron la muerte de casi un millón de ruandeses entre abril y mayo de 1994⁸⁶⁸, se crea el Tribunal Penal Internacional para Ruanda que nace por tres situaciones concretas, siendo estas:

- a) La petición del gobierno ruandés establecido después del triunfo del Frente Patriótico Ruandés⁸⁶⁹,
- b) La huida del gobierno hutu responsable del genocidio y
- c) La desavenencia a la intervención de la Comunidad Internacional en la persecución de los presuntos responsables de las atrocidades, al querer seguir el modelo del Tribunal Penal Internacional para Ex Yugoslavia⁸⁷⁰.

El conflicto étnico fue considerado un conflicto interno, con repercusiones internacionales con los países vecinos por la cantidad de refugiados que tuvieron que recibir, lo que fue considerado con una grave amenaza para la paz⁸⁷¹.

El establecimiento del Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue precedido por una comisión imparcial de expertos con el mandato del Consejo de Seguridad de examinar y analizar pruebas de violaciones graves del derecho internacional humanitario, incluidas pruebas de posibles actos de genocidio⁸⁷².

⁸⁶⁷ REDACCIÓN Internacional, 2018. *Óp. Cit.*

⁸⁶⁸ ABRISKETA, Joana. 2006. *Óp. Cit.*

⁸⁶⁹ Fue creado por los tutsis en julio de 1994 como un partido de coalición.

⁸⁷⁰ WEMBOU, Djena. 1997. Tribunal Penal Internacional para Ruanda. En: *Revista Internacional de la Cruz Roja* [en línea]. Disponible en: <https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdl82.htm> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁸⁷¹ ABRISKETA, Joana. 2005 – 2006. Tribunales Penales Internacionales ad hoc (para ex Yugoslavia y Ruanda). En: *Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo* [en línea]. Disponible en: <http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/219> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁸⁷² AKHAVAN, Payam. 1996. The International Criminal Tribunal for Rwanda: The Politics and Pragmatics of Punishment. *The American Journal of International Law* [en línea]. Reino Unido: Cambridge University Press, Vol. 90, No. 3 (Jul. 1996) Página: 502 [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] DOI: <https://doi.org/10.2307/2204076> Disponible en: <https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/abs/international-criminal-tribunal-for-rwanda-the-politics-and-pragmatics-of-punishment/232E716B97D13E2F5DE553D8589A0029>

En su primer informe provisional, la comisión concluyó que existían pruebas suficientes que evidenciaban que el genocidio en contra de los tutsis fue perpetrado por miembros de la etnia hutu de forma concertada, planificada, sistemática y metódica⁸⁷³.

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por la resolución 955 de 8 de noviembre de 1994, con el fin de conocer sobre las violaciones graves cometidas al derecho humanitario y de la convención contra el genocidio, contenidos en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y en el protocolo adicional II de 1977 cometidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994.

En la creación del Tribunal Penal Internacional para Ruanda se le “*vinculó como un órgano subsidiario del Consejo de Seguridad, creado con arreglo al artículo 29 de la Carta de las Naciones Unidas. Lo que le permitió funcionar de forma inmediata sin esperar la creación de una jurisdicción penal permanente cuyo ejercicio dependía ampliamente de las adhesiones o ratificaciones exigidas por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados*”⁸⁷⁴.

1. ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ FUE CREADO?

La creación del Tribunal fue por solicitud del gobierno de Ruanda, quien tomó la iniciativa como resultado del triunfo del Frente Patriótico Ruandés, sobre la base del derecho penal internacional⁸⁷⁵, y por las siguientes razones:

- a. Creía que el genocidio en Ruanda era un crimen contra la humanidad que debía ser perseguido por la comunidad internacional.
- b. Como deseo de evitar cualquier sospecha de su voluntad de organizar una justicia rápida y vengativa. En lugar de la justicia de un vencedor, la presencia internacional garantizaría una justicia ejemplar que sería vista como completamente imparcial y justa.

⁸⁷³ AKHAVAN, Payam. 1996. *Óp. Cit.*

⁸⁷⁴ NTAGANDA, Eugéne. 2005. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda en la encrucijada. *Nova África* [en línea]. España: Centre d'Estudis Africans, No. 16. Página: 89. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] ISSN-e 1136-0437. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5185682>

⁸⁷⁵ Ídem Página: 505

- c. El Gobierno de Ruanda creía que era imposible construir un estado de derecho y lograr una verdadera reconciliación nacional sin eliminar la cultura de impunidad que había caracterizado a la sociedad ruandesa. Haciendo referencia al representante enfatizó que aquellos a quienes se les enseñó que era aceptable matar siempre que la víctima fuera de un grupo étnico diferente o de un partido de oposición, no pueden llegar a la reconciliación nacional a menos que aprendan nuevos valores. Este objetivo solo se podía lograr si se establecía una justicia equitativa y si se aseguraba a los sobrevivientes que lo que sucedió nunca volvería a suceder.⁸⁷⁶

El Estatuto estableció en su considerando que se creaba *“para juzgar a los presuntos responsables de genocidio y otras violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Ruanda, así como los ciudadanos ruandeses presuntamente responsables por tales actos o violaciones cometidas en el territorio de Estados vecinos...”* plasmando la intención de llevar a los responsables ante el Tribunal para responder por sus acciones.

Por lo que se puede afirmar que surge para:

- a) Enjuiciar a los presuntos responsables del genocidio u otras infracciones graves al derecho internacional humanitario perpetrados en 1994 en el territorio de Ruanda;
- b) Establecer los hechos ocurridos para la individualización de sus perpetradores, enjuiciamiento y posterior condena.
- c) El propósito declarado fue “contribuir al proceso de reconciliación nacional en Ruanda y al mantenimiento de la paz en la región”, dotando al Consejo de Seguridad con jurisdicción sobre el crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad y violaciones del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y del Protocolo adicional II.⁸⁷⁷

⁸⁷⁶ AKHAVAN, Payam. 1996. *Óp. Cit.* Página 505

⁸⁷⁷ STEINITZ, Maya. 2007. The International Criminal Tribunal for Rwanda as Theater: The Social Negotiation of the Moral Authority of International Law. *Journal of International Law & Policy* [en línea]. Pennsylvania: University of Pennsylvania, Vol. V 1:1. Página: 1:3 [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] Sin ISSN. Disponible en: https://www.law.upenn.edu/journals/jil/jilp/articles/5-1_Steinitz_Maya.pdf

En el momento de la creación del Tribunal, el gobierno de Ruanda liderado por el Frente Patriótico Ruandés ya no estuvo de acuerdo con la forma de acción e implementación, argumentado:

El Tribunal para Ruanda fue objeto de duras críticas, provenientes principalmente del gobierno de Ruanda, dirigido por el Frente Patriótico Ruandés, quien lo había pedido y de países occidentales, liderados por los Estados Unidos. Se debe recordar que el gobierno ruandés cambió de criterio y luego de solicitar su creación objetó el establecimiento del Tribunal, especialmente por dos razones.

1. La sanción más grave que contemplaba el Estatuto de creación era la pena de prisión y no la pena de muerte, la cual estaba vigente en Ruanda y era la que el gobierno consideraba que se debía aplicar.
2. El gobierno de Ruanda no estaba de acuerdo con que se limitara la jurisdicción temporal del Tribunal del 1 de enero al 31 de diciembre de 1994, debido a que consideraba que previo a esa fecha se perpetraron crímenes igualmente graves y relacionados con los cometidos en 1994.
3. Al gobierno de Ruanda también le preocupaba la imparcialidad de los jueces que pertenecían a los países que habían estado implicados de alguna manera en la guerra, lo que la podría afectar.
4. Tampoco estaba de acuerdo con que las personas que fueran sentenciadas tuvieran que cumplir la condena de prisión en países diferentes a Ruanda.
5. Para el gobierno de Ruanda el Tribunal no respondía a las expectativas de los ruandeses, por lo que no podría operar efectivamente y alcanzar un objetivo útil alguno, desde su criterio el Tribunal únicamente serviría para sosegar la conciencia de la comunidad internacional, que no hizo nada para detener el genocidio, estado presente cuando este se ejecutó.⁸⁷⁸

2. PAPEL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN SU CREACIÓN

Como se mencionó en el apartado de antecedentes, la intervención de la Comunidad Internacional no fue inmediata, de hecho, la comunidad internacional con su pasividad

⁸⁷⁸ MAINA PETER, Chris. 1997. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda: sancionar a los asesinos. En: *Comité Internacional de la Cruz Roja* [en línea]. Disponible en: <https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdl75.htm> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

pudo haber tolerado que se ejecutaran las atrocidades y sólo decidió intervenir hasta el 22 de junio de 1994, después de que se habían consumado la mayoría de masacres, ese día el Consejo de Seguridad autorizó al gobierno francés⁸⁷⁹ para liderar la llamada la Operación Turquesa⁸⁸⁰.

El gobierno ruandés inició la solicitud de la creación del Tribunal ante el Consejo de Seguridad y este previo a tomar la decisión, envió una comisión imparcial de expertos para examinar y analizar pruebas de violaciones graves del derecho internacional humanitario, incluidas pruebas de posibles actos de genocidio⁸⁸¹.

La comisión presentó su informe ante la Asamblea General y, después de diferentes debates, en donde existieron dudas y cuestionamientos de los Estados sobre las atribuciones del Consejo de Seguridad y el fundamento de la competencia basada en el capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas y no del capítulo VI como exigían algunos⁸⁸², se crea el Tribunal Penal Internacional para Ruanda⁸⁸³.

Al aceptar la creación del Tribunal, la comunidad internacional por medio del Consejo de Seguridad contrajo la obligación de cumplir el derecho internacional humanitario y combatir la impunidad al perseguir penalmente a los responsables de las violaciones cometidas en Ruanda⁸⁸⁴.

El Consejo de Seguridad destacó *«que una cooperación internacional es necesaria para reforzar los tribunales y el aparato judicial ruandeses»* y decide *«que los estados aportarán su plena cooperación al TPIR y sus órganos, (...) incluida la obligación que*

⁸⁷⁹ MAINA PETER, Chris. 1997. *Óp. Cit.*

⁸⁸⁰ UNHCR – ACNUR. 2017. *Óp. Cit.*

⁸⁸¹ AKHAVAN, Payam. 1996. *Óp. Cit.* Página: 502

⁸⁸² *“Durante los debates de la Asamblea General, muchos representantes de África habían insistido en el hecho de que no se puede crear un órgano de tipo judicial sobre la base de una resolución de un órgano tan político como el Consejo de Seguridad, y el tratado era, pues, la vía más indicada. Sin embargo, el Consejo rechazó el método convencional en favor del enfoque institucional, por razones de celeridad y de conveniencia política. En efecto, era imperativo crear rápidamente esa jurisdicción para hacer cesar lo antes posible los genocidios y las tumbas modificaciones del derecho internacional humanitario. La aprobación de un tratado no solo supone convocar una larga y costosa conferencia diplomática, sino que nada indica que el tratado ultimado requerido reunido, en un lapso muy breve, el número de ratificaciones indispensables para su entrada en vigor”.*

WEMBOU, Djiena. 1997. *Óp. Cit.*

⁸⁸³ Ídem

⁸⁸⁴ Ídem

incumbe a los estados de dar curso a las solicitudes de asistencia o a las resoluciones que emanan de un tribunal de primera instancia»⁸⁸⁵.

3. ¿CÓMO SE ABORDÓ EL TEMA DE LA SOBERANÍA?

Al inicio el tema de la soberanía no fue un tema que provocara mayor problema porque Ruanda solicitó la creación del Tribunal, sin embargo, cuando cambió de opinión y se opuso a este, los Estados africanos por medio de la Unión Africana, propusieron que se utilizara la vía convencional y no la institucional para este, basados en el principio de la soberanía de los estados en materia de represión penal, tomando como precedente, el Acuerdo de Londres de 8 de agosto de 1945⁸⁸⁶. Es necesario precisar que desde el derecho penal internacional el tema de la soberanía se considera que existe un equilibrio entre una persecución penal internacional eficiente y la reflexión adecuada a los intereses de la soberanía estatal que se manifiesta en las partes más significativas del Estatuto desde el punto de vista político, puntualmente en las disposiciones sobre los delitos, la cooperación y la competencia judicial⁸⁸⁷.

4. TIPO DE GOBIERNO ¿DEMOCRACIA?

Es conocido que, al momento de crearse el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, existía en dicho país un gobierno de unidad nacional formado por representantes de ambas etnias, este gobierno fue producto de negociaciones, no de una elección libre del pueblo ruandés. Por lo tanto, al momento de la creación del Tribunal no existía democracia.

5. ¿ESTADO DE DERECHO?

La creación del Tribunal se debió precisamente a la ausencia de estado de derecho en Ruanda, como justificó el gobierno de Ruanda ante el Consejo de Seguridad de

⁸⁸⁵ NTAGANDA, Eugéne. 2005. *Óp. Cit.* Página: 89

⁸⁸⁶ AMENGUAL García-Loygorri, M. Patricia. 2017. *Las decisiones del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y los perfiles del genocidio* [en línea]. Tesis doctoral. Madrid: Universidad San Pablo. Página: 90. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] Disponible en: https://repositorioinstitucional.ceu.es/bitstream/10637/8968/1/Decisiones_MargaritaPAmengual_CEU_Tesis.pdf

⁸⁸⁷ HERNÁNDEZ GÓMEZ, Isabel. 2001. El Proceso de Creación de una Justicia Penal Internacional. *Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas*. España: Universidad de las Palmas de Gran Canaria, No. 6. Página: 166. ISSN: 1137-0912.

Naciones Unidas cuando lo solicitó, necesitaba construirlo y llegar a la reconciliación combatiendo la impunidad, por lo que por medio del Tribunal se pretendía una justicia equitativa y si se aseguraba a los sobrevivientes que lo que sucedió nunca volvería a suceder, evitando la justicia de un vencedor, con la presencia internacional estaban convencidos que garantizarían una justicia ejemplar que sería vista como completamente imparcial y justa.⁸⁸⁸

6. ¿ORIGEN BASADO EN CIERTAS SUPOSICIONES O CONDICIONES FÁCTICAS?

Al igual que los Tribunales que le preceden, su origen quedó plasmado en el Estatuto de creación en el cual se expresó la intención de conducir ante la justicia “a los *presuntos responsables de actos de genocidio o de otras graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Ruanda, así como a los ciudadanos ruandeses presuntamente responsables por tales actos o violaciones cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1994*”⁸⁸⁹. Por lo que su creación se deriva de condiciones fácticas y coyunturales de la época como quedó establecido.

7. DOCUMENTO CREADOR

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, el 8 de noviembre de 1994, con trece votos a favor y teniendo como oposición coincidentemente a Ruanda que lo había pedido y para quien se creaba y la abstención de China. La sede fue establecida en Arusha la capital de Tanzania y la Oficina del Fiscal en Kigali la capital de Ruanda⁸⁹⁰.

En esencia el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda era igual que el Tribunal para la Ex Yugoslavia, estableciendo en su competencia el juzgar el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, con la diferencia que los hechos acaecidos en Ruanda se ejecutaron exclusivamente en el marco de un conflicto

⁸⁸⁸ AKHAVAN, Payam. 1996. *Óp. Cit.* Página 505

⁸⁸⁹ CONSEJO de Seguridad de las Naciones Unidas. 1994. Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda. En: *Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos* [en línea]. Disponible en: <https://www.oacnudh.org.gt/estandares/docs/Instrumentos/Humanitario/Ruanda.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁸⁹⁰ ABRISKETA, Joana. 2005 – 2006. *Óp. Cit.*

interno, por lo que al hacer alusión a las infracciones graves a los Convenios de Ginebra de 1949, a las leyes y costumbres de la guerra, únicamente se remitió a las violaciones del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y al Protocolo Adicional II, referente a los conflictos armados internos⁸⁹¹.

8. MANDATO

El Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda⁸⁹² en su artículo 7 estableció lo concerniente a la jurisdicción territorial y temporal, plasmando su intención de combatir la impunidad al establecer que el rango de su aplicación se extendía no sólo a los delitos contra el derecho humanitario cometidos en el territorio de Ruanda con inclusión de su superficie terrestre y su espacio aéreo, si no que abarcaba también las graves violaciones cometidas en el territorio de Estados vecinos involucrados de alguna manera en el conflicto.

En general su mandato fue *«juzgar a las personas supuestamente responsables de actos de genocidio u otras graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidos sobre el territorio de Ruanda y los ciudadanos ruandeses presuntos responsables de tales actos o violaciones cometidos sobre el territorio ruandés o de estados vecinos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994»*⁸⁹³.

El Estatuto precisó *“que las diligencias así iniciadas «contribuirán al proceso de reconciliación nacional, así como al restablecimiento y al mantenimiento de la paz» y «a parar los crímenes» y «a reparar debidamente los efectos»*⁸⁹⁴”.

A. OBJETIVOS

El Tribunal se creó con el objetivo de combatir la impunidad por medio del procesamiento judicial de los presuntos responsables de la comisión de las violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario, crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio cometidos en territorio ruandés contra la etnia hutu.

⁸⁹¹ ABRISKETA, Joana. 2005 – 2006. *Óp. Cit.*

⁸⁹² Tras un conflicto de grandes proporciones se debilita el sistema de justicia existiendo además un clima de incertidumbre política por lo que se busca resguardar el proceso de posibles vicios al monopolizar la administración de justicia en un intento de resguardar su transparencia.

⁸⁹³ NTAGANDA, EUGÉNE. 2005. *Óp. Cit.* Página: 89

⁸⁹⁴ Ídem

B. ALCANCES DEL MANDATO

El alcance del mandato quedó plasmado en el artículo 1 del mandato, en donde se estableció que el Tribunal estaba destinado a juzgar y sentenciar a los responsables ruandeses de los graves delitos ejecutados contra los hutus, lo importante del mandato es que no se limitó únicamente al territorio de Ruanda, sino que se decidió juzgar a los responsables ruandeses que las hubiesen cometido en territorio de Estados vecinos.

C. COMPETENCIA

La competencia del Tribunal quedó delimitada en el artículo 1 del Estatuto, en el cual se determinó:

- a. Se aplicaría a los hechos ejecutados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994.
- b. En el territorio ruandés y de los Estados vecinos.⁸⁹⁵

En el artículo 8 del Estatuto también estableció competencias concurrentes, lo que significaba que las jurisdicciones nacionales eran competentes simultáneamente para juzgar hechos ocurridos en la misma temporalidad y territorialidad establecida en el artículo 1 del Estatuto, dándole prioridad al Tribunal Penal Internacional para Ruanda sobre las jurisdicciones nacionales. Quien en cualquier momento del procedimiento podía solicitar el traslado del caso a su jurisdicción desde la jurisdicción nacional.

D. FORTALEZAS

Las fortalezas del Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron:

- a. Estuvo apoyado por la Organización de la Unión Africana y de sus Estados miembros⁸⁹⁶.
- b. Ofrecía las garantías de:
 - i. Independencia reflejada en el método de elección de los jueces del Tribunal a cargo de la Asamblea General, que elegía sobre un listado limitado, seleccionado por el Consejo de Seguridad. Lo

⁸⁹⁵ ABRISKETA, Joana. 2005 – 2006. *Óp. Cit.*

⁸⁹⁶ WEMBOU, Djena. 1997. *Óp. Cit.*

que fue calificado como el reflejo de universalización de la acción emprendida por la ONU⁸⁹⁷.

- ii. Competencia: Se determinó que la competencia *ratione personae* se aplicaba a todos los criminales de guerra y era prioritaria al concurrir con la de las jurisdicciones nacionales⁸⁹⁸. Con relación a la competencia *ratione temporis* se consideró que era amplia al no estar únicamente vinculada a hechos como los sucedidos el 6 de abril de 1994, sino que se conocerían las atrocidades cometidas entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994.⁸⁹⁹

Dentro de la competencia *ratione loci* se facultó al Tribunal a juzgar las violaciones cometidas tanto en el territorio ruandés como en el territorio de los Estados vecinos⁹⁰⁰.

- c. La Organización de la Unión Africana examinó el tema de la cooperación entre los Estados africanos por las garantías ofrecidas por el Tribunal, lo que hizo que lo apoyara política y moralmente⁹⁰¹.

E. REGLAS DE ADMISIBILIDAD

Aunque las reglas de admisibilidad no fueron denominadas como tal en el Estatuto, el Tribunal tenía la competencia y jurisdicción sobre los casos que llenaran los siguientes requisitos:

- a. *Ratione Personae*, delimitada en el artículo 5 del Estatuto, fijando la competencia sobre ciudadanos ruandeses.
- b. *Ratione Materiae*: determinada en el preámbulo del Estatuto en el cual se decidió que se juzgara a los presuntos responsables de actos de genocidio y de otras graves violaciones del derecho internacional humanitario.

⁸⁹⁷ WEMBOU, Djena. 1997. *Óp. Cit.*

⁸⁹⁸ *Ídem*

⁸⁹⁹ *Ídem*

⁹⁰⁰ *Ídem*

⁹⁰¹ *Ídem*

- c. *Ratione Temporis*: establecida en el artículo 7 del Estatuto en el que se consideró conocer los hechos ocurridos entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994.⁹⁰²
- d. *Ratione Loci*: También regulada en el artículo 7 del Estatuto en donde se facultó al Tribunal a juzgar las violaciones cometidas tanto en el territorio ruandés como en el territorio de los Estados vecinos⁹⁰³.

F. TIEMPO DETERMINADO

En cuanto al tiempo de funcionamiento del Tribunal, este no se delimitó en el Estatuto, por lo que quedó a consideración de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad el tiempo que este operaría.

El Tribunal funcionó de 1995 al 31 de diciembre de 2015, desarrollando su trabajo durante 20 años⁹⁰⁴.

G. DISTRIBUCIÓN DEL PODER.

Definitivamente en los tribunales ad hoc se evidencia la evolución del Derecho Internacional Público y el papel de las Naciones Unidas, a diferencia de Núremberg y Tokio, sobre los tribunales ad hoc no existen naciones aliadas interviniendo en su creación y control, esta vez la intervención de la comunidad internacional por medio de las Naciones Unidas cambia las reglas de poder, dejando el control del tribunal sobre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de Naciones Unidas.

El control de Naciones Unidas sobre el tribunal quedó consignado en el preámbulo⁹⁰⁵ del Estatuto, así como los artículos 30 y 32⁹⁰⁶ de este.

⁹⁰² WEMBOU, Djiena. 1997. *Óp. Cit.*

⁹⁰³ Ídem

⁹⁰⁴ UNITED Nations, International Residual Mechanism for Criminal Tribunals. S.F. *The ICTR in Brief*. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]. Disponible en: <https://unictr.irmct.org/en/tribunal>

⁹⁰⁵ “Creado por el Consejo de Seguridad en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas...” CONSEJO de Seguridad de las Naciones Unidas. 1994. *Óp. Cit.*

⁹⁰⁶ “Artículo 30 Gastos del Tribunal Internacional para Ruanda Los gastos del Tribunal Internacional para Ruanda son repercutidos sobre el presupuesto ordinario de la Organización de las Naciones Unidas de acuerdo con el Artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 32 Informe anual El Presidente del Tribunal Internacional para Ruanda debe presentar cada año un informe del Tribunal Internacional para Ruanda al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General”. Ídem.

9. ¿SURGIÓ COMO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES?

A. ¿HABÍA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL?

Para ese momento el término responsabilidad internacional ya se encontraba acuñado y la creación del Tribunal se debió precisamente por las graves atrocidades que se habían cometido en territorio ruandés que motivaron la intervención de las Naciones Unidas para su creación, quien a su vez vinculó al Tribunal como un “*órgano subsidiario del Consejo de Seguridad, creado con arreglo al artículo 29 de la Carta de las Naciones Unidas*”⁹⁰⁷, teniendo que llenar los requisitos exigidos por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Si bien, el objetivo del Tribunal no fue juzgar la responsabilidad internacional del Estado, sino la responsabilidad individual, el hecho que se delimitara su competencia en conocer sobre las violaciones graves cometidas al derecho humanitario y de la Convención contra el genocidio, contenidos en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y en el protocolo adicional II de 1977 cometidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994, refleja que fue creado dentro del marco de responsabilidad internacional que Ruanda tenía frente a dichos instrumentos.

B. OBLIGACIONES INTERNACIONALES

Al igual que el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia las obligaciones internacionales adquiridas por Ruanda provenían de la Carta de Naciones Unidas para la creación del tribunal, y las derivadas de los Convenios de Ginebra y lo regulado por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

C. ¿ABORDA HECHOS ILÍCITOS INTERNACIONALES?

El Tribunal abordó hechos ilícitos internacionales, puesto que existía conocimiento de los hechos ocurridos en el país medio de informes que evidenciaban los comportamientos atribuibles al Estado y que constituían una violación a las obligaciones internacionales.

⁹⁰⁷ NTAGANDA, Eugéne. 2005. *Óp. Cit.*

10. COOPERACIÓN DE LOS ESTADOS.

La Cooperación de los Estados fue regulada en el artículo 28 del Estatuto, en este se obliga a los Estados a colaborar con el Tribunal en la búsqueda y enjuiciamiento de los acusados, respondiendo sin demora a la demanda de asistencia y ejecución de órdenes emanadas por la Cámara de Primera Instancia. Delimitando la cooperación a aspectos como:

- a. *“La identificación y la búsqueda de personas;*
- b. *La reunión de testimonios y la obtención de pruebas;*
- c. *La expedición de documentos;*
- d. *El arresto o la detención de personas;*
- e. *El traslado o la convocatoria del acusado ante el Tribunal Internacional para Ruanda”⁹⁰⁸.*

Como afirma Eugene Ntaganda, *“Al principio, numerosos países, como Kenia, la República Democrática del Congo (RDC) y Congo Brazzaville, fueron reticentes a colaborar con el TPIR en la detención de los sospechosos que se encontraban en su territorio”⁹⁰⁹*. Se logró que los Estados vecinos cooperaran debido a la presión de la comunidad internacional, especialmente la de Estados Unidos⁹¹⁰, cooperaran.

Sin embargo, esta cooperación no se logró con las cortes internas, ya que el beneficio ofrecido por Estados Unidos no se extendió para ellas, debilitándose la capacidad del sistema judicial para recaudar pruebas y llevar a cabo el juzgamiento de múltiples responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad⁹¹¹.

11. INDEPENDENCIA

En cuanto a la independencia del Tribunal, el análisis identifica los aspectos en los que el Tribunal Penal poseía autonomía, como es respecto de la definición de su funcionamiento e interpretación de la ley. En este ámbito es donde se puede evaluar

⁹⁰⁸ CONSEJO de Seguridad de las Naciones Unidas. 1994. *Óp. Cit.*

⁹⁰⁹ NTAGANDA, Eugéne. 2005. *Óp. Cit.* Página: 94

⁹¹⁰ Estados Unidos ofreció recompensa a cambio de información fiable, incentivo que funcionó y un progreso considerable en la política de asistencia judicial.

⁹¹¹ NTAGANDA, Eugéne. 2005. *Óp. Cit.* Página: 94

en mejor forma su legado, debido al grado de independencia y discrecionalidad de los jueces para definir temas coyunturales de la justicia penal internacional.

Esa independencia se garantizó en su Estatuto, y se reflejaba principalmente en la forma de elegir a los jueces, que era por la Asamblea General, sobre una base limitada de candidatos seleccionados por el Consejo de Seguridad, para Wembou, eso reflejaba la voluntad de universalización de la acción emprendida por las Naciones Unidas⁹¹².

12. SELECCIÓN DE ACTORES

Desde la creación del Tribunal estaba muy claro que se dirigía a enjuiciar a los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario, aunque fue durante el desarrollo del trabajo del Tribunal que se clasificó a los responsables, decidiéndose investigar los crímenes más graves y trasladando los delitos más leves a las cortes nacionales.

El trabajo del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia debía cumplir su mandato en la Ex-Yugoslavia y perfeccionamiento de las relaciones con los diferentes actores que interactuaban en el conflicto, con el compromiso de desarrollar un sistema internacional penal para juzgar y castigar a los posibles autores de las graves infracciones al derecho internacional humanitario y ello, bajo los parámetros de debido proceso y garantías penales, como fundamento de la legitimidad de su acción, a diferencia de la criticada justicia de los victoriosos. Su trabajo debía ser ejemplo de una justicia debida y respeto del *rule of law*.

Los actores involucrados fueron, los acusados, jueces, el fiscal y los miembros de su equipo de trabajo, el personal de la Secretaría, los defensores, el Consejo de Seguridad y los funcionarios de Estado cuando se requería la cooperación de estos.

13. NORMATIVA RELEVANTE Y MARCO PROCEDIMENTAL

Entre la normativa relevante se encuentra el Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda que como ya se explicado fue creado por el Consejo de Seguridad con fundamento del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, se le confirió la

⁹¹² WEMBOU, Djiena. 1997. *Óp. Cit.*

facultad de *“juzgar a los presuntos responsables de actos de genocidio o de otras graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Ruanda, así como a los ciudadanos ruandeses presuntamente responsables por tales actos o violaciones cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994”*⁹¹³.

El Estatuto contó con 32 artículos, lo cuales contemplan: Del artículo 1 al 4, las competencias, los delitos que conocerá, siendo estos: genocidio, Crímenes contra la humanidad, Violaciones del artículo 3 común a las Convenciones de Ginebra y al Protocolo adicional II.

A diferencia del Estatuto de los Tribunales Militares Internacionales de Núremberg y Tokio y gracias al desarrollo del derecho internacional penal de los artículos 5 a 8, se establece claramente la competencia *ratione personae*, la responsabilidad penal individual, la competencia *ratione loci* y *ratione temporis*, se contemplan las competencias concurrentes.

El artículo 9 desarrolla el principio de legalidad, por medio del *non bis in idem*.

De los artículos 10 al 16 se regula: la Organización del Tribunal, la composición de las Cámaras, la cualificación y elección de los jueces, la constitución de la Oficina y de las Cámaras, la necesidad del reglamento del Tribunal, la figura del Procurador (fiscal) y el establecimiento de la Secretaría.

A partir del artículo 17 hasta el artículo 27 se regulan las cuestiones relacionadas con el proceso, partiendo con el informe y establecimiento del acta de acusación, incluyendo cuestiones como: el examen del Acta de acusación, la apertura y conducción del proceso, los derechos del acusado, al igual que el Tribunal para la Ex Yugoslavia se incluye la protección de las víctimas y de los testigos, la forma de la sentencia, penas, medios de impugnación, ejecución de las penas, se regula el indulto y conmutación de pena y la cooperación y ayuda judicial mutua.

El artículo 29, establece los privilegios e inmunidades del Tribunal, el artículo 30 los gastos del tribunal, el artículo 31 los idiomas de trabajo y el 32 la obligación del

⁹¹³ CONSEJO de Seguridad de las Naciones Unidas. 1994. *Óp. Cit.*

Tribunal de rendir un informe anual al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de Naciones Unidas.

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda oficialmente inició operaciones en La Haya el 27 de junio de 1995, adoptando ese día sus reglas de procedimiento, estas se organizaron en 9 capítulos con un total de 126 artículos.

El capítulo 1 contenía las disposiciones generales reguladas del artículo 1 al artículo 7 ter. Este capítulo establece como entrada en vigor de estas reglas el 29 de junio de 1995⁹¹⁴, reconoce como idioma oficial de trabajo del tribunal el inglés y el francés; para el acusado o cualquier otra persona que comparezca al tribunal su propio idioma⁹¹⁵. También determina que en caso se violaran las reglas de procedimiento la denuncia de este hecho debía ser presentada de manera inmediata.⁹¹⁶

El capítulo 2 se encargaba de establecer las disposiciones sobre la primacía del tribunal en los artículos comprendidos del 5 al 13, enfocándose en el conocimiento del fiscal de un delito dentro de la jurisdicción del Tribunal que había sido o era objeto de investigaciones o procedimientos penales iniciados en los tribunales de cualquier Estado, podría solicitar al Estado que le transmitiera toda la información pertinente.

El capítulo 3 establecía la organización del tribunal, dividido en 6 secciones contenidas del artículo 14 al 38.

- a. La sección primera del capítulo 3 la conformaban los artículos 14 al 17, que se refería a los jueces y la facultad de no juzgar por los mismos hechos a las mismas personas.
- b. La segunda sección la conformaban los artículos 18 al 22. Relacionada con la presidencia de las Salas, las funciones del presidente y vicepresidente.
- c. La tercera sección se componía de los artículos 23 al 26, relacionados con el funcionamiento del tribunal.
- d. La cuarta sección de los artículos 27 al 29, dirigida a la Organización de las salas

⁹¹⁴ Artículo 1

⁹¹⁵ Artículo 3

⁹¹⁶ Artículo 5

- e. La quinta sección integrada por los artículos 30 al 36, referida al Registro, el Registrador y sus funciones.
- f. La sexta sección por los artículos 37 y 38 I, relativa a Fiscalía, el Fiscal y sus funciones.

El Capítulo 4 se dividía en 2 secciones y regulaba las investigaciones y derechos de los sospechosos del artículo 39 al 46.

- a. La sección primera regulaba las investigaciones del artículo 39 al 43. En donde desarrollaba lo atinente las investigaciones, dirección de las investigaciones, medidas provisionales, traslado y detención de provisional de sospechosos, derechos de los sospechosos.
- b. La segunda sección regulaba lo relativo a la función del abogado del artículo 44 al 46. Relacionada al Consejo de los Abogados defensores, requisitos para su nombramiento, asignación.

El capítulo 5 se conforma de 6 secciones compuesta por del artículo 47 al 65 bis.

- a. La primera sección se encargaba de dar las reglas que se aplicaban a las acusaciones del artículo 47 al 53 bis.
- b. La sección segunda se componía por los artículos 54 al 65 bis y establecía las reglas para los pedidos de órdenes de detención.

La sección tercera se encargaba de regular lo relacionado a la evidencia esto del artículo 66 al 70. Tanto la defensa como la fiscalía debían revelar el nombre de sus testigos, tendrían la oportunidad de inspeccionar libros, documentos que la otra parte tuviera la intención de utilizar en el juicio.⁹¹⁷

Las medidas de protección a víctimas y testigos debían ser tomados por la Sala a solicitud de cualquier de las partes.

En la investigación se debía producir prueba tanto para demostrar la culpabilidad del acusado como prueba para poder atenuar su eventual responsabilidad. Los

⁹¹⁷ Artículo 67

documentos internos del tribunal, información confidencial no estaban sujetos a divulgación⁹¹⁸

La cuarta sección se encargó de regular las declaraciones en los artículos 71 y 71 bis. Los testigos eran escuchados por un Juez designado para el efecto con la finalidad de recibir la declaración de un testigo por escrito. Esto debido a que la presentación del testigo ante la sala podía poner en riesgo su integridad personal o con la finalidad de preservar su testimonio para el futuro.

La quinta sección reguló las mociones preliminares en el artículo 72. Está sección establecía la facultad que tenía la Defensa de impugnar sobre la competencia, defectos en la acusación, separación o unión de cargos presentados por la Fiscalía a más tardar 30 días después de haberse hecho la divulgación por la fiscalía.⁹¹⁹

El sexto capítulo se encargaba de regular el juicio, dividido en 4 secciones. La Sección primera del artículo 73 al 81, que contenía las disposiciones generales, en este caso la Sala de Primera Instancia celebraba audiencias previas al juicio para informar sobre la situación del proceso a las diferentes partes procesales, la fiscalía y la defensa respetivamente.⁹²⁰

Esta debía tomar las medidas necesarias para la protección de las víctimas y los testigos, en relación a su identidad y protección, además sobre la necesidad de realizar una evaluación médica del acusado.⁹²¹ También le correspondían el control de los procedimientos, del que podían expulsar personas o al acusado del procedimiento. Las sesiones eran públicas salvo que la Sala decidiera que el procedimiento debía llevarse a puerta cerrada por orden público, seguridad o los intereses de la justicia.⁹²²

Los procedimientos eran documentados por el secretario del tribunal, la divulgación de la totalidad o parte de esto era ordenado por la Sala. La conservación de las pruebas era responsabilidad del secretario.⁹²³

⁹¹⁸ Artículo 66,68,69.70

⁹¹⁹ Artículo 72

⁹²⁰ Artículo 73 bis, 73 ter

⁹²¹ Artículo 74 bis,75

⁹²² Artículo 78, 79

⁹²³ Artículo 81

La sección segunda del artículo 82 al 88, regulaba la prueba. La presentación del caso se hacía en juicio, se podía presentar una acusación para varios sospechosos, sin embargo, podían juzgarse de manera separada si existía algún conflicto de intereses. En el caso que un acusado se negara a comparecer ante una Sala esta podía decidir que se continuara el juicio en su ausencia. Durante las comparecencias al tribunal al acusado le eran retiradas las esposas o cualquier instrumento de restricción.⁹²⁴

La deliberación de la Sala era de manera privada, se consideraba culpable al acusado si así lo considerase la mayoría de jueces que componían la sala votando por separado cada cargo. La Sala de Primera Instancia declaraba al acusado culpable de uno o varios de los cargos contenidos en la acusación, imponía una sentencia con respecto a cada declaración de culpabilidad e indicaría si tales penas se cumplirían consecutivamente o de forma simultánea, a menos que decidiera ejercer su facultad de imponer una sola condena para el acusado, que reflejara en su conjunto la conducta delictiva.⁹²⁵

El juicio iniciaba con las declaraciones de apertura del Fiscal, seguidas de las de la Defensa, sin embargo; podía reservarse el derecho de hacerla luego de que el Fiscal hubiese presentado las pruebas y fuera el turno de la defensa para hacerlo. El orden para realizar la presentación de las pruebas por las partes era: 1) la Fiscalía; 2) la defensa ambos con oportunidad de refutación o dúplica.⁹²⁶

El juicio finalizaba con la presentación de un argumento final por parte de la Defensa y la Fiscalía con oportunidad de réplica y dúplica. La sentencia debía dictarse en público, en una audiencia notificada para el efecto a las partes, por la mayoría de los jueces que componían la sala con la posibilidad de anexar opiniones concurrentes o disidentes. Si la sala encontraba que había existido toma ilegal de bienes hacía una relación de esto en la sentencia.⁹²⁷

⁹²⁴ Artículo 82, 82 bis, 83

⁹²⁵ Artículo 87

⁹²⁶ Artículo 84, 85

⁹²⁷ Artículo 87, 88

La sección tercera comprendía del artículo 89 al 98, en ella se regulaban las reglas de evidencia, estas era las reglas por las cuales se regirían las Salas del Tribunal.⁹²⁸ Las salas podían recibir las declaraciones de víctimas, testigos mayores y menores edad, testigos expertos, testigos detenidos y víctimas de agresión sexual. Los testigos eran advertidos de las consecuencias de dar falso testimonio. En circunstancias excepcionales podían recibirse testimonios de manera escrita, siempre que se cumplieran con los presupuestos de carácter acumulativo, antecedentes históricos, políticos o militares, análisis general o estadístico de la composición étnica de la población en los lugares a que se refería la acusación, el efecto de los crímenes en las víctimas, cuestiones de carácter del acusado, factores determinantes para dictar una sentencia.⁹²⁹

La confesión del acusado hecha durante el interrogatorio del fiscal se tomaba como válida siempre que se considerara que hubiese sido libre y voluntaria, salvo que se demostrara lo contrario.⁹³⁰ Las pruebas podían ser excluidas del proceso por los medios en los que estas se hubiesen obtenido y que pudieran resultar perjudiciales para los fines del proceso.⁹³¹

La sala de primera instancia podía considerar que las pruebas eran insuficientes por lo que podían dictar una sentencia de absolución siete días después del cierre del caso por parte del fiscal, con relación a los cargos en los que considerara que no era suficiente la evidencia presentada.

La sección cuarta se refería al procedimiento de sentencia, regulados del artículo 99 al 106. Al momento de dictar sentencia el tribunal debía decidir si el acusado era culpable o absuelto, en caso de declarare absuelto debía ser puesto en libertad de manera inmediata, salvo que el Fiscal manifestara su intención de presentar una apelación en cuyo caso el acusado se debía esperar la resolución definitiva para ello.⁹³²

⁹²⁸ Artículo 89

⁹²⁹ Artículo 90, 91

⁹³⁰ Artículo 92

⁹³¹ Artículo 95

⁹³² Artículo 99

La sentencia en el caso de declaración de culpabilidad se realizaba en una audiencia pública y en presencia del condenado, con la información proporcionada por el Fiscal y la Defensa la sala decidía la sanción a imponer. Las sanciones que se imponían al acusado deberían considerar las circunstancias agravantes, la práctica sobre la imposición de penas de prisión en Ruanda, el tiempo que había pasado el acusado privado de libertad. El Tribunal podía imponer una sanción que consistía en la restitución de los bienes o ingresos a sus legítimos propietarios, incluso aquellos que estaban en poder terceras personas de buena fe.⁹³³

La sanción impuesta al acusado debía comenzar a cumplirse a partir del día en que se pronunciaba, sin embargo, si se apelaba el cumplimiento de la sentencia, esta se suspendía y se reanudaba hasta que se notificara la decisión sobre la Apelación. Si el acusado hubiera sido puesto en libertad y no se presentará cuando se pronunciaba la sentencia, la sala debía emitir una orden de detención.⁹³⁴

La pena privativa de libertad debía cumplirse en Ruanda o en cualquier Estado escogido por el tribunal que aceptara a los condenados, su cumplimiento era supervisado por el Tribunal o un órgano nombrado para ello.⁹³⁵

El tribunal podía determinar la compensación a las víctimas por los daños ocasionados por el delito cometido por el acusado hallado culpable de cometer el delito, la sentencia era el título ejecutivo para reclamar los pagos por los daños ocasionados.⁹³⁶

El Capítulo 7 regulaba el procedimiento de apelación del artículo 107 al 119. En este capítulo se indicaba que las disposiciones que regulaban los procedimientos para las Salas de Primera Instancia eran las mismas para las Salas de Apelación.⁹³⁷

Las solicitudes de apelaciones debían realizarse dentro de no más de treinta días a partir de que se pronunciaba la sentencia, identificando los motivos y resolución que se apelaban. La Sala de Apelaciones a través de su presidente podía nombrar a uno

⁹³³ Artículo 100, 101, 105

⁹³⁴ Artículo 102

⁹³⁵ Artículo 103, 104

⁹³⁶ Artículo 106

⁹³⁷ Artículo 107

de sus miembros para que actuara como Juez Pre apelación que controlaba el procedimiento y se asegurara que no se retrase.⁹³⁸

El demandado por medio del recurso de apelación presentaba un escrito de respuesta dentro del plazo de 40 días, después el Apelante podía presentar un escrito de respuesta en el plazo de 15 días siguientes a la presentación del escrito del demandado. Vencidos estos plazos se fijaba un día y hora para la audiencia a las partes⁹³⁹

El expediente de Apelación debía ponerse a disposición del apelante y el demandado, indicando la lista de documentos que constituían el expediente en apelación. El Apelante debía presentar su escrito en un plazo de 65 días a partir de la notificación de apelación si se trataba solo de la sentencia, el plazo para presentarlo era de 30 días después.⁹⁴⁰

La Sala de Apelación decidía si aceptaba las pruebas adicionales, en caso que lo hiciera debían presentarse ante la otra parte y el secretario dentro de los 30 días después de la presentación del escrito de contestación. La Sala determinaba si las pruebas podían haber dado una solución diferente, si eran pertinentes para el juicio y si eran un factor decisivo para tomar una decisión en el caso.⁹⁴¹

El capítulo 8 establecía las reglas a seguir en el caso de actos de revisión regulado en los artículos del 120 al 123. La solicitud de revisión la realizaba dentro del plazo de un año de descubierto un nuevo hecho no conocido durante el trámite del proceso ante la Sala que hubiese dictado la sentencia. Las respuestas al escrito de revisión debían presentarse dentro de los 40 días siguientes. La Sala podía resolver si el hecho descubierto podía haber cambiado el sentido de la sentencia y en caso afirmativo pronunciaba una nueva sentencia luego de escuchar a las partes.

La resolución de una Sala en un proceso de revisión podía ser apelado. En el caso de una sentencia que se encontrase en apelación al momento de solicitarse la revisión,

⁹³⁸ Artículo 107 bis y 108

⁹³⁹ Artículo 112, 113 y 114

⁹⁴⁰ Artículo 109-111

⁹⁴¹ Artículo 115

esta debía devolverse a la Sala que emitió la sentencia para que pudiera pronunciarse sobre la solicitud de revisión.

El capítulo 9 establecía en sus artículos 124 al 126 las reglas a aplicar en el caso de indulto y conmutación de la sentencia. Si una persona condenada por el Estado a prisión y de conformidad con la legislación del Estado donde se encontraba cumpliendo su condena era elegible para que se le otorgara indulto o conmutación de la pena, este Estado debía informar al Tribunal. El indulto o conmutación de la pena era concedido por el presidente del tribunal, notificando a los miembros de las Salas de Sentencia y al Gobierno de Ruanda. Para otorgar el indulto o la conmutación el presidente tendría en cuenta, entre otras cosas, la gravedad del delito o los crímenes por las que el recluso fue condenado, el tratamiento de los reclusos situados de manera similar, la demostración de rehabilitación del recluso, así como cualquier cooperación sustancial del preso con el Fiscal.

14. LEGITIMIDAD:

La legitimidad y legalidad del Tribunal se reflejó en dos vías, la primera por medio del artículo 9 del Estatuto en que se garantizaba el principio non bis in ídem, para que no existiera doble juzgamiento de los crímenes.

La segunda vía es sobre la legitimidad o legalidad del Tribunal para funcionar, la cual como se ha analizado desde el inicio no fue cuestionada por el gobierno ruandés quien lo solicitó, que luego cambió de idea y se opuso sin éxito a su creación, por las razones ya expuestas.

A nivel internacional la legalidad del Tribunal no fue cuestionada.

15. JURISDICCIÓN

Las graves violaciones al derecho humanitario ocurridos en Ruanda trascendieron las fronteras del país teniendo el conflicto consecuencias más allá del su territorio, el Estatuto tomó esa circunstancia en cuenta para no permitir que los responsables evadieran la justicia por lo que extendió la jurisdicción territorial del Tribunal, ampliando los alcances del aparato de justicia para que quienes cometieron graves violaciones al derecho humanitario no escaparan de los alcances jurisdiccionales.

La jurisdicción fue delimitada en el artículo 5 del Estatuto de creación, esta fue determinada como personal. El artículo 8 reguló lo concerniente a la jurisdicción concurrente estableciendo que el Tribunal tenía primacía respecto a los tribunales nacionales de los Estados miembros quienes estaban facultados a presentar una solicitud de inhibitoria de su jurisdicción.

A. ¿QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE DE UN CASO?

En el caso se incluía a los presuntos responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario, su defensa, los miembros del Tribunal y la fiscalía, testigos, peritos y víctimas.

B. ¿QUÉ PROBLEMAS SE PODÍA DEBATIR

Los hechos a investigar y debatir quedaron debidamente delimitados, tanto en los considerandos como en los artículos 1, 2, 3 y 4 a saber:

- a. Juzgar a los responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario.
- b. Los crímenes determinados fueron:
 - i. Genocidio
 - ii. Crímenes de lesa humanidad
 - iii. Violaciones del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y del Protocolo Adicional II de los Convenios.

Se estableció reglas de no exoneración de la responsabilidad penal, estas fueron:

- g. El ser Jefe de Estado o funcionario de gobierno
- h. El haber obedecido órdenes de gobierno u órdenes superiores.

16. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN:

El Estatuto reguló como medios de impugnación a utilizar durante el proceso, la apelación y la revisión, los cuales estaban contenidas en los artículos 24 y 25 del Estatuto.

La apelación podía ser presentada por motivos de:

- a. *“Un error sobre una cuestión de derecho que invalida la decisión; o*
- b. *Un error de hecho que ha impedido que se hiciera justicia.*

La Sala de Apelaciones podía confirmar, revocar o modificar las decisiones adoptadas por las Salas de Primera Instancia⁹⁴²”.

En cuanto a la revisión, esta se podía presentar en caso de que se descubriese un hecho nuevo del que no se tuvo conocimiento durante el juicio y que hubiera podido incidir decisivamente en el fallo. Podía ser solicitado por el condenado o el Fiscal.

17. MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO

El artículo 26 del Estatuto determinó que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda supervisaría el cumplimiento de la sentencia, no importando en donde está se llevara a cabo.

18. RECURSOS DISPONIBLES

A. HUMANO:

Los tres órganos principales del Tribunal Penal Internacional para Ruanda eran las cámaras, la fiscalía y el registro. Dentro del Registro se encontraba una unidad de enlace con la defensa. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda compartió una sala de apelación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, y *“hasta 2003, compartió un fiscal jefe común con el TPIY. El tribunal tenía tres Salas de Primera Instancia y una Sala de Apelaciones con sede en La Haya. El estatuto*

⁹⁴² CONSEJO de Seguridad de las Naciones Unidas. 1994. *Óp. Cit.*

*disponía inicialmente que las cámaras tendrían un máximo de 16 magistrados permanentes y un máximo de nueve magistrados ad litem (entre 2008 y 2009, el Consejo de Seguridad permitió temporalmente 12 magistrados ad litem.) Ninguna de las cámaras podía estar integradas nacionales del mismo estado, lo que aseguraba una amplia diversidad de nacionalidades entre los escaños del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Siete de los jueces permanentes fueron miembros de la Cámara de Apelaciones".*⁹⁴³

11 de los jueces permanentes y todos los jueces ad litem fueron elegidos por la Asamblea General de Naciones Unidas. En sus inicios el tribunal tuvo grandes problemas para operar, incluidos el nombramiento de jueces e inicio de juicios para los procesados que se encontraban bajo custodia. Los jueces inaugurales fueron elegidos por la Asamblea General en mayo de 1995. Para mayo de 2012, dos jueces permanentes y ocho ad litem (jueces prestados) integraban el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Las salas estaban compuestas por una Sala de Primera Instancia para el antiguo Tribunal Penal Internacional para Ruanda y otra para el TPIY, con un presidente común. Las Naciones Unidas establecieron un listado de 25 jueces, incluido el presidente, con el fin de nombrar a los jueces para integrar una Sala de Primera Instancia o de Apelaciones para cualquier rama cuando fuera necesario. El presidente podía nombrar a un solo juez para considerar los asuntos en primera instancia.⁹⁴⁴

El Consejo de Seguridad nombró al fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda a propuesta del Secretario General, por un período de cuatro años, el cual podía ser renovable. El Consejo tenía la intención de que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda compartiera un fiscal común con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia como medio para ahorrar tiempo y recursos, decisión que el Consejo de Seguridad ejecutó.⁹⁴⁵

⁹⁴³ OPEN Society Foundations, 2018. *Una opción para la justicia: Un manual para diseñar Mecanismos de rendición de cuentas por delitos graves* [en línea]. S.E. Nueva York: Open Society Foundations. [Consulta: 7 de agosto de 2020]. ISBN: 978-1940983-83-7. Disponible en: <https://www.justiceinitiative.org/uploads/89c53e2e-1454-45ef-b4dc-3ed668cdc188/options-for-justice-20180918.pdf>

⁹⁴⁴ Ídem.

⁹⁴⁵ Ídem

El Secretario General de Naciones Unidas nombró al registrador del Tribunal Penal Internacional para Ruanda después de consultar con presidente del tribunal. El Registro mantuvo una oficina central en Arusha y una sub oficina en Kigali⁹⁴⁶.

La Secretaría contaba con dos divisiones que se ocuparon de asuntos judiciales y cuestiones administrativas. El apoyo judicial y logístico a las cámaras, que incluyó el mantenimiento de registros y archivos judiciales fue proporcionado por la Sección de Administración de Tribunales. Cada cámara del Tribunal fue apoyado por tres equipos.

947

La Sección de Gestión de Detenciones y Abogados Defensores, se estableció dentro de la oficina del registrador, se conformó con más de 200 abogados defensores, las oficinas de asistencia jurídica sirvieron para coordinar todas las funciones que involucraran a los abogados que comparecían para la defensa, pero no proporcionaban representación legal directamente⁹⁴⁸.

La Sección de Apoyo a Testigos y Víctimas del Tribunal Penal Internacional para Ruanda tenía una oficina principal en Arusha y una sub oficina en Kigali. Tenía tres funciones principales las cuales eran: brindar apoyo logístico a los testigos que comparecieron ante el tribunal, ayudar a la acusación y la defensa durante el juicio y, garantizar la seguridad de los testigos durante y después del juicio. Estaba dividida en dos unidades, una para los testigos de la fiscalía y la otra para testigos de la defensa. ⁹⁴⁹

También resulta importante poder destacar la transcendencia del legado en la cultura de los derechos humanos y las formas de investigación penal de casos por graves violaciones contra los derechos de las personas y contra personas con gran poder dentro del estado, pero con imparcialidad se produjeron sentencias condenatorias. Ese legado de cultura jurídica no solo beneficio al sistema de justicia, el que también se vio obligado a efectuar reformas legales, sino también los a los abogados litigantes

⁹⁴⁶ OPEN Society Foundations, 2018. *Óp. Cit.*

⁹⁴⁷ Ídem

⁹⁴⁸ Ídem

⁹⁴⁹ Ídem

que asumieron la defensa de los procesados y a la sociedad en general, que fue testigo de que si era posible hacer justicia.

B. MATERIAL:

En cuanto a los recursos materiales, importante resaltar la previsión de dejar registro de todas las actuaciones realizadas y en su sitio oficial cuenta con los 20 informes anuales de actividades, 05 documentos clave tribunal y 22 informes de avances de estrategia de cumplimiento.⁹⁵⁰

C. PRESUPUESTO ASIGNADO:

El Consejo de Seguridad ordenó que el presupuesto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda proviniera de contribuciones señaladas de los Estados miembros de las Naciones Unidas, según lo prorrateado por la Asamblea General de la ONU.⁹⁵¹

El presupuesto inicial del Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue evaluado y dividido con los fondos de mantenimiento de la paz de la UNAMIR. El tamaño del presupuesto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda ha suscitado críticas. Para el bienio 2012– 2013, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda presentó necesidades de recursos brutos de 174 millones de dólares estadounidenses a la ONU Secretario General. En 2010-2011, fue aprobada por las Naciones Unidas la asignación de 245 millones de dólares estadounidenses. Debido al incumplimiento de algunos Estados miembros de pagar sus contribuciones señaladas a tiempo en última instancia, dio lugar a congelaciones de personal durante el período 2003-2004; que llevó al Comité Asesor de Naciones Unidas sobre cuestiones administrativas y presupuestarias a plantear preocupaciones sobre el impacto negativo de la situación en la ejecución del cronograma establecido para la estrategia de finalización.⁹⁵²

Pese a que, el Consejo de Seguridad había decidido que el presupuesto básico fuera financiado con contribuciones señaladas, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda se basó significativamente en contribuciones y personal proveído gratuitamente, en

⁹⁵⁰ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, S.F. Documentos, Página 01. En: *United Nations, International Residual Mechanism for Criminal Tribunals* [en línea]. Disponible en: <https://unictr.irmct.org/en/documents/completion-strategy-reports> [Consulta: 07 de agosto de 2020].

⁹⁵¹ Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Estatuto, Artículo 30

⁹⁵² OPEN Society Foundations, 2018. *Óp. Cit.*

especial durante sus primeros años. La Asamblea General de Naciones Unidas en 1995 giró una invitación a los Estados miembros para que realizaran contribuciones voluntarias a través de financiación directa y servicios en especie. Destinando estas contribuciones al apoyo de actividades calificadas como "extrapresupuestarias", en donde se incluyó la formación de jueces nacionales, programas de apoyo entre los que se encontraban los servicios psicosociales, la atención médica, fondos para testigos e iniciativas de divulgación, este fondo se manejó a través de un fideicomiso.

953

19. EL PAPEL DE LA VÍCTIMA:

El Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda establecía en su artículo 21 que era por medio de las reglas de procedimiento y prueba que se debería adoptar normas para la protección de las víctimas y testigos que actuaba en los procesos dentro de su jurisdicción.

Dentro de las medidas que las reglas de prueba y procedimiento establecían que podían pedirse para la protección de las víctimas y testigos se tenían:

- a) No divulgación de su identidad
- b) Medidas para salvaguardar su seguridad
- c) Dar testimonio por medio de alteración de su imagen o voz

Además, crea la Unidad de Apoyo a víctimas y testigos que tenía como principal función recomendar las medidas que debían adoptarse para protegerles a corto y largo plazo.⁹⁵⁴ La Sección de Apoyo a Testigos y Víctimas del Tribunal mantuvo tres funciones fundamentales siendo estas:

- a. *“Proporcionar apoyo logístico a los testigos que comparecían ante el tribunal,*
- b. *Ayudar a la fiscalía y a la defensa durante las fases de juicio y*
- c. *Garantizar la seguridad de los testigos en el tribunal y en la fase posterior al*

⁹⁵³ OPEN Society Foundations, 2018. *Óp. Cit.*

⁹⁵⁴ Regla 34, Reglas de Prueba y Procedimiento del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

*juicio*⁹⁵⁵.

Como se ha indicado la sección estaba dividida en la unidad para los testigos de la fiscalía y la unidad para los testigos de la defensa. En el Estatuto del Tribunal las víctimas estaban mencionadas en los procedimientos como observadores, no tuvieron la opción de ser representados legalmente, creyendo erróneamente que los intereses particulares serían representados por el fiscal⁹⁵⁶.

No fue requerida la opinión de las víctimas, por lo que tuvieron que recurrir a comunicar sus solicitudes a los jueces durante los interrogatorios, que estaban diseñados para satisfacer los intereses de la fiscalía o de los abogados de la defensa.

El papel de las víctimas durante el proceso fue en su calidad de testigos, siendo decidida su participación por el fiscal de acuerdo a su criterio, estrategia y táctica o la defensa de conformidad con sus objetivos.

Las asociaciones de víctimas colaboraron con el trabajo del Tribunal, aunque algunos de los métodos de trabajo fueron cuestionados y calificados como que iban en contra de los intereses de las víctimas. Incluso hubo denuncias en contra de Louise Arbour por manifestaciones cercanas al racismo⁹⁵⁷. También denunciaron compra de testigos, falta de confidencialidad en identidad de los testigos y de las declaraciones, en Arusha ausencia de protección a los testigos y acoso por parte de la defensa durante su declaración, principalmente a las mujeres violadas. Las víctimas no participaron en etapa de instrucción; y descuido hacia los testigo-víctimas. Reclamaron que se pagara a los testigos, por el dinero que perdían por su comparecencia.⁹⁵⁸

20. PERCEPCIÓN PÚBLICA:

Al igual que el Tribunal para la Ex Yugoslavia se creó el programa Out Reach⁹⁵⁹, para la comunicación y educación sobre su trabajo, con el fin de dar a conocer el mandato

⁹⁵⁵ OPEN Society Foundations, 2018. *Óp. Cit.*

⁹⁵⁶ GIMÉNEZ Montero, Judith. 2017. *Óp. Cit.*

⁹⁵⁷ NTAGANDA, Eugéne. 2005. *Óp. Cit.* Páginas:100 y 101

⁹⁵⁸ Ídem. Página:102

⁹⁵⁹ En el año 1999 fue creado el programa de comunicación denominado Out Reach con la misión de comunicarle e informar a las comunidades de la Ex- Yugoslavia y Ruanda la importancia de juzgar y declarar la responsabilidad de quienes violaron la ley internacional del derecho internacional humanitario y el significado de restauración que la justicia tiene para las víctimas.

y trabajo del tribunal, pero fue considerado que tuvo escaso eco en la sociedad ruandesa. El esfuerzo se vio ensombrecido por el poco alcance del programa, la poca credibilidad del Tribunal derivada de los alegatos de mala gestión, lentitud y falta de visibilidad.⁹⁶⁰

El programa incluía un centro de documentación que fue visitado estudiantes e intelectuales, la población solamente tuvo información del Tribunal por medio de la radio y los contactos de las asociaciones de víctimas. Se criticó que la contribución a la reconciliación nacional fue únicamente por medio de la biblioteca y algunas películas de entrevistas⁹⁶¹.

El propósito de compartir fiscalía con el Tribunal para la Ex Yugoslavia entorpeció las actuaciones judiciales por la dificultad de combinar los dos mandatos que, aunque procesalmente eran muy parecidos, los casos que pretendían perseguir eran diferentes.

La lentitud, complejidad y ausencia de comunicación se tradujo en una percepción de ausencia de justicia, principalmente cuando el Tribunal señaló la necesidad de contratar más jueces y se le criticó por mala administración, desacreditación de la división de asistencia judicial y el resultado de los informes de los servicios de control interno de Naciones Unidas que reflejaron el reparto de honorarios entre acusados y su defensa, corrupción en funcionarios de la secretaría que condicionaban el pago de los investigadores ruandeses⁹⁶².

En relación con el criterio de proporcionalidad del castigo conforme a la gravedad del crimen, para los ruandeses el que no se aplicara la pena de muerte significaba un trato indulgente.

Hubo acusaciones recíprocas entre el Tribunal y el gobierno ruandés, el Tribunal acusaba al gobierno de falta de cooperación y el gobierno al Tribunal de lentitud, corrupción y mal tratamiento a los testigos, además exigía que se incluyeran jueces ruandeses que pudieran ayudar a sus colegas para comprender el genocidio.

⁹⁶⁰ NTAGANDA, Eugéne. 2005. *Óp. Cit.* Página:105

⁹⁶¹ Ídem. Página:102

⁹⁶² Ídem. Páginas: 92 y 93

21. NÚMERO DE CASOS INGRESADOS

El primer informe anual del Tribunal Penal Internacional para Ruanda que comprende el período entre el 08 de noviembre de 1994 al 30 de junio de 1996 expone que el primer año de operación del tribunal este se dedicó a actividades de instalación. Los primeros tres años comprenden la instalación de la infraestructura material y legal del Tribunal y al comienzo de sus actividades judiciales. Del 26 al 30 de junio de 1995, los 06 jueces de las Salas de Primera Instancia y los 05 los jueces de la Sala de Apelaciones celebraron la primera sesión plenaria del Tribunal, en La Haya, porque las instalaciones del Tribunal en Arusha aún no estaban listas. A pesar de que la sesión inaugural tuvo lugar esa semana, los jueces no fueron considerados como habiendo tomado posesión de su cargo hasta el 19 de junio de 1996, un año después.⁹⁶³

Las actividades judiciales iniciaron hasta 1995 y el 11 de noviembre de 1995 se presentó la primera acusación al Tribunal en el caso Masacre Kibuye en contra de 08 personas; el 17 de junio de 1996 se presentaron 03 acusaciones contra acusados de haber participado en asesinatos en Masa en Kibuye y Gisagara, masacre en Kibuye y Masacre en el distrito Nyakizu. Entre enero y marzo de 1996 se solicitó al Tribunal otorgar el aplazamiento de competencia del tribunal en contra de los señores Elie Ndayambayo, Joseph Kanyabashi, Alphonse Higaniro y Alfred Musema. Además, de la solicitud de emisión de órdenes de detención provisional en contra de 04 acusados: 1. Theoneste Bagosova; 2. André Ntagenera; 3. Ferdinand Nahimara y 4. Anatole Nsengiyumza.⁹⁶⁴

El segundo informe anual del Tribunal del 01 de julio de 1996 al 30 de junio de 1997, el tribunal recibió las siguientes solicitudes: 21 solicitudes de emitir órdenes de detención en contra de 21 acusados, 14 acusaciones para confirmación, 02 solicitudes bajo la regla 40 bis, 02 de protección de testigos, 01 solicitud para que la defensa interroge a los testigos del fiscal, 01 solicitud de tomar declaración por escrito y teleconferencia a testigos de la defensa en el caso contra Anderson

⁹⁶³ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 1996. Primer informe anual de actividades 1996, Página 09. En: *United Nations, General Assembly Security Council* [en línea]. Disponible en: <https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/legal-library/960924-annual-report-en.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁹⁶⁴ Ídem.

Rutaganda, 01 solicitud de libertad provisional bajo argumentos médicos de Anderson Rutaganda, 01 solicitud de cambio de abogado en el caso contra Jean Paul Akayesu y 01 solicitud de moción preliminar de cambio en la forma de la acusación en el caso Kayishema.⁹⁶⁵

El tercer informe anual del Tribunal Penal Internacional para Ruanda que corresponde al período entre el 01 de julio de 1997 al 30 de junio de 1998 recibió las siguientes solicitudes: 01 de acuerdo de culpabilidad para dictar sentencia en el caso de Jean Kambanda por delito de genocidio, 02 solicitudes de Amicus Curiae, 43 solicitudes de acusación en contra de 43 acusados, 150 solicitudes varias y mociones preliminares, 01 solicitud de acusación conjunta en el caso de Bagosora y 28 personas más.⁹⁶⁶

El cuarto informe anual del Tribunal Penal Internacional para Ruanda que comprende el período entre el 01 de julio de 1998 al 30 de junio de 1999 recibió las siguientes solicitudes: de confirmar los acuerdos de culpabilidad de Omar Serushago y Kambanda; Admitir retirar la acusación, a solicitud del fiscal, en contra de Ntuyahaga. Las Salas de Apelación recibieron 02 decisiones en apelaciones interlocutorias y solicitud de acumulación de acusados por conspiración en una misma acusación en los casos: a. Caso El Gobierno; b. Caso Butare; c. Caso Cyangugu; d. Caso Militar, además 04 acusaciones enmendadas para confirmar en contra de 14 acusados.⁹⁶⁷

El quinto informe anual del Tribunal Penal Internacional para Ruanda que comprende el período entre el 01 de julio de 1999 al 30 de junio de 2000 recibió las siguientes solicitudes: 191 mociones preliminares en los casos en curso, 01 solicitud de unión

⁹⁶⁵ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 1997. Segundo informe anual de actividades. Página 07-10. En: *United Nations, General Assembly Security Council* [en línea]. Disponible en: <https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/legal-library/971113-annual-report-en.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁹⁶⁶ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 1998. Tercer informe anual de actividades. Página 03-09. En: *United Nations, General Assembly Security Council* [en línea]. Disponible en: <https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/legal-library/980923-annual-report-en.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁹⁶⁷ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 1999. Cuarto informe anual de actividades. Página 05-15. En: *United Nations, General Assembly Security Council* [en línea]. Disponible en: <https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/legal-library/990907-annual-report-en.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

de acusación para 06 acusados. La Sala de Apelaciones solicitó de 34 apelaciones interlocutorias y 04 solicitudes de revisión de sus decisiones.⁹⁶⁸

El sexto informe anual del Tribunal Penal Internacional para Ruanda que comprende el período entre el 01 de julio de 2000 al 30 de junio de 2001 recibió las siguientes peticiones: 275 de mociones preliminares; 01 solicitud para unir 02 acusaciones; 02 solicitudes de cambio de abogado; 04 solicitudes de revisión a la Sala de Apelaciones; 14 apelaciones interlocutorias a la Sala de Apelaciones; 04 apelaciones de sentencia de Sala de Apelaciones y 12 acusaciones para confirmar.⁹⁶⁹

El séptimo informe anual del Tribunal Penal Internacional para Ruanda que comprende el período entre el 01 de julio de 2001 al 30 de junio de 2002 tomó las siguientes decisiones: 14 acusaciones para confirmar, 100 mociones preliminares, 01 apelación sobre el fondo, 09 de apelaciones interlocutorias, 24 solicitudes varias, 02 apelaciones.⁹⁷⁰

El octavo informe anual del Tribunal Penal Internacional para Ruanda que alcanza el período entre el 01 de julio de 2002 al 30 de junio de 2003 tomó las siguientes decisiones: 293 mociones preliminares, de juicio, 02 apelaciones en los casos Bagilishema y Rutuganda, 06 apelaciones interlocutorias y 19 mociones varias a la Sala de Apelaciones.⁹⁷¹

El noveno informe anual del Tribunal Penal Internacional para Ruanda por el período entre el 01 de julio de 2003 al 30 de junio de 2004 tomó las siguientes decisiones: 41

⁹⁶⁸ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2000. Quinto informe anual de actividades. Página 03-08. En: *United Nations, General Assembly Security Council* [en línea]. Disponible en: <https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/legal-library/001002-annual-report-en.pdf>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁹⁶⁹ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2001. Sexto informe anual de actividades. Página 03-15. En: *United Nations, General Assembly Security Council* [en línea]. Disponible en: <https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/legal-library/010914-annual-report-en.pdf>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁹⁷⁰ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2002. Séptimo informe anual de actividades. Página 03-10. En: *United Nations, General Assembly Security Council* [en línea]. Disponible en: <https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/legal-library/020702-annual-report-en.pdf>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁹⁷¹ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2003. Octavo informe anual de actividades. Página 03-12. En: *United Nations, General Assembly Security Council* [en línea]. Disponible en: <https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/legal-library/030711-annual-report-en.pdf>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

mociones preliminares; 01 orden de arresto; 01 enmienda de acusación; 130 mociones de juicio; 33 apelaciones interlocutorias y 04 apelaciones.⁹⁷²

El décimo informe anual del Tribunal Penal Internacional para Ruanda por el período entre el 01 de julio de 2004 al 30 de junio de 2005 tomó las siguientes decisiones: 28 apelaciones interlocutorias, 170 mociones previas a la apelación, 04 apelaciones y 01 revisión.⁹⁷³

El undécimo informe anual del Tribunal para el período 01 de julio de 2005 al 30 de junio de 2006, detalla que recibió las siguientes solicitudes: 07 apelaciones de sentencias, 19 apelaciones interlocutorias, 02 solicitudes de revisión y en el caso Baragaza 01 recurso de remisión.⁹⁷⁴

El duodécimo informe anual del Tribunal para el período 01 de julio de 2006 al 30 de junio de 2007, afirma que tomó las siguientes decisiones: 88 solicitudes de decisiones escritas y orales. La Sala de apelaciones recibió 07 apelación de sentencia, 19 apelaciones interlocutorias y 01 recurso de revisión.⁹⁷⁵

El décimo tercer informe anual del Tribunal para el período del 01 de julio de 2007 al 30 de junio de 2008, recibió las siguientes peticiones: 02 solicitud de condiciones especiales de detención de un acusado, admisión de Amicus Curiae de la Asociación de Abogados de Kigali, Human Rights Watch, Asociación de abogados de defensa TICR; 01 caso fue remitido a Francia contra Laurent Buyibaratu, el caso contra Wenceslas Munyeshyaka se encontraba en deliberación para remitirlo o no a Francia; 03 solicitudes de remisión de casos fueron rechazadas en los casos (Kanyarukiga denegado su remisión a Ruanda) 02 solicitudes de remisión (Caso Gatete). La Sala de apelaciones recibió las siguientes solicitudes: 05 sentencias de apelaciones sobre

⁹⁷² TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2004. Noveno informe anual de actividades. Página 02-14. En: *United Nations, General Assembly Security Council* [en línea]. Disponible en: <https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/legal-library/040727-annual-report-en.pdf>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁹⁷³ Ídem.

⁹⁷⁴ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2005. Undécimo informe anual de actividades. Página 02-11. En: *United Nations, General Assembly Security Council* [en línea]. Disponible en: <https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/legal-library/060816-annual-report-en.pdf>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁹⁷⁵ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2007. Duodécimo informe anual de actividades. Página 03-15. En: *United Nations, General Assembly Security Council* [en línea]. Disponible en: <https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/legal-library/070821-annual-report-en.pdf>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

el fondo (Caso Simba, Caso Nahimana et al, Ngeze, Caso contra Seromba); 07 apelaciones interlocutorias; 18 mociones para revisión de reconsideraciones; 04 mociones de remisión. El fiscal presentó 04 solicitudes de órdenes en contra de 04 acusados detenidos y 01 fugitivo. El caso por desacato en contra de Nshogoza se presentó su acusación para su confirmación y su orden de arresto.⁹⁷⁶

El décimo cuarto informe del Tribunal para el período del 01 de julio de 2008 al 30 de junio de 2009 expone que durante ese período recibieron las siguientes solicitudes: 646 peticiones a las salas, 07 apelaciones de sentencia, 10 apelaciones interlocutorias, 23 mociones de revisión o reconsideración y 03 mociones de revisión.⁹⁷⁷

El décimo quinto informe del Tribunal para el período del 01 de julio de 2009 al 30 de junio de 2010 expone que durante ese período recibieron las siguientes solicitudes: 10 apelaciones de sentencias, 13 apelaciones interlocutorias y 15 recursos de revisión o reconsideración.⁹⁷⁸

El décimo sexto informe del Tribunal para el período del 01 de julio de 2010 al 30 de junio de 2011 expone que durante este período estaban en proceso la estrategia de cumplimiento del tribunal y ha recibido las siguientes solicitudes 12 de apelaciones de sentencia, 10 apelaciones interlocutorias y 10 mociones de revisión o reconsideración.⁹⁷⁹

El décimo séptimo informe del Tribunal para el período del 01 de julio de 2011 al 30 de junio de 2012 expone que durante este período cursaba en proceso la estrategia

⁹⁷⁶ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2008. Décimo tercer informe anual de actividades. Página 03-15. En: *United Nations, General Assembly Security Council* [en línea]. Disponible en: <https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/legal-library/080804-annual-report-en.pdf>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁹⁷⁷ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2009. Décimo cuarto informe anual de actividades. Página 03-15. En: *United Nations, General Assembly Security Council* [en línea]. Disponible en: <https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/legal-library/090731-annual-report-en.pdf>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁹⁷⁸ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2010. Décimo quinto informe anual de actividades. Página 05-13. En: *United Nations, General Assembly Security Council* [en línea]. Disponible en: <https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/legal-library/100730-annual-report-en.pdf>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁹⁷⁹ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2011. Décimo sexto informe anual de actividades. Página 03-12. En: *United Nations, General Assembly Security Council* [en línea]. Disponible en: <https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/legal-library/110729-annual-report-en.pdf>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

de cumplimiento del tribunal y había recibido las siguientes solicitudes 13 de apelaciones de sentencia, 03 apelaciones interlocutorias, 12 mociones de revisión o reconsideración y 07 solicitudes de remisión de casos.⁹⁸⁰

El décimo octavo informe del Tribunal del período al 01 de julio de 2012 al 30 de junio de 2013 el tribunal implementaba su estrategia de cumplimiento, las Salas de primera instancia completaron su volumen de trabajo y las salas de apelaciones se encuentran realizando esfuerzos para completar las apelaciones restantes y recibieron las siguientes solicitudes 08 apelaciones de sentencia, 03 apelaciones de remisión a jurisdicciones nacionales y 05 mociones de remoción o revisión. El Fiscal en ese periodo se enfocó en el traslado de responsabilidades del seguimiento de prófugos por el mecanismo residual internacional de tribunales.⁹⁸¹

El décimo noveno informe del Tribunal por el período del 01 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014 el tribunal implementaba su estrategia de cumplimiento, las Salas de primera instancia completaron su trabajo y las salas de apelaciones resolviendo las apelaciones recibidas.⁹⁸²

El vigésimo informe del Tribunal del período al 01 de julio de 2014 al 30 de junio de 2015 el tribunal establecía e implementaba su estrategia de finalización. Las Salas de primera instancia completaron su trabajo y las salas de apelaciones resolviendo las apelaciones recibidas en adición a las 04 apelaciones de sentencia recibidas en este periodo.⁹⁸³

⁹⁸⁰ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2011. *Óp. Cit.*

⁹⁸¹ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2013. Décimo octavo informe anual de actividades. Página 03,05,08. En: *United Nations, General Assembly Security Council* [en línea]. Disponible en: <https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/legal-library/130802-annual-report-en.pdf>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁹⁸² TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2014. Décimo octavo informe anual de actividades. Página 03-09. En: *United Nations, General Assembly Security Council* [en línea]. Disponible en: <https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/legal-library/140801-annual-report-en.pdf>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁹⁸³ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2015. Vigésimo informe anual de actividades. Página 03-07. En: *United Nations, General Assembly Security Council* [en línea]. Disponible en: <https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/legal-library/150731-annual-report-en.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

22. NÚMERO DE CASOS RESUELTOS

El tribunal cerró operaciones con 61 condenas⁹⁸⁴ de mandos militares, políticos y religiosos por el asesinato de 800.000 personas⁹⁸⁵

Los resultados se resumen en 14 sentencias cumplidas, 10 casos remitidos a jurisdicciones nacionales para juicios, 3 fugitivos referidos al Mecanismo Residual, 2 sentencias en que los procesados fallecieron y 2 acusaciones retiradas antes de juicio⁹⁸⁶.

El primer informe anual del Tribunal Penal Internacional para Ruanda que comprende el período entre el 08 de noviembre de 1994 al 30 de junio de 1996 expuso que el primer año de operación del tribunal, este se dedicó a actividades de instalación. Es decir, a la aprobación de reglas de procedimiento, la instalación de la infraestructura material y legal del Tribunal y al comienzo de sus actividades judiciales. El tribunal celebró su primera audiencia el 11 de enero de 1996, la primera acusación se confirmó el 16 de febrero de 1996 en contra de 08 acusados; entre febrero y junio de 1996 se confirmaron 05 acusaciones más en contra de 05 acusados. El tribunal tomó 03 decisiones relacionadas con el aplazamiento de la competencia del Tribunal sobre tribunales belgas y 04 decisiones de detención.⁹⁸⁷

El segundo informe anual del Tribunal comprende del 01 de julio de 1996 al 30 de junio de 1997, el tribunal tomó las siguientes decisiones: 21 órdenes de detención en contra de 21 acusados, 14 acusaciones confirmadas, 02 decisiones bajo la regla 40 bis, 02 decisiones de protección de testigos, 01 admisión para que la defensa interrogara a los testigos del fiscal, 01 admisión de tomar declaración por escrito y teleconferencia a testigos de la defensa en el caso contra Anderson Rutaganda, 01 rechazo de libertad provisional bajo argumentos médicos, 01 rechazo de solicitud de

⁹⁸⁴ ONU. 2015. El Tribunal Penal Internacional para Rwanda finaliza su misión con 61 condenas. En: *Noticias ONU* [en línea]. Disponible en: <https://news.un.org/es/story/2015/12/1347881> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁹⁸⁵ EL País. 2015. El tribunal del genocidio de Ruanda concluye su misión con 61 condenas. En: *El País* [en línea]. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2015/12/26/actualidad/1451138647_010753.html [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁹⁸⁶ UNITED Nations, International Residual Mechanism for Criminal Tribunals. S.F. The ICTR in Brief. En: *United Nations, International Residual Mechanism for Criminal Tribunals* [en línea]. Disponible en: <https://unictr.irmct.org/en/tribunal> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

⁹⁸⁷ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 1996. *Op. Cit.*

cambio de abogado en el caso contra Jean Paul Akayesu, 01 rechazo a solicitud de moción preliminar de cambio en la forma de la acusación en el caso Kayishema, En este período se realizó el primer juicio en contra de Georges Anderson Nderubuwe Rutaganda en enero de 1997, además otros 02 juicios en contra de los acusados Jean Paul Akeyesu y Caso Kayishema.⁹⁸⁸

El tercer informe anual del Tribunal Penal Internacional para Ruanda por el período entre el 01 de julio de 1997 al 30 de junio de 1998 tomó las siguientes decisiones: 01 de acuerdo de culpabilidad para dictar sentencia por el delito de genocidio en el caso de Jean Kambanda, 02 Amicus Curiae, 43 confirmaciones de acusación en contra de 43 acusados, 150 decisiones varias y mociones preliminares, 01 rechazo a solicitud de acusación conjunta en el caso de Bagosora y 28 personas más, 02 confirmaciones de acusaciones. Además, estaba en trámite los casos de Clement Kayishema y Obed Ruzuidana en la etapa final de presentación de evidencia, el caso de Anderson Rutaganda se reanudará luego de haberse suspendido por problemas de salud del acusado y su abogado, y 06 casos en fase previa. En este período fue acusada Pauline Nyiramasuhuko, la primera mujer acusada por un tribunal internacional.⁹⁸⁹

El cuarto informe anual del Tribunal Penal Internacional para Ruanda por el período entre el 01 de julio de 1998 al 30 de junio de 1999 tomó las siguientes decisiones: Emitió la primera sentencia en materia de genocidio el 02 de septiembre de 1998 en el caso contra Jean Paul Akayesu, en donde consta la primera interpretación y aplicación de la convención en contra del genocidio. Además, incluye el delito de agresión sexual por haber sido utilizado como medio para cometer genocidio en contra de los Tutsi. Confirmando los acuerdos de culpabilidad e Omar Serushago y Kambanda condenándoles a 15 años de prisión y cadena perpetua respectivamente. Admitió retirar la acusación, a solicitud del fiscal, en contra de Ntuyahaga. Las Salas de Apelación tomaron 2 decisiones en apelaciones interlocutorias y aceptó la solicitud de acumulación de acusados por conspiración en una misma acusación en los casos: a. Caso El Gobierno; b. Caso Butare; c. Caso Cyangugu; d. Caso Militar, además confirmó 04 acusaciones enmendadas en contra de 14 acusados. En este período

⁹⁸⁸ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 1997. *Óp, Cit.*

⁹⁸⁹ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 1998. *Óp, Cit.*

fueron arrestado 09 acusados. El caso de Alfred Musema se informó que estaba en etapa de deliberación.⁹⁹⁰

El quinto informe anual del Tribunal Penal Internacional para Ruanda que comprende el período entre el 01 de julio de 1999 al 30 de junio de 2000 tomó las siguientes decisiones: emitió 03 sentencias en los casos contra: a. Anderson Rutaganda, b. Alfred Musema, c. Georges Ruggiu periodista condenado por incitar a cometer genocidio; 191 decisiones de mociones preliminares en los casos en curso. La Sala de Apelaciones emitió 24 decisiones sobre apelaciones interlocutorias y 02 decisiones de revisión de sus decisiones. Afirmó el tribunal que estaban en curso los casos Gobierno, Caso Cyangugu, Caso Semanza, Caso Butare, Caso contra Ntakirutimana, Caso Nahimana y Caso Bagilishema.⁹⁹¹

El sexto informe anual del Tribunal Penal Internacional para Ruanda que comprendió el período entre el 01 de julio de 2000 al 30 de junio de 2001 tomó las siguientes decisiones: emitió 01 sentencia en el caso Bagilishema el 07 de junio de 2001; 275 de mociones preliminares ; 01 decisión de otorgar la solicitud para unir 02 acusaciones; 02 denegaciones de solicitudes de cambio de abogado; 04 solicitudes de revisión a la Sala de Apelaciones; 14 apelaciones interlocutorias a la Sala de Apelaciones; 04 apelaciones de sentencia de Sala de Apelaciones; 12 acusaciones confirmadas. Se encuentran en curso 06 juicios en contra de 15 acusados y 06 acusados fueron arrestados y trasladados.⁹⁹²

El séptimo informe anual del Tribunal Penal Internacional para Ruanda período entre el 01 de julio de 2001 al 30 de junio de 2002 tomó las siguientes decisiones: 14 acusaciones nuevas confirmadas, 100 decisiones sobre mociones preliminares, 01 sentencia de apelación sobre el fondo, 09 decisiones de apelaciones interlocutorias, 24 decisiones varias, 02 apelaciones en curso. Se encuentran 09 juicios en curso en contra de 22 acusados, 80 personas han sido acusados 60 se permanecían bajo custodia y 20 en libertad.⁹⁹³

⁹⁹⁰ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 1999. *Óp, Cit.*

⁹⁹¹ Ídem.

⁹⁹² TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2001. *Óp, Cit.*

⁹⁹³ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2002. *Óp, Cit.*

El octavo informe anual del Tribunal Penal Internacional para Ruanda que cubre el período entre el 01 de julio de 2002 al 30 de junio de 2003 tomó las siguientes decisiones: 01 sentencia en el caso de Semanza, 293 decisiones sobre mociones preliminares, de juicio, 02 sentencias de apelación en los casos Bagilishema y Rutuganda, 06 apelaciones interlocutorias, 19 decisiones varias de la Sala de Apelaciones. Además, se encuentran en curso 09 juicios en curso en contra de 23 acusados, 01 apelación sobre el fondo, 05 casos en etapas de prejuicio y los casos Cyangugu, Kajelikeliki y Kumuhanda se encuentran en etapa de argumentos de cierre.⁹⁹⁴

El noveno informe anual del Tribunal Penal Internacional para Ruanda que comprende el período entre el 01 de julio de 2003 al 30 de junio de 2004 tomó las siguientes decisiones: 05 sentencias en los casos 02 casos de acusación individual contra Gacumbitsi, contra Nindabahizi, 03 casos de acusaciones conjuntas contra Kajelijeli, Butare, caso Cyangugu donde absolvió a André Ntagerura y Emmanuel Bagambiki y condeno a Samuel Imanishimwe a 27 años de prisión; 41 decisiones de mociones preliminares; 01 acusación confirmada; 01 orden de arresto; 01 enmienda de acusación; 130 decisiones en juicio orales y escritas; 26 decisiones de apelaciones interlocutorias. Se encontraban en curso 07 apelaciones, 07 apelaciones interlocutorias, 08 casos en contra 10 acusado en etapa previa al juicio.⁹⁹⁵

El décimo informe anual del Tribunal Penal Internacional para Ruanda que comprende el período entre el 01 de julio de 2004 al 30 de junio de 2005 tomó las siguientes decisiones: 03 sentencias en los casos contra 03 acusados Ndinbahizi, Rutaganira 06 años de prisión por el crimen de exterminio, Muhimana prisión perpetua, 133 decisiones escritas; 154 decisiones orales; 28 decisiones de apelaciones interlocutorias, 170 órdenes y mociones previas a la apelación, 04 sentencias de apelaciones, 01 decisión de juzgar por separado de Rwamakuba. En curso estaban 28 apelaciones interlocutorias, 01 revisión, 05 juicios en curso contra 07 acusados y 07 casos en fase previa.⁹⁹⁶

⁹⁹⁴ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2003. *Óp, Cit.*

⁹⁹⁵ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2004. *Óp, Cit.*

⁹⁹⁶ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2005. *Óp, Cit.*

El undécimo informe anual del Tribunal para el período 01 de julio de 2005 al 30 de junio de 2006, detalla que tomó las siguientes decisiones: emitió 03 sentencias con tres 03 acusados en 03 casos diferentes: a. Caso Simba condenado a 25 años de prisión; b. Caso Bisengimana condenado a 15 años de prisión; c. Serugendo condenado a 06 años de prisión. Las salas profirieron 257 decisiones escritas y orales, Se iniciaron 03 casos: a. Caso contra Mpambara; b. Caso Zigiranyirazo; c. Caso Karera. Las salas de apelaciones tomaron las siguientes decisiones: 01 sentencia de apelación de sentencia; 14 apelaciones interlocutorias; 07 apelaciones de sentencias, 19 apelaciones interlocutorias, 122 órdenes y decisiones de apelación para la época del informe estaban en revisión para tomar una decisión, en el caso Baragaza denegó 01 recurso de remisión. Los casos Gobierno, Militar II, Murvunyi, Mpabara, Seromba en deliberación y 13 casos se encuentran en fase previa a juicio par esa época.⁹⁹⁷

El duodécimo informe anual del Tribunal para el período 01 de julio de 2006 al 30 de junio de 2007, detalla que tomó las siguientes decisiones: dictó 05 sentencias en 05 casos contra 05 acusados a. Caso contra Mpambara declarado absuelto de todos los cargos; b. Caso contra Nzabirinda conde; d. Caso contra Rwamakuba declarado absuelto, 88 decisiones escritas y orales. Los casos Militar I y Karera han finalizado y esperaban sentencia. La Sala de apelaciones resolvió 04 sentencias de apelación contra 06 acusados, 09 decisiones de revisión o reconsideración, 01 decisión de apelación de revisión en el caso de Bagaragaza, 96 órdenes y decisiones previos a la apelación, 02 apelaciones de referencia, 10 apelaciones interlocutorias. En este periodo inicio el juicio contra Nsengimana, 09 casos contra 22 acusados estaban en progreso, 12 casos se encontraban en fase previa al juicio, estaban en curso los casos de Zigiranyirazo, Ndindiliyaman et al. Los casos de Rukundi, Nsengimana, Hategekimana, Renzaho, Nzabirinda cursaban la fase previa al juicio. En este período el fiscal presentó 30 expedientes para enjuiciamiento y, además, negociaba con Estados la transferencia de 15 casos a jurisdicciones nacionales.⁹⁹⁸

El décimo tercer informe anual del Tribunal para el período del 01 de julio de 2007 al 30 de junio de 2008, tomó las siguientes decisiones: emitió 02 decisiones negando condiciones especiales de detención de un acusado, 234 decisiones escritas y orales

⁹⁹⁷ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2006. *Óp, Cit.*

⁹⁹⁸ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2007. *Óp, Cit.*

en juicios, admisión de Amicus Curiae de la Asociación de Abogados de Kigali, Human Rights Watch, Asociación de abogados de defensa; 01 decisión que ordenó la ejecución de la sentencia de un acusado en Italia; 03 sentencias contra 05 acusados en los casos: a. Caso contra Karera condenado a prisión perpetua; b. Rugambara condenado a 11 años de prisión; c. Primer caso por falso testimonio contra Kamuhanda 09 años de prisión; 01 caso fue remitido a Francia caso contra Laurent Buyibaratu, el caso contra Wenceslas Munyeshyaka en deliberación para remitirlo o no a Francia; 03 solicitudes de remisión de casos fueron rechazadas en los casos (Kanyarukiga denegando su remisión a Ruanda) 02 solicitudes de remisión se informó como pendientes de resolver (Caso Gatete). En este período 07 casos se completaron y en espera que se dictara sentencia (Caso contra Renzaho, Caso contra Rukundo, Caso contra Bizimungu, Caso contra Nchamihigo, Caso contra Bikindi, Caso contra Zigiranyirazo, Caso contra Muvunyi). Además, en curso los casos contra 1. Karaera et al, 2. Kalamanzira, 3. Butare, 4. Baragara, 5. Ndindibiyimana, 6. Bagasora et al, 7. Nsengimana. La Sala de apelaciones tomó las siguientes decisiones: 04 sentencias de apelaciones sobre el fondo (Casos Simba confirmo sentencia, Caso Nahimana et al revocó la sentencia e interpuso a los acusados las siguientes penas: Barayawiza 32 años de prisión, Ngeze 25 años de prisión, Caso contra Seromba revocó sentencia y otorgó prisión perpetua); 07 apelaciones interlocutorias; 15 decisiones para revisión de reconsideraciones; 01 decisión de remisión; 65 decisiones de pre apelación. El fiscal arresto a 02 acusados que se encontraban fugitivos, presentó 04 solicitudes de órdenes en contra de 04 acusados detenidos y 01 fugitivo. El caso por desacato en contra de Nshogoza se confirmó su acusación y su orden de arresto. Finalmente, informó que 13 personas eran fugitivas siendo 04 de ellas de alto nivel.⁹⁹⁹

En el décimo cuarto informe del Tribunal por el período del 01 de julio de 2008 al 30 de junio de 2009 expuso que durante ese período se tomaron las siguientes decisiones: 646 decisiones escritas y orales en los diferentes juicios en curso en este periodo; 06 sentencias en contra de 09 acusados en los casos a. Bagosora et al o Militar I el 18/12/2008 en donde condenó a Theoneste Bagosora, Aloys Ntabakuze, Anatole Nsengiyumva a cadena perpetua y absolvió a Gratien Kahligi quien fue liberado; b. Caso contra Rukundo dictó la sentencia el 27/02/2009 y lo condenó a 25

⁹⁹⁹ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2008. *Óp, Cit.*

años de prisión; c. Caso contra Simeon Nchamihigo el 24/09/2008 lo condenó a prisión perpetua; d. Caso contra Simon Bikindi el 12/12/2008 lo absolvió de incitar a cometer genocidio, ser cómplice de cometer genocidio y crímenes de lesa humanidad, lo condenó a 15 años de prisión por incitación directa y pública para cometer genocidio; e. Caso contra Protais Zigiranyirazo lo condenó a 20 años de prisión el 18/12/2008 y f. Caso contra Callixte Kalimanzira lo condeno a 30 años de prisión el 02/06/2009.¹⁰⁰⁰

Igualmente, en este período 04 casos llegaron a su etapa final pendientes de sentencia (Caso contra Renzaho y Nsengimana, Gobierno II, Caso Butare, Caso Nshogoza). Para ese momento aún seguían en curso los casos: contra Setako, contra Munyakazi, contra Hategekimana, contra Karemera et al, contra Ntawukiliyayo y contra Muvunyi. En relación a las solicitudes de remisión de casos a las Salas del tribunal se tomaron las siguientes decisiones: en el caso contra Gatete se negó la solicitud el 17/11/2008; caso contra Gaspard Kanyarukiga se negó la remisión a Ruando en 16/12/2008; en los casos contra Munyakazi, Hategekimana y Kanyarukigi cursaban las apelaciones contra la decisión de la remisión. En ese período la Sala de Apelaciones del Tribunal tomo las siguientes decisiones: 02 sentencias de apelación del fondo, en el caso contra Muvunyi ordenó realizar un nuevo juicio, en el caso contra Karera confirmó la sentencia de prisión perpetua, 10 decisiones de apelaciones interlocutorias, 19 revisiones o reconsideraciones; 03 apelaciones de remisiones y 133 decisiones y ordenes previa a las apelaciones. En 03 casos se tomaron 27 decisiones de mociones preliminares. Se tomó la decisión de transferir 18 acusados condenados a cumplir su condena, a esa fecha contra 45 personas se habían completado un proceso y arrestado a 03 personas que se encontraban fugitivas.¹⁰⁰¹

El décimo quinto informe del Tribunal para el período del 01 de julio de 2009 al 30 de junio de 2010 expone que se tomaron las siguientes decisiones: se emitieron 07 sentencias en los casos 1. Contra Renzaho el 14/07/2009 condenandole a cadena perpetua; 2. Caso contra Nseugimana declarado absuelto el 17/11/20009; 3. Caso contra Setako condenado a 25 años de prisión el 25/02/2010; 4. Munyakazi condenado a 25 años de prisión el 30/06/210; 6. Caso contra Nshogoza condenado

¹⁰⁰⁰ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2009. *Óp, Cit.*

¹⁰⁰¹ Ídem.

el 02/07/2009 a 10 meses de prisión; 7. Caso nuevo contra Muvunyi condenado a 15 años de prisión el 11/02/2010¹⁰⁰².

La Sala de apelación emitió las siguientes decisiones: 04 sentencias de apelación de sentencia: 1. Caso Zigiranyirazo el 16/11/2009 revocó la sentencia de la Sala de primera instancia y dictó absolución; 2. Caso contra Bikindi el 30/09/2009 confirmó la condena de 15 años de prisión; 3. Caso contra Nchamihigo el 18/03/2010 otorgo parcialmente la apelación y anulo la sentencia y lo condenó a 40 años de prisión; 4. Caso contra Nshogoza desestimo la apelación y confirmó la sentencia el 15/03/2010. Se encontraban en fase de redacción 06 sentencias en los casos: 1. Ntawakuliyayo, 2. Gobierno II, 3. Butare, 4. Militar II, 5. Idelphonse Hategekimana, 6. Kanyarukiga. Además, estaban en curso los casos contra Ngirabutaware, Gatete, Karemera et al, Nzabonimana¹⁰⁰³.

En este período fueron detenidos 03 prófugos en la República Democrática del Congo y Uganda 8 (Gregoire Ndahimana, Idelphonse Nizeyimana y Jean Bosco Uwinkindi). Asevero el tribunal que había 10 personas prófugas de las cuales 07 serían remitidos a la jurisdicción nacional y los 03 restantes juzgados en Arusha. Con relación al trabajo la Sala I de Primera Instancia ha finalizado su trabajo, los acusados que han completado su proceso de apelación 31 acusados lo han terminado.¹⁰⁰⁴

El décimo sexto informe del Tribunal para el período del 01 de julio de 2010 al 30 de junio de 2011 expuso que durante ese período tomaron las siguientes decisiones: 273 decisiones y ordenes, 05 decisiones de transferencia de condenados a sitios de cumplimiento de condena¹⁰⁰⁵.

Emitió 06 sentencias en los casos 1. Butare donde condeno 06 acusados el 24/06/2011 a prisión perpetua condeno a Nyiramashuko, Ntahabali, Ndayambaye , a 25 años de prisión Nsambimana, 35 años de prisión Kanyabashi, 30 año de prisión Ntziryayo; 2. Militar II emitió la sentencia el 17/05/2011 condenó y liberó al acusado Ndinhiyimana, Bizimungu condenado a 30 años de prisión, a 20 años de prisión

¹⁰⁰² TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2010. *Óp, Cit.*

¹⁰⁰³ *Ídem.*

¹⁰⁰⁴ *Ídem.*

¹⁰⁰⁵ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2011. *Óp, Cit.*

Nzuwonemeye y Sagahutu, 3. Hategekimana fue condenado a prisión perpetua el 06/12/2010; 4. Kanyarukiga fue condenado el 01/11/2010 a 30 años de prisión por los delitos de genocidio y exterminio, fue absuelto de complicidad en genocidio; 5. Ntawukuliyayo fue condenado el 03/08/2010 a 25 años de prisión por genocidio, y absuelto por incitación directa y pública a cometer genocidio; 6. Gatete fue condenado a prisión perpetua el 29/03/2011 por genocidio y exterminación¹⁰⁰⁶.

La Sala de Apelaciones emitió sentencias en los casos: 1. Rukundo confirmó la sentencia de la sala de primera instancia el 20/10/2010 pero le redujo la pena a 23 años de prisión; 2. Caso contra Kalimanzira confirmó la sentencia por los cargos y le redujo la sentencia a 25 años de prisión el 20/10/2010; 3. Caso Renzaho se confirmó su sentencia el 01/04/2011; 4. Caso Muvunyi fue confirmada su sentencia el 21/10/2010. Pendiente en esa época para deliberación las apelaciones de los casos Setako y Munyakazi. Estaban en curso los casos contra Ngirabatware, Karemera et al, Nzabonimana, Ndahimana, Nizeyimana. Conoció mociones previas al juicio en los casos contra Jean Uwinkindi y Bernard Munyagashari. En ese periodo fueron detenidos los acusados: Felicien Kabuya, Protais Mpiranya, Augustin Bzimana y además 35 personas completaron su proceso en el nivel de apelación.¹⁰⁰⁷

En el décimo séptimo informe del Tribunal para el período del 01 de julio de 2011 al 30 de junio de 2012 expuso que durante ese período se encontraban en proceso la estrategia de cumplimiento del tribunal y ha tomado las siguientes decisiones: 05 sentencias : 1. Caso Gobierno II con fecha 30/09/2011 declaró culpable y condenó a Mugenzi y Mugiraneza a 30 años de prisión, absolvió y liberó a los acusados Bizimungzu y Bcamumpaka de los cargos de genocidio e incitar públicamente a cometer genocidio; 2. Caso contra Ndahimana el 17/11/2011 fue condenado a 15 años de prisión por genocidio, exterminio y crímenes de lesa humanidad; 3. Caso contra Karemera et al el 21/12/2011 los acusados Karemera y Ngirumpatse fueron condenados a prisión perpetua por los crímenes de genocidio, incitar directa y públicamente a cometer genocidios, exterminación, violación y agresión sexual como crimen de lesa humanidad; 4. Caso contra Nzabonimana fue condenado a 31/05/2012 a prisión perpetua; 5. Nizeyimana condenado 19/06/2012 fue condenado a prisión

¹⁰⁰⁶ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2011. *Óp, Cit.*

¹⁰⁰⁷ *Ídem.*

perpetua. El caso Ngirabatware. Los casos fueron aceptados para remitirse a Ruanda: 1. Caso Fulgence Kayishema el 22/02/2012; 2. Caso Charles Sikubwabo el 26/03/2012; 3. Caso Ladislas Ntaganzwa el 08/05/2012; 4. Caso Charles Ryandikayo el 20/06/2012; 5. Caso Aloys Ndimbati el 25/06/2012; 6. Caso Phéneéas Munyarygarama 28/06/2012; 7. Caso Bernard Munyagishari 06/06/2012, decisión que se informó estar en apelación. La solicitud del caso contra Zigiranyirazo fue rechazado y negado la negación de compensación financiera por los 8 años y medio de prisión que vivió antes de ser absuelto.¹⁰⁰⁸

Adicionalmente, la Sala de apelaciones emitió los siguientes fallos: 08 decisiones de apelación de las sentencias en los casos : 1. Caso Munyakazi confirmó su sentencia el 28/09/2011; 2. Caso Setako confirmó su sentencia el 28/09/2011; 3. Caso Ntawukuliyayo reformó su sentencia a 20 años de prisión el 03/08/2010; 4. Caso Bagosora modificó la condena a 35 años de prisión y excluyó la conclusión que indicaba que era responsable de ordenar ciertos crímenes; 5. Caso Nsengyumva reconoció sentencia sobre asesinato como crimen de lesa humanidad y reformó sentencia a 15 años de prisión; 6. Caso Ntalakuze el 08/05/2012 se confirmó su sentencia y revocó la condena por impedir a los refugiados buscar refugio y asesinatos por delitos milicianos, emitiendo una nueva condena de 35 años de prisión; 7. Caso Kanyarukiga se confirmó su sentencia y condena el 08/05/2012; 8. Caso Hategekimana se confirmó su sentencia el 08/05/2012; 01 decisión de apelación de remisión, 03 decisiones de apelaciones interlocutorias, 09 decisiones de revisiones y reconsideración, 139 órdenes y decisiones previas a la apelación, 03 decisiones de liberar a 03 acusados que habían cumplido con $\frac{3}{4}$ de su condena¹⁰⁰⁹.

Agregó que se encontraba en deliberación de la apelación el caso de Getete. A este período 43 personas habían completado su juicio en la fase de apelación y la Sala III de primera instancia ha completado su trabajo. Los casos en contra de Kahuga, Mpiranya y Birimana han sido trasladados al sistema residual.¹⁰¹⁰

El décimo octavo informe del Tribunal del período al 01 de julio de 2012 al 30 de junio de 2013, el tribunal afirmó que las Salas de primera instancia evacuaron su trabajo,

¹⁰⁰⁸ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2012. *Óp, Cit.*

¹⁰⁰⁹ *Ídem*

¹⁰¹⁰ *Ídem*

al dictar la Sala II la sentencia en el Caso Ngirabatware el 20/12/2012 condenándolo a 35 años de prisión por incitación pública y directa a cometer genocidio y violación como crimen de lesa humanidad¹⁰¹¹.

Además, ordenó el procesamiento por medio del mecanismo de 02 personas por desacato al tribunal y que se encontraba pendiente por haber sido impugnada. Además, las salas de apelaciones tomaron las siguientes decisiones 02 fallos definitivos: 1. Caso Gatete el 09/10/2012, se reformo su condena de cadena perpetua 40 años prisión por conspiración para cometer genocidio; 2. En el caso contra Mugenzi y Mugiraneza el 04/02/2013 revocó las condenas dictadas por cometer genocidio e incitación directa y pública para cometer genocidio, dicto la absolución y ordeno su liberación inmediata⁰³ decisiones de apelación de remisión¹⁰¹².

Las apelaciones en los casos Ndindiliyamana etal y Ndahimana. 04 decisiones relacionadas con solicitudes de remisión y revisión, 82 órdenes de decisiones previas a la apelación. 08 apelaciones de sentencia, 03 apelaciones de remisión a jurisdicciones nacionales, 05 mociones de remoción o revisión. En este periodo 46 acusados completaron su juicio a nivel de apelación. El Fiscal en este periodo, se enfocó en el traslado de responsabilidades del seguimiento a prófugos por el mecanismo residual internacional de los tribunales penales.¹⁰¹³

El décimo noveno informe del Tribunal del período al 01 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014, las Salas de primera instancia completaron su trabajo y las salas de apelaciones terminando el análisis de las apelaciones recibidas y han emitido 03 fallos. Las sentencias de apelaciones dictadas en los casos: 1. Caso contra Ndahimana fue reformada y se le aumentó su condena a 25 años de prisión; 2. En el caso Militar II la Sala el 07/02/2014 decidió resolver por separado en relación al acusado Bizimungu. El 11/02/2014 dictó sentencia respecto de los acusados Ndindiluyimana, Nzuwonemeye, Sagahatu con reducción de sentencia a 15 años. El caso de Bizimungu se decidió el 30/06/2014 y se ratificó su pena de 30 años de prisión. Además, informó el tribunal que se guía el curso y en deliberación en los casos Karemera, Ngirumtse, Niziyimana y Nzabonimana. A este período 51 personas han

¹⁰¹¹ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2012. *Óp, Cit.*

¹⁰¹² TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2013. *Óp, Cit.*

¹⁰¹³ *Ídem.*

completado su proceso a nivel de apelación y 01 acusado ha sido trasladado a Ruanda. El fiscal se encargó de trasladar autoridad al mecanismo residual internacional de los tribunales penales.¹⁰¹⁴

El vigésimo informe del Tribunal del período al 01 de julio de 2014 al 30 de junio de 2015 el tribunal estaba implementando su estrategia de finalización, las Salas de primera instancia completaron su trabajo y las salas de apelaciones en la parte final de decisión de las apelaciones recibidas y emitieron 25 órdenes y decisiones previas a resolver la apelación; 03 fallos. Las sentencias de apelaciones dictadas en los casos: 1. Caso contra Karemera y Ngirumpate confirmo la condena y cargos de los acusados el 29/09/2014; 2. Caso contra Nizeyimana el 29/09/2014 revocó la sentencia de cadena perpetua y le impuso prisión de 35 años; 3. Caso contra Nzabonimana el 29/09/2014 confirmó su sentencia y la cadena perpetua. Se indicó que seguía el curso y deliberación la apelación del caso Butare. El Tribunal había completado el proceso en fase de apelación de 55 personas. El Fiscal se concentró en el traslado de responsabilidad de búsqueda de prófugos y apoyo a autoridades nacionales para el manejo de casos traslados y los que se trasladaran. Que se estaban revisando 04 casos por desacato y falso testimonio de fugitivos antes del cierre del tribunal.¹⁰¹⁵

23. ANÁLISIS CUALITATIVO

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda obtuvo más críticas que el Tribunal para la Ex Yugoslavia las principales fueron relacionadas con los altos costos operativos de la institución que no concuerdan con los resultados, la falta de operatividad, corrupción, mala administración y ejecución de recursos y el letargo de su trabajo.

Al igual que el Tribunal para la Ex Yugoslavia sus principales debilidades se identifican:

m. Localización: Por la imposibilidad de iniciar operaciones en Arusha, hizo que trabajara desde la Haya y que el trabajo en Kigali no se ejecutase como en algún momento el gobierno de Ruanda lo deseó, su localización fuera del

¹⁰¹⁴ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2014. *Óp, Cit.*

¹⁰¹⁵ TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda, 2015. *Óp, Cit.*

territorio de su jurisdicción se convirtió en uno de los principales obstáculos. No sólo la lejanía para conocer y evaluar lo acontecido, sino en adición su imposibilidad de conocer a fondo las razones de las atrocidades, así como la imposibilidad de realizar las diligencias necesarias para que las investigaciones fueran efectivas.

- n. Problemas de comunicación:* Al parecer el Tribunal Penal Internacional para Ruanda al compartir fiscalía con el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, también compartió muchas actividades de administración y al igual que este no consideró tener una estrategia de comunicación con la población más interesada en su gestión, ni tampoco en instruir a los diferentes estamentos del sistema de justicia local en las técnicas, reglas y gestión del proceso de administrar justicia que estaba llevando a cabo. Pese a la creación del programa Out Reach, debido a que su oficina no fue dotada ni con los recursos suficientes ni el personal requerido. El propósito del programa consistía en comunicar fundamentalmente que los juicios y sentencias. Convencer a las personas de la región que los fallos no eran el resultado de favorecer a un grupo étnico específico, sin embargo; los fallos no fueron traducidos al idioma de los ruandeses, no hubo adecuada difusión de las actividades del Tribunal en Ruanda.
- o. Problemas de retardo en concluir casos,* originado por varios factores como el tiempo que le tomó al Tribunal lograr su organización institucional, aunado al tema de compartir fiscal con el Tribunal para la Ex Yugoslavia, la errática actuación de Carla del Ponte como fiscal, el entorpecimiento de la investigación por el gobierno de Ruanda al llegar a negar incluso las visas para los equipos de investigación, practicas dilatorias por parte de la defensa, todo esto contribuyó al prestigio de ineficacia
- p. Críticas en la forma de manejar el Tribunal:* El trabajo del Tribunal estuvo minado por acusaciones de favoritismo, discriminación racial, corrupción, malos manejos, así como el retardo para nombrar a los jefes de investigación radicados en Arusha.
- q. Dificultades para difundir el mensaje de reconciliación:* En materia de la reconciliación, tuvo muchos problemas, entre ellas las dificultades de

comunicación del Tribunal con las comunidades locales y la falta de recursos para atender a las víctimas.

- r. *Falta de contribución al fortalecimiento de la justicia de Ruanda:* Se percibe de esta manera debido a:
 - v. La lejanía del Tribunal y su falta de comunicación con la población y la ausencia de jueces de Ruanda.
 - vi. No se capacitó al personal nacional, ni sesiones de intercambio con las cortes locales.
- s. *Intento de justificación de resultados:* Al igual que el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda necesitaba responder eficientemente a los países que financiaron la institución mostrando resultados.
- t. *Incapacidad de proteger adecuadamente a las víctimas y a los testigos:* Las víctimas fueron tratadas como testigos protegidos durante los juicios, sin embargo; la protección únicamente se brindaba en el lugar donde declaraban o participaban en el juicio Arusha, el Tribunal no tuvo la capacidad de proteger a las víctimas en Ruanda.

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda tuvo una contribución positiva a la justicia penal internacional, sin embargo, al comparársele con otro tribunal, su aporte fue minimizado en relación con las contribuciones del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia.

El Consejo de Seguridad afirmó que su mayor contribución “*fue al proceso de reconciliación nacional, al restablecimiento de la paz y seguridad del país, a la lucha contra la impunidad, al desarrollo de la justicia penal internacional, especialmente en lo referente al genocidio como crimen de lesa humanidad*”¹⁰¹⁶.

El Tribunal tuvo muchos problemas para poder operar, en primer lugar, el que la fiscalía fuera compartida con el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia,

¹⁰¹⁶ ONU. 2015. *Óp. Cit.*

la falta de instalaciones adecuadas para operar en Arusha provocó que se estableciera sede en la Haya.

Otro grave problema fueron los fiscales encargados, el mandato de Carla Ponte fue catalogado como errático. En general hubo muchas alegaciones de favoritismo y discriminación racial. Aunado a que durante 20 meses estuvo vacante el puesto de fiscal adjunto y que pasaron 3 jefes interinos de diligencias.

Al Tribunal se integró muy poco personal ruandés, a excepción de equipos de defensa, asistencia a testigos, traducciones y relaciones con la prensa.

Otro de los graves problemas fue la falta de financiamiento para el Tribunal y la falta de interés de Ruanda provocando que la puesta en marcha fuera caótica.

Los órganos del Tribunal estuvieron separados geográficamente, situándose en tres ciudades diferentes, Arusha, La Haya y Kigali, aumentando los obstáculos para su implementación y funcionamiento, sumando a los problemas de logística y comunicación que no se tomaron en cuenta cuando se creó.

Se criticó la falta de interés del Tribunal por darse a conocer, en Ruanda casi no se conocían las decisiones de este, porque tampoco se tradujeron al lenguaje nacional.

La eficacia del Tribunal se apreció en situaciones: *“las detenciones, la asistencia judicial y la protección a testigos”*¹⁰¹⁷.

Se catalogó que el gasto para la entrevista a testigos fue excesivo en comparación con los resultados obtenidos.

Luego de este estudio analítico en los aspectos que a mi juicio considere de mayor relevancia, se puede establecer que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda ha contribuido a la lucha contra la impunidad, en números los resultados no se consideran demasiado exitosos, sin embargo, la contribución al derecho penal internacional en la forma en que se juzgó el genocidio ha sido su gran aporte.

¹⁰¹⁷ NTAGANDA, Eugéne. 2005. *Óp. Cit.* Páginas: 92 y 93

A continuación, se presenta de forma gráfica y sintética el trabajo realizado por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

		Mandato	Duración del Mandato	Cesación de los hechos que originaron el mandato	Inicio del primer juicio	Universo de casos	Casos procesados y/o relaciones procesales	Tiempo promedio de los casos	Casos pendientes de resolución	% Casos presentados versus casos resueltos	% Casos posibles de procesamiento versus casos resueltos
1	Tribunal Penal Internacional para Ruanda	Enjuiciamiento de los presuntos responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Ruanda.	Tiempo indeterminado	Julio de 1994	16 de febrero de 1996	93	61	Se desconoce	3	65.5%	65.5%

SUB - SECCIÓN A.3

TRIBUNALES HÍBRIDOS

Los Tribunales Híbridos, internacionalizados o mixtos surgen con la necesidad de crear un modelo de justicia más barato y eficiente para combatir la impunidad¹⁰¹⁸. Aunado a que el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas, no estaba dispuesto a crear más Tribunales Internacionales después de los de la Ex Yugoslavia y Ruanda¹⁰¹⁹.

Las razones de su creación son diversas, complejas y dependen del contexto de cada país. Con frecuencia se citan como razones para su creación la incapacidad, la falta de recursos a nivel nacional, el miedo a los prejuicios y falta de independencia del régimen jurídico¹⁰²⁰.

Estos tribunales se diseñaron para abordar crímenes específicos en un marco temporal específico y con mandato para enjuiciar a individuos¹⁰²¹. Están compuestos por autoridades internacionales y autoridades locales con más posibilidades de desarrollar una cultura de protección de los derechos y fortalecimiento de la cultura jurídica, incluso por encima de la Corte Penal Internacional¹⁰²². Entre sus fines se encuentra colaborar al derecho a la justicia y a un recurso eficaz, poner fin a la cultura de impunidad y contribuir a la reconciliación¹⁰²³. A partir de estos fines también inicia la diversificación de los delitos a conocer, haciendo la transición a delitos contenidos

¹⁰¹⁸ DONLON, Fidelman. 2011, 2013. Hybrid tribunals, En: SCHABAS, William A.; Bernaz, Nadia. *Routledge handbook of international criminal law*, Routledge. Primera Edición. Londres y Nueva York: Taylor & Francis Group. Páginas: 85. ISBN: 978 – 0 – 415 – 5520- 5

¹⁰¹⁹ Ídem

¹⁰²⁰ OFICINA del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 2008. Cuestiones Preliminares. *Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto. Aprovechamiento al máximo del legado de los tribunales mixtos* [en línea]. Ginebra: Naciones Unidas, Páginas: 5 y 6. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] ISBN: 978.92.1.354107-4. Disponible en: <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HybridCourtsSP.pdf>

¹⁰²¹ ONU Mujeres. 2013. Mecanismos internacionales e internacionalizados. En: ONU Mujeres [en línea]. Disponible en: <https://www.endvawnow.org/es/articles/1671-mecanismos-internacionales-e-internacionalizados-.html#:~:text=Similares%20a%20los%20tribunales%20penales,mandato%20de%20enjuiciar%20a%20individuos>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

¹⁰²² DAME, Frank, 2015. The Effect of International Criminal Tribunals On Local Judicial Culture: The Superiority Of The Hybrid Tribunal. Michigan State University College of Law Journal of International Law. Michigan: Michigan State University College of Law Journal of International Law, Vol.24. Sin ISSN.

¹⁰²³ OFICINA del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 2008 *Óp. Cit.* Página: 6

en los Códigos Penales de los países, dejando de ser esfuerzos desde el Derecho Penal Internacional.

Han sido creados con el considerable apoyo de las Naciones Unidas, compartiendo el objetivo de combatir la impunidad por medio del castigo de las violaciones graves al derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos¹⁰²⁴. Con el fin de evitar futuras violaciones en las sociedades donde se aplica su jurisdicción, una vez estas terminen con sus conflictos.

La comunidad internacional está activamente involucrada en la creación de estos esfuerzos, trabajando con el país implicado en el establecimiento del tribunal que hibridará o internacionalizará el sistema nacional con el sistema internacional.

Estos Tribunales empezaron a surgir a finales de los años noventa, no existe un modelo estandarizado y se considera que son más susceptibles de tener un impacto en el país afectado que los tribunales internacionales y por ende pueden contribuir a desarrollar capacidades nacionales en el sistema judicial.

DONLON¹⁰²⁵ hace la diferencia de los modelos de tribunales híbridos, la que divide en tres categorías, siendo estas:

- a. La primera categoría abarca los tribunales creados como parte del mandato de una administración territorial de las Naciones Unidas, en los que se incluye a:
 - i. Los Paneles Especiales de Delitos Graves en Timor Oriental y
 - ii. La Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo.
- b. La segunda categoría comprende los modelos creados por mutuo acuerdo entre las Naciones Unidas y el Estado miembro donde se cometieron los crímenes, en esta categoría se encuentran:
 - i. Tribunal Especial para Sierra Leona
 - ii. Salas Extraordinarias de la Corte de Camboya

¹⁰²⁴ ONU Mujeres. 2013. *Óp. Cit.*

¹⁰²⁵ DONLON, Fidelman. 2011, 2013. *Óp. Cit.*

- iii. Tribunal Penal Especial en la República Centroafricana
- iv. Mecanismo Independiente de Investigación para Siria
- v. Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar
- c. La tercera categoría reúne a los tribunales híbridos que no han sido creados por las Naciones Unidas, encontrando los casos de:
 - i. La Sala Especial de Crímenes de Guerra de Bosnia Herzegovina
 - ii. El Alto Tribunal Penal Iraquí
 - iii. Cámaras Africanas Extraordinarias
 - iv. Tribunal Especial para Kosovo

Estos Tribunales sobreviven por la cooperación, financiación y asistencia judicial internacional y se diferencian de los tribunales internacionales por diferentes aspectos tales como:

- a. Pueden ser parte del poder judicial de un país determinado o ser insertados en el sistema judicial local¹⁰²⁶;
- b. Se componen por personal nacional e internacional;
- c. Su normativa de aplicación es una combinación de derecho internacional y nacional.

Los tribunales híbridos ¹⁰²⁷ están formados por jueces nacionales e internacionales y se caracterizan por ser una alternativa a los tribunales penales internacionales *ad hoc*, algunos no se integran en los sistemas judiciales internos y actúan de forma y con personalidad internacional independiente.

Este trabajo no abordará el Tribunal Penal Especial en la República Centroafricana, el Mecanismo Independiente de Investigación para Siria y el Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar, por ser mecanismos que están en desarrollo y su reciente creación no permite aún evaluar su eficacia.

Tampoco se analizarán los mecanismos incluidos en la tercera categoría que corresponde a los tribunales híbridos que no han sido creados por las Naciones Unidas, como es el caso de la Sala Especial de Crímenes de Guerra de Bosnia

¹⁰²⁶ ONU Mujeres. 2013. *Óp. Cit.*

¹⁰²⁷ Algunos de estos órganos judiciales han merecido severas críticas por su falta de legitimidad, parcialidad y falta de garantías procesales, ya que incluso han aplicado la pena de muerte.

Herzegovina, el Alto Tribunal Penal Iraquí, las Cámaras Africanas Extraordinarias y el Tribunal Especial para Kosovo por ser mecanismos en su mayoría creados por acuerdos entre estados o entidades regionales como el Consejo de Europa, la participación de la comunidad internacional como tal no existe o está limitada.

A.3.1

TRIBUNALES HÍBRIDOS QUE SE CREAN COMO PARTE DEL MANDATO DE LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL DE LA ONU

Clasificados de esa manera por Donlon, quien otorga su origen como parte de un del mandato de una administración territorial de las Naciones Unidas, en este caso las Naciones Unidas por medio de esa administración introdujo la unidad penal internacionalizada dentro del sistema jurídico nacional. Estos carecen de independencia internacional y solo ostentan algunos rasgos de índole internacional, son tribunales locales que reciben asistencia y apoyo internacional, no cuenta con un tribunal o sala especial sino incorpora jueces internacionales a su sistema judicial.

En esta categoría se incluye a:

- i. Los Paneles Especiales de Delitos Graves en Timor Oriental y
- ii. La Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo.

CAPÍTULO V

SALAS ESPECIALES DE DELITOS GRAVES EN TIMOR ORIENTAL O PÁNELES ESPECIALES DE DILI

ANTECEDENTES

En 1999 los ciudadanos de Timor Occidental estaban en disposición de lograr su independencia, sin embargo, parte del ejército indonesio empezó a reclutar milicias armadas de la localidad para concertar una ola de asesinatos, violencia y un sin número de crímenes atroces. Antes de que los resultados se fueran anunciados, los grupos militares que habían sido reclutados y los cuales estaban bajo la protección del gobierno indonesio, desataron una fuerte ola violenta en todo el territorio, en consecuencia, la Organización de Naciones Unidas promovió la creación de un órgano internacional que interviniera en la región.

Se infiere que más de mil cuatrocientas personas que estaban a favor de la independización fueron asesinadas y una mayor cantidad sufrieron de otro tipo de violación de derechos humanos, alrededor de doscientas cincuenta mil personas fueron desplazadas hasta indonesia y la localidad (Timor) fue saqueada y en algunos casos destruida.

“La Comisión Internacional de Investigación para Timor Oriental, establecida por la ONU, concluyó que se habían cometido violaciones graves y sistemáticas de Derechos humanos y del Derecho internacional humanitario, y recomendó la creación de un Tribunal penal internacional”¹⁰²⁸

Derivado de lo atroces hechos ocurridos se dictaron una serie de resoluciones en 1999¹⁰²⁹ por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, condenando los actos violentos acaecidos en aquel entonces, de los cuales el Consejo manifestó

¹⁰²⁸ UNIVERSITAT de Illes Balears Catedral Iberoamericana. S.F. Paneles Especiales de Dili para Timor Leste. En: *UNIVERSITAT de Illes Balears Catedral Iberoamericana* [en línea]. Disponible en: <https://fci.uib.es/Servicios/libros/veracruz/Fraschina/3.-Paneles-Especiales-de-Dili-para-Timor-Leste..cid211449> [Consulta 10 de diciembre de 2020].

¹⁰²⁹ Resoluciones dictadas 1236, 1246, 1262, 1264, y 1272.

su preocupación, en atención a que los acontecimientos deterioraron la situación humanitaria alcanzando los recintos y al personal de la Organización de Naciones Unidas.

Las graves violaciones cometidas traspasaron las fronteras nacionales convirtiéndose varias partes del mundo en el escenario de atrocidades producto del conflicto en Timor Oriental. El Reglamento contempló dicho extremo, atribuyéndole así al panel la denominada “jurisdicción universal” sobre las graves ofensas cometidas en el territorio de Timor Oriental, al igual que sobre los casos en que dichas ofensas fueran cometidas o sufridas por un ciudadano de Timor Oriental.

1. ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ FUE CREADO?

Las Salas Especiales de Delitos Graves en Timor – Leste fueron creadas ante las violaciones a los derechos humanos que se vivieron en dicho país. La Comisión Internacional de Investigación establecida por la Organización de Naciones Unidas, recomendó la creación de un Tribunal Internacional que conociera judicialmente las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo; la propuesta fue rechazada y se dio paso a la creación de un panel especial con jueces nacionales e internacionales para juzgar “delitos graves”.

La Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental fue creada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y le otorgó la facultad para *administrar justicia y “adoptar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de su mandato”* por lo que emitió el Reglamento 2000/15 de 6 de junio de 2000, en el cual se establecieron los Paneles Especiales dentro de Tribunales locales en el Tribunal de Distrito de Dili y en la Corte de Apelaciones con jurisdicción sobre los denominados “delitos graves” cometidos entre el 1 de enero y el 25 de octubre de 1999.

2. PAPEL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN SU CREACIÓN

El papel de la comunidad internacional fue activo y se realizó por medio del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que nombró una Comisión Internacional de Investigación para que evaluara los actos violentos cometidos en Timor Oriental, esta Comisión concluyó que se habían cometido graves violaciones a los derechos

humanos e internacionales en este territorio, por lo que el Consejo de Seguridad emitió en 1999 las resoluciones 236, 1246, 1262, 1264, y 1272¹⁰³⁰ para condenar los hechos calificándolos como atroces y que vulneraban la seguridad y el goce pleno de los derechos de los ciudadanos, también expresa su preocupación sobre el deterioro de la situación, es así como se establece la creación de los tribunales penales internacionales para enjuiciar a las personas responsables de esos actos violentos y contribuir en la restitución de los derechos humanos y del orden social.

3. ¿CÓMO SE ABORDÓ EL TEMA DE LA SOBERANÍA?

En este caso no se debatió el tema de soberanía para creación del tribunal puesto que las Naciones Unidas consideraban a Timor Oriental como un territorio no autónomo, precisamente la creación del Tribunal era un paso para establecer la autonomía y el Estado de Derecho en el país.

Es importante recordar que los crímenes internacionales sirven como límite a la soberanía del Estado, debido a que la soberanía cede el paso a las prerrogativas de la comunidad internacional¹⁰³¹.

4. TIPO DE GOBIERNO ¿DEMOCRACIA?

En ese momento el país estaba en una transición hacia su independencia, por lo que no existía democracia.

5. ¿ESTADO DE DERECHO?

En un comienzo no podría asegurarse que la sala penal de Timor Oriental se haya constituido en un Estado de Derecho pleno, ya que los acontecimientos desplegados por la milicia nacional de indonesia, sin embargo, a pesar de las circunstancias y los actos violentos ocurridos el 19 de octubre de 1999, ese año se celebró una consulta que fue reconocida oficialmente por la Asamblea Consultiva del Pueblo Indonesio reconocía oficialmente.

¹⁰³⁰ UNIVERSITAT, de les Illes Balears, Catedral Iberoamericana. S.F. *Óp. Cit.*

¹⁰³¹ WILLIAM, Sarah, 2012. *Hybrid and Internationalised Criminal Tribunals. Selected Jurisdictional Issues*. Hart Publishing. Primera Edición. Norte América: Hart Publishing. Página: 2 ISBN: 978 – 1 – 84113-672-1.

Los timoneses orientales acudieron a las urnas en una nueva oportunidad el 30 de agosto de 2001 para elegir la Asamblea Consultiva que sería la encargada de promulgar una nueva Constitución, la que comenzó en vigencia el 22 de marzo de 2002. *“La República Democrática de Timor Oriental alcanza finalmente el 20 de mayo de 2002 su independencia total, el 6 de septiembre se adhiere al Estatuto de Roma, y el 27 de septiembre de ese mismo año es admitido como Estado miembro de Naciones Unidas”*¹⁰³²

6. ¿ORIGEN BASADO EN CIERTAS SUPOSICIONES O CONDICIONES FÁCTICAS?

Las Salas surgieron por condiciones fácticas, debido a que su creación se derivó de la ejecución de hechos atroces que no debían quedar en la impunidad.

7. DOCUMENTO CREADOR

El 25 de octubre de 1999, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableció la Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental, conocida como UNTAET, por medio de la Resolución 1272, la cual estaba destinada a administrar el territorio y ejercer el poder legislativo, ejecutivo y judicial hasta el momento en que se pudieran realizar elecciones generales y la población eligiera a su gobierno, la decisión de crear las Salas Especiales en Timor Oriental para juzgar graves violaciones a los derechos humanos perpetrados en 1999.¹⁰³³

Construyéndose el andamiaje judicial propio por parte de la UNTAET, en la que se buscó enjuiciar a los responsables de los crímenes contra la humanidad cometidos durante el año 1999. Estableciéndose como parte del sistema de justicia, *“un ‘Panel Especial Internacional’ en la Corte de distrito de Dili, con jurisdicción exclusiva sobre los crímenes más graves perpetrados en el territorio de Timor Oriental entre el 1 de enero y el 25 de octubre de 1999”*¹⁰³⁴.

¹⁰³² UNIVERSITAT, de les Illes Balears, Catedral Iberoamericana, *Óp. Cit.*

¹⁰³³ Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 1999. Resolución 1272 del 25 de octubre de 1999, Página 02. En: *Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas* [en línea]. Disponible en: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/312/77/PDF/N9931277.pdf?OpenElement> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

¹⁰³⁴ UNIVERSITAT, de les Illes Balears, Catedral Iberoamericana, *Óp. Cit.*

Las Salas Especiales para Timor Oriental se establecieron por medio del Reglamento 2000/15 de la UNTAET del 06 de junio 2002.¹⁰³⁵

8. MANDATO

El mandato es bastante específico, en este se estableció que tienen competencia para enjuiciar los delitos cometidos en el período comprendido del 01 de enero de 1999 al 25 de octubre de 1999, con territorialidad universal para juzgar a todas las personas que cometieron estos delitos.¹⁰³⁶

La UNTAET estableció los paneles especiales de conformidad con su mandato general que buscaba restablecer la ley y el orden, en base a la iniciativa del personal internacional que consideraba que era un *"imperativo moral"* para que la ONU creara un mecanismo de responsabilidad.¹⁰³⁷

Los delitos sobre los que el Tribunal tenía competencia exclusiva eran: el genocidio, los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, delitos sexuales, asesinatos y tortura.¹⁰³⁸

La naturaleza mixta o híbrida del tribunal se estableció por medio de la *"composición de 2 tipos de jueces, internacionales y nacionales. La primera instancia estaba formada por 2 magistrados extranjeros y 1 timorenses, en tanto que la Corte de apelación se componía de 5 miembros internacionales y 2 nacionales"*¹⁰³⁹.

Aplicando como marco normativo la *"legislación de Timor reconocida en la Sección 2ª y 3ª de la Regulación 1999/1 y la emanada de la UNTAET, así como los tratados, normas y principios de Derecho internacional"*.¹⁰⁴⁰

¹⁰³⁵ Universidad de Stanford, 2000. Tribunales especiales de 1984 a la fecha: Reglamento 2000/15, Página 01. En: *Biblioteca de Stanford* [en línea]. Disponible en: <https://exhibits.stanford.edu/virtual-tribunals/catalog/xh670tz7801> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

¹⁰³⁶ Ídem. Página 02.

¹⁰³⁷ Ídem.

¹⁰³⁸ Ídem.

¹⁰³⁹ UNIVERSITAT, de les Illes Balears, Catedral Iberoamericana, *Óp. Cit.*

¹⁰⁴⁰ Ídem.

Sección 3.1, Reglamento UNTAET 2000/15

El Reglamento 2000/30 de la UNTAET relativo a las normas transitorias de Procedimiento Penal establecía el derecho procesal bajo el cual los tribunales timorenses, incluidos los paneles especiales operaban.¹⁰⁴¹

D.OBJETIVOS

El Reglamento¹⁰⁴² estipulaba en su preámbulo que el propósito del mismo era establecer paneles con jurisdicción exclusiva para conocer sobre graves ofensas criminales indicando *“For the purpose of establishing panels with exclusive jurisdiction over serious criminal offences as referred to under section 10.1 of UNTAET Regulation No 2000/11”* creándose así un tribunal mixto para frenar la incertidumbre y el clima de impunidad vivido por los abusos cometidos en contra de la población.

La normativa de las Salas Especiales de Timor estableció la jurisdicción universal sobre las personas naturales que cometieron los crímenes de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra humanidad y tortura, mientras que, por delitos sexuales y

¹⁰⁴¹ Naciones Unidas, 2000. Reglamento UNTAET 2000/30. En: *Naciones Unidas* [en línea]. Disponible en: <http://mj.gov.tl/jornal/lawsTL/UNTAET-Law/Regulations%20English/Reg2000-30.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

¹⁰⁴² En el Reglamento se implementan una serie de medidas con el fin resguardar la imparcialidad del tribunal ya que la transparencia es un elemento clave para el fortalecimiento del aparato judicial y la obtención de justicia. La composición misma del panel evidencia dicho resguardo al integrarse en su mayoría por jueces extranjeros, las secciones 22.1 y 22.2 establecen la integración de los paneles del Tribunal del Distrito de Dili indicando que éstos se componen de dos jueces extranjeros y uno de Timor Oriental mientras que en el caso del Tribunal de Apelaciones se integran de la misma forma salvo que la gravedad del caso requiera que se conforme con cinco jueces, caso en que tres de ellos deben ser extranjeros y dos nacionales.

Como medida para asegurar que los casos fueran llevados por el panel especial, la sección 1.4 establece que el panel puede solicitar la inhibitoria de cualquier otro panel o tribunal en cuanto a casos que le competen. En aras de garantizar la autenticidad y transparencia del proceso también se contempla una excepción al principio non bis in idem en la sección 11.3 indicando que se podrá juzgar nuevamente a persona condenada si el respectivo tribunal tenía la intención de ampararlo de responsabilidad penal o si se condujo el proceso de tal forma que las actuaciones fueron inconsistentes con la intención de conducirlo a la justicia.

La justicia local en ocasiones carece de los elementos idóneos que permiten juzgar adecuadamente un caso en particular, debiendo tomarse en cuenta que justicia cumplida no siempre es justicia efectiva. El Reglamento amplía la esfera jurídica de que gozan los tribunales locales estableciendo particularmente que el derecho aplicable no se circunscribirá al derecho nacional de Timor Leste sino que en los casos que proceda, tal como establece la sección 3.1 (b), se podrán tomar en cuenta los tratados aplicables al igual que reconocidos principios y normas del derecho internacional, incluyendo los principios en materia de conflictos armados establecidos por el derecho internacional en un afán de abastecer al órgano judicial de una variedad de elementos para hacer justicia que muchas veces la legislación local carece.

En un afán de condenar los actos que atentan contra la dignidad humana, la sección 17.1 esclarece que las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario no son sujetos a prescripción debido al fuerte impacto que tienen en la humanidad y el papel fundamental que juega su esclarecimiento y condena para disuadir su futura comisión y proteger los derechos fundamentales.

asesinatos, la jurisdicción territorial era limitada a crímenes cometidos dentro de Timor solamente¹⁰⁴³

E. ALCANCES DEL MANDATO

El establecimiento de las cámaras en Timor Oriental estipuló que cualquier acto cometido *“por subordinados no excluía a “su superior de responsabilidad penal si supiera o tuviera razones para saber que el subordinado estaba a punto de cometer tales actos o lo había hecho y el superior no pudo tomar las medidas necesarias y razonables para prevenir tales actos o castigar a los autores del mismo”*.¹⁰⁴⁴

La regulación de las Cámaras estipulaba que los crímenes de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de la tortura no estaban sujetos a ningún tipo de limitaciones.¹⁰⁴⁵

F. COMPETENCIA

La competencia se define en dos vías, por un lado, *vis a vis* las personas y por el otro, *vis a vis* los actos mismos.

La normativa de las Salas Especiales de Timor estableció la jurisdicción universal sobre las personas naturales que cometieron:

- a. crímenes de genocidio;
- b. crímenes de guerra;
- c. crímenes contra la humanidad y tortura.

Mientras que, por delitos sexuales y asesinatos, la jurisdicción territorial era limitado a crímenes cometidos dentro de Timor solamente.¹⁰⁴⁶

¹⁰⁴³ Secciones 1.3, 2.2 y 3, 4–7, Reglamento UNTAET 2000/15

¹⁰⁴⁴ Reglamento UNTAET 2000/15: Sección 16.

¹⁰⁴⁵ Reglamento UNTAET 2000/15: Sección 17.

¹⁰⁴⁶ Secciones 1.3, 2.2 y 3, 4–7, Reglamento UNTAET 2000/15

G. FORTALEZAS

La creación de las Salas fue un gran paso para la lucha contra la impunidad, capacitando a personal nacional en materia de investigación de los crímenes de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y tortura.

Las salas ubicadas en el territorio donde ocurrieron los hechos podían investigar de mejor manera, impartir justicia y ser más cercanas a las víctimas y a la sociedad afectada.

El apoyo internacional fue relevante para el fortalecimiento de capacidades de investigación y administración de justicia.

H. REGLAS DE ADMISIBILIDAD

En el particular caso de los tribunales especiales de Timor Oriental en el estatuto de creación, se puede establecer en los diferentes reglamentos y a su vez las diferentes secciones las reglas de admisibilidad que en ellas se consignaron, tales como:

- i. *Ratione Personae*: en lo que se refiere a: “la competencia personal, los Paneles Especiales la ejercieron sobre personas individuales, es decir naturales, que hubiesen cometido cualquiera de los crímenes que se mencionaban el Estatuto o haya ordenado, solicitado o inducido a otro a cometerlos; haya facilitado, ayudado, o haya contribuido de cualquier forma a que sean cometidos; y serán individualmente responsables con independencia del cargo oficial que ostente.”¹⁰⁴⁷
- ii. *Ratione Materiae*: Los “Paneles Especiales del Tribunal de Distrito de Dili, tenían competencia en delitos graves tales como: Genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, asesinato, delitos sexuales y tortura”¹⁰⁴⁸.

¹⁰⁴⁷ Universidad de Stanford, *Tribunales especiales de 1984 a la fecha: Reglamento 2000/15*, Óp. Cit. Secciones 14, 15 y 16

¹⁰⁴⁸ Universidad de Stanford, *Tribunales especiales de 1984 a la fecha: Reglamento 2000/11, 2000/15 y 2000/152*, Óp. Cit. Secciones 10.1, 1.3 de la 4 a la 9 respectivamente

- iii. Ratione Temporis: Con relación a la competencia temporal de los delitos, estos tendrían que haber sido ejecutados entre el 1 de enero y el 25 de octubre de 1999¹⁰⁴⁹
- iv. Ratione Loci: *“La competencia espacial se circunscribe al territorio de Timor Oriental¹⁰⁵⁰”. “La competencia personal y territorial era reconocida como “competencia universal”, lo que significaba que la competencia respondía a si el delito grave de que se trate fue cometido dentro del territorio de Timor Oriental; si fue cometido por un ciudadano de Timor Oriental; o la víctima del delito grave fue un ciudadano de Timor Oriental.”¹⁰⁵¹*

I. TIEMPO DETERMINADO

Los Paneles Especiales funcionaron a partir del 6 de junio de 2000 hasta el 20 de mayo de 2005¹⁰⁵².

J. DISTRIBUCIÓN DEL PODER.

Las Salas contaban con la Judicatura, la Fiscalía, Defensa, Secretaría del Tribunal y los procesados, la contratación del personal internacional corría a cargo de Naciones Unidas, quien ejercía el control por medio del Consejo de Seguridad¹⁰⁵³.

¹⁰⁴⁹ Universidad de Stanford, Tribunales especiales de 1984 a la fecha: Reglamento 2000/11, 2000/15 sección 10.2 y 2.3

¹⁰⁵⁰ UNIVERSITAT, de les Illes Balears, Catedral Iberoamericana, *Óp. Cit.*

¹⁰⁵¹ Universidad de Stanford, Tribunales especiales de 1984 a la fecha: Reglamento 2000/11, 2000/15 sección 7.3 y 2.1. 2.2 y 2.5 respectivamente

¹⁰⁵² ICTJ. S.F. Paneles Especiales para Crímenes Graves en Dili (Timor Oriental). En: *ICTJ* [en línea]. Disponible en: https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Factsheet-Timor-Oriental_0.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

¹⁰⁵³ Ídem

9. ¿SURGIÓ COMO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES?

A. ¿HABÍA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL?

Sí había responsabilidad internacional, aunque el país no era independiente, Portugal e Indonesia que tuvieron su control debían haber trabajado para evitar que los hechos no sucedieran.

Fue entonces que las Naciones Unidas decidió tomar el control del país por medio de la Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental y se inició el proceso de independencia, así como de lucha contra la impunidad por los hechos ocurridos.

El Derecho Penal Internacional impone responsabilidad individual a quienes cometen u ordenan violaciones al derecho internacional, por lo que la responsabilidad del Estado está involucrada al permitir que se comentan los hechos y dejarlos en la impunidad¹⁰⁵⁴.

B. OBLIGACIONES INTERNACIONALES

Si existían, estas son impuestas por el derecho internacional a los Estados, al obligarlos a no participar en determinadas conductas¹⁰⁵⁵, por lo que al ejecutarse los actos existe el incumplimiento de las obligaciones internacionales.

C. ¿ABORDA HECHOS ILÍCITOS INTERNACIONALES?

Los Paneles abordaron hechos ilícitos internacionales, puesto que existía conocimiento de los hechos ocurridos en el país medio de informes que evidenciaban los comportamientos atribuibles al Estado y que constituían una violación a las obligaciones internacionales.

¹⁰⁵⁴ WILLIAM, Sarah. 2012 *Óp. Cit.* Página: 2

¹⁰⁵⁵ Ídem

10. COOPERACIÓN DE LOS ESTADOS.

La cooperación de los Estados se refleja en la intervención que se da por medio del Consejo de Seguridad para crear las Salas, así como en el financiamiento para el funcionamiento y el apoyo por medio de los expertos internacionales que intervinieron en los procesos.

11. INDEPENDENCIA

El Consejo de Seguridad ejercía el control de las Salas por medio de una Comisión de Expertos independientes quienes tenían como función informar sobre los resultados del trabajo de las Salas, las que tenían independencia funcional para el desarrollo de las investigaciones bajo su competencia.

12. SELECCIÓN DE ACTORES

Los tribunales Especiales de Timor Oriental, surgieron de la necesidad de recomponer el orden y la paz social, que se había sido violentada por grupos subversivos que pretendían que no se alcanzara la independencia de este territorio, la cual se había gestado por parte de la milicia local apoyada del gobierno indonesio, los cuales desarrollaron actividades violentas en detrimento de los derechos humanos de los pobladores a favor de lograr su propósito de independencia.

En ese contexto y en ese orden de ideas, las personas que podían verse envueltas, no se circunscriben o limitan a un grupo en específico, sino que podrían formar parte de los casos, todas las personas individuales que hubieran podido tomar parte en la comisión de estos crímenes graves, ya sean militares independientemente de su rango, personas particulares que desplegaran cualquier conducta establecida en los reglamentos de estos tribunales o cualquier persona natural bien sea por seguir o dar instrucciones para que se cometiera cualquiera de estos crímenes graves que vulneraron el Estado de Derecho.

13. NORMATIVA RELEVANTE Y MARCO PROCEDIMENTAL

El Estatuto de las Salas Especiales para Timor Oriental/ Dili fue adoptado por la Resolución 1272 del Consejo de Seguridad del 25 de octubre de 1999, establecido

por el Reglamento 2000/15 de la UNTAET de 6 de junio de 2002 y el Reglamentado 2000/11 de la UNTAET de 6 de marzo de 2000.

Se estableció como sede simultánea, Dili, Indonesia- Timor Oriental, los idiomas de trabajo fueron tetum, portugués, bahasa, indonesio e inglés, aplicando las leyes de Timor Oriental y de derecho internacional y derecho internacional humanitario.

Fijando competencia de delitos cometidos en el período comprendido: 1 de enero de 1999 – 25 de octubre de 1999, con competencia universal, competencia en materia de apelaciones y competencia concurrente respecto de los tribunales nacionales: es exclusiva de las Salas Especiales.

Los delitos que podía perseguir eran: Genocidio, Crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, asesinato y delitos sexuales.

Esta Resolución se complementó con el Memorando de entendimiento entre la República de Indonesia y la administración de transición de las Naciones Unidas en Timor Oriental en materia de Cooperación en Materias Jurídicas, Judiciales y Derechos Humanos, que entró en vigor el 6 de abril de 2000, que fue celebrada entre la República de Indonesia y la Administración de transición de las Naciones Unidas en Timor Oriental.

Como complemento de la resolución 45/117 de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1990, adoptando un Tratado Modelo de Asistencia Mutua en Materia Penal y la Resolución 45/116 de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1990, por la que se adopta un Tratado Modelo de Rendición. En la normatividad que dio vigencia al tratado modelo y permitió el funcionamiento, se destaca:

Sección 1, estableció que el ámbito de aplicación sería en los territorios de las partes firmantes del memorando y consistirá en asistencia de todo tipo para cumplir con las necesidades de las investigaciones judiciales llevadas a cabo.

La sección 2 reguló lo relativo a la ayuda que debería brindar la parte requerida a la parte solicitante con relación a los diferentes procedimientos dentro de un juicio donde requiera la ayuda de la parte requerida.

La sección 3 regló la posibilidad de los expertos forenses en asistir a la realización de los diferentes procesos que requerían de la asistencia de un experto forense.

En la sección cuarta se establecieron las reglas a seguir en relación a la participación de los abogados no habilitados en un Estado y la forma de poder actuar, con la ayuda de un abogado habilitado en ese Estado para poder realizar las diligencias necesarias en el Estado.

La notificación de los arrestos, acusaciones o sentencias entre las partes debe ser inmediata y se regula en la sección quinta del memorando.

En relación al acceso de la información las partes mutuamente debían brindarse acceso a ella salvo que existan razones por motivos excepcionales para no hacerlo de conformidad con lo establecido por la sección sexta del memorando.

La sección séptima instituyó que cada Parte pondría a disposición de la otra Parte, toda la información que fuera necesaria para mejorar la capacidad de esa Parte para combatir los delitos transfronterizos relacionados con la ley de manera más eficaz. Además, de informarse mutuamente cualquier intento o necesidad de investigar y enjuiciar delitos o violaciones transfronterizos.

La octava sección fijaba que las partes debían tomar las medidas imprescindibles para proteger a los testigos que fueran a ser interrogados o testificaran en un proceso en relación a su integridad física y a no ser perseguidos por nada que dijeran por escrito o verbalmente ante las Salas.

La novena sección instauró que las Partes se comprometían a trasladar entre sí a todas las personas a las que las autoridades competentes de la Parte requirente estén procesando por un delito o que estas autoridades deseen a los efectos de cumplir una sentencia. Cada Parte tenía derecho a rechazar una solicitud de transferencia si la realización de un procedimiento judicial por parte de las autoridades de la Parte requirente no redundara en interés de la justicia.

En la sección décima se estableció que el traslado lo haría la parte requerida luego de estar convencida que ese traslado satisfacía el interés de la justicia.

La sección once regló que las solicitudes debían cumplir con requisitos mínimos para establecer quien era la autoridad requerida o solicitante, los nombres de las partes y sus abogados.

La doceava sección estableció que cualquier solicitud de cooperación se presentaría a través de la Oficina de Representantes de la República de Indonesia en Dili y la Oficina de la UNTAET en Yakarta, respectivamente, al Fiscal General de la República de Indonesia o al Administrador de Transición de la UNTAET.

La sección 13 señaló que los costos de prestar asistencia legal correrían a cargo de la Parte en cuya jurisdicción se otorgará el acto que incurra en los gastos.

En la sección 14 se reguló que, para aplicar el Memorándum de Entendimiento, las Partes se comprometían a aprobar legislación o modificar la legislación existente.

En caso de las enmiendas podrán ser presentadas por cualquiera de las Partes y se adoptarían únicamente con la concurrencia de ambas Partes. En relación a cualquier disputa, controversia y diferencia en cuanto a la interpretación o aplicación del Memorándum de Entendimiento se resolvía de manera amistosa mediante consultas o negociaciones entre las Partes.

El reglamento No. 2000/11 fue el que afinó el procedimiento a seguir, este entró en vigencia el 06 de marzo de 2000, teniendo como idiomas oficiales el Tetum, portugués, bahasa indonesia e inglés. Se dividía en 40 secciones distribuidas en 7 capítulos.

El capítulo I contenía las disposiciones generales distribuidas de la sección 1 la sección 5. En la sección 1 regulaba que la autoridad judicial de Timor Oriental estaba conferida exclusivamente a tribunales establecidos por ley y compuestos por jueces designados para estos tribunales.

La sección 2 asignaba a los jueces el desempeño de sus funciones de manera independiente e imparcial, y de conformidad con las leyes aplicables en Timor Oriental. Los jueces debían decidir los asuntos que se les presentaban sin perjuicio y de conformidad con su evaluación parcial de los hechos y su comprensión de la ley, sin influencia indebida, directa o indirecta, de cualquier fuente.

La sección 4 reguló que ningún juez podía negarse a escuchar, tratar o resolver un caso que se presentara ante el tribunal de conformidad con las disposiciones procesales pertinentes. Los tribunales de distrito fueron destinados a conformar el poder judicial de Timor Oriental.

La sección 5 contenía el ejercicio de la jurisdicción, en la cual los tribunales de Timor Oriental aplicarían la ley de Timor Oriental promulgada por la Sección 3 del Reglamento No 1999/1 de la UNTAET. Los tribunales tenían jurisdicción para los delitos cometidos en Timor Oriental antes del 25 de octubre de 1999 únicamente en la medida en que la ley en la que se basaba el delito fuera compatible con la Sección 3.1 del Reglamento No 1999/1 de la UNTAET o de cualquier otro reglamento de la UNTAET.

El capítulo II regulaba los tribunales de Distrito de la sección 6 a la 13. Quedando establecido en la sección 6 que los Tribunales de Distrito tendrían jurisdicción en todos los asuntos como tribunales de primera instancia, se conformarían por paneles de tres jueces.

La sección 7 estableció que cada Tribunal de Distrito ejercería sus funciones y facultades, según lo dispuesto por la ley, en el territorio de su área de jurisdicción. En caso de que un Tribunal de Distrito careciera de competencia sobre un asunto que se le presentase, dicho Tribunal lo remitiría de inmediato al Tribunal de Distrito competente. Cualquier disputa entre dos o más tribunales con respecto a la jurisdicción sobre un caso era resuelta por el Tribunal de Apelación.

La sección 8 determinaba que los tribunales de Timor Oriental podían solicitar cooperación a los diferentes tribunales distritales, que en caso de que no tuvieran competencia podían negar la asistencia.

La sección 9 atribuía al Tribunal la jurisdicción exclusiva sobre los delitos graves de: genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, asesinato, delitos sexuales y tortura.

La sección 11 estableció que los asuntos penales que conllevaran una pena máxima de un año, según lo dispuesto por la ley, y en asuntos de derecho civil que implicaran reclamaciones no superiores a US\$ 1000, la Presidencia del Tribunal de Distrito respectivo podía decidir asignar el caso a un juez del tribunal respectivo como juez individual, para su decisión. La Presidencia del tribunal respectivo establecería jueces individuales cuando así lo exigiera la ley.

La sección 12 reguló que, en materia penal, habría al menos un juez asignado como juez de instrucción en cada Tribunal de Distrito de Timor Oriental, tendría las facultades definidas en el Código de Procedimiento Penal y otros reglamentos pertinentes de la UNTAET.

La sección 13 delimitó que la Presidencia de cada Tribunal de Distrito asignaría todos los asuntos relacionados con la supervisión y ejecución de las penas de prisión a un panel de jueces de ese Tribunal de Distrito.

El capítulo III regula el Tribunal de Apelación en las secciones 14 y 15. La sección 14 estableció un Tribunal de Apelación de Timor Oriental, con sede en Dili. Su competencia era conocer las apelaciones de las decisiones dictadas por cualquier Tribunal de Distrito de Timor Oriental, y de los demás asuntos previstos en el presente o en cualquier otro reglamento de la UNTAET.

La sección 15 determinó que el Tribunal de Apelación estaría compuesto por jueces designados por el Administrador de Transición ante el Tribunal de Apelación. Los jueces se sentarían en paneles de tres jueces, según lo determinaría el plan de distribución de los casos entrantes.

El capítulo IV regulaba la organización de la Corte y sus competencias de la sección 16 a la 24. La sección 16 establecía que cada tribunal de Timor Oriental tendría una Presidencia. La Presidencia estaría compuesta por el presidente de la Corte y dos magistrados presidentes.

La sección 17 responsabilizaba a la Presidencia de la correcta administración del tribunal, incluido el cumplimiento ordenado y expeditivo de las funciones. La sección 18 asignaba un juez presidente en cualquier panel de jueces. El cual era nombrado por la Presidencia del tribunal respectivo.

La sección 19 preveía que, en casos de especial importancia o gravedad, o de una duración prevista de más de tres días consecutivos de juicio, que la Presidencia del tribunal respectivo decidiera asignar a un juez adicional de un panel diferente del mismo tribunal para asistir a las sesiones de juicio de un panel pertinente.

La sección 20 regulaba que los jueces podían ser excusados de conocer un procedimiento previa solicitud ante el presidente del Tribunal. Cualquier cuestión sobre la inhabilitación de un juez se decidía por mayoría de votos por la Presidencia. El juez impugnado tendría derecho a presentar observaciones sobre el asunto, pero no participaría en la decisión.

La sección 21 reguló que la Secretaría tenía la responsabilidad de la recepción de los documentos que se presentaran en el tribunal, de organizar los documentos judiciales y

de garantizar la seguridad de los documentos judiciales, así como de las demás funciones permitidas por un reglamento o directiva de la UNTAET. El personal del registro ejercía esas responsabilidades bajo la dirección de la Presidencia.

La sección 22 determinó que cada tribunal de Timor Oriental dispondría del personal cualificado necesario para el buen funcionamiento del tribunal y el cumplimiento de las responsabilidades de sus jueces. El personal del tribunal ejercerá estas responsabilidades bajo la dirección de la Presidencia.

La sección 23 determinó que los tribunales prestarían funciones de traducción e interpretación en todos los casos en que una parte en el procedimiento, o un juez, o un testigo, o un testigo experto no hablasen o entendieren suficientemente el idioma hablado en dicho tribunal.

La sección 24 estableció un Servicio de enjuiciamiento a cargo de una fiscalía dentro de la jurisdicción de cada Tribunal de Distrito de Timor Oriental.

El capítulo V se compone de las secciones 25 a la 27 y regulaba las audiencias que llevaban a cabo los tribunales. La sección 25 determinó que las audiencias del tribunal y las deliberaciones, en general, tendrían lugar en la sede del tribunal que tuviese jurisdicción para conocer del caso. El panel de jueces podía decidir el celebrar audiencias del tribunal en lugares distintos de la sede del tribunal si esto era de interés de la justicia. Al tomar la decisión, el panel de jueces o el juez individual se guiarían por las circunstancias particulares del caso y su responsabilidad de facilitar el acceso igualitario a la justicia. Las deliberaciones del panel de jueces seguirían siendo confidenciales.

La sección 26 asignaba como responsabilidad del tribunal ordenar y asegurar la transcripción de todas las audiencias, la cuales debía poner a disposición del público salvo que hubiese decidido la reserva de la misma.

La sección 27 responsabilizaba a la UNTAET de velar porque se proporcionarán procedimientos eficaces y mecanismos de respuesta efectiva e igualitaria a los abogados a todas las personas dentro del territorio de Timor Oriental. Cada parte dentro del procedimiento ante un tribunal de Timor Oriental tenía derecho a un representante legal de su elección.

El capítulo VI se encargaba de regular los derechos y deberes de los jueces comprendidos de la sección 28 a la sección 33. La sección 28 establecía que los jueces en un inicio serían nombrados de por vida luego de un período inicial no menor de 2 años ni mayor de 3 años. Los jueces solo serían destituidos por las razones establecidas por la UNTAET o el reglamento, la jubilación sería obligatoria a los 65 años.

La sección 29 determinaba que los jueces no divulgarían ninguna información o datos personales relacionados u obtenidos en el desempeño de sus funciones, excepto cuando lo autorizara el presidente de la Corte con fines de información pública o investigación.

La sección 31 estableció que los jueces gozaran de los privilegios e inmunidades previstos por la ley. En particular, que los jueces no serían responsables de ningún efecto adverso o daño causado por cualquiera de sus actos u omisiones cometidos en el curso del desempeño de sus funciones, excepto cuando dichos efectos o daños eran causados por conducta intencional e injusta.

La sección 32 reguló que un Juez que hubiese cometido una mala conducta en el cargo estaría sujeto a medidas disciplinarias, tal como lo definía el reglamento de la UNTAET.

La sección 33 atribuía a los secretarios una remuneración de conformidad con el régimen salarial determinado por una directiva de la UNTAET para la administración de Timor Oriental.

El Capítulo VII se componía por las secciones 34 a la 40 y se encargaba de regular los asuntos administrativos. La sección 34 determinaba el soporte financiero y técnico será proporcionado por la UNTAET a los Tribunales de Timor.

La sección 35 establecía que la Presidencia del Tribunal determinara la forma de distribución de los casos. La sección 37 regulaba que los documentos oficiales debían llevar el sello oficial de los tribunales determinado por la UNTAET.

La sección 38 establecía que no se permitieran manifestaciones políticas dentro de las instalaciones de la corte. La insignia oficial de los tribunales de Timor Oriental era la de las de las Naciones Unidas y la UNTAET.

La sección 39 otorgó como facultad del administrador emitir los reglamentos y normar necesaria para la aplicación del reglamento.

14. LEGITIMIDAD:

La legitimidad de las Salas no fue cuestionada, puesto que su creación fue en aras de combatir la impunidad en un territorio que no era independiente y que buscaba que imperara el Estado de Derecho y hacer la transición a una nación independiente.

15. JURISDICCIÓN

Dentro de los reglamentos de los tribunales especiales se estableció que la jurisdicción de los Tribunales Especiales de Timor Oriental se desarrollaba en el territorio de Timor occidental, sin embargo como se analizó con anterioridad, en lo relacionado *“a la competencia personal y territorial, los Paneles Especiales tuvieron “competencia universal”, lo que significaba que eran competentes si el delito grave de que se trataba fue cometido dentro del territorio de Timor Oriental; si fue cometido por un ciudadano de Timor Oriental; o la víctima del delito grave fue un ciudadano de Timor Oriental”*¹⁰⁵⁶, hechos denominados como “delitos graves” cometidos entre el 1 de enero y el 25 de octubre de 1999.

A. ¿QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE DE UN CASO?

Las personas individuales, es decir naturales que se vieran involucradas en los delitos que establecen los reglamentos que originaron la creación de los Tribunales Especiales de Timor Oriental, entro de los que destacaban los crímenes más graves que atentaban contra los derechos humanos y el derecho internacional. Las víctimas, los defensores, jueces, fiscales e investigadores.

¹⁰⁵⁶ Universidad de Stanford, Tribunales especiales de 1984 a la fecha, *Óp. Cit.* Reglamento 2000/11, 2000/15 sección 7.3 y 2.1. 2.2 y 2.5 respectivamente

B. ¿QUÉ PROBLEMAS SE PODÍA DEBATIR?

Como sea establecido a lo largo de este trabajo, se asumió la facultad de investigar los hechos en los que se hayan cometido delitos como: “*el genocidio, los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, delitos sexuales, asesinatos y tortura*”¹⁰⁵⁷.

16. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN:

El Estatuto establece como mecanismos procesales tendientes controvertir decisiones específicas y también como garantía a los derechos de los procesados, el recurso de apelación.

El reglamento de procedimiento No. 2000/11 en el capítulo III reguló que el Tribunal de Apelación conocería de las apelaciones presentadas y que estaría compuesto por jueces designados por el Administrador de Transición ante el Tribunal de Apelación. Los jueces se sentarían en paneles de tres jueces, según lo determinaría el plan de distribución de los casos entrantes.

17. MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO

En los documentos de creación no se crean mecanismos de cumplimiento per se, sin embargo; el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, nombró una Comisión de Expertos independientes para que evaluara los resultados de las Salas cuando estas estaban por cerrar operaciones.

El informe se terminó de escribir el 26 de mayo de 2005 y se presentó en el Consejo de Seguridad el 24 de junio del mismo año, haciéndose público el 27 de julio de 2005¹⁰⁵⁸.

18. RECURSOS DISPONIBLES

Estos recursos fueron:

¹⁰⁵⁷ Reglamento UNTAET 2000/15: Sección 17.

¹⁰⁵⁸ AMNISTÍA Internacional, 2005. Timor Oriental: La inacción del Consejo de Seguridad respecto a la justicia para Timor Oriental deja en el limbo la lucha contra la impunidad. En: *Amnistía Internacional* [en línea]. Disponible en: <https://www.amnesty.org/download/Documents/84000/asa570042005es.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

A. HUMANO:

En cuanto a recurso humano, los paneles estaban compuestos de 1 juez nacional y 2 internacionales. En relación al resto del personal el reclutamiento y la dotación de personal adecuados fueron un enorme desafío para el proceso de los paneles.¹⁰⁵⁹

El dato sobre el recurso humano que conformo a las partes del proceso de los paneles especiales no se encuentra disponible en los diferentes documentos consultados. Es decir, no se encuentran datos del personal internacional que conformaba lo paneles especiales (tribunales) en el distrito, apelaciones y niveles superiores de tribunales; la Unidad de Delitos (SCU) de investigadores y fiscales; el fiscal general adjunto para delitos graves (DGPSC), ubicado dentro de la Oficina del General creada por la ONU Fiscal (OGP), en general bajo el Ministerio Público de Timor Oriental; y la Unidad de Abogados de Defensa (DLU).¹⁰⁶⁰

B. MATERIAL:

En relación al acceso de los documentos producidos por los Paneles Especiales nunca participaron en ningún tipo de difusión pública o incluso de información básica, no existía un sistema claro para que el público accediera a copias de documentos judiciales o sentencias, muchos de los cuales no se traducían fuera de sus versiones originales en inglés o portugués. La única forma de información pública sobre la labor de los Paneles Especiales provino del Judicial System Monitoring Programme.¹⁰⁶¹

¹⁰⁵⁹ CENTRO Internacional para la Justicia Transicional. S.F. Estudios de casos: El Proceso de crímenes graves en Timor del Este en retrospectiva, Página 12. En: *Centro Internacional para la Justicia Transicional* [en línea]. Disponible en: <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-TimorLeste-Criminal-Process-2006-English.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

¹⁰⁶⁰ OPEN Society Foundations, 2018. *Opciones para la justicia: Un manual para diseñar Mecanismos de rendición de cuentas por delitos graves*, página 465. S.E. Nueva York: Open Society Foundations. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] ISBN: 978-1940983-83-7. Disponible en: <https://www.justiceinitiative.org/uploads/89c53e2e-1454-45ef-b4dc-3ed668cdc188/options-for-justice-20180918.pdf>

¹⁰⁶¹ CENTRO Internacional para la Justicia Transicional. S.F. *Óp. Cit.* Página 54.

JSMP se estableció a principios de 2001 para proporcionar análisis jurídicos y seguimiento de los paneles Especiales. Está compuesto por personal jurídico timorense e internacional, y la divulgación se ha convertido cada vez más en una gran parte de su trabajo debido a la alta demanda de información en la comunidad.

Con la finalidad de conservar y obtener copia de los documentos de las Salas el Consejo de Seguridad adoptó el 28 de abril de 2005 la resolución 1599 (2005), en la que se instaba a la Secretaría de las Naciones Unidas a conservar una copia de todos los registros de la UCI de acuerdo con las autoridades en Timor Oriental. La UCI también creó una base de datos de todos los archivos de investigación, además de una instalación de almacenamiento para evidencia física relevante para los casos pendientes en contenedores sellados. Aunque este proceso no se completó al final del mandato del MISTE de las Naciones Unidas, se mantuvo un pequeño equipo de personal de la UCI para continuar con esta labor. Los archivos originales, sin embargo, seguirán siendo propiedad del gobierno timorense, que determinará el acceso a los registros para cualquier uso futuro.¹⁰⁶²

C. PRESUPUESTO ASIGNADO:

Los Paneles Especiales se financiaron a través de la UNMISTE, tanto mediante contribuciones evaluadas como de contribuciones voluntarias. Para el período 2003-2005, el costo total de explotación de la Unidad de Crímenes (UCI) y los Paneles Especiales fue de 14.358.600 dólares americanos.¹⁰⁶³

19. EL PAPEL DE LA VÍCTIMA:

El papel de la víctima Las reglas de prueba y procedimiento definen a la víctima como: *“una persona que, individualmente o como parte de un colectivo, ha sufrido daños, incluidos daños físicos o mentales, sufrimiento emocional, pérdida económica o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales a través de actos u omisiones en violación de la ley penal. A modo de ilustración y no de limitación, una víctima puede ser el cónyuge, pareja o familiar inmediato de una persona fallecida cuya muerte fue causada por una conducta delictiva; un accionista de una corporación con respecto al fraude criminal por parte de los administradores o funcionarios de la*

¹⁰⁶² ICTJ, S.F. Estudios de casos: El Proceso de crímenes graves en Timor del Este en retrospectiva, Página 40. En: *Centro Internacional para la Justicia Transicional* [en línea]. Disponible en: <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-TimorLeste-Criminal-Process-2006-English.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

¹⁰⁶³ Ídem. Página 30

*corporación; o una organización o institución directamente afectada por un acto delictivo”.*¹⁰⁶⁴

Los informes de rendición de cuentas de las salas señalan que las víctimas no fueron parte activa del proceso a pesar de que cuentan con una unidad para que presenten pruebas. De conformidad con la Sección 12.1 del Reglamento No. 2000/11 de la UNTAET, habrá al menos un juez de instrucción en cada tribunal de distrito de Timor Oriental, facultado para garantizar los derechos de las presuntas víctimas del presunto delito que se investiga.

El fiscal de conformidad con la sección 7 del reglamento 2000/30 al momento de realizar sus investigaciones debía considerar los intereses y la situación personal de las víctimas y testigos, solicitando su participación en los procedimientos para que se les interrogue.

Se consideró como víctima a una persona, organización o institución que estuviera o no relacionado con el acusado.¹⁰⁶⁵

La víctima tiene poseía los siguientes derechos:

- a) ser escuchada en audiencia
- b) ser notificada por el fiscal o lo policía, si así lo ha manifestado
- c) solicitar al fiscal que lleve a cabo investigaciones específicas o que adopte medidas específicas
- d) que el procedimiento sea conducido por una funcionaria en los casos de una mujer víctima de una agresión sexual, a menos que la víctima no se oponga a un procedimiento diferente
- e) registrar la identidad y la información de contacto de cualquier víctima que indique su deseo de ser notificada
- f) solicitar copia del expediente del caso que haya sido sobreseído

¹⁰⁶⁴ Sección 1, Disposiciones Generales, Definiciones literal x); Reglamento 2000/30 de la UNTAET.

¹⁰⁶⁵ Sección 12 numeral 2, Reglamento 2000/30 de la UNTAET

- g) solicitar que se revise la decisión de sobreseer un caso al Fiscal General
- h) en caso de delitos sexuales tiene derecho a no declarar, ni comparecer ante el tribunal, ser utilizado su conducta sexual en contra de su causa
- i) reclamar compensación por lo daos y perjuicios sufridos
- j) todos los previstos en el reglamento¹⁰⁶⁶

El juez tenía la facultad de decidir que varias víctimas poseyeran representante común y el fiscal de tomar medidas razonables para mantener informadas a las víctimas de los avances del caso.¹⁰⁶⁷

En el caso de las órdenes de detención debían identificarse a las presuntas víctimas, salvo que exista orden de protección de su identidad. En el caso exista sospecha de la seguridad de las víctimas corre peligro.¹⁰⁶⁸

20. PERCEPCIÓN PÚBLICA:

La decisión del Consejo de Seguridad de cerrar las Sala, fue calificado por la sociedad civil y las ONG's internacionales de derechos humanos como un acto de dejar en el limbo la lucha conta la impunidad.

Cuando el informe sobre procesamiento de graves violaciones de derechos humanos cometidas en Timor Oriental fue presentado, el Consejo de Seguridad retrasó el estudio detallado de este.

Además, que se dejó de operar justo en el momento que los presuntos responsables de los crímenes empezaron a regresar al país abriendo la puerta para ser inculpados, decisión que fue calificada como ambivalente por parte del Consejo de Seguridad. Por lo que se percibió como una justicia incompleta.

El Programa de Programa de Vigilancia del Sistema Judicial fue fundamental para informar al público internacional sobre la función del procedimiento de «delitos graves» a través del sitio web.¹⁰⁶⁹ Sin embargo, no fue suficiente, los

¹⁰⁶⁶ Sección 12, 25, 34,44, 49, Reglamento 2000/30 de la UNTAET

¹⁰⁶⁷ Sección 9,14, Reglamento 2000/30 de la UNTAET

¹⁰⁶⁸ Sección 19, 24, Reglamento 2000/30 de la UNTAET

¹⁰⁶⁹ JUSTICE Initiative. S.F. *Óp. Cit.* Página: 27

Paneles fueron criticados por no contar con un programa de comunicación que difundiera las actividades y que llegara a las comunidades afectadas y a las partes interesadas, lo que dio como resultado la invisibilidad de sus actividades.¹⁰⁷⁰

21. NÚMERO DE CASOS INGRESADOS

La Fiscalía acusó a 391 sospechosos, realizó 514 investigaciones en donde se emitieron acusaciones, en 50 casos no se completaron las investigaciones. Al dejar de financiar la ONU a las Salas estas investigaciones se quedaron pendientes y además quedaron pendientes 828 casos de presunto asesinato, 60 casos de violación o delitos de género, y posiblemente cientos de casos de tortura y otros actos de violencia. A los 391 los acuso en 95 acusaciones separadas. Entre ellos se encontraban 37 oficiales militares indonesios de la TNI, 4 jefes de policía indonesios, 60 oficiales y soldados timorense del TNI, el ex gobernador civil de Timor Oriental y 5 ex administradores de distrito. De los acusados, 339 permanecieron en libertad fuera de la jurisdicción.¹⁰⁷¹

22. NÚMERO DE CASOS RESUELTOS

Después de cuatro años la Fiscalía de las Salas acusó a 391 personas, llevó a cabo 35 juicios y 48 personas fueron condenadas y 2 absueltas. Sin embargo, 309 acusados permanecen actualmente fuera de la jurisdicción de Timor Oriental.¹⁰⁷²

23. ANÁLISIS CUALITATIVO:

El trabajo de las Salas Especiales de Delitos Graves en Timor Oriental fue bastante limitado debido al factor tiempo, muchos de los presuntos responsables se encontraban fuera del país y su procesamiento dependía de la asistencia internacional, estos procesados decidieron volver al país en el momento en que el Consejo de Seguridad decide suprimir las salas, por lo que su legado es escaso, dejó

¹⁰⁷⁰ Open Society Foundation. S.F. *Óp. Cit.* Página 101.

¹⁰⁷¹ ICTJ. S.F. *Óp. Cit.* Página 28-29.

¹⁰⁷² Ídem Página 04.

un vacío en cuanto a recurso jurídico que pudiese solucionar esta situación, lo que se considera como una manera de fomentar la impunidad.

No se pudo solidificar una capacidad sostenible en el país para perseguir en el futuro el tipo de crímenes que perseguían las Salas, ni un enfoque eficaz de enjuiciamiento, en donde se dejara formado el equipo de investigadores locales, intérpretes y operadores de justicia en general.

Se consideró que el límite temporal debía ser realista, relajando de esa manera la presión temporal.

Hubo un gran problema para el reclutamiento de juristas nativos, debido a que la mayor parte de abogados eran de Indonesia, únicamente tres jueces timorenses participaron en juicios de delitos graves, en primera instancia y apelación, los jueces internacionales no interactuaron de ninguna manera con los jueces nacionales que ejercían funciones en la jurisdicción nacional, ya que incluso estaban ubicados en distintos lugares.¹⁰⁷³

Se tuvo la percepción de que los jueces internacionales eran distantes y sin disposición a ayudar, esto se debió a la poca relación existente entre los jueces internacionales y nacionales, incluso se llegó a decir que no era tratados como iguales, también se llegó a acusar a los jueces internacionales de falta de conocimiento de la cultura e historia al momento de interrogar testigos e interactuar con los colegas nacionales.¹⁰⁷⁴ Otro de los problemas fue el idioma, porque los jueces internacionales no se podía comunicar en el idioma de los jueces en Timor, tampoco tuvieron suficiente apoyo de traductores e intérpretes para mejorar la comunicación con sus pares y con los testigos . La limitación del idioma provocó que el personal internacional escasamente transfiriera conocimientos al personal nacional¹⁰⁷⁵.

El trabajo de los Paneles contribuyó a reforzar el papel de los fiscales en el proceso penal, ya que es él quien dirige la investigación y todo lo que esto conlleva.¹⁰⁷⁶

¹⁰⁷³ JUSTICE Initiative. S.F. *Óp. Cit.* Página: 35

¹⁰⁷⁴ *Ídem.* Página:37

¹⁰⁷⁵ *Ídem*

¹⁰⁷⁶ Open Society Foundation. S.F. Página: 38

Las acusaciones que se realizaron no incluyeron crímenes como el genocidio o los crímenes de guerra, únicamente crímenes de lesa humanidad y algunos crímenes bajo la legislación nacional, como el homicidio.

A nivel procesal los Paneles fueron criticados por no incluirse la protección de testigos en el Estatuto, por lo tanto, no existían estructuras de protección afectando las investigaciones profundamente¹⁰⁷⁷, otro grave problema fue el establecimiento tardío de la sala de apelaciones, lo que provocó ineficiencias y demoras procesales. No hubo planificación estratégica cuidadosa sobre el contexto legal específico para determinar las necesidades procesales y estructurales del mecanismo.¹⁰⁷⁸ Estas falencias cuestionaron el respeto al derecho a un juicio justo, por no preverse todos los mecanismos de impugnación y de defensa desde el inicio, durante los primeros dos años de funcionamiento los procesados no contaron con una defensa adecuada, lo que se calificó como violación al derecho a un juicio justo¹⁰⁷⁹.

Otra de las falencias criticadas fue la falta de financiamiento y la desigualdad en la distribución de recursos entre las diferentes dependencias, la mayoría del dinero se destinaba al pago de funcionarios internacionales. Al comienzo de los Paneles, Naciones Unidas proporcionó muchos fondos destinados para investigaciones y procesos, designando el diez por ciento del dinero para arbitraje y a diferencia de otros mecanismos, no se asignaron fondos para defensa. Profundizando así la vulneración al derecho a un juicio justo, teniendo como resultado el retardo injustificado de los procesos e ineficiencia¹⁰⁸⁰.

Luego de este completo estudio analítico en los aspectos que a mi juicio considere de mayor relevancia, se puede establecer que las Salas Especiales de Delitos Graves de Timor Oriental contribuyeron parcialmente a la lucha contra la impunidad, esto se debió a las falencias procesales y estructurales al momento de su creación, lo cual es lamentable porque ya se tenían antecedentes de otros mecanismos. Sin embargo; se

¹⁰⁷⁷ Open Society Foundation. S.F. Página: 89

¹⁰⁷⁸ Ídem Página: 92

¹⁰⁷⁹ Ídem Página: 97

¹⁰⁸⁰ Ídem. Página: 123

ve con buenos ojos las sentencias obtenidas pese a que el genocidio no fue objeto del mandato.

A continuación, se presenta de forma gráfica y sintética el trabajo realizado por las Salas Especiales de Delitos Graves de Timor Oriental.

		Mandato	Duración del Mandato	Cesación de los hechos que originaron el mandato	Inicio del primer juicio	Universo de casos	Casos procesados y/o relaciones procesales	Tiempo promedio de los casos	Casos pendientes de resolución	% Casos presentados versus casos resueltos	% Casos pasibles de procesamiento versus casos resueltos
1	Salas Especiales de Delitos Graves en Timor Oriental	Comisión de "delitos graves" cometidos entre el 1 de enero y el 25 de octubre de 1999.	5 años	25 de octubre de 1999	No se puede determinar	Más de 1452	391	No se puede determinar	Más de 938	2.41%	8.95%

CAPÍTULO VI

MISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN KOSOVO

ANTECEDENTES

A raíz del conflicto que se vivía en Kosovo, 850,000 albaneses étnicos kosovares fueron desplazados y obligados a refugiarse en Albania, Macedonia y Montenegro, esto sucedió durante los meses marzo a mayo de 1999. Ante la gravedad de la situación, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados con el apoyo de la OTAN, organizó una enorme intervención de asistencia humanitaria¹⁰⁸¹.

*“Mientras tanto, la Alianza Atlántica estaba realizando desde el 24 de marzo de ese año una ofensiva aérea continuada sobre numerosos objetivos concretos de la República Federal de Yugoslavia –operación “Fuerza Aliada”–4 , con el fin de obligar a ese país a aceptar y cumplir el plan de paz de Rambouillet. El 9 de junio de 1999 la OTAN suspendió dichas operaciones aéreas, que llevaba desarrollando desde hacía varios meses sin haber sido autorizada expresamente para ello por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando las autoridades serbias de Yugoslavia aceptaron una actualización (doc. S/1999/649, de 2 de junio de 1999) de los principios generales relativos a una solución política para la crisis de Kosovo”.*¹⁰⁸²

La Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo, se creó por medio de la Resolución 1244 de 1999, adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dando a Kosovo una administración de transición con miras a desarrollar localmente instituciones de autogobierno y establecer un marco legislativo

¹⁰⁸¹ IGLESIAS Velasco, Alfonso, 2001. La Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo. *Revista CIDOB d’Afers Internacionals* [en línea]. Barcelona: Barcelona Care for International Affairs, Núm.56. Página: 17 [Consulta: 10 de diciembre de 2020]. ISSN: 1133-6595. Disponible en: <https://www.cidob.org/en/publications/filter/53216>

¹⁰⁸² Ídem.

que permitiera su adecuado funcionamiento¹⁰⁸³. Con el fin de resolver la grave situación humanitaria en Kosovo, porque la misma se constituía en una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. El Consejo le confirió a la Misión autoridad sobre el territorio, la población, le otorgó tareas legislativas, ejecutivas y la administración del poder judicial¹⁰⁸⁴.

La misión operaba a nivel local, su creación y funcionamiento requirió una serie de regulaciones emitidas por esta, las cuales en su conjunto denotan los esfuerzos orientados hacia la inviolabilidad del sistema de justicia como mecanismo para allanar el camino hacia la restauración de la confianza de la población en las instituciones públicas.

La resolución número 1999/1 (R 1999/1) denominada “On the Authority of the Interim Administration in Kosovo” envistió a la Misión de toda facultad judicial, nombrando al Representante Especial del Secretario General para ejercer dichas facultades conforme la sección punto 1 de la Resolución 1999/1¹⁰⁸⁵. Por lo que fue un órgano jurisdiccional, con jueces internacionales que combatían la impunidad en Kosovo

¹⁰⁸³ El establecimiento de un sistema judicial independiente, imparcial e idóneo es un punto medular tanto para la obtención de una justicia verdadera como para el fortalecimiento de las instituciones públicas.

¹⁰⁸⁴ NACIONES Unidas, Mantenimiento de la paz, S.F. UNMIK Ficha Informativa. Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo. En: *Naciones Unidas, Mantenimiento de la paz* [en línea]. Disponible en: <https://peacekeeping.un.org/es/mission/unmik> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

¹⁰⁸⁵ En pos de asegurar la imparcialidad e idoneidad de los funcionarios públicos y jueces el punto 2 sección 1 de la R 1999/1 esclarece que el RESG tendrá la facultad de nombramiento y remoción dentro del aparato judicial. Tales funciones serán ejercidas conforme a las leyes existentes en Kosovo aplicables antes de 24 de marzo de 1999 así como las regulaciones emitidas por UNMIK conforme a la sección 3 de R 1999/1.

La Regulación 2000/64 denominada “On Assignment of International Judges/Prosecutors and/Or Change of Venue” (R 2000/64) establece en su sección 1 punto 1.1. la facultad del fiscal, del representante de la defensa o el acusado de efectuar petición ante el Departamento de Asuntos Judiciales para la asignación de Jueces o Fiscales internacionales con el fin de asegurar la independencia e imparcialidad de la administración apropiada de justicia. A raíz de la petición efectuada el Departamento de Asuntos Judiciales podrá en cualquier etapa del proceso efectuar una recomendación al RESG para la asignación respectiva. La sección 2 de la R 2000/64 por su parte establece una serie de medidas orientadas a resguardar la imparcialidad y legalidad del proceso, así como la seguridad del tribunal e idoneidad de los jueces figurando entre ellas la designación de un nuevo lugar para la constitución del tribunal, la designación de un fiscal internacional, un juez investigador internacional y un panel conformado por tres jueces debiendo ser dos de ellos internacionales. La consolidación y fortalecimiento de un sistema de justicia independiente, imparcial e idóneo constituye la base para el esclarecimiento de los hechos, la imposición proporcional de la penal y la obtención de justicia.

1. ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ FUE CREADA?

Fue creada el 10 de junio de 1999¹⁰⁸⁶, cuando finalizaba la guerra de Kosovo, a raíz de los bombardeos ocurridos en la República Federal de Yugoslavia el 3 de junio de 1999, que tuvieron una duración aproximada de 78 días. Ante la necesidad de que Kosovo tuviera esta administración para garantizar a su población una autonomía sustancial el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 1244 con el cual instaura una misión de mantenimiento de paz.

2. PAPEL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN SU CREACIÓN

El papel de la Comunidad internacional fue representado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, quien delegó en la Misión las tareas de transición y mediación, mientras el gobierno lograba la instalación de instituciones que logaran crear los mecanismos necesarios para mantener la paz dentro del territorio, con el fin asegurarles a los habitantes una vida pacífica y normal.

3. ¿CÓMO SE ABORDÓ EL TEMA DE LA SOBERANÍA?

Al ser una misión de transición, no se vulneraba la soberanía de Kosovo, es decir, que la misión solo servía como intermediario mientras el Gobierno creaba las condiciones integrales para retomar el orden y los ciudadanos pudieran llevar una vida normal.

La Misión fue creada precisamente para que el país después de la guerra tuviera soberanía.

El tema de la soberanía se abordó en la resolución 1244 de la siguiente manera: *“Reafirmando la adhesión de todos los Estados Miembros al principio de la soberanía e integridad territorial de la República Federativa de Yugoslavia y los demás Estados de la región, expresada en el Acta Final de Helsinki y en el anexo 2,…”*

¹⁰⁸⁶ NACIONES Unidas, Mantenimiento de la paz. S.F. *Óp. Cit.*

4. TIPO DE GOBIERNO ¿DEMOCRACIA?

En ese momento el país se encontraba en transición después de la guerra, venía de un sistema totalitario¹⁰⁸⁷, no había un régimen de gobierno, no había democracia.

5. ¿ESTADO DE DERECHO?

Definitivamente al momento de la creación de la Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo, no existía un estado de derecho, aunque prevalecían leyes anteriores y se fueron creando otras provisionales hasta que se aprobó la nueva Constitución el 15 de junio de 2008¹⁰⁸⁸.

6. ¿ORIGEN BASADO EN CIERTAS SUPOSICIONES O CONDICIONES FÁCTICAS?

Su origen se basó en condiciones fácticas, ya que el país había sido bombardeado por la OTAN, existían miles de personas desplazadas, refugiadas, no había seguridad en el país. Imperaba la violencia e invasión militar. Esa serie de hechos contrarios al orden, fue lo que hizo necesario el establecimiento de la Misión para dar paso a una transición en la búsqueda de la paz¹⁰⁸⁹.

7. DOCUMENTO CREADOR

Se creó mediante la Resolución 1244 de fecha 10 de junio de 1999¹⁰⁹⁰ del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el fin de darle solución al conflicto que se vivía en Kosovo y generar condiciones de seguridad para los habitantes.

Nace por el compromiso de los principios y propósitos de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad respecto a mantener la paz y la seguridad internacional.

Estableció que la solución política en Kosovo debía tener como base los principios generales contenidos en el anexo 1, el cual fue aprobado por los Ministros de

¹⁰⁸⁷ INSTITUT de Drets Humans de Catalunya. S.F. Presentación: Kosovo, ¿un conflicto olvidado?. *Kosovo. Serie Conflictos Olvidados* [en línea]. Barcelona: Institut de Drets Humans de Catalunya, página: 33. [Consulta: 10 de diciembre de 2020]. ISSN 2013-4223. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/27135.pdf>

¹⁰⁸⁸ NACIONES Unidas, Mantenimiento de la paz. S.F. *Óp. Cit.*

¹⁰⁸⁹ Ídem.

¹⁰⁹⁰ Ídem.

Relaciones Exteriores del Grupo de ocho, en el que se introdujeron los generales para la solución política de la crisis en Kosovo, los cuales son:

- *“Cesación inmediata y verificable de la violencia y la represión en Kosovo;*
- *Retiro de Kosovo de las fuerzas militares, policiales y paramilitares;*
- *Despliegue en Kosovo de presencias internacionales eficaces, una civil y otra de seguridad, respaldadas y aprobadas por las Naciones Unidas, capaces de garantizar el logro de los objetivos comunes;*
- *Establecimiento de una administración provisional para Kosovo con arreglo a lo que decida el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a fin de crear condiciones propicias para que todos los habitantes de Kosovo puedan vivir una vida pacífica y normal;*
- *Regreso seguro y libre de todos los refugiados y personas desplazadas y libre acceso a Kosovo de las organizaciones de ayuda humanitaria;*
- *Un proceso político encaminado al establecimiento de un acuerdo sobre un marco político provisional que preveía un gobierno autónomo sustancial para Kosovo, teniendo plenamente en cuenta los acuerdos de Rambouillet y los principios de soberanía e integridad territorial de la República Federativa de Yugoslavia y los demás países de la región, y la desmilitarización del Ejército de Liberación de Kosovo;*
- *Un criterio integrado para el desarrollo económico y la estabilización de la región en crisis”*¹⁰⁹¹.

Se establece desplegar en Kosovo, con el auspicio de las Naciones Unidas la presencia internacional, civil y otra seguridad integrado con el equipo personal necesario.

También se le solicitó al Secretario General que designara con la consulta del Consejo de Seguridad, a un representante Especial para que controlara la presencia internacional civil para que se orientaran bajo los mismos objetivos.

¹⁰⁹¹ CONSEJO de Seguridad de Naciones Unidas, 1999. Resolución 1244.

8. MANDATO

La Resolución establece que dentro de las Principales responsabilidades de la presencia internacional civil se encuentran:

- *“Promover el establecimiento, hasta que se llegue a una solución definitiva, de una autonomía y un autogobierno sustanciales en Kosovo, aplicando plenamente el anexo 2 y los acuerdos de Rambouillet (S/1999/648);*
- *Cumplir funciones administrativas civiles básicas donde y mientras sea necesario;*
- *Organizar y supervisar el desarrollo de instituciones provisionales para el autogobierno democrático y autónomo hasta que se llegue a una solución política, incluida la celebración de elecciones;*
- *Transferir, a medida que se establezcan esas instituciones, sus funciones administrativas, y al mismo tiempo supervisar y apoyar la consolidación de las instituciones provisionales locales de Kosovo y otras actividades de establecimiento de la paz;*
- *Facilitar un proceso político encaminado a determinar el estatuto futuro de Kosovo, teniendo en cuenta los acuerdos de Rambouillet (S/1999/648);*
- *En una etapa final, supervisar el traspaso de autoridad de las instituciones provisionales de Kosovo a las instituciones que se establezcan conforme a una solución política;*
- *Apoyar la reconstrucción de la infraestructura básica y otras tareas de reconstrucción económica;*
- *Apoyar, en coordinación con las organizaciones humanitarias internacionales, la ayuda humanitaria y el socorro en casos de desastre;*
- *Mantener la ley y el orden público, incluso mediante el establecimiento de un cuerpo de policía local y, entre tanto, mediante el despliegue de agentes de policía internacionales en Kosovo;*
- *Proteger y promover los derechos humanos;*
- *Asegurar el regreso seguro y libre de todos los refugiados y personas desplazadas a sus hogares en Kosovo;”*¹⁰⁹²

¹⁰⁹² CONSEJO de Seguridad de Naciones Unidas, 1999. Óp. Cit.

En el anexo 2 se establece que para lograr la solución del conflicto se debe llegarse a un acuerdo sobre los siguientes principios.

La culminación inmediata y verificable de la violencia y represión en Kosovo.

El apartamiento de las fuerzas militares, policiales y paramilitares

El despliegue con el auspicio de las Naciones Unidas de la presencia internacional, civil y otra seguridad que puedan *“garantizar el logro de los objetivos comunes.*

*La presencia internacional de seguridad con participación sustancial de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se desplegará bajo mando y control unificado y estará autorizada para establecer un entorno seguro para toda la población de Kosovo y facilitar a todos los refugiados y personas desplazadas el regreso seguro a sus hogares”*¹⁰⁹³.

El establecimiento de la administración provisional con presencia internacional civil, como medio de transición mientras se supervisaba el establecimiento de los mecanismos autónomos que garantizaran una vida pacífica y normal a los ciudadanos de Kosovo.

Posterior al *“retiro, se permitía el regreso de un cierto número convenido de personal yugoslavo y serbio para cumplir con las funciones de servir como enlace entre la misión civil internacional y el personal de seguridad internacional, demarcar y limpiar los campos minados, mantener una presencia en lugares de patrimonio nacional serbio y mantener presencia en los principales cruces fronterizos”*¹⁰⁹⁴.

La resolución contempla también dentro de los principios a cumplir que se garantice el regreso seguro y libre de los refugiados, y personas desplazadas, así como ayuda humanitaria.

La implementación de *“un proceso político para el establecimiento de un acuerdo sobre un marco político provisional, que disponga un gobierno autónomo teniendo en cuenta los acuerdos de Rambouillet y los principios de soberanía e integridad territorial de la República Federativa de Yugoslavia”*¹⁰⁹⁵.

¹⁰⁹³ CONSEJO de Seguridad de Naciones Unidas, 1999. *Óp. Cit.*

¹⁰⁹⁴ *Ídem.*

¹⁰⁹⁵ *Ídem.*

El Secretario General de Naciones Unidas redactó un informe de fecha 13 de julio de 1999 (S/1999/779), el cual remitió al Consejo de Seguridad, en él incluyó las fases que debía desarrollar la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo, dentro de estas fases se encontraban:

1. *“Condiciones de estabilidad básica: consolidar la autoridad de la Misión y crear las estructuras de la administración interina. Lo que implicaba la elaboración de un plan para la recuperación económica y el desarrollo, con el objetivo de establecer en Kosovo una economía viable y autosostenible”*¹⁰⁹⁶.
2. Restablecimiento de la administración de los servicios y las infraestructuras sociales. En donde se tuvo previsto consolidar el Estado de Derecho.
3. Preparar las elecciones para la "Autoridad de Transición de Kosovo". Lo que significaba asegurar las precondiciones necesarias para las elecciones, lo que se traducía en *“registro de votantes, garantías para los electores y para los elegidos, etc”*¹⁰⁹⁷.
4. *“Supervisar y ayudar a los representantes electos de Kosovo en la tarea de llegar a un gobierno autónomo y democrático”*¹⁰⁹⁸.
5. Transferencia de autoridad *“de las instituciones provisionales a las autoridades establecidas a través de un convenio político”*.¹⁰⁹⁹

Las fases eran muy concretas, por la complejidad del suceso, su cumplimiento no era una tarea fácil.

A. OBJETIVOS

La Misión tuvo la labor de supervisar la administración de justicia y el poder judicial en Kosovo, debía ser facilitadora sobre el estatuto jurídico final¹¹⁰⁰.

¹⁰⁹⁶ FUNDACIÓ Solidaritat, S.F. Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo. En: UNMIK [en línea]. Disponible en: <http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/esp/kosovo/analisi/unmik.htm#inici> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

¹⁰⁹⁷ Ídem.

¹⁰⁹⁸ Ídem.

¹⁰⁹⁹ Ídem.

¹¹⁰⁰ IGLESIAS Velasco, Alfonso J. 2001 *Óp. Cit.* Página: 123

B. ALCANCES DEL MANDATO

El alcance del mandato fue para que se ejerciera en el territorio y la población de Kosovo, incluidas todas las facultades legislativas y ejecutivas en adición a la administración del poder judicial¹¹⁰¹.

Es en 2001 cuando la Misión estableció el eje de policía y justicia, manejado por Naciones Unidas y que incluía la Policía Internacional de la Misión y el Departamento de asuntos judiciales, competencias que anteriormente estaban a cargo del pilar de administración civil¹¹⁰².

Es importante aclarar que la Misión trabajó en instituciones transitorias, en materia de justicia se habla de salas mixtas formadas por medio del Reglamento N° 2000/64 de la Misión y que dependían del Departamento de Asuntos Judiciales del componente II de la Misión, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa se ocupó de fortalecer las capacidades del sector justicia¹¹⁰³.

El Departamento de Asuntos Judiciales, se integró por dos secciones de trabajo, estas fueron:

- a. *“Administración de Tribunales y Servicios de Fiscalía; y*
- b. *Gestión penal”*¹¹⁰⁴.

En marzo de 2000, por medio del Reglamento N.º 2000/15¹¹⁰⁵, se crearon tres instituciones provisionales en materia de administración de justicia, estas fueron:

- a. El Departamento Administrativo de Justicia, institución que asumió algunas funciones de administración de justicia, como lo fueron el nombramiento de jueces y fiscales internacionales¹¹⁰⁶.

¹¹⁰¹ NACIONES Unidas, Mantenimiento de la paz. S.F. *Óp. Cit.*

¹¹⁰² Ídem. Página: 123

¹¹⁰³ OFICINA del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 2008 *Óp. Cit.* Página: 11

¹¹⁰⁴ Ídem.

¹¹⁰⁵ Reglamento N° 2000/15, de 21 de marzo de 2000, sobre el establecimiento del Departamento Administrativo de Justicia.

¹¹⁰⁶ NACIONES Unidas, Comité de Derechos Humanos. 2006. *Informe presentado al Comité de Derechos Humanos por la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo sobre la situación de los Derechos Humanos en Kosovo desde junio de 1999. Kosovo (Serbia y Montenegro)*. CCPR/C/UNK/1. Página: 10

- b. La *“División de Apoyo Judicial Internacional, adscrita al Departamento de Asuntos Judiciales y presidida por un funcionario internacional, aunque de hecho formaba parte del mismo aparato administrativo que el Departamento Administrativo de Justicia”*¹¹⁰⁷, y
- c. *“El Departamento de Asuntos Judiciales en gran medida tenían funciones en común, ya que ocupaban el mismo local y compartían muchos supervisores, funcionarios y miembros de personal”*¹¹⁰⁸.

En 2001 luego de la revisión de las disposiciones el Departamento de Asuntos Judiciales se transformó en el Departamento de Justicia y fue integrado por cinco divisiones, siendo estas¹¹⁰⁹:

- a. *“Desarrollo Judicial;*
 - i. *Sección de Desarrollo Profesional*¹¹¹⁰,
 - ii. *Sección de Integración Judicial*¹¹¹¹
 - iii. *Dependencia de Inspección Judicial*¹¹¹²
 - iv. *Dependencia de Ayuda y Protección a las Víctimas.*
- b. *Administración Penitenciaria;*
- c. *Apoyo Judicial Internacional;*
- d. *De lo Penal; y*
- e. *La Oficina de Personas Desaparecidas y Medicina Forense”*¹¹¹³.

El Departamento de Justicia también tuvo la División de Normas Jurídicas, destinada a *“facilitar la cooperación y asistencia judicial entre los tribunales de Kosovo y los de otras jurisdicciones y una Dependencia de Operaciones, encargada de la política y de coordinar la seguridad del personal, edificios y bienes judiciales”*¹¹¹⁴.

¹¹⁰⁷ NACIONES Unidas, Comité de Derechos Humanos. 2006. *Óp. Cit.*

¹¹⁰⁸ Ídem.

¹¹⁰⁹ Ídem.

¹¹¹⁰ *“Que prestaba servicios de secretaría al Consejo de la Judicatura y la Fiscalía de Kosovo y apoyo al Programa de Desarrollo Profesional para jueces y fiscales”.* Ídem.

¹¹¹¹ *“Que fomentaba la representación étnica en el sistema judicial;”* Ídem.

¹¹¹² *“Encargada de investigar los actos de mala conducta en el ejercicio de la profesión de jueces y fiscales y de procesar los casos individuales ante el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía de Kosovo”.* Ídem.

¹¹¹³ Ídem.

¹¹¹⁴ Ídem. Página: 11

Las funciones del Departamento de Justicia fueron *“la formulación de estrategias y políticas relacionados con el sistema de justicia y los servicios de fiscalía. Sus objetivos fueron:*

- a. Concebir y dirigir un sistema eficaz y eficiente de tribunales y fiscalías que promoviera el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos de todas las personas;*
- b. Integrar a las minorías étnicas en el sistema judicial de Kosovo, facilitando su acceso a la justicia y vigilando el trato a las minorías por parte del sistema judicial;*
- c. Adaptar los servicios de medicina y patología forense a niveles internacionalmente aceptables para que pudieran proporcionar pruebas forenses en las investigaciones penales;*
- d. Supervisar la labor de los jueces y fiscales, auditar el funcionamiento de los tribunales y las fiscalías e investigar las denuncias de mala conducta judicial y de los fiscales;*
- e. Proteger los derechos de las víctimas y asegurar su participación en los procesos penales”*¹¹¹⁵.

El Departamento de Justicia fue la institución del Representante Especial con poder reservado, tuvo a su cargo la preparación del presupuesto del sistema judicial¹¹¹⁶.

C.COMPETENCIA

La Misión tuvo competencia en materia de derechos humanos, para recibir *“quejas sobre abusos de autoridad cometidos por las instituciones locales provisionales, desplegó observadores a lo largo de todo el país, dando acceso ilimitado para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos”*¹¹¹⁷; también apoyó el trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja y del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia¹¹¹⁸.

¹¹¹⁵ NACIONES Unidas, Comité de Derechos Humanos. 2006. *Óp. Cit.* Páginas: 10 y 11

¹¹¹⁶ *Ídem.*

¹¹¹⁷ IGLESIAS Velasco, Alfonso J. 2001. *Óp. Cit.* Página: 19

¹¹¹⁸ *Ídem.*

El Departamento de Justicia tuvo la potestad de influir en el sistema de justicia de Kosovo en general, aunque se le dio especial prioridad a la justicia penal en concreto a los crímenes cometidos durante la guerra.

D.FORTALEZAS

La fortaleza de la Misión radicó en las facultades que le fueron delegadas por el Consejo de Seguridad como la autoridad sobre el territorio, la población, le otorgó tareas legislativas, ejecutivas y la administración del poder judicial¹¹¹⁹.

E.REGLAS DE ADMISIBILIDAD

Los casos fueron tratados de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Penal de Kosovo, no se aplicaban las reglas de admisibilidad que se aplican en los órganos internacionales.

F. TIEMPO DETERMINADO

El Consejo de Seguridad no impuso un plazo de funcionamiento de la Misión, de hecho, la Misión sigue funcionando en Kosovo, sólo que a partir de 2008 luego de la promulgación de la nueva Constitución sus funciones se limitaron a promover la seguridad, la estabilidad y la observancia de los derechos humanos en Kosovo.

G.DISTRIBUCIÓN DEL PODER.

La Misión trató de promover la participación de la población de Kosovo, albaneses y serbios, por medio de algunos órganos orientativos e informativos siendo estos:

- a. El *“Consejo de Transición de Kosovo: órgano consultivo que incluía a representantes de las principales comunidades y grupos políticos. Desarrolló una labor de apoyo y orientación de las decisiones y acciones de la Misión”*¹¹²⁰. A partir del 31 de agosto de 1999 estuvo conformado de la siguiente manera:

- *“2 miembros del UCK. Hashim Thaçi / Xhavit Haliti.*

¹¹¹⁹ NACIONES Unidas, Mantenimiento de la paz. S.F. *Óp. Cit.*

¹¹²⁰ FUNDACIÓ Solidaritat, S.F. *Óp. Cit.*

- 2 miembros del Movimiento Democrático Unit (LBD, Lëvizja e Bashkuar Demokratike). Rexhep Qosja / Mehmet Hajrizi.
- 2 miembros de la Liga Democrática de Kosovo (LDK). Ibrahim Rugova / Edita Tahiri.
- 2 independientes. Blerim Shala (editor de la revista Zëri) / Veton Surroi (director del diario Koha Ditore).
- 2 serbios. Momcilo Trajkovic (SPO, Movimiento de Resistencia Serbio) y Radosavljevic Artemije (Iglesia Ortodoxa de Serbia).
- 2 representantes del resto de minorías. Numan Balic (bosnio) / Sezair Shapi (Partido del Pueblo Turco)¹¹²¹.

b. “Comisiones Civiles Conjuntas: órganos creados para resolver las diferencias y asegurar una administración uniforme en diferentes sectores. Dentro de estos sectores estaba: justicia, salud, educación y atención familiar, servicios públicos y sanitarios, economía, finanzas, comunicaciones y medios de comunicación”¹¹²².

9. ¿SURGIÓ COMO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES?

A. ¿HABÍA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL?

En Kosovo ocurrieron graves atentados contra la paz y la seguridad y aunque era una guerra civil y es invocando los Principios de la Carta de Naciones Unidas que el Consejo de Seguridad decide la creación de la Misión, al fortalecer el Sistema de Justicia de Kosovo, la Misión pretendía que los responsables de los hechos fueran juzgados.

Al ser una Misión de transición, debía de garantizarse que se crearan las condiciones, mecanismos y entidades que permitieran a la población regresar a una vida normal, en un contexto de paz, así como el retorno de los desplazados que por el conflicto se vieron obligados a salir del territorio.

¹¹²¹ FUNDACIÓ Solidaritat, S.F. Óp. Cit.

¹¹²² Ídem.

B. OBLIGACIONES INTERNACIONALES

Las obligaciones internacionales adquiridas provenían de la Carta de Naciones Unidas, que fue el instrumento que se utilizó para la creación de la Misión, esas obligaciones eran para los Estados partes que debían velar por el mantenimiento de la paz, y para Kosovo, que al momento de creación provenía de un estado totalitario, sin embargo, Yugoslavia fue signataria de esta.

C. ¿ABORDA HECHOS ILÍCITOS INTERNACIONALES?

La Misión si abordó hechos ilícitos internacionales, puesto que existía conocimiento de los hechos ocurridos en el país medio de informes que evidenciaban los comportamientos atribuibles al Estado y que constituían una vulneración a las obligaciones internacionales.

10. COOPERACIÓN DE LOS ESTADOS.

La Misión ha sobrevivido gracias al apoyo de los Estados por medio del Consejo de Seguridad que la han apoyado financieramente y con personal enviado como contingente que ha trabajado en los temas de seguridad, mantenimiento de la paz y observancia de los derechos humanos¹¹²³.

11. INDEPENDENCIA

La Misión rinde cuentas únicamente al Consejo de Seguridad, por lo que su trabajo no responde a requerimientos de diferentes naciones, sólo rinde cuentas a la Asamblea General.

12. SELECCIÓN DE ACTORES

Los actores fueron plenamente definidos por la Resolución 1244 en la cual se establece que la Misión actuará en Kosovo para ayudar a su población, por medio del personal que se despliegue para esta tarea.

¹¹²³ NACIONES Unidas, Mantenimiento de la paz. S.F. *Óp. Cit.*

13. NORMATIVA RELEVANTE Y MARCO PROCEDIMENTAL

La normativa que utilizó la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo, no fue otra más que la misma normativa nacional que ya se tenía en Kosovo, así como las sugerencias de implementación de las normativas y mecanismos necesarios que garantice entidades autónomas capaces de proporcionarle a la ciudadanía las condiciones de paz y tranquilidad, así como las condiciones para que los refugiados y desplazados pudieran regresar y tener una vida pacífica.

Dentro de la resolución 1244 de 1999 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se contempló varios anexos de compromisos adquiridos para la implementación de la transición en la que el gobierno de Kosovo pusiera en marcha entidades que promovieran el cumplimiento de los principios de la Carta de Naciones Unidas y solventar la situación humanitaria que se vivía.

El anexo 1 se dio en la declaración que formuló el presidente al finalizar la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Ocho que se celebró en el Centro Petersberg el 6 de mayo de 1999, dentro de los principios aprobados estuvieron:

“El establecimiento de una administración provisional para Kosovo con arreglo a lo que decida el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a fin de crear condiciones propicias para que todos los habitantes de Kosovo puedan vivir una vida pacífica y normal;

Un proceso político encaminado al establecimiento de un acuerdo sobre un marco político provisional que prevea un gobierno autónomo sustancial para Kosovo, teniendo plenamente en cuenta los acuerdos de Rambouillet y los principios de soberanía e integridad territorial de la República Federativa de Yugoslavia y los demás países de la región, y la desmilitarización del Ejército de Liberación de Kosovo”¹¹²⁴

Por medio del Reglamento N.º 1999/1, la Misión “*declaró aplicable en Kosovo el derecho de la ex República Federal de Yugoslavia, incluido el Código Penal serbio, que se modificó para ajustarlo a las normas sobre derechos humanos.*

¹¹²⁴ CONSEJO de Seguridad de Naciones Unidas, 1999. *Óp. Cit.*

Esta decisión no fue bien recibida por los albanos de Kosovo, que se negaron a aplicar ese código penal, lo que provocó gran confusión. Por lo que la Misión decidió remediarlo por medio del Reglamento N.º 1999/24, en el que se decidió que la legislación aplicable era la vigente en Kosovo a 22 de marzo de 1989, siempre que no entrara en conflicto con las normas internacionales de derechos humanos. Esto se aplicó mientras se aprobaban las nuevas leyes”.¹¹²⁵

14. LEGITIMIDAD:

La legitimidad de la Misión no ha sido cuestionada, ha desarrollado sus funciones de acuerdo a las necesidades de Kosovo, nació por la necesidad de retomar y mantener la paz y la seguridad luego del desplazamiento de cientos de miles de kosovares.

15. JURISDICCIÓN

Al ser una Misión de Administración Provisional, la jurisdicción sobre la cual encaminaba su labor era el territorio de Kosovo. Los principios sobre los cuales vertía su competencia también iban encaminadas a garantizar condiciones propias de los ciudadanos dentro del territorio de Kosovo, para garantizar que los habitantes pudiesen tener una vida pacífica y normal, así como el retorno de los desplazados y ayuda humanitaria para los refugiados.

A. ¿QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE DE UN CASO?

Los posibles culpables de los crímenes cometidos en la guerra civil de la Ex Yugoslavia. Al inicio por tratarse de un régimen totalitario las víctimas no tenían mayor participación en las investigaciones penales, lo que con los cambios legislativos fue cambiando poco a poco. El mayor campo de acción de participación, lo tenían en las investigaciones que, por violaciones a los derechos Humanos, realizaba de manera directa las Naciones Unidas.

¹¹²⁵ IGLESIAS Velasco, Alfonso J. 2001. *Óp. Cit.* Página: 46

B. ¿QUÉ PROBLEMAS SE PODÍA DEBATIR?

Casos relacionados con las violaciones a los derechos humanos, especialmente los de discriminación por razones étnicas. Crímenes de guerra.

16. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN:

Los medios de impugnación se encontraban dentro de la legislación aplicable, ya que la Misión de Administración Provisional, fungía como intermediaria para la transición de procedimientos que garantizaran la paz dentro del territorio de Kosovo.

17. MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO

Dentro de la Resolución 1244 de 1999 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se consignó que se debía supervisar el desarrollo de instituciones provisionales dentro del Gobierno democrático con el objeto de formular las condiciones necesarias y apropiadas para garantizarle a los habitantes una vida pacífica y normal.

18. RECURSOS DISPONIBLES

Los recursos disponibles en materia de justicia eran los regulados en las leyes aplicables mientras se dio la transición.

A. HUMANO:

La estructura de la Misión de Administración Provisional se conformó de la siguiente manera:

- ii. Un representante Especial del Secretario General, en este puesto fungió Bernard Kouchner de Francia,
- iii. Un representante Especial adjunto principal, este puesto lo ocupó Jock Covey de Estados Unidos.
- iv. Un representante especial para la Administración Civil, este puesto fue ocupado por Dominique Vía de Francia;
- v. Un representante Especial para Asuntos Humanitarios, este lo ocupó *“D. McNamara de Nueva Zelanda de ACNUR;*

- vi. *Un representante Especial Adjunto para la Democratización y Fortalecimiento de las Instituciones puesto que fue ocupado por D. Everts, de Holanda (OSCE);*
- vii. *Un representante especial Adjunto para la Reconstrucción, quien ocupó este puesto fue J. Dixon, de Irlanda (UE).*
- viii. *Un administrador Civil del Distrito de Pristina, quien ocupó este puesto fue E. Aguilar de México;*
- ix. *Un administrador Civil del Distrito de Mitrovica puesto ocupado por Sir M. Garrod de Reino Unido,*
- x. *Un administrador Civil del Distrito de Gnjilane ocupado por R. Heislip, de Irlanda;*
- xi. *Un administrador Civil del Distrito de Prizren ocupado por L. Myhlback de Suecia,*
- xii. *Un administrador Civil del Distrito de Pec ocupado por A. Le Roy de Francia.*
- xiii. *Un Comisionado de la Policía Internacional de la ONU, puesto ocupado por S. Frederiksen de Dinamarca y*
- xiv. *Un portavoz y Director de Información, este lo ocupó Nadia Younes de Egipto*¹¹²⁶.

Al inicio, los Reglamentos N° 2000/6 y N° 2000/34 previnieron la incorporación de jueces y fiscales internacionales en los grupos internos¹¹²⁷, lo que fue criticado por la OSCE y las ONG, porque la imparcialidad que ofrecía no era suficiente.

B. MATERIAL:

La Misión ha sido dotada de la infraestructura necesaria para funcionar. Hasta 2020 la Misión ha producido 984 documentos¹¹²⁸.

¹¹²⁶ FUNDACIÓ Solidaritat, S.F. Óp. Cit.

¹¹²⁷ Ídem.

¹¹²⁸ UNITED Nations. S.F. Documents and Publications. En: *Digital Library* [en línea]. Disponible en: https://digitallibrary.un.org/search?ln=en&cc=Documents+and+Publications&p=%22UN+Interim+Administration+Mission+in+Kosovo%22+OR+UNMIK&f=&action_search=Search&rm=&ln=en&sf=year&so=d&rg=50&c=Documents+and+Publications&c=&of=hb&fti=0&fti=0 [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

C. PRESUPUESTO ASIGNADO:

La Misión se financia por medio de una cuenta independiente que la Asamblea General aprueba cada año¹¹²⁹.

En su totalidad los gastos aprobados para sueldos en 2003 fueron de 5.18 millones de euros, *“y comprendía un crédito para 1.946 funcionarios de todos los niveles del sistema judicial. Anteriormente, los administradores de los tribunales regionales distribuían los pagos a los tribunales locales para distintas partidas de gastos, por ejemplo, pequeñas partidas de equipo y reparaciones, pero esta práctica se ha revisado”*¹¹³⁰.

Posteriormente, *“los tribunales dirigieron sus solicitudes de fondos para bienes de equipo y mantenimiento al Departamento de Administración Judicial, adscrito al Ministerio de Servicios Públicos de las instituciones provisionales. Con este fin se distribuyó a cada tribunal local una caja chica, por un monto máximo de 2.500 euros al mes, cuyos fondos se reponían una vez agotado el 75% del pago precedente”*¹¹³¹.

El Departamento de Justicia examinaba directamente las facturas de servicios municipales¹¹³². Para el período 2018 – 2019 se aprobaron USD. 37,192,700.00 dólares¹¹³³.

19. EL PAPEL DE LA VÍCTIMA:

La víctima directamente no tenía un papel relevante, debido a que se aplicaban las leyes del régimen totalitario, con la promulgación de nuevas leyes en las que se aplicarían los estándares internacionales en materia de derechos humanos, se empezaron a reconocer los derechos de las víctimas.

¹¹²⁹ NACIONES Unidas, Mantenimiento de la paz. S.F. *Óp. Cit.*

¹¹³⁰ *Ídem.*

¹¹³¹ *Ídem.*

¹¹³² *Ídem.*

¹¹³³ NACIONES Unidas, Asamblea General. 2018. Recursos aprobados para las operaciones de mantenimiento de la paz para el período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 20 de junio de 2019. A/C.5/72/25 Página: 4. En: *Naciones Unidas* [en línea]. Disponible: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/211/65/PDF/N1821165.pdf?OpenElement> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

En cuanto a la recepción de denuncias en materia de violaciones a los derechos humanos la Misión trabajaba directamente con las víctimas.

20. PERCEPCIÓN PÚBLICA:

Se criticó a la Misión porque en Kosovo no hubo mayor difusión del programa de jueces y fiscales internacionales¹¹³⁴.

Los medios de comunicación no dieron la mejor difusión a la Misión, se les calificó como parciales e incendiarios, lo que provocó ataques constantes a los jueces y fiscales internacionales y a sus fallos. Hicieron parecer que el sistema judicial era opaco y que socavaba el estado de derecho¹¹³⁵.

En la fase inicial existió muy poca capacitación de los jueces nacionales que fue difícil su designación, (porque la mayoría por problemas de seguridad habían abandonado el país), en materia de derechos, lo que, sumando a los problemas de lenguaje y ubicación de la mayoría de los tribunales, dificultaba las decisiones.

21. NÚMERO DE CASOS INGRESADOS

Al ser una Misión de Administración Provisional, no llevo casos como tal.

22. NÚMERO DE CASOS RESUELTOS

Al ser una Misión de Administración Provisional, no llevo casos como tal.

23. ANÁLISIS CUALITATIVO:

El aporte a nivel judicial de la Misión fue criticado por quien tenía la verdadera responsabilidad, al delegar directamente a la administración ejecutiva de Naciones Unidas la disposición que aprobaron el tribunal mixto, debido a que no se les dio participación a actores locales, tampoco se consultó sobre la participación de actores

¹¹³⁴ NACIONES Unidas, Comité de Derechos Humanos. 2006. *Óp. Cit.* Página: 25

¹¹³⁵ Ídem. Página: 48

internacionales en el sistema jurídico, lo cual se recogió en el Reglamento N.º 2000/64 de la UNMIK.¹¹³⁶

Debido a que los jueces nacionales fueron incapaces de juzgar los crímenes de guerra, la Misión tuvo que sustituirlos por jueces y fiscales internacionales¹¹³⁷.

Se cuestionó el mandato de la Misión para fortalecer las capacidades y *“asegurar el funcionamiento del sistema de justicia. Se criticó al Departamento de Asuntos Judiciales por consumir muchos recursos, así como por tomar malas decisiones en el tema del uso de la prisión preventiva, lo que suscitó críticas de la OSCE, y que contribuyó al distanciamiento entre ambos enfoques”*¹¹³⁸.

El desconocimiento de los jueces internacionales sobre el derecho interno y la falta de capacitación sobre el sistema jurídico kosovar, provocó que perdieran *“las votaciones frente a los jueces de Kosovo, lo que representó sentencias condenatorias no razonadas contra acusados serbios de Kosovo y discutibles sentencias absolutorias de acusados albaneses de Kosovo”*¹¹³⁹. Lo que dio como resultado la promulgación del Reglamento N.º 2000/64 en diciembre de 2000, con el fin de terminar con esos problemas.

El reglamento facultó al Representante Especial del Secretario General a la designación de *“un grupo especial de tres jueces con mayoría internacional, que provocó la dependencia de los grupos internacionales y que no fue de provecho para el sistema jurídico de Kosovo”*.¹¹⁴⁰

Esto también dio como resultado que la estadía promedio de los jueces internacionales fuera de seis meses aproximadamente, situación que se empeoraba por la brevedad de los contratos, y que derivó en jueces internacionales que se retiraron de la misión sin haber emitido sentencias, lo que provocó más retardo al tener que reiniciar el juicio.¹¹⁴¹

¹¹³⁶ OFICINA del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2008. Óp. Cit. Página: 21

¹¹³⁷ Ídem.

¹¹³⁸ Ídem. Página: 11

¹¹³⁹ Ídem.

¹¹⁴⁰ Ídem. Página: 30

¹¹⁴¹ Ídem.

El personal internacional capacitó sobre cuestiones de crimen organizado y lavado de dinero.¹¹⁴² La persecución penal de estos fenómenos se trató de fortalecer por medio de la creación de una Oficina del Fiscal Especial¹¹⁴³.

Muchos de los jueces y fiscales de Kosovo fueron exiliados por leyes discriminatorias ¹¹⁴⁴, otro grave problema fue el insuficiente acceso a la interpretación y el desconocimiento del idioma por parte de los jueces internacionales, lo que dificultó las deliberaciones y los intercambios de opinión, el problema se volvió más profundo al estar la mayoría de los tribunales en distinta ubicación física los jueces internacionales y los jueces nacionales.

Otro grave problema para la deliberación era el desconocimiento de los jueces de Kosovo en *“materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, y del código penal o procedimiento penal”* ¹¹⁴⁵que se utilizaba.

Entre los legados con más éxito se encuentra el Servicio de Policía de Kosovo, el cual inició contratando 6.000 oficiales nuevos y pese a que *“absorbió el 50% del Ejército de Liberación de Kosovo, fue capaz de cambiar de forma importante la cultura institucional de esa entidad”*¹¹⁴⁶.

A diferencia de Timor Oriental, el desarrollo y contribución en materia judicial en Kosovo es más desconocido, luego de estudiar el tema, los datos no son claros y el funcionamiento del Sistema Judicial no está tan claro como sucedió con Timor Oriental.

En materia judicial el trabajo de la Misión finalizó, posteriormente la OSCE se encarga de apoyar a Kosovo en el fortalecimiento del sistema judicial.

Luego de este completo estudio analítico en los aspectos que a mi juicio consideré de mayor relevancia, se puede establecer que la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo si contribuyó a la lucha contra la impunidad, pero fue un resultado bastante difuso que no se ha podido completar y que dio como

¹¹⁴² OFICINA del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2008. *Óp. Cit.* Página: 30

¹¹⁴³ *Ídem.*

¹¹⁴⁴ *Ídem.*

¹¹⁴⁵ *Ídem.*

¹¹⁴⁶ *Ídem.* Página: 21

resultado la creación del Tribunal Especial para Kosovo, un esfuerzo del Consejo de Europa con base en La Haya y que pretende juzgar a los responsables de los delitos cometidos durante la guerra en Kosovo, la Misión no logró el fortalecimiento de la justicia ni la persecución necesaria durante la duración de su mandato.

A continuación, se presenta de forma gráfica y sintética el trabajo realizado por la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo.

		Mandato	Duración del Mandato	Cesación de los hechos que originaron el mandato	Inicio del primer juicio	Universo de casos	Casos procesados y/o relaciones procesales	Tiempo promedio de los casos	Casos pendientes de resolución	% Casos presentados versus casos resueltos	% Casos posibles de procesamiento versus casos resueltos
1	Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo	Desarrollar localmente instituciones de autogobierno y establecer un marco legislativo que permitiera su adecuado funcionamiento	Desde 1999 a la fecha 22 años	1999	No se puede determinar	No se puede determinar	No se puede determinar	No se puede determinar	No se puede determinar	No se puede determinar	No se puede determinar

A.3.2

TRIBUNALES HÍBRIDOS CREADOS POR MUTUO ACUERDO ENTRE NACIONES UNIDAS Y EL ESTADO INVOLUCRADO

Los Tribunales Híbridos o Internacionalizados creados por mutuo acuerdo entre Naciones Unidas y el Estado Involucrado son la segunda categoría establecida por Donlon.

En esta categoría se incluye a:

- a. Tribunal Especial para Sierra Leona
- b. Salas Extraordinarias de la Corte de Camboya
- c. Tribunal Penal Especial en la República Centroafricana

Estos tribunales se sitúan fuera del sistema jurídico nacional, se rigen por su propio estatuto y sus propias normas de procedimiento y prueba. Como se mencionó al inicio de esta sección únicamente se abordarán el Tribunal Especial para Sierra Leona y las Salas Extraordinarias de la Corte de Camboya.

CAPÍTULO VII

TRIBUNAL ESPECIAL PARA SIERRA LEONA

ANTECEDENTES

Como la mayoría de Tribunales, el Tribunal Especial para Sierra Leona también fue creado como consecuencia de un conflicto, en este caso el de 1991, cuando el entonces presidente de Sierra Leona “*decidió apoyar a las fuerzas regionales del Grupo de Verificación del Alto al Fuego*”¹¹⁴⁷.

Conflicto derivado de una serie de operaciones militares contra el régimen de Freetown dirigidas por el Frente Revolucionario Unido, guerrilla de Sierra Leona asentada en Liberia con el apoyo de Charles Taylor, lo que inició un largo y cruento conflicto armado.¹¹⁴⁸

Sierra Leona fue dirigida por el Consejo Nacional Provisional y los militares, hasta 1996, su dominación fue enfrentada por los guerrilleros del Frente Revolucionario Unido, quienes, con su acción bélica y sangrientos ataques, lograron controlar gran parte del territorio hasta lograr en 1995 que la guerra civil afectara a todo el país.

El gobierno militar fue derrocado por medio de un golpe de estado en febrero de 1996, se convocó a elecciones en donde fue elegido como presidente Ahmad T. Kabbah, quien durante su gobierno inició las negociaciones con los guerrilleros, consiguiendo el 30 de noviembre de 1996, la firma del Acuerdo de Paz de Abidjan¹¹⁴⁹. Acuerdo que no se respetó y que provocó que se reanudarán las hostilidades. En mayo de 1997, un año después, “*el gobierno democrático fue derrocado por el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, suspendiendo la Constitución y prohibiendo los partidos políticos, golpe que fue condenado por la comunidad internacional*”¹¹⁵⁰,

¹¹⁴⁷ BLANC Altemir, Antonio. 2003. *El Tribunal Especial para Sierra Leona: Un instrumento contra la impunidad por las violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario*. [en línea] Universidad de Navarra. Página: 102. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

Disponible en: https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/21545/1/ADI_XIX_2003_05.pdf

¹¹⁴⁸ Ídem. Página: 101

¹¹⁴⁹ Ídem.

¹¹⁵⁰ Ídem.

quien tomó medidas para condenar expresamente el golpe de estado, el Consejo de Seguridad también tomó las medidas sancionatorias. La Junta Militar fue expulsada en febrero de 1998 por el Grupo de Supervisión de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental que retornó a Kabbah en el poder¹¹⁵¹. La comunidad internacional saludó el regreso a la democracia, aunque esto no fue el fin del conflicto, ni de los problemas del país, porque el Frente Revolucionario Unido continuó con los ataques, luego de que su líder fuera arrestado y condenado a muerte, llegando en ese momento a un estado de alta intensidad de los ataques con el fin de liberar a su líder¹¹⁵².

A finales de mayo de 1999, se iniciaron las gestiones para llegar a un acuerdo de paz, estas fueron principalmente patrocinadas por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental¹¹⁵³, con la promesa de liberar al líder rebelde Sankoh e iniciar el alto al fuego. *“El 7 de julio de 1999, el gobierno de Sierra Leona y el Frente Revolucionario Unido firmaron el Acuerdo de Paz de Lomé”*¹¹⁵⁴.

El Acuerdo fue ratificado a los pocos días por el Parlamento de Sierra Leona y se adoptaron las medidas legislativas pertinentes para su vigencia. El 22 de octubre de 1999, el Consejo de Seguridad por medio de la Resolución 1270 creó la Misión de Naciones Unidas en Sierra Leona, con el objetivo que cooperar con la implementación del Acuerdo de Paz en diferentes componentes ¹¹⁵⁵.

El Acuerdo de paz de Lomé garantizó el cese al fuego inmediato al igual que una amnistía y perdón total a las partes actoras del conflicto. Entre las medidas tomadas para la reconciliación nacional se creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación para conocer las circunstancias en que se consumaron los crímenes, los cuales se debían reconocer públicamente para que los familiares de las víctimas y la sociedad conocieran los hechos y las razones que motivaron su comisión. La Organización de Naciones Unidas de forma rápida se pronunció respecto a la amnistía acordada, indicando que esa amnistía otorgada por los acuerdos de paz no aplicaba respecto a

¹¹⁵¹ BLANC Altemir, Antonio. 2003. *Óp. Cit.*

¹¹⁵² *Ídem.*

¹¹⁵³ *Ídem.*

¹¹⁵⁴ *Ídem.* Página: 102

¹¹⁵⁵ *Ídem.*

crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario.

Tal como lo subrayó Amnistía Internacional, *“no puede existir una auténtica reconciliación- y con ella, una paz duradera- si no se establece la verdad sobre los graves abusos contra los derechos humanos que se han cometido en Sierra Leona y sus autores no rinden cuentas de sus actos”*¹¹⁵⁶. Asimismo señaló que *“el gobierno de Sierra Leona y la Comunidad Internacional debe reconocer que mientras las comisiones de verdad y reconciliación podrán hacer una contribución al esclarecimiento de la verdad acerca de los abusos contra los derechos humanos y el entendimiento de la naturaleza del conflicto, no debe ser sustituto de la persecución de aquellos responsables de graves crímenes ante el Derecho Internacional”* *“Al no abordar la impunidad para los autores de abusos graves contra los derechos humanos, el acuerdo de paz no sirve para disuadir de que continúen cometiéndose estos abusos ni para que cese la burla a las normas internacionales de derechos humanos y del derecho humanitario”*¹¹⁵⁷.

El Tribunal Especial para Sierra Leona, nace como consecuencia de la amnistía otorgada en el Acuerdo de paz de Lomé, surgiendo como una medida para garantizar que aquellos delitos graves contra el derecho humanitario no burlaran la justicia evadiendo las responsabilidades ulteriores inherentes a los actos cometidos. El Tribunal se crea a partir de un acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Sierra Leona por medio de la resolución 1315 de 14 de agosto de 2000, rigiéndose conforme al Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona.

1. ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ FUE CREADO?

Los conflictos ocurridos en Sierra Leona, constituyeron una grave violación a los derechos humanos, en el que los derechos que frecuentemente se ven vulnerados son considerados irreparables, y la mayoría de ellos clasificados como crímenes de lesa humanidad, lo que afectó gravemente el orden constitucional y el estado de

¹¹⁵⁶ AMNISTÍA Internacional. 1999. *Sierra Leona: un Acuerdo de Paz pero sin justicia* [en línea]. AI: AFR Página: 1 Disponible en: [51/07/99/https://www.amnesty.org/download/Documents/140000/afr510071999es.pdf](https://www.amnesty.org/download/Documents/140000/afr510071999es.pdf) [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

¹¹⁵⁷ Ídem.

derecho, por lo que se hizo necesaria la intervención de un Órgano Internacional para la creación de mecanismos que contribuyera a la restitución del orden social, en este particular caso fue la creación del Tribunal Especial para Sierra Leona, el cual sería el encargado de enjuiciar a los responsables de la comisión de esos delitos ocurridos en el territorio sierraleonés.

El Estatuto estipulaba en su *“Artículo 1 que el Tribunal tendría la facultad de perseguir penalmente a personas que detentaban la mayor responsabilidad sobre las graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, al artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y en el protocolo adicional II de 1977 así como contra el derecho local de Sierra Leona cometidos en su territorio desde el 30 de noviembre de 1996”*¹¹⁵⁸.

El Estatuto recogía la voluntad de garantizar el procesamiento de los posibles responsables, eliminando los obstáculos que favorecían la impunidad. El artículo 9 enfatiza la necesidad tener la certeza someter a la jurisdicción del Tribunal a toda persona que resultara responsable de ejecutar los delitos regulados en los artículos 2, 3 y 4, aunque éstos hubiesen sido procesados penalmente por un tribunal nacional, para asegurar que los intereses del tribunal respectivo no estén comprometidos y procurando garantizar la autenticidad y transparencia del proceso¹¹⁵⁹. Todo esto evidencia que el Estatuto y la creación del Tribunal son una herramienta más de la lucha eficaz contra la impunidad por parte de la Comunidad Internacional.

2. PAPEL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN SU CREACIÓN

La naturaleza de creación de los tribunales especiales en los diferentes Estados que se han visto afectados por diversos conflictos armados internos, ha necesitado la

¹¹⁵⁸ CONSEJO de Seguridad de las Naciones Unidas, 2000, *Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona*, Artículo 1

¹¹⁵⁹ Además, se busca que la gravedad del delito sea reconocida y por ende reflejada en la pena impuesta ya que el procesar a un individuo por un crimen común en vez de procesarlo por la violación al Derecho Internacional Humanitario minimiza la gravedad del acto cometido pormenorizando los daños ocasionados.

Se clarifica en el artículo 10 del ETESL respecto a la amnistía pactada en el Acuerdo de Paz de Lomé constatando que no se extenderá a los delitos contenidos en los artículos 2, 3 y 4 del ETESL por lo que toda violación grave al Derecho Internacional Humanitario será perseguida por el tribunal. Con ello se consolida la postura de la Comunidad Internacional y del pueblo de Sierra Leona sobre la intolerancia hacia la elusión de la justicia en aras de una paz imitada ya que el conocer la verdad acerca de los hechos no basta, para obtener una justicia auténtica y duradera se requiere que los actores sean responsabilizados por sus crímenes.

intervención de la Comunidad Internacional, para que esta contribuya en el establecimiento de mecanismos que contribuyan para restituir el orden social por medio de órganos jurisdiccionales imparciales e independientes. El Tribunal Especial para Sierra Leona, no es la excepción, en el 2002 a petición del Gobierno sierraleonés las Naciones Unidas acuerdan la creación de un tribunal especial, destinado a enjuiciar a los responsables de diversos crímenes de lesa humanidad ejecutados en Sierra Leona como producto de un conflicto armado que tuvo lugar entre 1996 y el 2002.

Naciones Unidas ya había tenido intervención en el territorio de Sierra Leona antes de la creación del Tribunal Especial, en 1997 cuando el Gobierno democrático fue derrocado luego del acuerdo de Paz de Abidján, en el que expulso a Sierra Leona de la Commonwealth¹¹⁶⁰ y posteriormente en la implementación del Acuerdo de Paz de Lomé.

3. ¿CÓMO SE ABORDÓ EL TEMA DE LA SOBERANÍA?

El Tribunal Especial se creó a partir de la solicitud del Gobierno de Sierra Leona, el establecimiento del mismo se realizó de forma consensuada con el gobierno del país anfitrión por lo que la soberanía no fue vulnerada, ni cuestionada.

La creación del Tribunal Especial se rigió bajo las normas del país y se sometió a las normas preexistentes, es decir no hubo riña con los protocolos y estatutos ya establecidos, su creación fue motivada por la vulneración de los derechos humanos y el objetivo primordial fue la restitución de dichos derechos, por lo que el país no se vio afectado de ninguna manera, menos se le restó soberanía u autonomía al Gobierno. Dentro de las normas que el tribunal especial aplicaría se encuentra la del derecho penal sierraleonés.

4. TIPO DE GOBIERNO ¿DEMOCRACIA?

La creación del Tribunal surge justo en la transición democrática de Sierra Leona, luego de la cesación del conflicto armado que se logra con la firma del Acuerdo de Paz de Lome.

¹¹⁶⁰ Siglas en ingles de la Mancomunidad de Naciones.

5. ¿ESTADO DE DERECHO?

El Tribunal Especial para Sierra Leona, no nació en un estado de derecho pleno, debido a que estaban en transición después de la firma de la paz, existía todo un cuerpo legal que fue el que se decidió que utilizara el Tribunal.

6. ¿ORIGEN BASADO EN CIERTAS SUPOSICIONES O CONDICIONES FÁCTICAS?

El Tribunal surge por condiciones fácticas, como ya se ha analizado el establecimiento del tribunal especial se dio con el propósito de enjuiciar a los miembros del Frente Revolucionario Unido, así como a los responsables de los crímenes cometidos en Sierra Leona y el secuestro de los miembros de la operación encargada de la implementación y mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas.

Se crea a partir de la necesidad de llevar a los responsables de la comisión de los delitos cometidos en Sierra Leona entre 1996 y el 2002, a pesar de que se había concedido una amnistía, mediante la firma del Acuerdo de Paz de Lomé en 1999. La labor del tribunal especial se centraría en 4 casos a saber Charles Taylor, CDF (Fuerzas de Defensa Civil), AFRC (Fuerzas Armadas del Consejo Revolucionario) y FUR (Frente Unido Revolucionario)¹¹⁶¹.

Estos son los casos que produjeron la mayor parte de los vejámenes perpetrados en Sierra Leona y causaron más de 70,000 muertos, millones de desplazados, abusos sexuales y el reclutamiento de hombres y niños para ser utilizados en la guerrilla¹¹⁶².

7. DOCUMENTO DE CREACIÓN

El Tribunal fue creado por medio de la Resolución 1315 (2000) la cual fue resultado de “... *negociaciones bilaterales, el 16 de enero de 2002 se firmó en Freetown (Sierra Leona) el Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Sierra Leona acerca del Establecimiento de un Tribunal Especial para Sierra Leona, en cuyo anexo*

¹¹⁶¹ VERDUGO Pérez, Susana del Pilar, 2019, *La Corte Especial Residual para Sierra Leona (una Valoración)*, [en línea]. Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile, Fecha de [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] Disponible en: <http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/168524/La-Corte-Especial-Residual-para-Sierra-Leona-una-valoraci%C3%B3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

¹¹⁶² Ídem.

*figuraba el Estatuto del Tribunal. El Acuerdo entró en vigor, de conformidad con su artículo 21, el 12 de abril de 2002, tras ser ratificado por Sierra Leona*¹¹⁶³.

Tras la firma el Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Sierra Leona, se instauró el Tribunal Especial para Sierra Leona, que sería el encargado de enjuiciar a los mayores responsables de los crímenes cometidos en este territorio, así como el secuestro de personal de las Naciones Unidas que cumplieran con su misión en las operaciones del mantenimiento de la paz tras la firma del Acuerdo de Paz Abidján en noviembre de 1996.

Posteriormente, se emitió el Estatuto que desarrolló el funcionamiento del Tribunal.

8. MANDATO

El mandato es bastante específico en cuanto a su finalidad precisada en la Resolución 1315 (2000) cuando estableció que se rindieran cuentas y se juzgaran los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones al derecho internacional humanitario, y los delitos tipificados en el derecho de Sierra Leona, por los hechos ocurridos en el país desde el 30 de noviembre de 1996¹¹⁶⁴.

A. OBJETIVOS

En el artículo 1 del estatuto de Creación del Tribunal Especial para Sierra Leona, se determinó que el objetivo principal de este era el de enjuiciar a las personas que tengan mayor responsabilidad en los actos criminales cometidos en Sierra Leona desde noviembre de 1996, en el que se incluyó también los crímenes que atentaron contra el establecimiento e implementación de los procesos de paz¹¹⁶⁵.

B. ALCANCES DEL MANDATO

El mandato era aplicable por los delitos cometidos en el territorio de Sierra Leona desde 1996, los hechos anteriores a esta fecha no hicieron parte del mandato, y

¹¹⁶³ UNITED Nations Audiovisual Library of International Law, 2017, *Óp. Cit.*

¹¹⁶⁴ CONSEJO de Seguridad de las Naciones Unidas, 2000. *Óp. Cit.*

¹¹⁶⁵ *Ídem*. Artículo 1

eventualmente se investigaban en el régimen ordinario interno sin apoyo internacional lo que indica que muy seguramente quedaron en la impunidad.

C. COMPETENCIA

El Tribunal Especial para Sierra Leona estableció su mandato con el fin de juzgar a los máximos responsables por las graves violaciones cometidas del derecho internacional humanitario y el derecho nacional de Sierra Leona. Dentro de los crímenes que estando bajo su competencia:

- *“Crímenes de lesa humanidad*
- *Violaciones del artículo 3 común a los cuatro Convenciones de Ginebra y el Protocolo II Adicional*
- *Otras violaciones del derecho internacional humanitario*
- *Crímenes bajo el derecho de Sierra Leona”*¹¹⁶⁶

D. FORTALEZAS

Lo trascendental de este Tribunal es la aplicación de normas internacionales de derecho internacional humanitario y derecho penal internacional y tuvo como referente la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional de la Ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que fue un excelente precedente en la utilización de la experiencia de tribunales establecidos en otros países, con el fin de solucionar problemas de la misma naturaleza. Resulta de especial transcendencia en la lucha contra la impunidad, que *“fue el primer tribunal en sostener que una amnistía nacional no aplica a la judicialización de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves al derecho internacional humanitario”*¹¹⁶⁷.

También, se debe destacar los procesos de capacitación a los abogados internos para asumir la defensa en los casos y el proyecto de capacitación a todos los abogados del sistema de justicia, fue relevante. En el funcionamiento del tribunal se dio una amplia

¹¹⁶⁶ ICTJ. S.F. *Tribunal Especial para Sierra Leona*. [en línea]. Disponible en: <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Factsheet-SierraLeona.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

¹¹⁶⁷ Ídem.

participación a los nacionales y quienes cumplieran con las funciones de investigación, cumplieron papeles muy destacados en el aporte a los casos.

Como otro punto importante del legado además del trabajo cercano entre los jueces nacionales y los internacionales, es que la sociedad conoció del funcionamiento del tribunal y se integró un grupo con representantes de todos los sectores del tribunal para discutir y hablar del legado.

E. REGLAS DE ADMISIBILIDAD

En caso del Tribunal Especial para Sierra leona las reglas de admisibilidad no estaban definidas taxativamente, pero se pueden determinar de acuerdo con lo establecido en el Estatuto.

- ii. *Ratione Personae*: era aplicable para los máximos responsables los actos graves cometidos en Sierra Leona, incluidos los líderes que cometieron esos crímenes y quienes *“hayan amenazado el establecimiento y la implementación del proceso de paz”*¹¹⁶⁸.

*“Su jurisdicción cubrirá a todas aquellas personas mayores de 15 años que ostentaran la mayor responsabilidad por las violaciones al derecho internacional humanitario y a las leyes nacionales cometidas en el territorio de Sierra Leona desde el 30 de noviembre de 1996 hasta el momento de su establecimiento”*¹¹⁶⁹.

En el artículo 6 se estableció también que la responsabilidad penal sería de forma individual para determinar su nivel de participación y la pena a imponer.

- iii. *Ratione Materiae*: *“La competencia por razón de materia fue en lo relacionado a los crímenes de lesa humanidad, crímenes de Guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario”*¹¹⁷⁰, así como crímenes graves contenidos en la legislación nacional de Sierra leona.

¹¹⁶⁸ Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2000, *Óp. Cit.*

¹¹⁶⁹ ICTJ, S.F. *Óp. Cit.*

¹¹⁷⁰ *Ídem.*

- iv. Ratione Temporis: tendría competencia en razón de tiempo a los crímenes cometidos entre 1996 hasta el establecimiento del tribunal especial.
- v. Ratione Loci: Sólo se aplicaría a los delitos cometidos en el territorio de Sierra Leona...” *se establece en la facultad de enjuiciar a las personas que tengan la mayor responsabilidad por los actos graves de derecho internacional humanitario y el derecho de Sierra Leona cometidos en el territorio de Sierra Leona...*¹¹⁷¹

F. TIEMPO DETERMINADO

El Tribunal especial culminó su mandato en el 2013, tras 11 años de operaciones en el territorio sierraleonés. *“La primera sentencia en primera instancia fue emitida el 20 de junio de 2006, y la última sentencia fue confirmada por la Sala de Apelaciones en septiembre de 2013. Fue el primer Tribunal híbrido establecido ad hoc en el territorio del país donde los crímenes tuvieron lugar. Fue también el primero de su tipo en completar su mandato cerrar sus puertas en el 2013”*¹¹⁷².

G.DISTRIBUCIÓN DEL PODER.

En la creación del Tribunal Especial, se dejó consignado como se integraría, según los artículos 11, 12 y 13.

El Tribunal Especial estaba compuesto por los siguientes órganos: Las Salas, que comprenden una o *“más Salas de Primera Instancia y una Sala de Apelaciones; el Fiscal; y el Registro*¹¹⁷³.

Las Salas estaban integradas por no menos de ocho (8) ni más de once (11) jueces independientes. Los jueces debían ser personas de alto carácter moral, imparcialidad e integridad, con las calificaciones requeridas en sus respectivos países para ser nombrados en los más altos cargos judiciales” ¹¹⁷⁴. Serían

¹¹⁷¹ Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2000, *Óp. Cit.* Artículo 1.

¹¹⁷² ICTJ, S.F. *Óp. Cit.*

¹¹⁷³ Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2000, *Óp. Cit.* Artículo 11

¹¹⁷⁴ *Ídem.* Artículo 12

independientes en el desempeño de sus funciones, y no aceptarían ni solicitarían instrucciones de ningún Gobierno ni de ninguna otra fuente¹¹⁷⁵.

La composición de los miembros del Tribunal Especial era calificada como híbrida, porque del *“total de 11 jueces, siete eran internacionales designados por el secretario general de la ONU y cuatro de Sierra Leona, designados por el Gobierno”*

¹¹⁷⁶. El Tribunal se dividía en:

- a. *“Cámara de primera instancia: Se conformaba por tres jueces, uno designado por el Gobierno de Sierra Leona y dos por el secretario general de la ONU”*¹¹⁷⁷.
- b. *“Cámara de segunda instancia: Conformada por cinco jueces, dos designados por el Gobierno de Sierra Leona y tres internacionales”*¹¹⁷⁸.

En algunos casos el gobierno de Sierra Leona nominó a jueces internacionales a cambio de los jueces nacionales que eran requeridos, lo que provocó que se percibiera al Tribunal como un órgano de carácter internacional¹¹⁷⁹.

La Fiscalía estuvo a cargo de un fiscal internacional designado por el secretario general de la ONU, quien era asistido por un fiscal nacional adjunto, nombrado por el gobierno de Sierra Leona¹¹⁸⁰.

El Tribunal Especial para Sierra Leona fue el mecanismo en implementar una oficina de Defensa Propia que se encontraba dentro de la estructura de la Fiscalía, el secretario general de Naciones Unidas fue el encargado de nombra al jefe de dicha oficina.¹¹⁸¹

La Secretaría del Tribunal estaba liderada por un secretario internacional que era nombrado por el secretario general de la ONU¹¹⁸².

¹¹⁷⁵ Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2000, *Óp. Cit.* Artículo 13

¹¹⁷⁶ ICTJ. S.F. *Óp. Cit.*

¹¹⁷⁷ Ídem.

¹¹⁷⁸ Ídem.

¹¹⁷⁹ Ídem.

¹¹⁸⁰ Ídem.

¹¹⁸¹ Ídem.

¹¹⁸² Ídem.

9. ¿SURGIÓ COMO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES?

A. ¿HABÍA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL?

Para ese momento el término responsabilidad internacional ya se encontraba acuñado y la creación del Tribunal se dio precisamente por las graves violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y derecho penal internacional cometidas en Sierra Leona.

Al igual que los Tribunales Ad hoc, que fueron la inspiración para su creación y al igual que esto su objetivo no fue juzgar la responsabilidad internacional del Estado, sino la responsabilidad individual de los líderes de los grupos responsables de los crímenes. El hecho que se delimitara su competencia en conocer sobre las violaciones graves cometidas al derecho humanitario, crímenes de lesa humanidad, crímenes contenidos en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 refleja que fue creado dentro del marco de responsabilidad internacional que el Estado tenía frente a dichos instrumentos.

B. OBLIGACIONES INTERNACIONALES

Las obligaciones internacionales adquiridas provenían de la Carta de Naciones Unidas, que fue el instrumento que se utilizó para la creación de la Misión, esas obligaciones eran para los Estados partes que debían velar por el cumplimiento de los Acuerdo de Paz y la transición a la democracia.

C. ¿ABORDA HECHOS ILÍCITOS INTERNACIONALES?

El Tribunal si abordó hechos ilícitos internacionales, puesto que existía conocimiento de los hechos ocurridos en el país, por medio de informes que evidenciaban los comportamientos atribuibles al Estado que constituían una violación a las obligaciones internacionales.

10. COOPERACIÓN DE LOS ESTADOS.

La participación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la creación del Tribunal, es una clara muestra de cooperación internacional en la resolución de los conflictos sucedidos en el territorio de Sierra Leona.

En la creación del Tribunal, se vio reflejada la cooperación de los Estados mediante el financiamiento para el funcionamiento del tribunal, ya que los gastos que sufragaron los gastos se debían a las contribuciones que los Estados parte realizaban.

11. INDEPENDENCIA

El Tribunal especial, tendría a su cargo la judicialización de casos de alto perfil, casos en los que se cometieron crímenes graves contra el derecho internacional humanitario, por lo que la misma labor del Tribunal demandaba que se desempeñase de forma autónoma e independiente, en el que su quehacer no se viera interferido por ningún Gobierno o entidad nacional o internacional.

En el Estatuto de creación se reafirmó la condición de absoluta independencia en los artículos 12 y 13 al reglar que la labor de los jueces debía ser independiente, los jueces serían independientes, y que además tenían que ser personas de alto carácter moral, imparcialidad e integridad con las calificaciones requeridas en sus respectivos países para ser nombrados en los más altos cargos judiciales. Se les daba independencia para el desempeño de sus funciones y no aceptarían ni solicitarían directrices de ningún gobierno, ni de ninguna otra fuente.

12. SELECCIÓN DE ACTORES

En el caso de la selección de actores, esta estaba contenida en la creación del Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona, específicamente de los artículos 1 al 7, en los que se especificaba que el tribunal podría enjuiciar a los mayores responsables de la comisión de los crímenes graves cometidos en el territorio de Sierra Leona desde 1996 hasta el establecimiento del Tribunal. Como parte de la regulación se estableció que la responsabilidad penal era individual y se determinaría el grado de participación y la pena a imponer, así como, que el tribunal no podría

enjuiciar a nadie que fuera menor a 15 años al momento de la ejecución de los delitos.¹¹⁸³

13. NORMATIVA RELEVANTE Y MARCO PROCEDIMENTAL

Las normas que se aplicaron fueron las leyes nacionales de Sierra Leona y las de derecho internacional humanitario, por medio del Estatuto y las reglas de procedimiento y evidencia del Tribunal¹¹⁸⁴.

El Estatuto establecía en su artículo 1 la competencia del tribunal con la facultad de enjuiciar a las personas que tenían mayor responsabilidad por los actos graves en contra del derecho internacional humanitario y el derecho interno de Sierra Leona y que hayan sido cometidos en su territorio, a partir del 30 de noviembre de 1996, en donde se incluyó a los líderes que, hubiesen cometido los crímenes y, adicionalmente hubieran amedrentado la instalación e implementación del proceso de paz.

Los artículos 2, 3 y 4 regularon la competencia del Tribunal para enjuiciar a las personas que consumaron los delitos de lesa humanidad, *“cometido u ordenado la comisión de violaciones graves del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 para la protección de las víctimas de guerra y del Protocolo adicional II del mismo, de 8 de junio de 1977; otras violaciones graves del derecho internacional humanitario”*¹¹⁸⁵.

En el artículo 5, el Estatuto estipulaba que el Tribunal especial estaba facultado para enjuiciar a las personas que *“cometieron crímenes en virtud de la legislación de Sierra Leona, delitos relacionados con el abuso de niñas en virtud de la Ley de Prevención de la Crueldad a la Infancia de 1926; delitos relacionados con la destrucción injustificada de bienes bajo la Ley de Daños Maliciosos de 1861”*¹¹⁸⁶.

El artículo 6 reguló que la responsabilidad penal de las personas que juzgara el Tribunal sería individual para determinar su nivel de participación y la pena a imponer.

¹¹⁸³ ICTJ. S.F. Óp. Cit.

¹¹⁸⁴ Ídem.

¹¹⁸⁵ Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2000, Óp. Cit.

¹¹⁸⁶ Ídem. Artículo 5

En el artículo 7 determinó que el Tribunal Especial no tendría jurisdicción sobre ninguna persona menor de 15 años en el momento de la supuesta comisión del delito.

El artículo 8 estipuló que el *“Tribunal Especial y los tribunales nacionales de Sierra Leona tenían competencia concurrente. Sin embargo, el Tribunal Especial tendría primacía sobre los tribunales nacionales de Sierra Leona en relación a los delitos de su competencia”*¹¹⁸⁷.

En el artículo 9 se reguló que ninguna persona sería juzgada ante un órgano jurisdiccional nacional de Sierra Leona por los actos por los que ya hubiese sido juzgada por el Tribunal Especial. La persona que hubiese sido juzgada por un tribunal nacional podría ser juzgada por el Tribunal Especial cuando se demostrase que el delito se caracterizó como ordinario o el procedimiento no fue imparcial o independiente y se realizó para proteger al acusado.

En el artículo 10 regulo lo concerniente al caso que se hubiere otorgado amnistía a una persona que hubiese cometido un delito competencia del tribunal, lo cual no evitaría su enjuiciamiento y procesamiento.

Los artículos 11, 12 y 13 regularon la composición de las Salas de Primera Instancia, Sala de Apelaciones; el Fiscal; y el Registro. El artículo 14 abordó la aplicación de las Reglas de Procedimiento y Pruebas *mutatis mutandis* y su adecuación a las necesidades de este tribunal. En el artículo 15 se estableció la forma en que se nombraba al Fiscal y sus facultades.

En el artículo 16 se estipuló la creación del Registro, así como quien estaría a su cargo y la facultad de establecer una Unidad de Víctimas y Testigos dentro del Registro.

En el artículo 17 se consagraron los derechos del acusado, que comprendían las garantías generales del derecho procesal penal, en especial presunción de inocencia; ser informado de los cargos en un idioma que entendiera y hablara; el derecho a nombrar un abogado o que se le nombrara uno y la asistencia gratuita de un intérprete.

¹¹⁸⁷ Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2000, *Óp. Cit.* Artículo 8

En el artículo 19 se reguló la forma de dictar sentencia, la cual debía ser dictada por mayoría de votos de los magistrados de la Sala de Primera Instancia o de la Sala de Apelaciones, en público, acompañada por una opinión motivada por escrito, a la que podría adjuntarse opiniones separadas o disidentes.

En el artículo 19 se contemplaron las sanciones a imponer, las cuales consistían en penas de prisión por un número determinado de años tomando en consideración la práctica relativa a las penas de prisión en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y los tribunales nacionales de Sierra Leona, las circunstancias atenuantes y agravantes, y circunstancias personales del procesado. También podía ordenar la confiscación de los bienes, los ingresos y cualquier activo adquirido ilegalmente o por conducta delictiva y su regreso a su legítimo propietario o al Estado de Sierra Leona.

El artículo 20 estableció el procedimiento de apelación, por errores de procedimiento, de derecho o hechos y la facultad de la Sala para confirmar, revocar o revisar las decisiones adoptadas por la Sala de Primera Instancia.

En el artículo 21 se reguló el procedimiento de revisión, su procedencia ante la Sala de Apelación. El artículo 22 abordó el lugar de cumplimiento de la sentencia en territorio de Sierra Leona o un tercer Estado, las condiciones se regían por medio de la ley del lugar donde se cumpliera la sanción.

El artículo 23 abordó el indulto o la conmutación de la pena, lo cual debía ser notificado al Tribunal Especial. Sólo podía darse el indulto o conmutación de sentencia si el presidente del Tribunal Especial, en consulta con los jueces, así lo decidían con fundamento en el interés de la justicia y los principios generales del derecho.

14. LEGITIMIDAD:

La legitimidad fue una circunstancia muy debatible, debido a que existía un Acuerdo de amnistía firmado, el cual favorecía a los implicados y a pesar de ello el Tribunal Especial podía procesar y enjuiciar a los responsables de los hechos ocurridos en Sierra Leona y de los cuales los actos eran de su competencia.

También el hecho de que el tribunal especial podía juzgar a quienes fueron juzgados por tribunales nacionales cuando concurrieran ciertas circunstancias, que eran

competencia del tribunal especial, podían causar complicaciones por una posible doble persecución.

15. JURISDICCIÓN

El Tribunal Especial para Sierra Leona estableció su jurisdicción en el Estatuto de creación, en sus artículos 1 y 2, estableció que el tribunal se creó para el enjuiciamiento de los mayores responsables de la comisión de crímenes graves que atentaron contra el derecho humanitario y la legislación de Sierra Leona.

El Tribunal Especial compartía jurisdicción con las cortes Nacionales para emitir fallos de los mismos actos criminales, sin embargo, tal como se establece en el Estatuto, el Tribunal Especial tiene primacía y por ende podía requerir que se le refiera un caso en cualquier momento del proceso. El tribunal especial no tenía jurisdicción sobre personas que hayan tenido menos de 15 años al momento de perpetrar los actos criminales de su competencia y jurisdicción¹¹⁸⁸.

Es importante mencionar que el Tribunal fue el pionero en sustentar que la amnistía nacional que se había otorgado no aplicaba en la persecución de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones al derecho internacional humanitario, lo que provocó que se cuestionara su legitimidad.

A. ¿QUIÉN PODÍA FORMAR PARTE DE UN CASO?

Principalmente las personas mayores de 15 años que resultaron responsables de los crímenes cometidos en Sierra Leona, los responsables de haber amenazado el establecimiento e implementación del proceso de paz, así como crímenes graves contemplados en el Estatuto. Los miembros de la Fiscalía, la que contaba con un fiscal adjunto nacional, la defensa y demás personas involucradas en la investigación de los casos, como peritos y testigos.

¹¹⁸⁸ ICTJ. S.F. *Óp. Cit.*

B. ¿QUÉ PROBLEMAS SE PODÍA DEBATIR?

Los problemas que podía debatir derivaban de los orígenes del tribunal especial, dentro de los que se encontraban:

- i. *“Crímenes de lesa humanidad*
- ii. *Violaciones del Artículo 3 común a los cuatro Convenciones de Ginebra y el Protocolo II adicional:*
 1. *los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;*
 2. *la toma de rehenes;*
 3. *los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;*
 4. *las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.*
- iii. *Violaciones del derecho internacional humanitario*
- iv. *Crímenes bajo el derecho de Sierra Leona*¹¹⁸⁹

16. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN:

Los medios de impugnación procesales aplicables eran los regulados en la legislación de Sierra Leona y los estipulados en el Estatuto en los artículos 20 y 21, correspondientes a la apelación y revisión de la sentencia.

¹¹⁸⁹ Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2000, *Óp. Cit.*

17. MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO

En el mismo mandato de creación se contemplaron informes que se remitieron al Consejo de Seguridad para que se evaluara la naturaleza y particularidades del Tribunal Especial, en dicho informe también se incluyeron modificaciones... *“el 22 de diciembre de 2000, una vez que el Consejo de Seguridad hubo examinado el informe, su Presidente envió una carta al Secretario General en la que figuraban las modificaciones a los proyectos de acuerdo y de estatuto propuestas por los miembros del Consejo, las cuales se referían a la competencia por razón de la persona, la financiación y el tamaño del tribunal especial”*¹¹⁹⁰.

18. RECURSOS DISPONIBLES

El Tribunal contó con los siguientes recursos:

A. HUMANO:

El Tribunal se conformaba de 2 Salas de Primera Instancia integrada cada una por 3 jueces, 2 de ellos nombrados por las Naciones Unidas y 1 por el Gobierno de Sierra Leona. Las Salas de Apelación con 5 jueces, 3 internacionales y 2 nacionales. Los demás órganos del Tribunal eran el Registro y Oficina del Fiscal, un comité de gestión externo dedicado a la recaudación de fondos y la política no judicial formación. La Oficina de Defensa formó un cuarto pilar, no oficial de la corte.¹¹⁹¹

El Tribunal tuvo equilibrio al momento de mezclar personal nacional e internacional, inclusive en los momentos en que tuvo que reducir cuando se redujo radicalmente su personal, a finales de 2011 pasó de 350 funcionarios a 80, este estaba distribuido entre las sedes de Freetown y La Haya. *“En 2005, el tribunal redactó un documento de política de personal para abordar la necesidad de reducir el tamaño nacional e internacional personal. En 2006, alrededor de 150 de los 250 miembros del personal eran nacionales; en marzo de 2011, aproximadamente la mitad de los 100 miembros del personal eran nacionales”*.¹¹⁹² Esta circunstancia por la mecánica del trabajo

¹¹⁹⁰ United Nations Audiovisual Library of International Law, 2017, *Estatuto del Tribunal Especial para-Sierra Leona*[en línea].. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] Disponible en: www.un.org/law/avl

¹¹⁹¹ Open Society Foundation. S.F. *Óp. Cit.* Página 253.

¹¹⁹² Ídem.

conjunto entre jueces nacionales e internacionales y la oficina especial de capacitación a los abogados, hacen que el personal nacional tuvo una buena oportunidad de capacitación en las técnicas de investigación de ese tipo de delitos, en restablecimiento de los derechos de las víctimas y fortalecimiento del sistema de justicia y estado de derecho.

B. MATERIAL:

En febrero de 2009 se desarrolló el programa Sierra LII para "proporcionar en línea acceso a materiales legales primarios de Sierra Leona e información relacionada ". Los archivos originales del Tribunal fueron transferidos a los Archivos Nacionales Holandeses en diciembre de 2010, mientras que las copias y versiones electrónicas de los archivos de la corte fueron entregados al Museo de la Paz en Freetown. El tribunal argumentó que las instalaciones y procedimientos de Sierra Leona eran inadecuados y no podían brindar un almacenamiento seguro y protegido.¹¹⁹³

El tribunal también gozaba de unas instalaciones físicas muy modernas, que se convirtieron en un valor material del cómo hacer justicia en instalaciones que dignifiquen la calidad del cargo.

C. PRESUPUESTO ASIGNADO:

El Tribunal se financió mediante contribuciones voluntarias de los gobiernos. Los fondos recaudados por parte del comité de gestión del tribunal y el Secretario General de las Naciones Unidas. Aunque recibió generosas donaciones en efectivo y en especie contribuciones de más de 40 Estados y varias fundaciones privadas, resultó en "déficit financiero constante". El presupuesto de finalización aprobado para el Tribunal requirió poco más de US \$ 20 millones (US \$ 16 millones en 2011 y US \$ 4 millones para 2012).¹¹⁹⁴

"El tribunal se financiaba principalmente a través de contribuciones voluntarias de varios países, aunque en cuatro ocasiones necesitó de la subvención de las Naciones

¹¹⁹³ TRIBUNAL Especial para Sierra Leona, Archivo y Biblioteca, [en línea]. Página 01. Disponible en: <http://www.rscsl.org/CMS.html>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.];

Open Society Foundation, 2018, *Op. Cit.* Página 259.

¹¹⁹⁴ Ídem. Página 261.

Unidas para poder mantener su operatividad. Durante su primer año, el presupuesto aprobado del Tribunal fue de 19 millones de dólares. Entre los años 2002 y 2006, el presupuesto total estimado ascendió a 104 millones de dólares¹¹⁹⁵

19. EL PAPEL DE LA VÍCTIMA:

La regla 2A común de las Reglas de Prueba y Procedimiento de los tribunales *ad hoc* definió a la víctima como:

“Una persona contra quien presuntamente se ha cometido un delito sobre el que tiene competencia el Tribunal”

De acuerdo a esta regla se consideraba víctima a toda *“persona en contra de quien se había cometido un crimen que recayera bajo la jurisdicción de dichos tribunales”¹¹⁹⁶*.

El Tribunal para Sierra Leona a través de sus Reglas de Prueba y Procedimiento solamente reconoció a las víctimas directas ya que tenía carácter restrictivo y excluía a los dependientes de estas.

Al igual que las Salas Especiales para Timor Oriental, la víctima únicamente participaba como testigo, en función de los intereses de la fiscalía o de la defensa. No le asistía el derecho a: a) tener representación legal al momento de declarar, b) acceder a las pruebas al momento del juicio, c) estar informada de las actuaciones judiciales, aunque tuvieran interés personal en el caso.

Las víctimas y testigos tenían derecho y el Tribunal estaba obligado a protegerlos, lo cual estaba regulado en la normativa principal del Tribunal que recomendaban la implementación de medidas de protección, apoyo y asesoramiento para ellos.

Además, el fiscal podía realizar las diligencias que creyera pertinentes para finalizar la investigación, como entrevistar a víctimas y testigos, solicitar medidas de seguridad para la investigación, víctimas y testigos con el fin de prevenir ara las medidas

¹¹⁹⁵ ICTJ. S.F. *Óp. Cit.*

¹¹⁹⁶ GIMÉNEZ Montero, Judith. 2017. *Óp. Cit.*

necesarias para evitar cualquier perjuicio al proceso. Por lo que excepcionalmente podía resguardar la identidad de las víctimas y testigos.

20. PERCEPCIÓN PÚBLICA:

Con la certeza de que la difusión de la información era esencial para el éxito del Tribunal, al igual que los Tribunales Ad hoc contó con el programa out reach para difundir su trabajo, dentro de este programa se estableció “Radio Justice” programa de la BBC que servía como plataforma de debate en temas relacionados con la justicia.

Se tuvo conocimiento de lo que la población opinaba sobre él, reflejando apoyo y conocimiento del mismo, información obtenida por medio de grupos de debate, sondeos de opinión y encuestas.

La fiscalía también organizó reuniones municipales en todos los distritos en donde acudieron cientos de personas, la secretaría se ocupó de las estrategias de difusión. Se celebró la conferencia nacional como homenaje a las víctimas y se puso a disposición videos sobre el trabajo del Tribunal.

El punto de crítica fue *“La competencia temporal de la Corte fue motivo de encendidas polémicas, toda vez que, en rigor de verdad, las acciones militares que marcan el comienzo del conflicto armado datan de 1991. Durante esos cinco años que quedaron fuera de la competencia del Tribunal, se cometieron feroces asesinatos, torturas, ofensas sexuales y otras violaciones a los Derechos Humanos que quedarían impunes por ser anteriores al 30 de noviembre de 1996”*¹¹⁹⁷.

21. NÚMERO DE CASOS INGRESADOS

El Primer informe anual del Tribunal expone que en el año 2003 fueron presentadas 13 acusaciones por la Oficina del Fiscal.¹¹⁹⁸

¹¹⁹⁷ AGUIRRE, Eduardo Luis. S.F, Estatuto, competencia y funcionamiento del Tribunal Especial para Sierra Leona. *Derecho a Réplica*, 30 de noviembre [en línea]. Disponible en: <https://derechoareplica.org/index.php/mas/criminologia/491-estatuto-competencia-y-funcionamiento> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

¹¹⁹⁸ TRIBUNAL Especial para Sierra Leona, Primer Informe anual del Presidente del Tribunal Especial para Sierra Leona, 2003, [en línea]. Página 12. Disponibilidad en: <http://www.rscsl.org/Documents/AnRpt1.pdf>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

En el período comprendido en los años 2006 a 2007 no se presentó ningún caso al Tribunal, en cambio se realizaron procedimientos para obtener evidencias de investigaciones o juicios en curso, además hubo cambio de Fiscal. ¹¹⁹⁹

El octavo informe anual del Tribunal expone que el Fiscal presentó 1 solicitud para abrir de nuevo el caso contra Charles Ghuakay Taylor basado en nuevas pruebas. ¹²⁰⁰

El onceavo y último informe del Tribunal expone que no fueron iniciados nuevos casos sino se concentró en la transferencia de documentos y procesos al Tribunal Residual para Sierra Leona. ¹²⁰¹

El tribunal trabajó en 4 casos siendo estos:

- *“Contra los líderes del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas*
- *Contra los líderes del Frente Revolucionario Unido*
- *Contra el presidente de Liberia Charles Taylor*
- *Contra los líderes de las fuerzas de Defensa Civil”*¹²⁰²

22. NÚMERO DE CASOS RESUELTOS

Durante el primer año de funcionamiento las Salas de Primera Instancia emitieron 84 decisiones, 87 órdenes y 3 decisiones de juicio simultáneo. Las Salas de Apelación emitieron 6 decisiones, 9 órdenes, 3 decisiones sobre amicus curiae. ¹²⁰³

El cuarto informe expone que de los 4 casos que se encontraban activos en el tribunal en el período de 2006 al 2007, 2 habían sido resueltos y 1 se encontraba en etapa

¹¹⁹⁹ TRIBUNAL Especial para Sierra Leona, Primer Informe anual del Presidente del Tribunal Especial para Sierra Leona, 2006-2007, [en línea]. Página 09-10. Disponible en:

<http://www.rscsl.org/Documents/AnRpt4.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

¹²⁰⁰ TRIBUNAL Especial para Sierra Leona, Octavo Informe anual del Presidente del Tribunal Especial para Sierra Leona 2010-2011, [en línea]. Página 16. Disponible en:

<http://www.rscsl.org/Documents/AnRpt8.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

¹²⁰¹ TRIBUNAL Especial para Sierra Leona, S.F. Onceavo Informe anual del Presidente del Tribunal Especial para Sierra Leona 2013, [en línea]. Página 36. Disponible en:

<http://www.rscsl.org/Documents/AnRpt11.pdf>

¹²⁰² ICTJ. S.F. *Óp. Cit.*

¹²⁰³ TRIBUNAL Especial para Sierra Leona, S.F. *Óp. Cit.* Página 12.

avanzada. La Sala de Primera Instancia tomó 33 decisiones y la Sala de Apelaciones 2 decisiones y 1 del presidente.¹²⁰⁴

El octavo informe anual del Tribunal expone que las Salas de Primera Instancia y de Apelaciones tomaron 11 y 04 decisiones respectivamente, el presidente tomo 1 decisión todas en relación con el caso de Charles Ghuakay Taylor en el periodo comprendido entre junio de 2010 a mayo de 2011.¹²⁰⁵

Las últimas dos decisiones tomadas por las Salas de Primera Instancia y de Apelación corresponden a la sentencia del caso de Charles Ghuakay Taylor, dictada el 26 de abril de 2012, y la sentencia de apelación de la sentencia del 26 de septiembre de 2013.¹²⁰⁶

El Tribunal Especial para Sierra Leona logró la judicialización de 13 personas, de las cuales 2 fallecieron en el desarrollo del juicio, condenando con penas de prisión entre 15 y 50 años a ocho personas.

*“El juicio más representativo ha sido la condena en 2012 contra el ex presidente de Liberia, Charles Taylor, por apoyar los grupos ilegales en Sierra Leona, sentencia confirmada en segunda instancia con una pena de 50 años de prisión, en la que se destaca la condena por el crimen de reclutamiento forzado de niños y niñas”.*¹²⁰⁷

Durante los 11 años de ejercicio, el Tribunal conoció de 4 casos en contra de 13 personas, estos casos son:

- *“Uno en contra de los líderes del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas*
- *Uno en contra de los líderes del Frente Unido Revolucionario*
- *Uno contra el presidente de Liberia Charles Taylor*
- *Uno en contra de los líderes de las fuerzas de Defensa Civil”*¹²⁰⁸

¹²⁰⁴ TRIBUNAL Especial para Sierra Leona, S.F. *Óp. Cit.* Página 09.

¹²⁰⁵ Ídem. Página: 14.

¹²⁰⁶ Ídem.

¹²⁰⁷ UNIVERSIDAD Católica de Colombia. S.F. *Tribunales Internacionales*. [en línea]. Pág. 83.

Disponible en: https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/18181/1/El-principio-de-complementariedad_Cap03.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.].

¹²⁰⁸ ICTJ. S.F. *Óp. Cit.*

*“Finalmente, solo nueve individuos fueron juzgados y condenados por el Tribunal Especial. Dos acusados murieron; el presidente del AFRC, Johnny Paul Koroma, escapó antes de ser acusado y nunca fue encontrado, y el fundador de las CDF, Samuel Hinga Norman, murió durante el juicio”*¹²⁰⁹.

23. ANÁLISIS CUALITATIVO:

Como todos los mecanismos creados para combatir la impunidad, el Tribunal Especial para Sierra Leona tiene sus luces y sombras, el primer punto cuestionado fue el haber sido conformado en su mayoría de por personal internacional, pese a que se contemplaba el nombramiento de jueces nacionales, el Estado declinó muchas veces del ejercicio de esta facultad, nombrando jueces internacionales, esto dio la sensación que el Tribunal no podía cumplir con la meta de fortalecimiento del poder judicial sierraleonés.¹²¹⁰

Se cuestionó su existencia dentro del sistema jurídico de Sierra Leona por la contradicción que tuvo con la Ley de amnistía y la inmunidad de Charles Taylor considerada como soberana¹²¹¹, quien fue procesado por el Tribunal a pesar de a ver sido amnistiado como parte del acuerdo de paz.

Uno de los puntos más criticados fue que no se incluyera el juzgamiento de genocidio en el estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona¹²¹². Sin embargo; permitió que se procesaran crímenes incluidos en la legislación de Sierra Leona, adicionalmente de los crímenes internacionales. Aunque en la realidad, no se utilizó esta facultad por decisión del fiscal.¹²¹³

Al no aplicarse el derecho interno por decisión del fiscal, lo que se consideró con un desperdicio, perdiéndose la oportunidad de afianzar la implementación en el sistema jurídico nacional de las normas jurídicas internacionales. El Tribunal incidió en el mejoramiento de los estándares de detención para algunos procesados encarcelados¹²¹⁴.

¹²⁰⁹ ICTJ. S.F. *Óp. Cit.*

¹²¹⁰ Ídem. Páginas: 27 y 28

¹²¹¹ Ídem. Página: 46

¹²¹² Ídem. Página: 57

¹²¹³ Ídem. Página: 59

¹²¹⁴ Ídem. Página: 47

El Tribunal debía tener una relación estrecha con la Comisión de la Verdad, la cual en el caso de Sierra Leona tuvo muchas tensiones difíciles de resolver¹²¹⁵.

El Tribunal tuvo gran apertura para aceptar la participación internacional con el fin de fortalecer la capacidad técnica.¹²¹⁶

El Tribunal por tener un fuerte carácter internacional no se vio afectado por la problemática estructural de independencia judicial, debilidad en el sistema de justicia y el enorme dominio del poder ejecutivo sobre él.¹²¹⁷

El Tribunal tuvo que gestionar acuerdos con el Estado relacionados con la ejecución de las condenas y verificar la capacidad del país para mantener en detenidos a los condenados de acuerdo a los estándares internacionales y con las medidas de seguridad apropiadas¹²¹⁸.

Como legado material al sistema de justicia nacional, se considera que el Tribunal dejó un campus con dos salas de audiencias modernas y un centro de detención¹²¹⁹.

En el Tribunal Especial para Sierra Leona se tomaron previsiones importantes que no habían sido tomadas en otros mecanismos, por ejemplo, se implementó un plan organizado de salida, garantizando el futuro del personal nacional.

Luego de este completo estudio analítico en los aspectos que a mi juicio consideré de mayor relevancia, se puede establecer que el Tribunal Especial para Sierra Leona sí contribuyó, en la lucha contra la impunidad y fortalecimiento del estado de derecho, especialmente al emitir sentencias relacionadas con el matrimonio forzado¹²²⁰, y la persecución del terrorismo¹²²¹. dejando pendiente la persecución de delitos por los niños soldados¹²²².

¹²¹⁵ OPEN Society Justice Initiative. S.F. *Óp. Cit.* Página: 28

¹²¹⁶ Ídem. Páginas: 40 y 41

¹²¹⁷ Ídem. Página: 82

¹²¹⁸ Ídem. Página: 50

¹²¹⁹ Ídem. Páginas: 82 y 83

¹²²⁰ THOMPSON, Sidney. 2014. Forced Marriage at the Special Court of Sierra Leone: Questions of Jurisdiction, Legality, Specificity, and Consistency. En: CHERNOR Jalloh, Charles. *The Sierra Leone Special Court and Its Legacy. The Impact for Africa and International Criminal Law*. Cambridge University Press. Primera Edición. Páginas: 215 a 233. ISBN: 978-1-107-02914-9

¹²²¹ ARNOLD, Roberta. 2014. The Judicial Contribution of the Special Court for Sierra Leone to the Prosecution of Terrorism. En: Ídem. Páginas: 260 a 288.

¹²²² APTEL, Cecil. 2014. Unpunished Crimes: The Special Court for Sierra Leone and Children. En: Ídem. Páginas: 340 a 360

A continuación, se presenta de forma gráfica y sintética el trabajo realizado por el Tribunal Especial para Sierra Leona.

		Mandato	Duración del Mandato	Cesación de los hechos que originaron el mandato	Inicio del primer juicio	Universo de casos	Casos procesados y/o relaciones procesales	Tiempo promedio de los casos	Casos pendientes de resolución	% Casos presentados versus casos resueltos	% Casos pasibles de procesamiento versus casos resueltos
1	Tribunal Especial para Sierra Leona	Perseguir penalmente a personas que detentan la mayor responsabilidad sobre las graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, al artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y en el protocolo adicional II de 1977 así como contra el derecho local de Sierra Leona cometido en su territorio desde el 30 de noviembre de 1996	Tiempo indefinido 11 años	2002	2006	13	13	No se puede determinar	0	69.23%	69.23%

CAPÍTULO VIII

SALAS EXTRAORDINARIAS DE LAS CORTES DE CAMBOYA

ANTECEDENTES

La Cámara Extraordinaria en las Cortes de Camboya o Salas Extraordinarias de las Cortes de Camboya se establecieron en 2003, con el fin de investigar, procesar y castigar a *“altos dirigentes de la Kampuchea Democrática y a los responsables de los delitos y violaciones graves del derecho penal camboyano, el derecho y las costumbres humanitarias internacionales y las convenciones internacionales reconocidas por Camboya”*¹²²³.

Hechos que se desarrollaron entre 1975 y 1979, cuando Camboya fue dirigido por los Jemeres Rojos, partido político izquierdista radical que gobernó bajo la denominada Kampuchea Democrática, luego de ganar la guerra civil camboyana. Partido que se inspiraba en la ideología creada por Mao Zedong (1893-1976), esto produjo uno de los eventos más desastrosos para la cultura camboyana en el que se cometió una serie de crímenes graves, entre los que se destacan el asesinato de más de 1.700.000 camboyanos.

Ideología que estuvo bajo la dirección de Pol Pot, quien implementó un modelo socialista con base en el maoísmo, el cual poseía la principal característica de explotar los bienes de los habitantes mediante la imposición de torturas y ejecuciones masivas violentando los derechos humanos de los camboyanos.

Entre 1975 y 1979, el régimen de Jemeres Rojos, asesinó alrededor de 1.7 millones de personas utilizando estrategias de destrucción las ejecuciones, inanición y trabajo forzado. Entre las principales víctimas están los sistemáticos ataques a los *“monjes budistas, minorías étnicas, intelectuales, profesionales y opositores políticos”*¹²²⁴. El

¹²²³ Ley sobre el establecimiento de las Salas Extraordinarias en los Tribunales de Camboya para el enjuiciamiento de los Crímenes cometidos durante el período de Kampuchea Democrática. Disposiciones Generales.

¹²²⁴ ICTJ. S.F. Salas Extraordinarias de las Cortes de Camboya. *Justicia, verdad, dignidad* [en línea]. S.E. España: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo, página 1 [Consulta: 10 de

régimen fue depuesto por las tropas vietnamitas en 1979, pero los miembros de Jemeres se reagruparon en guerrillas y continuaron en combate durante 19 años, el enfrentamiento finalizó en 1998 con la muerte de su líder.

Derivado de la gravedad de la situación de violaciones de derechos humanos, el gobierno de Camboya solicitó el apoyo de las Naciones Unidas, así:

- a. *“En 1997, el gobierno de Camboya solicitó asistencia a Naciones Unidas para poder procesar a los Jemeres Rojos.*
- b. *En agosto de 1998, el Secretario General de Naciones Unidas designó un grupo de expertos para que conocieran la situación del país.*
- c. *El grupo de expertos luego del estudio de rigor, entregó las recomendaciones en febrero de 1999”¹²²⁵.*

Entre las recomendaciones del grupo de expertos estuvo la creación de un tribunal por medio de las Naciones Unidas, continuando con la modelidad de los Tribunales Ad hoc.

En 1998 ex líderes de los Jemeres Rojos que habían sido derrocados por las tropas de Vietnam, se unieron al gobierno camboyano, lo que hizo que este cambiara de opinión sobre la persecución penal de algunos de los integrantes de ese partido responsables de la violación de los derechos humanos de miles de camboyanos.

Como lo afirma Daniel Oliva: *“... nadie puede discutir que indudablemente los camboyanos fueron víctimas de la aplicación práctica de una visión totalitaria de la organización social y de una ideología extrema y deformada que tuvo efectos genocidas y conllevó los peores crímenes y vulneraciones masivas de derechos humanos, pero no es menos cierto que en los terribles padecimientos colectivos del pueblo camboyano la comunidad internacional y especialmente algunas grandes potencias también tuvieron una alta responsabilidad”¹²²⁶.*

diciembre de 2020]. ISSN 2386-3056. Disponible en: <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Factsheet-Camboya.pdf>

¹²²⁵ Ídem.

¹²²⁶ OLIVA MARTÍNEZ, Juan Daniel. 2011. El Tribunal de Camboya inicia nuevo juicio a altos dirigentes de la Kampuchea Democrática acusados en el caso Núm. 002/19-09-2007/ECCC-TC. *Revista Española de Derecho Internacional* [en línea]. España: Revista española de derecho internacional, Vol.63, No. 2, página 307. [Consulta:10 de diciembre de 2020]. ISSN 0034-9380. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3786697>

Tanto la comunidad internacional como la sociedad civil de Camboya ejercieron presión y que luego de negociar por muchos años, el 6 de junio de 2003, el Gobierno de Camboya y la ONU llegan al acuerdo “Law on the establishment of Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia for the prosecution of crimes committed during the period of democratic Kampuchea” con el fin de instaurar las Salas Extraordinarias de la Corte de Camboya, decidiendo implementar las salas nacionales, con aplicación de las leyes internas del país así como convenios internacionales de Derecho Internacional Humanitario y al mismo tiempo con la participación de algunos funcionarios internacionales¹²²⁷.

Las salas son un tribunal especial de carácter mixto, con Estatuto independiente del sistema judicial del país. Para lo cual el gobierno Reino de Camboya tuvo que hacer cambios en su legislación interna, lo que se extendió hasta desde el 2001 hasta el 2004. Mecanismo que resulto novedoso dentro de la legislación internacional en lo que respecta a tribunales internacionales. En su integración se hizo con la participación de jueces nacionales conjuntamente con jueces internacionales, siendo esto lo que le otorga la característica de tribunal mixto, de nacional e internacional¹²²⁸ y la decisión de juzgamiento recaía en las dos partes. El tribunal inició con el primer juicio durante marzo de 2009, condenando al primer procesado en julio de 2010. El tribunal continúa vigente.

1. ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ FUE CREADO?

Como consecuencia de los graves acontecimientos ocurridos y por la presión internacional, se decidió crear el tribunal denominado la Cámara Extraordinaria en las Cortes de Camboya o Salas Extraordinarias de las Cortes de Camboya, el cual fue establecido para el procesamiento de los máximos responsables que se vieron involucrados en los crímenes graves ejecutados en la época de Kampuchea

¹²²⁷ OLIVA MARTÍNEZ, Juan Daniel. 2011. *Óp. Cit.*

¹²²⁸ Naturaleza mixta. Camboya tuvo que hacer enmiendas a su sistema judicial tradicional que permitiese la fundación de este tribunal. Proceso que realizó entre el año 2001 y se terminó en 2004 bajo tratados entre las Naciones Unidas y el gobierno camboyano. Se acordó que el tribunal sería conformado por jueces, fiscales, abogados y administradores designados por el gobierno de Camboya y por las Naciones Unidas. La decisión de arrestar, ordenar investigaciones y abrir procesos es compartido entre ambas partes. El Tribunal no puede establecer la pena de muerte como castigo y la pena máxima es la cadena perpetua.

Democrática. Época en la cual exterminó una gran cantidad de ciudadanos camboyanos, en lo que fue considerado como el genocidio de Camboya.

El artículo 1 del Estatuto¹²²⁹ claramente estipula el propósito de llevar a juicio a los líderes de alto rango de Kampuchea¹²³⁰ democrática al igual que aquellos con mayor grado de responsabilidad de los crímenes y violaciones serias al Código Penal camboyano, al Derecho Internacional Humanitario, costumbres y convenciones internacionales reconocidas por Camboya, cometidas durante el período del 17 de abril de 1975 al 6 de enero de 1979.

2. PAPEL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN SU CREACIÓN

La comunidad internacional guardó silencio de los hechos acaecidos entre 1975 y 1979, y es hasta 1997 que por medio de las Naciones Unidas la comunidad internacional interviene, cuando el gobierno de Camboya solicita la ayuda para la investigación de los hechos, pero que luego por ese acuerdo político interno para que integrantes del derrocado partido político de los Jemeres Rojos hicieran parte del gobierno, el estado cambia de parecer en cuanto al procesamiento de los responsables del genocidio y es en este momento donde la Comunidad y organismos internacionales contribuyeron para ejercer presión y evitar que esos crímenes se quedaran en la impunidad y así se logró crear la Cámara¹²³¹.

3. ¿CÓMO SE ABORDÓ EL TEMA DE LA SOBERANÍA?

Fue el gobierno de Camboya el que solicitó a la Organización de Naciones Unidas la creación de la Cámara, aunado a que el acuerdo de creación fue firmado entre el gobierno de Camboya y las Naciones Unidas. Teniendo como marco la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que al ser aceptado por el Estado de Camboya no existe controversia alguna sobre posible vulneración de su soberanía.

¹²²⁹ En sus artículos contempla la prórroga de la prescripción para los delitos de tortura, homicidio y persecución religiosa, así como la no aplicación de la amnistía en los delitos de su competencia, esto con el fin de llevar a juicio a los posibles responsables de estos hechos.

¹²³⁰ OLIVA MARTÍNEZ, Juan Daniel. 2011. *Op. Cit.* Páginas: 302 a 307.

¹²³¹ UNIVERSITAT de les Illes Balears. S.F. Las Salas Especiales de Camboya. En: *Cátedra Iberoamericana* [en línea]. Disponible en: <https://fci.uib.es/Servicios/libros/veracruz/Fraschina/2.-Las-Salas-Especiales-de-Camboya..cid211448> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

*“El 21 de junio de 1997, el primer y segundo ministro de Camboya enviaron una carta a los presidentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU solicitando la asistencia de esa organización internacional y de la sociedad internacional para llevar ante la justicia a las personas responsables del genocidio y los crímenes de lesa humanidad durante el gobierno de los jemeres rojos entre 1975 y 1979”*¹²³²

Es importante mencionar que durante la negociación el gobierno de Camboya se opuso a la presión de incorporar la normativa internacional que no tuviese aceptada hasta el momento¹²³³.

4. TIPO DE GOBIERNO ¿DEMOCRACIA?

La forma de gobierno que existe en Camboya desde 1993 es una Monarquía constitucional parlamentaria unitaria, que en la teoría tiene como marco un sistema democrático.

En el caso de Camboya esta democracia ha sido ampliamente cuestionada, entre otras cosas por el incumplimiento en la total implementación de los Acuerdos de Paz de París firmados el 23 de octubre de 1999, la falta de imparcialidad en la investigación criminal, la persecución política, pero se mantienen vigentes los elementos que constituyen la democracia.

5. ¿ESTADO DE DERECHO?

En el momento que se implementó la Cámara podemos decir que, pese a su debilidad, si existía Estado de Derecho en Camboya, de hecho y una prueba de ello es que las leyes que se aplican para la investigación son las leyes de Camboya y los acuerdos y convenios internacionales que este libremente ha ratificado.

¹²³² BÜRGIN, Annina Cristina. 2017. Las salas especiales de los tribunales de Camboya veinte años después de la solicitud del gobierno camboyano para su creación. *Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas*. España: Universidad de Vigo, No. 03, página 01. ISSN 2386-3056.

¹²³³ OPEN Society Justice Initiative. S.F. *Óp. Cit.* Página: 38

6. ¿ORIGEN BASADO EN CIERTAS SUPOSICIONES O CONDICIONES FÁCTICAS?

Su origen se debe a condiciones fácticas, como ya se ha analizado por los hechos violatorios de los derechos humanos sucedidos entre 1975 y 1979, y es sólo hasta el 2006 que fue creado, durante el 2007 y 2008 se hicieron las investigaciones y algunos arrestos, porque estas se debían hacer acorde a las normas africanas.

7. DOCUMENTO CREADOR

La creación del Tribunal Especial de Camboya mediante el estatuto entre el Reino de Camboya y las Naciones Unidas por medio de un instrumento que no era parte de la legislación interna de Camboya y que resulta ser totalmente autónomo del sistema judicial ordinario de ese país producto de las reformas legales que se implementaron para el efecto, cuyo propósito es la investigación y enjuiciamiento de los máximos responsables del genocidio ocurrido en el territorio de ese país. Una particularidad de este tribunal en lo que se refiere a tribunales internacionales, como ya se señaló, es el hecho que se integra con jueces nacionales en conjunto con jueces internacionales lo que le brinda un carácter de tribunal mixto, que las decisiones de investigar, acusar y arrestar son conjuntas, esto producto de las reformas legales internas especiales para crear las normas que permitieron el acuerdo y poder tener ese tribunal nacional e internacional, donde también aplican los estándares internacionales,

“Este tribunal fue auspiciado por las Naciones Unidas a través de del Programa de Asistencia para los Juicios de los Jemeres Rojos (UNAKRT) e integrado por jueces internacionales y camboyanos”¹²³⁴

8. MANDATO

El mandato mediante el cual se crearon las Salas Extraordinarias en los Tribunales de Camboya, para el enjuiciamiento de los responsables del genocidio cometido en el territorio de Camboya entre 1975 y 1979, nace a partir de la legislación camboyana

¹²³⁴ BERMEJO GARCÍA, Romualdo. 2011. Sección: información y documentación. *Revista Española de Derecho Internacional, Asociación de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales*. Madrid, España: Revista Española de Derecho Internacional, Vol. LXIII/2, página 302. ISSN: 0034-9380.

en un acuerdo entre el Gobierno de Camboya y las Naciones Unidas el cual fue aprobado por la Asamblea General de este país y por las Naciones Unidas en sesión plenaria el 12 de junio de 2007¹²³⁵. Lo anterior hace que por la naturaleza del acuerdo este se constituya en una norma autónoma e independiente dentro del sistema legal de Camboya.

El estatuto de creación tuvo como fuente primaria y sustento jurídico la misma normativa local, es decir, que se utilizó el propio sistema de justicia existente en el Gobierno camboyano, consignando que, si alguna conducta o tipo penal que no estuviese contemplado podría añadirse, a tal caso que para poder crear estos tribunales como ya se analizó hubo la necesidad de modificar algunas normas jurídicas internas para darle la especialidad. En tal caso, las leyes sustanciales que se aplican son el Código Penal del país y los convenios y tratados internacionales vigentes en los que se contemplan los crímenes de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

La utilización de fuentes internacionales del derecho en el caso de Camboya representa la accesibilidad a los jueces nacionales con posible efecto duradero en la práctica judicial nacional.¹²³⁶

A. OBJETIVOS

Su objetivo es hacer las investigaciones criminales pertinentes en contra de los posibles responsables de la ejecución de las atrocidades cometidas entre el 17 de abril de 1975 y el 6 de enero de 1979, en donde desaparecieron 1.7 millones de personas, y se oprimió generalizadamente al resto de la población y así poder hacer justicia en el país.

En Camboya, el mandato no incluyó como objetivos el tema de reparaciones, si bien se incluyeron derechos expansivos a las reparaciones. Sin embargo; el problema ha radicado en la interpretación que le han dado los jueces que no conocen sobre el

¹²³⁵ SALAS Extraordinarias en los Tribunales de Camboya, Reglas internas (rev.9) Aprobado en la Sesión Plenaria de las Salas Extraordinarias de los Tribunales de Camboya el 12 de junio de 2007, y firmado por el Presidente, un Vicepresidente del Pleno, 19 de junio de 2007. Revisado en las Sesiones Plenarias de las Salas Extraordinarias de los Tribunales de Camboya el 10 de febrero de 2008, 5 de septiembre de 2008, 6 de marzo de 2009, 11 de septiembre de 2009, 9 de febrero de 2010, 17 de septiembre de 2010, 23 febrero 2011, 3 de agosto de 2011 y 16 de enero de 2015.

¹²³⁶ OPEN Society Justice Initiative. S.F. *Óp. Cít.* Página: 49

derecho de reparaciones, aplicando estrictamente lo regulado en el estatuto, aunado a que no se cuentan con los recursos necesarios para su implementación.¹²³⁷

B. ALCANCES DEL MANDATO

En la Creación de las Salas Extraordinarias para Camboya, fue utilizado el sistema jurídico interno de este país, por lo que dentro de este mismo sistema se encontraba contenido el alcance que tendrían los juicios promovidos por el tribunal, también, se estipuló que los aspectos que no se encontraran contemplados dentro de este sistema judicial se podrían promover mecanismos para poder incluirlos.

“El artículo 29 de la Ley de 2001 hace referencia al alcance de la responsabilidad individual; este artículo señala que la responsabilidad se extiende a todo sospechoso que hubiera planeado, instigado, ordenado, ayudado, incitado algunos de los delitos recogidos en la propia Ley”¹²³⁸

C. COMPETENCIA

La competencia es conocer los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y algunos crímenes de guerra cometidos entre 1975 y 1979 por Jemeres Rojos en el territorio de Camboya.

“Las Salas tienen competencia, de conformidad con la Ley camboyana de 2004, respecto a los crímenes recogidos en los artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8, a saber: - Homicidio, tortura o persecución religiosa, tal y como está recogido en el Código Penal del Reino de Camboya (artículo 3 de la ley camboyana de 2004); - Genocidio, tal y como está definida en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio del año 1948 (artículo 4 de la ley camboyana de 2004); - Crimen de lesa humanidad (artículo 5 de la ley camboyana de 2004), que incluye: asesinato, exterminación, esclavitud, deportación, encarcelamiento, tortura, violación, persecuciones por motivos políticos, raciales y religiosas, otros actos inhumanos - Infracciones graves de las Convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (artículo 6 de la ley

¹²³⁷ OPEN Society Justice Initiative. S.F. Óp. Cit. Página: 29

¹²³⁸ GARCIA CAJAL, Virginia. 2015. *Los Tribunales Mixtos como último paso en la evolución del Derecho Internacional Penal: el caso de las Salas Especiales para Camboya* [en línea]. Trabajo Fin de Grado. Zaragoza, Universidad de Zaragoza. [Consulta: 10 de diciembre de 2020]. Disponible en: <https://zaguan.unizar.es/record/31841/files/TAZ-TFG-2015-574.pdf>

camboyana de 2004); - *Destrucción de propiedad cultural, tal y como recoge la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado del año 1954 y Reglamento para la aplicación de la Convención de 1954 (artículo 7 de la ley camboyana de 2004); - Crímenes cometidos contra personas internacionalmente protegidos según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 (artículo 8 de la ley camboyana de 2004).*¹²³⁹”

D. FORTALEZAS

Las fortalezas del tribunal radican en su carácter mixto, el ser desde el punto de vista normativo un estatuto especial al margen de la legislación ordinaria de Camboya, pero con carácter nacional e internacional, no sólo por la conformación de jueces, sino en la aplicación de leyes nacionales en adición a los convenios y tratados internacionales aprobados por el estado.

E. REGLAS DE ADMISIBILIDAD

En el caso de las Salas Extraordinarias de Camboya, para el enjuiciamiento de los responsables de la denominada Kampuchea Democrática se determinó en el Estatuto que as reglas de admisibilidad se establecieron de la siguiente manera:

- vi. *Ratione Personae*: La competencia personal se limita a los posibles responsables de haber cometido los crímenes, especialmente *“los altos dirigentes de la Kampuchea Democrática”*.¹²⁴⁰.

En la ley con la que se establecieron las Salas Especiales no se previó *“la posibilidad de responsabilizar a aquellos que hubieran participado en la planificación, instigación, asistencia, o complicidad, derivado a la complejidad de poder establecer su participación en tal grado”*¹²⁴¹.

¹²³⁹ GARCIA CAJAL, Virginia. 2015 *Óp. Cit.*

¹²⁴⁰ Artículo 2 de la Ley sobre el establecimiento de las Salas Especiales y arts. 1, 5.3, y 6.3 del Acuerdo ONU-Camboya.

¹²⁴¹ *Ídem.*

“Además, la elección de sólo enjuiciar a los más altos dirigentes de la Kampuchea Democrática, no coincide necesariamente con la lista de los principales responsables de graves violaciones a los Derechos humanos, en la medida que ciertos altos cargos no sabían lo que sucedía, o no participaban en las decisiones, mientras que ciertos dirigentes locales, así como dirigentes de centros de interrogatorio o de tortura, que no eran altos cargos del partido, jugaron un rol importante en la comisión de los crímenes”.¹²⁴²

- i. *Ratione Materiae*: Las Salas Especiales tienen competencia para conocer de los crímenes estipulados en el capítulo II de la Ley sobre el establecimiento de las Salas Especiales para el procesamiento de los crímenes cometidos en el período de la Kampuchea Democrática, entre los que resalta el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, y las infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949.

Dentro de los crímenes que también pueden investigar las Salas se encuentran los delitos comunes contemplados en el Código Penal de Camboya de 1956, entre los que se encuentran: el homicidio, la tortura y la persecución religiosa¹²⁴³.

- ii. *Ratione Temporis*: La competencia temporal se refiere a los delitos específicos ejecutados entre el 17 de abril de 1975 y el 6 de enero de 1979, ya que fue en este periodo en el que se cometieron los actos atroces contra la población de Camboya.
- iii. *Ratione Loci*: “A diferencia del caso del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), la Corte Penal Internacional para Rwanda (TPIR), y el Tribunal Especial para

¹²⁴² UNIVERSITAT, de les Illes Balears. S.F. Secciones: 2. *Las Salas Especiales de Camboya*. En: Colección Veracruz, Catedral Iberoamericana [en línea]. Disponible en : <https://fci.uib.es/Servicios/libros/veracruz/Fraschina/2.-Las-Salas-Especiales-de-Camboya..cid211448> [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

¹²⁴³ Ley sobre el establecimiento de las Salas Extraordinarias en los Tribunales de Camboya para el enjuiciamiento de los Crímenes cometidos durante el período de Kampuchea Democrática.

Sierra Leona, en el caso de las Salas Extraordinarias para Camboya no está explícitamente establecida su competencia territorial ni por el Acuerdo ni por la Ley”.¹²⁴⁴

Pero en este particular caso las Salas son parte de la estructura de un sistema especial de justicia nacional de Camboya, lo que también hace inferir que la competencia territorial se limita al territorio de Camboya.

F. TIEMPO DETERMINADO

En el Estatuto de creación de las Salas Especiales de Camboya no se estableció una fecha de culminación como tal, en el artículo 47 del Estatuto¹²⁴⁵, se plasmó que las Salas Especiales para los Tribunales de Camboya serían disueltas cuando se concluyeran en definitiva los juicios que eran competencia de estas Salas, es decir, que automáticamente serán disueltas las Salas con la terminación de los juicios que estas llevaban.

G. DISTRIBUCIÓN DEL PODER.

De acuerdo al estatuto de las Salas Especiales para la creación del Tribunal de Camboya la Judicatura estaba compuesta por:

- a. *“La sala de juicio por cinco jueces, tres de los cuales son camboyanos (uno de ellos presidiendo la audiencia) y dos jueces internacionales.*
- b. *La sala de apelaciones por siete jueces, cuatro camboyanos y tres internacionales, Cabe mencionar que todos los jueces son nombrados por el Consejo Superior de la Magistratura de Camboya”¹²⁴⁶.*

Un aspecto muy importante en relación a los jueces internacionales es el hecho de que estos primero deben ser candidateados por el Secretario General de las Naciones Unidas. El modelo de jueces de instrucción también es utilizado en las salas, en donde se nombran un juez nacional y uno internacional. Al igual que en la conformación de

¹²⁴⁴ GARCIA CAJAL, Virginia. 2015. *Óp. Cit.* Páginas: 19 y 20

¹²⁴⁵ Ley sobre el establecimiento de salas extraordinarias en los tribunales de Camboya, *Óp. Cit.* Artículo 47.

¹²⁴⁶ ICTJ. S.F. *Óp. Cit.*

las Salas el juez de instrucción internacional es designado por el Secretario General de las Naciones Unidas, el Consejo Superior de la Magistratura es el ente encargado de elegir a ambos jueces, quienes tienen la facultad de interrogar a los procesados y recibir testimonios de víctimas y testigos, así como el poder recolectar pruebas¹²⁴⁷.

En relación a la Fiscalía, las salas cuentan para la investigación con un fiscal nacional e internacional quienes trabajan conjuntamente. Siguiendo la misma mecánica de nombramiento de jueces, siendo el Consejo de la Magistratura el encargado de nombrar a los fiscales, el fiscal internacional es nominado por el Secretario General de Naciones Unidas.¹²⁴⁸

9. ¿SURGIÓ COMO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES?

A. ¿HABÍA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL?

Para ese momento el término responsabilidad internacional ya se encontraba acuñado y la creación del Tribunal se debió precisamente por las graves atrocidades que se habían cometido en territorio de Camboya y que, por solicitud de su gobierno, casi 20 años después requirió el involucramiento de las Naciones Unidas para la creación de Misión que llevó a la creación de las Salas casi treinta años después de los hechos.

Si bien, el objetivo del Tribunal no fue juzgar la responsabilidad internacional del Estado, sino la responsabilidad individual, el hecho que se delimitara su competencia en conocer sobre las violaciones graves cometidas al derecho humanitario y de la Convención contra el genocidio, contenidos en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 refleja que fue creado dentro del marco de responsabilidad internacional que el Estado tenía frente a dichos instrumentos.

B. OBLIGACIONES INTERNACIONALES

Las obligaciones internacionales adquiridas provenían de la Carta de Naciones Unidas para la creación del tribunal, y las derivadas de los Convenios de Ginebra y lo

¹²⁴⁷ ICTJ. S.F. *Óp. Cit.*

¹²⁴⁸ *Ídem.*

regido por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, así como la ratificación de los Convenios y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos.

C. ¿ABORDA HECHOS ILÍCITOS INTERNACIONALES?

Las Salas sí abordan hechos ilícitos internacionales, puesto que existía conocimiento de los hechos ocurridos en Camboya por medio de informes que evidenciaban los comportamientos atribuibles al Estado que constituían una violación a las obligaciones internacionales.

10. COOPERACIÓN DE LOS ESTADOS.

En relación a la cooperación que existe entre el Estado de Camboya y la Comunidad Internacional se da de una forma subsidiaria, porque la creación de las Salas Especiales para el Tribunal de Camboya se origina desde el mismo sistema de justicia nacional con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas, tanto en la conformación de las Salas, investigaciones y los gastos de funcionamiento.

Para la confirmación de las Salas se hará por medio de personal camboyano y extranjero, garantizando de esta manera la colaboración entre el gobierno de Camboya y la Comunidad Internacional, los gastos de los salarios del personal que proporcione el Gobierno de Camboya será costado por este Estado y los salarios de los empleados internacionales correrá a cargo del ente Internacional¹²⁴⁹.

11. INDEPENDENCIA

Aunque las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya se conformaron con personal en funciones de este Estado y se utilizó como fuente primaria de justicia la misma normativa legal vigente, en el artículo 25 del Estatuto de las Salas Especiales del Tribunal de Camboya, se establece que los jueces deben tener un alto carácter moral, ser íntegros e imparciales, también deben ser autónomos y la ejecución de sus funciones debe realizarse con total independencia, en el que no acepten ni soliciten directrices de ningún gobierno ni de ningún otro ente.

¹²⁴⁹ ICTJ. S.F. *Óp. Cit.*

Por la naturaleza de los casos competencia de las Salas, un aspecto de mucha relevancia debe ser que las funciones que ésta desempeña lo hagan con total imparcialidad e independencia, ya que el perfil de los sospechosos o responsables de la comisión de los crímenes cometidos en el territorio de Camboya competencia de la Salas eran personas con un alto poder militar.

12. SELECCIÓN DE ACTORES

Como se ha desarrollado a lo largo de esta investigación, fundamentalmente, las Salas Especiales de los tribunales de Camboya fueron creadas para el enjuiciamiento de los responsables de la ejecución de crímenes de genocidio y de cualquier otra conducta que vulnere los derechos humanos, específicamente en los años de 1975 a 1979 generado por los denominados Khmers Rouges o Jemeres Rojos, es decir, que los principales actores eran los altos mandos de estos grupos liderados por un régimen político de izquierda radical. Siendo solo los líderes los destinatarios de esas investigaciones, que no descendían a integrantes del mismo grupo que no tenían poder y así no dificultar los procesos de investigación, esto hace que el número de personas procesadas no fueran muchos, pero si con un gran poder político, militar y económico. Incluso en la época de las negociaciones para la creación de las cámaras, el gobierno del Reino de Camboya llegó a asumir la postura de no investigar a los posibles responsables del genocidio para no abrir más heridas que pudieran resultar incurables para el país.

13. NORMATIVA RELEVANTE Y MARCO PROCEDIMENTAL

Como se ha mencionado anteriormente, la ley especial camboyana creada para justar el régimen legal interno y firmar el acuerdo con las Naciones Unidas, reúne *“todas las disposiciones del funcionamiento de las Salas especiales y establece en el artículo 2 que las Salas especiales se crean dentro de la estructura del tribunal de Camboya, es decir, la Sala especial de Primera Instancia dentro la existente Sala de Primera Instancia; igual que la Sala especial del Tribunal Supremo, dentro de la existente Sala del Tribunal Supremo”*¹²⁵⁰.

¹²⁵⁰ BÜRGIN, Annina Cristina. 2017. *Óp. Cit.* Pág. 3

Como es la normativa interna la que regía los procedimientos aplicables por las Salas, estas podían hacer uso de todos los instrumentos legales del derecho procesal aplicable de Camboya. “*El pleno de las Salas adoptó las regulaciones procesales el 12 de junio de 2007*” ¹²⁵¹.

En relación a la Ley sobre el establecimiento de las Salas extraordinarias en los tribunales de Camboya, está conformada por 48 artículos distribuidos en 19 capítulos¹²⁵², los que se abordan de la siguiente manera:

En capítulo 1 el cual contiene el artículo 1 se encarga de las disposiciones generales de la ley, en el cual se establecen los propósitos de la ley que fundamentalmente es la creación del mecanismo para poder llevar a juicio a los altos dirigentes que se vieron involucrados en los crímenes cometidos en la Kampuchea Democrática, por la violación de los derechos humanos mediante los actos atroces cometidos contra los pobladores de Camboya.

El capítulo dos se integra por los artículos de 2 al 8, este contiene las competencias de las Salas Extraordinarias, en cuanto a la competencia temporal que básicamente es el periodo en donde se origina la comisión de los crímenes que originaron la creación de este tribunal especial, el cual comprende desde el 17 de abril de 1975 y el 6 de enero de 1979. La competencia personal que es para el enjuiciamiento de los líderes de la Kampuchea Democrática, así como los delitos de los cuales entre otros tiene competencia la Sala que están contenidos en el Código Penal de 1956 entre los que resalta el homicidio, la tortura, la persecución religiosa.

Además, las salas tienen la facultad de llevar a juicio a quienes hayan cometido los delitos de genocidio definidos en la Convención sobre la Prevención y sanción del delito de genocidio de 1948; sospechosos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad; sospechosos de haber cometido infracciones graves a los Convenios de Ginebra de 1949 contra personas o bienes protegidos.

En el capítulo tres se encuentra la organización de las Salas, la que se encuentra en el artículo 9 “*la Sala de Primera Instancia será una Sala Extra ordinaria compuesta*

¹²⁵¹ ICTJ. S.F. *Óp. Cit.*

¹²⁵² Ley sobre el establecimiento de salas extraordinarias en los tribunales de Camboya para el enjuiciamiento de los crímenes cometidos durante el período de Kampuchea Democrática

por cinco jueces profesionales, de los cuales tres son jueces camboyanos con uno como presidente, y dos jueces extranjeros; y ante los cuales los Co-Fiscales presentarán sus casos. El presidente nombrará a uno o más secretarios de la corte para participar. La Sala del Tribunal Supremo, que servirá como sala de apelaciones y instancia final, será una Sala Extraordinaria compuesta por siete jueces, de los cuales cuatro son jueces camboyanos con uno como presidente, y tres jueces extranjeros; y ante los cuales los Co-Fiscales presentarán sus casos. El presidente nombrará a uno o más secretarios de la corte para que participen”¹²⁵³.

El capítulo cuatro comprendido por los artículos 10, 11, 12 y 13 se encarga de regular el nombramiento de los jueces, que no será más que los mismos jueces que se encuentran en el ejercicio o en su defecto serán nombrados adicionalmente conforme los procedimientos existentes en esta área¹²⁵⁴.

El capítulo cinco aborda la forma en la que las Salas deberán de tomar sus decisiones y las cuales están contenidas en los artículos 14 y 15, los que establecen que las decisiones se tomarán por unanimidad si esto no se diera en las salas de primera instancia se tomará con el voto de al menos 4 jueces, en el caso de la Sala Extraordinaria se requerirá el voto de al menos 5 jueces, adjuntando los votos concurrentes y disidentes.

El capítulo seis contiene los artículos del 16 al 28 aborda la figura del Fiscal de las salas extraordinarias, sus funciones y facultades, en el que se estableció que las investigaciones estaría a cargo de dos jueces, uno internacional y uno camboyano, los jueces coinvestigadores tendrán la facultad de interrogar a sospechosos y víctimas, escuchar testigos y recoger pruebas, de conformidad con los procedimientos existentes en vigor; el Juez-Investigador camboyano y los Jueces de Instrucción de

¹²⁵³ Ley sobre el establecimiento de salas extraordinarias en los tribunales de Camboya *Óp. Cit.* Artículo 9

¹²⁵⁴ “Artículo 10. Los jueces de las Salas Extraordinarias serán nombrados entre los jueces actualmente en ejercicio o serán nombrados adicionalmente de conformidad con los procedimientos existentes para el nombramiento de jueces; todos los cuales tendrán un alto carácter moral, un espíritu de imparcialidad e integridad, y experiencia, en particular en el derecho penal o el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos. Artículo 11. El Consejo Supremo de la Magistratura nombrará al menos a siete jueces camboyanos para que actúen como jueces de las Salas Extraordinarias, y nombrará jueces de reserva según sea necesario, y también nombrará al Presidente de cada una de las Salas Extraordinaria. Artículos 12-13. Todos los jueces de las salas extraordinarias gozarán de igualdad de condiciones y condiciones de servicio. Los jueces serán asistidos por el personal nacional e internacional que sea necesario para realizar sus funciones”. Ídem.

la Reserva serán nombrados por el Consejo Supremo de la Magistratura entre los jueces profesionales camboyanos. Todos los jueces de las salas extraordinarias gozarán de igualdad de condiciones y condiciones de servicio. Los jueces serán asistidos por el personal nacional e internacional que sea necesario para realizar sus funciones

El capítulo ocho regula las normas relativas a la responsabilidad individual y se encuentra contenido en el artículo 29, el que establece que cualquier sospechoso que haya planeado, instigado, ordenado, ayudado e incitado, o cometido los delitos competencia de las salas será individualmente responsable del delito.

El capítulo nueve trata sobre las funciones, composición y facultades de la oficina de administración la cual está contenida en los artículos 30, 31 y 32¹²⁵⁵, la cual contara con un director camboyano, un director adjunto extranjero y demás personal que sea necesario.

El capítulo diez contiene los artículos del 33 al 37 introduce las normas aplicables al procedimiento ante las Salas¹²⁵⁶, en los que se destaca que se debe velar por que los juicios sean justos y se realicen de acuerdo con los procedimientos establecidos.

El onceavo aborda las sanciones a imponer a los acusados hallados culpables, el cual está integrado por los artículos 38 y 39, los cuales contemplan que las condenas pueden ir desde la privación de la libertad en un periodo de cinco años hasta cadena perpetua, así también las condenas no solo pueden ser de privación de libertad, sino

¹²⁵⁵ “Artículo 31. El director de la Oficina de Administración será nombrado por el Gobierno Real de Camboya por un período de dos años y podrá ser reelegido, será responsable de la gestión general de la Oficina de Administración, excepto en las cuestiones sujetas a las normas y procedimientos de las Naciones Unidas. El Director Adjunto del Extranjero será nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas y asignado por los Reales Miembros de Camboya, y será responsable de la contratación y administración de todo el personal internacional, según lo requieran los componentes extranjeros de las Salas Extraordinarias, los Jueces Co-Investigadores, la Oficina de Co-fiscales y la Oficina de Administración. El Director Adjunto administrará los recursos proporcionados a través del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas. Todo el personal camboyano de la Oficina de Administración será nombrado por el Gobierno Real de Camboya a petición del director. El personal extranjero será nombrado por el Director Adjunto.” Ley sobre el establecimiento de salas extraordinarias en los tribunales de Camboya Óp. Cit.

¹²⁵⁶ “Artículo 34 Los juicios serán públicos y abiertos a representantes de Estados extranjeros, del Secretario General de las Naciones Unidas, de los medios de comunicación y de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, a menos que en circunstancias excepcionales las Salas Extraordinarias decidan cerrar el procedimiento por causa justificada” Ídem.

que también puede ordenarse el decomiso de bienes adquiridos de manera ilegal, los cuales serán devueltos al Estado.

El capítulo doce capítulo está integrado por el artículo 40, el cual contiene las amnistías e indultos de las que pueden ser sujetos los acusados o sospechosos, en el que se establece que el gobierno de Camboya no solicitara amnistías o indultos para las personas que puedan ser investigadas o condenadas por los delitos que con competencia de las Salas, cualquier amnistía o indulto que haya sido concedido antes de la adopción de esta ley es asunto que se debe decidir por parte de las Salas Extraordinarias.

El capítulo trece comprendido en los artículos 41 y 42 se trata sobre las normas relativas al estatuto, derechos, privilegios e inmunidades del personal que integran los diferentes órganos de las Salas, en el que se establece que gozaran de los privilegios, inmunidades y facilidades que se les brindan a los agentes diplomáticos de acuerdo a lo establecido en la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas.

El capítulo catorce se fija la ubicación de las Salas que es en el Phnom Penh lo cual quedo contenido en el artículo 43.

En el capítulo quince se regula lo relativo a los gastos y salarios de las Salas el cual se encuentra en el artículo 44 del estatuto, en el que se establece que si se trata de personal camboyano correrá a cargo del gobernó de Camboya y si se trata de personal extranjero será responsabilidad de las naciones Unidas sufragar los gastos.

El capítulo dieciséis regula que el idioma de trabajo será el inglés, francés y el Jemmer según lo estipulado en el artículo 45.

El capítulo diecisiete establece el procedimiento aplicable en el caso de la ausencia de jueces extranjeros, jueces de investigación y fiscales extranjeros el cual este contenido en el artículo 46¹²⁵⁷.

¹²⁵⁷ “Artículo 46. El Consejo Supremo de la Magistratura nombrará a otros jueces o jueces o fiscales de instrucción para cubrir cualquier vacante de las listas de candidatos extranjeros prevista. En caso de que esas listas se agoten, y el Secretario General de las Naciones Unidas no complemente las listas con nuevos candidatos, o en el caso de que las Naciones Unidas retiren su apoyo a las Salas Extraordinarias, dichas vacantes serán cubiertas por el Consejo Supremo de la Magistratura de los

El capítulo dieciocho se establece que la existencia de las Salas en el que el artículo 47 literalmente establece *“Las Salas Especiales en los tribunales de Camboya se disolverán automáticamente tras la conclusión definitiva de los juicios”*¹²⁵⁸

En el capítulo diecinueve se encuentran contenidos en el artículo 47 bis se establece que luego de ratificado el acuerdo podrá realizarse uno en relación al establecimiento de la fiscalía.

La disposición final establecida en el artículo 48 se establece que la ley se proclama de manera urgente.

En cuanto a la competencia específica de los cámaras de cuerdo al estatuto, se tiene:

Los conjueces son los responsables de la investigación y recolección de la evidencia.

Los confiscales con la evidencia suministrada por los conjueces, son los responsables de decidir a quien acusa por los crímenes y presentan la evidencia ante la corte.

En el evento que no se presente un acuerdo entre los pre-jueces y los pre-fiscales en cuanto a quien se debe acusar, intervienen los jueces de las cámaras de pre-juicios, quienes tomaran la decisión final, a la cual no se pueden oponer los anteriores, así, tampoco ninguno puede desconocer las pruebas para no presentar acusación formal contra un sindicado o dejar de hacerlo por algún delito.

Los jueces de la cámara de juicio, escuchan la evidencia presentada por la fiscalía y la defensa y deciden en cuanto a la culpabilidad o inocencia. Deben presentar su argumentación por escrito respecto de la culpabilidad, la que debe ser aprobado por lo menos por cuatro jueces.

Jueces de la cámara alta, una vez dictada la sentencia por la cámara de juicio escuchan el caso, pueden revocar una condena o una presunción de inocencia, para determinar la culpabilidad se exigen el voto afirmativo de cinco de sus integrantes. Esta cámara también se puede abstener de escuchar el caso, lo que implica confirmar lo decidido por la cámara de juicios.

candidatos recomendados por los Gobiernos de los Estados Miembros de las Naciones Unidas o de entre otras personalidades jurídicas extranjeras.” Ley sobre el establecimiento de salas extraordinarias en los tribunales de Camboya Óp. Cit.

¹²⁵⁸ Ídem. Artículo 47.

La legislación camboyana necesitaba reformas antes de que las Salas iniciaran su trabajo, estoy habría ayudado grandemente a su trabajo.¹²⁵⁹

14. LEGITIMIDAD:

La legitimidad y legalidad de la Cámara ha sido cuestionada, esto se debe a Se considera que las Salas están muy integradas al sistema nacional bajo condiciones incorrectas, lo que ha dañado la legitimidad del sistema, debido a la politización del sistema judicial, normalizando la percepción de control del poder ejecutivo sobre los esfuerzos de persecución penal.¹²⁶⁰

Las Salas han tenido dificultades para introducir la nueva ley por medio del estatuto o intentando aplicar las normas de derecho internacional, cuestión que se anticipó al momento de su creación y que ha provocado que se cuestione su legalidad.¹²⁶¹

El haber sido creadas a través de un tratado entre la Naciones Unidas y el estado soberano de Camboya su legalidad y confiabilidad dependen del equilibrio de poderes, debido a que el Acuerdo y la Ley abordan distintos asuntos, el gobierno camboyano promulgó la ley de las Salas y las Naciones Unidas se encargaron de regular el método de designación y la supervisión judicial.¹²⁶²

15. JURISDICCIÓN

De acuerdo a la legislación nacional de Camboya, tratados y convenios internacionales de los que Camboya es parte, las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya tiene jurisdicción territorial para investigar los delitos de Genocidio, asesinato, tortura y persecución religiosa, “*crímenes de lesa humanidad, graves violaciones a las Convenciones de Ginebra, destrucción de la propiedad cultural y crímenes contra personas internacionalmente protegidas*”.¹²⁶³

¹²⁵⁹ OPEN Society Justice Initiative. S.F. *Óp. Cit.* Página: 76

¹²⁶⁰ Ídem. Página: 44

¹²⁶¹ Ídem. Página: 46 y 47

¹²⁶² Ídem. Página: 75

¹²⁶³ ICTJ. S.F. *Óp. Cit.*

En esta materia, la forma en que esta se redactó en el estatuto es cuestionada, se ha afirmado que se explota de manera inapropiada sobre la jurisdicción personal, interpretándola convenientemente para los presuntos responsables.¹²⁶⁴

A. ¿QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE DE UN CASO?

Las personas que resultaren responsables de la comisión de los crímenes atroces cometidos en el territorio de Camboya durante los años de 1975 a 1979 y de los que son competencia de las Salas Especiales de Camboya. Aquí no se puede olvidar con ya sea analizado a lo largo del trabajo, el quienes son los destinatarios de las investigaciones, que se dirige a los líderes de los Jemeres Rojos.

B. ¿QUÉ PROBLEMAS SE PODÍA DEBATIR?

Todos aquellos delitos regulados en normas especiales aplicables cometidos por los líderes del régimen de Jemeres Rojos, entre 1975 y 1979.

16. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN:

Al estar regido el actuar de las Salas, por el ordenamiento jurídico interno especialmente creado en Camboya al firmar el acuerdo de creación del tribunal, los medios de impugnación también estaban fuertemente ligados a los procedimientos que este Sistema Jurídico ya tenía en vigor. Si en algún momento existía algún tipo de controversia o no se contemplaba algún tipo de conducta, se podía tomar como base el procedimiento internacional relacionado a esta materia y que es aplicable al sistema jurídico camboyano.

El mecanismo de los Jueces de las Cámaras Altas, se constituye en una garantía especial para el derecho de defensa y de la imparcialidad, porque jueces de superior jerarquía tiene la oportunidad de revisar las sentencias y decidir si confirman o no lo resuelto y se exige para el caso de confirmar la condena o revocar la absolución un voto unánime de los 5 integrantes de la sala.

Lo anterior en adición a las apelaciones que se hacen el curso del proceso y posición a determinadas resoluciones, peticiones de nulidad y separación de jueces y/o

¹²⁶⁴ OPEN Society Justice Initiative. S.F. *Óp. Cit.* Página: 64

fiscales de los casos, se constituyen en medios de impugnación eficaces como garantía de legalidad.

*"El procedimiento será de conformidad con la legislación camboyana. Cuando la legislación camboyana no se ocupa de un asunto en particular, o cuando hay incertidumbre con respecto a interpretación o aplicación de una Norma de Derecho camboyana pertinente, o cuando exista una con respecto a la coherencia de dicha Regla con las normas internacionales, también se puede buscar orientación en las Reglas de Procedimiento establecidas a nivel internacional"*¹²⁶⁵

17. MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO

Los mecanismos de las sentencias son los contemplados en la legislación camboyana, el cumplimiento del trabajo de las Salas es por medio de Informes ante Naciones Unidas.

18. RECURSOS DISPONIBLES

A. HUMANO:

En cuanto a recurso humano, para el bienio 2020-2021, las Cámaras Extraordinarias proponen la retención de 223 puestos en 2020 (94 puestos para el componente internacional y 129 puestos para el componente nacional) y 191 puestos en 2021 (70 puestos para el componente internacional y 121 puestos para el componente nacional).¹²⁶⁶

B. MATERIAL:

En cuanto a los recursos materiales, las Salas cuentan con 90 reportes mensuales, 234 noticias y 225 vídeos que han documentado el trabajo realizado.¹²⁶⁷ En adición a

¹²⁶⁵ Ley sobre el establecimiento de salas extraordinarias en los tribunales de Camboya, *Óp. Cit.* Artículo 12

¹²⁶⁶ Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya, S.F. Propuesta de presupuesto para 2020-2023, Página 07. En: *Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya* [en línea]. Disponible en: <https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/ECCC%202020-2021%20Proposed%20Budget.pdf>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

¹²⁶⁷ Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya, S.F. Centro de documentación de las Salas, Página 01. En: *Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya* [en línea]. Disponible en: <https://www.eccc.gov.kh/en/video/trial-video> [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

las instalaciones físicas donde funcionan las diferentes salas con los equipos necesarios para la ejecución del trabajo de oficina y campo. Pero en relación a estas por ser en bases militares, cuando la misión termine muy seguramente regresen a cumplir una función meramente militar.

C. PRESUPUESTO ASIGNADO:

En base a las necesidades anticipadas para los próximos dos años 2020 y 2021, las Cámaras Extraordinarias solicitaron la aprobación de un presupuesto total propuesto por un monto de \$ 34.38 millones, de los cuales \$ 18.50 millones corresponden a 2020 y \$ 15.88 millones corresponden a 2021.¹²⁶⁸

Para el personal del componente internacional de las Cámaras Extraordinarias estima que se requieren \$ 24.56 millones para el 2020- 2021 para realizar las actividades como se describe en el Plan de finalización. Se requieren unos \$ 13.46 millones para 2020 y \$ 11.10 millones para 2021. Para el personal del componente nacional de las Cámaras Extraordinarias estima que se requieren \$ 9.83 millones para el 2020-2021 desarrollar las actividades descritas en el Plan de finalización. Distribuido \$ 5.04 millones se requiere para 2020 y \$ 4.79 millones para 2021.¹²⁶⁹

19. EL PAPEL DE LA VÍCTIMA:

Las víctimas tienen derecho a participar en los procedimientos, este derecho se complementa y aclara en el proyecto de Código de Procedimiento Penal interno de Camboya que se encuentra en la actualidad ante el Consejo de Ministros, y que se convertirá en la "ley aplicable" frente a las Salas Extraordinarias. Esta legislación autorizará a las víctimas a empezar procedimientos como partes civiles. De tal modo que puedan forzar una investigación cuando los co-jueces no han iniciado procedimientos correspondientes. Esta normativa representa un gran avance en cuanto a la aplicación de los derechos de acceso a la justicia de las víctimas. *“De las disposiciones del Acuerdo sobre Salas Extraordinarias de 2003 se desprende*

¹²⁶⁸ Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya, S.F. *Óp. Cit.*

¹²⁶⁹ Ídem.

claramente que disposiciones relativas a la participación de las víctimas se aplicarán ante las Salas Extraordinarias".¹²⁷⁰

En la ley Extraordinaria de las Cámaras no se prevé la reparación de las víctimas, por lo que, de acuerdo a la normativa interna de Camboya, las víctimas pueden iniciar un juicio de reparación como parte del procedimiento penal o en su defecto un proceso civil de reparación.

Las Salas se han basado en proyectos realizados por organizaciones no gubernamentales para sufragar los gastos de representación de las víctimas.¹²⁷¹

20. PERCEPCIÓN PÚBLICA:

Un estudio realizado por Justice Initiative afirma que la opinión y percepción públicas son difíciles de medir, existen indicios alentadores. *“Las encuestas muestran que una gran mayoría de la población camboyana está al tanto de la situación de los juicios y apoya a las SECC. La representación de la parte civil y las audiencias con un gran número de asistentes brindaron a las víctimas y a la población en general vasta información sobre los acontecimientos pasados controvertidos, o más a menudo, que se habían convertido en temas tabú. Más allá de los procedimientos legales del tribunal, los proyectos de conmemoración y los centros de documentación han llevado a cabo actividades relacionadas con los procedimientos, incluidos los programas de educación sobre el genocidio y la construcción de monumentos a las víctimas. Se podría decir que el mayor éxito del tribunal ha sido su capacidad de promover el debate entre los camboyanos acerca de los crímenes del pasado y sus causas. Más allá de los procedimientos legales del tribunal, los proyectos de conmemoración y los centros de documentación han llevado a cabo actividades relacionadas con los procedimientos, incluidos los programas de educación sobre el genocidio y la construcción de monumentos a las víctimas. Se podría decir que el mayor éxito del*

¹²⁷⁰ FEDERACIÓN Internacional por los Derechos Humanos. 2007. Victims' Rights before the ICC, Chapter I, The evolution of victims' access to justice. Página: 31. En: *Federación Internacional por los Derechos Humanos* [en línea]. Disponible en: <https://www.fidh.org/en/issues/international-justice/international-criminal-court-icc/Victims-Rights-Before-the> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

¹²⁷¹ OPEN Society Justice Initiative. S.F. *Óp. Cit.* Página: 122

tribunal ha sido su capacidad de promover el debate entre los camboyanos acerca de los crímenes del pasado y sus causas”¹²⁷².

21. NÚMERO DE CASOS INGRESADOS

El reporte mensual de diciembre de 2009 indica las Salas recibieron las siguientes solicitudes: peticiones de admisión de pruebas, admisión de evidencia para establecer la relación entre los actores civiles y las víctimas. Además, 04 para apartar del juicio a la co-investigación internacional, 06 apelaciones, distribuidas 02 por la forma de obtener declaraciones por parte de los jueces de investigación, 01 sobre la designación de un testigo experto, 01 sobre la solicitud de anulación de actuaciones.¹²⁷³

De conformidad con el informe mensual de diciembre de 2010 las Salas recibieron las siguientes solicitudes: 2 para apelar, 7 apelaciones, 01 solicitud de indulto y perdón, 02 de cese de juicio argumentando motivos médicos de los acusados Leng Sary e Leng Thirith.¹²⁷⁴

Las Salas en su informe mensual de diciembre de 2012 informaron que recibieron las siguientes solicitudes: 02 apelaciones pendientes de resolver del caso 003, 01 apelación del caso 002, 01 Amicus Curiae, 01 de prórroga de plazo para responder, 01 de audiencia, 01 de cerrar un caso en contra de Leng Sary argumentando razones médicas.¹²⁷⁵

En el informe de diciembre de 2013 las salas recibieron las siguientes solicitudes: 03 recursos de apelación, 02 de anulación confidenciales.¹²⁷⁶

¹²⁷² JUSTICE Initiative. S.F. Anexo 3: Mecanismos en el Continente Asiático. 532 y 533. En: *Justice Initiative* [en línea]. Disponible en: <https://www.justiceinitiative.org/uploads/de996213-0492-4603-abfe-45508417920d/options-justice-esp-anexo3-asia-20180501.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

¹²⁷³ Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya, S.F. Informe mensual de diciembre 2009, Página 04. En: *Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya* [en línea]. Disponible en: https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/publications/The%20Court%20Report%20%5BDec%202009%5D%20FINAL_0.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

¹²⁷⁴ Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya, S.F. Informe mensual de diciembre de 2011, Página 08-10. En: *Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya* [en línea]. Disponible en: <https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/publications/December%202011%20Court%20Report.pdf>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

¹²⁷⁵ Ídem

¹²⁷⁶ Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya, S.F. Informe mensual de diciembre de 2013, Página 04. En: *Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya* [en línea]. Disponible en:

Las salas de conformidad con su informe de diciembre de 2014 recibieron las siguientes: 01 solicitud para mejorar la unidad de traducción e interpretación, 01 apelación por error en procedimiento, 01 para apartar jueces de un caso, 01 de prórroga de plazo para presentar respuesta, 01 de suspender un proceso, 05 apelaciones.¹²⁷⁷

El informe de diciembre de 2015 expone que las Salas recibieron las siguientes solicitudes: 01 de realizar una prueba grafológica, aceptar el testimonio de Sam Sithy. Además, 01 sobre la admisibilidad de nuevas pruebas, 01 apelación para separar a investigadores internacionales del caso, 03 de anulación de procedimientos, 12 apelaciones.¹²⁷⁸

Las Salas informaron en diciembre de 2016 que recibieron las siguientes solicitudes: 01 apelación sobre los cargos de matrimonio forzado, 02 de anulación de procedimientos, 16 de dictar decisiones de forma escrita.¹²⁷⁹

Las Salas informaron en diciembre de 2017 recibieron las siguientes solicitudes: emitir decisiones escritas en 04 decisiones hechas de manera oral, 02 son públicas y 02 se encuentran bajo reserva, 01 memorando sobre lineamientos para implementar medidas de reparación, 02 apelaciones, 01 de anulación de procedimiento.¹²⁸⁰

Hasta el momento se ha trabajado en 7 casos.

22. NÚMERO DE CASOS RESUELTOS

El reporte mensual de diciembre de 2009 indica las Salas tomaron las siguientes decisiones: rechazó sobre la admisibilidad de pruebas por considerarlas tardía, abundante o irrelevante para el caso, admisión de evidencia para establecer la

<https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/publications/The%20Court%20Report%20Dec%202013.pdf>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

¹²⁷⁷ Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya, S.F. *Óp. Cit.*

¹²⁷⁸ Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya, S.F. Informe mensual de diciembre de 2015, Página04-06. En: *Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya* [en línea]. Disponible en: https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/publications/The_Court_Report_Dec_2015.pdf. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

¹²⁷⁹ Idem

¹²⁸⁰ Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya, S.F. Informe mensual de diciembre de 2017, Página02. En: *Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya* [en línea]. Disponible en: <https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/publications/The%20Court%20Report%20November-December%202017.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

relación entre los actores civiles y las víctimas. Además, que cursaban 04 solicitudes para apartar del juicio a la co-investigación internacional, 06 apelaciones, distribuidas 02 la forma de obtener declaraciones por parte de los jueces de investigación, 01 sobre la designación de un testigo experto, 01 sobre la solicitud de anulación de actuaciones. En este periodo se dio por concluido el caso contra Kaing Gek Eav.¹²⁸¹

De conformidad con el informe mensual de diciembre de 2010 las Salas emitieron las siguientes decisiones: 02 decisiones en apelaciones, 01 rechazó a solicitud de indulto y perdón, 01 aprobación (leng Thirith) 01 denegación (leng Sary) a solicitudes de cese de juicio argumentando motivos médicos.¹²⁸²

Las Salas en su informe mensual de diciembre de 2012 informaron que emitieron las siguientes decisiones: 03 denegaciones de apelación, 01 aprobación para prorrogar plazo para responder, 01 decisión de otorgar parcialmente una apelación, 01 decisión de continuar el juicio en contra del acusado leng Sary.¹²⁸³

En el informe de diciembre de 2013 las salas emitieron las siguientes decisiones: 02 declaraciones declarando inadmisibles la anulación, 01 decisión de inadmisibles la solicitud de apartar un juez de conocer un asunto, en trámite informaron estaban 2 apelaciones.¹²⁸⁴

Las salas de conformidad con su informe de diciembre de 2014 tomaron las siguientes decisiones: 01 decisión para mejorar la unidad de traducción e interpretación obligando a archivar en inglés y en jemer, 01 apelación por error en procedimiento, 01 denegación de solicitud de apartar jueces de un caso, 01 aprobación de prórroga de plazo para presentar respuesta, 01 denegación de solicitud de suspender un proceso, 02 apelaciones. Además, en curso para el periodo del informe 01 apelación por error en procedimiento, 02 solicitudes de admisión de prueba adicional, 01 investigación de interferencia de un proceso.¹²⁸⁵

El informe de diciembre de 2015 expone que las Salas tomaron las siguientes decisiones: rechazó de realizar una prueba grafológica, testimonio de Sam Sithy.

¹²⁸¹ Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya, S.F. *Óp. Cit.*

¹²⁸² Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya, S.F. *Óp. Cit.*

¹²⁸³ Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya, S.F. *Óp. Cit.*

¹²⁸⁴ Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya, S.F. *Óp. Cit.*

¹²⁸⁵ Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya, S.F. *Óp. Cit.*

Además, 04 casos seguían en trámite, 1 decisión pendiente de resolver sobre la admisibilidad de nuevas pruebas, 01 apelación para separar a investigadores internacionales del caso, 03 solicitudes de anulación de procedimientos, 12 apelaciones en trámite.¹²⁸⁶

Las Salas informaron en diciembre de 2016 emitieron las siguientes decisiones: 02 decisiones de anulación de procedimientos, 16 decisiones de forma escrita, 08 públicas, 08 confidenciales y 19 decisiones varias. Además, en proceso estaban 05 decisiones de apelaciones relacionado con anexar crímenes de lesa humanidad, divulgación de material de procesos, solicitudes de apartar del proceso a investigadores internacionales. En este periodo se encontraban 05 casos en curso¹²⁸⁷

Las Salas informaron en diciembre de 2017 emitieron las siguientes decisiones: 04 decisiones escritas, 02 son públicas y 02 se encuentran bajo reserva, 01 memorando, 01 decisión de nombramiento de médico y psiquiatra para evaluar a 1 acusado y su estado de salud para estar presente en el juicio. Además, las Salas han emitido un total de 22 sentencias y se encuentran 05 casos en curso, 02 apelaciones en curso.¹²⁸⁸

Hasta el momento se han resuelto 4 casos¹²⁸⁹.

23. ANÁLISIS CUALITATIVO:

Las Salas Extraordinarias para los Tribunales de Camboya, han logrado enjuiciar a varios de los altos dirigentes de la Kampuchea Democrática.

El gobierno de Camboya quiso controlar el trabajo de las Salas, por eso se resistió a la creación del mecanismo cuando este se planteó como un organismo externo e independiente, el gobierno insistió en la obtención de salvaguardas con el fin de imponer límites a los procedimientos. Se considera que el modelo que la ONU aprobó

¹²⁸⁶ Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya, S.F. *Óp. Cit.*

¹²⁸⁷ Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya, S.F. Informe mensual de diciembre de 2016, Página04. En: *Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya* [en línea]. Disponible en: <https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/publications/Court%20Report%20December%202016.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

¹²⁸⁸ Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya, S.F. *Óp. Cit.*

¹²⁸⁹ EXTRAORDINARY Chambers in the Courts of Cambodia, S.F. 2006 – 2021. *Case Load*. En: *Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya* [en línea]. Disponible en: <https://www.eccc.gov.kh/en/case-load> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

de coadministración ha dado oportunidad a la obstrucción, problemas operativos y tremendas ineficiencias¹²⁹⁰.

Debido a que sólo los principales dirigentes de la entonces Kampuchea Democrática puedan ser procesados, implica que las investigaciones se dirigen a un pequeño grupo de personas. Al inicio se trabajó en cuatro casos, los cuales con el tiempo se dividieron en varios casos particulares¹²⁹¹.

¹²⁹⁰ OPEN Society Justice Initiative. S.F. *Óp. Cit.* Página: 41

¹²⁹¹ - “Caso 001. Como “Caso 001” Se trató de una investigación contra Kaing Guek Eav, alias Duch, quien fue el responsable de la prisión “S-21”, también conocido como prisión Toul Sleng. “Fue arrestado en el año 1999 por el Tribunal Militar de Camboya y fue transferido a la jurisdicción de las Salas el 31 de julio de 2008. Fue acusado el 8 de agosto de 2008 y el juicio se desarrolló entre marzo y septiembre de 2009. La Sala de Primera Instancia declaró el 26 de julio de 2010 culpable a Duch de crímenes de lesa humanidad e infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, y le condenó a 35 años de prisión”. Un aspecto muy importante en este caso fue que la Sala de la Corte Suprema anuló la decisión anterior en la apelación y aumentó la condena a cadena perpetua.

- Caso 002. El 15 de septiembre de 2010 en el que se acusó a Nuon Chea (conocido como “Brother Number 2” quien fue vice-secretario del partido comunista, Khieu Samphan, jefe de gobierno, Ieng Sary (fue ministro de asuntos exteriores y miembro del comité central del partido comunista e Ieng Thirith (fue ministra de asuntos sociales), todos de la Kampuchea Democrática. Quienes fueron arrestados entre septiembre y noviembre de 2007. Los procedimientos contra Ieng Sary e Ieng Thirith fueron archivados después de la muerte del primero el 14 de marzo de 2013 y por incapacidad de Ieng Thirith para ser enjuiciada debido a que presento demencia.

“Aunque se inició el caso 002 como uno, fue dividido posteriormente en dos: en el llamado Caso 002/01, Nuon Chea y Khieu Samphan fueron encontrados culpables, el 7 de agosto de 2014, de crímenes de lesa humanidad y sentenciados a cadena perpetua. Aunque la Sala del Tribunal Supremo en la apelación anuló parte de los fallos, la condena de cadena perpetua fue confirmada. Nuon Chea y Khieu Samphan están siendo juzgados en un segundo juicio al que se refiere el Caso 002/02 y en el que están acusados de haber cometido genocidio contra los chams y los vietnamitas; matrimonios forzados y violación y purgas internas en varios sitios del país. El pasado 23 de junio de 2017, la Sala de Primera Instancia terminó la sesión de declaraciones finales en este caso y se retiró a deliberar”¹²⁹¹.

- Caso 003. El 14 de diciembre de 2015 fue acusado Meas Muth, comandante de la Marina de la Kampuchea Democrática, al que se le sindicaba de haber cometido los siguientes presuntos crímenes: genocidio, crímenes de lesa humanidad, graves infracciones contra los Convenios de Ginebra de 1949 e infracciones del Código Penal de Camboya. El 10 de enero de 2017, el juez instructor anunció la conclusión de la investigación judicial. La investigación contra Soy Met, fue rescindida debido a que esta falleció el 2 de junio de 2015.

- Caso 004. En un principio, en este caso fueron tres las personas acusadas, Im Chaem, Ao An y Yim Tith, sin embargo, posteriormente se dividió en tres casos individuales. “En relación con la investigación contra Im Chaem, los jueces de investigación desestimaron su caso 004/01 el 22 de febrero de 2017. Ao An (caso 004/02) está acusado de haber cometido genocidio, crímenes de lesa humanidad e infracciones contra el Código Penal de Camboya, y la investigación judicial se cerró el 16 de diciembre de 2016. La investigación judicial contra Yim Tith (caso 004/03), que está acusado de haber cometido genocidio, crímenes de lesa humanidad, graves infracciones de las Convenciones de Ginebra de 1949 e infracciones contra el Código Penal de Camboya, sigue abierta” BÜRGIN, Annina Cristina. 2017. *Óp. Cit.*

“Debido a la muerte de gran parte de los altos mandos y autores intelectuales de los crímenes cometidos durante el régimen de los Jemeres Rojos, las Salas han tenido un volumen de trabajo bastante limitado. Hasta el momento, las ECCC han finalizado solamente un caso por completo y otro parcialmente. El primero es el caso de Kaing Guek Eav, alias “Duch”, quien fue condenado en primera instancia a 35 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a las Convenciones de Ginebra el 27 de julio de 2010. La Cámara Suprema elevó la condena a cadena perpetua el 3 de febrero de 2012. El segundo caso se abrió en contra de cuatro altos oficiales, uno de

El Tribunal ha estado minado de acusaciones de corrupción, el manejo de los casos 3 y 4 ha generado cuestionamientos¹²⁹² sobre el respeto de las líneas de autoridad acordadas.

Según Justice Initiative el mayor éxito del tribunal ha sido su capacidad de promover el debate entre los camboyanos acerca de los crímenes del pasado y sus causas¹²⁹³.

Aparentemente el impacto del Tribunal en el sistema judicial ha sido más dudoso. Aunque se ve como algo positivo las capacidades que han sido adquiridas por los miembros del personal camboyano en el tribunal, al trabajar en casos complejos junto con expertos internacionales experimentados.

Se han realizado reuniones de intercambio de experiencias con los jueces nacionales en los tribunales ordinarios de Camboya para compartir experiencias y transferir conocimientos y habilidades¹²⁹⁴.

Desde antes del nombramiento de los jueces locales, las agencias de las Naciones Unidas hicieron varios cursos de capacitación a los jueces y abogados nacionales, pero esto no se exigió como requisito para los jueces que luego fueron designados, cuyas listas de candidatura no fueron publicadas con la rapidez que lo hizo las Naciones Unidas en cuanto a sus candidatos.

Pero existen serias dudas sobre la integridad, la capacidad y la independencia del sector judicial nacional que, a pesar de su estructura mixta, no ha contribuido en el desarrollo de la capacidad del sistema judicial nacional en general¹²⁹⁵.

El sector judicial, que fue aniquilado durante el gobierno de los Jemeres Rojos, sigue siendo propenso a la influencia política y a la corrupción, los operadores de justicia

los cuales murió en 2013 y otro fue declarado no apto para ser sometido a juicio. Los dos oficiales restantes fueron condenados en primera instancia a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad el 7 de febrero de 2014. Este caso se encuentra actualmente en proceso de apelación. Actualmente se están investigando dos casos más". ICTJ. S.F. Óp. Cit.

¹²⁹² JUSTICE Initiative. S.F. Óp. Cit. Página: 535

¹²⁹³ Ídem. Página: 533

¹²⁹⁴ Ídem. Página: 533

¹²⁹⁵ Ídem.

son criticados por su escasa capacidad técnica, por su resistencia al cambio y la influencia política que permiten que se ejerza sobre ellos.

A los jueces locales les ha sido casi imposible adherirse al estado de derecho, por falta de voluntad, y no han incluido en su función los conceptos de independencia judicial y derecho al debido proceso. Por lo que es un desafío para el Tribunal influir en la capacidad y la cultura judicial de la nación en ausencia de un cambio político más amplio¹²⁹⁶.

A pesar las dificultades, de las investigaciones adelantadas por las salas, según la información disponible se han proferido 3 sentencias condenatorias contra:

- a. Kaing Kech Leu, director del centro de interrogatorios, torturas y ejecuciones “Touls Leng”.
- b. Noun Chea, considerado como segundo en el poder después de Pol Pot.
- c. Khieu Samphan, considerado el jefe de estado de la Kampuchea Democrática.

Adicionalmente, otros seis procesados murieron en curso de la investigación sin condena y cursan otros tres casos.

Por todas estas razones fue imposible trasladar los casos a las salas locales, esto derivado de las recomendaciones de los donantes internacionales y los funcionarios de la ONU.¹²⁹⁷

La supervisión de las Salas se realiza por medio de procedimientos nacionales y de las Naciones Unidas, dependiendo si los funcionarios eran nacionales o internacionales. Debido a la continua información sobre corrupción, las Naciones Unidas y el gobierno de Camboya crearon la figura del consejero independiente con el fin de investigar estas acusaciones, sus informes no se han hecho públicos.¹²⁹⁸

¹²⁹⁶ JUSTICE Initiative. S.F. *Óp. Cit.*

¹²⁹⁷ Ídem. Página: 533

¹²⁹⁸ OPEN Society Justice Initiative. S.F. *Óp. Cit.* Página: 127

Uno de los grandes problemas ha sido la rendición de cuentas, no se han creado mecanismos uniformes de revisión de presupuesto, ni se han establecido claras responsabilidades fiscales, lo que ha producido los escándalos de corrupción.¹²⁹⁹

Luego de este completo estudio analítico en los aspectos que a mi juicio considere de mayor relevancia, se puede establecer que las Salas Extraordinarias de las Cortes de Camboya no han contribuido lo suficiente en la lucha contra la impunidad y fortalecimiento del estado de derecho, su legado se considerado como “inverso”, pese a sus repercusiones positivas, esto se debe al escepticismo popular, enraizado en relación a la independencia del sistema judicial local, debido al control del gobierno camboyano sobre los casos del tribunal y sobre la designación de jueces nacionales e internacionales lo que empeoró la percepción sobre el sistema judicial, aunque existía satisfacción sobre el trabajo de las Salas.¹³⁰⁰ Esto significa que se apoya el procesamiento de personajes con poder que cometieron los graves crímenes contra la población, aunque esta persecución no ha sido perfecta.

A continuación, se presenta de forma gráfica y sintética el trabajo realizado por las Salas Extraordinarias de las Cortes de Camboya.

		Mandato	Duración del Mandato	Cesación de los hechos que originaron el mandato	Inicio del primer juicio	Universo de casos	Casos procesados y/o relaciones procesales	Tiempo promedio de los casos	Casos pendientes de resolución	% Casos presentados versus casos resueltos	% Casos pasibles de procesamiento versus casos resueltos
1	Salas Extraordinarias de las Cortes de Camboya	Sancionar a los dirigentes de la Kampuchea Democrática considerados máximos responsables por los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y algunos crímenes de guerra	Tiempo indeterminado 14 años, no ha cerrado	1998	Marzo 2009	7	7	19 meses	3	57.14%	57.14%

¹²⁹⁹ OPEN Society Justice Initiative. S.F. *Óp. Cit.* Página: 129

¹³⁰⁰ Ídem. Página: 83

SUB - SECCIÓN A.4

TRIBUNALES PERMANENTES

Desde Naciones Unidas existen dos tribunales permanentes la Corte Internacional de Justicia destinada a conocer y resolver cualquier controversia de carácter internacional y a dar opinión consultiva respecto a cualquier cuestión o discrepancia de Derecho Internacional que se plantee ante el Consejo o la Asamblea General¹³⁰¹ y la Corte Penal Internacional, que es la nos atañe en este trabajo.

La Corte Penal Internacional, fue creada por las Naciones Unidas por medio de la Resolución 51/207 de 1996 de la Asamblea General¹³⁰², dando vida al Estatuto de Roma el 17 de julio de 1998.

El 1 de julio de 2002 iniciaron las operaciones de la Corte ¹³⁰³. Es el primer Tribunal Internacional que no se crea por algún conflicto en especial, además tener carácter permanente. El Estatuto de Roma¹³⁰⁴ des su preámbulo,¹³⁰⁵ es claro al declarar que tiene como objetivo ayudar a terminar con la impunidad de los perpetradores de los crímenes más graves relacionados con la Comunidad Internacional pero sin jurisdicción universal, sino únicamente en los Estados que han adoptado el Estatuto

¹³⁰¹ NACIONES Unidas, S.F. La Corte Permanente de Justicia Internacional. En: *Corte Internacional de Justicia* [en línea]. Disponible en: <https://www.un.org/es/ici/permanent.shtml> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

¹³⁰² “Los integrantes de la Asamblea decidieron celebrar una conferencia diplomática de plenipotenciarios para elaborar una convención o estatuto para establecer una Corte Penal Internacional. Dicha conferencia diplomática se celebró en el año 1998 en Roma, Italia, contando con la participación de 160 delegaciones de Estados. La Asamblea General también encargó a un Comité Preparatorio la elaboración de un texto, el cual fue discutido durante la conferencia y que dio como resultado el Estatuto de la Corte Penal Internacional, adoptado el 17 de julio. A pesar de haber surgido de la ONU, la Corte Penal Internacional es independiente y su sede se encuentra en la Haya, Países Bajos”. NACIONES Unidas. S.F. *Informe de la Corte Penal Internacional*. [en línea]. Disponible en: <https://www.un.org/es/ga/62/plenary/icc/bkg.shtml> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

¹³⁰³ Cuando el estatuto contaba con la adhesión de sesenta países.

¹³⁰⁴ La limitación espacial y temporal de su jurisdicción lo sitúa en la justa media. Ya que no es plenamente universal, al sólo vincular a aquellos Estados que han ratificado el Estatuto. La limitación territorial debe interpretarse en conexión con la cláusula de apertura de la jurisdicción de la Corte vinculada con los poderes atribuidos por el Estatuto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En el ámbito temporal de competencia la Corte conoce delitos cometidos después del 1 de julio de 2002, dejando así en la impunidad gran parte de las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron antes de esa fecha.

¹³⁰⁵ “...Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes...”

o para casos específicos que sean referidos por el Consejo de Seguridad, además su jurisdicción es de naturaleza complementaria por lo que no tiene una posición prevalente frente a las jurisdicciones internas¹³⁰⁶.

El Estatuto de Roma persigue poner fin a la impunidad, como lo afirma el Profesor Muhammed Tawfiq Ladan *“To boost the moral of the global movement against impunity, the ICC was created to offset the lack of willingness or ability of national authorities to mount domestic prosecutions and trials of perpetrators of serious crimes under international law”*¹³⁰⁷.

Indiscutiblemente la creación de la Corte Penal Internacional, se constituye en uno de los mecanismos de mayor relevancia en la lucha contra la impunidad dentro del Derecho Penal Internacional y es el resultado de una serie de esfuerzos y ensayos por erradicar la impunidad en la investigación de los graves delitos contra la humanidad que han golpeado al mundo. Si bien es cierto, no tiene carácter retroactivo, es un medio para prevenir en el futuro la repetición de las graves violaciones contra la humanidad.

¹³⁰⁶ **“Artículo 1. La Corte.** Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional (“la Corte”). La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.”

¹³⁰⁷ TAWFIQ LADAN, Muhammed. *Universal Jurisdiction and prosecution of international crimes: - Problems and Challenges* – A paper presented at 4th Training Course in International Criminal Justice and Administration. Nigerian Institute of Advanced Legal Studies Lagos. Página 2. November 2 – 6, 2009. [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

CAPÍTULO IX

CORTE PENAL INTERNACIONAL

ANTECEDENTES

La creación de la Corte Penal Internacional fue el resultado de años de trabajo por parte de sociedad civil, académicos, víctimas, diplomáticos y políticos que perseguían la creación del tribunal internacional, que conociera de los delitos internacionales de la misma naturaleza a los que habían sido juzgados desde el Tribunal Penal Internacional de Núremberg. El Estatuto de Roma, fue adoptado el 17 de julio de 1998 y enmendado según resolución RC/Res. 6 del 11 de junio del 2010, relativas al crimen de agresión y se considera como un paso muy importante de la lucha contra la impunidad desde las Naciones Unidas. Desde su nacimiento en el preámbulo se establece como objetivo es *"Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes"*.¹³⁰⁸

Su objetivo no es accidental sino intencional. El Estatuto de Roma, con su adhesión esencial a la complementariedad, afirma la primacía persistente de los gobiernos nacionales en la lucha contra la impunidad¹³⁰⁹.

Los mecanismos de justicia más inmediatos al Estatuto de Roma que originaron el establecimiento de la Corte Penal Internacional, son los tribunales establecidos en Núremberg y Tokio, que persiguieron y juzgaron a los criminales de guerra en Alemania y Japón ocurridos en la segunda Guerra Mundial.

Los sucesos de la primera Guerra Mundial dejaron como resultado la comisión de horribles crímenes que violentaron gravemente los derechos humanos, afectando

¹³⁰⁸ Estatuto de Roma que se distribuyó como documento A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, enmendado por los procès verbaux de 10 de noviembre de 1998, 12 de julio de 1999, 30 de noviembre de 1999, 8 de mayo de 2000, 17 de enero de 2001 y 16 de enero de 2002. El Estatuto entró en vigor el 1º de julio de 2002.

¹³⁰⁹ Lejos de desplazar a los tribunales nacionales, sobrecargados de procesos por delitos contra los principios básicos de la humanidad, la creación de un tribunal penal internacional permanente ha reafirmado la responsabilidad de los Estados de asegurar que se haga justicia por los delitos internacionales cometidos en su territorio (principio 19) y ha aumentado su capacidad de cumplir esta obligación.

en gran medida los países donde se dieron estos acontecimientos. Para enfrentar esa violación a los derechos humanos, (como ya sea desarrollado en el curso de este trabajo), con la ayuda de la comunidad internacional se establecieron diferentes tribunales ad hoc, que se encargarían de perseguir y enjuiciar a los presuntos responsables que intervinieron en esos hechos atroces. Sin embargo, en el transcurso del tiempo y el arribo de la segunda Guerra Mundial, las circunstancias se agravaron, por lo que era urgente y de especial importancia el establecimiento de un órgano internacional con carácter de permanencia, el cual tuviera facultades de enjuiciar a criminales que atentaran contra el derecho internacional y los derechos humanos.

El establecimiento de la Corte Penal Internacional tuvo sus mayores avances como consecuencia de los graves acontecimientos de genocidio ocurridos en la ex Yugoslavia y Ruanda ente 1991 y 1995, estos hechos trágicos que vulneraron los derechos humanos y los avances que se tenían en materia de derecho internacional y derechos humanos propiciaron que se celebrara la conferencia Diplomática en la ciudad de Roma, en la que se suscribió un acta el 17 de julio de 1998 en la que se acordó establecer la creación de una Corte Penal Internacional¹³¹⁰.

La Corte Penal Internacional es el primer órgano judicial internacional con carácter permanente¹³¹¹ delegado para investigar y sancionar los crímenes que atentan contra el derecho internacional entre los que se encuentran los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión.

1. ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ FUE CREADA?

La Corte Penal Internacional nace de la necesidad de contar con un organismo internacional, con facultades para enjuiciar los graves crímenes que amenazan la seguridad, la paz, y el bienestar del género humano, tales como el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de agresión y crímenes de guerra. Calificados

¹³¹⁰ GOBIERNO de España, S.F. Corte Penal Internacional. En: *Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Corte Penal Internacional* [en línea]. Disponible en: [http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/NacionesUnidas/Paginas/CortePenalInternacional.aspx#:~:text=La%20Corte%20Penal%20Internacional%20\(CPI,crimen%20de%20agresi%C3%B3n%20en%20el](http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/NacionesUnidas/Paginas/CortePenalInternacional.aspx#:~:text=La%20Corte%20Penal%20Internacional%20(CPI,crimen%20de%20agresi%C3%B3n%20en%20el) [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

¹³¹¹ Ídem

como los crímenes más gravedad y por ende de trascendencia para la comunidad internacional, con el fin de poner fin a la impunidad de estos aberrantes hechos.

Fue creada como un órgano permanente, facultado para enjuiciar a las personas involucradas en crímenes ya referidos, tales como de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra y agresión que atentan contra el derecho internacional y derechos humanos. Su fin no es sólo condenar, sino desarrollar el derecho penal internacional, con el fin de evitar su repetición, pero sin desplazar la competencia de los estados parte en su obligación de afrontar esas investigaciones y condenar a los responsables de esas gravísimas destrucciones de la humanidad.

2. PAPEL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN SU CREACIÓN

La creación de la Corte Penal Internacional fue producto de años de esfuerzo de la comunidad internacional y la sociedad civil, sin el apoyo y esfuerzo de estas partes la Corte no se hubiese materializado.

Los Estados miembros de Naciones Unidas participaron activamente durante todo el proceso previo para su creación y posterior funcionamiento de la Corte, por medio de la realización de un trabajo preparatorio para poder concretar su creación. Las Naciones Unidas, durante la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios creó la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional, por medio de la resolución 53/105 de la Asamblea General de fecha 8 de diciembre de 1998, en cumplimiento de la resolución del Acta Final de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas, que adoptó el Estatuto de Roma de la Corte Penal del 17 de julio de 1998¹³¹².

Dicha Comisión funcionó hasta el año 2002, con esta los Estados parte garantizaron la implementación y funcionamiento de la Corte de manera técnica, siendo conocidas, debatidas y aprobadas las propuestas en la Asamblea General.

Los Estados parte aseguraron su participación, incluyendo como parte del Estatuto la asignación de un representante en la Asamblea, quien podrá acompañarse de sus

¹³¹² NACIONES Unidas. 2003. Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional. *En: Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional* [en línea]. Disponible en: <https://www.un.org/spanish/law/icc/prepcomm/prepfra.htm> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

suplentes y asesores, la Asamblea podrá evaluar y aceptar conforme a las recomendaciones de la Comisión preparatoria. También podrá ejercer supervisiones a la presidencia, a la fiscalía y a la Secretaría en temas relacionados con la administración de la Corte, el presupuesto y la cooperación, la asamblea también podrá entre otros aprobar su propio reglamento.¹³¹³

3. ¿CÓMO SE ABORDÓ EL TEMA DE LA SOBERANÍA?

La soberanía de los Estados ya no es un tema en discusión al momento de crear el Estatuto de Roma, para 1998 el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Público, ya contaban con suficiente desarrollo en el tema de Derecho de los Tratados. El Estatuto de Roma al igual que el resto de Tratados y Convenios internacionales debe ser aceptado y ratificado por los Estados para poder tener jurisdicción sobre estos, por lo tanto, el Estado ejerciendo su plena soberanía es quien decide si lo acepta o no. Si lo hace de forma parcial o total y hace o no reservas sobre puntos específicos de su contenido.

El Estatuto de Roma solamente es competente para los Estados que lo han aceptado y ratificado y por acuerdo especial a la luz del artículo 4. 2. en cualquier estado.

4. TIPO DE GOBIERNO ¿DEMOCRACIA?

Normalmente los Estados que han ratificado el Estatuto de Roma cuentan con gobiernos elegidos democráticamente, que deciden en ejercicio libre de sus facultades ratificar el Estatuto para que la Corte Penal Internacional tenga competencia en su territorio y actuar cuando la justicia interna no hace justicia.

Países como Estados Unidos, Rusia, China, Pakistán, Turquía, Israel, Cuba y Nicaragua por diferentes motivos a la fecha no lo han ratificado. De estos solo China y Cuba no tienen un gobierno democrático.

¹³¹³ ESTATUTO de Roma de la Corte Penal Intencional, *Óp. Cit.* Artículo 112.

5. ¿ESTADO DE DERECHO?

Los países que han aprobado el Estatuto de Roma en su mayoría viven bajo el estado de derecho, tienen un sistema jurídico ordenado y estructurado, con un sistema de justicia independiente y la Corte únicamente puede ejercer su jurisdicción en los casos de su competencia cuando el sistema interno ha resultado ineficaz.

La Corte Penal Internacional ha asumido la competencia en casos de Uganda, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Sudán y ha seguido de cerca la coyuntura de Afganistán, Georgia, Costa de Marfil, Palestina, Guinea, Colombia y Venezuela¹³¹⁴. Pero esto no significa de ninguna manera que sea de los únicos países de los cuales lo hará, porque la corte si tiene la competencia la puede ejercer en los estados partes o en uso del mecanismo especial, en momento que las exigencias legales y circunstancias así lo permitan.

En los países en los cuales ya ha asumido su competencia, tiene como característica común que se ha cuestionado la democracia y el estado de derecho.

6. ¿ORIGEN BASADO EN CIERTAS SUPOSICIONES O CONDICIONES FÁCTICAS?

El origen de la corte está basado en suposiciones y condiciones fácticas, debido a que la creación de la corte, se derivó de la necesidad de dar solución con un sistema permanente, a todas las atrocidades cometidas desde que fueron creados los tribunales Núremberg hasta Sierra Leona y de los diversos esfuerzos realizados para combatir la impunidad en esos casos.

También su creación se debe a los gravísimos hechos de su competencia que puedan suceder en el futuro, lo que los convierte en una suposición fáctica. Por eso se dice que su origen se basa tanto en suposiciones como condiciones fácticas.

¹³¹⁴ MOLANO ROJAS, Andrés. 2010. Casos de Intervención de la Corte Penal Internacional. En: *Revista Estudios en Seguridad y Defensa* [en línea]. Colombia: Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales, Vol. 5, No. 9, páginas 22. 39 Sin: 1900-83-25. [Consulta: 10 de diciembre de 2020] Disponible en: <https://esdeguerevistacientifica.edu.co/index.php/estudios/article/view/100/190>

7. DOCUMENTO CREADOR

La Corte Penal Internacional, fue creada mediante el Estatuto de Roma, en el que se suscribió un acta de fecha 17 de julio de 1998 y tuvo enmiendas el 10 de noviembre de 1998, 12 de julio de 1999, 30 de noviembre de 1999, 8 de mayo de 2000, 17 de enero de 2001 y 16 de enero de 2002 y entró en vigor el 1o de julio de 2002¹³¹⁵ y se enmendó en el 11 de junio del 2010, según Resolución RC/Res. 6.

8. MANDATO

El Estatuto de Roma que instauro la implementación de la Corte Penal internacional con facultades para enjuiciar crímenes de lesa humanidad, genocidios, crímenes de guerra y agresión, en sus 128 artículos regula sus trece partes¹³¹⁶.

La primera parte está integrada por los primeros cuatro artículos que abordan el establecimiento de la Corte¹³¹⁷. En la segunda parte integrada del artículo 5 hasta el 21, engloba lo relativo a los delitos de su competencia, admisibilidad y el derecho aplicable, entre lo que resalta la competencia para juzgar crímenes como el Genocidio, Crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión.

¹³¹⁵ ESTATUTO de Roma de la Corte Penal Intencional, *Óp. Cit.*

¹³¹⁶ “Estatuto de Roma de la Corte Penal Intencional, de 17 de julio de 1998, enmendado por los procès-verbaux de 10 de noviembre de 1998, 12 de julio de 1999, 30 de noviembre de 1999, 8 de mayo de 2000, 17 de enero de 2001 y 16 de enero de 2002. El Estatuto entró en vigor el 1o de julio de 2002. Roma Italia”. Ídem.

¹³¹⁷ “Artículo 1. **La Corte:** Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional (“la Corte”). La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.

Artículo 2. **Relación de la Corte con las Naciones Unidas:** La Corte estará vinculada con las Naciones Unidas por un acuerdo que deberá aprobar la Asamblea de los Estados Partes en el presente Estatuto y concluir luego el Presidente de la Corte en nombre de ésta.

Artículo 3. **Sede de la Corte**

1. La sede de la Corte estará en La Haya, Países Bajos (“el Estado anfitrión”).

2. La Corte concertará con el Estado anfitrión un acuerdo relativo a la sede que deberá aprobar la Asamblea de los Estados Partes y concluir luego el Presidente de la Corte en nombre de ésta.

3. La Corte podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando lo considere conveniente, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto.

Artículo 4. **Condición jurídica y atribuciones de la Corte**

1. La Corte tendrá personalidad jurídica internacional. Tendrá también la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos.

2. La Corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto en el territorio de cualquier Estado Parte y, por acuerdo especial, en el territorio de cualquier otro Estado”. ESTATUTO de Roma de la Corte Penal Intencional, *Óp. Cit.*

La tercera parte del Estatuto se integra del artículo 22 al 33 en el que se abordan los principios generales del derecho penal tales como, ningún delito y ninguna pena sin ley previa, *“Irretroactividad ratione personae, La responsabilidad penal individual, la exclusión de menores de 18 años de la competencia de la Corte, Improcedencia del Cargo oficial, la responsabilidad de los jefes y otros superiores, la imprescriptibilidad, el elemento de intencionalidad, circunstancia eximentes de la responsabilidad penal, el error de hecho o error de derecho y órdenes superiores y disposiciones legales”*¹³¹⁸.

La cuarta parte la integra los artículos del 34 al 52, que establecen la *“composición y administración de la Corte, desde los órganos que componen la Corte, el desempeño del cargo de magistrado, condiciones que han de reunir los magistrados, candidaturas y elecciones de los magistrados, las vacantes, la presidencia, las Salas, la independencia de los magistrados, dispensa y recusación de magistrados, la fiscalía, la secretaría, el personal, la promesa solemne, separación del cargo, medidas disciplinarias, privilegios e inmunidades, sueldos, estipendios y dietas, idiomas oficiales y de trabajo, reglas de procedimiento y prueba, así como el reglamento dela Corte.”*¹³¹⁹

En la quinta parte de los artículos del 53 al 61, que tratan lo relativo a la *“investigación y el enjuiciamiento, desde el inicio de la investigación, las funciones y atribuciones del fiscal con respecto a las investigaciones, los derechos de las personas durante la investigación, las disposiciones que pueden adoptar las Salas en cuestiones preliminares cuando proceda una única oportunidad, las funciones y atribuciones de la Sala de Cuestiones preliminares, las órdenes de detención o comparecencia dictada por la sala de cuestiones preliminares, los procedimientos de detención en el Estado donde se debe ejecutar, las primeras diligencias de la Corte, y la confirmación de los cargos antes del juicio”*¹³²⁰.

La sexta parte comprendida de los artículos del 62 al 76 que trata lo relativo al juicio, desde el lugar, *“presencia del acusado en el juicio, funciones y atribuciones de la Sala de primera instancia, los procedimientos en caso de declaración de culpabilidad, la presunción de inocencia, los derechos del acusado, protección de las víctimas y*

¹³¹⁸ ESTATUTO de Roma de la Corte Penal Intencional, *Óp. Cit.*

¹³¹⁹ *Ídem.*

¹³²⁰ *Ídem.*

*testigos, practica de las pruebas, delitos contra la administración de justicia, sanciones por faltas de conducta en la Corte, protección de información que afecte a la seguridad nacional, información o documentos de terceros, requisitos para el fallo, reparación a las víctimas y fallo condenatorio*¹³²¹.

La séptima parte se integra de los artículos 77, 78, 79 y 80, los cuales tratan lo relativo a las penas, desde las penas aplicables, imposición de la pena, fondo fiduciario y el Estatuto, la aplicación de penas por los países y la legislación nacional, respectivamente.

En la octava parte del estatuto comprendido en los artículos 81, 82, 83, 84 y 85, los cuales abordan lo relativo a *la “apelación y la revisión, desde la apelación del fallo condenatorio o absolutorio o de la pena, la apelación de otras decisiones, el proveimiento de apelación, la revisión del fallo condenatorio o de la pena y a indemnización del detenido o condenado, respectivamente*¹³²².

La novena parte relativa a la cooperación internacional y la asistencia judicial, está comprendida desde los artículos 86 hasta el 102, que tratan la *“obligación general de cooperar, las solicitudes de cooperación, los procedimientos aplicables en el derecho interno, la entrega de personas a la Corte, las solicitudes concurrentes, el contenido de la solicitud de detención y entrega, la detención provisional, las otras formas de cooperación, el aplazamiento de la ejecución de una solicitud de ausencia con respecto a una investigación o un enjuiciamiento en curso, el aplazamiento de la ejecución de una solicitud por haberse impugnado la admisibilidad de la causa, el contenido de la solicitud relativa a otras formas de asistencia de conformidad con el artículo 93, consultas con la Corte, la cooperación con respecto a la renuncia a la inmunidad y consentimiento a la entrega, el cumplimiento de las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 93 y 96, lo relativo a los gastos, el principio de la especialidad y los términos empleados*¹³²³.

La décima parte comprendida de los artículos 103 al 111, que trata lo referente a la ejecución de la pena, en las que tenemos las funciones de los *“Estados en la ejecución de las penas privativas de libertad, el cambio en la designación del Estado*

¹³²¹ ESTATUTO de Roma de la Corte Penal Intencional, Óp. Cit.

¹³²² Ídem.

¹³²³ Ídem.

*de ejecución, la ejecución de la pena, la supervisión de la ejecución de la pena y condiciones de reclusión, el traslado una vez cumplida la pena, las limitaciones al enjuiciamiento la sanción por otros delitos, ejecución de multas y ordenes de decomiso, examen de una reducción de la pena y la evasión*¹³²⁴.

La onceava parte del estatuto en relación a la asamblea de los Estados parte, está contenida en el artículo 112.

La doceava parte de los artículos 113 hasta al 118 que se refiere a la financiación de la corte.

La última parte que desarrolla las cláusulas finales, en las que se mencionan las soluciones de controversia, las reservas, las enmiendas, las *“enmiendas a disposiciones de carácter institucional, la revisión del Estatuto, las disposiciones de transición, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la entrada en vigor, la denuncia y los textos auténticos”*¹³²⁵.

A. OBJETIVOS

Los objetivos de la Corte quedaron plasmados en el preámbulo de manera dispersa, sin una codificación específica donde se indique directamente cuales son esos objetivos, pero que los podemos deducir así: *“Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que a tal fin,...”*; *“Decididos a poner fin a la impunidad de los actores de esos crímenes y contribuir así a la prevención de nuevos crímenes”*; *“Decididos, a los efectos de la consecución de esos fines y en interés de las generaciones presentes y futuras...”*; *“Decididos a garantizar que la justicia internacional sea respetada y puesta en práctica en forma duradera,...”*¹³²⁶ y en el artículo 1 del Estatuto de forma un poco más concreta, se consigna que será una institución permanente, facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas a quienes se considera presuntas responsables de la comisión de *“crímenes más graves de trascendencia internacional, con carácter complementario”*¹³²⁷.

¹³²⁴ ESTATUTO de Roma de la Corte Penal Internacional, *Óp. Cit.*

¹³²⁵ *Ídem.*

¹³²⁶ *Ídem.*

¹³²⁷ *Ídem.*

B. ALCANCES DEL MANDATO

Lo trascendente del mandato de la Corte Penal Internacional es y su calidad de permanente y que puede actuar en todos aquellos países que hayan ratificado su jurisdicción y en donde se hayan cometido crímenes de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión y la justicia interna del país no hubiera tenido la capacidad de hacer justicia eficaz y efectiva. Igualmente, de manera excepcional y especial puede asumir competencia en estados que si bien no integran los estados parte, si se pide su intervención.

C. COMPETENCIA

En el Estatuto de Roma se establece desde su preámbulo que el organismo internacional *“tiene competencia sobre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad Internacional en su conjunto”*¹³²⁸.

La Corte Penal Internacional únicamente conoce de los crímenes más graves de trascendencia internacional, para de las investigaciones deducir las posibles responsabilidades individuales, en el marco de los crímenes que puede juzgar, donde se encuentran, como ya se ha desarrollado en otros apartes, los crímenes que constituyen: genocidio, los de lesa humanidad, los de guerra y los de agresión. Cada uno de estas gravísimas violaciones al derecho internacional humanitario está debidamente definido en el estatuto, con la identificación de las acciones criminales que constituyen cada uno de ellos en sus diferentes modalidades, para cumplir con el presupuesto de la tipicidad. Frente a este último delito de agresión, establecido en el artículo 5 literal d) del estatuto, se desarrolló en la enmienda al estatuto del 11 de junio de 2010, que adiciona entre otros los artículos 8BIS, 15 BIS y 15 TER.

D. FORTALEZAS

Entre las fortalezas de la Corte Penal Internacional se encuentran:

- a. Es un órgano permanente.
- b. Con presupuesto fijo asignado.

¹³²⁸ ESTATUTO de Roma de la Corte Penal Internacional, *Óp. Cit.*

- c. Autorizada para ejercer jurisdicción respecto a las personas posiblemente responsables de cometer crímenes graves de trascendencia internacional.
- d. Está sujeta a Naciones Unidas.

Estas circunstancias dan seguridad jurídica y operativa para que la Corte pueda desarrollar su trabajo.

E. REGLAS DE ADMISIBILIDAD

En el Estatuto de Roma, se establecen las reglas de admisibilidad de los casos, pero dentro de estas se puede inferir las siguientes:

- vii. *Ratione Personae*: este es aplicable a las personas responsables de la comisión de crímenes que atentan gravemente al derecho internacional humanitario¹³²⁹, también fue considerada como responsabilidad penal individual de acuerdo con lo estipulado en el artículo 25 del Estatuto, es decir la competencia es respecto a las personas naturales.
- viii. *Ratione Materiae*: la corte está facultada para conocer los crímenes que atentan contra los derechos humanos, como el genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión¹³³⁰
- ix. *Ratione Temporis*: La Corte únicamente tiene competencia para investigar los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto. El artículo 11 del Estatuto literalmente reza “*Si un Estado se hace Parte en el presente Estatuto después de su entrada en vigor, la Corte podrá ejercer su competencia únicamente con respecto a los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto respecto de ese Estado, a menos que éste haya hecho una declaración de conformidad con el párrafo 3 del artículo 12*”¹³³¹

¹³²⁹ ESTATUTO de Roma de la Corte Penal Intencional, *Óp. Cit.* Artículo 5

¹³³⁰ Ídem. Artículo 5

¹³³¹ Ídem. Artículo 11

- x. *Ratione Loci*: Sólo se aplicó para los crímenes cometidos en los Estados parte¹³³², es decir en los Estados que son parte o se adhieran a ratificar el Estatuto.¹³³³

F. TIEMPO DETERMINADO

El Estatuto de Roma, es un órgano creado con carácter de permanente, a diferencia de los tribunales internacionales creados con anterioridad, conoce de todos los crímenes competidos a partir de su vigencia el 1 de julio de 2002.

G. DISTRIBUCIÓN DEL PODER.

La Corte Penal Internacional, se constituye por 4 órganos¹³³⁴, siendo estos la primera presidencia, la segunda conformada por la sección de apelaciones, la sección de Primera Instancia y la sección de cuestiones preliminares, la tercera por la fiscalía y la cuarta y última por la secretaría.

La presidencia está integrada por el presidente, el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente, y su mandato tiene un periodo de 3 años. Quienes pueden ser reelegidos una sola vez. El presidente será sustituido por el primer vicepresidente cuando se encuentre imposibilitado para ejercer el cargo y el segundo vicepresidente sustituye al presidente cuando el presidente y primer vicepresidente se encuentren imposibilitados para ejercer el cargo.

La sección de apelaciones se integra por el presidente y otros 4 magistrados. La sección de primera instancia y la sección de cuestiones preliminares se integran por no menos de 6 magistrados cada una.

¹³³² “**Artículo 13. Ejercicio de la competencia**

La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si:

a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo 14, una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes;

b) El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; o

c) El Fiscal ha iniciado una investigación respecto de un crimen de ese tipo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15”. ESTATUTO de Roma de la Corte Penal Intencional, Óp. Cit.

¹³³³ Ídem. Artículo 12

¹³³⁴ Ídem. Artículo 34

“La Fiscalía actuará en forma independiente como órgano separado de la Corte. Estará encargada de recibir remisiones e información corroborada sobre crímenes de la competencia de la Corte para examinarlas y realizar investigaciones o ejercitar la acción penal ante la Corte. Los miembros de la Fiscalía no solicitarán ni cumplirán instrucciones de fuentes ajenas a la Corte”¹³³⁵, esta está dirigida por el fiscal.

La secretaría, estará a cargo de un secretario quien sin perjuicio de las funciones del Fiscal se encargará de los *“aspectos no judiciales de la administración de la Corte. Para el resto del personal es nombrado por el fiscal y el secretario quienes eligen los funcionarios que sean necesarios para sus respectivas oficinas”¹³³⁶.*

9. ¿SURGIÓ COMO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES?

A. ¿HABÍA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL?

Los delitos que juzga la Corte Penal Internacional en esencia son resultado del desarrollo y reconocimiento de la responsabilidad internacional de los estados por la comisión de los delitos tipificados en el Estatuto de Roma y que son catalogados como graves atrocidades cometidas en contra de las personas. Sin embargo, se juzga la responsabilidad personal de las personas en cuanto a la comisión de los delitos.

B. OBLIGACIONES INTERNACIONALES

Definitivamente existen obligaciones internacionales desde antes del Estatuto y las que adquieren por medio de la ratificación de este. Pero estas obligaciones de los Estados son en cuanto al cumplimiento del Estatuto no se relacionan con los fallos que la Corte emite, debido a que las sentencias reflejan la responsabilidad individual, pero los estados adquieren obligaciones de carácter internacional en el curso de la investigación y para el cumplimiento de la sentencia.

¹³³⁵ ESTATUTO de Roma de la Corte Penal Internacional, *Óp. Cit.* Artículo 42

¹³³⁶ *Ídem.*

C. ¿ABORDA HECHOS ILÍCITOS INTERNACIONALES?

Sí los aborda debido a que los Estados violan las obligaciones internacionales al no investigar.

10. COOPERACIÓN DE LOS ESTADOS.

A diferencia de los Tribunales que anteceden a la Corte Penal Internacional, la cooperación internacional para la Corte en materia de gastos quedo contemplado en el Estatuto de Roma, en donde se determinó que la cooperación entre la Corte Penal Internacional y los Estados parte, va desde las contribuciones para sufragar los costos, hasta la cooperación para facilitar el proceso investigativo y de enjuiciamiento de acuerdo a los crímenes que se investigan y que la Corte tiene competencia.

Desde el derecho interno de cada Estado, deben contribuir con las solicitudes que realiza la Corte en asistencia para la investigación y enjuiciamiento penales en relación a los crímenes en los que la Corte es competente, esto con el objeto que mediante esta cooperación se pueda identificar y buscar personas y todo lo elementos que contribuya al proceso investigativo, así como recibir testimonios bajo juramento que tengan relación con los crímenes cometidos, facilitar la comparecencia voluntaria ante la Corte según sea el caso, la protección de víctimas y testigos para preservar las pruebas, entre otras¹³³⁷.

“Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto, cooperarán plenamente con la Corte en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia”¹³³⁸.

Dentro de la cooperación que se puede dar entre los Estados Parte con la Corte Penal Internacional también esta lo referente a la renuncia de inmunidad y consentimiento de entrega para lo cual el artículo 98 del estatuto de Roma literalmente reza:

“1. La Corte no dará curso a una solicitud de entrega o de asistencia en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga el derecho internacional con respecto a la inmunidad de un Estado o la

¹³³⁷ ESTATUTO de Roma de la Corte Penal Intencional, *Óp. Cit.* Artículo 93

¹³³⁸ Ídem. Artículo 86

inmunidad diplomática de una persona o un bien de un tercer Estado, salvo que la Corte obtenga anteriormente la cooperación de ese tercer Estado para la renuncia a la inmunidad.

2. La Corte no dará curso a una solicitud de entrega en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga un acuerdo internacional conforme al cual se requiera el consentimiento del Estado que envíe para entregar a la Corte a una persona sujeta a la jurisdicción de ese Estado, a menos que ésta obtenga primero la cooperación del Estado que envíe para que dé su consentimiento a la entrega.”¹³³⁹

11. INDEPENDENCIA

En cuanto a la independencia, la Corte Penal posee independencia funcional, los Jueces y el fiscal son independientes entre sí. Son electos en la Asamblea General de Naciones Unidas, propuestos por los estados partes, para lo cual los candidatos deben llenar los requisitos determinados en los artículos 35, 36, 40 y 42 del Estatuto de Roma.

12. SELECCIÓN DE ACTORES

En este caso la selección de actores está consagrada en el Estatuto al determinar que se perseguirá a las personas individuales es decir naturales¹³⁴⁰ pertenecientes a

¹³³⁹ ESTATUTO de Roma de la Corte Penal Intencional, Óp. Cit. Artículo 98

¹³⁴⁰ “**Artículo 25. Responsabilidad penal individual**

1. De conformidad con el presente Estatuto, la Corte tendrá competencia respecto de las personas naturales.

2. Quien cometa un crimen de la competencia de la Corte será responsable individualmente y podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto.

3. De conformidad con el presente Estatuto, será penalmente responsable y podrá ser penado por la comisión de un crimen de la competencia de la Corte quien:

a) Cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea éste o no penalmente responsable;

b) Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa;

c) Con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministrando los medios para su comisión;

d) Contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común. La contribución deberá ser intencional y se hará:

i) Con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo, cuando una u otro entrañe la comisión de un crimen de la competencia de la Corte; o

ii) A sabiendas de que el grupo tiene la intención de cometer el crimen;

e) Respecto del crimen de genocidio, haga una instigación directa y pública a que se cometa;

los Estados parte del Estatuto, que hayan cometido crímenes de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión, y cada una de las conductas o variantes que se tipifican en estos grupos delictivos.

En cuanto a las personas naturales que fueran responsables de la comisión de cualquier crimen contenido en el Estatuto, estos pueden ser investigados y enjuiciados según las competencias de la Corte Penal Internacional, sin importar su rango, puesto u ocupación, es decir, que pueden ser sujetos, los militares, políticos, empresarios, policías, etc., siempre y cuando no se vulnere ninguna norma de derecho interno de cada Estado parte, como lo establece el artículo 26 del Estatuto, que excluye a los menores de 18 años.

Además, se delimita claramente quienes son las personas que intervienen en el proceso, siendo estos el equipo de la fiscalía, los jueces en su instancia correspondiente, la secretaría de la Corte y el defensor, en ningún caso intervienen los Estados parte por medio de sus representantes.

13. NORMATIVA RELEVANTE Y MARCO PROCEDIMENTAL

El Estatuto de Roma es el instrumento marco de operación de la Corte Penal Internacional, pero el trabajo de la Corte se apoya también en las reglas de procedimiento y evidencia, elementos de delito, reglamento de la Corte, reglamento de la Oficina del Fiscal, reglamento del registro, código profesional de conducta, código ético judicial, el Manual Práctico de las Cámaras, reglamento del Staff, reglamento del Staff de la Corte Penal Internacional, Reglas y regulaciones de financiamiento, Acuerdo de Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, Acuerdo entre la Corte Penal Internacional y Naciones Unidas, Acuerdo de la Sede y el Estado Anfitrión.

f) Intente cometer ese crimen mediante actos que supongan un paso importante para su ejecución, aunque el crimen no se consume debido a circunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo, quien desista de la comisión del crimen o impida de otra forma que se consume no podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto por la tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al propósito delictivo.

4. Nada de lo dispuesto en el presente Estatuto respecto de la responsabilidad penal de las personas naturales afectará a la responsabilidad del Estado conforme al derecho internacional". ESTATUTO de Roma de la Corte Penal Intencional, Óp. Cit.

Las Reglas de prueba y procedimiento de la Corte Penal Internacional constan de 225 reglas, fueron adoptadas entre el 3 y 10 de septiembre de 2002, están divididas en 12 capítulos, los cuales a su vez se dividen en secciones.

El Capítulo 1 contiene las disposiciones generales que se encuentran en las reglas 1 a la 3.

El Capítulo 2, se divide en 5 secciones este capítulo desarrolla lo relativo a la composición y administración de la Corte. La primera sección se compone de las reglas 4 a la 8 y se encarga de establecer las disposiciones generales para la composición de la corte. La segunda sección establece las reglas a seguir para el funcionamiento y composición de la Fiscalía de la regla 9 a la 11.

La tercera sección la conforman las reglas 12 a la 22 que se subdivide en 3 subsecciones, esta sección se encarga de establecer las directrices para la secretaria de la Corte. La primera subsección la conforman las reglas 12 a la 15 y establece las disposiciones generales para la conformación y funcionamiento de la secretaria. La segunda subsección la conforman las reglas 16 a la 19, esta subsección se encarga de indicar las funciones de la dependencia de las víctimas y testigos. La tercera subsección se conforma de las reglas 20 a la 22 y en esta se desarrolla lo relativo a los abogados defensores y su relación con a la secretaria de la corte.

La cuarta sección se encarga de establecer las reglas para los casos en que se pueda afectar el funcionamiento de la Corte, esta se compone de las reglas 23 a la 39 que se encuentran distribuidas en 5 subsecciones. La primera subsección se encarga de señalar las causales para la separación del cargo y las medidas disciplinarias a tomar, de la regla 23 a la regla 32. La segunda subsección se conforma de las reglas 33 a la 37 y señala el proceso a seguir en caso de dispensa recusación, fallecimiento y dimisión de algún magistrado de la Corte, fiscal, fiscal adjunto, secretario o secretario adjunto. La subsección tercera se encarga de regular lo relativo a los magistrados suplentes y sustituciones de la regla 38 a la 39.

La quinta sección la conforman las reglas 40 a la 43, en esta se desarrolla lo relativo a las publicaciones, idiomas y traducción.

El Capítulo 3 se encarga de regular la competencia y admisibilidad. Este se compone de 3 secciones y la conforman las reglas 44 a la 62. La primera sección se encarga

de regular declaraciones y remisiones en relación con el artículo 11,12 y 13, se compone de las reglas 44 y 45. La segunda sección está conformada por las reglas 46 a la 50, que se encargan de establecer el mecanismo a seguir al iniciar una investigación de conformidad con el artículo 15. La tercera sección se encarga de indicar cuales son las impugnaciones y decisiones preliminares de conformidad con el artículo 17,18 y 19 en las reglas 51 a la 62.

El Capítulo 4 lo conforman las reglas 63 a la 103 y se encuentran distribuidos en 04 secciones, en este capítulo se encuentran las reglas para diferentes etapas del procedimiento. La primera sección regula la prueba y sus diferentes incidencias de la regla 63 a la 75. La segunda sección la conforman las reglas 76 a la 84 y se encarga de regular la forma de divulgación de documentos o información.

La tercera sección establece las reglas para el trato y protección de las víctimas y testigos, esta se conforma por las reglas 85 a la 99 que se encuentran distribuidos en 4 subsecciones. La primera subsección se encarga de regular y definir que debe comprenderse como víctima en las reglas 85 y 86. La segunda subsección la conforman las reglas 87 y 88, en ellas se establecen las formas de protección de víctimas y testigos. La tercera subsección regula la participación de las víctimas en el proceso en las reglas 89 a la 93. La cuarta subsección la conforman las reglas 94 a la 99 y se encarga de señalar el proceso para la reparación a las víctimas.

La cuarta sección establece las disposiciones finales aplicables a las víctimas y testigos en las reglas 100 a la 103.

El Capítulo 5 se compone de 6 secciones que contiene las reglas de la 104 a la 130 en donde se establecen las reglas a seguir en la investigación y el enjuiciamiento, este capítulo se divide en 6 secciones. La primera sección regula la decisión del fiscal del inicio de una investigación de conformidad con el párrafo 1 y 2 del artículo 53. La segunda sección se conforma de las reglas 107 a la 110 y regula el procedimiento de revisión de conformidad con el párrafo 3 del artículo 53. La tercera sección se encarga de regular los procedimientos para reunir pruebas en las reglas 111 a la 116. La cuarta sección se conforma de las reglas 117 a la 120 y se encargan de regular los procedimientos relativos a la restricción y privación de libertad. La quinta sección se encarga de las reglas para la confirmación de los cargos de conformidad con el

artículo 61 de la regla 121 a la 127. La sexta sección se conforma de las reglas 127 a la 130 y en ellas se regula la fase de conclusión previa al juicio.

El Capítulo 6 establece las reglas a seguir durante el juicio, se compone de las reglas 131 a la 144.

El Capítulo 7 establece las penas a imponer y lo conforman las reglas 145 a la 148.

El Capítulo 8 se encarga de señalar las reglas a seguir en la apelación y revisión. Este capítulo se divide en 4 secciones que lo conforman las reglas 149 a la 161. La primera sección establece las disposiciones generales para la apelación y revisión en la regla 149. La segunda sección se conforma de las reglas 150 a la 153 y se encarga de regular la apelación de la sentencia condenatorio o absolutoria, de la pena o de la decisión de otorgar reparación. La tercera sección regula la apelación de otras decisiones no previstas en la sección anterior y se conforma por las reglas 154 a la 158. La cuarta sección se conforma por las reglas 159 a la 161 en donde se regula la revisión de la sentencia condenatorio o de la pena.

El Capítulo 9 regula los delitos contra la administración de justicia y faltas de conducta ante la corte y se divide en 2 secciones que se conforman por las reglas de al 161 a la 172. La sección primera se encarga de regular los delitos en contra de la administración de justicia de conformidad con el artículo 70 y se conforma por las reglas 162 a la 169. La sección segunda se conforma por las reglas 170 a la 172 y se encarga de normar las faltas de conducta en la Corte con arreglo al artículo 71.

El capítulo 10 se encarga de establecer el proceso para la indemnización del detenido o condenado de la 173 a la 175.

El capítulo 11 se divide en secciones y se conforma de las reglas 176 a la 197. La primera sección regula las solicitudes de cooperación con arreglo al artículo 87 y se conforma de las reglas 176 a la 180. La segunda sección regula la entrega, tránsito y solicitud concurrentes con arreglo a los artículos 89 y 90 se conforma de las reglas a la 181 a la 186. La tercera sección se conforma de las reglas 187 a la 189 y establece los documentos a presentar en la solicitud de detención y arreglo a lo artículo 91 y 92. La cuarta sección se encarga de establecer las normas para la cooperación de conformidad con el artículo 93, de la regla 190 a la 194. La quinta sección se encarga de regular la cooperación de conformidad con el artículo 98 en la regla 195. La sección

sexta se encarga de regular la regla de la especialidad de conformidad con el artículo 101 en las reglas 196 y 197.

El Capítulo 12 se encarga de regular el tema de la ejecución de la pena y se compone de 6 secciones y lo conforman las reglas de la 198 a la 225. La primera sección de este capítulo se conforma por las reglas 198 a la 210 y se encarga de establecer la función de los Estados en la ejecución de penas privativas de libertad y cambio en la designación del Estado en la ejecución con arreglo a los artículos 103 y 104. La segunda sección se encarga de regular ejecución de la pena, supervisión y traslado con arreglo a los artículos 105, 106 y 107 conformada por las reglas 211 a la 213. La tercera sección se conforma de las reglas 214 a la 216 y se encarga de normar las limitaciones al enjuiciamiento o la sanción por otros delitos con arreglo al artículo 108. La cuarta sección se encarga de regular las ejecuciones de multas y ordenes de decomiso o reparación se conforma de las reglas 217 a la 223. La quinta sección se conforma de las reglas 223 y 224 y se encarga de establecer el procedimiento a seguir en caso de reducción de la pena con arreglo al artículo 110. La sexta sección regula las medidas aplicables en caso de evasión y lo regula en la regla 225.

14. LEGITIMIDAD:

Cuando se creó la Corte Penal Internacional, no existió cuestionamiento en cuanto al principio de legalidad o debido proceso, esto se puede explicar con base en el largo tiempo de desarrollo e implementación que se tenía del derecho penal internacional, el derecho internacional público y el derecho internacional de los derechos humanos.

La aplicación y reconocimiento del principio de legalidad en su doble dimensión de *nullum crimen sine lege* y *nullum crimen sine poena*, quizás sea lo más relevante del Estatuto de Roma, interpretación limitada¹³⁴¹ por el Estatuto de Roma y que debe estar en concordancia con el artículo 10 del Estatuto en donde el límite de

¹³⁴¹ FERNÁNDEZ DE GURMENDI, Silvia A. 2003. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: Extensión de los crímenes de guerra a los conflictos armados de carácter no internacional y otros desarrollos relativos al Derecho Internacional Humanitario. *Lecciones y Ensayos Número 78* [en línea]. Argentina: Departamento de Publicaciones, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, No. 78. Páginas: 391- 413. [Consulta: 10 de diciembre de 2020]. ISSN: 0024-0079. Disponible en: <http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/78/lecciones-y-ensayos-78-paginas-391-413.pdf>

interpretación se encuentra en no menoscabar la normativa existente o que el derecho internacional esté desarrollando.

15. JURISDICCIÓN

La jurisdicción de la Corte Penal Internacional quedó establecida en el artículo 1 del Estatuto de Roma, en donde se delimitó de la siguiente manera: *“estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales”*¹³⁴²

A. ¿QUIÉN PODÍA FORMAR PARTE DE UN CASO?

Las personas naturales mayores de 18 años sindicadas como posibles responsables de los crímenes contenidos en el Estatuto de Roma.

B. ¿QUÉ PROBLEMAS SE PODÍA DEBATIR?

Como se analizó en el desarrollo del presente capítulo, la Corte Penal Internacional, tiene la facultad de investigar los hechos relacionados a los crímenes graves que violenten el derecho internacional, tales como crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de agresión, así como crímenes de guerra y demás conductas que tengan relación estrecha con la comisión de estos crímenes. También podrían alegarse asuntos de competencia relacionados con la soberanía de los estados partes para la realización de las investigaciones, pero esto se soluciona desde el momento en que los estados acordaron la creación de la corte y de manera más específica con la ratificación del estatuto.

16. MECANISMOS DE IMPUGNACIÓN:

En el Estatuto de Roma se contemplaron como *MECANISMOS DE IMPUGNACIÓN* la apelación y la revisión, regulados de los artículos 81 a 84.

¹³⁴² ESTATUTO de Roma de la Corte Penal Intencional, *Óp. Cit.* Artículo 1

La apelación se puede realizar en contra del fallo condenatorio o absolutorio, del monto la pena, también se pueden apelar decisiones como de competencia, admisibilidad, la libertad, cuestiones preliminares y retardo.

El recurso de revisión procede en contra de la sentencia.

17. MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO

En el artículo 105 regula la ejecución de la pena y el artículo 106 de Estatuto contempla la supervisión de la ejecución de la pena y condiciones de reclusión, como mecanismos de cumplimiento establecidos.

18. RECURSOS DISPONIBLES

A. HUMANO:

La Corte Penal Internacional al año 2020 está integrada por más de 900 funcionarios que provienen de más de 100 Estado.¹³⁴³

B. MATERIAL:

Los recursos materiales con los que cuenta la Corte Penal Internacional consisten en 82 documentos que se conforman por medio de informes anuales, informes estrategias y de situaciones bajo investigación; 2,280 noticias de actividades.¹³⁴⁴

C. PRESUPUESTO ASIGNADO:

El presupuesto de la Corte Penal Internacional, se constituye de las cuotas de los Estados parte, *“fondos procedentes de las Naciones Unidas, con sujeción a la aprobación de la Asamblea General, en particular respecto de los gastos efectuados en relación con cuestiones remitidas por el Consejo de Seguridad”*¹³⁴⁵, de cuotas

¹³⁴³ CORTE Penal Internacional, S.F. Acerca de la Corte Penal Internacional: Presupuesto para 2020, Página 01. En: *Corte Penal Internacional* [en línea]. Disponible en: <https://www.icc-cpi.int/about> [Consulta: 12 de agosto de 2020].

¹³⁴⁴ CORTE Penal Internacional, S.F. Noticias de la Corte Penal Internacional, página 01. En: *Corte Penal Internacional* [en línea]. Disponible en: <https://www.icc-cpi.int/resource-library/pages/reports.aspx#Default=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#b608b611-065c-4721-bdaa-3e88e84a8dbc=%7B%22k%22%3A%22%22%7D> [Consulta: 12 de agosto de 2020].

¹³⁴⁵ ESTATUTO de Roma de la Corte Penal Intencional, *Óp. Cit.* Artículo 115

voluntarias que forman parte de los *“fondos adicionales, contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, sociedades y otras entidades, de conformidad con los criterios en la materia que adopte la Asamblea de los Estados Partes.”*¹³⁴⁶

La distribución de gastos de la Corte Penal Internacional se da de acuerdo con las circunstancias, en el caso que *“los gastos ordinarios que se deriven del cumplimiento de las solicitudes en el territorio del Estado requerido correrán a cargo de éste”*¹³⁴⁷, *con excepción de algunos que son responsabilidad de la corte”*.¹³⁴⁸

“Los gastos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Parte, incluidos los de su Mesa y órganos subsidiarios, se sufragarán con fondos de la Corte”.¹³⁴⁹ El presupuesto aprobada para el año 2020 es de € 149.205.600.¹³⁵⁰

19. EL PAPEL DE LA VÍCTIMA:

El Estatuto de Roma junto a los elementos de los crímenes, los reglamentos de la Corte, Fiscalía y Secretaría son el marco normativo que garantiza el derecho de las víctimas durante el proceso ante la Corte Penal Internacional.

El Estatuto de Roma no define el concepto víctima, sin embargo, lo desarrolla en la regla 85 de las Reglas de Procedimiento, en dicha definición se reconoce víctimas a personas físicas, organización en instituciones que puedan demostrar que fueron afectadas o sufrieron un daño.

¹³⁴⁶ ESTATUTO de Roma de la Corte Penal Intencional, *Óp. Cit.* Artículo 116

¹³⁴⁷ Ídem. Artículo 100

¹³⁴⁸ *“a) Gastos relacionados con el viaje y la seguridad de los testigos y peritos, o el traslado, con arreglo al artículo 93, de personas detenidas;*

b) Gastos de traducción, interpretación y transcripción;

c) Gastos de viaje y dietas de los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario, el secretario adjunto y los funcionarios de cualquier órgano de la Corte;

d) Costo de los informes o dictámenes periciales solicitados por la Corte;

e) Gastos relacionados con el transporte de la persona que entregue a la Corte un Estado de detención;
y

f) Previa consulta, todos los gastos extraordinarios que puedan ser resultado del cumplimiento de una solicitud”. Ídem.

¹³⁴⁹ Ídem. Artículo 114

¹³⁵⁰ CORTE Penal Internacional, Acerca de la Corte Penal Internacional: Presupuesto para 2020, Página 01. En: *Corte Penal Internacional* [en línea]. Disponible en: <https://www.icc-cpi.int/about> [Consulta: 12 de agosto de 2020].

La víctima debe probar su identidad, la forma reconocida por la Corte Penal Internacional es por medio de documentos de identidad, los cuales no siempre están en poder de la víctima y a la mayoría se dificulta su obtención por la situación del país.

Cuando la sala reconoce a la víctima de acuerdo al artículo 85 de las Reglas de Procedimiento, las víctimas deben demostrar los intereses personales que se han visto afectados de acuerdo a lo establecido en el artículo 68.3 del Estatuto, la sala también califica la participación solicitada por la víctima que sea adecuada y coherente con el debido proceso. El estatus de víctima está condicionado a la consecución de requisitos previos contenidos en la regla 85 de las Reglas de Procedimiento y el artículo 68.3 del Estatuto de Roma.

Los derechos reconocidos a las víctimas son:

- a. El derecho de acceso a la justicia,
- b. Derecho a recibir la información pertinente,
- c. Derecho a protección y apoyo,
- d. Derecho a participación en actuaciones judiciales,
- e. Derecho a reparación por el daño sufrido.

La víctima tiene varias modalidades de participación, ésta debe iniciar por medio de una solicitud por escrito. El artículo 68.3 del Estatuto de Roma la faculta para presentar opiniones y observaciones cuando sus intereses se vean afectados, siempre que se respete el debido proceso y derecho de defensa para los acusados.

La víctima puede:

- a. Entregar al fiscal información para que de oficio inicie una investigación. La víctima debe ser notificada de la decisión.
- b. Una vez reconocida como víctima, puede participar en cada una de las etapas del proceso.
 - a. Examen Preliminar e Investigación Fiscal
 - b. Fase Preliminar
 - c. Juicio
 - d. Impugnación
 - e. Reparaciones

- c. Presentar observaciones sobre los procedimientos de impugnación de competencia, admisibilidad del caso, en relación a la reparación.
- d. Elegir y nombrar libremente a su representante legal, de acuerdo a lo establecido en la regla 22 de las Reglas de Procedimiento, quienes a su vez están vinculados a un Código de Conducta.

En todas las fases la víctima participa por medio de alegaciones escritas y orales cuando es pertinente.

Como se puede observar, la participación de la víctima es activa, aunque esta sólo puede actuar si está reconocida.

20. PERCEPCIÓN PÚBLICA:

La creación de la Corte Penal Internacional es el mayor avance en materia de desarrollo del Derecho Penal Internacional, tiene un presupuesto permanente, cuenta con personal y reglas de procedimiento bien establecidas. Sin embargo; es cuestionada por los usuarios, sociedad civil y académicos por los pocos casos tramitados y por ende pocos resultados en la necesidad de la garantía real de la protección de los derechos de las víctimas de esas gravísimas violaciones.

En adición, su lejanía con el territorio donde se han cometido las atrocidades hace que se perciba como una justicia lejana, en cuanto a la investigación en los Estados. Aún no se considera como un Tribunal exitoso en materia de persecución de los graves crímenes.

21. NÚMERO DE CASOS INGRESADOS

El primer informe de la Corte Penal Internacional de las actividades del 2004, indica que, aunque el Estatuto de la Corte entró en vigor en julio del 2002 las funciones judiciales iniciaron hasta el 2004. Debido a que en el 2003 entre marzo y julio tomaron posesión los Jueces, Fiscal y Registrador del tribunal. En ese período la corte desarrollo sus políticas administrativas y estableció su infraestructura. La actividad judicial inicio en las tres Salas de Cuestiones Preliminares ocupándose de los casos contra República Democrática del Congo, Darfur, Sudan, Uganda y República Centroafricana, además de haber recibido 1,300 comunicaciones que podrían ser parte de la jurisdicción de la Corte. El Fiscal ha iniciado investigaciones de 03 casos

Uganda, República Democrática del Congo, Darfur, Sudán; además, se encuentra monitoreando 08 situaciones incluidas las de Costa De Marfil y República Centroafricana. En el 2004 el Fiscal inicio investigaciones de la situación de República Democrática del Congo y Uganda.¹³⁵¹

El segundo informe de la Corte para el período comprendido entre el 01 de agosto de 2005 al 01 de agosto de 2006, las Salas de cuestiones preliminares, en ese período realizaron actividades relacionadas con las situaciones de los casos en la República Democrática del Congo, Uganda y Darfur, Sudán. En ese período en la Sala de Apelaciones tomaron posesión sus primeros jueces y le fueron presentadas las primeras apelaciones interlocutorias en relación con la revisión y apelación de decisiones de la Salas de cuestiones preliminares sobre jurisdicción y admisibilidad.

¹³⁵²

El tercer informe de la Corte señala que durante el período del 01 de agosto de 2006 al 01 agosto de 2007, se recibió las siguientes solicitudes: la Sala I de cuestiones preliminares de confirmar los cargos contra Lubanga Dyilo luego de las audiencias de confirmación de cargo llevadas a cabo 09 al 28 de noviembre de 2006- En la situación de Uganda la Sala II de cuestiones preliminares fue informada de la muerte de Raska Lukuiga, contra quien se había girado orden de detención, y decidir el estado del proceso en su contra una vez comprobado su informe. En el caso de Darfur la Sala recibió la solicitud de emitir 02 órdenes de detención por crímenes de guerra y lesa humanidad en contra de Ahmad Harun y Ali Kushayb.¹³⁵³

El cuarto informe de la Corte expone que durante el período comprendido entre el 01 de agosto de 2007 y el 31 de julio de 2008 las Salas de la Corte recibieron las siguientes solicitudes: 01 apelación en el caso contra Thomas Lubanga Dyilo por la decisión de liberarles, 01 solicitud de emitir una orden de arresto en contra de Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, 569 solicitudes de víctimas solicitado participar en los

¹³⁵¹ CORTE Penal Internacional, 2005. Primer Informe anual 2004. Página 03-05, 08-11. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/EDBEBEC0-7896-46EC-9AD6-7C867F67CF1B/278503/ICC_Report_to_UN.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹³⁵² CORTE Penal Internacional, 2006. Segundo Informe anual, Página 02-09. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/53692E4E-2B35-41BD-8B90-91828D55880A/278540/ICC_ReporttoUN_2006_English.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹³⁵³ CORTE Penal Internacional, 2007. Tercer Informe anual, Página 02-09. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: <https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/N0749457.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

procesos de casos en la República Democrática del Congo; en el caso de la situación en Uganda 157 víctimas también solicitado participar en los procesos.¹³⁵⁴

El quinto informe de la Corte expone que para el período del 01 de agosto de 2008 al 31 de julio de 2009 las Salas recibieron las siguientes solicitudes: en la situación de la República del Congo el acusado German Katanga impugnó la admisibilidad de su caso por considerarlo una doble persecución sobre los mismos hechos; en la situación de la República centroafricana el fiscal impugnó la decisión de no confirmar los cargo por tortura y atentados contra la dignidad personal a Jean-Pierre Bemba Gombo; en relación a la situación en Darfur la fiscalía apelo por no confirmar cargos por genocidio el 10 de marzo de 2009. Además, la fiscalía solicito la emisión de órdenes de detención o citaciones en contra de 03 personas sospechosas de cometer crímenes contra personal de mantenimiento de la paz el 29 de septiembre de 2007; en la situación de Uganda el Fiscal presento a la sala II de cuestiones preliminares información sobre la supuesta muerte del acusado Vincent Otti y la solicitud de 02 ONG's para presentar amicus curiae.¹³⁵⁵

El sexto informe de la Corte expone que durante el período del 01 de agosto de 2009 al 31 de julio de 2010 las Salas de la Corte recibieron las siguientes solicitudes: en el caso contra Thomas Lubanga Dyilo la Fiscalía apelo la decisión de ponerlo en libertad de la Sala I de primera instancia el 23 de julio de 2010; el 22 de febrero de 2009 la Defensa de Memba Gombo apelo la decisión sobre la admisibilidad de su caso ante la Corte, la defensa también presento solicitud para que la Corte le brindará asistencia letrada pagada por no contar con recursos para hacerlo; el 19 de abril de 2010 el Fiscal pidió a la Corte que determinará si existía o no falta de cooperación de parte de Sudán para ejecutar las órdenes de detención de Ahmad Muhammad Harun Y Ali Muhammad Abd-Al Rahman; el 26 de noviembre de 2009 el Fiscal solicito a la Sala

¹³⁵⁴ CORTE Penal Internacional, 2008. Cuarto Informe anual, Página 02-12. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: <https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/60963BCD-D0D7-4DA3-B8CA-BB80EDD49C70/278596/ICCA63323Es.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹³⁵⁵ CORTE Penal Internacional, 2009. Quinto Informe anual, Página 02-12. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/1BC01710-9C42-44AC-8B18-85EE2A8876EB/281213/A_64_356_ESP2.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

III de cuestiones preliminares autorización para realizar investigaciones por la situación en Kenya.¹³⁵⁶

El séptimo informe de la Corte para el período comprendido del 01 de agosto de 2010 al 31 de julio de 2011 expone que las Salas recibieron las siguientes solicitudes: en la situación de Kenya, los casos contra 1. William Samui Ruto, Henry Kiprono Kosgey y Joshua Arap Sang, 2. Francis Knimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta y Mohammed Hussein Ali el gobierno de Kenya impugno la admisibilidad de estos casos a la jurisdicción de la corte bajo el artículo 19 del Estatuto de Roma. La Sala de Cuestiones preliminares recibió 01 solicitud del fiscal para obtener autorización de realizar investigación preliminar de la situación en Costa de Marfil.¹³⁵⁷

El octavo informe de la Corte para el período del 01 de agosto de 2011 al 31 de julio de 2012 expone que las Salas de las Corte recibieron las siguientes solicitudes: en la situación de la República Democrática del Congo en el caso contra Callixte Marushimana el Fiscal recurrió la decisión de la Sala I de cuestiones preliminares de no confirmar los cargos y dejarlo en libertad; en el caso contra Sylvestre Madacumura el 13 de junio de 2012 el Fiscal solicito que se emitiera orden detención. En la situación de Darfur en el caso contra Abdallah Banda Abakaer Nourain y Saleh Mohammed Jerbo Jamus el 06 de enero de 2012 la defensa solicitó la suspensión temporal del procedimiento. En el caso contra Abdel Raheen Muhammada Hussein el fiscal solicito que se dictara orden de detención el 02 de diciembre de 2011.¹³⁵⁸

En el octavo informe de la Corte en relación a la Situación en Kenya las Salas de la Corte recibieron las siguientes solicitudes: en el caso contra William Samoei Ruto y Joshua Arap Sang y en el caso contra Francis Kirimi Muthaura y Uhuru Muigai Kenyatta la defensa impugno la decisión de confirmar cargos en su contra. En la situación de Libia la Corte fue informada de la muerte de Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi, el 23 de noviembre de 2011 se informó a la Corte sobre la detención

¹³⁵⁶ CORTE Penal Internacional, 2010. Sexto informe anual, Página 02-12. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: <https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/EA7DF985-4549-40EF-A0DC-814BE440655C/282602/ICC6RepSpa.pdf>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹³⁵⁷ CORTE Penal Internacional, 2011. Séptimo informe anual, Página 02-17. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: <https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/36296BA8-5199-4D87-AF83-995F076E98EC/283898/ICC2011AnnualReporttoUNSpanish5.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹³⁵⁸ CORTE Penal Internacional, 2012. Octavo informe anual, Página 02-19. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: <https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/A67308SP.pdf>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

del acusado Saif Al-Islam Gaddafi. El 01 de mayo de 2012 el gobierno de Libia impugno la decisión de la admisibilidad a la jurisdicción de la corte de la causa contra Saif Al-Islam Gaddafi. En la situación de Costa de Marfil el 25 de octubre de 2011 el Fiscal solicito la emisión de orden de detención en contra de Laurent Gbagbo y recibió 63 solicitudes de víctimas para participar en el proceso, de las cuales 06 fueron colectivas y 57 individuales.¹³⁵⁹

El noveno informe de la Corte para el período de 01 de julio de 2012 al 31 de junio de 2013 expone: recibió 716 solicitudes de participación en actuaciones, 722 solicitudes de reparaciones. En el caso de la situación de República Democrática del Congo en el caso de Thomas Lubaga Dyilo presento apelación a su condena el 03 de noviembre de 2012, con relación a la decisión de las reparaciones fueron presentadas por las víctimas y la defensa el 24 de agosto de 2012, el 03 de septiembre de 2012, 06 de septiembre de 2012, 10 de septiembre de 2012. Con relación a la situación de Darfur el 23 de abril de 2012 la defensa notifico a la corte sobre el fallecimiento del señor Saleh Mohammed Jerbo Jamus. En el caso de Abdel Raheen Muhammed Hussein el 25 de abril de 2013 la defensa notifico a la fiscalía y la Sala II de cuestiones preliminares que iba a participar en una conferencia en Chad.¹³⁶⁰

El noveno informe de la Corte para el período de 01 de julio de 2012 al 31 de junio de 2013 expone que en la situación de Kenya en el caso de Francis Kirimi Muthuara y Uhuru Muigai Kenyatta el 22 de enero de 2013 el fiscal solicitó autorización para modificar cargos de la acusación. En el caso de la situación de Libia, caso de Saif Al-Islam Gaddafi el 07 de junio de 2012 la defensa presento un recurso contra la admisibilidad del caso. En el caso de Abdullah Al-Senussi el 09 de enero de 2012 la defensa presento solicitud de remitir al consejo de seguridad de incumplimiento de Libia y Mauritania sobre su falta de cooperación a la Corte y el 12 de febrero de 2012 presento solicitud de impugnar solicitud de entrega del acusado. El 12 de febrero el 2013 la defensa presento solicitud de impugnar solicitud de entrega del acusado, el 02 de abril de 2013 el gobierno de Libia impugno la admisibilidad de la causa ante la

¹³⁵⁹ CORTE Penal *Internacional*, 2012. *Óp. Cit.*

¹³⁶⁰ CORTE Penal Internacional, 2013. Noveno informe anual, Página 02-13. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: <https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/N1342656.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

Corte y de presentar una respuesta consolidada ante la Corte por las respuestas dadas por el Fiscal al representante de las víctimas.¹³⁶¹

El décimo informe de la Corte para el período de 01 de agosto de 2013 al 31 de junio de 2014 las Salas de la Corte recibieron las siguientes solicitudes 3,106 solicitudes de víctimas para participar en los juicios; 2,524 solicitudes de reparaciones. En relación con la situación en la República Centroafricana en el caso de Memba Gombo recibió la solicitud de Kilolo Musamba el 03 de marzo de 2014 solicitando apartar al Fiscal, Fiscal adjunto y personal de Fiscalía responsables de la investigación en su contra por su presunta comisión de crímenes; en el caso de Mangenda Kabongo el 12 de marzo de 2014 solicito se extendiera a su caso; el 19 de marzo de 2014 Babala Wandu presentó observaciones y que se diera lugar a la solicitud de Kilolo Musamba, así como el 09 de julio de 2014 apelo el examen de su detención. En el caso de la situación de Kenya el 19 de diciembre de 2013 la fiscalía solicitó aplazar el inicio del caso de Uhuro Muigai Kenyatta. En la situación en el caso de Costa de Marfil el 11 de julio de 2014 el fiscal solicito posponer el inicio de audiencia de confirmación de cargos.¹³⁶²

El undécimo informe de la Corte para el período de 01 de agosto de 2014 al 31 de junio de 2015 las Salas de la Corte recibieron las siguientes solicitudes: recibió 1,669 solicitudes de participación de víctimas en los juicios, 1017 solicitudes de reparaciones. En la situación de Kenya en el caso contra Uhuro Muigai Kenyatta la fiscalía presento el 05 de diciembre de 2014 la solicitud para retirar los cargos en su contra. En la situación de Libia la Fiscalía solicitó que se impusieran responsabilidades en contra del Estado Islámico de Iraq, el de Levante y otros agentes en Libia por la violencia ocasionada en contra de civiles e instituciones.¹³⁶³

El duodécimo informe de la Corte para el período del 01 de agosto de 2015 al 31 de julio de 2016 las Salas de la Corte recibieron las siguientes solicitudes: 51 nuevas solicitudes de participación de víctimas, 714 solicitudes de reparaciones, 3,851

¹³⁶¹ CORTE Penal Internacional, 2013. *Óp. Cit.*

¹³⁶² CORTE Penal Internacional, 2014. Décimo informe anual, Página 02-17. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: <https://www.icc-cpi.int/iccdocs/presidency/ICC-Rep-UNGA-30-10-2014-Spa.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹³⁶³ CORTE Penal Internacional, 2015. Undécimo informe anual, Página 04-13. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/UNGA_2015-Spa.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

solicitudes conjuntas de participación y reparación, 6,335 víctimas o sus representantes comunicaron solicitudes a la corte en 43 comunicaciones individuales y 26 colectivas. El Fiscal recibió 410 comunicaciones para determinar si la corte tenía jurisdicción en casos. En relación con la situación en la República Centroafricana el 04 de abril de 2016 el acusado en el caso Bemba Gombo interpuso apelación por su condena.¹³⁶⁴

El décimo tercero informe de la Corte para el período del 01 de agosto de 2016 al 31 de julio de 2017 las Salas de la Corte recibieron las siguientes solicitudes: el fiscal recibió 556 comunicaciones, 13 nuevas solicitudes de participación en los casos de víctimas, 2,207 solicitudes de reparación y 2,505 solicitudes de participación y reparación. En la situación de la República Democrática del Congo en el caso de Germain Katanga, la Sala II de primera instancia solicitó al fondo fiduciario de víctimas que considerara poder utilizar parte de sus fondos para completar los pagos de las reparaciones de víctimas. En el caso de Bosco Ntaganda el 08 de marzo de 2017 se presentó la apelación sobre la solicitud de entrega de comunicaciones del acusado, el 15 de junio de 2017 se presentó un recurso sobre la jurisdicción de la corte en la causa en contra del acusado sobre los crímenes de guerra de violación y esclavitud sexual. La defensa presentó apelación sobre la Sala VII de primera instancia por la petición de inadmisibilidad de la causa.¹³⁶⁵

El décimo tercero informe de la Corte para el período del 01 de agosto de 2016 al 31 de julio de 2017 las Salas de la Corte recibieron las siguientes solicitudes: en la situación de la República Centroafricana en el caso en contra de Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean Jacques Mangenda Kabongo, Fidele Babala Wandu y Narcisse Árido apelaron en noviembre de 2016 sus condenas, el 21 de junio de 2017 la Fiscalía y los acusados Jean-Pierre Bemba Gombo, Fidele Babala Wandu y Narcisse Árido apelaron su sentencia. En la situación en Uganda en el caso

¹³⁶⁴ CORTE Penal Internacional, 2016. Duodécimo informe anual, Página 02-14. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/71/342&referer=http://research.un.org/en/docs/law/courts&Lang=S [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹³⁶⁵ CORTE Penal Internacional, 2017. Décimo tercero informe anual, Página 04-14. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/A72349/170817-rep-UNSC_ESP.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

contra Domenic Ongwen recibió 2,101 solicitudes de participación de víctimas. En la situación de Kenya el fiscal recibió información sobre la situación en ese territorio.¹³⁶⁶

El décimo cuarto informe de la Corte para el período del 01 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2018 las Salas de la Corte recibieron las siguientes solicitudes: 384 solicitudes de víctimas para participar en los procesos, 118 con relación a reparaciones, 04 a participaciones y 262 participación y reparación, además, 2,412 información de seguimiento de solicitudes anteriores. En la situación de la República democrática del Congo en el caso de Thomas Lubanga Dyilo el 15 de enero de 2018 la defensa y 01 representante de las víctimas apelaron la decisión de la forma de las reparaciones de las víctimas. En el caso de Germain Katanga la defensa de este, la Oficina de defensa de las víctimas y representantes legales de las víctimas apelaron el 25 y 26 de abril la decisión de la Sala II de primera instancia en contra de la orden de reparación.

El décimo cuarto informe de la Corte para el período del 01 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2018 las Salas de la Corte recibieron las siguientes solicitudes: En la situación de Darfur recibió 11 escritos de amicus curiae en el caso de Omar Hassan Al-Bashir. En la situación de Libia en el caso contra Saif Al-Islam Gaddafi este impugno la admisibilidad de la causa ante la Corte el 05 de junio de 2018 y en el caso de Mahmond Mustafa Busayf Al-Werfalli el fiscal solicitó el 01 de agosto de 2017 la emisión de orden de detención. En la situación de Mali el 18 de septiembre de 2017 los representantes legales de las víctimas apelaron la orden de reparación de la Sala VIII de primera instancia. En el caso de Afganistán el Fiscal solicitó el 20 de noviembre de 2017 iniciar una investigación. El Fiscal presentó el 09 de marzo de 2018 una solicitud a la Corte para que determinara su competencia en el caso de las deportaciones de Rohinyas de Myanmar a Bangladesh, recibió 518 comunicaciones para tomar en consideración sobre la competencia de la corte.¹³⁶⁷

El décimo quinto informe de la Corte para el período del 01 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019 expone que las Salas de la Corte recibieron las solicitudes: 2,095 solicitudes de víctimas para participar en los procesos (47 solicitudes de reparación,

¹³⁶⁶ CORTE Penal Internacional, 2017. *Óp. Cit.*

¹³⁶⁷ CORTE Penal Internacional, 2018. Décimo cuarto informe anual, Página 02-14. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/a_73_334/N1826370_SPA.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

24 de participación y 2,022 de participación y reparación), 1999 solicitudes anteriores de las cuales recibió información complementaria; con relación a en la República Centroafricana en el caso contra Jean-Pierre Bemba Gombo el 08 de marzo de 2019 el acusado realizó una solicitud de indemnización por 68.4 millones de euros por los daños causados por su procesamiento ante la corte.¹³⁶⁸

El décimo quinto informe de la Corte para el período del 01 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019 expone que las Salas de la Corte recibieron las siguientes solicitudes: con relación a la situación en Darfur en el caso contra Omar Hassan Ahmad Al-Bashir el 12 de marzo de 2018 Jordania apeló la decisión de la Sala que estableció que no había prestado ayuda a las solicitudes de la corte para detenerlo. En la situación de Costa de Marfil el fiscal apeló la sentencia dictada el 15 de enero de 2019. En la situación en Afganistán el Fiscal solicitó autorización para apelar el 07 de junio de 2019, el 10 de junio de 2019 representantes legales de 82 víctimas y 02 organizaciones. En la situación de Camerún, Grecia y Camboya el fiscal presentó apelación el 11 de febrero de 2019, el 04 de marzo de 2019 la oficina de las víctimas y representantes legales presentaron observaciones a la apelación.¹³⁶⁹

22. NÚMERO DE CASOS RESUELTOS

Hasta diciembre del año 2020, la corte a proferido 29 sentencias, de las cuales en algunos de los casos tienen más de un sospechoso. Los jueces de la CPI han emitido 35 órdenes de arresto. Gracias a la cooperación de los Estados, 17 personas han sido detenidas en el centro de detención de la CPI y han comparecido ante la Corte. 14 personas permanecen prófugas. Se han retirado los cargos contra 3 personas debido a su muerte. Los jueces de la CPI también han emitido 9 citaciones para comparecer. Los jueces han emitido 8 condenas y 4 absoluciones.¹³⁷⁰

El primer informe de la Corte Penal Internacional de las actividades del 2004, indica que, aunque el Estatuto de la Corte entró en vigencia en julio del 2002 las funciones

¹³⁶⁸ CORTE Penal Internacional, 2019. Décimo quinto informe anual. Página 02-15. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: <https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/A-74-324-ES.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹³⁶⁹ Ídem.

¹³⁷⁰ CORTE Penal Internacional, S.F. Acerca de la Corte Penal Internacional: Presupuesto para 2020, Página 01. En: *Corte Penal Internacional* [en línea]. Disponible en: <https://www.icc-cpi.int/about> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

judiciales no iniciaron hasta el 2004. La actividad judicial del Tribunal ha iniciado en las tres Salas de Cuestiones Preliminares, la primera decisión fue tomada por una de las salas el 17 de febrero de 2005 que se refería a convocar a una conferencia de estado de proceso con el Fiscal y sus representantes sobre la situación en el Congo. Además, han continuado celebrando audiencias y emitido varias decisiones en relación a la situación del Congo. El Fiscal ha iniciado investigaciones de 03 casos Uganda, República Democrática del Congo, Dafur, Sudán; además, se encuentra monitoreando 08 situaciones incluidas las de Costa De Marfil y República Centroafricana. En el 2004 el Fiscal inicio investigaciones de la situación de República Democrática del Congo y Uganda. ¹³⁷¹

El segundo informe de la Corte para el período comprendido entre el 01 de agosto de 2005 al 01 de agosto de 2006, expone que las Salas de cuestiones preliminares tomaron las siguientes decisiones: emitieron el 08 de julio de 2005 las primeras órdenes de detención, las cuales fueron hechas públicas el 14 de octubre de 2005 por la Sala II de cuestiones preliminares, estas fueron emitidas en contra de sospechosos de Uganda, de haber formado parte de 05 miembros del ejército de resistencia del señor: a. Joseph Kony; b. Vincent Otti; c. Okot Odhiambo; d. Dominic Ongwen; e. Easha Lukwiga quienes fueron acusados de delitos contra la humanidad y crímenes de guerra (incluidos asesinato, esclavitud sexual, ataque intencional a civiles, pillaje, violación, trato cruel de civiles, enlistamiento forzado de niños al ejército) ninguno ha sido detenido ni entregado a la corte. Las órdenes de detención fueron colocadas como alertas rojas en la INTERPOL el 01 de junio de 2006. ¹³⁷²

La Sala I de cuestiones preliminares, de conformidad con este segundo informe se encarga, de los asuntos previos al asunto de la República Democrática del Congo. Emitió una orden de arresto el 10 de febrero de 2006 contra Thomas Lubanga Dyilo quien fue arrestado el 17 de marzo de 2006 y entregado ese día a la Corte, por ser señalado de ser el fundador y líder de la unión des patriotes congolais por enlistar y reclutar a niños menores de 15 años. El 20 de marzo de 2006 se celebró una audiencia para informarle de sus cargos y derechos a Lubanga, en el segundo

¹³⁷¹ CORTE Penal Internacional, 2005. *Óp. Cit.*

¹³⁷² CORTE Penal Internacional, 2006. *Óp. Cit.*

semestre de 2006 se celebrará la audiencia para confirmar los cargos en su contra.

1373

En el segundo informe sobre el fondo donde desestimo la solicitud del Fiscal de revisión extraordinaria de Sala I, por la denegación al Fiscal de autorizar apelar la decisión de permitir la participación de 06 víctimas en los procedimientos. El Fiscal mantiene en curso la investigación de las situaciones en la República Democrática del Congo, Uganda y Darfur, Sudán. Además, ha realizado 45 misiones a 06 países con el fin de reunir pruebas y testimonio de testigos en relación a la situación del Congo, ha abierto un segundo caso y espera abrir un tercer caso. En relación con la situación de Uganda, ha realizado misiones de campo para investigar y evaluar la seguridad de los testigos, 16 misiones de entrevista a posibles testigos, recopiló documentos y materiales. Además, espera confirmar 05 órdenes de arresto. Para Darfur el 06 de junio de 2005 se abrió la investigación, se ha centrado las investigaciones fuera de Darfur, ya que por la situación del conflicto no existe condiciones para garantizar la seguridad de las personas. En este caso ha realizado 50 misiones a 15 países, examinado a 500 posibles testigos, tomado 61 declaraciones oficiales a testigos y recopilado 8,800 documentos. El Fiscal ha realizado 08 acuerdos con organizaciones y otros organismos para la prestación de cooperación con relación a la investigación de Darfur.¹³⁷⁴

El tercer informe de la Corte señala que durante el período del informe 01 de agosto de 2006 al 01 agosto de 2007, se tomaron las siguientes decisiones: la fiscalía decidió abrir una investigación por la situación en la República Centroafricana el 22 de mayo de 2007, continua con investigaciones en curso en las situaciones de República Democrática del Congo, Uganda y Darfur. Las Salas tomaron las siguientes decisiones: la Sala I de cuestiones preliminares decidió el 29 de enero de 2007 confirmar los cargos contra Thomas Lubanga Dyilo y se trasladó su causa a enjuiciamiento. En la situación de Uganda la Sala II de cuestiones preliminares fue informada de la muerte de Raska Lukuiga, contra quien se había girado orden de detención, y decidió dar por concluidas las actuaciones en su contra tras comprobar su muerte. Además, les dio seguimiento a las órdenes de detención pendientes de

¹³⁷³ CORTE Penal Internacional, 2006. *Óp. Cit.*

¹³⁷⁴ *Ídem.*

ejecutar. En el caso de Darfur la Sala emitió 02 órdenes de detención por crímenes de guerra y lesa humanidad en contra de Ahmad Harun y Ali Kushayb. Al fin de este período se encontraban pendientes de ejecutar 6 órdenes de detención.¹³⁷⁵

El cuarto informe de la Corte para el período del 01 de agosto de 2007 al 31 de julio de 2008, las Salas tomaron las siguientes decisiones: situación en la República democrática del Congo en el caso de Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo Chui que fueron detenidos el 17 /20/2007 y el 07/02/2008 respectivamente, y tuvieron audiencia de confirmación de cargos del 27 de junio al 16 de julio del 2008 se les programó una audiencia de decisión de confirmación de cargo para el 04 de noviembre de 2008. La Sala I de cuestiones preliminares se encontraba considerando su decisión de emitir o no orden de detención en contra de Omar Hasan Ahmad Al-Bashir, además se han realizado 15 misiones de investigación y la Fiscalía anunció que se estaba en curso una segunda y tercera investigación de la situación. En el caso contra Lubanga Dyilo la Sala I había decidido aplazar el juicio el 13 de junio de 2008, el 02 de julio autorizó a la fiscalía apelar esa decisión, el 07 de julio de 2008 la Sala de apelaciones suspendió la decisión de liberarle y estaba en deliberación. Además, emitió 02 decisiones sobre protección de testigos y divulgación de pruebas el 11 de julio de 2008. En el caso de Bosco Ntaganda se hizo pública la orden de detención dictada el 22 de agosto de 2006 el 29 de abril de 2008, en este caso 569 víctimas han solicitado participar, 136 han sido autorizados por la Sala I de cuestiones preliminares, a 17 se le han considerado insolventes y se les ha proporcionado asistencia legal.¹³⁷⁶

Con relación a la situación en Uganda expone que el Tribunal a través de sus salas tomó las siguientes decisiones: en el caso contra Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo, Dominic Ongwen aunque no se habían hecho efectivas sus detenciones se han tomado decisiones en relación a la participación de víctimas 157 han solicitado participar, 07 han sido aceptados en la situación y 08 a participar en la causa, esta decisión del 14 de marzo de 2008 fue apelada por la defensa. Con relación a la situación en Darfur, en el caso contra Ahmad Harun y Ali Kashayb no hubo actividad judicial. En relación con la situación de la República Centroafricana se emitieron órdenes de arresto en contra de Jean-Pierre Bomba Gombo, una provisional fue

¹³⁷⁵ CORTE Penal Internacional, 2007. *Óp. Cit.*

¹³⁷⁶ CORTE Penal Internacional, 2008. *Óp. Cit.*

emitida el 23 de mayo de 2008 y una definitiva el 10 de junio de 2008, fue arrestado el 24 de mayo de 2008 en Bélgica y la Corte solicitó su entrega por medio de la Sala III el 10 de junio de 2008. Fue entregado a la Corte el 03 de julio de 2008 y cursaba la investigación de su situación.

En este período se encontraban pendientes de ejecutar 07 órdenes de detención, 01 de la República Democrática del Congo, 04 de Uganda y 02 de Darfur.¹³⁷⁷ El quinto informe de la Corte expone que para el período del 01 de agosto de 2008 al 31 de julio de 2009 las Salas tomaron las siguientes decisiones: Con 04 situaciones en curso. En relación a la situación de la República del Congo la Sala I dio inicio al primer juicio de la Corte el 26 de enero de 2009 en contra del acusado Thomas Lubanga Dyilo. La Sala I de cuestiones preliminares confirmaron 07 cargos de crímenes de guerra y 03 de crímenes de lesa humanidad contra German Katanga y Mathieu Ngudgolo Chui el 26 de septiembre de 2009 y con ello se conformó la Sala II de Primera instancia de la Corte. La Sala desestimó la impugnación del acusado German Katanga sobre la admisibilidad de su caso por considerarlo una doble persecución sobre los mismos hechos el 12 de junio de 2009.

En cuanto a la situación en la República Centroafricana la Sala II de cuestiones preliminares confirmó cargos por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra el 15 de junio de 2009 en contra de Jean-Pierre Bemba Bombo; en relación a la situación en Darfur la Sala I de cuestiones preliminares emitió orden de detención contra Omar Hassan Ahmad Al-Bashir el 04 de marzo de 2003, a esta decisión el fiscal la apeló por no confirmarse los cargos por genocidio el 10 de marzo de 2009 y hubo conformidad de autorización para apelar el 22 de junio de 2009. El 07 de mayo de 2009 la Sala I de cuestiones preliminares emitió una orden de comparecencia en contra de Bahr Idriss Ahu Garda, sospechoso de cometer crímenes contra personal de mantenimiento de la paz el 29 de septiembre de 2007. Sobre la situación de Uganda la Sala II de cuestiones preliminares no tomó decisión sobre la información sobre la supuesta muerte del acusado Vincent Otti y la admisión de la solicitud de 02 ONG's para presentar *amicus curiae*, además del nombramiento de abogado

¹³⁷⁷ CORTE Penal Internacional, 2008. *Óp. Cit.*

defensor para los acusados. El 10 de marzo de 2009 se decidió sobre la admisibilidad de la causa.¹³⁷⁸

En el periodo que comprende el quinto informe la fiscalía realizó el anuncio de una tercera investigación en la situación de la República del Congo en septiembre de 2008 por crímenes cometidos en la provincia de Kimus. El fiscal realizó 34 misiones en 08 países para las investigaciones. En el caso de las situaciones de la República Centroafricana realizó 49 misiones a 06 países para tareas de investigaciones, en el caso de Darfur 30 misiones a 13 países para tareas de investigación. Con relación a las órdenes de detención se encuentran pendientes 08, 01 de Uganda, 03 de Darfur y 01 del Congo.¹³⁷⁹

El sexto informe de la Corte expuso que durante el período del 01 de agosto de 2009 al 31 de julio de 2010 las Salas de la Corte tomaron las siguientes decisiones: en la situación de Uganda, en el caso contra Joseph Kony, Vincenten Otti, Okot Odhiambo, Dominic Ongwen aunque no se han hecho para el periodo informado efectivas sus detenciones, se habían tomado decisiones con relación a la participación de víctimas y admitido 41 víctimas para que participaran. Además el Fiscal realizó 05 misiones a 04 países con fines de investigación; en la situación de la República democrática del Congo en el caso contra Bosco Ntaganda su orden de detención se encontraba pendiente de ejecutar, sin embargo el 08 de diciembre de 2009 la Sala de apelaciones anuló la decisión de modificar su acusación; en el caso contra Thomas Lubanga Dyilo la Fiscalía apeló la decisión de ponerlo en libertad de la Sala I de primera instancia y estaba en curso; en el caso de Katanga y Ngudiyolo Chui se inició el juicio el 24 de noviembre de 2009. Además, el fiscal realizó 22 misiones a 06 países con fines de investigación y en relación a la situación en Kivu realizó 42 misiones en 11 países.

¹³⁸⁰

En la situación en la República Centroafricana en el caso contra Mamba Gombo la Sala III de primera instancia confirmó el 24 de junio de 2009 admisibilidad de su caso ante la Corte, la Sala de apelaciones anuló la decisión de la Sala III de cuestiones preliminares el 02 de diciembre de 2009, la Sala de primera instancia ordenó la

¹³⁷⁸ CORTE Penal Internacional, 2009. *Óp. Cit.*

¹³⁷⁹ *Ídem.*

¹³⁸⁰ CORTE Penal Internacional, 2010. *Óp. Cit.*

asistencia letrada pagada por no contar con recursos para hacerlo. El fiscal realizó 22 misiones a 04 países para investigación; en relación a la situación de Darfur el 25 de mayo de 2010 la Corte determinó la falta de cooperación de parte de Sudán para ejecutar las órdenes de detención de Ahmad Muhammad Harun Y Ali Muhammad Abd-Al Rahman e informó al Consejo de Seguridad; en el caso de Omar Hassan Ahmad Al-Bashir la sala de apelaciones resolvió el 03 de febrero de 2010 anular la decisión de no confirmar los cargos por genocidio y lo devolvió a la Sala I de cuestiones preliminares para reconsideración, la que dictó el 12 de julio de 2010 nueva orden de detención con 03 cargos por genocidio. Además, autorizó la participación de 12 víctimas en el proceso.¹³⁸¹

En la situación de Darfur el caso de Abu Garda el 08 de febrero de 2010 la Sala I de cuestiones preliminares no confirmó los cargos en su contra por falta de prueba y admitió la participación de 87 víctimas; en el caso contra Andallah Bauda Abakaen Nourain y Salen Mohammed Jerbo Jamus el 15 de junio de 2010 se hicieron públicas las citaciones selladas del 27 de agosto de 2009. Ambos se presentaron voluntariamente a la corte el 16 de junio de 2010 y para la época del informe estaba pendiente la audiencia de confirmación de cargo. En la situación de Kenya el 31 de marzo de 2010 la Sala III de cuestiones preliminares autorizó realizar investigaciones por la situación en Kenya, además realizó 27 misiones en 11 países. Durante este periodo estaban pendientes de ejecutar 08 órdenes, 04 de Uganda, 01 de República Democrática del Congo, 03 Darfur. La Fiscalía realizaba exámenes preliminares de situaciones en Afganistán, Colombia, Costa de Marfil, Georgia, Palestina y Guinea.¹³⁸²

El séptimo informe de la Corte para el período comprendido del 01 de agosto de 2010 al 31 de julio de 2011 expone que las Salas tomaron las siguientes decisiones: situación de la República democrática del Congo, en el caso contra Thomas Lubanga Dyilo la Sala de Apelaciones revocó las decisiones de suspender las actuaciones en su contra y liberarlo el 08 de octubre de 2010. En el caso contra Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo Chui el juicio se seguía en curso. El fiscal realizó 16 misiones a 05 países. En la situación de la Provincia de Kivu, el caso contra Callixte Mbarushimana

¹³⁸¹CORTE Penal Internacional, 2009. *Óp. Cit.*

¹³⁸²CORTE Penal Internacional, 2010. *Óp. Cit.*

la sala I de cuestiones preliminares emitió orden de detención el 28 de septiembre de 2010, que se hizo pública el 11 de octubre de 2010, y el 15 de julio de 2011 se realizó la audiencia de confirmación de cargos. El fiscal realizó 34 misiones a 10 países para recabar información para sus investigaciones.¹³⁸³

En relación a la situación de la República Centroafricana se habían tomado las siguientes decisiones en el caso contra Jean-Pierre Bemba Gombo, la sala de apelaciones confirmó la admisibilidad de su caso a la jurisdicción de la corte el 19 de octubre de 2010, e inició su juicio el 22 de noviembre de 2010. Además, fueron admitidas para participar 1,619 víctimas. El fiscal realizó 14 misiones a 5 países para recabar información de la investigación. En la situación de Darfur, Sudán, en el caso contra Omar Hassan Ahmad Al-Bashir el 27 de agosto de 2010 la Sala I de cuestiones preliminares tomó la decisión de informar sobre visitas realizadas por el sospechoso a Kenya y Chad, el 12 de mayo de 2011 informó sobre la visita que realizó a Djibouti ambas al Consejo de Seguridad. En este caso 12 víctimas han sido autorizadas a participar en el caso. En el caso contra Abakaer Nourain y Saleh Mohammed Jerib Jamus se realizó la audiencia de confirmación de cargos el 08 de diciembre de 2010 y la Sala I de cuestiones preliminares confirmó estos el 07 de marzo de 2011. El 16 de marzo remitió la causa a la Sala IV de primera instancia. El fiscal realizó 16 misiones a 09 países para recabar información.¹³⁸⁴

La Corte expuso que con relación a la situación de Kenya, los casos contra 1. William Samuie Ruto, Henry Kiprono Kosgey y Joshua Arap Sang, 2. Francis Knimi Muthaura, Uhunu Muigai Kenyatta y Mohammed Hussein Ali fueron citados por la Sala II de cuestiones preliminares el 08 de marzo de 2011 y el 30 de mayo de 2011 fue rechazada la impugnación del gobierno sobre la admisibilidad de la causa ante la corte. El fiscal realizó 71 misiones a 14 países para recabar información para sus investigaciones. En la situación de Libia en el caso contra Muammar Mohammed Abu Minyar Gadaffi, Saif Al-Islam Gadaffi y Abdullah Al-Senussi la Sala I de cuestiones preliminares emitió órdenes de detención el 27 de junio de 2011.¹³⁸⁵

¹³⁸³ CORTE Penal Internacional, 2011. *Óp. Cit.*

¹³⁸⁴ *Ídem.*

¹³⁸⁵ *Ídem.*

Para el período del séptimo informe se hallaba pendientes de ejecutar 12 órdenes de detención, 04 Uganda, 01 República Democrática del Congo, 04 Darfur, 03 Libia. El fiscal continuó realizando exámenes preliminares a la situación en Afganistán, Colombia, Geoergia, Guinea, Palestina e inicio con el análisis de situación en Nigeria, Nicaragua, Honduras y la República de Corea. La Sala de Cuestiones preliminares analizaban la solicitud del fiscal para obtener autorización de realizar investigación preliminar de la situación en Costa de Marfil.¹³⁸⁶

El octavo informe de la Corte expuso que las Salas de las Corte tomaron las siguientes decisiones: en la situación de Costa de Marfil el 03 de octubre de 2011 la Sala III de cuestiones preliminares autorizó al fiscal comenzar investigación. En ese periodo el Fiscal realizo 54 misiones a 07 países para recabar información. Además, en el caso contra Laurent Gbagbo la Sala III de cuestiones preliminares emitió orden de detención el 23 de noviembre de 2011, fue entregado a la Corte el 30 de noviembre de 2011 y tomo la decisión de aplazar audiencia de confirmación de cargos el 02 de agosto de 2012.¹³⁸⁷

Con relación a la situación de la República Democrática del Congo se dictó la primera sentencia en contra de Thomas Lubanga Dyilo el 14 de marzo de 2012, donde se le declaro responsable penalmente. El 10 de julio de 2012 dictó la condena de 14 años de prisión en contra de Thomas Lubanga Dyilo, en este proceso se aceptó la participación de 114 víctimas. En el caso de Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo Chui se ha concluido la fase de prueba, la sala dicto 130 decisiones orales y 450 decisiones escritas, se autorizó la participación de 366 víctimas. En el caso contra Callixte Mbarushimana el 16 de diciembre de 2011 la Sala I de cuestiones preliminares rechazó confirmar los cargos en su contra y ordeno su libertad, el 20 de diciembre de 2011 se rechazó la impugnación del Fiscal de estas decisiones y la Sala de apelaciones desestimo la apelación el 30 de mayo de 2012. En el caso contra Sylvestre Madacumuna la Sala II de cuestiones preliminares emitió orden de detención el 13 de julio de 2012. En el caso contra Jean-Pierre Bemba Gombo se

¹³⁸⁶ CORTE Penal Internacional, 2011. *Óp. Cit.*

¹³⁸⁷ CORTE Penal Internacional, 2012. *Óp. Cit.*

autorizó la participación de 2,551 víctimas. El fiscal realizó 02 misiones en el Congo, y 15 misiones en 07 países por la situación de la provincia de Kivu.¹³⁸⁸

En el mismo informe, relación a la situación en Darfur en el caso contra Omar Hassan Ahmad Al-Bashir el 12 y 13 de junio decidieron que los Estados de Malaui y Chad no colaboraron con la Corte. En el caso contra Abdallah Banda Abakaer Nourain y Saleh Mohammed Jerbo Jamus la Sala decidió que el juicio debía proseguir en relación solo en relación de las cuestiones controvertidas entre las partes el 28 de septiembre de 2011, aceptó la participación de 89 víctimas en el proceso y el 25 de febrero de 2012 tomó decisión sobre la representación legal de estas. En el caso contra Abdel Raheen Muhammed Hussein la sala I de cuestiones preliminares emitió orden de detención en su contra el 01 de marzo de 2012. El Fiscal realizó 07 misiones en 06 países con fines de investigación.¹³⁸⁹

La información que la Corte presentó sobre las Salas, las cuales tomaron las siguientes decisiones en relación a la situación en Kenya así: en los casos contra William Samoei Ruto, Joshua Arap Sang, Henry Kiprono Kosgey, Francis Kirimi Muthuara, Uhuru Muigai Kenyatta y Mohammed Hussein Ali la sala de apelaciones desestimó la apelación de Kenya sobre la admisibilidad del caso ante la corte el 30 de agosto de 2011. El 23 de enero de 2012 la Sala II de cuestiones preliminares confirmó los cargos en contra de William Samoei Ruto y Henry Kiprono Kosgey, Francis Kirimi Muthuara, Uhuru Muigai Kenyatta y rechazó los cargos contra Joshua Arap Sang y Mohammed Hussein Ali. La sala rechazó apelación en contra de esa decisión el 24 de mayo de 2012. El 29 de mayo de 2012 se remitió a la Sala V de primera instancia el caso. Han sido autorizadas 233 víctimas a participar en el juicio el fiscal realizó 65 misiones a 11 países con fines de investigación.¹³⁹⁰

En relación con la situación en Libia en el caso contra Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi se dió por concluido luego de verificar su muerte el 22 de noviembre de 2011. En el caso contra Saif Al-Islam Gaddafi el 23 de noviembre fue detenido y el 03 de febrero la Corte ordenó reunión del acusado con personal de la corte. El 01 de junio de 2012 se tomó la decisión de aplazar la entrega de Gaddafi. El 17 de marzo

¹³⁸⁸ CORTE Penal Internacional, 2012. *Óp. Cit.*

¹³⁸⁹ *Ídem.*

¹³⁹⁰ *Ídem.*

de 2012 la Corte pidió información a Mauritania sobre la detención de Abdullah Al-Senusi. El fiscal realizó 30 misiones a 13 países con fines de investigación ¹³⁹¹

Para ese período se encontraban pendientes de ejecutar 12 órdenes de detención, '04 de Uganda, 02 República democrática del Congo, 04 Darfur, 02 Libia. El Fiscal realizó 01 misión en Uganda para fines de investigación, 01 misión en República Centroafricana y 14 misiones en 08 países para fines de investigación es la situación en República Centroafricana. Además, informó estar en curso examen preliminar de la situación en Afganistán, Colombia, Georgia, Guinea, Honduras, Nigeria y República de Corea; inicio análisis de la situación en Mali y concluyó el análisis de la situación en Palestina. ¹³⁹²

El noveno informe de la Corte muestra que las decisiones de las Salas en relación a la situación de la República Democrática de Congo en el caso contra Thomas Lubanga Dyilo tomó la decisión de admitir apelaciones sobre reparaciones el 14 de diciembre de 2012, la apelación de Lubanga en relación a las reparaciones fue negada el 14 de julio de 2012. En el caso contra Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo Chui la Sala II de primera instancia decidió separar sus casos en dos casos individuales el 21 de noviembre de 2012. La Sala absolvió el 18 de diciembre de 2012 absolvió a Mathieu Ngudjolo Chui y quien para la época del informe estaba asilado en los Países Bajos.

En el caso de Germain Katanga su acusación fue modificada y se le negó la apelación que buscaba revertir esta decisión el 24 de marzo de 2013. En el caso de Callixte Mbarushimana la Sala II de cuestiones preliminares el 03 de septiembre de 2012 rechazó la solicitud de revisión de la asistencia pagada. En el caso de Bosco Ntaganda quien compareció el 26 de marzo de 2013 ante la Sala II de cuestiones preliminares, tomó la decisión sobre el nuevo régimen para divulgación de prueba el 12 de abril, el 17 de junio aplazó la audiencia de confirmación de cargos, el 28 de mayo estableció los principios de proceso de solicitud de víctimas para participar en el juicio. Además, la Sala II de cuestiones preliminares desestimó la solicitud de los

¹³⁹¹ CORTE Penal Internacional, 2012. *Óp. Cit.*

¹³⁹² *Ídem.*

representantes de las víctimas en el caso Lubanga Dyilo para ser admitidos en este caso. El Fiscal realizó 38 misiones en 07 países con fines de investigación.¹³⁹³

En este informe la Corte también expone que las decisiones de las Salas tomadas en este período en relación a la situación de la República Centroafricana en el caso de Jean-Pierre Bemba Gombo el 21 de septiembre de 2012 la Sala III de Primera Instancia dictó una decisión sobre el posible cambio de tipificación de hechos. La sala suspendió de manera temporal las actuaciones el 13 de diciembre de 2012, el 06 de febrero de 2013 aprobó la solicitud de la defensa de levantar la suspensión temporal de actuaciones, el 06 de junio de 2013 tomó la decisión de emitir el calendario de fechas para finalizar la presentación de pruebas. El Fiscal realizó 17 misiones en 05 países con fines de investigación.¹³⁹⁴

Además, informa que las decisiones de las Salas tomadas en este período fueron con relación a la situación de Darfur en el caso contra Omar Hassan Ahmad Al-Bashir el 15 de febrero de 2013 la Sala II de cuestiones preliminares tomó una decisión sobre la presunta visita de este a Chad y la obligación de colaborar para arrestarlo. El 22 de febrero de 2013 tomó una decisión sobre el incumplimiento de solicitud de apoyo en cumplir con la detención de este e informó el 26 de marzo de 2013 al consejo de seguridad sobre el incumplimiento de apoyo de las autoridades de Chad y el 15 de julio de 2013 le fue informado por el Fiscal que el acusado se encontraba en Nigeria. En el caso de Abdallah Banda Abakaer Nourain y Saleh Mohammed Jerbo Jamus el 26 de octubre de 2012 la Sala IV de primera instancia desestimó la solicitud de la defensa de suspender temporalmente las actuaciones. El 06 de marzo de 2013 se anunció el inicio del juicio el 05 de mayo de 2014. En el caso contra Abdel Raheen Muhammed Hussein dictó una orden al Estado de Chad para recordarle su obligación de cooperar con la corte. El Fiscal realizó 06 misiones en 05 países.¹³⁹⁵

En el mismo informe de la Corte expone que las decisiones de las Salas tomadas en este período fueron las siguientes: con relación a la situación de Kenya en el caso de William Samoei Ruto y Joshua Arap Sang la Sala IV de primera instancia tomó la decisión sobre el sistema simplificado de solicitudes de participación de víctimas el

¹³⁹³ CORTE Penal Internacional, 2013. *Óp. Cit.*

¹³⁹⁴ CORTE Penal Internacional, 2012. *Óp. Cit.*

¹³⁹⁵ CORTE Penal Internacional, 2013. *Óp. Cit.*

03 de octubre de 2012. El 06 de junio de 2013 dictó decisión sobre excusar al señor Ruto de comparecer de forma permanente al juicio, solo cuando fuera necesario. El 18 de julio de 2013 la Sala autorizó al Fiscal para autorizar apelar la decisión de excusar. En el caso Francis Kirimi Muthuara y Uhuru Kenyatta la sala aceptó el 21 de marzo de 2013 de modificar los cargos. El 03 de octubre de 2012 la Sala V de primera instancia estableció el sistema de solicitud de participación de víctimas. El 18 de marzo de 2013 el Fiscal dio por terminado las actuaciones contra el Kirimi Muthuara, y el 26 de abril de 2013 rechazó la solicitud de apelar la decisión de suspender actuaciones.¹³⁹⁶

Igualmente, en el noveno informe de la Corte asevera que las decisiones de las Salas con relación a la situación de Libia la Sala I de cuestiones preliminares desestimó la impugnación de la admisibilidad de la causa ante la Corte y desestimó la solicitud de suspender las actuaciones en este caso. En el caso de Abdullah Al-Senussi la Sala I de cuestiones preliminares emitió orden por medio de la cual solicitaba a la Secretaría que recordará a las autoridades locales colaborar con la Corte. La Sala tomó la decisión de comunicarle a las autoridades libias de entregarlo de inmediato, aunque posteriormente decidió aplazar esta y de continuar con el proceso al desestimar la impugnación de la causa en la jurisdicción de la corte. La Sala I de cuestiones preliminares aprobó a las autoridades de Libia de presentar una respuesta consolidada el 16 de julio de 2013. El Fiscal realizó 27 misiones a 12 países con fines de investigación.¹³⁹⁷

La Corte afirma que las decisiones de las Salas tomadas en relación a la situación de Costa de Marfil en el caso de Laurent Gbagbo el 15 de agosto de 2012 la Sala I de cuestiones preliminares desestimó la impugnación del caso sobre la competencia de la Corte para conocer el caso; el 02 de noviembre de 2012 determinó que el acusado contaba con la actitud necesaria para participar en el juicio. El 06 de febrero de 2012 la sala aceptó la participación de víctimas, el 03 de junio de 2013 la sala levanto la audiencia de cargos, el 11 de junio la Sala I de cuestiones preliminares desestimó la impugnación de la defensa en contra de las diferentes decisiones tomadas. La Sala I dictó decisiones el 12 de noviembre de 2012, 12 de marzo de 2013, 11 de julio de

¹³⁹⁶ CORTE Penal Internacional, 2013. *Óp. Cit.*

¹³⁹⁷ *Ídem.*

2013 sobre la revisión de la detención y decidió mantenerlo detenido. El 22 de noviembre de 2012 la Sala I de cuestiones preliminares hizo pública la orden de detención dictada en contra de Simone Gbagbo el 29 de febrero de 2012. El Fiscal realizó 48 misiones en 05 países con fines investigativos.¹³⁹⁸

Igualmente, expone que en las situaciones de Uganda el Fiscal no realizó misiones, en la situación de Mali inicio el 16 de enero de 2013 una investigación oficial y realizó 12 misiones en 04 países. Con relación a los exámenes preliminares inicio evaluación de la situación de los buques de matrícula en la Unión de las Comoras, República Helénica y Reino de Camboya. Además, continuo en Afganistán, Colombia, Georgia, Guinea, Honduras, República de Corea, Nigeria. En ese período informo que estaban pendientes de ejecutar 12 órdenes de detención 04 de Uganda, 01 República Democrática del Congo, 04 Darfur, 02 Libia y 01 en Costa de Marfil.¹³⁹⁹

El décimo informe de la Corte para el período de 01 de agosto de 2013 al 31 de junio de 2014, en relación con la situación en la República del Congo en el caso contra Thomas Lubanga Dyilo la sala de apelaciones tomo numerosas decisiones en relación a apelaciones interlocutorias entre ellas 32 decisiones que reconocen la participación de las víctimas en el proceso y en otra rechazó la organización Child Soldiers como titular para entregar observaciones.

*“El 14 de enero de 2014 la Sala de apelaciones aceptó la solicitud del acusado de agregar un fundamento más a la apelación, cuya decisión estaba en curso en la sala de apelaciones. En el caso de Germain Katanga el 07 de marzo de 2014 la Sala II de primera instancia lo encontró culpable de 05 cargos por crímenes de guerra de lesa humanidad, pero fue absuelto de los cargos de violación, esclavitud sexual, utilización de niños menores de 15 años en hostilidades. Se les condenó el 23 de mayo de 2014 a 12 años prisión.”*¹⁴⁰⁰ La Fiscalía y la defensa retiraron las apelaciones del fallo y quedo firme el fallo. La Sala en pleno rechazo el 22 de julio de 2014 la solicitud de recusación contra el magistrado Van Dyn Wyngaert. En el caso contra Mathieu Ngudjolo Chui la sala de apelaciones dictó varias resoluciones con la apelación de la fiscalía contra el fallo del 18 de diciembre de 2012 y tomó resoluciones de 03 testigos.

¹³⁹⁸ CORTE Penal Internacional, 2013. *Óp. Cit.*

¹³⁹⁹ *Ídem.*

¹⁴⁰⁰ *Ídem.*

En el caso de Bosco Ntaganda la Sala II de cuestiones preliminares decidió nombrar 02 abogados para representar a las víctimas el 02 de diciembre de 2013. En este caso 1,120 víctimas asevero haber sido legitimadas para participar en la causa. El 09 de marzo de 2014 la sala confirmó 12 cargos de crímenes de guerra y 05 de lesa humanidad en contra de Bosco Ntaganda. El Fiscal realizo 01 misión de investigación para el caso de Germain Katanga, 83 misiones en 08 países en el caso de Bosco Ntaganda, 08 misiones de 04 países en el caso Kivu.¹⁴⁰¹

En relación a la situación en la *“República Centroafricana en el caso de Bemba Gombo el 20 de noviembre de 2012 la Sala II de cuestiones preliminares dictó 05 órdenes de detención contra Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean Jacques Mangenda Kabongo, Fidele Babala Wandu y Narcisse Árido por delitos en contra de la administración de justicia quienes comparecieron por primera vez ante la Sala de cuestiones preliminares entre noviembre de 2013 y marzo de 2014. La Sala III de primera instancia dio por concluida la etapa de presentación de pruebas y decidió que dictaría resoluciones por separado sobre la culpabilidad o inocencia y pena a imponerse”*¹⁴⁰².

El Fiscal realizó 19 misiones en 08 países con motivos de investigación. El 17 de marzo de 2014 la Sala II de cuestiones preliminares rechazó la solicitud de no intervenir en la causa del Fiscal y su personal y el 28 de mayo de 2014 rechazó la solicitud de Kilolo Musamba para que la sala ejerciera funciones en pleno y no por medio de un único magistrado. El 20 de junio de 2014 rechazó en pleno *“una solicitud de la defensa de recusar a magistrado Cuno Tarfusser y apartarlo de la etapa previa al juicio. El 11 de julio de 2014 la Sala de apelaciones confirmó la no excarcelación provisional de Mangenda Kabongo, Babala Wandu y Kilolo Musamba cuya apelación rechazó, el 24 de julio de 2014 la Sala II de cuestiones preliminares rechazó la solicitud de excarcelación de Narcisse Árido”*.¹⁴⁰³

El décimo informe de la Corte para el período de 01 de agosto de 2013 al 31 de junio de 2014 con relación a la situación en Uganda el Fiscal realizo investigaciones para

¹⁴⁰¹ CORTE Penal Internacional, 2014. Décimo informe anual, Página 02-17. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: <https://www.icc-cpi.int/iccdocs/presidency/ICC-Rep-UNGA-30-10-2014-Spa.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁴⁰² Ídem.

¹⁴⁰³ Ídem.

establecer las denuncias de la muerte de Okot Odhiambo entre octubre y diciembre de 2013, el fiscal realizó 05 misiones con motivo de investigación.¹⁴⁰⁴

En relación con la situación de Darfur en el caso contra Omar Hassan Ahmad Al-Bashir la Sala II de cuestiones preliminares dictó resoluciones que invitaban a las autoridades de Estados Unidos, Etiopía, Arabia Saudita, Kuwait, República Democrática del Congo, Chad, Qatar a colaborar con las actividades de la Corte. La Sala de cuestiones preliminares sobre la cooperación de Nigeria y República Democrática del Congo respecto a no colaborar con la detención a presentar observaciones respecto de esto. En el caso Abdallah Banda Abakaer Nourain, Saleh Mohammed Jerbo Jamus el 04 de octubre de 2013 la Sala IV de primera instancia concluyó el proceso contra Jerbo Jamus por la información de su fallecimiento. En el caso de Abakaer Nourain tomó la decisión de solicitar información de cooperación del gobierno de Sudán para garantizar la seguridad para su comparecencia. *“En el caso de Abdel Raheen Muhammed Hussein en septiembre de 2013 la Sala II de cuestiones preliminares solicito al gobierno de Chad y la República Centroafricana explicar porque no colaboraron en su detención. El Fiscal realizó 20 misiones con fines de investigación”*.¹⁴⁰⁵

Con relación con la situación de Kenya en el caso de William Samoei Ruto y Joshua Arap Sang el 13 de diciembre de 2013 rechazó el recurso de apelación del Fiscal contra la decisión de la Sala II de cuestiones preliminares de modificar el escrito de acusación. El 25 de octubre de 2013 la Sala V de apelaciones revocó el fallo de eximir la presencia de Ruto en el juicio, y el 15 de enero de 2014 resolvió oralmente y condicionó eximir la presencia de este en el Juicio de conformidad con la Regla 134 quater de procedimiento y prueba. El 17 de marzo de 2014 la Sala V de primera instancia aceptó la solicitud de citar 08 testigos, la apelación que se informó que [para la época del informe estaba en curso y el gobierno de Kenya aún se en curso de uso de su derecho a formular observaciones. En el caso contra Uhuru Muigai Kenyatta el 31 de julio de 2013 decidió no iniciar el juicio y postergó su inicio al 05 de febrero de 2014 la que también se modificó y lo postergó el 31 de marzo de 2014 para el inicio del juicio hasta el 07 de octubre de 2014. La sala decidió el 29 de julio de 2014 solicitar

¹⁴⁰⁴ CORTE Penal Internacional, 2014. *Óp. Cit.*

¹⁴⁰⁵ *Ídem.*

al gobierno de Kenya facilitar registros financieros y comunicaciones del señor Kenyatta. En el caso de Walter Osapiri Barasa el 02 de agosto de 2013 la Sala II de cuestiones preliminares dictó orden de detención en su contra. El fiscal realizó 73 misiones en 14 países con fines de investigación.¹⁴⁰⁶

Se informó sobre la situación en Libia en el caso contra Saif Al-Islam Gaddafi la Sala de apelaciones confirmó la resolución de Sala I sobre la admisibilidad del caso. El 11 de julio de 2014 la sala de cuestiones preliminares dictó resolución de apoyar el trabajo de la Corte de Libia. En el caso de Abdullah Al-Senussi el 24 de julio de 2014 la Sala de apelaciones confirmó la resolución que ratifica la inadmisibilidad de la causa ante la Corte por encontrarse un proceso en los tribunales nacionales de Libia. El Fiscal realizó 07 misiones en 04 países con fines de investigación.¹⁴⁰⁷

En cuanto a la situación de Costa de Marfil en el caso de Laurent Gbagbo el 12 de junio de 2014 la Sala I de cuestiones preliminares confirmó 04 cargos de crímenes de lesa humanidad y que serían juzgados en las Salas de primera instancia. En relación al examen de la detención del señor Gbagbo la Sala dictó resoluciones el 11 de noviembre de 2013, el 12 de marzo de 2014, el 11 de julio de 2014. En relación con el caso contra Simone Gbagbo el 30 de septiembre de 2013 el gobierno de Costa de Marfil impugnó la admisibilidad del caso y solicitud de aplazamiento de la orden de detención y entrega del acusado. El 28 de febrero de 2014 decidió apartar un abogado de la causa. En el caso de Charles Blé Gaudé el 30 de septiembre de 2013 la Sala I de cuestiones preliminares decidió desclasificar la orden de detención dictada en diciembre de 2011 en su contra. El Fiscal realizó 43 misiones en 05 países con fines de investigación.¹⁴⁰⁸

En relación con la situación realizó 24 misiones en 04 países en Mali. Para ese período informó que se encontraban pendientes de ejecutar 12 órdenes de detención, 04 Uganda, 01 República Democrática del Congo, 04 Darfur, 01 Libia, 01 Costa de Marfil, 01 Kenya. En relación a los exámenes preliminares inició el análisis de la situación en Iraq, República centroafricana, Ucrania; continuó analizando la de Afganistán, Colombia, Georgia, Guinea, Honduras, Nigeria, Flotilla para la libertad de

¹⁴⁰⁶ CORTE Penal Internacional, 2014. *Óp. Cit.*

¹⁴⁰⁷ Ídem

¹⁴⁰⁸ Ídem

Gaza (Camoras, Grecia y Camboya) y concluyo el análisis en la República de Corea.¹⁴⁰⁹

En la situación de la República Democrática del Congo el fiscal realizo 44 misiones en 06 países sobre el caso de Bosco Ntaganda; en relación con el caso de Kivu realizo misiones a 02 países. En el caso de Thomas Lubanga Dyilo el 01 de diciembre de 2014 la Sala de apelaciones confirmo el fallo que lo declaraba culpable y lo condenaba a 14 años de prisión y para la fecha se informó que estaban en curso las actuaciones de las reparaciones por la modificación de la decisión de reparaciones a favor de las víctimas, ordenándole al fondo fiduciario presentar un proyecto de aplicaciones de reparaciones colectivas. En el caso de Germain Katanga al 25 de junio de 2014 se encontraban pendientes las posibles reparaciones para las víctimas y la apelación fue desistida por la defensa y fiscalía por lo que el fallo se encuentra firme. En el caso de Mathieu Ngudjolo Chui el 27 de febrero de 2015 confirmó el fallo absolutorio. En el caso de Bosco Ntaganda 09 de junio de 2014 previsto para que iniciara el juicio ante la Sala VI de primera instancia.¹⁴¹⁰

El undécimo informe de la Corte para el período de 01 de agosto de 2014 al 31 de junio de 2015, la Corte informó en el caso de Darfur el fiscal realizo 20 misiones en 09 países con fines de investigación. En el asunto de *“Omar Hassan Ahmad Al-Bashir el 09 de marzo de 2015 la Sala II de cuestiones preliminares determino que Sudan no había cooperado con el trabajo de la Corte para detener al acusado. En el caso de Abdallah Banda Abakaer Nourain el 11 de septiembre de 2014 la Sala IV de primera instancia dictó orden de detención en su contra y canceló la fecha programada del comienzo del juicio. El 04 de abril de 2015 la Sala de apelaciones rechazó el recurso de apelación del Señor Banda contra la decisión por la cual se sustituyó la orden de comparecencia por orden de detención. En el caso de Abdel Raheem Muhammad Hussein el 26 de junio de 2015 la Sala II de cuestiones preliminares determino que Sudán no había cooperado con la Corte para detener al acusado en su territorio”*.¹⁴¹¹

¹⁴⁰⁹ CORTE Penal Internacional, 2014. Óp. Cit

¹⁴¹⁰ Ídem.

¹⁴¹¹ CORTE Penal Internacional, 2015. Undécimo informe anual, Página 04-13. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/UNGA_2015-Spa.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

En la situación de la República Centroafricana el 24 de septiembre de 2014 el fiscal anuncio el inicio de una segunda investigación, además realizo 35 misiones en 08 países. Que el caso contra Jean-Pierre Bemba Gombo se encontraba en proceso de deliberación. En el caso contra Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidelé Babala Wandu y Narcisse Árido la Sala II de cuestiones preliminares el 11 de noviembre de 2014 confirmó parcialmente los cargos contra los 05 sospechosos por los delitos en contra de la administración de justicia y ordenó que fueran sometidos a juicio en la sala VII de primera instancia.¹⁴¹²

Sobre la situación de Uganda el fiscal realizo 29 misiones para desarrollar su investigación en el caso contra Dominic Ongwen quien fue detenido el 16 de enero de 2015 y el 21 de enero de 2015 presentado a la Corte. En el caso de Okot Odhiambo el fiscal trabajo en conjunto con las autoridades para comprobar su muerte.¹⁴¹³

En el asunto de Libia el fiscal realizo 13 misiones en 07 países con fines de investigación. En el caso de *“Saif Al-Islam Gaddafi el 10 de diciembre de 2014 la Sala I de cuestiones preliminares determino que el gobierno de Libia incurrió el incumplimiento al no ejecutar 02 solicitudes y decidió remitirlo al Consejo de Seguridad. En la situación de Kenya, en el caso de William Samoei Ruto y Joshua Arap Sang continui y en el caso de Uhuru Muigai Kenyatta, la Sala V de primera instancia el 03 de diciembre de 2014 rechazó la solicitud para remitir la cuestión en relación a la falta de cooperación de las autoridades de Kenya a la Asamblea General. De la apelación interpuesta por la fiscalía afirmó estar en curso. El 13 de marzo de 2015 la Sala V de primera instancia archivo la causa en contra de Uhuru Muigai Kenyatta”*.¹⁴¹⁴

Con relación a la situación de Costa de Marfil, el fiscal realizo 42 misiones en 07 países con fines de investigación. En el caso de Laurent Gbagbo y Charles Blé Gaudé, les fueron confirmados los cargos el 12 de junio de 2014 y el 11 de diciembre de 2014 respectivamente. El 11 de marzo de 2015 la Sala I de primera instancia decidió acumular los casos de ambos en una sola causa y se fijó el inicio el 10 de noviembre de 2015. En el caso de Simone Gbagbo la Sala I de cuestiones preliminares el 11 de

¹⁴¹² CORTE Penal Internacional, 2015. *Óp. Cit.*

¹⁴¹³ Ídem.

¹⁴¹⁴ Ídem

diciembre de 2014 *“rechazó la excepción de inadmisibilidad interpuesta por el gobierno de Costa de Marfil. La Sala de apelaciones el 27 de mayo de 2015 confirmó la decisión de la Sala I de cuestiones preliminares de la admisibilidad del caso ante la jurisdicción de la corte. En la situación de Mali el fiscal realizó 46 misiones en 09 países con fines de investigación”*.¹⁴¹⁵

Para ese período la Corte informó que 12 órdenes de detención estaban pendientes de ejecutar, 01 República democrática del Congo, 01 Costa de Marfil, 01 Kenya, 01 Libia, 05 Darfur, 03 Uganda. El fiscal en relación con los exámenes preliminares inicio el análisis del Estado de Palestina y continuó el análisis de las situaciones de Afganistán, Colombia, Georgia, Guinea, Honduras, Iraq, Nigeria, Ucrania; en las situaciones de la República Centroafricana, La Flotilla para la libertad de Gaza fueron concluidas en este período. En este periodo se autorizó la participación de 4,002 víctimas en los casos.¹⁴¹⁶

El duodécimo informe de la Corte para el período del 01 de agosto de 2015 al 31 de julio de 2016 en relación de la situación en la República Democrática del Congo el 2 de septiembre de 2015 se inició el juicio contra Bosco Ntaganda y el Fiscal realizo 15 misiones en 06 países con fines de investigación; el 22 de septiembre 2015 la Sala de Apelaciones denegó la reducción de sentencia de Thomas Lubanga Dyilo y la Presidencia de la Corte tomó nota el 08 de diciembre de 2015 de la decisión de cumplir su condena en el Congo. En el caso de Germain Katanga el 13 de noviembre de 2015 la Sala de Apelaciones decidió reducir en 03 años y 08 meses la pena de prisión de 12 años, fijando como fecha de cumplimiento de la condena el 18 de enero de 2016.¹⁴¹⁷

En relación de la situación en la República Centroafricana el Fiscal realizo en 83 misiones en 13 países para reunir pruebas. En el caso de Jean-Pierre Bemba Gombo la Sala II de primera instancia el 21 de marzo de 2016 declaró culpable al Señor Bemba de 02 cargos por crímenes de lesa humanidad, de asesinato y violencia, 03 crímenes de guerra, asesinato, violación y saqueo. El 04 de abril de 2016 el acusado

¹⁴¹⁵ CORTE Penal Internacional, 2015. *Óp. Cit.*

¹⁴¹⁶ *Ídem.*

¹⁴¹⁷ CORTE Penal Internacional, 2016. Duodécimo informe anual. Página 02-14. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/71/342&referer=http://research.un.org/en/docs/law/courts&Lang=S [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

interpuso apelación sobre su declaración de condena y le concedieron prórroga para interponer recurso de apelación el 19 de septiembre de 2015. La Sala III de primera instancia el 21 de junio de 2016 condeno a Bemba Gombo a 18 años de prisión. En el caso contra Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidelé Babala Wandu y Narcisse Árido se inició su juicio el 29 de septiembre de 2015 e informo la corte que estaba pendiente de dictar sentencia.¹⁴¹⁸

En cuanto al caso de Dominic Ongwen, de Uganda, la fiscalía realizó 77 misiones en 03 países, el 23 de marzo de 2016 fueron confirmados los cargos en su contra por la Sala II de cuestiones preliminares nombrando a la Sala IX de Primera Instancia para conocer el caso. En el caso contra Joseph Kony y Vincent Otti el 10 de septiembre de 2015 la Sala II de cuestiones preliminares sobreseyó la causa contra Okot Odhiambo por haber fallecido y decidió continuar con los acusados vivos restantes.¹⁴¹⁹

En relación de la situación en Darfur el fiscal realizo 21 misiones en 07 países. En el caso contra Omar Hassan Ahmad Al-Bashir el 11 de julio de 2016 la Sala II de cuestiones preliminares determinó que los Estados de Djibouti y Uganda no colaboraron con la Corte, tomando la decisión de remitir la situación a la *“Asamblea del Estatuto de Roma y al Consejo de Seguridad de la ONU. En el caso contra Abdallah Banda Abakaer Nourain la Sala IV de cuestiones preliminares determinó que el Estado de Sudán no coopero con la Corte”*.¹⁴²⁰

Sobre la situación en Kenya el Fiscal realizó 03 misiones en 03 países para reunir pruebas. En el caso contra William Samoei Ruto y Joshua Arap Sang el 05 de abril de 2016 la Sala V decidió sobreseer el caso contra los acusados y dejarlos en libertad. En el caso contra Uhuru Muigai Kenyatta el 18 de agosto de 2015 la Sala de Apelaciones revocó la decisión de la Sala V de primera instancia que había rechazado la solicitud del fiscal de declarar la falta de cooperación del gobierno de Kenya con la Corte. En el caso de Paul Guicheru y Philip Kipkoech Bett la Sala de cuestiones preliminares el 10 de septiembre de 2015 hizo pública la orden de detención dictada

¹⁴¹⁸ CORTE Penal Internacional, 2015. *Óp. Cit.*

¹⁴¹⁹ *Ídem.*

¹⁴²⁰ *Ídem*

el 10 de marzo de 2015 y el 30 de julio de 2016 fueron detenidos y presentados ante la Corte.¹⁴²¹

En relación a la situación de Libia el Fiscal realizó 14 misiones en 07 países. En el caso contra Saif Al-Islam Gaddafi el 02 de junio de 2016 la Sala I de cuestiones preliminares ordenó mantener el enlace con las autoridades de Libia a fin de determinar si se podía hacer llegar la orden de detención a la milicia de Zintan.¹⁴²²

Sobre la situación de Costa De Marfil el fiscal realizó 35 misiones en 09 países para reunir pruebas. En el caso contra Laurent Gbagbo y Charles Blé Goudé se dio inicio el proceso el 28 de enero de 2016.¹⁴²³

Con relación a la situación de Mali el fiscal realizó 25 misiones en 07 países para reunir pruebas. En el caso contra Ahmas Al Faqi AL Mahdi el 18 de septiembre de 2015 la Sala I de cuestiones preliminares emitió orden de detención en su contra y asignó la Sala VIII que prevé iniciar el juicio el 22 de agosto de 2016. En la situación de Georgia el 27 de enero de 2016 la Sala I de primera instancia autorizó iniciar una investigación al Fiscal.¹⁴²⁴

La Corte informó que había 13 órdenes de detención pendientes de ejecutar, 01 República democrática del Congo, 01 Costa de Marfil, 03 Kenya, 01 Libia, 05 Darfur, 02 Uganda. El fiscal con relación a los exámenes preliminares inició el análisis de la situación de Burundi, continuó con el análisis de la situación en Afganistán, Colombia, Guinea, Iraq, Nigeria, Ucrania, Palestina, Camerún que fue remitida; en las situaciones de Honduras, Georgia fueron concluidas en este curso. En este periodo se autorizó la participación de 2,571 víctimas en los casos.¹⁴²⁵

El décimo tercer informe de la Corte para el período del 01 de agosto de 2016 al 31 de julio de 2017, las Salas de la Corte tomaron las siguientes decisiones: con relación a la situación de la República Democrática del Congo el fiscal realizó 16 misiones a 06 países. En el caso de Bosco Ntaganda y Kivu. En el caso de Ntaganda concluyó la presentación de pruebas el 29 de marzo de 2017, el 28 de abril de 2017 la Sala de

¹⁴²¹ CORTE Penal Internacional, 2016. *Óp. Cit.*

¹⁴²² *Ídem*

¹⁴²³ *Ídem*

¹⁴²⁴ *Ídem*

¹⁴²⁵ *Ídem*

primera instancia rechazó la solicitud de la defensa de suspender actuaciones. El 08 de marzo de 2017 y el 15 de junio de 2017 la Sala resolvió 02 apelaciones presentadas por la defensa. En el caso de Germain Katanga su condena se terminó el 18 de enero de 2016, pero que continuaba detenido por estar acusado de delitos en la jurisdicción nacional. La Sala II de primera instancia dictó ordenes de reparación individuales y colectivas el 24 de marzo de 2017; el fondo fiduciario de víctimas notificó que podía realizar el pago de reparaciones a las víctimas el 17 de julio de 2017 para lo cual el 25 de julio de 2017 presentó su plan para la aplicación de orden de las reparaciones.¹⁴²⁶

Con relación a la situación de la República Democrática del Congo en el caso de Thomas Lubanga Dyilo cursaba un proceso de revisión de su condena. El 21 de octubre de 2016 y el 06 de abril d 2017 aprobó proyectos de reparación. El 15 de julio de 2016 la Sala II de primera instancia ordenó a la secretaría prestar ayuda al fondo fiduciario y representantes víctimas para determinar que víctimas tenían derecho a recibir reparaciones.¹⁴²⁷

En ese período las Salas de la Corte tomaron las siguientes decisiones: en relación con la situación de la República Centroafricana el fiscal realizó 80 misiones a 10 países para recabar pruebas. En el caso contra Jean-Pierre Bemba Gombo el 19 de septiembre de 2016 presentaron documento de apelación y el 09 de febrero de 2017 terminó la exposición de argumentos. El 21 de octubre de 2016 la fiscalía y la defensa presentaron documentos de apelación y terminaron la exposición de argumentos el 23 de febrero de 2017. En este proceso 5,229 víctimas habían sido aceptadas en el proceso e iniciado los procesos de reparación. En junio de 2017 se estableció un grupo de 04 expertos para presentar informes sobre las reparaciones.¹⁴²⁸

En relación a la situación de la República Centroafricana en el caso en contra de Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean Jacques Mangenda Kabongo, Fidele Babala Wandu y Narcisse Arore el 19 de octubre de 2016 la Sala VII de primera instancia dictó sentencia declarándolos culpables y el 22 de marzo de

¹⁴²⁶ CORTE Penal Internacional, 2017. Duodécimo informe anual , Página 04-14. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/A72349/170817-rep-UNSC_ESP.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁴²⁷ Ídem

¹⁴²⁸ Ídem

2017 dictó condena en a Babala y lo condenó a 06 meses de prisión y a Árido a 11 meses de prisión e igualmente determinó que sus condenas se habían cumplido durante su privación de libertad provisional. Al acusado Managenda lo condeno a 2 años de prisión y esta pena fue suspendida. Al acusado Kilolo lo condeno a 2 años y 06 meses de prisión con suspensión de la pena y una multa de 30,000 euros. Al acusado Memba lo condenó a 01 año de prisión y una multa de 300,000 euros.¹⁴²⁹

Con relación con la situación en Uganda en el caso contra Domenic Ongwen el fiscal realizó 29 misiones en 02 países, 01 en conjunto con el gobierno de Uganda como misión de divulgación. El 06 de diciembre de 2016 inició el juicio en contra de Ongwen y 2,083 víctimas han sido aprobadas de participar. En relación con la situación en Darfur el fiscal realizo 26 misiones a 12 países. En el caso contra Omar Hassan Ahmad Al-Bashir el 07 de abril de 2017 la Sala II de cuestiones preliminares en conjunto con el gobierno de Sudáfrica por no hacer efectiva la orden de detención en contra del acusado. La Sala II de cuestiones preliminares determino el 06 de julio de 2017 que el Gobierno de Sudáfrica no cumplió con la orden de detención aun cuando en su jurisdicción existen procesos en contra del acusado.¹⁴³⁰

Sobre la situación en Libia el fiscal realizo 44 misiones en 09 países para recabar información. En el caso contra Saif Al -Islam Gaddafi el 21 de noviembre de 2016 rechazó la solicitud del Fiscal de transmitir la solicitud de detención y entrega del acusado a la base militar de Zintan por no ser una entidad estatal y necesitar aprobación estatal para hacer esta solicitud. En el caso contra Al-Tuhamy Mohammed Khaled el 24 de abril de 2017 la Sala I de cuestiones preliminares decidió hacer pública la orden de detención dictada el 18 de abril de 2013. Encuanto a la situación en Costa de Margil el fiscal realizo 47 misiones a 10 países para recabar información. En el caso de Laurent Gbagbo y Charles Blé Gaudé inicio su juicio el 28 de enero de 2016 en la Sala I de primera instancia y se no aceptó nuevas víctimas como intervinientes. La Sala de apelaciones resolvió el 19 de julio de 2017 que revocaba lo dispuesto por la Sala I de primera instancia de mantenerlo detenido y lo insta a revisar esa decisión.¹⁴³¹

¹⁴²⁹ CORTE Penal Internacional, 2017. *Óp. Cit.*

¹⁴³⁰ *Ídem*

¹⁴³¹ *Ídem*

Con relación a la situación de Mali el fiscal realizó 23 misiones en 04 países para recabar información; en el caso de Ahmad Al Faqi Al Mahdi el 27 de septiembre la Sala VII declaró la culpabilidad y lo condeno a 09 años de prisión, el 17 de agosto de 2017 emitió la Sala una orden de reparación. En la situación de Georgia el fiscal realizó 19 misiones en 04 países, el 25 de julio de 2017 la Corte y el gobierno concertaron un acuerdo de cooperación.¹⁴³²

La Corte expone que en ese período existían 15 órdenes de captura pendientes de ejecutar, 01 en República Democrática del Congo, 02 Uganda, 05 Darfur, 03 Kenya, 03 Libia, 01 Costa de Marfil. El Fiscal inicio examen preliminar en la situación de Gabón, continuo con el estudio de la situación en Afganistán, Burundi, Colombia, Guinea, Iraq y Reino Unido, Nigeria, Ucrania, Palestina, Grecia y Camboya.¹⁴³³

El décimo cuarto informe de la Corte para el período del 01 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2018, las Salas de la Corte tomaron las siguientes decisiones: en la situación de la República Democrática del Congo en el caso de Thomas Lubanga Dyilo, el 03 de noviembre de 2017 la Sala de Apelaciones determinó, que no existían cambios significativos en circunstancias que justificaran reducir su condena que cumple el 15 de marzo de 2020. El 15 de diciembre de 2017 la Sala II de primera instancia adoptó decisión fijando en 10 millones dólares la responsabilidad civil del acusado, además determinó que de 473 solicitudes 425 reúnen los requisitos para beneficiarse de las reparaciones. En el caso de Germain Katanga el 08 de marzo de 2018 la Sala de Apelaciones confirmó parcialmente la orden de reparaciones y remitió a la Sala II de primera instancia para que lo reconsiderara.

El 19 de julio de 2018 la Sala II de primera instancia desestimó 05 solicitudes de consideración de reparaciones. En el caso de Bosco Ntaganda la Sala VI de primera instancia negó la petición de la defensa de moción de sobreseimiento de la causa. El 05 de septiembre de 2017 la Sala de apelaciones resolvió apelaciones interlocutorias y confirmó la decisión de la Sala VI de primera instancia. El 26 de febrero de 2018 la

¹⁴³² CORTE Penal Internacional, 2017. *Óp. Cit*

¹⁴³³ *Ídem.*

sala desestimó la solicitud de fiscalía de presentar pruebas de refutación y seguía su curso. El fiscal realizó 09 misiones en 03 países para reunir pruebas.¹⁴³⁴

De la situación de Uganda en el caso de Dominic Ongwen del 03 al 06 de junio de 2018 viajaron a 04 lugares en Uganda para investigar presuntos ataques en Pajul, Odek, Ludodo y Abok y realizó otras 30 misiones en 02 países.¹⁴³⁵

Sobre la situación de la República Centroafricana en el caso de Jean-Pierre Bemba Gombo, el 08 de junio de 2018 la Sala de apelaciones dictó sentencia sobre la apelación de su sentencia condenatoria anulándola y absolviéndolo de todos los cargos. La Sala de apelaciones desestimó las apelaciones contra la condena porque dejó de tener efecto al anularse su sentencia, pero no fue puesto en libertad por tener otro juicio pendiente. *“En el caso contra de Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean Jacques Mangenda Kabongo, Fidele Babala Wandu y Narcisse Árido el 08 de marzo de 2018 la sala de apelaciones dictó los fallos sobre los 05 condenados. En el caso de las condenas de los señores Bemba, Kilolo y Mangenda fueron revocadas. En el caso de Babala y Árido las penas fueron confirmadas. El 15 de junio de 2018 la Sala II de primera instancia ordenó la libertad provisional de Bemba Gombo. El fiscal realizó 98 misiones a 11 países con fines de investigación”.*¹⁴³⁶

En la situación de Darfur en el caso de *“Omar Hassan Al-Bashir el 11 de diciembre de 2017 la Sala II de cuestiones preliminares determinó que Jordania incumplió con sus obligaciones por no ejecutar la orden de detención del acusado y remitió el asunto al Consejo de seguridad y la Asamblea de Estados del Estatuto de Roma”*¹⁴³⁷.

El Estado de Jordania obtuvo autorización para apelar el 12 de marzo de 2018 presentó su escrito. El fiscal realizó 35 misiones a 18 países con fines de investigación. En la situación de Kenya el fiscal recibió información. En la situación de Libia en el caso de *“Saif Al-Islam Gaddafi el 14 de junio de 2018 la Sala I de cuestiones preliminares adoptó decisiones sobre impugnación de admisibilidad del caso ante la*

¹⁴³⁴ CORTE Penal Internacional, 2018. Décimo cuarto informe anual. Página 02-14. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/a_73_334/N1826370_SPA.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁴³⁵ Ídem

¹⁴³⁶ Ídem

¹⁴³⁷ Ídem

Corte. En el caso de Mahmond Mustafa Busayf Al-Werfalli la Sala I dictó orden de detención el 15 de agosto de 2017 y el 04 de julio de 2019. El fiscal realizó 48 misiones en 11 países con fines de investigación”. ¹⁴³⁸

Sobre la situación de Costa de Marfil en el caso contra Laurent Gbagbo y Charles Blé Gaudé en curso y se planeaba que las actuaciones continuaran el 01 de octubre de 2018. El Fiscal realizó 47 misiones a 09 países con fines de investigación. ¹⁴³⁹

En la situación de Mali en el caso de Ahmad Al Faqi Al Mahdi el 17 de agosto de 2017 la Sala VIII de primera instancia ordenó la reparación para las víctimas por el monto de 2,7 millones de euros. El 08 de marzo de 2018 la Sala de apelaciones dictó sentencia modificando la orden de reparación, permitiendo que las víctimas puedan solicitar examen de solicitudes que no desean revelar su identidad al condenado y dar la posibilidad que los solicitantes pudiesen solicitar revisión judicial de los resultados negativos del proceso de selección, en lo demás confirmo la sentencia. El 12 de julio de 2018 la sala VIII de primera instancia aprobó el proyecto de plan de aplicación del fondo fiduciario en beneficio de las víctimas. En el caso de Al-Hassan Ag Abdaul Aziz Ag Mohammed Ag Mahmoud el 27 de marzo de 2018 la Sala I de cuestiones preliminares dictó orden de detención la que se hizo efectiva, siendo entregado el sindicado a la corte el 31 de marzo de 2018, donde compareció el 04 de abril de 2018. El 24 de mayo de 2018 dictó decisión sobre principios aplicables a solicitudes de víctimas. El Fiscal realizó 25 misiones a 04 países con fines de investigación. ¹⁴⁴⁰

En la situación de Georgia el fiscal realizó 32 misiones a 08 países con fines de investigación. En cuanto a Burundi el 25 de octubre de 2017 la sala III de cuestiones preliminares autorizó al fiscal para iniciar una investigación. El Fiscal realizó 24 misiones en 07 países con fines de investigación. En la situación de Camoras, Grecia y Camboya el 02 de marzo de 2018 dictó decisión de plazos para la solicitud poder iniciar una investigación. En la deportación de Myanmar y Rohinyas la sala I de

¹⁴³⁸ CORTE Penal Internacional, 2018. *Óp. Cit.*

¹⁴³⁹ *Ídem*

¹⁴⁴⁰ *Ídem*

cuestiones preliminares el 07 de mayo de 2018 autorizó a Bangladesh presenté observaciones en relación al segundo.¹⁴⁴¹

El fiscal en este periodo inició examen preliminar de situación de Venezuela y Filipinas; concluyó examen preliminar en la situación de Bangladesh y Afganistán; continuó analizando las situaciones de Colombia, Gabón, Guinea, Iraq/Reino Unido e Irlanda del Norte, Nigeria, Palestina, Ucrania y Camoras, Grecia y Camboya.¹⁴⁴²

El décimo quinto informa de la Corte para el período del 01 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019 expone que las Salas de la Corte tomaron las siguientes decisiones: con relación a la situación en la República Democrática del Congo en el caso de Thomas Lubanga Dylo la Sala de apelaciones confirmó el 18 de julio de 2019 en 10 millones de dólares como monto de las reparaciones. Que en el caso contra Germain Katan estaba en curso la ejecución de las ordenes de reparación. En el proceso contra Bosca Ntaganda se dictó sentencia el 08 de julio de 2019 declarándolo culpable de 05 cargos por crímenes de lesa humanidad y 13 de crímenes de guerra El 19 de julio de 2019 la Sala de Apelación prorrogó el plazo para presentar apelaciones contra la sentencia. El Fiscal no realizo misiones con fines de investigación lo hacía en colaboración con autoridades interesadas.¹⁴⁴³

Con relación a la situación en Uganda en el caso de Domenic Ongwen se informó que se estaba llevando a cabo el juicio. El fiscal realizó 13 misiones en 02 países con fines de investigación. En cuanto a la situación en la República Centroafricana en el caso contra Jean-Pierre Bemba Gombo la Sala III de primera instancia el 03 de agosto de 2018 adoptó decisión definitiva en relación a las reparaciones indicando que no se podían llevar a cabo por haber sido absuelto de los cargos. En el caso contra Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean Jacques Mangenda Kabongo, Fidele Babala Wandu y Narcisse Árido el 17 de septiembre de 2018 la Sala VII de primera instancia condenó de manera definitiva a Kilolo a 11 meses de prisión y una

¹⁴⁴¹ CORTE Penal Internacional, 2018. *Óp. Cit.*

¹⁴⁴² Ídem

¹⁴⁴³ Ídem

multa de 30,000 euros, a Bemba a 12 meses de prisión y una multa de 300,000 euros. La apelación interpuesta por Bemba en contra de esa sentencia estaba en curso.¹⁴⁴⁴

Sobre la situación en la República Centroafricana en relación con el caso contra Alfred Yekatom y Patrice Eduard Ngaissona el 20 de febrero de 2019 la Sala decidió acumular la causa. El 11 de noviembre de 2018 la Sala II de cuestiones preliminares emitió orden de detención en contra de Yekatom y el 07 de diciembre de 2018 emitió orden de detención en contra de Ngaissona, ambos han comparecido ante la corte. El fiscal realizó 108 misiones a 11 países con fines de investigación.¹⁴⁴⁵

Con relación a la situación en Darfur en el caso contra Omar Hassan Ahmad Al-Bashir el 06 de mayo de 2018 la Sala de apelaciones confirmó que Jordania no colaboró con la Corte para detener al acusado. En este periodo el fiscal realizó 19 misiones en 06 países con fines de investigación.¹⁴⁴⁶

En relación a la situación en Kenya el fiscal realizó 01 misión a 01 país con fines de investigación; de Libia en el caso contra Saif Al- Islam Gadafi la Sala I de cuestiones preliminares el 05 de abril de 2019 la sala desestimó el recurso interpuesto por el acusado en contra de la admisibilidad del caso ante la jurisdicción de la corte. Relacionado con Costa de Marfil en el caso contra Laurent Gbagbo y Charle Blé Gaudé el 15 de enero de 2019 la Sala I de primera instancia absolvió a los acusados y el 16 d julio de 2019 expuso los motivos por los que se les absolvió. El 19 de julio de 2019 la Sala de Apelaciones otorgó al fiscal la apelación para prorrogar el tiempo para apelar la sentencia absolutoria y el 01 de febrero de 2019 se le impuso condiciones a su concesión de libertad para garantizar su presencia en la corte en el futuro. El Fiscal realizó 35 misiones a 08 países con fines de investigación.¹⁴⁴⁷

Con relación a la situación en Mali en el caso contra Ahmad Al Faqi Al Mahdi el 04 de marzo de 2019 la Sala VIII de primera instancia aprobó una versión actualizada de plan de aplicación de reparaciones, a la fecha del informe habían aprobado 12 proyectos de reparación. En el caso contra Al Hassan Ag Abdoul Ariz Ag y Mohammed

¹⁴⁴⁴ CORTE Penal Internacional, 2019. Décimo quinto informe anual , Página 02-15. En: *United Nations* [en línea]. Disponible en: <https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/A-74-324-ES.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁴⁴⁵ Ídem

¹⁴⁴⁶ Ídem

¹⁴⁴⁷ Ídem

Ag Mahmoud las audiencias de confirmación de cargos se llevaron a cabo del 08 de julio de 2019 al 17 de julio de 2019. El Fiscal realizó 20 misiones a 04 países con fines de investigación.¹⁴⁴⁸

La Corte expuso que sus Salas tomaron las siguientes decisiones: con relación a Georgia el fiscal realizó 36 misiones a 07 países con fines de recabar información para la investigación; en la situación en Burundi el fiscal realizó 32 misiones a 07 países con fines de investigación. En cuanto a los hechos de Afganistán el 12 de abril de 2019 la Sala II de cuestiones preliminares desestimó la solicitud del Fiscal de autorizar iniciar una investigación; el 30 de mayo de 2019 el Magistrado Mindua presentó su opinión separada y concurrente. En relación con la situación con los buques de carga de Camoras, Grecia y Camboya el 15 de noviembre de 2018 la Sala I de cuestiones preliminares decidió pedirle al Fiscal que reconsiderara su decisión de no realizar investigación después del 15 de mayo de 2019. El 03 de mayo de 2019 la Sala de apelaciones tomó la decisión de dictar sentencia el 02 de septiembre de 2019.¹⁴⁴⁹

De la situación en Bangladesh y Myanmar la Sala I de cuestiones preliminares el 06 de septiembre de 2018 decidió que la corte tiene competencia para conocer sobre la supuesta deportación de miembros de la población de Rohinya. De la participación de las víctimas 13,391 lo hicieron. En relación con los exámenes preliminares de la situación, el Fiscal en este periodo concluyó el de Gabón, Bangladesh y Myanmar, y Afganistán; mantuvo en curso el examen de Colombia, Guinea, Filipinas, Ucrania, Iraq-Reino Unido-Irlanda del Norte, Venezuela, Palestina.¹⁴⁵⁰

23. ANÁLISIS CUALITATIVO:

Luego de este completo estudio analítico en los aspectos que a mi juicio consideré de mayor relevancia, se puede establecer que la Corte Penal Internacional no ha contribuido lo suficiente en la lucha contra la impunidad y fortalecimiento del estado de derecho, si bien su creación ha significado un importante avance para combatir la impunidad en los casos de gravísimas violaciones al derecho internacional

¹⁴⁴⁸ CORTE Penal Internacional, 2019. *Óp. Cit.*

¹⁴⁴⁹ *Ídem*

¹⁴⁵⁰ *Ídem*

humanitario, sin embargo, a nivel de resultados estos dado el enorme desafío por la complejidad de los hechos y las dificultades para la investigación, han sido muy limitados acorde a con las expectativas generadas, en adición al bajo número de casos conocidos y el lento trámite en el curso del tiempo.

Siendo un tribunal permanente, se esperaría que sus resultados fueran mejores, pero las presiones políticas y la falta de colaboración de los Estados en donde se debe investigar han limitado su trabajo. No se puede obtener un promedio de su trabajo por la forma en que este se realiza.

A continuación, se presenta de forma gráfica y sintética el trabajo realizado por la Corte Penal Internacional hasta el momento.

		Mandato	Duración del Mandato	Cesación de los hechos que originaron el mandato	Inicio del primer juicio	Universo de casos	Casos procesados y/o relaciones procesales	Tiempo promedio de los casos	Casos pendientes de resolución	% Casos presentados versus casos resueltos	% Casos pasibles de procesamiento versus casos resueltos
1	Corte Penal Internacional	Persecución de Crímenes más graves de trascendencia internacional.	Indefinido	Esta creado para hechos futuros	Enero 2009	29 casos 10 exámenes preliminares 13 situaciones bajo investigación	29	No se puede establecer	No se puede establecer	No se puede determinar aún	No se puede determinar aún

SUB - SECCIÓN A.5

PRINCIPIO DE JUSTICIA UNIVERSAL

El Principio de Justicia Universal, se define como:

“La jurisdicción universal¹⁴⁵¹ es el principio según el cual a todos los estados les compete llevar ante la Justicia a los perpetradores de ciertos crímenes, independientemente de dónde se cometiera el crimen y la nacionalidad de los responsables y sus víctimas. Es la respuesta que ofrece el Derecho Internacional ante el espectáculo de los tiranos y torturadores encubiertos por la impunidad y las amnistías que han obtenido en sus países”¹⁴⁵².

Para Valencia Villa la Jurisdicción Universal es el *“Principio según el cual cualquier Estado, por el solo hecho de formar parte de la comunidad internacional, tiene*

¹⁴⁵¹ “La justicia universal no es ni más ni menos que la aplicación por parte de los jueces de cualquier país, ... de lo que es el derecho internacional, como consecuencia de las obligaciones que establece en determinadas materias de hacerlo a todos los Estados y, específicamente, en materia de protección de los derechos humanos frente a los ataques más graves que se hayan podido cometer, no importa donde se hayan cometido estas y si ninguna jurisdicción penal preferente ha actuado previamente.”

ASOCIACIÓN Pro Derechos Humanos de España- APDHE, 2015. La Justicia Universal en el Derecho Internacional: Mesa Redonda de Expertos. En: Asociación Pro Derechos Humanos de España [en línea]. España: Federación Internacional por los Derechos Humanos, pp. 1- 37. [Consulta: 10 de diciembre de 2020]. Sin DOI. Disponible en: http://www.apdhe.org/wp-content/uploads/2015/07/justicia_universal_derecho_internacional_apdhe.pdf

“El Artículo 1 (1) de Los Principios de Princeton de Justicia Universal la definen como: “Jurisdicción Universal es la jurisdicción penal basada solamente en la naturaleza del delito, independientemente del lugar donde se cometió el crimen, la nacionalidad del autor del delito denunciado o condenado, la nacionalidad de la víctima, o de cualquier otro tipo de conexión al estado ejercer dicha jurisdicción.” Article 1 (1). Universal Jurisdiction is criminal jurisdiction based solely on the nature of the crime, without regard to where the crime was committed, the nationality of the alleged or convicted perpetrator, the nationality of the victim, or any other connection to the state exercising such jurisdiction Princeton 2001”.

La Asociación Internacional de Derecho citado por Tawfiq Ladan la define como: “En virtud del principio de jurisdicción universal, un Estado tiene derecho, a iniciar un procedimiento con respecto a determinados delitos graves, con independencia del lugar del crimen, y con independencia de la nacionalidad del autor del hecho. La única conexión entre el delito y el Estado acusador que se requiere es la presencia física del presunto delincuente en la jurisdicción de ese Estado” Tawfiq 2009 p.16 “Under the principle of universal jurisdiction, a state is entitled, or even required to bring proceedings in respect of certain serious crimes, irrespective of the location of the crime, and irrespective of the nationality of the perpetrator or the victim. The only connection between the crime and the prosecuting state that may be required is the physical presence of the alleged offender within the jurisdiction of that state.”

TAWFIQ Ladan, Muhammed, 2009. Universal Jurisdiction and Prosecution of International Crimes: Problems and Challenges. En: *Nigerian Institute of Advanced Legal Studies* Lagos, 2009. Página: 5. [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁴⁵² BRODY, Reed. 2009. Llanto por la jurisdicción universal. En: *Público* [en línea]. Disponible en: <http://blogs.pUBLICO.es/dominiopublico/1370/llanto-por-la-jurisdiccion-universal/> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

*autoridad judicial suficiente para perseguir, esclarecer, castigar y reparar ante sus propios tribunales a cualquier individuo presuntamente responsable de la comisión de crímenes graves contra el derecho internacional, incluso de aquellos cometidos fuera de su jurisdicción territorial o sin relación alguna con la nacionalidad de los acusados o de las víctimas, porque tales delitos, por su atrocidad intrínseca, afectan bienes jurídicos fundamentales tutelados por el derecho de gentes, ofenden a la humanidad entera y desquician el orden público de la comunidad mundial.*¹⁴⁵³”

El Artículo 1 (1) de Los Principios de Princeton de Justicia Universal la definen como:¹⁴⁵⁴ “*Jurisdicción Universal es la jurisdicción penal basada solamente en la naturaleza del delito, independientemente del lugar donde se cometió el crimen, la nacionalidad del autor del delito denunciado o condenado, la nacionalidad de la víctima, o de cualquier otro tipo de conexión al estado ejercer dicha jurisdicción.*”

La Asociación Internacional de Derecho citado por Tawfiq Ladan la define como: “*En virtud del principio de jurisdicción universal, un Estado tiene derecho, a iniciar un procedimiento con respecto a determinados delitos graves, con independencia del lugar del crimen, y con independencia de la nacionalidad del autor del hecho. La única conexión entre el delito y el Estado acusador que se requiere es la presencia física del presunto delincuente en la jurisdicción de ese Estado*”¹⁴⁵⁵

Según Luis Peraza la “*el principio de jurisdicción universal es fácil de explicar, pero complicado de interpretar y ejecutar. Se trataría de la posibilidad de que cualquier tribunal del mundo pudiera investigar, procesar y sentenciar a autores de ciertos y tasados delitos que repugnan a la comunidad internacional, sin importar la existencia de los tradicionales puntos de conexión (la nacionalidad del autor o de las víctimas, el lugar de comisión) entre el delito o crimen y sus autores con la corte que los juzga. Es una competencia doméstica, es decir, depende de la voluntad política de cada*

¹⁴⁵³ VALENCIA Villa, Hernando, 2003. *Óp. Cit.*

¹⁴⁵⁴ “Article 1 (1). *Universal Jurisdiction is criminal jurisdiction based solely on the nature of the crime, without regard to where the crime was committed, the nationality of the alleged or convicted perpetrator, the nationality of the victim, or any other connection to the state exercising such jurisdiction*”, Princeton 2001.

¹⁴⁵⁵ TAWFIQ Ladan, Muhammed. *Óp. Cit.* Página: 16 “*Under the principle of universal jurisdiction, a state is entitled, ore ven required to bring proceedings in respect of certain serious crimes, irrespective of the location of the crime, and irrespective of the nationality of the perpetrator of the victim. The only connection between the crime and the prosecuting state that may be required is the physical presence of the alleged offender within the jurisdiction of that state.*”

nación para que esta herramienta en abstracto se materialice en ley y pueda ser aplicada”¹⁴⁵⁶

En conclusión, se entiende por principio de jurisdicción universal aquel que se aplica por algunos Estados en la persecución penal de ciertos crímenes, que por su naturaleza grave es necesario perseguir independientemente del lugar en que se cometieron los hechos de la nacionalidad tanto del responsable como de la víctima. Este compromiso es adquirido por los Estados por el sólo hecho de pertenecer a la comunidad internacional.

¹⁴⁵⁶ PERAZA, Luis. 2006. “La Jurisdicción Universal: una realidad en constante construcción”. *Díkaion*. Colombia: Universidad de la Sabana, Vol. 20, No. 15, pp. 323 – 364. ISSN: 0120-8942.

CAPÍTULO X

PRINCIPIO DE JUSTICIA UNIVERSAL

ANTECEDENTES

La jurisdicción universal surge del derecho internacional¹⁴⁵⁷ y no del derecho interno porque, mientras que el derecho internacional atiende la naturaleza internacional del delito, los otros principios de persecución como el de territorialidad, el real o de protección, o el de personalidad activa, no atienden a la naturaleza internacional del delito. Desde esta naturaleza internacional y del carácter del *ius cogens*, surge una obligación estatal, que es el deber de todos los Estados de perseguir estos delitos. Porque cuando se comete un genocidio, un crimen de lesa humanidad, o cualquier otro, se están atentando contra bienes jurídicos supranacionales.¹⁴⁵⁸

Lo anterior hace, que en determinado momento la aplicación del principio de jurisdicción universal fuese el método más efectivo para frenar y prevenir los crímenes internacionales, mediante el incremento de la probabilidad de procesamiento y castigo de sus autores.

Este mecanismo permite la persecución penal extra territorial de los delitos, dando una oportunidad de remediar la impunidad por las graves violaciones a los derechos humanos, cuando en la jurisdicción interna no se han perseguido de modo eficaz¹⁴⁵⁹. Rompe con viejos dogmas del Derecho Penal¹⁴⁶⁰, tales como el principio de

¹⁴⁵⁷ Cuando se habla de justicia universal entran en juego aspectos fundamentales como la soberanía de los Estados, de allí que no resulta fácil, que los mismos desde la etapa inicial se mostraran muy abiertos a permitir que se investigaran a sus nacionales en tribunales de diferentes países a los suyos.

¹⁴⁵⁸ ASOCIACIÓN Pro Derechos Humanos de España- APDHE, 2015. La Justicia Universal en el Derecho Internacional: Mesa Redonda de Expertos. En: Asociación Pro Derechos Humanos de España [en línea]. España: Federación Internacional por los Derechos Humanos, pp. 1- 37. [Consulta: 10 de diciembre de 2020]. Sin DOI. Disponible en: http://www.apdhe.org/wp-content/uploads/2015/07/justicia_universal_derecho_internacional_apdhe.pdf

¹⁴⁵⁹ PERAZA, Luis. 2006. *Óp. Cit.* Página: 352.

¹⁴⁶⁰ Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 (CG) y los tres Protocolos Adicionales (PA) nacen de la necesidad mundial de proteger a la población civil y no combatiente de las devastadoras consecuencias de la guerra y de conflictos armados, cada CG aborda una esfera de protección particular resultando su contenido esencial para garantizar el respeto a la dignidad de las poblaciones más vulnerables. El artículo 1 común a los cuatro CG impone la obligación a las altas partes contratantes de respetar y hacer cumplir los CG bajo toda circunstancia indicando literalmente que “las

territorialidad de la ley penal basado en la idea de soberanía estatal, que cede a un nuevo principio de jurisdicción penal internacional. Su objetivo es la lucha contra la impunidad.

1. ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ FUE CREADO?

Derivado de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en los distintos continentes del planeta e impunidad reinante ante dichas atrocidades, la comunidad internacional tuvo la necesidad de plantearse un método por el cual dichas violaciones no quedaran en el olvido, sin justicia. Un primer antecedente lo tenemos al finalizar la Segunda Guerra Mundial con los Juicios de Núremberg, esto con el fin de juzgar a los militares nazis por los hechos cometidos durante la guerra. Es así como se tiene el primer esfuerzo para combatir la impunidad, desde un Tribunal no Nacional y un primer antecedente de lo que posteriormente se conocería como Principio de Justicia Universal.

Siguiendo a Claudia Jiménez Cortés¹⁴⁶¹ se dice que una de las aportaciones más importantes en la nueva estructura del sistema internacional luego de la Segunda

Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y a hacer cumplir el presente Convenio en todas las circunstancias” por lo que es de interés de todo Estado contratante el respeto y castigo de cualquier violación al mismo en virtud del compromiso colectivo asumido. Las violaciones trascienden la esfera individual de afectación constituyéndose como graves transgresiones de normas de ius cogens teniendo serias repercusiones erga omnes. Incluso se considera como incumplimiento al mismo el no exigir el cese de la conducta violatoria del Derecho Internacional Humanitario estando obligado y facultado cada Estado para implementar toda medida necesaria en post de exigir su cumplimiento.

El principio de jurisdicción universal se halla fuertemente compenetrado en los CG cuya esencia exalta la necesidad que todo Estado sea garante de su cumplimiento. El artículo 146 del cuarto CG sobre la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra alude a la obligación de los Estados Contratantes de asumir la persecución internacional rezando “Las Altas partes contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan cometido o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el presente Convenio definidas en el artículo siguiente. Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las condiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ella cargos suficientes. Cada Parte Contratante tomará las oportunas medidas para que cesen, aparte de las infracciones graves definidas en el artículo siguiente, los actos contrarios a las disposiciones del presente Convenio.” Ese artículo faculta a los Estados contratantes para invocar el principio de jurisdicción universal para el cese de crímenes internacionales que afectan gravemente la Comunidad Internacional debido a que a pesar de ser cometido fuera de sus fronteras su represión es de interés de internacional.

¹⁴⁶¹JIMENEZ Cortes, Claudia. 2011. La lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales en España: de la persecución a Pinochet a la inculpación del juez Garzón. *ICIP Working Papers*. España: Instituto Catalán Internacional para la paz, No. 1. pp. 1-84. ISSN:2013-7785.

Guerra Mundial es el nacimiento de una comunidad internacional. Esta encuentra su fundamento jurídico, por un lado, a través de una serie de obligaciones que todos los sujetos asumen por ser parte de esa comunidad internacional y por otro lado, en el establecimiento de una jerarquía de normas internacionales o si se prefiere, la configuración de un grupo limitado de normas con carácter imperativo que representen los intereses de esa comunidad internacional.

Sobre esa base se asienta, por ejemplo, la institucionalización de un mecanismo de seguridad colectivo previsto en la Carta de las Naciones Unidas, la regulación internacional destinada a la protección de los seres humanos, la lucha contra la impunidad de los crímenes que ofendan a la humanidad que es lo que hoy se conoce como Derecho Penal Internacional.

En este marco se ha escogido la vía de elaboración de tipos penales específicamente internacionales, que permitan hacer efectiva la responsabilidad de las personas causantes de tales actos, porque como se afirmó en el Tribunal de Núremberg *“...los crímenes contra el derecho internacional los cometen los hombres, no entidades abstractas, y sólo castigando a los individuos que cometen esos crímenes las normas de derecho internacional podrán hacerse efectivas.”*

Luego del éxito como se le puede reconocer, de los Juicios de Núremberg, la comunidad internacional se enfocó por perfeccionar este tipo de justicia, creando desde instrumentos internacionales que la contemplaran, Tribunales especiales para ciertos países, hasta aterrizar en la Corte Penal Internacional.

Este proceso no ha sido fácil y la aplicación del Principio de Justicia Universal, se ha encontrado, por el fenómeno que normalmente obstaculiza la aplicación adecuada del derecho, como son las presiones políticas.

2. PAPEL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN SU CREACIÓN

Tiene su fundamento en la defensa descentralizada de intereses¹⁴⁶² y valores de la Comunidad Internacional en su conjunto, y no en los puramente estatales o particulares, por ello implica un paso más respecto de la mera cooperación entre Estados para la persecución de delitos.

Es el reflejo del interés común por evitar la impunidad de crímenes contra el derecho internacional con un interés concreto del Estado en la protección de determinados bienes, logrando un equilibrio adecuado entre los intereses de la justicia y de la soberanía de los Estados, impidiendo el ejercicio de una jurisdicción de carácter abusiva y violatoria del Derecho Internacional.

3. ¿CÓMO SE ABORDÓ EL TEMA DE LA SOBERANÍA?

Cuando se habla de justicia universal entran en juego aspectos fundamentales como la soberanía de los Estados, de allí que no resulta fácil, que los mismos desde la etapa inicial se mostraran muy abiertos a permitir que se investigaran a sus nacionales en tribunales de países diferentes a los suyos. Prueba de ello es que, salvo excepciones puntuales como la piratería o la protección diplomática, hasta mediados del siglo pasado las jurisdicciones de dichos actores han sido las encargadas exclusivamente, tanto de proteger a las personas, como de apreciar y sancionar las infracciones cometidas por estas, en función de su normativa interna.

La aceptación de la persecución en desarrollo de la justicia universal ha sido difícil, lenta y paulatina, esto depende del grado de sensibilidad y aceptación de los Estados en cada momento específico.

4. TIPO DE GOBIERNO ¿DEMOCRACIA?

Por lo general los países que la han acepta e incluido este principio en su legislación interna, son países con regímenes políticos democráticos.

¹⁴⁶² Desde la Segunda Guerra Mundial más de una docena de Estados han investigado, procesado e incluso sentenciado basándose en este principio, o han detenido al presunto autor con el fin de extraditarlo al Estado que lo reclama y que lo procesará. PERAZA, Luis. *Óp. Cit.* Página: 344.

5. ¿ESTADO DE DERECHO?

El principio de justicia universal está regulado en la legislación penal de los países que lo han aceptado, lo que normalmente ha sucedido bajo el manto del estado de derecho, al tener la aspiración de ser garantes de los derechos humanos.

6. ¿ORIGEN BASADO EN CIERTAS SUPOSICIONES O CONDICIONES FÁCTICAS?

Su origen está basado en ambas, porque se tenía conocimiento de graves hechos contra la humanidad realizadas en diferentes partes del mundo y se crea en prevención o disuasión para la realización de futuras violaciones.

La aceptación de la máxima *aut dedere aut judicare*¹⁴⁶³ como máxima internacional *civitas*, es lo que permitió el reconocimiento y aplicación de la jurisdicción universal. La obligación de someter a proceso o extraditar o, cuando correspondiere, castigar a las personas acusadas o condenadas por crímenes internacionales, especialmente crímenes *jus cogens* debido a la naturaleza horrenda y a su impacto negativo en la paz y la seguridad, fue lo que condujo al reconocimiento de la jurisdicción universal como un medio para alcanzar las metas de *aut dedere aut judicare*.

El reconocimiento de la jurisdicción universal se justificó en la combinación de fuentes de derecho internacional y nacional, para los crímenes *jus cogens*. Provocando que en determinado momento la aplicación del principio de jurisdicción universal fuese el método más efectivo para frenar y prevenir los crímenes internacionales mediante el incremento de la probabilidad de procesamiento y castigo de sus autores. El enfoque de la responsabilidad penal internacional, también se considera que es un factor en la reducción de la impunidad para los autores de los crímenes internacionales.¹⁴⁶⁴

7. DOCUMENTO DE CREACIÓN

Desde un punto de vista estrictamente científico, el deber de garantía del derecho internacional para con las víctimas, se encuentra establecido en la propia Declaración

¹⁴⁶³ Locución latina, que significa "o extraditar o juzgar", utilizada en el Derecho internacional.

¹⁴⁶⁴ BASSIOUNI, Mahmoud, 2001. Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives and Contemporary Practice. Virginia Journal of International Law, Va. J. Intl. L. 81. Estados Unidos: Virginia Journal of International Law Association, página: 59. ISSN: 0042-6571.

Universal de Derechos Humanos en su artículo 8, en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; arts. 8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 7 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Más concretamente, el acceso a la tutela judicial efectiva de las víctimas está previsto en los instrumentos internacionales de prevención y sanción de los delitos de genocidio, tortura o desaparición forzada, que generalmente la contemplan en sus artículos 1 y 2, instrumentos que establecen asimismo que los Estados que los han ratificado se comprometen a implementar en sus legislaciones internas las medidas necesarias para la persecución de estos crímenes.

Desde el punto de vista normativo el principio de jurisdicción universal se encuentra regulado en varios instrumentos internacionales siendo estos:

- a. El Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977¹⁴⁶⁵
- b. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes¹⁴⁶⁶

¹⁴⁶⁵ Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 (CG) y los tres Protocolos Adicionales (PA) nacen de la necesidad mundial de proteger a la población civil y no combatiente de las devastadoras consecuencias de la guerra y de conflictos armados, cada CG aborda una esfera de protección particular resultando su contenido esencial para garantizar el respeto a la dignidad de las poblaciones más vulnerables. El artículo 1 común a los cuatro CG impone la obligación a las altas partes contratantes de respetar y hacer cumplir los CG bajo toda circunstancia indicando literalmente que “las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y a hacer cumplir el presente Convenio en todas las circunstancias” por lo que es de interés de todo Estado contratante el respeto y castigo de cualquier violación al mismo en virtud del compromiso colectivo asumido. Las violaciones trascienden la esfera individual de afectación constituyéndose como graves transgresiones de normas de ius cogens teniendo serias repercusiones erga omnes. Incluso se considera como incumplimiento al mismo el no exigir el cese de la conducta violatoria del Derecho Internacional Humanitario estando obligado y facultado cada Estado para implementar toda medida necesaria en pos de exigir su cumplimiento.

El principio de jurisdicción universal se halla fuertemente compenetrado en los CG cuya esencia exalta la necesidad que todo Estado sea garante de su cumplimiento. El artículo 146 del cuarto CG sobre la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra alude a la obligación de los Estados Contratantes de asumir la persecución internacional. Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad.

¹⁴⁶⁶ Todos los Estados Contratantes, amparándose bajo el principio de jurisdicción universal y el pacto asumido, tienen la responsabilidad de hallar y procesar a quienes resulten responsables de aplicar la tortura.

El artículo 5 de la CCT denota que “Todo Estado Parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su jurisdicción sobre los delitos a que se refiere el artículo 4” en los casos que se trate de delito cometido

c. Convención Internacional contra la Toma de Rehenes¹⁴⁶⁷

d. Convención sobre la Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos¹⁴⁶⁸

dentro de territorio bajo su jurisdicción o a bordo de aeronave o buque matriculados en dicho Estado o que se trate de una situación en que la víctima o perpetrador de una tortura sean nacionales de dicho Estado.

El artículo 6 de la CCT trata el caso en que tras examinar lo pertinente, en el caso que proceda, el Estado en que se encuentre el perpetrador podrá detener al perpetrador u tomar otra medida para garantizar su presencia. En dicho caso el Estado procederá a la investigación preliminar de los hechos. El inciso 4 establece que “El Estado que proceda a la investigación preliminar (...) comunicará sin dilación sus resultados a los Estados antes mencionados e indicará si se propone ejercer su jurisdicción.”

¹⁴⁶⁷ Las violaciones a la Convención contra la toma de rehenes (CTR) son de interés de la Comunidad Internacional resultando imperativas la persecución y condena de las mismas. El preámbulo de la CTR estipula que “la toma de rehenes es un delito que preocupa gravemente a la Comunidad Internacional y que, en conformidad con las disposiciones de esta Convención, toda persona que cometa dicho delito deberá ser sometida a juicio o sujeta a extradición”, asimismo indica “que existe una necesidad urgente de fomentar la cooperación internacional entre Estados con miras a elaborar y adoptar medidas eficaces para la prevención, el enjuiciamiento y el castigo de todos los actos de toma de rehenes como manifestaciones del terrorismo internacional”.

El artículo 5 de la CTR estipula en su inciso 1 que cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción sobre “los delitos previstos en el artículo 1 que se cometan en las diferentes formas de territorio en ese Estado; por sus nacionales o por personas apátridas que residan habitualmente en su territorio, con el fin de obligar a ese Estado a una acción u omisión, respecto de un rehén que sea nacional de ese Estado, si este último lo considera apropiado. El inciso 2 del mismo artículo establece de la misma forma de los delitos previstos en el artículo 1 en el caso de que el presunto delincuente se encuentre en su territorio y dicho Estado no acceda a conceder su extradición a ninguno de los Estados mencionados en el párrafo 1 del presente artículo.” Las medidas anteriores facultan a los Estados en su caso a extraditar a los perpetradores por tratarse de la comisión de un crimen grave considerado lesivo a la Comunidad Internacional, en determinados casos inclusive la CTR habilita a los Estados a emprender las acciones judiciales pertinentes contra los responsables. Los artículos 6, 7 y 8 de la CTR establecen los casos en que se faculta al Estado para detener al presunto delincuente, efectuar una investigación preliminar de los hechos e incluso someter el caso a las autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento figurando esta última circunstancia en el artículo 8 inciso uno de la CTR el cual versa que “El Estado Parte en cuyo territorio sea hallado el presunto delincuente, si no concede su extradición, estará obligado a someter a las autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio, según el procedimiento previsto en la legislación de ese Estado. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a los delitos comunes de carácter grave de acuerdo con el derecho de tal Estado.” Convención contra la Tortura.

¹⁴⁶⁸ La Convención sobre la Prevención y Castigo de Delito contra Personas Internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos (CPCPP) dentro de su articulado procura resguardar la seguridad e integridad de las personas internacionalmente protegidas en pos del mantenimiento de los lazos de amistad y cooperación a nivel interestatal. El preámbulo estipula que los Estados Partes de la misma constatan como motivo para su creación el estar “convencidos de que existe una necesidad urgente de adoptar medidas apropiadas y eficaces para la prevención y el castigo de esos delitos” Los artículos 3 y 7 en su conjunto recogen claramente la obligación general *aut dedere aut iudicare* por parte del Estado en cuanto al territorio en que se encuentra el perpetrador.

El artículo 3 de la CPCPP estipula que “Cada Estado dispondrá lo que sea necesario para instituir su jurisdicción” en el caso que el delito se cometa dentro del territorio o en buque o aeronave del Estado, si el culpable o la víctima del delito sea nacional de dicho Estado o cuando el delito se cometa contra persona internacionalmente protegida. Así mismo el inciso 2 estipula que “cada Estado Parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su jurisdicción sobre esos delitos en el caso de que el presunto culpable se encuentre en su territorio y de que dicho Estado no conceda su extradición”

- e. Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid¹⁴⁶⁹
- f. Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra
- g. Convención relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre
- h. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil¹⁴⁷⁰

El artículo 7 de la CPCPP estipula que “El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto culpable, de no proceder a su extradición, someterá el asunto, sin ninguna excepción ni demora injustificada, a sus autoridades competentes para el ejercicio de la acción personal según el procedimiento previsto en la legislación de ese Estado.”

El artículo 8 por su lado contempla lo referente a aspectos relativos a la extradición en el caso que ello proceda.

¹⁴⁶⁹ El artículo V de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid (CIRCA) indica que “Las personas acusadas de los actos enumerados en el artículo II de la presente Convención podrán ser juzgadas por un tribunal competente de cualquier Estado Parte en la Convención que tenga jurisdicción sobre esas personas, o por cualquier tribunal penal internacional que sea competente respecto a los Estados Partes que hayan reconocido su jurisdicción.”

¹⁴⁷⁰ La Comunidad Internacional considero necesaria la creación de determinados instrumentos internacionales para combatir el terrorismo, entre los considerandos que motivan la creación del Convenio para la Represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil (CRAISAC) se plasma la necesidad de castigar a aquellos actos orientados a la comisión de actos contra la seguridad de la aviación indicando que “a fin de prevenir tales actos, es urgente prever las medidas adecuadas para sancionar a sus autores”. El artículo 5 indica que “cada Estado contratante tomara las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos en los casos siguientes: a) si el delito se comete en el territorio de tal Estado; b) si el delito se comete contra o a bordo de una aeronave matriculada en tal Estado; c) si la aeronave, a bordo de la cual se cometa el delito, aterriza en su territorio con el presunto delincuente todavía a bordo; y d) si el delito se comete contra o a bordo de una aeronave dada en arrendamiento sin tripulación a una persona que en tal Estado tenga su oficina principal o, de no tener tal oficina su residencia permanente. El inciso 2 del mismo artículo establece que el Estado Contratante también tomara todas las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre delitos establecidos en el artículo 1 inciso a, b y c del párrafo 1 así como en el párrafo 2.

El artículo 6 del CRAISAC establece que “Todo Estado contratante en cuyo territorio se encuentre el delincuente o el presunto delincuente, si considera que las circunstancias lo justifican procederá a la detención o tomara otras medidas para asegurar su presencia.” “Tal Estado procederá inmediatamente a una investigación preliminar de los hechos.” Así mismo indica que “El Estado que proceda a la investigación preliminar (...) comunicara sin dilación sus resultados a los Estados antes mencionados e indicara su se propone ejercer su jurisdicción.”

El artículo 7 del CRAISAC establece que “El Estado contratante en cuyo territorio sea hallado el presunto delincuente, si no precede la extradición del mismo, someterá el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio. Dichas autoridades tomaran su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a los delitos comunes de carácter grave de acuerdo con la legislación de tal Estado.

La Comunidad Internacional considero necesaria la creación de determinados instrumentos internacionales para combatir el terrorismo, entre los considerandos que motivan la creación del Convenio para la Represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil (CRAISAC) se plasma la necesidad de castigar a aquellos actos orientados a la comisión de actos contra la seguridad de la aviación indicando que “a fin de prevenir tales actos, es urgente prever las medidas adecuadas para sancionar a sus autores”. El artículo 5 indica que “cada Estado contratante tomara las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos en los casos siguientes: a) si el delito se

- i. La Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando estos tengan trascendencia internacional¹⁴⁷¹.
- j. La Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas¹⁴⁷².
- k. La Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios¹⁴⁷³.

comete en el territorio de tal Estado; b) si el delito se comete contra o a bordo de una aeronave matriculada en tal Estado; c) si la aeronave, a bordo de la cual se cometa el delito, aterriza en su territorio con el presunto delincuente todavía a bordo; y d) si el delito se comete contra o a bordo de una aeronave dada en arrendamiento sin tripulación a una persona que en tal Estado tenga su oficina principal o, de no tener tal oficina su residencia permanente. El inciso 2 del mismo artículo establece que el Estado Contratante también tomara todas las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre delitos establecidos en el artículo 1 inciso a, b y c del párrafo 1 así como en el párrafo 2.

El artículo 6 del CRAISAC establece que “Todo Estado contratante en cuyo territorio se encuentre el delincuente o el presunto delincuente, si considera que las circunstancias lo justifican procederá a la detención o tomara otras medidas para asegurar su presencia. “Tal Estado procederá inmediatamente a una investigación preliminar de los hechos.” Así mismo indica que “El Estado que proceda a la investigación preliminar (...) comunicara sin dilación sus resultados a los Estados antes mencionados e indicara su se propone ejercer su jurisdicción.”

El artículo 7 del CRAISAC establece que “El Estado contratante en cuyo territorio sea hallado el presunto delincuente, si no precede la extradición del mismo, someterá el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio. Dichas autoridades tomaran su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a los delitos comunes de carácter grave de acuerdo con la legislación de tal Estado.

¹⁴⁷¹ En aras de sancionar determinados actos que potencialmente interfieran en las relaciones interestatales se creó la Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando estos tengan trascendencia internacional. (CPSAT) El artículo 1 de la CPSAT establece que “los Estados contratantes se obligan a cooperar entre sí, tomando todas las medidas que consideren eficaces de acuerdo con sus respectivas legislaciones y especialmente las que se establecen en esta Convención, para prevenir y sancionar los actos de terrorismo en especial el secuestro, el homicidio y otros atentados contra la vida y la integridad de las personas a quienes el Estado tiene el deber de extender protección especial conforme al derecho internacional, así como la extorsión conexa con estos delitos.” El artículo 5 de la CPSAT claramente precisa que “cuando no proceda la extradición solicitada por alguno de los delitos especificados en el artículo 2 porque la persona reclamada sea nacional o medie algún otro impedimento constitucional o legal, el Estado requerido queda obligado a someter el caso al conocimiento de las autoridades competentes, a los efectos del procesamiento como si el hecho se hubiera cometido en su territorio. La decisión que adopten dichas autoridades será comunicada al Estado requirente.”

¹⁴⁷² El artículo VI de la CIDF aborda la situación en que no proceda la extradición estableciendo que dicho Estado Parte “someterá el caso a sus autoridades competentes como si el delito se hubiere cometido en el ámbito de su jurisdicción, para efectos de la investigación y, cuando corresponda, de proceso penal, de conformidad con su legislación nacional. La decisión que adopten dichas autoridades será comunicada al Estado que haya solicitado la extradición.”

- l. La Convención de la Haya para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves¹⁴⁷⁴.
- m. La Convención sobre la represión de actos ilícitos contra la navegación marítima¹⁴⁷⁵.
- n. La Convención de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas¹⁴⁷⁶.
- o. Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas¹⁴⁷⁷
- p. Códigos Penales de países como: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Nueva Zelanda, Noruega, Reino Unido, Senegal, Suecia y Suiza.

La aplicación del principio de jurisdicción universal representa una herramienta importante y un hito en la lucha contra la impunidad, ya que cuando ha sido aplicado ha emitido el mensaje claro que la Comunidad Internacional no está dispuesta a consentir la falta de castigo en los casos de graves violaciones a los derechos humanos.

8. MANDATO

El ejercicio de la justicia universal en las diferentes legislaciones, ha señalado una serie de condicionamientos para ajustar su ejercicio a los diferentes convenios internacionales en especial los Convenios de Ginebra, la Convención contra la Tortura, además de las dificultades intrínsecas de un proceso penal relativos a investigaciones de hechos sucedidos en países diferentes a aquel que inicia la investigación. Esta situación se torna mucho más compleja cuando se observa que los sujetos acusados de crímenes que se procesan en virtud del principio de la jurisdicción universal, son personas con enorme poder político y económico dentro de esos Estados y como resultado de su posición han impedido que a nivel interno se

pueda hacer justicia. En adición, tampoco resulta fácil una investigación que involucre la participación de la comunidad internacional.

A. OBJETIVOS

El objetivo del principio de justicia universal o jurisdicción universal es el establecer la obligación de investigar y así poder combatir la impunidad que usualmente se presentaba, pero que poco a poco sean tenido avances positivos en la investigación de los crímenes atroces contra la humanidad, donde estaban involucrados personas de las características señaladas.

B. ALCANCES DEL MANDATO

Usualmente depende de las legislaciones nacionales de los diferentes países. En Inglaterra, por ejemplo, la aplicación de la jurisdicción universal responde a casos específicos donde se procura la mejor aproximación a los límites señalados, pero no tienen las cortes jurisdicción para investigar los hechos por todos los delitos, a pesar que sean considerados como crímenes internacionales.

C. COMPETENCIA

En la legislación interna de cada país se incluyen los delitos que son posible investigar en aplicación a este principio, relacionados con graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

D. FORTALEZAS

Además, de la cooperación de los Estados en dichas instancias internacionales, resulta significativo destacar importantes avances en las jurisdicciones internas. Como el caso de las protagonizadas por países donde sean dado los sucesos más terribles de destrucción de la humanidad que desarrollaron procesos, casi que impensables para perseguir crímenes internacionales acaecidos en su territorio, tomando como base jurídica normas internacionales que se consideraban parte de su ordenamiento interno con rangos, en muchos casos de mayor jerarquía a sus propias normas. Ello se presentó por ejemplo en Estonia, Chile, Argentina o Perú donde se han aplicado delitos no tipificados en los Códigos Penales, también se levantaron

inmunidades y derogaron leyes de amnistía en utilizando el ordenamiento internacional.

E. REGLAS DE ADMISIBILIDAD

Las reglas de admisibilidad no son consignadas expresamente como tales en las regulaciones, sin embargo, los casos deben llenar los siguientes requisitos:

- xi. *Ratione Personae*: todas aquellas personas que estén involucradas en casos que puedan ser conocidos por medio del principio de justicia universal y/o jurisdicción universal.
- xii. *Ratione Materiae*: Delitos contenidos en el ordenamiento jurídico penal de los países que lo regulan o en las Convenciones que los contemplan.
- xiii. *Ratione Temporis*: Crímenes que no hayan prescrito.
- xiv. *Ratione Loci*: Aplicables para los delitos cometidos en territorio extranjero pero que llenen los requisitos de jurisdicción universal.

F. TIEMPO DETERMINADO

El tiempo que dure el proceso penal internamente, incluyendo la resolución de los recursos de impugnación. En este aspecto casi que, por regla general, los estados por diferentes circunstancias son tienen un cumplimiento exacto en los términos, los que solo se observa con mayor rigor, cuando el procesado está privando de la libertad, por la eventual violación de ese derecho fundamental ante una extensión injustificada de la misma.

G.DISTRIBUCIÓN DEL PODER.

En estos casos más que poder, está involucrado directamente el tema político, con una gran incidencia de la nacionalidad de las personas a perseguir penalmente y el poder del país del que sea nacional el imputado.

Normalmente la relación es el Estado que lo tiene regulado por medio de su fiscalía y sistema judicial, el imputado y su defensa.

9. ¿SURGIÓ COMO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES?

A. ¿HABÍA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL?

Existe responsabilidad internacional enfocada como un factor en la reducción de la impunidad para los autores de los crímenes internacionales¹⁴⁷⁸, en atención a que la lucha contra la impunidad surge del cumplimiento de los deberes del Estado.

Desde un punto de vista estrictamente científico, el deber de garantía del derecho internacional para con las víctimas, se encuentra establecido en la propia Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 8, en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; arts. 8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos¹⁴⁷⁹, el artículo 7 de la Corte Africana de Derechos Humanos. Más concretamente, el acceso a la tutela judicial efectiva de las víctimas, está previsto en los instrumentos internacionales de prevención y sanción de los delitos de genocidio, tortura o desaparición forzada, que generalmente como parte de los artículos 1 y 2. Instrumentos que establecen así mismo, que los Estados que los han ratificado se comprometen a implementar en sus legislaciones internas las medidas necesarias para la persecución de estos crímenes.

La aceptación de la máxima *aut dedere aut judicare*¹⁴⁸⁰ como máxima internacional *civitas*, es lo que permitió el reconocimiento y aplicación de la jurisdicción universal. La obligación de someter a proceso o extraditar o, cuando correspondiere, castigar a las personas acusadas o condenadas por crímenes internacionales, especialmente crímenes *jus cogens* debido a la naturaleza horrenda y a su impacto negativo en la paz y la seguridad, fue lo que condujo al reconocimiento de la jurisdicción universal como un medio para alcanzar las metas de *aut dedere aut judicare*.

El reconocimiento de la jurisdicción universal se sustentó en la combinación de fuentes de derecho internacional y nacional, para los crímenes *jus cogens*,

¹⁴⁷⁸ BASSIOUNI, Mahmoud, 2001. *Óp. Cit.* Página: 59.

¹⁴⁷⁹ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la aplicación de este principio se pronunció en la resolución 1 de 2003 y manifestó:

¹⁴⁸⁰ Locución latina, que significa "o extraditar o juzgar", utilizada en el Derecho internacional.

provocando que en determinado momento la aplicación del principio de jurisdicción universal. fuese el método más efectivo para frenar y prevenir los crímenes internacionales mediante el incremento de la probabilidad de procesamiento y castigo de sus autores. El enfoque de la responsabilidad penal internacional también se considera que es un factor en la reducción de la impunidad para los autores de los crímenes internacionales.¹⁴⁸¹

Pero esta sólo es aplicable en cuanto a las Convenciones internacionales enumeradas, sino ante los países que lo tienen regulado en sus legislaciones penales internas.

B. OBLIGACIONES INTERNACIONALES

Las obligaciones internacionales se pueden enfocar desde la ratificación de las Convenciones que lo contemplan y la ratificación de los Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos que fundamentan su regulación en los sistemas penales de los países que lo poseen.

Desde esta naturaleza internacional y del carácter del *ius cogens*, surge una obligación estatal, que es el deber de todos los Estados de perseguir estos delitos. Porque cuando se comete un genocidio, un crimen de lesa humanidad, o cualquier otro, se está atentando contra bienes jurídicos supranacionales.¹⁴⁸²

C. ¿ABORDA HECHOS ILÍCITOS INTERNACIONALES?

Sí, normalmente son situaciones conocidas a nivel internacional por medio de informes de situación o de violaciones a los derechos humanos que no son llevados ante mecanismos internacionales.

10. COOPERACIÓN DE LOS ESTADOS.

Siguiendo a Claudia Jiménez Cortés en su artículo La lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales en España: de la persecución a Pinochet a la inculpación

¹⁴⁸¹ BASSIOUNI, Mahmoud, 2001. *Óp. Cit.* Página: 59.

¹⁴⁸² ASOCIACIÓN Pro Derechos Humanos de España- APDHE, *Óp. Cit.* Página: 48

del juez Garzón,¹⁴⁸³ afirma que una de las aportaciones más importantes en la nueva estructura del sistema internacional luego de la Segunda Guerra Mundial es el nacimiento de una comunidad internacional. La que encuentra su fundamento jurídico, por un lado, a través de una serie de obligaciones que todos los sujetos asumen por ser parte de esa comunidad internacional y por otro, en el establecimiento de una jerarquía de normas internacionales o si se prefiere la configuración de un grupo limitado de normas con carácter imperativo que representen los intereses de esa comunidad internacional.

Sobre esa base se asienta, por ejemplo, la institucionalización de un mecanismo de seguridad colectivo previsto en la Carta de las Naciones Unidas, la regulación internacional destinada a la protección de los seres humanos, la lucha contra la impunidad de los crímenes que ofendan a la humanidad que es lo que hoy se conoce como Derecho Penal Internacional.

En este marco se ha escogido la vía de elaboración de tipos penales específicamente internacionales, que permitan hacer efectiva la responsabilidad de las personas causantes de tales actos, porque como se afirmó en el Tribunal de Núremberg “...*los crímenes contra el derecho internacional los cometen los hombres, no entidades abstractas, y sólo castigando a los individuos que cometen esos crímenes las normas de derecho internacional podrán hacerse efectivas.*”

11. INDEPENDENCIA

La jurisdicción universal surge del derecho internacional y no del derecho interno porque, mientras que el derecho internacional atiende a la naturaleza internacional del delito, los otros principios de persecución como el de territorialidad, el real o de protección, o el de personalidad activa, no atienden a la naturaleza internacional del delito.

¹⁴⁸³ JIMENEZ Cortes, Claudia. 2011. La lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales en España: de la persecución a Pinochet a la inculpación del juez Garzón. *ICIP Working Papers*. España: Instituto Catalán Internacional para la paz, No. 1. pp. 23. ISSN:2013-7785.

Es parte del *corpus* del Derecho Internacional General que constituye una solución adecuada que resguarda la soberanía e independencia estatal e impide la impunidad respecto de los graves crímenes internacionales.

Sin embargo, su aplicación ha sido controversial, hasta el punto que en países como Bélgica y España se tuvo que hacer una reforma legislativa interna para su aplicación, restringiéndola a cuestiones como nacionalidad y territorialidad, esto derivado de las presiones políticas que determinados Estados poderosos realizaron como consecuencia de verse amenazados determinados líderes a la aplicación de este principio. Esto se derivó según lo asegura Bassiouni de la debilidad de la justicia universal al no estar bien regulada convencional y consuetudinariamente en el derecho internacional.

No se puede perder de vista de que llegó a ser una técnica muy usada por aquellos que buscaban prevenir la impunidad para los crímenes internacionales. Por lo tanto, su independencia ha sido cuestionada y limitada.

12. SELECCIÓN DE ACTORES

Los países que deciden aplicarla no seleccionan los casos, ni los procesados antojadizamente, sino depende de quién active su competencia, aunque como se ha mencionado la aplicación del principio ha sido politizado.

13. NORMATIVA RELEVANTE Y MARCO PROCEDIMENTAL

La aplicación del principio de justicia universal se encuentra auxiliada por distintas herramientas dentro de las que, Según Pigrau Solé¹⁴⁸⁴, se pueden enumerar las siguientes:

1. *“Márgenes de discrecionalidad en el ejercicio de la jurisdicción universal”*¹⁴⁸⁵:
Hasta ahora se ha observado que, siendo la justicia universal un principio, es necesaria su positivación a través de normas que versan sobre aspectos específicos de aplicación. Las leyes internas que consideran el principio,

¹⁴⁸⁴ PIGRAU Solé, A., 2009. *La Jurisdicción Universal y su aplicación en España: La persecución del genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad por los Tribunales Nacionales*. S.E. España: Oficina de Promoción de la Pau i dels Drets Humans, ISBN: 9788439381709.

¹⁴⁸⁵ Ídem

regularmente se enfocan en la decisión que el fiscal toma sobre la viabilidad jurídica de perseguir el delito. Muchos países otorgan la discrecionalidad a este funcionario normando la necesidad de su autorización para continuar con la persecución; otros casos no envuelven la necesaria la autorización del fiscal, pero si otorgan al mismo un amplio campo de acción en la ejecución de la persecución penal.

2. “*Jurisdicción Universal e inmunidad penal*”¹⁴⁸⁶: La inmunidad funcional de que gozan diferentes altos funcionarios con el propósito de proveerles independencia en el ejercicio de su cargo es en ciertos casos un obstáculo para la persecución penal basada en el principio de justicia universal. Este impedimento notorio a través del desarrollo del principio se ha tratado de salvar limitando el reconocimiento de la inmunidad mientras el objeto de la persecución se encuentre ejerciendo el cargo oficial; lo anterior se considera sin perjuicio de nuevas normas que especifican la inviabilidad del argumento sobre inmunidad cuando se trata de delitos graves de derecho internacional. En este sentido el quinto principio sobre la jurisdicción universal detalla: “Principio 5. – Inmunidades. Con respecto a los delitos graves de derecho internacional que se enumeran en el párrafo 1 del principio 2, la función oficial de un acusado, sea en calidad de jefe de Estado o de Gobierno o de funcionario competente, no lo exonerará de responsabilidad penal, ni atenuará la pena.” Sobre la forma de hacer efectiva la persecución penal en sujetos que gozan de inmunidad se tienen cuatro vías, a saber:

- a. En los tribunales nacionales.
- b. En tribunales extranjeros que decidan levantar la inmunidad.
- c. Al dejar de ocupar el cargo el sujeto perseguido.
- d. Persecución por tribunales internacionales competentes que no admitan inmunidad de los sujetos perseguidos por razón del cargo que ocupan; tal es el caso de la Corte Penal Internacional.

¹⁴⁸⁶ PIGRAU Solé, A., 2009. *Óp. Cit.*

3. *“La cuestión de la prescripción de los crímenes internacionales”*¹⁴⁸⁷: La magnitud de los crímenes perseguidos en base al principio de justicia universal se reconoce además en la atemporalidad que caracteriza su persecución; la misma se dilucida tras la II Guerra Mundial y se representa en la actualidad en documentos como el Estatuto de Roma que en su artículo 29 establece “Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán.”. Otra raíz importante, en la argumentación de la imprescriptibilidad se encuentra en la cantidad de oficiales de la Alemania nazi que huyeron sin ser procesados. Además del Estatuto de Roma existen acuerdos como la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad adoptada en 1968 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Convención Europea de Imprescriptibilidad de Crímenes contra la Humanidad y Crímenes de Guerra adoptada por el Consejo de Europa en 1974; por otro lado se encuentra la resolución 30/74 de la Asamblea General de Naciones Unidas que en su artículo 1 establece: *“Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad donde quiera y cualquiera que sea la fecha que se hayan cometido serán objeto de una investigación, y las personas contra las que existen pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y en caso de ser declaradas culpables, castigadas”*¹⁴⁸⁸.
4. Jurisdicción Universal y presencia del Acusado en el Territorio: El efecto de la presencia del objeto de la persecución en el territorio como catalizador de la misma se basa en diferentes tratados internacionales; los requerimientos en este sentido varían en las legislaciones de cada país sobre la materia dado que en algunas es necesaria la presencia del acusado en el momento de la interposición de la denuncia, en otros es necesaria la presencia al momento de abrir el proceso penal e incluso en otros más no es necesaria la presencia por ser permitido el juicio *in absentia*. Un polo opuesto a esta última es España donde este tipo de proceso no es permitido.

¹⁴⁸⁷ PIGRAU Solé, A., 2009. *Óp. Cit.*

¹⁴⁸⁸ ASAMBLEA General de Naciones Unidas. 1974. Resolución 30/74 en línea]. Disponible en: <https://www.un.org/es/sections/documents/general-assembly-resolutions/index.html> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

5. La jurisdicción universal como jurisdicción subsidiaria: Los argumentos de la jurisdicción universal como afrenta a la soberanía estatal, encuentran su respuesta en el argumento de la aplicación de este principio como medida subsidiaria ante la inacción del sistema judicial del Estado a quien asiste ejercer la jurisdicción penal en el territorio donde se han suscitado los hechos, sin embargo, dadas las complejidades de los delitos investigados de conformidad con el principio de justicia universal, se tiene que no en todas las oportunidades será posible contar con testigos dispuestos, que cuenten con las medidas de seguridad apropiadas o con un sistema dispuesto a procesar a sujetos con alto grado de influencia.

Entonces, se tiene que el principio es subsidiario en tanto el aparato de justicia estatal busque la persecución penal de forma que pueda apreciarse el esfuerzo de medios apropiado para resolver el crimen y juzgar a los sujetos. De no cumplirse estos estándares la comunidad internacional buscará la persecución basándose en el valor de la dignidad humana y la necesidad que la humanidad misma tiene de protegerla.

6. *“El impacto jurídico de las medidas de amnistía adoptadas en el país de la comisión de los hechos”*¹⁴⁸⁹: La posición de los tribunales internacionales y otras instituciones sobre las leyes de amnistía respecto de delitos contra la humanidad es clara puesto que se considera que las mismas son totalmente inválidas, dado que su único objetivo es dejar estos crímenes en el olvido, acto que se presenta como incompatible ante el derecho internacional de los derechos humanos. La positivación de estas consideraciones puede ser encontradas en documentos como la Declaración y Programa de Acción de Viena, adoptada en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993 que señala: *“Los gobiernos deben derogar la legislación que favorezca la impunidad de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos como la tortura y castigar esas violaciones, consolidando así las bases para el imperio de la ley”*¹⁴⁹⁰. El Comité de Derechos Humanos, en relación a un caso por la desaparición de la guerra civil

¹⁴⁸⁹ PIGRAU Solé, A., 2009. *Óp. Cit.*

¹⁴⁹⁰ NACIONES Unidas. 1993. *Declaración y Programa de Acción de Viena, adoptada en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993* [en línea] Disponible en: https://www.ohchr.org/documents/events/ohchr20/vdpa_booklet_spanish.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

española *“se ha pronunciado respecto a la ley de amnistía adoptada en España en 1977, en el sentido de que las amnistías relativas a violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”*¹⁴⁹¹.

Por otro lado, se puede destacar las actuaciones llevadas a cabo por tribunales de terceros Estados con base en la conocida jurisdicción internacional, que permite la persecución y la sanción transfronteriza de aquellos crímenes que por sus características afectan a toda la comunidad internacional.¹⁴⁹²

La aplicación del principio de jurisdicción universal se puede dividir en dos.

A. CON LA PRESENCIA DEL IMPUTADO:

Esta es la que aplican la mayoría de los Estados que han implementado los distintos convenios que establecen la jurisdicción universal en la legislación nacional, debido a que exigen expresamente la presencia del delincuente en su territorio para afirmar la jurisdicción¹⁴⁹³. *“Partiendo de esta facultad, los Estados pueden obligarse mediante tratados a ejercerla y ese es el caso que puede predicarse respecto de los crímenes de guerra, pues los Convenios de Ginebra (1949) y los Protocolos (1977) implican la obligación de los Estados partes de juzgar a los presuntos criminales arrestados en un territorio bajo su jurisdicción, con independencia del lugar de comisión de los hechos, de las circunstancias personales de los implicados y de la existencia o no de una demanda de extradición”*¹⁴⁹⁴. Como es el caso de Francia, España, Reino Unido.

B. IN ABSENTIA:

El segundo tipo de universalidad se dice que es amplia, absoluta, pura, verdadera, universal. En esta versión, los Estados pueden al menos en teoría, investigar y

¹⁴⁹¹ PIGRAU Solé, A., 2009. *Óp. Cit.*

¹⁴⁹² ASOCIACIÓN Pro Derechos Humanos de España- APDHE, *Óp. Cit.* Página:119

¹⁴⁹³ RABINOVITCH, R. 2004. Universal Jurisdiction in Absentia. *Fordham International Law Journal*. Estados Unidos: Fordham, University School of Law, Vol. 28. Issue 2. Article 8, Página: 507. ISSN: 0747-9395.

“A majority of the States that have implemented the various conventions establishing universal jurisdiction in their national legislation expressly require the presence of the offender on their territory before asserting jurisdiction”.

¹⁴⁹⁴ REMIRO Brótons, Antonio. S.F. persecución de los crímenes internacionales por los Tribunales Estatales: El Principio de Universalidad. En: REMIRO Brótons, A. *Derecho Internacional*. Primera Edición. Valencia: Tirant lo Blanch. Página: 496. ISBN:978-84-9876-984-5.

enjuiciar a los sospechosos sin que se encuentren presentes en su territorio, esto sólo se aplica para ciertos delitos internacionales graves¹⁴⁹⁵. “Esto se debe a la relevancia que conceden a la protección de los derechos humanos y la incidencia que la persecución de los crímenes sobre la base del principio de universalidad pueda tener en sus objetivos de política exterior”¹⁴⁹⁶. El reconocimiento de la jurisdicción universal *in absentia* tendría tres consecuencias principales:

- a. En primer lugar, el ejercicio de la jurisdicción universal, en general, se volvería más frecuente a medida que todos los Estados se convertiría en la facultad de juzgar los crímenes internacionales más graves. Esto plantea problemas respecto a la estabilidad de las relaciones internacionales, múltiples procesamientos, el uso desproporcionado de los nacionales no occidentales, y el futuro papel de la Corte Penal Internacional.
- b. En segundo lugar, el reconocimiento de la jurisdicción universal *in absentia* sería probable que aumente la eficacia con la que los crímenes internacionales son investigados y procesados. No se exige a los Estados que tratan de ejercer la jurisdicción universal esperar a que el acusado viaje a su país antes de iniciar un procedimiento judicial. Esto no sea afirmado, lo que se ha argumentado es que esto tendría implicaciones importantes con respecto a la medida en que los criminales son capaces de evitar la justicia por períodos prolongados de tiempo, además de facilitar la obtención de las pruebas necesarias para lograr condenas.
- c. En tercer lugar, se puede argumentar que el reconocimiento de la jurisdicción universal *in absentia* aumentaría las posibilidades de procesar a los delincuentes internacionales en rebeldía. Mientras que las investigaciones en rebeldía son relativamente comunes y controvertidas en el derecho

¹⁴⁹⁵ JALLOH, C. 2009. Universal Jurisdiction, Universal Prescription? A Preliminary Assessment of the African Union Perspective on Universal Jurisdiction. *Legal Studies Research Paper Series. Criminal Law Forum*. Florida: Universidad Internacional de Florida, Vol. 21, No. 1, Páginas: 1-65. Sin ISSN. The second type of universality is said to be broad, absolute, pure or true universal jurisdiction. Under this version, so-called universal jurisdiction in absentia, states may, at least theoretically, investigate and or prosecute suspects for certain serious international crimes. They do not need any of the usual territoriality, nationality or other jurisdictional nexus to the offence.

¹⁴⁹⁶ REMIRO Brótons, Antonio. S.F. *Óp. Cit.*

internacional, lo mismo no puede decirse de los juicios en rebeldía, que plantean problemas jurídicos y políticos graves.

De ahí que, en los Principios de Princeton sobre la Jurisdicción Universal, “se sostenga que la presencia del acusado es condición para el ejercicio de la jurisdicción universal, pero se declare al mismo tiempo que con base en esta jurisdicción puede solicitarse la extradición de un presunto responsable”¹⁴⁹⁷.

Por el lado académico en el año 2001, la Universidad de Princeton hizo un llamado a diversos estudiosos del principio de jurisdicción universal, luego de un arduo trabajo de análisis y reflexión publicaron “*Los Principios de Princeton sobre la Jurisdicción Universal*”¹⁴⁹⁸ los cuales constituyen una reformulación progresiva del derecho internacional sobre la jurisdicción universal y contienen elementos tanto de *lex lata* como de *de lege ferenda*. Los Principios contienen diversas disposiciones que describen los criterios a que debieran ajustarse los regímenes jurídicos y en particular, los juicios para ejercer de manera atinada y legítima la jurisdicción universal.

En el Principio 12 llama a los Estados para que instituyan “*la jurisdicción universal en futuros tratados y protocolos a los tratados vigentes*”¹⁴⁹⁹.

¹⁴⁹⁷ REMIRO Brótons, Antonio. S.F.

¹⁴⁹⁸ ASAMBLEA General. 2001. *Principios de Princeton sobre Jurisdicción Universal*. [en línea] Disponible en:

https://dhpedia.wikis.cc/wiki/Principios_de_Princeton_sobre_Jurisdicci%C3%B3n_Universal

[Consulta: 10 de diciembre de 2020]

Principio 1 - Fundamentos de la jurisdicción universal

Principio 2 - Delitos graves de derecho internacional

Principio 3 - Invocación de la jurisdicción universal en ausencia de legislación nacional

Principio 4 - Obligación de propiciar la imputación de responsabilidad

Principio 5 - Inmunidades

Principio 6 - Prescripción

Principio 7 - Amnistías

Principio 8 - Resolución de conflictos entre las jurisdicciones nacionales

Principio 9 - El principio de non bis in idem o prohibición del segundo procesamiento por el mismo delito

Principio 10 - Fundamentos para denegar la extradición

Principio 11 - Sanción de legislación nacional

Principio 12 - Inclusión de la jurisdicción universal en futuros tratados

Principio 13 - Afianzamiento de la imputación de responsabilidad y jurisdicción universal

Principio 14 - Arreglo de controversias

¹⁴⁹⁹ Ídem

Los Principios fueron redactados de “modo de elucidar el derecho vigente de la jurisdicción universal y, al propio tiempo, fomentar su ulterior desarrollo. Se dirigen, a veces, a los poderes legislativo, ejecutivo o judicial”¹⁵⁰⁰.

“Los participantes en el Proyecto de Princeton discutieron si, en general, debía instarse a los Estados a que ejercieran las jurisdicciones universales fundadas exclusivamente en la gravedad del presunto delito, con prescindencia de los nexos tradicionales con las víctimas o los perpetradores de delitos graves de derecho internacional”¹⁵⁰¹.

“Los Principios contienen diversas disposiciones que describen los criterios a que debieran ajustarse los regímenes jurídicos y en particular, los juicios para ejercer de manera atinada y legítima la jurisdicción universal. En los párrafos 3 y 4 del Principio 1 se insiste en que un Estado puede solicitar la extradición de personas acusadas o condenadas en virtud de la jurisdicción universal “a condición de que haya demostrado *prima facie* su culpabilidad” y de que los juicios se sustancien de conformidad con las “garantías procesales internacionales”, las normas pertinentes de derechos humanos y los Principios de independencia e imparcialidad de la administración de justicia. Más adelante, los Principios estatuyen otras salvaguardias contra abusos del ministerio público: el Principio 9, por ejemplo, establece una salvaguardia contra enjuiciamientos reiterados por el mismo delito en violación del principio de *non bis in ídem* o la prohibición de un segundo enjuiciamiento por el mismo delito. El Principio 10 autoriza a los Estados a denegar solicitudes de extradición cuando a la persona requerida “se le pueda aplicar una condena de muerte o se la pueda someter a tortura” u otros tratos crueles o inhumanos o a un proceso de violación de las garantías procesales internacionales”. ¹⁵⁰²

En el “Principio 4 se insta a los Estados a que observen sus obligaciones internacionales de enjuiciar o extraditar a las personas acusadas o condenadas de la comisión de delitos de derecho internacional, siempre que esas actuaciones se conformen a las “garantías procesales internacionales”. La jurisdicción universal sólo

¹⁵⁰⁰ ASAMBLEA General. 2001. Óp. Cit.

¹⁵⁰¹ Ídem

¹⁵⁰² Ídem

*podrá ser una realidad si en los distintos Estados se brindan una activa asistencia recíproca en lo que atañe a la acción de la justicia y el ministerio público, y todos los Estados participantes tendrán que velar por que se observen las garantías procesales”*¹⁵⁰³.

En estos principios se estableció una lista de delitos¹⁵⁰⁴ que no se determinaron por la gravedad sino por razones históricas, se abordó el tema de las inmunidades y las bases para ejercer la jurisdicción, así mismo se garantizan los derechos del imputado para un juicio justo, con las debidas garantías. Concluyendo en la necesidad de tomar medidas legislativas internas para su aplicación.

Varios tribunales nacionales empezaron a estatales comenzaron a ampararse en su competencia para conocer crímenes de lesa humanidad. El objetivo suplir deficiencias por medio de la intervención en nombre de la comunidad internacional cuando los Estados deliberadamente incumplirán con sus obligaciones internacionales. De manera que se pudiera ejercer la jurisdicción de los crímenes graves por parte de todos los Estados. A continuación, se citan las Convenciones Internacionales que abordan este principio:

1. La Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando estos tengan trascendencia internacional.

En aras de sancionar determinados actos que potencialmente interfieran en las relaciones interestatales se creó la Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando estos tengan trascendencia internacional. (CPSAT) El artículo 1 de la CPSAT establece que “los Estados contratantes se obligan a cooperar entre sí, tomando todas las medidas que consideren eficaces de acuerdo con sus respectivas

¹⁵⁰³ ASAMBLEA General. 2001. *Óp. Cit.*

¹⁵⁰⁴ “**Principio 2 - Crímenes Graves bajo el Derecho Internacional**

1. A los efectos de los presentes Principios, se tendrá por crímenes graves bajo el derecho internacional: (1) la piratería; (2) la esclavitud; (3) los crímenes de guerra; (4) los crímenes contra la paz; (5) los crímenes contra la humanidad; (6) el genocidio; y (7) la tortura.
2. La aplicación de la jurisdicción universal a los crímenes enumerados en el parágrafo 1 se llevará a cabo sin perjuicio de la aplicación de la jurisdicción universal a otros crímenes bajo el derecho internacional.” ASAMBLEA General. 2001. *Óp. Cit.*

legislaciones y especialmente las que se establecen en esta Convención, para prevenir y sancionar los actos de terrorismo en especial el secuestro, el homicidio y otros atentados contra la vida y la integridad de las personas a quienes el Estado tiene el deber de extender protección especial conforme al derecho internacional, así como la extorsión conexas con estos delitos.”

El artículo 5 de la CPSAT claramente precisa que “cuando no proceda la extradición solicitada por alguno de los delitos especificados en el artículo 2 porque la persona reclamada sea nacional o medie algún otro impedimento constitucional o legal, el Estado requerido queda obligado a someter el caso al conocimiento de las autoridades competentes, a los efectos del procesamiento como si el hecho se hubiera cometido en su territorio. La decisión que adopten dichas autoridades será comunicada al Estado requirente.”

2. La Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas.

La Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas (CIDF) contempla la imperatividad de los distintos Estados parte para facilitar las gestiones orientadas a la extradición de los perpetradores, así como el juzgar las violaciones cometidas en los casos que corresponda. El artículo I de la CIDF establece el compromiso que asumen los Estados Parte de “sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo” y de “tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención.”

El artículo IV de la CIDF estipula la obligación de cada Estado Parte de establecer su jurisdicción en los casos siguientes: “a) cuando la desaparición forzada de personas o cualesquiera de sus hechos constitutivos hayan sido cometidos en el ámbito de su jurisdicción; b) Cuando el imputado sea nacional de ese Estado; c) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.” Esclarece que “todo Estado parte tomará, además, las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre el delito descrito en la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre dentro de su territorio y no proceda a extraditarlo.”

El artículo VI de la CIDF aborda la situación en que no proceda la extradición estableciendo que dicho Estado Parte “someterá el caso a sus autoridades competentes como si el delito se hubiere cometido en el ámbito de su jurisdicción, para efectos de la investigación y, cuando corresponda, de proceso penal, de conformidad con su legislación nacional. La decisión que adopten dichas autoridades será comunicada al Estado que haya solicitado la extradición.”

3. La Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios

La Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios (CIRUFE) nace como un intento de regular la prohibición de promover de cualquier forma el entrenamiento de mercenarios. El artículo 9 de la CIRUFE plasma la obligación de cada Estado Parte de adoptar las medidas necesarias para establecer su jurisdicción, respecto a los delitos contenidos en la CIRUFE que se cometan dentro del territorio o a bordo de buque o aeronave matriculada en dicho Estado, o en el caso de tratarse de personas nacionales o apátridas que residan habitualmente en su territorio en el caso que dicho Estado lo considere apropiado. El mismo artículo considera el caso de los perpetradores de los delitos contenidos en los artículos 2, 3 y 4 de la CIRUFE, en la situación que no proceda la extradición indicando que cada Estado Parte adoptará todas las medidas necesarias para establecer su jurisdicción.

El artículo 10 contempla que el Estado Parte bajo circunstancias justificadas podría detener o tomar otras medidas a fin de asegurar la presencia del presunto delincuente seguido de la investigación preliminar de los hechos. Deberá notificar sin demora directamente o por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas la implementación de las medidas mencionadas anteriormente al Estado Parte correspondiente conforme a lo estipulado en la CIRUFE.

El artículo 12 estipula que si el Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto delincuente no concede la extradición deberá “sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio, a someter el caso a las autoridades competentes a efectos del procesamiento según el procedimiento previsto en la legislación de ese Estado. Esas autoridades tomarán su

decisión en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier otro delito de carácter grave, con arreglo a la legislación de ese Estado.”

El artículo 15 de la CIRUFE indica todo lo pertinente a la extradición en el caso que ello proceda.

4. La Convención de la Haya para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves

El artículo 4 de la Convención de la Haya para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (CRAIA) constata que cada Estado Contratante tomará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre el delito y sobre cualquier acto de violencia cometido por el presunto delincuente contra los pasajeros o la tripulación, en relación directa con el delito, en los casos siguientes “a) si el delito se comete a bordo de una aeronave matriculada en tal Estado; b) si la aeronave, a bordo de la cual se comete el delito, aterriza en su territorio con el presunto delincuente todavía a bordo; c) si el delito se comete a bordo de una aeronave dada en arrendamiento sin tripulación a una persona que en tal Estado tenga su oficina principal o, de no tener tal oficina, su residencia permanente.” El mismo artículo obliga a los Estados Contratantes a tomar las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre el delito en el caso que el Estado Contratante no conceda la extradición.

El artículo 6 de la CRAIA estipula que todo Estado Contratante en cuyo territorio se encuentre el presunto delincuente, si las circunstancias lo justifican, procederá a la detención u otra medida orientada a asegurar su presencia. “La detención y demás medidas se llevarán a cabo de acuerdo con las leyes de tal Estado, y se mantendrán solamente por el período que sea necesario a fin de permitir la iniciación de un procedimiento penal o de extradición” El Estado contratante en dicho supuesto procederá inmediatamente a una investigación preliminar de los hechos. El Estado que proceda a la investigación preliminar deberá comunicar sin dilación los resultados a los Estados antes mencionados e indicará si se propone ejercer su jurisdicción.

El artículo 7 de la CRAIA establece que el Estado Contratante en cuyo territorio sea hallado el presunto delincuente, si no procede a la extradición del mismo, someterá el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio.

Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a los delitos comunes de carácter grave, de acuerdo con la legislación de tal Estado.

El artículo 8 contiene lo relacionado a la extradición estableciendo la necesidad de incluir el delito como caso de extradición indicando también que “a los fines de la extradición entre Estados Contratantes, se considerará que el delito se ha cometido, no solamente en el lugar donde ocurrió, sino también en el territorio de los Estados obligados a establecer su jurisdicción” de acuerdo con el artículo 4 mencionado anteriormente.

5. La Convención sobre la represión de actos ilícitos contra la navegación marítima.

El artículo 6 de la Convención sobre la represión de actos ilícitos contra la navegación marítima (CRANM) faculta a cada Estado Parte a tomar las medidas necesarias para establecer su jurisdicción respecto a los delitos contenidos en la CRANM en los casos que sean cometidos “a) contra un buque o a bordo de un buque que en el momento en que se cometa el delito enarbole el pabellón de ese Estado; o b) en el territorio de ese Estado, incluido su mar territorial; o c) por un nacional de dicho Estado.” El mismo artículo estipula que podrá establecer su jurisdicción en el caso que: a) el delito sea cometido por nacional o apátrida cuya residencia habitual se halle en ese Estado; b) un nacional de dicho Estado resulte aprehendido, amenazado, lesionado o muerto durante la comisión del delito; o c) sea cometido en un intento de obligar a ese Estado a hacer o no hacer alguna cosa.

El artículo 7 de la CRANM establece la obligación de todo Estado Parte, en el caso que las circunstancias lo justifiquen, de detener al presunto delincuente o tomar las medidas necesarias para asegurar su presencia durante el tiempo necesario o a fin de permitir la tramitación de un proceso penal de extradición. El Estado Parte procederá a efectuar una investigación preliminar de los hechos y a notificar inmediatamente tal detención y las circunstancias que la justifican a los Estados que hayan establecido jurisdicción conforme lo establecido en el artículo 6 de la CRANM. El Estado que haya efectuado las investigaciones preliminares informará a los Estados respectivos los resultados obtenidos e indicará si se propone ejercer su jurisdicción.

El artículo 10 de la CRANM establece que en los casos en que no proceda la extradición los Estados Partes en cuyo territorio fuere hallado el presunto perpetrador deberán someter el caso a sus autoridades competentes a efecto de enjuiciar al presunto delincuente mediante el procedimiento judicial de dicho Estado.

El artículo 11 de la CRANM considera todos los extremos respectivos relacionados a la extradición en caso que la misma proceda.

El artículo 12 por su parte establece el compromiso que asume cada Estado Parte de prestar toda la asistencia judicial necesaria indicando que “los Estados Partes se prestarán todo el auxilio posible en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a los delitos enunciados”

6. La Convención de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas

El inciso 1 del artículo 4 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, (CTESS) establece que los Estados Partes deberán adoptar las medidas necesarias, para declararse competentes respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con lo establecido en el párrafo 1 del artículo 3, en los casos en que el delito se haya cometido en su territorio o a bordo de una nave que enarbole su pabellón o de una aeronave matriculado con arreglo a su legislación en el momento de cometerse el delito. Se podrá adoptar las medidas que sean necesarias para declararse competente respecto a los delitos que haya tipificado de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3: “i) Cuando el delito sea cometido por un nacional suyo o por persona que tenga su residencia habitual en su territorio; ii) Cuando el delito se cometa a bordo de una nave para cuya incautación dicha Parte haya recibido previamente autorización con arreglo a lo previsto en el artículo 17.

El inciso 2 del artículo 4 de la CTESS estipula la obligación de los Estados Partes, de adoptar las medidas necesarias para declararse competente sobre los delitos tipificados conforme el párrafo 1 del artículo 3 en la situación en que el presunto delincuente se halle en su territorio y el Estado Parte no lo extradite debido a que el delito se ha cometido a bordo de una nave que enarbole su pabellón o de una

aeronave matriculada con arreglo a su legislación en el momento de cometerse el delito o en el caso que el delito se haya cometido por persona nacional del país.

El artículo 6 de la CTESS establece lo referente a la extradición en el caso que proceda estableciendo que “cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que den lugar a la extradición en todo tratado de extradición vigente entre las partes.

7. Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas

Artículo 9

1. Cada Estado Parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su jurisdicción sobre los delitos de desaparición forzada en los siguientes casos: *a)* Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su jurisdicción o a bordo de una aeronave o un buque matriculados en ese Estado; *b)* Cuando el presunto autor del delito sea nacional de ese Estado; *c)* Cuando la persona desaparecida sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.
2. Cada Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos de desaparición forzada en los casos en que el presunto autor se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción, salvo que dicho Estado lo extradite o lo entregue a otro Estado conforme a sus obligaciones internacionales, o lo transfiera a una jurisdicción penal internacional cuya competencia haya reconocido.
3. La Convención no excluye ninguna jurisdicción penal adicional ejercida de conformidad con las leyes nacionales.

Por estar contemplado en diversos instrumentos internacionales, ha sido preocupación de la comunidad internacional realizar diversos documentos sobre la aplicación del principio, es así como la Asamblea General de Naciones Unidas decidió en 2011 emitir el documento A/66/93 titulado “Alcance y aplicación del principio de la jurisdicción universal”, esto con el fin de tener un panorama general para obtener información concreta sobre el alcance y aplicación de este principio.

La Unión Europea y el Consejo de Europa ante la persecución de varios de sus países miembros de líderes africanos en aplicación de este principio, emitió el documento 8672/09 en el que, en conjunto con la Unión Africana, en el que emiten una serie de recomendaciones sobre la aplicación de este principio en los casos africanos.

En el Sistema Interamericano, no hay precedente que alguno de sus países miembros lo haya aplicado procesando a personas de otros países, sin embargo; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la sesión de 10 diciembre de 1998 que conmemoraba el 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, consideró que: *“los estados deben instaurar el principio de la competencia o jurisdicción universal en sus legislaciones en sentido amplio, es decir sin limitaciones como por ejemplo la exigencia de la presencia del acusado en el territorio del tribunal para poder fundamentar la competencia. La Jurisdicción universal es un criterio de competencia tan válido como el de territorialidad o personalidad”*¹⁵⁰⁵.

En ese mismo sentido fijó su postura en la Resolución 1 de 2003 al manifestar: *“...exhortar a los Estados a adoptar las medidas legislativas y de otra naturaleza que sean necesarias para sancionar crímenes internacionales tales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, a combatir la impunidad de los crímenes internacionales a través de invocar y ejercer su jurisdicción sobre estos crímenes con base en los distintos tipos de jurisdicciones existentes, a adoptar las providencias necesarias para considerar estos crímenes internacionales como delitos que dan lugar a extradición y conceder la extradición de toda persona acusada de haber cometido un crimen internacional o juzgarla... El principio de la territorialidad debe prevalecer sobre el de la nacionalidad en los casos en que el Estado donde ocurrieron los crímenes internacionales tenga voluntad de llevarlos a juicio y ofrezca las debidas garantías del debido proceso de los presuntos responsables. Cuando un Estado no conceda la extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes como si el delito se hubiera cometido en el ámbito de su jurisdicción, para efectos de investigar, juzgar y cuando corresponda, sancionar a los responsables. La decisión*

¹⁵⁰⁵ COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos. 1998. *Sesión Conmemorativa por los 50 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos*.

que adopten dichas autoridades deberá comunicarse al Estado que haya solicitado la extradición. El lema sería juzgar o extraditar.”¹⁵⁰⁶

A continuación, se desarrolla la aplicación del principio de justicia universal en España, Inglaterra y Alemania.

A. JUSTICIA UNIVERSAL EN ESPAÑA

Para entrar a analizar el desarrollo de la aplicación de la justicia universal en España lo haremos desde el punto de evolución desde la fase inicial hasta como hoy opera su aplicación, mostrando las modificaciones introducidas en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que cambió el cómo se venía aplicando este principio en el contexto universal precisamente con base en lo preceptuado en el artículo 23 de la LOP.

Para ello se partirá de lo que es el principio de la justicia universal: *“La comunidad internacional ha considerado que determinado bienes jurídicos requiere de una protección absoluta independientemente de las legislaciones internas de los países en los que se produjere el hecho ilícito para garantizar así una correcta y efectiva tutela judicial de los derechos básicos de la persona. Semejante premisa es, precisamente, la que sustenta la tercera excepción referida al principio de territorialidad; esto es, fundamentaría una intervención penal de naturaleza internacional en determinados abusos, violaciones de derechos elementales de la persona e incluso de la paz, ampliando la potestad punitiva de terceros países hacia localizaciones transfronterizas.”¹⁵⁰⁷*

ESPAÑA MIRA HACIA AFUERA.

Resulta importante destacar, lo que se podría considerar como un contrasentido y paradójico en la filosofía de orientación de la justicia española, esto por cuanto se preocupa más por los crímenes que sucedieron en otros países, que por aquellos que se cometieron en su propio territorio durante la época del franquismo. Esto se fundamenta en el hecho de la expedición de la Ley 46 de 1977, conocida como Ley de Amnistía, la cual se encuentra vigente. Ley ésta que implica la formalización del

¹⁵⁰⁶ COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos. 2003. Resolución 1 de 2003

¹⁵⁰⁷ PERAZA, Luis. 2006. *Óp. Cit.* Página:42

proceso de transición que trajo consigo, el olvido de los crímenes en aras de la convivencia y la reconciliación de los españoles. Esto a nivel jurídico implicó la imposibilidad que tenían las víctimas de la guerra civil y la dictadura para iniciar acciones judiciales a fin de exigir responsabilidad penal por los crímenes padecidos, generando en nuestro criterio un régimen de la impunidad.

En el año 2007 con la expedición de la Ley 52, conocida como la Ley de la Memoria Histórica, se intentó fallidamente establecer medidas a favor de quienes fueron víctimas de persecución y violencia durante la guerra civil y la dictadura; en dicha ley se reconoce y se declara como injusto acciones que podrían considerarse inmersas en crímenes de guerra o de lesa humanidad, prevé los mecanismos para la identificación y localización de las víctimas, establece medidas económicas en favor de las mismas e incluso la posibilidad de ejercer medidas judiciales, pero lo que no hace, como lo sostiene Jiménez es: *“...decretar la nulidad de las sentencias dictadas por los tribunales calificados en la misma ley de “ilegítimos” (art. 3), ni incluir el listado de las normas derogadas de la ley de amnistía, con lo que sigue vigente, el consiguiente obstáculo que ello supone para activar esas posibles acciones judiciales a las que hace referencia.”*¹⁵⁰⁸

En el año 2008 el juez Baltazar Garzón con fundamento en varias denuncias presentadas en el año 2006, decide intentar acciones que a su juicio permanecían ilegales por los crímenes contra la humanidad suscitados en España durante la guerra civil y la postguerra, actuación esta que fue destacada por el Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ya que permitiría superar las dificultades para enfrentar la impunidad como una garantía de primacía de normas penales internacionales aplicables al caso.

Este Comité hizo diferentes recomendaciones al legislador español, siguiendo la línea de la política de las Naciones Unidas *“que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles”* y la obligación que tienen los Estados según la cual *“las amnistías relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el pacto de derechos humanos”* pero el gobierno español no aceptó las recomendaciones y defendió la legitimidad de la ley y el poder judicial procesó por

¹⁵⁰⁸ JIMENEZ Cortes, Claudia. 2011. *Óp. Cit.* Página: 12

prevaricato al juez Garzón, con el argumento de que operaba el fenómeno de la prescripción en aplicación de la Ley de Amnistía, tal como lo sostuvo el magistrado instructor “...*La consideración del contexto como delito de lesa humanidad no autoriza a reavivar una responsabilidad penal ya extinguida por prescripción y por amnistía*”¹⁵⁰⁹.

Lo anterior prácticamente cierra las puertas respecto a las víctimas de la dictadura española para que se hiciera justicia, pero España no aplica la misma política a otros casos de posibles crímenes internacionales acudiendo a la facultad consagrada en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que le atribuye competencia a los tribunales españoles para procesar a personas por delitos cometidos contra la humanidad en territorios diferentes.

De la reforma al artículo 23.4 LOPJ

Indiscutiblemente como ya se señaló, la amplia competencia conferida a los Tribunales españoles en el artículo 23.4 de la LOPJ generó no sólo disputas a nivel interno por la interpretación que del alcance del mismo hacían los tribunales competentes para el procesamiento en desarrollo de la jurisdicción universal, sino también por la postura asumida por el tribunal constitucional en sentencia del 2005 ya comentada, sino que a nivel internacional también se despertó cierta preocupación, por la “facilidad” de la legislación española para el procesamiento de extranjeros sin mayores exigencias previas y en cierta forma desconociéndose el principio de la soberanía para el procesamiento de sus nacionales por otros Estados.

Cuando España asumió la investigación en el caso Pinochet generó duras críticas tanto internas como al exterior, pero al mismo tiempo se aumentó el número de querellas que se presentaban solicitando su intervención. Otro caso que suscitó bastante polémica fue el procesamiento del ex presidente de la República Popular de China por la represión contra el pueblo del Tíbet, esto generó una protesta del embajador chino en España cuando el 7 de mayo de 2009 dijo: “*debe cesar de inmediato sus actividades de dicho caso infundado y falso, en el cual se ha hecho sordo ante los hechos reales, confundiendo lo blanco con lo negro, atropellando deliberadamente las normas de las relaciones internacionales.*” E insta al gobierno

¹⁵⁰⁹ JIMENEZ Cortes, Claudia. 2011. Página: 13

español para que de manera inmediata dicha querella sea retirada y así evitar deterioro en las relaciones bilaterales.

En enero del 2009, España admite para su trámite la querella contra altos mandos israelíes por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Gaza, el Primer Ministro Israelí dijo: *“...procedimientos legales como los de Madrid son expresión de la doble moral de algunos elementos que han dado la espalda durante años a los ataques continuados contra el Estado de Israel.”*

Otro caso que pudo incidir en la modificación del artículo 23 de la LOPJ, es el relacionado con la investigación abierta contra miembros del equipo jurídico de la administración Bush por las posibles torturas que se estarían presentando en la cárcel de Guantánamo. En este caso el propio Ministro de Justicia español declaró al diario El País: *“...coincido con la Fiscalía del Estado que ha emitido un informe en contra. El principio de subsidiaridad con países inequívocamente democráticos debe tenerse en cuenta.”*¹⁵¹⁰ Finalmente, y en esta misma línea el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, se declaró abiertamente contrario a la utilización de la jurisdicción universal como se venía haciendo cuando señaló: *“... no podemos convertirnos en los gendarmes judiciales del mundo, ni estar en conflicto diplomático diario.”*¹⁵¹¹

En este ambiente, el Congreso de los Diputados el 3 de noviembre de 2009 procedió a modificar el artículo 23.4 de la LOPJ en los siguientes términos: *“Igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por los españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptible de tipificarse, según la ley española como alguno de los siguientes delitos: a) Genocidio y lesa humanidad. b) Terrorismo. c) Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves. d) Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores e incapaces. e) Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes. f) Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas sean o no trabajadores. g) Los relativos a la mutilación genital femenina siempre que los responsables se encuentren en España. h) Cualquier otro que, según*

¹⁵¹⁰ DW. 2009. *España: ¿el nuevo gendarme mundial?* [en línea] Disponible en: <https://www.dw.com/es/espa%C3%B1a-el-nuevo-gendarme-mundial/a-4239334> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

¹⁵¹¹ Ídem.

los tratados y convenios internacionales, en particular los Convenios de derecho internacional humanitario y de protección de derechos humanos, deba ser perseguido en España.

El proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o por el Tribunal a los que se refiere el artículo anterior.

1512”

Del nuevo contenido legislativo que introduce profundas modificaciones a la aplicación de la justicia universal bajo el amparo de la anterior norma, entre estas modificaciones podemos destacar las siguientes, como ejes de los cambios realizados:

1. Se incluye de manera taxativa el crimen de lesa humanidad, que en el régimen anterior se había aplicado en un análisis extensivo del literal a) del artículo 23.
2. Se hace referencia expresa a los convenios de Derecho Internacional Humanitario y Derecho Humanos.
3. Se incluyen una serie de requisitos desde el punto de vista práctico que limitan la capacidad de actuar de los Tribunales españoles, que algunos consideran como una desnaturalización de la institución de la jurisdicción universal en su objeto. Entre estos tenemos:
 - a. La sujeción a lo que dispongan los tratados y convenio internacionales suscritos por España.
 - b. El vínculo de conexión de la víctima con España.
 - c. La no existencia de un tratado que disponga de otra cosa.
4. Que los presuntos responsables se encuentren en España. Este aspecto resulta coherente dado que el derecho español prohíbe los juicios en ausencia.

¹⁵¹² CONGRESO de los Diputados. 2009. *Ley Orgánica del Poder Judicial*. [en línea] Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12666> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

5. La jurisdicción española se convierte en subsidiaria frente a la jurisdicción internacional y no sólo frente a la competencia de la Corte Penal Internacional.
6. Conexión relevante de los casos con España.

Los requisitos señalados por la nueva ley, necesariamente implica una gran limitación en la facultad de ejercicio de la jurisdicción universal, lo que a nuestro juicio resulta racional ya que España, ni ninguna otra nación pueden abrogarse la facultad incondicionada para ejercer su jurisdicción en otros países, máxime cuando España no es el mejor ejemplo de lucha contra la impunidad como lo anotamos en el transcurso de este trabajo.

Varias quejas se han presentado con fundamente en la jurisdicción universal, en donde se encuentran los casos contra el ex presidente chileno Augusto Pinochet, ex general chileno Herman Brady, ex oficial militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, ex Jefe de Estado guatemalteco Efraín Ríos Montt, y otros funcionarios, Responsables del Caso de los Jesuitas en El Salvador entre otros.

B. JUSTICIA UNIVERSAL EN REINO UNIDO

El Reino Unido tiene la jurisdicción de universal bajo la Convención de Ginebra de 1957 por crímenes de guerra y otro número ilimitado de crímenes internacionales. También es obligación bajo la ley internacional procesar o extraditar a los sospechosos de crímenes de guerra sin importar donde se encuentran ni a donde los extraditan. La ley de crímenes internacionales bajo el principio de jurisdicción universal en Reino Unido, se incluye además desde el punto de vista de los Convenios de Ginebra de 1949, así como los protocolos adicionales. De acuerdo a la legislación, la persecución por el principio de jurisdicción universal solo es posible previo la autorización o consentimiento del Fiscal General, quien exige además de la evidencia fuerte, la garantía de la posibilidad de capturar a la persona esto hace que históricamente Inglaterra tenga muy pocos casos de persecución bajo el principio de la jurisdicción universal.

La ley permite que existan investigaciones privadas que una vez hechas se puedan presentar al fiscal general para que este si lo considera pertinente de la autorización de arresto y prosecución criminal de los crímenes de tortura, toma de rehenes,

participación en la trata de esclavos, delitos contra Estados, personal de las naciones, piratería y ciertos crímenes de guerra, incluyendo las infracciones graves de la Convenios de Ginebra de 1949 y su primer Protocolo adicional. Incorpora una mayor limitación de la jurisdicción extraterritorial sobre tres de los delitos tipificados en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, siendo estos los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.

Del mismo modo, en cuanto a los crímenes de guerra el Reino Unido en Ley de 1991 prevé una jurisdicción extraterritorial limitada a ciertos crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial

Alternativamente, a una víctima se le puede conceder una indemnización por lesiones personales, pérdida o daño en un proceso penal así el acusado sea absuelto. Los tribunales, están obligados a considerar si el delincuente debe ser condenado a indemnizar en todos los casos cuya infracción ha dado lugar a lesiones personales, pérdida o daño.

Numerosas leyes que contienen disposiciones sobre jurisdicción universal, exigen que se requiera el consentimiento de una persona nombrada por el Poder Ejecutivo, por lo general el Procurador General. En virtud de la Ley de la CPI, el recurso puede ser promovido en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, sin la aprobación del Fiscal General. Lo mismo es posible en los crímenes de guerra según la Ley de 1991, acorde a los Convenios de Ginebra 1957 modificado por el artículo 70 de la Ley de la CPI, la Ley sobre Secuestro y la Ley de protección a Personal de las Naciones Unidas de 1997 para ciertas ofensas. Variaciones sobre estas reglas pueden aplicarse para Escocia.

Recientemente, en la consideración de la solicitud de una orden de detención en virtud del artículo 134 de la Ley de Justicia Penal, un tribunal del Reino Unido acepta que el consentimiento del Fiscal General, que antes no era indispensable, actualmente si considera necesario su consentimiento para la emisión de la orden.

Con la confirmación de la Cámara de los Lores en el caso Pinochet, los jefes de Estado interino tienen derecho a inmunidad procesal penal individual por cualquier delito, independientemente de si esos actos, son hechos oficiales realizados en el ejercicio de funciones o actos que realicen en el título privado, los jefes de

Estado gozan de inmunidad personal. El mismo tratamiento no se da a los ex jefes de Estado, en el sentido de no conceder la inmunidad absoluta otorgada a un jefe de Estado, sino más bien la inmunidad en razón a la materia, que corresponde sólo a los actos realizados en función oficial o en el ejercicio del deber de un jefe de Estado.

En el caso Pinochet, la mayoría de los jueces lores encontró que Pinochet no tenía derecho a la inmunidad por los actos de tortura por que se le señalaba.

En decisión del Tribunal de Derechos Humanos en el caso Al-Adsani, se afirmó que será difícil para las víctimas de tortura y otras víctimas de crímenes con jurisdicción universal para superar el obstáculo de procedimiento de la inmunidad concedida a un Estado extranjero, hasta que se revoque la decisión o se desarrolle una firme excepción a la concesión de inmunidad para estos crímenes dentro del derecho internacional.

El principio general sobre la aplicación de la doctrina de *forum non conveniens* en el Reino Unido, por la cámara de los Lores en el caso de Spiliada Maritime Corporation v Cansulex Ltd (1987), consiste en que una estancia sólo se concederá en el suelo del *forum non conveniens* cuando el tribunal está convencido de que no hay otro tribunal disponible, competente, en el que su caso sea tratado de manera más adecuada a los intereses de todas las partes y los objetivos de la justicia.

La Corte valora la prueba de las dos etapas: en primer lugar, cuando la parte demandada debe demostrar que hay otro tribunal natural, que sea más adecuado para la audiencia del caso. Por lo general será el tribunal donde se produjo el daño. Sin embargo, la disponibilidad y el acceso a las pruebas y el lugar donde se encuentran las víctimas y los testigos también se tienen en cuenta.

En segundo lugar, la carga de la prueba se transfiere a la demandante para refutar la defensa mediante pruebas que satisfagan a la Corte de justicia que se requiere que el asunto de ser escuchado en la Corte vigente, mostrando que la justicia sustancial no se llevará a cabo en el otro tribunal por no ser el adecuado.

Límites y dificultades en la aplicación del principio en Reino Unido

1. **El alcance de la jurisdicción universal**, usualmente depende de las legislaciones nacionales de los diferentes países, en Inglaterra la aplicación de

la jurisdicción universal responde a casos específicos donde se procura la mejor aproximación a los límites señalados, no teniendo las cortes una jurisdicción para investigar todos los delitos así sean considerados como crímenes internacionales.

2. **El límite del tiempo:** Esta dificultad hace referencia a la posibilidad de la aplicación de las normas con carácter retroactivo.
3. **Presencia del acusado:** El arresto de la persona depende de su presencia física en territorio británico. En la legislación inglesa se puede investigar así la persona no esté en el país, pero se exige una seguridad que esta persona entrará en el territorio en algún momento de la persecución. La residencia no es una cuestión relevante para la persecución por crímenes de guerra o tortura bajo la jurisdicción universal en Inglaterra.
4. **Acopio de evidencia probatoria:** Este es un aspecto de especial dificultad cuando los crímenes se cometen en otro país, en contra de otras personas o en contra de los nacionales británicos. Los casos son muy complejos e implican la utilización de recursos domésticos de los dos países y de una inversión financiera, así como humana para lograr hacer la investigación. También existen dificultades de falta de formación de las policías en la investigación de esos casos graves.
5. **Razones políticas:** Esta es una de las razones más fuertes que impiden el desarrollo de muchas investigaciones que afectan la humanidad, ya que factores de intereses políticos tienden a proteger a ciertas personas que han cometido delitos graves, pero que sus casos en muchas ocasiones infortunadamente se quedan sin solución porque se impide u obstaculiza el proceso de indagación. Aquí juegan aspectos de defensa de la soberanía, así como otra serie de acuerdos celebrados entre los países y la presión política.
6. **Inmunidad:** Su principio permite la protección de ciertas personas para no ser procesadas por otros Estados, incluso bajo los principios de la jurisdicción universal. Pero bajo el artículo 27 del Estatuto de Roma no hay inmunidad bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, esto implica que no hay excepción para la investigación. El punto de vista de Reino Unido sobre la

inmunidad se refleja actualmente en la Ley de Inmunidad Estatal de 1978 (modificada). La Parte 1 establece el principio general de que todo Estado es inmune a la jurisdicción de los tribunales del Reino Unido, pero establece excepciones relativas a sumisión al Estado, que conciernen a la jurisdicción de la Corte y los actos comerciales y de naturaleza privada están bajo la soberanía de la competencia pública. Esta inmunidad se aplica a cualquier extranjero o miembro del Common Wealth.

En síntesis, bajo las nuevas normas y cambios al principio de jurisdicción universal, esta se puede aplicar bajo las siguientes exigencias:

1. Consentimiento del Fiscal General, para lo cual se exige la garantía de arresto de la persona a procesar.
2. Se pusieron límites a la facultad y capacidad de investigación privada.
3. La garantía de arresto es condición necesaria para la prosecución.

C. JUSTICIA UNIVERSAL EN ALEMANIA

Alemania tiene un sistema legal basado en la ley civil, que autoriza a las cortes el ejercicio de la jurisdicción universal en casos criminales bajo la ley ordinaria del código penal, desde 1975. En Adición, en el año 2002 y bajo el nuevo código en contra de los delitos internacionales se autoriza el ejercicio de la jurisdicción universal para crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, esto hace que Alemania hoy en día tenga un sistema fuerte que le permite a las Cortes el ejercicio de la jurisdicción universal en contra de extranjeros, bajo los preceptos de la ley internacional.

El Código Penal en sus artículos 5 a 7 desarrolla la aplicación de la Ley para delitos cometidos fuera de Alemania, que permiten el juzgamiento de personas no sólo por delitos fuera del país, sino por delitos cometidos dentro del mismo, pero que las personas no estén en territorio alemán.

El derecho penal alemán regula, sin importar el derecho del lugar en que se cometan los hechos:

1. *“Preparación de una guerra de agresión;*

2. *Alta traición;*

3. *Puesta en peligro del Estado Democrático de Derecho*

- a. *En los casos de los artículos 89, 90a inciso 1 y del 90b, cuando el autor es alemán y*
- b. *En los casos de los artículos 90 y 90a., inciso segundo.*

4. *Traición a la patria y puesta en peligro de la seguridad exterior;*

5. *Hechos punibles contra la defensa nacional*

- a. *en los casos de los artículos 109 y 109 e hasta 109 g; y condición de vida tiene su ámbito espacial de validez dentro de esa ley; y,*
- b. *en los casos de los artículos 109 a, 109 d y 109 h, cuando el autor es alemán y su condición*

6. *Deportación y sospecha política cuando el hecho está dirigido contra un alemán que tiene su domicilio o su residencia habitual en el país;*

7. *Sustracción de niños en los casos del artículo 235 inciso segundo numeral segundo, cuando el hecho está dirigido a una persona que tiene su domicilio o su residencia habitual en el territorio nacional;*

8. *Lesión al secreto de un establecimiento o al secreto comercial de un establecimiento, de una empresa situada en el ámbito de validez espacial de esa ley que tiene allí su domicilio, o una empresa con domicilio en el exterior, que es dependiente de una empresa con domicilio en el ámbito de validez espacial de esa ley y con ella conforma un consorcio;*

9. *Hechos punibles contra la autodeterminación sexual*

- a. *En los casos del artículo 174, incisos primero y tercero, cuando el autor y quienes hayan cometido el hecho están en territorio alemán y tiene ámbito espacial de validez dentro de esa ley. Quienes hayan cometido el hecho son alemanes y sus condiciones de vida las tienen dentro del territorio nacional; y,*
- b. *En los casos de los artículos 176 a 176 b y 182, cuando el autor es alemán.*

10. Interrupción del embarazo cuando el autor para al momento del hecho es alemán y sus condiciones de vida tienen ámbito de validez espacial dentro de esa ley;

11. Declaración falsa no juramentada, perjurio y declaración falsa bajo juramento en un proceso que depende de un tribunal en donde esa ley tiene su ámbito de validez espacial o de otro organismo alemán que es competente para recibir juramento o declaraciones juramentadas;

12. hechos punibles contra el medio ambiente que se cometan en la zona económica exclusiva alemana, en la medida en que acuerdos internacionales para la protección de los mares permitan su persecución como hechos punibles

13. Hechos cometidos por un alemán titular de cargo público o por otra persona del servicio oficial especialmente obligado, durante la permanencia en el servicio o en relación con el servicio;

14. Hechos cometidos por un extranjero como titular de cargo público o por la persona especialmente obligada a un servicio público;

15. Hechos cometidos por alguien contra un titular de cargo público o contra la persona especialmente obligada al servicio público o contra un soldado en ejército de la República Federal de Alemania, durante el desempeño de su servicio o en relación con su servicio.

16. Tráfico de órganos cuando el autor para el momento del hecho es alemán.

Además, en el derecho penal alemán rige, para los siguientes hechos que se cometan en el exterior, independientemente del derecho del lugar del hecho contra bienes jurídicos protegidos internacionalmente:

1. Genocidio

2. Hechos de energía nuclear - explosivo- y radiación, en los casos de los artículos 307 y 308 inciso primero hasta cuatro, 309 inciso segundo y 310;

3. Ataque al tráfico aéreo y marítimo

4. Tráfico de personas y tráfico de personas grave;

5. Distribución no autorizada de narcóticos;

6. *Divulgación de publicaciones pornográficas en los casos del artículo 184, párrafo tercero y cuarto;*
7. *Falsificación de moneda y valores y su preparación, falsificación de tarjetas de pago y formularios para eurocheques, así como su preparación.;*
8. *Estafa de subvención*
9. *Hechos que también deben ser perseguidos cuando se cometen en el exterior, con fundamento en un convenio internacional obligatorio para la República Federal de Alemania.*
10. *El derecho penal alemán rige para hechos que se han cometido en el exterior contra un alemán cuando el hecho está amenazado con una pena en el lugar de los hechos o cuando el lugar de los hechos no está sujeto a potestad punitiva”¹⁵¹³.*

La legislación alemana prevé expresamente el ejercicio de la jurisdicción universal en relación a los siguientes delitos: genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Adicionales pueden desencadenar en el ámbito de la jurisdicción universal los delitos graves relacionados con la energía nuclear, explosivos o radiación, agresiones contra el aire o el tráfico marítimo, la trata de seres humanos, distribución de narcóticos, la difusión de escritos pornográficos, la falsificación, fraude y actos cometidos en el extranjero si son perseguidos en virtud de un acuerdo internacional.

También puede ejercer la jurisdicción universal sobre otros delitos, incluidos los delitos comunes tipificados en la legislación nacional (por ejemplo, asesinato, asalto), que se llevaron a cabo por alguien que concomitantemente cometió uno de los anteriores delitos.

La indemnización sólo podrá concederse por la vía de la apelación si se encuentra el acusado culpable o condenado a una medida especial, tal como una suspensión provisional de los procedimientos del tribunal con la condición de que el presunto autor compense a la víctima.

¹⁵¹³ S.A. 1998. *Código Penal Alemán*. [en línea] Disponible en: https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/legislacion/I_20080616_02.pdf Consulta: [10 de diciembre de 2020.]

En la práctica, muy pocas demandas civiles son llevadas de esta manera, por que los tribunales penales tienden a preferir no pronunciarse sobre asuntos civiles. Las víctimas pueden reclamar una indemnización por la vía civil de forma separada, siempre que el acusado tenga residencia o asiento en Alemania. El basar la declaración de competencia por la presencia de los sujetos en Alemania es un tema que no está muy claro, con que solo se exija la existencia de un vínculo necesario.

De los casos llevados ante los tribunales alemanes con fundamento en la jurisdicción universal se pueden destacar entre otros los contra Novislav Djajic, Maksim Sokolovic, Djuradj Kusljic y Nikola Jorgic, quienes fueron declarados culpables.

RETOS

Antes de la aprobación del Código de Crímenes contra el Derecho Internacional puede o no puede seguir siendo aplicable al ejercicio de la jurisdicción universal sobre crímenes que quedan fuera del ámbito de aplicación del Código. (Que establece expresamente que se aplicará a hechos que no guardan relación con Alemania),

Los Tribunales alemanes adhirieron al principio de no intervención ("Nichteinmischung") que requiere un "vínculo interior" ("inländische Anknüpfungspunkt") entre el acusado y Alemania ante la jurisdicción que podría ser ejercida con el fin de respetar el principio de soberanía.

Los requisitos mínimos para el establecimiento de un "vínculo interior" no estaban claros, ya que los tribunales han tendido a considerar la suma de todos los enlaces existentes en el caso particular en la presentación de sus decisiones.

Con la introducción del Código de crímenes contra el Derecho Internacional, esta regla ha cambiado con respecto al genocidio, los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La sección 1 del Código establece expresamente que el Código se aplicará incluso a los actos que "no guardan relación con Alemania ", que aclara que el requisito del vínculo interior ya no se aplica.

En dicho Código no hay ningún requisito de que el investigado por genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad esté presente en Alemania para iniciar una investigación. Sin embargo, la fiscalía no podría continuar la investigación,

si este no se encuentra en el país, ni es probable que pueda estar presente en Alemania, esto depende de la decisión del fiscal.

En otros delitos graves como el de trata de personas, y otros hechos punibles de acción se ´pueden investigar sobre la base vinculante de un acuerdo internacional, para que los tribunales alemanes puedan aceptar la jurisdicción. Tal vínculo puede ser satisfecho por la presencia o la residencia de los acusados en Alemania. Sin embargo, la ausencia de cualquier llamado requisito de "tierra adentro link" en el nuevo Código de Crímenes contra el Derecho Internacional puede ser señal de un alejamiento de este enfoque.

Sobre el papel, las víctimas tienen una posición fuerte en la ley alemana de procedimiento penal. En principio, las víctimas pueden participar de varias maneras, tales como uniendo los procedimientos como un fiscal auxiliar o por presentar una demanda civil por daños en la adhesión al procedimiento criminal, Sin embargo, en la práctica se enfrentan a las víctimas muchos obstáculos. El acceso a la información depende de la función de la víctima en el procedimiento. El procedimiento de adhesión de demandas civiles a los procesos penales a menudo no resulta exitoso para las víctimas, tal vez debido a la falta de información y apoyo en la preparación de la reclamación, resistencia entre los jueces y los fiscales para hacer frente a las demandas civiles durante el procedimiento penal. El hecho de que los abogados puedan ganar más por presentar una demanda en un tribunal civil que en uno criminal. Las víctimas rara vez obtienen compensación a través del procedimiento de mediación penal.

1. En el ejercicio de la investigación criminal con base en el principio de justicia universal se presentan en Alemania de acuerdo con Amnistía Internacional ¹⁵¹⁴las siguientes situaciones: *“Definición defectuosa o ausente de los delitos de derecho internacional, principios de responsabilidad penal y eximentes. El requisito de la presencia para iniciar una investigación o solicitar una extradición”*¹⁵¹⁵

¹⁵¹⁴ AMNISTÍA Internacional. 2008. *Alemania: La Lucha contra la Impunidad a través de la Jurisdicción Universal*. [en línea] Disponible en: <https://www.amnesty.org/es/documents/EUR23/003/2008/es/> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

¹⁵¹⁵ Ídem.

- a. *“Por lo regulado en el artículo 153 del Código de Procedimiento Penal Cuando el presunto autor de los hechos es ciudadano extranjero y se encuentra en Alemania o está prevista su presencia en el país*
 - b. *Cuando el presunto autor de los hechos es ciudadano extranjero y no se encuentra en Alemania ni se prevé su presencia en el país el presunto autor de los hechos es ciudadano alemán*
 - c. *Cuando una jurisdicción extranjera o internacional ha abierto una investigación por los mismos hechos.*
 - d. *Por la existencia de asistencia judicial anticipada (antizipierte rechtshilfe)*
 - e. *Por la ausencia y el incumplimiento de criterios para ejercer la potestad facultativa*
 - f. *Por la existencia de normas sobre prescripción aplicable a los crímenes de derecho internacional el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos después de julio de 2002 no prescriben. Sin embargo, si prescriben todos los demás delitos comunes (como la agresión) cometidos conjuntamente con estos crímenes y las demandas civiles basadas en esos delitos y crímenes.*
2. *La existencia de una DOBLE INCRIMINACION la que no es aplicable al genocidio, los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra cometidos después del 30 de junio de 2002 o al enjuiciamiento de otros crímenes mediante el ejercicio de la jurisdicción universal y según lo dispuesto en los artículos 5 y 6 del Código Penal. Sin embargo, si se aplica a los enjuiciamientos basados en la personalidad pasiva, la jurisdicción universal conforme al artículo 7.2 del Código Penal y en los casos de extradición.*
3. *La inmunidad*
4. *El impedimento para la aplicación retroactiva del derecho penal internacional en la legislación nacional y otras restricciones temporales*

5. *La prohibición de ne bis in idem (no procesar dos veces por el mismo delito) según el derecho internacional.*
6. *El control político sobre las decisiones de investigar y procesar.*
7. *Las restricciones a los derechos de las víctimas y sus familias.*
8. *La aplicación de amnistías las cuales son prohibidas por el derecho internacional. En la legislación alemana no existe una disposición que haga efectiva la amnistía concedida por un Estado extranjero por crímenes de derecho internacional, y ningún tribunal alemán ha sostenido que supongan un obstáculo para el ejercicio de la jurisdicción.¹⁵¹⁶*

14. LEGITIMIDAD:

La legalidad del principio de justicia universal está soportada por el Derecho Penal Internacional y los sistemas de justicia de los países que lo legislaron internamente. Sin embargo, y como es de esperarse ha sido cuestionado por los países que no desean que sus nacionales sean perseguidos penalmente y por la defensa de las personas procesadas.

15. JURISDICCIÓN

Es aplicada en los países que la tienen regulada en su normativa penal, así como a los nacionales de los países que han ratificado las convenciones que la contemplan.

A. ¿QUIÉN PODÍA FORMAR PARTE DE UN CASO?

Las personas que se vieran involucradas en los casos de crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y los contemplados por las convenciones citadas.

B. ¿QUÉ PROBLEMAS SE PODÍA DEBATIR?

Los casos que incluyan los delitos contemplados en la persecución penal por medio de la jurisdicción universal.

¹⁵¹⁶ AMNISTÍA Internacional. 2008. *Óp. Cit.*

16. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN:

Los medios de impugnación contemplados en la legislación interna de cada país que tiene regulada la aplicación de la jurisdicción universal.

17. MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO

Los mecanismos de cumplimiento aplicables son los que están regulados en el sistema penal del país que lo aplica.

18. RECURSOS DISPONIBLES

A. HUMANO:

Los operadores de justicia de cada país que la aplica, denunciantes, víctimas, procesados y sus defensas.

B. MATERIAL:

Todos los recursos necesarios para el desarrollo de los casos.

C. PRESUPUESTO ASIGNADO:

El presupuesto es lo que le corresponde como parte de la asignación al sistema de justicia de cada país.

19. EL PAPEL DE LA VÍCTIMA:

En estos casos la víctima tiene un papel muy activo, muchos de los casos han sido presentados por asociaciones de víctimas, que durante años han luchado por la justicia en sus casos.

20. PERCEPCIÓN PÚBLICA:

Como en la mayoría de casos de graves violaciones al derecho internacional, derecho internacional humanitario y derechos humanos la persecución penal de estos delitos por medio de la aplicación del principio de justicia universal, ha sido visto con buenos ojos por parte de quienes creen en la justicia y el fortalecimiento del Estado de

Derecho, a su vez, también criticada por quienes protegen a los responsables de estos actos, quienes muchas veces resultan ser quienes poseen el poder político.

Por lo tanto, la aplicación de este principio se ha visto opacada por las presiones políticas ejercidas por los Estados que defienden a los responsables de la comisión de los actos.

21. NÚMERO DE CASOS INGRESADOS

Alrededor del mundo el principio de jurisdicción universal se ha invocado aproximadamente en 76 casos, siendo el más reciente a la época de la investigación, el presentado en Argentina por las víctimas de la dictadura franquista en España.

	País	Caso
1	Alemania	1. Donald Rumsfeld 2. Zakirjon Almatovich Almatov 3. Ignace Murwanashyaka 4. Emilio Eduardo Massera 5. Jorge Rafael Videla
2	Argentina	Caso de la Dictadura Franquista
3	Austria	Ramzan Kadyrov
4	Bélgica	Hissène Habré 2. Julienne Mukabutera 3. Consolata Mukangango 4. Samuel Ndashyikirwa 5. Ephrem Nkezabera
5	Canadá	1. Jacques Mungwarere 2. Désiré Munyaneza
6	España	1. Caso de Genocidio en Guatemala 2. Víctor Hermes Brusa 3. Rodolfo Eduardo Almiron Sena 4. Emilio Eduardo Massera 5. Isabel Perón 6. Adolfo Scilingo 7. Ricardo Taddei 8. Jorge Carlos Olivera Róvere 9. Julio Alberto Poch 10. Ricardo Miguel Cavallo 11. Vuelos de la CIA 12. Caso Tíbet 13. Falung Gong 14. Ruanda 15. Colombia

		16. Couso 17. Cuba 18. Violencia contra la mujer. 19. Caso de los Jesuitas
7	Estados Unidos	1. Robert Mugabe 2. Sintong Panjaitan 3. Abdi Aden Magan 4. Colonel Yusuf Abdi Ali (a.k.a. Tokeh) 5. Chuckie Taylor 6. Juan López Grijalba 7. General Mohamed Ali Samantar 8. Carlos Mario Jiménez-Naranjo 9. Carl Dorélien 10. Prosper Avril
8	Finlandia	1. François Bazaramba
9	Francia	1. Pierre Oba 2. Norbert Dabira 3. Jean François Ndengue 4. Denis Sassou Nguesso 5. Blaise Adoua 6. Alfredo Astiz 7. Charles Twagira 8. Wenceslas Munyeshyaka 9. Sosthene Munyemana 10. Jorge Antonio Olivera
10	Holanda	1. Habibullah Jalalzoy 2. Frans Van Anraat 3. Heshamuddin Hesam 4. Sebastien Nzapali 5. Julio Alberto Poch 6. Joseph Mpambara
11	Italia	Jorge Antonio Olivera
12	Nueva Zelanda	. Moshe Ya'alon
13	Noruega	. Charles Bandora
14	Reino Unido	1. Faryadi Sarwar Zardad 2. Robert Mugabe 3. Karuna Amman 4. Shaul Mofaz 5. Doron Almog 6. Vincent Bajinya 7. Emmanuel Nteziryayo 8. Célestin Ugirashebuja 9. Charles Munyaneza
15	Senegal	Hissène Habré
16	Suecia	1. Vjatjeslav Sucharev 2. Abdi Hasan Awale Qeybdiid
17	Suiza	1. Fulgence Niyonteze

22. NÚMERO DE CASOS RESUELTOS

En la actualidad se han resuelto alrededor de 75 casos, en su mayoría por hechos cometidos en el continente africano. De 17 países que han ejercido la jurisdicción universal 12 son europeos, esto refleja de alguna manera la fortaleza de los sistemas de justicia europeos y el peso político que les permite aplicar este principio.

	País	Caso
1	Alemania	1. Donald Rumsfeld 2. Zakirjon Almatovich Almatov 3. Ignace Murwanashyaka 4. Emilio Eduardo Massera 5. Jorge Rafael Videla
2	Austria	Ramzan Kadyrov
3	Bélgica	Hissène Habré 2. Julienne Mukabutera 3. Consolata Mukangango 4. Samuel Ndashyikirwa 5. Ephrem Nkezabera
4	Canadá	1. Jacques Mungwarere 2. Désiré Munyaneza
5	España	1. Caso de Genocidio en Guatemala 2. Víctor Hermes Brusa 3. Rodolfo Eduardo Almiron Sena 4. Emilio Eduardo Massera 5. Isabel Perón 6. Adolfo Scilingo 7. Ricardo Taddei 8. Jorge Carlos Olivera Róvere 9. Julio Alberto Poch 10. Ricardo Miguel Cavallo 11. Vuelos de la CIA 12. Caso Tíbet 13. Falung Gong 14. Ruanda 15. Colombia 16. Couso 17. Cuba 18. Violencia contra la mujer. 19. Caso de los Jesuitas
6	Estados Unidos	1. Robert Mugabe 2. Sintong Panjaitan 3. Abdi Aden Magan 4. Colonel Yusuf Abdi Ali (a.k.a. Tokeh)

		5. Chuckie Taylor 6. Juan López Grijalba 7. General Mohamed Ali Samantar 8. Carlos Mario Jiménez-Naranjo 9. Carl Dorélien 10. Prosper Avril
7	Finlandia	1. François Bazaramba
8	Francia	1. Pierre Oba 2. Norbert Dabira 3. Jean François Ndengue 4. Denis Sassou Nguesso 5. Blaise Adoua 6. Alfredo Astiz 7. Charles Twagira 8. Wenceslas Munyeshyaka 9. Sosthene Munyemana 10. Jorge Antonio Olivera
9	Holanda	1. Habibullah Jalalzoy 2. Frans Van Anraat 3. Heshamuddin Hesam 4. Sebastien Nzapali 5. Julio Alberto Poch 6. Joseph Mpambara
10	Italia	Jorge Antonio Olivera
11	Nueva Zelanda	. Moshe Ya'alon
12	Noruega	. Charles Bandora
13	Reino Unido	1. Faryadi Sarwar Zardad 2. Robert Mugabe 3. Karuna Amman 4. Shaul Mofaz 5. Doron Almog 6. Vincent Bajinya 7. Emmanuel Nteziryayo 8. Célestin Ugirashebuja 9. Charles Munyaneza
14	Senegal	Hissène Habré
15	Suecia	1. Vjatjeslav Sucharev 2. Abdi Hasan Awale Qeybdiid
16	Suiza	1. Fulgence Niyonteze

Alrededor del mundo el principio de jurisdicción universal se ha aplicado en 75 casos, en su mayoría por hechos cometidos en el continente africano. De 16 países que han ejercido la jurisdicción universal 12 son europeos, esto refleja de alguna manera la fortaleza de los sistemas de justicia europeos y el peso político que les permite aplicar este principio.

23. ANALISIS CUALITATIVO;

La eficacia de la aplicación del principio de justicia universal, en la investigación de los hechos y en la celebración del juicio dependerá, de la cooperación internacional entre los diferentes estados. Una eficaz cooperación asegurará una doble igualdad. El sujeto activo gozará de idénticas garantías cualquiera que fuera el tribunal al que sea sometido y las víctimas tendrán la seguridad de que su fundamental derecho de tutela judicial será efectivo. A continuación, se enumeran una serie de factores que se lograron determinar en la aplicación del principio de justicia universal.

1. La jurisdicción universal se fundamenta en la existencia de bienes jurídicos supranacionales, siendo derecho y deber de los Estados protegerlos por medio de la persecución a quienes los vulneran, ya que pertenecen al Derecho Internacional.
2. El principio de justicia universal faculta a la jurisdicción de un Estado a extenderse más allá de su territorio, independientemente de la nacionalidad de los autores o de las víctimas del hecho; sobre la base de que existe en el interés supranacional de toda la comunidad internacional para evitar la impunidad de determinados delitos.
3. La justicia universal se ha invocado en la apertura de casos de carácter más político y, especialmente, con el fin de pronunciarse sobre la responsabilidad penal de gobernantes en la comisión de los hechos.
4. El ejercicio sin limitaciones de la jurisdicción universal puede provocar la fractura del orden mundial y la de privación de los derechos humanos individuales cuando se utiliza por intereses políticos o para causar vejámenes.
5. La jurisdicción universal se puede utilizar imprudentemente, causando puede ser utilizada de forma imprudente, creando roces entre Estados, provocando la existencia de posibles acciones legales abusivas y el procesamiento inapropiado de personas.
6. Es muy poco lo que se puede exhibir en relación al ejercicio de la jurisdicción universal por tribunales internos, comparado con la cantidad de graves violaciones a los derechos humanos que se han dado alrededor del mundo.

7. Legalmente no hay normativa internacional que No existe ningún instrumento de derecho internacional ni de derecho consuetudinario que priorice algún tribunal nacional, sin embargo; si existe esa preferencia entre tribunales nacionales e internacionales. mientras que sí las establece entre tribunales nacionales y tribunales internacionales. El artículo 146 del cuarto Convenio de Ginebra, obliga al ejercicio de la jurisdicción universal, sin obligar que se ejerza en la jurisdicción del lugar donde sucedieron los hechos.
8. Debe existir precaución para la utilización de la jurisdicción universal con el fin de que alcance sus objetivos y se reduzcan las posibles consecuencias negativas.
9. Han sido muy pocas veces que se ha utilizado la jurisdicción universal como motivación de decisiones judiciales nacionales, haciendo necesaria la clarificación de su relación con la inmunidad y otras materias legales internacionales.
10. La aplicación del principio de jurisdicción universal se ha visto obstaculizada por las leyes nacionales de prescripción.
11. La jurisprudencia en esta materia es menos propensa a politización y a menor reticencia soberana, por la retroalimentación que existe entre jueces nacionales e internacionales.
12. Con el cambio legislativo en España, se dio un vuelco que limita la posibilidad de ejercer la jurisdicción universal. Cambio que como lo he señalado parece justo, ya que España estaba concentrando un enorme poder sobre naciones más vulnerables, pero continúa perpetuando la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos sucedidas internamente como consecuencia de la guerra civil.
13. Definitivamente la existencia y aplicación del principio de justicia universal es una herramienta útil para combatir la impunidad. Tan importante es, que la Asamblea General de las Naciones Unidas califica su interés en este como un compromiso de lucha contra la impunidad.

Como ya se ha analizado, las presiones políticas de los Estados poderosos han provocado la revisión y reforma de la aplicación del principio de justicia universal, lo que ha limitado su ejercicio.

La creación y vigencia de la Corte Penal Internacional ha venido a limitar indirectamente el ejercicio del principio de justicia universal, ya que los Estados han preferido que sea esta quien persiga las graves violaciones a los derechos humanos, es por todo esto que desde mi opinión muy personal creo que el ejercicio del principio de jurisdicción universal como método para combatir la impunidad será más limitado y en su mayoría se aplicará como siempre a situaciones de Estados débiles que no utilizan su poder para condicionar las relaciones con los Estados que lo ejercen.

Luego de este completo estudio analítico en los aspectos que a mi juicio considere de mayor relevancia, se puede establecer que el principio de justicia universal aplicado domésticamente ha contribuido lo suficiente en la lucha contra la impunidad y fortalecimiento del estado de derecho.

A continuación, se presenta de forma gráfica y sintética de la aplicación del Principio de Justicia Universal hasta el momento.

		Mandato	Duración del Mandato	Cesación de los hechos que originaron el mandato	Inicio del primer juicio	Universo de casos	Casos procesados y/o relaciones procesales	Tiempo promedio de los casos	Casos pendientes de resolución	% Casos presentados versus casos resueltos	% Casos posibles de procesamiento versus casos resueltos
1	Principio de Justicia Universal	Persecución de delitos que atentan contra el Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Derechos Humanos.	Indefinido	Fechas son variables, de acuerdo al caso.	No se puede determinar.	76	76	No se puede identificar	1	98.68%	98.68%

SECCIÓN B

ESFUERZOS DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

SUB - SECCIÓN B.1

ESFUERZOS DESDE EL SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

En 1945, posteriormente a la creación de la Organización de las Naciones Unidas, nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su artículo 1º consigna que *“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”*. Esto se debió a la necesidad de realizar tal afirmación, ya que las violaciones realizadas durante la Segunda Guerra Mundial se derivaron de los principios de superioridad de la raza que cada día eran más fuertes.

El reconocimiento y el apoyo de las naciones hacia los derechos humanos significó la construcción de un nuevo paradigma, el que procura ser de igualdad en *dignidad y derechos* frente a todo tipo de discriminación. A partir de esto se origina el desarrollo de los derechos humanos, los cuales provienen de la diversidad, para posteriormente hablar de la integridad y en la actualidad se ha agregado su universalidad, no sólo en su reconocimiento por parte de los Estados sino, fundamentalmente, en la punición de sus violaciones en el ámbito nacional y supranacional.

A raíz de este reconocimiento, es que se afirma que el ser humano es titular de un conjunto de derechos oponibles *erga omnes*, independientemente de los diversos regímenes político–institucionales y es de esta manera que el Estado está obligado a garantizar los derechos humanos a través de políticas activas, subsanando acciones u omisiones lesivas de dicha titularidad.

Lo que da como resultado que la Declaración Universal de Derechos Humanos en todos sus artículos reconozca los derechos de las personas, bajo los enunciados de *“toda persona tiene los derechos y libertades..., todo individuo tiene derecho a la vida..., nadie será sometido a esclavitud..., todo ser humano tiene derecho...”*, el nacimiento de la Declaración Universal, es sólo el comienzo de los esfuerzos de la Comunidad Internacional por no dejar sin castigo las graves violaciones a los derechos humanos, por lo que se da un siguiente paso con la aparición de las Convenciones, las cuales no sólo reconocen derechos, sino determinan claramente

obligaciones de los Estados estableciendo que “*cada uno de los Estados partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar...*”¹⁵¹⁷ lo que implica que, al momento de ratificar las Convenciones, los Estados se obligan a respetar y hacer efectivos esos derechos ¹⁵¹⁸ . Estas obligaciones tienen que ser cumplidas efectivamente para acatar el deber de reparación; donde los Estados no pueden escoger libremente cuáles cumplir según su conveniencia; pues todas forman parte de un imperativo determinado por instrumentos internacionales generales de derechos humanos.

En la actualidad se puede observar que la práctica de los órganos internacionales de las Naciones Unidas¹⁵¹⁹ y de la jurisprudencia internacional han dado contenido a este deber de garantía a través de sus decisiones, acordando en líneas generales que el mismo conlleva cuatro obligaciones, a saber: prevenir, sancionar, investigar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Waldo Villalpando respecto al afianzamiento del sistema internacional de protección de los derechos humanos sostiene que “*la defensa de los derechos fundamentales y el castigo de los crímenes internacionales no son episodios pasajeros sino el resultado de la madurez del sistema mundial de protección jurídica*”¹⁵²⁰.

La impunidad viola el deber de garantía; el Relator Especial de las Naciones Unidas con competencia sobre el tema señaló que la misma “*... constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que sean procesados, juzgados y condenados a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación del perjuicio sufrido y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones ...*”¹⁵²¹.

¹⁵¹⁷ Artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civile y Políticos.

¹⁵¹⁸ RAVENNA, Horacio. 2005. *Acceso a la Justicia e Impunidad. Taller Regional sobre Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho*. S.E. San José, Costa Rica: United Nations: High Commissioner for Human Rights. Página 4. Sin ISBN.

¹⁵¹⁹ Por ejemplo, la Misión de observadores de las Naciones Unidas en El Salvador: Informe de 19/2/92, párrafo 28.

¹⁵²⁰ VILLALPANDO, Waldo, 2000. *De Los Derechos Humanos al Derecho Internacional Penal*. Primera edición. España: Ed. Abeledo-Perrot. ISBN 9789879835104.

¹⁵²¹ ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS *Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad*; principio 20.

Los esfuerzos para combatir la impunidad desde el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos se reflejan por medio de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, declaraciones convenios o tratados, principios. En el caso de los tratados internacionales cuentan con organismos¹⁵²² de control sobre la forma en que los Estados ponen en práctica las obligaciones que asumen al ratificar los instrumentos.

El papel que han jugado en esta actividad los órganos de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, ha sido de vital importancia en el proceso de lucha contra la impunidad. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas abordó la cuestión desde temprana hora, al expresar en 1979 vivas críticas a la auto amnistía decretada por el régimen militar chileno, concluyendo en 1992 que las amnistías son generalmente incompatibles con la obligación de los Estados de investigar¹⁵²³.

La elaboración y emisión del Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, según Joinet *“no son normas jurídicas stricto sensu, sino principios directores destinados, no a contribuir al fracaso de la reconciliación, sino a encauzar las desviaciones de ciertas políticas de reconciliación con el objetivo de que, una vez pasada la primera etapa, hecha a base de “conciliaciones” más que de “reconciliación”, se pueda construir la base de una “reconciliación justa y duradera”*.¹⁵²⁴ Directrices que ayudan a los Estados a desarrollar medidas eficaces para luchar contra la impunidad. Los principios han constituido, de por sí, un marco influyente para las medidas nacionales de lucha contra la impunidad.

Estos son los pasos más trascendentes de lucha contra la impunidad desde las Naciones Unidas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así como la creación de estos mecanismos demanda largo tiempo, su aplicación y visibilidad

¹⁵²² Un órgano o comité de supervisión independiente establecido por el tratado mismo, vigila la aplicación del tratado por los Estados Partes. Esos comités están integrados por expertos independientes elegidos por los Estados que son Partes en el tratado, cuya imparcialidad, independencia y experiencia en materia de derechos humanos los faculta para evaluar los progresos realizados por los Estados Partes en relación con las normas establecidas en el tratado en cuestión. *Ídem. Página 2.*

¹⁵²³ COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS. *Óp. Cit.* Páginas 6 y 7.

¹⁵²⁴ JOINET, Louis. *Óp. Cit.* párrafo 49.

de resultados son de igual forma lenta, se espera que los mismos logren los fines propuestos y que evidencien eficacia en la lucha contra la impunidad.

Existe un grupo importante de instrumentos internacionales en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos que explícita o implícitamente contienen principios y normas para combatir la impunidad. En algunos casos se llega a reconocer el derecho de las víctimas a recurrir ante las instituciones y organismos del Estado, en búsqueda de justicia por violaciones a los derechos humanos.

A continuación, se analizará la eficacia del Sistema Universal.

CAPÍTULO XI

SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

ANTECEDENTES

Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial produjeron incontables efectos en la humanidad, uno de ellos fue su función catalizadora, para la unión de las naciones con el fin de oficializar y reconocer la interdependencia de la gran comunidad humana, a través de la Organización de Naciones Unidas conformada en 1945¹⁵²⁵. Uno de los temas que la misma abordó, fue la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La historia de la redacción de este documento, es en sí misma una materia transcendental y refleja la importancia de la colaboración para la complementariedad en las visiones de la defensa de Derechos Humanos, sin embargo, el aporte que se analiza para efectos del presente estudio, es su contribución al punto de partida del examen del respeto a los Derechos Humanos en el contexto del sistema universal¹⁵²⁶.

Es importante, tener en cuenta que la particularidad principal de este sistema respecto de otros, es que no está conformado por un tribunal *per se*, sino utiliza una serie de convenciones adoptadas por los Estados Parte, las cuales son verificadas en su cumplimiento por los diferentes comités correspondientes¹⁵²⁷. Es así que se dio una especie de control atomizado que implica diferentes líneas de gestión del caso.

¹⁵²⁵ GLENDON, M. A. 2001. *A world made new: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights*. Primera edición. New York: Random House. ISBN: 9786071607904

¹⁵²⁶ FUNDACIÓN Juan Vives Suriá. 2010. *Derechos humanos: historia y conceptos básicos* [en línea]. S.E. Caracas, Venezuela: Fundación Editorial El perro y la rana, Fundación Juan Vives Suriá, Defensoría del Pueblo [Consulta: diciembre 10 de 2020] ISBN:9789801412564. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/Venezuela/fundavives/20170102055815/pdf_132.pdf

¹⁵²⁷ BREGAGLIO, Renata, 2013. SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS. En: ASTURIAS Ospina, Felipe. BREGAGLIO, Renata y otros. *Protección Multinivel de Derechos Humanos*. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú. Págs. 91 – 129. ISBN: 9788430971381

1. ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ FUE CREADO?

Es creado para mantener la paz a través del cumplimiento de los Derechos Humanos es el principal objetivo de la conformación del sistema universal¹⁵²⁸, esto es una reacción directa por la inexistencia de un mecanismo apropiado para atender una actuación estatal¹⁵²⁹ que, aunque siendo soberana e incluso legal a nivel de ordenamiento interno, no es legítima a la luz de los Derechos Humanos con que se reconoce y atiende la dignidad del ser humano.

2. PAPEL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN SU CREACIÓN

Este fue el primer mecanismo de cumplimiento de Derechos Humanos establecido a nivel global. Su conformación fue apoyada por los Estados Parte que conforman la Asamblea General de Naciones Unidas, a través de la aprobación y adhesión a las Convenciones que incluye el sistema, así como los comités que velan por su cumplimiento¹⁵³⁰.

La complementariedad de culturas y perspectivas filosóficas, se refleja al observar la historia de la redacción de los documentos que conforman la base del sistema, esta participación activa e interés por parte de varias naciones soberanas tanto en la redacción de la convencionalidad base, como en la aplicación de la misma reafirma el rol significativo de la comunidad internacional en el sistema universal¹⁵³¹.

¹⁵²⁸ VELÁSQUEZ, Catalina. S.F. ¿Qué es la Declaración Universal de Derechos Humanos y por qué se creó? En: *Amnistía Internacional* [en línea]. Disponible en: <https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/derechos-humanos/declaracion-universal-derechos-humanos/> [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

¹⁵²⁹ Fundación Juan Vives Suriá, 2010. *Derechos humanos en el ámbito internacional* [en línea]. S.E. Caracas: Fundación Editorial El perro y la rana, Fundación Juan Vives Suriá, Defensoría del Pueblo. [Consulta 10 de diciembre de 2020] ISBN: 978-980-14-1257-1. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/Venezuela/fundavives/20170103034143/pdf_133.pdf

¹⁵³⁰ GLENDON, M. A. *Óp. Cit.*

¹⁵³¹ AÑÑOS BEDRIÑA, Karen, 2016. Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos: Análisis de los Informes del Comité de Derechos Humanos en Latinoamérica. En: *Revista de Paz y Conflictos* [en línea]. España: Universidad de Granada, Vol. 9, No. 1, pp. 261-278. [Consulta 10 de diciembre] ISSN:1988-7221. Disponible en: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gXfZk7kryWkJ:revistaseug.ugr.es/index.php/revpaz/article/viewFile/3984/4845+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=gt>

3. ¿CÓMO SE ABORDÓ EL TEMA DE LA SOBERANÍA?

Es claro que desde su inicio el Sistema Universal, tiene un interés preponderante por respetar la soberanía estatal en el examen del cumplimiento de las obligaciones internacionales que adquieren los Estados en materia de Derechos Humanos¹⁵³².

Los mecanismos más antiguos en el contexto del Sistema Universal, son aquellos que no implican ningún tipo de identificación directa de la víctima, ni sanción o expresión de responsabilidad directa por parte del Estado¹⁵³³.

Los mecanismos no contenciosos del Sistema Universal, son una expresión de actuación diplomática en la revisión del actuar estatal, dado que alertan a la comunidad internacional de una violación de Derechos Humanos sin someter al Estado Parte a una declaración formal de su responsabilidad¹⁵³⁴. Esta alerta tiene implicaciones geopolíticas, que en sí mismas pueden ser un aliciente para encauzar el actuar estatal hacia un mayor respeto a los Derechos Humanos, pero además influye en otros, aspectos tales como la interacción económica que tiene el Estado bajo examen con otras economías alrededor del globo, en atención a que la falta de respeto a Derechos Humanos es un factor de influencia directa en la calidad del Estado de Derecho en el lugar, un elemento de suprema relevancia en la evaluación de inversión en un sitio¹⁵³⁵.

Los mecanismos cuasi contenciosos aumentan el grado de intervención soberana, en tanto señalan una responsabilidad de manera específica y obligan al Estado Parte a tomar o evitar acciones u omisiones que constituyen la violación comprobada después del uso del mecanismo¹⁵³⁶. Sin embargo, puede observarse que predomina el respeto

¹⁵³² ORGANIZACIÓN de las Naciones Unidas, 2018. La falsa dicotomía entre derechos humanos y la soberanía nacional. En: *Noticias ONU* [en línea]. Disponible en: <https://news.un.org/es/story/2018/09/1442481> [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

¹⁵³³ JEAN-BERNARD, Marie. S.F. Los mecanismos de protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En: Estudios Básicos de Derechos Humanos, Tomo V [en línea]. Costa Rica, Uruguay, Colombia: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, pp. 152 – 169. [Consulta: 10 de diciembre de 2020]. Disponible en: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tRMFCAI6KhMJ:https://www.corteidh.or.cr/tablas/a12008.pdf+&cd=15&hl=es&ct=clnk&gl=gt> [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

¹⁵³⁴ Red-DESC. S.F. Mecanismos de la ONU de aplicación de los derechos humanos. En: *Red – DESC* [en línea]. Disponible en: <https://www.escri-net.org/es/recursos/mecanismos-onu-aplicacion-derechos-humanos>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁵³⁵ JEAN BERNARD, Marie. *Óp. Cit.*

¹⁵³⁶ BREGAGLIO, Renata. *Óp. Cit.*

a la soberanía en el contexto Universal, dado que el resultado de mecanismo como la atención a comunicaciones individuales, no es una sentencia ni la Comisión que hace la revisión se identifica como tribunal, en cambio se emite un informe que si bien es de cumplimiento obligatorio nunca llega al grado de proclamarse oficialmente como un instrumento de intervención soberana¹⁵³⁷.

4. TIPO DE GOBIERNO ¿DEMOCRACIA?

Los mecanismos del Sistema Universal nacen a la vida y son ejecutados en un contexto democrático, en virtud de ser propuestas redactas en atención a la multiculturalidad de los Estados Parte, las cuales son sometidas a la votación de la Asamblea General de Naciones Unidas¹⁵³⁸.

Los Comités que velan por el cumplimiento de las Convenciones correspondientes, también siguen mecanismos democráticos para la toma de decisiones, este esquema ayuda a fortalecer la participación activa y el cumplimiento de las disposiciones de cada Comité¹⁵³⁹.

Los Estados que forman parte de cada Consejo o Comité, así como la elección de relatores y Comisionados, deviene de una votación ya sea ante la Asamblea General o el órgano de control correspondiente según el instrumento que se aplica¹⁵⁴⁰.

5. ¿ESTADO DE DERECHO?

Puede argumentarse que el Sistema Universal de Derechos Humanos surgió bajo un nuevo orden mundial, en el cual se comprende la interconexión del actuar de cada Nación que conforma la comunidad internacional, tanto en la preservación de la dignidad humana de cada persona que la habita, como de los límites del actuar

¹⁵³⁷ VILLAGRÁN, Soledad, 2004. El sistema universal de derechos humanos: los mecanismos convencionales y los mecanismos basados en la carta. En: *El Paraguay frente al Sistema Internacional de los Derechos Humanos* [en línea]. Montevideo: Programa Estado de Derecho América Latina, pp 141 – 157. [Consulta: 10 de diciembre de 2020]. ISBN: 9974-7677-6-8. Disponible en: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2226/13.pdf>

¹⁵³⁸ A/520/Rev.18. Reglamento de la Asamblea General.

¹⁵³⁹ VILLA QUINTANA, Carmen Rosa, 2007. Mecanismos de Protección de Derechos Humanos Sistema de Naciones Unidas. En: ERAZO, Ximena. *Políticas Públicas para un Estado Social de Derechos, Vol. 1*. S.E. España: LOM. Pp. 71 -90. ISBN: 978-956-282-934-2.

¹⁵⁴⁰ Ídem

soberano de un Estado, cuando el mismo atenta contra los derechos de otros Estado¹⁵⁴¹.

Esta comprensión crea la necesidad de sistemas de revisión y corrección que aún de manera sutil como en el caso del Sistema Universal, limitan el actuar estatal para evitar que el mismo llegue a un punto de rompimiento de la paz mundial¹⁵⁴².

6. ¿ORIGEN BASADO EN CIERTAS SUPOSICIONES O CONDICIONES FÁCTICAS?

Su origen parte de la suposición de Derechos que son inherentes a cualquier ser por su condición de humano, así también parte del supuesto de una obligación comunitaria, de asegurar esa dignidad ante cualquier afrenta en virtud del cumplimiento de un fin filosófico que aprecia el valor del ser humano, con un fin práctico que es el mantenimiento de la paz y la prevención de la normalización de prácticas que vulneran los Derechos Humanos en el contexto mundial¹⁵⁴³.

Esto último confirma el origen mixto del Sistema Universal dado que junto a una raíz filosófica también hay condiciones fácticas que operativizan esta, tales como las violaciones cometidas durante la segunda guerra mundial como antecedente directo y conflictos anteriores a través de los cuales las acciones violatorias fueran escalando en magnitud y desconocimiento de los Derechos Humanos¹⁵⁴⁴.

7. DOCUMENTO CREADOR

Los elementos del Sistema Universal de Derechos Humanos no están constituidos en un solo documento sino en los distintos Pactos y Convenciones cuyo cumplimiento aseguran¹⁵⁴⁵, a saber:

¹⁵⁴¹ CAROZZA, Paolo G., 2012. Human Rights, Human Dignity, and Human Experience (December 21, 2012). En: MCCRUDDEN, Christopher, ed., *Understanding Human Dignity* (The British Academy, 2013). Primera Edición Reimpresa. Reino Unido: The British Academy. ISBN-13: 978-0197265826.

¹⁵⁴² OFICINA del Alto Comisionado de Derechos Humanos, S.F. Mantener la paz mediante los derechos humanos. En: *Naciones Unidas* [en línea]. Disponible en: <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/SustainingPeace.aspx> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁵⁴³ CAROZZA, Paolo. *Óp. Cit.*

¹⁵⁴⁴ VILLAGRÁN, Soledad. *Óp. Cit.*

¹⁵⁴⁵ Consejo de Europa, S.F. Protección Legal de los Derechos Humanos. En: *COMPASS: Manual de Educación en los Derechos Humanos con jóvenes* [en línea]. Disponible en:

- a. **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:** El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entrado en vigor en 1976 que desarrolla las nociones establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, abriendo el espacio para que los Estados Parte de la Organización de Naciones Unidas, se comprometan en la revisión de la calidad de cumplimiento de obligaciones relacionadas a Derechos Humanos¹⁵⁴⁶. Su contexto histórico se desarrolla en el debate relacionado a la necesidad de diferenciación entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Dado que una de las metas de la aprobación de este pacto es la creación de obligaciones más concretas y los mecanismos para hacerlas valer, el mismo generó el desarrollo del Comité de Derechos Humanos, el cual vigila su cumplimiento¹⁵⁴⁷.
- b. **Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:** La revisión de los derechos económicos, sociales y culturales en el escenario del sistema universal queda a cargo del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el mismo se crea a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que entró en vigor en 1976¹⁵⁴⁸.
- c. **Convención Internacional de todas las formas de discriminación racial:** El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, es creado a través de la Convención internacional de todas las formas de discriminación racial del año 1969 buscando el respeto universal y efectivo a los Derechos Humanos sin distinciones de ningún tipo¹⁵⁴⁹.
- d. **Convención contra la Tortura:** Entrando en vigor en 1987, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes crea

<https://www.coe.int/es/web/compass/legal-protection-of-human-rights> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁵⁴⁶ Humanium, S.F. Pactos Internacionales de 1966. En: *Humanium* [en línea]. Disponible en: <https://www.humanium.org/es/pacto-1966/> [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

¹⁵⁴⁷ VILLA QUINTANA, Carmen Rosa. *Óp. Cit.*

¹⁵⁴⁸ Humanium. *Óp. Cit.*

¹⁵⁴⁹ SHIRANAE, Daisuke, 2011. *La Convención Internacional sobre toda forma de discriminación racial (ICERD) y su Comité (CERD): Una guía para actores de la sociedad civil* [en línea]. Ginebra: Daisuke SHIRANE (Movimiento Internacional Contra Todas las Formas de Discriminación y Racismo (IMADR)). [Consulta: 10 de diciembre de 2020]. Sin ISBN. Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/ICERDManual_sp.pdf.

también el Comité Contra la Tortura, el cual se encuentra encargado de velar por el cumplimiento de este acuerdo internacional¹⁵⁵⁰.

- e. **Convención sobre los Derechos del Niño:** Con la evolución de las consideraciones en materia de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, representa un nuevo paso en la cobertura de los derechos de la niñez, no sólo por su consideración de las particularidades que toma la misma respecto de este grupo vulnerable, sino también por la creación del Comité de los Derechos del Niño que desde 1991 vela por el cumplimiento de esta Convención¹⁵⁵¹.
- f. **Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares:** Entró en vigor en 2003, crea el Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares¹⁵⁵².
- g. **Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer:** Crea el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer y tiene a su cargo la implementación de la Convención que entró en vigor en 1981¹⁵⁵³.
- h. **Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad:** La protección de las personas con discapacidad se configura instrumentalmente en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, la cual entró en vigor en 2008 y crea el Comité de los derechos de las personas con discapacidad¹⁵⁵⁴.

¹⁵⁵⁰ Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH), 2011. *CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES* Versión comentada [en línea]. S.E. Guatemala: Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos. [Consulta: 10 de diciembre de 2020]. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/28835.pdf>

¹⁵⁵¹ UNICEF, S.F. El camino hacia la Convención sobre los Derechos del Niño. En: Unicef [en línea]. Disponible en: https://www.unicef.org/spanish/crc/index_30197.html [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁵⁵² CÁMOS VICTORIA, Ignacio y ROJO TORRECILLA, Eduardo, 2004. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de sus Familias. En: Revista Comillas, Migraciones, Revista del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones [en línea]. España: Universidad de Girona, No. 16, pp 7-15. [Consulta: 10 de diciembre de 2020]. Disponible en: <https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones/article/view/4237/4061>

¹⁵⁵³ ONU Mujeres, S.F. *Un poco de historia*. En: ONU Mujeres [en línea]. Disponible en: <https://www.unwomen.org/es/csw/brief-history> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁵⁵⁴ PARRA DUSSAN, Carlos, 2010. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: antecedentes y sus nuevos enfoques, 16 *International Law. Revista Colombiana de Derecho Internacional*, 347-380 (2010) [en línea]. Bogotá, Colombia: Equipo Editorial International Law,

- i. **Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas:** El Comité contra las desapariciones forzadas creado a través de la Convención que entró en vigor desde 2010¹⁵⁵⁵.

8. MANDATO

El sistema está compuesto por 9 convenciones y sus respectivos comités, cada uno de los cuales a su vez son conformados por 18 expertos independientes.

Cada instrumento está enfocado en violaciones a los derechos por los que fue creado, es así como conocen violaciones a:

- a. **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:** Conoce de las violaciones a los derechos civiles y políticos.
- b. **Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:** Se enfoca en las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales.
- c. **Convención Internacional de todas las formas de discriminación racial:** Conoce los casos de discriminación racial.
- d. **Convención contra la Tortura:** Se concentra en las denuncias de casos de tortura cometidos en contextos ajenos a la guerra.
- e. **Convención sobre los Derechos del Niño:** Conoce la vulneración de los derechos de los niños.
- f. **Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares:** Entró en vigor en 2003, crea el Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares¹⁵⁵⁶.
- g. **Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer:** Conoce los casos de discriminación contra la mujer.

No. 16, pp.347 – 380. [Consulta: enero 3, 2021] ISSN: 1692-8156. Disponible en: <http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/internationallaw/article/view/13841/11138>

¹⁵⁵⁵ GALELLA, Patricio, 2010. La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Un gran paso hacia una mayor protección en la lucha contra este fenómeno. En: *RJUAM* [en línea]. España: Dykinson, No. 21, 2010-I, pp. 77-100. [Consulta 3 de enero 2021] ISSN: 1575-720x. Disponible en: <https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/download/6016/6479/0>

¹⁵⁵⁶ CAMÓS VICTORIA, Ignacio y ROJO TORRECILLA Eduardo, 2004. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de sus Familias. *Migraciones* [en línea]. España: Universidad Pontificia Comillas, No. 16, pp. 7 – 40. [Consulta 3 de enero 2021] ISSN: 1138-5774 En red disponible en: <https://core.ac.uk/download/pdf/132089765.pdf>

- h. **Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad:** Se enfoca en la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
- i. **Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas:** Conoce los casos de desaparición forzada.

A. OBJETIVOS

Cada instrumento tiene sus propios objetivos específicos, así:

- a. **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:** creación de obligaciones más concretas y los mecanismos para hacerlas valer con relación a los derechos civiles y políticos¹⁵⁵⁷.
- b. **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:** velar por el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales en el escenario del sistema universal¹⁵⁵⁸.
- c. **Convención Internacional de todas las formas de discriminación racial:** eliminación de todas las formas de discriminación racial, respeto universal y efectivo a los Derechos Humanos sin distinciones de ningún tipo¹⁵⁵⁹.
- d. **Convención contra la Tortura:** eliminación, investigación y sanción de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes¹⁵⁶⁰.
- e. **Convención sobre los Derechos del Niño:** velar por el cumplimiento de los Derechos del Niño¹⁵⁶¹.

¹⁵⁵⁷ *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.* Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.

¹⁵⁵⁸ *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.* Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.

¹⁵⁵⁹ *Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.* Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965.

¹⁵⁶⁰ *Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.* Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984.

¹⁵⁶¹ *Convención sobre los Derechos del Niño.* Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, el 20 de noviembre de 1989.

- f. **Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares:** protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares¹⁵⁶².
- g. **Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer:** eliminación de la discriminación contra la mujer¹⁵⁶³.
- h. **Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad:** protección de las personas con discapacidad¹⁵⁶⁴.
- i. **Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas:** protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas¹⁵⁶⁵.

B. ALCANCES DEL MANDATO

Los mecanismos provistos por el Sistema Universal pueden categorizarse en dos formas: contenciosos y cuasi contenciosos. Además, es importante recordar que no todas las convenciones que conforman el sistema incluyen los mismos mecanismos¹⁵⁶⁶.

Un mecanismo no contencioso en este contexto, es aquél que busca respetar la soberanía estatal en el mayor grado dado que su resultado no es una condena o sanción al Estado Parte, estos son: *“el envío de informes periódicos a los Comités, la adopción de observaciones generales por parte de los Comités y las investigaciones de oficio a Estados en caso de violaciones masivas y sistemáticas”*¹⁵⁶⁷.

Todos los comités tienen la potestad de solicitar el envío de informes periódicos, así como de adoptar observaciones generales, sin embargo, únicamente CAT, CEDAW,

¹⁵⁶² *Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares*. Adoptada por la Asamblea General en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990

¹⁵⁶³ *Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer*. Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979

¹⁵⁶⁴ *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*. Aprobada por la Asamblea General el 13 de diciembre de 2006.

¹⁵⁶⁵ *Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas*, Aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 2006.

¹⁵⁶⁶ VILLAGRÁN, Soledad. *Óp. Cit.*

¹⁵⁶⁷ Red-DESC. *Óp. Cit.*

CRPD y CED tienen la potestad de hacer investigaciones de oficio, las mismas no buscan determinar la culpabilidad de un sujeto en específico sin dar seguimiento a indicios que razonablemente indiquen que una violación de Derechos Humanos se está dando en un Estado y conocer la amplitud de la misma a través de reconocimiento *in situ*¹⁵⁶⁸.

Los mecanismos cuasi contenciosos incluyen la atención de comunicaciones individuales y la presentación de comunicaciones interestatales. Estos mecanismos tienen como fin último, el pronunciamiento por parte de uno de los comités respecto de la violación de uno o varios Derechos Humanos según la competencia del Comité al que se acude. El Estado Parte en reconocimiento de la potestad del Comité correspondiente para hacer este tipo de pronunciamientos también acepta adoptar las medidas de reparación que el mismo determine. La existencia de un contradictorio *sub examine* en este tipo de mecanismos, se contrasta con la inexistencia de una sentencia *per se* y el hecho de que un Comité no se conforma como un tribunal internacional¹⁵⁶⁹. Esta característica nos permite identificar los mismos como “cuasi” contenciosos.

C. COMPETENCIA

Como se indicó con anterioridad, los mecanismos del sistema universal no contienen una condena para personas específicas, ni la determinación de responsabilidad internacional por parte de un Estado, únicamente se obtiene un pronunciamiento del órgano específico según la materia de la que se trate la solicitud o petición¹⁵⁷⁰.

En ese sentido, la competencia se basa en la materia sobre la cual versa la solicitud que se presente, de conformidad con los diferentes convenios ya referidos en el presente análisis y sujeto al reconocimiento de cada uno de los Estados de la competencia de los órganos de control establecidos en los instrumentos.

¹⁵⁶⁸ Consejo de Europa. *Óp. Cit.*

¹⁵⁶⁹ VILLA QUINTANA, Carmen Rosa. *Óp. Cit.*

¹⁵⁷⁰ Ídem

D. REGLAS DE ADMISIBILIDAD

Dentro del sistema universal, los requisitos de admisibilidad no son tan estrictos como en los sistemas regionales, quizás porque sus resultados no tienen la misma fuerza vinculante que las resoluciones de los tribunales regionales¹⁵⁷¹.

No obstante, deben cumplir con principios básicos, como el agotamiento de recursos internos, el no haber sido presentado ante otra instancia internacional y que los hechos denunciados tengan relación con violaciones al instrumento o convenio específico¹⁵⁷².

E. TIEMPO DETERMINADO

No existe una limitación temporal establecida en los acuerdos, no obstante, de conformidad con las reglas básicas de Derechos Internacional Público y el Derecho de los Tratados, los mecanismos establecidos no tendrán efectos retroactivos, es decir, solo podrán conocer sobre violaciones cometidas durante la vigencia del convenio¹⁵⁷³.

F. DISTRIBUCIÓN DEL PODER.

La elección de los miembros de cada Comité o Consejo, se llevan a cabo en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, o en algunos de sus órganos especializados ante quienes los Estados expresan su voluntad.

Además, por tratarse de mecanismos de *soft law*, y que los resultados no sean de cumplimiento imperativo para los Estados, el tema de distribución de poder pierde relevancia; esto no significa que no sean importantes mecanismos para evidenciar violaciones a Derechos Humanos, pero al ser las consecuencias de naturaleza más política que jurídica, el poder que puedan ejercerse no deviene directamente del mecanismo sino de aquellos Estados “poderosos” que dan seguimiento a las recomendaciones que los órganos emiten.

¹⁵⁷¹ Red-DESC. *Óp. Cit.*

¹⁵⁷² BREGAGLIO, Renata. *Óp. Cit.*

¹⁵⁷³ Artículo 28. Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados.

9. ¿SURGIÓ COMO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES?

A. ¿HABÍA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL?

Como se indicó en el apartado del documento creador, antes de la existencia del sistema universal, no había un marco regulatorio internacional relacionado con los Derechos Humanos; por lo anterior, los mecanismos no surgen como cumplimiento de obligaciones internacionales, pues fueron los instrumentos de este sistema los que impusieron en los Estados las primeras obligaciones en materia de Derechos Humanos¹⁵⁷⁴.

B. OBLIGACIONES INTERNACIONALES

Tal y como se mencionó en el apartado anterior, fue en el marco del Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos¹⁵⁷⁵.

C. ¿ABORDA HECHOS ILÍCITOS INTERNACIONALES?

Sí, puesto que las violaciones a los derechos humanos son comportamientos atribuibles a los Estados que constituyen una violación a las obligaciones internacionales. Los procedimientos contemplados en el sistema universal determinan la existencia de la responsabilidad Estatal¹⁵⁷⁶.

10. COOPERACIÓN DE LOS ESTADOS.

Los órganos de control del sistema universal se desarrollan en el seno de la Organizaciones de Naciones Unidas¹⁵⁷⁷. Todos los instrumentos de protección de Derechos Humanos del sistema universal contemplan la presentación de informes periódicos por parte de los Estados en relación a la materia¹⁵⁷⁸; en ese sentido, se hace necesaria la buena voluntad de los Estados, para que el mecanismo de control

¹⁵⁷⁴ Ver apartado GENERALIDADES.

¹⁵⁷⁵ Ver apartado no. 1 ¿Por qué y para qué fue creado?

¹⁵⁷⁶ Ver apartado no. 6. Mandato.

¹⁵⁷⁷ Consejo de Europa. *Óp. Cit.*

¹⁵⁷⁸ VILLA QUINTANA, Carmen Rosa. *Óp. Cit.*

funcione, pues son ellos quienes proporcionan la información a los comités o consejos para analizar el cumplimiento de las disposiciones de los Convenios.

Por otra parte, tanto la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas,¹⁵⁷⁹ como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes¹⁵⁸⁰ establecen la posibilidad de realizar visitas, en las que los Estados deberán prestar toda la colaboración para que el órgano de control pueda desempeñar sus funciones.

Por otra parte, con relación a su presupuesto, al depender de la Organización de Naciones Unidas, también lo son de las aportaciones de los Estados¹⁵⁸¹.

11. INDEPENDENCIA

Como se establece en los reglamentos y reglas de procedimiento de cada uno de los Consejos y Comités, la independencia de sus miembros es esencial e indispensable¹⁵⁸². Además, en su elección se deberá tomar en cuenta una distribución geográfica equitativa y de un equilibrio adecuado entre ambos géneros¹⁵⁸³.

No obstante, al igual que en todos los asuntos que se dilucidan en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, enfrentan presiones por parte de los Estados “poderosos”, y la participación de Estados teóricamente “pequeños” dependen del apoyo de los grandes para participar en estos Consejos y Comités, lo que podría comprometer sus posturas dentro de estos órganos¹⁵⁸⁴.

¹⁵⁷⁹ “Artículo 33. 1. Si el Comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves de las disposiciones de la presente Convención por un Estado Parte podrá, después de consultar con dicho Estado, solicitar a uno o varios de sus miembros que efectúen una visita al mismo y le informen al respecto sin demora”. Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

¹⁵⁸⁰ “Artículo 20. 3. Si se hace una investigación conforme al párrafo 2 del presente artículo, el Comité recabará la cooperación del Estado Parte de que se trate, de acuerdo con ese Estado Parte, tal investigación podrá incluir una visita a su territorio”. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

¹⁵⁸¹ NOTICIAS Organización de las Naciones Unidas, 2019. La Asamblea General aprueba un presupuesto de más de 3000 millones de dólares para la ONU en 2020. En: *ONU y Secretario General* [en línea]. Disponible en: <https://news.un.org/es/story/2019/12/1467221> [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

¹⁵⁸² HRI/GEN/3/Rev.3

¹⁵⁸³ Ídem

¹⁵⁸⁴ BURGOS SILVA, José German, 2019. Las organizaciones internacionales y sus recursos de poder. Una propuesta analítica. *Estud. Polit.* [en línea]. Medellín: Universidad de Antioquía, No.54. [Consulta:

12. SELECCIÓN DE ACTORES

Cada uno de los Comités por medio de sus Convenciones y los Mecanismos Independientes tienen claramente delimitados los actores que intervienen, siendo estos las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, sus representantes y el Estado denunciado, así como el personal que trabaja para el Comité o Mecanismo interviniente.

En este sentido, se debe señalar que el hecho de que los actores facultados para intervenir en los casos estén plenamente definidos, es un gran paso en cuanto al abordaje objetivo de los casos.

13. NORMATIVA RELEVANTE Y MARCO PROCEDIMENTAL

Además de cada instrumento creador, cada uno de los Consejos o Comités tienen sus propias reglas de procedimiento o reglamentos emitidos por cada órgano de control¹⁵⁸⁵.

El procedimiento de presentación de denuncias es parecido en todos los Comités. La presentación de la denuncia la puede realizar cualquier persona que esté informado de la violación y que esté autorizado por la víctima o esta última de manera directa, siendo el requisito indispensable que el tratado haya sido ratificado por el Estado y que se haya aceptado la jurisdicción.

La denuncia¹⁵⁸⁶ es denominada comunicación o queja y normalmente los Comités facilitan un modelo para que se presente con la información necesaria para conocer la violación, debe estar legiblemente escrita, de preferencia mecanografiada y firmada y presentada en uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas.

Los hechos se deben exponer por orden cronológico, debiendo presentarse lo más completo posible, con toda la información pertinente. Indicando las razones por las

10 de diciembre de 2020] ISSN: 0121-5167. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-51672019000100149&script=sci_arttext&tlng=en

¹⁵⁸⁵ HRI/GEN/3/Rev.3

¹⁵⁸⁶ La denuncia debe contener los datos personales básicos —nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, dirección postal y dirección de correo electrónico del autor de la denuncia— y especificar el Estado parte contra el que se presenta. Todo cambio de dirección o cualquier otro dato de contacto se debe notificar tan pronto como sea posible.

que se alega que los hechos del caso representan una violación a la Convención invocada.

También se debe explicar detalladamente los mecanismos que se hayan utilizado para el agotamiento de los recursos disponibles en el Estado parte denunciado, la cual no debe exceder de 50 páginas.

Las comunicaciones son tramitadas por la secretaría de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, las decisiones finales adoptadas por los comités son públicas. Si algún denunciante quiere o desea que su identidad no sea revelada debe indicarlo desde el inicio. La comunicación se debe presentar lo antes posible después de agotarse los recursos internos y así evitar las demoras.

Al cumplirse con los requisitos de admisibilidad, el comité al que se acudió decidirá si registra el caso, incluyendo la comunicación oficialmente en la lista de casos a examinar. Posteriormente, transmite al Estado parte interesado la comunicación para que se pronuncie sobre los hechos dentro del plazo estipulado.

La comunicación pasa por dos exámenes uno de *admisibilidad* y otro de *fondo*¹⁵⁸⁷. Por lo general los comités solicitan a los Estados, que se pronuncien por medio de sus observaciones¹⁵⁸⁸ en un plazo de seis meses contados a partir la fecha en que fueron comunicados de la denuncia.

Luego de recibir las observaciones de ambas partes, el comité adopta la decisión. Si es necesario los comités pueden solicitar al Estado que adopte medidas provisionales en cualquier etapa del procedimiento, con el propósito de a fin de evitar algún daño irreparable al peticionario a la víctima por las reclamaciones del caso.

¹⁵⁸⁷ “La *admisibilidad* se refiere a los requisitos formales que debe cumplir la denuncia para que el comité competente puede examinar su sustancia. El *fondo* se refiere a la sustancia de la denuncia, sobre cuya base el comité decide si los derechos de la presunta víctima consagrados en el tratado han sido vulnerados o no”. OFICINA del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 2013. *Procedimientos para presentar denuncias individuales en virtud de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas*. [en línea] Folleto informativo No. 2. Rev.2 Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet7Rev2_sp.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

¹⁵⁸⁸ “El Estado puede impugnar la admisibilidad de la denuncia por medio de argumentos dentro de los dos primeros meses de ese período. Siempre se da la oportunidad al autor de la denuncia de presentar comentarios sobre las observaciones del Estado parte, dentro de un plazo establecido”. Ídem.

Diagrama de la tramitación de los casos

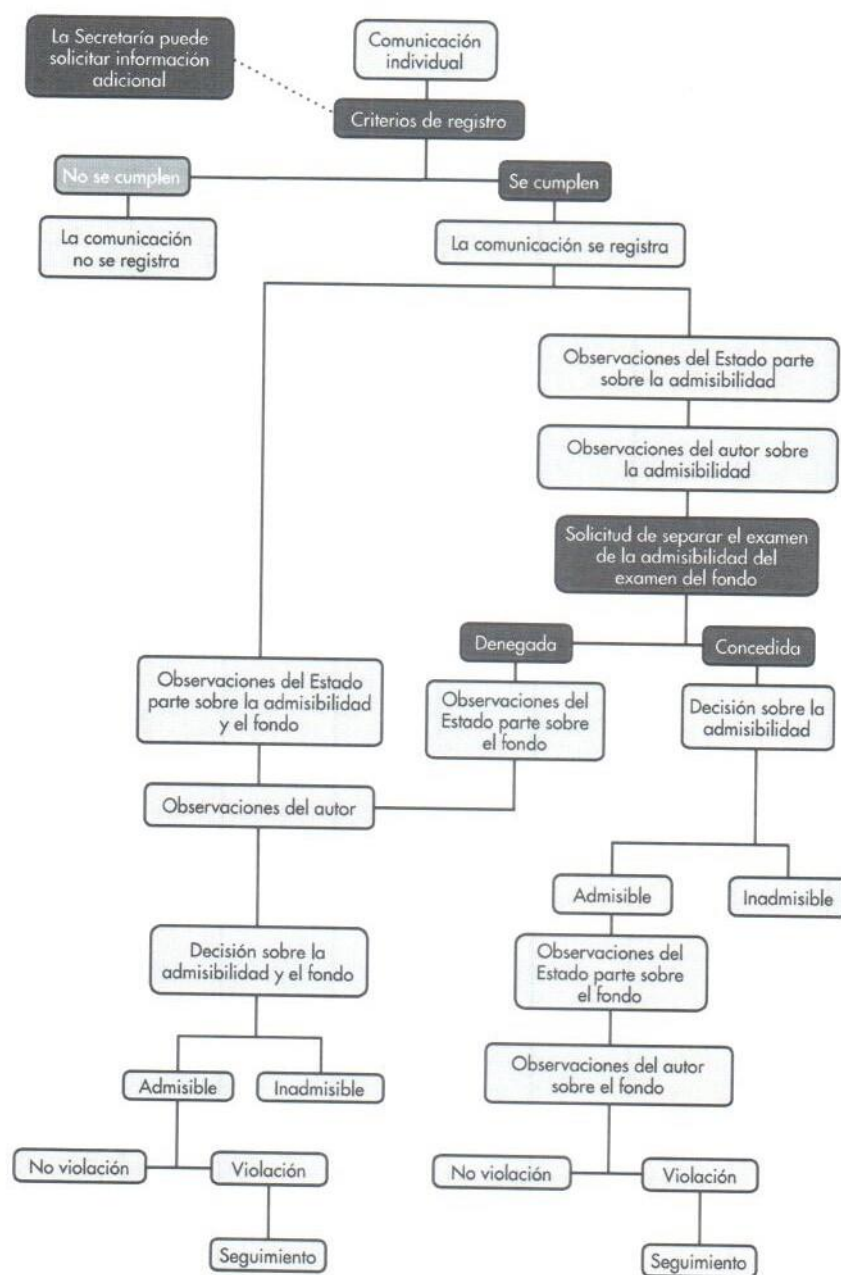


Ilustración 2 Diagrama de trámite de peticiones. Fuente: ONU, Folleto informativo No.7, Rev. 2

14. LEGITIMIDAD:

Ninguno de los órganos de los tratados de derechos humanos, puede ejercer jurisdicción sin haber sido ratificado por el Estado y que este a su vez acepte su potestad de conocer peticiones individuales.

15. JURISDICCIÓN

Como se ha señalado con anterioridad, cada Estado parte de los instrumentos puede reconocer la competencia de los Consejos y Comités para la recepción de peticiones y solicitudes de individuos u otros Estados que consideran que se ha incumplido con disposiciones del tratado¹⁵⁸⁹.

A. ¿QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE DE UN CASO?

Tal y como se mencionó con anterioridad, tanto Estados como Individuos pueden presentar solicitudes ante los órganos de control. Además, en el mecanismo de presentaciones de informes periódicos, tanto individuos como organizaciones de la sociedad civil pueden presentar observaciones a lo presentado por los Estados¹⁵⁹⁰.

B. ¿QUÉ PROBLEMAS SE PODÍA DEBATIR?

Como se ha señalado en apartados anteriores, cada órgano podrá debatir problemas relacionados con la materia de cada acuerdo o tratado, es decir, el incumplimiento de las disposiciones de los Convenios por parte de los Estados Parte¹⁵⁹¹.

16. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN:

Por tratarse de mecanismos cuasi judiciales, no se puede hablar de medios de impugnación en estricto sentido. En contra de las conclusiones, recomendaciones o decisiones que emiten los órganos del sistema universal, no cabe ningún medio de impugnación o revisión, únicamente las observaciones y seguimiento que se da con posterioridad para analizar las acciones o medidas que los Estados han tomado¹⁵⁹².

¹⁵⁸⁹ Ver apartado no. 6 Mandato B. Alcance del Mandato

¹⁵⁹⁰ Ver apartado no. 6 Mandato C. Competencia.

¹⁵⁹¹ Ver apartado no. 6 Mandato A. Objetivos.

¹⁵⁹² VILLA QUINTANA, Carmen Rosa. *Óp. Cit.*

17. MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO

El resultado de los procedimientos de estos mecanismos de protección de Derechos Humanos, queda plasmado en los informes anuales que los órganos de control presentan ante la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas¹⁵⁹³.

A pesar que existen acciones de seguimiento en el marco de los Consejo y Comités, no existen consecuencias jurídicas concretas como resultado de los informes y resoluciones de las peticiones presentadas ante estos¹⁵⁹⁴.

18. RECURSOS DISPONIBLES

A. HUMANO:

El personal que interviene en el conocimiento de las peticiones, son los miembros del Comité o del Mecanismo, el personal contratado por la oficina del Alto Comisionado, los peticionarios y representantes del Estado.

A. Comité de Derechos Humanos

*Está integrado por “18 expertos independientes, quienes son personas de alto carácter moral y reconocida competencia en el campo de los derechos humanos, considerándose la utilidad de la participación de algunas personas con experiencia jurídica (artículo 28, PIDCP). Son elegidos por un período de cuatro años por los Estados parte de entre sus nacionales, teniendo en cuenta la distribución geográfica equitativa y la representación de las diferentes formas de civilización y de los principales sistemas jurídicos, de conformidad con el artículo 31 del Pacto. Los miembros sirven a título personal y pueden ser reelegidos si se vuelven a nominar”.*¹⁵⁹⁵

¹⁵⁹³ BREGAGLIO, Renata. *Óp. Cit.*

¹⁵⁹⁴ Naciones Unidas, 2016. *Mecanismos nacionales de presentación de informes y seguimiento: Guía Práctica para la Colaboración Efectiva de los Estados con los Mecanismos Internacionales de Derechos Humanos* [en línea]. S.E. Nueva York y Ginebra: Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina de Alto Comisionado. [Consulta: 03 de enero de 2021]. Sin ISBN. Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide_SP.pdf

¹⁵⁹⁵ NACIONES Unidas, Derechos Humanos, S.F. Comité de derechos humanos, 38ª Reunión de los Estados partes (Nueva York, 15 de junio de 2020). En: *United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner* [en línea]. Disponibilidad en: <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/Elections38.aspx> [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

B. Comité de Derechos Económicos, Sociales y culturales

Conformado por “18 expertos independientes de alta consideración moral y reconocida competencia en el ámbito de los derechos humanos. Los miembros son elegidos por los Estados parte para un mandato de cuatro años, de conformidad con la Resolución ECOSOC 1985/17 del 28 de mayo de 1985. Los miembros desempeñan sus funciones a título personal y pueden ser reelegidos si vuelven a postularse”.¹⁵⁹⁶

C. Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación racial

Está conformado por “18 expertos independientes que son personas de gran integridad moral y reconocida imparcialidad. En su composición también ha de tenerse en cuenta la distribución geográfica equitativa y la representación de diferentes formas de civilización, así como de los principales sistemas jurídicos. Los Estados parte eligen a los miembros para cumplir un mandato de cuatro años, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 de la Convención. Las elecciones para elegir a nueve de los 18 miembros se celebran cada dos años, lo que garantiza el equilibrio entre la continuidad y el cambio en la composición del Comité”.¹⁵⁹⁷

D. Comité contra la Tortura:

“Está compuesto por 10 expertos independientes que son personas de gran integridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos. Los miembros son elegidos por los Estados Parte para desempeñar un mandato de cuatro años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Convención contra la Tortura. Los miembros ejercen sus funciones a título personal y pueden ser reelegidos si se presenta su candidatura”.¹⁵⁹⁸

¹⁵⁹⁶ NACIONES Unidas, Derechos Humanos, S.F. Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Composición. En: *United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner* [en línea]. Disponibilidad en: <https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CESCR/Pages/Membership.aspx> [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

¹⁵⁹⁷ NACIONES Unidas, Derechos Humanos, S.F. Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación racial, Composición. En: *United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner* [en línea]. Disponibilidad en: <https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CERD/Pages/Membership.aspx> [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

¹⁵⁹⁸ NACIONES Unidas, Derechos Humanos, S.F. Comité contra la Tortura, Composición. En: *United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner* [en línea]. Disponibilidad en: <https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CAT/Pages/Membership.aspx> [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

E. Comité sobre los Derechos del Niño

El Comité se conforma *“por 18 expertos independientes que son personas de gran prestigio moral y reconocida competencia en el ámbito de los derechos humanos. Son elegidos por los Estados Partes para cumplir un mandato de cuatro años, con arreglo al artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Los miembros desempeñan sus funciones a título personal y pueden ser reelegidos, si se presenta su candidatura.”*¹⁵⁹⁹

F. Comité de Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares

Actualmente *“14 expertos independientes lo conforman, estas son personas de gran estatura moral y de reconocida imparcialidad y competencia en los aspectos contemplados en la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Son elegidos por los Estados Parte con arreglo al artículo 72 de la Convención, para un periodo de cuatro años, desempeñan sus funciones a título personal y pueden ser reelegidos si se vuelve a presentar su candidatura”*.¹⁶⁰⁰

G. Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer

Se compone de *“23 expertos en materia de derechos de la mujer procedentes del mundo entero. Los funcionarios del Comité ocupan una Presidencia, tres Vicepresidencias y una Relatoría. Los titulares designados desempeñan sus funciones por un periodo de dos años y pueden ser reelegidos “siempre que se respete el principio de rotación”*.¹⁶⁰¹

¹⁵⁹⁹ NACIONES Unidas, Derechos Humanos, S.F. Comité de los derechos del niño, Composición. En: *United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner* [en línea]. Disponibilidad en: <https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CRC/Pages/Membership.aspx> [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

¹⁶⁰⁰ NACIONES Unidas, Derechos Humanos, S.F. Comité de Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, Composición. En: *United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner* [en línea]. Disponibilidad en: <https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CMW/Pages/Membership.aspx> [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

¹⁶⁰¹ NACIONES Unidas, Derechos Humanos, S.F. Comité para la eliminación de la violencia en contra de la mujer, Introducción. En: *United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner* [en línea]. Disponibilidad en: <https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CEDAW/Pages/Introduction.aspx> [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

H. Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad

El Comité se compone de “18 expertos independientes que supervisan la aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Los miembros del Comité son elegidos de una lista de personas nominadas por los Estados parte en la Conferencia de los Estados sirven a título individual, no como representantes gubernamentales y por un período de cuatro años con la posibilidad de ser reelegidos una vez”.¹⁶⁰²

I. Comité contra la desaparición forzada

Está integrado por “10 expertos de gran integridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, independientes, que ejercerán sus funciones a título personal y actuarán con total imparcialidad. Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Parte teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa. Se tendrá en cuenta el interés que representa la participación en los trabajos del Comité de personas que tengan experiencia jurídica pertinente y de una representación equilibrada de los géneros.”¹⁶⁰³

B. MATERIAL:

Los recursos materiales de los órganos de los tratados son los asignados por medio del presupuesto asignado.

El **Comité de Derechos Humanos** cuenta con 36 informes anuales, 1 compilación de observaciones para los países de Latinoamérica y el Caribe, 5 declaraciones, 2 protocolos facultativos, 1 convención y 1 reglas de procedimientos que ha sido revisada 10 veces, 359 comunicados de prensa.¹⁶⁰⁴

¹⁶⁰² NACIONES Unidas, Derechos Humanos, S.F. Comité de los derechos de las personas con discapacidad. En: *United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner* [en línea]. Disponibilidad en: <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/QuestionsAnswers.aspx> [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

¹⁶⁰³ Artículo 26, Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, Naciones Unidas.
NACIONES Unidas, Derechos Humanos, S.F. Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. En: *United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner* [en línea]. Disponibilidad en: <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx> [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

¹⁶⁰⁴ NACIONES Unidas, Derechos Humanos, S.F. *Óp. Cit.*

El **Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales** cuenta con 29 informes anuales, 1 convención, 1 reglas de procedimiento, 25 observaciones generales, 1 Protocolo facultativo, 6 declaraciones, 224 comunicados de prensa.

¹⁶⁰⁵

El **Comité de los Derechos del Niño** cuenta con 5 informes periódicos e iniciales, 25 observaciones generales, 1 convención, 1 reglamento de reglas de procedimientos y prueba que ha tenido 5 revisiones, 11 decisiones, 15 declaraciones, 336 comunicados de prensa.¹⁶⁰⁶

El **Comité para la eliminación de la discriminación racial** cuenta con 40 informes anuales, 1 convención, 1 reglas de procedimiento que ha sido revisado 3 veces, 6 declaraciones, 35 observaciones generales, 275 comunicados de prensa.¹⁶⁰⁷

El **Comité contra la tortura** cuenta con 36 informes anuales, 1 reglamento de reglas de procedimiento que ha tenido 6 revisiones, 1 convención y 10 declaraciones, 238 comunicados de prensa.¹⁶⁰⁸

El **Comité de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares** cuenta con 19 informes anuales, 1 reglamento, 1 convención, y 10 declaraciones, 136 comunicados de prensa.¹⁶⁰⁹

El **Comité para la eliminación de la discriminación en contra de la mujer** cuenta con 39 informes anuales, 40 recomendaciones generales, 1 convención, 1 protocolo facultativo, 1 reglas de procedimiento con 2 revisiones, 349 comunicados de prensa.¹⁶¹⁰

El **Comité de los derechos de las personas con discapacidad** cuenta con 28 informes semestrales, 1 convención, 1 protocolo facultativo, 1 reglas de procedimiento y 1 revisión, 11 declaraciones, 189 comunicados de prensa.¹⁶¹¹

¹⁶⁰⁰ NACIONES Unidas, Derechos Humanos, S.F. *Óp. Cit.*

¹⁶⁰⁶ NACIONES Unidas, Derechos Humanos, S.F. *Óp. Cit.*

¹⁶⁰⁷ NACIONES Unidas, Derechos Humanos, S.F. *Óp. Cit.*

¹⁶⁰⁸ NACIONES Unidas, Derechos Humanos, S.F. *Óp. Cit.*

¹⁶⁰⁹ NACIONES Unidas, Derechos Humanos, S.F. *Óp. Cit.*

¹⁶¹⁰ NACIONES Unidas, Derechos Humanos, S.F. *Óp. Cit.*

¹⁶¹¹ NACIONES Unidas, Derechos Humanos, S.F. *Óp. Cit.*

El **Comité contra la desaparición forzada** cuenta con 1 convención, 1 reglas de procedimiento, 08 informes anuales, 29 declaraciones, 120 comunicados de prensa.¹⁶¹²

C. PRESUPUESTO ASIGNADO:

El presupuesto general de las Naciones Unidas considerado como presupuesto ordinario de la ONU a los derechos humanos se le asigna el 7,7%. Para el 2020, la asignación inicial del presupuesto ordinario de 116,4 millones de dólares. Las contribuciones voluntarias o recursos extrapresupuestarios, representaron, en 2019, alrededor del 62,9% del presupuesto general de Derechos Humanos de la ONU.¹⁶¹³

19. EL PAPEL DE LA VÍCTIMA:

Todos los mecanismos contemplan la posibilidad de presentar solicitudes individuales por parte de las víctimas o en representación de las mismas. Las mismas, además, están facultadas para participar con presentación de escritos y la comparecencia en las vistas o audiencias que sean señaladas para el efecto¹⁶¹⁴.

Por otra parte, como se indicó con anterioridad, en el mecanismo de presentación de informes periódicos por parte de los Estados, se abre el espacio para que personas y organizaciones puedan presentar sus observaciones en relación al cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones de los acuerdos o tratados¹⁶¹⁵.

20. PERCEPCIÓN PÚBLICA:

Una de las principales críticas al sistema universal es su “poca fuerza”; como se indicó con anterioridad, por ser mecanismos cuasi judiciales sus conclusiones, recomendaciones o decisiones no son vinculantes, y únicamente logran dar visibilidad

¹⁶¹² NACIONES Unidas, Derechos Humanos, S.F. *Óp. Cit.*

¹⁶¹³ NACIONES Unidas, Derechos Humanos, S.F. ACNUDH, Presupuesto y financiamiento. En: *United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner* [en línea]. Disponibilidad en: <https://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/FundingBudget.aspx> [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

¹⁶¹⁴ Federación Internacional por los Derechos Humanos, 2017. Los Derechos de las víctimas ante la Corte Penal Internacional: Manual para víctimas, sus representantes legales y ONG. En: *Federación Internacional por los Derechos Humanos* [en línea]. Disponible en: https://www.fidh.org/IMG/pdf/4-manuel_victimes_CH-I_ESP5.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

¹⁶¹⁵ VILLA QUINTANA, Carmen Rosa. *Óp. Cit.*

ante la Asamblea General a las violaciones de Derechos Humanos que se denuncian¹⁶¹⁶.

Por otra parte, ante la carga de trabajo y la enorme cantidad de solicitudes que se presentan ante cada órgano de control, existe una demora significativa en el trámite de las peticiones¹⁶¹⁷.

21. NÚMERO DE CASOS INGRESADOS

a. Comité de Derechos Humanos

Durante los períodos de sesiones 126º, 127º y 128º, los Relatores Especiales sobre nuevas comunicaciones y medidas provisionales, registraron 367 comunicaciones y las transmitieron a los Estados parte interesados.¹⁶¹⁸

El Comité inició su labor con arreglo al Protocolo Facultativo en su segundo período de sesiones, celebrado en 1977. Desde entonces, se han sometido a su consideración 3.624 comunicaciones relativas a 93 Estados parte, de las que 367 se registraron en el período del último informe presentado por el comité.¹⁶¹⁹

b. Comité de derechos económicos, sociales y culturales

En relación con su facultad de revisión de Informe de Estados partes a 18 de octubre de 2019, fecha de clausura del 66º período de sesiones, el Comité había recibido 12 informes de Estados parte y se habían presentado 11 informes, que estaban pendientes de examen por el Comité.¹⁶²⁰

¹⁶¹⁶ Red-DESC. *Óp. Cit.*

¹⁶¹⁷ GENEVA Academy, 2020. Principales desafíos que enfrenta el sistema de órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas. En: *Geneva Academy* [en línea]. Disponible en: <https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Research%20documents/Background%20Paper%20Spanish.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁶¹⁸ Naciones Unidas, 2019 – 2020. Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe del Comité de derechos humanos, 126º Período de Sesiones (1 al 26 de junio de 2019), 127º Período de sesiones (14 de octubre al 08 de noviembre de 2019), 128º Período de sesiones (2 al 27 de marzo de 2020), Naciones Unidas, Nueva York, 2020, Página 01. En: *Naciones Unidas* [en línea]. Disponible en: <https://undocs.org/es/A/75/40> [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

¹⁶¹⁹ Ídem.

¹⁶²⁰ Naciones Unidas, 2019. Consejo Económico, Social y Cultural de las Naciones Unidas, Informe sobre los períodos de sesiones 65º y 66º del Comité Económico, Social y Cultural, Nueva York y Ginebra, 2020, Página 09. En: *Naciones Unidas* [en línea]. Disponible en: <https://undocs.org/es/E/2020/22> [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

El Comité decidió examinar la situación de los informes muy atrasados. Al 18 de octubre de 2019, 27 Estados parte estaban atrasados en la presentación de sus informes iniciales al Comité. De esos informes, 18 tenían más de diez años de retraso y correspondían a los siguientes Estados parte: Congo, Costa de Marfil, Dominica, Eritrea, Eswatini, Ghana, Granada, Guinea-Bissau, Lesotho, Liberia, Malawi, Maldivas, la República Democrática Popular Lao, San Vicente y las Granadinas, Seychelles, Sierra Leona, Somalia y Timor-Leste.¹⁶²¹

Al 2019, el Comité había recibido 162 comunicaciones en virtud del Protocolo Facultativo desde su entrada en vigor. Desde la aprobación del informe anterior el 12 de octubre de 2018, se han registrado un total de 99 comunicaciones, lo que representa un aumento del 141 % en el número de nuevas comunicaciones registradas, en comparación con el período comprendido entre la aprobación del informe de 2017 y la aprobación del informe de 2018, en que se registraron 41 casos.

c. Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación racial

Desde 1984 hasta agosto de 2020, el Comité había registrado 70 denuncias relativas a 17 Estados parte. De ellas, se declararon admisibles 3 comunicaciones e inadmisibles 19 y se dio fin a 2. El Comité adoptó decisiones finales sobre el fondo respecto de 36 denuncias, declarando que se había violado la Convención en 20 de ellas. Siguen pendientes de examen 12 comunicaciones.¹⁶²²

En el año 2018 el Comité recibió las primeras 3 comunicaciones que habilita a un Estado parte, a través del artículo 11, *“si un Estado parte considera que otro Estado parte no cumple las disposiciones de la Convención, podrá señalar el asunto a la atención del Comité presentando una comunicación”*.¹⁶²³

¹⁶²¹ Naciones Unidas, 2019. *Óp. Cit.* Página 09

¹⁶²² Naciones Unidas, 2019. Informe del 100 período de sesiones, Sección VIII: Examen de las comunicaciones presentadas en virtud del artículo 14 de la Convención, mayo 2020. En: *Naciones Unidas* [en línea]. Disponible en: <http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=dtYoAzPhJ4NMy4Lu1TOebAwIL1ukPQZohv%2fH1C%2bXkzZwAMAJk3cwrIlo8erZL9OpN7jySO WAHsTpW9B02kHbxSMKtMduKwoFpF4p%2bH%2bryPA%3d> [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

¹⁶²³ Naciones Unidas, 2019. Informe del 100 período de sesiones, Sección V: Examen de las comunicaciones presentadas en virtud del artículo 11 de la Convención, mayo 2020. En: *Naciones Unidas* [en línea]. Disponible en: <http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=dtYoAzPhJ4NMy4Lu1TOebAwIL1ukPQZohv%2fH1C%2bXkzZwAMAJk3cwrIlo8erZL9OpN7jySOWAHsTpW9B02kHbxSMKtMduKwoFpF4p%2bH%2bryPA%3d> [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

d. Comité contra la Tortura:

Al 15 de mayo de 2020, el Comité había registrado, desde 1989, 1.003 quejas relativas a 39 Estados partes. De ese total se había suspendido el examen de 300 quejas y 113 se habían declarado inadmisibles. Siguen pendientes de examen 192 quejas.¹⁶²⁴

e. Comité de los derechos del Niño

En su último informe, el Comité recibió más de 200 comunicaciones individuales de conformidad al artículo 5 del Protocolo Facultativo, de las cuales 71 fueron registradas. Esto elevó el número total de casos registrados a 116 al 6 de marzo de 2020. En esa misma fecha, había 78 casos pendientes de examen por el Comité. También recibió 03 solicitudes para que abriera una investigación.¹⁶²⁵

f. Comité para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares:

Este Comité aún no recibe denuncias individuales.

g. Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

A la fecha el Comité ha recibido 155 comunicaciones¹⁶²⁶.

g. Comité de los derechos de las personas con discapacidad

De conformidad con el informe del 21° periodo de sesiones del comité este solamente se dedicó a analizar informes y causas que se encontraban con anterioridad ante el

¹⁶²⁴ Naciones Unidas, 2019 – 2020. Informe anual del Comité contra la Tortura, Sección “C” Marcha de los trabajos, Página 11, mayo de 2020. En: *Naciones Unidas* [en línea]. Disponible en: <http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=dtYoAzPhJ4NMy4Lu1TOebllP%2b%2bO8i7q18R90Kj3kKwvQ2%2b7OuMHY3fnkLgUV0q%2bmOSvNUJ%2bHu1JW6r8qq2C9zHco%2b6NjDB0fkU5c585xXWw%3d> [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

¹⁶²⁵ Naciones Unidas, S.F. Comité de los Derechos del niño, Informe sobre periodo de sesiones 78° - 83°, Sección 1, Progresos logrados en general, Página 01. En: *Naciones Unidas* [en línea]. Disponible en: <http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=dtYoAzPhJ4NMy4Lu1TOebM%2fEnbuwV%2fQKMLYTZZVvWNMWr%2bUoYo0OwkJkhMm0%2b7yDID2uAb4pU6Ph8z5%2bH0wvcsUdCQC2zT8VIJ9Nfz91LFs%3d> [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

¹⁶²⁶ OFICINA de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 2020. Jurisprudencia. En: *Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos* [en línea]. Disponible en: <https://juris.ohchr.org/search/results/279?typeOfDecisionFilter=0&countryFilter=0&treatyFilter=0> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

Comité mas no recibió nuevos informes o comunicaciones individuales. Hasta mayo de 2014 registraba 19 comunicaciones.¹⁶²⁷

h. Comité para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas:

La mayoría de las acciones urgentes registradas siguen estando relacionadas con hechos ocurridos en México y el Iraq. México ha respondido a la gran mayoría de las 356 acciones urgentes registradas mientras el Comité había registrado 162 acciones urgentes relacionadas con hechos ocurridos en el Iraq. Existen registros de otros países con solicitudes de acciones urgentes, Togo 2, Lituania 2, Honduras 14, Cuba 1, Camboya 1, Brasil 1, Armenia 1 y Colombia que el comité señala que tiene, pero no indica la cantidad de estas.¹⁶²⁸

El informe señala que hasta abril de 2019 no se registraban nuevas denuncias individuales.¹⁶²⁹

22. NÚMERO DE CASOS RESUELTOS

a. Comité de derechos humanos

Durante los períodos de sesiones 126º, 127º y 128º, los Relatores Especiales sobre nuevas comunicaciones y medidas provisionales adoptaron 86 decisiones en las que solicitaban que se adoptaran medidas provisionales de protección en virtud del artículo 94 del reglamento del Comité.¹⁶³⁰

¹⁶²⁷ Naciones Unidas, 2019. Informe del comité para los derechos de las personas con discapacidad, sobre su 21er periodo de sesiones (11 de marzo a 05 de abril de 2019), Sección VII Actividades relacionadas con el Protocolo Facultativa. En: *Naciones Unidas* [en línea]. Disponible en: <http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsjUFu35WL78LztCL12TZZECDc0UMYFUIAjGgztuOHgYtJcnLEHV9Za%2b8QHCje%2bFWjujTBA5DITJUmbREXSLkx1uLkm0UREFr8Bghy5jhpFc2> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁶²⁸ Naciones Unidas, 2019. *Informe del Comité de para la protección de todas las Personas contra la desaparición forzada, Informe de su 15º periodo de sesiones (5 -16 de noviembre de 2018) y su 16º periodo de sesiones (08-18 de abril de 2019)*, Sección B Acciones Urgentes, Nueva York, 2019. En: *Naciones Unidas* [en línea]. Disponible en: <http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=dtYoAzPhJ4NMy4Lu1TOebPPLV6kZtFG%2fHLB3D1Pwq%2fe8sdC09%2bJJvwVTzn4TStN7BvWtCKv4YdpwmmDXDrv%2bQRRSEESWWM83%2fhcYKjHVBQ%3d> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁶²⁹ Ídem.

¹⁶³⁰ Naciones Unidas, 2019 – 2020. Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe del Comité de derechos humanos, 126º Período de Sesiones (1 al 26 de junio de 2019), 127º Periodo de sesiones (14 de octubre al 08 de noviembre de 2019), 128º Periodo de sesiones (2 al 27 de marzo de 2020),

En relación con las Observaciones Finales se aprobaron 16 en relación con la misma cantidad de Estados Partes.¹⁶³¹

El estado de las 3.624 comunicaciones registradas actualmente es el siguiente: a) Examen finalizado con la aprobación de un dictamen con fundamento en el artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo: 1.577, en 1.213 de las cuales se determinó la existencia de violaciones del Pacto; b) Comunicaciones declaradas inadmisibles: 763; c) Comunicaciones canceladas o retiradas: 496; d) Comunicaciones cuyo examen no ha finalizado: 1.287. En sus períodos de sesiones 126º, 127º y 128º, el Comité aprobó dictámenes respecto de 66 casos y concluyó el examen de 40 comunicaciones declarándolas inadmisibles.¹⁶³²

El Comité decidió dar por terminado el examen de 26 comunicaciones porque los autores las habían retirado, porque los autores o sus abogados no respondieron al Comité pese a haberseles enviado varios recordatorios o porque los autores, sobre los que pendía una orden de expulsión, habían sido al fin autorizados a permanecer en los países en cuestión.¹⁶³³

b. Comité de derechos económicos, sociales y culturales

En su 65º período de sesiones, el Comité examinó la información recibida sobre el seguimiento de las observaciones finales de Australia, Liechtenstein, los Países Bajos y el Uruguay. Se enviaron recordatorios al Pakistán y Sri Lanka, cuyo seguimiento estaba previsto para el 23 de diciembre de 2018. En su 66º período de sesiones, el Comité examinó la información recibida sobre el seguimiento de las observaciones finales de Colombia, la Federación de Rusia, el Pakistán y la República de Corea y decidió enviar un recordatorio a la República de Moldova, cuyo seguimiento estaba previsto para el 6 de abril de 2019, y un segundo recordatorio a Sri Lanka.¹⁶³⁴

Naciones Unidas, Nueva York, 2020, Página 01. En: *Naciones Unidas* [en línea]. Disponible en: <https://undocs.org/es/A/75/40> [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

¹⁶³¹ Ídem.

¹⁶³² Naciones Unidas, 2019 – 2020. *Óp. Cit.*

¹⁶³³ Ídem.

¹⁶³⁴ Naciones Unidas, 2019. Consejo Económico, Social y Cultural de las Naciones Unidas, *Informe sobre los períodos de sesiones 65º y 66º del Comité Económico, Social y Cultural*, Nueva York y Ginebra, 2020, Página 12-13. En: *Naciones Unidas* [en línea]. Disponible en: <https://undocs.org/es/E/2020/22> [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

Al 12 de octubre de 2018, el Comité había aprobado 24 observaciones generales y al 18 de octubre de 2019, el Comité había aprobado 29 declaraciones.¹⁶³⁵

La situación actual de las comunicaciones registradas hasta el 2019, es la siguiente:

a) Examen terminado con la aprobación de un dictamen con fundamento en el artículo 9, párrafo 1, del Protocolo Facultativo: 6, de las cuales en 1 se determinó que no se había vulnerado el Pacto; b) Comunicaciones declaradas inadmisibles: 16; c) Comunicaciones canceladas o retiradas: 18; d) Comunicaciones cuyo examen no ha terminado: 122.¹⁶³⁶

El Comité adoptó su primer informe sobre el seguimiento de las comunicaciones (E/C.12/66/3), en el que comunicó su decisión de continuar el procedimiento de seguimiento en relación con I. D. G. c. España (E/C.12/55/D/2/2014) y Ben Djazia y otros c. España (E/C.12/61/D/5/2015). En la actualidad hay cuatro casos sometidos al procedimiento de seguimiento: I. D. G. c. España, Ben Djazia y otros c. España, Trujillo Calero c. el Ecuador (E/C.12/63/D/10/2015) y S. C. y G. P. c. Italia (E/C.12/65/D/22/2017).¹⁶³⁷

c. Comité contra de todas las formas de discriminación racial:

El Comité “en su período 100 de sesiones aprobó opiniones definitivas sobre el fondo respecto de 36 denuncias y en 20 casos había considerado que se habían cometido violaciones de la Convención. En 10 casos, el Comité había formulado sugerencias o recomendaciones a pesar de no haber determinado que se hubiera violado la Convención”.¹⁶³⁸ A mayo de 2014 el Comité había conocido de 55 peticiones.

d. Comité contra la Tortura:

El Comité ha “adoptado decisiones finales sobre el fondo respecto de 398 quejas y concluido que se había violado la Convención en 158 de ellas. Durante el período comprendido entre el 18 de mayo de 2019 y el 15 de mayo de 2020, el Comité adoptó

¹⁶³⁵ Naciones Unidas, 2019. *Óp. Cit.*

¹⁶³⁶ *Ídem.*

¹⁶³⁷ *Ídem.*

¹⁶³⁸ Naciones Unidas, 2019 – 2020. Informe del 100 período de sesiones, Sección IX, Seguimiento de comunicaciones individuales, mayo 2020. En: *Naciones Unidas* [en línea]. Disponible en: <http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=dtYoAzPhJ4NMy4Lu1TOebAwIL1ukPQZohv%2fH1C%2bXkZwAMAJk3cwrll08erZL9OpN7jySOWAHsTpW9B02kHbxSMKtMduKwoFpF4p%2bH%2bryPA%3d> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

02 decisiones de admisibilidad y aplazó el examen de 03 quejas. Siguen pendientes de examen 192 quejas#. ¹⁶³⁹

e. Comité sobre los Derechos del Niño

De conformidad con su último informe anual, *“el Comité adoptó decisiones sobre 31 comunicaciones individuales de conformidad con el artículo 5 del Protocolo Facultativo relativo a un procedimiento de comunicaciones. En su 78º período de sesiones, aprobó su primer informe de investigación con arreglo al artículo 13 del mismo Protocolo Facultativo. En ese mismo período, había 78 casos de comunicaciones individuales pendientes de examen por el Comité”*. ¹⁶⁴⁰

Se adoptaron decisiones sobre 32 casos durante el período, determinó que se habían producido violaciones de la Convención en 10 de esos casos.

En su 81 *“período de sesiones, el Comité publicó su primera revisión de una observación general. En el mismo período de sesiones, el Comité aprobó directrices sobre la aplicación del Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (CRC/C/156) a fin de mejorar la calidad de los informes presentados por los Estados partes, las entidades de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras entidades sobre la aplicación del Protocolo Facultativo, así como para apoyar y facilitar la tarea del Comité en lo tocante a la supervisión de la aplicación”*. ¹⁶⁴¹

f. Comité para la Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares:

En su 29º período de sesiones, el Comité examinó los informes iniciales de Madagascar y Mozambique sobre la aplicación de la Convención y aprobó sus *“observaciones finales respectivas, con arreglo al artículo 74 de la Convención. En su 30º período de sesiones, el Comité examinó el informe inicial de Libia y los segundos informes periódicos de Albania, Guatemala y Tayikistán sobre la aplicación de la*

¹⁶³⁹ Naciones Unidas, 2019 – 2020. *Óp. Cit.*

¹⁶⁴⁰ Naciones Unidas, S.F. *Óp. Cit.*

¹⁶⁴¹ Ídem.

*Convención y aprobó observaciones finales al respecto, con arreglo al artículo 74 de la Convención, las observaciones finales aprobadas por el Comité en sus períodos de sesiones 29º y 30º.”*¹⁶⁴²

*Durante su 31 “período de sesiones, el Comité examinó el segundo informe periódico de la Argentina y los terceros informes periódicos de Bosnia y Herzegovina y Colombia sobre la aplicación de la Convención, y aprobó sus observaciones finales respectivas, con arreglo al artículo 74 de la Convención. También examinó la información recibida de Turquía relativa al seguimiento de las observaciones finales sobre su informe inicial”.*¹⁶⁴³

*Debido al aplazamiento de su 32º “período de sesiones, el Comité tuvo que reprogramar el examen del informe inicial y los informes periódicos segundo y tercero combinados de Cabo Verde y los segundos informes periódicos de Chile, el Paraguay y Ruanda sobre la aplicación de la Convención, y la aprobación de sus observaciones finales respectivas, con arreglo al artículo 74 de la Convención”.*¹⁶⁴⁴

g. Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

El Comité examinó en el 73º periodo de sesiones. Además, envió los primeros recordatorios a Irlanda, los Estados Federados de Micronesia, Ruanda, Sri Lanka y Ucrania, cuyos informes de seguimiento estaban atrasados.¹⁶⁴⁵

El Comité examinó en el 74º periodo de sesiones “los informes de 7 Estados partes presentados con arreglo al artículo 18 de la Convención y aprobó las siguientes observaciones finales de los siguientes Estados Andorra, Bosnia y Herzegovina, Camboya, Iraq, Kazajstán, Lituania, Seychelles”.¹⁶⁴⁶

¹⁶⁴² Naciones Unidas, 2018 - 2019. *Óp. Cit.*

¹⁶⁴³ Naciones Unidas, 2019. *Óp. Cit.*

¹⁶⁴⁴ Naciones Unidas, 2019. *Óp. Cit.*

¹⁶⁴⁵ Naciones Unidas, 2020. *Óp. Cit.*

¹⁶⁴⁶ Naciones Unidas, 2020. *Óp. Cit.*

El Comité examinó en el 74° periodo de sesiones la Comisión envió los primeros recordatorios a Barbados, Costa Rica, Montenegro, Níger, Nigeria y Tailandia, cuyos informes de seguimiento estaban atrasados.¹⁶⁴⁷

El “Comité examinó los informes de 08 Estados parte en su 75° periodos de sesiones presentados con arreglo al artículo 18 de la Convención y aprobó las siguientes observaciones finales al respecto de Afganistán, Bulgaria, Eritrea, Kiribati, Letonia, Pakistán, República de Moldova, Zimbawe”.¹⁶⁴⁸

En el 75° periodo de sesiones la Comisión envió los primeros recordatorios a Burkina Faso, Costa Rica, Kenya, Nauru, Omán, la República Popular Democrática de Corea y el Paraguay, cuyos informes de seguimiento estaban atrasados.¹⁶⁴⁹

El Comité en el 73° “periodo de sesiones adoptó decisiones finales sobre 09 comunicaciones individuales presentadas con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo. Adoptó decisiones de inadmisibilidad en 02 causas. Además, aprobó los dictámenes por los que se determinaron violaciones en 03 causas y suspendió el examen de 02 causas contra Dinamarca”.¹⁶⁵⁰

El Comité en el 74° “periodo de sesiones adoptó decisiones finales sobre 04 comunicaciones individuales presentadas con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo. Adoptó decisiones de inadmisibilidad en 03 causas 2 del Reino Unido y 1 de Dinamarca. También aprobó opiniones en las que se determinó que se había producido una violación en la causa Ciobanu c. República de Moldova (CEDAW/C/74/D/104/2016)”.¹⁶⁵¹

El Comité aprobó en el 73° “periodo de sesiones la siguiente recomendación del Grupo de Trabajo, en relación con la investigación núm. 2011/1, relativa al Canadá, y adoptó la siguiente decisión en relación con la investigación núm. 2011/4, designar a

¹⁶⁴⁷ Naciones Unidas, 2020. Óp. Cit

¹⁶⁴⁸ Ídem.

¹⁶⁴⁹ Ídem.

¹⁶⁵⁰ Ídem.

¹⁶⁵¹ Ídem.

Lia Nadaraia como miembro adicional para llevar a cabo la investigación con Nicole Ameline y Dalia Leinarte".¹⁶⁵²

El Comité en el 74° periodo de sesiones decidió poner fin al diálogo de seguimiento en relación con las causas X e Y c. Georgia (CEDAW/C/61/D/24/2009), *"tras considerar que se habían aplicado de forma satisfactoria las recomendaciones que figuraban en su dictamen, y L.R c. Moldova (CEDAW/C/66/D/58/2013), tras considerar que no se habían aplicado de forma satisfactoria las recomendaciones que figuraban en su dictamen. De las 12 causas que eran objeto de seguimiento, 04 se referían a la Federación de Rusia y 01 a cada uno de los países siguientes: Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, México, Timor-Leste, Ucrania y la República Unida de Tanzania"*.¹⁶⁵³

"El Comité adoptó decisiones finales sobre 07 comunicaciones individuales en el 75° periodo de sesiones, presentadas con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo. El Comité suspendió el examen de 02 comunicaciones. También adoptó 03 decisiones, y adoptó opiniones en que se determinaban violaciones en 03 causas. Se informó al Comité de que el Grupo de Trabajo, en su 46° período de sesiones, había examinado la situación en cada caso en que el diálogo de seguimiento seguía en curso y había acordado las medidas necesarias. De los 13 casos que eran objeto de seguimiento, 4 se referían a la Federación de Rusia y 01 a cada uno de los países siguientes: Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, México, República de Moldova, República Unida de Tanzania, Timor-Leste y Ucrania".¹⁶⁵⁴

El Comité adoptó las siguientes decisiones con la investigación núm. 2016/1, designar a Bandana Rana *"como miembro adicional para llevar a cabo la investigación junto con Gunnar Bergby y Rosario Manalo; en relación con la comunicación núm. 2019/1, solicitar más información a las fuentes de información; con la comunicación núm. 2019/2, tras haber realizado una evaluación preliminar de la información recibida con*

¹⁶⁵² Naciones Unidas, 2020. *Óp. Cit.* Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 73er periodo de sesiones

¹⁶⁵³ *Ídem.*

¹⁶⁵⁴ *Ídem.*

*arreglo al artículo 8 del Protocolo Facultativo, no invitar al Estado parte interesado a presentar observaciones con respecto a la información en cuestión”.*¹⁶⁵⁵

h. Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad

En su 21° periodo de sesiones el comité examinó 04 comunicaciones. Además, declaró que la jubilación forzosa es una violación a la Convención. Declaró 01 comunicación proveniente de Grecia inadmisibles, decidió dar por concluido el examen del caso Kendall c. Australia y aplazar el examen de la comunicación núm. 32/2015 para evaluar más a fondo algunos elementos de la denuncia.¹⁶⁵⁶

El Comité aprobó el informe de la Relatora Especial para el seguimiento de los dictámenes. A este respecto, el Comité decidió continuar el procedimiento de seguimiento y solicitar información adicional al Estado parte correspondiente en relación con cinco casos. También decidió dar por concluido el procedimiento de seguimiento en uno de los casos, considerando que *“las medidas adoptadas por el Estado parten para aplicar las recomendaciones del Comité habían sido en general satisfactorias (Nyusti y Takács c. Hungría, CRPD/C/9/D/1/2010)”*.¹⁶⁵⁷

El Comité aprobó *“las observaciones finales relativas a los informes iniciales de los siguientes Estados partes: Cuba, Níger, Noruega, Rwanda, Arabia Saudita, Senegal, Turquía y Vanuatu. Además, aprobó las observaciones finales relativas a los informes periódicos segundo y tercero combinados de España. Además, aprobó listas de cuestiones con arreglo al procedimiento simplificado de presentación de informes en relación con los siguientes Estados partes: Bélgica, Islas Cook, Chequia y Dinamarca”*.¹⁶⁵⁸

i. Comité Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas:

El comité en su informe del 15° y 16° período de sesiones había tomado la decisión de suspender 13 solicitudes de acciones urgentes, cerrar 51 en las cuales se logró determinar que en 29 de ellas las personas habían sido localizadas vivas y puestas

¹⁶⁵⁵ Naciones Unidas, 2020. *Óp. Cit.*

¹⁶⁵⁶ *Ídem.*

¹⁶⁵⁷ *Ídem.*

¹⁶⁵⁸ *Ídem.*

en libertad, en 22 fueron encontradas sin vida y en 02 se encontraron fallecidas las personas, pero los solicitantes de la acción urgente se encuentran con vida y con amenazas a su vida, 01 acción urgente proveniente de Armenia fue archivada.¹⁶⁵⁹

Con respecto a *Yrusta y del Valle Yrusta c. la Argentina* (CED/C/10/D/1/2013), el Comité examinó la información de seguimiento presentada por las partes y decidió mantener el procedimiento de seguimiento y enviar una nota verbal a la misión permanente del Estado parte y una carta a los autores para informarlos al respecto.

¹⁶⁶⁰

23. ANÁLISIS CUALITATIVO:

El legado del Sistema Universal definitivamente es el aporte en el desarrollo de los estándares de los derechos humanos, que han abierto una brecha no solo para el reconocimiento internacional, sino también en su adopción en las legislaciones internas por medio de la aplicación del control de convencionalidad y el bloque de constitucionalidad.

Su función cuasi judicial aporta a la lucha contra la impunidad en reconocimiento de violaciones a los derechos humanos, lo lamentable es que esas decisiones no tengan una aplicación obligatoria para los Estados y el cumplimiento de las recomendaciones quede a criterio y voluntad de estos.

El Sistema Universal ha sido innovador en la creación de estándares internacionales en materia de derechos humanos, los cuales en su mayoría han sido desarrollados por medio de informes basados en estudios técnicos. La jurisprudencia en materia de casos, aunque ha sido trascendente, aún no es abundante, esto se debe a que las víctimas no acceden mucho al Sistema Universal, quizás por desconocimiento, en otros casos por la falta de fondos para hacerlo, así como el poco incentivo en cuanto al cumplimiento de las reparaciones por parte de los Estados.

¹⁶⁵⁹ Naciones Unidas, 2019. *Óp. Cit.*

¹⁶⁶⁰ *Ídem.*

Por otro lado, no se puede conocer la velocidad con la cual se resuelven las peticiones individuales debido a que no existe información actualizada ni estandarizada por parte de los Comités.

Luego de este estudio analítico en los aspectos que a mi juicio consideré de mayor relevancia, se puede establecer que el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos contribuye a la lucha contra la impunidad y fortalecimiento del estado de derecho, en cuanto al desarrollo de estándares internacionales en materia de derechos humanos.

A continuación, se presenta de forma gráfica y sintética el trabajo realizado por el Sistema Universal de Derechos Humanos.

			Mandato	Duración del Mandato	Cesación de los hechos que originaron el mandato	Inicio del primer juicio	Universo de casos	Casos procesados y/o relaciones procesales	Tiempo promedio de los casos	Casos pendientes de resolución	% Casos presentados versus casos resueltos	% Casos pasibles de procesamiento versus casos resueltos
1	Sistema Universal	CDH	Violaciones al PIDCP	Indefinido	Esta creado para violaciones futuras	No se puede identificar	3624	1577	No se puede identificar	1287	93.4%	76.91%
		CDESC	Violaciones al PIDESC			No se puede identificar	162	138	No se puede identificar	122	No se puede determinar	No se puede determinar
		CERD	Violaciones a la CERD			No se puede identificar	70	70	No se puede identificar	12	85.71%	85.71%
		CAT	Violaciones CAT			No se puede identificar	1003	1003	No se puede identificar	192	39.68%	39.68%
		CDN	Violaciones CDN			No se puede identificar	200	116	No se puede identificar	78	15,5%	26.72%
		CDPD	Violaciones CDPD			No se puede identificar	19 ¹⁶⁶¹	19	No se puede identificar	No se puede determinar	No se puede determinar	No se puede determinar
		CEDAW	Violaciones CEDAW			No se puede identificar	155	155	No se puede identificar	No se puede determinar	No se puede determinar	No se puede determinar
		CDF	Violaciones CDF			No se puede identificar	356	162	No se puede identificar	No se puede determinar	17.97%	39.5%
		CTM	Violaciones CTM			Aún no conoce peticiones individuales	0	0	0	0	0	0

¹⁶⁶¹ A mayo 2014

SUB - SECCIÓN B.2

ESFUERZOS DESDE LOS SISTEMAS REGIONALES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, son el conjunto de órganos internacionales con su normativa que protegen los derechos humanos en regiones territoriales establecidas, complementando el Sistema Universal de Derechos Humanos¹⁶⁶².

Los sistemas regionales de derechos humanos, compuestos por instrumentos y mecanismos regionales, (tratados, convenciones y declaraciones) centralizando las normas y estándares internacionales de derechos humanos que reflejan las preocupaciones particulares de derechos humanos en las regiones específicas¹⁶⁶³.

Dentro de sus mecanismos cuentan con:

- a. Comisiones
- b. Relatores Temáticos
- c. Relatores de País
- d. Cortes o Tribunales

Actualmente se cuenta con tres sistemas regionales de protección de derechos humanos, siendo estos: Sistema Europeo, Sistema Interamericano y el Sistema Africano, de los cuales se analiza su eficacia a continuación:

¹⁶⁶² SÁNCHEZ-BAYÓN, Antonio, Gloria Campos García de Quevedo y Carlos Fuente Lafuente. 2019. Sistemas Regionales de Derechos Humanos: Aclaraciones y Consejos para su Exigibilidad. *Derecho y Cambio Social* [en línea]. Perú: Círculo de Estudios Ius Filósofos UNIDAD, N.º 55. Página: 10. [consulta: 10 de diciembre de 2020]. ISSN: 2224 - 4131. Disponible en: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gl0FBLLsjtQJ:https://dialnet.unirioja.es/descriptores/articulo/6967893.pdf+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=gt>

¹⁶⁶³ UNIVERSAL Rights Group, Latin America. S.F. Strengthening Policy Through Dialogue. En: *Universal Rights Group, Latin America* [en línea]. Disponible en: <https://www.universal-rights.org/lac/guias-basicas-de-derechos-humanos/una-guia-basica-a-los-sistemas-regionales-de-derechos-humanos/> [consulta: 10 de diciembre de 2020].

CAPÍTULO XII

SISTEMA EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

ANTECEDENTES

Siguiendo con el movimiento de regionalización, los países europeos integraron su propia organización en 1949 a través del Tratado de Londres, por medio del cual se creó el Consejo de Europa¹⁶⁶⁴. Del tratado de creación se desprende que uno de los objetivos principales del Consejo es la salvaguardia y la mayor efectividad de los derechos humanos y las libertades fundamentales¹⁶⁶⁵; en virtud de lo anterior, se prueba el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, también conocido como Convenio Europeo de Derechos Humanos, el cual se convierte en una de las bases de la Institución¹⁶⁶⁶.

El Convenio Europeo de Derechos Humanos, fue firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950¹⁶⁶⁷. Como lo enseña Dragoljub Popovic, este fue el resultado de varios años de largas y complicadas negociaciones diplomáticas¹⁶⁶⁸. Como lo muestran sus propios preámbulos, el Convenio tiene como referencia principal la Declaración Universal de Derechos Humanos¹⁶⁶⁹, y manifiesta la adhesión de los Estados europeos a las libertades fundamentales, de justicia y paz¹⁶⁷⁰.

¹⁶⁶⁴ MINISTERIO de Relaciones Exteriores, Unión Europea y Cooperación, S.F. Historia y Funciones del Consejo de Europa. En: *Gobierno de España* [en línea]. Disponible en: <http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/ConsejoDeEuropa/Paginas/HistoriaActividadConsejoEuropa.aspx> [consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁶⁶⁵ Artículo 1.b. Tratado de Londres.

¹⁶⁶⁶ CHILD Rights International Network. 2019. *Consejo de Europa*. En: *CRIN* [en línea]. Disponible en: <https://archive.crin.org/es/guias/onu-sistema-internacional/mecanismos-regionales/consejo-de-europa.html> [consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁶⁶⁷ CONSEJO de Europa. S.F. Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. En: *European Court of Human Rights* [en línea]. Disponible en: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf [consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁶⁶⁸ Popovic, Dragoljub. 2013. *European Human Rights Law – a manual*. The Hague, Países Bajos: Eleven International Publishing. Páginas 3-4. ISBN: 9789462360617.

¹⁶⁶⁹ CONSEJO de Europa. S.F. *Óp. Cit.* Preámbulos 1 y 2.

¹⁶⁷⁰ Ídem. Preámbulo 4.

Inicialmente, el sistema se había diseñado con dos órganos de control, Comisión y Tribunal¹⁶⁷¹, tal y como lo establecía el artículo 19 del Convenio¹⁶⁷². No obstante, en el año 1994 se adoptó el Protocolo 11º del Convenio (el cual entró en vigencia en 1998), por medio del cual se modificó dicho artículo¹⁶⁷³, aboliendo la existencia de la Comisión, y dejó como único órgano el Tribunal Europeo.

El compromiso del continente europeo con los Derechos Humanos se reafirma con la aprobación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, también conocido como tratado de Lisboa de 2007, en el cual consagran que “la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías”¹⁶⁷⁴, además de reconocer el convenio de los principios generales como Derechos de la Unión¹⁶⁷⁵.

En definitiva, el Sistema Europeo de Derechos Humanos está compuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se rige por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

1. ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ FUE CREADO?

El Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos surge como consecuencia del movimiento internacional de regionalización de los Derechos Humanos que se generó al final de la Segunda Guerra Mundial. Además, tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales de los

¹⁶⁷¹ PECES-BARBA, Gregorio. 1999. *Curso de Derechos Fundamentales*. S.E. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. Página 551. ISBN: 9788434008144

¹⁶⁷² “Con el fin de asegurar el respeto de los compromisos que resultan para las Altas Partes Contratantes del presente Convenio, se instituyen:

a) Una Comisión Europea de Derechos Humanos, denominada, en adelante, “la Comisión”.

b) Un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, denominado, en adelante, “el Tribunal”.

¹⁶⁷³ Con el fin de asegurar el respeto de los compromisos que resultan para las Altas Partes Contratantes del presente Convenio y sus Protocolos, se crea un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en adelante denominado “el Tribunal”. Funcionará de manera permanente”. CONSEJO de Europa. S.F. *Óp. Cit.*

¹⁶⁷⁴ CONSEJO de Europa. S.F. *Tratado de Lisboa* Artículo 2

¹⁶⁷⁵ Ídem. Artículo 6.3 Tratado de Lisboa. Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales

ciudadanos y cualquier persona que se encuentre en los Estados del continente europeo.

2. PAPEL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN SU CREACIÓN

El Sistema Europeo nace de la voluntad de los Estados de dicho continente. Como se mencionó en el apartado anterior, una de las primeras acciones del Consejo fue la adopción del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales¹⁶⁷⁶.

Aunque en sus preámbulos hace a referencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no se puede identificar alguna incidencia directa de la Organización de las Naciones Unidas, o alguno de sus miembros ajenos a Europa, caso contrario al africano en donde dicha Organización sí tuvo un rol fundamental en la creación del sistema regional de protección de Derechos Humanos¹⁶⁷⁷.

3. ¿CÓMO SE ABORDÓ EL TEMA DE LA SOBERANÍA?

El tema de la soberanía se ve reflejado en el Convenio a través de algunas restricciones impuesta a derechos como la libertad de expresión¹⁶⁷⁸ y libertad de reunión y asociación¹⁶⁷⁹, en el que permite que los Estados limiten dichas libertades si se consideran *“medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos”*¹⁶⁸⁰.

Hasta el año 2013, no existía en el Convenio referencia expresa alguna al tema de soberanía, no obstante, el Tribunal ha aplicado la doctrina del “margen de apreciación”. A través del Protocolo No. 15 se adicionó al preámbulo la referencia al principio de subsidiariedad y a la aplicación del margen de apreciación que gozan los

¹⁶⁷⁶ MINISTERIO de Relaciones Exteriores, *Unión Europea y Cooperación. Historia y Funciones del Consejo de Europa*. S.F. Óp. Cit.

¹⁶⁷⁷ Ver capítulo Sistema Africano de Derechos Humanos.

¹⁶⁷⁸ CONSEJO de Europa. S.F. Óp. Cit. Artículo 10.2

¹⁶⁷⁹ Ídem. Artículo 11. 2.

¹⁶⁸⁰ Ídem.

Estados¹⁶⁸¹, doctrina que surge gracias al desarrollo de su jurisprudencia; es importante indicar que el Protocolo No. 15 aún no ha entrado en vigencia, al no haber sido ratificado por todos los Estados.

Francisco Barbosa, citado por Claudio Nash, define el margen de apreciación como “el campo de acción e interpretación de los derechos fundamentales, dejado a las autoridades soberanas del Estado y a los jueces internacionales. Este campo no es ilimitado, sino que se encuentra ubicado por el campo de protección del derecho limitado”¹⁶⁸². Como se observa, deja un espacio de maniobra a los Estado Partes para aplicar los derechos y libertades fundamentales según la acción e interpretación de sus autoridades. En ese sentido, refuerza la noción de soberanía de las Partes del Convenio, al permitir diferentes alcances del Convenio atendiendo a las circunstancias particulares de cada Estado, dejando un margen de flexibilidad para hacer la interpretación de acuerdo al contexto del Estado.

Este punto será retomado en el apartado relacionado al Alcance del Mandato.

4. TIPO DE GOBIERNO ¿DEMOCRACIA?

La integración del Tribunal es bastante particular, pues tal y como lo establece el artículo 20 del Convenio tendrá tantos jueces como Altas Parte¹⁶⁸³, y su elección está a cargo de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa con el voto de la mayoría¹⁶⁸⁴; el Consejo elige de un listado de 3 personas presentada por cada Estado¹⁶⁸⁵. En la actualidad son 47 jueces.

Inicialmente, los jueces ejercen el cargo por un período no renovable de 9 años¹⁶⁸⁶; no obstante, el Convenio contempla otras dos formas para la finalización de su mandato: llegar a los 70 años de edad¹⁶⁸⁷, o por votación de dos tercios de sus

¹⁶⁸¹ CONSEJO de Europa. S.F. *Protocolo no. 15 enmendando el Convenio Para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales*. Artículo 1.

¹⁶⁸² NASH Rojas, Claudio. 2018. La doctrina del margen de apreciación y su nula recepción en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Anuario Colombiano de Derechos Internacional* [en línea]. Chile: Universidad del Rosario, Vol. 11. [Consulta: 10 de diciembre de 2020]. DOI: <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/acdi/a.6539> Disponible en: <https://revistas.urosario.edu.co/xml/4295/429555530003/html/index.html#fn3>

¹⁶⁸³ CONSEJO de Europa. S.F. *Óp. Cit.* Artículo 20.

¹⁶⁸⁴ Ídem. Artículo 22.

¹⁶⁸⁵ Ídem.

¹⁶⁸⁶ Ídem. Artículo 23.1.

¹⁶⁸⁷ Ídem. Artículo 23.2.

compañeros jueces por considerar que ya no cumple con las condiciones establecidas para el cargo¹⁶⁸⁸.

La estructura de la Corte estatuye la elección de un presidente¹⁶⁸⁹, uno o dos vicepresidentes¹⁶⁹⁰, Secretaría¹⁶⁹¹, Gran Sala¹⁶⁹² y Secciones o Salas¹⁶⁹³.

La elección de presidente, vicepresidentes y secretarios se hará por medio de votación secreta por mayoría absoluta¹⁶⁹⁴. Es importante indicar que, de conformidad con el Reglamento de Procedimientos del Tribunal, deberá procurarse la paridad de género para la elección de estos puestos¹⁶⁹⁵. El secretario del Tribunal es elegido de la misma forma¹⁶⁹⁶.

Con relación a las resoluciones que emite el Tribunal, las decisiones se tomarán por mayoría de los votos de los jueces presentes, en el caso de la plenaria, o de los jueces de cada sala o sección.¹⁶⁹⁷ Como elemento novedoso, el Tribunal puede emitir resoluciones por “acuerdo tácito”; para este efecto, el presidente hará circular el borrador de resolución fijando un plazo para que los Jueces se pronuncien y si no existiere objeción por parte de algún Juez la propuesta se considerará adoptada¹⁶⁹⁸.

Para la resolución sobre las presuntas violaciones a Derechos Humanos, el Tribunal se encuentra compuesto por una Gran Sala¹⁶⁹⁹, Secciones o Salas¹⁷⁰⁰, Comités¹⁷⁰¹ y Juez Único¹⁷⁰², dependiendo de la complejidad del asunto planteado.

Por el número de Jueces y la estructura mencionada en el párrafo anterior, la distribución del poder es bastante difusa, y no permite su concentración para la toma de decisiones, lo que garantiza ese sistema democrático en la forma de gobernar el

¹⁶⁸⁸ CONSEJO de Europa. S.F. *Óp. Cit.* Artículo 23.4.

¹⁶⁸⁹ Ídem Artículo 25. A.

¹⁶⁹⁰ Ídem

¹⁶⁹¹ Ídem. Artículo 24.

¹⁶⁹² CONSEJO de Europa. S.F. *Reglamento de Procedimientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.* Artículo 24.

¹⁶⁹³ CONSEJO de Europa. S.F. *Óp. Cit.* Artículo 25.b.

¹⁶⁹⁴ Ídem. Artículo 8.5.

¹⁶⁹⁵ Ídem. Artículo 14.

¹⁶⁹⁶ Ídem. Artículo 15.3.

¹⁶⁹⁷ Ídem. Artículo 23.

¹⁶⁹⁸ Ídem. Artículo 23 A.

¹⁶⁹⁹ Ídem. Artículo 24.

¹⁷⁰⁰ Ídem. Artículo 25.

¹⁷⁰¹ Ídem. Artículo 27.

¹⁷⁰² Ídem. Artículo 27 A.

trabajo del tribunal en adición al sistema de selección de sus integrantes. Esto sumado a las formas de gobierno democrático de cada uno de los estados partes.

5. ¿ESTADO DE DERECHO?

Tal y como lo refiere Carmen Morte Gómez, la adhesión por parte de los Estados europeos a Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos no es algo inusual¹⁷⁰³; y a pesar que algunos de sus Estados se han visto envueltos en crisis democráticas, las mismas no han influido en la ratificación del Convenio o han provocado su denuncia. Actualmente se cuenta con Estados miembros del Consejo de Europa.

6. ¿ORIGEN BASADO EN CIERTAS SUPOSICIONES O CONDICIONES FÁCTICAS?

Como se analizó con anterioridad, la creación de este sistema no obedece a actos o hechos específicos, como un conflicto interno o grandes violaciones a Derechos Humanos, sino siguió la corriente de regionalización de los Derechos Humanos posterior a la Declaración Universal de Derechos Humanos¹⁷⁰⁴.

Aunque han existido crisis específicas como la guerra de los Balcanes¹⁷⁰⁵, que dieron origen a tribunales específicos para determinar responsabilidad penal individual, la mayoría ha sido posterior a la creación del sistema. El sistema continúa trabajando en la investigación de las violaciones a los derechos humanos existentes en el territorio de los Estados Parte.

¹⁷⁰³ MONTE Gómez, Marta. 2004. El Convenio Europeo de Derechos Humanos: primeros pasos para una nueva reforma. *Anuario de Derechos Humanos. Nueva Época* [en línea]. Vol. 5. (755-784). [Consulta: 10 de diciembre de 2020]. Sin ISSN. Disponible en: <https://revistas.ucm.es/index.php/ANDH/article/download/ANDH0404110755A/20906>

¹⁷⁰⁴ Ver apartado no. 1. ¿Por qué y para qué fue creado?

¹⁷⁰⁵ AGENCIA de la ONU para refugiado – Comité español, 2018. Guerra de los Balcanes, uno de los peores conflictos de la historia. En: *UNHCR ACNUR* [en línea]. Disponible en: <https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/historias-de-vida/guerra-de-los-balcanes-uno-de-los-peores-conflictos-de-la-historia> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

7. DOCUMENTO DE CREACIÓN

Como se mencionó con anterioridad, El Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue creado en virtud de lo expresamente señalado en artículo 19 del Convenio ya citado.

Previo al protocolo 11, el Sistema Europeo también contaba con dos órganos distintos para el trámite de las peticiones (Comisión y Tribunal)¹⁷⁰⁶; no obstante, los Estados Partes optaron por un proceso más sencillo/simple ante un solo órgano¹⁷⁰⁷.

Desde 1998, cuando entró en vigencia el Protocolo 11, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se convirtió en el único órgano de control en materia de Derechos Humanos y tiene carácter permanente¹⁷⁰⁸.

8. MANDATO

El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales se basó en la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En sus considerandos se consignaron los valores ideológicos que le dan fundamento siendo estos:

- a. *“Asegurar el reconocimiento y la aplicación universal y efectiva de la Declaración Universal de Derechos Humanos.*
- b. *Con el fin de una unión más estrecha entre los miembros del Consejo de Europa cuya finalidad es la protección y el desarrollo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.*
- c. *Reconoce que la adhesión a estas libertades fundamentales constituye las bases de la justicia y de la paz en el mundo, y que su permanencia reposa en un régimen político verdaderamente democrático inspirado en el respeto comunes de los derechos humanos.*

¹⁷⁰⁶ CONSEJO de Europa. 1994. *Protocolo número 11 al Convenio Para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales relativo a la reestructuración del mecanismo de control establecido por el Convenio*. Estrasburgo

¹⁷⁰⁷ HENKIN, Louis. Et. Al. 2009. *Human Rights*. 2da. Edición. Estados Unidos de América: West Academic. Páginas 624-625. ISBN: 978-1599412610

¹⁷⁰⁸ SALADO Osuna, Ana. 1994. *El Protocolo de enmienda numero 11 al Convenio Europeo de Derechos Humanos* [en línea]. Disponible en: <http://www.cepc.gob.es/Controls/Mav/getData.ashx?MAVqs=~aWQ9MjgzMjQmaWRIPTEwMzcmaXJsPTUmbmFtZT1SSUVfMDIxXzAwM18yMzEucGRmJmZpbGU9UkIFXzAyMV8wMDNfMjMxLnBkZiZ0YWJsYT1BcnRyY3VsbyZjb250ZW50PWFwcGxpY2F0aW9uL3BkZg==> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

*d. Asegurar la garantía colectiva de algunos de los derechos enunciados en la Declaración Universal*¹⁷⁰⁹.

En cuanto al contenido de su articulado se consagran: El Artículo 1, la Obligación de respetar los derechos humanos. El Título I Derechos y Libertades, comprendido de los artículos 3 a 18 los cuales desarrollan cada uno de estos derechos y libertades¹⁷¹⁰.

El Título II, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de los artículos 19 a 51 regula las funciones, competencia, composición y procedimiento del Tribunal¹⁷¹¹.

¹⁷⁰⁹ CONSEJO de Europa. S.F. Óp. Cit.

¹⁷¹⁰ "Artículo 2 Derecho a la vida

Artículo 3 Prohibición de la tortura

Artículo 4 Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado

Artículo 5 Derecho a la libertad y a la seguridad

Artículo 6 Derecho a un proceso equitativo

Artículo 7 No hay pena sin ley

Artículo 8 Derecho al respeto de la vida privada y familiar

Artículo 9 Libertad de pensamiento

Artículo 10 Libertad de expresión

Artículo 11 Libertad de reunión y de asociación

Artículo 12 Derecho a contraer matrimonio A partir de la edad núbil

Artículo 13 Derecho a un recurso efectivo

Artículo 14 Prohibición de discriminación

Artículo 15 Derogación en caso de estado de excepción

Artículo 16 Restricciones a la actividad política de los extranjeros

Artículo 17 Prohibición del abuso de derecho

Artículo 18 Limitación en el uso de las restricciones de derechos" CONSEJO de Europa. S.F. Óp. Cit.

¹⁷¹¹ "Artículo 19 Institución del Tribunal

Artículo 20 Número de jueces.

Artículo 21 Condiciones de ejercicio de sus funciones

Artículo 22 Elección de los jueces

Artículo 23 Duración del mandato

Artículo 24 Revocación.

Artículo 25 Secretaría y referendarios

Artículo 26 Pleno del Tribunal El Tribunal

Artículo 27 Comités, Salas y Gran Sala 1

Artículo 28 Declaración de inadmisibilidad por los comités

Artículo 29 Resoluciones de las Salas

Artículo 30 Inhibición en favor de la Gran Sala

Artículo 31 Atribuciones de la Gran Sala La Gran Sala

Artículo 32 Competencia del Tribunal

Artículo 33 Asuntos presentados por Estados

Artículo 34 Demandas individuales

Artículo 35 Condiciones de admisibilidad

Artículo 36 Intervención de terceros

Artículo 37 Archivo de las demandas

Artículo 38 Examen contradictorio del asunto y procedimiento de arreglo amistoso Artículo 39

Conclusión de un arreglo amistoso

El Título III, de las Disposiciones diversas, regula lo concerniente a las encuestas, aplicación territorial, reservas, solución de controversias, poderes del Comité de Ministros, renuncia y firma¹⁷¹².

A. OBJETIVOS

Para explicar los objetivos principales del Convenio, Popovic¹⁷¹³ lo hace fundado en la cita de dos de sus artículos:

Artículo 1. *“Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona dependiente de su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el Título 1 del presente Convenio”*¹⁷¹⁴.

Artículo 46.1. *“Las Altas partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes”*¹⁷¹⁵.

En la misma línea, Queralt indica que el *“Tribunal vela por la tutela de los derechos y libertades recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”*¹⁷¹⁶ y que tanto el Convenio como el Tribunal, son herramientas del Consejo de Europa para

Artículo 40 Vista pública y acceso a los documentos

Artículo 41 Satisfacción equitativa

Artículo 42 Sentencias de las Salas

Artículo 43 Remisión ante la Gran Sala

Artículo 44 Sentencias definitivas

Artículo 45 Motivación de las sentencias y de las resoluciones

Artículo 46 Fuerza obligatoria y ejecución de las sentencias

Artículo 47 Opiniones consultivas

Artículo 48 Competencia consultiva del Tribunal

Artículo 49 Motivación de las opiniones consultivas

Artículo 50 Gastos de funcionamiento del Tribunal

Artículo 51 Privilegios e inmunidades de los jueces” CONSEJO de Europa. S.F. Óp. Cit.

¹⁷¹² “Artículo 52 Encuestas del Secretario General

Artículo 53 Protección de los derechos humanos reconocidos

Artículo 54 Poderes del Comité de Ministros

Artículo 55 Renuncia a otros modos de solución de controversias

Artículo 56 Aplicación territorial

Artículo 57 Reservas

Artículo 58 Denuncia

Artículo 59 Firma y ratificación” Ídem.

¹⁷¹³ Popovic, Dragoljub. 2013. Óp. Cit.

¹⁷¹⁴ Convenio Para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

¹⁷¹⁵ Ídem.

¹⁷¹⁶ QUERALT, Argelia. 2013. Qué es (y para qué sirve) el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En: *Agenda Pública, analistas de la actualidad* [en línea]. Disponible en: <http://agendapublica.elpais.com/que-es-y-para-que-sirve-el-tribunal-europeo-de-derechos-humanos/> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

promocionar entre sus miembros “*el desarrollo y consolidación de los estados de derecho democráticos*”.¹⁷¹⁷

Tomando como fundamento lo citado en los párrafos precedentes, los objetivos principales del sistema europeo son garantizar los derechos y libertades fundamentales y promover, a través del cumplimiento de derechos humanos, el estado de derecho y la democracia.

B. ALCANCES DEL MANDATO

Amnistía Internacional señala “*que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene jurisdicción internacional y aplica el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, y que es uno de los mecanismos de protección de los derechos humanos más desarrollado del mundo*”¹⁷¹⁸.

No obstante, cómo se explicó con anterioridad, el sistema europeo ha establecido sus bases en el principio de subsidiaridad y por mucho tiempo el Tribunal se fundamentó en dicho principio para desarrollar y aplicar la doctrina del “margen de apreciación”¹⁷¹⁹.

Cuando el Protocolo No. 15 entre en vigencia, se incluirá al preámbulo de la Convención, lo siguiente:

*“Afirmando que las Altas Partes Contratantes, de conformidad con el **principio de subsidiariedad**, tienen la responsabilidad primordial de garantizar los derechos y libertades definidos en este Convenio y sus Protocolos, y que al hacerlo disfrutan de un **margen de apreciación**, sujeto a la supervisión jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos establecido por este Convenio” (las negrillas son propias).*¹⁷²⁰

Doctrinarios como Mac Donald han justificado la aplicación del margen de apreciación en que el cumplimiento uniforme de los Derechos Humanos es difícil al no existir un

¹⁷¹⁷ QUERALT, Argelia. 2013. *Óp. Cit.*

¹⁷¹⁸ MEDIAVILLA, Manu. 2017. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una 'joya' para las libertades fundamentales. En: *Amnistía Internacional* [en línea]. Disponible en: <https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/tribunal-europeo-de-derechos-humanos-una-joya-para-las-libertades-fundamentales/> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁷¹⁹ Ver apartado no. 3 ¿Cómo se abordó el tema de la soberanía?

¹⁷²⁰ CONSEJO de Europa. S.F. *Óp. Cit.* Artículo 1.

denominador común entre los Estados europeos¹⁷²¹, idea que ha sido confirmada por el Tribunal en su jurisprudencia al establecer que no existe “*una concepción europea uniforme de los requisitos de protección de los derechos*”¹⁷²².

A criterio de la autora, el margen de apreciación se ha presentado como una forma de que el Estado elija cómo satisfacer los derechos con base en sus disposiciones internas en ejercicio de su soberanía, pero de paso se ha convertido en una herramienta para justificar el incumplimiento.

Además, como lo manifiesta García Roca, ante una aplicación no uniforme de la Convención existe la “*dificultad de hacer un juicio jurídico y el riesgo de consagrar una excepción política basada en esta pauta hermenéutica, por lo que el margen de su apreciación se convierte en un juicio muy **impreciso***” (las negrillas son propias)¹⁷²³.

Por lo anterior, el margen de apreciación se presenta como una gran limitación al mandato del Convenio, pues atendiendo a las diferentes condiciones de cada uno de los Estados Partes, el Tribunal podría limitar los alcances de protección.

C. COMPETENCIA

Tal y como lo indica el mismo Tribunal en sus materiales informativos, “*es competente para decidir sobre alegaciones de violación del Convenio Europeo de los Derechos Humanos a partir de demandas individuales o interestatales; y nunca podrá iniciar procedimientos de oficio*”¹⁷²⁴.

Al igual que otros tribunales internacionales, su competencia puede analizarse desde los cuatro elementos principales:

¹⁷²¹ MAHONEY, Paul and Seren Prebensen. 1993. *The European Court of Human Rights*. ACDONALD, Ronald St. J. Franz Matscher, and Herbert Petzold. Dordrecht, ed. *The European System for the Protection of Human Rights*. Boston, London: Martinus Nijhoff Publishers, página: 621, ISBN: 0792324315 9780792324317

¹⁷²² Caso E.S. v. Austria. (Aplicación no. 38450/12)

¹⁷²³ GARCÍA Roca, Javier. 2005. *La muy discrecional doctrina del margen de apreciación nacional según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: soberanía e integración* [en línea]. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. [Consulta: 10 de diciembre de 2020]. Sin ISBN. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2520040.pdf>.

¹⁷²⁴ Unidad de Relaciones Públicas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 2012. El TEDH en 50 preguntas. En: *Universidad Complutense de Madrid [en línea]*. Disponible en: https://www.echr.coe.int/Documents/50Questions_SPA.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

- a. Personal: según lo establecido en el Convenio, el Tribunal puede conocer solicitudes presentadas por individuos, grupos de personas u organizaciones no gubernamentales¹⁷²⁵ o Estados Parte¹⁷²⁶.
- b. Territorial: el artículo 1 del Convenio, ya citado en este apartado, hace relación a la obligación de los Estados de personas “dependientes a su jurisdicción”. Además de la disposición general contenida, posteriormente el Convenio en el artículo 56 establece de forma expresa la aplicación territorial del instrumento; indicando que la aplicación del Convenio y por lo tanto la jurisdicción del Tribunal se extiende no solo a su territorio sino también a aquellos sobre los que tenga responsabilidad según sus relaciones internacionales¹⁷²⁷.
- c. Temporal: como lo indica Popovic y de conformidad con las reglas establecidas en la Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados¹⁷²⁸, el Convenio no tendrá aplicación retroactiva¹⁷²⁹, por lo tanto, el Tribunal no podrá conocer de violaciones a los Derechos Humanos cometidas previo a la entrada en vigor del Convenio. Por otra parte, al igual que la Convención Americana, el Convenio Europeo también establece la posibilidad de denuncia¹⁷³⁰; y en caso que algún Estado lo haga, la competencia del Tribunal estaría limitada a los hechos previos a la denuncia¹⁷³¹.

¹⁷²⁵ CONSEJO de Europa. S.F. Óp. Cit. “Artículo 34. El Tribunal podrá conocer de una demanda presentada por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación, por una de las Altas Partes Contratantes, de los derechos reconocidos en el Convenio o sus Protocolos. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho”.

¹⁷²⁶ Ídem. “Artículo 33. Toda Alta Parte Contratante podrá someter al tribunal cualquier incumplimiento de lo dispuesto en el Convenio y sus Protocolos que, a su juicio, pueda ser imputado a otra Parte Contratante”.

¹⁷²⁷ Ídem. “Artículo 56.1 Cualquier Estado podrá, en el momento de la ratificación o con posterioridad a la misma, declarar, mediante notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, que el presente Convenio se aplicará, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del presente artículo, a todos los territorios o a alguno de los territorios de cuyas relaciones internacionales es responsable”.

¹⁷²⁸ Ídem. “Artículo 28. Irretroactividad de los tratados. Las disposiciones de un tratado no obligaran a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo”.

¹⁷²⁹ POPOVIC, Dragoljub. Óp. Cit.

¹⁷³⁰ CONSEJO de Europa. S.F. Óp. Cit. “Artículo 58.1 Una Alta Parte Contratante sólo podrá denunciar el presente Convenio, al término de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor del Convenio para dicha Parte, y mediante un preaviso de seis meses dado en una notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, quién informará de la misma a las restantes Partes Contratantes”.

¹⁷³¹ Ídem. “Artículo 58.2. Esta denuncia no podrá tener como efecto el desvincular a la Alta Parte Contratante interesada de las obligaciones contenidas en el presente Convenio en lo que se refiere a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de estas obligaciones, hubiera sido realizado por dicha Parte con anterioridad a la fecha en que la denuncia produzca efecto”.

- d. Material: tal y como lo indica el artículo 19 del Convenio, la función principal del Tribunal es asegurar el respeto de los compromisos que resultan para las Partes del Convenio y sus Protocolos¹⁷³²; en ese sentido, el Tribunal conocerá de supuestas violaciones de los derechos contenidos en esos instrumentos.

Es importante señalar que el Tribunal también tiene competencia consultiva, acerca de cuestiones jurídicas relativas a la interpretación del Convenio y de sus Protocolos¹⁷³³.

D. REGLAS DE ADMISIBILIDAD

El artículo 35 del Convenio establece las condiciones de admisibilidad de las peticiones, relacionadas con procesos internos, plazo de presentación, quien la presenta y el fondo del asunto, así:

- a. Deben haberse agotado los recursos internos ¹⁷³⁴. En este sistema no se contempla ninguna excepción a este requisito.
- b. Litispendencia; no se podrán conocer hechos que hayan sido examinados con anterioridad por el Tribunal o cualquier otra instancia internacional¹⁷³⁵.
- c. Cuando sea incompatible con las disposiciones del Convenio o sus Protocolos, sea infundada o abusiva¹⁷³⁶.

De incumplirse alguno de los requisitos antes enunciados, la solicitud no podrá ser conocida por el Tribunal.

Además, deben cumplir las siguientes exigencias:

- i. *Ratione Personae*: aplicable a los Estados europeos que hayan vulnerado los derechos de cualquier persona.
- ii. *Ratione Materiae*: el Tribunal sólo fue competente para conocer violaciones a derechos humanos cometidos por los Estados Europeos que hayan ratificado el Convenio Europeo.

¹⁷³² CONSEJO de Europa. S.F. *Óp. Cit.* Artículo 19.

¹⁷³³ Ídem. Artículo 47.

¹⁷³⁴ Ídem Artículo 35.1.

¹⁷³⁵ Ídem. Artículo 35.2.b.

¹⁷³⁶ Ídem. Artículo 36

- iii. *Ratione Temporis*: Debe presentarse en un plazo de 6 meses a partir de la última resolución¹⁷³⁷. Cuando el Protocolo no. 15 entre en vigencia el plazo se reducirá a 4 meses¹⁷³⁸. No se admitirán solicitudes anónimas¹⁷³⁹.
- iv. *Ratione Loci*: Se aplica a las violaciones ejecutadas en el territorio de los Estados que han ratificado el Convenio.

Siendo estos los criterios de admisibilidad de casos y que se reproducen en los diferentes sistemas.

E. TIEMPO DETERMINADO

Con relación al elemento temporal, las únicas limitaciones están relacionadas con la vigencia del Convenio¹⁷⁴⁰. A partir de que este tiene vida legal en un Estado inicia la competencia para el conocimiento de las violaciones a los derechos humanos en ese territorio.

F. DISTRIBUCIÓN DEL PODER.

El Tribunal Europeo tiene una estructura particular con diferentes niveles para conocer las solicitudes que se le presentan. Como se indicó con anterioridad para la resolución sobre las presuntas violaciones a Derechos Humanos, el Tribunal se encuentra compuesto por una Gran Sala, Secciones o Salas, Comités y Juez Único¹⁷⁴¹.

Además, al tener tantos Jueces como Estados Parte de la Convención, no existe riesgo alto de concentración de poder para la toma de decisiones; las resoluciones son emitidas por diferentes Jueces y no depende de las voluntades de unos pocos.

¹⁷³⁷ CONSEJO de Europa. S.F. *Óp. Cit.*

¹⁷³⁸ *Ídem* Artículo 4.

¹⁷³⁹ *Ídem*. Artículo 35.2.a.

¹⁷⁴⁰ Ver apartado no. 6. Mandato, inciso C Competencia.

¹⁷⁴¹ Ver apartado no. 4. Tipo de Gobierno ¿Democracia?

9. ¿SURGIÓ COMO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES?

A. ¿HABÍA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL?

Surge con inspiración en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como los demás sistemas regionales de Derechos Humanos, no surge como cumplimiento de obligaciones internacionales, más bien crea obligaciones para los Estados que la ratifican¹⁷⁴².

B. OBLIGACIONES INTERNACIONALES

Como se indica en el apartado anterior, no se deriva de ellas, pero sí genera obligaciones internacionales para quienes suscriben el Convenio¹⁷⁴³. La obligación internacional nace a partir de la ratificación del Convenio.

C. ¿ABORDA HECHOS ILÍCITOS INTERNACIONALES?

Si, al conocer sobre la responsabilidad estatal ante violaciones a derechos y libertades fundamentales¹⁷⁴⁴, que se traducen en comportamientos atribuibles a los Estados que constituyen una violación a las obligaciones internacionales.

10. COOPERACIÓN DE LOS ESTADOS.

El artículo 44A del Convenio introduce la obligación por parte de los Estados de cooperar plenamente con el Tribunal en el desarrollo de sus procedimientos¹⁷⁴⁵.

El Anexo al Reglamento de Procedimiento del Tribunal¹⁷⁴⁶, establece en relación a las diligencias de investigación que debe realizar el tribunal, que un Estado parte prestará “las facilidades y la cooperación necesarias para el buen desarrollo del

¹⁷⁴² CONSEJO de Europa. S.F. Óp. Cit. “Artículo 1. Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona bajo su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el Título I del presente Convenio”.

¹⁷⁴³ Ídem.

¹⁷⁴⁴ Ídem.

¹⁷⁴⁵ Ídem. “Artículo 44A Las partes tienen la obligación de cooperar plenamente en el desarrollo del procedimiento y, en particular, la de adoptar las disposiciones a su alcance que el TEDH considere necesarias para la buena administración de la justicia. Esta obligación se aplica igualmente, en su caso, a las Partes Contratantes que no son parte en el procedimiento”.

¹⁷⁴⁶ Aprobado por el Tribunal el 7 de julio de 2003

procedimiento”¹⁷⁴⁷. Lo anterior incluye libertad de circulación en el territorio y medidas de seguridad para la delegación del tribunal, partes, testigos y peritos que deben ser escuchados por el tribunal¹⁷⁴⁸.

Por otra parte, los Estado Parte también tienen la obligación de notificar las citaciones a testigos y peritos que residan en su territorio¹⁷⁴⁹.

Con relación a los recursos financieros del Tribunal, el presupuesto está integrado por aportes de los Estados, los cuales son proporcionales al Producto Interno Bruto de cada país¹⁷⁵⁰. No obstante, el aporte no es directo, el mismo es canalizado a través del Consejo de Europa¹⁷⁵¹. Ingresando como parte del presupuesto que este le asigna al trabajo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

11. INDEPENDENCIA

Como se señaló con anterioridad, la integración del Tribunal es bastante particular¹⁷⁵² y a criterio de la autora, su integración y estructura promueve la independencia de sus Jueces.

Además, para el ejercicio de su cargo se requiere que no lleve a cabo “ninguna actividad política o administrativa, ni actividad profesional incompatible con su deber de independencia y de imparcialidad o con la disponibilidad requerida para el ejercicio de una actividad a tiempo completo”¹⁷⁵³.

El Reglamento de Procedimientos del Tribunal Europeo incluso va un paso más allá, pues contiene una prohibición para antiguos Jueces de participar como Abogados, testigos o expertos en asuntos que hayan sido presentados durante el período en que aún eran parte del Tribunal hasta 2 años después de haber dejado el cargo¹⁷⁵⁴.

En cuanto a la independencia financiera, tal y como se indicó con anterioridad, el presupuesto del tribunal está integrado por aportes de los Estados entregados al

¹⁷⁴⁷ CONSEJO de Europa. S.F. *Óp. Cit.* Artículo A2. Anexo.

¹⁷⁴⁸ Ídem.

¹⁷⁴⁹ Artículo A5. Anexo al Reglamento de Procedimiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¹⁷⁵⁰ Unidad de Relaciones Públicas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. *Óp. Cit.*

¹⁷⁵¹ Ídem.

¹⁷⁵² Ver apartado no. 4. Tipo de Gobierno ¿Democracia?

¹⁷⁵³ CONSEJO de Europa. S.F. *Óp. Cit.* Artículo 4.1.

¹⁷⁵⁴ Ídem. Artículo 4.2.

Consejo de Europa, el cual es proporcional al producto interno bruto¹⁷⁵⁵. El que se establezca un porcentaje sobre un índice como el PBI previene que el régimen financiero de la institución dependa de la voluntad de los Estados de hacer aportes y es otro elemento que fortalece la independencia del Tribunal.

12. SELECCIÓN DE ACTORES

El Tribunal Europeo evalúa los casos presentados acorde a su competencia y si estos llenan los criterios de admisibilidad relacionados con la *ratione materiae*, *ratione temporis* y *ratione loci*, lo que se traduce en cierta objetividad para elegir los casos, así como el Estado violador de derechos humanos, criterios estandarizados para esto el proceso de selección¹⁷⁵⁶.

Entrando como actores, los jueces, la víctima y sus representantes, ONG's de derechos humanos y los Estados.

13. NORMATIVA RELEVANTE Y MARCO PROCEDIMENTAL

Tal y como lo establece el artículo 19 del Convenio, el Tribunal fue creado para velar por el cumplimiento de Convenio y sus Protocolos¹⁷⁵⁷.

Desde la aprobación del Convenio, se han emitido 16 Protocolos, de estos solo algunos adicionan derechos o libertades fundamentales diferentes a las contenidas en el texto del Convenio:

- a. Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales: extiende la protección al derecho a la propiedad, derecho a la educación y derecho a elecciones libres¹⁷⁵⁸.
- b. Protocolo N° 4 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales que reconoce ciertos derechos y libertades además de los que ya figuran en el Convenio y en el primer Protocolo adicional al Convenio, modificado por el Protocolo N° 11: extiende la protección prohibiendo la prisión por deudas, libertad de circulación, prohibición de la

¹⁷⁵⁵ Ver apartado no. 8. Cooperación de los Estados.

¹⁷⁵⁶ CONSEJO de Europa. S.F. *Óp. Cit.* Artículos 36 y 36 Reglamento

¹⁷⁵⁷ Ídem.

¹⁷⁵⁸ Aprobado en París el 20 de marzo de 1952.

expulsión de nacionales y prohibición de la expulsión colectiva de extranjeros¹⁷⁵⁹.

- c. Protocolo N° 6 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales relativo a la abolición de la pena de muerte¹⁷⁶⁰.
- d. Protocolo N° 7 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales: extiende la protección en situaciones de expulsión de extranjeros, doble grado de jurisdicción en materia penal, derechos de indemnización en caso de error judicial, derecho a no ser juzgado dos veces por un mismo asunto y la igualdad entre esposos¹⁷⁶¹.
- e. Protocolo N° 12 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales: prohibición general a la discriminación¹⁷⁶².
- f. Protocolo N° 13 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales relativo a la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia¹⁷⁶³.

El Tribunal también cuenta con su Reglamento de Procedimiento¹⁷⁶⁴ y su anexo¹⁷⁶⁵, los cuales tienen mayores detalles en relación a su estructura, Jueces y procedimientos.

14. LEGITIMIDAD:

Las bases legales del Sistema Europeo nacieron en el ámbito del Consejo de Europa, con inspiración en la Declaración Universal de Derechos Humanos, siendo la base para la creación del Convenio.

La legitimidad del Convenio no ha sido cuestionada y el Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos resulta ser el sistema de derechos humanos más avanzado en cuanto al alcance de la protección de derechos humanos, comparado con los otros sistemas existentes. Ha sido desarrollado y modificado para adaptarlo a las necesidades de la actualidad.

¹⁷⁵⁹ Aprobado en Estrasburgo el 16 de septiembre de 1963.

¹⁷⁶⁰ Aprobado en Estrasburgo el 28 de abril de 1983.

¹⁷⁶¹ Aprobado en Estrasburgo el 22 noviembre de 1984.

¹⁷⁶² Aprobado en Roma el 4 de noviembre de 2000.

¹⁷⁶³ Aprobado en Vilnius el 03 de mayo de 2002.

¹⁷⁶⁴ Aprobado el 1 de agosto de 2018, con modificaciones adoptadas el 19 de septiembre de 2016.

¹⁷⁶⁵ Aprobado el 7 de julio de 2003.

15. JURISDICCIÓN

La jurisdicción del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales recae sobre cada Estado del continente europeo que lo haya ratificado.

A. ¿QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE DE UN CASO?

Como se analizó en el apartado relacionado a la competencia, pueden formar parte de un caso: individuos, grupos de personas u organizaciones no gubernamentales o Estados Parte pueden presentar solicitudes al Tribunal relacionadas con incumplimientos al Convenio¹⁷⁶⁶.

Las partes estarán representadas por sus Agentes, quienes podrán ser auxiliados por Abogados¹⁷⁶⁷.

Además de las partes (solicitante y Estado demandado), también podrán participar en el procedimiento testigos¹⁷⁶⁸ y peritos¹⁷⁶⁹ propuestos por las partes.

El Convenio Europeo es novedoso en el sentido de dar intervención en el proceso a terceros. En primera instancia al Estado cuyo nacional sea el demandante (si fuera distinto al demandado)¹⁷⁷⁰, y por otra parte a aquellas partes del Convenio o cualquier persona con interés en el asunto, para que presente sus observaciones por escrito o participe en la vista¹⁷⁷¹, siendo una de las formas el *amicus curiae*.

B. ¿QUÉ PROBLEMAS PUEDE DEBATIR?

Sobre los problemas que se pueden debatir, tal y como se indicó en el apartado no. 6 sobre el Mandato, el artículo 19 del Convenio es claro al establecer que debe asegurar el respeto de los compromisos que resultan para las Altas partes Contratantes del Convenio y sus Protocolos¹⁷⁷².

¹⁷⁶⁶ Ver apartado no.6. Competencia.

¹⁷⁶⁷ CONSEJO de Europa. S.F. *Óp. Cit.* Artículo 35.

¹⁷⁶⁸ Ídem. Artículos A5, A6 y A7 Anexo al Reglamento de Procedimiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¹⁷⁶⁹ Ídem.

¹⁷⁷⁰ Ídem. Artículo 36.1.

¹⁷⁷¹ Ídem. Artículo 36.1.2.

¹⁷⁷² Ídem. Artículo 19.

En ese sentido, ante el Tribunal podrán dilucidarse problemas relacionados con el incumplimiento del Convenio y sus Protocolos.

16. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN:

Debido a la estructura particular del Tribunal, en la que existen Gran Sala, Secciones o Salas, Comités y Juez Único¹⁷⁷³. El Convenio contempla la posibilidad que las partes, en casos excepcionales, remitan las resoluciones emitidas por las Salas a la Gran Sala¹⁷⁷⁴, como instancia revisora.

Por otra parte, el Reglamento establece que las partes podrán solicitar la aclaración de las sentencias cuando consideren que es necesario precisar sobre algún punto de la resolución¹⁷⁷⁵.

También el Reglamento contempla que una sentencia podrá ser revisada si “se descubriera un hecho que, por su naturaleza, hubiera podido tener una influencia decisiva en el resultado de un asunto ya resuelto y que, en el momento de la sentencia, fuera desconocido por parte del TEDH y no podía ser razonablemente conocido por una de las partes”¹⁷⁷⁶.

Las Sentencias de la Gran Sala serán definitivas¹⁷⁷⁷.

¹⁷⁷³ Ver apartado no. 6 competencia inciso f Distribución de Poder.

¹⁷⁷⁴ CONSEJO de Europa. S.F. *Óp. Cit.* Artículo 43.

¹⁷⁷⁵ Ídem. Artículo 79.

¹⁷⁷⁶ Ídem. Artículo 80.

¹⁷⁷⁷ Ídem. Artículo 44.

Resulta oportuno ilustrar el proceso:

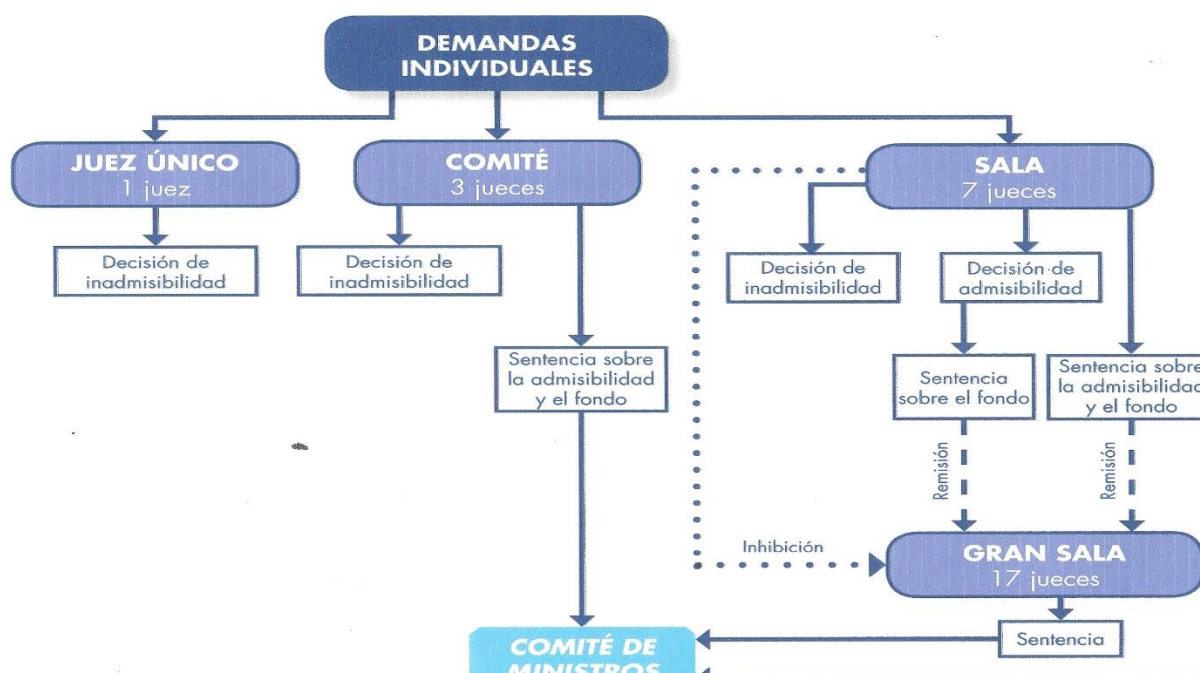


Ilustración 3 Fuente: Europeo de Derechos Humanos¹⁷⁷⁸

17. MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO

Por ser parte del Convenio, las sentencias definitivas del Tribunal serán transmitidas al Comité de Ministros, que velará por su ejecución¹⁷⁷⁹. Carrillo, citado por Lloret indica que el Consejo de Europa no deja de ser una organización internacional de ámbito regional formada como por Estados soberanos e independientes, y que depende en gran medida de la efectiva aplicación del principio de cooperación entre sus Estados miembros¹⁷⁸⁰.

Lo que Carrillo infiere es que el Consejo de Ministros es un órgano Político, y que por lo tanto la ejecución de los fallos del Tribunal no responde a un elemento netamente

¹⁷⁷⁸ TRIBUNAL Europeo de Derechos Humanos. S.F. Information in Spanish. En: *European Court of Human Rights* [en línea]. Disponible en: <https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/spa> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁷⁷⁹ CONSEJO de Europa. S.F. *Óp. Cit.* Artículo 46.

¹⁷⁸⁰ FERRER Lloret, Jaume. 2018. La ejecución de las sentencias del TEDH relativas a la Federación de Rusia y a Turquía: ¿han fracasado las reformas del Protocolo 14?. *Revista de Derecho Comunitario Europeo* [en línea]. No. 61, páginas: 853-898. [Consulta: 10 de diciembre de 2020]. DOI: <https://doi.org/10.18042/cepc/rdce.61.02> Disponible en: <https://recyt.fecyt.es/index.php/RDCE/article/view/65564>

jurídico, sino que a la voluntad de los propios Estados que resultan condenados a través de las Sentencias.

A pesar que el Reglamento del Tribunal contempla un “incidente de ejecución” en el que las Partes solicitan el análisis del procedimiento que se lleva a cabo ante el Consejo de Ministros, el mismo tiene como resultado remitir lo actuado al Consejo de Ministros para su seguimiento¹⁷⁸¹.

18. RECURSOS DISPONIBLES

A. HUMANO:

La Corte se compone de un número de jueces igual que el de los Estados Parte en el Convenio, 49 en la actualidad. *“Los jueces son elegidos por el Parlamento Asamblea del Consejo de Europa a partir de listas de tres candidatos propuestos por cada Estado, elegidos por un período no renovable de nueve años”*.¹⁷⁸²

B. MATERIAL:

Uno de los recursos materiales relevantes del sistema, es la biblioteca del TEDH que cuenta aproximadamente con 29,000 monografías, 750 artículos digitales, 25,000 en publicaciones periódicas, 9,500 capítulo de libros, 2,500 materiales sobre la doctrina el TEDH y 131 publicaciones.¹⁷⁸³

C. PRESUPUESTO ASIGNADO:

Los gastos del Tribunal corren a cargo del Consejo de Europa, cuyo presupuesto está financiado por contribuciones de los Estados miembros de acuerdo con escalas basadas en la población y su PIB.¹⁷⁸⁴

¹⁷⁸¹ CONSEJO de Europa. S.F. *Óp. Cit.* Artículos 100 al 104.

¹⁷⁸² TRIBUNAL Europeo de Derechos Humanos. S.F. *Informe anual de actividades del 2019*, Página: 122 [en línea]. Disponible en: https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2019_ENG.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁷⁸³ TRIBUNAL Europeo de Derechos Humanos. S.F. Biblioteca, Página: 1. En: ECHR [en línea] Disponible en: <https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=library&c=> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁷⁸⁴ TRIBUNAL Europeo de Derechos Humanos. S.F. Preguntas y respuestas frecuentes (Página: 4). En: *Tribunal Europeo de Derechos Humanos* [en línea]. Disponible en: https://www.echr.coe.int/Documents/50Questions_ENG.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

Como ya se mencionó el presupuesto del tribunal está integrado por aportes de los Estados entregados al Consejo de Europa, el cual es proporcional al producto interno bruto¹⁷⁸⁵. El que se establezca un porcentaje sobre un índice como el PBI previene que el régimen financiero de la institución dependa de la voluntad de los Estados de hacer aportes y es otro elemento que vigoriza la independencia del Tribunal, haciéndolo más fuerte que los otros sistemas regionales.

19. EL PAPEL DE LA VÍCTIMA:

Tal y como se ha destacado con anterioridad, los individuos o grupos de individuos pueden presentar directamente sus reclamos ante el Tribunal¹⁷⁸⁶.

El Reglamento del Tribunal establece la participación activa de las víctimas en las diferentes partes del proceso, presentando escritos¹⁷⁸⁷, testigos y/o peritos¹⁷⁸⁸ y participando en las vistas¹⁷⁸⁹.

Además, de establecerse que existió una violación al Convenio, el Tribunal le otorgará una “satisfacción equitativa”¹⁷⁹⁰, entendiéndose esto como una reparación justa y adecuada al daño causado.

20. PERCEPCIÓN PÚBLICA:

Como se mostró con anterioridad, instituciones como Amnistía Internacional consideran el sistema europeo como “*uno de los mecanismos de protección de los derechos humanos más desarrollados del mundo*”¹⁷⁹¹. No obstante, también ha enfrentado crisis, especialmente con relación a la carga de trabajo debido a la gran cantidad de solicitudes presentadas ante el Tribunal. Como lo señala Lloret, el recargo de trabajo y la escasez de recursos personales y financieros ha causado que el

¹⁷⁸⁵ Ver apartado no. 8. Cooperación de los Estados.

¹⁷⁸⁶ Ver apartado no. 13 Jurisdicción, inciso A ¿Quién puede formar parte de un caso?

¹⁷⁸⁷ CONSEJO de Europa. S.F. *Óp. Cit.* Artículo 47.

¹⁷⁸⁸ Ídem. Artículo 63.

¹⁷⁸⁹ Ídem. Artículo A5. Anexo al Reglamento de Procedimiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¹⁷⁹⁰ CONSEJO de Europa. S.F. *Óp. Cit.* Artículo 41.

¹⁷⁹¹ MEDIAVILLA, Manu. 2017. *Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una 'joya' para las libertades fundamentales*. En: Amnistía Internacional [en línea]. Disponible en: <https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/tribunal-europeo-de-derechos-humanos-una-joya-para-las-libertades-fundamentales/> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

Tribunal se tarde “por regla general más de media década en dictar sentencia desde que se presenta la demanda”¹⁷⁹².

En su esfuerzo por reducir la carga del Tribunal, se adoptó en el año 2011 a través de una modificación al Reglamento del Tribunal en cuanto al procedimiento de “Sentencia Piloto”¹⁷⁹³; cuando el Tribunal conoce violaciones a derechos humanos cuyo origen se considera un problema estructural o sistémico, el órgano jurisdiccional deberá señalar la naturaleza del problema y otorgar un período razonable para subsanarlo¹⁷⁹⁴.

Todas las solicitudes posteriores a la sentencia piloto cuya violación esté relacionada con los problemas estructurales o sistémicos indicados, serán aplazados hasta el cumplimiento del plazo otorgado al Estado para subsanarlos, pero también se fomentará la solución amistosa de las solicitudes¹⁷⁹⁵.

Por ejemplo, en un caso hipotético en que el Tribunal determine que un Estado debe modificar una legislación que resulta discriminatoria, todas las solicitudes presentadas que tengan relación con esa legislación serán aplazadas dando oportunidad al Estado a que modifique su legislación.

Por otra parte, las más férreas críticas que recibe este sistema están relacionadas con el margen de apreciación¹⁷⁹⁶, pues tal y como se describió con anterioridad, presenta riesgos de discrecionalidad y falta de uniformidad para su aplicación¹⁷⁹⁷.

21. NÚMERO DE CASOS INGRESADOS

El informe de los primeros 40 años de funcionamiento del Tribunal señala que fueron trasladados por la Comisión Europea de Derechos Humanos, al entrar en vigor el Protocolo No.11, 92 casos pendientes de ser resueltos al Tribunal.¹⁷⁹⁸

¹⁷⁹² FERRER Lloret, Jaume. 2018. *Óp. Cit.*

¹⁷⁹³ CONSEJO de Europa. S.F. *Óp. Cit.* Artículo 61.

¹⁷⁹⁴ Ídem.

¹⁷⁹⁵ Ídem.

¹⁷⁹⁶ Ver apartado No. 6 Mandato inciso B Alcances del Mandato.

¹⁷⁹⁷ GARCÍA Roca, Javier. 2005. *Óp. Cit.*

¹⁷⁹⁸ TRIBUNAL Europeo de Derechos Humanos. S.F. Encuesta de 40 años de actividad 1959-1998. Página: 126-127. En: *European Court of Human Rights* [en línea]. Disponible en: https://www.echr.coe.int/Documents/Survey_19591998_BIL.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

El informe anual de actividades realizadas por el Tribunal durante el año 2001 no hace referencia a la cantidad de solicitudes recibidas en ese año.¹⁷⁹⁹

En el año 2010 la Gran Sala recibió 31 solicitudes, la primera sección 526 y su comité de tres jueces 23; la segunda sección recibió 1,187 y su comité de tres jueces 229; la tercera sección 209 solicitudes y su comité 1,774; la cuarta sección 244 solicitudes y su comité de tres jueces 37 y la quinta sección 268 solicitudes y su comité 63.¹⁸⁰⁰

En el año 2019 de conformidad con su informe anual el Tribunal recibió 6,442 comunicaciones.¹⁸⁰¹

De conformidad con el informe de visión general del funcionamiento del Tribunal de 1959 a 2019 este ha recibido un total de 882,000 solicitudes para ser examinadas sobre su admisibilidad o rechazo.¹⁸⁰²

22. NÚMERO DE CASOS RESUELTOS

El informe de los primeros 40 años de funcionamiento del Tribunal indica que resolvió 40 Amicus Curiae y rechazó 22 solicitudes en ese periodo.¹⁸⁰³

El Primer caso se conoció el 1 de julio de 1961, fue el caso conocido como Lawless contra Irlanda. En el año 2001, el Tribunal emitió 888 sentencias. la Gran Sala emitió 19 sentencias sobre el fondo, 706 juicios restantes sobre los méritos emitidos por las Salas, 23 fueron juicios finales de conformidad con las disposiciones transitorias del Protocolo núm. 11.¹⁸⁰⁴

¹⁷⁹⁹ TRIBUNAL Europeo de Derechos Humanos. S.F. Informe anual de 2001, Página: 82. En: *European Court of Human Rights* [en línea]. Disponible en: https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2001_ENG.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁸⁰⁰ TRIBUNAL Europeo de Derechos Humanos. S.F. Informe anual de 2010, Página 65-67. En: *European Court of Human Rights* [en línea]. Disponible en: https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2010_ENG.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁸⁰¹ TRIBUNAL Europeo de Derechos Humanos. S.F. Informe anual de 2019, Página 127. En: *European Court of Human Rights* [en línea]. Disponible en: https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2019_ENG.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁸⁰² TRIBUNAL Europeo de Derechos Humanos. S.F. Visión general del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 1959-2019, Página: 4. En: *European Court of Human Rights* [en línea]. Disponible en: https://www.echr.coe.int/Documents/Overview_19592019_ENG.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁸⁰³ TRIBUNAL Europeo de Derechos Humanos. S.F. *Óp. Cit.* Página: 134-137.

¹⁸⁰⁴ Ídem. Página: 41.

El Tribunal emitió 3.680 decisiones sobre solicitudes de medidas provisionales, un total de 1.499 sentencias, 12.894 casos fueron declarados inadmisibles o excluidos de la lista por Comités de tres jueces y 22.260 por la formación de un solo juez en el año 2010. En las composiciones de Cámara y Gran Cámara, 673 solicitudes fueron declarados inadmisibles y 2,749 fueron eliminado de la lista. En total, 38,576 casos fueron declarados inadmisibles o eliminados de la lista en 2010. El número de casos declarados admisibles fue 2,474. Emitió una opinión consultiva y 920 soluciones amistosas o arreglos unilaterales.¹⁸⁰⁵

En 2019, se asignaron 44.500 solicitudes a las diferentes secciones del tribunal y sus formaciones, fueron dictadas 2,187 sentencias, 38,480 fueron declarados inadmisibles; el Tribunal completó su examen de un total de 40,667 solicitudes con un juicio o decisión o sacando el caso de la lista.¹⁸⁰⁶

De conformidad con el informe de visión general del funcionamiento del Tribunal de 1959 a 2019 ha proferido 22,500 sentencias.¹⁸⁰⁷

23. ANÁLISIS CUALITATIVO:

Sin lugar a duda, el sistema europeo introduce dos figuras innovadoras como el margen de apreciación y la sentencia piloto. Con sus matices, ambas herramientas tienen como fin facilitar la labor del Tribunal y mantener una mejor relación con los Estados Parte, al otorgarle un mayor espacio de maniobra para la aplicación del Convenio.

Es probable que, debido a estas dos figuras, el sistema haya enfrentado menos crisis de legitimidad ante los Estados Partes en relación a sistemas como el americano y el africano.

¹⁸⁰⁵ TRIBUNAL Europeo de Derechos Humanos. S.F. *Óp. Cit.* Página:13,

¹⁸⁰⁶ Ídem. Página 127.

TRIBUNAL Europeo de Derechos Humanos. 2019. Hechos y cifras 2019, Página 04-07. En: *European Court of Human Rights* [en línea]. Disponible en: https://www.echr.coe.int/Documents/Facts_Figures_2019_ENG.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁸⁰⁷ TRIBUNAL Europeo de Derechos Humanos. S.F. *Óp. Cit.* Página: 3

Por ser el sistema de mayor antigüedad, su jurisprudencia ha sido luz para los demás sistemas, cuyas cortes han utilizados sus fallos para la interpretación y aplicación de sus propios convenios.

Luego de este estudio analítico en los aspectos que a mi juicio consideré de mayor relevancia, se puede establecer que el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos contribuye a la lucha contra la impunidad y fortalecimiento del estado de derecho, en cuanto al desarrollo de jurisprudencia en materia de derechos humanos que ha servido de desarrollo de estándares en otros sistemas.

A continuación, se presenta de forma gráfica y sintética el trabajo realizado por el Sistema Europeo de Derechos Humanos.

		Mandato	Duración del Mandato	Cesación de los hechos que originaron el mandato	Inicio del primer juicio	Universo de casos	Casos procesados y/o relaciones procesales	Tiempo promedio de los casos	Casos pendientes de resolución	% Casos presentados versus casos resueltos	% Casos posibles de procesamiento versus casos resueltos
1	Tribunal Europeo de Derechos Humanos	Conocer las violaciones a los derechos humanos en el continente Europeo	Indefinido, mientras el Convenio no sea denunciado por algún Estado Parte	No aplicable,	1961	882,000	22,500	No se puede determinar	No se puede determinar	2.55%	No se puede determinar

CAPÍTULO XIII

SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

ANTECEDENTES

Durante la Conferencia Especializada Interamericana Sobre Derechos Humanos celebrada en San José, Costa Rica en noviembre de 1969, los Estados parte de la Organización de Estados Americanos –OEA-, suscribieron la Convención Americana sobre Derechos Humanos¹⁸⁰⁸. Este instrumento, tal y como lo indica en su preámbulo, pretende fortalecer en el continente americano un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre¹⁸⁰⁹.

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos contempla un mecanismo de peticiones, a través de las cuales quienes consideren que existen violaciones a derechos fundamentales en los Estados Partes, puedan acudir ante órganos internacionales para su reparación.

Como lo establece el artículo 44 *“cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte.”*

A través de este mecanismo, las presuntas violaciones de derechos humanos son conocidas en primera instancia por la Comisión Interamericana y si existen méritos y las partes no llegan a un arreglo amistoso, por la Corte Interamericana en última instancia, siendo estos los dos órganos que componen el Sistema.

¹⁸⁰⁸ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. S.F. Convención Americana sobre Derechos Humanos. En: *Comisión Interamericana de Derechos Humanos* [en línea]. Disponible en: <https://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Basicos2a.htm> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁸⁰⁹ Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención, Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre.

Es importante indicar y resaltar que este sistema tiene carácter extraordinario y subsidiario, lo que quiere decir que puede acudir al mismo una vez hayan sido agotados los recursos de la jurisdicción interna de cada Estado. Lo anterior, presenta este Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos como una herramienta valiosa en la lucha contra la Impunidad, pues pretende remediar todas aquellas violaciones que no han sido investigadas, perseguidas y sancionadas, es decir que han quedado impunes.

1. ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ FUE CREADO?

Según alude Cristián Tattenbach Yglesias en lo que el mismo denomina como “Memoria de un Participante”, la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos de 1969 tenía como principal objetivo *“traducir a reglas de derechos vinculantes, la declaración de principios sobre Derechos Humanos, hecha anteriormente; y, tal concreción obligó a muchos de los participantes, a afinar su pensamiento para no verse envueltos en situaciones indeseables”*¹⁸¹⁰. Concretando de esta manera la vigilancia regional de las violaciones a los derechos humanos en el continente, quien fue pionero en declarar la protección de los derechos humanos por medio de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la cual es anterior a la Declaración Universal.

Es así como en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos se estableció la creación de los dos órganos encargados de velar por su cumplimiento¹⁸¹¹ (en las diferentes etapas):

- a. Comisión Interamericana de Derechos Humanos: es importante mencionar que la existencia de la Comisión fue previa a la Convención, pues la misma fue creada por resolución de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile en 1959. Tanto la Carta de la OEA como la Convención establecen que la Comisión *“tiene como función principal*

¹⁸¹⁰ TATTENBACH Yglesias, Cristián. S.F. Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos de 1969. En: *Instituto de Investigaciones Jurídicas* [en línea]. Disponible en: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2454/32.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁸¹¹ Organización de Estados Americanos. S.F. *Op. Cit.* Artículo 33. Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en esta Convención:

- a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y
- b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte.

de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos”¹⁸¹²

(las negrillas son propias). El capítulo VII de la Convención (artículos 34 al 51) establece la organización, funcionamiento y procedimientos de la Comisión.

- b. Corte Interamericana de Derechos Humanos: la Corte tiene como función principal “*conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención*”¹⁸¹³. El capítulo VIII de la Convención (artículos 52 al 69) establece lo relativo a la organización, funciones y procedimientos de la Corte.

2. PAPEL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN SU CREACIÓN

Tal y como lo mencionan Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Carlos María Pelayo Möller en el Preámbulo de la versión comentada de la CIDH, el sistema interamericano siguió el impulso internacional que dejó el fin de “*la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Americanos se reunieron en México y decidieron que una declaración sobre derechos humanos debería ser redactada, esfuerzo que culminó con la Conferencia Especializada de 1969 y la adopción de la Convención*”¹⁸¹⁴.

El continente americano siguió la corriente de regionalización, después de un largo proceso cuyos inicios se remontan a finales del siglo XIX y que tuvieron como fruto la creación de la OEA en 1948¹⁸¹⁵.

No se puede descartar ni afirmar un rol de la comunidad internacional, pues el sistema en sí mismo nace de la unión (comunidad) de Estados del continente. Es evidente que, sin la voluntad de los países de la región, ni la Comisión ni la Corte Interamericana existirían.

¹⁸¹² ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. S.F. *Óp. Cit.* Artículo 41

ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. Carta de la Organización de los Estados Americanos. Artículo 106

¹⁸¹³ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. S.F. *Óp. Cit.* Artículo 62.3.

¹⁸¹⁴ FERRER Mac Gregor y Carlos María Pelayo Möller “Préambulo”. STEINER Christian y Marie-Christine Fuchs (editores) Patricia Uribe Granados. Coordinación. 2019. *Convención Americana sobre Derechos Humanos: comentada* [en línea]. Segunda edición. Bogotá: Fundación Konrad Adenauer, Programa Estado de Derecho para Latinoamérica. [Consulta: 10 de diciembre de 2020]. ISBN 6074685991. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/30237.pdf>

¹⁸¹⁵ Ídem.

3. ¿CÓMO SE ABORDÓ EL TEMA DE LA SOBERANÍA?

Desde la formación de la OEA a través de su Carta¹⁸¹⁶, y los demás instrumentos que conforman el marco jurídico del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos hacen referencia a la soberanía, voluntad de los estados y el arreglo a sus procedimientos internos, incluyendo la Convención¹⁸¹⁷.

Como se mencionó con anterioridad, los Estados tenían serias preocupaciones y querían evitar “situaciones indeseables” con relación a sus responsabilidades en materia de Derechos Humanos¹⁸¹⁸. Incluso, como lo alude Alejandra Gonza, en la redacción de algunos artículos de la Convención como el relacionado con la propiedad privada, se dio una amplia discusión “por tratarse de un tema que debe quedar bajo la soberanía del Estado”.¹⁸¹⁹

Ante las inquietudes de los Estados, desde los considerandos de la Convención se estableció que el sistema otorga *“una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”*¹⁸²⁰, es decir, como bien lo menciona Faúndez Ledesma, *“los órganos de la Convención no tienen primacía sobre los recursos de la jurisdicción interna, sino que la complementan”*¹⁸²¹.

También, se incluyó el artículo 46 de la Convención como requisito para presentar una petición el *“que se hayan **interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción***

¹⁸¹⁶ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. S.F. Óp. Cit. *“Considerando 1: Conscientes de que esa misión ha inspirado ya numerosos convenios y acuerdos cuya virtud esencial radica en el anhelo de convivir en paz y de propiciar, mediante su mutua comprensión y **su respeto por la soberanía de cada uno**, el mejoramiento de todos en la independencia, en la igualdad y en el derecho”*.

¹⁸¹⁷ Ídem. *“Artículo 2, Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, **con arreglo a sus procedimientos constitucionales** y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”*.

¹⁸¹⁸ TATTENBACH Yglesias, Cristián. 1969. Óp. Cit.

¹⁸¹⁹ GONZA, Alejandra. “Art. 21 Derecho a la Propiedad Privada”. STEINER Christian y Marie-Christine Fuchs (editores) Patricia Uribe Granados. Coordinación. S. F. Óp. Cit. Páginas 505-506.

¹⁸²⁰ Considerando II Convención Americana sobre Derechos Humanos.

¹⁸²¹ FAÚNDEZ Ledesma, Héctor. 2004. *El sistema interamericano de protección de los derechos humanos: aspectos institucionales y procesales* Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Página: 51. Tercera edición. Costa Rica, San José: IIDH. ISBN: 9968-917-24-9

*interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos*¹⁸²² (las negrillas son propias).

Además, en relación específica con la Corte, para que ésta tenga jurisdicción sobre los asuntos de un Estado, actúa subsidiariamente y debe existir un reconocimiento expreso de la competencia de este órgano¹⁸²³.

La Corte Interamericana, desde su primer fallo, ratifico ese requisito al establecer que solo puede accederse a la protección por parte del Sistema Interamericano una vez se hayan agotado los recursos internos de cada Estado debido su carácter coadyuvante y complementario¹⁸²⁴.

4. TIPO DE GOBIERNO ¿DEMOCRACIA?

Por ser parte de la Organización de Estados Americanos, sus estatutos¹⁸²⁵ y elección de sus miembros (Comisionados¹⁸²⁶ y Jueces¹⁸²⁷) dependen de la Asamblea General de la organización. En ese sentido, las disposiciones que rigen su actuar dependen exclusivamente de la voluntad de los Estados de la OEA.

En cuanto a las decisiones internas ambas se rigen por un Reglamento emitido por sus Comisionados¹⁸²⁸ y Jueces¹⁸²⁹:

¹⁸²² ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. S.F. *Óp. Cit.* Artículo 46.1.a. s

¹⁸²³ Ídem. Artículo 62.1

¹⁸²⁴ Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Fondo, sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 61.

¹⁸²⁵ COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos. 1979. *Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos*: Resolución N° 447 adoptada por la Asamblea General de la OEA en su noveno período ordinario de sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia.

ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. S.F. *Óp. Cit.* Resolución N° 448 adoptada por la Asamblea General de la OEA en su noveno período de sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, octubre de 1979

¹⁸²⁶ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. S.F. *Óp. Cit.* "Artículo 36 1. Los Miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la Asamblea General de la Organización de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados miembros".

¹⁸²⁷ Ídem. "Artículo 53. 1. Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por mayoría absoluta de votos de los Estados Partes en la Convención, en la Asamblea General de la Organización, de una lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados".

¹⁸²⁸ "Aprobado por la Comisión en su 137° período ordinario de sesiones, celebrado del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009; y modificado el 2 de septiembre de 2011 y en su 147° período ordinario de sesiones, celebrado del 8 al 22 de marzo de 2013, para su entrada en vigor el 1° de agosto de 2013." Ídem.

¹⁸²⁹ "Aprobado1 por la Corte en su LXXXV Período Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009." Ídem.

- a. La CIDH emitirá sus resoluciones por mayoría, de los miembros presentes o absoluta, dependiendo del asunto que se trate¹⁸³⁰.
- b. La Corte IDH emitirá sus resoluciones por mayoría de los jueces presentes¹⁸³¹, salvo situaciones especiales como la elección de presidente, vicepresidente¹⁸³² y secretario¹⁸³³, entre otras.

En cuanto a los Estados que ratificaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos y han aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana la mayoría han estado regidos por gobiernos democráticos o en una transición a esta¹⁸³⁴.

5. ¿ESTADO DE DERECHO?

Tal y como lo mencionan Christian Steiner y Patricia Uribe, *“los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y en especial los tratados del sistema interamericano constituyen valores comunes que representan el compromiso con la democracia y el Estado de Derecho”*¹⁸³⁵.

En los Sistemas Regionales de Derecho Internacional de los Derechos Humanos este aspecto es variable, porque para tener competencia sobre un Estado, el Estado debe previamente ratificar los Convenios y Tratados que regulen el Sistema¹⁸³⁶, en el Sistema Interamericano, se debe ratificar la Convención Americana.

Como se analizó en el apartado anterior, los diferentes Estados miembros de la OEA han ratificado bajo la aparente vigencia del Estado de Derecho¹⁸³⁷, como por ejemplo Guatemala, que la ratificó con un presidente que llegó al poder por fraude electoral haciendo la reserva sobre la competencia contenciosa de la Corte, la cual fue aceptada solo cuando se expidió la una nueva Constitución y un gobierno electo en

¹⁸³⁰ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. S.F. *Óp. Cit.* Artículo 51, COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos Reglamento Artículo 18

¹⁸³¹ CORTE Interamericana de Derechos Humanos. Reglamento. Artículo: 16

¹⁸³² Ídem. Artículo 3

¹⁸³³ Ídem. Artículo 7

¹⁸³⁴ TATTENBACH Yglesias, Cristián. 1969. *Óp. Cit.*

¹⁸³⁵ STEINER Christian y Patricia Uribe. 2019. *Introducción General*, STEINER Christian y Marie-Christine Fuchs (editores) Patricia Uribe Granados. Coordinación. *Óp. Cit.* Página 17.

¹⁸³⁶ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. S.F. *Óp. Cit.* “Artículo 45. 1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en esta Convención”.

¹⁸³⁷ TATTENBACH Yglesias, Cristián. 1969. *Óp. Cit.*

elecciones limpias¹⁸³⁸. Siendo así el Estado de Derecho un elemento esencial para el funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En el mismo caso de Guatemala, se ha señalado que “las decisiones emitidas tanto por la Comisión como por la Corte Interamericana (sea por vía de soluciones amistosas, informes de fondo o sentencias), han sido trascendentales para el fortalecimiento del Estado de derecho en Guatemala”¹⁸³⁹.

6. ¿ORIGEN BASADO EN CIERTAS SUPOSICIONES O CONDICIONES FÁCTICAS?

Tal y como se indica en el apartado sobre el por qué y para qué fue creado, el sistema interamericano siguió el movimiento de regionalismo de Derechos Humanos¹⁸⁴⁰.

El origen del Sistema Interamericano de Derechos Humanos surge por la incapacidad, falta de voluntad o simplemente por el reino de la corrupción en los sistemas de justicia de algunos de los países miembros y por ende las graves violaciones a los derechos humanos, lo anterior traía como consecuencia altos índices de impunidad en los Estados, por lo tanto, su origen está basado en condiciones fácticas¹⁸⁴¹.

7. DOCUMENTO DE CREACIÓN

Como se mencionó con anterioridad, es con la Carta de la Organización de los Estados Americanos (Comisión) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Corte) las que le dan vida al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos¹⁸⁴², aunque el mismo no se limita al contenido de estos instrumentos; existen protocolos adicionales y otras convenciones temáticas que también forman parte del *corpus iuris* del sistema.

¹⁸³⁸ GUTIERREZ de Colmenares, Carmen María. 2003. *Los Derechos Humanos y los Tratados que los contienen en el Derecho Constitucional y la jurisprudencia de Guatemala*. En: Revista Ius et Praxis [en línea]. Chile: Universidad de Talca, Vol. 9, N° 1. [Consulta: 10 de diciembre de 2020]. ISSN: 0718-0012. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122003000100008

¹⁸³⁹ MARTÍN Quintana, María. 2016. *Cumplimiento de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: desafíos en materia de justicia*, página 10. [en línea]. Primera Edición. San José: CEJIL. [Consulta: 10 de diciembre de 2020]. ISBN: 978-9968-9623-7-7. Disponible en: https://www.cejil.org/sites/default/files/cumplimiento_sentencias_guatemala_web.pdf

¹⁸⁴⁰ Ver apartado no.1 ¿Por qué y para qué fue creado?

¹⁸⁴¹ STEINER Christian y Patricia Uribe. 2019. *Óp. Cit.*

¹⁸⁴² Ídem.

Además, cada uno de los órganos cuenta con su propio reglamento y estatuto.

8. MANDATO

Desde la Carta de la OEA, los Estados Americanos dejaron claro su intención de establecer un “*régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre*”¹⁸⁴³. De conformidad con lo anterior, los Estados del continente americano se organizaron con el fin de proteger los derechos humanos fundamentales.

Tal y como lo menciona Faúndez Ledesma, “la Convención pone a cargo de los Estados los deberes fundamentales de respeto y de garantía de los derechos humanos, de modo que todo menoscabo a los mismos pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la Convención”¹⁸⁴⁴.

Como se precisó con anterioridad, se establecieron dos organismos distintos para la consecución de este fin (Comisión y Corte), los cuales tienen diferentes alcances.

En la estructura de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se destacan un Preámbulo en donde se indican los ideales bajo los cuales fue creada. En su forma se divide en 3 partes y 82 artículos.

La parte I contiene los Deberes de los Estados y Derechos Protegidos, su Capítulo I enumera los deberes de la siguiente manera:

- a. Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
- b. Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno

El capítulo II enumera los derechos civiles y políticos, abarcando estos del artículo 3 al 25 de la Convención¹⁸⁴⁵. El capítulo III regula los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en un solo artículo, el 26 el cual regula el desarrollo progresivo de estos.

¹⁸⁴³ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. S.F. *Carta de la Organización de los Estados Americanos*. Considerando IV.

¹⁸⁴⁴ FAÚNDEZ Ledesma, Héctor. 2004. *Óp. Cit.* Páginas 7 y 8.

¹⁸⁴⁵ "Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica
Artículo 4. Derecho a la Vida

El capítulo IV, contiene la suspensión de garantías, su interpretación y aplicación, desarrollándose del artículo 27 al 29. El capítulo V contiene los deberes de las personas en el artículo 32.

La parte II desarrolla los Medios de Protección, determinando en el capítulo VI los órganos competentes, establecidos en el artículo 33. El capítulo VII, está destinado a la organización de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la sección 1, dentro de los artículos 34 a 40. En la sección 2 de este capítulo se regulan las funciones de la Comisión en los artículos 42 a 43, en la sección 3 se establece su competencia quedando plasmada en los artículos 44 a 47. La sección 4 fue destinada a establecer el procedimiento para conocer denuncias regulado de la siguiente manera:

- a. Artículo 48, procedimiento de trámite
- b. Artículo 49, solución amistosa
- c. Artículo 50, informe de fondo
- d. Artículo 51, Recomendaciones de cumplimiento o incumplimiento de un Estado

El capítulo VIII contempla lo relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dividiéndolo nuevamente en secciones, la sección I destinada a establecer

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal
Artículo 6. Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre
Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal
Artículo 8. Garantías Judiciales
Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad
Artículo 10. Derecho a Indemnización
Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad
Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta
Artículo 15. Derecho de Reunión
Artículo 16. Libertad de Asociación
Artículo 17. Protección a la Familia
Artículo 18. Derecho al Nombre
Artículo 19. Derechos del Niño
Artículo 20. Derecho a la Nacionalidad
Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada
Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia
Artículo 23. Derechos Políticos
Artículo 24. Igualdad ante la Ley
Artículo 25. Protección Judicial” ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. S.F. Óp. Cit.

la organización de la Corte, de los artículos 52 al 60. La sección 2 contempla la Competencia y funciones de la Corte en sus artículos 61 a 65. La sección 3 correspondiente al Procedimiento desarrollado de los artículos 67 a 69.

En el capítulo IX quedaron plasmadas las disposiciones comunes, que se contienen en los artículos 70 a 73.

La parte III son las Disposiciones generales y transitorias, quedando en el capítulo X lo concerniente a la firma, ratificación, reserva, enmienda, protocolo y denuncia de la Convención, desarrollando estos procedimientos en los artículos 74 a 78. El capítulo XI establece las disposiciones transitorias, separando en la sección I las relacionadas con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los artículos 79 y 80 y en la sección 2 las cuestiones referidas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contenidas en los artículos 81 y 82.

A. OBJETIVOS

El objetivo del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos es el respeto los derechos y libertades reconocidos en la Convención Americana por parte de los Estados, quienes deben *“garantizar el libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”*¹⁸⁴⁶. La Comisión como la Corte tienen como fin primordial *“velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos en los Estados Americanos”*¹⁸⁴⁷. No obstante, sus alcances son diferentes, tal y como se desarrolla a continuación.

B. ALCANCES DEL MANDATO

La Comisión tiene mayor alcance en el desarrollo de sus funciones; tal y como lo establece el artículo 41 de la Convención, su *“función principal de promover la*

¹⁸⁴⁶ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. S.F. *Óp. Cit.* Artículo 1 s

¹⁸⁴⁷ Ídem. Artículos 41 y 62.

*observancia y la defensa de los derechos humanos*¹⁸⁴⁸, sin establecer limitaciones a derechos o instrumentos jurídicos específicos¹⁸⁴⁹.

Todos los países que han ratificado la Convención American están bajo la jurisdicción y supervisión de la Comisión Interamericana, no así de la Corte, ya que pueden hacer reserva sobre su competencia.

Contrario a la Comisión, la Corte si cuenta con un mandato limitado en cuanto a su jurisdicción contenciosa. El artículo 62 indica que podrá atender casos relativos a la aplicación e interpretación de la Convención, lo que limita sus actuaciones a los derechos contenidos en dicho instrumento. Esta jurisdicción se extiende en los casos del Protocolo de San Salvador¹⁸⁵⁰ y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas¹⁸⁵¹.

También ha existido debate de la competencia de la Corte con relación al artículo 26 de la Convención¹⁸⁵² en cuanto al desarrollo progresivo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; aunque los criterios sobre el alcance de este artículo han sido abordados por la Corte en casos contenciosos como Lagos del Campo v. Perú¹⁸⁵³ y Cuscul Pivaral y otros vs Guatemala¹⁸⁵⁴, aplicando dicho artículo en forma diferente.

¹⁸⁴⁸ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. S.F. *Óp. Cit.* Artículo 41.

¹⁸⁴⁹ Ídem. “Artículo 62. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención....”

¹⁸⁵⁰ Ídem. “Artículo 19.6. En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y en el artículo 13 fuesen violados por una acción imputable directamente a un Estado Parte del presente Protocolo, tal situación podría dar lugar, mediante la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuando proceda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ,....”

¹⁸⁵¹ Ídem. “Artículo XII. Para los efectos de la presente Convención, el trámite de las peticiones o comunicaciones presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en que se alegue la desaparición forzada de personas estará sujeto a los procedimientos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en los Estatutos y Reglamentos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso las normas relativas a medidas cautelares...”

¹⁸⁵² Ídem. “Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.”

¹⁸⁵³ CORTE Interamericana de Derechos Humanos. 2017. Caso Lagos del Campo vs. Perú. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. En: *Corte Interamericana de Derechos Humanos* [en línea]. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_340_esp.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁸⁵⁴ Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2018. Caso *Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala*. Sentencia de 23 de agosto de 2018 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)

Sobre esto, Pasqualucci menciona que la misma Corte a través de su competencia consultiva podría resolver el asunto y establecer un criterio uniforme¹⁸⁵⁵.

C. COMPETENCIA

Como lo afirman Liliana Tojo y Pilar Elizalde indican, las funciones de la Comisión *“fueron ampliándose progresivamente desde su creación”*¹⁸⁵⁶. En la actualidad, el artículo 41 de la Convención mencionado con anterioridad, establece que las atribuciones de la Comisión son las siguientes:

- i. *“Estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América;*
- ii. *Formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos;*
- iii. *Preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones;*
- iv. *Solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos;*
- v. *Atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten;*
- vi. *Actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención, y*

¹⁸⁵⁵ PASQUALUCCI, Jo M. 2003. *The Practice and Procedure of the Inter-American Court of Human Rights*, página 52. Segunda edición. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9780511494055.

¹⁸⁵⁶ Convención Americana sobre Derechos Humanos: comentada. S. F. Óp. Cit. Página 749.

vii. *Rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.*¹⁸⁵⁷

Como se puede observar, las competencias de la Comisión no se limitan al conocimiento de peticiones de individuos o grupos por la violación de sus derechos fundamentales; de hecho, esta función no estaba contemplada al inicio de su creación, y fue “a raíz de que la Comisión comenzó a recibir una gran cantidad de comunicaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos que se adiciono en la Convención esta competencia”¹⁸⁵⁸.

Sus funciones, especialmente en el componente de promoción, incluye la publicación de informes temáticos, informes de país, recomendaciones, cursos, entre otros.

Por otra parte, como se precisó con anterioridad, las funciones de la Corte son limitadas. Su mandato únicamente contempla dos competencias: consultiva¹⁸⁵⁹ y contenciosa¹⁸⁶⁰.

Con relación a la competencia contenciosa, ya se indicó en el apartado específico de alcances del mandato, que la Corte únicamente podrá conocer asuntos sobre incumplimiento de las disposiciones de la Convención¹⁸⁶¹, y otros instrumentos y artículos específicos¹⁸⁶².

¹⁸⁵⁷ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. S.F. *Óp. Cit.* Artículo 41

¹⁸⁵⁸ TOJO, Liliana y Pilar Elizalde. 2014. *Capítulo VII. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos* Artículo 43. STEINER Christian y Marie-Christine Fuchs (editores) Patricia Uribe Granados. ISBN 978-607-468-599-2

Coordinación. *Óp. Cit.* Página 750.

¹⁸⁵⁹ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. S.F. *Óp. Cit.* “64. 1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.

2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales.

¹⁸⁶⁰ *Ídem.* Artículo 63. 1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

¹⁸⁶¹ *Ídem.* Artículo 62

¹⁸⁶² *Ídem.* “Artículo 19.6. ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. Protocolo de San Salvador. Artículo XII Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”.

D. FORTALEZAS

A criterio de la autora, la principal fortaleza de este sistema es el efecto colectivo o extensivo de sus resoluciones y recomendaciones, es decir, lo ordenado en un caso determinado puede incidir en la situación no solo de las víctimas del caso particular, sino de la población del Estado en general, debido a lo regulado en el artículo 2 de la Convención Americana con relación a adoptar sus disposiciones como derecho interno¹⁸⁶³.

Un claro ejemplo es el caso *Molina Theissen vs. Guatemala*¹⁸⁶⁴; en la sentencia de dicho caso la Corte ordenó, entre otras cosas, lo siguiente:

- i. *“Adoptar un procedimiento expedito que permita obtener la declaración de ausencia y presunción de muerte por desaparición forzada, con fines de filiación, sucesión y reparación y demás efectos civiles relacionados con ella; y*
- ii. *Adoptar un sistema de información genética que permita la determinación y esclarecimiento de la filiación de los niños desaparecidos y su identificación”.*¹⁸⁶⁵

En ese sentido, con las reparaciones ordenadas en ese caso en particular, se estableció un procedimiento que será aplicable para todos los desaparecidos durante el conflicto armado interno, y además se implementará un sistema de información genética que permitirá la localización e identificación de otros niños desaparecidos. Estándar que se aplica para casos posteriores.

¹⁸⁶³ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. S.F. *Op Cit.* “Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.

¹⁸⁶⁴ Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2004. *Caso Molina Theissen Vs. Guatemala* Sentencia de 3 de julio de 2004 (Reparaciones y Costas).

¹⁸⁶⁵ Ídem.

E. REGLAS DE ADMISIBILIDAD

El artículo 46 de la Convención establece los requisitos, y sus excepciones, para que una petición se admita para su trámite. Como en otras jurisdicciones, se contemplan las 4 materias; personal, temporal, físico y material.

- i. Ratione Personae: *“Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización”*¹⁸⁶⁶.
- ii. Ratione Materiae: *“la materia de la petición o comunicación de violación de la Convención”*¹⁸⁶⁷; además se requiere que *“no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional”*¹⁸⁶⁸.
- iii. Ratione Temporis: *“presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva”*¹⁸⁶⁹.
- iv. Ratione Loci: las denuncias o quejas de violación deben ser perpetradas en contra de un Estado parte¹⁸⁷⁰.

Las excepciones contempladas en el artículo mencionado son:

- i. *“No exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;*
- ii. *No se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y*
- iii. *Haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos”*¹⁸⁷¹.

Como se puede colegir de las excepciones planteadas en el artículo 46 de la Convención, lo que pretenden es reducir la impunidad, pues reconoce la debilidad estatal que puede dilatar la obtención de justicia.

¹⁸⁶⁶ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. S.F. Óp. Cit. Artículo 44.

¹⁸⁶⁷ Ídem.

¹⁸⁶⁸ Ídem. 46.1.c.

¹⁸⁶⁹ Ídem. 46.1.b

¹⁸⁷⁰ Ídem. Artículo 44

¹⁸⁷¹ Ídem. Artículo 46.2

F. TIEMPO DETERMINADO

El mandato de las instituciones, además de los límites ya mencionados, también tienen una restricción en el tiempo relacionado con la vigencia de los diferentes instrumentos aplicables especialmente en la competencia contenciosa de ambos órganos, restricción derivada de la forma de ratificación y reservas realizadas. La Convención conocerá de las violaciones denunciadas a partir de la vigencia de la convención en el Estado objeto de denuncia.

Un ejemplo claro de lo anterior son las diferentes violaciones cometidas en el marco del conflicto armado interno en Guatemala, las cuales se percibe han quedado en impunidad¹⁸⁷². *“Este Estado reconoció la competencia contenciosa de la Corte hasta el año 1987”*¹⁸⁷³. La historia guatemalteca nos indica que la mayoría de violaciones a Derechos Humanos durante el conflicto se llevaron a cabo entre los años 1980 y 1984¹⁸⁷⁴; debido a que Guatemala no había reconocido la competencia de la Corte durante ese período, la Corte no puede conocer sobre esas violaciones, países en dictadura prorrogaron su ratificación a objeto de no verse revisados por esta, pero cabe señalar por ejemplo contrario al de Guatemala, el de Chile como Caso Almonacid Arellano, que si bien no se pudo revisar porque el caso fue sobreseído por justicia militar en 1975, si pudo ser competencia de la Corte, si bien no la violación inicial, si la falta de justicia y aplicación de un sistema militar para su decisión, lo que se consideró en definitiva una falta de acceso a la justicia.

Por otra parte, la Convención también contempla la denuncia del instrumento¹⁸⁷⁵; no obstante, tal y como establece el artículo 78 de la Convención, esto no libera de la

¹⁸⁷² OFICINA de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS). 1999. *Memoria del silencio*. Guatemala. Página 35.

¹⁸⁷³ ORGANIZACIÓN de Estado Americano. S.F. *Tratados Multilaterales: Convención Americana sobre Derecho Humanos*, Estado de Firmas y Ratificaciones. En: Departamento de Derecho Internacional, DEA [en línea]. Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁸⁷⁴ ECHEVERRÍA, Arturo; Claudia Rivera, et al. 2006. *Violaciones de los Derechos Humanos en Guatemala. Organización Mundial Contra la Tortura*. Página 14. S.E. Suiza: OMCT. ISBN: 2-88477-124-7

¹⁸⁷⁵ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. S.F. *Óp. Cit. “Artículo 78. 1. Los Estados Partes podrán denunciar esta Convención después de la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General de la Organización, quien debe informar a las otras partes.*

2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación

responsabilidad estatal relacionada con violaciones que se hayan dado durante el período previo a la denuncia. Tal es el caso de Venezuela, quien denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el año 2013¹⁸⁷⁶.

G. DISTRIBUCIÓN DEL PODER.

En cuanto a la distribución del poder, a pesar de ser una institución autónoma, la misma forma parte de la Organización de Estados Americanos, y depende de su Asamblea General para la elección de sus autoridades, tal y como se mencionó con anterioridad.

En el caso de la Comisión, sus Miembros “serán elegidos a título personal por la Asamblea General de la Organización de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados miembros”¹⁸⁷⁷.

En el caso de la Corte, sus jueces “serán elegidos, en votación secreta y por mayoría absoluta de votos de los Estados Partes en la Convención, en la Asamblea General de la Organización, de una lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados”¹⁸⁷⁸.

Ambos procedimientos dan lugar a negociaciones e intercambios entre Estados. Lo ideal sería que se eligiera a las personas que se consideran idóneas, con una formación y vasta experiencia en Derechos Humanos, no obstante, al ser propuestos por los gobiernos también entra en juego incluso los intereses personales de quienes se encuentran en las posiciones de autoridad de cada Estado, en adición al tinte político.

de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto.”

¹⁸⁷⁶ Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2013. CIDH manifiesta su profunda preocupación por efecto de la denuncia de la Convención Americana por parte de Venezuela. OEA, *más derechos para más gente* [en línea]. 10 de septiembre. Disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/064.asp> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁸⁷⁷ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. S.F. *Óp. Cit.* Artículo 36.

¹⁸⁷⁸ Ídem. Artículo 53

9. ¿SURGIÓ COMO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES?

A. ¿HABÍA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL?

En este caso sí hay responsabilidad, pero la responsabilidad internacional del Estado, quien ratificó los Convenios y Tratados Internacionales que se la imponen¹⁸⁷⁹.

B. OBLIGACIONES INTERNACIONALES

Los Estados sujetos a esta jurisdicción tiene obligaciones internacionales derivadas de los Convenios y Tratados Internacionales ratificados¹⁸⁸⁰.

C. ¿ABORDA HECHOS ILÍCITOS INTERNACIONALES?

En el caso del Derecho Internacional de los Derechos Humanos este elemento es aplicable, porque se trata de violaciones a los derechos humanos, atribuibles a los Estados que han aceptado su competencia y jurisdicción¹⁸⁸¹. Las violaciones a los derechos humanos son comportamientos atribuibles a los Estados que constituyen una violación a las obligaciones internacionales.

10. COOPERACIÓN DE LOS ESTADOS.

Además de la propuesta para la elección de sus miembros, son los Estados de la OEA quienes sostienen financieramente a ambos organismos¹⁸⁸², con sus contribuciones voluntarias extraordinarias¹⁸⁸³. En el caso de la Comisión, en 2017

¹⁸⁷⁹ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. S.F. *Óp. Cit.* "Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. **Los Estados Partes** en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social" (las negrillas son propias).

¹⁸⁸⁰ Ídem. Artículo 45

¹⁸⁸¹ Ídem. Artículo 1 y 45

¹⁸⁸² COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos. 2017. Capítulo VI Desarrollo Institucional. En: *Informe Anual 2017* [en línea]. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2017/docs/IA2017cap.6-es.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁸⁸³ CORTE Interamericana de Derechos Humanos. 2019. Informe Anual 2019. Página 152. En: *Corte Interamericana de Derechos Humanos* [en línea]. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/informe2019/espanol.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

recibió contribuciones voluntarias de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay¹⁸⁸⁴.

Ambas instituciones reciben apoyo de Estados e Instituciones ajenas al sistema, tales como España, Irlanda, Países Bajos, Suecia, Suiza, Unión Europea, Universidad de Notre Dame, Fundación Panamericana para el Desarrollo, GIZ, entre otras¹⁸⁸⁵.

Desde el punto de vista procedimental, especialmente ante la Corte Interamericana, el reglamento de dicho órgano¹⁸⁸⁶ establece que los Estados “tienen el deber de cooperar para que sean debidamente cumplidas todas aquellas notificaciones, comunicaciones o citaciones dirigidas a personas que se encuentren bajo su jurisdicción, así como el de facilitar la ejecución de órdenes de comparecencia de personas residentes en su territorio o que se encuentren en el mismo”.

11. INDEPENDENCIA

A pesar que tanto la Comisión¹⁸⁸⁷ como la Corte¹⁸⁸⁸ son órganos autónomos, ya se ha hecho referencia a que dependen de la Organización de Estados Americanos y de los Estados para su funcionamiento¹⁸⁸⁹.

Además, como se indicó en el apartado que precede, ambos dependen financieramente de los aportes de los Estados para su sobrevivencia¹⁸⁹⁰. En el año 2016, el sistema entró en una fuerte crisis financiera que incluso llevó a la suspensión de audiencias, visitas y período de sesiones ante el incumplimiento del pago de cuotas por parte de los Estados¹⁸⁹¹.

¹⁸⁸⁴ COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos. 2017. *Óp. Cit.* Capítulo VI Desarrollo Institucional.

¹⁸⁸⁵ COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos. 2017. *Óp. Cit.*

¹⁸⁸⁶ CORTE Interamericana de Derechos Humanos. 2019. *Óp. Cit.* Artículo 26

¹⁸⁸⁷ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. S.F. ¿Qué es la CIDH?. De: OEA [en línea]. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/que.asp> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁸⁸⁸ CORTE Interamericana de Derechos Humanos. S.F. Historia de la Corte IDH. De: OEA [en línea]. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/historia.cfm> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁸⁸⁹ Ver 4. Tipo de Gobierno.

¹⁸⁹⁰ Ver 8. Cooperación de Estados.

¹⁸⁹¹ ALVARADO, Jesús María. 2016. Crisis Financiera en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De: Fundación Libertad y Desarrollo [en línea]. Disponible en: <https://www.fundacionlibertad.com/articulo/crisis-financiera-en-el-sistema-interamericano-de-derechos-humanos> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

Por otra parte, han existido movimientos por parte del Estado para denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal y como lo hizo Venezuela en 2013¹⁸⁹², lo que implicaría no ser vigilado en materia de derechos humanos.

El aspecto financiero y de credibilidad del sistema/denuncia de la Convención, ha provocado, desde la percepción de la autora, que tanto la Comisión como la Corte adopte resoluciones menos contundentes con relación a la responsabilidad estatal.

12. SELECCIÓN DE ACTORES

La Comisión Interamericana evalúa los casos presentados por los peticionarios y si la petición está apegada a los criterios de admisibilidad inicia su trámite¹⁸⁹³, esto se traduce en cierta objetividad para elegir los casos, así como el Estado violador de derechos humanos, pese a que existen criterios estandarizados para esto¹⁸⁹⁴, no significa que la evaluación sea infalible¹⁸⁹⁵ y que en determinado momento por intereses políticos o de deficiente evaluación¹⁸⁹⁶ se tramiten o se dejen de tramitar casos en contra de determinados Estados. Aunque luego de la reforma del Reglamento de la Corte, el peticionario tiene más participación y puede promover el envío del caso a la Corte.

13. NORMATIVA RELEVANTE Y MARCO PROCEDIMENTAL

El *corpus iuris* del Sistema Interamericano, incluye, pero no se limita a los siguientes cuerpos normativos:

- a. Carta de la Organización de Estados Americanos;

¹⁸⁹² SÁNCHEZ Gómez, Silvia Haydee. 2015. *Los Estados y la denuncia a la Convención Americana de Derechos Humanos: Los casos de Trinidad y Tobago, Perú y Venezuela* [en línea]. Tesina para obtener el grado académico de: Máster en Derecho Público. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. Página 135. [Consulta: 10 de diciembre de 2020]. Disponible en: <https://core.ac.uk/download/pdf/44310705.pdf>

¹⁸⁹³ COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos. S.F, *Op. Cit.* Artículo 30

¹⁸⁹⁴ Ídem. Artículos 36 y 36.

¹⁸⁹⁵ DÍAZ, Álvaro Paúl. 2014. *La revisión inicial de peticiones por la Comisión Interamericana y la subsidiariedad del sistema de derechos humanos*. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso [en línea]. Valparaíso: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, No.43. [Consulta: 10 de diciembre de 2020]. ISSN: 07186851 Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512014000200017

¹⁸⁹⁶ GÓMEZ Fernández, Itziar y Carmen Montesinos Padilla et al. S.F. *Agotamiento de los recursos internos y otras exigencias de admisibilidad*. En: Universidad Carlos III de Madrid [en línea]. Disponible en: https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/res/pmdh_pdf/PMDH_Manual.213-240.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

- b. Carta Democrática Interamericana;
- c. Carta Social de las Américas;
- d. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;
- e. Convención Americana sobre Derechos Humanos;
- f. "Protocolo de San Salvador": Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
- g. Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte;
- h. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura;
- i. "Convención de Belém do Pará": Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer;
- j. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas;
- k. Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad;
- l. Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia;
- m. Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia
- n. Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; y,
- o. Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas

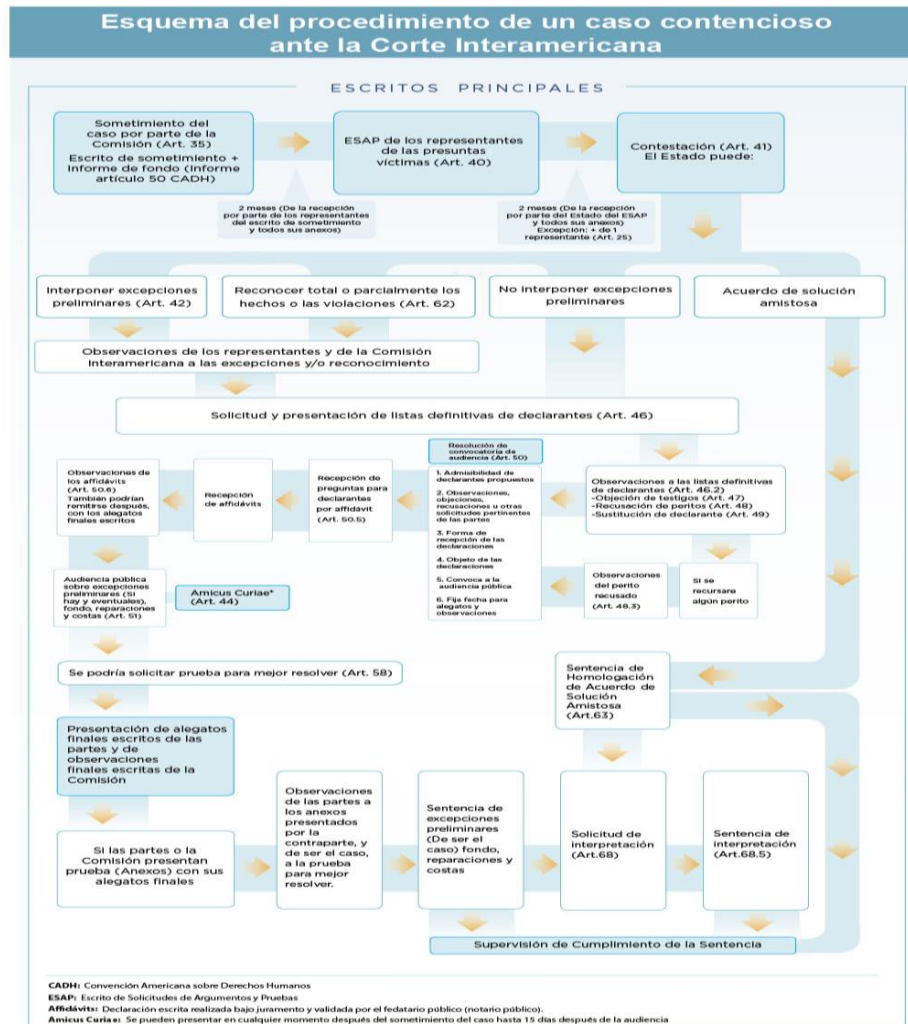
Con relación al marco procedimental, las bases del procedimiento ante la Comisión y la Corte están contempladas en la Convención, y desarrolladas con mayor detalle en los Reglamentos de cada institución.

El Reglamento de la Comisión, tal y como lo establece el Estatuto de dicha institución, “determinará, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el procedimiento que se debe seguir en los casos de peticiones o comunicaciones en las que se alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra la mencionada Convención y en las que se impute tal violación a algún Estado parte en la misma”¹⁸⁹⁷.

¹⁸⁹⁷ COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos. S.F. *Óp. Cit.* Artículo 23.

Tal y como se establece en el artículo 1 de su reglamento, el mismo “*tiene por objeto regular la organización y procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos*”¹⁸⁹⁸. El siguiente esquema detalla cada paso:

Imagen



Fuente: Corte IDH.¹⁸⁹⁹

¹⁸⁹⁸ CORTE Interamericana de Derechos Humanos. 2019. *Óp. Cit. “Artículo 1. Objeto 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y procedimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”*.

¹⁸⁹⁹ CORTE Interamericana de Derechos Humanos. S.F. *Esquema del procedimiento contencioso ante la Corte Interamericana*. En: ABC de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [en línea]. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/abccorte/abc/22/> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

14. LEGITIMIDAD:

Las bases legales del Sistema Interamericano como ya se ha indicado son: Carta de la Organización de Estados Americanos; Carta Democrática Interamericana; Carta Social de las Américas; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre estos documentos se erigen y desarrollan las bases jurídicas del Sistema para su aplicación.

Por tratarse de Instrumentos Internacionales signados y ratificados por los Estados del continente americano la legitimidad del Sistema en sí no ha sido puesto en duda. Debido a que si un Estado está inconforme con su actuar puede denunciar los Convenios.

15. JURISDICCIÓN

La jurisdicción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos recae sobre cada Estado del continente americano que la haya ratificado, como se ha desarrollado esa jurisdicción está dividida en dos órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales tienen jurisdicción si los Estados no hacen reserva sobre la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, como lo ha hecho Estados Unidos¹⁹⁰⁰.

A. ¿QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE DE UN CASO?

Ante la Comisión, de acuerdo con el artículo 23 de su reglamento, “cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA” puede presentar una petición, aunque también las víctimas podrán designar a un abogado o tercera persona para que los represente¹⁹⁰¹.

¹⁹⁰⁰ Ver apartado no. Mandato.

¹⁹⁰¹ COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos. S.F. *Óp. Cit.* “Artículo 23. Presentación de peticiones. Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisión peticiones en su propio nombre o en el de terceras personas, referentes a la presunta violación de alguno de los derechos humanos reconocidos, según el caso, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre

Por otra parte, ante la Corte por ser un procedimiento judicial, su reglamento contempla la participación de los siguientes actores:

- i. Agentes: representantes del Estado¹⁹⁰².
- ii. Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos¹⁹⁰³.
- iii. Presuntas víctimas o sus representantes: si existen varias víctimas o representantes, deberán designar un interviniente común¹⁹⁰⁴.
- iv. Defensor Interamericano: cuando las víctimas no cuenten con “*representación legal debidamente acreditada, el Tribunal podrá designar un Defensor Interamericano de oficio que las represente durante la tramitación de caso*”¹⁹⁰⁵.

B. ¿QUÉ PROBLEMAS SE PUEDEN DEBATIR?

Con relación a los problemas que pueden debatirse, se ha abordado con anterioridad en los apartados relacionados con el mandato y sus alcances; la Comisión puede debatir problemas relacionados con cualquier instrumento del Sistema, mientras que la Corte tiene un mandato limitado a incumplimientos de la Convención Americana, en cuanto a la Desaparición Forzada de Personas y al Protocolo de San Salvador en los derechos a la Educación, y Asociación Laboral¹⁹⁰⁶.

16. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN:

Debido al diseño de los procedimientos que pueden llevarse a cabo frente a la Comisión y la Corte, en varias oportunidades las partes pueden pronunciarse¹⁹⁰⁷, presentarse a audiencias/vistas¹⁹⁰⁸ y presentar las observaciones¹⁹⁰⁹ que consideren pertinentes, no se contempla en sus reglamentos el planteamiento de medios de

Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, conforme a sus respectivas disposiciones, el Estatuto de la Comisión y el presente Reglamento. El petionario podrá designar en la propia petición, o en otro escrito, a un abogado u a otra persona para representarlo ante la Comisión”.

¹⁹⁰² CORTE Interamericana de Derechos Humanos. 2019. *Óp. Cit.* Artículo 23.

¹⁹⁰³ Ídem. Artículo 24.

¹⁹⁰⁴ Ídem. Artículo 25.

¹⁹⁰⁵ Ídem. Artículo 37.

¹⁹⁰⁶ Ver apartado no. 6. Mandato.

¹⁹⁰⁷ CORTE Interamericana de Derechos Humanos. 2019. *Óp. Cit.* Artículos 29, 30, 37, 39, 40.

¹⁹⁰⁸ Ídem. Capítulo III, artículos 45 al 55

¹⁹⁰⁹ COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos. S.F. *Óp. Cit.* Artículo 48

CORTE Interamericana de Derechos Humanos. 2019. *Óp. Cit.* Artículo 69.

impugnación que en esencia pretendan revertir las resoluciones de la Comisión o la Corte.

El único remedio procesal existente dentro del sistema interamericano, es la solicitud de interpretación de las sentencias de la Corte cuando alguna de las partes considere que no existe claridad en cuanto al sentido o alcance de las sentencias¹⁹¹⁰.

17. MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO

Tanto la Comisión ¹⁹¹¹ como la Corte ¹⁹¹², han implementado procedimientos específicos para la supervisión de cumplimiento de sus resoluciones.

La Comisión implementó en el año 2020 un sistema electrónico específico para facilitar el seguimiento y cumplimiento a sus resoluciones y recomendaciones, Sistema de Monitoreo de Recomendaciones Interamericano (Simore) ¹⁹¹³.

El SIMORE es presentado como “un mecanismo de rendición de cuentas, transparencia, participación y acceso a la información, que facilita el seguimiento de las recomendaciones, fortalece capacidades para la supervisión de medidas y la promoción del cumplimiento de obligaciones internacionales, e informa sobre los avances y desafíos para la protección de los derechos humanos en los países de la región¹⁹¹⁴”. Incluso a través de esta herramienta electrónica, cualquier persona interesada podrá presentar observaciones relacionadas con el cumplimiento de las resoluciones o recomendaciones de la CIDH¹⁹¹⁵.

¹⁹¹⁰ CORTE Interamericana de Derechos Humanos. 2019. *Óp. Cit.* Artículo 68.

¹⁹¹¹ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. S.F. *Seguimiento de recomendaciones*. En: OEA [en línea] Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/actividades/seguimiento/default.asp> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁹¹² “Artículo 69.1 La supervisión de las sentencias y demás decisiones de la Corte se realizará mediante la presentación de informes estatales y de las correspondientes observaciones a dichos informes por parte de las víctimas o sus representantes. La Comisión deberá presentar observaciones al informe del Estado y a las observaciones de las víctimas o sus representantes”. CORTE Interamericana de Derechos Humanos. 2019. *Óp. Cit.*

¹⁹¹³ COMUNICACIÓN CEPAZ. 2020. *CIDH pone a disposición el Sistema de Monitoreo de Recomendaciones Interamericano (Simore)*. 12 de junio. En: CEPAZ, Centro de Justicia y Paz [en línea]. Disponible en: <https://cepaz.org/noticias/cidh-pone-a-disposicion-el-sistema-de-monitoreo-de-recomendaciones-interamericano-simore/> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁹¹⁴ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. 2020. *¿Qué es el SIMORE Interamericano?*. En: OEA, más derechos para más gente [en línea]. Disponible en: <https://www.oas.org/ext/es/derechos-humanos/simore/> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁹¹⁵ Ídem.

Por su parte, la Corte tiene un procedimiento establecido en su reglamento, que incluye presentación de escritos¹⁹¹⁶, peritajes¹⁹¹⁷, otras fuentes de información¹⁹¹⁸ e incluso audiencias/vistas¹⁹¹⁹ para que las partes presenten sus observaciones con relación al cumplimiento de las sentencias.

18. RECURSOS DISPONIBLES

A. HUMANO:

La Comisión Interamericana está integrada por 7 comisionados para un periodo de tres años, quienes eligen un presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente. La Secretaría Ejecutiva de la CIDH, al 31 de diciembre de 2019 estaba conformada por 134 funcionarios/as (53 funcionarios/as, 79 consultores/as y 2 profesionales asociados) y 13 becarios/as.¹⁹²⁰

*“De conformidad con lo estipulado en los artículos 3 y 4 de su Estatuto, la Corte tiene su sede en San José, Costa Rica y está integrada por siete jueces y juezas nacionales de los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos. Durante el año 2019, el equipo de la Corte lo componían 61 personas”.*¹⁹²¹

¹⁹¹⁶ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. S.F. Óp. Cit. “Artículo 69.1 La supervisión de las sentencias y demás decisiones de la Corte se realizará mediante la presentación de informes estatales y de las correspondientes observaciones a dichos informes por parte de las víctimas o sus representantes.”

¹⁹¹⁷ Ídem. “Artículo 69.2 ...Para los mismos efectos podrá también requerir los peritajes e informes que considere oportunos”.

¹⁹¹⁸ Ídem. “Artículo 69.2 La Corte podrá requerir a otras fuentes de información datos relevantes sobre el caso, que permitan apreciar el cumplimiento. Para los mismos efectos podrá también requerir los peritajes e informes que considere oportunos”.

¹⁹¹⁹ Ídem “Artículo 69.3 Cuando lo considere pertinente, el Tribunal podrá convocar al Estado y a los representantes de las víctimas a una audiencia para supervisar el cumplimiento de sus decisiones, y en ésta escuchará el parecer de la Comisión”.

¹⁹²⁰ Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) *Sobre la CIDH*. 2018. Composición. En: OEA [en línea]. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/composicion.asp> [consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁹²¹ CORTE Interamericana de Derechos Humanos. 2019. Óp. Cit. Artículo 52.

Ídem. Artículo 4;

CORTE Interamericana de Derechos Humanos. 2019. *Informe Anual del año 2019 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*, Página: 212. En: Corte IDH [en línea]. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/informe2019/espanol.pdf?fbclid=IwAR0nEAXcC9deEZfzNkxbdI3WIXbMEwT1hYz0v1nCVfhCn1uxbARndUqpfyY> [consulta: 10 de diciembre de 2020].

B. MATERIAL:

El recurso material más importante de la Corte IDH es su biblioteca que fue fundada en 1981, *“tiene un amplio contenido especializado en materia de derecho internacional público, derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, entre otros.”*¹⁹²²

C. PRESUPUESTO ASIGNADO:

Para el año 2019, la Asamblea General aprobó un presupuesto a la CIDH de \$9,367,400, del cual \$6,974,200 fueron para gastos de personal y \$ 2,393,200 para gastos operacionales. El 2019 fue el segundo año de la duplicación del presupuesto del Fondo Regular de la SG/OEA asignado a la CIDH y el cual se llevará a cabo en un plazo de 3 años. Los fondos específicos provinieron de países miembros de la OEA, observadores internacionales y en conjunto sumó un total de \$ 8,130,823.¹⁹²³

Los ingresos totales de la Corte Interamericana provienen de: a) Fondo Regular de la OEA; b) Ingresos Extraordinarios. Los ingresos totales recibidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante el período contable 2019 ascendieron a la suma de US\$6,460,402.11. Sobre este total, 4,635,200.00 (71.75%) provienen del Fondo Regular de la OEA260. A su vez, US\$1,825,202.11 (28.25%) provienen de Ingresos Extraordinarios de fuentes externas al Fondo Regular, correspondientes a contribuciones voluntarias y proyectos de cooperación internacional.¹⁹²⁴

19. EL PAPEL DE LA VÍCTIMA:

En el sistema interamericano, la víctima tiene un papel principal tal y como se ha precisado con anterioridad, tanto ante la Comisión¹⁹²⁵ como la Corte¹⁹²⁶, participan de manera activa en el desarrollo del proceso. Esto cambió a partir de las reformas de

¹⁹²² CORTE Interamericana de Derechos Humanos. 2019. *Óp. Cit.*

¹⁹²³ COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos. 2019. *Informe Anual 2019*. Página: 828-829. En: CIDH [en línea]. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2019/docs/IA2019cap.6-es.pdf> [consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁹²⁴ CORTE Interamericana de Derechos Humanos. 2019. *Óp. Cit. Informe Anual del año 2019 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*, Página: 152. En: Corte IDH [en línea]. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/informe2019/espanol.pdf?fbclid=IwAR0nEAXcC9deEZfzNkxbdI3WIXbMEwT1hYz0v1nCVfhCn1uxbARndUqpfby> [consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁹²⁵ COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos. S.F. *Óp. Cit.* Artículos 23 al 45

¹⁹²⁶ CORTE Interamericana de Derechos Humanos. 2019. *Óp. Cit.* Artículo 25

los reglamentos tanto de la Corte como de la Comisión, en sus inicios el papel principal lo llevaban las ONG's que representaban a las víctimas, actualmente el papel de la víctima dentro del proceso es dinámico y participativo.

20. PERCEPCIÓN PÚBLICA:

El Centro de Recursos para la Justicia Internacional recoge la opinión general de la Sociedad Civil sobre el sistema al indicar que el mismo *“está diseñado para proveer acceso a los defensores al nuevo conjunto de herramientas y estrategias de defensa en la búsqueda de responsabilidad y compensación por injusticias y desigualdades”*¹⁹²⁷.

No obstante, entre los Estados la percepción es distinta, pues como se ha mencionado con anterioridad, el sistema ha atravesado algunas crisis financieras y de legitimidad, debido a que los Estados no cumplen con sus aportes¹⁹²⁸ y han denunciado la Convención¹⁹²⁹.

También la Comisión ha enfrentado dificultades relacionadas con el atraso procesal, que ha impactado en la percepción del sistema, pues para el año 2015 el tiempo promedio para que un caso tenga una resolución de fondo ante dicho organismo es 6 años¹⁹³⁰. Situaciones de falta de justicia oportuna, han afectado su credibilidad.

21. NÚMERO DE CASOS INGRESADOS

Durante el año 1970 la CIDH recibió 217 comunicaciones.¹⁹³¹

¹⁹²⁷ REINSBERG, Lisa. 2014. *Prevención y Reparación de Violaciones a Derechos Humanos en el Marco Internacional Defensa ante el Sistema Interamericano: Manual para Abogados y Defensores [en línea]*. 2da. Edición. Centro de Recursos para la Justicia Internacional. [Consulta: 10 de diciembre de 2020]. Sin ISBN. Disponible en: <https://ijrcenter.org/wp-content/uploads/2014/03/Manual-Defensa-ante-el-Sistema-Interamericano-2014.pdf>

¹⁹²⁸ Ver apartado no. 9. Independencia.

¹⁹²⁹ Ver apartado 6. Mandato F. Tiempo determinado.

¹⁹³⁰ DULITZKY, Ariel. 2015. Muy poco, muy tarde: la morosidad procesal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En: *Corte Interamericana de Derechos Humanos* [en línea]. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33492.pdf>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁹³¹ COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos, 1971. Informe anual de 1970 Anexo Cuadro II, Organización de los Estados Americanos. Página 01. En: *Comisión Interamericana de Derechos Humanos* [en línea]. Disponible en: <http://www.cidh.oas.org/annualrep/70sp/anexo.htm#CUADRO%20I>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

En el año 1980 el informe anual no hace referencia a la cantidad de denuncias recibidas.¹⁹³²

Durante el año 1990 de conformidad con el informe anual de la CIDH del periodo comprendido entre 1989 y 1990 recibió 96 denuncias, mientras entre el periodo comprendido entre 1990 y 1991 recibió 232 denuncias.¹⁹³³

Durante los años 1970 a 1980 la Corte IDH no recibió ningún caso por encontrarse en proceso de instalación y aprobación de estatutos y reglamentos.¹⁹³⁴

La Corte IDH en 1990 año recibió 1 solicitud de medidas provisionales y 9 casos nuevos puestos a disposición de su competencia contenciosa.¹⁹³⁵

La CIDH registro durante el año 2000 que recibió un total 658 peticiones. En el año 2000 la CIDH realizó la solicitud de 15 medidas provisionales y envió 24 casos contenciosos a la competencia a la Corte IDH. Sin embargo, de conformidad con el sitio especializado en estadísticas de la CIDH esta envió 3 casos a la Corte IDH.¹⁹³⁶

¹⁹³² Comisión Interamericana de Derechos Humanos. S.F. Informe anual CIDH 1979-1980: Observaciones que la comisión considere apropiadas respecto de las comunicaciones que ha recibido. Página: 01. En: *Comisión Interamericana de Derechos Humanos* [en línea]. Disponible en: <http://www.cidh.org/casos/79.80sp.htm> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos. S.F. Informe anual CIDH 1980-1981: Observaciones que la comisión considere apropiadas respecto de las comunicaciones que ha recibido. Página: 1. En: *Comisión Interamericana de Derechos Humanos* [en línea]. Disponible en: <http://www.cidh.org/casos/80.81sp.htm>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁹³³ COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos. S.F. Informe anual de la CIDH 1989-1990, Sección 2. En: *Comisión Interamericana de Derechos Humanos* [en línea]. Disponible en: <http://www.cidh.oas.org/annualrep/89.90span/Cap3a.htm> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁹³⁴ CORTE Interamericana de Derechos Humanos. S.F. Historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En: *Corte Interamericana de Derechos Humanos* [en línea]. Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/historia.cfm> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁹³⁵ CORTE Interamericana de Derechos Humanos, 1991. Informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1990, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Página 11-17. En: *Corte Interamericana de Derechos Humanos* [en línea]. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/SPA/spa_1990.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁹³⁶ COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos. S.F. Informe 2000 relativo a peticiones recibidas durante el año. Página 01. En: *Comisión Interamericana de Derechos Humanos* [en línea]. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/estadisticas.html> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

Ídem.

En el año 2010 la CIDH recibió un total 1598 peticiones. En el año 2010 la CIDH realizó el envío de 16 casos a la Corte IDH, sin embargo, solo fueron 15 casos los remitidos a la Corte IDH de conformidad con el informe anual,¹⁹³⁷

Durante el año 2010, la Corte IDH tuvo solicitud de 12 medidas provisionales y ninguna solicitud de opinión consultiva.¹⁹³⁸

La CIDH envió a la Corte IDH 32 casos en el año 2019.¹⁹³⁹ La Corte Interamericana de Derechos Humanos durante el 2019 tuvo 32 casos nuevos sometidos a su jurisdicción contenciosa y 4 solicitudes de opinión consultiva.¹⁹⁴⁰

Durante 2019, la CIDH recibió un total de 3,034 peticiones y en ese mismo año la sección de Estudio Inicial avanzó en el análisis de 4,254 asuntos pendientes en esta etapa procesal.¹⁹⁴¹

22. NÚMERO DE CASOS RESUELTOS

En el año 1970 la CIDH decidió el archivo de 10 casos, 8 archivados y 2 archivados sin perjuicio. Este informe no hace referencia a los informes de fondo y admisibilidad, soluciones amistosas realizadas por la CIDH durante el año 1970.¹⁹⁴²

Los envíos de casos a la Corte IDH en 1970 no eran posibles debido a que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cobró vigencia el 18 de julio de

¹⁹³⁷ COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos. S.F. Informe relativo a peticiones del 2010. En: *Comisión Interamericana de Derechos Humanos* [en línea]. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/amistosas.asp> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos, S.F. Informes de decisiones enviadas a la Corte IDH del 2010. En: *Corte Interamericana de Derechos Humanos* [en línea]. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/demandas.asp> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos. S.F. Estadísticas de decisiones enviadas a la Corte IDH del 2010. En: *Corte Interamericana de Derechos Humanos* [en línea]. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/estadisticas.html> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁹³⁸ CORTE Interamericana de Derechos Humanos. 2011. Informe anual 2010, Ídem. Página: 81 y 86. En: *Organización de los Estados Americanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos* [en línea]. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/SPA/spa_2010.pdf. [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁹³⁹ COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos. 2019. Estadísticas relativa a casos enviados a la corte en el año. Página 01. En: *Comisión Interamericana de Derechos Humanos* [en línea]. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/estadisticas.html> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁹⁴⁰ CORTE Interamericana de Derechos Humanos. 2019. *Op. Cit.* Página 39, 107 y 118

¹⁹⁴¹ COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos. S.F. *Op. Cit.* Página 62.

¹⁹⁴² Ídem.

1978, “al haber sido depositado el undécimo instrumento de ratificación por un Estado Miembro de la OEA. La Corte IDH pudo establecerse y organizarse hasta que entró en vigor la Convención. El 22 de mayo de 1979 los Estados Partes en la Convención Americana eligieron, durante el Séptimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, a los juristas que, en su capacidad personal, serían los primeros jueces que compondrían la Corte Interamericana. La primera reunión de la Corte se celebró el 29 y 30 de junio de 1979 en la sede de la OEA en Washington, D.C. Es por ello que de ese año no hay registro de casos ante la Corte”.¹⁹⁴³

En el año 1980 el informe anual no indica sobre la cantidad de decisiones de archivo, soluciones amistosas el informe anual de la Comisión no indica sobre si se tomó este tipo de decisiones en este período.¹⁹⁴⁴

En relación al envío de casos a la Corte IDH durante 1980 por parte de la CIDH esto no era posible debido a que la Corte IDH se instaló en el año 1979. Además, durante su primer año de funcionamiento dedicó sus primeros tres periodos ordinarios y primer periodo extraordinario de sesiones a la redacción de su Reglamento, Estatuto y acuerdo de cooperación con el país de acogida para la Corte. Por ello en ese año no conoció de casos contenciosos, solicitud de medidas provisionales u opiniones consultivas.¹⁹⁴⁵

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el período comprendido entre 1989-1990 emitió 08 informes de admisibilidad, mientras en el período 1990-1991 la CIDH emitió 82 informes de admisibilidad. En ese año la CIDH emitió 90 informes de fondo de conformidad con el sitio oficial de estadísticas para los informes de este tipo. En relación a las decisiones de archivo, soluciones amistosas y casos enviados a la Corte IDH ni el informe anual de la Comisión ni los sitios de la Comisión

¹⁹⁴³ CORTE Interamericana de Derechos Humanos. S.F. Historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En: *Corte Interamericana de Derechos Humanos* [en línea]. Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/historia.cfm> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁹⁴⁴ COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos. S.F. *Óp. Cit.* Página 01.

¹⁹⁴⁵ CORTE Interamericana de Derechos Humanos. 1980. Informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1980, Página: 08-13. En: *Corte Interamericana de Derechos Humanos* [en línea]. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/_SPA/spa_1980.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

especializados en estos temas poseen información o indican si se tomó este tipo de decisiones en ese período.¹⁹⁴⁶

La Corte IDH en 1990 año realizó 1 opinión consultiva, 1 solicitud de medidas provisionales, 2 emisiones de sentencias y 9 casos nuevos puestos a disposición de su competencia contenciosa.¹⁹⁴⁷

El sitio de registro de informes de admisibilidad de la CIDH reporta 26 informes de admisibilidad realizados por este organismo durante el año 2000. De conformidad con las estadísticas publicadas por la CIDH en su sitio especializado en ellas reporta que durante el año 2000 emitió 35 informes de admisibilidad. En ese año la CIDH emitió 90 informes de fondo de conformidad con el sitio oficial de estadísticas para los informes de este tipo mientras el informe anual reporta 22 informes de fondo.¹⁹⁴⁸

En el año 2000 la CIDH realizó 13 soluciones amistosas según el informe anual. De conformidad con el sitio especializado en soluciones amistosas la CIDH realizó 12. En relación al archivo de casos la CIDH realizó 61 archivo de casos.¹⁹⁴⁹

El informe anual de la Corte IDH del año 2000 indica que emitió 7 sentencias nuevas, se sometieron a su competencia contenciosa 4 casos nuevos, se encontraban en trámite 28 casos. En relación a las medidas provisionales el mismo informe muestra que la Corte emitió 14 y ninguna opinión consultiva. Sin embargo, el buscador de resoluciones de la Corte Interamericana revela que en este año fueron otorgadas 21 medidas provisionales.¹⁹⁵⁰

En el año 2010 la CIDH realizó el envío de 16 casos a la Corte IDH. Durante ese mismo año 2010 la CIDH ejecuto 71 informes de admisibilidad. Sin embargo, en el sitio oficial de estadísticas para ese mismo año informa que se emitieron 73 informes de este tipo.¹⁹⁵¹

La CIDH realizó el archivo de 55 casos. Además, la solución amistosa de 11 casos y el envío de 15 casos a la Corte IDH de conformidad con el informe anual, sin embargo,

¹⁹⁴⁶ COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos. S.F. *Óp. Cit.*

¹⁹⁴⁷ CORTE Interamericana de Derechos Humanos, 1991. *Óp. Cit.*

¹⁹⁴⁸ COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos. 2001. *Óp. Cit.*

¹⁹⁴⁹ *Ídem.*

¹⁹⁵⁰ CORTE Interamericana de Derechos Humanos, 2001. *Óp. Cit.*

¹⁹⁵¹ COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos. 2019. *Óp. Cit.*

de conformidad con el sitio de estadísticas de casos enviados durante el año 2010 los casos fueron 16 casos.¹⁹⁵²

En ese año la CIDH emitió 4 informes de fondo de conformidad con el sitio oficial de estadísticas para los informes de este tipo . De conformidad con las estadísticas publicadas por la CIDH en su sitio especializado en ellas reporta que durante el año 2000 pronunció 25 informes de fondo aprobados y 4 publicados.¹⁹⁵³

Durante el año 2010, la Corte IDH tuvo solicitud de 12 medidas provisionales de las cuales 7 fueron adoptadas favorablemente, 3 declaradas con urgencia manifiesta y 2 rechazadas. Además, conto con 46 medidas provisionales activas y ninguna solicitud de opinión consultiva.¹⁹⁵⁴

*“Al término del año 2010, la Corte contaba con 21 casos por resolver, de los cuales 14 se encontraban en trámite inicial, cuatro en etapa de excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, dos en etapa de fondo y eventuales reparaciones y costas, y uno en etapa de reparaciones y costas. Asimismo, la Corte tenía 111 casos en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia, para un total de 132 casos en trámite”.*¹⁹⁵⁵

La CIDH tomo la decisión de archivar 29 peticiones de conformidad con el texto del informe anual, de conformidad con las estadísticas del informe anual y las estadísticas del sitio oficial de la CIDH la cantidad de peticiones archivadas fueron 308.¹⁹⁵⁶

Respecto a informes de admisibilidad 146, distribuidos en 123 admisibilidades y 23 durante 2019.¹⁹⁵⁷ En relación a los informes de fondo durante 2019, la Comisión ha aprobó un total de 62 y ha publicado 2 informes de fondo.¹⁹⁵⁸

La CIDH de conformidad con el informe anual ha facilitado 73 reuniones de trabajo y 69 videoconferencias en el 2019, que han permitido el impulso de las negociaciones

¹⁹⁵² COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos, 2011. *Óp. Cit.*

¹⁹⁵³ Ídem.

¹⁹⁵⁴ CORTE Interamericana de Derechos Humanos, 2011. *Informe anual 2010*, Página: 81 y 86. En: *Corte Interamericana de Derechos Humanos* [en línea]. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/SPA/spa_2010.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁹⁵⁵ Ídem.

¹⁹⁵⁶ COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos. 2019. *Óp. Cit.*

¹⁹⁵⁷ Ídem

¹⁹⁵⁸ Ídem.

y cumplimiento de acuerdos de solución amistosa. En total se abrieron 142 espacios de diálogo en 2019 en distintos procesos en negociación y seguimiento de solución amistosa. Por su parte el sitio oficial de estadísticas difiere en el número soluciones amistosas realizadas en el año 2019 al indicar que fueron solo 14.¹⁹⁵⁹

La CIDH envió a la Corte IDH 32 casos en el año 2019.¹⁹⁶⁰ La Corte Interamericana de Derechos Humanos durante el 2019 tuvo 32 casos nuevos sometidos a su jurisdicción contenciosa, emitió 20 medidas provisionales, no emitió ninguna opinión consultiva a pesar de haber tenido 4 solicitudes. Al 2019 cuenta con 402 casos contenciosos en trámite, lo anterior de conformidad con el informe anual de la Corte IDH.¹⁹⁶¹

Como se observa infortunadamente para efectos de certeza en cuanto al aspecto cuantitativo del trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se alcanza por las constantes contradicciones en la información que suministran por sus órganos oficiales.

Al mes de junio del año 2020 la Corte ha emitido 402 sentencias, 645 resoluciones de medidas provisionales y 26 opiniones consultivas¹⁹⁶².

23. ANÁLISIS CUALITATIVO:

Desde 1988 que la Corte emitió su primer fallo, ha abordado el tema de impunidad en diferentes casos, entre los cuales destacan los relacionados con conflictos armados.

En ese primer fallo, en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, ya la corte hacía referencia a la impunidad, en relación con la violación al derecho a la vida, al indicar que:

“157. La práctica de desapariciones, en fin, ha implicado con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del

¹⁹⁵⁹ COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos. 2019. *Óp. Cit.*

¹⁹⁶⁰ Ídem.

¹⁹⁶¹ CORTE Interamericana de Derechos Humanos, 2019. *Informe anual 2019*, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Página 39,107 y 118. En: *Corte Interamericana de Derechos Humanos* [en línea]. Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/informe2019/espanol.pdf?fbclid=IwAR0nEAXcC9deEZfzNkxbdI3WIXbMEwT1hYz0v1nCVfhCn1uxbARndUqpfbY> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁹⁶² Ídem.

crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo que significa una brutal violación del derecho a la vida...” (las negrillas son propias)¹⁹⁶³.

Incluso en su jurisprudencia ha definido el término impunidad, señalando que:

“En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana” ¹⁹⁶⁴

Más reciente, la Corte ha hecho relación a la obligación de los Estado de luchar contra la impunidad:

*“268. Este Tribunal valora los avances alcanzados hasta ahora por el Estado con el fin de esclarecer los hechos. No obstante, teniendo en cuenta las conclusiones del Capítulo VIII.2 de esta Sentencia, la Corte dispone que **el Estado debe llevar a cabo las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar y, en su caso, juzgar y sancionar a todos los responsables...**”* (las negrillas son propias)¹⁹⁶⁵.

La Corte ha hecho especial énfasis en relación a la impunidad, cuando en el caso se presentan normativas de amnistía; en esas situaciones la Corte ha sido tajante sobre la incompatibilidad de este tipo de medidas y se presentan como un obstáculo en la lucha contra la impunidad.

Especialmente en el caso *Gelman v. Uruguay*, la Corte hace un recuento de todas las instancias internacionales que se han pronunciado sobre la amnistía en casos de graves violaciones a derechos humanos y como esta fomenta la impunidad. Además,

¹⁹⁶³ Corte IDH. 1988. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988.

¹⁹⁶⁴ Corte IDH. 2006. *Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006.

¹⁹⁶⁵ Corte IDH. 2017. *Caso Vereda La Esperanza Vs. Colombia*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017.

recoge el criterio de las diferentes Cortes Nacionales del Continente Americano y los precedentes de la misma Corte, señalando que:

*“225. Esta Corte ha establecido que **“son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de **prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción** de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas **por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos...****”*

*227. En especial, las leyes de amnistías afectan **el deber internacional del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos** al impedir que los familiares de las víctimas sean oídos por un juez, conforme a lo señalado en el **artículo 8.1** de la Convención Americana y violan el derecho a la protección judicial consagrado en **el artículo 25** del mismo instrumento precisamente por la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los hechos, incumpliendo asimismo el artículo 1.1 de la Convención. ...” (las negrillas son propias)”¹⁹⁶⁶*

En términos generales, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es aceptado y visto como eficaz en la lucha contra la impunidad por los estados partes y las víctimas que ahí acuden para procurar el reconocimiento de sus derechos fundamentales al no haber encontrado protección a nivel interno, así como por el alcance en la aplicación de las sentencias, que no solo produce efectos al caso concreto, sino que se convierte en referente y marco de protección de los derechos de la población del Estado parte del sistema que ha tenido el conflicto y en muchos casos de los diferentes Estados miembros.

Se debe destacar como otra fortaleza del sistema la importancia y relevancia que han tomado las víctimas, que, como partes afectadas y primer interesado en una respuesta justa, tienen una participación fundamental por la información que poseen

¹⁹⁶⁶ Corte IDH. 2011. *Caso Gelman Vs. Uruguay*. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011.

para la búsqueda de la verdad y por ende la materialización de la lucha contra la impunidad.

Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se convierten en fundamentos válidos para el análisis y dialéctica de los derechos humanos en los casos particulares cuando cada Estado analiza los hechos en el sistema interno.

Tiene su punto débil en el tiempo que toma la adopción de la decisión final por la prolongación en el tiempo de esa violación, donde en varios casos sumando el tiempo del proceso a nivel interno pasan 20 o más años. Esto en adición, a la inexistencia de herramientas coercitivas para que los estados que son condenados den cumplimiento real a lo decidido, dado que en algunos casos solo se hace como el cumplimiento de una obligación mas no como el real reconocimiento del daño causado, o el cumplimiento a cuenta gotas. Como lo ha manifestado la ex Jueza, Cecilia Medina, los preceptos de las sentencias que más se cumplen son los pagos indemnizatorios, los más difíciles son respecto del efectivo juzgamiento de los responsables- para que los hechos no queden en la impunidad.

Como otra de las debilidades del sistema se debe mencionar la forma de selección de los comisionados y jueces, que puede generar que algunos Estados utilicen la postulación para el pago de favores políticos designando a personas que no son lo más representativo de la defensa de los derechos humanos en su país de origen y por ende darán muy poco aporte a la lucha contra la impunidad. Un ejemplo concreto de esta politización fue cuando recientemente Guatemala postuló al abogado Stuardo Ralón como Comisionado, quien resultó electo, quedando claro en la ciudadanía que se trataba de un pago político por el apoyo que éste le había dado al gobierno del presidente Morales.

Finalmente, como otro punto a mejorar esta el de las políticas de pedagogía y divulgación de las sentencias al interior de los sistemas judiciales y políticas internas para que se conviertan las reglas y principios trazados en imperativos a observar en la acción de los Estados miembros y de sus sistemas judiciales en especial. Esto por cuanto a pesar de las obligaciones que adquieren al momento de ratificar su uso en la vida practica es muy limitada.

Luego de este estudio analítico en los aspectos que a mi juicio consideré de mayor relevancia, se puede establecer que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos contribuye a la lucha contra la impunidad y fortalecimiento del estado de derecho, en cuanto al desarrollo de jurisprudencia en materia de derechos humanos que ha servido para la reparación de violaciones a los derechos humanos en el continente americano.

A continuación, se presenta de forma gráfica y sintética el trabajo realizado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

		Mandato	Duración del Mandato	Cesación de los hechos que originaron el mandato	Inicio del primer juicio	Universo de casos	Casos procesados y/o relaciones procesales	Tiempo promedio de los casos	Casos pendientes de resolución	% Casos presentados versus casos resueltos	% Casos pasibles de procesamiento versus casos resueltos
1	Comisión Interamericana de Derechos Humanos	Contencioso, Promoción, Monitoreo de violaciones a Derechos Humanos	Indefinido	NO	No aplicable	Se desconoce dato total	Se desconoce dato total	Se desconoce dato total	Se desconoce dato total	Se desconoce dato total	Se desconoce dato total
	Corte Interamericana de Derechos Humanos	Conocer casos de violaciones a los derechos humano	Indefinido	NO	No aplicable	402	402	Se conoce el dato	Se desconoce dato total	402	402

CAPÍTULO XIV

SISTEMA AFRICANO DE DERECHOS HUMANOS

ANTECEDENTES:

A diferencia de los sistemas interamericano y europeo, el continente africano no pudo seguir con la tendencia de regionalización al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pues aún tenía asuntos por resolver en relación a la colonización a la que estaban sometidos la mayoría de sus Estados. Tal y como lo indica Geoffrey Rugege, para África el fin de la Segunda Guerra Mundial contribuyó a la descolonización y liberación política de este continente¹⁹⁶⁷.

El primer movimiento de regionalismo en el continente africano se concretó con el establecimiento de la Organización para la Unidad Africana (en adelante OUA) en mayo de 1963, no obstante, la protección de los Derechos Humanos no era uno de sus preocupaciones principales. Como lo narra Fischel de Andrade, los Derechos Humanos eran vagamente mencionados en una disposición preambular, y no encontraron respaldo en la realidad¹⁹⁶⁸.

La preocupación sobre la situación de los derechos humanos en África vino desde fuera de este, pues para finales de los años 1970s y los inicios de los 1980s la comunidad internacional mostraba especial interés sobre los conflictos armados internos en los diferentes Estados africanos y situaciones particulares como el “apartheid” en Sudáfrica¹⁹⁶⁹.

¹⁹⁶⁷ RUGEGE, Geoffrey. 2019. La Segunda Guerra Mundial y la descolonización de África. En: *Revista Fundación Sur* [en línea]. Disponible en: <http://www.africafundacion.org/spip.php?article33063> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁹⁶⁸ FISCHER de Andrade, José. 1992. El Sistema Africano de protección de los Derechos Humanos y de los Pueblos. En: *Estudios Básicos de Derechos Humanos* [en línea]. Seminario Internacional La Protección Internacional de los Derechos Humanos: Universidad de São Paulo. Páginas: 23-57 [Consulta: 10 de diciembre de 2020]. Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r12020.pdf> realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo, del 09-13.XI.92, b

¹⁹⁶⁹ HENKIN, Louis. Et. Al. 2009. *Human Rights*, página 677. 2da. Edición. Estados Unidos de América: Foundation Press. ISBN 978-1599412610

Es así como en 1979 la Organización de Naciones Unidas organizó un seminario en Monrovia, Liberia, con el fin de analizar el establecimiento de Comisiones Regionales de Derechos Humanos con especial énfasis en África¹⁹⁷⁰. En dicho seminario participaron más de 30 Estados, y tuvo como resultado una propuesta para el establecimiento de la Comisión Africana de Derechos Humanos la cual fue remitida por el Secretario General de Naciones Unidas a la OUA¹⁹⁷¹.

Tal y como se menciona en el reporte del citado seminario existía en África (para el tiempo del seminario) la necesidad de eliminar conflictos étnicos, raciales y de otra índole, distribución de poder y riquezas, regímenes políticos de un solo partido, militares y/o autoritarios, situaciones que debían constituir el núcleo al establecer un sistema de protección de Derechos Humanos¹⁹⁷².

Dos años más tarde (1981) los Estados Parte de la OUA aprueban la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, también conocida como Carta de Banjul, resaltando en su preámbulo el por qué y para qué fue creado el sistema así:

- a. *“Erradicar de África toda forma de colonialismo, coordinar e intensificar su cooperación y esfuerzos por alcanzar una vida mejor para los pueblos de África y fomentar la cooperación con la debida consideración a la Carta de las Naciones Unidas y a la Declaración de los derechos humanos.”*¹⁹⁷³
- b. *“...los derechos humanos fundamentales derivan de los atributos de los seres humanos, lo cual justifica su protección internacional, y, por otro lado, que la realidad y el respeto de los derechos de los pueblos deberían necesariamente garantizar los derechos humanos...”*¹⁹⁷⁴
- c. *“...adhesión a los principios de los derechos y las libertades humanos y de los pueblos contenidos en las declaraciones, convenios y otros instrumentos*

¹⁹⁷⁰ COMISIÓN de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. 1979. *Seminar on the establishment of Regional Commissions on Human Rights with special reference to Africa*. En: Naciones Unidas, Biblioteca Digital [en línea]. Disponible en: <https://digitallibrary.un.org/record/751317> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁹⁷¹ Ídem.

¹⁹⁷² Ídem.

¹⁹⁷³ UNIÓN Africana. *Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos*. Preámbulo 4.

¹⁹⁷⁴ Ídem. Preámbulo 5.

*adoptados por la Organización para la Unidad Africana el Movimiento de los países no alineados y las Naciones Unidas.”*¹⁹⁷⁵

- d. “...deber de promover y proteger los derechos y libertades humanos y de los pueblos teniendo en cuenta la importancia tradicionalmente concedida en África a esos derechos y libertades”¹⁹⁷⁶.

1. ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ FUE CREADO?

El Sistema Africano fue creado para positivizar o concretar la protección de los derechos fundamentales a través de un convenio y un órgano regional de control. Con el fin de promover y proteger los derechos de la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, por medio de la Comisión y Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

2. PAPEL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN SU CREACIÓN

Como ya se mostró en apartado precedente, la comunidad internacional jugó un papel fundamental en la creación del Sistema Africano de Derechos Humanos¹⁹⁷⁷. La Organización de Naciones Unidas tuvo un rol principal, pues por medio de la Comisión de Derechos Humanos (existente en dicho momento) se impulsó y llevó a cabo el seminario cuyo resultado fue una propuesta de órgano regional para la protección de los Derechos Humanos en África¹⁹⁷⁸.

Tal y como se analizó con anterioridad, a finales de la década de los 70s inicio de los 80s se dio especial importancia a enfrentar las violaciones de Derechos Humanos que se estaban dando en el continente africano; algunos autores, como Cristof Haynes, vinculan este interés a la política exterior del presidente Carter de los Estados Unidos de América¹⁹⁷⁹.

En ese sentido, es fácilmente perceptible que, sin la presión por parte de la Organización de Naciones Unidas y el énfasis que grandes potencias como Estados

¹⁹⁷⁵ UNIÓN Africana. S.F. *Óp. Cit.* Preámbulo 8.

¹⁹⁷⁶ Ídem. Preámbulo 9.

¹⁹⁷⁷ Ver apartado 1. ¿Por qué y para qué fue creado?

¹⁹⁷⁸ COMISIÓN de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. S.F. *Óp. Cit.*

¹⁹⁷⁹ HENKIN, Louis. 2009. *Óp. Cit.* Página: 677.

Unidos de América realizó al respeto de los Derechos Humanos en el ámbito internacional, el Sistema de Protección de Derechos Humanos en África no existiría o habría tardado aún más en conformarse.

3. ¿CÓMO SE ABORDÓ EL TEMA DE LA SOBERANÍA?

Moran Aldana resalta que el tema de la soberanía y el principio de no injerencia eran los principales obstáculos que enfrentó la OUA para establecer el mecanismo regional de protección de Derechos Humanos¹⁹⁸⁰.

En el reporte del Seminario de Mordovia, los asistentes (en su mayoría países africanos) establecieron que era generalmente aceptado que los Derechos Humanos trascienden fronteras y que los principios de soberanía y no interferencia no podrían ser invocados para violar derechos fundamentales¹⁹⁸¹. No obstante, siempre se hizo especial énfasis en que los Estados mantienen su soberanía¹⁹⁸²; además, al momento de establecer un órgano de control en la Carta, se le dio una naturaleza cuasi judicial¹⁹⁸³ y rechazaron el establecimiento de una Corte similar a las existentes de los Sistemas Americano y Europeo¹⁹⁸⁴.

No fue sino hasta el año 1998, que los Estados Parte decidieron instituir la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, cuyo protocolo entró en vigencia hasta el año 2004 cuando 15 Estados lo ratificaron¹⁹⁸⁵. En adición, en 2008 se aprobó un nuevo protocolo (también conocido como Protocolo de Malabo)¹⁹⁸⁶, en el que se pretende unir la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Corte de

¹⁹⁸⁰ MORAN Aldana y Viviana Belia. 2012. *Sistema Africano de protección de los Derechos Humanos [en línea]*. Trabajo de tesis para la obtención del grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos profesionales de Abogada y Notaria. Guatemala, Universidad Rafael Landívar. Página 12. [Consulta: 10 de diciembre de 2020]. Disponible en: <http://biblio3.url.edu.gt/Tesis/2012/07/01/Moran-Belia.pdf>

¹⁹⁸¹ COMISIÓN de Derechos Humanos. S.F. *Op. Cit.*

¹⁹⁸² EVANS, Michael y Rachel Murray. 2008. *The African Charter on Human and People's rights: The System in Practice*. Segunda edición. Cambridge: Cambridge University Press. Página 180. Sin ISBN.

¹⁹⁸³ WITTE, Eric y Clair Duffy. 2018. Modelos de Justicia: Manual para el Diseño de Mecanismos de Responsabilización Penal para Crímenes Graves. En: Open Society Justice Initiative, página 151 [en línea]. Disponible en: <https://www.justiceinitiative.org/uploads/ee303f45-950e-437e-b54a-893d408ae867/options-justice-esp-anexo1-afrika-20180501.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁹⁸⁴ HENKIN. Louis. 2009. *Op. Cit.* Página 676.

¹⁹⁸⁵ CORTE Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. S.F. Establishment of the Court. En: *Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos* [en línea]. Disponible en: <https://en.african-court.org/index.php/about-us/establishment> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

¹⁹⁸⁶ UNIÓN Africana. S.F. *Protocolo de Reforma del Protocolo del Estatuto de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos*.

Justicia de la Unión Africana¹⁹⁸⁷, no obstante, el mismo no ha entrado en vigencia, por lo que en este trabajo solo se analizarán las disposiciones vigentes de conformidad con el Protocolo de creación de 1998.

A criterio de la autora, los pocos Estados que han ratificado y el tiempo que pasó desde su aprobación hasta su entrada en vigencia y su unión con la Corte de Justicia de la Unión Africana, son una clara muestra del escepticismo y al mismo tiempo temor de los Estados de que este tipo de órgano de control interfiera en “asuntos internos” y “vulnera su soberanía”, utilizándola como una excusa para no comprometerse en la vigencia y respeto de los derechos humanos.

4. TIPO DE GOBIERNO ¿DEMOCRACIA?

Sobre la estructura de la Comisión, el artículo 31 de la Carta establece que *“constará de once miembros escogidos entre personalidades africanas de la máxima reputación, conocidas por su gran moralidad, integridad, imparcialidad y competencia en materia de derechos humanos de los pueblos...”*¹⁹⁸⁸ y *“serán elegidos en votación secreta por la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, de una lista de personas designadas por los Estados firmantes de la presente Carta”*¹⁹⁸⁹, cada Estado podrá proponer a dos personas, de las cuales una podrá ser de nacionalidad distinta¹⁹⁹⁰. Cada Comisionado durará en el cargo 6 años, y podrá ser reelegido¹⁹⁹¹.

En relación a la toma de decisión, de conformidad con las Reglas de Procedimiento de la Comisión, se da prioridad al consenso¹⁹⁹²; sino puede llegarse a un acuerdo se realizará una votación a viva voz¹⁹⁹³ (salvo en la elección de Presidente y Vicepresidente¹⁹⁹⁴) y las decisiones se adoptarán por mayoría¹⁹⁹⁵. En caso de empate, el voto del presidente será decisivo¹⁹⁹⁶.

¹⁹⁸⁷ UNIÓN Africana. S.F. *Óp. Cit.*

¹⁹⁸⁸ Ídem. Artículo 31.1.

¹⁹⁸⁹ Ídem. Artículo 33.

¹⁹⁹⁰ Ídem. Artículo 34.

¹⁹⁹¹ Ídem. Artículo 36.

¹⁹⁹² COMISIÓN Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Regla 51.1. Reglas de Procedimiento de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

¹⁹⁹³ Ídem. Regla 53.1.

¹⁹⁹⁴ Ídem. Regla 11.2.

¹⁹⁹⁵ Ídem. Regla 52.1.

¹⁹⁹⁶ Ídem. Regla 51.3.

Por su parte, la Corte estará integrada por 11 Jueces¹⁹⁹⁷ electos por la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno¹⁹⁹⁸; los candidatos serán propuestos por los Estados Parte, quienes podrán presentar hasta 3 aspirantes, de los cuales 2 deberán ser nacionales del Estado proponente¹⁹⁹⁹. Al igual que en el caso de los Comisionados, serán electos por un período de 6 años, pudiendo ser reelegidos²⁰⁰⁰. Llama la atención y se debe destacar que el Protocolo pide a los Estados propiciar la igualdad de género en la elección de Jueces²⁰⁰¹.

Para la toma de decisiones, sigue los mismos parámetros de la Comisión, adoptando resoluciones con el voto de la mayoría²⁰⁰² y si existiere un empate el voto del presidente será decisivo²⁰⁰³; también en el caso de la elección del presidente el voto será de forma secreta²⁰⁰⁴.

Es importante mencionar que con el protocolo de 2008 y su enmienda del año 2014 (Protocolo de Malabo), tanto la integración, elección y forma de toma de decisiones cambiará²⁰⁰⁵. De ser un órgano especializado, pasará a ser una de las tres secciones de la Corte²⁰⁰⁶. Además, los Jueces se elegirán por un período no renovable de 9 años²⁰⁰⁷, también se introdujo cambios en cuanto a la toma de decisiones en materia de Derechos Humanos donde el quorum se reduce a 3 Jueces.²⁰⁰⁸ Sin embargo, se mantiene el poder de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno con relación a la elección de Jueces y la propuesta por parte de los Estados²⁰⁰⁹.

Como se puede observar, la elección de los miembros tanto de la Comisión como de la Corte, depende exclusivamente de la Conferencia de Jefes de Estado y de

¹⁹⁹⁷ UNIÓN Africana. S.F. *Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre el establecimiento de la Corte Africana*. Artículo 11.

¹⁹⁹⁸ Ídem. Artículo 14.

¹⁹⁹⁹ UNIÓN Africana. S.F. *Óp. Cit.* Artículo 12.

²⁰⁰⁰ Ídem. Artículo 15.

²⁰⁰¹ Ídem. Artículo 14.3.

²⁰⁰² COMISIÓN Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos Regla 60.3.

²⁰⁰³ Ídem. Regla 60.4.

²⁰⁰⁴ Ídem. Regla 10.2.

²⁰⁰⁵ AMNISTÍA Internacional. 2017. *Malabo Protocol: legal and institutional implications of the merged and expanded African Court snapshots*. En: Amnistía Internacional [en línea] Disponible en: <https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR0161372017ENGLISH.PDF> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

²⁰⁰⁶ UNIÓN Africana. *Protocolo de creación de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos (Reformado por el Protocolo de Enmiendas)* Artículo 16.

²⁰⁰⁷ Ídem, Artículo 8.

²⁰⁰⁸ Ídem. Artículo 21.

²⁰⁰⁹ Ídem. Artículos 6 y 7.

Gobierno, es decir los Estados Partes. En lo relacionado a la toma de decisiones, ambos optan por sistemas “democráticos” de votación, donde Comisionados y Jueces tienen derecho de exponer sus razones.

En cuanto a los Estados que ratificaron la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos la mayoría han estado regidos por gobiernos democráticos o en una transición a esta²⁰¹⁰.

5. ¿ESTADO DE DERECHO?

Se ha dejado claro con anterioridad, que en la primera propuesta de Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos elaborada en el seminario de Mordovia en 1979, existía una gran preocupación ante los diferentes regímenes políticos de sus Estados, incluyendo los casos en que gobernaba un solo partido político, gobiernos militares y autoritarios²⁰¹¹.

La Carta fue aprobada en el año 1981, sin que los Estados hubieran resuelto del todo sus situaciones políticas, que en muchos de sus Estados se mantuvieron hasta el año 1998 que se aprobó el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre el establecimiento de la Corte Africana²⁰¹².

En ese sentido, no podemos denominar a los Estados Miembros del Sistema africano como “Estados de Derechos”, pero si como uno de los objetivos de este sistema el ayudarlos a conseguirlo²⁰¹³.

6. ¿ORIGEN BASADO EN CIERTAS SUPOSICIONES O CONDICIONES FÁCTICAS?

Del relato sobre el establecimiento de la Comisión y Corte, se puede observar que el Sistema Africano de protección de Derechos Humanos, se presenta como una

²⁰¹⁰. TATTENBACH Yglesias, Cristián. S.F. *Óp. Cit.*

²⁰¹¹ Ver apartado no. 1. ¿Por qué y para qué fue creado?

²⁰¹² MOGHALU, Kingsley. 2019. De continente sin esperanza al auge de África en solo 10 años. En: *Vanguardia Dossier* [en línea]. Disponible en: <https://www.lavanguardia.com/vanguardia-dossier/20191112/471554847195/africa-crecimiento-pib-desigual-globalizacion.html> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

²⁰¹³ KABASHA, Gaétan. S.F. La situación de los Derechos Humanos en África. En: *Democresía* [en línea]. Disponible en: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2N0zCxfUoqQJ:https://democresia.es/tag/africa/+&cd=3&hl=es-419&ct=clnk&gl=gt&client=safari> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

reacción a los procesos de descolonización, los conflictos armados internos y situaciones como el apartheid²⁰¹⁴, todo esto bajo la observación atenta y apoyo de la comunidad internacional.

7. DOCUMENTO DE CREACIÓN

El Sistema Africano de Derechos Humanos sigue el modelo del Sistema Interamericano²⁰¹⁵, es decir, tiene dos órganos de control, Comisión²⁰¹⁶ y Corte²⁰¹⁷.

Inicialmente, la Carta únicamente contemplaba un órgano de control, pues no incluía un sistema contencioso (Corte) sino únicamente la resolución de conflictos basado en la negociación y conciliación²⁰¹⁸. Es así como la Comisión fue creada a través de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos²⁰¹⁹, y la Corte a través del Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre el establecimiento de la Corte Africana en el año 1998 (entró en vigencia en 2004)²⁰²⁰. Es decir, existen dos documentos creadores, la Carta y su protocolo.

En 2014 se emitió una enmienda al Protocolo de creación, la cual entró en vigencia en el año 2019, en la que se unió la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Corte de Justicia de la Unión Africana²⁰²¹. Aún se encuentra en período de transición, por lo que muchos de los procedimientos aún se desarrollan bajo las normas del anterior Protocolo. Con este cambió, se le resta importancia a la materia de los Derechos Humanos, pues pasa de ser un organismo autónomo e independiente en la materia, a ser una sección reducida en otro órgano jurisdiccional regional²⁰²².

²⁰¹⁴ Ver apartado no. 1 ¿Por qué y para qué fue creado?

²⁰¹⁵ MORAN Aldana, Belia Viviana. 2012. *Óp. Cit.* Página 75.

²⁰¹⁶ UNIÓN Africana. S.F. *Óp. Cit.* Artículo 30.

²⁰¹⁷ Ídem. Artículo 1.

²⁰¹⁸ HENKIN, Louis. 2009. *Óp. Cit.* Página 676.

²⁰¹⁹ WITTE, Eric. 2018. *Óp. Cit.*

²⁰²⁰ Ídem. Página 155.

²⁰²¹ UNIÓN Africana. 2008. *Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights*. 01.

²⁰²² AMNISTÍA Internacional. 2017. *Óp. Cit.*

8. MANDATO

Al igual que con el documento de creación, el mandato de la Comisión está contenido en la Carta, mientras que el mandato de la Corte está contenido en el Protocolo que le dio vida.

Tal y como se establece en el artículo 45 de la Carta de Banjul, el mandato de la Comisión es:

1. *“Promover los derechos humanos y de los pueblos, y en especial:*
 - a. *recopilar documentos, emprender estudios e investigar los problemas africanos en materia de derechos humanos y de los pueblos, organizar seminarios, simposios y conferencias, difundir información, alentar a las instituciones nacionales y locales interesadas en los derechos humanos y de los pueblos, y, en su caso, dar sus opiniones o hacer recomendaciones a los gobiernos;*
 - b. *formular y establecer principios y normas destinados a resolver problemas legales relativos a los derechos humanos y de los pueblos y a las libertades fundamentales en los que los gobiernos africanos puedan basar sus legislaciones.*
2. *Garantizar la protección de los derechos humanos y de los pueblos en las condiciones establecidas por la presente Carta.*
3. *Interpretar todas las disposiciones de la presente Carta a petición de un Estado firmante, de una institución de la OUA o de una organización africana reconocida por la OUA.”*²⁰²³

Por su parte, la Corte tiene un mandato limitado, con una naturaleza complementaria a la labor de la Comisión²⁰²⁴, conociendo aquellos casos que por esta sean referidos para la interpretación y aplicación de la Carta, Protocolos e instrumentos en materia de Derechos Humanos ratificados por los Estados Parte²⁰²⁵.

²⁰²³ UNIÓN Africana.S.F. Óp. Cit. Artículo 45.

²⁰²⁴ Ídem. Artículo 2.

²⁰²⁵ Ídem. Artículo 3.

A. OBJETIVOS

Los preámbulos de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, sirven como un guía para los temas que son de interés. La Carta fue concebida como un dispositivo orientador de la especificidad de los problemas africanos pertinentes a los derechos humanos²⁰²⁶.

Es así como de los preámbulos de la Carta podemos colegir que el principal objetivo del Sistema Africano de protección de Derechos Humanos es “*alcanzar una vida mejor para los pueblos de África*”²⁰²⁷; esto incluye un elemento individual (derechos civiles y políticos), pero también una alta carga colectiva (relacionada con derechos económicos, sociales y culturales), siendo este un avance sobre los otros sistemas regionales.

B. ALCANCES DEL MANDATO

A diferencia de los demás sistemas regionales, el Sistema Africano extiende su jurisdicción material a otros instrumentos en materia de Derechos Humanos, y no lo limita a la Carta Africana y sus protocolos²⁰²⁸.

Con relación a la Comisión, la Carta determina como principios aplicables, que la Comisión podrá basar sus resoluciones en “legislación internacional sobre derechos humanos y de los pueblos.”²⁰²⁹ Lo anterior incluye, “instrumentos africanos referentes a los derechos humanos y de los pueblos, la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización para la Unidad Africana, la Declaración universal de los derechos humanos, otros instrumentos adoptados por las Naciones Unidas y por los países africanos en materia de derechos humanos y de los pueblos, así como en las disposiciones de los diversos instrumentos adoptados por departamentos especializados de las Naciones Unidas de los cuales los firmantes de la presente Carta sean miembros”²⁰³⁰. Como puede colegirse, el alcance es mucho más amplio que el de otros sistemas, pues no se limita a los instrumentos que emanan del Sistema

²⁰²⁶ FISCHER de Andrade, José. 1992. *Óp. Cit.* Página 465.

²⁰²⁷ Preámbulo 4. Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos

²⁰²⁸ MORAN Aldana, Belia Viviana. 2012. *Óp. Cit.* Página 47.

²⁰²⁹ Artículo 60. Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos.

²⁰³⁰ Artículo 60. *Óp. Cit.*

Africano, sino que lo extiende a los instrumentos del sistema universal que sean ratificados por los Estados miembros.

Por su parte, la Corte Africana incluye dentro de sus fuentes de derechos “cualquier otro instrumento en materia de Derechos Humanos que haya sido ratificado por el Estado en cuestión”²⁰³¹. Aunque de forma más sencilla, confirma lo establecido en el artículo 60 de la Carta, en el sentido que la Corte puede aplicar instrumentos del sistema universal en sus decisiones, ratificados por el Estado objeto de condena.

C. COMPETENCIA

El artículo 45 de la Carta, ya citado con anterioridad, establece las funciones y atribuciones de la Comisión; tal y como lo indica la propia Comisión en su portal electrónico²⁰³², su competencia puede resumirse en 4 puntos principales:

- a. Promoción de los Derechos Humanos y de los Pueblos²⁰³³;
- b. Protección de los Derechos Humanos y de los Pueblos²⁰³⁴;
- c. Interpretación de la Carta²⁰³⁵; y,
- d. Otras tareas asignadas por la Asamblea o los Estados²⁰³⁶.

En ejercicio de sus funciones, la Comisión realiza informes de país²⁰³⁷, informes temáticos, recibe comunicaciones de posibles víctimas²⁰³⁸ y otros Estados²⁰³⁹ sobre violaciones a Derechos Humanos.

²⁰³¹ UNIÓN Africana. S.F. *Óp. Cit.* Artículo 7.

²⁰³² COMISIÓN Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 2001. Mandate of the Commission. En: *Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos* [en línea]. Disponible en: <https://www.achpr.org/mandateofthecommission> [consulta: 10 de diciembre de 2020].

²⁰³³ UNIÓN Africana. S.F. *Óp. Cit.* Artículos 45.1

²⁰³⁴ Ídem. Artículo 45.2

²⁰³⁵ Ídem. Artículo 45.3

²⁰³⁶ Ídem. Artículo 45.4

²⁰³⁷ Ídem. Artículo 62.

²⁰³⁸ Ídem. Artículo 55.

²⁰³⁹ Ídem. Artículo 47.

Por su parte, la Corte se crea como un complemento a las funciones de la Comisión, en relación a los procedimientos de comunicaciones de posibles víctimas y otros Estados sobre incumplimientos o violaciones de Derechos Humanos²⁰⁴⁰.

El protocolo de creación de la Corte contempla, al igual que en el caso interamericano, una competencia contenciosa²⁰⁴¹ y otra consultiva²⁰⁴². La primera, relacionada con las comunicaciones remitidas por la Comisión; y la segunda, con los requerimientos que hagan los Estados con relación a la interpretación de la Carta,

D. REGLAS DE ADMISIBILIDAD

Para la admisión de comunicaciones ante la Comisión Africana, se deben examinar los aspectos siguientes:

- i. *Ratione Personae*: de conformidad con la guía para la presentación de comunicaciones ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, *“cualquier persona u organización no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros puede presentar su petición a la Comisión”*²⁰⁴³.
- ii. *Ratione Materiae*: como ya se indicó con anterioridad la materia de la petición o comunicación de transgresión debe establecer la violación de algún precepto de la Carta y otros instrumentos en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado en cuestión²⁰⁴⁴; *“así mismo, se requiere que no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional”*²⁰⁴⁵.
- iii. *Ratione Temporis*: a pesar que la Carta y las Reglas de procedimiento no establecen un período específico, la guía establecida por la Comisión hace relación a un “período razonable de tiempo”, desde la última notificación.²⁰⁴⁶

²⁰⁴⁰ UNIÓN Africana. S.F. *Óp. Cit.* Preámbulo 5.

²⁰⁴¹ Ídem. Artículo 3.

²⁰⁴² Ídem. Artículo 4.

²⁰⁴³ COMISIÓN Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. S.F. Hoja informativa no. 3. Communication Procedure. En: *Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos* [en línea]. Disponible en: <https://www.achpr.org/communications> [consulta: 10 de diciembre de 2020].

²⁰⁴⁴ Ídem.

²⁰⁴⁵ Ídem.

²⁰⁴⁶ Ídem.

- iv. Ratione Loci: las *“denuncias o quejas de violación deben ser perpetradas por un Estado parte”*²⁰⁴⁷.

Al igual que en los otros sistemas regionales, atendiendo al principio de subsidiaridad, deben haberse agotado los recursos internos previo a recurrir a la Comisión Africana²⁰⁴⁸. También, se establece la excepción al agotamiento de recursos internos, aunque de una forma más sencilla que en el Sistema Interamericano indicando que podrá omitirse ese requisito cuando *“sea obvio para la Comisión que el proceso de agotamiento de esos recursos sería demasiado largo”*²⁰⁴⁹.

Por su parte, para que una comunicación pueda llegar a conocimiento de la Corte, debe ser remitido por la Comisión, el Estado Parte que presento la comunicación ante la Comisión, el Estado Parte contra el que se presentó la comunicación, el Estado Parte cuyos ciudadanos sean víctimas de las violaciones de Derechos Humanos, y Organizaciones No Gubernamentales.²⁰⁵⁰

E. TIEMPO DETERMINADO

La propia Carta establece lo relacionado con la vigencia de sus disposiciones al establecer que *“será efectiva para ese Estado tres meses después de la fecha de presentación del instrumento de ratificación o adhesión por parte de ese Estado”*²⁰⁵¹.

Con relación a la Corte, el artículo 34 del Protocolo prevé la necesidad que los Estados reconozcan expresamente la competencia contenciosa de la Corte al adherirse al Protocolo²⁰⁵². Atendiendo a las normas de Derechos Internacional Público contenidas en la Convención de Viena, el tiempo determinado se limita a la vigencia tanto de la Corte como del Protocolo de creación de la Corte²⁰⁵³.

Por otra parte, es importante hacer mención que desde el año 2008, existe un Protocolo en el que se une la Corte de Justicia de la Unión Africana y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; no obstante, tanto el Protocolo de 2008

²⁰⁴⁷ UNIÓN Africana. S.F. *Óp. Cit.* Artículo 47.

²⁰⁴⁸ Ídem. Artículo 50.

²⁰⁴⁹ Ídem.

²⁰⁵⁰ Ídem. Artículo 5.

²⁰⁵¹ Ídem. Artículo 65.

²⁰⁵² Ídem. Artículo 34.

²⁰⁵³ NACIONES Unidas. 1969. *Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados*. Artículo 24 y 28.

como su enmienda de 2014, sigue sin entrar en vigencia por no haberse llegado al número requerido de países ratificantes para que esto suceda²⁰⁵⁴.

F. DISTRIBUCIÓN DEL PODER.

Como se analizó en el apartado sobre formas de gobierno, la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana tiene el poder para elegir a los Comisionados y Jueces del Sistema²⁰⁵⁵.

Los Estados Africanos han enfocado sus esfuerzos en el Derecho Penal Internacional, persecución individual de jefes de Estado que han cometido graves violaciones de Derechos Humanos, y es en ese ámbito donde la distribución de poder se ha hecho más evidente²⁰⁵⁶.

9. ¿SURGIÓ COMO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES?

A. ¿HABÍA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL?

Como se indicó con anterioridad, el sistema surge de la presión ejercida por la comunidad internacional²⁰⁵⁷, no se puede perder de vista que en el preámbulo de la Carta de Bajul, los Estados africanos reconocen la obligación de protección internacional de los derechos humanos, aunado a que estos Estados son signatarios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por medio de los cuales también adquirieron el compromiso de respetar los derechos humanos.

²⁰⁵⁴ JALLOH, Charles. 2019. *The Place of the African Court of Justice and Human and Peoples' Rights in the Prosecution of Serious Crimes in Africa*, JALLOH, Charles, Kamari M. Clarke y Vincent O. Nmeihille. Ed. *The African Court of Justice and Human and Peoples' Rights in context* [en línea]. Primera Edición. New York: Cambridge University Press. [Consulta: 10 de diciembre de 2020]. DOI: 10.1017/9781108525343. Disponible en: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/416534A44F3C6E177535B89FD8A1BFBB/9781108422734AR.pdf/The_African_Court_of_Justice_and_Human_and_Peoples_Rights_in_Context.pdf?event-type=FTLA

²⁰⁵⁵ Ver apartado no. 4. Tipo de Gobierno ¿Democracia?

²⁰⁵⁶ CABALLERO, Chema. 2015. El sueño de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos. En: *El País* [en línea]. Disponible en: https://elpais.com/elpais/2015/03/02/africa_no_es_un_pais/1425277380_142527.html [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

²⁰⁵⁷ Ver apartado no. 2 Papel de la comunidad internacional en su creación.

B. OBLIGACIONES INTERNACIONALES

De acuerdo al artículo 1 de la Carta, *“los Estados miembros de la Organización para la Unidad Africana firmantes de la presente Carta reconocerán los derechos, deberes y libertades contemplados en esta Carta y se comprometerán a adoptar medidas legislativas o de otra índole con el fin de llevarlos a efecto”*²⁰⁵⁸.

Como se ha mencionado, también supervisa el cumplimiento de otros instrumentos en materia de Derechos Humanos que hayan sido ratificados por el Estado en cuestión²⁰⁵⁹. Por lo que si surge a raíz de obligaciones internacionales adquiridas por cada uno de los Estados que componen la Unión Africana.

C. ¿ABORDA HECHOS ILÍCITOS INTERNACIONALES?

Si, al examinar la responsabilidad de los Estados Parte con relación a obligaciones en materia de Derechos Humanos²⁰⁶⁰, se traducen en comportamientos atribuibles a los Estados que constituyen una violación a las obligaciones internacionales.

10. COOPERACIÓN DE LOS ESTADOS.

Como se ha analizado, el sistema fue creado gracias a la presión internacional existente en su momento para que África contara con un sistema regional de protección de Derechos Humanos²⁰⁶¹. Los Estados Parte no han mostrado mayor interés en el desarrollo del sistema, lo que se ha visto reflejado en las pocas ratificaciones del Protocolo de creación de la Corte, y sus distintas modificaciones²⁰⁶².

No obstante, lo anterior, tanto la Comisión como la Corte en sus Reglas de Procedimiento, estableció algunos lineamientos con relación a la cooperación de los Estados.

²⁰⁵⁸ UNIÓN Africana. S.F. Óp. Cit. Artículo 1.

²⁰⁵⁹ Ver apartado no.6. B. Alcance del Mandato.

²⁰⁶⁰ UNIÓN Africana. S.F. Óp. Cit. “Artículo 47. Si un Estado firmante de la presente Carta tiene buenas razones para creer **que otro Estado firmante** de esta Carta ha violado las disposiciones de la misma, puede llamar la atención, mediante comunicado escrito de este Estado respecto al tema en cuestión” (las negrillas son propias).

²⁰⁶¹ Ver apartado no. 2 Papel de la comunidad internacional en su creación.

²⁰⁶² Ver apartado no. 1 ¿Para qué y por qué fue creado?

En las Reglas 62, 63 y 62 de la Comisión, se contempla la participación de los Estados en la participación de sesiones²⁰⁶³, discusiones de situaciones específicas en materia de Derechos Humanos ²⁰⁶⁴ y en cualquier otro mecanismo subsidiario de la Comisión²⁰⁶⁵.

La Corte establece con relación a la cooperación de los Estados, que los mismo tienen la obligación de cooperar y asegurar que todas las noticias, comunicaciones o citaciones dirigidas a personas en su territorio sean debidamente ejecutadas²⁰⁶⁶; además, también hace referencia a la cooperación relacionada con cualquier otra diligencia que deba ser ejecutada en los Estados²⁰⁶⁷, lo que abre la puerta para que la Corte pueda llevar acabo visitas u otros medias de investigación en el territorio de un Estado Parte.

11. INDEPENDENCIA

Tal y como sucede en el Sistema Interamericano, el Sistema Africano también tiene dependencia económica de la Organización de sus Estados Miembros²⁰⁶⁸. Lo anterior, condiciona considerablemente la independencia de la Comisión y Corte²⁰⁶⁹.

Por otra parte, existe un control férreo por parte de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, a quienes tanto la Comisión y la Corte reportan los casos de incumplimiento a sus decisiones sin que exista una consecuencia concreta²⁰⁷⁰.

12. SELECCIÓN DE ACTORES

Los actores que participan en el proceso de la misma manera que los otros Sistemas regionales de protección, la Comisión Africana evalúa los casos presentados por los peticionarios y si la petición está apegada a los criterios de admisibilidad inicia su trámite, esto se traduciría en cierta objetividad para elegir los casos, así como el

²⁰⁶³ CORTE Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. S.F. *Óp. Cit.* Regla 62.

²⁰⁶⁴ Ídem. Regla 63.

²⁰⁶⁵ Ídem. Regla 64.

²⁰⁶⁶ Ídem. Regla 32.

²⁰⁶⁷ Ídem.

²⁰⁶⁸ UNIÓN Africana. S.F. *Óp. Cit.* Artículo 44.

²⁰⁶⁹ FISCHER de Andrade, José. 1992. *Óp. Cit.* Página 483.

²⁰⁷⁰ GOMEZ, Isa. S.F. Sistema Africano de Derechos Humanos. En: *Corte Interamericana de Derechos Humanos* [en línea] Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33357.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

Estado violador de derechos humanos, pese a que existen criterios estandarizados para esto, no significa que la evaluación sea infalible y que en determinado momento por intereses políticos se tramiten casos en contra de determinados Estados.

13. NORMATIVA RELEVANTE Y MARCO PROCEDIMENTAL

Sobre la normativa relevante, el instrumento principal y fundamental del Sistema Africano es la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Como se mencionó con anterioridad, la competencia de sus órganos de control se expande a instrumentos del Sistema Universal que hayan sido ratificados por los Estados Partes, entre los cuales resaltan Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales²⁰⁷¹, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, entre otras.

Igualmente, en el marco de la Unión Africana se han adoptado protocolos a la Carta con relación a Adultos Mayores y Derechos de la Mujer; además también se han aprobado otros instrumentos relacionados con los Derechos de la Niñez, Democracia y Refugiados²⁰⁷².

Con relación al marco procedimental, la Comisión cuenta con Reglas de Procedimiento que desarrollan con mayor detalle lo establecido en la Carta²⁰⁷³. Por su parte, la Corte también adoptó sus propias reglas, en complemento a lo establecido en su Protocolo de creación²⁰⁷⁴.

14. LEGITIMIDAD:

Como ya se ha indicado, son pocos los Estados del Continente Africano que han ratificado el Protocolo de creación de la Corte, lo que da la idea que existe poca credibilidad en el Sistema²⁰⁷⁵. Si a esto se le suma el número reducido de casos que

²⁰⁷¹ SOCIAL & Economic Rights Action Center & The Center for Economic & Social Rights v. 2001. *Nigeria African Commission on Human and Peoples' Rights*, Communication 155/96, 15th Annual Activity Report.

²⁰⁷² COMISIÓN Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. S.F. Resources. En: *Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos* [en línea]. Disponible en: <https://www.achpr.org/resources> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

²⁰⁷³ Aprobadas por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, 2010. *durante su 47th sesión ordinaria celebrada en Banjul* (Gambia), Mayo 12 al 26, 2010

²⁰⁷⁴ Aprobadas por la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos el 2 de junio de 2010.

²⁰⁷⁵ Ver apartado no. 6 Mandato.

han sido resueltos y la mora en el trámite de las comunicaciones le han restado legitimidad tanto a la Comisión como a la Corte²⁰⁷⁶.

Como lo menciona Gómez, *“el Sistema Africano presenta unos mecanismos tremendamente débiles, con poderes muy limitados de la Comisión Africana y con un control por parte de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno”*²⁰⁷⁷. En el mismo sentido, *“ha demostrado no ser demasiado eficaz para afrontar las violaciones y erradicar la impunidad y sus carencias en cuanto al reconocimiento de diversos derechos han dejado desprotegidas a muchas víctimas”*²⁰⁷⁸.

Ante el poder que ejerce Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, el poco interés/voluntad de los Estados de fortalecer el sistema, y la poca capacidad de los órganos de control establecidos, la legitimidad del sistema es reducida.

15. JURISDICCIÓN

Como se indicó en el apartado de Mandato, la jurisdicción de los órganos de control del Sistema Africano se extiende a los Estados que han ratificado la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; esta jurisdicción es más limitada para la Corte, pues únicamente podrá conocer casos de aquellos Estado que hayan ratificado el protocolo y reconocido expresamente la competencia de la institución²⁰⁷⁹.

Dentro de sus reglas, la Corte hace mención a que su jurisdicción incluye la resolución de casos sometidos por la Comisión, emitir opiniones consultivas que le sean solicitadas, promover soluciones amistosas, interpretar y revisar sus propias resoluciones²⁰⁸⁰.

²⁰⁷⁶ CENTRE for Human Rights, 2016. Faculty of Law, University of Pretoria. A guide to the African human rights system. En: *Centre for Human Rights* [en línea]. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/31712.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

²⁰⁷⁷ GOMEZ, Isa. S.F. *Óp. Cit.*

²⁰⁷⁸ LAKARRA Etxebarria, Jone. 2013. El sistema regional de protección de derechos humanos en África: avances y deficiencias. Departamento de Derechos Internacional Público, Relaciones Internacionales e Historia del Derecho. En: *Ensayos y trabajos: Número 16* [en línea]. Disponible en: <http://www.dipriihd.ehu.es/revistadoctorado/n16/Lakarra16.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

²⁰⁷⁹ Ver apartado no. 6 Mandato.

²⁰⁸⁰ CORTE Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. S.F. *Óp. Cit.* Regla 26.

A. ¿QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE DE UN CASO?

Las Reglas de Procedimiento de la Comisión en su capítulo XIV contemplan la participación de Estados Parte ²⁰⁸¹, Instituciones Intergubernamentales ²⁰⁸², Instituciones Nacionales de Derechos Humanos ²⁰⁸³, Organizaciones No Gubernamentales ²⁰⁸⁴, y otros socios. También se permite la participación de individuos, víctimas de violaciones de derechos humanos²⁰⁸⁵.

Por su parte, con relación al procedimiento ante la Corte tanto el Protocolo de su creación como sus reglas contemplan la participación de la Comisión, Estados Parte (denunciados, denunciadores o cuyos ciudadanos sean víctimas de violaciones de Derechos Humanos), Organizaciones No Gubernamentales e individuos que se hayan constituido como Parte ante la Comisión²⁰⁸⁶; todos estos podrán promover que el caso sea conocido por la Corte.

Además, las Reglas de la Corte también permiten la participación de testigos y expertos, como evidencia para probar lo afirmado por las Partes²⁰⁸⁷. Las víctimas serán representadas por abogado u ONG reconocidas por el país cuestionado.

B. ¿QUÉ PROBLEMAS SE PUEDEN DEBATIR?

Tal y como se ha mencionado a lo largo del presente capítulo, los problemas que tanto la Comisión como la Corte pueden debatir, deben estar relacionados con violaciones a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, así como cualquier otro instrumento en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado en cuestión²⁰⁸⁸.

²⁰⁸¹ CORTE Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. S.F. *Óp. Cit.* Reglas 62, 63 y 64.

²⁰⁸² Ídem. Regla 62, 63 y 66.

²⁰⁸³ Ídem. Regla 62, 63 y 67.

²⁰⁸⁴ COMISIÓN Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. S.F. *Óp. Cit.* Regla 62, 63 y 68.

²⁰⁸⁵ Ídem. Reglas 62 y 63.

²⁰⁸⁶ CORTE Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. S.F. *Óp. Cit.* Regla 33.

²⁰⁸⁷ Ídem. Regla 45.

²⁰⁸⁸ Ver apartado no. 6.B Alcances del Mandato.

16. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN:

Como se hizo referencia con anterioridad, las Reglas de Procedimiento de la Comisión y la Corte establecen que las Partes (Estados, ONGs, individuos y otras instituciones) tienen diferentes oportunidades para pronunciarse en los procesos ante dichos organismos.

Sin embargo, específicamente en el procedimiento ante la Corte, aunque sus resoluciones no son sujetas a apelación²⁰⁸⁹, si pueden emplearse dos mecanismos con posterioridad a su notificación.

El primero es la revisión de un fallo, cuando existan nueva evidencia²⁰⁹⁰. De conformidad con las Reglas de la Corte, si de la solicitud se logra determinar la procedencia de la revisión, se tomarán las medidas necesarias para llevar a cabo un nuevo procedimiento (audiencias y resolución)²⁰⁹¹.

El segundo es que la Corte está facultada para interpretar sus propias resoluciones²⁰⁹². La solicitud de interpretación deberá ser presentada dentro de los 12 meses posteriores a la notificación de la resolución, y de considerarse necesario podrá emitirse una resolución, para la cual la Corte deberá integrarse con los mismos jueces que emitieron la resolución que se solicitó ser interpretada²⁰⁹³.

17. MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO

La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos no contempla un mecanismo específico para el cumplimiento de las resoluciones de la Comisión. En las Reglas de procedimiento si se hace referencia a el *“incumplimiento de las decisiones de la Comisión, en cuyo caso se remitirá un informe al Subcomité de Representantes Permanentes y al Comité Ejecutivo para la Implementación de decisiones de la Unión Africana”*²⁰⁹⁴.

²⁰⁸⁹ CORTE Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. S.F. *Óp. Cit.* Artículo: 28.2.

²⁰⁹⁰ Ídem. Artículo 28.3.

²⁰⁹¹ CORTE Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. S.F. *Óp. Cit.* Regla 67.

²⁰⁹² CORTE Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. S.F. *Óp. Cit.* Artículo 28.4.

²⁰⁹³ CORTE Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. S.F. *Óp. Cit.* Regla 66.

²⁰⁹⁴ Ídem. Regla 112.8.

Contrario a las “*resoluciones de la Comisión, en el Protocolo de Creación de la Corte si se establece que los Estados se comprometen a cumplir con las resoluciones emitidas por este órgano*”²⁰⁹⁵, es decir, les da un carácter vinculante; no obstante, su mecanismo de cumplimiento también se limita a la emisión de un reporte a la Asamblea de la Unión Africana²⁰⁹⁶.

18. RECURSOS DISPONIBLES

A. HUMANO:

La Comisión Africana, formada por 11 comisionados elegidos por la Asamblea de la Unión Africana entre los expertos designados por los estados parte de la Carta, elegidos por un período de dos años y son elegibles para la reelección una vez. Esta es presidida por presidente y vicepresidente elegido entre sus miembros de la mesa de la Comisión. La Corte Africana de Derechos Humanos se compone de 11 jueces electos para un periodo de 6 años.²⁰⁹⁷

B. MATERIAL:

La biblioteca de la Comisión Africana a 2020, cuenta con 3,369 libros disponibles además de la siguiente cantidad de documentos 274 reportes intercesiones, 75 reportes de misiones, 432 resoluciones, 231 decisiones sobre comunicaciones, 32 declaraciones sobre la situación de los derechos humanos en África, 103 observaciones finales, 119 reportes de Estado, 216 memoria de sesiones, 504 comunicados de prensa, 4 anuncios, 27 memoria de eventos, 168 noticias.²⁰⁹⁸

La biblioteca de la Corte Africana cuenta con catálogo de acceso público para sus usuarios, además con 60 discursos, 5 videos, 679 fotos, 109 noticias, 20 reportes de

²⁰⁹⁵ CORTE Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. S.F. *Óp. Cit.* Artículo 30.

²⁰⁹⁶ Ídem. Artículo 31.

²⁰⁹⁷ COMISIÓN Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. S.F. *Estructura de la Comisión*, Página: 1. En: Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. [en línea]. Disponible en: <https://www.achpr.org/structure> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

²⁰⁹⁸ COMISIÓN Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. S.F. *Biblioteca en línea de la Comisión Africana*, Página: 1. En: Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos [en línea]. Disponible en: <http://achpr.misijaweb.com/> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. S.F. *Centro de Documentación*, Página: 1. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://www.achpr.org/documentationcenter>.

actividades anuales, 7 reportes de diferentes tipos, 2 reportes anuales de la situación de los derechos humanos en África.²⁰⁹⁹

C. PRESUPUESTO ASIGNADO:

De conformidad con el Artículo 44 de la Carta de Derechos Humanos y de los Pueblos, el presupuesto para los miembros de la Comisión proviene del presupuesto ordinario de la Organización para la Unidad Africana. Además, el plan estratégico de la Comisión para el período 2015- 2019 establece que la manera de obtener financiamiento de la Unión Africana se debe expandir progresivamente en su monto y eliminar todos los procedimientos burocráticos internos que inhiben el acceso a la financiación de esta. También la coordinación de donantes es crucial para la utilización rentable de los escasos recursos.²¹⁰⁰

El presupuesto asignado a la Corte para 2019 es de US \$ 13,992,891, que comprende \$ 13,045,445 un 93.23% proviene de los Estados Miembros y \$ 947,445 que conforma el 6.77% restante proviene de Socios internacionales. La ejecución total del presupuesto al 31 de diciembre de 2019 fue de \$ 12,757,670 lo que representa una tasa de ejecución presupuestaria del 91.2%. al 31 de diciembre de 2019 el Tribunal recibió subvención para el año 2019 (por 4 trimestres) por un monto de US \$7,603,978 de los Estados Miembros y \$ 529,096 de los Socios.²¹⁰¹

19. EL PAPEL DE LA VÍCTIMA:

Como se analizó con anterioridad, la víctima participa en cada una de las etapas del proceso, desde la presentación de comunicación ante la Comisión para que esta luego de la evaluación si lo considera pertinente la presente a la Corte²¹⁰², hasta las audiencias ante la Corte²¹⁰³.

²⁰⁹⁹ CORTE AFRICANA de Derechos Humanos y de los Pueblos. S.F. *Información general de la Biblioteca*, Página: 1. En: Corte Africana de Derechos Humanos [en línea]. Disponible en: <https://www.african-court.org/en/index.php/library/general-information>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

²¹⁰⁰ COMISIÓN Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. S.F. *Óp. Cit.* Artículo 44 y Plan Estratégico, Página 32. En: Comisión Africana de Derechos Humanos [en línea]. Disponible en: <https://www.achpr.org/> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

²¹⁰¹ CORTE Africana de Derechos Humanos, S.F. *Óp. Cit.* Página 10.

²¹⁰² UNIÓN Africana. S.F. *Óp. Cit.* Artículo 55.

²¹⁰³ CORTE Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. S.F. *Óp. Cit.* Reglas 27, 29, 33, 34 y 44.

20. PERCEPCIÓN PÚBLICA:

Como se puede establecer con base en lo analizado, la percepción pública es de un sistema débil y bajo la marcada influencia de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno²¹⁰⁴.

La mayoría de autores coinciden en que el sistema no es eficaz²¹⁰⁵ o puede considerarse como blando²¹⁰⁶.

21. NÚMERO DE CASOS INGRESADOS

La Comisión en su primer año de funcionamiento no recibió ninguna tarea o acción para su ejecución de un Estado parte, una institución de la Organización para la Unidad Africana o la Asamblea de Jefes de Estado y gobierno.²¹⁰⁷

El primer año de establecimiento de la Corte, en 2004, está no recibió casos sino se dedicó a la elección de sus miembros, a dictar sus reglas de procedimiento y prueba.²¹⁰⁸

En el período de 1997-1998 la Comisión recibió 72 denuncias.²¹⁰⁹ Durante el período del año 2008 la Comisión recibió 80 comunicaciones.²¹¹⁰

²¹⁰⁴ Ver apartado no. 12. Legitimidad.

²¹⁰⁵ LAKARRA Etxebarria, Jone. 2013. *Óp. Cit.*

²¹⁰⁶ BERMEJO García, Romualdo. 2012. Los Derechos Humanos en África. En: *Anuario Español de Derecho Internacional* [en línea]. España: Anuario Español de Derecho Internacional, Vol. 28. Página 46. [Consulta: 10 de diciembre de 2020]. ISSN 0212-0747. Disponible en: <https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/anuario-esp-dcho-internacional/article/viewFile/2531/2404>

²¹⁰⁷ COMISIÓN Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 1988. Informe anual de actividades de 1988. Página: 4. En: *Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos* [en línea]. Disponible en: <https://www.achpr.org/activityreports/viewall?id=1> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

²¹⁰⁸ CORTE Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 2004. Informe de actividades 2004, Página: 2. En: *Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos* [en línea]. Disponible en: <https://www.african-court.org/en/images/Activity%20Reports/EXECUTIVE%20COUNCIL%20Fifth%20Ordinary%20Session%2025%20June%20%203%20July%202004%20Addis%20Ababa%20ETHIOPIA%20PROGRESS%20REPORT%20OF%20THE%20CHAIRPERSON%20ON%20THE%20OPERATIONALIZATION%20OF%20THE%20AFRICAN%20COURT%20ON%20HUMAN%20AND%20PEOPLES.pdf>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

²¹⁰⁹ COMISIÓN Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 1998. Informe anual de actividades de 1998, Página 11. En: *Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos* [en línea]. Disponible en: <https://www.achpr.org/activityreports/viewall?id=11>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

²¹¹⁰ COMISIÓN Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 2008. Informe anual de actividades de 2008, Página 73. En: *Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos* [en línea]. Disponible en: <https://www.achpr.org/activityreports/viewall?id=23>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

En el año 2019, la comisión registró 238 comunicaciones pendientes.²¹¹¹

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, el Tribunal recibió 54 casos nuevos. Desde su creación en 2006, la Corte ha recibido un total de 248 solicitudes en asuntos contenciosos y 13 solicitudes de Opinión asesora. El Tribunal tiene un total de 177 solicitudes y una 1 Solicitud de Opinión Consultiva pendiente de resolver.²¹¹²

22. NÚMERO DE CASOS RESUELTOS

La Comisión en su primer año de funcionamiento no recibió ninguna tarea o acción para su ejecución de un Estado parte, una institución de la Organización para la Unidad Africana o la Asamblea de Jefes de Estado y gobierno.²¹¹³

El primer año de establecimiento de la Corte, en 2004, está no recibió casos porque estaba en el proceso de elección de sus miembros, definición de sus reglas de procedimiento y prueba.²¹¹⁴

En el período de 1997-1998 tomó una decisión sobre 04 de las puestas a su consideración, para los 68 restantes dictaminó sobre su admisibilidad.²¹¹⁵

Durante el período de 2008-2010 solamente recibió una solicitud de fecha 7 de octubre de 2008.²¹¹⁶

²¹¹¹ COMISIÓN Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 2019. Informe anual de actividades de 2019, Página 10. En: *Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos* [en línea]. Disponible en: <https://www.achpr.org/activityreports/viewall?id=51>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

²¹¹² CORTE Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 2019. *Óp. Cit.* Página 3-4. En: *Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos* [en línea]. Disponible en: <https://www.african-court.org/en/images/Activity%20Reports/EN%20-%20EX%20CL%201204%20AFCHPR%20ACTIVITY%20REPORT%20JANUARY%20-%20DECEMBER%202019.pdf>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

²¹¹³ COMISIÓN Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 1998. *Óp. Cit.* Página: 4.

²¹¹⁴ CORTE Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 2004. Informe de actividades 2004, Página: 2. En: *Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos* [en línea]. Disponible en: <https://www.african-court.org/en/images/Activity%20Reports/EXECUTIVE%20COUNCIL%20Fifth%20Ordinary%20Session%2025%20June%20%203%20July%202004%20Addis%20Ababa%20ETHIOPIA%20PROGRESS%20REPORT%20OF%20THE%20CHAIRPERSON%20ON%20THE%20OPERATIONALIZATION%20OF%20THE%20AFRICAN%20COURT%20ON%20HUMAN%20AND%20PEOPLES.pdf>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

²¹¹⁵ COMISIÓN Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 1998. *Óp. Cit.*

²¹¹⁶ CORTE Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 2010. Informe anual de actividades de 2010, Página: 4. En: *Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos* [en línea]. Disponible en: <https://www.african-court.org/en/images/Activity%20Reports/EXECUTIVE%20COUNCIL%20Sixteenth%20Ordinary%20Session%2025%20%2029%20January%202010%20Addis%20Ababa%20Ethiopia%20REPORT%20O>

La Comisión tomó en el año 2008 decisión sobre las comunicaciones recibidas de la siguiente manera: 7 sobre incautación; 44 sobre admisibilidad; 28 por méritos; y 1 en revisión; adoptó decisiones sobre el fondo de 3 comunicaciones.²¹¹⁷

Durante el año 2019 la Comisión conoció 10 Comunicaciones, 2 de los cuales se les concedió medidas provisionales; decidió no ordenar captura en 1; declaró 2 admisibles y seis 6 inadmisibles; decidió un caso de fondo; archivo 4 comunicaciones por falta de enjuiciamiento diligente; concedió 1 solicitud de retiro; difirió 6 comunicaciones en varias etapas; y brindó orientación a la Secretaría sobre 1 comunicación para la cual se solicitó su opinión. La Comisión también tomó varias decisiones sobre las cuestiones que le fueron remitidas en el marco de las comunicaciones que se estaban considerando: 1 relacionada con una audiencia oral, 1 sobre una solicitud de recusación y 1 sobre una solicitud de revisión.²¹¹⁸

Durante el 2019 el Tribunal emitió 28 sentencias sobre jurisdicción y admisibilidad; sobre reparaciones y en revisión, así como emitió 27 órdenes.²¹¹⁹

23. ANÁLISIS CUALITATIVO:

El legado más significativo de este sistema, es la inclusión de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales dentro de su norma creadora, y además el hacerlo dentro del Mandato de sus órganos de control²¹²⁰. Como lo menciona Abdelhamid Adnane Rkioua, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos se considera el único instrumento regional que incluye tanto derechos individuales, como colectivos²¹²¹.

[F%20THE%20AFRICAN%20COURT%20ON%20HUMAN%20AND%20PEOPLES%20RIGHTS.pdf](#). [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

²¹¹⁷ COMISIÓN Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 2008. *Óp. Cit.*

²¹¹⁸ Ídem Página: 10

²¹¹⁹. Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 2010 *Óp. Cit.* Página 3-4.

²¹²⁰ GOMES, Isa. S.F. *Óp. Cit.*

²¹²¹ ABDELHAMID Adnane Rkioua. 2012. Los Derechos Sociales en la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. En: LEX SOCIAL-Revista de los Derechos Sociales núm. 1/2012 [en línea], Disponible en: https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/view/268 [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

Aunque algunas de sus resoluciones han sido pioneras en cuanto al incumplimiento de Derechos Colectivos²¹²², la debilidad de sus mecanismos de cumplimiento opaca su legado en esta materia²¹²³.

Es evidente la falta de voluntad de los Estados del continente africano para el establecimiento de un sistema fuerte de protección de Derechos Humanos. Como se ha desarrollado a la largo del presente capítulo, desde sus inicios se pretendió el establecimiento de un solo órgano de control con pocos mecanismos para promover y proteger a los habitantes de África contra violaciones a sus derechos fundamentales.

Aunque se han llevado a cabo esfuerzos para el establecimiento de una Corte que conozca de incumplimientos a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y otros instrumentos de la materia, son pocos los Estados que han ratificado su Protocolo de creación, y aún menos quienes realmente apoyan su labor.

Luego de este estudio analítico en los aspectos que a mi juicio consideré de mayor relevancia, se puede establecer que el Sistema Africano de Protección de los Derechos Humanos y de los Pueblos no ha sido efectivo, debido a que no ha podido trabajar a plenitud por la resistencia de los Estados africanos.

²¹²² COMISIÓN Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, 2002. *Caso Ogoni Vs. Nigeria*, Comunicación 155/96. Decisión de 27 de mayo de 2002.

²¹²³ Ver aparatado no. 15. Mecanismos de cumplimiento

A continuación, se presenta de forma gráfica y sintética el trabajo realizado por el Sistema Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos.

		Mandato	Duración del Mandato	Cesación de los hechos que originaron el mandato	Inicio del primer juicio	Universo de casos	Casos procesados y/o relaciones procesales	Tiempo promedio de los casos	Casos pendientes de resolución	% Casos presentados versus casos resueltos	% Casos pasibles de procesamiento versus casos resueltos
1	Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.	Contencioso, Promoción, Monitoreo de violaciones a Derechos Humanos	Indefinido	NO	No aplicable	Se desconoce dato total	Se desconoce dato total	Se desconoce dato total	238	Se desconoce dato total	Se desconoce dato total
2	Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.	Conocer casos de violaciones a los derechos humano	Indefinido	NO	No aplicable	248	248	Se desconoce el dato	177	71.37%	71.37%

SECCIÓN C

ESFUERZOS DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL PENAL

Esta sección aborda el análisis de tres mecanismos controvertidos, el Tribunal Especial para Líbano, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. La controversia de estas instituciones inicia desde su forma de creación, definición, hasta los resultados obtenidos.

El Tribunal Especial para Líbano da un giro a los mecanismos creados hasta ese momento, al centrarse en perseguir los hechos sucedidos a raíz del asesinato del ex primer ministro Rafiq Hariri y no hechos derivados del conflicto armado libanés, enfocándose en la persecución de delitos de terrorismo y asesinato, aplicando la legislación interna libanesa, teniendo así ya un carácter *sui generis*.

En la advertencia de Nichols se encuadró la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala²¹²⁴, como “un mecanismo de Derecho Internacional Penal *sui generis* de lucha contra la impunidad”, y que reunió los esfuerzos de la comunidad internacional por medio de la Organización de Naciones Unidas para combatir la impunidad y la voluntad del Estado de Guatemala de superar el problema aplicando la experiencia de los expertos internacionales ante los Tribunales internos, que se convirtió en un instrumento eficaz complementario a la misión de la Corte Penal Internacional, que exigió de manera permanente y desde el mismo proceso de investigación, para que el Estado de Guatemala cumpliera con su obligación de hacer justicia pronta y cumplida.

El otro experimento similar desde la Organización de Estados Americanos fue la Misión de Apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras²¹²⁵, fue creada inspirada en el trabajo de CICIG, sin embargo; estos dos últimos esfuerzos difieren en un elemento esencial de la lucha contra la impunidad, los delitos que persiguen,

²¹²⁴ ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 2006. *Acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)*

²¹²⁵ ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, 2016. *Convenio entre el Gobierno de la República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para el Establecimiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.*

en el caso de CICIG muchos más allá de la corrupción y en el caso de MACCIH, estrictamente relacionados con esta, que no han sido declarados formalmente delitos contra la humanidad.

Para la autora es importante explicar en esta sección las razones por las que se les clasifica en este trabajo como esfuerzos desde el Derecho Internacional Penal y no desde el Derecho Penal Internacional.

La diferencia de los conceptos radica como lo mencionan Schabas y Bernaz²¹²⁶ parece residir en gran medida en los tipos de delitos que abordan. Por lo tanto, *droit pénal international* se refiere a un cuerpo de leyes que gobierna las relaciones entre los estados en la represión de los llamados delitos comunes, como el asesinato y la violación, así como la actividad delictiva organizada cuando adquiere una dimensión internacional. Por el contrario, *droit pénal international* se centra en crímenes de naturaleza internacional, generalmente debido a sus dimensiones transfronterizas y transnacionales.

Schabas y Bernaz afirman que en el Derecho Penal Internacional las definiciones de crímenes se han afinado y actualizado. Además, el campo se ha vuelto más complejo en la medida en que involucra activamente a los sistemas de justicia nacionales. Está asociado con el concepto de justicia transicional, que considera la responsabilidad penal por las atrocidades como una etapa necesaria a medida que los estados se recuperan del conflicto, y especialmente de las guerras civiles. El dinamismo del derecho penal internacional está en gran parte asociado con el crecimiento y la emoción en dos áreas relacionadas: el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario²¹²⁷.

Según Mejía Azuero *“En el DIP la preeminencia sigue siendo de los estados, únicos sujetos de derecho internacional, capaces de suscribir, aprobar y ratificar instrumentos que les permitan perseguir a la criminalidad transnacional y a la criminalidad organizada a través de la extradición, la euro orden de detención y entrega; o también cuando entre estados se suscriben tratados para el traslado de*

²¹²⁶ SCHABAS, William y Nadia Bernaz, 2013. *Introduction*. SCHABAS, William y Nadia Bernaz. Ed. *Routledge Handbook of International Criminal Law*. Página: 1. Primera Edición, Segunda reimpresión. Londres y Nueva York: Routledge Handbooks, Taylor & Francis Group. ISBN 9780415552035

²¹²⁷ SCHABAS, William y Nadia Bernaz. 2013. *Op. Cit.* Páginas: 1 y 2

*prisioneros, transmisión de procesos penales, ejecución de sentencias extranjeras, vigilancia internacional de personas condenadas, entre otros casos*²¹²⁸

Partiendo de estas definiciones, se puede afirmar que tanto el Tribunal Especial para Líbano, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Misión de Apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras no son “mecanismos sui generis de Derecho Penal Internacional, sino son mecanismos de Derecho Internacional Penal porque reúnen las siguientes características:

- a. Si bien, el acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala fue catalogado como un instrumento de derechos humanos, su fin era perseguir los delitos contemplados en las leyes penales guatemaltecas. En el caso de la Misión de Apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras su convenio de creación se fundamenta en la Convención Interamericana contra la Corrupción y en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
- b. Fueron creados para trabajar bajo las leyes nacionales, especialmente las penales de Líbano, Guatemala y Honduras respectivamente. Siendo estas un cuerpo de leyes que gobierna las relaciones de los estados en la represión de los delitos comunes y la actividad delictiva organizada.
- c. El Tribunal Especial para Líbano se concentró en perseguir el delito de terrorismo y asesinato.
- d. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala trabajó algunos delitos de dimensiones transfronterizas y transnacional como el Narcotráfico y el Tráfico Ilegal de personas.
- e. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Misión de Apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras trabajaron directamente con los sistemas de justicia nacionales.
- f. En el caso de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala entre sus considerandos se invoca el Acuerdo Global de Derechos Humanos

²¹²⁸ MEJÍA Azuero, Jean Carlo. 2008. *Óp. Cit.*

en cuanto al objetivo de *“combatir los cuerpos ilegales de seguridad y los aparatos clandestinos de seguridad con el propósito de que éstos ya no existan, asumiendo además la obligación de “garantizar y proteger en forma eficaz la labor de los individuos y entidades defensoras de los derechos humanos” y que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Marco de los Acuerdos de Paz*”²¹²⁹, del incumplimiento de esto reflejado en la ausencia de justicia transicional y que desembocó en la evolución de la actividad delincuencial en el país, fortaleciéndose la delincuencia organizada, dándose paso a la necesidad de crear la Comisión. En el caso de Honduras no se puede hablar de justicia transicional ante la ausencia de conflicto armado interno o guerra civil.

- g. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, incorporó en su trabajo estándares internacionales de derechos humanos, no así de derecho internacional humanitario al no tener jurisdicción sobre casos del conflicto armado guatemalteco, aspecto que tampoco trabajó la Misión de Apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras.
- h. Los tres convenios fueron suscritos, aprobados y ratificados por los Estados de Líbano, Guatemala y Honduras como sujetos de derecho internacional cada uno en lo de su competencia.

Es por estas razones el Tribunal Especial para Líbano, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras se clasificaron dentro de los esfuerzos de Derecho Internacional Penal para la lucha contra la impunidad, de los cuales se analiza su eficacia a continuación:

²¹²⁹ ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 2006. *Óp, Cit.*

CAPÍTULO XV

TRIBUNAL ESPECIAL PARA LÍBANO

ANTECEDENTES

Líbano ha sufrido una serie de sucesos violentos que se constituyen una grave violación a los derechos humanos, generando un legado violento. En estos sucesos conflictos, entre otros delitos se han cometido una serie de asesinatos catalogados como de alto perfil²¹³⁰. Dentro de los conflictos armados que ha sufrido Líbano, el primero corresponde a la guerra que se extendió entre 1975 y 1990 la cual tuvo como resultado la muerte de más o menos 100,000 civiles y un aproximado de 17,000 desapariciones. *“Debido a la ley de amnistía de 1991, nadie ha sido juzgado por los graves crímenes. El segundo se ubica entre 1990 y 2005 donde se siguieron cometiendo abusos de todo tipo y partes del territorio Líbano continuaron ocupados por Israel y Siria”*²¹³¹.

En esa larga época de conflicto armado, fueron asesinados del ex primer ministro, Rafiq Hariri en 2005, y varios líderes políticos e intelectuales. Siendo estos hechos los que finalmente impulsaron la creación de un tribunal especial que permitiera el enjuiciamiento de las personas que resultaran responsables del asesinato del ex primer ministro y ese otro pequeño grupo de víctimas. *“El asesinato del Rafiq Hariri, y los demás atentados con bombas, contribuyeron a la creación de un clima de inseguridad e intimidación, que afectaba gravemente al funcionamiento de las instituciones políticas del país, así como su vida económica y social”*²¹³².

²¹³⁰ ICTJ. S.F. *Tribunal Especial para el Líbano*, [en línea]. Disponible en: <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Factsheet-Libano.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

²¹³¹ Ídem.

²¹³² FRASCHINA, Andrea, 2008. *Una nueva jurisdicción penal de carácter Internacional: el Tribunal Especial para el Líbano*, En: Revista Electrónica de estudios Internacionales, Pág. 1

Por tal motivo el primer ministro libanés el 13 de diciembre de 2005, por medio de una carta solicitó a las Naciones Unidas la creación de un tribunal de carácter internacional en su territorio²¹³³.

El Tribunal Especial para el Líbano nace como un tribunal híbrido diferente a lo que usualmente había establecido el Consejo de Seguridad por medio de una resolución entre este órgano y un gobierno nacional. La intención inicial era crear un Tribunal que se basara en un tratado con legislación libanesa, similar en naturaleza a las Salas Extraordinarias de Camboya, lo que fue imposible debido a que el gobierno de Líbano no logró que se aprobara la legislación de implementación nacional, por lo que tuvo que intervenir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para aprobar la Resolución 1757, siendo esta una resolución vinculante con la cual estableció el tribunal²¹³⁴.

Debido a que se consideraba que las investigaciones podrían desestabilizar el país, la aprobación nacional para el establecimiento del tribunal fue imposible, por lo tanto, el Consejo de Seguridad tuvo que realizar la autorización internacional para su creación.²¹³⁵

El Tribunal Especial para Líbano se creó por medio de la resolución 1757 de 2007 aprobada por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas para enjuiciar a todos los responsables del atentado de 14 de febrero de 2005²¹³⁶.

El Tribunal se estableció en 2009 en la Haya.

1. ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ FUE CREADO?

El Tribunal se creó con el objeto primordial de enjuiciar a los responsables del atentado que causó la muerte del ex Primer Ministro de Líbano, Rafiq Hariri y del resto de víctimas de ese atentado específico.

²¹³³ FRASCHINA, Andrea, 2008. *Óp. Cit.*

²¹³⁴ OPEN Society Justice Initiative. S.F. *Óp. Cit.* Página: 72

²¹³⁵ Ídem. Página: 74

²¹³⁶ En donde falleció el ex Primer Ministro del Líbano Rafiq Hariri además y otras personas.

El preámbulo y el artículo uno de la Resolución 1757²¹³⁷ muestran la intencionalidad para crear el Tribunal, otorgándole carácter internacional basado en las más altas normas internacionales de justicia penal para enjuiciar a los responsables de dicho atentado. El artículo 2 de la Resolución estipula que se aplicarán al enjuiciamiento y castigo de los delitos los artículos 6 y 7 de la Ley de Líbano de 11 de enero de 1958, esto es derecho interno, con las circunstancias de agravación de las penas para los delitos de sedición, guerra civil y lucha entre confesiones religiosas orientados a juzgar conforme la gravedad del delito cometido en aras de impartir una justicia verdadera.

²¹³⁷ Se plasma la intención de enjuiciar a toda persona responsable de lo ocurrido el 14 de febrero de 2005 extendiéndose la facultad del Tribunal para juzgar incluso los graves actos delictivos cometidos en conexión con el atentado, ligados por el móvil del delito, finalidad de los ataques, naturaleza de las víctimas, patrón de los ataques y/o por los autores.

El artículo 3 de la R/1757 aborda lo referente a la responsabilidad penal individual procurando someter a la justicia a toda persona que tuvo participación en los actos delictivos, dicho artículo condena la responsabilidad penal de las personas que organizaron o participaron en el delito, de los miembros de las organizaciones criminales involucradas, e incluso de los superiores que no hayan tomado las medidas razonables que fuesen necesarias dentro de su competencia para impedir que sus subordinados participaran criminalmente en dichos acontecimientos. El mismo artículo contempla que “El hecho de que un acusado haya actuado en cumplimiento de una orden de un superior no le exonerará de responsabilidad penal” estableciendo que dicho extremo no es causal suficiente para eludir el juzgamiento ante el TEL.

El artículo 4 de la R/1757 muestra los esfuerzos para asegurar que los delitos contemplados sean juzgados exclusivamente por el TEL como medida para garantizar que los crímenes sean conocidos por un tribunal imparcial y especializado en juzgar delitos de esta naturaleza incorporando la gravedad del crimen en sus decisiones judiciales garantizando con ello que estos casos no sean juzgados por otros tribunales.

El artículo 5 de la R/1757 estipula la facultad del TEL de conocer sobre asuntos anteriormente dilucidados ante un tribunal nacional en el evento de conocer que éste último no haya sido juzgado por tribunal imparcial e independiente, en el caso que el juicio haya tenido por objeto proteger al acusado de responsabilidad penal y en el caso que la causa no fuere tramitada con la diligencia necesaria. La posibilidad de hacer una excepción al principio non bis in idem en esta situación particular nace de la necesidad de juzgar y castigar a los responsables imparcialmente y en congruencia con la gravedad de los actos cometidos descartando toda forma de justicia imitada obtenida.

El Artículo 6 de la R/1757 claramente busca asegurar que todo pacto de amnistía acordado en aras de obtener un cese al fuego no constituya razón suficiente para que los responsables eludan la persecución penal por los delitos respecto los cuales el TEL tenga competencia ya que toda amnistía otorgada en los casos de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio entorpece el proceso hacia la construcción de una paz firme y duradera.

La Composición de las Salas se aborda en el artículo 7 de la R/1757 el cual estipula que las Salas se conformarán en su mayoría por jueces internacionales, ello se implementa como medida para resguardar la imparcialidad de las actuaciones judiciales y fortalecer el debido proceso.

La R/1757 contempla en su artículo 22 la posibilidad de celebrar el juicio en ausencia del acusado en los casos que haya renunciado por escrito a su derecho de estar presente, no haya sido entregado a las autoridades competentes, se haya dado a la fuga o se encuentre en paradero desconocido, pudiéndose continuar con el juicio en pos del esclarecimiento de los hechos y la obtención de justicia.

Al establecer la facultad de juzgar estos crímenes, incluso *in absentia*²¹³⁸, demuestra que el Estatuto es otro de los instrumentos creados para combatir la impunidad en graves violaciones a los derechos humanos.

El artículo 1 del Estatuto de creación fue un poco más allá de la motivación inicial para su creación, al establecer que el Tribunal Especial también investigaría otros ataques ocurridos en Líbano entre el primero de octubre de 2004 y el 12 de diciembre de 2005²¹³⁹.

2. PAPEL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN SU CREACIÓN

Al igual que en la creación de otros Tribunales Internacionales Híbridos, en este caso también la Comunidad Internacional juega un papel fundamental el establecimiento del Tribunal Especial para el Líbano, máxime cuando el Consejo de Seguridad tuvo que tomar la decisión de emitir la Resolución ante las dificultades internas surgidas en Líbano, dándole carácter internacional con jurisdicción en el territorio del Líbano.

El apoyo de la comunidad internacional se refleja en la creación del Tribunal como miembros de las naciones unidas y en el apoyo al Gobierno del Líbano mediante contribuciones voluntarias para el financiamiento del Tribunal.

3. ¿CÓMO SE ABORDÓ EL TEMA DE LA SOBERANÍA?

Al ser un Tribunal establecido en mutuo acuerdo entre el Gobierno de Líbano y la Comunidad Internacional por medio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por Resolución 1757 aprobada el 30 de mayo de 2007, la soberanía no se vio afectada porque las naciones unidas coherente con la petición de apoyo del gobierno Líbano, ejecuto las acciones necesarias para su creación respetando la finalidad para la cual se le solicito ayuda, que no era otra diferente a que con ese mecanismo de creación del Tribunal Especial se identificara, investigara y condenara a los responsables de los hechos cometidos en el territorio libanés entre el 2004 y 2005.

Sin embargo, existen voces que por el hecho que el Consejo de Seguridad hubiese autorizado el estatuto del Tribunal luego de que el proyecto de ley nacional para crear

²¹³⁸ Ha sido criticado, ya que la justicia se vuelve ficticia por no encontrarse presente el presunto responsable.

²¹³⁹ Estatuto del Tribunal para Líbano, 2009. *Óp. Cit.* Artículo 1

el mecanismo fracasara por un acto del parlamento libanés, que lo han criticado y calificado como socavamiento del proceso democrático y obstaculización de la soberanía del Estado²¹⁴⁰.

4. TIPO DE GOBIERNO ¿DEMOCRACIA?

Al momento de solicitar la creación al Consejo de Seguridad, Líbano mantenía y aún mantiene una democracia parlamentaria, si bien es cierto no completamente sólida, si con los principios y bases del sistema democrático. Democracia que como lo señalamos líneas atrás, fue calificada como socavada²¹⁴¹ por la forma en que el Consejo de Seguridad autorizó el Estatuto.

5. ¿ESTADO DE DERECHO?

Cuando ocurre el atentado terrorista que dio origen a la solicitud de creación del Tribunal Especial, Líbano se encontraba en un contexto pre electoral, con democracia parlamentaria, lo que refleja que existía Estado de Derecho, sin embargo, estos acontecimientos promovieron zozobra e inseguridad en la población, imperando el vandalismo y la delincuencia. Aunado a ello el hecho de que había dentro del territorio libanés una gran cantidad de personas sirias, lo que desencadenó una serie de manifestaciones para retirar a estas personas del territorio, como consecuencia de la muerte del ex primer ministro y sus acompañantes.

Sin olvidar, que el carácter del tribunal es internacional y local, ya que es creado por Resolución del Consejo de Seguridad, pero aplicando la normativa penal vigente en Líbano.

6. ¿ORIGEN BASADO EN CIERTAS SUPOSICIONES O CONDICIONES FÁCTICAS?

El Tribunal surge por condiciones fácticas, siendo estas el asesinato del primer ex ministro Rafiq Hariri así de como otros políticos de alto perfil, lo que generó gran conmoción e indignación entre los pobladores con diferentes ideológicas políticas, de esta cuenta se hizo necesaria la creación de un tribunal que tuviese la capacidad

²¹⁴⁰ OPEN Society Justice Initiative. S.F. *Óp. Cit.* Página: 76

²¹⁴¹ Ídem.

jurídica de enjuiciar a los responsables de los actos ocurridos en febrero de 2005, sin embargo también fueron considerados otros asesinatos cometidos con anterioridad por creer que poseían vínculos con el asesinato del primer ex ministro. Tribunal este que por la motivación de su creación puede considerarse como en interés a un sector especial y que olvido el alto número de muertes sucedidas entre 1975 y 1990, que no fueron incluidas en el marco de su competencia.

El contexto político y los actos inhumanos cometidos en el territorio libanés propiciaron las condiciones necesarias para que con el apoyo de la comunidad internacional impulsaran la creación del Tribunal Especial para el Líbano el cual sería el encargado justiciabilizar los hechos.

7. DOCUMENTO CREADOR

El Tribunal Especial para el Líbano se creó mediante la Resolución 1757 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por solicitud del primer ministro libanés el 13 de diciembre de 2005 y que empezó operaciones el 1 de marzo de 2009.

La Resolución 1757 (2005) le dio vida al Tribunal Especial para el Líbano, quien sería el encargado de enjuiciar a las personas naturales que resultaran responsables del asesinato del ex primer ministro y personas relacionadas con esos hechos de febrero de 2005, así como otros actos criminales anteriores relacionados con ese asesinato.

8. MANDATO

La decisión formal del Consejo de Seguridad de “establecer un tribunal de carácter internacional” solicitada por el gobierno libanés no se adoptó de inmediato. Fue precedido por una fase exploratoria. El 15 de diciembre de 2005, el Consejo de Seguridad, actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta, aprobó la Resolución 1644 (2005) por unanimidad. Si bien reconoció “la solicitud del gobierno libanés de que los eventualmente acusados de participar en este ataque terrorista sean juzgados por un tribunal de carácter internacional”, el Consejo dio un primer

paso al solicitar al Secretario General “que ayudara al gobierno libanés a identificar la naturaleza y alcance de la asistencia internacional necesaria a este respecto”²¹⁴².

Además de encomendar esta misión preliminar al Secretario General, el Consejo decidió prorrogar el mandato de la Comisión, según lo establecido en las resoluciones 1595 (2005) y 1636 (2005), inicialmente hasta el 15 de junio de 2006. Esta prórroga, y la perspectiva de la creación de un tribunal especial, cambió la naturaleza del trabajo de la Comisión. El régimen jurídico y la metodología de trabajo de un órgano de investigación con competencias y responsabilidades cercanas a las de la fiscalía encargada de investigación con un mandato con tiempo determinado²¹⁴³.

El mandato fue enfocado en la investigación del atentado terrorista en un tribunal híbrido fuertemente externalizado.²¹⁴⁴ Es así como se le “*encarga enjuiciar a los responsables del atentado de 14 de febrero de 2005 que causó la muerte del ex Primer Ministro del Líbano Rafiq Hariri y acompañantes, así como otros ataques ocurridos en el Líbano entre el 1° de octubre de 2004 y el 12 de diciembre de 2005, o cualquier otra fecha posterior que decidan las Partes con el consentimiento del Consejo de Seguridad, pero que estuvieran conectados conforme a los principios de la justicia penal al atentado del 14 de febrero de 2005*”²¹⁴⁵.

A. OBJETIVOS

Uno de los principales objetivos de creación del Tribunal Especial para el Líbano fue el enjuiciamiento de los principales responsables de la muerte del ex primer ministro del Líbano, así como la gran cantidad de personas que también perdieron la vida en él y los otros hechos conexos que ocurrieron en este territorio entre octubre de 2004 y el 12 de diciembre de 2005 vinculados a estos ataques terroristas²¹⁴⁶.

Dentro de los objetivos del mandato se previó la participación de las víctimas²¹⁴⁷.

²¹⁴² MICHEL, Nicolas. 2014. *The Creation of the Tribunal in its Context*. En: ALAMUDDIN, Amal, Nidal Nabil Jurdi y David Tolbert. Ed. 2014 *The Special Tribunal for Lebanon, Law and Practice*. Oxford Monographs in International Humanitarian and Criminal Law. Oxford, Primera Edición. Página: 15 ISBN: 978 -0-19-968745-9

²¹⁴³ Ídem. Página: 16

²¹⁴⁴ OPEN Society Justice Initiative. S.F. *Óp. Cit.* Página: 108

²¹⁴⁵ Ídem.

²¹⁴⁶ Estatuto del Tribunal Especial para el Líbano, *Óp. Cit.* Artículo 1

²¹⁴⁷ OPEN Society Justice Initiative. S.F. *Óp. Cit.* Página: 98

B. ALCANCES DEL MANDATO

El Tribunal Especial estaba destinado a proceder legalmente contra las personas que resultaran responsables de los ataques terroristas ocurridos contra el ex primer ministro de Líbano, el cual tuvo víctimas colaterales. Así como otros asesinatos que se consideraban vinculados al asesinato del primer ex ministro por el contexto político que se vivía en ese momento.

“El tribunal especial para el Líbano se distingue de otros tribunales penales internacionales establecidos o apoyados por las Naciones Unidas en dos aspectos: a) el modo de celebrar los procesos judiciales es más característico de los sistemas jurídicos de inspiración romanista que del common law; y b) el proceso de investigación llevado a cabo por la Comisión Internacional Independiente de Investigación constituye, de hecho, el embrión de la fiscalía”²¹⁴⁸.

En consecuencia, puede decirse que fue un tribunal con funciones de investigación selectiva en cuanto a que solo interesó por la calidad del ex primer ministro desde luego de profunda relevancia e impacto, pero no interés que ese mecanismo internacional, también investigara las muertes del largo conflicto interno ya aludido.

C. COMPETENCIA

La competencia del Tribunal Especial para el Líbano se estableció en determinados delitos que surgieron de las disposiciones de la ley interna local del Líbano como lo es el Código Penal, las cuales estaban relacionadas al enjuiciamiento de los crímenes y delitos contra la vida y la integridad personal, entre estos se puede mencionar los actos terroristas, la asociación ilícita, el omiso del deber de informar sobre estos delitos, la participación en la conspiración, entre otros²¹⁴⁹.

El Tribunal Especial compartía competencia con los Tribunales Nacionales de Líbano, sin embargo, el Tribunal Especial tenía primacía sobre los Tribunales Nacionales, esta tenía especial *“relevancia con la problemática del principio non bis in idem, ya que quien haya sido juzgado por el Tribunal Especial no puede ser juzgado después por*

²¹⁴⁸ Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, 2006, *Informe del Secretario General sobre el establecimiento de un tribunal especial para el Líbano*, [en línea] Disponible en: <https://undocs.org/pdf?symbol=es/S/2006/893> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

²¹⁴⁹ Estatuto del Tribunal Especial para el Líbano, 2009. *Óp. Cit.* Artículo 2

*los mismos actos por un Tribunal Nacional. Por el contrario, quien haya sido juzgado por un tribunal nacional libanés puede ser encausado, con posterioridad, por el Tribunal Especial, si el mismo considera que las actuaciones del juez nacional no fueron imparciales ni independientes, o tuvieron por objeto sustraer al acusado de la competencia del Tribunal, o si la causa no fue tramitada con la debida diligencia nacional*²¹⁵⁰.

D. FORTALEZAS

Una de las ventajas del Tribunal Especial es el hecho de que su actuar no riñe con el ordenamiento jurídico interno del Sistema de Justicia libanés, sino que se nutre de él y es este mismo sistema el que se utiliza como base para el enjuiciamiento de los crímenes que le dieron origen a este Tribunal.

Igualmente, la delimitación específica de los hechos competencia del tribunal, facilitaba la identificación de los casos de interés a la investigación y por ende la planeación de la misma.

E. REGLAS DE ADMISIBILIDAD

En el caso del Tribunal Especial para el Líbano un aspecto peculiar es que el motivo que le dio origen surgió de un caso concreto y particular, mismo que fue incluido en el Estatuto de creación, por lo que las reglas de admisibilidad giraban en torno a ello, así como casos que estuvieran vinculados a este.

- i. *Ratione Personae*: El Tribunal Especial, tiene competencia para enjuiciar a las personas responsables del atentado del 14 de febrero de 2005 en el que perdió la vida el ex primer ministro libanés y otras personas resultaron heridas o también perdieron la vida.
- ii. *Ratione Materiae*: El Tribunal Especial tiene competencia para conocer los acontecimientos ocurridos y/o que estén conectados a los del ataque del 14 de febrero de 2005 así como los que tengan la misma naturaleza o

²¹⁵⁰ FRASCHINA, Andrea, 2008, *Óp. Cit.* Pág. 7
Estatuto del Tribunal Especial para Líbano, 2009. *Óp. Cit.* Artículo 4.

gravidad acaecidos entre octubre de 2004 y el 12 de diciembre de 2005 pero vinculados a estos ataques terroristas.

- iii. *Ratione Temporis*: Los crímenes cometidos entre el 1 de octubre de 2004 y el 31 de diciembre de 2005. Aunque el acontecimiento que le dio origen a la creación del Tribunal Especial, como lo hemos repetido fue el que tuvo lugar el 14 de febrero de 2005 y se consideró que existían otros atentados terroristas que se vinculaban a este, por lo que se decidió y contempló en el Estatuto de creación del Tribunal la competencia para abordar hechos relacionados durante este período.
- iv. *Ratione Loci*: debido a que el acontecimiento terrorista que originó el establecimiento del Tribunal Especial, tuvo lugar en el territorio de Líbano, su competencia territorial se circunscribe solo a este.

F. TIEMPO DETERMINADO

El artículo 21 del acuerdo se estipula que la duración del Tribunal especial será de 3 años a partir de la fecha de funcionamiento, sin embargo, si transcurrido ese lapso aún no ha terminado sus actividades, se podrá prorrogar por el tiempo que así lo estime el Secretario General en consulta con el Gobierno y el Consejo de Seguridad. El Tribunal estaba vigente, cuando se finalizó esta investigación (enero del 2021) el tribunal sigue vigente.

“El presente Acuerdo permanecerá en vigor por un plazo de tres años desde la fecha en que entre en funcionamiento el Tribunal Especial. Transcurridos tres años desde la entrada en funcionamiento del Tribunal Especial, las Partes, en consulta con el Consejo de Seguridad, examinarán los progresos del Tribunal. Si al final de ese plazo de tres años el Tribunal no ha finalizado sus actividades, el Acuerdo se prorrogará para que pueda culminar su labor por el plazo o los plazos que determine el Secretario General en consulta con el Gobierno y el Consejo de Seguridad”²¹⁵¹.

²¹⁵¹ Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, 2006, *Óp. Cit.* Pág. 22.

G. DISTRIBUCIÓN DEL PODER.

El Tribunal se conforma por cuatro órganos: Las salas, la Oficina del Fiscal, la Oficina de Defensa y la Secretaría.

“Judicatura: Las salas están compuestas por 11 jueces divididos en tres secciones: La sala de cuestiones preliminares, integrada por un juez internacional; la sala de juicio, integrada por un juez libanés y dos internacionales más dos suplentes (uno libanés y uno internacional); y la sala de apelaciones, conformada por dos jueces libaneses y tres internacionales.

Fiscalía: La oficina del fiscal está encabezada por un fiscal internacional.

Defensa: La oficina de defensa también es liderada por un jefe internacional nombrado por el secretario general de las Naciones Unidas, en consulta con el presidente del Tribunal Especial. Es el primer tribunal internacional con una oficina de defensa independiente con un estatus igual al de la de la oficina del fiscal.

Secretaría del Tribunal: La Secretaría está liderada por el secretario, quien es nombrado por el secretario general de las Naciones Unidas. Es asistido por un secretario adjunto en La Haya y un jefe de oficina en Beirut”²¹⁵².

9. ¿SURGIÓ COMO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES?

A. ¿HABÍA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL?

Para ese momento el término responsabilidad internacional ya se encontraba acuñado y la creación del Tribunal derivó por los compromisos adquiridos por Líbano y para ello con fundamento en el capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas solicitó la intervención de las Naciones Unidas para la creación del Tribunal.

²¹⁵² ICTJ. S.F. Óp. Cit. Página: 2

Si bien, el objetivo del Tribunal no fue juzgar la responsabilidad internacional del Estado, sino la responsabilidad individual de las personas en los hechos específicos, la solicitud de apoyo si fue con base en esas obligaciones internacionales adquiridas.

B. OBLIGACIONES INTERNACIONALES

Las obligaciones internacionales adquiridas provenían de la Carta de Naciones Unidas para la creación del tribunal. Es de recordar que la ley aplicada es la ley libanesa con la obligación del estado de apoyar las investigaciones que competencia del tribunal mixto.

C. ¿ABORDA HECHOS ILÍCITOS INTERNACIONALES?

Sí, ante la incapacidad de Líbano de investigar por sí mismo los hechos objeto de investigación del Tribunal, esta incapacidad de hacer justicia se traduce en un comportamiento atribuible al Estado que constituye una violación a las obligaciones internacionales. El Tribunal fue diseñado para el enjuiciamiento de los responsables de los actos terroristas cometidos en el territorio de Líbano en el que y el ex primer ministro ya identificado y otras personas perdieron la vida y algunas más resultaron heridas. La tipicidad de los hechos investigados y juzgados se hace en el marco de los delitos tipificados en el código penal Libanes, por eso no tienen la categoría de los delitos contenidos en el derecho penal internacional.

10. COOPERACIÓN DE LOS ESTADOS.

En cuanto a la cooperación entre Estados, esta se dio mediante contribuciones voluntarias por parte de los Estados parte de la Comunidad Internacional para financiar el Tribunal Especial, así como la disposición del Gobierno del Líbano, mismo que también debía contribuir con poco menos del 50% del presupuesto del Tribunal Especial.

Desde la misma creación del Tribunal Especial para el Líbano se evidencia la cooperación de y entre los Estados, en aras de restituir el orden social, a paz y el bienestar de los ciudadanos.

La cooperación internacional también se refleja en el establecimiento territorial del Tribunal, que se encuentra en la Haya.

11. INDEPENDENCIA

Por la naturaleza del Tribunal Especial el actuar está regido por una autonomía total e independiente, sin verse comprometido mediante presiones de ninguna naturaleza, para este no debe recibir ni pedir opinión de ningún Gobierno nacional o extranjero o entidad alguna de cualquier nivel, incluyendo la propia Organización de las Naciones Unidas, para que las decisiones y resoluciones que el tribunal emita sean resultado del cumplimiento autónomo del mandato de forma objetiva y transparente.

La objetividad e imparcialidad en los casos del Tribunal Especial depende en gran medida de la forma en la que este opera.

12. SELECCIÓN DE ACTORES

En este caso la selección de actores estaba plenamente determinada desde la creación del Estatuto, ya que giraba en torno a los responsables de los actos criminales que provocaron la muerte del ex primer ministro libanés, así como de otros actos criminales que estuviesen relacionados a este hecho.

Esto queda plasmado en el estatuto, específicamente en los artículos 1 y 2 en los que se puede leer *“El Tribunal Especial tendrá competencia para enjuiciar a los responsables del atentado de 14 de febrero de 2005 que causó la muerte del ex Primer Ministro del Líbano, Rafiq Hariri, y provocó la muerte o lesiones a otras personas. Si el Tribunal determina que otros ataques ocurridos en el Líbano entre el 1° de octubre de 2004 y el 12 de diciembre de 2005, (Artículo 1)*

La ley aplicable para el Tribunal la conforman ; Las disposiciones del Código Penal del Líbano relativas al enjuiciamiento y castigo de los actos de terrorismo, los crímenes y delitos contra la vida y la integridad personal, la asociación ilícita y la omisión del deber de informar sobre crímenes y delitos, incluidas las normas relativas a los elementos materiales del delito, la participación en el delito y la conspiración; y los artículos 6 y 7 de la Ley del Líbano de 11 de enero de 1958 sobre el agravamiento

de las penas para los delitos de sedición, guerra civil y lucha entre confesiones religiosas. (Artículo 2)”²¹⁵³

En estas condiciones de contenido normativo de objetivo y competencia del tribunal, había una delimitación funcional y operativa específica.

13. NORMATIVA RELEVANTE Y MARCO PROCEDIMENTAL

El Tribunal se rige bajo el estatuto de creación, las reglas de procedimiento y la normativa nacional vigente de Líbano en las que se puede mencionar el Código Penal del Líbano, normas relacionadas con el *“enjuiciamiento y castigo de los actos de terrorismo, los crímenes y delitos contra la vida y la integridad personal, la asociación ilícita y la omisión del deber de informar sobre crímenes y delitos, incluidas las normas relativas a los elementos materiales del delito, la participación en el delito y la conspiración y los artículos 6 y 7 de la Ley del Líbano del 11 de enero de 1958 sobre el agravamiento de las penas para los delitos de sedición, guerra civil y la lucha entre confesiones religiosas”*.²¹⁵⁴

“Las normas procedimentales aplicables fueron adoptadas el 20 de marzo de 2009 y han sido modificadas en varias ocasiones. Es relevante indicar que las normas de Tribunal permiten juicios en absentia del inculcado”²¹⁵⁵.

La Resolución 1757 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue aprobada el 30 de mayo de 2007, consta de 30 artículos y se divide en cuatro secciones.

La sección I de los artículos 1 al 6 y regula la competencia y ley aplicable al tribunal.

En el primer artículo se establece la competencia del Tribunal , el artículo 2 dispone la ley aplicables siendo estas las *“disposiciones del Código Penal del Líbano relativas al enjuiciamiento y castigo de los actos de terrorismo, los crímenes y delitos contra la vida y la integridad personal, la asociación ilícita y la omisión del deber de informar sobre crímenes y delitos, incluidas las normas relativas a los elementos materiales del delito, la participación en el delito y la conspiración; y los artículos 6 y 7 de la Ley*

²¹⁵³ Estatuto del Tribunal Especial para Líbano, *Óp. Cit.* Artículos 1 y 2

²¹⁵⁴ Ídem

²¹⁵⁵ ICTJ. S.F. *Óp. Cit.* Página: 2

*del Líbano de 11 de enero de 1958 sobre el agravamiento de las penas para los delitos de sedición, guerra civil y lucha entre confesiones religiosas*²¹⁵⁶.

El artículo 3 limita la responsabilidad penal, siendo esta estrictamente individual, el artículo 4 regula la competencia concurrente del Tribunal Especial y los tribunales nacionales. El artículo 5 reglamenta la cosa juzgada.

La sección II regula la organización del tribunal especial del artículo 7 al 14.

El artículo 7 establece la integración del Tribunal, el artículo 8 determina la composición de las salas, siendo estas: “a) *Un Juez de Instrucción internacional; b) Tres magistrados que formarán parte de la Sala de Primera Instancia, de los que uno será libanés y dos internacionales; c) Cinco magistrados que constituirán la Sala de Apelaciones, de los que dos serán libaneses y tres internacionales; d) Dos magistrados suplentes, de los que uno será libanés y otro internacional*”²¹⁵⁷.

El artículo 8 establece las calidades para ser juez, el artículo 10 regula las funciones del Presidente del Tribunal y el artículo 11 norma lo referente al fiscal, facultades y sus funciones.

La sección II se encarga de regular los derechos del acusado o sospechoso y la víctima, en los artículos del 15 al 17.

Los artículos 15 y 16 norman los derechos del acusado y del sospechoso entre los que destacan el derecho a ser informado de su situación en un idioma que hable y entienda, la igualdad ante el tribunal, de ser asistido por un abogado defensor o proporcionarle uno, y de proporcionarle un intérprete, su presunción de inocencia, no ser obligado a declarar contra sí mismo o aceptar la culpabilidad.

El artículo 17 desarrolla los derechos de las víctimas, delegando su ejercicio a sus representantes siempre que estos no vulneren los derechos del acusado o sospechoso, ni las garantías del proceso ante las Salas o Juez.

²¹⁵⁶ NACIONES Unidas, Consejo de Seguridad. 2006. *Informe del Secretario General sobre el establecimiento de un tribunal especial para el Líbano*. [en línea] Página: 6. Disponible en: <https://undocs.org/pdf?symbol=es/S/2006/893> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

²¹⁵⁷ Estatuto del Tribunal Especial para Líbano, *Óp. Cit.* Artículo 7

La sección IV se establece el procedimiento del artículo 18 al 30.

El artículo 18 regula la revisión de la acusación por el juez con el fin de determinar la procedencia del juicio. El artículo 19 lo referente a la admisibilidad de la prueba de conformidad con las normas internacionales en materia probatoria.

Los artículos 20 y 21 delimita la facultad de las salas de conocer todas las fases del juicio, la apelación y revisión buscando siempre realizar un juicio justo y expedito; además de aceptar o rechazar evidencia documental, declaraciones de testigos o víctimas. En los casos no previstos las salas tienen la facultad de aplicar *“las reglas de prueba que mejor garanticen la justa resolución de la causa, siempre que se ajusten al espíritu del Estatuto y los principios generales del derecho”*²¹⁵⁸.

El artículo 22 regula el juicio in absentia con el requisito que el acusado deberá ser notificado de las decisiones que se tomen en el juicio, debe designar defensor a su costa o uno que le asigne la oficina de defensores o podrá solicitar que se repita el juicio si resultare condenado, pero siempre que no hubiese tenido abogado defensor.

El artículo 23 desarrolla la forma en que se debe dictar la sentencia, el artículo 24 establece las penas a imponer, las cuales deben tener en consideración *“la gravedad del delito y las circunstancias personales del condenado. Las penas que podrán imponer son privación de libertad perpetua o por número determinado de años”*²¹⁵⁹.

El artículo 25 norma el derecho a *“reparación de las víctimas, el artículo 26 establece las facultades de las salas de apelación por cuestiones de derecho y, de hecho, y su alcance de confirmar, revocar o modificar las decisiones adoptadas por la Sala de Primera Instancia”*²¹⁶⁰.

El artículo 27 establece el procedimiento de revisión, su procedencia y admisibilidad. El artículo 28 regula la aprobación de las reglas de procedimiento y prueba, su aplicación *“en las fases de instrucción, juicio y apelación, a la admisión de pruebas, a la participación de las víctimas, a la protección de las víctimas y los testigos y a los demás asuntos pertinentes. Así como el requisito indispensable para su creación*

²¹⁵⁸ Estatuto del Tribunal Especial para Líbano, Óp. Cit. Artículos: 20 y 21

²¹⁵⁹ Ídem. Artículos: 23 y 24

²¹⁶⁰ Ídem. Artículos: 25 y 26

*utilizando como referencia Código de Procedimiento Penal del Líbano y otros materiales de referencia que reflejen las normas más estrictas del procedimiento penal internacional*²¹⁶¹.

El artículo 29 desarrolla la ejecución de la pena y el artículo 30 la aplicación del indulto o conmutación de la pena.

14. LEGITIMIDAD:

La legitimidad del Tribunal fue cuestionada al inicio por haber sido creado por el Consejo de Seguridad al no lograrse la aprobación de la ley interna en el parlamento libanés, sin embargo, fue aceptado por el país y luego de su establecimiento no fue rechazado y sus fallos no han sido cuestionados.

15. JURISDICCIÓN

El Tribunal Especial para el Líbano únicamente ejerce jurisdicción interna, esto es en el territorio de Libia y respecto a los delitos previstos en el Código Penal libanés, específicamente homicidios dolosos y actos de terrorismo²¹⁶² y todos aquellos delitos relacionados con el asesinato²¹⁶³ del ex primer ministro.

Aunque las Cortes nacionales del Líbano y el Tribunal Especial comparten jurisdicción para fallar sobre los mismos actos criminales, es importante resaltar que el Tribunal Especial tiene primacía, tal como se establece en el Estatuto de creación, por lo tanto, este puede requerir que le sea referido algún caso en cualquier momento del proceso²¹⁶⁴.

Al incluir dentro de la competencia del Tribunal, el terrorismo y la primacía que este sobre los casos hace que se califique su jurisdicción como híbrida y excepcional en el que hacer ante los procesos judiciales a su cargo, hechos ocurridos en el territorio de Líbano y sobre los hechos que se consignaron en el Estatuto de creación.

²¹⁶¹ Estatuto del Tribunal Especial para Líbano, *Óp. Cit.* Artículos: 27 y 28

²¹⁶² OPEN Society Justice Initiative. S.F. *Óp. Cit.* Página: 54

²¹⁶³ Ídem. Página: 66

²¹⁶⁴ ICTJ. S.F. *Óp. cit.*

A. ¿QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE DE UN CASO?

El Estatuto de creación fue muy claro en sus considerandos, así como en sus artículos 1 y 6 al establecer los sujetos que intervendrían, en este caso personas que se vieran involucradas en el asesinato del primer ex ministro libanés y otros que estuvieran relacionados con ese hecho concreto.

“En enero de 2011 la Fiscalía interpuso una acusación ante la Sala de Cuestiones Preliminares en contra de los individuos Salim Jamil Ayyash, Mustafa Amine Badreddine, Hussein Hassan Oneissi y Assad Hassan Sabra por el ataque de 2005, listado al que se agregó posteriormente el nombre de Hassan Habib Merhi. La Sala de Cuestiones Preliminares confirmó los cargos en junio de 2011 y emitió una orden de arresto para que las autoridades libanesas aprehendieran a los acusados”²¹⁶⁵.

B. ¿QUÉ PROBLEMAS SE PODÍA DEBATIR?

El Tribunal puede debatir los problemas relacionados al atentado terrorista del 14 de febrero de 2005 en el que se le dio muerte al ex primer ministro libanés y otras personas perdieron la vida y algunas más resultaron heridas. También actos que se vincularan a este así estén en diferentes periodos, siempre que se apeguen al Estatuto por la relación con el hecho principal.

16. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN:

Al ser un Tribunal Especial que se rige y nutre por el Sistema de Justicia Nacional, los medios de impugnación también se encuentran regulados por esta normativa interna, el Estatuto también estableció la apelación y revisión de los procesos en los artículos 26 y 27.

²¹⁶⁵ LOBO FERNÁNDEZ, Juan Francisco, 2015. *Decisión del Tribunal Especial para El Líbano sobre la admisibilidad en juicio de documentos publicados en el sitio web WikiLeaks*, En. Revista Tribuna Internacional, [en línea]. Publicación del departamento de Derecho Internacional, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, Volumen 4, No. 8, Páginas 282, [Consulta: 10 de diciembre de 2020.].ISSN 0719-482X, Disponible en: <https://tribunainternacional.uchile.cl/index.php/RTI/article/download/38555/40201/>

La apelación es conocida por las salas de apelación, esta se interpone por motivos de error sobre cuestiones de derecho y de hecho y tienen como fin confirmar, revocar o modificar las decisiones adoptadas por la Sala de Primera Instancia.

En cuanto al procedimiento de revisión procede cuando se tiene conocimiento de nuevos hechos, la petición se presenta ante una Sala de Apelaciones que decide si es admisible o no.

17. MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO

Como mecanismo de cumplimiento se estableció en el artículo 10 del Estatuto de creación que el presidente del Tribunal presentaría un informe anual ante el Secretario General de Naciones Unidas informando sobre el funcionamiento y actividades de este, así como al gobierno de Líbano.²¹⁶⁶

18. RECURSOS DISPONIBLES

Los recursos utilizados son:

A. HUMANO:

Como se plasmó con anterioridad, en la composición de las salas se determinó en el artículo 7 del estatuto, cuál la estructura para determinar el recurso humano que integraría el tribunal así la Sala de primera instancia se conformaría con un magistrado libanés y 2 internacionales, así también la sala de apelaciones estaría integrada por dos magistrados libaneses y 3 internacionales. Como magistrados suplentes fungirían un libanés y uno internacional.

En la fiscalía se contempló la integración del personal que fuera necesario para el desarrollo de las funciones de investigación.

En cuanto a recurso humano, el tribunal cuenta con 349 personas laborando para el Tribunal a febrero de 2020, el cual se encuentra distribuido 226 personas conforman el personal internacional reclutado en el nivel profesional y superior y en las

²¹⁶⁶ OPEN Society Justice Initiative. S.F. *Óp. Cit.* Página: 130

categorías FS; el personal de servicios generales lo conforman 173 personas. En ambas categorías de personal se encuentran representados 44 países diferentes.²¹⁶⁷

B. MATERIAL:

En cuanto a los recursos materiales, el Tribunal cuenta actualmente con 5 documentos administrativos, 11 reportes anuales de actividades, 02 documentos de la defensa, 25 documentos de reglas y normas internas del Tribunal y sus órganos.²¹⁶⁸

C. PRESUPUESTO ASIGNADO:

Al igual que la mayoría de tribunales especiales, el Tribunal Especial para el Líbano, es financiado por donaciones voluntarias de los Estados miembros y fondos que el Estado anfitrión destina para su funcionamiento.

“El tribunal se financia a través de colaboraciones voluntarias de los Estados. En virtud del artículo 5 del acuerdo que estableció el Tribunal Especial, el financiamiento de este es obtenido a través de contribuciones voluntarias de distintos Estados (51%) y del Gobierno del Líbano (49%).

En 2012, su presupuesto fue de 55,3 millones de euros. En 2013 aumentó a 59.972.672, y en 2014 fue de 59.891.848 de euros”²¹⁶⁹.

Entre 2009 y 2016 se invirtieron alrededor de 466 millones de dólares.

El Presupuesto 2020 del Tribunal asciende a 55.145.200 euros, de los cuales el 49% será financiado por Gobierno del Líbano, y 51% a través de contribuciones voluntarias. El Tribunal tiene un fuerte apoyo del Líbano, que cumple con su obligación financiera todos los años. Adicionalmente, 29 donantes de cinco regiones geográficas distintas han contribuido voluntariamente al Tribunal desde su creación.²¹⁷⁰

²¹⁶⁷ TRIBUNAL Especial para el Líbano, 2020. Undécimo informe anual de marzo de 2019 a febrero de 2020, Página 41-42. Disponibilidad y acceso: https://www.stl-tsl.org/sites/default/files/documents/annual-reports/STL_11th_Annual_Report-EN.pdf. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

²¹⁶⁸ TRIBUNAL Especial para el Líbano, 2020. Documentos del Tribunal, [en línea] Página 01. Disponibilidad y acceso: <https://www.stl-tsl.org/en/documents/internal-regulatory-documents>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

²¹⁶⁹ ICTJ. S.F. *Óp. Cit.* Pág. 2

²¹⁷⁰ TRIBUNAL Especial para el Líbano, 2020. *Óp. Cit.*

El Tribunal Especial para Líbano posee como órgano de vigilancia *“un Comité de Gestión compuesto por representantes de los Estados donantes, representantes del gobierno y el Secretario General de las Naciones Unidas. El cual tiene como función la supervisión del presupuesto anual del tribunal y otros asuntos financieros, así como la provisión de asesoramiento y orientación política sobre aspectos no judiciales del funcionamiento del tribunal que incluyen cuestiones de eficiencia. El comité hace visitas anuales al tribunal.”*²¹⁷¹

19. EL PAPEL DE LA VÍCTIMA:

En relación al papel de la víctima, el Estatuto de creación del Tribunal Especial estableció en su artículo 17 que los derechos de las víctimas serían ejercidos por sus representantes, siempre y cuando estos no fueran vulnerados ni que se comprometieran las garantías del proceso ante las Salas o el juez.

El artículo 25 del Estatuto del Tribunal Especial para el Líbano y la regla 2 de las Reglas de Prueba y Procedimiento definen el concepto de víctima reconocido en el ámbito de la jurisdicción del Tribunal. Específicamente el artículo 25 del Estatuto considera víctima a aquella persona: *“que hayan sufrido daños como consecuencia de la comisión de delitos por parte de un imputado condenado por la Tribunal”*.

Las reglas de procedimiento en su regla 2 reconocen tres tipos de víctima:

- a) *Víctima directa*
- b) Víctima que puede participar en el procedimiento
- c) Víctimas indirectas

Las víctimas para ser consideradas como tal deben primero *“ser una persona física o natural, segundo deben probar su identidad ya sea de manera personal o por medio de representante, tercero deben probar que sus intereses se han visto afectados por un ataque bajo la competencia del Tribunal. Para que una víctima pueda participar dentro de un procedimiento debe presentar su solicitud ante la Unidad de Víctimas y Testigos, de conformidad con la regla 51 (B)”*.²¹⁷²

²¹⁷¹ OPEN Society Justice Initiative. S.F. *Óp. Cit.* Página: 126

²¹⁷² GIMÉNEZ Montero, Judith. 2017. *Óp. Cit.* Página: 94

En el “caso que la víctima sea un menor o una persona incapaz, la solicitud de participación puede ser presentada por otra persona en su representación. Las víctimas deben presentar prima facie prueba de su identidad y, en los casos que estén representadas por otra persona, prueba de identidad de ambas personas, así como prueba de la relación existente entre la víctima y su representante”²¹⁷³.

Los daños que puede argumentar la víctima como sufridos pueden ser de tipo:

- a) físico
- b) material
- c) psicológico

Los derechos de las víctimas ante el Tribunal son:

- a) derecho a expresar sus opiniones y observaciones
- b) derecho a participar en el procedimiento
- c) derecho a un juicio justo e imparcial.
- d) tener acceso a la transcripción completa de las audiencias y vistas que se celebren públicamente o de manera privada
- e) ser informado sobre cuestiones que afecten sus intereses personales

Las víctimas tienen derecho de conformidad con el artículo 17 del Estatuto del Tribunal a “presentar sus opiniones y observaciones en determinadas fases del procedimiento. No pueden participar en la investigación si no que únicamente pueden intervenir una vez el auto de procesamiento ha sido confirmado. Durante la celebración del juicio, las víctimas pueden participar haciendo alegaciones iniciales y finales, así como presentar pruebas y testificar. También pueden llamar a testigos, interrogarlos y volverlos a interrogar, así como presentar mociones y alegato. En la fase de apelación, el sentido que la regla 87 (D) de las Reglas de Prueba y Procedimiento solamente establece que las víctimas pueden participar: “de la manera que las Apelaciones consideren apropiada Cámara”. Adicionalmente, durante imposición de la pena, la regla 87 (C) de las RPP permite a las víctimas presentar sus

²¹⁷³ GIMÉNEZ Montero, Judith. 2017. Óp. Cit. Página: 94

opiniones y preocupaciones respecto al daño que han sufrido a consecuencia de los crímenes”²¹⁷⁴.

En todas las fases del procedimiento la víctima debe estar representada por un abogado, salvo que el juez de procedimiento previo lo autorice de forma distinta y solamente a quienes se les reconozca como víctimas tiene derecho a recibir representación legal proporcionada por el tribunal.

El juez de cuestiones preliminares es quien decide sobre la representación común de las víctimas o su división, la asistencia y participación de sus representantes en las audiencias, vistas y reuniones.

20. PERCEPCIÓN PÚBLICA:

Aunque los hechos terroristas son repudiados por la opinión pública, en este caso particular se llegó a considerar que la persecución y enjuiciamiento de los presuntos responsables de los actos terroristas del 14 de febrero de 2005 eran una persecución de la oposición política y que el Tribunal obedecía a esta ideología parcializada.

“...los principales problemas de implementación y funcionamiento del Tribunal Especial para el Líbano están relacionados con:

Falta de recursos, particularmente por los insuficientes aportes de parte del Gobierno del Líbano Imparcialidad: ha sido visto como un Tribunal en contra de la oposición política”²¹⁷⁵

Esto se debió el que el ex primer ministro Hariri tuvo una mala relación con grupos pro-Siria, además de esto el contexto que se vivía en temporada pre electoral en el que se encontraba Líbano al momento del atentado. La muerte de Hariri desencadenó una serie de protestas por lo que se creía que la labor del Tribunal se debía a intereses puramente políticos.

²¹⁷⁴ Ídem. Página: 164

²¹⁷⁵ GONZALEZ MEDINA, Diego, 2015, *Acerca de los Tribunales Híbridos*, Departamento de Derecho Constitucional, Bogotá Colombia, Serie Documentos de trabajo No. 41, Universidad Externado de Colombia, Paola Andrea Acosta Editora, Página: 48

21. NÚMERO DE CASOS INGRESADOS

Las primeras dos sesiones de los jueces del Tribunal Especial para Líbano, de conformidad con el informe anual de 2009 a 2010, los jueces del Tribunal tomaron posesión y sus sesiones fueron dedicadas a aprobar reglas de procedimiento y prueba y reglas para los centros de detención.²¹⁷⁶

El segundo informe del Tribunal expone que, en el periodo comprendido entre marzo de 2010 a febrero de 2011, conoció las siguientes solicitudes: 01 de liberar a Jamil El Sayed y 01 sobre su derecho a acceder a los documentos de su privación de libertad, 01 sobre la competencia del tribunal de seguir conociendo un asunto, 02 apelaciones para convocar a la Sala de Apelaciones, 01 acusación pública y 01 confidencial en proceso de confirmarse, 01 opinión sobre las reglas 68 g y 178 bis.²¹⁷⁷

El tercer informe anual del Tribunal, periodo de marzo de 2011 a febrero de 2012, indica que recibió las siguientes solicitudes: 73 solicitudes de actuar como víctima o testigo dentro de los procesos, 02 apelaciones en el caso de Jamil El Sayed.²¹⁷⁸

El cuarto informe para el periodo de marzo de 2012 a febrero de 2013, indica que en este período recibió las siguientes solicitudes: 500 mociones varias, 01 solicitud de declarar la incompetencia e ilegalidad del tribunal, 01 solicitud de permiso para solicitar la reconsideración de la decisión del juicio en ausencia, 01 solicitud de retiro de cargo por falta de divulgación de información del fiscal a la defensa, 01 solicitud de reprogramación de fecha de inicio del juicio, 01 apelación de la decisión de otorgar medidas de protección a testigos, 01 solicitud sobre la ley aplicable a los casos, mociones de la defensa sobre la forma de la acusación.²¹⁷⁹

²¹⁷⁶ TRIBUNAL Especial para el Líbano, 2009. Primer informe anual de marzo de 2009 a febrero de 2010, [en línea] Página 32-33. Disponibilidad y acceso: https://www.stl-tsl.org/sites/default/files/documents/annual-reports/Annual_Report_2011_EN.pdf. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

²¹⁷⁷ TRIBUNAL Especial para el Líbano, 2011. Segundo informe anual de marzo de 2010 a febrero de 2011, [en línea] Página 07-09. Disponibilidad y acceso: https://www.stl-tsl.org/sites/default/files/documents/annual-reports/Annual_Report_2011_EN.pdf. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

²¹⁷⁸ TRIBUNAL Especial para el Líbano, 2012. Tercer informe anual de marzo de 20 a febrero de 2012 [en línea] Página 07-09,12. Disponibilidad y acceso: https://www.stl-tsl.org/sites/default/files/documents/annual-reports/Annual_Report_2011_2012_EN.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

²¹⁷⁹ TRIBUNAL Especial para el Líbano, 2013. Cuarto informe anual de marzo de 2012 a febrero de 2013, [en línea] Página 07-12. Disponibilidad y acceso: https://www.stl-tsl.org/sites/default/files/documents/annual-reports/Annual_Report_2013_EN.pdf

El quinto informe del tribunal, del periodo de marzo de 2013 a febrero de 2014, recibió las siguientes solicitudes: 01 de confirmación de acusación y de mantenerla confidencial, de juzgarle en ausencia, de asignarle abogado, unir causas y ordenar el arresto y publicidad de la acusación en contra de Hassan Habih Mehri; aceptar la enmienda de la acusación presentada por la Fiscalía; 04 solicitudes de los defectos en las acusaciones presentadas por los abogados defensores, de 04 solicitudes de apelación de decisión de no aceptar desestimar la acusación por defectos de forma, 01 solicitud de suspender el proceso. Además, admitir 45 testigos y 186 pruebas, mociones para iniciar procesos por desacato en la divulgación de información confidencial de testigos, proposición del Registro como ponente de Amicus Curiae. En el caso de Jamil El Sayed la solicitud de apelación parcia y la solicitud oral de divulgación de información de testigos hecha por su abogado.²¹⁸⁰

El sexto informe del tribunal, que comprende marzo de 2014 a febrero de 2015, recibió las siguientes solicitudes: admitir 56 declaraciones de testigos por escrito, admitir 47 testimonio orales, 579 pruebas, 02 apelaciones. Además, solicitud de aplazar el juicio, revisar la evidencia proporcionada por el fiscal por un experto y hacer un informe de ella por la defensa del acusado Mehri. En relación al juicio por desacato por obstrucción a la justicia, recibió la investigación del Amicus curia de 02 eventos con cargos contra 02 periodistas y 02 personas jurídicas. Recibió impugnación de su competencia en los casos de desacato.²¹⁸¹

El séptimo informe del tribunal, que se extiende de marzo de 2015 a febrero de 2016, 01 solicitud de admitir prueba de registros telefónicos y compra de equipo telefónico, 01 solicitud de admitir prueba obtenida por medio de cables filtrados por wiki leaks, la presentación de pruebas en el caso principal continuo.²¹⁸²

[tsl.org/sites/default/files/documents/annual-reports/130301_Fourth_Annual_Report_EN.pdf](https://www.stl-tsl.org/sites/default/files/documents/annual-reports/130301_Fourth_Annual_Report_EN.pdf).

[Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

²¹⁸⁰ TRIBUNAL Especial para el Líbano, Quinto informe anual de marzo de 2013 a febrero de 2014, [en línea] Página 09-17. Disponibilidad y acceso https://www.stl-tsl.org/sites/default/files/documents/annual-reports/14-03-01_Fifth_Annual_Report_EN.pdf. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

²¹⁸¹ TRIBUNAL Especial para el Líbano, Sexto informe anual de marzo de 2014 a febrero de 2015, [en línea] Página 09-14. Disponibilidad y acceso https://www.stl-tsl.org/sites/default/files/documents/annual-reports/2015_Sixth_Annual_Report_EN.pdf. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

²¹⁸² TRIBUNAL Especial para el Líbano, Séptimo informe anual de marzo de 2015 a febrero de 2016 [en línea] Página 06-15. Disponibilidad y acceso https://www.stl-tsl.org/sites/default/files/documents/annual-reports/2016_Seventh_Annual_Report_EN.pdf.

El octavo informe para el periodo de marzo de 2016 a febrero de 2017, el tribunal recibió las siguientes solicitudes: 02 apelaciones de sentencia en casos de desacato, 07 solicitudes para apelar, 01 solicitud de suspender y retirar los cargos contra el acusado Amine Bradreddni por su supuesto fallecimiento, 01 apelación a la decisión de continuar el proceso contra Bradreddni, 01 solicitud de eliminar la evidencia relacionada con Bradreddni, aproximadamente 50 solicitudes de admisión de registros telefónicos y testigos expertos para la interpretación de esos registros.²¹⁸³

En el noveno informe para el periodo de marzo de 2017 a febrero de 2018, el tribunal recibió las siguientes solicitudes: en este período el tribunal entró en la tercera y última fase de presentación de evidencia, 02 medidas de protección para dos testigos, recibir 67 testimonios, 14 declaraciones testimoniales orales, 05 por medio de video conferencia, 57 testimonios escritos. Además, aceptar y recibir prueba documental, testimonial de expertos, prueba de audio y sus transcripciones. En este periodo se recibido para análisis bajo reserva la acusación de un caso.²¹⁸⁴

El informe para el período de marzo de 2018 a febrero de 2019, indica que en este período se concluyó con el caso principal del Fiscal versus Ayyash, Merhi, Oneissi y Sabra por el ataque que me mato al ex primer ministro Haari, 21 muertos y ocasiono lesiones a 226.²¹⁸⁵

El undécimo informe del Tribunal, para el período de marzo de 2019 a febrero de 2020, recibió las siguientes solicitudes: 01 solicitud para hacer públicos los documentos del

https://www.stl-tsl.org/sites/default/files/documents/annual-reports/16-03-01_Seventh_Annual_Report_EN.pdf.

[Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

²¹⁸³ TRIBUNAL Especial para el Líbano, Octavo informe anual de marzo de 2016 a febrero de 2017, [en línea] Página 07-15. Disponibilidad y acceso <https://www.stl-tsl.org/sites/default/files/documents/annual-reports/STLZ8thZAnnualZReportZ2016-2017ZENZweb.pdf>. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

²¹⁸⁴ TRIBUNAL Especial para el Líbano, Noveno informe anual de marzo de 2017 a febrero de 2018, [en línea] Página 07-20. Disponibilidad y acceso https://www.stl-tsl.org/sites/default/files/documents/annual-reports/20180312-STL_9th_Annual_Report_2017-2018_EN.pdf. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

²¹⁸⁵ TRIBUNAL Especial para el Líbano, Décimo informe anual de marzo de 2018 a febrero de 2019, , [en línea] Página 09-10. Disponibilidad y acceso: https://www.stl-tsl.org/sites/default/files/documents/annual-reports/20190226-STL_10th_Annual_Report-EN.pdf[Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

caso de Ayyash, 01 acusación para confirmación, 01 solicitud de víctimas para presentarse ante el tribunal.²¹⁸⁶

El Tribunal ha procesado a 10 personas, 5 de los cuales fueron procesados en ausencia.

22. NÚMERO DE CASOS RESUELTOS

En los últimos 12 meses, del periodo de marzo de 2009 a febrero de 2010, el cumplimiento de las tareas judiciales se limitó al tema de los cuatro detenidos generales libaneses en Beirut en relación con el caso Hariri. En contraste, los jueces han realizado intensamente su función reguladora mediante la adopción de varios conjuntos de Reglas y otros instrumentos normativos. Durante este período, celebraron dos sesiones plenarias y adoptaron la base de documentos del Tribunal, así como acuerdos con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) e INTERPOL. También prepararon dos proyectos de acuerdos, uno sobre cooperación legal con Estados, y el otro sobre la ejecución de sentencias. Finalmente, los jueces congelaron cualquier reclutamiento de personal legal y de apoyo y transfirió todos los recursos financieros así guardados a la Fiscalía para mejorar el trabajo de investigación del Tribunal para el año siguiente.²¹⁸⁷

El segundo informe del Tribunal expone que, en el periodo comprendido entre marzo de 2010 a febrero de 2011, tomó las siguientes decisiones: 01 decisión de asignar un juez prejuicio, 01 decisión de sobre la posible liberación de Jamil El Sayed y 01 sobre su derecho a acceder a los documentos de su privación de libertad, 01 decisión sobre la competencia del tribunal de seguir conociendo un asunto, 02 decisiones de convocar a la Sala de Apelaciones. Además, 01 apelación estaba en curso, 01 acusación pública y 01 confidencial en proceso de confirmarse, 01 opinión sobre las reglas 68 g y 178 bis.²¹⁸⁸

²¹⁸⁶ TRIBUNAL Especial para el Líbano, Undécimo informe anual de marzo de 2019 a febrero de 2020, , [en línea] Página 09-10. Disponibilidad y acceso: https://www.stl-tsl.org/sites/default/files/documents/annual-reports/STL_11th_Annual_Report-EN.pdf. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

²¹⁸⁷ TRIBUNAL Especial para el Líbano, 2010. *Óp. Cit.*

²¹⁸⁸ TRIBUNAL Especial para el Líbano, 2011. *Óp. Cit.* Página 07-09.

El tercer informe anual del Tribunal, periodo de marzo de 2011 a febrero de 2012, indica que tomó las siguientes decisiones: 01 confirmación de acusación, de hacerla pública y de juez preliminar en el caso Ayyash, 01 decisión de procedencia de juicio en ausencia. El inicio de procedimientos previos al juicio en contra de 04 sospechosos. Además, el juez preliminar determinó la relación de 3 ataques relacionados con el ataque del 14 de febrero de 2005. El tribunal decidió que la fecha límite para recibir solicitudes de participación de víctimas en los juicios sería 31 de octubre de 2011.²¹⁸⁹

El cuarto informe para el período de marzo de 2012 a febrero de 2013, indica que en este período se tomaron las siguientes decisiones: cambios en las reglas de prueba y procedimiento, 01 confirmación de continuar un juicio en ausencia, 120 decisiones de mociones presentadas, 68 personas aceptadas como víctimas en el proceso y la decisión de ser representadas por un representante común, 01 rechazó sobre la reconsideración de la ley aplicable en los juicios, 01 rechazó alegando incompetencia e ilegalidad del tribunal para conocer casos, 01 solicitud de retiro de cargos por divulgación de pruebas incompletas por parte del fiscal a la defensa. Además, se encuentra en proceso 1 apelación sobre medidas de protección otorgadas a víctimas, la preparación del juicio por parte de la defensa y el fiscal en el caso Ayyash, la fase de conclusión en el juicio de reclamación de divulgación de Jamil El Sayed.²¹⁹⁰

El quinto informe del tribunal, de marzo de 2013 a febrero de 2014, tomo las siguientes decisiones: 01 confirmación de acusación, decisión mantenerla confidencial de juzgar en ausencia, de asignarle abogado, unir causas y ordenar el arresto y publicidad de la acusación en contra de Hassan Habih Mehri; aceptar la enmienda de la acusación presentada por la Fiscalía, rechazar las 04 solicitudes de los defectos en las acusaciones presentadas por los abogados defensores, rechazó de 04 solicitud de apelación de decisión de no aceptar desestimar la acusación por defectos de forma, rechazó de 01 solicitud de suspender el proceso. Además, inicio el primer juicio ante el Tribunal, admitió 45 testigos y 186 pruebas, mociones para iniciar procesos por desacato en la divulgación de información confidencial de testigos, asigno al Registro como ponente de Amicus Curiae. En el caso de Jamil El Sayed rechazó la solicitud

²¹⁸⁹ TRIBUNAL Especial para el Líbano, 2012. *Óp. Cit.* Página 07-09.

²¹⁹⁰ TRIBUNAL Especial para el Líbano, 2013. *Óp. Cit.* Página 07-12.

de apelación parcia y la solicitud oral de divulgación de información de testigos hecha por su abogado.²¹⁹¹

El sexto informe del tribunal, que comprende marzo de 2014 a febrero de 2015, tomó las siguientes decisiones: 142 orales y escritas, entre las que destacan: admitió 56 declaraciones de testigos por escrito, 47 testimonio orales, 579 pruebas admitidas, 02 apelaciones rechazadas. Además, ordeno que las declaraciones de los testigos se hagan en audiencias públicas, emitió nuevas órdenes de arresto, confirmo la acusación consolidada en contra de 05 acusados, ordeno a la defensa del acusado Mehri presentar escrito previo al juicio y la posibilidad de impugnar evidencia proporcionada por testigos expertos, orden de escuchar el testimonio de Mawan Hamadh. En relación al juicio por desacato por obstrucción a la justicia, emitió cargos contra 02 periodistas y 02 personas jurídicas y se declaró competente de realizar este tipo de juicios. Se encuentra en trámite 1 tercera investigación por un tercer evento de desacato.²¹⁹²

El séptimo informe del tribunal, que comprende marzo de 2015 a febrero de 2016, tomó estas decisiones y emisión de órdenes, 147 decisiones fueron escritas, 94 fueron decisiones orales, se emitió sentencia en un juicio por desacato y obstrucción de justicia condenado a una multa de 10,000 euros, la primera decisión de admitir registros telefónicos, de compra de equipo y el rechazó de evidencia obtenida por medio de cables filtrados en wiki leaks. Además, del trámite el proceso principal con 199 declaraciones de testigos, un juicio por desacato y una investigación por un tercer evento.²¹⁹³

El octavo informe para el periodo de marzo de 2016 a febrero de 2017, el tribunal tomo las siguientes decisiones: 167 escritas y 57 orales. Entre ellas destacan: 02 apelaciones de sentencia en casos de desacato confirmando sentencia y condena, 06 rechazos de solicitudes para apelar, 01 decisión de no suspender y retirar los cargos contra el acusado Amine Bradreddni por su supuesto fallecimiento, 01 apelación a la decisión de revocar la decisión de continuar el proceso contra Bradreddni, 01 rechazó a la solicitud de eliminar la evidencia relacionada con

²¹⁹¹ TRIBUNAL Especial para el Líbano, 2014. *Óp. Cit.* Página 09-17.

²¹⁹² TRIBUNAL Especial para el Líbano, 2015. *Óp. Cit.* Páginas: 09-14.

²¹⁹³ TRIBUNAL Especial para el Líbano, 2016. *Óp. Cit.* Páginas: 06-15.

Bradreddni, admisión de aproximadamente 50 solicitudes de admisión de registros telefónicos y testigos expertos para la interpretación de esos registros. Además, ordenó la emisión al fiscal de una acusación enmendada y la confirmo, la emisión de nuevas órdenes de arresto y traslado para los acusados en la misma acusación de Bradreddni así como la anulación de las giradas en contra de Bradreddni.²¹⁹⁴

En el noveno informe para el periodo de marzo de 2017 a febrero de 2018, el tribunal tomo las siguientes decisiones: 167 escritas, 80 orales y 273 dictadas en juicio. En este período el tribunal entró en la tercera y última fase de presentación de evidencia, tomo la decisión de dictar 02 medidas de protección para dos testigos, recibir 67 testimonios, entre orales, video conferencia y testimonios escritos. Además, superviso el cumplimiento de las sentencias en contra de las personas procesadas por desacato, recibió prueba documental y testimonial de expertos, prueba de audio y sus transcripciones. Para este periodo se informó que se encontraba bajo análisis y reserva la acusación de un caso conectado con el caso objeto del tribunal, el caso presentado por los representantes de las víctimas.²¹⁹⁵

El décimo informe para el período de marzo de 2018 a febrero de 2019, indica que en este período se tomaron las siguientes decisiones: 01 rechazó de solicitud de absolución de la defensa de Oneissi, se completó el caso de desacato contra Ibrahim Mohamed Al Amin, 78 decisiones y órdenes escritas, 17 decisiones y órdenes escritas dirigidas a la Corte, 290 decisiones orales, la decisión de transcripción en tiempo real a francés.²¹⁹⁶

El undécimo informe del Tribunal, para el período de marzo de 2019 a febrero de 2020, remitió las siguientes decisiones 01 sentencia donde se reconoció el terrorismo, 01 confirmación de acusación, 01 decisión de hacer público el caso conectado de los ataques contra Morwan Hamade, George Hani y Elias El-Murr la cual se encuentra en fase previa al juicio, 01 decisión de hacer públicos los documentos del caso de Ayyash, 01 decisión de revocar las medias de protección a víctimas para poder presentarse como testigos ante el tribunal.²¹⁹⁷

²¹⁹⁴ TRIBUNAL Especial para el Líbano, 2017. *Óp. Cit.* Página 07-15.

²¹⁹⁵ TRIBUNAL Especial para el Líbano, 2018. *Óp. Cit.* Página 07-20.

²¹⁹⁶ TRIBUNAL Especial para el Líbano, 2019. *Óp. Cit.* Página 09-10.

²¹⁹⁷ TRIBUNAL Especial para el Líbano, 2020. *Óp. Cit.* Página 09-10.

El Tribunal Especial a enjuiciado a 10 personas como responsables del asesinato del primer ex ministro del Líbano, 5 en ausencia, de los cuales se han condenado a 4, absuelto a 5 y 1 falleció.

23. ANÁLISIS CUALITATIVO:

Aplicación exclusiva del derecho interno libanés²¹⁹⁸, en combinación con derecho internacional, las salas de apelaciones ingeniosamente han aplicado derecho internacional consuetudinario en la definición de terrorismo y la construcción de la responsabilidad penal individual.²¹⁹⁹

El alcance del Tribunal está limitado a su jurisdicción, que está autorizado para conocer únicamente los hechos ocurridos el 14 de febrero de 2005 y los conexos a partir del 1 de octubre de 2014, lo que ha sido censurado y calificado como la aplicación de una justicia selectiva, dejando en la impunidad las atrocidades cometidas en Líbano durante muchos años durante el conflicto armado²²⁰⁰.

El trabajo del Tribunal ha sido lento sólo después “...de cinco años de actividades, el tribunal consiguió la acusación de cuatro individuos en el caso conocido como *Fiscal v. Ayyash et al.*, y abrió un segundo caso, en el que se investigan tres ataques supuestamente relacionados con el ataque del 14 de febrero de 2005. Aún no se ha dictado ninguna sentencia”²²⁰¹

En 12 años de funcionamiento sólo ha tenido 9 procesados, la mayoría en ausencia por desconocerse su paradero, los juicios en ausencia no representan justicia, puesto que el procesado no tiene la posibilidad real de defenderse.

Luego de este estudio analítico en los aspectos que a mi juicio considere de mayor relevancia, se puede establecer que el Tribunal Especial para Líbano ha contribuido en la lucha contra la impunidad y fortalecimiento del estado de derecho, en cuanto a la aplicación de las normas internacionales en los fallos del tribunal, sin embargo; esto ha significado la inversión de muchos recursos económicos y el trabajo del Tribunal

²¹⁹⁸ VAN DER WILT, Harmer. 2014. *The Legacy of the Special Tribunal for Lebanon*. En: ALAMUDDIN, Amal, Nidal Jurdi, and David Tolbert. *Op.Cit.* Página: 268

²¹⁹⁹ Ídem. Página: 269

²²⁰⁰ ²²⁰⁰ VAN DER WILT, Harmer. 2014. *Op. Cit.* Página: 269

²²⁰¹ ICTJ. S.F. *Op. Cit.* Pág. 2

ha sido limitado por la distancia que existe entre la Haya y Líbano. Han sido muy pocos procesados comparados con los años de funcionamiento del Tribunal y los recursos invertidos, aunado a la visión de politización de los hechos, que no se considera un tema imparcial.

A continuación, se presenta de forma gráfica y sintética el trabajo realizado por el Tribunal Especial para Líbano.

		Mandato	Duración del Mandato	Cesación de los hechos que originaron el mandato	Inicio del primer juicio	Universo de casos	Casos procesados y/o relaciones procesales	Tiempo promedio de los casos	Casos pendientes de resolución	% Casos presentados versus casos resueltos	% Casos pasibles de procesamiento versus casos resueltos
1	Tribunal Especial para Líbano	Enjuiciar a los responsables del atentado de 14 de febrero de 2005 que causó la muerte del ex Primer Ministro del Líbano Rafiq Hariri y acompañantes, así como otros ataques ocurridos en el Líbano entre el 1° de octubre de 2004 y el 12 de diciembre de 2005, o cualquier otra fecha posterior que decidan las Partes con el consentimiento del Consejo de Seguridad, están conectados conforme a los principios de la justicia penal al atentado del 14 de febrero de 2005.	3 años prorrogables 12 años	14 de febrero de 2005	17 de enero de 2011	10	10	No se puede determinar	0	90%	90%

CAPÍTULO XVI

COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA

ANTECEDENTES

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala²²⁰² fue creada por un Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, el 12 de diciembre de 2006. El acuerdo fue denominado como “*Acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala*”²²⁰³ (CICIG),” ratificado posteriormente por el Congreso de la República²²⁰⁴ el 01 de agosto de 2007.

²²⁰² Según Carlos Castresana, Ex Comisionado de la CICIG. “...En el caso de Guatemala, el contexto legal es el del mencionado artículo 2 del Pacto de Derechos Civiles. La situación no es única en el país centroamericano, corresponde a una realidad extendida en la región latinoamericana y en otras del mundo. Se trata de países en que el violador más importante ya no es de origen estatal. El crimen organizado, las mafias que trafican con armas, con drogas y con seres humanos, migrantes, y especialmente mujeres y niños, que tienen presencia transnacional, mueven enormes recursos financieros y cuya capacidad de corrupción y violencia es ilimitada, desbordan a los estados. En estas condiciones, los Estados ya no violan el deber de respetar los derechos de sus ciudadanos, sino el deber de garantía, porque son incapaces de procurar justicia: no investigan, no persiguen, no castigan a los victimarios, no reparan a las víctimas.

Guatemala era en 2006 un socio leal de la Comunidad Internacional que manifestó su deseo de proteger a los guatemaltecos al tiempo que su incapacidad de lograrlo efectivamente sin ayuda. Actitud encomiable, porque muchos otros Estados están en condiciones similares, pero sus gobernantes prefieren negarlo o esconderlo. Traducida esa petición de ayuda en una solicitud formal al Secretario General de la ONU, se firmó a final de ese año un Acuerdo que daba lugar al nacimiento de la CICIG, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El Congreso guatemalteco ratificó el Acuerdo en agosto 32 de 2007 y en septiembre entró en vigor. Yo fui nombrado Comisionado el 14 de septiembre. Cicig era un mecanismo tradicional de asistencia técnica de la Cooperación Internacional, pero era mucho más. Podíamos hacer fortalecimiento institucional y formular recomendaciones de política criminal, pero podíamos además proponer reformas legislativas, y podíamos ejercer acciones disciplinarias y acciones penales como querellantes adhesivos, figura análoga a nuestra acción popular española...” APDHE. “La Justicia Universal en el derecho internacional: mesa redonda de expertos.” APDHE. Madrid. S.A. Página 31.

²²⁰³ ORGANIZACIÓN de las Naciones Unidas, 2006. Óp. Cit.

²²⁰⁴ Como requisito previo de implementación y aplicación, para garantizar la absoluta legalidad del acuerdo, el Estado de Guatemala consultó a su Corte de Constitucionalidad, la que en Opinión Consultiva dentro del Expediente 791-2007, el día 8 de mayo de 2007, declaró la Constitucionalidad del texto del Acuerdo celebrado entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), suscrito en la ciudad de Nueva York, el doce de diciembre de dos mil seis. Entre los aspectos de mayor relevancia esgrimidos por la corte de constitucionalidad en la opinión consultiva que permitió la entrada en vigencia del acuerdo de creación de la CICIG, podemos destacar algunos:

Los antecedentes históricos de su creación iniciaron “el 7 de agosto de 1987, fecha en la que se suscribe en Contadora, Panamá, el “Acta de Instalación de la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento”, hasta el 29 de Diciembre de 1996, día final en el que se firma el “Acuerdo de Paz Firme y Duradera”, es decir, en esos cerca de doce años, se negocian y firman cerca de 22 Acuerdos de paz entre los actores de los enfrentamientos armados de la región centroamericana.”²²⁰⁵

Dentro de las negociaciones de Paz hubo diversos Acuerdos entre los que se incluyen, los Acuerdos de Esquipulas I y II; Los Acuerdos de Oslo, Querétaro y de Madrid en el período comprendido entre 1990 y 1994; El Acuerdo Global sobre Derechos Humanos; la instalación de la Misión de Verificación de la ONU, MINUGUA y finalmente el mencionado Acuerdo de Paz Firme y Duradera y su programa de implementación ²²⁰⁶. Dentro de los puntos abordados y el progreso de las negociaciones surgió al final la CICIG como resultado de estos procesos de Paz. Sin embargo, sí es importante hacer la observación que las negociaciones de Paz iban más allá de un cese al fuego.

Si bien es cierto que este ente Internacional emerge de los Acuerdos de Paz como un mecanismo que dé respuesta a los grandes vejámenes que se cometieron con el conflicto armado interno, no se hubiesen podido consolidar sin la intervención de la Comunidad Internacional.

A pesar de los primeros tropiezos por parte del Congreso de la República de Guatemala acaecidos el 7 de enero de 2004, cuando se pretendía establecer la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y de Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS) en el cual se enfatizaba en la vulneración de algunas atribuciones que eran propias del Ministerio Público y con las enmiendas realizadas por la Corte de Constitucionalidad, se logró una nueva solicitud al Departamento de Asuntos Políticos de la Organización de Naciones Unidas, la que le dio origen al

“La teleología del acuerdo examinado resulta constitucional; sin embargo, para la ejecución del mismo debe interpretarse que las funciones de la Comisión, detalladas en el Acuerdo suscrito, se realizarán en respeto del marco constitucional y legal vigente en Guatemala, según lo desarrollado por esta Corte en la presente opinión.” Corte de Constitucionalidad. Expediente 791-2007. Opinión Consultiva. 8 de mayo de 2007.

²²⁰⁵ GARCIA Azofeifa, Ignacio. 2013. La Comisión Contra La Impunidad En Guatemala. Tendencias Hacia Un Derecho Penal Internacional Híbrido En Centroamérica. *Revista de Ciencias Jurídicas*. Guatemala: S.E. No. 132 (61-88). Sin ISSN.

²²⁰⁶ Ibid

establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el cual se firmó con las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 2006.

Fue una entidad única en su género, enfocada directamente en la lucha contra la impunidad en los casos de delitos cometidos por los cuerpos y aparatos clandestinos de seguridad. Planteando expresamente el concepto impunidad²²⁰⁷ y se apoyó de otros instrumentos de derechos humanos para su consolidación como experimento de las Naciones Unidas, estos instrumentos fueron:

- a) Declaración Universal de los Derechos Humanos;
- b) Convención Americana sobre los Derechos Humanos;
- c) Ley Marco de los Acuerdos de Paz; y
- d) Acuerdo Global sobre Derechos Humanos²²⁰⁸.

²²⁰⁷ “...Considerando que los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad atentan gravemente contra los derechos humanos a través de acciones delictivas, existiendo en los mismos capacidad de provocar impunidad entendida ésta como la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria o civil para los responsables de dichas acciones, eludiendo la investigación o la condena; todo lo cual conduce al debilitamiento del estado de derecho, impidiendo al Estado cumplir con su deber de garantizar a los ciudadanos afectados la protección de su vida, integridad física y el pleno acceso a la justicia, con la consecuente pérdida de la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas del país, Considerando que, como consecuencia de lo anterior se hace necesaria la implementación de un Acuerdo de carácter internacional en materia de Derechos Humanos que cree mecanismos efectivos de combate la impunidad provocada por los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, la cual afecta gravemente los derechos humanos fundamentales, Considerando que el establecimiento de dicha Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, en adelante CICIG, reforzará la capacidad del Estado de Guatemala para cumplir eficazmente sus obligaciones dimanantes de las convenciones de derechos humanos de que es parte y sus compromisos contraídos con arreglo al Acuerdo Global sobre Derechos Humanos de 29 de marzo de 1994,...” ORGANIZACIÓN de las Naciones Unidas, 2006. Óp. Cit.

²²⁰⁸ La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, sobre la cual no es necesario entrar a describir.

La Convención Americana sobre los Derechos Humanos: Este cuerpo legal de carácter internacional, fue suscrito por la Organización de los Estados Americanos, en San José de Costa Rica, el día 22 de noviembre de 1969, ratificada por el Estado de Guatemala y aprobada por el Congreso de la República de Guatemala del 14 de abril de 1978, a través del Decreto número 6-78. Dicha Convención en su Artículo 41 establece que: “La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones: a. Estimar la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América; b. Formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos; ...”

Era un órgano independiente²²⁰⁹ de carácter internacional, lo más parecido a una fiscalía, que contaba con personal internacional y nacional, cuya finalidad era apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tendieran al desmantelamiento de estos grupos. Mediante el apoyo a la investigación y persecución penal de un número limitado de casos complejos, así como mediante otras acciones dentro de su mandato, destinadas a fortalecer funcional y reglamentariamente a las instituciones del sector Justicia para que pudieran continuar enfrentando a estos grupos ilegales en el futuro.

Era una entidad de derecho público, además de interés de la sociedad civil y una necesidad del Estado, que se fundó en una serie de ordenamientos legales tanto del derecho nacional como internacional, que le permitieron poder cumplir su función sin el más mínimo asomo de duda en cuanto a su capacidad de acción en la defensa de los derechos humanos y lucha contra la impunidad, siempre respetando al Ministerio Público como titular de la investigación penal y a los jueces, tribunales y cortes como quienes tenían el poder de decisión.

Ley Marco de los Acuerdos de Paz: Aprobada con el decreto número 52-2005, creada con el objeto de establecer normas y mecanismos que regulen y orienten el proceso de cumplimiento de los Acuerdos de Paz, como parte de los deberes constitucionales del Estado para proteger a la persona y a la familia, de realizar el bien común y de garantizar a sus habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas, que debe cimentarse sobre un desarrollo participativo, que promueva el bien común y, que responda a las necesidades de la población.

Los Acuerdos de Paz, firmados en 1996 dieron esperanza a muchos guatemaltecos para intentar olvidar el pasado y reconstruir el país, con el apoyo de la comunidad internacional. Acuerdos que a la fecha no son más que una ilusión de justicia, ya que diferentes manifestaciones de violencia siguen siendo pan de cada día, lo que pone en peligro las propias bases de la frágil democracia guatemalteca. Es por ello que el Gobierno de la República de Guatemala, firmó el Acuerdo para la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, como una alternativa eficiente para tratar de crear mecanismos que les permitan a los guatemaltecos enfrentar con alguna posibilidad de éxito esas diversas manifestaciones de violencia.

Acuerdo Global sobre Derechos Humanos: Específicamente, en el compromiso cuarto, donde se establece la necesidad de desarticular los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Este es un compromiso con el cual Guatemala aún está en deuda. En su momento y para verificar el cumplimiento de los acuerdos de paz, creo La Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA). Misión que en la verificación de este componente en su informe correspondiente al período entre el 1 de julio de 2000 y el 30 de junio de 2001, señaló: "Existen indicios de que la participación de estos grupos (cuerpos de seguridad ilegales y aparatos clandestinos) en actividades y delictivas habría crecido, pero su naturaleza clandestina y el encubrimiento que gozan, dificulta su verificación. El gobierno debe combatir la impunidad que los ampara, especialmente la tolerancia, aquiescencia o complicidad de algunos funcionarios públicos."

²²⁰⁹ ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 2006. *Óp. Cit.*

El modelo híbrido de la ONU acordado para implementar en el territorio de Guatemala como lo fue la CICIG puso en evidencia los vejámenes cometidos post conflicto armado interno, mediante el cual se patente la existencia de la estructura criminal paralela que se gestaba en los órganos estatales. Lo que originó la disputa entre la labor del ente internacional y los poderes ilícitos a las sombras de las entidades del Estado, escudándose en la figura de la vulneración a la soberanía del país y una serie de constantes ataques²²¹⁰ por los convenios bilaterales que la Comisión proponía a Instituciones como el Tribunal Supremo Electoral²²¹¹.

En definitiva, la creación del *“Acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”*, representó un paso importante desde la Comunidad Internacional en la lucha contra la impunidad, pese a que se le limitó a conocer únicamente de los delitos cometidos por los cuerpos y aparatos clandestinos de seguridad”.

1. ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ FUE CREADO?

La CICIG nació a partir de la necesidad de restablecer la sociedad democrática en la República de Guatemala, tras el conflicto armado interno que duro 36 años²²¹² el cual dejó como resultado la muerte de más de 200.000 personas y otras atrocidades. Las secuelas generaron un alto índice de desigualdad social, delincuencia común y organizada, aunado a ello la ineficacia e inoperancia del sector justicia que se tenía arraigada afectando gravemente los derechos de los ciudadanos.

Un factor exponencial tal como lo establecen los antecedentes de la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala-CICIG, son las constantes *“acciones de cuerpos ilegales y aparatos clandestinas de seguridad, las cuales se desarrollaron a partir de las estructuras de contrainsurgencia del Estado y hoy en día aparecen y operan como redes parecidas a las mafias, las cuales están ampliamente*

²²¹⁰ Diario “La Hora” fundado en 1920, 2019. TSE: Ataques iniciaron a partir de la firma del convenio con CICIG, de fecha 02/07/2019. En: *Diario “La Hora”* [en línea]. Disponible en: <https://lahora.gt/tse-ataques-iniciaron-a-partir-de-la-firma-del-convenio-con-cicig/> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

²²¹¹ COMISIÓN Internacional contra la Impunidad en Guatemala, 2018. Carta de entendimiento interinstitucional entre el Tribunal Supremo Electoral y la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala de fecha 16 de agosto de 2018. En: *Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG* [en línea]. Guatemala, S.E. (1 – 9). [Consulta: 10 de diciembre de 2020]. Disponible en: <https://www.cicig.org/wp-content/uploads/2018/08/ConvenioTSE-CICIG.pdf>

²²¹² ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 2006. *Óp. Cit.*

*relacionadas con actividades económicas ilícitas y crímenes violentos y ejercen fuerte influencia en las diversas instituciones del Estado*²²¹³”.

Esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, operan desde los altos niveles estatales a fin de desarrollar actividades ilícitas quebrantando gravemente el orden constitucional y con ello asegurar su impunidad.

A raíz de la aparición de esas nuevas mafias que se esconden detrás de las instituciones gubernamentales y en algunos casos desde las entidades privadas a fin de mantener el control estatal, se hizo indispensable la creación de un ente que coadyuvara con los órganos encargados de la administración de justicia a disminuir los altos índices de corrupción e impunidad en la cual se encuentra inmersa Guatemala, con el cual se pudieran investigar estos actos de corrupción sin importar la condición social y posición política, los cuales iban desde asesinatos utilizando mecanismos estatales y abuso de poder, hasta el desfalco de las arcas del Estado, con contratos donde lo que menos importaba era el daño que se causara la población.

*“Después de una ola de ataques contra defensores de los derechos humanos en 2002, una coalición de ONGS de derechos humanos lanzaron una campaña cuyo objetivo era persuadir al Gobierno para que estableciera un órgano encargado de investigar las actividades de estos grupos. A principios de 2003, el Gobierno de Guatemala pidió al Departamento de Asuntos Políticos (DAP) de las Naciones Unidas, asistencia a fin de desarrollar un mecanismo que ayudara al Estado a investigar y enjuiciar los miembros de éstas. Después de debates y una misión de exploración técnica, Naciones Unidas firmó un acuerdo con el Gobierno de Guatemala el 7 de enero de 2004, el cual contenía disposiciones para la creación de la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y de Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS)”*²²¹⁴, la cual tuvo una serie de inconvenientes que desembocó en la oposición del Congreso de la República de Guatemala; se replanteó la propuesta incluyendo algunas observaciones hechas por la Corte de Constitucionalidad para una nueva petición al Departamento de Asuntos Políticos²²¹⁵ para continuar las negociaciones para negociar el establecimiento de la *“Comisión Internacional contra la Impunidad en*

²²¹³ ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 2006. *Óp. Cit.*

²²¹⁴ *Ídem.*

²²¹⁵ Departamento de Asuntos Políticos-DAP.

Guatemala (CICIG), las que terminaron con la firma del acuerdo con las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 2006, ratificado por el Congreso de Guatemala el 1 de agosto de 2007, y entró en vigor el 4 de septiembre del mismo año, cuando el Estado de Guatemala notificó a la ONU que había completado sus procedimientos internos para su aprobación y ratificación”²²¹⁶.

Esto llevaba implícito la forma en la que este ente internacional iba a operar en cuanto a la investigación y acompañamiento al Ministerio Público y otras instituciones en hechos delictivos de los casos en los que se viera involucrado un CIACS.

2. PAPEL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN SU CREACIÓN

El papel de la Comunidad Internacional fue relevante para su creación, si bien el impulso porque naciera lo dio la sociedad civil guatemalteca, se logró el apoyo de Naciones Unidas por medio de la oficina de asuntos políticos para que acompañara con ayuda de expertos internacionales en la creación del Acuerdo, apoyo que debió continuar para que el ente pudiera operar, ya que su presupuesto no provenía de los fondos comunes de Naciones Unidas, sino de las donaciones que los diferentes países de la Comunidad Internacional quisieran hacer para poder sufragar sus gastos²²¹⁷. Donde sin el apoyo de los países que dieron aportes dotando de personal y recursos económicos la misión no hubiera podido operar.

3. ¿CÓMO SE ABORDÓ EL TEMA DE LA SOBERANÍA?

Para que la CICIG pudiese nacer a la vida jurídica, tuvo varios obstáculos, el primero fue el cuestionamiento sobre la posible violación de la soberanía guatemalteca, es de recordar que *“La soberanía representa una garantía fundamental para la definición autónoma de los pueblos de allí, que la existencia y desarrollo del Derecho Internacional que compromete y limita el ejercicio de la soberanía ha sido la respuesta: i) a la existencia de un mundo cada vez más interdependiente y ii) a los abusos, excesos y atropellos cometidos por los dirigentes de los estados en nombre*

²²¹⁶ ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 2006. *Óp. Cit.*

²²¹⁷ COMISIÓN Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, 2019. Duodécimo informe de labores, Juntos lo hicimos, Guatemala. En: *Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala* [en línea]. Disponible en: <https://www.cicig.org/wp-content/uploads/2019/08/InformeLegadoJusticia-SI.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

*del ejercicio legítimo de la soberanía. Conforme a lo expuesto se puede decir que existen dos conceptos de soberanía: 1. La soberanía representa un elemento constitutivo del Estado y por lo tanto es prejurídico y su entidad es una, monolítica. El Estado Soberano como entidad política con plena capacidad de autodeterminación. 2. El otro punto de vista acerca de la soberanía resalta su carácter flexible acorde con un orden legal internacional que define los derechos y obligaciones fundamentales de los Estados*²²¹⁸.

En el caso de CICIG, esta duda quedó de manifiesto por parte de Congreso de la República de Guatemala, cuando la comisión de relaciones internacionales del Congreso guatemalteco votó en contra de la CICIG argumentando la defensa de la soberanía, lo que desembocó en la consternación por parte de algunos sectores de la sociedad y de la Comunidad Internacional. Entre el enardecido debate legislativo y la emisión favorable de la Opinión Consultiva número 791 – 2007, finalmente el 01 de agosto de 2007 el Congreso de Guatemala ratificó el acuerdo que le dio vida a la CICIG²²¹⁹. Ni con objeto de creación de la comisión ni en el desarrollo del mandato de manera alguna se afectó la soberanía nacional. El titular de la investigación penal era y es el ministerio público y la participación en los casos fue como sujeto procesal. La CICIG coadyuvo con el sistema de justicia para combatir la impunidad, nunca lo desplazó.

4. TIPO DE GOBIERNO ¿DEMOCRACIA?

En general se reconoce a Guatemala como un país democrático desde que entró en vigencia la Constitución Política de la República en 1985 en la cual se reconoce como forma de gobierno en Guatemala el de tipo republicano, es decir, se basa en la República; en el Artículo 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala se lee *“Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de Gobierno es republicano, democrático y representativo”*²²²⁰.

²²¹⁸ RINCON Sabogal, César Augusto. 2013. *Administración de Justicia en la Corte Penal Internacional desafíos, oportunidades y sistemas alternativos*, Universidad de Granada, pág. 7.

²²¹⁹ WOLA, Advocacy for Human Rights in the Americas, *Estudio de investigación de WOLA sobre la experiencia de la CICIG*, Washington, DC.

²²²⁰ ASAMBLEA Nacional Constituyente. 1985. Constitución política de la República de Guatemala, Art. 140.

La democracia plena se reconoce a partir de la firma de los Acuerdos de Paz, cuando se declara el cese al fuego y se promueve la participación ciudadana, sin embargo, siendo un pequeño grupo con gran poder económico los que manejaban y siguen conduciendo el país; los grupos vulnerables a pesar que tenían cierta participación no eran tomados en cuenta o eran manejados para no generar un riesgo a estas elites que el país.

Durante muchos años a pesar de ser un país democrático en teoría, la participación ciudadana siempre era dejada a la deriva y un punto central en esto es que cuando se promovió la instauración de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ante la negativa del Congreso de la República, además de la consternación de la Comunidad Internacional, ciertos grupos sociales presionaron hasta ser escuchados y es así como se logró la ratificación por parte del Estado de la aprobación para darle vida a la CICIG.

La participación ciudadana y el clamor del pueblo se ve aún más potencializado cuando en el 2015 la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti se veía involucrada en un gravísimo caso de corrupción investigado por la CICIG²²²¹, el denominado caso “La Línea”, el cual enmarcaba su posible participación en una red de corrupción de defraudación aduanera, tras la indignación de los ciudadanos y cansados de la corrupción, los ciudadanos se empoderan y el 25 de abril de 2015 se reúnen más de 30 mil personas en la Plaza de la Constitución en una manifestación pacífica para exigir la renuncia de la ex vicepresidenta²²²², las manifestaciones siguieron al menos seis semanas más, al conocerse también la posible participación del entonces Presidente de la República Otto Pérez Molina, en las cuales pedían también la renuncia del mandatario²²²³.

²²²¹ COMISIÓN Internacional Contra la Impunidad en Guatemala-CICIG, 2015. Informe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ocasión de su octavo año de labores, Guatemala, Pág. 10. En: *Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala-CICIG* [en línea]. Disponible en: https://www.cicig.org/uploads/documents/2015/COM_085_20151113_VIII.pdf [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

²²²² BARRETO, Bill, 2015. El clamor de una manifestación #REnunciaYa, Guatemala. En: *Plaza Pública* [en línea]. en: <https://www.plazapublica.com.gt/content/el-clamor-de-una-manifestacion-renunciaya> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

²²²³ ROJAS, A, de León I. y Barrios A., Prensa Libre, 2015. Miles de guatemaltecos manifiestan durante más de 18 horas contra corruptos. En: *Prensa Libre* [en línea]. Disponible en: <https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/manifestacion-guatemala-renuncia-30mgt/> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

Derivado de las constantes protestas y de los resultados obtenidos con el procesamiento penal de los mandatarios, la participación ciudadana se volvió más activa, llegando incluso a ser motivadora para otros países a promover y hacerse escuchar en contra de constantes actos de corrupción.

5. ¿ESTADO DE DERECHO?

La creación de la CICIG se dio dentro del marco del Estado de Derecho, siendo su pilar fundamental la Constitución Política de la República de Guatemala y tratados internacionales, para efectos del mandato en especial lo de derechos humanos, lo cual quedó confirmado por medio de la Opinión Consultiva 791 – 2007 en la cual la Corte de Constitucionalidad declaró que el acuerdo de creación de CICIG estaba en armonía con la Carta Fundamental guatemalteca.

6. ¿ORIGEN BASADO EN CIERTAS SUPOSICIONES O CONDICIONES FÁCTICAS?

En el acuerdo de creación se enmarca la intención de la creación de la CICIG, la cual era la identificación y desmantación de criminales que cumplieran con los supuestos de ser Cuerpos Ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que atentaban contra los derechos de los ciudadanos, socavando la institucionalidad del Estado de Derecho.

Por lo que su origen se basa tanto en suposiciones como condiciones fácticas, ya que los hechos acontecidos en el país ayudaron a identificar la existencia de CIACS y su forma de operar.

7. DOCUMENTO DE CREACIÓN

El documento que le dio origen es el Acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG), firmado en Nueva York, el 12 de diciembre de 2006, acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, el cual le dio origen al mandato y acuerdo de creación de la CICIG y que quedó confirmado por medio de la opinión consultiva favorable 791 – 2007 de la

Corte de Constitucionalidad en mayo de 2007, siendo ratificado por el Congreso de la República de Guatemala²²²⁴ el 1 de agosto de 2007.

De esta manera nació el ente Independiente con carácter Internacional cuyo propósito era brindar el apoyo al Ministerio Público y demás instituciones Estatales en la investigación y acompañamiento en la persecución de delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, así como otras actividades destinadas a propuestas legislativas que tenían como fin fortalecer las instituciones del sector Justicia para hacerle frente a estos grupos ilegales que promueven impunidad.

8. MANDATO

El mandato y acuerdo de la CICIG, en el que las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala consensuaron el Acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); se consignó que *“el órgano era de carácter independiente e internacional, tenía como propósito apoyar al Ministerio Público y a otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en generar las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos, así también otras acciones dentro de su mandato, destinadas a fortalecer a las instituciones del sector Justicia para que puedan continuar enfrentando a estos grupos ilegales mediante la promoción de reformas jurídicas contra la impunidad”*²²²⁵.

El convenio de creación se componía de 10 considerandos en donde se fundamentó el origen y marco legal del acuerdo, en estos se reconoció:

- a. *“El deber del Estado de proteger el derecho a la vida y a la integridad personal, así como proporcionar la tutela judicial efectiva, en consonancia con los compromisos asumidos internacionalmente en materia de Derechos Humanos,*

²²²⁴ ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 2006. *Óp. Cit.*

²²²⁵ *Ídem.*

- b. *La existencia de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad y el daño que provocan a la sociedad guatemalteca al tener capacidad de provocar impunidad, debilitando el estado de derecho.*
- c. *Las obligaciones adquiridas en el Acuerdo Global de Derechos Humanos para combatir los cuerpos ilegales de seguridad y los aparatos clandestinos de seguridad,*
- d. *Se determinó el rol de Naciones Unidas en la promoción y respeto de los Derechos Humanos,*
- e. *La existencia del acuerdo político de 13 de marzo de 2003 y “addendum” entre el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala y el Procurador de los Derechos Humanos, sobre el establecimiento de una Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala.*
- f. *La forma en que se solicitó la asistencia a la Organización de Naciones Unidas para el establecimiento y funcionamiento de la Comisión,*
- g. *El carácter internacional en materia de derechos humanos del Acuerdo, que creara mecanismos efectivos de combate a la impunidad provocada por los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad,*
- h. *El fin de la Comisión siendo este reforzar la capacidad del Estado de Guatemala para cumplir eficazmente sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos como parte de los compromisos contraídos en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos”²²²⁶.*

El acuerdo consta de 14 artículos, los cuales detallaban:

El artículo 1 los objetivos, el 2 las funciones de la Comisión, el 3 las facultades, el 4 la personalidad jurídica y capacidad legal de la Comisión, el artículo 5 señalaba la composición y estructura orgánica de la Comisión.

²²²⁶ ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 2006. *Óp. Cit.*

El artículo 6 estableció la forma en que el Gobierno de Guatemala debía cooperar con la Comisión, el artículo 7 reguló la forma en que se iban a sufragar los gastos, en el artículo 8 se plasmó la necesidad de seguridad y protección para el personal de CICIG, en el artículo 9 se puntualizó en la inviolabilidad de los locales y documentos; así como las exenciones fiscales para la Comisión.

El artículo 10 otorgó al Comisionado y al personal de CICIG de privilegios e inmunidades de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. El artículo 11 abordó los motivos por los que se podía retirar la cooperación para el funcionamiento del acuerdo, el artículo 12 estableció la forma para la solución de controversias, en el artículo 14 se reguló la entrada en vigencia y duración y en el artículo 15, la forma de hacer modificaciones al acuerdo.

El funcionamiento de la CICIG se extendió hasta el 3 de septiembre de 2019, porque el presidente Jimmy Morales junto al ejército de Guatemala anunció el 31 de agosto de 2018 la no renovación del mandato de la CICIG²²²⁷. En ese periodo de vigencia el mandato tuvo 5 prórrogas las cuales fueron²²²⁸:

- a. El 24 de marzo de 2009 fue la primera prórroga que lo extendía hasta el 4 de septiembre de 2011 previa petición del Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, mediante carta dirigida al Secretario General, en que se solicitó que el mandato de la CICIG siguiera vigente por dos años más.
- b. El 23 de diciembre de 2010 se dio la segunda prórroga, para el que se utilizó el procedimiento regulado en el artículo 14 del Acuerdo sobre el establecimiento de la CICIG, solicitando un prórroga de 2 años más contados a partir del 4 de septiembre de 2011.

²²²⁷ CALVET Martínez, Elisenda, 2019. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dilemas tras 12 años de actuación. *Documentos de Trabajo* [en línea]. España, Universidad de Barcelona: Fundación Carolina, Documento de trabajo No. 6 (2ª época), pág. 13. [Consulta: 10 de diciembre de 2020]. ISSN-e: 1885-9119. Disponible en: https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/06/DT_FC_06.pdf

²²²⁸ COMISIÓN Internacional Contra la Impunidad en Guatemala-CICIG. S.F. Mandato y acuerdo, Guatemala. En: Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala [en línea]. Disponible en: <https://www.cicig.org/cicig/mandato-y-acuerdo-cicig/> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

- c. Del 04 de septiembre de 2013 al 03 de septiembre de 2015 se dio la tercer prorroga durante el gobierno de Otto Pérez Molina.
- d. Del 04 de septiembre de 2015 al 03 de septiembre de 2017, también en el gobierno del presidente Otto Pérez Molina, dio lugar a la cuarta prorroga.
- e. Finalmente, el presidente Jimmy Morales solicitó a las Naciones Unidas, el 16 de abril de 2016 la que sería la última prórroga del mandato de CICIG, el que se ejecutó entre el 04 de septiembre de 2017 al 03 de septiembre de 2019.

Este mecanismo internacional especial de protección de los derechos humanos, como ya lo señalamos, nació a iniciativa del Estado para cumplir los compromisos adquiridos internacionalmente en materia de Derechos Humanos, así como las garantías imperativas de protección a los derechos de las ciudadanos y con la misma filosofía el Estado pidió las prórrogas, las cuales no tenían límite impuesto, pero fue el presidente Jimmy Morales quien en un momento de grave agudización de la corrupción desde el ejecutivo, decide dar por terminado el mandato, sin importar el bienestar ni el querer ciudadano solo le importo complacer a las organizaciones criminales.

Su mandato contempló temas fundamentales para su funcionamiento, sin embargo; contó con tres grandes debilidades las cuales son:

- a. No definió los conceptos de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, al no existir definición dio lugar a controversia sobre los casos que investigaba.
- b. No dotó de inmunidad a los funcionarios nacionales, dejándolos ante graves riesgos durante y después de la vigencia del mandato.
- c. No se consignó la incorporación directa de los funcionarios internacionales para ejercer derecho en el país, lo que también obstaculizó el trabajo de la Comisión al vedarse el proceso interno de homologación por considerar a los funcionarios internacionales una amenaza procesal para los acusados.

Pese a estas falencias, el mandato de CICIG resultó ser suficiente para el cumplimiento de sus funciones en el país, derivado también del compromiso de sus funcionarios para obtener resultados.

A. OBJETIVOS

El mandato de la CICIG, según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo, perseguía tres objetivos principales los cuales eran:

- a. *“Investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación.*
- b. *Colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes;*
- c. *Hacer recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin”²²²⁹.*

B. ALCANCES DEL MANDATO

El mandato facultaba a la Comisión para:

- a. *“Determinar la existencia de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, la forma de operar, fuentes de financiamiento y si existen vínculos con entidades estatales y otras que atenten contra los derechos de las personas.*
- b. *Contribuir con el Estado para la investigación y promoción de la persecución penal de los CIACS, así como recomendar las políticas públicas que promuevan la erradicación de estos cuerpos ilegales,*

²²²⁹ ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 2006. Óp. Cit.

incluyendo las reformas jurídicas e instituciones que sean necesarias para cumplir con dichos fines.

- c. *Para poder cumplir a cabalidad con las funciones atribuidas “la CICIG actuará con absoluta independencia funcional en el desempeño de su mandato”²²³⁰.*

C. COMPETENCIA

Como quedó plasmado en los considerandos y el artículo 1 del Acuerdo, la Comisión era competente para *“coadyuvar al Ministerio Público en la investigación de todos aquellos casos cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad y cualquier otra conducta delictiva conexas en territorio guatemalteco. La CICIG tuvo independencia para seleccionar los casos que trabajaba”²²³¹.*

D. FORTALEZAS

Entre las fortalezas de la Comisión otorgadas por el mandato se pueden señalar:

1. Evitar toda injerencia del gobierno de Guatemala sobre la contratación de personal y elección del método de trabajo²²³².
2. Crear la Comisión con independencia económica del gobierno guatemalteco²²³³.
3. Establecer la importancia de la seguridad y protección para el personal²²³⁴.
4. Garantizar la inviolabilidad de locales y documentos²²³⁵.
5. Dotar de inmunidades diplomáticas al Comisionado y al personal internacional²²³⁶.
6. Permitir la prórroga del mandato cuantas veces fuera solicitado²²³⁷.

²²³⁰ ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 2006. *Óp. Cit.* Artículo 2,

²²³¹ Ídem. Artículo 1

²²³² Ídem. Artículo 5.

²²³³ Ídem. Artículo 7.

²²³⁴ Ídem. Artículo 8.

²²³⁵ Ídem. Artículo 9.

²²³⁶ Ídem. Artículo 10.

²²³⁷ Ídem. Artículo 11.

7. Reconocer la categoría del mandato como tratado internacional en materia de derechos humanos, lo que le daba una jerarquía frente al derecho interno.
8. Creación de mecanismo autónomo de solución de diferencias.

Todo esto se reflejó en los casos que se investigó, en las personas identificadas dentro de las estructuras y los fenómenos criminales descubiertos.

E. REGLAS DE ADMISIBILIDAD

Las reglas de admisibilidad no se desarrollaron exactamente como en los Tribunales Internacionales, de conformidad con el mandato se pueden establecer de la siguiente manera:

- i. *Ratione Personae*: todos aquellos miembros de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad o que hayan contribuido con estos en la comisión de delitos²²³⁸.
- ii. *Ratione Materiae*: Delitos contenidos en las leyes penales guatemaltecas²²³⁹ y garantías consagradas en los Convenios Internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Guatemala.
- iii. *Ratione Temporis*: Crímenes que no hayan prescrito de acuerdo a lo establecido en los artículos 33 y 34 del Código Procesal Penal.
- iv. *Ratione Loci*: Sólo se aplicó para los crímenes cometidos en el territorio guatemalteco²²⁴⁰, principalmente delitos ligados con delincuencia organizada.

Internamente, no existieron criterios estandarizados para la admisión de casos, se tomaron en cuenta factores como participación de delincuencia organizada y el impacto de los crímenes, esto dio flexibilidad en el actuar de la Comisión, pero

²²³⁸ ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 2006. *Óp. Cit.* Artículo 1.

²²³⁹ *Ídem.*

²²⁴⁰ *Ídem.*

también fue una debilidad que provocó críticas en cuanto a que los casos eran selectivos.

F. TIEMPO DETERMINADO

En el artículo 14 del Acuerdo estableció la vigencia del Acuerdo, siendo esta por un período de 2 años, los cuales se podrían prorrogar cuantas veces el Estado de Guatemala lo solicitara. Llegando a funcionar durante 12 años. La temporalidad asignada fue uno de los puntos débiles de la Comisión, por ejemplo, en sus dos primeros años de trabajo, la mitad del tiempo se invirtió en la dotación de personal, sede y recursos materiales para trabajar. Aún así sus resultados fueron buenos gracias al trabajo realizado en el caso Rosenberg principalmente.

G. DISTRIBUCIÓN DEL PODER.

En el artículo 5 del Acuerdo de Creación, se delegó a las Naciones Unidas la facultad de nombrar al Comisionado, a su vez a éste se le delegó la función de contratar al personal nacional e internacional, administrar libremente los recursos dados por la comunidad internacional, garantizar la inviolabilidad de sus documentos e instalaciones, inmunidad del personal internacional en cumplimiento del mandato, etc. Por lo que el gobierno de Guatemala no tenía injerencia en la conformación y método de trabajo de la Comisión, ni podía exigir cuentas. Las cuentas se rendían a los países donantes ante Naciones Unidas. Pero desconociendo lo acordado por el Estado, el Expresidente Morales pretendía que la comisión le rindiera cuentas.

9. ¿SURGIÓ COMO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES?

A. ¿HABÍA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL?

El Estado de Guatemala tenía responsabilidad internacional en relación al Acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en primer lugar, porque el Estado de Guatemala ha ratificado Convenios y Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, como quedó expresamente contenido en los considerandos del Acuerdo de creación y en segundo lugar porque

el propio acuerdo era un Convenio internacional, bilateral catalogado en materia de derechos humanos.

B. OBLIGACIONES INTERNACIONALES

Las obligaciones internacionales que debía garantizar el Estado Guatemalteco por medio del Acuerdo de creación de CICIG eran las obligaciones contraídas al ratificar la Carta de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En el caso de CICIG, el Acuerdo de creación fue reconocido con un tratado de Derechos Humanos y con la jerarquía de tratado Internacional tal como se menciona en uno de los considerandos²²⁴¹ de dicho acuerdo referente a los compromisos Internacionales en materia de derechos humanos, que en este caso se reflejaban en la lucha contra la impunidad, dando especial énfasis al acceso a la justicia, las garantías judiciales y la protección judicial.

C. ¿ABORDA HECHOS ILÍCITOS INTERNACIONALES?

Sí, ante la incapacidad de Guatemala de investigar por sí mismo los hechos objeto de investigación de la Comisión, esta incapacidad de hacer justicia se traduce en un comportamiento atribuible al Estado que constituye una violación a las obligaciones internacionales. Uno de los objetivos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, era apoyar para combatir los hechos ilícitos que se originaban en el territorio guatemalteco, es decir, que la jurisdicción de las actuaciones únicamente era en el ámbito guatemalteco, es por ello que no se investigaban hechos ilícitos de carácter internacional.

La misma naturaleza que le dio vida al acuerdo de creación de la CICIG era apoyar al sistema de justicia para garantizar la vigencia de los derechos de los ciudadanos que se estaban violentando por parte de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, dentro del territorio guatemalteco como resultado de los 36 años de conflicto armado interno que sufrió Guatemala lo que llevaba implícito el hecho de que las estructuras criminales que se iban a investigar y en su caso procesar eran de

²²⁴¹ ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 2006. *Óp. Cit.* Página: 2

carácter nacional y en un alto número de estos formaban parte de las ramas del poder público.

10. COOPERACIÓN DE LOS ESTADOS.

En el momento de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ya existía una obligación de cooperación entre el Estado de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas, porque el convenio era bilateral y exigía a ambas partes a adoptar medidas para el funcionamiento del ente Internacional, las que quedaron plasmadas en el artículo 6 del convenio de creación de la CICIG, en el cual se establece que el gobierno de Guatemala proporcionará toda la asistencia necesaria para la realización de las actividades de la Comisión²²⁴², así como el estricto cumplimiento de sus funciones y en el artículo 7 establece que los gastos serán sufragados con contribuciones voluntarias de la comunidad internacional²²⁴³.

Es importante mencionar que algunos de los Estados cooperantes no solo apoyaban de manera económica, sino que, en algunas ocasiones proporcionaron personal Contingente²²⁴⁴ que fortaleciera las diferentes actividades que se llevaban a cabo por parte de la CICIG.

11. INDEPENDENCIA

Un aspecto fundamental para el desarrollo de las actividades de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala fue que en el mismo convenio de creación se estipuló que para lograr los fines y propósitos fundamentales que se pretendían con la creación de este ente internacional, debían actuar con total independencia, tal como se establece en el artículo 2 del convenio de creación ...*“La CICIG actuará con absoluta independencia funcional en el desempeño de su mandato”*²²⁴⁵..., así también se le confirieron facultades para recabar, evaluar y sistematizar información para poder desempeñar sus funciones con total autonomía.

²²⁴² ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 2006. *Óp. Cit.* Artículo 6

²²⁴³ Ídem. Artículo 7

²²⁴⁴ Recurso humano proporcionado por los diferentes países cooperantes que prestaban un servicio de fortalecimiento a la CICIG.

²²⁴⁵ ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 2006. *Óp. Cit.* Artículo 2

Por la complejidad de los casos y el perfil de las personas implicadas en la comisión de los hechos ilícitos, era muy importante que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala pudiese trabajar con total independencia, para que llevara a cabo sus funciones a plenitud y evitar que en el algún momento existiera algún tipo de interferencia o conflicto de intereses en los casos que se investigaban.

12. SELECCIÓN DE ACTORES

El mandato de CICIG era bastante claro y la misma situación que promovió la creación de este ente Internacional era para coadyuvar en la investigación, trabajar todos los casos relacionados a los CIACS, a partir de allí se originaron los actores, incluyendo: políticos, empresarios, abogados, jueces, diputados, funcionarios públicos, policías, personas vinculadas al narcotráfico y crimen organizado, así como todas las personas que de forma directa o indirecta estuvieran vinculadas con ellos.

Por la complejidad de los casos que conllevaban la participación de los CIACS, la ejecución de los hechos delictivos no podía desarrollarse por una sola persona, ni por un grupo determinado en un solo ámbito, lo que implicaba que la estructura debía de tener participación de varios actores y de diversos ámbitos para poder generarse impunidad entre ellos mismos en los hechos ilícitos que desarrollaban.

Por tanto, los actores correspondían a individuos vinculados a organizaciones criminales, jueces, fiscales, abogados, peritos, policías, instituciones estatales con facultades para participar en el proceso penal, ONG's y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

13. NORMATIVA RELEVANTE Y MARCO PROCEDIMENTAL

El mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, consigna que la facultad para querellarse estará regida por el Código Procesal Penal para la ejecución de sus funciones a nivel interno, se regía por toda la normativa interna de Guatemala, como lo son el Código Penal, Código Procesal Penal, Ley de Organismo Judicial y demás normativa en materia de derechos humanos, penal y administrativa que fuese necesaria utilizar.

Es por ello que tampoco se regulo un procedimiento específico, debido a que esto no estaba regulado dentro del acuerdo, el actuar de la Comisión estaba apegado a lo

regulado en el Código Procesal Penal, Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley del Organismo Judicial, y demás normas aplicables, pero al mismo tiempo se hacía uso de todo el marco legal internacional ratificado y aceptado por Guatemala al ser su labor lo más parecido a la de una fiscalía.

Es decir, era un modelo de fiscalía especial que apoyaba sin desplazar a la fiscalía nacional en la investigación y acompañamiento en los casos complejos que implicaban la participación de CIACS; no tenía plazos para trabajar los casos, aunque se apegaban a los plazos procesales en los que ya existía o ya estaban en un proceso penal y empezaban por medio de una denuncia o por la necesidades del país, tal como se puede evidenciar en el caso Rosenberg²²⁴⁶ que de acuerdo a la necesidad y complejidad del caso la CICIG tuvo intervención.

Los casos trabajados por CICIG, estaban apegados a los procedimientos regulados en la normativa guatemalteca y los procedimientos iniciaban tal como lo regula el Código Procesal Penal siempre que estuviera involucrado o cumpliera con los supuestos de un CIACS, respetando siempre las funciones del Ministerio Público y apegados a Derecho.

Dentro de la normativa interna de Guatemala, de la cual la CICIG, también tenía participación se encontraba el Decreto 21-2006 del Congreso de la República de Guatemala, el cual se denomina Ley contra la delincuencia organizada, esto debido a que muchos de los tipos penales que se abordan en esta ley, eran cometidos por los CIACS.

Debido a la naturaleza y complejidad de los delitos que aborda la Ley contra la Delincuencia Organizada, implicaban la participación de individuos con un alto poder económico y/o político para realizar estas conductas delictivas y generarse impunidad, tal es el caso de los delitos enumerados en el Artículo dos de esta ley los cuales son²²⁴⁷:

²²⁴⁶ COMISIÓN Internacional contra la Impunidad en Guatemala. S.F. Página Oficial de la CICIG, Caso Rosenberg. En: *Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala* [en línea]. Disponible en: <https://www.cicig.org/listado-noticias-2015/confirman-participacion-de-la-cicig-en-el-caso-rosenberg/> [consulta: 10 de diciembre de 2020].

²²⁴⁷ CONGRESO de la República de Guatemala. 2006. *Decreto 21-2006, Ley contra la delincuencia organizada*, 2006, Guatemala.

- a. *“Los contenidos en la ley contra la narcoactividad*
- b. *Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos*
- c. *Ley de Migración: ingreso ilegal de personas, tránsito ilegal de personas, transporte de ilegales;*
- d. *Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo: financiamiento del terrorismo y trasiego de dinero*
- e. *Código Penal: e.1) Peculado, malversación, concusión, fraude, colusión y prevaricato; e.2) Evasión, cooperación en la evasión, evasión culposa; e.3) Asesinato, plagio o secuestro, hurto agravado, robo agravado, estafa, trata de personas; e.4) Terrorismo; e.5) Intermediación financiera, quiebra fraudulenta, fabricación de moneda falsa, alteración de moneda, introducción de moneda falsa o alterada;*
- f. *Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduaneros: contrabando aduanero y de la defraudación aduanera*
- g. *De los contenidos en la presente Ley: g.1) Conspiración, asociación ilícita, asociación ilegal de gente armada, entrenamiento para actividades ilícitas, uso ilegal de uniformes o insignias, obstrucción de justicia; g.2) Comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional; g.3) Exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito.”*²²⁴⁸

Como parte de las funciones de la CICIG en relación a sugerir mecanismos o propuestas de ley que fortaleciera el sistema de justicia guatemalteco y propiciara mecanismos que coadyuven al esclarecimiento de hechos delictivos en los que participan los CIACS, se obtuvo la implementación de la Unidad de Métodos Especiales-UME del Ministerio Público²²⁴⁹, herramientas que fueron de valiosa utilidad para el esclarecimiento de diversos hechos delictivos; estas herramientas también son abordadas dentro de la ley contra la delincuencia organizada en el capítulo tercero, en lo que se refiere a las interceptaciones telefónicas y otros medios de comunicación²²⁵⁰.

²²⁴⁸ CONGRESO de la República de Guatemala. 2006. *Óp. Cit.*

²²⁴⁹ Es la Unidad designada para la interceptación de escuchas telefónicas para los miembros de las organizaciones criminales.

²²⁵⁰ CONGRESO de la República de Guatemala. *Óp. Cit.* Capítulo Tercero

“Artículo 48. Interceptaciones. Cuando sea necesario evitar, interrumpir o investigar la comisión de los delitos regulados en los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la presente ley, podrá interceptarse,

14. LEGITIMIDAD:

Como ya se ha mencionado, el mandato fue cuestionado desde su inicio, siendo en primera instancia la Corte de Constitucionalidad quien lo legitimó por medio de la opinión consultiva 791 – 2007, solicitada por el Congreso de la República de Guatemala en relación al contenido del acuerdo relacionado a la creación de la CICIG firmado en Nueva York el 12 de diciembre del 2006²²⁵¹.

La opinión consultiva giró en torno al contenido del acuerdo de creación de la CICIG, que se enmarcaba en tres aspectos²²⁵²

- a. Si era constitucional la creación de dicho ente,
- b. Si se mantenía la independencia y autonomía del Ministerio Público y
- c. La cantidad de diputados que debían votar a favor de la creación del ente internacional.

grabarse y reproducirse, con autorización judicial, comunicaciones orales, escritas, telefónicas, radiotelefónicas, informáticas y similares que utilicen el espectro electromagnético, así como cualesquiera de otra naturaleza que en el futuro existan. Artículo 49. Competencia para la solicitud. Los fiscales del Ministerio Público son los únicos competentes ante el juez correspondiente, para la solicitud de autorización de la interceptación de las comunicaciones mencionadas en el artículo anterior, cuando la situación lo haga conveniente. Cuando el órgano policial tenga conocimiento de la comisión o planificación de la comisión de delitos por grupos delictivos organizados, deberán acudir inmediatamente al Ministerio Público proporcionando toda la información necesaria para fundamentar la solicitud de la interceptación de dichas comunicaciones. Artículo 50. Requisitos de la solicitud de autorización. Las solicitudes de autorización para la interceptación de las comunicaciones reguladas en la presente Ley, deberán presentarse por escrito ante el juez competente con los siguientes requisitos: a. Descripción del hecho que se investiga, indicando el o los delitos en que se encuadran los mismos. b. Números de teléfonos, frecuencias, direcciones electrónicas, según corresponda, cualesquiera otros datos que sean útiles para determinar el medio electrónico o informático que se pretende interceptar para la escucha, grabación o reproducción de comunicación respectiva. c. Descripción de las diligencias y medios de investigación que hasta el momento se hayan realizado. d. Justificación del uso de esta medida, fundamentando su necesidad e idoneidad. e. Si se tuvieran, nombres y otros datos que permitan identificar a la persona o persone que serán afectadas con la medida. En los delitos en que esté en peligro la vida o la libertad personal, el Ministerio Público podrá presentar verbalmente la solicitud al juez competente quien resolverá en forma inmediata. Artículo 51. Necesidad e idoneidad de la medida. Se entenderá que existe necesidad de la interceptación de las comunicaciones cuando, los medios de investigación realizada demuestren que en los delitos cometidos por miembros de grupos delictivos organizados se estén utilizando los medios de comunicación establecidos en la presente Ley. Asimismo, se entenderá que existe idoneidad del uso de la interceptación de las comunicaciones cuando atendiendo a la naturaleza del delito, se puede determinar que la interceptación de las comunicaciones es eficaz para obtener elementos de investigación que permitan evitar, interrumpir o esclarecer la comisión de los delitos ejecutados por miembros de grupos delictivos organizados”.

²²⁵¹ CORTE de Constitucionalidad de Guatemala. 2007. Expediente 791-2007, de fecha 08 de mayo de 2007, Guatemala, Página: 1

²²⁵² Ídem. Página: 3

En dicha opinión consultiva la Corte de Constitucionalidad resalto desde los aspectos consignados en la Constitución Política de la República de Guatemala en el que desde el mismo preámbulo establece...*"la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social"*²²⁵³... siendo los derechos humanos los que se pretendían proteger con la creación del ente internacional, mismos que se garantizan en la carta magna. Así también lo regulado en el artículo 183²²⁵⁴ del mismo orden constitucional en el que se le confiere al presidente de la Republica la facultad para dirigir la política exterior, las relaciones internacionales para poder celebrar tratados y convenios internacionales.

En cuanto a la autonomía del Ministerio Público determino que si bien es cierto en el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público²²⁵⁵ se le atribuye a esta entidad el ejercicio de la acción penal, no excluye la posibilidad de recibir el apoyo de otras instituciones siempre que sea de manera legal, por ello en la opinión consultiva considero que no existía ninguna vulneración constitucional²²⁵⁶ en el convenio del acuerdo que le daba vida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Por el trabajo que realizó la CICIG que le permitió al Ministerio Publico procesar a personas de alto poder económico y político se trató de deslegitimar por medio de amparos y acciones de constitucionalidad el trabajo que se realizaba por parte del ente internacional, los cuales fueron rechazados, por lo que se usó otro método de desprestigio por medio de ataques mediáticos en contra del personal que llevaban los casos.

Dentro de los ataques que sufrió la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala se puede mencionar el del 27 de agosto de 2017, en el que el entonces presidente de Guatemala declaró Persona Non Grata a Iván Velásquez Gómez jefe

²²⁵³ CORTE de Constitucionalidad de Guatemala. 2007. *Óp. Cit.* Página: 1

²²⁵⁴ Ídem. Página: 5

²²⁵⁵ Ídem. Página: 13

²²⁵⁶ Ídem. Página: 24

de la comisión, por lo que la Corte de Constitucionalidad suspendió rápidamente la solicitud de expulsión del titular del ente internacional²²⁵⁷.

15. JURISDICCIÓN

Al ser grupos de delincuencia compleja que operan dentro del territorio guatemalteco lo que le dio origen a la creación del ente internacional, esta misma llevaba implícito la jurisdicción del actuar de dicha institución, la cual sería dentro del territorio de Guatemala, ya que el objeto fundamental era dismantelar los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad que operaban de manera ilícita promoviéndose impunidad e incrustándose en las entidades Estatales para lograr sus fines particulares en detrimento del estado de Derecho.

A. ¿QUIÉN PODÍA FORMAR PARTE DE UN CASO?

El Ministerio Público y todas aquellas instituciones gubernamentales que por razón de sus funciones se podían querellar como por ejemplo la Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría General de la Nación, etc. La CICIG en los casos que así lo decidiera acorde a su mandato y cualquier persona u organización en representación de las víctimas, los jueces y los abogados defensores.

B. ¿QUÉ PROBLEMAS SE PODÍA DEBATIR?

En el Acuerdo de creación de la CICIG no se consignó un tipo penal o problemática específica que se podía debatir, sin embargo, al estar regido por la legislación nacional, esta entidad podía coadyuvar en cualquier caso de cualquier tipo penal siempre que se viera involucrado una persona con los presupuestos para ser considerado un Cuerpo Ilegal y Aparato Clandestino de Seguridad, los que podían ir desde, asesinatos, peculado, abuso de autoridad, financiamiento electoral ilícito, cohecho, etc.

²²⁵⁷ ZECHMEISTER, Elizabeth J y Azpru Dinorah, 20017. *¿Cuál es la opinión pública en relación a la corrupción, la CICIG, el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad en Guatemala?* S.E. Guatemala, Página: 1. Sin ISBN.

16. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN:

A pesar de ser un órgano independiente y con autonomía, se regía por la legislación nacional del Estado de Guatemala y al no emitir resoluciones en los casos implicaba que los medios de impugnación eran los mismos de la legislación interna incluyendo los regulados en la Ley de Amparo, Exhibición personal y de Constitucionalidad.

17. MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO

En el Acuerdo de creación no se establecieron mecanismos claros sobre como ejecutar el trabajo que desempeñaba la CICIG, sin embargo, en el transcurrir de los años, se comenzó a implementar el rendimiento de cuentas por medio de informes a donantes, informes de trabajo, etc. También los países donantes nombraron comisiones de evaluación del proyecto los cuales evaluaban periódicamente los resultados obtenidos por el ente internacional.

En la misma página web oficial de la CICIG²²⁵⁸ aparece el apartado en el cual se detalla el proceder para la rendición de cuentas en el que establecían que: *“el PNUD proporciona informes financieros trimestrales a todos los donantes. Además, cada año se realiza una auditoría independiente en virtud de las normas y reglamentos del PNUD y se comparte con los países donantes”*²²⁵⁹.

Esto representó una debilidad de la Comisión, debido a que no se tuvo un criterio uniforme de recolección de datos a lo largo de sus 12 años de funcionamiento, no contó con un experto para ese tipo de estadísticas, ni siquiera sus informes anuales daban seguimiento a los informes de años anteriores, en ellos nunca se publicó el presupuesto ni la cantidad de personas que laboraban para la institución. Datos únicamente consignados para los informes rendidos a los países donantes, estos informes no son públicos.

²²⁵⁸ COMISIÓN Internacional contra la Impunidad en Guatemala. S.F. *Óp. Cit.*

²²⁵⁹ Ídem

18. RECURSOS DISPONIBLES

A. HUMANO:

En cuanto al recurso humano en septiembre de 2007, la CICIG partió de cero, contando únicamente con el primer comisionado quien había sido nombrado por el Secretario General de la ONU. *“Tres comisionados dirigieron la Comisión durante sus 12 años de actividad en Guatemala: el fiscal español Carlos Castresana Fernández (septiembre 2007-julio 2010), el fiscal costarricense Francisco Dall’Anese Ruiz (agosto 2010-agosto 2013) y el fiscal colombiano Iván Velásquez Gómez (septiembre 2013-septiembre 2019). Según las necesidades, el comisionado fue asistido por un(a) Comisionado(a) adjunto(a), un(a) Jefe de Gabinete o un(a) secretario (a) internacional”*²²⁶⁰.

Los funcionarios que laboraron dentro de la CICIG, se podrían decir que fueron suficientes para el desarrollo de sus funciones de forma eficiente y eficaz, también se puede mencionar que, *“en el 2012, la CICIG y el MP, con apoyo del Fondo de Construcción de la Paz de Naciones Unidas, elaboraron el reglamento para la creación de la Dirección de Análisis Criminal (DAC) del Ministerio Público. La DAC actualmente cuenta con aproximadamente 165 digitalizadores y analistas, incluyendo analistas que son enlace de esa dirección con distintas fiscalías distritales y de sección en todo el territorio nacional”*²²⁶¹.

Adicionalmente, la CICIG en conjunto con la cooperación del gobierno de Estados Unidos apoyó al Ministerio Público para la implementación, capacitación y puesta en marcha de la Unidad de Métodos Especiales de Investigación.

En 2008 se asignaron 30 agentes de la Policía Nacional Civil a la CICIG, en cumplimiento del convenio entre el Ministerio de Gobernación y la CICIG, la *“creación de esta unidad policial PNC-CICIG debía, por un lado, facilitar la investigación de los casos que la comisión adelantaba, siendo una suerte de programa para capacitar y aprender trabajando, y por otro contribuir al esquema de seguridad del personal y las*

²²⁶⁰ COMISIÓN Internacional contra la Impunidad en Guatemala. S.F. *Óp. Cit.*

²²⁶¹ Ídem

*instalaciones de la Comisión*²²⁶². Llegando a ser más de 70 funcionarios policiales para inicios de 2017.

Este aspecto también se puede abordar desde dos vertientes, la primera desde el punto de vista del recurso humano con el que contaba la CICIG y por otro lado el recurso Humano involucrado dentro de los procesos penales de los casos en los que la Comisión tenía intervención.

En el primer período la CICIG estuvo constituida por 4 áreas²²⁶³: la Administración, la Dirección de Investigación y Litigio, la Oficina del Comisionado y el equipo de Policías Nacionales Civiles. Hasta el 2015 la distribución del personal de estas áreas era: en la administración 25 personas directamente del área administrativa y 32 del equipo de seguridad que correspondía a esta misma; La Dirección de investigación y litigio, la cual se subdividía en la sección de Información y análisis, Informática Forense, Investigación Financiera, Investigación Legal, Investigación policial, que contaba con un recurso humano de 74 personas; la Oficina del Comisionado, la cual estaba integrada por 19 personas y el equipo de PNC que estaba constituido por 47 personas.

A partir de la evolución del trabajo que realizaba la comisión y a raíz de las necesidades que surgieron por el crecimiento exponencial de los casos que se estaban llevando a cabo con el apoyo de la Comisión y aunado a ello los diferentes obstáculos que enfrentó la Comisión, se hizo manifiestamente indispensable la reestructuración en cuanto al recurso humano, es por ello que en el 2015 se tuvo una variante en las diferentes áreas de la comisión en el que se reforzó con personal las áreas con mayor carga laboral quedando el área Administrativa con 19 personas y 42 en seguridad; la Dirección de Investigación y Litigio con 104 personas, la Oficina del Comisionado con 29 personas y el equipo de PNC con 45 personas²²⁶⁴.

Dentro del personal que integraba la Comisión existía la intervención de diferentes países con el personal contratado directamente por la Comisión y por el apoyo de los diferentes contingentes que proporcionaban los países donantes, en los que caben mencionar que los datos correspondientes a 2018, en años anteriores se contó con un número muy variado de personal tanto de los que fueron contratados como los

²²⁶² COMISIÓN Internacional contra la Impunidad en Guatemala. S.F. *Óp. Cit.*

²²⁶³ *Ídem.*

²²⁶⁴ *Ídem*

grupos de contingentes proporcionados por los países para el cumplimiento del mandato de CICIG, siendo estos hasta el 2018 así: ; argentina: con 14 personas de las cuales 12 eran contingentes, Canadá con 2 personas, Chile 2 personas, Colombia 31 de los cuales 13 eran contingentes, Costa Rica 6 personas, El Salvador 6 personas, Francia 2 personas, Guatemala 140 de los cuales 45 eran contingentes, Honduras 1, Italia 1, México 3, Perú 4 todos contingentes, Portugal 1, España 4, Suecia 1 contingente, Uruguay 22 de los cuales 14 eran contingentes y Venezuela 1 persona²²⁶⁵, teniendo un total de 239 personas quienes integraban la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Al cierre de la Comisión en 2019 se contaba aproximadamente con un total de 150 personas.

Durante la vigencia del mandato desde 2008 al 18 de julio de 2019, *“se apoyó al Ministerio Público en la investigación de más de 1540 personas en los casos MP-CICIG. Como resultado de las investigaciones conjuntas, a julio de 2019, más de 660 personas están procesadas de las cuales aproximadamente el 70% goza de medidas sustitutivas”*²²⁶⁶.

“El MP y la Comisión investigaron e identificaron más de 70 estructuras criminales de alta complejidad. Más de 120 casos de alto impacto que fueron judicializados y cerca de 100 solicitudes de antejuicio que recibieron la colaboración de la CICIG”. ²²⁶⁷

Al cierre de CICIG *“se contaba con más de 400 condenas. Se ha estimado que la tasa de eficiencia del trabajo conjunto con la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECCI-CICIG, obtenida entre la presentación de imputaciones y la emisión de sentencias condenatorias, se acerca al 85%, lo cual supera ampliamente el promedio general de otras fiscalías nacionales”*²²⁶⁸. Esto hizo que la misión terminara con una aceptación de más del 75% de la población, pese a los ataques tanto a nivel nacional como internacional que desato el gobierno nacional y sus aliados que querían que se volviera al estado de total impunidad y violación de derechos humanos.

²²⁶⁵ COMISIÓN Internacional contra la Impunidad en Guatemala. S.F. *Óp. Cit.*

²²⁶⁶ Ídem

²²⁶⁷ Ídem

²²⁶⁸ Ídem

B. MATERIAL:

En cuanto a los recursos materiales que se le suministraron a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, iban desde innumerables cantidades de documentos tanto de requerimientos como de allanamientos que se realizaron, materiales digitales, auditivos y videos, etc. Que permitieron la elaboración de los planes de investigación y desarrollo de los mismos con el ministerio público como punto fundamental de la transferencia de capacidades en la práctica, así como para la elaboración de los informes de análisis e investigación criminal.

No se cuenta con datos estadísticos sobre esto, únicamente en el informe de cierre se mencionó que aumentaron en relación al número de casos que se trabajaron. Aunque se trató de dotar de recursos materiales suficientes, los procesos administrativos y disponibilidad de fondos resultaban ser verdaderos obstáculos para esta dotación.

En muchos casos la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala debía dotar hasta de papel a la Fiscalía Especial para que pudiese reproducir la documentación necesaria en los procesos. Fiscalía Especial que fue creada bajo el apoyo, coordinación, capacitación y dotación de parte de la CICIG.

C. PRESUPUESTO ASIGNADO:

Los recursos con los que contaba la CICIG desde el punto de vista económico se regularon en el artículo 7 del convenio de creación en el que se estableció que los gastos se sufragarían con aportaciones voluntarias de la comunidad internacional y que el Organismo Ejecutivo del Estado de Guatemala facilitaría los locales e instalaciones para su funcionamiento. Las que a propósito nunca dio. Teniendo que salir el pago de instalaciones del dinero donado por la Comunidad Internacional. Contrario a ello la CICIG dio un bono mensual a los agentes de la PNC que el gobierno asignó para investigación y seguridad, los que luego retiró cuando el expresidente Morales decidió impedir el trabajo de la CICIG, para lo cual también como estrategia de debilitamiento humano mandó mensaje a los países que apoyaban con personal, que el estado no podía responder por su seguridad para que ese personal internacional fuera retirado.

Dentro del apoyo económico y respaldo político que aportaron a la CICIG se pueden mencionar dentro de los países cooperantes como Alemania, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, México, Noruega, Países Bajos, Perú, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Suiza, Unión Europea, Uruguay²²⁶⁹.

Los gastos de esta entidad fueron financiados con las contribuciones voluntarias de la comunidad internacional, lo cual se tuvo durante los 12 años de labor de la Comisión un presupuesto total aproximado de 167 millones de dólares, un promedio de US 13,900,000.00 al año los cuales cubrían todos los gastos, desde los administrativos, de movilización, seguridad en algunos casos, logísticos, etc²²⁷⁰.

19. EL PAPEL DE LA VÍCTIMA:

En este tema la situación fue muy particular, debido a que en la mayoría de casos las víctimas no fueron parte activa del proceso, pues, era la Comisión la que se Querellaba al proceso en representación de los intereses, de la protección y restitución de los Derechos Humanos que se vulneraban por parte de los grupos criminales con características de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad y la Procuraduría General de la Nación en algunos casos, también se tuvo como querellantes a Organizaciones no gubernamentales en representación de las víctimas.

Es importante destacar, que dada la confiabilidad en la comisión un altísimo número de personas que consideraban que sus derechos estaban siendo vulnerados acudían a la comisión donde siempre se les atendió y se les dio el apoyo que en derecho correspondía y se mantuvo contacto con muchas de estas en los casos que reunían las condiciones para la intervención de la Comisión. Fue una constante la lucha por la defensa de los derechos de las personas y su restablecimiento cuando estos habían sido vulnerados.

²²⁶⁹ CORTE de Constitucionalidad de Guatemala *Óp. Cit.*

²²⁷⁰ *Ídem.*

20. PERCEPCIÓN PÚBLICA:

A pesar de los múltiples intentos de desprestigiar el trabajo que realizaba la Comisión en una encuesta realizada en 2017 por el Latin American Public Opinion Project sobre la percepción que se tenía de la CICIG y el Gobierno de Guatemala se determinó que la población guatemalteca tenía altos niveles de confianza al trabajo que estaba realizando la Comisión con un 70.6%, mientras que en relación a la Corte de Constitucionalidad se representó con niveles moderados de confianza siendo estos un 42.8%, los niveles de confianza en el Ministerio Público se situaba en 53.9 %. Algo importante de resaltar es que previo a la realización de la encuesta es que *“un tercio de los guatemaltecos (33.5%) creen que todos los políticos son corruptos y cerca de otro tercio (32.2%) cree que más de la mitad de lo políticos en Guatemala son Corruptos²²⁷¹”*.

El trabajo desempeñado por la CICIG tuvo un nivel alto de aceptación, existía una fuerte y sólida confianza por parte de la población a la labor que se realizaba por parte de esta institución, pese a que existieron diversos grupos que trataron de desestabilizar la labor que se estaba realizando, al ser grupos con alto perfil económico y político los que se veían involucrados en los casos apoyados por CICIG, esto conllevó que con los ataques a la labor se tratara de desprestigiar el trabajo realizado, la incomodidad por el trabajo de CICIG desembocó en la no renovación del mandato por parte del entonces presidente Jimmy Morales, derivado del conflicto de intereses en cuanto a que su hijo y hermano se vieron involucrados en un caso de corrupción investigado por la Comisión y él por un caso de Financiamiento Electoral.

La aceptación por parte de la población en la labor de la CICIG tuvo su mayor auge en *“la crisis política del 2015 en la que se convirtió en una institución con una amplia cuota de poder y legitimidad”²²⁷²*. A raíz del caso la Línea, el ente internacional logró una amplia aceptación por parte de la población guatemalteca, al haber develado un caso de corrupción en el que participaba el entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, el caso que alcanzó a estos dos mandatarios hizo

²²⁷¹ ZECHMEISTER, Elizabeth J y Azpru Dinorah. 2017. *Óp. Cit.* Página: 2

²²⁷² LEMUS, Jonatan, 2019. ¿Por qué fracaso la CICIG en Guatemala? *En: Centro de Estudios Económicos Sociales* [en línea]. Disponible en: <https://www.cees.org.gt/publicaciones/por-que-fracaso-la-cicig-en-guatemala-1> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

que la población tuviera cierta confianza en que la justicia era posible y que se podía procesar a las autoridades públicas de todo nivel.

Sin embargo, para contrarrestar la labor que venía realizando la Comisión, los grupos delincuenciales debían debilitar esa aceptación, lo que llevó al primer intento del Presidente Jimmy Morales de intentar expulsar al comisionado Iván Velásquez, *“esta decisión se vio revertida luego de la movilización de diversos actores y la resolución de la Corte de Constitucionalidad que suspendió la decisión presidencial”*²²⁷³, sin embargo las acciones no se detendrían allí, por lo que el mandatario siguió con una serie de actividades para lograr acabar con dicha institución, las que iban desde el cambio de actores como lo fue la remoción del entonces Canciller del Ministerio de Relaciones Exteriores Carlos Raúl Morales quien era partidario de la CICIG, por la ex viceministra Sandra Jovel quien se apegó a las acciones del Presidente por tratar de acabar con el ente internacional, la remoción de la Fiscal Thelma Aldana, las acciones para desprestigiar casos apoyados por la Comisión se desarrollaron por medio de Lobby anti CICIG ante el gobierno de Estados Unidos, promovida y financiada por parte de actores políticos, empresarios y estatales que se veían involucrados en casos de corrupción²²⁷⁴.

Por medio del lobby se manipuló la información de los casos, al involucrar aparentes intereses internacionales como sucedió con el Caso Vitkov, en el que se difundió que existía influencia del gobierno ruso atrás de él y que desembocó en que Estados Unidos congelara los fondos financieros²²⁷⁵ que aportaría, hasta que no se dilucidara esa afirmación.

21. NÚMERO DE CASOS INGRESADOS

Se tomará como casos ingresados, las denuncias que la CICIG recibió a lo largo de 12 años de trabajo, siendo estas casi 2000²²⁷⁶. Los cuales no se clasificaron en clase de problema denunciado, el registro fue una debilidad, en el primer año y medio de

²²⁷³ LEMUS, Jonatan, 2019. *Óp. Cit.*

²²⁷⁴ GARCÍA, Jordi, Nomada, 2018. Jimmy, Baldizón y estos mega-empresarios organizaron el lobby contra Todd y la CICIG (parte 1). En: *Nómada* [en línea]. Disponible en: <https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/jimmy-baldizon-y-estos-mega-empresarios-organizaron-el-lobby-contra-todd-y-la-cicig-parte-1/> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

²²⁷⁵ Ídem

²²⁷⁶ Dato que maneja la autora por haber trabajado durante un tiempo el registro de denuncias.

funcionamiento no se asignó número a todas las denuncias recibidas, lo que dejó un vacío de datos, el registro se formalizó a partir de septiembre de 2009.

22. NÚMERO DE CASOS RESUELTOS

En este apartado, más que casos resueltos se debe analizar los casos, entendiéndose por casos trabajados los casos que CICIG apoyo en la investigación, acompañó técnicamente y/o litigó. No se puede hablar únicamente de casos con sentencia, porque debido al retraso procesal no todos en los que CICIG trabajó llegaron a sentencia durante la vigencia de esta.

“De los más de 120 casos apoyados por la CICIG, más de 100 estuvieron a cargo de la FECl, abordando una variedad de temáticas criminales como atentados contra la vida e integridad personal (ejecuciones extrajudiciales, tortura, asesinato), financiamiento electoral ilícito, lavado de dinero, defraudación aduanera, corrupción y tráfico de influencias en el sector justicia (jueces, testigos, fiscales), corrupción municipal, corrupción en el sector de la construcción de obra pública y en los sistemas de transporte, salud y penitenciario, corrupción en el Congreso, extorsiones, droga y crimen organizado, trata de personas, corrupción en otras instituciones públicas como Registro General de la Propiedad, Registro de Información Catastral, Industria Militar, RENAP, etc”²²⁷⁷.

La CICIG trabajó con otras agencias Fiscales del Ministerio Público como “las Fiscalías de Sección de Delitos contra la Vida (casos Alaska y Extorsiones a Pilotos), contra la Trata de Personas (casos Primavera y Rosalinda), de Derechos Humanos (caso Comunidad las Nubes), contra la Corrupción, (caso Maskana -antes de ser trasladado a la FECl-), contra el Crimen Organizado (Caso Guarcax) y de Delitos Electorales (caso Financiamiento Electoral Ilícito FCN Nación), entre otros”²²⁷⁸.

“Otro indicador de la eficiencia del litigio y persecución penal son las cifras de sentencias obtenidas a lo largo de los años, que obviamente han ido en aumento, al

²²⁷⁷ COMISIÓN Internacional contra la Impunidad en Guatemala. S.F. Óp. Cit.

²²⁷⁸ Ídem.

punto que entre los años 2018 y 2019 se obtuvo el 43% de las sentencias condenatorias dictadas durante todo el período de existencia de la CICIG”²²⁷⁹.

23. ANÁLISIS CUALITATIVO:

Tras doce años de labores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, se dejó un amplio legado para el derecho pero en especial para la justicia guatemalteca, además de la investigación de más de 120 casos corrupción en el que intervino la Comisión con más de 1540 personas vinculadas, las múltiples recomendaciones a reformas judiciales que en su mayoría fueron aprobadas e implementadas, el traslado de capacidades en el día a día de las investigaciones y procesos, así, como la capacitación a otras instituciones, los convenios interinstitucionales, etc., uno de los aspectos fundamentales fue la esperanza que creó en los ciudadanos guatemaltecos de tener un país más justo, la apertura a la participación ciudadana y el deseo de hacer valer los derechos mediante su participación activa; despertó la iniciativa de muchos a no quedarse callados ante los actos de corrupción que por muchos años se traía arraigados y demostró que nadie es superior a la ley.

“Antes de la CICIG, las instituciones guatemaltecas no usaban técnicas básicas de investigación modernas, como la colaboración eficaz con testigos cooperantes o intervenciones telefónicas supervisadas (las leyes que autorizaron algunas de estas herramientas de investigación ya existían, pero en general se usaban de manera inadecuada o no se usaban en lo absoluto)”²²⁸⁰., este aporte fue muy importante ya que permitió consolidar y sustentar muchos casos no solo los que llevaba CICIG sino que algunos que llevaban otras fiscalías.

“La CICIG contribuyó a una reducción constante de la tasa de homicidios de Guatemala, que cayó de 45.1 por 100,000 en 2009, el año más violento en la historia

²²⁷⁹ COMISIÓN Internacional contra la Impunidad en Guatemala. S.F. *Óp. Cit.*

²²⁸⁰ WOLA, 2019. Incidencia a favor de los derechos Humanos en las Américas, Los hechos: El legado de la CICIG en la lucha contra la corrupción en Guatemala. En: *Wola* [en línea]. Disponible en: <https://www.wola.org/es/analisis/los-hechos-el-legado-de-la-cicig-en-la-lucha-contra-la-corrupcion-en-guatemala/> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].

reciente del país, a 26.1 en 2017, y ayudó a reducir la tasa de impunidad para crímenes violentos del 98 por ciento en 2008 al 87 por ciento en 2016” ²²⁸¹.

Con los aportes de la Comisión tanto a nivel operativo en la investigación de casos y preventivo en la recomendación de políticas y mecanismos que fortalecieron el sistema de justicia, propició las condiciones para la disminución de crímenes violentos en el país, así como la desarticulación de grupos del crimen organizado.

Así también *“dentro del mandato se incluyó las recomendaciones que CICIG debía proveer al Estado en la adopción de políticas públicas para erradicar los CIACS y prevenir su reaparición; para ese fin la Comisión asistió en la formulación de reformas jurídicas e institucionales, además realizó propuestas legislativas al Congreso de la República”*²²⁸². Entre las que se encuentran:

- a. En el 2009: Reformas a la Ley contra la Delincuencia organizada, la cual incluía la propuesta en relación a la figura del Colaborador Eficaz. La ley de competencia penal en procesos de mayor riesgo con el objetivo de proteger a los sujetos procesales, en los cuales esté en riesgo su vida o integridad física. Reformas al Código Procesal Penal en relación a la tramitación de los incidentes y utilización de videoconferencias. Reformas al Código Penal y Ley contra la delincuencia organizada para adicionar el tipo penal de Enriquecimiento Ilícito y otros actos de corrupción, entre otras.
- b. En el 2010: Apoyó en conjunto con otras organizaciones la discusión y elaboración del reglamento de la Ley de extinción de dominio de los bienes adquiridos por actividades ilícitas. Intervino en la discusión que llevó a la implementación de la ley que regula los servicios de seguridad privada²²⁸³.
- c. En el 2012: Apoyó la iniciativa N°4.306 que regula la Ley de registro móvil para la prevención del robo de celulares y extorción, sobre los equipos y terminales móviles. Recomendó la creación de la Dirección General de Investigación Criminal- DIGICRI.

²²⁸¹ WOLA, 2019. *Óp. Cit.*

²²⁸² COMISIÓN Internacional contra la Impunidad en Guatemala. S.F. *Óp. Cit.*

²²⁸³ COORDINADORA para la Modernización del Sector Justicia. 2015. Análisis y evaluación de resultados Obtenidos por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Decreto 52-2010, 2015. Página: 16

Otras propuestas legislativas en las que participo la CICIG:

- a. *“Reforma al Código Penal, a la Ley contra la Delincuencia Organizada y a la Ley de Migración, respecto de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.*
- b. *Reforma a las leyes relacionadas con el régimen disciplinario en la justicia penal.*
- c. *Reforma a la Ley de la Carrera Judicial.*
- d. *Reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público.*
- e. *Reforma a la Ley en Materia de Antejuiicio.*
- f. *Reforma a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad*
- g. *Reforma a la Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial.*
- h. *Reforma a la Ley General de Extradición”²²⁸⁴*

Así también la CICIG contribuyo activamente al fortalecimiento del Ministerio Público para ello en cuanto a aspectos formales con base en el mandato *“el 27 de febrero del 2008, para apoyar el funcionamiento de la Comisión, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, suscribieron el Convenio de Cooperación Bilateral entre ambas instituciones, en el cual se establecieron los parámetros de cooperación interinstitucional para el cumplimiento de las funciones y facultades conferidas a CICIG a fin de apoyar, fortalecer y coadyuvar al Ministerio Público en la persecución de los delitos cometidos por los CIACS. Es así como el Ministerio Público, a través del Acuerdo de Fiscalía General número 26-2008 de fecha 26 de marzo 2008, creó la Fiscalía Especial para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Dicho Acuerdo fue modificado por el Acuerdo de Fiscalía General 98-2011 de fecha 13 de octubre de 2011 para cambiar el nombre de esta Fiscalía por el de Fiscalía Especial contra la Impunidad –FECI-”²²⁸⁵.*

Hasta el 2015 esta Fiscalía *“estaba conformada por la Jefatura y 5 Agencias compuestas por un agente fiscal, 5 auxiliares fiscales y un oficial, así como con el*

²²⁸⁴ COMISIÓN Internacional contra la Impunidad en Guatemala. S.F. Óp. Cit.

²²⁸⁵ Ídem.

*equipo de apoyo necesario para su funcionamiento. En total, la FECl está conformada por 48 personas*²²⁸⁶.

Según el Informe de Cierre de labores de CICIG los tres aportes en fortalecimiento al Ministerio Público fueron²²⁸⁷:

- a. El fortalecimiento al programa de protección de testigos, de 2008 a 2010, con quien se realizó convenio de capacitación al personal y se apoyó en la reforma de los reglamentos internos.
- b. La creación de la unidad de métodos especiales de investigación, en 2009, en donde además se capacitó en la forma de utilizar el método, utilización de la evidencia y su utilización en los litigios.
- c. La creación de la Dirección de Análisis Criminal a partir de 2010.
- d. En adición y como parte fundamental del mandato la capacitación en el día a día de la investigación y litigio de los casos.

La contribución de la Comisión no solo generó un impacto en el sistema de justicia actual, sino que sus aportes sentaron las bases y servirán de soporte para la evolución a largo plazo que pueda llegar a tener el sistema de justicia.

A pesar de haber sido un experimento internacional sin otro antecedente de su género, la CICIG logró un impacto más grande del que se había imaginado y gozó de un apoyo popular entre la ciudadanía como pocas otras misiones²²⁸⁸, restituyó la confianza de la población en el sector justicia logrando la desarticulación de las altas elites ilegales que operaban en el país, evidenciando la vinculación de altos mandos del gobierno involucrados en delitos de corrupción.

No se puede perder de vista las debilidades de la Comisión, entre estas se encuentran:

²²⁸⁶ COMISIÓN Internacional contra la Impunidad en Guatemala. S.F. *Óp. Cit.*

²²⁸⁷ *Ídem.*

²²⁸⁸ CALL, Charles T. y HALlock Jeffrey, 2020. ¿Una iniciativa demasiado exitosa?. *El legado y las lecciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala* [en línea]. Primera Edición. American University, Washington, DC: Latin American & Latino Studies, Pág. 8. [Consulta: 10 de diciembre de 2020]. Disponible en: https://www.insightcrime.org/wp-content/uploads/2020/01/%C2%BFUna-iniciativa-demasiado-exitosa_-El-legado-y-las-lecciones-de-la-Comisio%CC%81n-Internacional-contra-la-Impunidad-en-Guatemala.pdf

- a. La falta de seguridad financiera, que ponía en riesgo el trabajo de la Comisión al no contar con un presupuesto fijo asignado por parte de Naciones Unidas y que supuso mucho trabajo de lobby internacional, especialmente al primer comisionado para convencer a los países a contribuir con la comisión ya sea con recursos financieros o humanos.
- b. No hubo un diagnóstico previo al establecimiento de la Comisión lo que significó mucho aprendizaje en el camino.
- c. La Comisión surgió de una manera bastante improvisada, lo que se refleja en que su estructura no fue rígida, no se creó un mecanismo de control y rendición de cuentas uniforme.
- d. No se implementó un área de compilación y manejo de datos estadísticos, que pudieran medir fehacientemente sus resultados.
- e. No hubo uniformidad en la estructura de los informes anuales, por lo que la información de resultados no se puede medir con certeza.
- f. No se midieron los riesgos en cuanto a la seguridad del personal al llevar casos de alto impacto contra personajes de alto perfil económico, político y militar.
- g. Al cerrar la Comisión, se dejó en total desprotección al personal nacional para seguir desarrollando su vida en el país de manera digna.
- h. Por la forma de creación y funcionamiento Naciones Unidas reconocía a la Comisión como propia al momento de rendir cuentas, pero la declaraba independiente en materia de reconocimiento de los derechos laborales de sus funcionarios.
- i. En general la mayor parte de las falencias de la Comisión, fueron falencias formales, en el sentido de la poca atención que se dio al tema estadística, a la no estandarización de muchos procedimientos internos, pero en forma sustancial, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala aportó a la eficacia de la lucha contra impunidad, se dejaron instaladas las capacidades en el Ministerio Público y en la Policía Nacional y otras instituciones y se contó con algunos jueces comprometidos que están intentando mantener esos avances.

Luego de este estudio analítico en los aspectos que a mi juicio consideré de mayor relevancia, se puede establecer que la Comisión Internacional contra la Impunidad

en Guatemala contribuyó a la lucha contra la impunidad y fortalecimiento del estado de derecho, en Guatemala.

A continuación, se presenta de forma gráfica y sintética el trabajo realizado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

		Mandato	Duración del Mandato	Cesación de los hechos que originaron el mandato	Inicio del primer juicio	Universo de casos	Casos procesados y/o relaciones procesales	Tiempo promedio de los casos	Casos pendientes de resolución	% Casos presentados versus casos resueltos	% Casos pasibles de procesamiento versus casos resueltos
4	Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala-CICIG	La identificación, investigación y procesamiento en los que intervenga Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad-CIACS	2 años prorrogables Total 12 años	No aplicable.	Marzo 2008	Más de 120	Más de 120	indeterminado	indeterminado	120	No se puede concluir

CAPÍTULO XVII

MISIÓN DE APOYO CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD EN HONDURAS

ANTECEDENTES

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, tenía como objetivo el apoyo activo del combate a la corrupción y la impunidad en el país, no sólo en la investigación de casos de corrupción pública y privada, sino también pretendía reformar y fortalecer las instituciones y con ello prevenir la comisión de estos hechos delictivos que causan gravísimos problemas al ejercicio de los derechos de las personas en adición a que directamente deterioran la credibilidad estatal y del sistema político²²⁸⁹.

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras fue creada mediante el convenio suscrito entre la OEA y el Estado de Honduras, el 19 de enero de 2016, cuyo interés supremo era garantizar el respeto a los derechos humanos combatiendo el flagelo de la corrupción que socavaba la dignidad y recursos de los ciudadanos.

La función de la MACCIH se desarrollaba en 4 grandes áreas de trabajo²²⁹⁰: la primera a través de la prevención y el combate a la corrupción, la segunda mediante las reformas de la justicia penal, la tercera en relación a las reformas político-electoral y la última en la seguridad pública. Al convenio se le dio la categoría de parte de los convenios y tratados internacionales que promovían los derechos humanos y el compromiso de implementar los mecanismos necesarios que permitieran la reducción de la criminalidad y la protección de los ciudadanos.

El Convenio se fundamentó en diversos instrumentos legales lo que permitieron que dicha entidad internacional pudiera ser creada, estos instrumentos fueron:

²²⁸⁹ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. 2016. *Óp. Cit.*

²²⁹⁰ *Ídem.*

- a. Convención Interamericana contra la Corrupción;
- b. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y
- c. La Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción.

1. ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ FUE CREADO?

La corrupción es un flagelo que día a día destruye diferentes instituciones en la mayoría de países de Latinoamérica y el Caribe, y Honduras no es la excepción; contrario a ello es uno de los países donde esa pandemia está más incrustada; *“Transparencia Internacional, en la décima edición del Barómetro Global de la corrupción en América Latina y el Caribe 2019, encuesta realizada a más de 17,000 ciudadanos que viven en 18 países de la región, reveló que más de la mitad de los ciudadanos argumentan que la corrupción está empeorando en su país y que su Gobierno no está realizando un buen trabajo en la lucha contra este fenómeno”*²²⁹¹ y que los grupos más vulnerables afectados por la corrupción se ven obligados a tener que pagar un soborno como mecanismo para poder acceder a un servicio público.

Como consecuencia a esta problemática global, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras nace a raíz de un escándalo de corrupción en el Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS)²²⁹², lo que derivó en constantes manifestaciones en el año 2015, por lo que el gobierno de turno invitó a la secretaria de la Organización de Estados Americanos con el propósito de dialogar sobre la posibilidad de crear un mecanismo que combatiera la corrupción y la impunidad²²⁹³ como componente que consiguiera erradicar el flagelo. Tras varias reuniones con los diferentes sectores que integraban el país en las que se determinaron las líneas estratégicas que se implementarían, el 19 de enero de 2016 entró en vigencia el Acuerdo que se firmó entre la Secretaria General y el Gobierno de Honduras que le dio origen a la MACCIH.

El ente creado, se encargaría de trabajar investigaciones de casos concretos de corrupción en la que se seleccionaba, evaluaba y asesoraba a un grupo de jueces y

²²⁹¹ OPALÍN, León, 2019. La corrupción en América latina y el Caribe 2019. En: El financiero Mx, México [en línea] Disponible en: <https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/leon-opalin/la-corrupcion-en-america-latina-y-el-caribe-2019> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

²²⁹² ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. 2016. *Óp. Cit.* Página:1

²²⁹³ Ídem.

fiscales para instruirlos y apoyarlos con una serie de prácticas que les brindaran herramientas que les permitieran enfrentar con éxito la investigación de esos casos. La MACCIH no se limitaba únicamente a la investigación de casos concretos, dentro de su mandato también tenía la facultad de proponer reformas que tendieran a incidir en la estrategia para la prevención de cualquier acto de corrupción fortaleciendo a las instituciones del sector justicia.

Con la llegada de la MACCIH el Poder Judicial de Honduras creó una estructura judicial que atendía al combate de la corrupción, con competencia nacional y exclusiva en esa materia, que era clave para cambiar esos antecedentes de corrupción que se traían arraigados desde hace muchos años²²⁹⁴.

2. PAPEL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN SU CREACIÓN

Como resultado de los tratados y convenios en materia de derechos humanos ratificados por Honduras y de los compromisos adquiridos por parte de este país con la comunidad internacional, se dialogó para el establecimiento de la MACCIH, como mecanismo de respuesta ante las múltiples manifestaciones de corrupción incrustadas en las instituciones estatales, de las cuales en la gran mayoría los empleados y funcionarios públicos de los altos mandos, eran parte. La comunidad internacional jugó un papel protagónico en el funcionamiento de la misión, porque sin el apoyo logístico y económico, este mecanismo de combate contra la corrupción no hubiera podido operar.

3. ¿CÓMO SE ABORDÓ EL TEMA DE LA SOBERANÍA?

Desde el inicio de la instalación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, se respetó la soberanía del país. En el convenio de creación se consignaron los mecanismos de cese de labores del ente y la forma de resolución de controversias, las que incluían la participación efectiva del gobierno de Honduras.

En ejercicio de esa soberanía que estaba en cabeza del estado, ante la manifestación de Estados Unidos de no estar de acuerdo con la finalización de la misión, en una

²²⁹⁴ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. 2016. *Óp. Cit.*

publicación se menciona que Honduras le respondió que es una decisión soberana la de renovar o no el mandato de la MACCIH²²⁹⁵.

La moción para dar por terminada la misión fue impulsada y presentada por algunos diputados que se encuentran involucrados en un caso de corrupción por haberse apropiado de fondos públicos.

A pesar de la solicitud del congreso por no renovar el mandato de la MACCIH, algunas organizaciones de la Sociedad Civil, entre ellas universidades, el Consejo Nacional Anticorrupción y la Coalición por la renovación de la MACCIH solicitaron a la Organización de Estados Americanos que renovaran sin cambios el convenio que le había dado origen a la Misión²²⁹⁶, sin embargo, la Misión fue cerrada.

En ningún momento se vulneró la soberanía del Estado de Honduras, ya que su creación se originó a solicitud del Estado hondureño y el funcionamiento de la Misión estuvo regido siempre por el ordenamiento jurídico interno, respetando el Estado de Derecho y autodeterminación del país. Con el establecimiento de la MACCIH bajo ninguna circunstancia de desplazamiento o usurpo la función fundamental del Ministerio Público, sino que más bien se fortaleció el trabajo que ya se venía realizando.

4. TIPO DE GOBIERNO ¿DEMOCRACIA?

Al igual que el caso guatemalteco, Honduras también tiene una forma de gobierno democrático, representativo y republicano²²⁹⁷, se conforma por los poderes del Estado, los cuales son: Ejecutivo, Legislativo y Judicial²²⁹⁸.

Honduras ha sido uno de los países con altos índices de pobreza y violencia de América Latina, lo que se hizo visible con el golpe de Estado sucedido en junio de

²²⁹⁵ AFP, Noticiero, El Periódico. 2020. Honduras responde a EEUU que es decisión “soberana” renovar o no a la MACCIH, de fecha 4 de julio de 2020. En: *El Periódico* [en línea]. Disponible en: <https://elperiodico.com.gt/mundo/2019/12/10/honduras-responde-a-eeuu-que-es-decision-soberana-renovar-o-no-a-la-maccih/> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

²²⁹⁶ FORBES Centroamérica Staff. 2020. Misión de la OEA contra la corrupción en Honduras es incierta, de fecha 09 de enero de 2020 En: *Forbes Centroamérica* [en línea]. Disponible en: <https://forbescentroamerica.com/2020/01/09/mision-de-la-oea-contra-la-corrupcion-en-honduras-es-incierta/> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

²²⁹⁷ EMBAJADA de Honduras en Washington D.C. S.F. Estructura de País. En: *Embajada de Honduras en Washington D.C.* [en línea]. Disponible en: <http://hondurasemb.org/estructura-politica-de-pais.html> [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]

²²⁹⁸ Ídem

2009 el que se interpretó como un problema ideológico entre “Derechistas e izquierdistas y como un golpe militar clásico”²²⁹⁹.

Las dificultades más grandes en el proceso democrático de Honduras se debían a la falta de voluntad, el caciquismo tradicional, y el autoritarismo, sumado a esto los altos índices de violencia y la creciente presencia de grupos de criminalidad organizada lo que generaba a su vez la promoción de la corrupción dentro de las organizaciones estatales y debilitaba la gobernabilidad del país.

5. ¿ESTADO DE DERECHO?

La implementación de la MACCIH en el territorio hondureño se dio en un Estado de Derecho, sujeto a las normas de derecho legalmente aplicables y fue el propio gobierno el que promovió el dialogo para su establecimiento en conjunto con la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos, esto como parte del compromiso del Estado con la comunidad internacional en materia de Derechos Humanos de los cuales Honduras ha ratificado diversos tratados y convenios.

Honduras es un Estado que cuenta con un andamiaje institucional debilitado a causa de la corrupción, especialmente en el sector justicia, pero que habilitaba la posibilidad de crear la Misión.

6. ¿ORIGEN BASADO EN CIERTAS SUPOSICIONES O CONDICIONES FÁCTICAS?

La propuesta de creación de un mecanismo de combate a la corrupción e impunidad, se da finalmente por las graves repercusiones de un caso complejo de corrupción que salió a la luz del Instituto Hondureño de Seguridad Social, por lo que algunos grupos sociales presionaron al gobierno de turno para que este gestionara la cooperación con la comunidad internacional y se logra la instalación de un ente que pudiera hacer frente a esa situación de corrupción, que ha operado en el país durante muchos años y que día a día surgirían nuevas redes criminales.

²²⁹⁹ BARRACHINA Lisón, Carlos. 2016. Democracia, política y violencia en Honduras (2006-2014). *Península* [en línea]. Honduras: Vol. 11, No. 1, (25-64). [Consulta: 10 de diciembre de 2020]. DOI: <http://www.revistas.unam.mx/index.php/peninsula/article/view/54061> Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1870576616000039>.

El caso revelado y que hace parte del segundo considerando del convenio, solo fue uno de aquellos graves hechos de corrupción que agobiaban y siguen agobiando el país que incidieron en esta determinación de la imperiosa necesidad de²³⁰⁰, la implementación de un mecanismo de combate contra la corrupción y la impunidad.

7. DOCUMENTO DE CREACIÓN

El 19 de enero de 2016 se suscribió el convenio entre el gobierno de la República de Honduras y la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos para la creación de una Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras-MACCIH²³⁰¹, para el combate a la corrupción y a la impunidad que violentaban la gobernabilidad en Honduras.

Para la suscripción del convenio en representación del gobierno de Honduras compareció el entonces presidente de la República el señor Juan Orlando Hernández Alvarado y por parte de la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos el señor Luis Almagro²³⁰².

8. MANDATO

El Acuerdo sobre el establecimiento de una Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, estaba integrado por catorce considerandos y dieciséis artículos, los que se estructuraban de la siguiente manera²³⁰³.

En cuanto a los considerandos que formaron el marco del convenio se estableció:

- a. *“Que los fenómenos que afectaban la gobernabilidad y deterioraban la confianza en las instituciones estatales eran la corrupción e impunidad.*
- b. *Que el Estado necesita fortalecer el sistema de justicia hondureño, derivado de los recientes casos de corrupción que han salido a la luz en los que entidades estatales tienen participación.*

²³⁰⁰ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. 2016. *Óp. Cit.*

²³⁰¹ *Ídem.*

²³⁰² *Ídem*

²³⁰³ *Ídem*

- c. *Derivado de la necesidad de abordar el tema de la corrupción e impunidad se abrió el dialogo para proponer la implementación de un Sistema integral de combate contra la corrupción e impunidad.*
- d. *La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas servirían de facilitadores en el dialogo para el establecimiento de la MACCIH, por invitación del gobierno hondureño.*
- e. *Como resultado se obtuvo que la Organización de Estados Americanos propusiera el establecimiento de un mecanismo que acompañe y asesore sobre reformas integrales al Sistema de justicia y la lucha contra la corrupción e impunidad.*
- f. *Se suscribió una carta por parte del gobierno de Honduras en la que se solicitó al Secretario General de la Organización de Estados Americanos la implementación del mecanismo de combate contra la corrupción e impunidad.*
- g. *La Misión sería coordinada por la Secretaría para el Fortalecimiento de la democracia de la Secretaría de Estados Americanos y tendría el apoyo de la Secretaría de Asuntos jurídicos por medio del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.*
- h. *El Gobierno ha suscrito diversos compromisos internacionales en materia de combate a la corrupción”²³⁰⁴.*
- i. *“Que de conformidad con el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública...”²³⁰⁵*
- j. *“Que Honduras ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción el 25 de mayo de 1998, depositando su instrumento de ratificación el 2 de junio de ese año y, asimismo se vinculó al MESICIC mediante la suscripción del Documento de Buenos Aires, el 8 de diciembre de 2001”²³⁰⁶.*

²³⁰⁴ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. 2016. Óp. Cit.

²³⁰⁵ Ídem.

²³⁰⁶ Ídem.

- k. *“La colaboración de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos con el gobierno hondureño permitirá el fortalecimiento de las entidades estatales y devolverá la confianza de la población a las entidades mediante el dialogo efectivo y el fomento a la democracia en el país.*
- l. *La sociedad civil en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, seguirán fortaleciendo la vigilancia de acuerdo a los compromisos para mantener la contribución de la institucionalidad para promover la confianza en estas entidades mediante la rendición de cuentas.*
- m. *Es evidente la voluntad del gobierno hondureño por combatir la corrupción y la impunidad en el estado mediante la propuesta de establecer la Misión para que contribuya con esta labor”²³⁰⁷.*
- n. *“Que la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos es el órgano central y permanente de la Organización de Estados Americanos y tiene la Facultad de establecer y fomentar relaciones de cooperación conforme con el artículo 112h de la carta de la Organización de Estados Americanos y con la resolución de su Asamblea General AG/RES. 57 (I-O/71)”²³⁰⁸*

En el primer artículo indicaba los objetivos de la misión, distribuidos en 5 fundamentales; el segundo que abordaba las líneas de acción que debían de adoptarse para cumplir con los objetivos; del tercero al sexto se centraba en las funciones, en materia de prevención, en materia de justicia penal, materia político-electoral, seguridad pública, respectivamente; el séptimo abordó las competencias; el octavo las obligaciones del Gobierno; noveno las representaciones y notificaciones; el décimo los miembros de la Misión; el onceavo los gastos; el doceavo la seguridad y protección del personal; el treceavo las inmunidades; el catorceavo dio a conocer los motivos para el retiro de la Misión; el quinceavo sobre la solución de controversias y el último que abordó las disposiciones generales. Además de estos el convenio contemplaba dos anexos, el primero con una propuesta de trabajo y el segundo las definiciones.

²³⁰⁷ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. 2016. *Óp. Cit.*

²³⁰⁸ Ídem.

Las líneas de acción se formaban de cuatro componentes, en cuanto a la prevención y combate de la corrupción, reformas a la justicia penal, reforma político electoral y seguridad pública, las cuales van de acuerdo a las funciones de la MACCIH.

En cuanto a los miembros, bienes y archivos de la MACCIH, gozaran de las inmunidades y privilegios que se estipulan conforme la Carta de la OEA, del Acuerdo sobre privilegios e inmunidades el que fue ratificado por el gobierno de Honduras, así *“como el acuerdo entre el Gobierno de Honduras y la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos sobre el funcionamiento de la Oficina de la Unión Panamericana de Honduras firmado el 15 de agosto de 1968 así como las demás leyes en materia de beneficios para la MACCIH y a sus miembros”*²³⁰⁹.

*“Especialmente los Miembros Internacionales de la MACCIH gozaran de inmunidad contra la detención o arresto personal y embargo de su equipaje personal: e inmunidad contra todo procedimiento judicial, legislativo o administrativo, respecto a palabras mal habidas o escritas y a sus actos en el cumplimiento del mandato de la MACCIH, incluso cuando la persona interesada se haya separado de la MACCIH”*²³¹⁰.

Los miembros internacionales de la misión y sus familiares gozaban de los privilegios e inmunidades que se les otorgan a los agentes diplomáticos conforme la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Se establecieron también las obligaciones del gobierno para garantizar el efectivo cumplimiento del mandato de la MACCIH, la forma en que se representaría y a su vez se notificaría las actuaciones mediante los representantes tanto del gobierno como de la Misión; en su caso si existían controversias que serían solucionadas mediante el dialogo y mutuo convenio y las disposiciones generales que estaban encaminadas a las modificaciones y vigencia del convenio.

En este convenio de establecimiento de la MACCIH no se contempló la presentación de estadísticas en cuanto a la labor que se desempeñaba, los informes no las reflejan.

²³⁰⁹ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. 2016. *Óp. Cit.* Artículo 8.

²³¹⁰ Ídem.

B. OBJETIVOS

El artículo 1 del convenio de creación de la MACCIH describió 5 objetivos los cuales son²³¹¹:

1. *“Apoyar el cumplimiento del Estado en relación a los compromisos internacionales adquiridos en relación a la lucha contra la corrupción.*
2. *Fortalecer y colaborar con las instituciones estatales encargadas del combate de la corrupción.*
3. *Contribuir en la mejora de coordinaciones entre las distintas instituciones relacionadas en materia de corrupción.*
4. *Promover reformas al sistema de justicia incluyendo el fortalecimiento del combate contra la corrupción*
5. *Contribuir al fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas de los órganos de justicia y estatales”*²³¹².

Objetivos estos que fueron abordados en el anexo I del Acuerdo, el cual consta de la propuesta de trabajo y que permitieron el desarrollo de sus funciones.

C. ALCANCES DEL MANDATO

En los artículos del 3, 4, 5 y 6 se describen las funciones de la MACCIH distribuidas en las líneas de acción de la siguiente manera:²³¹³

- a. *“Prevención y combate a la corrupción, en la que se creó una división de prevención, integrada por un grupo de jueces, fiscales, especialistas forenses internacionales, para acompañar, asesorar, supervisar o evaluar a las autoridades competentes para que recabaran la información que serviría para investigar en los casos concretos de corrupción”*²³¹⁴.

En esta línea se crearon 3 unidades, las cuales son:

²³¹¹ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. 2016. *Óp. Cit.* Artículo: 1.

²³¹² Ídem.

²³¹³ Ídem. Artículos 3, 4 5 y 6

²³¹⁴ Ídem.

- i. La unidad de *“seguimiento de las recomendaciones del MESICIC, con funciones de apoyar la elaboración de un Plan de Acción Nacional para la implementación de recomendaciones”*²³¹⁵ formularas al Estado de Honduras, realización de taller Nacional para la presentación del Plan de Acción, apoyar los mecanismos para la participación del Gobierno en cumplimiento de las recomendaciones formuladas.
 - ii. Unidad de reformas y asesoría al sistema anticorrupción, conformación de un grupo con experto y especialistas en materia anticorrupción en relación al combate de la corrupción inclusive en el sector privado para la prevención y represión de acciones indebidas, sobornos, malversación, peculado, etc., así como el fortalecimiento del marco jurídico e institucional en el combate en el sector público y privado.
 - iii. La identificación de aspectos relacionados con *“la responsabilidad penal y administrativa de empresas y/o corporaciones a fin de contrarrestar la corrupción”*²³¹⁶. Asesoramiento para la implementación de leyes anticorrupción, así como fomentar la incorporación de compromisos internacionales en esta materia y establecer canales de fortalecimiento en materia de integridad empresarial.
- b. En materia de justicia penal, se creó una división de reformas de la justicia penal para la revisión y análisis de estudios e investigaciones realizado con anterioridad y reformas realizadas al Sistema de Justicia Penal. Desarrollar planteamientos innovadores en beneficio del sistema de justicia fortaleciendo la calidad, efectividad y legitimidad.
 - c. En materia político-electoral, para apoyar *“los mecanismos de aplicación de la ley sobre financiamiento de la política mediante el acompañamiento de un marco de equilibrio transparente político electoral”*²³¹⁷.
 - d. En materia de protección ciudadana, mediante las diversas unidades, en las que se contribuya a la promoción de protección de derechos humanos, así

²³¹⁵ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. 2016. *Óp. Cit.*

²³¹⁶ Ídem.

²³¹⁷ Ídem.

como la protección de defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, fomentar buenas prácticas en materia de protección para minimizar los riesgos en la lucha contra la corrupción.

Las líneas de acción desarrolladas estuvieron estrictamente apegadas al acuerdo de creación, sin embargo; el que el Ministerio Público lograra imputar a políticos poderosos no fue del agrado del gobierno hondureño, siendo la razón de cierre de la Misión.

D. COMPETENCIA

En el Artículo 1 del convenio del establecimiento de la MACCIH fue específico en cuanto a la labor que desempeñaría, su competencia se circunscribía a las funciones de:

- a. *“Apoyar al cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado hondureño.*
- b. *Apoyar, fortalecer y colaborar con las instituciones del Estado Hondureño, encargadas de prevenir, investigar y sancionar la corrupción.*
- c. *Contribuir a la coordinación interinstitucional.*
- d. *Proponer reformas al Sistema de Justicia.*
- e. *Contribuir a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas a los órganos de justicia”²³¹⁸.*

Esto se complementaba con las líneas de acción estipuladas en el artículo 2, siendo éstas:

- a. *“Prevención y combate a la corrupción*
- b. *Reforma de la Justicia Penal*
- c. *Reforma político – electoral*
- d. *Seguridad Pública”²³¹⁹*

²³¹⁸ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. 2016. *Óp. Cit.*

²³¹⁹ Ídem. Artículo 2

E. FORTALEZAS

En cuanto a las fortalezas de la MACCIH se pueden destacar:

- La no injerencia del Gobierno de Honduras en la forma de trabajo de la MACCIH²³²⁰
- La autonomía en cuanto a la contratación de personal²³²¹
- Garantizar la seguridad y protección del personal y bienes de la Misión²³²²
- Revestir de inmunidades diplomáticas a los miembros nacionales e internacionales de la Misión, aun cuando estos ya no formen parte de la entidad²³²³.
- Permitir que el convenio se pudiera prorrogar las veces que fueren necesarias en común acuerdo entre las partes²³²⁴.

En resumen, sus fortalezas radicarón en su independencia funcional y financiera, la temporalidad del mandato, en la protección de sus funcionarios nacionales por medio de la inmunidad, algo que la distingue de CICIG y la protección de sus bienes.

F. REGLAS DE ADMISIBILIDAD

Las reglas de admisibilidad no fueron consignadas taxativamente en el Convenio para el establecimiento de la MACCIH, sin embargo, estas se pueden establecer de conformidad con el convenio:

- i. Ratione Personae: conoce de casos que incluyan a “*personas que estén involucradas en casos de corrupción e impunidad*”²³²⁵.
- ii. Ratione Materiae: Delitos contenidos en el ordenamiento jurídico penal hondureño²³²⁶

²³²⁰ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. 2016. *Óp. Cit.* Artículo 7

²³²¹ Ídem. Artículo 10

²³²² Ídem. Artículo 12

²³²³ Ídem. Artículo 13

²³²⁴ Ídem. Artículo 16

²³²⁵ Ídem. Artículo 1

²³²⁶ Ídem

iii. *Ratione Temporis*: Crímenes que no hayan prescrito de acuerdo a lo establecido en los artículos 33 y 34 del Código Procesal Penal.

iv. *Ratione Loci*: Sólo eran aplicables para los crímenes cometidos en el territorio hondureño que tengan relación con actos de corrupción²³²⁷.

G. TIEMPO DETERMINADO

El Convenio suscrito que le dio origen a la MACCIH tuvo una vigencia de 4 años²³²⁸ desde que se firmó y debía ser remitido por el Gobierno al Congreso hondureño, este podría ser prorrogable según convenio entre las partes, tal como se suscribió en el mismo convenio.

También podría darse por terminado cuando fuere por mutuo consentimiento entre las partes siempre y cuando se notificara por escrito a la otra parte con una anticipación no mayor a 60 días. Siendo esto lo que procedió cuando el presidente de Honduras decidió no renovar la misión para un segundo período.

H. DISTRIBUCIÓN DEL PODER.

En el décimo artículo del convenio de establecimiento de la MACCIH, se estipuló que era facultad del Secretario General de la Organización de Estados Americanos designar al Vocero de la entidad internacional quien sería el responsable general de este ente, sin embargo, el vocero debería contar con previa aceptación del gobierno de Honduras.

El vocero como responsable general de la MACCIH tenía la facultad de contratar personal local e internacional quienes ocuparon los diferentes puestos para cumplir con las funciones establecidas en el mandato de creación y así cumplir con los objetivos establecidos.

²³²⁷ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. 2016. *Óp. Cit.*

²³²⁸ Ídem. Artículo 16

9. ¿SURGIÓ COMO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES?

A. ¿HABÍA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL?

Si existía por parte del estado esa obligación con lo establecido en los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos de los cuales Honduras ha ratificado y es parte responsable. En el mismo acuerdo de creación de la MACCIH hace alusión que el establecimiento de este mecanismo es parte de los compromisos adquiridos mediante los tratados y convenios internacionales.

Al ser un mecanismo que proviene de los compromisos internacionales por parte del Gobierno de Honduras en materia de derechos humanos y combate contra la corrupción, la Misión que fue coordinada por la Secretaria para el Fortalecimiento de la democracia de la Secretaría de Estados Americanos y conto con el respaldo de la Secretaría de Asuntos jurídicos a través de la MESICIC, la Secretaria de Seguridad Multidimensional, así como diferentes entidades que integran el Sistema Interamericana en el que se incluye el Centro de Estados de Justicia de las Américas.

B. OBLIGACIONES INTERNACIONALES

Nacieron del diálogo y acuerdo entre el Gobierno de Honduras y la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos, para establecer un mecanismo de combate contra la corrupción y la impunidad en el país, para el acompañamiento y asesoría a el sector justicia de parte la Misión.

C. ¿ABORDA HECHOS ILÍCITOS INTERNACIONALES?

Sí, ante la incapacidad de Honduras de investigar por sí mismo los hechos objeto de investigación de la Misión, esta incapacidad de hacer justicia se traduce en un comportamiento atribuible al Estado que constituye una violación a las obligaciones internacionales. La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras fue establecida con el propósito de fortalecer las instituciones del Sistema de Justicia nacional y combatir el flagelo de la corrupción y la impunidad, es decir, casos delictivos complejos dentro del territorio hondureño, en el convenio de creación no se consideró abordad hechos ilícitos fuera de esta circunscripción.

El propósito del establecimiento de la MACCIH fue contribuir al sistema estatal encargado de impartir justicia enfrentando los delitos de corrupción con el fin de bajar los índices de impunidad, pero también de devolver la confianza a la población en las entidades jurisdiccionales que promueven la justicia.

También se debe señalar que como consecuencia de los compromisos internacionales que el gobierno de Honduras suscribió en materia de combate a la corrupción contenidos en instrumentos como la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) la que fue aprobada en el marco de la Organización de Estados Americanos en 1996 y las recomendaciones formuladas por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción al cual se vinculó, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en el 2003²³²⁹. Instrumentos en los cuales cabe destacar que los hechos que se abordaban eran relacionados a delitos de corrupción internos, los cuales no han sido declarados como crímenes de lesa humanidad.

Otro instrumento utilizado fue la Carta Democrática Interamericana, la cual es un componente fundamental en el ejercicio de la democracia.

10. COOPERACIÓN DE LOS ESTADOS.

La MACCIH contó con la cooperación de los Estados en dos sentidos, el primero en el financiero para poder funcionar y el segundo en la cooperación penal derivada de tratados internacionales con fines de investigación.

11. INDEPENDENCIA

El artículo 7 de la constitución de la MACCIH se establece que esta *“entidad actuará con total y absoluta independencia, autonomía, objetividad, neutralidad y transparencia en colaboración con la institucionalidad del Estado”*²³³⁰.

Por la naturaleza de los casos que se trabajaban por parte de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, era manifiestamente indispensable que pudieran llevar a cabo las actividades y funciones que estaban enmarcadas en el

²³²⁹ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. 2016. *Óp. Cit.*

²³³⁰ Ídem

convenio de creación con total independencia. Cualquier conflicto de intereses por presiones o injerencia estatal indebida, podría haber generado parcialización en la investigación de los casos de corrupción e impunidad, que era precisamente lo que se pretendía evitar, tomando en consideración también que por tratarse de casos de corrupción por su naturaleza involucraba empleados y funcionarios públicos en la ejecución de estos hechos delictivos.

Quizás como un punto de algún grado de injerencia del estado, se dio en cuanto a la designación del Vocero de la MACCIH que debía contar previamente con la aprobación del Estado de Honduras. La MACCIH tuvo independencia financiera, la independencia funcional fue obstaculizada al momento de la selección de casos, ya que debía contar con la aprobación del Estado.

12. SELECCIÓN DE ACTORES

En el convenio de creación de la MACCIH, no se cataloga un tipo de actor específico, sin embargo, hace mención de Personas, empresas u organizaciones tanto del sector público como privado que intervengan en actos de corrupción. Derivado de esto se puede inferir que en la selección de actores podrían incluirse, personas individuales, jurídicas, Jueces, Magistrados, Fiscales, empleados y funcionarios públicos, policías, empresarios, integrantes del crimen organizado, narcotraficantes y cualquier otra persona que directa o indirectamente tuviera vínculos en delitos con características de corrupción.

13. NORMATIVA RELEVANTE Y MARCO PROCEDIMENTAL

En el convenio de creación de la MACCIH no se estableció una normativa específica del proceder de la Misión, la que operaba según el sistema de justicia nacional regulado en las leyes establecidas en Honduras y los convenios internacionales ratificados por el estado que pasaban a ser parte de su derecho interno.

Es decir que toda la normativa interna procedente del Sistema de Justicia de Honduras era aplicable en los casos que apoyaba la Misión, cuando se tratara de casos de corrupción, es por ello también que los procedimientos se regían bajo las mismas normas.

Aunque la misión también tenía la facultad para proponer o recomendar reformas legales a las instancias del sector justicia tanto para prevenir como para reprimir casos de corrupción, estas debían ser parte de la normativa interna primero para posterior ser aplicadas, de esta manera no se interferiría con la soberanía e independencia del país.

Esta también se regía según los tratados y convenios con competencia en combate a la corrupción que han sido ratificados por el Estado de Honduras tales como: la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), las recomendaciones formuladas por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción al cual se vinculó, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en el 2003²³³¹ y la Carta Democrática Interamericana.

14. LEGITIMIDAD:

En el establecimiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, fue el Estado quien tomó la iniciativa y promovió el dialogo para que esta institución fuera creada debido a los constantes casos de corrupción y grupos criminales organizados que operan en el país, es decir, que siendo el mismo Estado el que solicito a creación del ente internacional, este fue creado con total legitimidad lejos de cualquier posibilidad de interferencia extranjera. Con la instalación de esta Misión en el Estado se trató de devolverle a la población credibilidad en los órganos jurisdiccionales que se encargan de impartir justicia.

Pero esa decisión del ejecutivo no surgió como un acto de voluntad política propia, sino que fue el resultado precisamente de la indignación social tras conocerse públicamente otro caso de corrupción en específico por un desfalco millonario en una institución del Seguro Social que a partir de mayo de 2015, *“la sociedad civil hondureña logró colocar en la agenda nacional e internacional, como un tema prioritario y urgente, el problema de la lucha contra la corrupción y la impunidad, en el que exigió al gobierno la creación de una entidad internacional ad hoc con la finalidad de investigar este tipo de casos. Luego de un extenso diálogo del gobierno con diversos sectores sociales, actores internacionales clave, y organismos*

²³³¹ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. 2016. *Óp. Cit.*

multilaterales, en enero de 2016 se firmó el acuerdo para la creación de la MACCIH con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA)”²³³².

En cuanto a la gestión que ha desempeñado en territorio hondureño, se hizo conocida por la mayor cantidad de pobladores derivado de los 3 casos más sonados de corrupción en los cuales intervino²³³³.

15. JURISDICCIÓN

Al ser grupos de delincuencia compleja que operaba dentro del territorio hondureño lo que le dio origen a la creación del ente internacional, esta misma llevaba implícito la jurisdicción del actuar de dicha institución, la cual sería dentro del territorio, ya que el objeto fundamental era dismantelar las organizaciones criminales y estructuras públicas y privadas que operaban de manera ilícita promoviéndose impunidad e incrustándose en las entidades Estatales para lograr sus fines particulares en detrimento del estado de Derecho.

A. ¿QUIÉN PODÍA FORMAR PARTE DE UN CASO?

Todas las personas que de manera directa o indirecta participan en un hecho delictivo de corrupción o impunidad, dentro de estas; por la naturaleza y complejidad de los delitos de corrupción en estos casos podrían ser investigados, Jueces, Magistrados, Fiscales, empleados y funcionarios públicos, políticos, financistas de partidos políticos, empresarios, policías, personas particulares y jurídicas, etc. Es decir, todas aquellas personas sin distinción alguna en contra de quienes existieran los indicios necesarios para ser vinculado a la investigación.

²³³² DUE Process of Law Foundation. 2016. La lucha contra la impunidad desde el derecho Internacional. Reflexiones a partir de las experiencias heterodoxas en Latinoamérica: La CICIG en Guatemala, la MACCIH en Honduras y el GIEI en México. Washington, D.C. Página. 5. En: *Fundación Para el Debido Proceso* [en línea]. Disponible en: http://www.dplf.org/sites/default/files/lucha_impunidad_d2_d_ocweb_03212017.pdf [consulta: 10 de diciembre de 2020].

²³³³ CENTRO de estudios para la Democracia, 2019. Primera encuesta de percepción sobre corrupción y el papel de la MACCIH para combatirla. Canadá, Página: 16. En: *Centro de Estudios para la Democracia* [en línea] Disponible en: <http://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2019/11/Doc-MACCIH-WEB.pdf> [consulta: 10 de diciembre de 2020].

B. ¿QUÉ PROBLEMAS SE PODÍA DEBATIR?

La Misión tenía la facultad de abordar la problemática relacionada a la corrupción y a la impunidad, esto implicaba su combate directo, es decir, la investigación y acompañamiento del procesamiento en conjunto con el Ministerio Público, de los individuos que se vieran implicados en casos de corrupción, así como el fortalecimiento de las instituciones que intervienen en el Sistema de Justicia mediante la recomendación de políticas y mecanismos que promuevan la prevención de estos delitos, así como el fortalecimiento de los órganos jurisdiccionales que velan por la justicia.

El mandato de la MACCIH también contemplaba la protección y seguridad de la ciudadanía y de grupos de defensores de Derechos Humanos, así como de periodistas o comunicadores sociales que de alguna manera daban a conocer los casos de corrupción²³³⁴.

16. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN:

Al regirse por la legislación nacional, los medios de impugnación son los mismos que están establecidos en el sistema interno de justicia, sin embargo, algunas de las facultades que se tenía por parte del ente internacional era el recomendar reformas legales para fortalecer el sistema de justicia, haciendo propuestas de cambios necesarios para fortalecer y consolidar la legislación existente y contemplar nuevas figuras delictivas o procedimientos contra la corrupción, entre estos la regulación de los medios de impugnación.

17. MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO

En el convenio de creación de la MACCIH en el apartado 7.6 del artículo 7, se estableció que el ente internacional presentara al Secretario General de la OEA informes de los trabajos que realiza en los que se incluyan los avances, desafíos, y posibles obstáculos que se detecten por parte del Estado de Honduras²³³⁵.

²³³⁴ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. 2016. *Óp. Cit.*

²³³⁵ Ídem. Artículo 7.

La MACCIH durante su mandato presentó un total de 6 informes semestrales, en los que dieron a conocer los resultados de la labor que realizó en Honduras, tanto de los casos como de las demás actividades en el fortalecimiento del Sistema de Justicia estatal.

18. RECURSOS DISPONIBLES

A. HUMANO:

La Misión se integraba de funcionarios internacionales y nacionales, de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y personal que era contratado por la misión, en el que se incluyeron expertos en áreas de investigación, con experiencia de diferentes áreas y temas de corrupción, sistemas de información, sistemas electorales, derecho internacional en adición de otras disciplinas, también se incluyó un vocero el cual sería designado por el Secretario General²³³⁶ quien era el responsable de las actividades de la MACCIH.

El peruano Juan Jiménez Mayor fue el primer vocero de la MACCIH, quien tenía una larga trayectoria en relación a temas de anticorrupción²³³⁷, tal como se puede leer en un comunicado de prensa de la página web de la Organización de Estados Americanos, *“también fueron nombrados, Francisco Javier Guerrero Aguirre como secretario para el fortalecimiento de la democracia y Sergio Jellinek, asesor del Secretario General de la OEA”*²³³⁸, durante los primeros seis meses de labor, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras llegó a tener 24 miembros.

B. MATERIALES:

En el convenio de establecimiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras se consignó en el artículo 8 el Gobierno proporcionaría las condiciones para que la Misión pudiera tener acceso a la información necesaria para la investigación de casos de corrupción, así como de material documental, sin

²³³⁶ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. 2016. *Óp. Cit.* Artículo 10

²³³⁷ Ídem.

²³³⁸ Diario “La Tribuna” 2016. MACCIH es presentada por el gobierno de Honduras, de fecha 22 de febrero de 2016. En: *Diario “La Tribuna”* [en línea]. Disponible en: <https://web.archive.org/web/20180303110750/http://www.latribuna.hn/2016/02/22/maccih-se-instala-oficialmente-en-honduras/> [consulta: 10 de diciembre de 2020].

embargo, no consta en ninguna fuente con cuantos documentos o demás material realmente fue puesto a disposición para el desarrollo de su labor.

C. PRESUPUESTO ASIGNADO:

En cuanto a los recursos económicos de los que dispuso la MACCIH, según lo regulado en el convenio de creación se establece *“que los gastos eran sufragados con las contribuciones voluntarias de la comunidad internacional”*²³³⁹. Sin embargo, el Gobierno facilitaría locales y oficinas para que esta pueda cumplir con sus funciones.

Dentro de los países que contribuyeron a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, en una noticia publicada el 09 de septiembre de 2016 se menciona que *“Estados Unidos había aportado US\$5.2 millones; Canadá con 5 millones de dólares canadienses y se estaba a la espera de un aporte importante de la Unión Europea; tenían en curso conversaciones con Alemania, Inglaterra, Suecia y Suiza”*²³⁴⁰.

Según las proyecciones de la Organización de Estados Americanos en el 2015 la Misión de Apoyo para el Combate de la Corrupción y la Impunidad tuvo un presupuesto de 32 millones de dólares, más o menos unos 716 millones de lempiras para ser ejecutados en los 4 años de su mandato según una noticia de un medio de comunicación hondureño²³⁴¹.

19. EL PAPEL DE LA VÍCTIMA:

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras no tuvo un contacto directo con la víctima, ya que el rol que esta desempeñaba giraba en torno al apoyo al Ministerio Público en los casos de delitos de corrupción. De esta cuenta que la MACCIH no tenía interacción directa con las víctimas.

²³³⁹ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. 2016. *Óp. Cit.*

²³⁴⁰ ARRAZOLA, Carlos, 2016. La MACCIH es el modelo de Honduras; no somos una copia de la CICIG”, Plaza Pública 09 de septiembre de 2016. En: *Plaza Pública* [en línea]. Disponible en: <https://www.plazapublica.com.gt/content/la-maccih-es-el-modelo-de-honduras-no-somos-una-copia-de-la-cicig> [consulta: 10 de diciembre de 2020].

²³⁴¹ DIARIO El Heraldo, 2016. 716 millones será el presupuesto de la Maccih, 18 de enero de 2016. En: *Diario El Heraldo* [en línea]. Disponible en: <https://www.elheraldo.hn/pais/921133-466/de-l-716-millones-ser%C3%A1-el-presupuesto-de-la-maccih> [consulta: 10 de diciembre de 2020].

20. PERCEPCIÓN PÚBLICA:

Con el conocimiento de los primeros casos judicializados del Ministerio Público con investigación conjunta con la MACCIH, empezó a adquirir popularidad, devolviendo en cierta medida la confianza de la población en los órganos estatales que intervenían en los procesos judiciales, demostrando que inclusive élites estatales involucradas en hechos ilícitos podían ser llevados a tribunales para ser procesados. *“La ciudadanía hondureña, casi de manera total, percibe hoy una manifestación abrumadora de la corrupción en la vida política e institucional del país. Para los y las ciudadanas, la corrupción parece tener una presencia absoluta y afecta a todas las estructuras estatales y las principales instituciones, a las cuales califica con un alto nivel de afectación de la corrupción”*²³⁴².

La percepción en cuanto a corrupción e impunidad que se tiene a cerca de las instituciones estatales parece ser muy parecida en toda Latinoamérica, en la que existe poca credibilidad por parte de la población y considera que la mayoría de políticos son corruptos y se tiene una tasa enorme de impunidad.

Con la identificación de empleados y funcionarios públicos implicados en casos de corrupción hace que la estigmatización de los puestos sea generalizada, lo que implica que la percepción de un puesto público a su vez, sea asociada a la corrupción.

*“Según el sondeo de opinión pública sobre las percepciones de la situación hondureña en el año 2018, realizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús, 61,3% de los entrevistados quieren que la MACCIH continúe sus trabajos en el país y 35,4% ponen la Misión como la quinta institución de más confianza en Honduras”*²³⁴³.

Aun con un nivel de aceptación y confianza de la población, la MACCIH empezó a tener conflicto en su labor cuando los casos en los que intervenía se vieron involucrados personajes con poder político y económico, como fue el caso

²³⁴² DUE Process of Law Foundation. 2016. *Óp. Cit.* Página: 6

²³⁴³ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos, 2019. Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Sexto informe trimestral, Hacia el fortalecimiento institucional: “Binomio UFECIC-MP/MACCIH-OEA, rompiendo paradigmas”, Página: 3. En: OEA/MACCIH [en línea]. Disponible en: <http://www.oas.org/documents/spa/press/CP40861SSEXTOINFORMEMACCIH.pdf> [consulta: 10 de diciembre de 2020].

denominado Narco política, en el que estaban involucrados algunos diputados del Congreso hondureño y lo que desembocó en que este gubernamental decidiera no renovar el convenio de la MACCIH.

21. NÚMERO DE CASOS INGRESADOS

Los equipos integrados por la UFECIC-MACCIH, durante el mandato lograron judicializar 11 casos de corrupción desde su creación ²³⁴⁴, los cuales son: *“Narcopolítica, Fraude sobre el Gualcarque, Red de Diputados, Caja Chica de la Dama, Pacto de Impunidad, Pandora, Aseguramiento de Bienes, Caja chica del Hermano, Licitación Fraudulenta del Seguro Social, Arca Abierta, Patuca III Colusión y corrupción, así como el requerimiento de aseguramiento de bienes relacionados al caso Caja Chica de la Dama”*. ²³⁴⁵

No se cuenta con información si la MACCIH recibía denuncias directas.

22. NÚMERO DE CASOS RESUELTOS

No se cuenta con los datos de los casos que han sido resueltos en los que la MACCIH haya tenido intervención, más que los datos que se mencionaran más adelante en el que 4 se encuentran en procesamiento y dos en fase inicial.

23. ANÁLISIS CUALITATIVO:

Luego de tres años de mandato de la MACCIH, presento 11 casos de corrupción y uno más que se origina de uno de estos casos que se trabajaron en conjunto con fiscales e investigadores de la UFECIC-MP²³⁴⁶, entre los cuales se encuentran²³⁴⁷:

1. *“Narcopolítica*;
2. *Fraude sobre el Gualcarque*;
3. *Red de Diputados*;
4. *Caja Chica de la Dama*;

²³⁴⁴ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. 2019. *Óp. Cit.*

²³⁴⁵ Ídem.

²³⁴⁶ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos 2019. UNIDAD Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público de Honduras. En: *OEA, más derechos para más gente* [en línea]. Disponible en: <https://www.oas.org/es/sap/dsdme/maccih/new/comunicacion.asp> [consulta: 10 de diciembre de 2020].

²³⁴⁷ Ídem.

5. *Pacto de Impunidad*;
6. *Pandora*;
7. *Aseguramiento de Bienes*;
8. *Caja chica del Hermano*;
9. *Licitación Fraudulenta del Seguro Social*;
10. *Arca Abierta*;
11. *Patuca III Colusión y corrupción*,
12. *Así como el requerimiento de aseguramiento de bienes relacionados al caso Caja Chica de la Dama.*²³⁴⁸

En los casos de “Caja Chica del Hermano”, “ampliación del Caso Pacto de Impunidad”, “Licitación Fraudulenta del Instituto de Seguro Social”, “Arca Abierta” el Poder Judicial dictó auto de formal procesamiento y se encuentran en trámite. En los casos de “Fraude sobre el Gualcarque”, “Patuca III - Colusión y Corrupción”, se encuentran en la fase inicial²³⁴⁹.

También dentro de la labor que desempeñó la MACCIH “se realizaron manuales para los operadores de justicia y para los procesos de capacitación en las Escuelas Fiscal y Judicial y talleres a los miembros de comunicación del MP”²³⁵⁰.

“El Observatorio de Justicia Penal de la MACCIH-OEA redefinió su organización interna, creando cuatro comités, de Socialización, de Monitoreo y Seguimiento, Normativo y de Descentralización”²³⁵¹

La Misión realizó foros ciudadanos para el fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil hondureña en temas de combate a la corrupción y a la impunidad²³⁵²

“Se implementó la Investigación y Persecución Penal Integrada, con la finalidad de generar buenas prácticas en los procesos de combate a la corrupción, creándose con

²³⁴⁸ Organización de Estados Americanos, 2019. Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Comunicado de prensa de fecha 24 de mayo de 2019. En: OEA, *más derechos para más gente* [en línea]. Disponible en: https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-036/19 [consulta: 10 de diciembre de 2020].

²³⁴⁹ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. 2019. *Óp. Cit.*

²³⁵⁰ Ídem

²³⁵¹ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. 2016. *Óp. Cit.*

²³⁵² Ídem. Página 6

tal fin la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC-MP)”.²³⁵³

Luego del cierre de MACCIH la UFECIC pasó a llamarse Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO).

Luego de este estudio analítico en los aspectos que a mi juicio consideré de mayor relevancia, se puede establecer que la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, contribuyó a la lucha contra la impunidad y fortalecimiento del estado de derecho, en Honduras.

A continuación, se presenta de forma gráfica y sintética el trabajo realizado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.

		Mandato	Duración del Mandato	Cesación de los hechos que originaron el mandato	Inicio del primer juicio	Universo de casos	Casos procesados y/o relaciones procesales	Tiempo promedio de los casos	Casos pendientes de resolución	% Casos presentados versus casos resueltos	% Casos pasibles de procesamiento versus casos resueltos
4	Misión de Apoyo contra la Corrupción y a Impunidad en Honduras-MACCIH	Apoyo al Ministerio Público para el combate de los delitos de corrupción e impunidad y apoyo al fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia	4 años prorrogables	No aplicable.	No aplicable	12	12	indeterminado	indeterminado	No se puede concluir	No se puede concluir

²³⁵³ ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. 2016. *Óp. Cit.* Página 7

CONCLUSIONES

"La impunidad premia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda; estimula al delincuente y contagia su ejemplo."

Eduardo Galeano

1. SOBRE EL CONCEPTO IMPUNIDAD

El concepto impunidad es un concepto que se acuñó desde la óptica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional, como resultado de una serie de esfuerzos por hacer justicia y no dejar sin castigo las graves violaciones a los derechos humanos y a los crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

Impunidad en esencia significa falta de castigo, en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional y ahora también desde el Derecho Internacional Penal. Esa falta de sanción se traduce en la falta de persecución penal y castigo de los presuntos responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y que se han tipificado como crímenes internacionales, y cuestiones de delincuencia organizada y corrupción.

Muchas veces, la impunidad se deriva de la ausencia de un marco legal que permita la persecución penal o por la falta de operatividad de los órganos encargados de administrar justicia, por lo que se evidencia el incumplimiento del Estado en cuanto a sus obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de sus habitantes, al ser incapaz de investigar, perseguir y castigar a los responsables.

La impunidad refleja la incapacidad de las instituciones nacionales, responsables de administrar justicia, la falta de idoneidad de los recursos internos genera graves consecuencias legales, sociales, culturales, psicológicas y económicas.

La impunidad es un concepto importante, que no se puede tomar a la ligera, trasciende todos los ámbitos, en el campo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional Penal, es mucho más que la falta de castigo, es la falta de

voluntad política y el ejercicio del poder arbitrario de quienes lo ostentan ante quienes son dominados, dejando sin sanción los graves crímenes contra la humanidad, evidenciando así que la impunidad es más que una cuestión de derecho.

2. SOBRE LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

La lucha contra la impunidad es una obligación internacional de los Estados, que se deriva concretamente de las obligaciones convencionales adquiridas por medio de la ratificación de convenios y tratados internacionales. Hace parte de los principios generales del derecho internacional, relacionado con la construcción y sostenimiento del Estado de Derecho.

La lucha contra la impunidad inició como un esfuerzo exclusivo para sancionar las violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, sin embargo, en esfuerzos recientes se ha extendido a violaciones y delitos relacionados al crimen organizado y actos de corrupción. Se refleja directamente en la eficacia de la administración de justicia de los Estados en la persecución penal y condena de los responsables.

Por tanto, esta lucha incluye investigar, perseguir, sancionar a los responsables y proporcionar los recursos efectivos de reparación a las víctimas. Está compuesta por un andamiaje legal y garantías que amparan a los individuos víctimas de estos actos e internacionalmente se ha concentrado en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional Penal.

3. SOBRE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

Desde la comunidad internacional se han realizado una serie de esfuerzos para combatir la impunidad, uno de estos ha sido la creación y aprobación de instrumentos internacionales que expresa o tácitamente llaman a los Estados a no dejar en la impunidad las violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, crimen organizado y delitos relacionados con la corrupción.

En el presente trabajo los instrumentos analizados fueron de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional Penal, encontrando que estos se pueden

categorizar de acuerdo al uso expreso o no del concepto impunidad de la siguiente manera:

- d. Instrumentos que abordan directamente la palabra impunidad y que tienen como objetivo combatirla.
- e. Instrumentos que contienen como aspiración la justicia, lo que se interpreta como combate a la impunidad.
- f. Instrumentos que tienen como objetivo la justicia y un llamado al cumplimiento de la debida diligencia en las investigaciones para no dejar en el olvido las violaciones a los derechos humanos. En este caso se entiende que, si se busca la justicia, se está luchando contra la impunidad, por ser esta la antítesis de la justicia.

Como consecuencia de esta codificación y los diversos esfuerzos en materia de lucha contra la impunidad, con el objeto de profundizar en este tema, las Naciones Unidas desarrolló el Conjunto de Principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad de 8 de febrero de 2005, aprobado por medio de la Comisión de Derechos Humanos, los que sistematizan y desarrollan los derechos y obligaciones existentes en función de la lucha contra la impunidad, que aportan a la interpretación y aplicación de todos los instrumentos y mecanismos de lucha contra la impunidad.

4. SOBRE LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA MEDIR LA EFICACIA

Luego de hacer todo un recorrido por la base conceptual de la impunidad, se detectó que no se podía pretender establecer indicadores o factores de medición de eficacia de los esfuerzos internacionales para combatir la impunidad, si previo a ello, no se identificaban los elementos que influían en la existencia o no de impunidad por las graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Es así, que luego de un extenso análisis de métodos para medir la eficacia, se identificó que esta no se podía realizar por fuera de los factores relevantes que apoyan a los Estados en la lucha contra la impunidad, siendo estos:

- a. **Comunidad Internacional:** Entendiéndose no sólo como una unidad o suma de entidades, sino como una entidad unitaria, propia y separada, que actúa como un conjunto en el seno de la sociedad internacional, para el presente trabajo su importancia radica en el poder e influencia que posee para la creación de mecanismos de lucha contra la impunidad.
- b. **Control Internacional:** Este concepto era fundamental para este trabajo, debido a que se *“identifica un sistema de relaciones internacionales de cambio que presiona al orden internacional hacia una transformación”*²³⁵⁴. Es ejercido por la comunidad internacional como parte del sistema internacional y que en este caso se materializa por medio de los informes que se realizan y se presentan previo a la creación de los mecanismos de lucha contra la impunidad, por medio de organizaciones internacionales como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos o El Consejo de Europa entre otros.
- c. **Soberanía:** El debate acerca de la soberanía y la tensión existente con el derecho internacional penal adquiere una adinámica propositiva cuando se entiende la soberanía como un concepto que sirve para definir las libertades, prerrogativas, derechos, obligaciones y límites de los estados en un contexto de naciones que buscan el imperio del derecho y respeto de la dignidad humana. Si de una parte es cierto que la historia de las naciones es la historia de guerras de dominación y conquista, también es cierto que la historia de las relaciones internacionales es la historia de consensos y prácticas consuetudinarias que aspiran por el imperio de la justicia y la paz para disminuir y evitar los desastres del abuso del uso de la fuerza que pueden terminar con la destrucción humana.
- d. **Democracia:** La democracia es un pilar fundamental de la lucha contra la impunidad, porque es el reflejo del balance entre los diferentes órganos del Estado, el pueblo, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, entre los civiles y militares, y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución.

²³⁵⁴ NUÑO Nuño, Mónica Elizabeth. 2015. *Óp. Cit.*

Es así, como resulta importante para este trabajo determinar si la creación de los mecanismos de lucha contra la impunidad se da en un medio democrático o en aras de implementarla, reforzarla o sostenerla.

- e. **Estado de Derecho:** Este es un elemento clave en la creación de los mecanismos de lucha contra la impunidad, porque dependiendo de la existencia, aplicación y cumplimiento con independencia de las leyes para la gobernanza del Estado y respeto de los derechos humanos, es que se decide la creación de los mecanismos de lucha contra la impunidad, los cuales en su mayoría surgen con el fin de fortalecer el Estado de Derecho en los países donde los mecanismos de lucha contra la impunidad tienen competencia.
- f. **Obligaciones Internacionales:** El tema de las obligaciones internacionales era indispensable abordarlo en el presente trabajo, puesto que la comunidad internacional debe tener un fundamento para tomar medidas de lucha contra la impunidad en el territorio de un Estado, el Estado frente a la comunidad internacional debe tener un compromiso que permita ser auditado en esta materia.

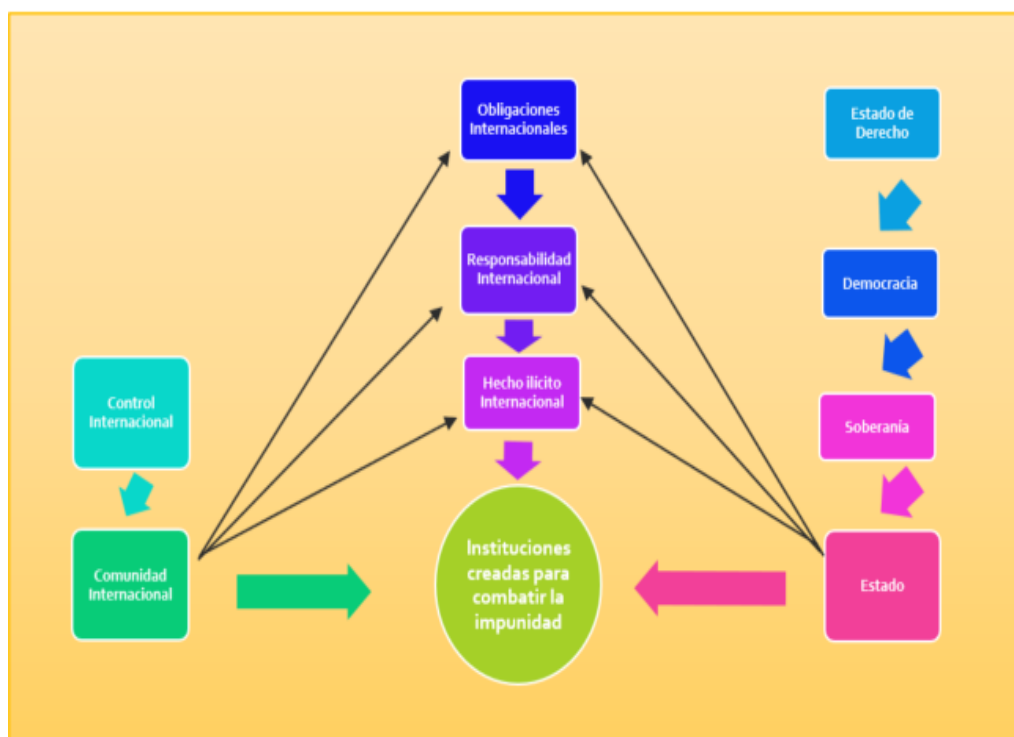
Es compromiso no es otro que el adquirido por medio de las obligaciones internacionales, las cuales en su mayoría deja de respetar, proteger, garantizar y promover, en resumen, las deja de cumplir al momento de permitir la impunidad. El incumplimiento es el que abre el espacio a la Comunidad Internacional para intervenir con el fin de procurar que cumplan, garantizando la lucha contra la impunidad.

- g. **Responsabilidad Internacional:** Esta se deriva de la ejecución de conductas lesivas en contra de los miembros de la sociedad internacional teniendo como consecuencia la obligación de reparar el daño.

En este sentido, esa reparación se da en dos vías, la primera en permitir que se cree el mecanismo de lucha contra la impunidad para que tenga jurisdicción en el territorio del Estado y la segunda que el mecanismo se eficaz, es decir se pueda investigar y sancionar a las personas investigadas por los hechos que se encontraban en la impunidad y/o que se inicien las investigaciones necesarias.

- h. Hecho ilícito Internacional:** Este concepto resulta importante para el presente trabajo, pues es precisamente por esa conducta del Estado que viola las obligaciones internacionales que se crea el mecanismo de lucha contra la impunidad, este se da en dos vertientes, la primera en la comisión de las graves violaciones a los derechos humanos y derecho internacional humanitario dentro de un conflicto armado, ya sea nacional o internacional y la segunda en permitir que exista de impunidad en su territorio, que es lo que provoca la intervención de la Comunidad Internacional.

Todos estos conceptos se interrelacionan y sirven como pilares para la creación de los mecanismos de lucha contra la impunidad, los cuales al graficarse se pueden ver de la siguiente manera:



5. SOBRE LOS PARÁMETROS Y FORMAS UTILIZADAS PARA MEDIR LA EFICACIA

Debido a la diversidad de modelos implementados en los diferentes mecanismos internacionales de lucha contra la impunidad, no es fácil conocer de su eficacia, puesto que esta no sólo se puede medir por medio de estadísticas que reflejen el número de casos, debido a que el impacto y reacción social, así como el margen de apreciación juegan un papel importante al momento de hablar de eficacia, tampoco

es fácil establecer parámetros de medición. En este caso concreto para solucionar la situación, se plantearon una serie factores más que de indicadores para poder concluir, si cada uno de los esfuerzos creados desde la comunidad internacional han sido eficaces para combatir la impunidad y por ende para contribuir con la justicia.

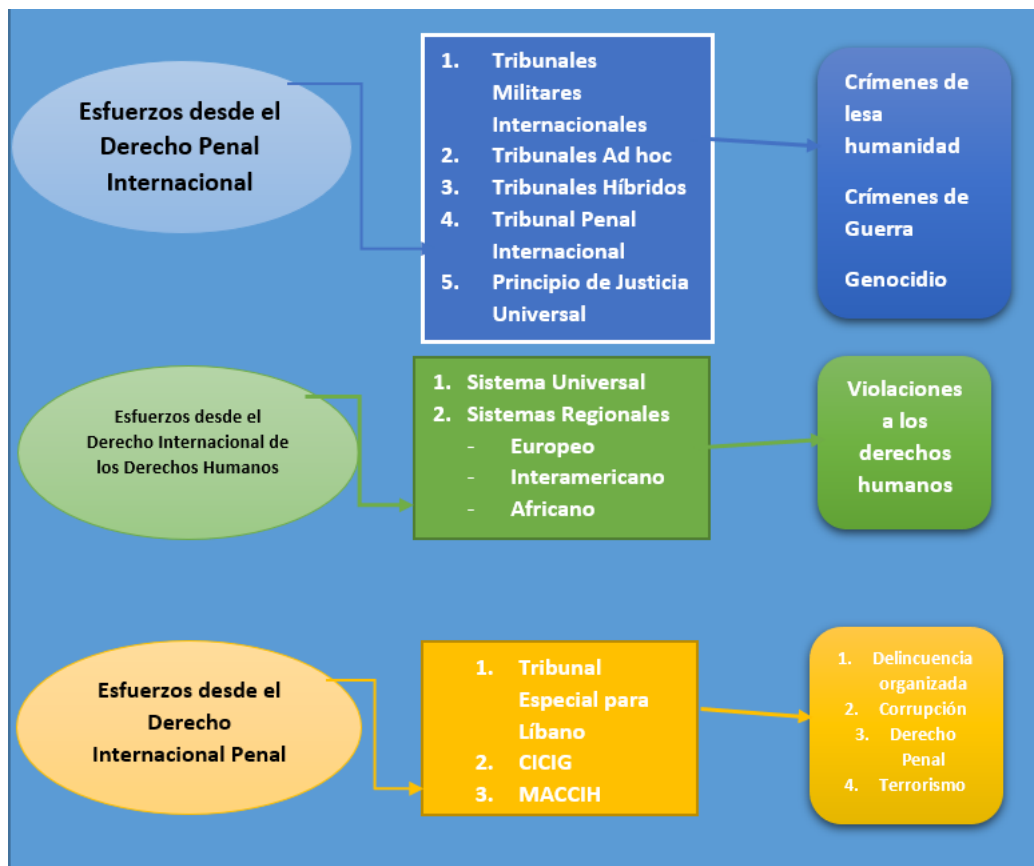
Existen diversos métodos utilizados internacionalmente para medir la eficacia de las instituciones internacionales. En el presente trabajo se decidió aplicar un método combinado de eficacia en el desarrollo de objetivos, con el método de enfoque de sistemas, con el del papel que juegan las instituciones en el moldeamiento del comportamiento de la sociedad y los elementos en función a que han sido creadas.

Es así como se eligieron veinticuatro factores, algunos con sus respectivos elementos, en razón del análisis de la medición genérica de la eficacia, de los factores que generan impunidad, del estado actual de los mecanismos y de la identificación del contexto y los factores que llevaron a la creación de éstos, con el fin de ayudar a determinar el aporte que las instituciones creadas para combatir la impunidad han dado a la justicia.

Es por eso que se parte de algo que para muchos puede ser obvio, pero que se debe tener claro para analizar la eficacia y no es otra cosa que las **razones de creación**. En esta perspectiva se puede señalar que fueron creados para procesar a los posibles responsables de determinados crímenes, en su mayoría graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Este análisis permitió hacer la distinción referido al derecho penal específicamente entre las instituciones de Derecho Penal Internacional y de Derecho Internacional Penal, de las cuales se había venido haciendo una clasificación errónea debido a que sólo se considera el órgano que lo creo, sin tomar en cuenta la forma de creación de estos mecanismos y los fenómenos delictuales que abordan.

Es así como se puede hacer una nueva clasificación de estos esfuerzos considerando estos factores y dividiéndose en:

- a. Esfuerzos desde el Derecho Penal Internacional
- b. Esfuerzos desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
- c. Esfuerzos desde el Derecho Internacional Penal



Como ya se ha mencionado en el desarrollo de este trabajo, la **Comunidad Internacional** juega un papel preponderante en la creación de los mecanismos de lucha contra la impunidad, debido a que ejecuta las facultades que tiene para ejercer control sobre los Estados, exigirle el cumplimiento de la responsabilidad internacional y de las obligaciones internacionales relacionadas con la lucha contra la impunidad por medio de la creación de los mecanismos que se concentran en combatirla.

Este papel es relevante, porque depende del fenómeno, del Estado y de los intereses es que se actúa. En la mayoría de casos su intervención ha sido importante y comprometida, desde la creación de Núremberg hasta MACCIH. Su participación ha evolucionado, pero, no se ha relevado lo suficiente, por ejemplo desde las Naciones Unidas no se sistematizado esta intervención, ni se han unificado estándares mínimos, especialmente en la creación de mecanismo híbridos, la mayoría de estos se han ido acomodando a los intereses de cada Estado, sin embargo; del análisis realizado se ha detectado que se necesita esta estandarización de requisitos mínimos para el funcionamiento de los mismos y el único ente que lo puede realizar es el que ha participado en la creación de la mayoría de estos, siendo las Naciones Unidas.

La forma en que se ejerce y aborda la **soberanía** para la creación de los mecanismos de lucha contra la impunidad resulta importante, pues, en ella se puede observar el papel preponderante que se la ha dado a los Estados para aceptarlos, también se ve la evolución en la forma en que se maneja. Es así como al momento de crear los Tribunales Militares Internacionales de Núremberg y para el Lejano Oriente, el respeto de la soberanía no fue considerado, debido a que eran los países vencidos en la guerra y únicamente se pensó en una forma de hacer justicia por las graves atrocidades cometidas. Esto fue ampliamente criticado y es uno de los factores que influye en que sean calificados como los tribunales de los vencidos.

Por lo que para los siguientes esfuerzos ha sido un tema profundamente debatido y considerado en la Asamblea de las Naciones Unidas, que se ha convertido también en un obstáculo y en lucha de fuerzas para lograr la creación de otros mecanismos.

Es importante observar, cómo en los mecanismos analizados en el presente trabajo internacionalmente no se ha considerado que la soberanía haya sido vulnerada, es más, la mayoría de los mecanismos han surgido por la solicitud del Estado que será objeto del mecanismo, o con la autorización de los Estados como sucede con los mecanismos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Curiosamente, quienes han cuestionado el respeto de la soberanía han sido los propios Estados que han solicitado los mecanismos de lucha contra la impunidad, esto se ha dado en dos momentos, cuando se crea el mecanismo, al considerar que la forma de funcionamiento o ubicación propuesta no conviene a sus intereses, concretamente como sucedió por ejemplo con el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y cuando el mecanismo empieza a producir resultados que no son favorables para quienes ostentan el poder en el Estado, se presentó la manifestación en relación con los mecanismos de Timor Oriental, CICIG y MACCIH. En el caso de las últimas provocó que los gobiernos de Guatemala y Honduras no solicitaran la renovación de los mandatos por temor de los presidentes y políticos de ser procesados penalmente.

Por lo que se refiere al papel de la **democracia**, es otro punto importante dentro de la medición de la eficacia, puesto que el tipo de gobierno en que se encuentra el Estado objeto del mecanismos de lucha contra la impunidad determina su creación y funcionamiento, así, no es lo mismo que el mecanismo opere en un país en transición a la democracia, en donde se debe empezar casi de cero en cuanto a la plataforma

legal e institucional, que en un Estado en donde hay una democracia débil y se deben reformar leyes e instituciones, porque como se puede observar también, ningún Estado con democracia sólida ha tenido la necesidad de que en su territorio funcione un mecanismo internacional de lucha contra la impunidad.

Otro aspecto relevante y directamente relacionado con lo anterior es el de **Estado de Derecho**, debido a que la ausencia o debilitamiento de este es el que provoca la creación del mecanismo de lucha contra la impunidad, a causa de la ausencia de justicia y por ende de persecución penal de las graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y de lesa humanidad y como se ha visto en la actualidad la falta de persecución penal para el terrorismo, crimen organizado y corrupción.

Unido a los factores anteriores está la determinación del origen del mecanismo de lucha contra la impunidad, que puede ser por **suposiciones fácticas**, que es básicamente como prevención a la comisión estos actos, esto se puede ver en la creación de la Corte Penal Internacional, los mecanismos de Derecho Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Penal que no tienen restricción en conocer hechos concretos, cuando la creación del mecanismo se da por **condiciones fácticas** significa que los hechos que el mecanismo de lucha contra la impunidad ya sucedieron y deben ser justiciabilizados, como claro ejemplo de ellos tenemos los Tribunales Militares Internacionales, Tribunales Ad hoc, los mecanismos híbridos de Sierra Leona, Camboya y Líbano.

La eficacia también se refleja en el *mandato*, referido a la forma que se emite éste, ya sea por una Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, un Tratado o Convenio Internacional que debe ser ratificado por los Estados, un acuerdo bilateral entre Naciones Unidas o cualquier otro ente internacional y el Estado involucrado o un acuerdo entre Estados.

La forma de redactar los **objetivos** es importante, puesto que ellos determinarán el **alcance** del mandato, otro elemento indispensable dentro de los mandatos es la determinación de la **competencia** que sirve de marco de operación del mecanismo de lucha contra la impunidad.

También es importante establecer las **fortalezas** del mandato, estas pueden radicar en su competencia y jurisdicción, también en la temporalidad o forma de financiamiento del mandato, lo que garantiza su funcionamiento en un primer momento. Dentro de estas hay que estar muy pendiente de los conceptos que utiliza el mandato y la definición que les da. La falta de definición de conceptos puede provocar confusiones y retrasos en la aplicación del mandato, como ejemplo claro de esto se tiene el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en el que se planteó la persecución penal de los delitos cometidos por los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, los cuales no fueron definidos con claridad en el acuerdo, lo que provocó que el trabajo de CICIG en muchos casos fuera cuestionado al considerar que los sujetos objeto de investigación no eran parte de algún cuerpo ilegal o aparato clandestino de seguridad.

Otro aspecto a tomar en cuenta al momento de redactar y definir el contenido de un mandato que crea un mecanismo internacional de lucha contra la impunidad es abarcar todas las fases procedimentales, instituciones jurídicas esencialmente víctimas y protección a testigos, que algunos de los mecanismos estudiados no fueron incluidos. Las falencias en esta materia han provocado reformas constantes en reglas de procedimiento o la ausencia de protección a testigos y víctimas al no estar contemplados en el mandato.

Un elemento que es producto del desarrollo del derecho internacional público en materia de creación de los mecanismos internacionales que conocen jurisdiccionalmente de casos son las **reglas de admisibilidad**, las cuales muchas veces no se encuentran de manera expresa en los mandatos, se han dividido por razón de la persona, de la materia, del tiempo y del lugar. La aplicación de las reglas de admisibilidad permite que la selección de casos sea transparente y apegada al mandato evitando confusiones y trabajo innecesario.

El **tiempo** ha sido otro de los elementos trascendentales en los mandatos de los mecanismos de lucha contra la impunidad, es un factor que puede jugar a favor o en contra del mecanismo, cuando el mandato no tiene tiempo definido, le permite no apresurarse para iniciar sus funciones y desarrollar los casos de acuerdo a las

necesidades, lo que también puede ser una desventaja, si no se cuenta con el compromiso de ejecución y con plan estratégico de trabajo, debido a éste se puede relajar demasiado y los resultados se van postergando, llegando al punto de que sea cuestionado su funcionamiento.

Cuando el mandato cuenta con un tiempo determinado para funcionar hace que se obligue a quienes lo ejecutan a obtener resultados, si el tiempo no es suficiente puede ser un factor en contra, debido a que las actividades del mecanismo se verán limitadas, realizándose las más fáciles, no las más adecuadas, debe existir planificación estratégica para que el trabajo sea orientado de manera efectiva. Este factor también ha sido utilizado por los Estados para limitar el actuar del mecanismo de lucha contra la impunidad y para condicionar la renovación de este, como sucedió con CICIG y MACCIH.

Luego del análisis de los mecanismos internacionales de lucha contra la impunidad se considera que los mandatos no permanentes deben tener un tiempo definido, pero un tiempo realista, con la posibilidad de ser renovados, ese tiempo debe ser entre seis y diez años, esto con el fin que el mecanismo tenga oportunidad de trabajar adecuadamente y obtener resultados. El plazo que se propone no es de manera antojadiza, surge después de analizar los resultados de los diferentes mecanismos de lucha contra la impunidad y de haber tenido la oportunidad de trabajar en uno de ellos conociendo desde la práctica las necesidades y obstáculos de la investigación, que influyen directamente en el factor tiempo.

Con respecto a incorporar dentro de los elementos de medición la **distribución del poder**, se debe a que de acuerdo a cómo se maneje el mecanismo de lucha contra la impunidad tanto a nivel administrativo como funcional, también dependerá el éxito de éste. Esta necesidad se derivó después de las experiencias obtenidas con los Tribunales Militares Internacionales, que fueron creados por las naciones aliadas pero el control fue concentrado por Estados Unidos. Con la existencia de las Naciones Unidas y su participación para crear los mecanismos de lucha contra la impunidad, se ha tenido la oportunidad que las organizaciones reflejen neutralidad bajo el manto de Naciones Unidas y que no predomine el dominio e interés de un solo país, esto desde luego es aplicable para los mecanismos creados desde su seno o el de otra

organización internacional, lo que no sucede con los mecanismos creados por acuerdo entre dos naciones.

Al analizar la creación de mecanismos internacionales se hacía obligatorio explicar si estos surgían por cumplimiento de **obligaciones internacionales** o si existía otra explicación para su creación, con excepción de los Tribunales Militares Internacionales de Núremberg y para el Lejano Oriente los cuales no surgen por estas debido a que el término no se encontraba acuñado en el derecho internacional público. Será a partir de la creación de los Tribunales Ad hoc, los mecanismos de lucha contra la impunidad de Derecho Penal Internacional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Penal, surgen como cumplimiento de obligaciones internacionales de promover, respetar, garantizar y proteger, con el fin de cumplir con los deberes del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar.

Como se ha mencionado, estas obligaciones corresponden tanto a los Estados en donde han existido las infracciones o violaciones a los derechos humanos, como de la Comunidad Internacional.

Esas obligaciones se derivan de la **responsabilidad internacional** del Estado al cometer o permitir la comisión de conductas lesivas para su población y la sociedad internacional. La existencia de esta permite que se pueda exigir al Estado la creación de mecanismos de lucha contra la impunidad, o que sea el mismo Estado quien solicite su creación como vía de reparación de los actos lesivos y que posteriormente le permita al mecanismo cumplir adecuadamente con sus funciones. Es de recordar que este concepto tampoco se encontraba acuñado al momento de la creación de los Tribunales Militares Internacionales.

Luego de determinar la existencia de obligaciones internacionales y responsabilidad internacional, se debe analizar la presencia del **hecho ilícito internacional**, término acuñado hasta 2001, y que dependiendo de su existencia es que se crean los mecanismos. Éste es detectado por medio de los trabajos que se realizan previamente a la creación de un mecanismo. Como ejemplo de esto tenemos los informes rendidos a la Asamblea General de Naciones Unidas previo a la creación de los Tribunales Ad hoc, los Tribunales Especiales de Timor Oriental, la Misión de Administración Provisional en Kosovo, Sierra Leona, Camboya y Líbano, lo que no sucedió para la creación de CICIG.

La **cooperación de los Estados** más que un factor o indicador es un pilar fundamental para la existencia de los mecanismos de lucha contra la impunidad, pues ésta se refleja en dos vertientes, la financiera, que se traduce que proveer del dinero suficiente para que el mecanismo sea creado y subsista y la segunda vertiente es la cooperación judicial, que se traduce en la colaboración para ejecutar órdenes de aprehensión internacional, procesos de extradición y diligenciamiento de actividades de investigación cuando estas sean necesarias. La cooperación internacional se ha visto ensombrecida por el intento de manipulación e intereses políticos, así como por el tráfico de influencias dependiendo del poder del sujeto a investigar.

A nivel financiero, la mayoría de mecanismos de lucha contra la impunidad dependen de la cooperación internacional para su funcionamiento y subsistencia, cuando los países donantes no están interesados en que el mecanismo de lucha contra la impunidad continúe, retiran sus aportes para que este suspenda operaciones.

A nivel procesal, si el Estado cooperante no está interesado en apoyar el mecanismo simplemente no cumple con los requerimientos realizados, obstaculizando así la lucha contra la impunidad.

Otro de los pilares esenciales para medir la eficacia es la **independencia** con que funcionan los mecanismos de lucha contra impunidad, pues ésta garantiza la objetividad de su trabajo y de sus decisiones sean vinculantes o no. En general, esto es algo que a partir de la creación de los Tribunales Ad hoc se ha logrado, es un aspecto que no ha sido tan cuestionado y que ha permitido el desarrollo de la jurisprudencia internacional y nacional dependiendo el caso, así como el establecimiento de estándares internacionales.

La **selección de actores** se refiere principalmente a los sujetos involucrados en los procedimientos desarrollados en los mecanismos de lucha contra la impunidad, aunque muchas veces se contempla el papel que juega la prensa, la sociedad civil y los poderes políticos, dependiendo de los alcances del mandato.

En el momento de desarrollo del mandato y de funciones del mecanismo de lucha contra la impunidad **la normativa relevante** y el **marco procedimental** juegan un papel trascendental al aplicar el derecho, porque es así como vemos la aplicación de normas internacionales y legislación local dependiendo del procedimiento. Debido al

papel trascendental que juega la normativa a aplicar, es algo que se debe tener muy claro al momento en que el mecanismo inicie sus funciones, si se aplicará la legislación nacional se debe tener claro la situación de las leyes, si hay necesidad de hacer adecuación o reformas legislativas, así como si se debe promover la promulgación de nuevas leyes con el fin de fortalecer los sistemas de justicia y el trabajo del mecanismo. Un claro ejemplo de esto fue lo realizado por CICIG y MACCIH durante el ejercicio de sus mandatos, promoviendo la promulgación de leyes que fortalecieran la justicia en Guatemala y Honduras.

En cuanto al marco procedimental, este es indispensable para que los procesos se desarrollen bajo los estándares internacionales de garantías judiciales y protección judicial, acá es donde han existido algunas falencias, por ejemplo, el Tribunal Militar Internacional de Núremberg los medios de impugnación no estaban plenamente establecidos, los Tribunales Ad hoc tuvieron que enmendar constantemente sus reglas de procedimiento para mejorar sus resultados, muchos Mecanismos Híbridos no contemplaron cuestiones indispensables como la protección de testigos y víctimas o la defensa de los imputados.

Siguiendo con los factores que se eligieron para medir la efectividad, encontramos la **legitimidad o legalidad**, referida a si los mecanismos de lucha contra la impunidad han sido creados de acuerdo a la ley y al derecho, en general se puede afirmar que así ha sido, a excepción de los Tribunales Militares Internacionales que surgieron que cierta base legal, pero con muchas carencias de esta a la vez, debido a que no existía suficiente desarrollo del Derecho Internacional Público, mucho menos del Derecho Penal Internacional y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, precisamente esa carencia es la que promueve el desarrollo en estas áreas del derecho.

La legalidad también se refleja en la aplicación de este principio en el desarrollo de los procesos a cargo de los mecanismos. Ha sido cuestionada en ambos aspectos por los Estados en donde tienen jurisdicción los mecanismos, cuando los efectos de los procesos no son favorables para quienes ostentan el poder y resultan responsables, la mayoría de ocasiones el argumento de ilegitimidad o ilegalidad únicamente se ha quedado en el discurso, en el caso de CICIG y MACCIH se reflejó

en el cierre de ambos mecanismos por no convenir a los intereses de los gobiernos de turno.

El factor **jurisdicción** nos ayuda a determinar la facultad del mecanismo para conocer casos, visualizar alcances y resultados de acuerdo al ámbito de acción autorizado, y que tiene alcance sobre la determinación de los **sujetos que forman parte del caso**, esto es a nivel procesal estrictamente y se refiere a los procesados, sus defensas, los miembros del tribunal, la fiscalía y los funcionarios de secretaría cuando esta es parte del mecanismo y a su vez abarca también los **problemas a debatir** que no es más que los casos que puede abordar de acuerdo a lo estipulado en el mandato, siendo en combinación con el factor competencia en el ámbito territorial de jurisdicción las graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crimen de agresión, terrorismo, corrupción y delincuencia organizada.

Los **medios de impugnación** son un elemento indispensable para medir eficacia, ya que representan el ejercicio del derecho de defensa, pueden ser también un elemento en contra si existe malicia en presentarlos y retardo en resolverlos en los casos que utilizan la jurisdicción nacional para la persecución penal. En el caso de los Tribunales Militares Internacionales estos no fueron muy restringidos en tiempo y forma, a partir de la creación de los Tribunales Ad hoc se han regulado en pro de garantizar el derecho de defensa.

Los **mecanismos de cumplimiento** se refieren a la forma en que se cumplen las sentencias o resoluciones, así como al cumplimiento del mandato. No todos los mecanismos de lucha contra la impunidad han contemplado este aspecto a veces es difuso o ha sido improvisado.

El cumplimiento de sentencias de privación de libertad es el más factible de ejecutar, el cumplimiento de resoluciones no obligatorias es bastante difícil, en cuanto al cumplimiento de mandatos los que tienen la obligatoriedad de presentar un informe ante la Asamblea General, el Consejo de Seguridad o algún órgano de Naciones Unidas pueden ser evaluados tanto por Naciones Unidas como por la población una vez estos informes sean públicos.

La **disponibilidad de recursos** es esencial para la ejecución de los mandatos, siendo un indicador esencial para medir la eficacia, es por eso que se analizaron recursos

humanos, materiales y financieros. En el presente trabajo se pudo determinar que lamentablemente no hay criterios estandarizados para manejar las estadísticas en cuanto a ellos, cada mecanismo elige lo que desea reflejar en sus datos estadísticos.

La medición de **recursos humanos**, no sólo refleja el número de personas que han desarrollado el trabajo del mecanismo, sino las calidades de estos y la independencia. Los **recursos materiales** abarcan tanto el tema de infraestructura, como los informes, medios de investigación, expedientes y folios en los expedientes conocidos por el mecanismos, el **presupuesto asignado** que constituye el tema financiero, muchas veces es el más difundido, sin embargo; en la mayoría de casos se manejan cantidades anuales y convirtiendo en una tarea titánica el conocimiento de cantidades totales, este factor es importante porque se puede conocer en términos monetarios el costo de la lucha contra la impunidad, que normalmente resulta ser bastante cara.

Una gran deuda del Derecho Penal y por ende del Derecho Penal Internacional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Penal ha sido darle el lugar que le corresponde a la víctima a nivel procesal y de reparación, es por eso que el **papel de la víctima** es otro aspecto que se aborda en este trabajo, y se hace de manera independiente, no dentro de los sujetos procesales, esto se debe a que por ejemplo en los Tribunales Militares Internacionales no se tomó en cuenta a la víctima, en los Tribunales Ad Hoc e Híbridos se le va reconociendo más, pero esto varía de acuerdo al mecanismo, en los mecanismos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos la víctima goza de mayor reconocimiento y participación, aunque muchas veces en la práctica no sea pleno, curiosamente los mecanismos de Derechos Internacional Penal, no contemplan a la víctima dentro de sus mandatos, el papel de esta es de acuerdo al regulado en los Códigos Penales aplicables

La **percepción pública** también juega un papel preponderante al medir la eficacia, porque representa la forma en que la sociedad capta el trabajo del mecanismo de lucha contra la impunidad y su conocimiento sobre este. Este es un factor al que en el pasado no se le ponía mayor interés, sin embargo; ha jugado un rol trascendental al momento de decidir la continuidad de un mecanismo, así como de conocimiento de la aceptación por parte de las sociedades donde se desarrolla.

El problema detectado en relación a este factor ha sido la importancia que se le ha dado a la difusión del trabajo desde el mecanismo, debido a que esto no se contempla

en los mandatos de creación, a partir de los Tribunales Ad hoc que implementaron el programa out reach para llegar a las sociedades involucradas y que no fue muy exitoso. Otros mecanismos también lo implementaron, sin embargo, no se ha logrado estandarizar y que se ha dejado a criterio de quienes dirigen los mecanismos, lo cual es lamentable, por ejemplo, en CICIG la implementación de una oficina de prensa que se encargara de difundir el trabajo de la Comisión se realizó varios meses después de que la Comisión iniciara su trabajo. En el caso de MACCIH se creó la figura de un portavoz que diera a conocer su trabajo, pero la Misión no llegó a contar ni siquiera con un sitio web independiente y se conocen muy pocos detalles de su trabajo.

El tema estadístico es relevante, y es lamentable que se tome a la ligera y desde el inicio del mandato no se establezcan con seriedad estos parámetros, en el presente trabajo las estadísticas utilizadas son **número de casos ingresados, número de caso resueltos, duración del mandato, fecha de inicio del primer juicio, universo de caso tiempo promedio de los casos.**

Esto significó un trabajo complicado por la ausencia de datos unificados, ausencia de datos totales, por ejemplo, CICIG no cuenta con registro de fecha de inicio y finalización de casos, lo que hace imposible esa medición. En el caso del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia cada año variaban los datos estadísticos publicados en sus informes, lo que da como resultado inconsistencia en los datos. MACCIH no cuenta con estadísticas, únicamente los Tribunales Militares Internacionales cuentan con datos estadísticos claros y ordenados.

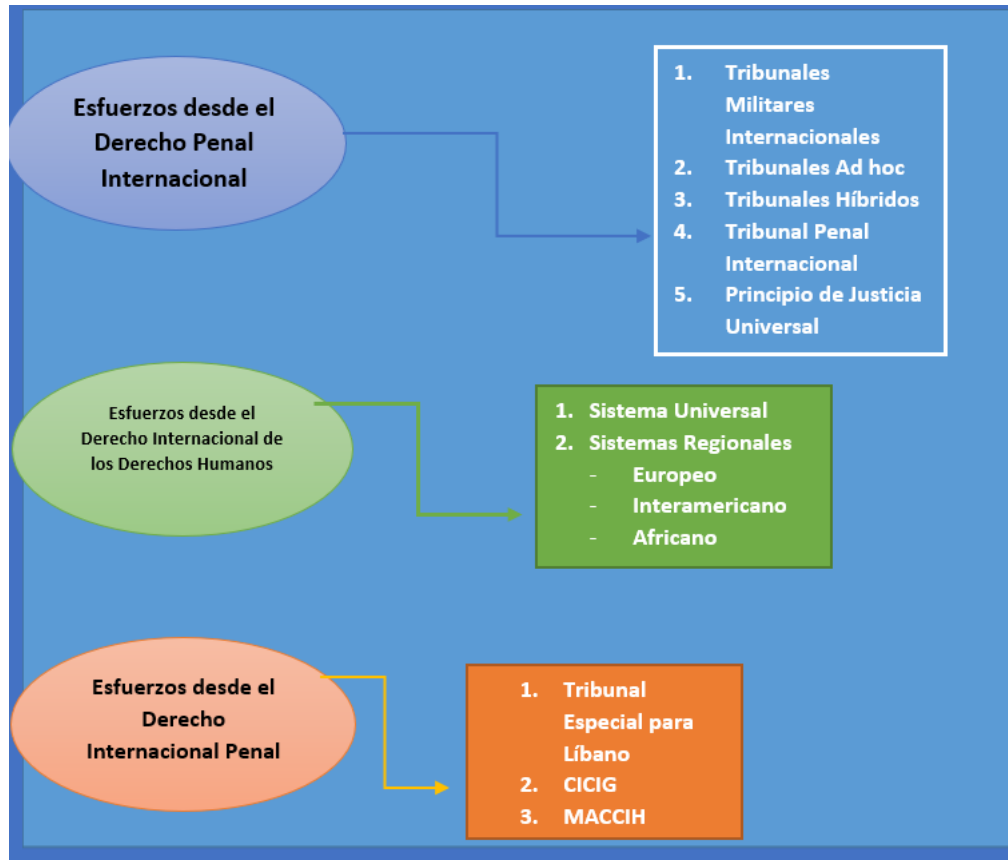
6. SOBRE LOS ESFUERZOS PARA COMBATIR LA IMPUNIDAD

La lucha contra la impunidad se ha materializado en la creación de mecanismos a los que se ha dado la potestad de recibir denuncias y juzgar las graves violaciones a los derechos humanos, violaciones al Derecho Internacional Humanitario, al Derecho Penal Internacional y al Derecho Internacional Penal.

En la segunda parte del presente trabajo se abordaron los esfuerzos de la comunidad internacional para combatir la impunidad, por medio del estudio de diecisiete mecanismos, los cuales se estudiaron bajo los mismos parámetros con el fin de medir su eficacia.

Esto tiene como punto de partida la doctrina de la lucha contra la impunidad que ha declarado las violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad como inamnistiables, imprescriptibles, inindultables, que en ellos no rige la cosa juzgada, ni el principio de irretroactividad. Lleva consigo el derecho a la justicia, el esclarecimiento de los hechos, la verdad, la compensación, la prevención y la no repetición. La pregunta del millón surge cuando se crean los mecanismos de Derecho Internacional Penal que abordan actos de terrorismo, crimen organizado, narcoactividad y corrupción, ¿se pueden aplicar estos mismos estándares?, la respuesta es que sí, cuando los países objeto del mecanismo han aceptado la competencia de los Convenios y Tratados internacionales en materia de derechos humanos, especialmente los relacionados con el derecho a la justicia, garantías procesales, protección judicial y lucha contra la impunidad, estos criterios son aplicables.

Como ya se explicó en el numeral 4 de estas conclusiones, se dividió los mecanismos de acuerdo a su naturaleza y hechos o violaciones a conocer. Es por eso que se abordan de la siguiente manera:



Estos mecanismos han estado en constante desarrollo y evolución basados en el ensayo y error. Es por eso que se habla de un proceso evolutivo de estos, calificado como la niñez, adolescencia y madurez de las instituciones creadas para combatir la impunidad en materia de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Para esta autora esa evolución incluye los fenómenos de Derecho Internacional Penal de terrorismo, crimen organizado, narcotráfico y corrupción.

Dependiendo del mecanismo y la rama del derecho aplicada, se busca que se castigue o sancione la responsabilidad individual o estatal, es por eso que se hace importante identificar tres aspectos sobre la competencia de estos:

- a. Cuando son Tribunales Internacionales, internacionalizados o mixtos independientes del aparato judicial interno son considerados una excepción a la regla de que sólo las cortes nacionales son competentes para tramitar asuntos penales;
- b. Cuando existe la necesidad de que intervenga un mecanismo internacional, con jurisdicción geográfica y temporal, su mandato debe contemplar como parte fundamental los mecanismos de participación, comunicación y transición con las cortes nacionales;
- c. La definición, diseño y creación de mecanismos de transición entre el órgano internacional y las cortes nacionales es indispensable como parte del proceso, siendo un aspecto fundamental para evitar la impunidad y velar por la continuidad y cumplimiento de los procesos iniciados por el mecanismo internacional.

La creación y funcionamiento de los mecanismos de lucha contra la impunidad ha respondido a una causa y propósito común, el cual es la búsqueda de la justicia. En los que han nacido como consecuencia de un conflicto armado también es retornar la paz y estabilidad, ante la incapacidad de los sistemas internos de hacer justicia por sí solos, bien por la debilidad de sus sistemas y/o la falta de voluntad política para hacerlo. A pesar de ello y el haber sido creados a lo largo de la historia en diferentes momentos, en el estudio y análisis realizado en este trabajo, se pudo establecer que no se utilizaban las lecciones aprendidas de otros tribunales, para no cometer los

mismos errores que impedían mejores resultados en la lucha contra la impunidad como punto fundamental del fin de su creación. El uso de esos procesos exitosos ya probados y depurados en los tribunales, se hubiera convertido sin duda en herramientas de primer orden para el trabajo de los tribunales que se iban creando con posterioridad, pero quizás lo único que si se tomo fue las similitudes en las estructuras, en cada uno de los mecanismos creados.

Durante la elaboración de este trabajo se pudo establecer que fue deficiente el proceso de creación de los mandatos de los diferentes mecanismos de lucha contra la impunidad, especialmente en lo relacionado al conocimiento profundo del contexto y coyuntura de las naciones que iban a ser beneficiarias del mecanismo. Esto se refleja en aspectos importantes como la legislación, instituciones, usos y costumbres que hubieran facilitado la ejecución del trabajo y la concreción de mejores resultados en el fin de la lucha contra la impunidad.

En este tipo de mecanismos resulta fundamental conocer de forma profunda los aspectos culturales, étnicos, lenguaje, educación, diferentes intereses políticos, etc. Ese mayor contacto con la sociedad en sus diferentes niveles permitiría conocer más el origen de los problemas que abordan los mecanismos y no sólo apuntar a la posible solución, en especial porque estos habrían nacido con una importante ventaja por esa mayor aceptación y credibilidad basadas en el conocimiento previo, que son fundamentales en los procesos de lucha contra la impunidad.

Un estudio más profundo de coyuntura y contexto permitiría la mejor planeación en cuanto al desarrollo de las funciones del mecanismo y no simplemente prever la vigencia o prórroga del mandato, lo que permitiría también realizar un plan de cierre que no afecte los aportes del mecanismo en la lucha contra la impunidad.

También en el desarrollo del mandato de estos, el proceso de funcionamiento de estos tribunales, uno de los aspectos fundamentales debe ser el manejo debidamente priorizado de los recursos económicos con una planeación específica a corto y largo tiempo, priorizando los recursos en los aspectos claves de la investigación de los posibles responsables, que es lo que al final permitiría combatir la impunidad y lograr así el fortalecimiento del estado de derecho. De ahí que en estos mecanismos hizo falta expertos en planeación y finanzas, para evitar una de las críticas de las que

ninguna institución se escapa, en el sentido que eran entes lentos, burocráticos y con altos sueldos para los funcionarios internacionales.

Otro aspecto que podemos concluir por su incidencia negativa en el resultado del éxito de la lucha contra la impunidad, y como un aspecto común a todos los mecanismos fue el desconocimiento de los funcionarios internacionales del idioma y usos y costumbres de ciertas comunidades que habían sido víctimas de las graves violaciones, siendo esto una falla en el proceso de investigación y obstáculo en la generación de vínculo de confianza entre los tribunales y los funcionarios internacionales del tribunal.

Más aún, la lucha contra la impunidad en especial en los mecanismos ubicados territorialmente lejos de la zona de interés para la investigación, constituyó otro punto constante de crítica, por las repercusiones negativas para la investigación, se les percibe como algo lejano y sin interés de integración con la comunidad, además de los altos gastos que demanda el desplazamiento de los funcionarios para las investigaciones y del limitado acceso de las víctimas a la entidad.

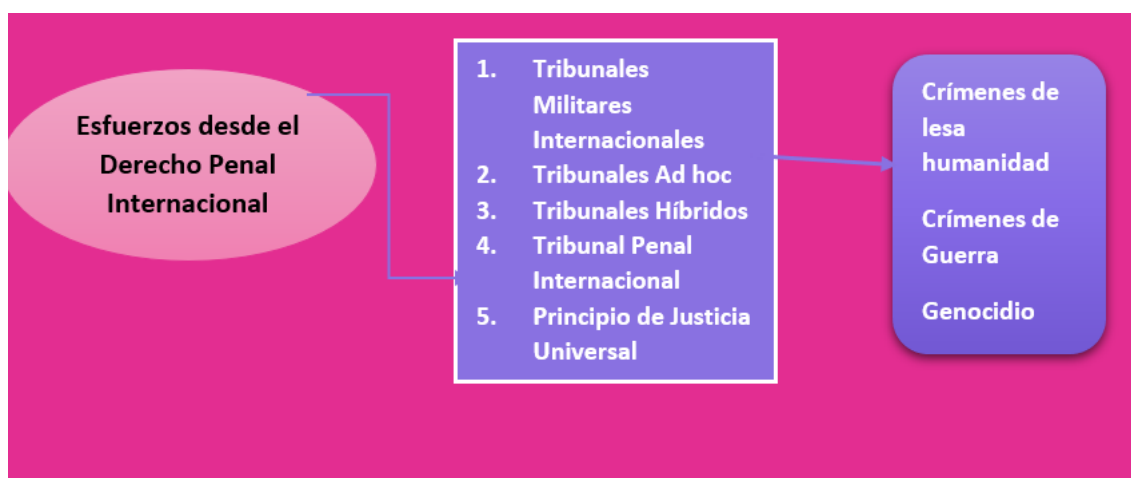
Los aspectos neurálgicos que se deben tomar en cuenta cuando un mecanismo de lucha contra la impunidad finaliza es la continuidad de los procesos pendientes que se traducen en aspectos indispensables a tener en cuenta para evitar que los avances obtenidos sufran un retroceso, por lo que se considera que se debe prever por lo menos:

- a. Persecución y juzgamiento de fugitivos.
- b. Conclusión de procesos en curso.
- c. Protección de testigos.
- d. Revisión de decisiones judiciales.
- e. Cumplimiento de sentencias.
- f. Asistencia a las autoridades nacionales.
- g. Manejo de archivos

- h. Protección del personal nacional, cuando haya desempeñado funciones en el mecanismo.

7. DESDE LOS ESFUERZOS DEL DERECHO PENAL INTERNACIONAL

Los esfuerzos creados desde el Derecho Penal Internacional, son los más abundantes y diversos y siendo los que reflejan la evolución de los mecanismos, en niñez, adolescencia y madurez. Es por eso que se clasifican en:



La posibilidad operativa de la justicia penal internacional es uno de los grandes desafíos que enfrenta la creación del sistema. Las aspiraciones humanitarias, metas y justificación de su existencia se encuentran satisfactoriamente sustentadas pero la falta de mecanismos para ejecutar las decisiones y permitir el desarrollo independiente de una investigación comprometen seriamente el futuro del derecho penal internacional.

7.1 SOBRE LOS TRIBUNALES MILITARES INTERNACIONALES

Los Tribunales de Núremberg y Tokio contribuyeron significativamente al desarrollo del Derecho Penal Internacional y luego en su fase inicial. Durante varias décadas, fueron los únicos ejemplos de tribunales internacionales de crímenes de guerra, pero finalmente sirvieron de modelo para una nueva serie de tribunales penales internacionales que se establecieron a partir de la década de 1990. Además, la referencia de la Carta de Núremberg a los "crímenes contra la paz", los "crímenes de

guerra" y los "crímenes de lesa humanidad" representa la primera vez que estos términos se utilizan y definen en un instrumento internacional adoptado.



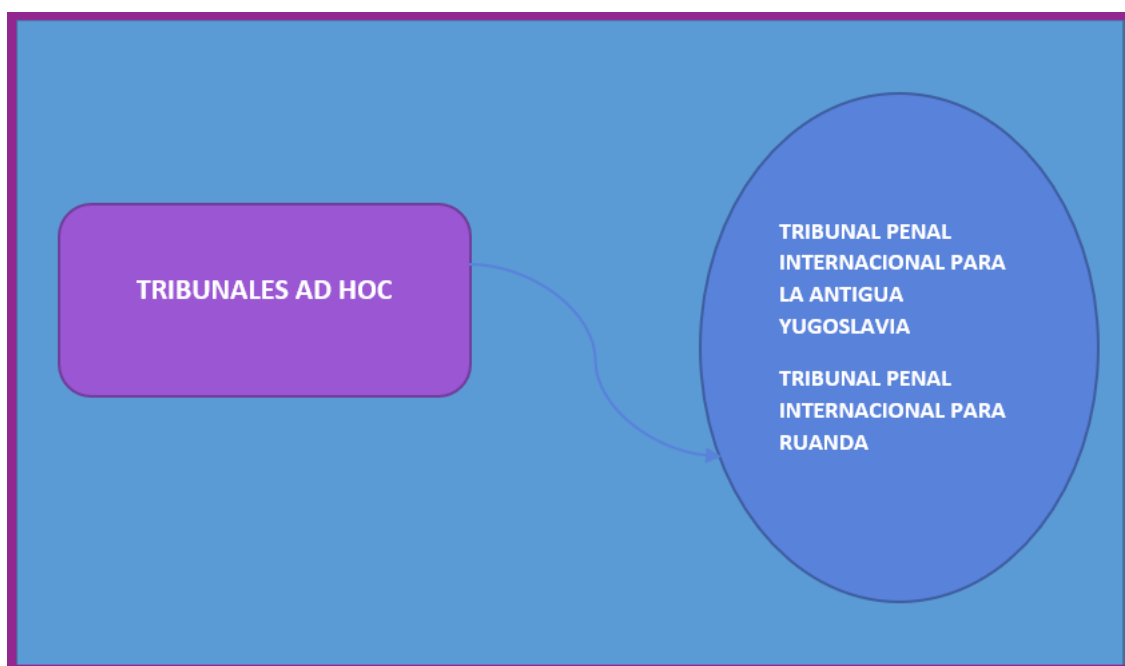
Es admirable la forma en que fueron diseñados estos tribunales, más allá de los cuestionamientos sobre el respeto al debido proceso, se debe apreciar la forma en que se organizaron, creando una Secretaría Ejecutiva que se encargara de la administración y ejecución de funciones, se garantizó el derecho de defensa, se sistematizó cada una de sus diligencias, se registraron estadísticas, preservación de archivos principalmente en el Tribunal Militar de Núremberg es realmente un ejemplo a replicar.

Estos Tribunales implementaron innovaciones procedimentales que proveyeron principios para la persecución de crímenes internacionales en Tribunales Internacionales. Significaron un esfuerzo por reemplazar el uso de la fuerza por el estado de derecho.

Estos principios han inspirado y propiciado la creación de los mecanismos de lucha contra la impunidad posteriores, partiendo por los Tribunales Ad hoc. Además de contribuir a erosionar la idea de que las graves violaciones no tenían la posibilidad de ser castigadas.

7.2. SOBRE LOS TRIBUNALES AD HOC

Los Tribunales Ad Hoc representan un paso trascendental para la lucha contra la impunidad y para el Derecho Penal Internacional, especialmente en el contexto de los conflictos armados internos. Su creación constituyó un gran paso, debido a que fue una decisión muy difícil de tomar para el Consejo de Seguridad que no quería que la decisión se calificara como una violación a la soberanía o como intervención. Sin embargo; no hay que olvidar el papel trascendental de la sociedad civil y la prensa para impulsar su creación al hacer públicas las atrocidades que estaban sucediendo en la Ex Yugoslavia y en Ruanda.



El principal aporte de los Tribunales Ad hoc radica en el aporte jurisprudencial al derecho penal internacional, especialmente en lo relacionado a la violencia de género en un conflicto armado y el genocidio, con ellos se conoció por primera vez el concepto de crimen de guerra en un conflicto armado interno aplicando la prescripción del Derecho Internacional Humanitario en una Corte Internacional.

Las grandes críticas giran en torno a la ubicación de los Tribunales, lejos de las sociedades afectadas, los prejuicios políticos, la pesada carga administrativa y financiera. Estos Tribunales tuvieron muchos problemas de procedimiento provocando la modificación constante de las reglas de procedimiento.

Las mayores dificultades se evidenciaron en la complejidad de procedimientos abordados, la existencia de beneficios de colaboración del sistema anglosajón, las erradas expectativas respecto a las sanciones a usar, como la aplicación de la pena de muerte, y la percepción de que eran Tribunales políticos y no judiciales.

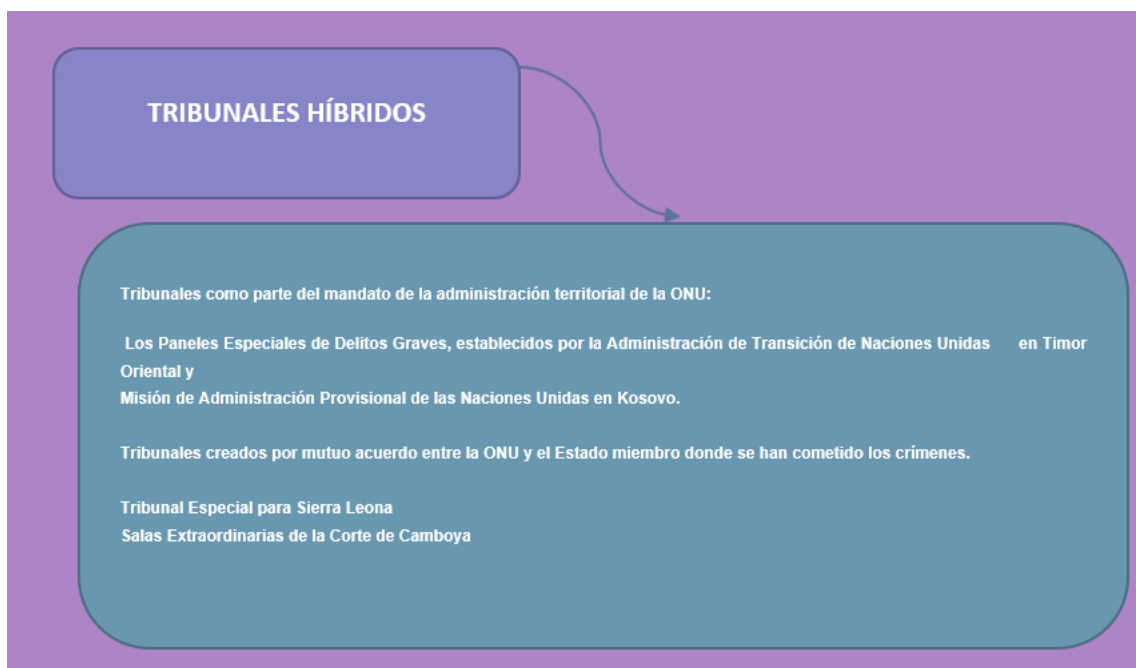
Otro problema fue el que los primeros cuatro años se haya nombrado un fiscal común, que entorpeció el trabajo de investigación por la carga de trabajo que esto representaba, aunado a que no se pudo implementar una persecución penal estratégica adecuada al contexto y necesidades de cada lugar.

Para su creación la comunidad internacional fue pasiva, tardó en reaccionar y permitió que las violaciones se ejecutaran, por ejemplo, en el caso de Ruanda existe una cronología muy exacta de los hechos, porque estos se realizaron en un período de tiempo muy corto, y la pasividad de la comunidad internacional en este caso resulta lamentable. El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia tuvo más apoyo político que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, a este solo se le permitió operar por 15 años, mientras que el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia funcionó 21.

7.3 TRIBUNALES HÍBRIDOS

Luego de la creación de los Tribunales Ad hoc, el Consejo de Seguridad no quiso seguir repitiendo estos modelos y ante las nuevas solicitudes de apoyo para combatir la impunidad se empezaron a crear nuevos modelos, esta vez enfocados a estar en el territorio de los países que los necesitaban con el fin de facilitar la investigación, el contacto con las víctimas y con las sociedades.

Este nuevo modelo se empieza a integrar con jueces nacionales e internacionales, en donde pese a algunas excepciones como Sierra Leona, existió una mejor integración de los funcionarios para las deliberaciones y toma de decisiones, transmisión de conocimiento, fortalecimiento de la cultura de la legalidad, técnicas de investigación, defensa de los derechos humanos y cercanía a las víctimas y la sociedad civil, generando una mayor confianza y aceptación social de la presencia de un tribunal especial dentro del sistema de justicia, lo que por sí solo despierta un celo profesional en los funcionarios nacionales que de inmediato asumen como si se les estuviera viendo como incapaces de investigar y luchar contra la impunidad.



Si se hiciera un análisis simplemente cuantitativo del total de casos que sucedieron en cada uno de los países donde se crearon estos mecanismos y los comparamos con el total de sentencias durante su tiempo de vigencia, tendríamos que afirmar que los tribunales fueron un total y completo fracaso en la lucha contra la impunidad, pero el análisis desde ese solo punto de vista resultaría lejano a la realidad, porque obligatoriamente y en aras de la objetividad debemos incluir el análisis cualitativo de la naturaleza de los hechos y las dificultades para la realización de las investigaciones, cambiando así la conclusión, que nos permite afirmar que los tribunales en su conjunto si fueron aceptablemente positivos en la lucha contra la impunidad, al evitar que gravísimas violaciones quedarán en el completo y total olvido que se hubiera generado en ausencia de este mecanismo y es responsabilidad de los Estados luego de la terminación de su mandato.

Continuar e iniciar las investigaciones pendientes y seguir disminuyendo los índices de impunidad ya desde la total autonomía de los sistemas internos, siendo este el gran reto para que no se repita el caso de Timor Oriental que al desaparecer los Paneles se extinguió la persecución penal de los casos que éste conoció.

7.4 SOBRE LOS TRIBUNALES PERMANENTES - CORTE PENAL INTERNACIONAL

La creación de la Corte Penal Internacional se considera un gran paso en la lucha contra la impunidad al crear un Tribunal con jurisdicción universal como mecanismo subsidiario, para asumir la investigación de los delitos de su competencia ante la ausencia de justicia a nivel interno. Con este sistema unificado aplicable a los países que aceptaron su jurisdicción y a los que voluntariamente lo hagan, se permite la consolidación de planes y estrategias coordinadas. Fundadas en política criminal clara dirigida a devolver la seguridad y certeza jurídica a los Estados dentro del marco del respeto de las normas internas y las internacionales aplicables.

Desde el sistema de la Corte, le permite también analizar los errores de los tribunales que la preceden y tomar sus fortalezas e ir creando la jurisprudencia y doctrina con la decisión de los casos. La implementación de este órgano permanente, también demuestra la confianza de la comunidad internacional en el sistema de jurisdicción universal como herramienta para la lucha eficaz contra la impunidad a nivel más global.

La historia cumple un papel depurador en el proceso de definición y elaboración de los marcos jurídicos y en este trabajo se ha destacado esta facultad justamente para hacer énfasis en el rescate de su potencial en el proceso de formación y desarrollo institucional de la Corte Penal Internacional. Con las particulares condiciones que vive el mundo por las facilidades de intercomunicación, los responsables de los graves crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos haciendo uso de la articulación de los mecanismos internacionales y nacionales. La separación entre las esferas nacional e internacional no sólo se constituye en una ventaja para los actuales fenómenos de la delincuencia organizada, sino que además contradice la realidad de las relaciones internacionales vigentes.

El éxito de la Corte Penal Internacional con un alto contenido de carácter jurídico y doctrinal tiene como una de sus fuentes la óptima articulación entre los diferentes signatarios que colaboren para el éxito de su trabajo y se constituye también en una oportunidad para que los países más débiles desde el punto de vista económico y

político sean más influyentes y ganen en mejores garantías de protección y transparencia.

El desarrollo adecuado de la Corte Penal Internacional como institución, debe tener como meta el ser una Corte independiente, pero con muy buenas relaciones con la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, así como con la sociedad civil, pero diseñando esas relaciones con tal creatividad que no afecte su independencia, como uno de los pilares de éxito.

El Fiscal se convierte en el motor y símbolo de eficacia de la Corte Penal Internacional y para ello un punto clave es el diseñar políticas de investigación criminal que le muestre a propios y extraños, cuáles son las prioridades de la institución, como pretende desarrollarlas y cuáles son resultados a corto y largo plazo. La política criminal debe ser la piedra angular para el uso de la facultad de actuar con autonomía cuando puede asumir su competencia hasta suspendiendo las investigaciones por razones que contribuyan a la paz.

Igualmente, esas políticas deben potenciar el uso debido de las facultades al investigar los mayores responsables de crímenes en contra de la humanidad y trabajar asociadamente con las jurisdicciones nacionales en la persecución de criminales secundarios y en esta línea evitar la impunidad.

La Corte Penal Internacional debe tener la capacidad para lograr acuerdos necesarios con todos los organismos internacionales, para garantizar que sus órdenes se cumplan, así como los estamentos de cada país en concreto, para de esta manera evitar que su trabajo se vea entorpecido y que solo le quede como alternativa esperar que los grandes violadores de los delitos que le compete la investigación pierdan el poder para que sus acciones den resultados.

El apoyo a las víctimas de los crímenes en contra de la humanidad no se deben limitar la preparación para dar un testimonio probatoriamente eficaz, esto debe ir más allá de su relato factico, que puede resultar seriamente comprometido en su veracidad y poder probatorio si se deja de un lado a la víctima como la persona que sufrió el dolor que se debe superar y así procurar que esas heridas abiertas no afecten gravemente los resultados del proceso y por ende generando impunidad.

El papel de las organizaciones no gubernamentales en la creación de la Corte Penal Internacional fue fundamental y esto se debe reconocer como parte del proceso de fortalecimiento de la Corte, que sigue investigando y condenando a personas responsables de crímenes en contra de la humanidad, donde el asunto de estados soberanos ya perdió relevancia y en definitiva se violenta la paz y la justicia.

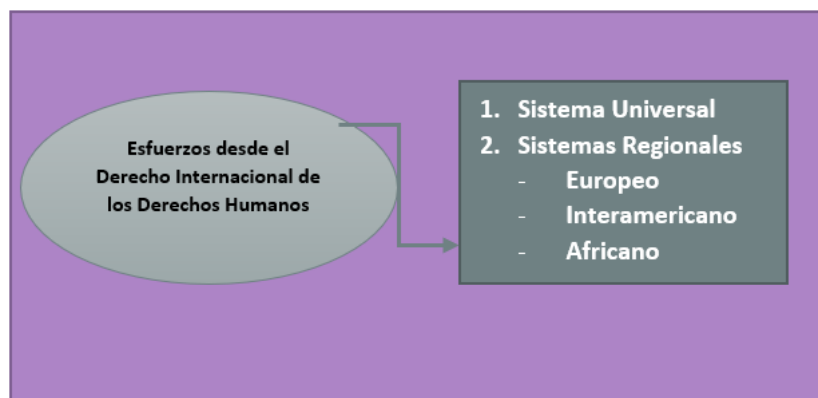
7.5 SOBRE EL PRINCIPIO DE JUSTICIA UNIVERSAL

El principio de justicia universal o jurisdicción universal es un mecanismo que ha aportado mucho en la lucha contra la impunidad, se origina en el Derecho Internacional Público, se aplica en el derecho interno de los países que lo contienen en sus legislaciones. Ha significado un gran apoyo para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Lastimosamente por los efectos políticos que ha tenido en los últimos años los países se han abstenido de ejercerlo y como en el caso de España, lo han restringido por medio de reformas legislativas.

8. SOBRE LOS ESFUERZOS DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los sistemas creados para la protección de los derechos humanos y la determinación de la responsabilidad Estatal ha significado un gran aporte en la lucha contra la impunidad. Dividiendo los esfuerzos en universal y los sistemas regionales como se representan en la siguiente gráfica.



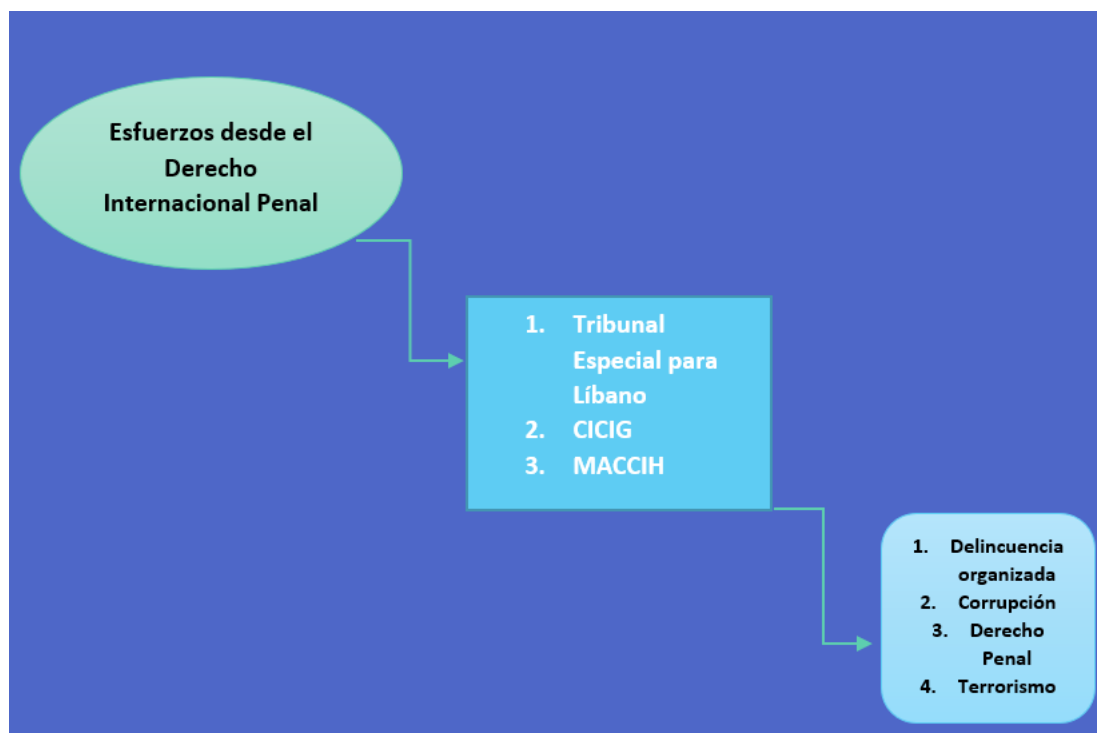
Lo importante del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos es que ha desarrollado estándares para la protección de estos derechos, y aunque las resoluciones de los mecanismos de presentación de denuncias no tienen fuerza obligatoria como las sentencias de los organismos regionales, la fuerza moral que poseen, promueve cierta efectividad en la lucha contra la impunidad.

Los sistemas regionales porque sus sentencias un carácter vinculante ha logrado mejores resultados en materia de lucha contra la impunidad, específicamente en el área de reparaciones y reconocimiento de la responsabilidad del Estados en las violaciones de los derechos humanos.

El desarrollo de las democracias de los diferentes continentes se ha visto reflejado en las sentencias emitidas en cada Corte regional, es así como se reconoce el avance del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual lidera el desarrollo de la jurisprudencia en esta materia, mientras que el Sistema Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos ha tenido un notable retraso al no ser aceptado con facilidad por los Estados africanos.

9. SOBRE LOS ESFUERZOS DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL PENAL

En el desarrollo de este trabajo, luego del análisis de cada uno de los mecanismos de lucha contra la impunidad se pudo concluir que el Tribunal Especial para Líbano, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Misión de Apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras son mecanismos de Derecho Internacional Penal, no “mecanismos sui generis” de Derecho Penal Internacional, como se les había clasificado, esta distinción surge por su finalidad de perseguir los delitos contemplados en los Códigos Penales de sus respectivos países, la CICIG y la MACCIH trabajaron directamente con los sistemas de justicia nacionales, y no fueron facultados para perseguir delitos ejecutados en el marco de un conflicto armado.



El problema del Tribunal Especial para Líbano es que, al haber sido creado para perseguir un hecho puntual, dejando en la impunidad crímenes ejecutados durante conflictos armados, ha sido criticado como un órgano politizado que no contribuye a la lucha contra la impunidad del país. Aunado a los altos costos económicos y pocos resultados en materia de procesamiento.

El caso de la CICIG es muy diferente, al ser considerado como un valioso mecanismo de lucha contra la impunidad y el fortalecimiento de la institucionalidad estatal y del sistema democrático, a través de las investigaciones de grupos clandestinos incrustados en todos los niveles de la sociedad y se convirtió en un mecanismo internacional de investigación criminal alternativo que apoyaba el trabajo del Ministerio Público. Logrando que el sistema de justicia doméstico condenara a los responsables de los casos investigados.

Las funciones de la CICIG le permitieron cumplir un rol importante de incidencia en todo el sistema judicial y motivar a la sociedad a exigir justicia pronta y cumplida, y el contacto directo con el proceso de investigación dentro del marco legal del Estado, logró evitar que se destruyeran y ocultaran las pruebas.

La CICIG es el único híbrido conocido que operó completamente dentro del sistema legal interno, de manera independiente, objetiva y experta. Fue una llave para avanzar

en los sistemas de investigación internacional criminal, en sistemas jurídicos débiles, que requieren su fortalecimiento como Guatemala que recientemente han salido de largos procesos de conflicto interno.

Con el apoyo de la CICIG al trabajo del Ministerio Público, se dieron duros golpes a la delincuencia organizada, a la corrupción endémica institucional hasta el punto que fue a partir de 2017, cuando el gobierno de turno, aliado con quienes vieron afectos sus negocios de corrupción, ante lo cual, se dio a la tarea de desprestigiar la Comisión y de perseguir a los funcionarios, logrando el cierre de la misión en el 2019.

La CICIG como sistema único alternativo, no solo inspiró y dio esperanza a Guatemala que la lucha contra la impunidad es posible, si no a la comunidad internacional.

Gracias al éxito de la CICIG, se promovió la creación de un órgano similar en Honduras, dando origen a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, sin embargo; el gobierno hondureño limitó el campo de acción de la Misión, descartando su participación directa en las investigaciones y en el proceso penal, pese a esto, la Misión logró resultados que provocaron, por su importancia, la no renovación de su mandato.

10. PROBLEMAS COMUNES DE LOS MECANISMOS INTERNACIONALES DE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

En la elaboración del presente trabajo se lograron identificar problemas comunes en el funcionamiento de los mecanismos de lucha contra la impunidad, entre *los que se encuentran*:

a. Problemas en la aplicación de la Ley Penal Internacional

Los retos que conlleva la aplicación en la Ley Penal Internacional, acceso a evidencia, protección de las víctimas y realización de arrestos, son bastante complejos y se convirtieron en los principales obstáculos de los tribunales.

Estos obstáculos se presentaban principalmente en la etapa de investigación, en las que las oficinas acusadoras dependían plenamente de la voluntad y cooperación de

los gobiernos para llevar a cabo el trabajo que permitiera formular acusaciones formales y fundamentadas en pruebas contundentes que llevaran a una condena.

b. Problemas para realizar las investigaciones y acceder a la evidencia.

El trabajo de investigación en los casos que se desarrollaron en los tribunales se dificultaba principalmente por dos aspectos: tiempo y distancia.

En relación al tiempo, muchos de los crímenes que se juzgaron fueron cometidos varios años antes de la creación del tribunal; en el caso específico del Tribunal para la Ex-Yugoslavia se conocieron crímenes desde 1991, por lo que muchas de las evidencias materiales ya no existían o fueron destruidas por la crueldad de los hechos; la misma situación como ejemplo se repitió en el Tribunal para Ruanda, siendo conocidos únicamente los crímenes perpetrados durante el año 1994.

En cuanto a la distancia, las oficinas de los acusadores o fiscales estaban ubicadas fuera de los territorios sobre los cuales eran competentes los tribunales, por lo que la recolección de evidencia se hacía más difícil y costosa, debido a que se debía enviar a personas para la investigación necesaria lo que implica gastos de transporte, hospedaje y alimentación.

Lo anterior se suma al obstáculo que encontraron los fiscales en relación con los testigos, fue convencer a las personas de cooperar con la justicia internacional, debido a las consecuencias negativas que podía tener no solo para el testigo sino también para su familia. El participar dentro de un juicio en cualquiera de estos tribunales conlleva para los testigos un posible exilio e inclusive cambios de identidad por la peligrosidad de los criminales y las organizaciones a los que estos pertenecen. Problemáticas que se sumaba a las dificultades de desplazamiento por las ubicaciones.

c. Arrestos

Los Tribunales que aplicaron o aplican la Ley Penal Internacional, a nivel operativo, enfrentaron, como enfrenta en la actualidad la Corte Penal Internacional, dificultades al emitir una orden de arresto. Por corresponder a una jurisdicción internacional y debido a que su autoridad no provenía específicamente del Estado al que se

perseguía a un supuesto criminal, para el arresto de los individuos dependían y se depende plenamente de la voluntad de los diferentes gobiernos.

d. Dependencia Política

La aplicación de la Ley Penal Internacional tiene una íntima relación con la política, tanto nacional como internacional. De esta forma, la política puede cambiar drásticamente los resultados obtenidos en la lucha contra la impunidad.

e. Política Nacional

Es esencial para el efectivo funcionamiento de una institución internacional de justicia penal la cooperación de los Estados y sus autoridades, sin embargo, existen varias circunstancias, además de la investigación de gobernantes de turno, que influyen de manera negativa e imposibilitan la cooperación. Para que un Estado pueda colaborar con un tribunal penal internacional necesita de una organización interna eficiente, la que muchos Estados en la que se cometieron los crímenes no poseen. Otro de los aspectos que influye negativamente es la presión política que otros Estados puedan tener, especialmente en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, por lo que los gobernantes asumen posturas de obstrucción.

La necesidad de la cooperación de los gobiernos ha generado un desgaste mayor del contemplado para los fiscales y jueces, quienes debían dedicar mucho tiempo a negociaciones y buscando apoyo de diferentes entidades u otros Estados para poder llevar a cabo su labor.

f. Política Internacional

Por la naturaleza de las instituciones en análisis, y por la forma en que fueron creadas, la influencia de los Estados que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas o de cualquier otra organización de Estados, en especial aquellos que ostentan mayor poder dentro de dicho cuerpo, tienden a dirigir o establecer las directrices de estos tribunales.

La dependencia económica de los mecanismos de lucha contra la corrupción en relación con organizaciones internacionales o Estados donantes les otorga a los financistas cierta influencia sobre las funciones jurisdiccionales.

A pesar de los enormes retos y dificultades analizadas a lo largo de la investigación, los mecanismos internacionales de lucha contra la impunidad con sus limitaciones y quizás sin satisfacer las expectativas de quienes esperaban que todos y cada uno de los hechos fueran investigados y los posibles responsables condenados o sancionados, han aportado de manera positiva en la lucha contra la impunidad, por cuanto se hizo justicia en muchos casos considerados emblemáticos, por otra parte, se han implementado estándares internacionales de garantía y respeto a los derechos humanos.

Se ha enviado un mensaje positivo a los países donde se implementaron y a la sociedad internacional en general, en razón de que la justicia si es posible, incluso contra las personas que demostraron esa mayor capacidad de destrucción y violación de los derechos humanos e impunidad. Esas manifestaciones positivas de enfrentar la impunidad, sin duda han constituido las bases para la implementación y/o fortalecimiento de los sistemas jurídicos hoy imperantes en esos países, aportando a la cultura de la legalidad y la defensa de los derechos humanos. Como ejemplo de la importancia de estos mecanismos en la lucha contra la impunidad, podemos citar a Alemania y Japón quienes hoy por hoy son de los países más poderos del mundo con sólidos sistemas políticos, económicos y de justicia que superaron los vejámenes sufridos en la guerra y sin problemas graves de impunidad.

Como el caso respecto del funcionamiento de los tribunales híbridos, los estados donde se crearon, con algunos problemas pero se convirtieron en protagonistas de primer orden en la lucha contra la impunidad, dado que esa acción conjunta de jueces nacionales y extranjeros y las reformas legales internas para justar los sistemas legales, con las normas internacionales permitieran su funcionamiento, pusieron a las naciones en la ruta y compromiso de la obligación de luchar contra la impunidad, como mecanismo idóneo para consolidar los procesos de democráticos de reconciliación nacional y garantía de la defensa de los derechos humanos.

A nivel regional, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, a pesar de los problemas de mora en la toma de decisiones de los casos que se someten a su consideración, a través del tiempo se ha constituido como sistema permanente en un organismo con credibilidad y confiabilidad publica, capaz de recocer los derechos que le han sido violados a las personas en los sistemas internos

de justicia y por ende muy importante en la lucha contra la impunidad, ya que los Estados condenados adquieren la obligación de cumplir lo ordenado no solo en el caso concreto, sino de implementar los cambios legislativos generales que resulten necesarios luego del análisis específico de los casos, así como de aplicar su jurisprudencia en los demás casos, siendo este un límite al abuso del poder e impunidad.

Ante la terminación de la vigencia de los tribunales internacionales e Híbridos, pese a las prórrogas que se presentaron en varios de estos, los Estados han aprobado la creación de la Corte Penal Internacional, que como mecanismo subsidiario tiene competencia para investigar los delitos definidos en sus estatutos, en los países que aceptaron y ratificaron su aplicación, así como en aquellos que voluntariamente sin ser signatarios acepten su competencia, para que se hagan las investigaciones de los hechos que los sistemas internos bien por falta de capacidad o voluntad no hagan justicia pero si adquieren como firmantes del estatuto la obligación de cooperar en las investigaciones.

La Corte Penal Internacional en consecuencia se convierte en el arma internacional ideal para la lucha contra la impunidad y que demuestra el cómo los Estados signatarios, si tienen interés en que se combata la impunidad en su territorio, reconociendo que solos no podrían por diferentes motivos hacer justicia en los casos gravísimos que son de mayor complejidad y definidos como de competencia de la Corte ante la ausencia de justicia a nivel local.

Uno de los problemas de la eficacia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala fue el haberse dirigido su acción también a querer solucionar el funcionamiento integral del sistema de justicia de Guatemala cuando esto es una obligación interna del Estado. Debido a ello la misión debía haber limitado su trabajo a solo crear las bases como en efecto lo hizo para que el estado hubiera asumido su responsabilidad cierta de lucha contra la impunidad y fortalecimiento del Estado de Derecho, pero esa intención legítima de querer ir más allá, fue aprovechada por los interesados en la permanencia de la corrupción como negocio para destruir la Comisión.

g. Dependencia Financiera

Otro de los problemas comunes es la dependencia financiera de la comunidad internacional para la existencia y subsistencia de los mecanismos de lucha contra la corrupción. Lo que en algún momento se puede traducir en falta de independencia para ejecutar sus funciones.

h. Poca importancia a las estadísticas

Como ya se ha mencionado se les ha dado poca importancia a las estadísticas, lo que complica la evaluación de los resultados y eficacia de los mecanismos de lucha contra la impunidad.

i. Ausencia de órganos de control

Conforme se han ido creando mecanismos de lucha contra la impunidad, para lo cual la comunidad internacional no ha llegado a la panacea de modelo, pareciera ser que Naciones Unidas se ha querido ir alejando de esta responsabilidad involucrando cada vez menos al Consejo de Seguridad y la Asamblea General, lo que ha sido percibido como el poco interés por auditar los resultados de los mecanismos. Por su parte, el mecanismo más criticado en este sentido es la CICIG.

11. DESAFÍOS PENDIENTES DE LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

Luego de haber hecho el estudio de los mecanismos creados para combatir la impunidad, se puede afirmar que entre las grandes deudas que la comunidad internacional tiene en este aspecto son:

1. La persecución de los crímenes cometidos contra pueblos originarios y sus recursos. Aunque a nivel interamericano se ha creado el acuerdo de Iguazú para la justiciabilidad de delitos ambientales, este no se encuentra vigente.
2. La persecución internacional de la corrupción que se puede dar en dos vías, ya sea la declaración de esta como un delito de lesa humanidad que pudiera ser conocido por la Corte Penal Internacional, trasladándola desde ámbito del Derecho Internacional Penal al del Derecho Penal Internacional, o la creación de un Tribunal Internacional exclusivo para su persecución.

3. Importancia del enfoque de género en estas temáticas.
4. Abordar las problemáticas planteadas por los estándares de eficacia presentados; compromiso comunidad internacional, fondos destinados para su adecuado funcionamiento.
5. Educar en la lucha contra la impunidad a periodistas, medios de comunicación para aportar a la información y transparencia, y desde enfoque de derechos aportar a la importancia de la percepción social en estos temas.

En suma, debo manifestar que la vida, igualdad y la justicia, como derechos fundamentales de la humanidad, han sido reconocidos sin distinción alguna desde la declaración universal de derechos humanos y luego en los diferentes continentes los sistemas regionales así lo han declarado, erigiéndose esos principios en valores fundamentales de los seres humanos sin distinción alguna y que todos los estados deben respetar para garantizar la convivencia pacífica.

Dentro de estos derechos la justicia como mecanismo de lucha contra la impunidad, que es el tema desarrollado en este trabajo, como quedó demostrado tiene una importancia sin igual, ya que un estado sin real justicia es un estado fallido su incapacidad para garantizar los derechos básicos de las personas y por ende de la convivencia social, siendo permeable al interior y señalado por la comunidad internacional. Esto nos permite afirmar finalmente, que la lucha contra la impunidad se ha convertido en una de las llaves eficaces y eficientes para lograr pleno respeto de esos derechos inherentes al ser humano reconocidos en diferentes convenciones y tratados internacionales, de ahí el esfuerzo que históricamente la comunidad internacional a desplegado con la creación de toda esa serie de mecanismos analizados y que hoy descansa básicamente en los hombros de la Corte Penal Internacional a nivel global.

El compromiso es de todos y cada uno de los Estados de brindar las garantías necesarias a los funcionarios encargados de investigar y sancionar, para que estos puedan cumplir su función de manera autónoma e independiente, alejados de cualquier interés diferente a la justicia y los funcionarios que tienen esa noble función y fundamental función dentro de la sociedad que su actuar sea completamente honesto y transparente con la prevalencia de interés general en una aplicación

responsable de las leyes nacionales y el compendio de normas internacionales aceptadas por estado.

A la sociedad en general nos queda el gran compromiso de exigir a las autoridades la pronta, cumplida y eficaz justicia, el dar un no rotundo a cualquier manifestación de impunidad y así alcanzar la paz, prosperidad y que nuestros derechos no solo sea un contenido teórico de buenas intenciones.

BIBLIOGRAFÍA

. Libros

1. ABDELHAMID Adnane Rkioua. 2012. *Los Derechos Sociales en la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos*. En: LEX SOCIAL-Revista de los Derechos Sociales núm. 1/2012, Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/view/268
2. ABRISKETA, Joana. 2005 – 2006. *Tribunales Penales Internacionales ad hoc (para ex Yugoslavia y Ruanda)*. En: *Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo*. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] Disponible en: <http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/219>
3. ACKERMAN, John E. y Eugene O'Sullivan. *Practice and Procedure of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. With Selected Materials from the International Criminal Tribunal for Rwanda*. Kluwer Law International. Holanda. Primera Edición, 2000. 555 páginas.
4. ALAMUDDIN, Amal, Nidal Nabil Jurdi y David Tolbert. *The Special Tribunal for Lebanon. Law and Prectice*. Oxford University Press. Gran Bretaña. Primera Edición. 2014. 316 páginas.
5. ALIANZA contra la Impunidad. *Efectos de la Impunidad en Guatemala*. USAID. Guatemala. Primera Edición. 2001. 118 páginas.
6. ALVARADO, Jesús María. 2016. *Crisis Financiera en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos*. Fundación Libertad y Desarrollo. Sin ISBN. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://www.fundacionlibertad.com/articulo/crisis-financiera-en-el-sistema-interamericano-de-derechos-humanos>.
7. AMBOS, Kai. 1999. *"Impunidad y Derecho Penal Internacional"*. Buenos Aires, Argentina. Editorial Ad Hoc. Segunda Edición Actualizada y revisada. 479 páginas.
8. AMBOS, Kai. 2008. *"Derecho y proceso penal internacional"*. Ensayos Críticos. Fontamara. México, D.F. Primera Edición. 411 páginas. ISBN: 978-0754621546
9. AMBOS, Kai y Stefanie Bock. *El Régimen Procesal de los fiscales en los Tribunales Penales Internacionales*. Cuadernos "Bartolomé de las Casas" 58. Dykinson. Madrid. Primera Edición. 2013. 81 páginas.
10. AMBOS, Kai y M. de Hoyos. *Cuestiones esenciales en la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional*. Editorial Comares. Granada. Primera Edición. 2008. 114 páginas.
11. AMENGUAL García-Loygorri, M. Patricia. 2017. *Las decisiones del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y los perfiles del genocidio*. En: Tesis doctoral. Universidad San Pablo. 2017. Página: 90. Consulta: 10 de diciembre de 2029. Disponible en: https://repositorioinstitucional.ceu.es/bitstream/10637/8968/1/Decisiones_MargaritaPAmengual_CEUTesis.pdf
12. AGUIRRE, Eduardo Luis. S.F, *Estatuto, competencia y funcionamiento del Tribunal Epecial para Sierra Leona. Derecho a Réplica*, 30 de noviembre. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] Disponible en:

<https://derechoareplica.org/index.php/mas/criminologia/491-estatuto-competencia-y-funcionamiento>

13. ARNOLD, Roberta. 2014. *The Judicial Contribution of the Special Court for Sierra Leone to the Prosecution of Terrorism*. En: Ídem. Páginas: 260 a 288. ISBN:9781139248778
14. ARZT, Donna E. 2006. Views on the Ground: The Local Perception of International Criminal Tribunals in the Former Yugoslavia and Sierra Leone” En: The Annals of the American Academy of Political and Social Science [en línea], Vol. 603. Página: 58 [Consulta: 10 de diciembre de 2020] DOI: 10.1177/002716205281443. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/240696032_Views_on_the_Ground_The_Local_Perception_of_International_Criminal_Tribunals_in_the_Former_Yugoslavia_and_Sierra_Leone
15. APTEL, Cecil. 2014. *Unpunished Crimes: The Special Court for Sierra Leone and Children*. En: Ídem. Páginas: 340 a 360
16. BARCELONA Center for International Affairs. *Cronología histórica de Japón*. Barcelona, S.F. Página: 394. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: https://www.cidob.org/version/file/391-400_ANEXO_CRONO_JAPON
17. BASSIOUNI 2001 “Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives and Contemporary Practice.” Va. J. Intl. p. 59 Sin ISBN
18. BEIGBEDER, Yves. 2005 “*International Justice against Impunity. Progress and New Challenges*”. Martinus Nijhoff Publisher. Leiden, Holanda. S.E. 247 páginas. ISBN 978-9004144514
19. BERMEJO García, Romualdo. 2012. *Los Derechos Humanos en África*. En: Anuario Español de Derecho Internacional. Vol. 28. Página 46. Consulta: 10 de diciembre de 2020. ISSN 0212-0747. Disponible en: <https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/anuario-espdcho-internacional/article/viewFile/2531/2404>
20. BERK-SELIGSON, Susan, 2014. “*Orcés, Diana y otros. Impact Evaluation: Guatemala Report*. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional”. Estados Unidos. Páginas: 71.
21. BOISTER, Neil y Robert Cryer. 2008. *Documents on The Tokio International Military Tribunal*. Charter, Indictment and Judgments. Oxford University Press. Nueva York. Primera Edición. 1470 páginas. ISBN: 9780199541928
22. BOISTER, Neil. 2011 y 2013. *The Tokio Trial*. SHABAS, William y Nadia Bernaz. Ed. *Routledge Handbook of International Criminal Law*. Routledge. Taylor & Francis Group. Primera Edición. Londres y Nueva York. Página: 17. ISBN: 9780415524506 (El más parecido)
23. BOSCO, David. *Rough Justice. The International Criminal Court in A World of Power Politics*. Oxford University Press. Gran Bretaña. Primera Edición. 2014. 245 páginas.
24. BREGAGLIO, Renata. *SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS*. Pontificia Universidad Católica del Perú. Protección Multinivel de Derechos Humanos. [Consulta 10 de diciembre de 2020], 9788430971381 En red disponible:

- https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dxm3AUW4qCcJ:https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/res/pmdh_pdf/Cap3.pdf+&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=gt
25. BROOMHALL, Bruce. 2003. *“International Justice & The International Criminal Court. Between Sovereignty and the Rule of Law”*. Oxford University Press. Gran Bretaña. Primera Edición. 215 páginas. ISBN: 0-19-9256004
 26. BROWNLIE, Ian. System of the Law of Nations. State Responsibility. Part I. Oxford University Press. Nueva York. Primera Edición 1983, reimpresión 2001. 302 páginas.
 27. BURGOS SILVA, José German. *Las organizaciones internacionales y sus recursos de poder. Una propuesta analítica*. Estud. Polit. no.54 Medellín Jan./Apr. 2019. [Consulta: 10 de diciembre de 2020] ISSN: 0121-5167 En red disponible en
 28. BURKE- WHITE, William, 2000. *Protecting the Minority: A Place for Impunity? An Illustrated Survey of Amnesty Legislation, Its Conformity with International Legal Obligations, and Its Potential as a Tool for Minority - Majority Reconciliation*. Journal on Europolitics and Minority Issues in Europe.
 29. CABEZUDO Rodríguez, Nicolás. La Corte Penal Internacional. Dykinson. Madrid. Primera Edición. 2002. 171 páginas.
 30. CÁMOS VICTORIA, Ignacio y ROJO TORRECILLA, Eduardo. *La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de sus Familias*. Core. [Consulta: 10 de diciembre de 2020] En red disponible en: <https://core.ac.uk/download/pdf/132089765.pdf>
 31. CANCELED Trindade, Antonio. “El acceso directo del individuo a los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos” Universidad de Deusto. Primera Edición, Serie Derechos Humanos, Vol. 9. Bilbao, 2001. 104 Páginas.
 32. CAROZZA, Paolo G., *Human Rights, Human Dignity, and Human Experience* (December 21, 2012).
 33. CASANOVAS, Oriol y Ángel J. Rodrigo. 2013 *“Compendio de Derecho Internacional Público”*. Editorial Tecnos. Segunda Edición. Madrid, Página: 29. ISBN: 978-84-309-7983-7
 34. CASSESE, Antonio. 2005. “International Law”. Oxford University Press. Nueva York. Segunda Edición. 558 páginas. ISBN: 978-0199259397
 35. CASSESE, Antonio. 2009. *Afirmación de los Principios De Derecho Internacional Reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg*. United Nations Audiovisual Library of International Law. S. A. Página: 1 Consulta: 10 de diciembre de 2020. Sin ISBN. Disponible en: https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_95-l/ga_95-l_s.pdf
 36. CASSESE, Antonio, P. Gaeta, L. Baig, M. Fan, C. Gosnell y A Whiting. Cassese’s International Criminal Law. Oxford University Press. Reinto Unido. Tercera Edición. 2013. 414 páginas.
 37. CASSESE, Antonio, Guido Acquaviva, Mary Fan y Alex Whiting. International Criminal Law, Cases & Commentary. Oxford University Press. Nueva York. Primera Edición. 2011. 591 páginas.

38. CASSESE, Sabino. Los Tribunales ante la construcción de un sistema jurídico global. Editorial Derecho Global. Sevilla. Primera Edición. 2010. 139 páginas.
39. CASTRO, Natalia. 2014. Así se desarrolló el genocidio de Ruanda. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] Disponible en: https://cadenaser.com/ser/2014/04/06/internacional/1396745119_850215.html
40. CHARTIER, Christina. 2004 They want to see their own conception of justice at work, and we can only offer them our interpretation of law. ICTY spokesman. BASSIOUNI, M. Cherif. *Justice in a Time of War: The True Story Behind the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (Hugh M. & Eugenia Stewart Series on Eastern Europe)* TEXAS A & M University Press, Primera Edición.
41. CHEHTMAN, Alejandro, 2013. Developing Local Capacity for War Crimes Trials: Insights from BiH, Sierra Leone, and Colombia. En: *Conicet Repositorio Institucional CONICET Digital* [en línea]. Disponible en: <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/3844> [consulta: 10 de diciembre de 2020].
42. CHERNOR Jalloh, Charles. The Sierra Leone Special Court and Its Legacy. The Impact for Africa and International Criminal Law. Cambridge University Press. Nueva York. Primera Edición. 2015. 784 páginas.
43. CLARK, Robert S. 2007. *Nuremberg and the crime against peace*. En: Law Review. Washington University Global Studies Vol. 6:527. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1148&context=law_globalstudies
44. CENTRO de estudios para la Democracia, 2019. *Primera encuesta de percepción sobre corrupción y el papel de la MACCIH para combatirla*. Canadá, Páginas: 31. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <http://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2019/11/Doc-MACCIH-WEB.pdf>
45. COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS. Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones. Bogotá, Colombia. Opciones Graficas Editoriales Ltda. 2007. 550 páginas.
46. COMISIÓN Preparatoria para una Corte Penal Internacional. 2002. *Examen histórico de la evolución en materia de agresión*. PCNICC/2002/WGCA/L.1. Página: 18. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r29046.pdf>
47. CORTÉS Rodas, Francisco y Miguel Giusti. Justicia Global, derechos humanos, responsabilidad. Siglo del Hombre Editores. Bogotá. Primera Edición. 2007. 421 páginas.
48. CORTE Permanente de Justicia Internacional. *Case concerning certain German interests in Polish Upper Silesia*. Collection of Judgments . No 7. A. W. SIJTHOFF'S A. W. SIJ~HOFF Publishing Company 1926. Página: 17. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_07/17_Interets_allemands_en_Haute_Silesie_polonaise_Fond_Arret.pdf

49. CRAWFORD, James. 2002. *International Law as an Open System*. Cambridge University Press. Primera Edición. Cambridge, Página: 56. Sin ISBN.
50. CRAWFORD, James. 2009. "Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos". United Nations Audiovisual Library of International Law. Páginas: 464. Disponible en: https://legal.un.org/avl/pdf/ha/rsiwa/rsiwa_s.pdf . ISBN: 978-84-9982-612-7
51. CRAWFORD, James. 1998. *Responsabilidad de los Estados [Tema 2 del programa]* DOCUMENTO A/CN.4/490 y Add.1 a 7* Primer informe sobre la responsabilidad de los Estados, Consulta: 10 de diciembre de 2020. Sin ISBN. Disponible en: https://legal.un.org/ilc/documentation/spanish/a_cn4_490.pdf
52. CRAWFORD, James. State Responsibility. The General Part. Cambridge University Press. Reino Unido. Primera Edición. 2013. 825 páginas.
53. CRAWFORD, James. Los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la Responsabilidad Internacional del Estado. Introducción, texto y comentarios. Dykinson, S.A. Madrid. Primera Edición. 2004. 461 páginas.
54. CRAWFORD, James, Alain Pellet y Simon Olleson. The Law of International Responsibility. Oxford University Press. Nueva York. Primera Edición. 2010. 1296 páginas.
55. DAME, Frank, 2016 The Effect of International Criminal Tribunals On Local Judicial Culture: The Superiority Of The Hybrid Tribunal, Michigan State University College of Law Journal of International Law, Vol.24
56. DARCY, Shane. 2011. The Reinvention of War Crimes by the International Criminal Tribunals. En: DARCY, Shane y Joseph Powderly. Judicial Creativity at the International Criminal Tribunals. S.E. Nueva York: Oxford University, página: 235 ISBN-13: 9780199591466
57. DÍAZ, Álvaro Paúl. 2014. *La revisión inicial de peticiones por la Comisión Interamericana y la subsidiariedad del sistema de derechos humanos*. En. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso No.43 Valparaíso. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512014000200017
58. DONLON, Fidelman. 2011, 2013. Hybrid tribunals, En: SCHABAS, William A.; Bernaz, Nadia. Routledge handbook of international criminal law, Routledge, Taylor & Francis Group. Londres y Nueva York. Primera Edición. Páginas: 85 ISBN: 978 – 0 – 415 – 5520- 5
59. DORADO Porras, Javier. "Terrorismo, Justicia Transicional y Grupos Vulnerables." Editorial Dykinson, S.L. S.E. Madrid, 2010. 224 páginas.
60. EINARSEN, Terje. The Concept of Universal Crimes in International Law. Torkel Opsahl Academic EPublisher. Oslo. Primera Edición. 2012. 361 páginas.

61. FERNÁNDEZ, Jean Marcel. La Corte Penal Internacional. Soberanía versus justicia universal. Editorial Reus, S.A. Madrid. Primera Edición. 2008. 222 páginas.
62. FERNÁNDEZ Liesa, Carlos R. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en perspectiva histórica. Civitas, Thomson Reuters. Primera Edición 2013. 570 páginas.
63. FERNÁNDEZ DE GURMENDI, Silvia A. S.F El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: Extensión de los crímenes de guerra a los conflictos armados de carácter no internacional y otros desarrollos relativos al Derecho Internacional Humanitario. En: Lecciones y Ensayos Número 78. Departamento de Publicaciones , Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. [Consulta: 9 de Julio de 2020] Sin ISBN
64. FERRAJOLI, Luigi. 2009. *“Garantismo. Una discusión sobre derecho y democracia”*. Editorial Trotta. Madrid. Segunda Edición. 132 páginas. ISBN: 84-8164-285-1
65. FERRAJOLI, Luigi. 2012. *“Democracia Constitucional y Derechos Fundamentales”. La Rigidez de la Constitución y sus Garantías*. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2012/08/doctrina34481.pdf>
66. FERRER Mac Gregor Y CARLOS MARÍA PELAYO MÖLLER *“PRÉAMBULO”*. STEINER Christian y Marie-Christine Fuchs (editores) Patricia Uribe Granados. Coordinación. 2019. *Convención Americana sobre Derechos Humanos: comentada*. Fundación Konrad Adenauer, Programa Estado de Derecho para Latinoamérica. Segunda Edición. Bogotá, Página: 21. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/30237.pdf>
67. FERRER Lloret, Jaume. Responsabilidad Internacional del Estado y Derechos Humanos. Tecnos. Madrid. Primera Edición. 1998. 467 páginas.
68. FIERRO, Guillermo Julio. “Ley penal y derecho internacional. Doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera.” Tomos I. Editorial Astrea. Tercera Edición 2007. Buenos Aires. 532 páginas.
69. FIERRO, Guillermo Julio. “Ley penal y derecho internacional. Doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera.” Tomos II, Editorial Astrea. Tercera Edición 2007. Buenos Aires. 573 páginas.
70. FRANT T. Malone, Mary. “The Rule of Law in Central America. Citizens’ Reactions to Crime and Punishment.” Editorial Bloomsbury. Estados Unidos. Primera Edición, segunda reimpression 2014. 209 páginas.
71. Fundación Juan Vives Suriá. 2010 *Derechos humanos: historia y conceptos básicos*. Fundación Editorial El perro y la rana Fundación Juan Vives Suriá Defensoría del Pueblo [Consulta: diciembre 10 de 2020] ISBN:9789801412564. En red disponible en: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:me5-ZX7dEcwJ:biblioteca.clacso.edu.ar/Venezuela/fundavives/20170102055815/pdf_132.pdf+&cd=18&hl=es&ct=clnk&gl=gt

72. GAETA, Paola. *The UN Genocide Convention. A Commentary*. Oxford Commentaries on International Law. Oxford University Press. Oxford, Reino Unido. Primera Edición, 2009. Reinpresión 2013. 580 páginas.
73. GALELLA, Patricio. *La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Un gran paso hacia una mayor protección en la lucha contra este fenómeno*. RJUAM, nº 21, 2010-I, pp. 77-100. ISSN: 1575-720x En red disponible en: <https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/download/6016/6479/0>
74. GARCIA CAJAL, Virginia. 2015. *Los Tribunales Mixtos como último paso en la evolución del Derecho Internacional Penal: el caso de las Salas Especiales para Camboya*, Universidad de Zaragoza, Página: 19
75. GARNER, Bryan A. 1999. *Black's Law Dictionary*. West Group. Estados Unidos. Séptima Edición. 1738 páginas. ISBN: 978-9041115287
76. GLENDON, M. A. 2001. *A world made new: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights*. New York: Random House. ISBN9786071607904
77. GÓMEZ Robledo, Alonso. 2003. *Los Procesos de Núremberg y Tokio: Precedentes de la Corte Penal Internacional. Derecho Internacional. Tema Selectos*. Universidad Panamericana. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Sin ISBN. Disponible en: <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/arsiuris/article/view/2468/2322>
78. GÓMEZ Fernández, Itziar y Carmen Montesinos Padilla et al. *Agotamiento de los recursos internos y otras exigencias de admisibilidad*. Universidad Carlos III de Madrid. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en; https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/res/pmdh_pdf/PMDH_Manual.213-240.pdf
79. GRADITZKY Tomas. 1998. La Responsabilidad penal por violaciones del derecho internacional humanitario aplicable en situaciones de conflicto armado no internacional. *En: Revista Internacional de la Cruz Roja, Comité Internacional al de la Cruz Roja* [en línea]. Disponible en: <https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdlkb.htm> [Consulta: 10 de diciembre de 2020].
80. GROVER, Sonja. *The European Court of Human rights as a Pathway to impunity for International Crimes*. Springer. Lakehead University. Ontario, Canada. 2010. 298 páginas.
81. GRUSZCZYNSKI, Lukaz y Wouter Werner. *Deference in International Courts and Tribunals. Standard of Review and Margin of Appreciation*. Oxford University Press. Oxford, Reino Unido. Primera Edición 2014. 424 páginas.
82. HADELMANN, Frank y Thomas Unger. 2018. *“Introduction”* HADELMANN, Frank y Thomas Unger. Ed. *The United Nations Principles to Combat Impunity, A commentary*. Oxford University Press. Primera Edición. Oxford, . Página: 20, ISBN: 978-0198743606
83. HAZAN, Pierre. 2004. *Justice in a Time of War, The True Story Behind the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*. Primera edición. Estados Unidos: Pierre Hazan, página: 16 ISBN: 1-58544-377-8.

84. HEIKKILA, Mikaela. International Criminal Tribunals and Victims of Crime. Published by Institute for Human Rights, Abo Akademi University. S.E. Turku, 2004. 241 páginas.
85. HELLER, Kevin Jon. 2012. *The Nuremberg Military Tribunals and the Origins of International Criminal Law*. Oxford University Press. Reino Unido. Primera Edición. 2011. 509 páginas. ISBN: 978-0199668168
86. HELLER, Kevin Jon y Gerry Simpson. The Hidden Histories of War Crimes Trials. Oxford University Press. Reino Unido. Primera Edición. 2013. 463 páginas.
87. HENZE, Tobias. The Un genocide convention. An empty promise to prevent genocides after 1945? Grin. S. E. 2011. 30 páginas.
88. HENKIN, Louis. Et. Al. 2009. *Human Rights*. S.E. 2da. Edición. Estados Unidos de América, Páginas 1682. ISBN: 978-1599412610
89. KERSTEN, Mark. Justice in Conflict. The Effects of the International Criminal Court's Interventions on Ending Wars and Building Peace. Oxford University Press. Reino Unido. Primera Edición. 2016. 254 páginas.
90. HUESA Vinaixa, Rosario. Derechos Humanos, responsabilidad internacional y seguridad colectiva. Intersección de Sistemas. Marcial Pons. Madrid. Primera Edición. 2008 420 páginas.
91. IGLESIAS VELASCO, Alfonso J. 2001 La Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo. En: Revista CIDOB d'Afers Internacionals. Núm.56. Página: 17 ISSN: 1133-6595 Disponible en: [https://www.cidob.org/en/publications/\(filter\)/53216](https://www.cidob.org/en/publications/(filter)/53216) [Consulta: 10 de diciembre de 2020.]
92. IMPUNITY WATCH y otros. Cambiar la cultura de la violencia por la cultura de la vida. Los primeros dos años de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. F& G Editores. Primera Edición, Guatemala, agosto, 2010. 95 páginas.
93. JEAN-BERNARD, Marie. *LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS*. En Red disponible en: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tRMFCAI6KhMJ:https://www.corteidh.or.cr/tablas/a12008.pdf+&cd=15&hl=es&ct=c&link&gl=gt>
94. JESCHECK, Hans – Heinrich. 2001. *El Tribunal Penal Internacional*. En: Revista Penal. Nº 8, España. Página: 55. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/12965/Tribunal%20Penal.pdf?sequence=2>
95. JONES, Adam. Genocide. A Comprehensive Introduction. Routledge. Londres y Nueva York. Segunda Edición. 2011. 645 páginas.
96. KERR, Rachel. The International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia. An Exercise in Law, Politics, and Diplomacy. Oxford University Press. New York. Primera Edición 2004. 239 páginas.
97. KING, Kimi Lynn y MEERNIK, David. 2011. Assessing the Impact of the International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia: Balancing International and Local Interests While Doing Justice. En: SWART, Bert, Alexander Zahar y Göran Sluiter. Ed. The Legacy of the International

- Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. Primera edición. Nueva York: Oxford University Press, Página: 60 ISBN-13: 9780199673417
98. KING, Kimi Lynn y James David Meernik. 2011 Op. Cit ICTY 2009. Manual on Developed Practices [en línea]. Disponible en: http://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/ICTY_Manual_on_Developed_Practices.pdf [consulta: 10 de diciembre de 2020].
 99. LEMUS, Jonatan, *Centro de Estudios Económicos Sociales, ¿Por qué fracaso la CICIG en Guatemala?*, Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://www.cees.org.gt/publicaciones/por-que-fracaso-la-cicig-en-guatemala-1>
 100. LESS, Francesca y Leigh A. Payne. Amnesty in the Age of Human Rights Accountability. Comparative and International Perspectives. Cambridge University Press. Estados Unidos de América. Primera Edición. 2012. 423 páginas.
 101. MACEDO, Stephen. Universal Jurisdiction. National Courts and the Prosecution of Serious Crimes Under International Law. University of Pennsylvania Press. Philadelphia. First Paper Back edition, 2006. 379 páginas.
 102. MCCRUDDEN, Christopher, ed., *Understanding Human Dignity* (The British Academy, 2013), Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2951910>
 103. MAINA PETER, Chris. 1997. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda: sancionar a los asesinos. En: Revista Internacional de la Cruz Roja de 30 de junio de 1997. [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] Disponible en: crc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdl75.htm
 104. MALONE, Mary Fran T. The Rule of Law in Central America. Citizens' Reactions to Crime and Punishment. Blommsbury Publishing Plc. United States of America. Primera Edición 2012, segunda reimpresión 2014. 209 páginas.
 105. MEISENBERG, Simon M. The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia. Assessing their Contribution to International Criminal Law. International Criminal Justice Series. Volume 6. Asser Press – Springer. Primera Edición 2016. 612 páginas.
 106. MENDES, Errol P. Peace and Justice at the International Criminal Court. Edward Elgar Publishing, Inc. Massachusetts. 2010. S.E. 215 páginas.
 107. MINISTERIO de Relaciones Exteriores, Unión Europea y Cooperación. *Historia y Funciones del Consejo de Europa*. Gobierno de España. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/ConsejoDeEuropa/Paginas/HistoriaActividadConsejoEuropa.aspx> Consulta: 4 de julio de 2020
 108. MOLTENI, Atilio. 1964. “La responsabilidad internacional del Estado”. En: Revista Lecciones y Ensayos. No. 26. Universidad de Buenos Aires. Página: 43, Disponible en: http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/lecciones_y_ensayos_nro_0026.pdf ISBN: 978-9930-514-12-2

109. NICHOLS, Lionel. 2015. "The International Criminal Court and the End of Impunity in Kenya". Springer. Londres. Primera Edición. 267 páginas. ISBN: 978-3-319-10729-5
110. OLÁSULO Alonso, Héctor. 2008. "Cuestiones procesales y procedimentales sobre la posición de las víctimas en las actuaciones ante la Corte Penal Internacional" AMBOS, K y de Hoyos, M (Compiladores); *Cuestiones esenciales en la Jurisprudencia de la Corte Penal Internacional*. Editorial Comares; Granada, Página 280. ISBN: 978-84-9836-433
111. OLLÉ SESÉ, Manuel. Justicia Universal para crímenes internacionales. Editorial La Ley. Madrid, 2008. 1ª Edición. 621 páginas.
112. OSSORIO, Manuel. 2006. "*Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales*". Buenos Aires, Argentina, Editorial Heliasta. 33a Edición. 1005 páginas. ISBN: 9789508850058
113. PIGARU SOLE 2009. *La Jurisdicción Universal y su aplicación en España: La persecución del genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad por los Tribunales Nacionales.* RxDH Colección Recerca per Drets Humans. Núm. 3. Barcelona. Página 59 ISBN: 9788439381709
114. POPA, Ricarda. The Contribution of the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia to the Establishment of a Hybrid Tribunal Model. Grin Publishing. Marburg. Primera Edición. 2009. 37 páginas.
115. RAIMONDO, Fabián O. General Principles of Law in the Decisions of International Criminal Courts and Tribunals. Editorial Martinus Nijhoff Publishers. S.E. 2008. 212 páginas.
116. RABAINOVITCH 2004 Universal Jurisdiction in Absentia." Fordham International Law Journal. Vo. 28. Issue 2. Article 8. Berkeley p.516 SIN ISBN
117. REICHEL, Philip y Jay Albanese. Handbook of Transnational Crime and Justice. SAGE. Estados Unidos de América. Segunda Edición. 564 páginas.
118. REY Aneiros, Adela. Una aproximación a la responsabilidad internacional de las Organizaciones Internacionales. Tirant lo Blanch. Valencia. Primera Edición. 2006. 229 páginas.
119. REYDAMS, Luc. Universal Jurisdiction. International and Municipal Legal Perspectives. Oxford Monographs in International Law. Oxford International Press. First Edition, Reprinted. New York, 2006. 258 páginas.
120. REYDAMS, Luc y Jan Wouters. 2012. "*The Policies of Establishing International Criminal Tribunals*" REYDAMS, Luc, Jan Wouters y Cedric Ryngaert. Editores. *International Prosecutors*. Oxford University Press. Primera Edición. Reino Unido. Página: 7, ISBN: 9780199554294.
121. REYDAMS, Luc, Jan Wouters y Cedric Ryngaert. International Prosecutors. Oxford University Press. Primera Edición, Primera Impresión, 2012. 968 páginas.
122. RICE, Condolezza. 2017. "*Democracy. Stories from the Long Road to Freedom*". Editorial Twelve. Primera Edición. Nueva York. Páginas: 496. ISBN: 978-1455540181

123. RODRIGUEZ BARILLAS, Alejandro. El Problema de la Impunidad en Guatemala. Fundación Myrna Mack y Avancso. Primera Edición. Guatemala, 1996. 52 páginas.
124. RODRÍGUEZ Jordán, Marcelo. Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Ciudad Argentina. Buenos Aires. Primera Edición. 2005. 194 páginas.
125. ROPER, Steven D y Lilian A. Barria. Designing Criminal Tribunals. Sovereignty and International Concerns in the Protection of Human Rights. Editorial Ashgate. SE. 2006. 181 páginas.
- 126.
127. ROTH - ARRIAZA, Naomi. 1995. *"Impunity and Human Rights in International Law and Practice"*. Oxford University Press, 398 páginas. ISBN 978-0195081367
128. RUGEGE, Geoffrey. 2019. *La Segunda Guerra Mundial y la descolonización de África*. En: Revista Fundación Sur. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <http://www.africafundacion.org/spip.php?article33063>
129. RUIZ Valerio, José Fabián. 2011. *"¿Hacia un nuevo modelo de estado de derecho? El estado de derecho internacional en la visión de Luigi Ferrajoli"*. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. XI, Página: 121. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/pdf/amdi/v11/v11a5.pdf>
130. SALADO Osuna, Ana. *El Protocolo de enmienda numero 11 al Convenio Europeo de Derechos Humanos*. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <http://www.cepc.gob.es/Controls/Mav/getData.ashx?MAVqs=~aWQ9MjgzMjQmaWRIPTEwMzcmdXJsPTUmbmFtZT1SSUVfMDIxXzAwM18yMzEucGRmJmZpbGU9UklFXzAyMV8wMDNfMjMxLnBkZiZ0YWJsYT1BcnRpY3VsbyZjb250ZW50PWFwcGxpY2F0aW9uL3BkZg==>
131. SALAZAR Ugarte, Pedro. 2014. *"La reforma constitucional sobre derechos humanos"*. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3815/11.pdf>. ISBN: : 978-607-8320-05-9
132. SANDOVAL Mesa, Jaime Alberto. 2012. *El Desarrollo de la competencia internacional. Primeros aportes desde Nüremberg y Tokio*. En: Revista Prolegómenos – Derechos y Valores. Bogotá, Página: 40. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <file:///C:/Users/Tati/Downloads/Dialnet-ElDesarrolloDeLaCompetenciaInternacional-4278169.pdf>
133. SCHABAS, William A. The UN International Criminal Tribunals. The former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leona. Cambridge University Press. Primera Edición, Reinpresa. Cambridge, 2008. 711 páginas.
134. SCHABAS, William A. Unimaginable Atrocities. Justice, Politics, and Rights at the War Crimes Tribunals. Oxford University Press. Reino Unido. Primera Edición. 2012. 232 páginas.
135. SCHABAS, William A. An Introduction to the International Criminal Court. Cambridge University Press. Reino Unido. Cuarta Edición. 2011. 579 páginas.

136. SCHABAS, William A. *Genocide in International Law. The Crime of Crimes*. Cambridge University Press. Reino Unido. Segunda Edición. 2009. 741 páginas.
137. SCHABAS, William A y Nadia Bernaz. 2013. *Routledge Handbook of International Criminal Law*. Routledge, Taylor and Francis Group. Londres y Nueva York. Primera Edición. 461 páginas. ISBN 9780415552035
138. SCHMIN, Carl. *El crimen de Guerra de agresión en el Derecho Internacional*. Editorial Hammurabi. Buenos Aires, Argentina. 1a Edición. 2006. 217 páginas.
139. SEN, Laura de Jesús. 2015. *Los juicios de Núremberg*. En: Abogados de Valladolid, En: Revista semestral del Ilre. Colegio de Abogados de Valladolid. 1er Semestre 2013. Página 27. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://www.icava.org/revista-abogados-de-valladolid>
140. SEN, Laura de Jesús. 2014. *Los juicios de Núremberg*. En: Abogados de Valladolid. Extraordinario de Revisión 27. Primer Semestre. Valladolid, Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: file:///C:/Users/Tati/Downloads/revista_1_14.pdf
141. SERRALDE S, Alejandro. "Qué es la teoría de efectividad organizacional", Disponible en: <https://reddinconsultants.com/espanol/wp-content/uploads/2012/12/Qu%C3%A9-es-la-Teoria-de-Efectividad-Organizacional.pdf>
142. SHANY, Yuval. 2014. *"Assessing the Effectiveness of International Courts"*. Oxford University Press. Gran Bretaña. Primera Edición. 322 páginas. ISBN: 9780199643295
143. SHELTON, Dinah L. *Remedies in International Human Rights Law*. Oxford University Press. Nueva York. Primera Edición. 1999. 387 páginas.
144. SHELTON, Dinah L. *Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humity*. Editorial Thomson Gale. Estados Unidos. 2005. 3 volúmenes.
145. SHIRANAE, Daisuke. *La Convención Internacional sobre toda forma de discriminación racial (ICERD) y su Comité (CERD): Una guía para actores de la sociedad civil. Movimiento Internacional Contra Todas las Formas de Discriminación y Racismo (IMADR)*. Sin ISBN En red disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/ICERDManual_sp.pdf.
146. SMITH, Daniel. 1999. *The Legacy of Nuremberg: Sustaining Human Rights*. En: Cornell Law Forum. Vol. 25, No. 3. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/corlawf_ofe25&div=16&id=&page=
147. STEINITZ, Maya. 2007 *The International Criminal Tribunal for Rwanda as Theater: The Social Negotiation of the Moral Authority of International Law*. En: Journal of International Law & Policy Vol. V 1:1. Página: 1:3 [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] Disponible en:

- crc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdl75.htmhttps://www.law.u.penn.edu/journals/jil/jilp/articles/5-1_Steinitz_Maya.pdf
148. TAYLOR, Teleford. 2013. *The Anatomy of the Nuremberg Trials*. Skyhorse Publishing. S.E. New York 1993, Páginas: 1 a 641. 703 páginas. ISBN: 978-1620877883.
 149. THAKUR, Ramesh y MALCONTEN, Peter. From Sovereign Impunity to International Accountability: The Search for Justice in a World of States. United Nations. 295 páginas. REMIRO B. A. 1999 “El Caso Pinochet. Los límites de la impunidad” Biblioteca Nueva Política Exterior. 2004. 260 páginas.
 150. THOMPSON, Sidney. 2014. Forced Marriage at the Special Court of Sierra Leone: Questions of Jurisdiction, Legality, Specificity, and Consistency. En: CHERNOR Jalloh, Charles. *The Sierra Leone Special Court and Its Legacy. The Impact for Africa and International Criminal Law*. Cambridge University Press. Primera Edición. Páginas: 215 a 233. ISBN: 978-1-107-02914-9
 151. TOCHILOVSKY, Vladimir. Jurisprudence of the International Criminal Courts and the European Court of Human Rights. Procedure and Evidence. Martinus Nijhoff Publisher. Holanda. S.E. 2008. 912 páginas.
 152. TOCHILOVSKY, Vladimir, 2007. Procedimientos ante la Corte penal Internacional: Algunas lecciones que aprender de la Experiencia del TPIY, En: Revista de Derecho Penal y Criminología, 2ª época No. 19, Página: 366 [en línea]. Disponible en: http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:DerechoPenalyCriminologia2007-10/procedimientos_ante.pdf [consulta: 10 de diciembre de 2020].
 153. TOMUSCHAT, Christian y otros. Los Derechos Humanos frente a la Impunidad. Curso de Derechos Humanos de Donostia – San Sebastián. Volumen X. Argitaipen Zerbitzua Servicio Editorial. 2009. 332 páginas.
 154. TOMUSCHAT, Christian. 2006. *The Legacy of Nuremberg*. En: Journal of International Criminal Justice. Volume 4, 2006, Página: 830, Consulta: 10 de diciembre de 2020. ISBN: 9780199570218. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/jicj/mql051>
 155. TORRES PÉREZ, María y Valentín Bou Franch. La Contribución del Tribunal Internacional Penal para Ruanda a la configuración jurídica de los crímenes internacionales. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia. 2004 500 págs.
 156. TORRES Sandoval, Joshua Norberto, Laura Alicia Camarillo y Lorena Esmeralda Yáñez. 2017. “Eficacia de los derechos humanos en México vía control internacional”. Revista RyD República y Derecho, Volumen II (2017). Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza – Argentina. Consulta: 10 de diciembre de 2020. ISSN: 2448-4873. Disponibilidad en: evistaryd.derecho.uncu.edu.ar/index.php/revista/article/download/94/31
 157. TOTANI, Yuma. 2008. *The Tokio War Crimes Trial. The Pursuit of Justice in the Wake of World War II*. Harvard East Asian Monographs 299. Harvard University Press. Primera Edición. Cambridge Massachusetts and London, 321 páginas. ISBN: 9780674033399

158. TURNER Johnson, James. 2014. *"Sovereignty. Moral and Historical Perspectives"*. Georgetown University Press. Washington, D.C. Primera Edición. Páginas: 188, ISBN: 978-1626160569
159. VALENCIA VILLA, 2003 *"Hernando. Diccionario Espasa, Derechos Humanos"*. Editorial Espasa. 452 páginas.
160. VAN DER GAAG, Nikki y Jo Rowlands. "Speaking Out: Case studies on how por people influence decisión – making." Practical Action Publishing y Oxfam. Reino Unido, 2009. 136 páginas.
161. VELÁSQUEZ, Catalina. *¿Qué es la Declaración Universal de Derechos Humanos y por qué se creó?* Amnistía Internacional. [Consulta: 10 de diciembre de 2020] Sin ISBN, En red disponible en: <https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/derechos-humanos/declaracion-universal-derechos-humanos/>
162. VERDUGO PÉREZ, Susana del Pilar, 2019, *La Corte Especial Residual para Sierra Leona (una Valoración)*, Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile, Fecha de [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] Disponible en: <http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/168524/La-Corte-Especial-Residual-para-Sierra-Leona-una-valoraci%C3%B3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
163. VILLAGRÁN, Soledad. *El sistema universal de derechos humanos: los mecanismos convencionales y los mecanismos basados en la carta*. Jurídicas UNAM. [Consulta: 10 de diciembre de 2020] Sin ISBN En red disponible en: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2226/13.pdf>
164. ¹VILLA QUINTANA, Carmen Rosa. *Mecanismos de Protección de Derechos Humanos Sistema de Naciones Unidas*. Universidad para la Cooperación Internacional. [Consultado: 10 de diciembre de 2020] ISBN: 978-956-282-934-2, En red disponible en: http://www.ucipfg.com/Repositorio/MCSH/MCSH-01/Unidad_4/lecturas-Obligatorias/Mecanismos_Internacional_de_Proteccion_DH_Carmen_Quintana.pdf.
165. VILLALPANDO, Waldo, 2000 *De Los Derechos Humanos al Derecho Internacional Penal*, Ed. Abeledo-Perrot. ISBN 9789879835104
166. WILLIAMS, Sarah. *Hybrid and Internationalised Criminal Tribunals. Selected Jurisdictional Issues*. Hart Publishing. Gran Bretaña. Primera Edición. 2012.470 páginas.
167. WEMBOU, Djiena. 1997. Tribunal Penal Internacional para Ruanda. En: *Revista Internacional de la Cruz Roja*. Disponible en: <https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdl82.htm>[Consulta: 10 de diciembre de 2020.]
168. ZOLO, Danilo. 2007. *"La Justicia de los vencedores"*. De Nuremberg a Bagdad. Editorial Trotta. Madrid. Primera Edición. 206 páginas. ISBN 84-8164-949-X

B. Artículos

1. AGENCIA de la ONU para refugiado – Comité español. 2018. *Guerra de los Balcanes, uno de los peores conflictos de la historia*. Consulta 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/historias-de-vida/querra-de-los-balcanes-uno-de-los-peores-conflictos-de-la-historia>
2. ALDANA –PIDELL, Raquel. 2004. “An Emerging Universality of Justiciable Victim’s Rights in the Criminal Process to Curtail Impunity for State – Sponsored Crimes”. En: Human Rights Quarterly. Vol. 26. Páginas 605 – 686. ISBN: 9789004212152
3. AKHAVAN, Payam. 1996. The International Criminal Tribunal for Rwanda: The Politics and Pragmatics of Punishment. En: The American Journal of International Law. Vol. 90, No. 3 (Jul.1996) Página: 502 [Consulta: 10 de diciembre de 2020.] Disponible en: <https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/international-criminal-tribunal-for-rwanda-the-politics-and-pragmatics-of-punishment/232E716B97D13E2F5DE553D8589A0029>
4. AMENÓS Vidal, José María y otros. 2007. *Tribunal de Núremberg*. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <http://www.eumed.net/libros-gratis/2007c/329/Tribunal%20de%20Núremberg.htm>
5. BARRACHINA Lisón, Carlos. 2016. *Democracia, política y violencia en Honduras (2006-2014)*, Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1870576616000039>.
6. BARRIOS GARCÍA, Jessica. Jurisprudencia Internacional y jurisdicción universal. El Problema de la inmunidad versus la impunidad. Universidad Metropolitana, Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos. Escuela de Derechos. Caracas, 2008. 75 páginas.
7. BASSIOUNI, Mahmoud Cherif. 2001. “Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives and Contemporary Practice”. Va. J. Intl. L. 81, 67 páginas.
8. BASSIOUNI, Mahmoud Cherif. Combating Impunity for International Crimes. University of Colorado Law Review. Vol. 71. 2000. Páginas: 409 a 422.
9. BASSIOUNI, Cherif. 1986. *Nuremberg Forty Years After: An Introduction Case*. En: Western Reserve journal of Interantional Law. Vol 18.261 . Página: 261. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=2209&context=jil>
10. BASSIOUNI, M. 2001, “Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives and Contemporary Practice.” Va. J. Intl. L. 81 Página: 59 Sin ISBN
11. BASSIOUNI, M. Cherif. 1996. *The law of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, Transnational Pub In. Primera Edición. Nueva York. Página: 863. ISBN-13: 978-1571050045
12. BELTRAN, Adriana. “Guatemala Corruption Scandals Signal End of Era of Impunity”. World Politcs Review. June 15, 2015. 2 páginas.
13. BRODY, Reed. 2013. “Llanto por la jurisdicción universal Human Rights Watch” Disponible en: <http://blogs.publico.es/dominiopublico/1370/llanto-por-la-jurisdiccio-n-universal/> (de este no me aparece ISBN solo este 978-0-8270-6522-2)
14. BROWNLIE, Ian. 2003. “Principles of Public International Law”. Oxford University Press. Sexta Edición. Nueva York. Página: 784sove. ISBN: 978-0199260713

15. BURKE- WHITE, William W. 2000. "*Protecting the Minority: A Place for Impunity? An Illustrated Survey of Amnesty Legislation*", Its Conformity with International Legal Obligations, and Its Potential as a Tool for Minority - Majority Reconciliation. *Journal on Europolitics and Minority Issues in Europe*. Germany, September. 53 páginas. ISBN: 978-92-1-154197-7
16. BURKE – WHITE, William W. The Domestic Influence of International Criminal Tribunals: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and the Creation of the State Court of Bosnia & Herzegovina. *HeinOnline*. 46. 2007 – 2008.. Páginas 279 – 350.
17. BURKE – WHITE, William W. Proactive Complementarity: The International Criminal Court and National Courts in the Rome System of International Justice. *Harvard International Law Journal*. Vol.49, Number 1, Winter 2008. Páginas. 53 - 108.
18. Carta de entendimiento interinstitucional entre el Tribunal Supremo Electoral y la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala de fecha 16 de agosto de 2018, Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://www.cicig.org/wp-content/uploads/2018/08/ConvenioTSE-CICIG.pdf>
19. CALVET Martínez, Elisenda, 2019. *La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dilemas tras 12 años de actuación*, Universidad de Barcelona, España, Documento de trabajo No. 6 (2ª época), Fundación Carolina, Madrid España, pág. 13. Consulta: 10 de diciembre de 2020. ISSN-e: 1885-9119. Disponible en: https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/06/DT_FC_06.pdf
20. CALL, Charles T. y HALlock Jeffrey, 2020. *¿Una iniciativa demasiado exitosa? El legado y las lecciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala*, Latin American & Latino Studies, American University, Washington, DC. Pág. 8. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: https://www.insightcrime.org/wp-content/uploads/2020/01/%C2%BFUna-iniciativa-demasiado-exitosa_-El-legado-y-las-lecciones-de-la-Comisio%CC%81n-Internacional-contra-la-Impunidad-en-Guatemala.pdf
21. CASSEL, DOUGLAS. 2001. "*La lucha contra la impunidad en el Sistema Interamericano de derechos humanos*"; en: *Verdad y Justicia, Homenaje a Emilio Mignone*; ed. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José. pp. 356 - 410; ISBN: 978-0-8270-6979-4 CIDH
22. CASSESE, Antonio. *Is the Bell Tolling for Univesality? A Plea for a Sensible Notion of Universal Jurisdiction*. *Journal of International Criminal Justice*. Oxford University Press. 2003. 650 páginas.
23. CASSESE, Antonio y Mireille Delmas Marty. *Crímenes Internacionales y Jurisdicciones Internacionales*. *International Law: Rev.* Colombia. *Derecho Internacional*. No. 8 Bogotá. 2004. Páginas 313 – 322.
24. CHALAMISH, Efraim. *Jurisdicción universal y política mundial: el caso español* *Política Exterior* N°134, 2010 <http://www.politicaexterior.com/archives/7865>
25. CHEN, Peter. *Tokyo Trial and other Trial against Japan*. 3 May 1946 - 12 Nov 1948. *Worl War II, Database*. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Sin ISBN. Disponible en: https://ww2db.com/battle_spec.php?battle_id=221 .
26. CHICHÓN Álvarez, Javier. 2012. "*El concepto de impunidad a la luz del derecho internacional: Una aproximación sistémica desde el derecho internacional penal y derecho internacional de los derechos humanos*". Página: 65, Disponible en: www.reei.org

27. CHILD Rights International Network. *Consejo de Europa*. 2019, Consulta: 10 de diciembre de 202. Disponible en: <https://archive.crin.org/es/guias/onu-sistema-internacional/mecanismos-regionales/consejo-de-europa.html>
28. CENTER for Justice and International Law y otros. "Human rights organizations applaud UN decision to renew mandate of International Commission against Impunity in Guatemala." Open Society Justice Initiative.S.F. <https://www.cejil.org/en/human-rights-organizations-applaud-decision-renew-mandate-international-commission-against-impunity>
29. CENTRE for Human Rights, 2016. Faculty of Law, University of Pretoria. A guide to the African human rights system. . Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/31712.pdf>
30. COMUNICACIÓN CEPAZ. CIDH pone a disposición el Sistema de Monitoreo de Recomendaciones Interamericano (Simore). Consulta 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://cepaz.org/noticias/cidh-pone-a-disposicion-el-sistema-de-monitoreo-de-recomendaciones-interamericano-simore/>
31. COMELLAS Aguirrezábal, María Teresa. La jurisdicción universal en España tras la reforma de 2009: ¿racionalización del principio o un paso atrás en la lucha contra la impunidad? Anuario Español de Derecho Internacional. Vol.26. 2010. Páginas: 61 a 110.
32. CONSEJO de Europa. *Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales*. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
33. CONSEJO de Europa. 1994. *Protocolo número 11 al Convenio Para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales relativo a la reestructuración del mecanismo de control establecido por el Convenio*. Estrasburgo
34. DULITZKY, Ariel. 2015. *Muy poco, muy tarde: la morosidad procesal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos*. Fascículo N. 12.". Buenos Aires, JA 2015-I. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33492.pdf>.
35. DUE Process of Law Foundation. 2016. *La lucha contra la impunidad desde el derecho Internacional. Refleiones a partir de las experiencias heterodoxas en Latinoamérica: La CICIG en Guatemala, la MACCIH en Honduras y el GIEI en México*. Washington, D.C. Página. 5. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: http://www.dplf.org/sites/default/files/lucha_impunidad_d2_docweb_03212017.pdf
36. EMBAJADA de Honduras en Washington D.C. *Estructura de País*. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <http://hondurasemb.org/estructura-politica-de-pais.html>
37. ECHEVERRÍA, Arturo; Claudia Rivera, et al. 2006. *Violaciones de los Derechos Humanos en Guatemala. Organización Mundial Contra la Tortura*. S.E. Páginas 138. ISBN: 2-88477-124-7
38. EVANS, Michael y Rachel Murray. 2008. *The African Charter on Human and People's rights: The System in Practice*. Cambridge University Press, Cambridge, Segunda Edición. Página 180. Sin ISBN.

39. FAÚNDEZ Ledesma, Héctor. 1999. "Derecho internacional, impunidad y responsabilidad del Estado". *Revista Nueva Sociedad*, No. 161. Mayo – junio 1999. ISSN: 0251-3552
40. FAÚNDEZ Ledesma, Héctor. 2004. *El sistema interamericano de protección de los derechos humanos: aspectos institucionales y procesales* Instituto Interamericano de Derechos Humanos . IIDH, 3 ed. San José. Páginas: 1085. ISBN: 9968-917-24-9
41. FISCHER de Andrade, José. 1992. *El Sistema Africano de protección de los Derechos Humanos y de los Pueblos*. Seminario Internacional **La Protección Internacional de los Derechos Humanos**. Universidad de São Paulo. Páginas: 23-57. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r12020.pdf>
42. FORBES Centroamérica Staff. *Misión de la OEA contra la corrupción en Honduras es incierta, de fecha 09 de enero de 2020*. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://forbescentroamerica.com/2020/01/09/mision-de-la-oea-contra-la-corrupcion-en-honduras-es-incierta/>
43. FUNDACIÓN Cátedra Iberoamericana. *Los Tribunales Internacionales*. Universitat de les Illes Balears. S.A. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://fci.uib.es/Servicios/libros/veracruz/Fraschina/1.-Los-Tribunales-Militares-Internacionales..cid210831>
44. FRASCHINA, Andrea, 2008. Una nueva jurisdicción penal de carácter Internacional: el Tribunal Especial para el Líbano, En: *Revista Electrónica de estudios Internacionales*, Pág. 1
45. GARCÍA AZOFEITA, Ignacio. 2013. *La Comisión contra la Impunidad en Guatemala. Tendencias hacia un Derecho Penal Internacional híbrido en Centroamérica*. En: *Revista de Ciencias Jurídicas* No. 132, Páginas: 61 – 88.
46. GARCÍA GÁRATE, Iván, 2011. "Apuntes sobre impunidad y Poder Judicial", *Revista de Derechos Humanos Defensor*, No. 11, 143 páginas.
47. GARCÍA Roca, Javier. 2005. *La muy discrecional doctrina del margen de apreciación nacional según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: soberanía e integración*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Sin ISBN. 143 Páginas. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2520040.pdf>.
48. GIMÉNEZ Montero, Judith. 2017. *La posición de las víctimas de graves crímenes internacionales ante los tribunales militares internacionales y los tribunales penales internacionales*. Universitat de Barcelona. Tesis Doctoral. Barcelona. Página: 39. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/457527/JGM_TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
49. GOEPFERT, Paul. "Undoing the Legacy of Violence and Corruption." *The International Commission Against Impunity in Guatemala*. Revista. Harvard Review of Latin America. Falle 2010/ Winter 2011. 8 páginas.
50. GÓMEZ ISA, FELIPE. 2008. "El fenómeno de la impunidad: luces y sombras en América Latina". *Pensamiento Iberoamericano*. No.2 . Páginas 163 – 185.
51. GOMEZ, Isa. *Sistema Africano de Derechos Humanos*. . Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33357.pdf><http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33357.pdf>

52. GONZALEZ MEDINA, Diego, 2015, *Acerca de los Tribunales Híbridos*, Departamento de Derecho Constitucional, Bogotá. Colombia, Serie Documentos de trabajo No. 41, Universidad Externado de Colombia, Paola Andrea Acosta Editora, Pág. 48
53. GONZÁLEZ VEGA, Ignacio. 2010. "Breve diagnóstico de la jurisdicción penal universal en su respuesta a la impunidad de los crímenes internacionales". *Jueces para la democracia*. N° 67, págs. 119-131
54. GUTIERREZ de Colmenares, Carmen María. 2003. *Los Derechos Humanos y los Tratados que los contienen en el Derecho Constitucional y la jurisprudencia de Guatemala*. En: *Revista Ius et Praxis*. Año 9. N° 1. Consulta: 10 de diciembre de 2020. ISSN: 0718-0012. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122003000100008
55. Humanium. *Pactos Internacionales de 1966*. En red disponible en: <https://www.humanium.org/es/pacto-1966/>
56. HUSSAIN, Varda, 2005. Sustaining Judicial Rescues: The Role of Outreach and Capacity-Building Efforts in War Crimes Tribunals. En: *Virginia Journal of International Law* [en línea]. 45. Página: 35 Disponible en: [https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/vajint45&div=18&id=&page=\[consulta: 10 de diciembre de 2020\]](https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/vajint45&div=18&id=&page=[consulta:10%20de%20diciembre%20de%202020]).
57. JALLOH, Charles C. Universal Jurisdiction, Universal Prescription? A Preliminary Assessment of the African Union Perspective on Universal Jurisdiction. *Legal Studies Research Paper Series. Criminal Law Forum*. Vol. 21, 2010, páginas 1 – 65.
58. JALLOH, Charles. 2019. *The Place of the African Court of Justice and Human and Peoples' Rights in the Prosecution of Serious Crimes in Africa*, JALLOH, Charles, Kamari M. Clarke y Vincent O. Nmeihille. Ed. *The African Court of Justice and Human and Peoples' Rights in context*. Cambridge University Press Cambridge. Página: 57. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: [https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/416534A44F3C6E177535B89FD8A1BFBB/9781108422734AR.pdf/The African Court of Justice and Human and Peoples Rights in Context.pdf?event-type=FTLA](https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/416534A44F3C6E177535B89FD8A1BFBB/9781108422734AR.pdf/The%20African%20Court%20of%20Justice%20and%20Human%20and%20Peoples'%20Rights%20in%20Context.pdf?event-type=FTLA)
59. Jiménez 2011 *La lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales en España: de la persecución a Pinochet a la inculpación del juez Garzón* Institut Catala Internacional per la Pau. Barcelona.
60. JIMÉNEZ García, Francisco. 2002. "Justicia Universal e inmunidades estatales: justicia o impunidad: ¿Una encrucijada dualista para el Derecho Internacional?" *Anuario Español de Derecho Internacional*. Páginas: 63 a 124. ISBN: 0212-0747 Disponible en: http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/22212/3/ADI_XVIII_2002_02.pdf
61. KABASHA, Gaétan. *La situación de los Derechos Humanos en África*. Democresía. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://democresia.es/asuntos-sociales/la-situacion-los-derechos-humanos-africa/>
62. KAUFMAN, Zachary D. 2010. *The Nuremberg Tribunal v. The Tokyo Tribunal: Desings, Staffs, and Operations*. En: *John Marshall Law Review*, Vol. 43, No. 3, pp. 753-768, Página: 754. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://ssrn.com/abstract=1917036>

63. KEIICHIRO, Koburu. 1995. *The Tokyo Trials: The Unheard Defense*. S.E. Tokyo, Japan. Página: 4. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Sin ISBN. Disponible en: http://www.sdh-fact.com/CL02_1/66_S4.pdf
64. KUTNJAK Ivkovic, Sanja y John Hagan. 2011. *Reclaiming Justice: The International Tribunal for the Former Yugoslavia and Local Courts*. Primera edición. Nueva York: Oxford University. Página: 168. ISBN-13: 978-0195340327
65. LAKARRA Etxebarria, Jone. 2013. *El sistema regional de protección de derechos humanos en África: avances y deficiencias*. Departamento de Derechos Internacional Público, Relaciones Internacionales e Historia del Derecho. En: Ensayos y trabajos: Número 16, Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <http://www.diprrihd.ehu.es/revistadoctorado/n16/Lakarra16.pdf>
66. LE Clercq, Juan Antonio, Azucena Cháidez y Gerardo Rodríguez. 2016. “*Midiendo la impunidad en América Latina: retos conceptuales y metodológicos*”. En: Íconos, Revista de Ciencias Sociales. No. 55. Quito, Páginas: 69 a 91.
67. LOBO FERNÁNDEZ, Juan Francisco, 2015. Decisión del Tribunal Especial para El Líbano sobre la admisibilidad en juicio de documentos publicados en el sitio web WikiLeaks, En: Revista Tribuna Internacional, Publicación del departamento de Derecho Internacional, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, Volumen 4, No. 8, Páginas 282, [Consulta: 10 de diciembre de 2020], ISSN 0719-482X, Disponible en: <https://tribunainternacional.uchile.cl/index.php/RTI/article/download/38555/40201/>
68. MAHONEY, Paul and Seren Prebensen. 1993. *The European Court of Human Rights*. ACDONALD, Ronald St. J. Franz Matscher, and Herbert Petzold. Dordrecht, ed. *The European System for the Protection of Human Rights*, Martinus Nijhoff Publishers, S.E. Boston, London. Página: 621, ISBN: 0792324315 9780792324317
69. MARIÑO Menéndez, Fernando M. 2005. “*Derecho Internacional Público. Parte General*”. Editorial Trotta. Cuarta Edición. Madrid. Páginas: 19 y 20. ISBN: 84-8164-085-9
70. MARTIN Quintana, María. 2016. *Cumplimiento de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: desafíos en materia de justicia*. CEJIL 1ª ed. San José, Página 10. Consulta: 10 de diciembre de 2020. ISBN: 978-9968-9623-7-7. Disponible en: https://www.cejil.org/sites/default/files/cumplimiento_sentencias_guatemala_web.pdf
71. MEDIAVILLA, Manu. 2017. *Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una 'joya' para las libertades fundamentales*. Amnistía Internacional. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/tribunal-europeo-de-derechos-humanos-una-joya-para-las-libertades-fundamentales/>
72. MEJÍA Azuero, Jean Carlo. 2008. “*Diferencias entre el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Penal*”. En: Prolegómenos. Derechos y Valores, Vol. XI, Núm. 22, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia, julio-diciembre. Página: 183. Consulta: 10 de diciembre de 2020, Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/876/87602212.pdf>. ISSN: 0121-182X
73. MICHEL, Nicolas. 2014. *The Creation of the Tribunal in its Context*. En: ALAMUDDIN, Amal, Nidal Nabil Jurdi y David Tolbert. Ed. 2014 *The Special Tribunal for Lebanon, Law and Practice*. Oxford Monographs in International Humanitarian and Criminal Law. Oxford, Primera Edición. Página: 15 ISBN: 978 - 0-19-968745-9

74. MOGHALU, Kingsley. 2019. *De continente sin esperanza al auge de África en solo 10 años. Vanguardia Dossier*. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://www.lavanguardia.com/vanguardia-dossier/20191112/471554847195/africa-crecimiento-pib-desigual-globalizacion.html>
75. MOLANO ROJAS, Andrés. 2010. Casos de Intervención de la Corte Penal Internacional. En: *Revista Estudios en Seguridad y Defensa* 5 (9); páginas 22 . 39 Sin: ISSN Disponible en: <https://esdeguerevistacientifica.edu.co/index.php/estudios/article/view/100/190>
76. MONTE Gómez, Marta. 2004. *El Convenio Europeo de Derechos Humanos: primeros pasos para una nueva reforma. Anuario de Derechos Humanos*. En: Nueva Época. Vol. 5. (755-784). Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://revistas.ucm.es/index.php/ANDH/article/download/ANDH0404110755A/20906>
77. MONTERROSO Castillo, Javier. "Impunidad e investigación criminal en Guatemala." <http://www.kas.de/wf/doc/1974-1442-4-30.pdf>
78. MORRIS, Virginia y Michael SCHARF, 1995. *An Insider's Guide to the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia: A Documentary History and Analysis*. Vol. I. Irvington-on Hudson, Primera Edición, Nueva York, Página: 177 ISSN-13: 978-0941320924
79. MORRIS, Madeline H. *International Guidelines against impunity: facilitating accountability*. Law and Contemporary Problems. Vol. 59, No. 4, 1996. Páginas: 29 a 39.
80. MULLER, Andreas Th. E Ignaz Stegmler. "Self – Referrals on Trial. From Panaea to Patient." *Journal of International Criminal Justice*. 8, Oxford University Press. 2010. Páginas 1267 – 1294.
81. MUÑOZ de Cote Otero, Alfonso Tirso. 2012. *El Tribunal Militar Internacional De Nüremberg. Problemática e Implicaciones de su Instauración*. En: *Revista de la Facultad de Derecho de México*. Universidad Nacional Autónoma de México. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: [Vol 62, No 258 México 2012 http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/60723](http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/60723)
82. NASH Rojas, Claudio. 2018. *La doctrina del margen de apreciación y su nula recepción en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*. En: *Anuario Colombiano de Derechos Internacional*. vol. 11. Universidad del Rosario. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://revistas.urosario.edu.co/xml/4295/429555530003/html/index.html#fn3>
83. NGABIRANO, Dan. *Confronting Impunity. Assessing the contribution of the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) to the evolvement of International Criminal Law*. LAP LAMBERT Academic Publishing. 2010. 78 páginas.
84. NTAGANDA, Eugéne. 2005. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda en la encrucijada. En: *Nova Africa*, No. 16. Página: 89. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5185682> ISSN-e 1136-0437
85. NYBERG, Tove. "Smoking the Rats Out: CICIG'S effort to strengthen the justice system in Guatemala." *Stockholm University, Faculty of Law*. 2014.
86. NYBERG, Tove. *International Commission against Impunity in Guatemala: A non – traditional transitional justice efford*. *Revue Québécoise de droit international*. No. 28. 2015 páginas 157 a 184.

87. OBAIDI, Naquib y Robbie Skinner. "The International Commission against Impunity in Guatemala/ Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) – An effective model for combatting corruption." <https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/notinmycountry/pages/74/attachments/original/1412368064/CICIGReport.pdf?1412368064>
88. OLIVA Martínez, J. Daniel. "El Tribunal de Camboya inicia nuevo juicio a altos dirigentes de la Kampuchea Democrática acusados en el caso npum 002/19-09-2007/ECCC-TC" *Revista Española de derecho internacional*, vol. LXIII, Madrid, 2011. Páginas 302 a 307.
89. OPEN Society Justice Initiative. "Una labor inacabada: la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)." Open Society Foundations. Nueva York. S.F. <https://www.opensocietyfoundations.org/briefing-papers/unfinished-business-guatemalas-international-commission-against-impunity/es>
90. OPEN Society Justice Initiative. "Contra todos los pronósticos, la CICIG en Guatemala." Nueva York, 2016. 144 páginas.
91. OACNUDH. *Derechos Humanos. Derechos Civiles y Políticos. El Comité de Derechos Humanos*. Folleto informativo No. 15. (REV1). S.A. 80 páginas. <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15Rev.1sp.pdf>
92. ODIO BENITO, Elizabeth. El Tribunal Internacional para la Ex – Yugoslavia – Justicia para la paz.- *Revista IIDH*. Vol. 24. 1996. Páginas 133 – 171.
93. O'FLAHERTY, Michael. Sierra Leone's Peace Process: The Role of the Human Rights Community. *Human Rights Quarterly*, Vol. 26, 2004, The Johns Hopkins University Press. Páginas 29 – 62.
94. O'KEEFE, Roger. Universal Jurisdiction. Clarifying the Basic Concept. *Journal of International Criminal Justice* 2, 3. Oxford University Press, 2004. Páginas 735 – 760.
95. OLLÉ SESÉ, Manuel y Carmen Lamarca Pérez. La reforma del principio de Justicia Universal. La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, N°. 83. 2004. 15 páginas.
96. OLIVA MARTÍNEZ, Juan Daniel. El Tribunal de Camboya inicia nuevo juicio a altos dirigentes de la Kampuchea Democrática acusados en el Caso núm. 002/19-09-2007/ECCC-TC. *Revista española de derecho internacional*. Año 2001, Vol. 63, Número 2. 5 páginas.
97. PASQUALUCCI, Jo M. 2012. *The Practice and Procedure of the Inter-American Court of Human Rights*. Cambridge University Press. Segunda Edición. Cambridge, Página 52. ISBN: 9780511494055 (en la publicación aparece 2003)
98. PACHECO, Daniel. "Guatemala Must Fight Impunity from Within: CICIG Director." In *Sight the Crime*. 4 de junio de 2012. <http://www.insightcrime.org/investigations/guatemala-must-fight-impunity-from-within-cicig-director>
99. PALESTINIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS. The Principle and Practice of Universal Jurisdiction: PCHR's Work in the occupied Palestinian territory. Palestina, 2010. 184 páginas.
100. PANNER, Morris y Adriana Beltrán. "Battling Organized Crime in Guatemala. A unique government – UN partnership is starting to make headway." *Americas Quarterly*. Estados Unidos, 2010. 9 páginas.
101. PARDO GATO, José Ricardo. Corte Penal Internacional y/o Justicia Universal ¿Las dos caras de la misma moneda? *Revista Española de Derecho Militar*. Núm. 92, julio – diciembre, 2008. 34 páginas.

102. PECES-BARBA, Gregorio. 1999. *Curso de Derechos Fundamentales*. S.E. Universidad Carlos III de Madrid. Madrid. Página 551. ISBN: 9788434008144
103. PELLET, Alain. "The Palestinian Declaration and the Jurisdiction of the International Criminal Court". *Journal of International Criminal Justice*. 8, Oxford University Press. 2010. Páginas 981 – 999.
104. PERAZA, Luis. 2005. "La Jurisdicción Universal y el ejemplo del Tribunal Constitucional español". Disponible en: [file:///C:/Users/Hp/Downloads/Documento%2028%20Principio%20de%20jurisdiccion%20universal%20\(1\).htm](file:///C:/Users/Hp/Downloads/Documento%2028%20Principio%20de%20jurisdiccion%20universal%20(1).htm)
105. PERAZA, Luis. 2006. *La jurisdicción universal: una realidad en constante construcción*, Universidad de La Sabana, Dikaion – Lo Justo. Bogotá. Página 352.
106. PÉREZ ALONSO, Esteban. Las últimas reformas del principio de justicia universal legalizadoras de la jurisprudencia "creativa" del Tribunal Supremo Español. *Revista Estudios Penales y Criminológicos*. Vol. XXXII. España, 2012. Páginas 131 – 196.
107. PEYTRINET, Gérard: *Derecho Internacional Humanitario: evolución histórica, principios esenciales y mecanismos de aplicación*. Primera parte IIDH. Serie Estudios de Derechos Humanos. Tomo II. Primera Edición. San José. 1995. Páginas. 143 - 163.
108. PIGRAU SOLÉ, Antoni. *La Jurisdicción Universal y su aplicación en España: La persecución del genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad por los Tribunales Nacionales*. RxDH Col·lecció Recerca per Drets Humans . Núm. 3. Barcelona, 2009. 143 páginas.
109. PONS, Niccoló. "Some Remarks on in Absentia Proceedings before the Speial Tribunal for Lebanon in Case of a State's Failure or Refusal to Hand over the Accused." *Journal of International Criminal Justice*. Oxford University Press. 2010. Páginas: 1307 – 1321.
110. PORRAS Castejón, Gustavo. "Guatemala, Ten Years After the Agreements on a Firm and Lasting Peace". *National Dialogues on Democracy in Latin America*. A Project of the Inter- American Dialogue and the Organization of American States. May, 2008. 50 páginas.
111. PORTILLA GÓMEZ, Juan Manuel y HERNÁNDEZ ROJAS, Andrea Paula, S.F. *La Evolución y la Efectividad de los Tribunales Penales Ad Hoc*. En: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM [en línea]. Páginas: 207 y 208. Disponible en: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2790/10.pdf> [consulta: 10 de diciembre de 2020].
112. POSTEMA, Mirte. "CICIG Investigation Could Be a Game – Changer for Guatemala." *Americas Quarterly*. Estados Unidos, 9 de septiembre de 2014. 6 páginas.
113. POSTEMA, Mirte. "CICIG's investigations show web of corruption in Guatemala state. Now, what's next?" *IntLawGrrls*. Voices on international law, policy, practice. 17 de junio de 2016. <https://ilg2.org/2016/06/17/cicigs-latest-corruption-investigations/>
114. RABINOVITCH, Ryan. *Universal Jurisdiction in Absentia*. *Fordham International Law Journal*. Vo. 28. Issue 2. Article 8. Berkeley, 2004. Páginas 500 – 530.
115. REINSBERG, Lisa. 2014. *Prevención y Reparación de Violaciones a Derechos Humanos en el Marco Internacional Defensa ante el Sistema Interamericano: Manual para Abogados y Defensores*. Centro de Recursos para la Justicia

- Internacional. 2da. Edición. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Sin ISBN. Páginas: 266. Disponible en: <https://ijrcenter.org/wp-content/uploads/2014/03/Manual-Defensa-ante-el-Sistema-Interamericano-2014.pdf>
116. REMIRO BRÓTONS, Antonio. Los Crímenes de Derecho Internacional y su persecución judicial. Cuadernos de derecho judicial, Nº. 7, Madrid, 2001. Págs. 67-150
 117. REMIRO BRÓTONS, Antonio. La persecución de los crímenes internacionales por los Tribunales Estatales: El Principio de Universalidad. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2007, páginas 491 – 516.
 118. REMIRO BRÓTONS, Antonio. Crímenes Internacionales, jueces estatales. Revista Política Exterior. Número 134. Madrid, 2010. 10 páginas.
 119. RIACHY, Ralph. "Trials in Absentia before the Special Tribunal for Lebanon: A Plea for a Balanced Approach. Trials in Absentia in the Lebanese Judicial System and at the Special Tribunal for Lebanon. Challenge or Evolution? Journal of International Criminal Justice. Oxford University Press. 2010. Páginas: 1295 – 1305.
 120. RODRÍGUEZ Kauth, Angel. Corrupción e Impunidad: dos estilos de cultura política latinoamericana. Investigación y Desarrollo. Vol. 8, No. 3. Buenos Aires. 2000. Páginas: 258 a 287.
 121. RODRIGUEZ YAGUE, Cristina. La justicia universal y el principio de ne bis in ide Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional. Universidad de Castilla La Mancha. Tirant lo Blanch – Servicio de publicaciones de Castilla, 2007. 62 páginas.
 122. ROHT-Arriaza, Naomi. Próximos juicios sobre hechos del conflict armado en Guatemala podrían resaltar vínculos entre delitos del pasado y del presente. Fundación para el Debido Proceso. 18 de abril de 2016. <https://dplfblog.com/2016/04/18/proximos-juicios-sobre-hechos-del-conflicto-armado-en-guatemala-podrian-resaltar-vinculos-entre-delitos-del-pasado-y-del-presente/>
 123. ROHT-Arriaza, Naomi. After Amnesties are Gone: Latin American National Courts and the new Contours of the Fight Against Impunity. Human Rights Quarterly, vol. 37. 2015. Páginas: 341 a 382.
 124. ROMERO Muñoz, Rogelio. 2012. "La Impunidad como factor criminógeno". Archivos de Criminología, Criminalística, Seguridad Pública. Vol. VIII. 4 páginas.
 125. RUBIN. Alfred P. Legal Response to Terror: An International Criminal Court? Harvard International Law Journal, Volume 43, Number 1, Winter, 2002. Páginas 65 - 70.
 126. SÁNCHEZ-BAYÓN, Antonio, Gloria Campos García de Quevedo y Carlos Fuente Lafuente. Fecha de publicación: 1 de enero de 2019, *Sistemas Regionales de Derechos Humanos: Aclaraciones y Consejos para su Exigibilidad*. En: Derecho y Cambio Social N.º 55. Página: 10, Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: [file:///C:/Users/astri/Downloads/Dialnet-SistemasRegionalesDeDerechosHumanos-6967893%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/astri/Downloads/Dialnet-SistemasRegionalesDeDerechosHumanos-6967893%20(1).pdf)
 127. S.A. Doctrina parte especial. "Derecho Internacional Penal y Derecho Penal Internacional". Consulta: 10 de diciembre de 2020, Disponible en: http://www.derechointernacional.net/privado_lp/doctrina-parte-especial/452-derecho-internacional-penal-y-derecho-penal-internacional

128. S.A. 2008. *Los Tribunales Militares Internacionales*. Cátedra Iberoamericana. Universitat de les Illes Balears. Consulta: 10 de diciembre de 2020. ISBN: 978-84-936357-4-9. Disponible en: <https://fci.uib.es/Servicios/libros/veracruz/Fraschina/1.-Los-Tribunales-Militares-Internacionales..cid210831>
129. S.A. 1945. *Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg*. Considerando. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: http://www.cruzroja.es/principal/documents/1750782/1852538/estatuto_del_tribunal_de_nuremberg.pdf/20090fa2-e5bf-447a-aa96-612403df2a66
130. S.A. *Formación del sistema político y económico de Japón en la posguerra, 1945-1965*. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: http://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/IRI%20COMPLETO%20-%20Publicaciones-V05/Publicaciones/cursos1/Keichi3.htm
- 131.
132. SAAVEDRA ÁLVAREZ, Yuria. El Sistema Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos. Prolegómenos. Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Vol. VIII. 2008. 41 páginas.
133. SADAT, Leila Nadya. Redefining Universal Jurisdiction. *New England L Rev.* 2000 – 2001, Página. 241
134. SALMON, Elizabeth y Lorena Bazay. El crimen de agresión después de Kampala: soberanía de los estados y lucha contra la impunidad. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 2011. 107 páginas.
135. SAINZ de Robles, Federico Carlos. La impunidad. La impunidad, un escándalo en el Estado de Derecho. 2002. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=277234&orden=116534&info>
136. SCHABAS, William A. The Relationship Between Truth Commissions and International Courts: The Case of Sierra Leone. *Humans Rights Quarterly*. Vol. 25. 2003. The Johns Hopkins University Press. Páginas 1035 – 1066.
137. SCHARF, Michael. Universal Jurisdiction and the Crime of Aggression *Harvard International Law Journal*. Vol. 53 Number 2, Boston, 2012. Páginas 358 – 389.
138. SCHARF, Michael y MAGAUX, Day. 2011, 2013. The ad hoc international criminal tribunals: Launching a new era of accountability. En: SCHABAS, William y Nadia Bernaz. *Routledge handbook of International Criminal Law*. Primera edición. Londres y Nueva York: Routledge Taylor & Francis Group, Ed. *Óp. Cit.* Página:51. ISBN – 0 203 83689 8.
139. SCHEININ, Martin y otros. Final Report on the exercise of Universal Jurisdiction in respect of gross Human Rights offences. International Law Association, London Conference. Committee on International Human Rights Law and Practice. London, 2000. 29 páginas.
140. SCHUNEMANN, Julia. “Mirando al Monstruo a la Cara”: La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el “Contrato de construcción del Estado de Derecho.” Initiative for Peacebuilding. Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior. 2009, 31 páginas.
141. SERRANO, Mariol. 2002. *El Genocidio sobre la base de Núremberg. Valoración crítica del tipo actual*. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://www.menschenrechte.org/es/2002/05/20/el-genocidio-sobre-la-base-de-Núremberg-valoracion-cri%C2%ADtica-del-tipo-actual/>

142. SHARP, Dustin N. Prosecutions, Development, and Justice: The Trial of Hissein Habré. *Harvard Human Rights Journal*. Vol. 16. 2003. Páginas 147 – 177.
143. SIBRIAN, Anabella. “Más CICIG, el tiempo que sea necesario.” Fundación para el debido proceso.” 19 de mayo de 2015. <https://dplfblog.com/2015/05/19/mas-cicig-el-tiempo-que-sea-necesario/>
144. SINGH, Hansdeep. Crimes against humanity draft bill of 2009: The International implications of addressing impunity through national legislation. *ILSA Journal of International & Comparative Law*. Vol 17:1 2010 – 2011, páginas 23 a 42. <https://www.ilsa.org/publications/journal-of-intl-a-comparative-law>
145. SILVA SÁNCHEZ, Jesús – María. 2011. “¿Nullum Crimen sine poena? Sobre las doctrinas penales de la “Lucha contra la impunidad” y del “Derecho de la víctima al castigo del Autor.” *Derecho en Sociedad*”, En: Revista electrónica de la Facultad de Derecho, ULACIT – Primera Edición. Costa Rica. Páginas 149 a 172. http://www.ulacit.ac.cr/files/careers/86_revistaderechoensociedadfdulacitno1.pdf
146. SIVAKUMARAN, Sandesh. “War Crimes before the Special Court for Sierra Leone. Child Soldiers, Hostages, Peacekeepers and Collective Punishments.” *Journal of International Criminal Justice*. 8, Oxford University Press. 2010 Páginas: 1009 – 1034.
147. SOARES LIPPI, Camila. *Tribunales Penales Internacionales Ad Hoc del Post - Guerra Fría: Cambiando paradigmas en el tratamiento de cuestiones de género*. Revista Astrolabio. Nueva Época. No. 7. 2011. Páginas 266 – 283.
- 148.
149. SOLARI Yrigoyen, Hipólito. “Las reservas a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Estos tratados son de naturaleza distinta al resto de los acuerdos internacionales, por lo que las resevas deben ser más limitadas.” *Agenda Internacional* No.8, páginas 72 a 85. <http://www.agendainternacional.com/numerosAnteriores/n8/0803.pdf>
150. COMISIÓN Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Resources. . Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://www.achpr.org/resources>
151. TATTENBACH Yglesias, Cristián. *Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos de 1969*. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2454/32.pdf>
152. THORP, Arabella. *Universal Jurisdiction*. Library House of Commons. London, 2010. 12 pages.
153. THE REDRESSTRUST. *Universal Jurisdiction in The European Union*. Country Studies. The Redress Trust publication. London, S.A. 39 páginas.
154. TAWFIQ LADAN, Muhammed. *Universal Jurisdiction and Prosecution of International Crimes: Problems and Challenges*. Nigerian Institute of Advanced Legal Studies Lagos, 2009. 21 páginas.
155. TAYLER, Wilder, 1996. “*La Problemática de la Impunidad y su tratamiento en las Naciones Unidas – Notas para la Reflexión*”-. en *Revista IIDH*, Vol. 24. San José, Costa Rica. Página. 188.
156. TORO Ibacache, Lenissett. 2018. *La Política de Seguridad Japonesa. Historia y Teoría*. Ariadna Ediciones, Primera Edición, Santiago de Chile, Consulta: 10 de diciembre de 2020. ISBN: 9791036524608. Disponible en: <https://books.openedition.org/ariadnaediciones/1377>

157. TOJO, Liliana y Pilar Elizalde. *Capítulo VII. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos Artículo 43*. STEINER Christian y Marie-Christine Fuchs (editores) Patricia Uribe Granados.
158. TORREGROSA JIMÉNEZ, Rodolfo. Algunas reflexiones sobre la justicia transicional en Colombia desde el derecho de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. *Revista Diálogos de Saberes*. No. 35, Julio – diciembre 2011. Páginas 45 – 55. Bogotá, Colombia.
159. TWIGHT, Charlotte. Sovereign Impunity. *The Independent Review*; Spring 2008. Vol. 12. Páginas: 485 a 517.
160. TYLER, Wilder. La problemática de la Impunidad y su tratamiento en las Naciones Unidas – Notas para la reflexión – *Revista IIDH*. No 24, 1996. Páginas 185 – 213.
161. UNITED NATIONS. The scope and application of the principle of universal jurisdiction. A/66/93 New York, 2011. 47 páginas.
162. UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. The "Princeton Principles on Universal Jurisdiction Program in Law and Public Affairs. Princeton University. New Jersey, 2001. 67 páginas.
163. UNIVERSAL Rights Group, Latin America. *Strengthening Policy Through Dialogue*. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en:
<https://www.universal-rights.org/lac/guias-basicas-de-derechos-humanos/una-guia-basica-a-los-sistema-regionales-de-derechos-humanos/>
164. UNIVERSITY of Pittsburgh. "Crime and Impunity in Guatemala." Matthew B. Ridgway Center for International Security Studies. Pittsburgh, Enero de 2010.
<http://research.ridgway.pitt.edu/blog/2010/01/30/crime-and-impunity-in-guatemala/>
165. VAN DER WILT, Harmer. 2014. The Legacy of the Special Tribunal for Lebanon. En: ALAMUDDIN, Amal, Nidal Jurdi , and David Tolbert. Óp.Cit. Página: 268
166. VELASCO, Natalie Jo. The Guatemalan Femicide: an Epidemic of Impunity. *Law and Business Review of the Americas*; Spring 2008. Vol. 14. Páginas: 397 a 423.
167. VIÑUALES, Jorge E. Impunity: Elements for an Empirical Concept. *Law and Inequality*. Vol 25:115 2007. Páginas 115 a 145.
168. WANHONG, Zhang. 2005-2006. *From Nuremberg to Tokyo: some reflections on the Tokyo Trial (on the sixtieth anniversary of the Nuremberg Trials)*. En: *Cardozo Law Review*. Vol: 27. Página: 1676. Consulta 10 de diciembre de 2020. Sin ISBN. Disponible en:
<https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/cdozo27&div=72&id=&page=>
169. WATTS, Sean. Reciprocity and the Law of War. *Harvard International Law Journal*. Vol 50. Number 2, Summer 2009. Páginas 365 – 415.
170. WITTE, Eric y Clair Duffy. 2018. *Modelos de Justicia: Manual para el Diseño de Mecanismos de Responsabilización Penal para Crímenes Graves*. Open Society Justice Initiative. Página 151. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://www.justiceinitiative.org/uploads/ee303f45-950e-437e-b54a-893d408ae867/options-justice-esp-anexo1-africa-20180501.pdf>
171. WHITING, Alex. In International Criminal Prosecution, Justice Delayed Can Be Justice Delivered. *Harvard International Law Journal*. Vol 50. Number 2, Summer 2009. Páginas 323 – 364.

172. WIGGLESWORTH, Gillian. The End of Impunity? Lessons from Sierra Leone. *International Affairs* (Royal Institute of International Affairs 1944), Vol.84, No.4. Julio 2008. Páginas: 809 a 827.
173. WIRKEN, Sander. "The Guatemalan Genocide and the International Commission Against Impunity in Guatemala – Justice at Last?."
174. WOLA. "La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Un estudio de investigación de WOLA sobre la experiencia de la CICIG. Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Washington, D.C. 2015. 37 páginas.
175. WOLA, 2019. *Incidencia a favor de los derechos Humanos en las Américas, Los hechos: El legado de la CICIG en la lucha contra la corrupción en Guatemala*, Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://www.wola.org/es/analisis/los-hechos-el-legado-de-la-cicig-en-la-lucha-contra-la-corrupcion-en-guatemala/>
176. WOLA, Advocacy for Human Rights in the Americas, *Estudio de investigación de WOLA sobre la experiencia de la CICIG*, Wasgington DC.
177. ZAPATERO, Pablo. Acción Judicial Lateral en la lucha contra la impunidad. *Revista Española de Derecho Internacional*, Vol. 60 No 1. 2008 Páginas 303 – 307.
178. ZENERE, Yanina Ruth. Inmunidad de Jurisdicción en la CIJ: República Federal de Alemania V. República de Italia. Sin datos de publicación. 2009. 8 páginas.
179. ZOGLIN, Katie. The Future of War Crimes Prosecutions in the Former Yugoslavia: Accountability or Junk Justice? *Human Rights Quarterly*, 2005. The Johns Hopkins University Press. Páginas 41 – 77.
180. ZECHMEISTER, Elizabeth J y Azpru Dinorah, 2017. *¿Cuál es la opinión pública en relación a la corrupción, la CICIG, el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad en Guatemala?*, Guatemala, Página: 1. Sin ISBN.

C. Instrumentos Internacionales.

Sistema Universal

1. Carta de las Naciones Unidas
2. AMNISTÍA Internacional. 2017. *Malabo Protocol: legal and institutional implications of the merged and expanded African Court snapshots*. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR0161372017ENGLISH.PDF>
1. CORTE Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. *Establishment of the Court*. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://en.african-court.org/index.php/about-us/establishment>
2. Convención de la Haya de 1907 para la Resolución Pacífica de Controversias Internacionales Preámbulo
3. Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)
4. Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.
5. El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos. Consejo de Seguridad. Naciones Unidas. 3 de agosto de 2004.

6. UNIÓN Africana. *Protocolo de Reforma del Protocolo del Estatuto de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos*.
7. Los Principios de Bruselas contra la impunidad y por la justicia internacional. Bruselas, 11 al 13 de marzo 2002. 12 páginas.
8. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. *Consejo de Seguridad: Resolución 808/93*.
9. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. *Consejo de Seguridad: Resolución 955/94*.
10. Red-DESC. *Mecanismos de la ONU de aplicación de los derechos humanos*. En red disponible en: <https://www.escri-net.org/es/recursos/mecanismos-onu-aplicacion-derechos-humanos>

Sistema Interamericano

1. Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
2. Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
3. Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
4. Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
5. ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, 2016. “*Convenio entre el Gobierno de la República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para el Establecimiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras*”, de 19 de enero de 2016.
6. ORGANIZACIÓN de Estado Americano. *Tratados Multilaterales: Convención Americana sobre Derecho Humanos, Estado de Firmas y Ratificaciones*. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm

D. Ponencias

1. APDHE. “La Justicia Universal en el derecho internacional: mesa redonda de expertos.” APDHE. Madrid. S.A. 37 páginas.
2. CANO, Pablo Ezequiel. Corte Penal Internacional y principio de jurisdicción universal armonías y desarmonías con vistas al futuro del Derecho Internacional Penal. S.F. 11 páginas.
3. HUSTINS, Nancy – Louise E. International Justice, Accountability and Reconciliation: Diminishing Impunity in International Law. Background paper for the International Society for the Reform of Criminal Law 18th International Conference 'Keeping Justice Systems Just and Accountable: A Principled Approach in Challenging Times, Montreal 8-12 August 2004. 41 páginas.
4. RAVENNA, Horacio. Acceso a la Justicia e Impunidad. En: Taller Regional sobre democracia, derechos humanos y estado de derecho, (San José de Costa Rica. Septiembre de 2005). 2005. 20 páginas.
5. SALVIOLI, Fabián. 2004. “*El derecho internacional de la persona humana frente a la impunidad de hecho o de derecho: criterios a considerar en procesos de justicia transicional*”. Fundación Social. Bogotá, Colombia.
6. SALVIOLI, Fabián, 1999.: “¿La justicia que viene? Un análisis de la Conferencia de las Naciones Unidas para el establecimiento de una Corte

- Penal Internacional”, en *Ágora*, revista de Ciencias Sociales 2, pp. 173 - 192 Ed. Centro de Estudios Políticos y Sociales, Universidad de Valencia, España.
7. Seminario IMPUNIDAD Y SUS EFECTOS EN LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS. Declaración de Santiago. Santiago de Chile, diciembre 1996.
 8. UNIVERSIDAD de la Sábana. 2019. *Guía Académica Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente. Model United Nations*, Universidad de la Sábana. Página: 17. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Programas/Documentos_Pregado/Ciencias Politicas/Munus_gui_as_academicas/Tribunal Penal Militar para el Lejano Oriente .pdf
 9. VENTURA ROBLES, Manuel E. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de acceso a la justicia e impunidad. En: Taller Regional sobre Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho, (San Jose, Costa Rica. 10 de agosto de 2005). 2005. 25 páginas.
 10. UPRIMNY, Rodrigo. GUZMAN, Diana Esther. 2007. *“Experiencias exitosas de lucha contra la impunidad”*. Documento Borrador. Santo Domingo. Centro de Estudios de derecho, Justicia y Sociedad. 14 páginas

E. Informes.

1. CIDH, Informe No. 1/96, Caso 10.559, Chumbivilcas (Perú), 1 de marzo de 1996.
2. CIDH, Informe 55/97, Caso 11.137, Juan Carlos Abella y otros (Argentina), párr. 412. Sobre el mismo tema, cfr.: Informe N° 52/97, Caso 11.218, Arges Sequeira Mangas (Nicaragua).
3. COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA. 2012. *“Los jueces de la impunidad”*. Informe Inédito. Guatemala, noviembre 2012. 93 páginas. Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
4. Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, 2019. Duodécimo informe de labores, Juntos lo hicimos, Guatemala, Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: https://www.cicig.org/wp-content/uploads/2019/08/InformeLegadoJusticia_SI.pdf
5. COMISIÓN Internacional Contra la Impunidad en Guatemala-CICIG, 2015. *Informe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ocasión de su octavo año de labores*, Guatemala, Pág. 10. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: https://www.cicig.org/uploads/documents/2015/COM_085_20151113_VIII.pdf,
6. COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS. 2008. *“Impunidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos”*. Guía para Profesionales No.3 Ginebra. Página 218.
7. COORDINADORA para la Modernización del Sector Justicia, 2015. Análisis y evaluación de resultados Obtenidos por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Decreto 52-2010, 2015. Páginas: 45
8. JAHANGIR, Asma. 2003. *“Informe de la Relatora Especial, presentado en cumplimiento de la resolución 2002/36 de la Comisión de Derechos Humanos.”* E/CN.4/2003/3 de 13 de enero de 2003, párr. 73.

9. JOINET, Louis. 1997. *“La administración de justicia y los derechos humanos de los detenidos Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos)”* preparado por el Sr. L. Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión Conjunto de principios para la protección y la promoción de los Derechos Humanos, para la lucha contra la impunidad. Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías 49º período de sesiones Tema 9 del programa E/CN.4/Sub. 2/1997/20/Rev.1
10. ORENTLICHER, Diane. 2004 *“Estudio independiente, con inclusión de recomendaciones, sobre las mejores prácticas, para ayuda a los estados a reforzar su capacidad nacional con miras a combatir todos los aspectos de la impunidad”*. ONU E/CN. 88 páginas.
11. ORENTLICHER, Diane. 2005. *“Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”*. ONU E/CN.4. 102 páginas.
12. ORENTLICHER, Diane. 2018 Some kind of justice. The ICTY’s Impact in Bosnia and Serbia. S.E. Nueva York: Oxford University Press. Página: 3. ISBN: 9780190882273.
13. UNITED Nations, General Assembly. “Annual report o the United Nations High Commissioner for Human Rights. Addendum. Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the activities of his office in Guatemala” A/HRC/28/3/Add.1 12 de enero de 2015. 21 páginas.

F. Páginas de Internet

1. COMISIÓN Africana de Derechos Humanos <http://www.achpr.org/>
2. COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos www.cidh.org
3. COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos. Informa Anual 2017 – Capítulo VI Desarrollo Institucional. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2017/docs/IA2017cap.6-es.pdf>
4. COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos. *Informe anual CIDH 1979-1980: Observaciones que la comisión considere apropiadas respecto de las comunicaciones que ha recibido*, Página 01. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <http://www.cidh.org/casos/79.80sp.htm>
5. COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos. *Informe Anual CIDH 1989-1990 Resoluciones relativas a casos individuales*; Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <http://www.cidh.org/casos/89.90sp.htm>.
6. COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos, *Informe anual 1990-1991, Informes relativos a casos individuales*, Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <http://www.cidh.org/casos/90.91sp.htm>.
7. COMISIÓN Internacional Contra la Impunidad en Guatemala www.cicig.org
8. ORGANIZACIÓN de Estados Americanos. *Convención Americana sobre Derechos Humanos*. Disponible en: <https://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Basicos2a.htm>
9. COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos, *Estadísticas de soluciones amistosas del año 2019*, Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/fondos.asp>

10. COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos. Informe anual del año 2019. Página 64. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2019/docs/IA2019cap2-es.pdf>.
11. COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos. *Estadísticas relativa a casos enviados a la corte en el año*. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/estadisticas.html>
12. CONSEJO de Europa. . <http://www.echr.coe.int>
13. CORTE Interamericana de Derechos Humanos www.corteidh.or.cr
14. CORTE Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual 2019. Página 152. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/informe2019/espanol.pdf>
15. CORTE Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual 2019, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Página 39,107 y 118. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/informe2019/espanol.pdf?fbclid=IwAR0nEAXcC9deEZfzNkxbdI3WIXbMEwT1hYz0v1nCVfhCn1uxbARndUqpfbY>
16. CORTE Penal Internacional <http://www.icc-cpi.int/Pages/default.aspx>
17. FIAN International. 2011. “*Stop Impunity, Hunger on Trial*”. http://www.stop-impunity.org/?page_id=25
18. MISIÓN de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo <http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unmik/>
19. MISIÓN Integrada de las Naciones Unidas en Timor-Leste <http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/past/unmit/background.shtml>
20. OFICINA del Alto Comisionado para los Derechos Humanos <http://www.ohchr.org/SP/Pages/WelcomePage.aspx>
21. ORGANIZACIÓN de las Naciones Unidas www.un.org
22. REAL Academia Española. www.rae.es
23. TRIAL <http://www.trial-ch.org/es/recursos/tribunales/tribunales-mixtos.html>
24. TRIBUNAL Especial para Líbano <http://www.stl-tsl.org/en/>
25. TRIBUNAL Especial para Sierra Leona <http://www.sc-sl.org/>
26. TRIBUNAL Europeo de Derechos Humanos <http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=>
27. TRIBUNAL Europeo de Derechos Humanos, *Preguntas y respuestas frecuentes*, Página: 4. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: https://www.echr.coe.int/Documents/50Questions_ENG.pdf
28. TRIBUNAL Europeo de Derechos Humanos, *Encuesta de 40 años de actividad 1959-1998*, Página: 126-127. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: https://www.echr.coe.int/Documents/Survey_19591998_BIL.pdf
29. TRIBUNAL Europeo de Derechos Humanos, *Informe anual de 2001*, Página: 82. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2001_ENG.pdf
30. TRIBUNAL Europeo de Derechos Humanos, *Informe anual de 2010*, Página 65-67. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2010_ENG.pdf
31. TRIBUNAL Europeo de Derechos Humanos, *Visión general del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 1959-2019*, Página: 4. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: https://www.echr.coe.int/Documents/Overview_19592019_ENG.pdf

32. TRIBUNAL Europeo de Derechos Humanos, Hechos y cifras 2019, Página 04-07. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: https://www.echr.coe.int/Documents/Facts_Figures_2019_ENG.pdf
33. TRIBUNAL Penal Internacional para La Ex Yugoslavia <http://www.icty.org/>
34. TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda <http://www.unict.org/>

G. Tesis

1. EKMAN, Mikael. Special Rules for Special Courts? The United Nations International Criminal Courts from a Human Rights Perspective. Faculty of Law, University of Lund. Spring 2008. 151 páginas.
2. HIDALGO Morales, Mariela Eulalia. "Análisis Jurídico de la CICIG y su interferencia en el Derecho Penal Guatemalteco." Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Guatemala, mayo 2008. 112 páginas.
3. MORAN Aldana y Viviana Belia. 2012. *Sistema Africano de protección de los Derechos Humanos*. Trabajo de tesis para la obtención del grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos profesionales de Abogada y Notaria. Universidad Rafael Landívar. Guatemala. Página 12. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <http://biblio3.url.edu.gt/Tesis/2012/07/01/MORAN-Belia.pdf>
4. PORTILLA BENAVIDES, Ana Cristina. Comisiones de la Verdad en América Latina: un instrumento necesario pero no suficiente. Universidad Externado de Colombia. Facultad de Derecho. Colombia. 2003. 120 páginas.
5. RINCON Sabogal, César Augusto, *Administración de Justicia en la Corte Penal Internacional desafíos, oportunidades y sistemas alternativos*, Universidad de Granada, pág. 7.
6. RIVERA AGUILAR, Ennio Elvidio. 2003. "¿Necesidad o Impunidad? Las leyes de amnistía en los procesos de paz, de los conflictos de carácter no internacional". Universidad Externado de Colombia. Facultad de Derecho. Colombia. 120 páginas. ISBN: 978-92-1-354115-9
7. SÁNCHEZ Gómez, Silvia Haydee. 2015. *Los Estados y la denuncia a la Convención Americana de Derechos Humanos: Los casos de Trinidad y Tobago, Perú y Venezuela*. Tesina para obtener el grado académico de: Máster en Derecho Público. Universidad Carlos III de Madrid. Madrid, Página 135. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://core.ac.uk/download/pdf/44310705.pdf>
8. TAKEDA, Kayoko. 2007. *Sociopolitical Aspects of Interpreting at the International Military Tribunal for the Far East (1946-1948)* Universitat Rovira i Virgili. Monterey Institute of International Studies. España, Página: 47. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8769/Thesis.pdf?sequence=1Sociopolitical>
9. VAN Hemmen, Janneke. "Influence of NGOs in the Establishment Process of the International Commission Against Impunity in Post – Conflict Guatemala." Utrecht University Repository. Utrecht, 2012. <http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/263821>

H. Jurisprudencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos

1. Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4
2. Corte IDH. Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 8 de diciembre de 1995. Serie C No. 22
3. Corte IDH. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37
4. Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91
5. Corte IDH. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103
6. Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Versión en francés. Serie C No. 154
7. Corte IDH. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 155
8. Corte IDH. Caso Vereda La Esperanza Vs. Colombia. *Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 31 de agosto de 2017.
9. Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192
10. Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221
11. COMISIÓN Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Página Oficial de la CICIG, Caso Rosenberg, Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://www.cicig.org/listado-noticias-2015/confirman-participacion-de-la-cicig-en-el-caso-rosenberg/>

Prensa

1. VELÁSQUEZ, Doménica. *Encuesta Libre: Cicig se gana confianza y aprobación de los guatemaltecos*. Consulta: 10 de diciembre de 2020, Disponible de: <https://www.prensalibre.com/guatemala/decision-libre-2015/cicig-se-gana-confianza-y-aprobacion-de-los-guatemaltecos> (Ya no aparece la noticia para la fecha)
2. OFFICE of the Historian. *The Nuremberg Trial and the Tokyo War Crimes Trials (1945–1948)*. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://history.state.gov/milestones/1945-1952/nuremberg>
3. Diario “La tribuna” 2016. *MACCIH es presentada por el gobierno de Honduras*, de fecha 22 de febrero de 2016, Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://web.archive.org/web/20180303110750/http://www.latribuna.hn/2016/02/22/maccih-se-instala-oficialmente-en-honduras/>
4. PÁGINA web de la Organización de Estados Americanos, 2019. *Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Comunicado de prensa de fecha 24 de mayo de 2019*, Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en:

- https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-036/19
5. Diario Estadao. Brasília, Edición de 1 de septiembre de 2017. Consulta: 10 de diciembre de 2020, Disponible en: <https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,orgao-da-onu-propoe-tratar-corrupcao-como-crimes-contra-a-humanidade,70001961296>
 6. Diario “La Hora” fundado en 1920, TSE: Ataques iniciaron a partir de la firma del convenio con CICIG, de fecha 02/07/2019, Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://lahora.gt/tse-ataques-iniciaron-a-partir-de-la-firma-del-convenio-con-cicig/>
 7. BARRETO, Bill, Plaza Pública, 2015. *El clamor de una manifestación #REnunciaYa*, Guatemala, Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://www.plazapublica.com.gt/content/el-clamor-de-una-manifestacion-renunciaya>
 8. ROJAS. A, De Leon I. y Barrios A., Prensa Libre, 2015. *Miles de guatemaltecos manifiestan durante más de 18 horas contra corruptos*, Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/manifestacion-guatemala-renuncia-30mgt/>
 9. GARCÍA, Jordi, Nomada, 2018. *Jimmy, Baldizón y estos mega-empresarios organizaron el lobby contra Todd y la CICIG (parte 1)*, Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/jimmy-baldizon-y-estos-mega-empresarios-organizaron-el-lobby-contra-todd-y-la-cicig-parte-1/>
 10. OPALÍN, León. *La corrupción en América latina y el Caribe 2019*, El financiero Mx, México, Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/leon-opalin/la-corrupcion-en-america-latina-y-el-caribe-2019>,
 11. ARRAZOLA, Carlos, 2016. *La MACCIH es el modelo de Honduras; no somos una copia de la CICIG*, Plaza Pública 09 de septiembre de 2016, Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://www.plazapublica.com.gt/content/la-maccih-es-el-modelo-de-honduras-no-somos-una-copia-de-la-cicig>
 12. DIARIO El Heraldo, 2016. *716 millones será el presupuesto de la Maccih*, 18 de enero de 2016, Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://www.elheraldo.hn/pais/921133-466/de-l-716-millones-ser%C3%A1-el-presupuesto-de-la-maccih>
 13. AFP, Noticiero, El Periódico. 2020. *Honduras responde a EEUU que es decisión “soberana” renovar o no a la MACCIH*, de fecha 4 de julio de 2020. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://elperiodico.com.gt/mundo/2019/12/10/honduras-responde-a-eeuu-que-es-decision-soberana-renovar-o-no-a-la-maccih/>
 14. UNIDAD Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público de Honduras, Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-036/19
 15. NUÑO Nuño, Mónica Elizabeth. Bibliografía. Becerra Ramírez, Manuel, 2015. *“El control de la aplicación del derecho internacional. En el marco del Estado de derecho”*. En. Der. Comp. vol.48 no.142 México ene./abr. Consulta: 10 de diciembre de 2020, Disponible en:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332015000100015

16. SIN DATOS Página: 39. Consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3606/6.pdf>

Revistas:

1. AÑAÑOS BEDRIÑA, Karen 2016. *Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos: Análisis de los Informes del Comité de Derechos Humanos en Latinoamérica*. Revista de Paz y Conflictos. Vol. 9 - Nº 1 pp. 261-278. [Consulta 10 de diciembre] ISSN:1988-7221 En red disponible en: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qXfZk7kryWkJ:revistaseug.ugr.es/index.php/revpaz/article/viewFile/3984/4845+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=gt>
2. PARRA DUSSAN, Carlos. (2010). *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: antecedentes y sus nuevos enfoques*, 16 International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, 347-380 [Consulta: Enero 3, 2021] ISSN: 1692-8156 En red disponible en: <http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/internationallaw/article/view/13841/11138>
3. INSTITUT de Drets Humans de Catalunya. S.F. *Kosovo. Serie Conflictos Olvidados. Institut de Drets Humans de Catalunya.Barcelona*. S.E. Página: 33 ISSN 2013-4223 Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/27135.pdf> [Consulta: 10 de diciembre de 2020]

ANEXOS

ANEXO I

Instrumentos Internacionales de la Lucha contra la Impunidad

Siendo el objetivo del presente trabajo determinar la eficacia de la lucha contra la impunidad, es necesario identificar los instrumentos normativos en los que esta se fundamenta desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Internacional Penal y el Derecho Penal Internacional, instrumentos diseñados para combatir la impunidad y los que para su mejor comprensión se clasificarán de la siguiente manera:

- a. Instrumentos que abordan directamente la palabra impunidad y que tienen como objetivo su lucha.
- b. Instrumentos que contienen como aspiración la justicia.
- c. Instrumentos que tienen como objetivo la justicia y un llamamiento al desarrollo de la debida diligencia en las investigaciones para no dejar en el olvido las violaciones a los derechos humanos. Entendiéndose que, si se busca la justicia, se está luchando contra la impunidad, por ser la impunidad la antítesis de la justicia.

I. Instrumentos del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos.

Desde el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos fueron creados un importante grupo de instrumentos internacionales que consagran explícita o implícitamente normas y principios para combatir la impunidad. Algunos reconocen el derecho de las víctimas a recurrir a las instituciones y organismos del Estado, en busca de justicia en caso de violaciones a los derechos humanos.

Entre estos instrumentos¹ se encuentran, declaraciones convenios o tratados, principios. En el caso de los tratados internacionales, algunos cuentan con

¹ Estos dos Pactos Internacionales de derechos humanos constituyen la piedra angular de una larga serie de tratados internacionalmente vinculantes que abarcan múltiples cuestiones en la esfera de los derechos humanos. Los tratados definen derechos humanos y libertades fundamentales y fijan normas básicas que han servido de inspiración a más de 100 convenios, declaraciones, conjuntos de normas y principios en materia de derechos humanos de alcance

organismos² de control sobre la forma en que los Estados ponen en práctica las obligaciones que asumen al ratificar los instrumentos.

A. Instrumentos que abordan directamente la palabra impunidad y que tienen como objetivo su lucha.

1. Declaración y Programa de Acción de Viena
 2. Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación, fundadas en la religión o las convicciones
 3. Principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad
 4. Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad Doc. ONU E/CN.4/2005/102/Add.1
 5. Resolución sobre impunidad, número 2005/81 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Doc. ONU E/CN.4/RES/2005/81
 6. Resolución sobre el derecho a la verdad, número 2005/66 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas Doc. ONU E/CN.4/RES/2005/66
 7. Las directrices de Joinet revisadas Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1
 8. Resolución sobre impunidad, número 2003/72 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas Doc. ONU E/CN.4/RES/2003/72
 9. El estudio de Orentlicher 2004, Doc. ONU E/CN.4/2004/88
 10. Resolución sobre impunidad, número 2004/72 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Doc. ONU E/CN.4/RES/2004/72
- 2.5. El informe de Orentlicher 2005

internacional y regional. OACNUDH. *Derechos Humanos. Derechos Civiles y Políticos. El Comité de Derechos Humanos*. Folleto informativo No. 15. (REV1). S.A. Página 1.

² Un órgano o comité de supervisión independiente establecido por el tratado mismo, vigila la aplicación del tratado por los Estados Partes. Esos comités están integrados por expertos independientes elegidos por los Estados que son Partes en el tratado, cuya imparcialidad, independencia y experiencia en materia de derechos humanos los faculta para evaluar los progresos realizados por los Estados Partes en relación con las normas establecidas en el tratado en cuestión. *Ídem*. Página 2.

B. Instrumentos que contienen como aspiración la justicia:

1. Declaración Universal de Derechos Humanos
2. Declaración del Milenio
3. Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
4. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
5. Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión
6. Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
7. Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
8. Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad
9. Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz
10. Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos

C. Instrumentos de lucha contra la impunidad:

1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
3. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
4. Declaración sobre orientación sexual e identidad de género
5. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
6. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer
7. Convención sobre los Derechos del Niño
8. Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad
9. Declaración de los derechos del Retrasado Mental
10. Declaración de los Derechos de los Impedidos
11. La protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental

12. Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad
13. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
14. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
15. Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder
16. Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura
17. Principios básicos sobre la Función de los Abogados
18. Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias
19. Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas
20. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones
21. Resolución sobre Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los derechos humanos
22. Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos
23. Declaración de Compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA
24. Convenio sobre el Derecho de Sindicalización y Negociación Colectiva
25. Convención sobre la Esclavitud fue promovida por la Sociedad de Naciones
26. Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares
27. Convención sobre el Estatuto de los Apátridas
28. Convención relacionada con el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas

II. Instrumentos de Derecho Internacional Humanitario

A. Instrumentos de lucha contra la impunidad:

1. Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra
2. Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra
3. Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I)
4. Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin carácter Internacional (Protocolo II)

III. Instrumentos de Derecho Penal Internacional

Se puede afirmar que: *“International criminal law provides a framework for resolving the paradox presented by the dual goals of accountability and political transition/reconciliation. It does not offer firm guidance on every aspect of the problem. Rather, it helps define the boundaries of permissible impunity. To be sure,”*³ este marco se da desde los diferentes instrumentos internacionales, que dieron paso a la creación de Tribunales especiales y la creación de la Corte Penal Internacional con el objetivo específico de juzgar delitos relacionados con esta materia.

Derivado de la creación tribunales a raíz de la comisión de diversos delitos⁴ en distintos momentos que marcaron la historia de la humanidad, surge el interés de la Comunidad Internacional de establecer tribunales penales Internacionales con jurisdicción sobre determinados delitos para asegurar la justicia y no repetición.

³ BURKE- WHITE, William *Protecting the Minority: A Place for Impunity? An Illustrated Survey of Amnesty Legislation, Its Conformity with International Legal Obligations, and Its Potential as a Tool for Minority - Majority Reconciliation.* Journal on Europolitics and Minority Issues in Europe. Germany, September 2000. página 49.

⁴ La naturaleza de los delitos cometidos en conjunto con los bienes jurídicos afectados y el alcance de los daños ocasionados hacen que estos tribunales cumplan un papel fundamental en la exaltación de la esencia humana y la obtención de justicia para la humanidad.

Por medio de la creación de los Tribunales Militares Internacionales, los Tribunales Ad-hoc, los Tribunales especiales y la Corte Penal Internacional, la Comunidad Internacional manifestó la no tolerancia hacia la impunidad, desestimando el argumento político a su favor que concebía la impunidad como un mal necesario para la transición política hacia la democracia.

Finalizada la segunda guerra se dan pasos significativos en la materia, con el establecimiento y puesta en funcionamiento de los Tribunales Militares Internacionales de Núremberg y para el Extremo Oriente⁵, en 1945 y 1946 respectivamente, con el fin de enjuiciar los crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Estos Tribunales constituyen un precedente importante, en la lucha contra la impunidad, siendo las únicas instancias internacionales de juzgamiento penal de responsables de crímenes contra la humanidad que existieron hasta el fin de la guerra fría, pese a que en ese período se cometieron numerosos atropellos en contra de la dignidad humana. Situación derivada por la contienda internacional entre Estados Unidos con la ex Unión Soviética, en la Organización de las Naciones Unidas, lo que representó un obstáculo insalvable a cualquier avance en la materia, por la acción del poder de veto de los dos referentes de ambos bloques dentro del Consejo de Seguridad⁶, y la oposición manifiesta de los mismos para que se avanzara en la creación del establecimiento de una corte penal internacional de carácter permanente.

Es así como la convergencia de las diferentes vertientes de protección de los derechos humanos se ha plasmado desde los orígenes de los procesos llevados a cabo en el plano internacional, para juzgar a las personas responsables de los más graves crímenes contra la Comunidad Internacional; así, el tratamiento y

⁵ Tribunales creados ad hoc y de modo unilateral, (la justicia de los vencedores) y con flagrante vulneración de los principios elementales del derecho sustantivo y procesal penal, fundamentalmente, el principio de legalidad de los delitos y de las penas, así como que la instrucción y enjuiciamiento fueron llevados a cabo por el mismo órgano judicial o la cuestionable imparcialidad de los jueces.

Estos juicios fueron seguidos de diferentes tribunales de guerra formados por los aliados en sus respectivas zonas de ocupación en Alemania, y varios países de Europa juzgaron a nazis y nacionales que colaboraron con aquellos.

⁶ Según la Carta de las Naciones Unidas, además de Estados Unidos y la Unión Soviética los otros Estados que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y gozan del derecho de veto son Francia, el Reino Unido y China. A la disolución de la Unión Soviética, la banca permanente que ésta ocupara fue atribuida a la Federación Rusa como sucesora.

aplicación por las cortes internacionales es idéntico frente a violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos en tiempo de paz o de conflicto armado (crímenes de *lesa* humanidad) y de infracciones graves al derecho humanitario (crímenes de guerra).

Ya disuelta la ex Unión Soviética, se dio lugar a la aprobación de las resoluciones del Consejo de Seguridad, por las cuales se crearon los Tribunales penales para la Ex Yugoslavia⁷ y para Ruanda⁸. La nueva dirección tomada en el Consejo de Seguridad con esta postura fue de considerar indispensable el juzgamiento de los responsables de los crímenes más atroces contra la dignidad de las personas, como parte integrante del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales⁹.

Así se estableció un marco propicio para retomar las negociaciones que finalizaron con la adopción, luego de una conferencia internacional¹⁰, del Estatuto de Roma por el cual se establece la Corte Penal Internacional, una institución judicial de carácter permanente y con aplicación en todos los Estados que la ratifiquen.

En conclusión, la evolución más reciente del Derecho Internacional ha tenido una de sus expresiones más avanzadas en la profundización de los mecanismos de aplicación del Derecho Penal Internacional como fórmula jurídica de la lucha contra la impunidad. Una de las grandes preocupaciones de las Naciones Unidas ha sido la persecución y castigo de los responsables de graves y masivas violaciones de los derechos humanos y de los principios básicos del Derechos Internacional Humanitario. Para lo cual ha decidido: ¹¹

⁷ ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. *Consejo de Seguridad*: Resolución 808/93.

⁸ ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. *Consejo de Seguridad*: Resolución 955/94.

⁹ El Consejo de Seguridad ha creado estos dos tribunales *ad hoc* en el marco de la competencia que le es otorgada por el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas: "Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión".

¹⁰ Para un análisis del proceso de la conferencia y del contenido principal del Estatuto de Roma ver SALVIOLI, Fabián: "¿La justicia que viene? Un análisis de la Conferencia de las Naciones Unidas para el establecimiento de una Corte Penal Internacional", en *Ágora*, revista de Ciencias Sociales 2, pp. 173 - 192 Ed. Centro de Estudios Políticos y Sociales, Universidad de Valencia, España, 1999.

¹¹ GONZÁLEZ VEGA, Ignacio. Breve diagnóstico de la jurisdicción penal universal en su respuesta a la impunidad de los crímenes internacionales. *Jueces para la democracia*, N° 67, 2010, págs. 119-131.

1. Expandir el ámbito de la jurisdicción penal de los Estados respecto de los delitos contra la Comunidad Internacional y el derecho de gentes, ampliando los supuestos en lo que se reconoce el criterio de universalidad de la jurisdicción penal de los Estados.
2. Crear Tribunales Penales Internacionales, vía utilizada por el Consejo de Seguridad para crear órganos *ad hoc* y más tarde, con un carácter permanente y universal, con la aprobación del Estatuto de Roma.
3. Buscar nuevas fórmulas jurisdiccionales para encarar la represión de los crímenes cometidos con la aparición de tribunales internacionalizados de naturaleza mixta¹² o híbrida¹³.

A. Instrumentos que abordan directamente la palabra impunidad y que tienen como objetivo su lucha.

1. Estatuto de Roma

B. Instrumentos de lucha contra la impunidad:

1. Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio es un instrumento de Naciones Unidas
2. Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad
3. Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra
4. Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid
5. Tribunal Militar Internacional de Núremberg
6. Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente
7. Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia
8. Tribunal Penal Internacional para Ruanda
9. Tribunal Especial para Sierra Leona
10. Salas Especiales de Delitos Graves en Timor – Leste

¹² Los tribunales mixtos se definen como tribunales de composición y jurisdicción mezcladas, que comprenden aspectos tanto nacionales como internacionales, y operan normalmente dentro de la jurisdicción en que se produjeron los delitos.

¹³ Sierra Leona, Camboya, Timor Oriental, Kosovo, Bosnia - Herzegovina, Irak, Líbano, CICIG.

11. Cámara Extraordinaria en la Cortes de Camboya
12. Tribunal Especial para Líbano
13. Sala de Crímenes de Guerra del Tribunal Estatal de Bosnia y Herzegovina
14. Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo
15. El Tribunal Especial Iraquí

IV. Instrumentos del Derecho Internacional Penal

A. Instrumentos que abordan directamente la palabra impunidad y que tienen como objetivo su lucha.

1. Acuerdo entre la Organización De Las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CICIG -
2. Convenio entre el Gobierno de la República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para el establecimiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras – MACCIH -

B. Instrumentos de lucha contra la impunidad:

1. Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional
2. Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños
3. Protocolo de las Naciones Unidas contra el Contrabando de Migrantes por Tierra, Mar y Aire
4. Protocolo de las Naciones Unidas contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego
5. Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción
6. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas

V. Instrumentos que contienen el Principio de Justicia Universal

El principio de justicia universal se define¹⁴ como *“La jurisdicción universal es el principio según el cual a todos los estados les compete llevar ante la Justicia a los perpetradores de ciertos crímenes, independientemente de dónde se cometiera el crimen y la nacionalidad de los responsables y sus víctimas. Es la respuesta que ofrece el Derecho Internacional ante el espectáculo de los tiranos y torturadores encubiertos por la impunidad y las amnistías que han obtenido en sus países”*¹⁵.

La aplicación de la justicia universal desde el enfoque de la responsabilidad penal internacional se considera que es un factor en la reducción de la impunidad para los autores de los crímenes internacionales¹⁶, ya que la lucha contra la impunidad surge del cumplimiento de los deberes del Estado. Este mecanismo permite la persecución penal extra territorial de los delitos, dando una oportunidad de remediar la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, cuando en la jurisdicción interna no se han perseguido de modo

¹⁴ *“La justicia universal no es ni más ni menos que la aplicación por parte de los jueces de cualquier país, ... de lo que es el derecho internacional, como consecuencia de las obligaciones que establece en determinadas materias de hacerlo a todos los Estados y, específicamente, en materia de protección de los derechos humanos frente a los ataques más graves que se hayan podido cometer, no importa donde se hayan cometido estas y si ninguna jurisdicción penal preferente ha actuado previamente.”* APDHE Op. Cit.

El Artículo 1 (1) de Los Principios de Princeton de Justicia Universal la definen como: *“Jurisdicción Universal es la jurisdicción penal basada solamente en la naturaleza del delito, independientemente del lugar donde se cometió el crimen, la nacionalidad del autor del delito denunciado o condenado, la nacionalidad de la víctima, o de cualquier otro tipo de conexión al estado ejercer dicha jurisdicción.”* Article 1 (1). Universal Jurisdiction is criminal jurisdiction based solely on the nature of the crime, without regard to where the crime was committed, the nationality of the alleged or convicted perpetrator, the nationality of the victim, or any other connection to the state exercising such jurisdiction Princeton 2001.

La Asociación Internacional de Derecho citado por Tawfiq Ladan la define como: *“En virtud del principio de jurisdicción universal, un Estado tiene derecho, a iniciar un procedimiento con respecto a determinados delitos graves, con independencia del lugar del crimen, y con independencia de la nacionalidad del autor del hecho. La única conexión entre el delito y el Estado acusador que se requiere es la presencia física del presunto delincuente en la jurisdicción de ese Estado”* Tawfiq 2009 p.16 *“Under the principle of universal jurisdiction, a state is entitled, ore ven required to bring proceedings in respect of certain serious crimes, irrespective of the location of the crime, and irrespective of the nationality of the perpetrator of the victim. The only connection between the crime and the prosecuting state that may be required is the physical presence of the alleged offender within the jurisdiction of that state.”*

¹⁵ BRODY, Reed. *Llanto por la jurisdicción universal* Human Rights Watch. <http://blogs.publico.es/dominiopublico/1370/llanto-por-la-jurisdiccion-universal/> Consulta: 2 de agosto de 2013.

¹⁶ BASSIOUNI, Mahmoud Cherif. *Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives and Contemporary Practice*. Va. J. Intl. L. 81 2001 página 59.

eficaz¹⁷. Rompe con viejos dogmas del Derecho Penal¹⁸, tales como el principio de territorialidad de la ley penal basado en la idea de soberanía estatal, que cede a un nuevo principio de jurisdicción penal internacional. Su objetivo es la lucha contra la impunidad. Tiene su fundamento en la defensa descentralizada de intereses¹⁹ y valores de la Comunidad Internacional en su conjunto, y no en los puramente estatales o particulares, por ello implica un paso más respecto de la mera cooperación entre Estados para la persecución de delitos.

A nivel normativo el principio de jurisdicción universal está contenido en varios instrumentos internacionales los cuales se clasifican dentro de instrumentos de lucha contra la impunidad y entre los que se encuentran:

1. El Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977
2. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes
3. Convención Internacional contra la Toma de Rehenes
4. Convención sobre la Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos
5. Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid
6. Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra
7. Convención relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre
8. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil
9. Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando estos tengan trascendencia internacional.

¹⁷ PERAZA, Luis. *La jurisdicción universal: una realidad en constante construcción* Universidad de La Sabana, Dikaion – Lo Justo. Bogotá 2006. Página 352.

¹⁸ La aceptación de la máxima *aut dedere aut judicare* como máxima internacional *civitas*, es lo que permitió el reconocimiento y aplicación de la jurisdicción universal. La obligación de someter a proceso o extraditar o, cuando correspondiere, castigar a las personas acusadas o condenadas por crímenes internacionales, especialmente crímenes *jus cogens* debido a la naturaleza horrenda y a su impacto negativo en la paz y la seguridad, fue lo que condujo al reconocimiento de la jurisdicción universal como un medio para alcanzar las metas de *aut dedere aut judicare*.

¹⁹ Desde la Segunda Guerra Mundial más de una docena de Estados han investigado, procesado e incluso sentenciado basándose en este principio, o han detenido al presunto autor con el fin de extraditarlo al Estado que lo reclama y que lo procesará. PERAZA, Luis. *Op. Cit.* Página 344.

10. Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas.
11. La Convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios.
12. La Convención de la Haya para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves.
13. La Convención sobre la represión de actos ilícitos contra la navegación marítima.
14. La Convención de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
15. Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas
16. Los Principios de Princeton sobre la Jurisdicción Universal

VI. Instrumentos del Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos.

El sistema europeo para la protección de los derechos humanos, en el ámbito del Consejo de Europa²⁰, es el sistema regional más antiguo²¹. Fue creado en 1950, con la aprobación del *Convenio Europeo de Derechos Humanos*, adoptado por el Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1950 y entró en vigor en 1953, instrumento destinado a la protección de los derechos civiles y políticos. En cuanto a los derechos de carácter socioeconómico, solo fueron introducidos hasta 1961, cuando se adoptó la *Carta Social Europea*²².

²⁰ Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa Occidental vivió un ambiente favorable a la creación de una organización internacional que agrupara a los Estados democráticos. Ese impulso culminó en la creación en 1949 del Consejo de Europa. Adicionalmente, el impacto que para la opinión pública supuso la constatación de los crímenes perpetrados por el Tercer Reich y el impulso proporcionado por la proclamación por Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, propició el interés por crear un mecanismo de garantía colectiva de tales derechos. La entonces denominada Asamblea Consultiva del Consejo acordó en su primera sesión iniciar los estudios necesarios para la creación de tal sistema. Sólo un año más tarde, el Comité de Ministros aprobó el proyecto del *Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales*. El 4 de noviembre de ese mismo año 1950 el Convenio era firmado por los representantes de doce Estados.

²¹ Para Felipe Gómez Isa es el que mayor grado de evolución y de perfección ha alcanzado. Lo que viene motivado fundamentalmente por la relativa homogeneidad política de los Estados europeos y por su avance alcanzado en el campo de los derechos humanos. Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo.

<http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/64> Consulta: 2 de agosto de 2013.

²² Los mecanismos de protección establecidos en uno y otro Convenio van a ser notablemente diferentes.

Se hace importante mencionar que el problema de impunidad en Europa no es tan grave como en otros continentes como América Latina, Asia o África, eso no significa que el Consejo de Europa no se haya dado a la tarea de abordar el tema, al igual que las Naciones Unidas. En un primer esfuerzo Europeo por combatir la impunidad surge en la Convención Europea de Derechos Humanos, en la que si bien no se define la palabra impunidad, en su preámbulo si establece: *“Reaffirming their profound belief in those fundamental freedoms which are the foundation of justice and peace in the world and are best maintained on the one hand by an effective political democracy and on the other by a common understanding and observance of the human rights upon which they depend”*²³. Ese espíritu porque prevalezca la justicia se reafirma en el artículo 1 de la misma al consagrar la obligación de los Estados por el respeto a los derechos humanos.

A. Instrumentos que abordan directamente la palabra impunidad y que tienen como objetivo su lucha.

1. Directrices para erradicar la impunidad

B. Instrumentos que contienen como aspiración la justicia:

1. Carta Social Europea

2. Instrumentos de lucha contra la impunidad:

1. Convenio Europeo de Derechos Humanos
2. Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales
3. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
4. La Comisión Europea Contra el Racismo y la Intolerancia (CERI)
5. Comisario para los Derechos Humanos
6. Tratados de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa – OSCE -
 - a. Acto Final de Helsinki
 - b. El Mecanismo de Viena

²³ *“Article 1 – Obligation to respect human rights The High Contracting Parties shall secure to everyone within their jurisdiction the rights and freedoms defined in Section I of this Convention”.*

- c. Documento Concluyente de Copenhague
 - d. El Mecanismo de Moscú
 - e. Oficina para Instituciones Democráticas de Derechos Humanos
 - f. Alto Comisario de las Minorías Nacionales
 - g. Representante de la Libertad de los Medios
7. Estatuto del Consejo de Europa
 8. Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
 9. Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica
 10. Convención Europea sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños
 11. Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual
 12. Convenio Marco para la Protección de Minorías Nacionales
 13. Convenio Europeo de Extradición
 14. Protocolo adicional al Convenio Europeo de Extradición
 15. Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal
 16. Protocolo adicional al Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal
 17. Segundo Protocolo Adicional al Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal
 18. Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos
 19. Convenio sobre la Protección del Medio Ambiente mediante el Derecho Penal
 20. Convenio penal sobre la Corrupción
 21. Protocolo Adicional al Convenio Penal sobre la Corrupción
 22. Convenio sobre la Ciberdelincuencia
 23. Protocolo Adicional a la Convención sobre la Ciberdelincuencia
 24. Convenio del Consejo de Europa sobre la falsificación de productos médicos y delitos similares que constituyan amenazas para la salud pública
 25. Protocolo Adicional a la Convención Europea sobre inmunidad Estatal
 26. Convenio Europeo relativo al Estatuto del Trabajador Migrante

27. Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y los Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes
28. Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos
29. Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo
30. Convenio Europeo sobre la no Aplicabilidad de Limitaciones al Estatuto de Crímenes contra la Humanidad y los Crímenes de Guerra
31. Convenio del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo

VII. Instrumentos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

El Sistema Interamericano se empezó a gestar a partir de 1948, teniendo como primer paso para su creación la adaptación de la Carta de la Organización de Estados Americanos²⁴. Pocos meses después fue adoptada la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre²⁵.

En 1959 se dispuso la creación de un grupo de expertos encargados de supervisar la aplicación de los derechos contenidos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Los eventos políticos de la época²⁶ impulsaron la idea del establecimiento de un organismo regional de derechos humanos, así se estableció un comité de expertos para tal efecto al que se denominó Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta Comisión estaría compuesta por siete miembros, que ejercerían sus funciones a título personal, elegidos por el Consejo de la Organización de Estados Americanos, de ternas presentadas por los gobiernos miembros. Sin embargo; ésta no fue dotada de un mandato claro y operativo. Por el contrario, las facultades que le fueron asignadas eran vagas, imprecisas y muy limitadas²⁷. En consecuencia, la

²⁴ El objetivo de esta Carta fue crear una organización internacional cuyo espíritu se basará en lograr un orden de paz y de justicia, fomentar la solidaridad, robustecer la colaboración internacional y defender la soberanía, la integridad territorial y la independencia hemisférica. Si bien la Carta no consagró un sistema de protección de derechos humanos, dejó sentadas las bases para ello, al establecer ya en su preámbulo la idea de la centralidad del ser humano en la organización de la sociedad.

²⁵ La que precede por corto tiempo a la adopción de la Declaración Universal de las Naciones Unidas.

²⁶ Entre los que destacan la revolución cubana, la convulsionada situación de la República Dominicana y la proliferación de grupos guerrilleros de tendencia comunista en el hemisferio.

²⁷ Esta ambigüedad no fue al azar. De hecho, tenía un propósito claro: los Estados no deseaban crear un órgano regional que interfiriera de ningún modo en sus asuntos internos. Los Estados

Comisión procedió a realizar actividades que no estaban explícitamente contempladas en el estatuto, pero que podían entenderse como el ejercicio de facultades implícitas necesarias para cumplir mejor sus funciones, lo cual provocó que en 1969 se adoptara la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente desde 1978.

A la fecha, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos cuenta con 61 instrumentos que buscan proteger los derechos humanos y consecuentemente combatir la impunidad de las violaciones a los derechos humanos en el continente.

A la fecha, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos cuenta con 61 instrumentos que buscan proteger los derechos humanos y consecuentemente combatir la impunidad de las violaciones a los derechos humanos en el continente americano.

A. Instrumentos que abordan directamente la palabra impunidad y que tienen como objetivo su lucha.

1. Declaración de la Conferencia de Santiago
2. Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas
3. Convención Interamericana contra la Corrupción
4. Convención Interamericana sobre Extradición
5. Declaración de Mar de Plata

B. Instrumentos que contienen como aspiración la justicia:

1. Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer
2. Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer

C. Instrumentos de lucha contra la impunidad:

1. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

esperaban que la Comisión se dedicara a realizar estudios generales y a organizar simposios o congresos, pero sin inmiscuirse en la observancia de los derechos humanos en países específicos.

2. Convención Americana sobre Derechos Humanos Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
3. Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
4. Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
5. Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
6. Carta Social de las Américas
7. Convenio de sede entre el Gobierno de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos
8. Carta de la Organización de los Estados Americanos
9. Carta Democrática Interamericana
10. Acuerdo de entendimiento entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas
11. Declaración de Panamá sobre la Contribución Interamericana al Desarrollo y la Codificación del Derecho Internacional
12. Protocolo de San Salvador fue adoptado en San Salvador
- 13. Declaración de principios sobre la Libertad de Expresión**
14. Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y toda forma de Discriminación e intolerancia
15. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
16. Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles a la mujer
17. Convención Interamericana sobre la restitución internacional de menores
18. Convención Interamericana sobre tráfico internacional de menores
19. Convención Interamericana sobre obligaciones alimentarias
20. Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
- 21. Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia**
22. Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad
23. Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género
24. Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia

25. Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el funcionamiento del fondo de asistencia legal de víctimas
26. Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
27. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
28. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
29. Convención Interamericana contra el Terrorismo
30. Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando estos tengan trascendencia internacional

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha construido una sólida jurisprudencia sobre el rol del Estado como garante de los derechos humanos y su responsabilidad en la lucha contra la impunidad. La gran mayoría de los casos que llegan al Sistema Interamericano se refieren precisamente a la falta de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos. Eso se explica, en parte, por el carácter subsidiario que tiene el sistema y porque la condición para que se active este mecanismo internacional de protección sea precisamente la falta de justicia a nivel interno²⁸. A octubre de 2017, 193 sentencias de 339 emitidas por este órgano abordan directamente el tema de impunidad.

VIII. Instrumentos del Sistema Africano de Protección de Derechos Humanos

El Sistema Africano de los Derechos Humanos y de los Pueblos es relativamente reciente. La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos o ‘Carta de

²⁸ Uno de los requisitos para que una petición individual pueda ser declarada admisible por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el agotamiento previo de los recursos internos. A este respecto, el artículo 46 (a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece como requisito “que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”. Sin embargo, este mismo instrumento prevé ciertas excepciones a la regla de agotamiento de los recursos internos. En particular, establece el artículo 46.2 que este requisito no será aplicable cuando: a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

Banjul' fue adoptada el 27 de junio de 1981 y entró en vigor el 21 de octubre de 1986. En la Carta se procura integrar a las tradiciones africanas, con un matiz colectivo o comunitario antes que individual. Se encuentra influenciada por la Convención Europea de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que es la última en ser creada. El Sistema Africano es el primero en reconocer los derechos económicos, sociales y culturales²⁹ sin que estén sujetos a cláusulas limitantes, este es el gran avance que presenta en comparación con los Sistema Universal, Europeo e Interamericano. Presenta un catálogo de deberes novedoso, ya que no sólo determina obligaciones verticales, entre Estado e individuos, sino también horizontales entre individuos.

Los instrumentos que abordan el concepto impunidad o están enfocados en la lucha contra la impunidad, estos son:

A. Instrumentos que abordan directamente la palabra impunidad y que tienen como objetivo su lucha.

1. Acta constitutiva de la Unión Africana
2. Protocolo de la Corte de Justicia de la Unión Africana
3. Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción
4. Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobierno
5. Protocolo a la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos relacionado con los Derechos de la Mujer en África
6. Pacto de la Unión Africana para la No Agresión y la Defensa Común

B. Instrumentos que contienen como aspiración la justicia:

1. Carta para Carta el Renacimiento Cultural Africano

²⁹ En cuanto a las aportaciones y características de dicho concepto africano de derechos humanos inserto en la Carta, la más importante de ellas, en opinión de la mayoría de los especialistas, consiste en su reconocimiento de los derechos humanos de tercera generación, en especial del derecho de los pueblos al desarrollo. Nos encontramos ante el único tratado internacional de derechos humanos que consagra explícitamente este nuevo tipo de derechos, lo que nos da una idea clara de cuáles son las prioridades del continente africano en materia de derechos humanos: el derecho a la paz tanto en el ámbito interno como internacional (art. 23), el derecho al medio ambiente satisfactorio y global (art. 24), y, el más importante, el derecho al desarrollo (art. 22).

C. Instrumentos de lucha contra la impunidad:

1. Convención Africana sobre la conservación de la naturaleza y los recursos naturales
2. Convención General sobre Privilegios e Inmunidades de la Unión Africana
3. Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre el establecimiento de la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos
4. Protocolo sobre el Estatuto de la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos
5. Reglamento de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
6. Carta Cultural para África
7. Convención de la Unión Africana sobre la prevención y lucha contra el terrorismo

Del cuerpo de instrumentos en materia de derechos humanos que conforman el Sistema Africano de Protección a los Derechos Humanos, seis de ellos contienen el concepto impunidad, aun así, el Sistema Africano es un mecanismo debilitado, con poderes muy limitados para la Comisión Africana y con un control férreo por parte de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, órgano político por excelencia y, hasta la fecha, no muy preocupado por la gravísima situación por la que atraviesan los derechos humanos en el continente. Además, como contraste con los sistemas regionales europeo y americano, la Carta Africana no previó inicialmente ningún órgano de protección de los derechos humanos de naturaleza jurisdiccional, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Laguna que fue superada, en junio de 1998 cuando se aprobó el instrumento, con la creación de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la cual no pudo entrar en funcionamiento, lo que hace que la lucha contra la impunidad en el continente africano aún no sea efectiva y provoque que órganos como la Corte Penal Internacional enfoquen su trabajo en África. Ya que es la única vía para buscar justicia ante las graves violaciones de los derechos humanos que agobian ha dicho continente.

ANEXO II

		Mandato	Duración del Mandato	Cesación de los hechos que originaron el mandato	Inicio del primer juicio	Universo de casos	Casos procesados y/o relaciones procesales	Tiempo promedio de los casos	Casos pendientes de resolución	% Casos presentados versus casos resueltos	% Casos posibles de procesamiento versus casos resueltos
	DERECHO PENAL INTERNACIONAL										
	TRIBUNALES MILITARES										
1	Tribunal Militar Internacional de Núremberg	Procesar a los alemanes y funcionarios Nazis responsables de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial en contra de los Judíos	Tiempo indeterminado 1 año	2 de septiembre de 1945	20 de noviembre de 1945	36	12	4 meses	0	100%	33%
2	Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente	Procesar a los criminales de guerra japoneses.	Tiempo indeterminado 1 año	2 de septiembre de 1945	3 de mayo de 1946	4	3	2 años 5 meses aproximadamente	0	75 %	25%
	TRIBUNALES AD HOC										
3	Tribunal Penal Internacional	Procesar individuos responsables de	24 años	1991 - 2001	1996	147	118	+ de 10,800 días de juicio	4 ²	80%	80%

² TRIBUNAL Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. S.A. *Transfer Cases* <https://www.icty.org/en/cases/transfer-cases> Consulta: 10 de diciembre de 2020

		Mandato	Duración del Mandato	Cesación de los hechos que originaron el mandato	Inicio del primer juicio	Universo de casos	Casos procesados y/o relaciones procesales	Tiempo promedio de los casos	Casos pendientes de resolución	% Casos presentados versus casos resueltos	% Casos posibles de procesamiento versus casos resueltos
	para la Antigua Yugoslavia	violaciones del derecho internacional humanitario ¹ y crímenes internacionales, por medio de esta acción crear en la región									
4	Tribunal Penal Internacional para Ruanda	Enjuiciamiento de los presuntos responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Ruanda.	Tiempo indeterminado 20 años	Julio de 1994	16 de febrero de 1996	93	61	Se desconoce	3	65.5%	65.5%
	TRIBUNALES HÍBRIDOS										
	TRIBUNALES HÍBRIDOS CREADOS POR MANDATO DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL										
5	Salas Especiales de Delitos Graves en Timor Oriental	Comisión de "delitos graves" cometidos entre el 1 de enero y el	5 años	25 de octubre de 1999	No se puede	Más de 1452	391	No se puede determinar	Más de 938	2.41%	8.95%

¹ SCHABAS, William A. 2006. *Op. Cit.*

		Mandato	Duración del Mandato	Cesación de los hechos que originaron el mandato	Inicio del primer juicio	Universo de casos	Casos procesados y/o relaciones procesales	Tiempo promedio de los casos	Casos pendientes de resolución	% Casos presentados versus casos resueltos	% Casos posibles de procesamiento versus casos resueltos
		25 de octubre de 1999.			determinado						
6	Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo	Desarrollar localmente instituciones de autogobierno y establecer un marco legislativo que permitiera su adecuado funcionamiento	Desde 1999 a la fecha 22 años	1999	No se puede determinar	No se puede determinar	No se puede determinar	No se puede determinar	No se puede determinar	No se puede determinar	No se puede determinar
	TRIBUNALES HÍBRIDOS CREADOS ENTRE NACIONES UNIDAS Y EL ESTADO										
7	Tribunal Especial para Sierra Leona	Perseguir penalmente a personas que detentan la mayor responsabilidad sobre las graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, al artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y en el protocolo adicional II de 1977 así como contra el derecho local de Sierra Leona cometido en su territorio desde el 30 de noviembre de 1996	Tiempo indeterminado 11 años	2002	2006	13	13	No se puede determinar	0	69.23%	69.23%

		Mandato	Duración del Mandato	Cesación de los hechos que originaron el mandato	Inicio del primer juicio	Universo de casos	Casos procesados y/o relaciones procesales	Tiempo promedio de los casos	Casos pendientes de resolución	% Casos presentados versus casos resueltos	% Casos posibles de procesamiento versus casos resueltos
8	Salas Extraordinarias de las Cortes de Camboya	Sancionar a altos dirigentes de la Kampuchea Democrática considerados máximos responsables por los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y algunos crímenes de guerra	Tiempo indeterminado	1998	Marzo 2009	7	7	19 meses	3	57.14%	57.14%
TRIBUNAL PERMANENTE											
9	Corte Penal Internacional	Persecución de Crímenes más graves de trascendencia internacional.	Indefinido	Esta creado para hechos futuros	Enero 2009	29 casos 10 exámenes preliminares 13 Situaciones bajo investigación	29	No se puede establecer	No se puede establecer	No se puede determinar aún	No se puede determinar aún
PRINCIPIO DE JUSTICIA UNIVERSAL											
10	Principio de Justicia Universal	Persecución de delitos que atentan contra el Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de	Indefinido	Fechas son variables, de acuerdo al caso.	No se puede determinar.	76	76	No se puede identificar	1	98.68%	98.68%

			Mandato	Duración del Mandato	Cesación de los hechos que originaron el mandato	Inicio del primer juicio	Universo de casos	Casos procesados y/o relaciones procesales	Tiempo promedio de los casos	Casos pendientes de resolución	% Casos presentados versus casos resueltos	% Casos posibles de procesamiento versus casos resueltos
			los Derechos Humanos.									
DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS												
SISTEMA UNIVERSAL												
11	Sistema Universal	CDH	Violaciones al PIDCP	Indefinido	Esta creado para violaciones futuras	No se puede identificar	3624	1577	No se puede identificar	1287	93.4%	76.91%
		CDESC	Violaciones al PIDESC	Indefinido		No se puede identificar	162	138	No se puede identificar	122	No se puede determinar	No se puede determinar
		CERD	Violaciones a la CERD	Indefinido		No se puede identificar	70	70	No se puede identificar	12	85.71%	85.71%
		CAT	Violaciones CAT	Indefinido		No se puede identificar	1003	1003	No se puede identificar	192	39.68%	39.68%

		Mandato	Duración del Mandato	Cesación de los hechos que originan el mandato	Inicio del primer juicio	Universo de casos	Casos procesados y/o relaciones procesales	Tiempo promedio de los casos	Casos pendientes de resolución	% Casos presentados versus casos resueltos	% Casos posibles de procesamiento versus casos resueltos
	CDN	Violaciones CDN	Indefinido		No se puede identificar	200	116	No se puede identificar	78	15,5%	26.72%
	CDPD	Violaciones CDPD	Indefinido		No se puede identificar	19 ³	19	No se puede identificar	No se puede determinar	No se puede determinar	No se puede determinar
	CEDAW	Violaciones CEDAW	Indefinido		No se puede identificar	155	155	No se puede identificar	No se puede determinar	No se puede determinar	No se puede determinar
	CDF	Violaciones CDF	Indefinido		No se puede identificar	356	162	No se puede identificar	No se puede determinar	17.97%	39.5%
	CTM	Violaciones CTM	Indefinido		Aún no conoce peticiones individuales	0	0	0	0	0	0
	SISTEMAS REGIONALES										

³ A mayo 2014

[illegible]

		Mandato	Duración del Mandato	Cesación de los hechos que originaron el mandato	Inicio del primer juicio	Universo de casos	Casos procesados y/o relaciones procesales	Tiempo promedio de los casos	Casos pendientes de resolución	% Casos presentados versus casos resueltos	% Casos posibles de procesamiento versus casos resueltos
15	Tribunal Especial para el Líbano	Enjuiciar a los responsables del atentado de 14 de febrero de 2005 que causó la muerte del ex Primer Ministro del Líbano Rafiq Hariri y acompañantes, así como otros ataques ocurridos en el Líbano entre el 1° de octubre de 2004 y el 12 de diciembre de 2005, o cualquier otra fecha posterior que decidan las Partes con el consentimiento del Consejo de Seguridad, están conectados conforme a los principios de la justicia penal al atentado del 14 de febrero de 2005.	3 años prorrogables 12 años	14 de febrero de 2005	17 de enero de 2011	10	10	No se puede determinar	0	90%	90%
16	Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala-CICIG	La identificación, investigación y procesamiento en los que intervenga Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad-CIACS	2 años prorrogables Total 12 años	No aplicable.	Marzo 2008	Más de 120	Más de 120	indeterminado	indeterminado	120	No se puede concluir
17	Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras-MACCIH	Apoyo al Ministerio Público para el combate de los delitos de corrupción e impunidad y apoyo al fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia	4 años que no fueron prorrogados	No aplicable.	No aplicable	12	12	indeterminado	indeterminado	No se puede concluir	No se puede concluir